

José de Jesús Covarrubias Dueñas

NORMAS Y POLÍTICAS MIGRATORIAS MÉXICO-EUA

SIGLOS XVIII-XXI

*Obra conmemorativa del
Centenario de la Constitución Política de México
y del Estado de Jalisco*

CUCSH
Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades

Mexican American Bar Association (MABA)
Capítulo México

ISBN 978-607-742-574-8

Primera edición, 2016

D.R. © UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Guanajuato 1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260.

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono: +52 (33) 38193300

<http://www.cucsh.udg.mx/>

Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes.

Impreso y hecho en México / Printed and made in Mexico



Este trabajo está autorizado bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND) lo que significa que el texto puede ser compartido y redistribuido, siempre que el crédito sea otorgado al autor, pero no puede ser mezclado, transformado, construir sobre él ni utilizado con propósitos comerciales. Para más detalles consúltese <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	12
-------------------	----

PRIMERA PARTE NORMAS RECTORAS EN MÉXICO Y EUA 1789-2013

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE CÁDIZ

Extracto de la Constitución Española de Cádiz.....	16
Constitución de Cádiz	30
Extract of Spanish Constitution of Cadiz	73
Constitution of Cádiz	87

TRATADOS DE CÓRDOBA

Tratados de Córdoba.....	132
Treaties of Córdoba	135

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Extracto de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.....	139
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.....	148

Extract of the Federal Constitution of the United Mexican States	175
Federal Constitution of the United Mexican States.....	184
Extracto de las Leyes Constitucionales.	211

LEYES CONSTITUCIONALES

Leyes Constitucionales.	223
Extract of Constitutional Laws.	264
Constitutional Laws.....	273

BASES ORGÁNICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 1843

Extracto de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843.....	316
Bases Orgánicas de la República Mexicana.....	324
Extract of Organic Bases of the Mexican Republic 1843.....	355
Organic Bases of the Mexican Republic.....	363

ACTA DE REFORMAS

6.1. Extracto del Acta de Reformas.....	395
6.2. Proyecto de Reformas y Acta Constitutiva	397
6.3. Extract of the Reforms Act.	406
6.4. Reform Project and Constitutive Act	407

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA 1857

Extracto de la Constitución de la República Mexicana 1857.....	417
Constitución Política de la República Mexicana	423
Extract of Political Constitution of the Mexican Republic 1857.	444
Political Constitution of the Mexican Republic.....	450

ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

Extracto del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.....	472
Estatuto Provisional del Imperio Mexicano	477
Extract of Provisional Statute of the Mexican Empire.	490
Provisional Statute of the Mexican Empire.	495

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917

Extracto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.....	509
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	516
Extract from the Political Constitution of the Mexican United States, 1917.....	570
Political Constitution of the United Mexican States.....	576

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VIGENTE

Extracto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Vigente febrero 2013).....	630
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	638

REFORMAS A LOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO

Número de Reformas a los Artículos de la Constitución Política de México.....	774
Extract from the Constitution of the United Mexican States.....	775
Political Constitution of the United Mexican States	782
Number of reforms to the articles of the Political Constitution of México.....	904

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Extracto de la Constitución de los Estados Unidos de América.....	906
Constitución de los Estados Unidos de América.	911
Extract from the Constitution of the United States of America.....	930
Constitution of the United States of America.	935

SEGUNDA PARTE
EVOLUCIÓN DE LAS NORMAS MIGRATORIAS EN MÉXICO
SIGLOS XIX-XXI

1.CONSTITUCIONALES
SIGLOS XIX-XXI

1.1. Antecedente Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	955
---	-----

1.2. Antecedente Artículo 2	
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	971
1.3. Antecedente Artículo 30	
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	985
1.4. Antecedente Artículo 32	
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	999
1.5. Antecedente Artículo 34	
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	1004
1.6. Antecedente Artículo 37	
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	1012

2.LEGISLATIVOS DE LA LEY DE POBLACIÓN

2.1. Decreto de Gobierno: Acta de Independencia.	1023
2.2. Decreto de Gobierno: Se señala día para la Solemne jura y proclamación de la Independencia del Imperio en la capital y lugares que no lo hayan proclamado y formula de juramento.	1025
2.3. Orden de prohibición para clasificar a los ciudadanos mexicanos por su origen. 17 de septiembre 1822.	1026
2.4. El Pacto Federal de Anáhuac.....	1027
2.5. Decreto de Gobierno: Medidas para la seguridad de la República. 23 de diciembre de 1824.....	1041
2.6. Ley de Expulsión de Españoles. 20 de diciembre de 1827.	1042
2.7. Ley sobre Expulsión de Españoles. Marzo 20 de 1829.....	1045
2.8. Reglamento de la Ley sobre Expulsión de Españoles del 20 de marzo de 1829...	1047
2.9. Facultades del Gobierno por lo relativo a expulsión de extranjeros no naturalizados. 22 de febrero de 1832.....	1049
2.10. Decreto del Gobierno. Se deja en libertad a los españoles que por los Tratados de Córdoba y Plan de Iguala, se consideraron como mexicanos, para que puedan quedar como tales o como españoles de 1842.....	1050
2.11. Decreto del Gobierno. Para que concedan derechos y obligaciones de mexicanos a los extranjeros empleados en el servicio de la Nación. 12 de agosto de 1842.	1051
2.12. Decreto del Gobierno. Sobre Naturalización de Extranjeros. Septiembre 10 de 1846.....	1052
2.13. Decreto del Gobierno: Extranjería y Nacionalidad. 30 de enero de 1854.....	1054
2.14. Decreto del Gobierno. Sobre Pasaportes. Marzo 15 de 1854.....	1059
2.15. Ley de Matriculación de Extranjeros. Marzo 16 de 1861.....	1061
2.16. Correspondencia sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados de Europa 1867.....	1063

2.17. Circular de la Secretaría de Gobernación: Medidas para prevenir la invasión del cólera asiático. Julio 16 de 1885.....	1065
2.18. Medidas Preservativas del cólera asiático que deberán ponerse en práctica en la República Mexicana.....	1067
2.19. Ley de Extranjería y Naturalización. Mayo 20 de 1886.....	1079
2.20. Decreto del Congreso. Autoriza al Ejecutivo para declarar en casos particulares, que no han perdido su nacionalidad los mexicanos que lleven más de 10 años de residir en el extranjero. Diciembre 12 de 1891.....	1088
2.21. Ley de Inmigración de 1909.....	1090
2.22. Ley de Migración de 1926.....	1104
2.23. Ley de Migración de 1930.....	1120
2.24. Ley General de Población de 1936.....	1144
2.25. Ley General de Población de 1947.....	1175
2.26. Ley General de Población de 1974.....	1195
2.27. Ley General de Población.....	1218
2.28. Reglamento de la Ley General de Población.....	1245

TERCERA PARTE

ANÁLISIS POLÍTICO Y SOCIAL DE LA CUESTIÓN MIGRATORIA MÉXICO-EUA, SIGLOS XVIII-XXI

1. Tipos de inmigrantes	1315
2. Discurso George Washington, 1789-1797	1317
3. Discurso John Adams, 1797-1801	1318
4. Ley De Extranjeros Y Sedición.....	1319
5. Discurso Thomas Jefferson 1801-1809.....	1320
6. Discurso James Madison, 1809-1817	1322
7. Discurso James Monroe, 1817-1825	1324
8. Discurso John Adams, 1825-1829.....	1328
9. Discurso Andrew Jackson, 1829-1837.....	1330
10. Discurso Martin Van Buren, 1837-1841	1334
11. Discurso John Tyler, 1841-1845	1337
12. Discurso James K. Polk, 1845-1849	1346
13. Discurso Zachary Taylor, 1849-1850	1396
14. Discurso Millard Fillmore, 1850-1853	1398
15. Discurso Franklin Pierce, 1853-1857.....	1402
16. Discurso James Buchanan, 1857-1861	1404
17. Discurso Abraham Lincoln, 1861-1865.....	1413
18. Discurso Andrew Johnson, 1865-1869.....	1414
19. Discurso Ulysses S. Grant, 1869-1877.....	1416

20	Discurso Rutherford B. Hayes, 1877-1881.....	1419
21.	Discurso James Garfield, 1881	1421
22.	Discurso Arthur A. Chester, 1881-1885	1422
23.	Discurso Grover Cleveland, 1885-1889	1425
24.	Discurso Benjamin Harrison, 1889-1893.....	1430
25.	Población total por grandes grupos de edad y relación de dependencias, 1895-2005	1432
26.	Discurso Grover Cleveland, 1893-1897	1434
27.	Discurso William Mckinley, 1897-1901	1436
28.	Discurso Theodore Roosevelt, 1901-1909	1439
29.	Discurso William H. Taft, 1909-1913	1445
30.	Discurso Woodrow Wilson, 1913-1921	1453
31.	Términos Utilizados Para Migrantes Indocumentados.....	1456
32.	Discurso Warren G. Harding, 1921-1923	1457
33.	Posición y proposiciones del gobierno de México en 1917 y años siguientes	1458
34.	Migración Mexicana A Los Estados Unidos De 1924 A 1985	1459
35.	Discurso Calvin Coolidge, 1923-1929.....	1460
36.	Localización de personas deportadas, 1924-1985	1462
37.	Discurso Herbert Hoover, 1929-1933	1463
38.	Saldo Neto Migratorio Por Entidad Federativa En Los Años 1930-1970.....	1465
39.	Primeras Décadas Del Programa Bracero.....	1466
40.	Discurso Franklin D. Roosevelt, 1933-1945.....	1468
41.	Repatriación de indocumentados en los años 40's y sucesivos	1471
42.	Discurso Harry S. Truman, 1945-1953	1473
43.	Umbrales de legislación en materia de migración	1475
44.	Discurso Dwight D. Eisenhower, 1953-1961	1476
45.	Garantías laborales y repatriación en los años 50's	1478
46.	Discurso John E Kennedy, 1961-1963	1479
47.	Enmiendas a la Ley de Inmigración.....	1481
48.	Discurso Lyndon B. Johnson, 1963-1969	1483
49.	Intensificación del debate sobre políticas de migración	1485
50.	Discurso Richard M. Nixon, 1969-1974	1486
51.	Integración de una Comisión Intersecretarial (1973)	1488
53.	Discurso Gerald R. Ford, 1974-1977.....	1490
54.	Discurso James E. Carter, 1977-1981.....	1491
55.	Tamaño de la población de indocumentados en Estados Unidos (1980)	1494
56.	Empleo y salario en México (1970- 1980).....	1496
57.	Proposiciones de la comisión selecta de inmigración y refugiados (1980)	1497
58.	Proposiciones del presidente Reagan.....	1498
59.	Saldo Neto Migratorio Por Entidad Federativa (1980-1995).....	1499

60.	Discurso Ronald W. Reagan, 1981-1989	1502
61.	Proposiciones de Simpson y de Mazzoli	1505
62.	La Ley Simpson-Rodino de 1986	1506
63.	Frecuencia de aprehensiones de indocumentados en 1985.....	1508
64.	Discurso George H. W. Bush, 1989-1993.....	1509
65.	Población Total Por Entidad Federativa.....	1511
66.	El auge de la migración indocumentada	1512
67.	Ranking de estados según volumen e incremento de población mexicana, 1990-2007	1513
68.	Discurso William J. Clinton, 1993-2001.....	1515
69.	Población indígena de mexicanos migrantes en Estados Unidos.....	1517
70.	Impacto de la migración mexicana en el crecimiento y composición de la población estadounidense	1521
71.	Discurso George W. Bush, 2001-2009.....	1523
72.	Flujo de migrantes 1993-2008	1526
73.	Hispanos de origen mexicano en Estados Unidos, 2008.....	1528
74.	Incremento de los riesgos y costos de la migración y desgaste de la circularidad migratoria.....	1530
75.	Carácter más familiar de la migración.....	1532
76.	Hogares familiares mexicanos en Estados Unidos, 1970-2007	1533
77.	Mayor diversidad del perfil sociodemográfico y ocupacional de los migrantes	1534
78.	Población inmigrante en estados unidos de 25 años y más con estudios superiores según principales países de origen, 1980, 1990, 2000 Y 2007	1535
79.	Población residente en estados unidos y características seleccionadas de la población mexicana en ese país 1970-2007	1537
80.	Los difíciles caminos de la integración.....	1539
81.	Características de la población en Estados Unidos según país de nacimiento, 2008	1540
82.	Discurso Barack Obama, 2009	1542
83.	Detectan retorno de migrantes en 4 estados	1558
84.	La recesión en estados unidos les pegó	1560
85.	“Hasta los licenciados van al norte”	1562
86.	Tras 9 Años Volvieron A Su Tierra	1563
87.	Me Regresé Porque Allá No Hay Trabajo.....	1564
88.	Aristóteles Sandoval Ofrece Crear El Instituto De Atención Al Migrante.....	1566
89.	La política exterior de Estados Unidos y su opinión pública interna	1568
90.	Avatares de la migración	1571
91.	¿Qué jalisciense no tiene un familiar en estados unidos?	1572
92.	Barack Obama va por mano de obra calificada	1574
93.	McCain, en el inicio de la “hoja de ruta”.....	1576
94.	PRI coadyuvará en reforma migratoria	1577

95.	Comentarios finales	1579
	Bibliografía	1580
96.	Colofón.....	1582
97.	Conclusiones	1584
98.	Propuestas:.....	1585

INTRODUCCIÓN

El fenómeno migratorio de Norteamérica data desde la existencia misma del continente, desde el Siglo XVIII a la fecha, las interrelaciones entre México (La Nueva España) y los EUA (Nueva Inglaterra), no han cesado y han transcurrido desde las otrora colonias europeas hacia los actuales estados liberales y de derecho.

Los EUA, constituidos como la primer república del planeta, desde el 17 de septiembre de 1787, siempre han tenido un proyecto claro de su “destino manifiesto”, en ese sentido, su congruencia y acciones en torno a su ideario y planes es evidente y los hechos son contundentes, son la organización política más trascendente del planeta, gracias a su identidad, cohesión, organización, fortaleza, previsión, constancia y trabajo en equipo y en torno al gran proyecto, por ello, son una gran Nación.

Así, siendo los EUA “una Nación de inmigrantes” y del *American way of life as American dream*, como lo refleja el mismo presidente actual, Barack Hussein Obama, hijo de madre de EUA (Hawái) y padre africano; lo cual refleja como este país abre sus puertas a las personas talentosas de cualquier parte del planeta.

Por ello, para poder conocer el trascendente fenómeno del flujo migratorio que se da en Norteamérica, debemos ubicar interrelaciones en la zona comercial más influyente del planeta y donde se interrelacionan personas de centro y Sudamérica, Asia, Europa y en menor escala, de África, pero confluyen culturas de todo el planeta; América es epítome del planeta, síntesis de razas y sincretismo del orbe.

Así, en la presente obra, ponemos a la vista en la primera parte las normas que han regido a México desde el Siglo XIX u la única de los EUA, la cual refleja la calidad de su proyecto, de su organización, acciones y políticas en torno a sus planes.

De igual forma, se incluyen en el apartado segundo, los antecedentes y por tanto, la evolución constitucional y legal de las normas mexicanas en torno a la migración, desde el Siglo XIX hasta la fecha, con lo cual se advierte la necesidad de que el legislador mexicano elabore normas de largo alcance y con una visión integral del fenómeno de los flujos migratorios de Norteamérica, así, presentamos la legislación constitucio-

nal y su evolución en torno a nacionalidad y ciudadanía en México y 28 documentos legislativos armónicos a dichos tópicos.

Por último, se incluyen análisis y opiniones políticas de los presidentes de EUA, y sociales de diversos agentes y actores, el cual no se frenará, continuará su dinámica tendiente a la eliminación de barreras, obstáculos y demás impedimentos a la proclamación y establecimiento de los derechos planetarios, el espacio es para el desarrollo armónico e integral de las personas.

Concluimos con unas aportaciones que pueden ser útiles para que nuestros gobernantes con miras de estadistas, hacia las nuevas generaciones, encausen sus planes y políticas de una manera más integral, incluyan al maravilloso pluriverso cultural y jurídico que se presenta y realicen lo conducente mirando siempre el bienestar de todos.

PRIMERA PARTE

NORMAS RECTORAS
EN MÉXICO Y EUA

1789-2013

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE CÁDIZ

EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE CÁDIZ

TÍTULO I DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES

Capítulo Primero *De la Nación Española*

- Art. 1.* Nación Española.
- Art. 2.* Libertad e independencia de la Nación Española.
- Art. 3.* Soberanía.
- Art. 4.* Obligatoriedad de la Nación en la protección de los derechos individuales.

Capítulo Segundo *De los Españoles*

- Art. 5.* Nacionalidad de los españoles.
- Art. 6.* Amor a la Patria.
- Art. 7.* Fidelidad a la Constitución española.
- Art. 8.* Obligación de las contribuciones al gasto público.
- Art. 9.* Obligación de defender la Patria.

TÍTULO II DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Capítulo Primero *Del territorio de las Españas*

- Art. 10.* Territorio Español.
- Art. 11.* División del Territorio Español.

Capítulo Segundo

De la Religión

Art. 12. Religión oficial de la Nación española.

Capítulo Tercero

Del Gobierno

Art. 13. Objeto del gobierno.

Art. 14. Forma de gobierno.

Art. 15. Potestad en la creación de leyes.

Art. 16. Potestad en la ejecución de leyes.

Art. 17. Potestad en la aplicación de leyes.

Capítulo Cuarto

De los Ciudadanos Españoles

Art. 18. Ciudadanía española.

Art. 19. Ciudadanía de los extranjeros.

Art. 20. Obtención de la ciudadanía de los extranjeros.

Art. 21. Ciudadanía de los hijos legítimos de los extranjeros.

Art. 22. Oportunidad y merecimiento para obtener la calidad de ciudadano español.

Art. 23. Facultad de los ciudadanos españoles para la obtención de empleos municipales.

Art. 24. Causas de pérdida de la calidad de ciudadano español.

Art. 25. Suspensión del ejercicio de los derechos.

Art. 26. Causas de suspensión o pérdida de los derechos de los ciudadanos españoles.

TÍTULO III

DE LAS CORTES

Capítulo Primero

De la Constitución de las Cortes

Art. 27. Cortes.

Art. 28. Bases para la representación proporcional.

Art. 29. Población.

Art. 30. Cómputo de la población.

Art. 31. Composición de la población.

Art. 32. Distribución de la población.

Art. 33. Organización de la población.

Capítulo Segundo

Del nombramiento de Diputados de las Cortes

Art. 34. Elección de los Diputados.

Capítulo Tercero

De las Juntas Electorales de la Parroquia

- Art. 35.* Composición de las Juntas Electorales de la Parroquia.
- Art. 36.* Celebración de las Juntas en la Península, Islas y posesiones adyacentes.
- Art. 37.* Celebración de las Juntas en las Provincias de Ultramar.
- Art. 38.* Nombramiento del Elector Parroquial.
- Art. 39.* Base de población para el nombramiento de Electores Parroquiales.
- Art. 40.* Nombramiento de Electores Parroquiales en poblaciones pequeñas.
- Art. 41.* Elección de compromisarios por parte de la Junta Parroquial.
- Art. 42.* Número de Compromisarios elegidos en relación al número de Electores Parroquiales.
- Art. 43.* Elección de compromisarios en poblaciones pequeñas.
- Art. 44.* Número de Electores Parroquiales en relación al número de Compromisarios en poblaciones pequeñas.
- Art. 45.* Requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Elector Parroquial.
- Art. 46.* Figura en que recae la Presidencia de las Juntas Electorales.
- Art. 47.* Ceremonia de apertura de la Junta.
- Art. 48.* Inicio de la Junta con el nombramiento de los Escrutadores y el Secretario.
- Art. 49.* Período de quejas por parte del ciudadano.
- Art. 50.* Resolución de dudas acerca de la elección.
- Art. 51.* Elección de los Compromisarios.
- Art. 52.* Publicación de los resultados de las elecciones de los compromisarios.
- Art. 53.* Conferencia de los compromisarios para la elección de los Electores Parroquiales.
- Art. 54.* Firma del acta de los nuevos nombramientos.
- Art. 55.* Prohibición para excusarse de los cargos antes mencionados.
- Art. 56.* Prohibición para portar armas en la Junta Parroquial.
- Art. 57.* Disolución de la junta.
- Art. 58.* Ceremonia de terminación de la Junta.

Capítulo Cuarto

De las Juntas Electorales de Partido

- Art. 59.* Composición de las Juntas Electorales de Partido.
- Art. 60.* Celebración de las Juntas en la Península, Islas y posesiones adyacentes.
- Art. 61.* Celebración de las Juntas en las Provincias de Ultramar.
- Art. 62.* Conocimiento del número de electores.
- Art. 63.* Número total de electores.
- Art. 64.* Nombramiento de Diputados de los Partidos por Provincia.
- Art. 65.* Número de electores en relación al número de Partidos.
- Art. 66.* Determinación por censo del número de Diputados por Provincia.
- Art. 67.* Figura en que recae la Presidencia de las Juntas Electorales.

- Art. 68.* Nombramiento de los escrutadores y el secretario de la junta.
Art. 69. Presentación y revisión de las certificaciones de los nombramientos.
Art. 70. Lectura de informes sobre las certificaciones.
Art. 71. Ceremonia de apertura de la Junta.
Art. 72. Período de quejas por parte del ciudadano.
Art. 73. Elección del cargo de Elector de Partido.
Art. 74. Regulación y resultado de las elecciones.
Art. 75. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Elector de Partido.
Art. 76. Firma del acta de los nuevos nombramientos.
Art. 77. Observancia y aplicación en las Juntas de Partido, en lo conducente para las Juntas Electorales.

Capítulo Quinto

De las Juntas Electorales de Provincia

- Art. 78.* Composición de las Juntas Electorales de Provincia.
Art. 79. Celebración de las Juntas en la Península, Islas y posesiones adyacentes.
Art. 80. Celebración de las Juntas en las Provincias de Ultramar.
Art. 81. Figura en que recae la Presidencia de las Juntas.
Art. 82. Nombramiento de secretario y escrutadores.
Art. 83. Nombramiento de Diputados por Provincia en relación a número de pobladores.
Art. 84. Presentación y revisión de las certificaciones de los nombramientos.
Art. 85. Lectura de informes sobre las certificaciones.
Art. 86. Ceremonia de apertura de la Junta.
Art. 87. Período de quejas de los ciudadanos.
Art. 88. Elección del cargo de Diputado.
Art. 89. Regulación y resultado de las elecciones.
Art. 90. Elección del cargo de Diputados Solemnes.
Art. 91. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Diputado de las Cortes.
Art. 92. Capacidad adquisitiva de los Diputados a partir de bienes propios.
Art. 93. Vigencia de la disposición precedente.
Art. 94. Subsistencia de la elección por razón de vecindad.
Art. 95. Imposibilidad de determinados cargos para ser electos Diputados de las Cortes.
Art. 96. Imposibilidad de los extranjeros para acceder al cargo de Diputado de la Corte.
Art. 97. Imposibilidad de los empleados públicos para acceder al cargo de Diputado de la Corte.
Art. 98. Firma del acta de los nuevos nombramientos.
Art. 99. Otorgamiento de los Poderes.
Art. 100. Términos en que se otorgan los poderes.

- Art. 101.* Publicación de las elecciones.
Art. 102. Indemnización de los Diputados.
Art. 103. Observancia en lo conducente de los artículos 55, 56, 57, y 58.

Capítulo Sexto

De la celebración de las Cortes

- Art. 104.* Lugar de residencia de las Cortes.
Art. 105. Posibilidad de traslado del lugar físico de las Cortes.
Art. 106. Duración de las Sesiones de las Cortes.
Art. 107. Prórroga de las Sesiones de las Cortes.
Art. 108. Renovación periódica en el ejercicio de la Diputación.
Art. 109. Suplencia de los Diputados.
Art. 110. Principio de no reelección de los Diputados.
Art. 111. Presentación de los Diputados a la Diputación Permanente de las Cortes.
Art. 112. Fecha de renovación de las Cortes.
Art. 113. Formalidades de la primera Junta.
Art. 114. Fecha de celebración de la segunda Junta.
Art. 115. Resolución de dudas durante la celebración de las Juntas.
Art. 116. Resolución de la legitimidad de los poderes de los Diputados.
Art. 117. Fecha de celebración de la última Junta Preparatoria.
Art. 118. Elección de Presidente de las Cortes.
Art. 119. Constitución y celebración de apertura de las Cortes.
Art. 120. Participación de al Rey de la celebración de apertura de las Cortes.
Art. 121. Asistencia del Rey la celebración de apertura de las Cortes.
Art. 122. Formalidades de la asistencia del Rey a la Sala de las sesiones de las Cortes.
Art. 123. Propositiones del Rey a la Corte.
Art. 124. Imposibilidad de las Cortes para deliberar en presencia del Rey.
Art. 125. Propuestas de los secretarios de Despacho a nombre del Rey.
Art. 126. Carácter público de las sesiones de las Cortes.
Art. 127. Seguimiento del reglamento realizado por las Cortes.
Art. 128. Inviolabilidad de la figura de Diputado.
Art. 129. Inhabilitación de los Diputados para solicitar empleo diverso durante el tiempo de su encargo.
Art. 130. Inhabilitación de los Diputados para solicitar pensión durante el tiempo de su encargo.

Capítulo Séptimo

De las Facultades de las Cortes

- Art. 131.* Facultades exclusivas de las Cortes.

Capítulo Octavo

De la formación y de la sanción real

- Art. 132.* Facultades de los Diputados.
- Art. 133.* Deliberación del proyecto de ley.
- Art. 134.* Juicio de las Cortes.
- Art. 135.* Tiempo indicado para la discusión.
- Art. 136.* Observancia del proyecto en su totalidad.
- Art. 137.* Resolución de las Cortes.
- Art. 138.* Admisión o desechamiento del proyecto de ley.
- Art. 140.* Desechamiento del proyecto de ley.
- Art. 141.* Aprobación del proyecto de ley.
- Art. 142.* Sanción de la ley por parte del Rey.
- Art. 143.* Sanción del Rey con la fórmula “Publíquese como ley”.
- Art. 144.* Negación del Rey con la fórmula “Vuelva a las Cortes”.
- Art. 145.* Prerrogativas del Rey.
- Art. 146.* Negación o aceptación del Rey del proyecto de ley.
- Art. 147.* Negación del proyecto de ley.
- Art. 148.* Sanción del Rey por segunda ocasión.
- Art. 149.* Proyecto de ley propuesto por tercera vez.
- Art. 150.* Período de aceptación o negación de la sanción conforme el término de las sesiones de las Cortes.
- Art. 151.* Efectos de la sanción del Rey.
- Art. 152.* Proyectos de ley desechados.
- Art. 153.* Derogación de leyes.

Capítulo Noveno

De la promulgación de leyes

- Art. 154.* Promulgación solemne de leyes.
- Art. 155.* Fórmula del Rey para la promulgación de leyes.
- Art. 156.* Circulación de las leyes.

Capítulo Décimo

De la Diputación Permanente de las Cortes

- Art. 157.* Separación de las Cortes.
- Art. 158.* Nombramiento de suplentes para la Diputación de Europa y Ultramar.
- Art. 159.* Duración de la Diputación Permanente.
- Art. 160.* Facultades de la Diputación Permanente.

Capítulo Decimoprimer

De las Cortes Extraordinarias

- Art. 161.* Cortes Extraordinarias.
- Art. 162.* Convocatoria de la Diputación Permanente.

- Art. 163.* Objeto de las Cortes Extraordinarias.
Art. 164. Formalidades de las sesiones de las Cortes Extraordinarias.
Art. 165. Celebración de las sesiones de las Cortes Extraordinarias.
Art. 166. Reuniones ordinarias.
Art. 167. Funciones de la Diputación Permanente.

TÍTULO IV DEL REY

Capítulo Primero

De la inviolabilidad del Rey y su autoridad

- Art. 168.* Personalidad del Rey.
Art. 169. Rey como Majestad Católica.
Art. 170. Potestad del Rey para la ejecución de leyes.
Art. 171. Principales facultades del Rey.
Art. 172. Restricciones de la autoridad del Rey.
Art. 173. Juramento del Rey ante las Cortes.

Capítulo Segundo

De la sucesión de la Corona

- Art. 174.* Inviolabilidad del Reino de las Españas.
Art. 175. Prohibición de la sucesión al reinado de los hijos ilegítimos.
Art. 176. Grado y línea de varones y hembras en relación a la sucesión.
Art. 177. Sucesión por causa de muerte del primogénito.
Art. 178. Línea de radicación de la sucesión.
Art. 179. Reinado de Don Fernando VII de Borbón.
Art. 180. Sucesión legítima de los hijos del Rey Fernando VII de Borbón.
Art. 181. Exclusión de los incapaces para gobernar.
Art. 182. Extinción de líneas y nuevos llamamientos.
Art. 183. Sucesión de la Corona en hembra.
Art. 184. Reinado de la hembra sin autoridad de su marido.

Capítulo Tercero

De la minoría de edad del Rey y de la Regencia

- Art. 185.* Minoría de edad del Rey.
Art. 186. Gobierno durante la minoría de edad.
Art. 187. Imposibilidad del Rey en relación a la minoría de edad.
Art. 188. Impedimentos del Rey.
Art. 189. Casos de vacancia de la Corona.
Art. 190. Regencia Provisional.

- Art. 191.* Regencia Provisional y sus funciones.
- Art. 192.* Reunión de las Cortes Extraordinarias para el nombramiento de la Regencia.
- Art. 193.* Requisitos para ser individuo de la Regencia.
- Art. 194.* Figura en que recae la presidencia de la Regencia.
- Art. 195.* Regencia en ejercicio de la autoridad del Rey.
- Art. 196.* Juramento de la Regencia.
- Art. 197.* Publicación de actos de la Regencia en nombre del Rey.
- Art. 198.* Tutor del Rey menor.
- Art. 199.* Obligación de la regencia en relación a la educación del Rey en minoría de edad.
- Art. 200.* Sueldo destinado a los individuos de la Regencia.

Capítulo Cuarto

De la Familia Real y del Reconocimiento del Príncipe de Asturias

- Art. 201.* Título del Príncipe de Asturias.
- Art. 202.* Infantes de las Españas.
- Art. 203.* Título de los hijos del Príncipe de Asturias.
- Art. 204.* Límite de la calidad de Infante de las Españas.
- Art. 205.* Privilegios de los Infantes de las Españas.
- Art. 206.* Prohibición de Príncipe de Asturias para salir del reino sin consentimiento de las Cortes.
- Art. 207.* Estancia fuera del Príncipe de Asturias por tiempo prefijado.
- Art. 208.* Imposibilidad de los descendientes del Príncipe de Asturias de contraer nupcias sin permiso respectivo de las Cortes.
- Art. 209.* Partidas del nacimiento.
- Art. 210.* Reconocimiento del Príncipe de Asturias.
- Art. 211.* Tiempo del reconocimiento.
- Art. 212.* Edad legal del Príncipe de Asturias para prestar juramento.

Capítulo Quinto

De la Dotación de la Familia Real

- Art. 213.* Dotación anual del Rey.
- Art. 214.* Palacios pertenecientes al Rey.
- Art. 215.* Cantidad anual destinada a los alimentos del Príncipe y de sus descendientes.
- Art. 216.* Dote para las Infantas.
- Art. 217.* Alimentos para los Infantes.
- Art. 218.* Alimentos anuales para la Reina viuda.
- Art. 219.* Sueldos de los individuos de la Regencia.
- Art. 220.* Dotación de la casa del Rey.

Art. 221. Tesorería Nacional.

Capítulo Sexto

De los Secretarios de Estado y del Despacho

Art. 222. Secretarios del Despacho.

Art. 223. Requisitos de elegibilidad para Secretario del Despacho.

Art. 224. Señalamiento de negocios por reglamento particular.

Art. 225. Órdenes del Rey y su formalidad.

Art. 226. Responsabilidad de los Secretarios del Despacho.

Art. 227. Formación de presupuestos anuales.

Art. 228. Efectividad de la responsabilidad de los Secretarios del Despacho.

Art. 229. Suspensión del Secretario de Despacho por medio de decreto.

Art. 230. Sueldo de los Secretarios de Despacho.

Capítulo Séptimo

Del Consejo de Estado

Art. 231. Consejo de Estado.

Art. 232. Composición del Consejo de Estado.

Art. 233. Nombramiento de los Consejeros.

Art. 234. Formación del Consejo.

Art. 235. Vacante en el Consejo.

Art. 236. Existencia única del Consejo del Rey.

Art. 237. Propuesta al Rey por parte del Consejo.

Art. 238. Creación de Reglamento por parte del Rey.

Art. 239. Imposibilidad para la remoción de los Consejeros.

Art. 240. Sueldo de los Consejeros.

Art. 241. Toma de posesión de los Consejeros.

TÍTULO V

DE LOS TRIBUNALES Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL

Capítulo Primero

De los Tribunales

Art. 242. Potestad en la aplicación de las leyes.

Art. 243. Prohibición de determinados sujetos en relación al ejercicio de funciones judiciales.

Art. 244. Seguimiento de las leyes en el ordenamiento y formalidades del proyecto.

Art. 245. Atribuciones de los judiciales.

Art. 246. Prohibición para la suspensión de la ejecución de las leyes.

- Art. 247.* Impartición de justicia mediante tribunales competentes.
- Art. 248.* Fuero para todas las personas sin distinción.
- Art. 249.* Fuero del estado de los eclesiásticos.
- Art. 250.* Fuero particular de los militares.
- Art. 251.* Requisitos para ocupar el cargo de Magistrado o Juez.
- Art. 252.* Prohibición de la suspensión de Jueces o Magistrados durante el tiempo de su encargo.
- Art. 253.* Juicio seguido en contra de un Magistrado.
- Art. 254.* Responsabilidad de los Jueces.
- Art. 255.* Soborno, cohecho y prevaricación.
- Art. 256.* Dotación competente para Magistrados y Jueces.
- Art. 257.* Administración de la justicia.
- Art. 258.* Código Civil, Criminal y de Comercio.
- Art. 259.* Supremo Tribunal de Justicia.
- Art. 260.* Número de Magistrados.
- Art. 261.* Funciones del Supremo Tribunal.
- Art. 262.* Causas civiles y criminales.
- Art. 263.* Función de las Audiencias.
- Art. 264.* Fallo de segunda instancia.
- Art. 265.* Conocimiento de competencias.
- Art. 266.* Recursos de fuerza.
- Art. 267.* Avisos puntuales de las causas de los delitos.
- Art. 268.* Audiencias de Ultramar.
- Art. 269.* Nulidad.
- Art. 270.* Listas de causas civiles.
- Art. 271.* Número de Magistrados de las Audiencias.
- Art. 272.* División del Territorio Español.
- Art. 273.* Partidos iguales y un Juez de Letras.
- Art. 274.* Facultades de los Jueces de Letras.
- Art. 275.* Establecimiento de Alcaldes.
- Art. 276.* Jueces de Tribunales Inferiores.
- Art. 277.* Tiempo indicado para remitir listas generales.
- Art. 278.* Tribunales especiales.
- Art. 279.* Posesión de las plazas de Magistrados y Jueces.

Capítulo Segundo

De la administración de justicia en lo civil

- Art. 280.* Derecho de audiencia para la correcta impartición de justicia.
- Art. 281.* Sentencia de los árbitros.
- Art. 282.* Alcalde y su oficio de conciliador.
- Art. 283.* Audiencia del demandante y del demandado.

Art. 284. Medio de conciliación anterior al establecimiento de la litis.

Art. 285. Tres instancias y tres sentencias definitivas.

Capítulo Tercero

De la administración de justicia en lo criminal

Art. 286. Administración de justicia en lo criminal.

Art. 287. Pena corporal.

Art. 288. Obediencia de los mandamientos.

Art. 289. Uso de la fuerza en caso de resistencia o fuga.

Art. 290. Detenido.

Art. 291. Declaración del detenido.

Art. 292. Flagrancia.

Art. 293. Emisión del auto motivado.

Art. 294. Embargo de bienes.

Art. 295. Admisión de fianza.

Art. 296. Libertad bajo fianza.

Art. 297. Función de las cárceles.

Art. 298. Visita de cárceles.

Art. 299. Castigo del Juez y Alcaide.

Art. 300. Causas de prisión en 24 horas.

Art. 301. Confesión.

Art. 302. Proceso político.

Art. 303. Prohibición del uso de los tormentos y apremios.

Art. 304. Prohibición de la pena de confiscación de bienes.

Art. 305. Prohibición de las penas trascendentales para los descendientes del inculpa-
do.

Art. 306. Allanamiento.

Art. 307. Distinción entre Jueces.

Art. 308. Suspensión de las formalidades prescritas.

TÍTULO VI

DEL GOBIERNO INTERIOR

Capítulo Primero

De los Ayuntamientos

Art. 309. Composición de los Ayuntamientos.

Art. 310. Ayuntamiento de los pueblos.

Art. 311. Número de individuos por Ayuntamiento.

Art. 312. Número de Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos.

Art. 313. Reunión de los ciudadanos.

- Art. 314.* Elección de Alcaldes, Regidores y Procuradores.
Art. 315. Mudanzas de los Regidores.
Art. 316. Posibilidad de elegibilidad para el ejercicio del cargo por segunda ocasión.
Art. 317. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Alcalde, Regidor o Procurador.
Art. 318. Prohibición del empleado público para el ejercicio de determinados cargos.
Art. 319. Carácter de carga concejil de los empleados públicos.
Art. 320. Secretario por Ayuntamiento.
Art. 321. Funciones de los Ayuntamientos.
Art. 322. Obras u objetos de utilidad común.
Art. 323. Inspección de la Diputación Provisional.

Capítulo Segundo

Del gobierno político de las Provincias de las Diputaciones Provinciales

- Art. 324.* Gobierno político.
Art. 325. Diputación Provincial.
Art. 326. Composición de la Diputación Provincial.
Art. 327. Renovación de la Diputación Provincial.
Art. 328. Proceso de elección de los Diputados Provinciales.
Art. 329. Suplencia de la Diputación Provincial.
Art. 330. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Diputado Provincial.
Art. 331. Posibilidad de reelección.
Art. 332. Jefe Superior de cada Provincia.
Art. 333. Secretario de la Provincia.
Art. 334. Celebración de las sesiones cada año.
Art. 335. Funciones de la Diputación Provincial.
Art. 336. Abuso de facultades.
Art. 337. Presentación de juramento.

TÍTULO VII DE LAS CONTRIBUCIONES

Capítulo Único

- Art. 338.* Contribuciones.
Art. 339. Reparto de las contribuciones.
Art. 340. Carácter de proporcionalidad de las contribuciones.
Art. 341. Presupuesto general de gastos.
Art. 342. Plan de las contribuciones.
Art. 343. Contribuciones gravosas o perjudiciales.
Art. 344. Cuota de contribución directa.
Art. 345. Tesorería General de la Nación.

- Art. 346.* Tesorería de la Provincia.
Art. 347. Prohibición de admitir pago en cuenta al Tesorero Municipal.
Art. 348. Claridad en las cuentas públicas.
Art. 349. Instrucción particular.
Art. 250. Revisión de las cuentas públicas por medio de la Contaduría Mayor de Cuentas.
Art. 351. Cuenta de la Tesorería General.
Art. 352. Impresión, publicación y circulación de las cuentas.
Art. 353. Manejo de la Hacienda Pública.
Art. 354. Aduanas.
Art. 355. Deuda pública.

TÍTULO VIII DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL

Capítulo Primero

De las tropas de continuo servicio

- Art. 356.* Fuerza Militar Nacional Permanente.
Art. 357. Número de tropas necesarias.
Art. 358. Número de buques necesarios.
Art. 359. Constitución del ejército y la armada.
Art. 360. Escuelas militares.
Art. 361. Obligación de realizar el servicio militar.

Capítulo Segundo

De las Milicias Nacionales

- Art. 362.* Milicias Nacionales.
Art. 363. Ordenanza particular para la formación de Milicias Nacionales.
Art. 364. Duración incontinua de las Milicias Nacionales.
Art. 365. Disponibilidad del Rey de las Milicias Nacionales.

TÍTULO IX DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Capítulo Único

- Art. 366.* Establecimiento de escuelas de primeras letras.
Art. 367. Número de Universidades y establecimientos de instrucción.
Art. 368. Plan General de Enseñanza.
Art. 369. Dirección General de Estudios.

Art. 370. Planes y estatutos especiales.

Art. 371. Libertad de expresión.

TÍTULO X
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN,
Y MODO DE PROCEDER
PARA REALIZAR VARIACIONES EN ELLA

Capítulo Único

Art. 372. Infracciones a la Constitución.

Art. 373. Derecho de representar a las Cortes del Rey.

Art. 374. Juramento de cargo público, civil, militar y eclesiástico.

Art. 375. Imposibilidad de realizar alteraciones o reformas a la Constitución.

Art. 376. Poderes para realizar alteraciones a la Constitución.

Art. 377. Proposición de reformas por escrito.

Art. 378. Lectura de la proposición de Reforma.

Art. 379. Admisión a discusión.

Art. 380. Votos de otorgamiento de poderes para realizar la reforma.

Art. 381. Publicación y comunicación a todas las Provincias.

Art. 382. Clausura añadida a los poderes ordinarios.

Art. 383. Propuesta y discusión de la Reforma de ley.

Art. 384. Derecho de Reforma de ley.

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ¹

Cádiz, España, 18 de marzo de 1812

384 artículos

ÍNDICE

TÍTULO I

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES

Capítulo I. *De la Nación Española*

Capítulo II. *De los españoles*

TÍTULO II

DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES

Capítulo I. *Del territorio de las Españas*

Capítulo II. *De la religión*

Capítulo III. *Del Gobierno*

Capítulo IV. *De los ciudadanos españoles*

TÍTULO III

DE LAS CORTES

Capítulo I. *Del modo de formarse las Cortes*

Capítulo II. *Del nombramiento de Diputados de Cortes*

Capítulo III. *De las juntas electorales de parroquia*

Capítulo IV. *De las juntas de partido*

Capítulo V. *De las juntas electorales de Provincia*

Capítulo VI. *De la celebración de las Cortes*

¹ Cfr. A la primera impresión realizada en México, 1812. *Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias 1810 – 1813*.

Capítulo VII. *De las facultades de las Cortes*
Capítulo VIII. *De la formación de las Leyes, y de la Sanción Real*
Capítulo IX. *De la promulgación de las Leyes*
Capítulo X. *De la Diputación Permanente de Cortes*
Capítulo XI. *De las Cortes extraordinarias*

TÍTULO IV DEL REY

Capítulo I. *De la inviolabilidad del Rey, y de su autoridad*
Capítulo II. *De la sucesión a la Corona*
Capítulo III. *De la menor edad del Rey, y de la Regencia*
Capítulo IV. *De la familia real, y del reconocimiento del Príncipe de Asturias*
Capítulo V. *De la dotación de la familia real*
Capítulo VI. *De los Secretarios de Estado y del Despacho*
Capítulo VII. *Del Consejo de Estado*

TÍTULO V DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y CRIMINAL

Capítulo I. *De los Tribunales*
Capítulo II. *De la Administración de Justicia en lo Civil*
Capítulo III. *De la Administración de Justicia en lo Criminal*

TÍTULO VI DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS PUEBLOS

Capítulo I. *De los Ayuntamientos*
Capítulo II. *Del Gobierno político de las Provincias y de las diputaciones provinciales*

TÍTULO VII DE LAS CONTRIBUCIONES

Capítulo Único

TÍTULO VIII DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL

Capítulo I. *De las tropas de continuo servicio*

Capítulo II. *De las milicias nacionales*

TÍTULO IX
DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Capítulo Único

TÍTULO X
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y MODO DE
PROCEDER PARA HACER VARIACIONES EN ELLA
Capítulo Único

DON FERNANDO VII, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del reino, nombrada por las Cortes generales y extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA.

En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad.

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitución Política para el buen gobierno y recta administración del Estado.

TÍTULO I DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ESPAÑOLES

Capítulo I *De la Nación Española*

Artículo 1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.

Artículo 2. La Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

Artículo 3. La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Artículo 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Capítulo II *De los Españoles*

Artículo 5. Son españoles:

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes carta de naturaleza.

Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la Ley en cualquier pueblo de la Monarquía.

Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Artículo 6. El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos.

Artículo 7. Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.

Artículo 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado.

Artículo 9. Está asimismo obligado todo español a defender la patria con las armas, cuando sea llamado por la ley.

TÍTULO II DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU RELIGIÓN Y GOBIERNO Y DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

Capítulo I *Del Territorio de las Españas*

Artículo 10. El territorio español comprende en la península con sus posesiones e islas adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar. En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las islas Filipinas y las que dependen de su gobierno.

Artículo 11. Se hará una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan.

Capítulo II

De la Religión

Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

Capítulo III

Del Gobierno

Artículo 13. El objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.

Artículo 14. El gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.

Artículo 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Artículo 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

Artículo 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos por la ley.

Capítulo IV

De los ciudadanos españoles

Artículo 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están vecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Artículo 19. Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Artículo 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o establecidos en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.

Artículo 21. Son, asimismo, ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del gobierno, y teniendo veintiún años cumplidos, se hayan vecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.

Artículo 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los

que hicieren servicios calificados a la patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos, de que están casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Artículo 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.

Artículo 24. La calidad de ciudadano español se pierde:

Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero. Por sentencia en que se impongan penas afflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación.

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno.

Artículo 25. El ejercicio de los mismos derechos se suspende:

Primero. En virtud de interdicción judicial por incapacidad física o moral.

Segundo. Por el estado de deudor quebrado, o de deudor a los caudales públicos.

Tercero. Por el estado de sirviente doméstico.

Cuarto. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.

Quinto. Por hallarse procesado criminalmente.

Sexto. Desde el año de mil ochocientos treinta deberán saber leer y escribir los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Artículo 26. Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.

TÍTULO III DE LAS CORTES

Capítulo I

Del modo de formarse las Cortes

Artículo 27. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma que se dirá.

Artículo 28. La base para la representación nacional es la misma en ambos hemisferios.

Artículo 29. Esta base es la población, compuesta de los naturales que por ambas líneas sean originarios de los dominios españoles, y de aquellos que hayan obtenido en las Cortes carta de ciudadano, como también de los comprendidos en el artículo 21.

Artículo 30. Para el cómputo de la población de los dominios europeos servirá el último censo del año de mil setecientos noventa y siete, hasta que pueda hacerse otro nuevo, y se formará el correspondiente para el cómputo de la población de los

de ultramar, sirviendo entre tanto los censos más auténticos entre los últimamente formados.

Artículo 31. Por cada setenta mil almas de la población, compuesta como queda dicho en el artículo 29, habrá un diputado de Cortes.

Artículo 32. Distribuida la población por las diferentes provincias, si resultase en alguna el exceso de más de treinta y cinco mil almas, se elegirá un diputado más, como si el número llegase a setenta mil, y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil, no se contará con él.

Artículo 33. Si hubiese alguna provincia cuya población no llegue a setenta mil almas, pero que no baje de sesenta mil, elegirá por sí un diputado; y si bajare de este número, se unirá a la inmediata para completar el de setenta mil requerido. Exceptuase de esta regla la isla de Santo Domingo, que nombrará diputado, cualquiera que sea su población.

Capítulo II

Del nombramiento de diputados de Cortes

Artículo 34. Para la elección de diputados de Cortes se celebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.

Capítulo III

De las Juntas Electorales de Parroquia

Artículo 35. Las juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares.

Artículo 36. Estas juntas se celebrarán siempre en la península e islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de octubre del año anterior al de la celebración de las Cortes.

Artículo 37. En las provincias de ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de diciembre, quince meses antes de la celebración de las Cortes, con aviso que para unas y otras hayan de dar anticipadamente las justicias.

Artículo 38. En las juntas de parroquia se nombrará por cada doscientos vecinos un elector parroquial.

Artículo 39. Si el número de vecinos de la parroquia excediese de trescientos, aunque no llegue a cuatrocientos, se nombrarán dos electores; si excediese de quinientos aunque no llegue a seiscientos, se nombrarán tres, y así progresivamente.

Artículo 40. En las parroquias cuyo número de vecinos no llegue a doscientos, con tal que tengan ciento cincuenta, se nombrará ya un elector, y en aquellas en que no haya este número, se reunirán los vecinos a los de otra inmediata para nombrar el elector o electores que les correspondan.

Artículo 41. La junta parroquial elegirá, a pluralidad de votos once compromisarios, para que estos nombren el elector parroquial.

Artículo 42. Si en la junta parroquial hubieren de nombrarse dos electores parroquiales, se elegirán veintitún compromisarios, y si tres, treinta y uno; sin que en ningún caso se pueda exceder de este número de compromisarios, a fin de evitar confusión.

Artículo 43. Para consultar la mayor comodidad de las poblaciones pequeñas, se observará que aquella parroquia que llegare a tener veinte vecinos, elegirá un compromisario; la que llegare a tener de treinta a cuarenta, elegirá dos; la que tuviere de cincuenta a sesenta, tres, y así progresivamente. Las parroquias que tuvieren menos de veinte vecinos, se unirán con las más inmediatas para elegir compromisario.

Artículo 44. Los compromisarios de las parroquias de las poblaciones pequeñas, así elegidos, se juntarán en el pueblo más a propósito, y componiendo el número de once, o a lo menos de nueve, nombrarán un elector parroquial; si compusieren el número de veintiuno, o a lo menos de diecisiete, nombrarán dos electores parroquiales y si fueren treinta y uno y se unieren a lo menos veinticinco, nombrarán tres electores, o los que correspondan.

Artículo 45. Para ser nombrado elector parroquial se requiere ser ciudadano, mayor de veinticinco años, vecino y residente en la parroquia.

Artículo 46. Las juntas de parroquia serán presididas por el jefe político o el alcalde de la ciudad, villa o aldea en que se congregaren, con asistencia del cura párroco, para mayor solemnidad del acto; y si en un mismo pueblo, por razón el número de sus parroquias se tuvieren dos o más juntas, presidirá una el jefe político o el alcalde, otra el otro alcalde, y los regidores por suerte presidirán las demás.

Artículo 47. Llegada la hora de la reunión, que se hará en las casas consistoriales o en el lugar donde lo tengan de costumbre, hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la parroquia con su Presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias.

Artículo 48. Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, y en él se dará principio a la junta, nombrando dos escrutadores y un Secretario de entre los ciudadanos presentes, todo a puerta abierta.

Artículo 49. En seguida preguntará el Presidente si algún ciudadano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno para que la elección recaiga en determinada persona; y si la hubiere deberá hacerse justificación pública y verbal en el mismo acto. Siendo cierta la acusación, serán privados de voz activa y pasiva los que hubieren cometido el delito. Los calumniadores sufrirán la misma pena; y de este juicio no se admitirá recurso alguno.

Artículo 50. Si se suscitasen dudas sobre si en alguno de los presentes concurren las calidades requeridas para poder votar, la misma junta decidirá en el acto lo que le parezca; y lo que decidiere se ejecutará sin recurso alguno por esta vez y para este sólo efecto.

Artículo 51. Se procederá inmediatamente al nombramiento de los compromisarios; lo que se hará designando cada ciudadano un número de personas igual al de

los compromisarios, para lo que se acercará a la mesa donde se hallen el Presidente, los escrutadores y el secretario; y éste las escribirá en una lista a su presencia, y en éste y en los demás actos de elección nadie podrá votarse así mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar.

Artículo 52. Concluido este acto, el Presidente, escrutadores, y Secretario reconocerán las listas, y aquél publicará en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan sido elegidos compromisarios por haber reunido mayor número de votos.

Artículo 53. Los compromisarios nombrados se retirarán a un lugar separado antes de disolverse la junta, y conferenciando entre sí, procederán a nombrar al elector o electores de aquella parroquia, y quedarán elegidas la persona o personas que reúnan más de la mitad de votos. Enseguida se publicará en la junta el nombramiento.

Artículo 54. El Secretario extenderá el acta, que con él firmarán el Presidente y los compromisarios, y se entregará copia de ella firmada por los mismos a la persona o personas elegidas, para hacer constar su nombramiento.

Artículo 55. Ningún ciudadano podrá excusarse de estos encargos por motivo ni pretexto alguno.

Artículo 56. En la junta parroquial ningún ciudadano se presentará con armas.

Artículo 57. Verificado el nombramiento de electores, se disolverá inmediatamente la junta, y cualquier otro acto en que intente mezclarse será nulo.

Artículo 58. Los ciudadanos que han compuesto la junta se trasladarán a la parroquia, donde se cantará un solemne Te Deum, llevando al elector o electores entre el Presidente, los escrutadores y el secretario.

Capítulo IV

De las Juntas Electorales de Partido

Artículo 59. Las Juntas Electorales de Partido se compondrán de los electores parroquiales que se congregarán en la cabeza de cada partido a fin de nombrar el elector o electores que han de concurrir a la capital de la provincia para elegir los diputados de Cortes.

Artículo 60. Estas juntas se celebrarán siempre, en la Península e Islas y posesiones adyacentes, el primer domingo del mes de noviembre del año anterior al en que han de celebrarse las Cortes.

Artículo 61. En las provincias de Ultramar se celebrarán el primer domingo del mes de enero próximo siguiente al de diciembre en que se hubieren celebrado las juntas de parroquia.

Artículo 62. Para venir en conocimiento del número de electores que haya de nombrar cada partido, se tendrán presentes las siguientes reglas.

Artículo 63. El número de electores de partido será triple al de los diputados que se han de elegir.

Artículo 64. Si el número de partidos de la provincia fuere mayor que el de los electores que se requieren por el artículo precedente para el nombramiento, de los diputados que le correspondan, se nombrará, sin embargo, un elector por cada partido.

Artículo 65. Si el número de partidos fuere menor que el de los electores que deban nombrarse, cada partido elegirá uno, dos o más, hasta completar el número que se requiera; pero si faltase aún un elector, le nombrará el partido de mayor población; si todavía faltase otro, le nombrará el que siga en mayor población; y así sucesivamente.

Artículo 66. Por lo que queda establecido en los artículos 31, 32 y 33, y en los tres artículos precedentes, el censo determina cuántos diputados corresponden a cada provincia, y cuántos electores a cada uno de sus partidos.

Artículo 67. Las Juntas Electorales de Partido serán presididas por el jefe político o el alcalde primero del pueblo cabeza de partido, a quien se presentarán los electores parroquiales con el documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.

Artículo 68. En el día señalado se juntarán los electores de parroquia con el Presidente en las salas consistoriales a puerta abierta, y comenzarán por nombrar un Secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores.

Artículo 69. En seguida presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento para ser examinadas por el Secretario y escrutadores, quienes deberán al día siguiente informar si están o no arregladas. Las certificaciones del Secretario y escrutadores serán examinadas por una comisión de tres individuos de la junta que se nombrará al efecto, para que informe también en el siguiente día sobre ellas.

Artículo 70. En este día, congregados los electores parroquiales, se leerán los informes sobre las certificaciones; y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo que resolviere, se ejecutará sin recurso.

Artículo 71. Concluido este acto pasarán los electores parroquiales con su Presidente a la iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un discurso propio de las circunstancias.

Artículo 72. Después de este acto religioso se restituirán a las casas consistoriales, y ocupando los electores sus asientos sin preferencia alguna, leerá el Secretario este capítulo de la Constitución, y enseguida hará el Presidente la misma pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene.

Artículo 73. Inmediatamente después se procederá al nombramiento del elector o electores del partido, eligiéndolos de uno en uno y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que esté escrito el nombre de la persona que cada uno elige.

Artículo 74. Concluida la votación, el Presidente, Secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido el que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más, publicando el Presidente cada elección. Si ninguna hubiere tenido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número en-

trarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna mayor número de votos. En caso de empate decidirá la suerte.

Artículo 75. Para ser elector de partido se requiere ser ciudadano que se halle en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y vecino y residente en el partido, ya sea del estado seglar o del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella.

Artículo 76. El Secretario extenderá el acta que con él firmarán el Presidente y escrutadores; y se entregará copia de ella, firmada por los mismos, a la persona o personas elegidas, para hacer constar su nombramiento. El Presidente de esta junta remitirá otra copia firmada por él y por el Secretario al Presidente de la junta de provincia, donde se hará notoria la elección en los papeles públicos.

Artículo 77. En las Juntas Electorales de Partido se observará todo lo que se previene para las juntas electorales de parroquia en los artículos 55, 56, 57 y 58.

Capítulo V

De las Juntas Electorales de Provincia

Artículo 78. Las Juntas Electorales de Provincia se compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital a fin de nombrar los diputados que le correspondan para asistir a las Cortes, como representantes de la Nación.

Artículo 79. Estas juntas se celebrarán siempre en la Península e Islas adyacentes, el primer domingo del mes de diciembre del año anterior a las Cortes.

Artículo 80. En las provincias de Ultramar se celebrarán en el domingo segundo del mes de marzo del mismo año en que se celebraren las juntas de partido.

Artículo 81. Serán presididas estas juntas por el jefe político de la capital de la provincia, a quien se presentarán los electores de partido con el documento de su elección, para que sus nombres se anoten en el libro en que han de extenderse las actas de la junta.

Artículo 82. En el día señalado se juntarán los electores de partido con el Presidente en las casas consistoriales o en el edificio que se tenga por más a propósito para un acto tan solemne, a puerta abierta; y comenzarán por nombrar a pluralidad de votos un Secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores.

Artículo 83. Si a una provincia no le cupiere más que un diputado, concurrirán a lo menos cinco electores para su nombramiento; distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere dividida, o formando partidos para este sólo efecto.

Artículo 84. Se leerán los cuatro capítulos de esta Constitución que tratan de las elecciones. Después se leerán las certificaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas de partido, remitidas por los respectivos Presidentes; y asimismo, presentarán los electores las certificaciones de su nombramiento para ser examinadas por el Secretario y escrutadores, quienes deberán, al día siguiente, informar si están o no arregladas. Las certificaciones del Secretario y escrutadores serán examinadas por una

comisión de tres individuos de la junta, que se nombrarán al efecto, para que informen también sobre ellas en el siguiente día.

Artículo 85. Juntos en él los electores de partido, se leerán los informes sobre las certificaciones, y si se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas o a los electores por defecto de alguna de las calidades requeridas, la junta resolverá definitivamente y acto continuo lo que le parezca; y lo que resolviere se ejecutará sin recurso.

Artículo 86. En seguida se dirigirán los electores de partido con su Presidente a la catedral o iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne de Espíritu Santo, y el obispo, o en su defecto el eclesiástico de mayor dignidad, hará un discurso propio de las circunstancias.

Artículo 87. Concluido este acto religioso, volverán al lugar de donde salieron, y a puerta abierta, ocupando los electores sus asientos, sin preferencia alguna, hará el Presidente la misma pregunta que se contiene en el artículo 49, y se observará todo cuanto en él se previene.

Artículo 88. Se procederá en seguida por los electores que se hallen presentes, a la elección del diputado o diputados, y se elegirán de uno en uno, acercándose a la mesa donde se hallen el Presidente, los escrutadores y secretario, y éste escribirá en una lista a su presencia el nombre de la persona que cada uno elige. El Secretario y los escrutadores serán los primeros que voten.

Artículo 89. Concluida la votación, el Presidente, Secretario y escrutadores harán la regulación de los votos, y quedará elegido aquél que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno más. Si ninguno hubiera reunido la pluralidad absoluta de votos, los dos que hayan tenido el mayor número entrarán en segundo escrutinio, y quedará elegido el que reúna la pluralidad. En caso de empate decidirá la suerte, y hecha la elección de cada uno, la publicará el Presidente.

Artículo 90. Después de la elección de diputados se procederá a la de suplentes por el mismo método y forma, y su número será en cada provincia la tercera parte de los diputados que le correspondan. Si a alguna provincia no le tocara elegir más que uno o dos diputados, elegirá, sin embargo, un diputado suplente. Estos concurrirán a las Cortes, siempre que se verifique la muerte del propietario, o su imposibilidad a juicio de las mismas, en cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la elección.

Artículo 91. Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia o esté vecindado en ella con residencia a lo menos de siete años, bien sea del estado seglar, o del eclesiástico secular; pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que componen la junta, o en los de fuera de ella.

Artículo 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios.

Artículo 93. Suspéndese la disposición del artículo precedente hasta que las Cortes que en adelante han de celebrarse, declaren haber llegado ya el tiempo de que

pueda tener efecto, señalando la cuota de la renta y la calidad de los bienes de que haya de provenir; y lo que entonces resolvieren se tendrá por constitucional, como si aquí se hallara expresado.

Artículo 94. Si sucediere que una misma persona sea elegida por la provincia de su naturaleza y por la en que esté vecindado, subsistirá la elección por razón de la vecindad, y por la provincia de su naturaleza vendrá a las Cortes el suplente a quien corresponda.

Artículo 95. Los secretarios del Despacho, los consejeros de Estado, y los que sirven empleos de la Casa Real, no podrán ser elegidos diputados de Cortes.

Artículo 96. Tampoco podrá ser elegido diputado de Cortes ningún extranjero, aunque haya obtenido de las Cortes carta de ciudadano.

Artículo 97. Ningún empleado público nombrado por el gobierno, podrá ser elegido diputado de Cortes por la provincia en que ejerce su cargo.

Artículo 98. El Secretario extenderá el acta de las elecciones, que con él firmarán el Presidente y todos los electores.

Artículo 99. En seguida otorgarán todos los electores sin excusa alguna a todos y cada uno de los diputados poderes amplios, según la fórmula siguiente, entregándose a cada diputado su correspondiente poder para presentarse en las Cortes.

Artículo 100. Los poderes estarán concebidos en estos términos. *En la ciudad o villa de ...en el día... del mes de ... del año de ... en las salas de ... hallándose congregados los señores (aquí se pondrán los nombres del Presidente y de los electores de partido que forman la junta electoral de la provincia) dijeron ante mí el infrascrito escribano y testigos al efecto convocados, que habiéndose procedido, con arreglo a la Constitución Política de la Monarquía Española, al nombramiento de los electores parroquiales y de partido con todas las solemnidades prescritas por la misma Constitución, como constaba de las certificaciones que originales obraban en el expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la provincia de ... en el día de ... del mes de ... del presente año, habían hecho el nombramiento de los diputados que en nombre y representación de esta provincia han de concurrir a las Cortes, y que fueron electos por diputados para ellas por esta provincia los señores N. N. N., como resulta del acta extendida y firmada por N. N.: que en su consecuencia les otorgan poderes amplios a todos juntos, y a cada uno de por sí, para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para que con los demás diputados de Cortes, como representantes de la Nación española, puedan acordar y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de ella, en uso de las facultades que la Constitución determina, y dentro de los límites que la misma prescribe, sin poder derogar, alterar o variar en manera alguna ninguno de sus artículos, bajo ningún pretexto; y que los otorgantes se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia, en virtud de las facultades que les son concedidas como electores nombrados para este acto, a tener por válido, y obedecer y cumplir cuanto como tales diputados de Cortes hicieren, y se resolviera por éstas con arreglo a la Constitución Política de la Monarquía española. Así lo expresaron y otorgaron, hallándose presentes como testigos N. N. N., que con los señores otorgantes lo firmaron: de que doy fe.*

Artículo 101. El Presidente, escrutadores y Secretario remitirán inmediatamente copia firmada por los mismos del acta de las elecciones a la diputación permanente de las Cortes, y harán que se publiquen las elecciones por medio de la imprenta, remitiendo un ejemplar a cada pueblo de la provincia.

Artículo 102. Para la indemnización de los diputados se les asistirá por sus respectivas provincias con las dietas que las Cortes en el segundo año de cada diputación general señalaren para la diputación que le ha de suceder; y a los diputados de Ultramar se les abonará, además, lo que parezca necesario, a juicio de sus respectivas provincias, para los gastos de viaje de ida y vuelta.

Artículo 103. Se observarán en las Juntas Electorales de Provincia todo lo que se prescribe en los artículos 55, 56, 57 y 58, a excepción de lo que previene el artículo 328.

Capítulo VI

De la Celebración de las Cortes

Artículo 104. Se juntarán las Cortes todos los años en la capital del reino, en edificio destinado a este sólo objeto.

Artículo 105. Cuando tuvieran por conveniente trasladarse a otro lugar, podrán hacerlo con tal que sea a pueblo que no diste de la capital más que doce leguas, y que convengan en la traslación las dos terceras partes de los diputados presentes.

Artículo 106. Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando principio el día primero del mes de marzo.

Artículo 107. Las Cortes podrán prorrogar sus sesiones cuando más por otro mes en sólo dos casos: primero, a petición del Rey; y segundo, si las Cortes lo creyeren necesario por una resolución de las dos terceras partes de los diputados.

Artículo 108. Los diputados se renovarán en su totalidad cada dos años.

Artículo 109. Si la guerra o la ocupación de alguna parte del territorio de la Monarquía por el enemigo impidieren que se presenten a tiempo todos o algunos de los diputados de una o más provincias, serán suplidos los que falten por los anteriores diputados de las respectivas provincias, sorteando entre sí hasta completar el número que les corresponda.

Artículo 110. Los diputados no podrán volver a ser elegidos, sino mediando otra diputación.

Artículo 111. Al llegar los diputados a la capital se presentarán a la Diputación Permanente de Cortes, la que hará sentar sus nombres, y el de la provincia que los ha elegido, en un registro en la secretaría de las mismas Cortes.

Artículo 112. En el año de la renovación de los diputados se celebrará el día quince de febrero a puerta abierta la primera junta preparatoria, haciendo de Presidente el que lo sea de la diputación permanente, y de secretarios y escrutadores los que nombre la misma diputación de entre los restantes individuos que la componen.

Artículo 113. En esta primera junta presentarán todos los diputados sus poderes, y se nombrarán a pluralidad de votos dos comisiones, una de cinco individuos, para

que examine los poderes de todos los diputados, y otra de tres, para que examine los de estos cinco individuos de la comisión.

Artículo 114. El día veinte del mismo febrero se celebrará también a puerta abierta la segunda junta preparatoria, en la que las dos comisiones informarán sobre la legitimidad de los poderes, habiendo tenido presentes las copias de las actas de las elecciones provinciales.

Artículo 115. En esta junta y en las demás que sean necesarias hasta el día veinticinco, se resolverán definitivamente, y a pluralidad de votos, las dudas que se susciten sobre la legitimidad de los poderes y calidades de los diputados.

Artículo 116. En el año siguiente al de la renovación de los diputados se tendrá la primera junta preparatoria el día veinte de febrero, y hasta el veinticinco las que se crean necesarias para resolver, en el modo y forma que se ha expresado en los tres artículos precedentes, sobre la legitimidad de los poderes de los diputados que de nuevo se presenten.

Artículo 117. En todos los años el día veinticinco de febrero se celebrará la última junta preparatoria, en la que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los Santos Evangelios, el juramento siguiente: *¿Juráis defender y conservar la religión católica, apostólica, romana, sin admitir otra alguna en el reino? R. Sí juro. ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución Política de la Monarquía Española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la Nación en el año de mil ochocientos y doce? R. Sí juro. ¿Juráis haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? R. Sí juro. Si así lo hicieris, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.*

Artículo 118. En seguida se procederá a elegir de entre los mismos diputados, por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos, un Presidente, un Vicepresidente y cuatro secretarios, con lo que se tendrán por constituidas y formadas las Cortes, y la diputación permanente cesará en todas sus funciones.

Artículo 119. Se nombrará en el mismo día una diputación de veintidós individuos, y dos de los secretarios, para que pase a dar parte al Rey de hallarse constituidas las Cortes, y del Presidente que han elegido, a fin de que manifieste si asistirá a la apertura de las Cortes, que se celebrará el día primero de marzo.

Artículo 120. Si el Rey se hallare fuera de la capital, se le hará esta participación por escrito, y el Rey contestará del mismo modo.

Artículo 121. El Rey asistirá por sí mismo a la apertura de las Cortes, y si tuviere impedimento, la hará el Presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Artículo 122. En la sala de las Cortes entrará el Rey sin guardia, y sólo le acompañarán las personas que determine el ceremonial para el recibimiento y despedida del Rey, que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las Cortes.

Artículo 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente, y al que el Presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al Presidente, para que por éste se lea en las Cortes.

Artículo 124. Las Cortes no podrán deliberar en la presencia del Rey.

Artículo 125. En los casos en que los secretarios del Despacho hagan a las Cortes algunas propuestas a nombre del Rey, asistirán a las discusiones cuando y del modo que las Cortes determinen, y hablarán en ellas; pero no podrán estar presentes a la votación.

Artículo 126. Las sesiones de las Cortes serán públicas, y sólo en los casos que exijan reserva podrá celebrarse sesión secreta.

Artículo 127. En las discusiones de las Cortes, y en todo lo demás que pertenezca a su gobierno y orden interior, se observará el reglamento que se forme por estas Cortes generales y extraordinarias, sin perjuicio de las reformas que las sucesivas tuvieren por conveniente hacer en él.

Artículo 128. Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.

Artículo 129. Durante el tiempo de su diputación, contado para este efecto desde que el nombramiento conste en la permanente de Cortes, no podrán los diputados admitir para sí, ni solicitar para otro, empleo alguno de provisión del Rey, ni aún ascenso, como no sea de escala en su respectiva carrera.

Artículo 130. Del mismo modo no podrán, durante el tiempo de su diputación, y un año después del último acto de sus funciones, obtener para sí, ni solicitar para otro, pensión ni condecoración alguna, que sea también de provisión del Rey.

Capítulo VII

De las facultades de las Cortes

Artículo 131. Las facultades de las Cortes son:

Primera: Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y derogarlas en caso necesario.

Segunda: Recibir el juramento al Rey, al Príncipe de Asturias y a la Regencia, como se previene en sus lugares.

Tercera: Resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la corona.

Cuarta: Elegir Regencia o Regente del reino cuando lo previene la Constitución, y señalar las limitaciones con que la Regencia o el Regente han de ejercer la autoridad real.

Quinta: Hacer el reconocimiento público del Príncipe de Asturias.

Sexta: Nombrar tutor al Rey menor, cuando lo previene la Constitución.

Séptima: Aprobar antes de su ratificación los tratados de alianza ofensiva, los de subsidios, y los especiales de comercio.

Octava: Conceder o negar la admisión de tropas extranjeras en el reino.

Novena: Decretar la creación y supresión de plazas en los tribunales que establece la Constitución; e igualmente la creación y supresión de los oficios públicos.

Décima: Fijar todos los años, a propuesta del Rey, las fuerzas de tierra y de mar, determinando las que se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su aumento en tiempo de guerra.

Undécima: Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia nacional en todos los ramos que los constituyen.

Duodécima: Fijar los gastos de la administración pública.

Decimatercia: Establecer anualmente las contribuciones e impuestos.

Decimacuarta: Tomar caudales a préstamo en casos de necesidad sobre el crédito de la Nación.

Decimaquinta: Aprobar el repartimiento de las contribuciones entre las provincias.

Decimasexta: Examinar y aprobar las cuentas de la inversión de los caudales públicos.

Decimaséptima: Establecer las aduanas y aranceles de derechos.

Decimaoctava: Disponer lo conveniente para la administración, conservación y enajenación de los bienes nacionales.

Decimanona: Determinar el valor, peso, ley, tipo y denominación de las monedas.

Vigésima: Adoptar el sistema que se juzgue más cómodo y justo de pesos y medidas.

Vigésima primera: Promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan.

Vigésima segunda: Establecer el plan general de enseñanza pública en toda la Monarquía, y aprobar el que se forme para la educación del Príncipe de Asturias.

Vigésima tercia: Aprobar los reglamentos generales para la Policía y sanidad del reino.

Vigésima cuarta: Proteger la libertad política de la imprenta.

Vigésima quinta: Hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho y demás empleados públicos.

Vigésima sexta: Por último, pertenece a las Cortes dar o negar su consentimiento en todos aquellos casos y actos, para los que se previene en la Constitución ser necesario.

Capítulo VIII

De la Formación de las Leyes, y de la Sanción Real

Artículo 132. Todo diputado tiene la facultad de proponer a las Cortes los proyectos de ley, haciéndolo por escrito y exponiendo las razones en que se funde.

Artículo 133. Dos días a lo menos después de presentado y leído el proyecto de ley, se leerá por segunda vez, y las Cortes deliberarán si se admite o no a discusión.

Artículo 134. Admitido a discusión, si la gravedad del asunto requiriese a juicio de las Cortes, que pase previamente a una comisión, se ejecutará así.

Artículo 135. Cuatro días a lo menos después de admitido a discusión el proyecto, se leerá tercera vez, y se podrá señalar día para abrir la discusión.

Artículo 136. Llegado el día señalado para la discusión, abrazará ésta el proyecto en su totalidad y en cada uno de sus artículos.

Artículo 137. Las Cortes decidirán cuándo la materia está suficientemente discutida; y decidido que lo esté, se resolverá si ha lugar o no a la votación.

Artículo 138. Decidido que ha lugar a la votación, se procederá a ella inmediatamente, admitiendo o desechando en todo o en parte el proyecto, o variándole y modificándole, según las observaciones que se hayan hecho en la discusión.

Artículo 139. La votación se hará a pluralidad absoluta de votos; y para proceder a ella será necesario que se hallen presentes a lo menos la mitad y uno más de la totalidad de los diputados que deben componer las Cortes.

Artículo 140. Si las Cortes desecharen un proyecto de ley en cualquier estado de su examen, o resolvieren que no debe procederse a la votación, no podrá volver a proponerse en el mismo año.

Artículo 141. Si hubiere sido adoptado, se extenderá por duplicado en forma de ley, y se leerá en las Cortes; hecho lo cual, y firmados ambos originales por el Presidente y dos secretarios, serán presentados inmediatamente al Rey por una diputación.

Artículo 142. El Rey tiene la sanción de las leyes.

Artículo 143. Da el Rey la sanción por esta fórmula, firmada de su mano: *Publíquese como ley.*

Artículo 144. Niega el Rey la sanción por esta fórmula, igualmente firmada de su mano: *Vuelva a las Cortes;* acompañando al mismo tiempo una exposición de las razones que ha tenido para negarla.

Artículo 145. Tendrá el Rey treinta días para usar de esta prerrogativa: si dentro de ellos no hubiere dado o negado la sanción, por el mismo hecho se entenderá que la ha dado, y la dará en efecto.

Artículo 146. Dada o negada la sanción por el Rey, devolverá a las Cortes uno de los dos originales con la fórmula respectiva, para darse cuenta en ellas. Éste original se conservará en el archivo de las Cortes y el duplicado quedará en poder del Rey.

Artículo 147. Si el Rey negare la sanción, no se volverá a tratar del mismo asunto en las Cortes de aquel año; pero podrá hacerse en las del siguiente.

Artículo 148. Si en las Cortes del siguiente año fuere de nuevo propuesto, admitido y aprobado el mismo proyecto, presentado que sea al Rey, podrá dar la sanción o negarla por segunda vez en los términos de los artículos 143 y 144; y en el último caso no se tratará del mismo asunto en aquel año.

Artículo 149. Si de nuevo fuere por tercera vez propuesto, admitido, y aprobado el mismo proyecto en las Cortes del siguiente año, por el mismo hecho se entiende que el Rey da la sanción, y presentándosele, la dará en efecto por medio de la fórmula expresada en el artículo 143.

Artículo 150. Si antes de que expire el término de treinta días en que el Rey ha de dar o negar la sanción, llegare el día en que las Cortes han de terminar sus sesiones, el Rey la dará o negará en los ocho primeros de las sesiones de las siguientes Cortes: y si este término pasare sin haberla dado, por esto mismo se entenderá dada, y la dará en efecto en la forma prescrita; pero si el Rey negare la sanción, podrán estas Cortes tratar del mismo proyecto.

Artículo 151. Aunque después de haber negado el Rey la sanción a un proyecto de ley se pasen alguno o algunos años sin que se proponga el mismo proyecto, como vuelva a suscitarse en el tiempo de la misma diputación, que le adoptó por la primera vez, o en el de las dos diputaciones que inmediatamente la subsigan, se entenderá siempre el mismo proyecto para los efectos de la sanción del Rey, de que tratan los tres artículos precedentes; pero si en la duración de las tres diputaciones expresadas no volviere a proponerse, aunque después se reproduzca en los propios términos, se tendrá por proyecto nuevo para los efectos indicados.

Artículo 152. Si la segunda o tercera vez que se propone el proyecto dentro del término que prefija el artículo precedente, fuere desechado por las Cortes, en cualquier tiempo que se reproduzca después, se tendrá por nuevo proyecto.

Artículo 153. Las leyes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos trámites que se establecen.

Capítulo IX

De la Promulgación de las Leyes

Artículo 154. Publicada la ley en las Cortes, se dará de ello aviso al Rey, para que se proceda inmediatamente a su promulgación solemne.

Artículo 155. El Rey para promulgar las leyes, usará de la fórmula siguiente: N. (*el nombre del Rey*), *por la gracia de Dios y por la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado, y nos sancionamos lo siguiente (aquí el texto literal de la ley). Por tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. (Va dirigida al Secretario del Despacho respectivo).*

Artículo 156. Todas las leyes se circularán de mandato del Rey por los respectivos secretarios del Despacho directamente a todos y cada uno de los tribunales supremos y de las provincias, y demás jefes y autoridades superiores, que las circularán a las subalternas.

Capítulo X

De la Diputación Permanente de Cortes

Artículo 157. Antes de separarse las Cortes nombrarán una diputación, que se llamará Diputación Permanente de Cortes, compuesta de siete individuos de su seno, tres de las provincias de Europa, y tres de las de Ultramar, y el séptimo saldrá por suerte entre un diputado de Europa y otro de Ultramar.

Artículo 158. Al mismo tiempo nombrarán las Cortes dos suplentes para esta diputación, uno de Europa y otro de Ultramar.

Artículo 159. La Diputación Permanente durará de unas Cortes ordinarias a otras.

Artículo 160. Las facultades de esta diputación son:

Primera: Velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, para dar cuenta a las próximas Cortes de las infracciones que hayan notado.

Segunda: Convocar a Cortes extraordinarias en los casos prescritos por la Constitución.

Tercera: Desempeñar las funciones que se señalan en los artículos III y II2.

Cuarta: Pasar aviso a los diputados suplentes para que concurran en lugar de los propietarios; y si ocurriere el fallecimiento o imposibilidad absoluta de propietarios y suplentes de una provincia, comunicar las correspondientes órdenes a la misma, para que proceda a nueva elección.

Capítulo XI

De las Cortes Extraordinarias

Artículo 161. Las Cortes extraordinarias se compondrán de los mismos diputados que forman las ordinarias, durante los dos años de su diputación.

Artículo 162. La Diputación Permanente de Cortes las convocará con señalamiento de día en los tres casos siguientes:

Primero: Cuando vacare la Corona.

Segundo: Cuando el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno, o quisiere abdicar la Corona en el sucesor; estando autorizada en el primer caso la diputación para tomar todas las medidas que estime convenientes, a fin de asegurarse de la inhabilidad del Rey.

Tercero: Cuando en circunstancias críticas y por negocios arduos tuviere el Rey por conveniente que se congreguen, y lo participare así a la Diputación Permanente de Cortes.

Artículo 163. Las Cortes extraordinarias no entenderán sino en el objeto para que han sido convocadas.

Artículo 164. Las sesiones de las Cortes extraordinarias comenzarán y se terminarán con las mismas formalidades que las ordinarias.

Artículo 165. La celebración de las Cortes extraordinarias no estorbará la elección de nuevos diputados en el tiempo prescrito.

Artículo 166. Si las Cortes extraordinarias no hubieren concluido sus sesiones en el día señalado para la reunión de las ordinarias, cesarán las primeras en sus funciones, y las ordinarias continuarán el negocio para que aquéllas fueron convocadas.

Artículo 167. La Diputación Permanente de Cortes continuará en las funciones que le están señaladas en los artículos 111 y 112, en el caso comprendido en el artículo precedente.

TÍTULO IV DEL REY

Capítulo I

De la Inviolabilidad del Rey, y de su Autoridad

Artículo 168. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está sujeta a responsabilidad.

Artículo 169. El Rey tendrá el tratamiento de Majestad Católica.

Artículo 170. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente en el Rey, y su autoridad se extiende a todo cuanto conduce a la conservación del orden público en lo interior, y a la seguridad del Estado en lo exterior, conforme a la Constitución y a las leyes.

Artículo 171. Además de la prerrogativa que compete al Rey sancionar las leyes y promulgarlas, le corresponden como principales las facultades siguientes:

Primera: Expedir los decretos, reglamentos e instrucciones que crea conducentes para la ejecución de las leyes.

Segunda: Cuidar de que en todo el reino se administre pronta y cumplidamente la justicia.

Tercera: Declarar la guerra, y hacer y ratificar la paz, dando después cuenta documentada a las Cortes.

Cuarta: Nombrar los magistrados de todos los tribunales civiles y criminales, a propuesta del Consejo de Estado.

Quinta: Proveer todos los empleos civiles y militares.

Sexta: Presentar para todos los obispados, y para todas las dignidades y beneficios eclesiásticos de real patronato, a propuesta del Consejo de Estado.

Séptima: Conceder honores y distinciones de toda clase, con arreglo a las leyes.

Octava: Mandar los ejércitos y armadas, y nombrar los generales.

Novena: Disponer de la fuerza armada, distribuyéndola como más convenga.

Décima: Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales con las demás potencias, y nombrar los embajadores, ministros y cónsules.

Undécima: Cuidar de la fabricación de la moneda, en la que se pondrá su busto y su nombre.

Duodécima: Decretar la inversión de los fondos destinados a cada uno de los ramos de la administración pública.

Decimatercia: Indultar a los delincuentes, con arreglo a las leyes.

Decimacuarta: Hacer a las Cortes las propuestas de leyes o de reformas que crea conducentes al bien de la Nación, para que deliberen en la forma prescrita.

Decimaquinta: Conceder el pase, o retener los decretos conciliares y bulas pontificias con el consentimiento de las Cortes, si contienen disposiciones generales; oyendo al Consejo de Estado, si versan sobre negocios particulares o gubernativos; y si contienen puntos contenciosos, pasando su conocimiento y decisión al Supremo Tribunal de Justicia, para que resuelva con arreglo a las leyes.

Decimasexta: Nombrar y separar libremente los secretarios de Estado y del Despacho.

Artículo 172. Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes:

Primera: No puede el Rey impedir, bajo ningún pretexto, la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderlas ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquiera tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales.

Segunda: No puede el Rey ausentarse del reino sin consentimiento de las Cortes; y si lo hiciere, se entiende que ha abdicado la Corona.

Tercera: No puede el Rey enajenar, ceder, renunciar, o en cualquiera manera traspasar a otro la autoridad real, ni alguna de sus prerrogativas.

Si por cualquiera causa quisiere abdicar el trono en el inmediato sucesor, no lo podrá hacer sin el consentimiento de las Cortes.

Cuarta: No puede el Rey enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español.

Quinta: No puede el Rey hacer alianza ofensiva, ni tratado especial de comercio con ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.

Sexta: No puede tampoco obligarse por ningún tratado a dar subsidios a ninguna potencia extranjera sin el consentimiento de las Cortes.

Séptima: No puede el Rey ceder ni enajenar los bienes nacionales sin consentimiento de las Cortes.

Octava: No puede el Rey imponer por sí directa ni indirectamente contribuciones, ni hacer pedidos bajo cualquier nombre, o para cualquiera objeto que sea, sino que siempre los han de decretar las Cortes.

Novena: No puede el Rey conceder privilegio exclusivo a persona ni corporación alguna.

Décima: No puede el Rey tomar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso y aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario para un objeto de conocida utilidad común tomar la propiedad de un

particular, no lo podrá hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y se le dé el buen cambio a bien vista de hombres buenos.

Undécima: No puede el Rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El Secretario del Despacho que firme la orden, y el juez que la ejecute, serán responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.

Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el Rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o juez competente.

Duodécima: El Rey antes de contraer matrimonio dará parte a las Cortes, para obtener su consentimiento, y si no lo hiciere, entiéndase que abdica la Corona.

Artículo 173. El Rey en su advenimiento al Trono, y si fuere menor, cuando entre a gobernar el reino, prestar juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: *N. (aquí su nombre) por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino: que guardar y hará guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española, no mirando en cuanto hiciere sino al bien y provecho de ella: que no enajenar, ceder ni desmembrar parte alguna del reino: que no exigir jamás cantidad alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubieren decretado las Cortes: que no tomará jamás a nadie su propiedad y que respetar sobre todo la libertad política de la Nación, y la personal de cada individuo: y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser obedecido; antes aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. Así Dios me ayude, y sea en mi defensa; y si no, me lo demande.*

Capítulo II

De la Sucesión de la Corona

Artículo 174. El reino de las Españas es indivisible, y sólo se sucederá en el Trono perpetuamente, desde la promulgación de la Constitución, por el orden regular de primogenitura y representación entre los descendientes legítimos, varones y hembras, de las líneas que se expresarán.

Artículo 175. No pueden ser Reyes de las Españas sino los que sean hijos legítimos, habidos en constante y legítimo matrimonio.

Artículo 176. En el mismo grado y línea los varones prefieren a las hembras y siempre el mayor al menor; pero las hembras de mejor línea o de mejor grado en la misma línea prefieren a los varones de línea o grado posterior.

Artículo 177. El hijo o hija del primogénito del Rey, en el caso de morir su padre sin haber entrado en la sucesión del reino, prefiere a los tíos y sucede inmediatamente al abuelo por derecho de representación.

Artículo 178. Mientras no se extingue la línea en que está radicada la sucesión, no entra la inmediata.

Artículo 179. El Rey de las Españas es el Señor Don Fernando VII de Borbón, que actualmente reina.

Artículo 180. A falta del Señor Don Fernando VII de Borbón, sucederán sus descendientes legítimos, así varones como hembras; a falta de estos sucederán sus hermanos y tíos hermanos de su padre, así varones como hembras, y los descendientes legítimos de estos por el orden que queda prevenido, guardando en todos el derecho de representación y la preferencia de las líneas anteriores a las posteriores.

Artículo 181. Las Cortes deberán excluir de la sucesión aquella persona o personas que sean incapaces para gobernar o hayan hecho cosa por que merezcan perder la Corona.

Artículo 182. Si llegaren a extinguirse todas las líneas que aquí se señalan, las Cortes harán nuevos llamamientos, como vean que más importa a la Nación, siguiendo siempre el orden y reglas de suceder aquí establecidas.

Artículo 183. Cuando la Corona haya de recaer inmediatamente o haya recaído en hembra, no podrá ésta elegir marido sin consentimiento de las Cortes; y si lo contrario hiciere, se entiende que abdica la Corona.

Artículo 184. En el caso de que llegue a reinar una hembra, su marido no tendrá autoridad ninguna respecto del reino, ni parte alguna en el Gobierno.

Capítulo III

De la Menor Edad del Rey, y de la Regencia

Artículo 185. El Rey es menor de edad hasta los dieciocho años cumplidos.

Artículo 186. Durante la menor edad del Rey será gobernado el reino por una Regencia.

Artículo 187. Lo será igualmente cuando el Rey se halle imposibilitado de ejercer su autoridad por cualquiera causa física o moral.

Artículo 188. Si el impedimento del Rey pasare de dos años, el sucesor inmediato fuere mayor de dieciocho, las Cortes podrán nombrarle Regente del reino en lugar de la Regencia.

Artículo 189. En los casos en que vacare la Corona, siendo el Príncipe de Asturias menor de edad, hasta que se junten las Cortes extraordinarias, si no se hallaren reunidas las ordinarias, la Regencia Provisional se compondrá de la Reina madre, si la hubiere, de dos diputados de la Diputación Permanente de las Cortes, los más antiguos por orden de su elección en la diputación, y de dos consejeros del Consejo de Estado, los más antiguos, a saber, el decano y el que le siga: si no hubiere Reina madre, entrará en la Regencia el Consejero de Estado tercero en antigüedad.

Artículo 190. La Regencia Provisional será presidida por la Reina madre, si la hubiere; y en su defecto por el individuo de la Diputación Permanente de las Cortes que sea primer nombrado en ella.

Artículo 191. La Regencia Provisional no despachará otros negocios que los que no admitan dilación, y, no renovará ni nombrará empleados sino interinamente.

Artículo 192. Reunidas las Cortes extraordinarias, nombrarán una Regencia compuesta de tres o cinco personas.

Artículo 193. Para poder ser individuo de la Regencia se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos; quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Artículo 194. La Regencia será presidida por aquél de sus individuos que las Cortes designaren; tocando a éstas establecer en caso necesario si ha de haber o no turno en la presidencia, y en qué términos.

Artículo 195. La Regencia ejercerá la autoridad del Rey en los términos que estimen las Cortes.

Artículo 196. Una y otra Regencia prestarán juramento según la fórmula prescrita en el artículo 173, añadiendo la cláusula de que serán fieles al Rey; y la Regencia permanente añadirá además, que observará las condiciones que le hubieren impuesto las Cortes para el ejercicio de su autoridad, que cuando llegue el Rey a ser mayor, o cese la imposibilidad, le entregará el gobierno del reino bajo la pena, si un momento lo dilata, de ser sus individuos habidos y castigados como traidores.

Artículo 197. Todos los actos de la Regencia se publicarán en nombre del Rey.

Artículo 198. Será tutor del Rey menor la persona que el Rey difunto hubiere nombrado en su testamento. Si no le hubiere nombrado, será tutora la Reina madre, mientras permanezca viuda. En su defecto será nombrado el tutor por las Cortes. En el primero y tercer caso el tutor deberá ser natural del reino.

Artículo 199. La Regencia cuidará de que la educación del Rey menor sea la más conveniente al grande objeto de su alta dignidad, y que se desempeñe conforme al plan que aprobaren las Cortes.

Artículo 200. Éstas señalarán el sueldo que hayan de gozar los individuos de la Regencia.

Capítulo IV

De la Familia Real, y del Reconocimiento del Príncipe de Asturias

Artículo 201. El hijo primogénito del Rey se titulará Príncipe de Asturias.

Artículo 202. Los demás hijos e hijas del Rey serán y se llamarán Infantes de las Españas.

Artículo 203. Asimismo serán y se llamarán Infantes de las Españas los hijos e hijas del Príncipe de Asturias.

Artículo 204. A estas personas precisamente estará limitada la calidad de Infante de las Españas, sin que pueda extenderse a otras.

Artículo 205. Los Infantes de las Españas gozarán de las distinciones y honores que han tenido hasta aquí, y podrán ser nombrados para toda clase de destinos, exceptuados los de judicatura y la diputación de Cortes.

Artículo 206. El Príncipe de Asturias no podrá salir del reino sin consentimiento de las Cortes; y si saliere sin él, quedará por el mismo hecho excluido del llamamiento a la Corona.

Artículo 207. Lo mismo se entenderá permaneciendo fuera del reino por más tiempo que el prefijado en el permiso, si requerido para que vuelva no lo verificase dentro del término que las Cortes señalen.

Artículo 208. El Príncipe de Asturias, los Infantes e Infantas, y sus hijos y descendientes que sean súbditos del Rey no podrán contraer matrimonio sin su consentimiento y el de las Cortes, bajo la pena de ser excluidos del llamamiento a la Corona.

Artículo 209. De las partidas de nacimiento, matrimonio y muerte de todas las personas de la familia Real se remitirá una copia auténtica a las Cortes, y en su defecto a la Diputación Permanente, para que se custodie en su archivo.

Artículo 210. El Príncipe de Asturias será reconocido por las Cortes con las formalidades que prevendrá el reglamento del gobierno interior de ellas.

Artículo 211. Este reconocimiento se hará en las primeras Cortes que se celebren después de su nacimiento.

Artículo 212. El Príncipe de Asturias, llegando a la edad de catorce años, prestará juramento ante las Cortes bajo la fórmula siguiente: *N. (aquí el nombre), Príncipe de Asturias, juro por Dios y por los Santos Evangelios, que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el reino; que guardaré la Constitución Política de la Monarquía española, y que seré fiel y obediente al Rey. Así Dios me ayude.*

Capítulo V

De la Dotación de la Familia Real

Artículo 213. Las Cortes señalarán al Rey la dotación anual de su casa, que sea correspondiente a la alta dignidad de su persona.

Artículo 214. Pertenecen al Rey todos los palacios reales que han disfrutado sus predecesores, y las Cortes señalarán los terrenos que tengan por conveniente reservar para el recreo de su persona.

Artículo 215. Al Príncipe de Asturias desde el día de su nacimiento, y a los Infantes e Infantas desde que cumplan siete años de edad, se asignará por las Cortes para su alimento la cantidad anual correspondiente a su respectiva dignidad.

Artículo 216. A las Infantas, para cuando casaren, señalarán las Cortes la cantidad que estimen en calidad de dote, y entregada ésta, cesarán los alimentos anuales.

Artículo 217. A los Infantes, si casaren mientras residan en las Españas, se les continuarán los alimentos que les están asignados; y si casaren y residieren fuera, cesarán los alimentos, y se les entregará por una vez la cantidad que las Cortes señalen.

Artículo 218. Las Cortes señalarán los alimentos anuales que hayan de darse a la Reina viuda.

Artículo 219. Los sueldos de los individuos de la Regencia se tomarán de la dotación señalada a la casa del Rey.

Artículo 220. La dotación de la casa del Rey y los alimentos de su familia, de que hablan los artículos precedentes, se señalarán por las Cortes al principio de cada reinado, y no se podrán alterar durante él.

Artículo 221. Todas estas asignaciones son de cuenta de la Tesorería Nacional, por la que serán satisfechas al administrador que el Rey nombrare, con el cual se entenderán las acciones activas y pasivas, que por razón de intereses puedan promoverse.

Capítulo VI

De los Secretarios de Estado y del Despacho

Artículo 222. Los secretarios del Despacho serán siete, a saber: El Secretario del Despacho de Estado.

El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para la Península e Islas adyacentes.

El Secretario del Despacho de la Gobernación del Reino para Ultramar.

El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia. El Secretario del Despacho de Hacienda.

El Secretario del Despacho de Guerra. El Secretario del Despacho de Marina.

Las Cortes sucesivas harán en este sistema de secretarías del despacho la variación que la experiencia o las circunstancias exijan.

Artículo 223. Para ser Secretario del Despacho se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Artículo 224. Por un reglamento particular aprobado por las Cortes se señalarán a cada secretaría los negocios que deban pertenecerle.

Artículo 225. Todas las órdenes del Rey deberán ir firmadas por el Secretario del Despacho del ramo a que el asunto corresponda.

Ningún tribunal ni persona pública dará cumplimiento a la orden que carezca de este requisito.

Artículo 226. Los secretarios del Despacho serán responsables a las Cortes de las órdenes que autoricen contra la Constitución o las leyes, sin que les sirva de excusa haberlo mandado el Rey.

Artículo 227. Los secretarios del Despacho formarán los presupuestos anuales de los gastos de la administración pública, que se estime deban hacerse por su respectivo ramo, y rendirán cuentas de los que se hubieren hecho, en el modo que se expresare.

Artículo 228. Para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios del Despacho, decretarán ante todas las Cortes que ha lugar a la formación de causa.

Artículo 229. Dado este decreto, quedará suspenso el Secretario del Despacho; y las Cortes remitirán al Tribunal Supremo de Justicia todos los documentos concernientes a la causa que haya de formarse por el mismo tribunal, quien la sustanciará y decidirá con arreglo a las leyes.

Artículo 230. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los secretarios del Despacho durante su encargo.

Capítulo VII

Del Consejo de Estado

Artículo 231. Habrá un Consejo de Estado compuesto de cuarenta individuos, que sean ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, quedando excluidos los extranjeros, aunque tengan carta de ciudadanos.

Artículo 232. Estos serán precisamente en la forma siguiente, a saber: cuatro eclesiásticos, y no más, de conocida y probada ilustración y merecimiento, de los cuales dos serán obispos; cuatro Grandes de España, y no más, adornados de las virtudes, talento y conocimientos necesarios; y los restantes serán elegidos de entre los sujetos que más se hayan distinguido por su ilustración y conocimientos, o por sus señalados servicios en alguno de los principales ramos de la administración y gobierno del Estado. Las Cortes no podrán proponer para estas plazas a ningún individuo que sea diputado de Cortes al tiempo de hacerse la elección. De los individuos del Consejo de Estado, doce a lo menos serán nacidos en las provincias de Ultramar.

Artículo 233. Todos los consejeros de Estado serán nombrados por el Rey a propuesta de las Cortes.

Artículo 234. Para la formación de este Consejo se dispondrá en las Cortes una lista triple de todas las clases referidas en la proporción indicada, de la cual el Rey elegirá los cuarenta individuos que han de componer el Consejo de Estado, tomando los eclesiásticos de la lista de su clase, los Grandes de la suya, y así los demás.

Artículo 235. Cuando ocurriere alguna vacante en el Consejo de Estado, las Cortes primeras que se celebren presentarán al Rey tres personas de la clase en que se hubiere verificado, para que elija la que le pareciere.

Artículo 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra, y hacer los tratados.

Artículo 237. Pertenecerá a este Consejo hacer al Rey la propuesta por ternas para la presentación de todos los beneficios eclesiásticos, y para la provisión de las plazas de judicatura.

Artículo 238. El Rey formará un reglamento para el gobierno del Consejo de Estado, oyendo previamente al mismo; y se presentará a las Cortes para su aprobación.

Artículo 239. Los consejeros de Estado no podrán ser removidos sin causa justificada ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 240. Las Cortes señalarán el sueldo que deban gozar los consejeros de Estado.

Artículo 241. Los consejeros de Estado, al tomar posesión de sus plazas, harán, en manos del Rey juramento de guardar la Constitución, ser fieles al Rey, y aconsejarle

lo que entendieren ser conducente al bien de la Nación, sin mira particular ni interés privado.

TÍTULO V DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LO CIVIL Y CRIMINAL

Capítulo I *De los Tribunales*

Artículo 242. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales.

Artículo 243. Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos.

Artículo 244. Las leyes señalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes en todos los tribunales: y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.

Artículo 245. Los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.

Artículo 246. Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia.

Artículo 247. Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el tribunal competente, determinado con anterioridad por la ley.

Artículo 248. En los negocios comunes, civiles y criminales, no habrá más que un sólo fuero para toda clase de personas.

Artículo 249. Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su Estado, en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren.

Artículo 250. Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere.

Artículo 251. Para ser nombrado magistrado o juez se requiere haber nacido en el territorio español, y ser mayor de veinticinco años. Las demás calidades que respectivamente deban estos tener, serán determinadas por las leyes.

Artículo 252. Los magistrados y jueces no podrán ser depuestos de sus destinos, sean temporales o perpetuos, sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada.

Artículo 253. Si al Rey llegaren quejas contra algún magistrado, y formado expediente, parecieren fundadas, podrá, oído el Consejo de Estado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para que juzgue con arreglo a las leyes.

Artículo 254. Toda falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente a los jueces que la cometieren.

Artículo 255. El soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces, producen acción popular contra los que los cometan.

Artículo 256. Las Cortes señalarán a los magistrados y jueces de letras una dotación competente.

Artículo 257. La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los tribunales superiores se encabezarán también en su nombre.

Artículo 258. El Código Civil y Criminal y el de Comercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin perjuicio de las variaciones que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes.

Artículo 259. Habrá en la Corte un tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 260. Las Cortes determinarán el número de magistrados que han de componerle, y las salas en que han de distribuirse.

Artículo 261. Toca a este Supremo Tribunal:

Primero: Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audiencias con los tribunales especiales que existan en la Península e Islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán éstas últimas según lo determinaren las leyes.

Segundo: Juzgar a los secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causa.

Tercero: Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias.

Cuarto: Conocer de las causas criminales de los secretarios de Estado y del Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las audiencias, perteneciendo al jefe político más autorizado la instrucción del proceso para remitirlo a este tribunal.

Quinto: Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la formalidad establecida en el artículo 228, procederán a nombrar para este fin un tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número doble.

Sexto: Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a ella por disposición de las leyes.

Séptimo: Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al real patronato.

Octavo: Conocer de los recursos de fuerza de todos los tribunales eclesiásticos superiores de la Corte.

Noveno: Conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254. Por lo relativo

a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las audiencias en la forma que se dirá en su lugar.

Décimo: Oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que promueva la conveniente declaración en las Cortes.

Undécimo: Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben remitirle las audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar copia de ellas para el mismo efecto al gobierno, y disponer su publicación por medio de la imprenta.

Artículo 262. Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada audiencia.

Artículo 263. Pertenecerá a las audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgados inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan las leyes, dando cuenta al Rey.

Artículo 264. Los magistrados que hubieren fallado en la segunda instancia, no podrán asistir a la vista del mismo pleito en la tercera.

Artículo 265. Pertenecerá también a las audiencias conocer de las competencias entre todos los jueces subalternos de su territorio.

Artículo 266. Les pertenecerá asimismo conocer de los recursos de fuerza que se introduzcan, de los tribunales y autoridades eclesiásticas de su territorio.

Artículo 267. Les corresponderá también recibir de todos los jueces subalternos de su territorio, avisos puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de promover la más pronta administración de justicia.

Artículo 268. A las audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos de nulidad, debiendo estos interponerse, en aquellas audiencias que tengan suficiente número para la formación de tres salas, en la que no haya conocido de la causa en ninguna instancia. En las audiencias que no consten de este número de ministros, se interpondrán estos recursos de una a otra de las comprendidas en el distrito de una misma gobernación superior; y en el caso de que en éste no hubiere más que una audiencia irán a la más inmediata de otro distrito.

Artículo 269. Declarada la nulidad, la audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de Justicia para hacer efectiva la responsabilidad de que trata el artículo 254.

Artículo 270. Las audiencias remitirán cada año al Supremo Tribunal de Justicia listas exactas de las causas civiles, y cada seis meses de las criminales, así fenecidas como pendientes, con expresión del estado que éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los juzgados inferiores.

Artículo 271. Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados de las audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos tribunales, y el lugar de su residencia.

Artículo 272. Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio español, indicada en el artículo II, se determinará con respecto a ella el número de audiencias que han de establecerse, y se les señalará territorio.

Artículo 273. Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido habrá un juez de letras con un juzgado correspondiente.

Artículo 274. Las facultades de estos jueces se limitarán precisamente a lo contencioso, y las leyes determinarán las que han de pertenecerles en la capital y pueblos de su partido, como también hasta de qué cantidad podrán conocer en los negocios civiles sin apelación.

Artículo 275. En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes determinarán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico.

Artículo 276. Todos los jueces de los tribunales inferiores deberán dar cuenta, a más tardar dentro del tercer día, a su respectiva audiencia, de las causas que se formen por delitos cometidos en su territorio, y después continuarán dando cuenta de su estado en las pocas que la audiencia les prescriba.

Artículo 277. Deberán asimismo remitir a la audiencia respectiva listas generales cada seis meses de las causas civiles, y cada tres de las criminales, que pendieren en sus juzgados, con expresión de su estado.

Artículo 278. Las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios.

Artículo 279. Los magistrados y jueces al tomar posesión de sus plazas jurarán guardar la Constitución, ser fieles al Rey, observar las leyes y administrar imparcialmente la justicia.

Capítulo II

De la administración de Justicia en lo Civil

Artículo 280. No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes.

Artículo 281. La sentencia que dieren los árbitros, se ejecutará, si las partes al hacer el compromiso no se hubieren reservado el derecho de apelar.

Artículo 282. El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.

Artículo 283. El alcalde con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente apoyen su intención, y tomará, oído el dictamen de los dos asociados, la providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin mas progresos, como se terminará en efecto, si las partes se aquietan con esta decisión extrajudicial.

Artículo 284. Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación, no se entablará pleito ninguno.

Artículo 285. En todo negocio, cualquiera que sea su cuantía, habrá a lo más tres instancias y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el que asista a la vista de la segunda, en la forma que lo disponga la Ley. A ésta toca también determinar, atendida la entidad de los negocios, y la naturaleza, y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en cada uno deba causar ejecutoria.

Capítulo III

De la Administración de Justicia en lo Criminal

Artículo 286. Las leyes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea formado con brevedad, y sin vicios, a fin de que los delitos sean prontamente castigados.

Artículo 287. Ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por el que merezca según la ley ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará en el acto mismo de la prisión.

Artículo 288. Toda persona deberá obedecer estos mandamientos: cualquiera resistencia será reputada delito grave.

Artículo 289. Cuando hubiere resistencia o se temiere la fuga, se podrá usar de la fuerza para asegurar la persona.

Artículo 290. El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez, siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba declaración; más si esto no pudiere verificarse, se le conducirá a la cárcel en calidad de detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 291. La declaración del arrestado será sin juramento, que a nadie ha de tomarse en materias criminales sobre hecho propio.

Artículo 292. En fraganti todo delincuente puede ser arrestado, y todos pueden arrestarle y conducirlo a la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo, como se previene en los dos artículos precedentes.

Artículo 293. Si se resolviera que al arrestado se le ponga en la cárcel, o que permanezca en ella en calidad de preso, se proveerá auto motivado, y de él se entregará copia al alcaide, para que la inserte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningún preso en calidad de tal, bajo la más estrecha responsabilidad.

Artículo 294. Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporción a la cantidad a que ésta pueda extenderse.

Artículo 295. No será llevado a la cárcel el que de fiador en los casos en que la Ley no prohiba expresamente que se admita la fianza.

Artículo 296. En cualquier estado de la causa que aparezca que no puede imponerse al preso pena corporal, se le pondrá en libertad, dando fianza.

Artículo 297. Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y no para molestar a los presos: así el alcaide tendrá a estos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos.

Artículo 298. La ley determinará la frecuencia con que ha de hacerse la visita de cárceles, y no habrá preso alguno que deje de presentarse a ella bajo ningún pretexto.

Artículo 299. El juez y el alcaide que faltaren a lo dispuesto en los artículos precedentes, serán castigados como reos de detención arbitraria. La que será comprendida como delito en el código criminal.

Artículo 300. Dentro de las veinticuatro horas se manifestará al tratado como reo la causa de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere.

Artículo 301. Al tomar la confesión al tratado como reo, se le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nombres de estos; y si por ellos no los conociere, se le darán cuantas noticias pida para venir en conocimiento de quiénes son.

Artículo 302. El proceso de allí en adelante será público en el modo y forma que determinen las leyes.

Artículo 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios.

Artículo 304. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Artículo 305. Ninguna pena que se imponga por cualquier delito que sea, ha de ser trascendental por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto precisamente sobre el que la merecía.

Artículo 306. No podrá ser allanada la casa de ningún español sino en los casos que determine la Ley para el buen orden y seguridad del Estado.

Artículo 307. Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho la establecerán en la forma que juzguen conducente.

Artículo 308. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del Estado exigiese, en toda la Monarquía o en parte de ella la suspensión de algunas de las formalidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes, podrán las Cortes decretarla por un tiempo determinado.

TÍTULO VI
DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS
Y DE LOS PUEBLOS

Capítulo I

De los Ayuntamientos

Artículo 309. Para el gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos, compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe político, donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado entre estos, si hubiere dos.

Artículo 310. Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil almas, y también se les señalará término correspondiente.

Artículo 311. Las leyes determinarán el número de individuos de cada clase de que han de componerse los ayuntamientos de los pueblos con respecto a su vecindario.

Artículo 312. Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los ayuntamientos, cualquiera que sea su título y denominación.

Artículo 313. Todos los años en el mes de diciembre se reunirán los ciudadanos de cada pueblo para elegir a pluralidad de votos, con proporción a su vecindario, determinado número de electores, que residan en el mismo pueblo y estén en el ejercicio de los derechos de ciudadano.

Artículo 314. Los electores nombrarán en el mismo mes a pluralidad absoluta de votos el alcalde o alcaldes, regidores, y procurador o procuradores síndicos, para que entren a ejercer sus cargos el primero de enero del siguiente año.

Artículo 315. Los alcaldes se mudarán todos los años, los regidores por mitad cada año, y lo mismo los procuradores síndicos donde haya dos: si hubiere sólo uno se mudará todos los años.

Artículo 316. El que hubiere ejercido cualquiera de estos cargos, no podrá volver a ser elegido para ninguno de ellos sin que pasen por lo menos dos años, donde el vecindario lo permita.

Artículo 317. Para ser alcalde, regidor o procurador síndico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, se requiere ser mayor de veinticinco años, con cinco a lo menos de vecindad y residencia en el pueblo. Las leyes determinarán las demás calidades que han de tener estos empleados.

Artículo 318. No podrá ser alcalde, regidor ni procurador síndico ningún empleado público de nombramiento del Rey, que esté en ejercicio, no entendiéndose comprendidos en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales.

Artículo 319. Todos los empleos municipales referidos serán carga concejil, de que nadie podrá excusarse sin causa legal.

Artículo 320. Habrá un Secretario en todo Ayuntamiento, elegido por éste a pluralidad absoluta de votos, y dotado de los fondos del común.

Artículo 321. Estará a cargo de los ayuntamientos:

Primero: La policía de salubridad y comodidad.

Segundo: Auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público.

Tercero: La administración e inversión de los caudales de propios y arbitrios conforme a las leyes y reglamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo responsabilidad de los que le nombran.

Cuarto: Hacer el repartimiento y recaudación de las contribuciones, y remitirlas a la tesorería respectiva.

Quinto: Cuidar de todas las escuelas de primeras letras, y de los demás establecimientos que se paguen de los fondos del común.

Sexto: Cuidar de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos de beneficencia, bajo las reglas que se prescriban.

Séptimo: Cuidar de la construcción y reparación de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del común, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato.

Octavo: Formar las ordenanzas municipales del pueblo, y presentarlas a las Cortes para su aprobación por medio de la diputación provincial, que las acompañará con su informe.

Noveno: Promover la agricultura, la industria y el comercio según la localidad y circunstancias de los pueblos, y cuanto les sea útil y beneficioso.

Artículo 322. Si se ofrecieren obras u otros objetos de utilidad común, y por no ser suficientes los caudales de propios fuere necesario recurrir a arbitrios, no podrán imponerse estos, sino obteniendo por medio de la diputación provincial la aprobación de las Cortes. En el caso de ser urgente la obra u objeto a que se destinen, podrán los ayuntamientos usar interinamente de ellos con el consentimiento de la misma diputación, mientras recae la resolución de las Cortes. Estos arbitrios se administrarán en todo como los caudales de propios.

Artículo 323. Los Ayuntamientos desempeñarán todos estos encargos bajo la inspección de la diputación provincial, a quien rendirán cuenta justificada cada año de los caudales públicos que hayan recaudado e invertido.

Capítulo II

Del Gobierno Político de las Provincias, y de las Diputaciones Provinciales

Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el Jefe Superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas.

Artículo 325. En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el Jefe Superior.

Artículo 326. Se compondrá esta diputación del Presidente, del Intendente y de siete individuos elegidos en la forma que se dirá, sin perjuicio de que las Cortes en lo sucesivo varíen este número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, hecha que sea la nueva división de provincias de que trata el artículo 11.

Artículo 327. La diputación provincial se renovará cada dos años por mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la segunda el menor, y así sucesivamente.

Artículo 328. La elección de estos individuos se hará por electores de partido al otro día de haber nombrado los diputados de Cortes, por el mismo orden con que estos se nombran.

Artículo 329. Al mismo tiempo y en la misma forma se elegirán tres suplentes para cada diputación.

Artículo 330. Para ser individuo de la diputación provincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, natural o vecino de la provincia con residencia a lo menos de siete años, y que tenga lo suficiente para mantenerse con decencia; y no podrá serlo ninguno de los empleados de nombramiento del Rey, de que trata el artículo 318.

Artículo 331. Para que una misma persona pueda ser elegida por segunda vez, deberá haber pasado, a lo menos el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones.

Artículo 332. Cuando el Jefe Superior de la provincia no pudiere presidir la diputación, la presidirá el Intendente, y en su defecto el vocal que fuere primer nombrado.

Artículo 333. La diputación nombrará un secretario, dotado de los fondos públicos de la provincia.

Artículo 334. Tendrá la diputación en cada año a lo más noventa días de sesiones distribuidas en las épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el primero de marzo, y en Ultramar para el primero de junio.

Artículo 335. Tocarà a estas diputaciones:

Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia.

Segundo: Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.

Tercero: Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos, donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido en el artículo 310.

Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes.

En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la solución de las Cortes, podrá la diputación con expreso asenso del jefe de la provincia usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes.

Para la recaudación de los arbitrios la diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la diputación, se remitirán al gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para su aprobación.

Quinto: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.

Sexto: Dar parte al gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas.

Séptimo: Formar el censo y la estadística de las provincias.

Octavo: Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.

Noveno: Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia.

Décimo: Las diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten los abusos: todo lo que las diputaciones pondrán en noticia del gobierno.

Artículo 336. Si alguna diputación abusare de sus facultades, podrá el Rey suspender a los vocales que la componen, dando parte a las Cortes de esta disposición y de los motivos de ella para la determinación que corresponda: durante la suspensión entrarán en funciones los suplentes.

Artículo 337. Todos los individuos de los Ayuntamientos y de las diputaciones de provincia, al entrar en el ejercicio de sus funciones, prestarán juramento, aquéllos en manos del Jefe Político, donde le hubiere, o en su defecto el alcalde que fuere primer nombrado, y estos en las del Jefe Superior de la Provincia, de guardar la Constitución Política de la Monarquía Española, observar las leyes y ser fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaciones de su cargo.

TÍTULO VII DE LAS CONTRIBUCIONES

Capítulo Único

Artículo 338. Las Cortes establecerán o confirmarán anualmente las contribuciones, sean directas o indirectas, generales, provinciales o municipales, subsistiendo las antiguas, hasta que se publique su derogación o la imposición de otras.

Artículo 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno.

Artículo 340. Las contribuciones serán proporcionales a los gastos que se decreten por las Cortes para el servicio público en todos los ramos.

Artículo 341. Para que las Cortes puedan fijar los gastos en todos los ramos del servicio público, y las contribuciones que deban cubrirlos, el Secretario del Despacho de Hacienda las presentará, luego que estén reunidas, el presupuesto general de los que se estimen precisos, recogiendo de cada uno de los demás secretarios del Despacho el respectivo a su ramo.

Artículo 342. El mismo Secretario del Despacho de Hacienda presentará con el presupuesto de gastos, el plan de las contribuciones que deban imponerse para llenarlos.

Artículo 343. Si al Rey pareciere gravosa o perjudicial alguna contribución, lo manifestará a las Cortes por el Secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que crea más conveniente sustituir.

Artículo 344. Fijada la cuota de la contribución directa, las Cortes aprobarán el repartimiento de ella entre las provincias, a cada una de las cuales se asignará el cupo correspondiente a su riqueza, para lo que el Secretario del Despacho de Hacienda presentará también los presupuestos necesarios.

Artículo 345. Habrá una Tesorería General para toda la Nación, a la que tocará disponer de todos los productos de cualquiera renta destinada al servicio del Estado.

Artículo 346. Habrá en cada provincia una tesorería, en la que entrarán todos los caudales que en ella se recauden para el erario público. Estas tesorerías estarán en correspondencia con la general, a cuya disposición tendrán todos sus fondos.

Artículo 347. Ningún pago se admitirá en cuenta al tesorero general, si no se hiciere en virtud de decreto del Rey, refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda, en el que se expresen el gasto a que se destina su importe y el decreto de las Cortes con que éste se autoriza.

Artículo 348. Para que la Tesorería General lleve su cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data deberán ser intervenidos respectivamente por las contadorías de valores y de distribución de la renta pública.

Artículo 349. Una instrucción particular arreglará estas oficinas, de manera que sirvan para los fines de su instituto.

Artículo 350. Para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá una contadoría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial.

Artículo 351. La cuenta de la Tesorería General, que comprenderá el rendimiento anual de todas las contribuciones y rentas y su inversión, luego que reciba la aprobación final de las Cortes, se imprimirá, publicará y circulará a las diputaciones de provincia y a los ayuntamientos.

Artículo 352. Del mismo modo se imprimirán, publicarán y circularán las cuentas que rindan los secretarios del Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos.

Artículo 353. El manejo de la Hacienda Pública estará siempre independiente de toda otra autoridad que aquella a la que está encomendado.

Artículo 354. No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen.

Artículo 355. La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue, arreglando todo lo concerniente a la dirección de este importante ramo, tanto respecto a los arbitrios que se establecieren, los cuales se manejarán con absoluta separación de la Tesorería General, como respecto a las oficinas de cuenta y razón.

TÍTULO VIII DE LA FUERZA MILITAR NACIONAL

Capítulo I

De las Tropas de Continuo Servicio

Artículo 356. Habrá una fuerza militar nacional permanente, de tierra y de mar, para la defensa exterior del Estado y la conservación del orden interior.

Artículo 357. Las Cortes fijarán anualmente el número de tropas que fueren necesarias según las circunstancias y el modo de levantar las que fuere más conveniente.

Artículo 358. Las Cortes fijarán asimismo anualmente el número de buques de la marina militar que han de armarse o conservarse armados.

Artículo 359. Establecerán las Cortes por medio de las respectivas ordenanzas todo lo relativo a la disciplina, orden de ascensos, sueldos, administración y cuanto corresponda a la buena constitución del ejército y armada.

Artículo 360. Se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las diferentes armas del ejército y armada.

Artículo 361. Ningún español podrá excusarse del servicio militar, cuando y en la forma que fuere llamado por la ley.

Capítulo II

De las Milicias Nacionales

Artículo 362. Habrá en cada provincia cuerpos de milicias nacionales, compuestos de habitantes de cada una de ellas, con proporción a su población y circunstancias.

Artículo 363. Se arreglarán por una ordenanza particular el modo de su formación, su número y especial constitución en todos sus ramos.

Artículo 364. El servicio de estas milicias no será continuo, y sólo tendrá lugar cuando las circunstancias lo requieran.

Artículo 365. En caso necesario podrá el Rey disponer de esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no podrá emplearla fuera de ella sin otorgamiento de las Cortes.

TÍTULO IX DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Capítulo Único

Artículo 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles.

Artículo 367. Asimismo se arreglará y creará el número competente de universidades y de otros establecimientos de instrucción, que se juzguen convenientes para la enseñanza de todas las ciencias, literatura y bellas artes.

Artículo 368. El plan general de enseñanza será uniforme en todo el reino, debiendo explicarse la Constitución Política de la Monarquía en todas las universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas.

Artículo 369. Habrá una dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del gobierno, la inspección de la enseñanza pública.

Artículo 370. Las Cortes por medio de planes y estatutos especiales arreglarán cuanto pertenezca al importante objeto de la instrucción pública.

Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

TÍTULO X DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN Y MODO DE PROCEDER PARA HACER VARIACIONES EN ELLA

Capítulo Único

Artículo 372. Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución, que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contraído a ella.

Artículo 373. Todo español tiene derecho a presentarse a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución.

Artículo 374. Toda persona que ejerza cargo público, civil, militar o eclesiástico, prestará juramento, al tomar posesión de su destino, de guardar la Constitución, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su encargo.

Artículo 375. Hasta pasados ocho días después de hallarse puesta en práctica la Constitución en todas sus partes, no se podrá proponer alteración, adición ni reforma en ninguno de sus artículos.

Artículo 376. Para hacer cualquiera alteración, adición o reforma en la Constitución, será necesario que la Diputación que haya de decretarla definitivamente venga autorizada con poderes especiales para este objeto.

Artículo 377. Cualquiera proposición de reforma en algún artículo de la Constitución deberá hacerse por escrito, y será apoyada y firmada a lo menos por veinte diputados.

Artículo 378. La proposición de reforma se leerá por tres veces, con el intervalo de seis días de una a otra lectura; y después de la tercera se deliberará si ha lugar a admitirla a discusión.

Artículo 379. Admitida la discusión, se procederá en ella bajo las mismas formalidades y trámites que se prescriben para la formación de las leyes, después de los cuales se propondrá a la votación si ha lugar a tratarse de nuevo en la siguiente diputación general; y para que así quede declarado, deberán convenir las dos terceras partes de los votos.

Artículo 380. La diputación general siguiente, previas las mismas formalidades en todas sus partes, podrá declarar en cualquiera de los dos años de sus sesiones, conviniendo en ello las dos terceras partes de votos, que ha lugar al otorgamiento de poderes especiales para hacer la reforma.

Artículo 381. Hecha esta declaración, se publicará y comunicará a todas las provincias; y según el tiempo en que se hubiere hecho, determinarán las Cortes si ha de ser la Diputación próximamente inmediata o la siguiente a ésta, la que ha de traer los poderes especiales.

Artículo 382. Estos serán otorgados por las Juntas Electorales de Provincia, añadiendo a los poderes ordinarios la cláusula siguiente:

Asimismo, les otorgan poder especial para hacer en la Constitución la reforma de que trata el decreto de las Cortes, cuyo tenor es el siguiente: (aquí el decreto literal). Todo con arreglo a lo prevenido por la misma Constitución. Y se obligan a reconocer y tener por constitucional lo que en su virtud establecieren.

Artículo 383. La reforma propuesta se discutirá de nuevo; y si fuere aprobada por las dos terceras partes de diputados, pasará a ser ley constitucional, y como tal se publicará en las Cortes.

Artículo 384. Una diputación presentará el decreto de reforma al Rey, para que le haga publicar y circular a todas las autoridades y pueblos de la Monarquía.

Cádiz, España, dieciocho de marzo del año mil ochocientos doce.

EXTRACT OF SPANISH CONSTITUTION OF CADIZ

TITLE I NATION'S SPANISH AND SPANISH

Chapter One *Of the Spanish Nation*

Article 1. Spanish Nation.

Article 2. Freedom and independence of the Spanish Nation.

Article 3. Sovereignty.

Article 4. Obligation to the nation in protecting individual rights.

Chapter Two *In the Spanish*

Article 5. Spanish Nationality.

Article 6. Love of country.

Article 7. Fidelity to the Spanish Constitution.

Article 8. Obligation of contributions to public spending.

Article 9. Obligation to defend the homeland.

TITLE I LAND OF SPAIN, IT'S RELIGION AND GOVERNMENT THE SPANISH CITIES

Chapter One *The territory of Spain*

Article 10. Spanish territory

Article 11. Division of Spanish Territory.

Chapter Two

Of Religion

Article 12. Official religion of the Spanish Nation.

Chapter Three

Government

Article 13. Object of government.

Article 14. Form of government.

Article 15. Power to create laws.

Article 16. Authority on Law enforcement.

Article 17. Authority on Law application.

Chapter Four

Article 18. Spanish citizenship.

Article 19. Citizenship of foreigners.

Article 20. Obtaining citizenship for foreigners.

Article 21. Citizenship of the legitimate children of foreigners.

Article 22. Opportunity and merit for the quality of Spanish citizen.

Article 23. School of Spanish citizens to obtain city jobs.

Article 24. Causes of loss of quality Spanish citizen.

Article 25. Suspension of the exercise of rights.

Article 26. Grounds for suspension or loss of rights of Spanish citizens.

TITLE III

THE COURTS

Chapter One

Of the Constitution of the Courts

Article 27. Courts.

Article 28. Basis for proportional representation.

Article 29. Population.

Article 30. Appointment of the population.

Article 31. Composition of the population.

Article 32. Distribution of the population.

Article 33. Organization of the population.

Chapter Two

The appointment of Deputies of the Parliament

Article 34. Election of Deputies.

Chapter Three

Of the Electoral Commissions of the Parish

Article 35. Composition of the Electoral Commissions of the Parish.

Article 36. Celebration of the Boards in the Peninsula, adjacent islands and possessions.

Article 37. Celebration of the Boards in the provinces of Ultramar.

Article 38. Appointment of Parish Elector.

Article 39. Population base for the appointment of Voters Parish.

Article 40. Appointment of Parish Voters in small towns.

Article 41. Election of delegates by the Vestry.

Article 42. Number of delegates chosen by reference to the number of Voters Parish.

Article 43. Election of delegates in small populations.

Article 44. Number of Voters Parish in relation to the number of delegates in small populations.

Article 45. Eligibility requirements for the position of Elector Parish.

Article 46. Contained in the incumbent President of the Electoral Commissions.

Article 47. Opening Ceremony of the Board.

Article 48. Beginning of the Board with the appointment of Tellers and the Secretary.

Article 49. Previous complaints by citizens.

Article 50. Resolution of doubts about the election.

Article 51. Election of delegates.

Article 52. Publication of results of elections of the delegates.

Article 53. Conference of electors for the election of Voters Parish.

Article 54. Signing the minutes of the new appointments.

Article 55. Prohibition to excuse himself from the charges mentioned above.

Article 56. Handgun ban in the Vestry.

Article 57. Dissolution of the board.

Article 58. Closing Ceremony of the Board.

Chapter Four

Electoral Boards Party

Article 59. Composition of the Electoral Commissions of the Party.

Article 60. Celebration of the Boards in the Peninsula, adjacent islands and possessions.

Article 61. Celebration of the Boards in the provinces of Ultramar.

Article 62. Knowledge of the number of voters.

Article 63. Total number of voters.

Article 64. Appointment of Representatives of the parties by province.

Article 65. Number of voters in relation to the number of matches.

Article 66. Determination of the number of Deputies census by province.

Article 67. Contained in the incumbent President of the Electoral Commissions.

Article 68. Appointment of scrutineers and the secretary of the board.
Article 69. Presentation and review of certifications of appointments.
Article 70. Read reports about certifications.
Article 71. Opening Ceremony of the Board.
Article 72. Previous complaints by citizens.
Article 73. Election of the office of Elector of the Party.
Article 74. Regulation and election results.
Article 75. Eligibility requirements for the position of Elector of the Party.
Article 76. Signing the minutes of the new appointments.
Article 77. Compliance and enforcement on the Boards of Party, as applicable to the Electoral Boards.

Chapter Five
Of the Electoral Province

Article 78. Composition of the Electoral Province.
Article 79. Celebration of the Boards in the Peninsula, adjacent islands and possessions.
Article 80. Celebration of the Boards in the provinces of Ultramar.
Article 81. Contained in the incumbent President of the Boards.
Article 82. Appointment of secretary and tellers.
Article 83. Appointment of Deputies per Province in relation to number of inhabitants.
Article 84. Presentation and review of certifications of appointments.
Article 85. Read reports about certifications.
Article 86. Opening Ceremony of the Board.
Article 87. Period of citizen complaints.
Article 88. Election of the office of deputy.
Article 89. Regulation and election results.
Article 90. Election of Deputies by Solemn.
Article 91. Eligibility requirements for the position of deputy of the Courts.
Article 92. Purchasing power of Deputies from possessions.
Article 93. Validity of the foregoing provision.
Article 94. Keep the election because of neighborhood.
Article 95. Inability of certain positions to be elected deputies of the Cortes.
Article 96. Inability of foreigners to enter the office of deputy of the Court.
Article 97. Inability of public employees for the post of Deputy of the Court.
Article 98. Signing the minutes of the new appointments.
Article 99. Grant of Powers.
Article 100. Terms under which powers are granted.
Article 101. Publicator of the elections.
Article 102. Compensation for Members.

Article 103. Enforcement in the pertinent sections 55, 56, 57 and 58.

Chapter Six
The holding of the Courts

Article 104. Location of the Courts.

Article 105. Possibility of moving the physical location of the Cortes.

Article 106. Duration of Sessions Courts.

Article 107. Extension of the Sessions Courts.

Article 108. Replacement, in the exercise of the council.

Article 109. Substitution of Deputies.

Article 110. Principle of no reelection of Deputies.

Article 111. Introduction of Permanent Legislator to the Provincial of the Courts.

Article 112. Renewal date of the Courts.

Article 113. Formalities of the first Board.

Article 114. Timing of the second meeting.

Article 115. Resolution of doubts during the celebration of the Boards.

Article 116. Resolution of the legitimacy of the powers of Parliament.

Article 117. Timing of the last School Board.

Article 118. Election of Chairman of the Parliament.

Article 119. Constitution and opening celebration of the Courts.

Article 120. Participation of the King of the opening celebration of the Courts.

Article 121. Assistance of the King the opening celebration of the Courts.

Article 122. Formalities of the King's assistance to the Board of the sessions of the Courts.

Article 123. Selection of the King to the Court.

Article 124. Inability of courts to deliberate in the presence of the King.

Article 125. Proposed Office clerks on behalf of the King.

Article 126. Publicity of the sessions of the Cortes.

Article 127. Follow the rules made by the courts.

Article 128. Inviolability of the figure of Deputy.

Article 129. Disqualification of Members to apply for different jobs during his term of office.

Article 130. Disqualification of Members to request pension during his term of office.

Chapter Seven
Of the Powers of Courts

Article 131. Exclusive powers of the courts.

Chapter Eight

Training and Royal Assent

- Article 132.* Powers of Deputies.
- Article 133.* Deliberation of the bill.
- Article 134.* Trial Courts.
- Article 135.* Indicated time for discussion.
- Article 136.* Implementation of the project as a whole.
- Article 137.* Resolution of the Parliament.
- Article 138.* Admission or waste handling of the bill.
- Article 140.* Waste handling of the bill.
- Article 141.* Approval of the bill.
- Article 142.* Enactment of the law by the King.
- Article 143.* Punishment of the King with the words “publish as law.”
- Article 144.* Denial of the King with the words “Return to the Courts.”
- Article 145.* Prerogatives of the King.
- Article 146.* Denial or acceptance of the King of the bill.
- Article 147.* Denial of the bill.
- Article 148.* Sanction of the King for the second time.
- Article 149.* Proposed bill for the third time.
- Article 150.* Period of acceptance or denial of the sanction as the end of the sessions of the Cortes.
- Article 151.* Effects of the sanction of the King.
- Article 152.* Bills discarded.
- Article 153.* Repeal of laws.

Chapter Nine

The enactment of laws

- Article 154.* Solemn promulgation of laws.
- Article 155.* King’s formula for enacting laws.
- Article 156.* Circulation of the law.

Chapter Ten

Of the Permanent Delegation of the Parliament

- Article 157.* Separation of the Cortes.
- Article 158.* Appointment of alternates to the County Council of Europe and overseas.
- Article 159.* Duration of the Permanent Committee.
- Article 160.* Powers of the Permanent Committee.

Eleventh Chapter
Of Special Courts

- Article 161.* Special Courts.
Article 162. Announcement of the Standing Committee.
Article 163. Purpose of the Special Courts.
Article 164. Formalities of the Extraordinary Session of the Parliament.
Article 165. Conduct of the meetings of the Special Courts.
Article 166. Regular Meetings.
Article 167. Functions of the Permanent Committee.

TITLE IV
THE KING

Chapter One
The inviolability of the King and his authority

- Article 168.* Personality of the King.
Article 169. King as Catholic Majesty.
Article 170. King's power to implement laws.
Article 171. Main powers of the King.
Article 172. Restrictions of the King's authority.
Article 173. Oath of the King before the Courts.

Chapter Two
Succession Line

- Article 174.* Inviolability of the Kingdom of Spain.
Article 175. Prohibition of succession to the reign of illegitimate children.
Article 176. Grade and line of males and females in relation to the succession.
Article 177. Succession upon death of the firstborn.
Article 178. Line filing of succession.
Article 179. Reign of Ferdinand VII of Bourbon.
Article 180. Legitimate succession of the sons of King Ferdinand VII of Bourbon.
Article 181. Exclusion of those unable to govern.
Article 182. Extinction of lines and new callings.
Article 183. Succession of the Crown in female.
Article 184. Reign of the female without her husband's authority.

Chapter Three
Of the minority of the King and the Regency

- Article 185.* Minority of the King.
Article 186. Government during the minority.

Article 187. Inability of the King in relation to the minority.
Article 188. Impairment of the King.
Article 189. Cases of vacancy in the Crown.
Article 190. Provisional Regency.
Article 191. Provisional Regency and its functions.
Article 192. Extraordinary Meeting of the Parliament for the appointment of the Regency.
Article 193. Requirements to be an individual of the Regency.
Article 194. Included in that lies the presidency of the Regency.
Article 195. Regency exercising the authority of the King.
Article 196. Oath of the Regency.
Article 197. Publication of acts of the regency on behalf of the King.
Article 198. Guardian of the minor King.
Article 199. Obligation of the regency in relation to education at King's minority.
Article 200. Salary for individuals of the Regency.

Chapter Four

Royal Family and Prince of Asturias Recognition

Article 201. Title of the Prince of Asturias.
Article 202. Infants of Spain.
Article 203. Title of the sons of the Prince of Asturias.
Article 204. Quality limit of Infante of Spain.
Article 205. Setting of the Infantes of Spain.
Article 206. Prohibition of Prince of Asturias to leave the kingdom without the consent of the Cortes.
Article 207. Stay outside the Prince of Asturias preset time.
Article 208. Inability of the descendants of the Prince of Asturias marry without permission of the respective courts.
Article 209. Items birth.
Article 210. Recognition of the Prince of Asturias.
Article 211. Time of recognition.
Article 212. Legal age of the Prince of Asturias to be receive the cath..

Chapter Five

Of the Royal Family Endowment

Article 213. King's annual allocation.
Article 214. Palaces of the King.
Article 215. Annual amount spent on food of the Prince and his descendants.
Article 216. Dowry to the Princesses.
Article 217. Food for Infants.
Article 218. Annual Food for the Queen Dowager.

Article 219. Salaries of individuals of the Regency.

Article 220. Provision of the King's house.

Article 221. National Department.

Chapter Six

The Secretaries of State and the Office

Article 222. Secretaries of state.

Article 223. Eligibility requirements for Secretary of the Office.

Article 224. Signaling business by special regulations.

Article 225. Orders of the King and his formality.

Article 226. Responsibility of the Secretaries of the firm.

Article 227. Training budgets.

Article 228. Effectiveness of the responsibility of the Secretaries of the firm.

Article 229. Office of the Secretary of suspension by order.

Article 230. Salary of the Secretaries Office.

Chapter Seven

Council of State

Article 231. Council of State.

Article 232. Composition of the State Council.

Article 233. Appointment of Directors.

Article 234. Training Council.

Article 235. Vacancy on the Council.

Article 236. Unique existence of the Privy Council.

Article 237. Proposal to the King by the Council.

Article 238. Creative Regulations by the King.

Article 239. Impossibility to remove directors.

Article 240. Salary of Directors.

Article 241. Inauguration of Directors.

TITLE V

COURTS AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN CIVIL AND CRIMINAL

Chapter One

In the Courts

Article 242. Authority on law enforcement.

Article 243. Prohibition of certain subjects in relation to the exercise of judicial functions.

Article 244. Monitoring laws and formalities in order for the project.

Article 245. Powers of the court.
Article 246. Prohibition for stay of execution of laws.
Article 247. Administration of justice by courts.
Article 248. Jurisdiction for all without distinction.
Article 249. Jurisdiction of the ecclesiastical state.
Article 250. Particular military courts.
Article 251. Requirements for the position of magistrate or judge.
Article 252. Prohibition of the suspension of judges or Justices during his term of office.
Article 253. Trial against a judge.
Article 254. Responsibility of Judges.
Article 255. Bribery and malfeasance.
Article 256. Competent Endowment for Magistrates and Judges.
Article 257. Administration of justice.
Article 258. Civil Code, Criminal and Commercial.
Article 259. Supreme Court.
Article 260. Number of Judges.
Article 261. Functions of the Supreme Court.
Article 262. Civil and criminal cases.
Article 263. Role of Hearings.
Article 264. Failure of second instance.
Article 265. Knowledge of skills.
Article 266. Power resources.
Article 267. Timely warnings of the causes of crime.
Article 268. Overseas audiences.
Article 269. Nullity.
Article 270. Lists of civil cases.
Article 271. Number of Judges of the hearings.
Article 272. Division of Spanish Territory.
Article 273. Same parties and a judge of.
Article 274. Powers of Judges of Letters.
Article 275. Establishment of Mayors.
Article 276. Lower Court Judges.
Article 277. Time specified to send general lists.
Article 278. Special courts.
Article 279. Possession of the position of Magistrates and Judges.

Chapter Two

Administration of justice in civil

Article 280. Right to a hearing for the proper administration of justice.
Article 281. Desition of the arbitrators.

Article 282. Mayor and his office of mediator.
Article 283. Hearing of the plaintiff and the defendant.
Article 284. Means of conciliation before the establishment of the litigation.
Article 285. Three bodies and three final judgments.

Chapter Three

Administration of criminal justice

Article 286. Administration of criminal justice.
Article 287. Imprisonment.
Article 288. Obedience to the commandments.
Article 289. Use of force in case of resistance or escape.
Article 290. Detained.
Article 291. Declaration of the detainee.
Article 292. Flagrante delicto.
Article 293. Issuance of a reasoned order.
Article 294. Seizure of posetions.
Article 295. Admission to bail.
Article 296. Bail.
Article 297. The role of prisons.
Article 298. Visit prisons.
Article 299. Justice and Punishment of the Warden.
Article 300. Causes of prison in 24 hours.
Article 301. Confession.
Article 302. Political process.
Article 303. Prohibiting the use of torture and coercion.
Article 304. Prohibition of the penalty of confiscation of property.
Article 305. Prohibition of penalties reaching for the descendants of the accused.
Article 306. Burglary.
Article 307. Distinction between judges.
Article 308. Suspension of prescribed formalities.

TITLE VI

INSIDE GOVERNMENT

Chapter One

Of the municipalities

Article 309. Composition of Municipalities.
Article 310. City of peoples.
Article 311. Number of individuals by City Council.
Article 312. Number of Mayors, Aldermen and Attorneys Trustees.

Article 313. Meeting of citizens.
Article 314. Election of Mayors, Aldermen and attorneys.
Article 315. Removal of Aldermen.
Article 316. Possibility of eligibility for holding office for the second time.
Article 317. Eligibility requirements for the office of mayor, alderman or Attorney.
Article 318. Prohibition of public employees to exercise certain positions.
Article 319. Concejil load character of public employees.
Article 320. Secretary at City Hall.
Article 321. Functions of the municipalities.
Article 322. Works or objects of common utility.
Article 323. Inspection of the Interim Provincial Government.

Chapter Two

The political government of the Provinces of the Provincial

Article 324. Political government.
Article 325. County Council.
Article 326. Composition of the Provincial Government.
Article 327. Renewal of the Provincial Government.
Article 328. Process provincial election of Deputies.
Article 329. Replacement of the County Council.
Article 330. Eligibility requirements for the office of Deputy Provincial.
Article 331. Re-election.
Article 332. Senior Head of each province.
Article 333. Secretary of the Province.
Article 334. Conduct of the meetings each year.
Article 335. Functions of the Provincial Government.
Article 336. Abuse of authority.
Article 337. Presentation of oath.

TITLE VII OF CONTRIBUTIONS

Chapter One

Article 338. Contributions.
Article 339. Allocation of contributions.
Article 340. Nature of proportionality of contributions.
Article 341. General budget expenses.
Article 342. Plan contributions.
Article 343. Contributions burdensome or harmful.
Article 344. Share of direct tax.

Article 345. General Treasurer's Office.
Article 346. Treasury of the Province.
Article 347. Prohibition of payment support account to the Municipal Treasurer.
Article 348. Clarity in the public accounts.
Article 349. Tutoring.
Article 250. Review of public accounts by the Auditor General of Accounts.
Article 351. Account of the Treasury.
Article 352. Printing, publication and circulation of accounts.
Article 353. Public Finance Management.
Article 354. Customs.
Article 355. Public debt.

TITLE VIII NATIONAL MILITARY FORCE

Chapter One

Of the troops of continuous service

Article 356. National Permanent Military Force.
Article 357. Number of troops required.
Article 358. Necessary number of vessels.
Article 359. Constitution of the army and navy.
Article 360. Military schools.
Article 361. Obligation to perform military service.

Chapter Two

Of the National Militias

Article 362. National Militia.
Article 363. Ordinance particularly for training of National Militia.
Article 364. Duration in continua of National Militia.
Article 365. Availability of the King of the National Militia.

TITLE IX OF PUBLIC INSTRUCTION

Chapter One

Article 366. Establishment of elementary schools.
Article 367. Number of universities and training establishments.
Article 368. General Education Plan.
Article 369. Estudios General Direction.

Article 370. Plans and special statutes.

Article 371. Freedom of expression.

TITLE X
THE ENFORCEMENT OF THE CONSTITUTION, AND HOW TO
PROCEED
TO MAKE CHANGES IN IT

Chapter One

Article 372. Violations of the Constitution.

Article 373. Right to represent the King's Courts.

Article 374. Oath of public office, civil, military and ecclesiastical.

Article 375. Inability to make alterations or amendments to the Constitution.

Article 376. Powers to make alterations to the Constitution.

Article 377. Reform proposal in writing.

Article 378. Reading Reform proposal.

Article 379. Admission to discussion.

Article 380. Votes of empowerment for reform.

Article 381. Publication and communication to all provinces.

Article 382. Closing added to the ordinary powers.

Article 383. Proposal and discussion of the Reform Act.

Article 384. Law Reform Act.

CONSTITUTION OF CÁDIZ¹

Cádiz, Spain, March 18th, 1812

384 articles

INDEX

TITLE I.

OF THE SPANISH NATION AND THE SPANIARDS

Chapter I. *Of the Spanish Nation*

Chapter II. *Of the Spanish*

TITLE II.

OF THE TERRITORY OF THE SPAINS, HIS RELIGION AND GOVERNMENT AND OF THE SPANISH CITIZENS

Chapter I. *Of the Territory of the Spains*

Chapter II. *Of the Religion*

Chapter III. *Of the Government*

Chapter IV. *Of the Spanish Citizens*

TITLE III.

OF THE COURTS

Chapter I. *Of the way of forming the Courts*

Chapter II. *Of the appointment of the deputies of the Courts*

Chapter III. *Of the Electoral Parish Boards*

Chapter IV. *Of the Electoral Party Boards*

Chapter V. *Of the Electoral Province Boards*

Chapter VI. *Of the celebration of the Courts*

Chapter VII. *Of the faculties of the Courts*

Chapter VIII. *Of the formation of the Laws, and the Royal Penalty*

Chapter IX. *Of the enactment of the Laws*

1 *Cfr. The first impression made on México, 1812. Daily sessions of the generals and extraordinary Courts 1810-1813.*

Chapter X. *Of the Permanent Deputation of the Courts*

Chapter XI. *Of the extraordinary Courts*

TITLE IV.

OF THE KING

Chapter I. *Of the inviolability of the King, and his authority*

Chapter II. *Of the succession to the Crown*

Chapter III. *Of the minor King and the Regency*

Chapter IV. *Of the Royal Family and the recognition of the Prince of Asturias*

Chapter V. *Of the resources of the Royal Family*

Chapter VI. *Of the Secretaries of State and the Dispatch*

Chapter VII. *Of the Council of State*

TITLE V.

OF THE TRIBUNALS AND THE ADMINISTRATION
OF JUSTICE IN THE CIVIL AND CRIMINAL

Chapter I. *Of the Tribunals*

Chapter II. *Of the administration of civil justice*

Chapter III. *De la Administración de Justicia en lo Criminal*

TITLE VI.

OF THE INTERNAL GOVERNMENT
OF THE PROVINCES AND OF THE TOWNS

Chapter I. *Of the town council*

Chapter II. *Of the political government of the Provinces and the Provincial Deputations*

TITLE VII.

OF THE CONTRIBUTIONS

Sole Chapter

TITLE VIII.

OF THE NATIONAL MILITARY FORCE

Chapter I. *De las tropas de continuo servicio*

Chapter II. *De las milicias nacionales*

TITLE IX.

OF THE PUBLIC INSTRUCTION

Sole Chapter

TITLE X.
OF THE OBSERVANCE OF THE CONSTITUTION
AND THE MANNER TO PROCEED TO DO VARIATIONS IN IT

Sole Chapter

DON FERDINAND THE SEVENTH, by the grace of God and the Constitution of the Spanish Monarchy, King of the Spains, and in his absence and captivity the Regency of the reign, appointed by the general and extraordinary Courts, to all those who shall see and understand, know: That the same Courts have decreed and sanctioned the following POLITICAL CONSTITUTION OF THE SPANISH MONARCHY.

In the name of God almighty, the Father, the Son and the Holly Spirit, author and supreme legislator of the society.

The general and extraordinary Courts of the Spanish Nation, well convinced, after the most thorough exam and mature deliberation that the earlier fundamental laws of this Monarchy, accompanied of the opportune providences and precautions, that assure in a stable and permanent manner their entire observance, could fulfill properly the great object of promoting the glory, prosperity, and the good of all the Nation, decree the following political Constitution for the good governance and straightforward administration of the State.

TITLE I OF THE SPANISH NATION AND THE SPANIARDS

Chapter I *Of the Spanish Nation*

Article 1. The Spanish Nation is the reunion of all the Spanish of both hemispheres.

Article 2. The Spanish Nation is free and independent, and is not and cannot be wealth of no family or person.

Article 3. The sovereignty resides essentially in the Nation, and for that reason belongs to the latter exclusively the right to establish its fundamental laws.

Article 4. The Nation is obliged to preserve and protect by means of wise and fair laws the civil freedom, the property and else legitimate rights of every individual that comprehend her.

Chapter II *Of the Spanish*

Article 5. Spanish are:

First. All those free men born and inhabitants in the domains of the Spains and the child of the latter.

Second. The aliens who have obtained from the Courts naturalization papers.

Third. Those who without the papers have ten years of inhabitation, won according to the Law in any town of the Monarchy.

Fourth. Those freedmen since they acquire their freedom in the Spains.

Article 6. Love to the Motherland is one of the main obligations of all the Spaniards and so is it being fair and beneficial.

Article 7. Every Spaniard is obliged to be faithful to the Constitution, obey the laws and respect the established authorities.

Article 8. Also, every Spaniard is obliged, without any exception, to contribute proportionally to his earnings to the expenses of the State.

Article 9. It is likewise obliged every Spaniard to defend the Motherland with arms, when he shall be called by the Law.

TITLE II OF THE TERRITORY OF THE SPAINS, HIS RELIGION AND GOVERNMENT AND OF THE SPANISH CITIZENS

Chapter I *Of the Territory of the Spains*

Article 10. The Spanish territory comprises in the Peninsula with its possessions and adjacent islands: Aragón, Asturias, Castilla the Old, Castilla the New, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Basque Provinces, Seville and Valencia, the Balearic and Canary Islands with the rest of the possessions of Africa. In the northern America: New Spain with the New Galicia and Yucatan peninsula, Guatemala, intern provinces of East, intern provinces of West, Cuba island with both of the Floridas, the Spanish part of the Santo Domingo island and the island of Puerto Rico with the rest adjacent to the latter and the continent in one or the other sea. in the southern America, the New Granada, Venezuela, Peru, Chile, Rio and Plata provinces, and all the adjacent islands in the Pacific ocean and in the Atlantic. In the Asia, the Philippine islands, and those who depend on their government.

Article 11. A more convenient division of the Spanish territory shall be done by a constitutional Law, when the political circumstances of the Nation allow so.

Chapter II

Of the Religion

Article 12. The religion of the Spanish Nation is and shall perpetually be the catholic, apostolic, roman, only true. The Nation protects it by wise and fair laws and prohibits the exercise of any other.

Chapter III

Of the Government

Article 13. The object of the Government is the happiness of the Nation, given that the aim of every political society is not other than the welfare of the individuals who comprise it.

Article 14. The Government of the Spanish Nation is a moderate hereditary Monarchy.

Article 15. The legal authority to make the laws lies in the Courts with the King.

Article 16. The legal authority to make the laws executed lies in the King.

Article 17. The legal authority to apply the laws in the civil and criminal causes lies in the tribunals established by the Law.

Chapter IV

Of the Spanish citizens

Article 18. Spanish citizens are those who by both lines have their origin in the Spanish domains of both hemispheres and are inhabitants of any town of the same domains.

Article 19. Citizen is also the alien who enjoying already of the Spaniard rights, would obtain from the Courts a citizen special letter.

Article 20. In order for the alien to obtain from the Courts this letter, he shall be married to a Spanish woman, and have brought or fixed in the Spains any appreciable invention or industry, or have acquired properties for which he pays a direct contribution, or have established in the commerce with his own capital and considerable to the judgment of the Courts themselves, or have done appointed services in defense and good of the Nation.

Article 21. Citizens are, likewise, the legitimate children of the aliens domiciled in the Spains, who having been born in the Spanish domains, have never been out without license from the Government, and being twenty one years old, they have inhabited in a town of the same domains, exercising in it any useful profession, job or industry.

Article 22. The virtue and deserving door to be citizens is left open to the Spaniards who by any line are known by natives of Africa: in consequence the Courts shall grant letter of citizen to those who shall do qualified services to the Motherland, or those who distinguish because of their talent, diligence and conduct, with the condition of being children of legitimate matrimony of chaste parents; that they are married

to an chaste woman , and inhabitants of the domains of the Spains, and that he exercises a useful profession, job or industry with his own capital.

Article 23. Only those who are citizens may obtain municipal employments, and choose for them in the cases appointed by the Law.

Article 24. The status of Spanish citizen is lost:

First. For acquiring naturalization in foreign country.

Second. For admitting employment in another Government.

Third. For sentence in which afflictive or disgraceful penalties are imposed, if rehabilitation is not obtained.

Fourth. For having lived five consecutive years out of the Spanish territory without commission of permission of the Government.

Article 25. The exercise of the same rights is suspended:

First. In virtue of judiciary interdiction caused by physical or moral incapacity.

Second. For the state of debtor in bankrupt, or debtor to the public wealth.

Third. For the state of domestic server.

Fourth. For not having employment, job or known way of living.

Fifth. For being criminally processed.

Sixth. Since the year 1830 those who enter over again in the exercise of the rights of the citizen shall know how to read and write.

Article 26. Only for the appointed causes in both preceding articles the rights of the citizen may be lost or suspended, and not for others.

TITLE III OF THE COURTS

Chapter I

Of the way of forming the Courts

Article 27. The Courts are the reunion of all the deputies that represent the Nation, appointed by the citizens in the way which shall be said.

Article 28. The base for the national representation is the same in both hemispheres.

Article 29. This base is the population consisting of the naturals who by both lines are natives of the Spanish domains, and of those who have obtained in the Courts letter of citizen, as well as those comprised in the article 21.

Article 30. For the compute of the population of the European domains shall be useful the last census of the year 1797, until a new one may be done, and the appropriate shall be formed for the compute of the population of those of overseas, functioning meanwhile the most authentic census among those lately formed.

Article 31. For every seventy thousand souls of the population, formed as said in the article 29, there shall be a Deputy of Courts.

Article 32. Once distributed the population through the different provinces, if an excess of more than thirty five thousand souls resulted, another Deputy shall be elected, as if the number reached seventy thousand, and if the spare did not exceed the thirty five thousand, he shall not be necessary.

Article 33. If there were a province in which the population does not reach seventy thousand souls, but it is not less than sixty thousand, shall elect by himself one Deputy; and if it were less than this number, he shall unite to the immediate to complete the required seventy thousand. The island of Santo Domingo is an exception to this rule, who shall appoint a Deputy whichever is the number of his population.

Chapter II

Of the appointment of the deputies of the Courts

Article 34. For the election of the deputies of the Courts electoral parish, party and province boards shall be held.

Chapter III

Of the Electoral Parish Boards

Article 35. The Electoral Parish Boards shall be integrated of all the citizens who inhabit and reside in the territory of the respective parish, amongst which the ecclesiastical seculars are comprised.

Article 36. These boards shall always be celebrated in the peninsula and islands and adjacent possessions, on the first Sunday of October on the previous year to the celebration of the Courts.

Article 37. In the provinces overseas they shall be held on the first Sunday of the month of December, fifteen months previous to the celebration of the Courts, giving notice so ones and the others give justices in advance.

Article 38. In the parish boards for every two hundred neighbors a parish elector shall be appointed.

Article 39. If the number of neighbors of the parish exceeds from three hundred, even if it does not reach the four hundred, two electors shall be appointed; if it exceeds from five hundred, even if it does not reach six hundred, three shall be appointed, and so on.

Article 40. In the parishes, in which the number of neighbors does not reach two hundred, so long as they reach one hundred and fifty, an elector shall be appointed, and in those in which this number is not reached, the neighbors shall reunite with those of another immediate to appoint the belonging elector or electors.

Article 41. The parochial boards shall elect on plurality of votes eleven mediators, in order for these to name the parochial elector.

Article 42. If in the parochial boards two parochial electors were to be appointed, twenty one mediators shall be elected, and if three, thirty one; without exceeding from this number of mediators in any case, with the purpose of avoiding confusion.

Article 43. To consult the major comfort of the small populations, it shall be observed that in such parish which had twenty neighbors, she shall elect a mediator; the one which had from thirty to forty, shall elect two; the one which had from fifty to sixty, three, and so on. The parishes which had less than twenty neighbors shall unite to the most immediate to elect a mediator.

Article 44. The mediator of the parishes of the small populations, elected so, shall get together in the most proper town, and in forming the number of eleven, or at least nine, they shall appoint a parochial elector; if they would form the number of twenty one, or at least seventeen, they shall appoint two parochial electors and if they were thirty one and at least twenty five reunited, they shall appoint three electors, or the corresponding number.

Article 45. To be appointed parochial elector is required to be citizen, older than twenty five years, neighbor and resident of the parish.

Article 46. The parish boards shall be presided by the political chief, or the Mayor of the city, town or village in which they shall congregate, with attendance of the parochial priest for a major solemnity of the act; and if in the same town on reason of the number of their parishes there were two or more boards, the political chief or the Mayor shall preside one, the other the Mayor and the aldermen on chance shall preside the rest.

Article 47. Once arrived the time for the reunion, which shall be held in the town hall or in the place where they accustom, being together the citizens who have concurred, they shall pass to the parish with their president, and in it they shall celebrate a solemn mass of the Holly Spirit by the parochial priest, who shall deliver a speech according to the circumstances.

Article 48. Once the mass is concluded, they shall return to the place from where they came out, and in it they shall proceed to begin the board, appointing two scrutineers and one Secretary from amongst the present citizens, everything before open doors.

Article 49. Immediately after, the president shall ask if any citizen has any complaint to expose relative to bribery or subornment so that the election falls on a determined person; and if there were, public and verbal justifying shall be done in the same act. Resulting true the accusation, those who committed the crime shall be deprived of active and passive voice. The slanderers shall suffer the same sanction; and to this trial no appeal shall be admitted.

Article 50. If doubts were aroused over if in any of the presents the required qualities to be able to vote concur, the board herself shall decide in the act whatsoever she thinks is right; and whatever she shall decide shall be executed without any appeal for this time and for this solely matter.

Article 51. They shall immediately proceed to the appointment of the mediators; what shall be done designating each citizen an equal number of persons to that of the mediators, for which they shall approach to the table where the president, the scruti-

neers and the secretaries are found; and the latter shall write them down under their presence; and in this and the rest of the election acts no person shall be able to vote himself, under sentence of losing the right to vote.

Article 52. Once concluded this act, the president, the scrutineers and the Secretary shall recognize the lists, and that one shall publish out loud the names of the citizens who might have been chosen mediators because of having gathered the largest number of votes.

Article 53. The appointed mediators shall leave to a separate place before the Board dissolves, and conferencing amongst them, they shall proceed to appoint the elector or electors of that parish, and shall be elected the person or persons that gather more than the half of the votes. The appointment shall be published straight away in the board.

Article 54. The Secretary shall take the minute, which together with him the president and mediators shall sign, and a copy of this sign by the same persons shall be handed to the person or persons chosen, to state their appointment.

Article 55. No citizen may be excused of these entrustments for any reason or pretext.

Article 56. In the parochial board no citizen shall present with arms.

Article 57. Once verified the appointment of the electors, the board shall be dissolved immediately, and any other act in which they intend to get involved in shall be null.

Article 58. The citizens who have formed the Board shall move to the parish where a solemn *Te Deum* shall be sung, taking the elector or electors between the president, the scrutineers and the Secretary.

Chapter IV.

Of the Electoral Party Boards

Article 59. The Electoral Party Boards shall be formed of two parochial electors who shall congregate at the head of every party, with the purpose of appointing the elector or electors who shall concur to the capital of the province to elect the Deputies of the Courts.

Article 60. These boards shall always be held in the Peninsula and Islands and adjacent possessions, the first Sunday of November the previous year to that in which the Courts are to be held.

Article 61. In the overseas provinces they shall be held on the first Sunday of January following to the month of December in which the parish boards had been held.

Article 62. To have knowledge of the number of electors that each party shall appoint; the following rules must bear in mind.

Article 63. The number of party electors shall be triple to that of the deputies to be chosen.

Article 64. If the number of parties of the province were greater than that of the electors required by the previous article for the appointment of the corresponding deputies, nevertheless an elector shall be appointed for every party.

Article 65. If the number of parties was less than that of the electors that shall be appointed, each party shall elect one, two or more, until completing the required number; but if despite of that an elector were missing, he shall be appointed by the party with the greater population; if still another were missing, he shall be appointed by the next in population, and so on.

Article 66. For what is established in the articles 31, 32, 33 and in the three previous articles, the census determines how many deputies correspond to each province, and how many electors to each of their parties.

Article 67. The Electoral Party Boards shall be presided by the political chief or the first Mayor of the town head of the party, to whom the parochial electors shall present with the document that accredits their election, so that their names are written down in the book in which the minutes of the board shall be taken.

Article 68. On the fixed day the parochial electors shall get together with the president in the town hall behind open doors and start on by naming a Secretary and two scrutineers from amongst the same electors.

Article 69. Next the electors shall present their certifications of their appointments to be examined by the Secretary and scrutineers, who shall inform the next day if they are or not fixed. The certifications of the Secretary and scrutineers shall be examined by a commission of three individuals of the Board, who shall be appointed for that purpose, to inform also on the next day about them.

Article 70. In this day, once congregated the parochial electors, the informs on the certifications shall be read, and if a qualm to oppose any of them were found, or to the electors by defect of any of the required qualities, the Board shall resolve definitely and continuous act whatever her opinion, and whatever she may resolve shall be executed without appeal.

Article 71. Once conclude this act, the parochial electors shall pass with their president to the main church, where solemn mass of the Holly Spirit shall be sung by the ecclesiastic of higher dignity, who shall deliver a speech according to the circumstances.

Article 72. After this religious act the town hall shall be restituted, and the electors occupying their seats without any preference, the Secretary shall read this chapter of the Constitution, and after that the president shall do the same question that the article 49 contains, and everything prevented in it shall be observed.

Article 73. Immediately after they shall proceed to the appointing of the party elector or electors, electing them one by one, and by secret scrutiny, through scrolls in which the name of the person who each one elects is written.

Article 74. Once the voting is concluded, the president, Secretary and scrutineers shall do the regulation of the votes, and then the one who gathered at least half of the

votes and one more shall be elected, and the president shall publish every election. If none of them had the absolute plurality of votes, those two who have obtained the greater number shall enter into a second scrutiny, and the one who gathers more votes shall be elected. In case of tie the chance will decide.

Article 75. To be party elector it is required to be citizen in the exercise of his rights, older than twenty five years, and neighbor and resident in the party, whether from the lay state or from ecclesiastic secular, being the election able to fall on the citizens that form the board, or in those outside of her.

Article 76. The Secretary shall take the minute, which together with him the president and scrutineers shall sign; and a copy of it signed by the same persons shall be handed to the elected person or persons, to state their appointment. The President of this Board shall send another copy signed by him and by the Secretary to the President of the province board, where the election shall be made notary in the public papers.

Article 77. In the Electoral Party Boards shall be observed everything prevented in the articles 55, 56, 57 and 58 for the Electoral Parochial Boards.

Chapter V

Of the Electoral Province Boards

Article 78. The Electoral Province Boards shall be formed by the electors of all her parties, who shall congregate in the capital with the purpose of appointing the deputies that correspond to assist to the Courts, as representatives of the Nation.

Article 79. These boards shall always be held in the Peninsula and adjacent Islands on the first Sunday of December of the previous year to the Courts.

Article 80. In the overseas provinces they shall be held on the second Sunday of March of the same year in which the party boards shall be celebrated.

Article 81. These boards shall be presided by the political chief of the capital of the province, to whom the party electors shall present with the document of their election, so that their names are written down in the book in which the minutes are taken.

Article 82. In the appointed day the party electors shall get together with the president in the town hall or in the building that they have most proper for such solemn act, before open doors; and they shall start by naming on plurality of votes a Secretary and two scrutineers from amongst the same electors.

Article 83. If a province could not fit more than one Deputy, at least five electors shall concur for their appointment; distributing this number amongst the parties in which she were divided, forming parties for this sole purpose.

Article 84. The four chapters of this Constitution which deal with elections shall be read. Next, the certifications of the minutes of the elections done in the heads of the party, sent by the respective presidents shall be read, likewise the electors shall present the certification of their appointments, to be examined by the Secretary and scrutineers, who shall inform the next day if they are or not fixed. The certifications of

the Secretary and scrutineers shall be examined by a commission of three individuals from the board, appointed to this purpose, to inform as well on them the next day.

Article 85. Together with it the party electors, shall read the informs on the certifications; and if doubts were aroused over any of them, or the electors because of defect of any of the required qualities, the board shall resolve definitely and continuous act whatever she considers and whatever she shall resolve shall be executed without appeal.

Article 86. Straight away the party electors with their president shall pass to the cathedral or main church, where solemn mass of the Holly Spirit shall be sung and the bishop or otherwise the ecclesiastic of higher dignity, who shall deliver a speech according to the circumstances.

Article 87. Once concluded this religious act, they shall return to the place they came out from; and before open doors, the electors occupying their seats without any preference, the president shall ask the same question in the article 49, and everything in it prevented shall be observed.

Article 88. Afterwards the present electors shall proceed to the election of the Deputy or deputies, and shall be elected one by one, getting close to the table where the president, the scrutineers and the Secretary are found, and the latter shall write down in a list in their presence the name of the person who each one elects. The Secretary and the scrutineers shall be the first to vote.

Article 89. Once the election is concluded, the president, the Secretary and the scrutineers shall do the regulation of the votes, and shall be elected that who obtained at least half of the votes and one more. If no one obtained the absolute plurality of votes, those two who have obtained the greater number shall enter into a second scrutiny, and shall be elected the one who obtains the plurality. In case of tie chance shall decide; and once done the election of each one, the president shall publish.

Article 90. After the election of the deputies they shall proceed to the election of the substitutes by the same method and manner, and their number shall be in each province the third part of the corresponding deputies. If any province did not get to elect more than one or two deputies, he shall elect, nevertheless, a substitute Deputy. The latter shall concur to the Courts, always that the death of a proprietor or his impossibility to trial is verified, in any time that one or the other accident verifies after the election.

Article 91. To be Deputy of the Courts it is required to be citizen in exercise of his rights, older than twenty five years, and that was born in the province or inhabits in her with a residence of at least seven years, whether he is from the lay state, or the ecclesiastical secular; being able to fall the election in the citizen that form the board or those out of her.

Article 92. It is also required, to be elected Deputy of the Courts, to have a proportional annual rate, proceeding from personal possessions.

Article 93. The disposition of the previous article shall be suspended until the Courts who later on shall be celebrated, declare to have reached the time in which it may have effect, appointing the fee of the rent, and the quality of the possessions it comes from, and whatever they resolve the, shall be had by constitutional, as if it were expressed here.

Article 94. If it occurred that one same person were elected by the province of his nature and the one in which he inhabits, it shall subsist the election on reason of inhabitation, and by the province of his nature the corresponding substitute shall come to the Courts.

Article 95. The secretaries of the Dispatch, the State councils, and those who serve employments of the Royal House, cannot be elected deputies of the Courts.

Article 96. Neither can be elected Deputy of the Courts any alien, despite having obtained from the Courts letter of citizen.

Article 97. No public employee appointed by the Government, could be elected Deputy of the Courts by the province in which they exercise their entrustment.

Article 98. The Secretary shall take the minute of the elections, which together with him shall sign the president and all the electors.

Article 99. Next, all the electors shall give without any excuse to every and each Deputy wide ranging powers, according the following formula, handing in to every Deputy his corresponding power to present themselves in the Courts.

Article 100. The powers shall be conceived in these terms: *In the city of ... days of the month ... of the year ..., in the hall of ..., finding themselves congregated the gentlemen (here the names of the president and the electors of the party who form the electoral province boards shall be written), said before me the undersigned scribe and witnesses called to this effect, who having proceeded, according the political Constitution of the Spanish Monarchy, to the appointment of the parochial and party electors with all the solemnities prescribed by the same Constitution, as it was stated in the original certifications which were in the file, reunited the expressed electors of the parties of the province of the day, of the month and of the present year, had done the appointment of the deputies who in name and representation of this province shall concur to the Courts and who were elected by the deputies for them for this province the gentlemen N. N. N., as it results from the minute taken and signed by N. N.: which in its consequence give wide ranging powers altogether, and each one by themselves, to comply and perform the august functions of their entrustment, and so that with the other deputies of the Courts, as representatives of the Spanish Nation, they might agree and resolve everything they understood appropriate for the general good of her in use of the faculties that the Constitution determines, and within the limits that the same prescribes, without being able to derogate, alter or vary in any manner none of her articles under no pretext, and that the grantors oblige themselves and in the name of all the neighbors of this province in virtue of the faculties granted as appointed electors for this act, to have for valid and obey and comply everything as such Deputies of the Courts would do, and shall be resolved by these according to the Political Constitution of the Spanish Monarchy.*

Expressed so and granted, being present as witnesses N. N. N., who with the grantor gentlemen signed: that I testify.

Article 101. The president, the scrutineers and the Secretary shall immediately send copy signed by the same persons of the minute of the elections to the permanent deputation of the Courts, and shall make the elections published by means of press, sending a reproduction to each town of the province.

Article 102. For the indemnities of the deputies they shall be assisted by their respective provinces with the salaries that the Courts in the second year of every general deputation shall appoint for the following deputation; and to the overseas deputies in addition shall be credited whatever seems necessary, in the opinion of their respective provinces for the round trip travel expenses.

Article 103. In the Electoral Province Boards shall be observed everything prescribed in the articles 55, 56, 57 and 58, with exception of what is prevented in the article 328.

Chapter VI

Of the celebration of the Courts

Article 104. Every year the Courts shall get together in the capital of the kingdom in the building destined to this sole purpose.

Article 105. When they consider convenient moving to another place, they might be able to do it as long as it is to a town which is no farther than twelve leagues, and that two third parts of the present deputies agree in the transfer.

Article 106. The sessions of the Courts in every year shall last three consecutive moths, starting off on the first day of March.

Article 107. The Courts might be able to postpone their session one month at most only in two cases: first, upon request of the King; and second, if the Courts believe it necessary on a resolution of two third parts of the deputies.

Article 108. The deputies shall be renovated in their totality every two years.

Article 109. If the war or occupation of any part of the territory of the Monarchy by the enemy prevented all or some of the deputies of one or more provinces to present on time, they shall be substituted by the previous deputies of the respective provinces, sorting amongst them until completing the corresponding number.

Article 110. Deputies should not be elected again, but mediating another deputation.

Article 111. At the moment the deputies arrive to the capital they shall present to the permanent deputation of the Courts, which shall state down their names, and the province who has chosen them, in a register in the Secretary of the same Courts.

Article 112. In the year of the renovation of the deputies it shall be celebrated on the fifteenth day of February before open door the first preparatory board, performing as president the one who is it for the permanent deputation, and as secretaries and

scrutineers those who the same deputation appoints from amongst the resting individuals that form it.

Article 113. In this first board all the deputies shall present their powers, and on plurality of votes they shall appoint two commissions, one of five individuals to examine the powers of all the deputies, and the other of three to examine the power of these five individuals of the commission.

Article 114. The twentieth day of the same February shall be celebrated also before open door the second preparatory board, in which both commissions shall inform on the legitimacy of the powers, having had present the copies of the minutes of the provincial elections.

Article 115. In this board and in the rest that result necessary until the twenty fifth day, they shall be resolved definitely, upon plurality of votes, the doubts that shall be aroused about the legitimacy of the powers and qualities of the deputies.

Article 116. In the following year to that of the renovation of the deputies the first preparatory board shall take place on the twentieth day of February, and until the twenty fifth those who are believed to be necessary to resolve, in the manner and form that has been expressed in the three previous articles, about the legitimacy of the powers of the deputies that present again.

Article 117. In every year of the twenty fifth of February the last preparatory board shall be celebrated, in which shall be done by all the deputies, placing their hand on the Holly Gospels, the following oath: *Thou swear to defend and preserve the catholic, apostolic, roman religion, without admitting any other in the kingdom? –R. Yes I swear. Thou swear, to keep and to make keep religiously the Political Constitution of the Spanish Monarchy, sanctioned by the general and extraordinary Courts of the Nation in the year of 1812? –R. Yes I swear. Thou swear to hold well and faithfully the entrustment that the Nation has entrusted you, looking in everything after the good and prosperity of the same Nation? –R. Yes I swear. If so you did, that rewards you; if not, that He demands it to you.*

Article 118. Afterwards they shall proceed to elect from amongst the same deputies, by secret scrutiny and upon absolute plurality, a president, a Vicepresident and four secretaries, with which they shall have the Courts for constituted and formed, and the permanent deputation shall cease in all his functions.

Article 119. On the same day a deputation of twenty two individuals and two of the secretaries shall be appointed to pass and reports to the King that the Courts are constituted, and of the president they have chosen, in order for him to express if He shall attend to the opening of the Courts, which shall take place on the first day of March.

Article 120. If the King would be out of the capital, this notification in writing, and the King shall answer in the same manner.

Article 121. The King shall attend by himself to the opening of the Courts; and if He had any impediment, the president shall do it on the appointed day, without that

for any reason it might prorogate for another. The same formalities shall be observed for the closing act of the Courts.

Article 122. In the Courts hall the King shall enter without guards, and only the persons that the ceremonial for reception and farewell of the King, prescribed in the regulations of the internal government of the Courts, determines shall accompany him.

Article 123. The King shall deliver a speech, in which he shall propose to the Courts what he believes convenient; and to which the president shall answer in general terms. If the King did not attend, he shall send his speech to the president in order for it to be read in the Courts.

Article 124. The Courts shall not be able to deliberate in presence of the King.

Article 125. In the cases in which the secretaries of the Dispatch make proposals in the name of the King to the Courts, they shall attend when and in the manner that the Courts determine, and they shall talk inside them; but they should not be present during the voting.

Article 126. The sessions of the Courts shall be public, and only in the cases that demand so might be celebrated in secret session.

Article 127. In the discussions of the Courts, and everything else that belongs to his government and internal order, shall be observed the regulations formed by these general and extraordinary Courts, without prejudice of the successive reforms that they might consider convenient doing with it.

Article 128. The deputies shall be inviolable because of their opinions, and in no time or case, nor for any authority, might they be reconvened by those causes. In the criminal causes, that against them shall be attempted, they could not be judged but by the Courts tribunal in the manner and form prescribed in the regulations of internal government of the same. During the sessions of the Courts, and one month later, the deputies might not be sued, civilly, nor executed because of debts.

Article 129. During the time of their deputation, counting for this purpose since their appointment is stated in the permanent of the Courts, they might not admit for themselves, or request for another, any employment provided by the King, nor a promotion if it is not of scale in his respective career.

Article 130. On the same manner they might not, during the time of their deputation and a year after the last act of their functions, obtain for themselves, or request for another, any pension or decoration that is too provision of the King.

Chapter VII

Of the faculties of the Courts

Article 131. The faculties of the Courts are:

First. Propose and decree the laws, and interpret them and derogate them if necessary.

Second. To receive the oath to the King, the Prince of Asturias and to the Regency as prevented in their places.

Third. Solve any doubt, in fact or in Law, which occurs in the order of succession of the crown.

Fourth. Elect Regency or Regent of the kingdom when the Constitution prevents it, and to appoint the limitations with which the Regency or Regent shall exercise the royal authority.

Fifth. To make the public recognition of the Prince of Asturias.

Sixth. Appoint tutor to the minor King, when the Constitution prevents it.

Seventh. Approve before its ratification the offensive alliance, subsidies and the specials of commerce treaties.

Eighth. Grant or deny the admission of foreign troops in the kingdom.

Ninth. Decree the creation or suppression of positions in the tribunals established by the Constitution; and likewise the creation and suppression of the public trades.

Tenth. Fix every year upon proposal of the King the land and sea forces, determining those who shall be on foot in time of peace and its augmentation in time of war.

Eleventh. Give by-laws to the army, navy and national militia in all the branches that constitute it.

Twelfth. Set the expenses of the public administration.

Thirteenth. Annually establish the contributions and duties.

Fourteenth. Take wealth in loan in cases of necessity on the credit of the Nation.

Fifteenth. Approve the distribution of the contributions amongst the provinces.

Sixteenth. Examine and approve the accounts of the public wealth investments.

Seventeenth. Establish the duties and tariffs of rights.

Eighteenth. Stipulate what is convenient for the administration, preservation and transfer of national properties.

Nineteenth. Determine the value, weight, Law, type and denomination of the coins.

Twentieth. Adopt the system that is judged to be more comfortable and fair of weights and measures.

Twenty first. Promote and encourage all species of industry and remove the obstacles that hinder it.

Twenty second. Establish the general plan of public teaching in the entire Monarchy and approve the one that is formed for the education of the Prince of Asturias.

Twenty third. Approve the general regulations for the Police and sanity of the kingdom.

Twenty fourth. Protect the political press liberty.

Twenty fifth. Make effective the responsibility of the secretaries of Dispatch and the rest of the public employees.

Twenty sixth. Last, it belongs to the Courts to grant or deny their consent in all those cases and acts, for which it is prevented in the Constitution to be necessary.

Chapter VIII

Of the formation of the Laws, and the Royal Penalty

Article 132. Every Deputy has the faculty to propose to the Courts the projects of Law, doing it in writing and exposing the reason in which it is founded.

Article 133. Two days at least after presented and read the Law project, it shall be read for a second time; and the Courts shall deliberate if it is admitted or not to discussion.

Article 134. Once admitted to discussion, if the seriousness of the matter shall require, in opinion of the Courts, that it passes previously through a commission, it shall be executed like that.

Article 135. Four days at least after admitted to discussion the project, it shall be read for a third time, and date might be appointed for discussion.

Article 136. Once arrived the appointed day for the discussion, it shall embrace the project in its totality and in each of its articles.

Article 137. The Courts shall decide when the matter is sufficiently discussed; and once decided it is, they shall resolve if the voting sustained or overruled.

Article 138. Once decided the voting shall be sustained, they shall immediately proceed it, admitting or rejecting entirely or in some part the project, or varying and modifying, according to the observations done during the discussion.

Article 139. The voting shall be done upon absolute plurality of votes; and in order to proceed to it, it shall be necessary that at least the half and one more of the totality of the deputies who shall form the Courts shall be present.

Article 140. If the Courts shall reject a Law project in any state of its examination or resolved that they should not proceed to the voting, it shall not be proposed on the same year.

Article 141. If it were adopted, it shall be issued in duplicate in form of Law, and it shall be read in the Courts; done that, and once signed both originals by the president and two secretaries, shall be immediately presented to the King by a deputation.

Article 142. The King has the sanction of the kings.

Article 143. The King gives the sanction by this formula, signed by his hand: *Publish it as Law.*

Article 144. The King denies the sanction by this formula, likewise signed by his hand: *Return it to the Courts;* accompanying at the same time an exposition of the reasons He have had to deny it.

Article 145. The King shall have thirty day to use this prerogative; if within this days He did not grant or deny the sanction, because of this same fact it shall be understood granted, and shall grant it in effect.

Article 146. Granted or denied the sanction by the King, He shall return to the Courts one of both originals with the respective formula, to notify about them. This original shall be preserved in the archive of the Courts and the duplicate shall remain under the power of the King.

Article 147. If the King denied the sanction, the same matter shall not be treated in the Courts during that year; but it might be done in the following.

Article 148. If in the Courts of next year it were proposed again, admitted and not approved the same project, once presented to the King, He shall be able to grant or deny the sanction for a second time in terms of the articles 143 and 144, and in the latter case, the same matter should not be treated on that year.

Article 149. If again for a third time it were proposed, admitted, and approved the same project in the Courts on the following year, by the same fact it is understood that the King grants the sanction; and once presented to him, He shall give it into effect by the formula expressed in the article 143.

Article 150. If before that the thirty day term in which the King shall grant or deny the sanction expires, the day in which the Courts shall finish their sessions arrives the King shall grant it or deny it within the first eight days of the following sessions of the Courts, and if this term passed without having granted it, by this same fact it shall be understood as granted, and He shall give it into effect in the prescribed form; but if the King denied the sanction, the Courts may treat the same project.

Article 151. Although after having denied the King the sanction of a Law project one or some years pass by without the same project being proposed, in case it arouses again during the time of the same deputation that adopted it for the first time, or during the time of the two deputation immediately following, it shall be understood always the same project for the effects of the sanction of the King, of which the three previous articles are about; but if during the three deputations expressed it were not proposed again, although it were reproduced later on in the proper terms, it shall be had for a new project for the appointed effects.

Article 152. If the second or third time that the project is proposed within the term that the previous article prefixes it were rejected by the Courts, in any time it might be reproduced later on, it shall be had for a new project.

Article 153. The laws are to be derogated with the same formalities and the same established proceedings.

Chapter IX

Of the enactment of the Laws

Article 154. Once published the Law in the Courts, notice shall be given about it to the King so that they immediately proceed to its solemn enactment.

Article 155. To enact the Laws the King shall use the following formula: N (the name of the King), by the grace of God and by the Constitution of the Spanish Monarchy, King of the Spains, to all of those who present shall see and understand,

know: That the Courts have decreed, and We sanction the following (here the literal text of the Law): Therefore, we send to all the tribunals, justices, chiefs, governors and else authorities, equally common, as military and ecclesiastic, of any class and dignity, to observe and make observe, comply and execute the present Law in all of its parts. Have it understood for its performance, and have it print, publish and circulate. (It is addressed to the respective Secretary of the Dispatch).

Article 156. All of the laws shall be circulated by command of the King by the respective secretaries of the Dispatch directly to each and every of the supreme tribunals and the provinces, and other chiefs and superior authorities, who shall circulate it to the subordinates.

Chapter X

Of the Permanent Deputation of the Courts

Article 157. Before the Courts separate they shall appoint a deputation which shall be called Permanent Deputation of the Courts, formed by seven individuals, from within, three from the Europe provinces and three from the overseas provinces, and the seventh shall come out by chance between a Deputy of Europe and another from overseas.

Article 158. At the same time the Courts shall appoint two substitutes for this deputation, one from Europe and another from Overseas.

Article 159. The Permanent Deputation shall last from one ordinary Courts to another.

Article 160. The faculties of this Deputation are:

First. To look after the observance of the Constitution and the laws, to report to the next Courts of the infractions they might have noticed.

Second. Call to extraordinary Courts in the cases prescribed by the Constitution.

Third. Carry out the functions appointed in the articles III and II2.

Fourth. Give notice to the substitute deputies to concur in place of the proprietors; and if death or absolute impossibility of the proprietors and the substitutes of a province happened, communicate the corresponding orders in order to proceed to a new election.

Chapter XI

Of the extraordinary Courts

Article 161. The extraordinary Courts shall be formed by the same deputies who form the ordinaries during the two years of their deputation.

Article 162. The Permanent Deputation of the Courts shall call them up with the appointment of the day in the three following cases:

First. When the Crown shall be vacant.

Second. When the King were disabled in any manner for the government or he wanted to abdicate the Crown on the successor; being authorized the first case of the

deputation, to take all the measures that they consider convenient, with the aim of ensuring the disability of the King.

Third. When in critic circumstances and because of arduous negotiations the King had for convenient to congregate, and He participated so to the Permanent Deputation of the Courts.

Article 163. The extraordinary Courts should not understand but the object they have been called up for.

Article 164. The sessions of the extraordinary Courts shall start off and end up when the same formalities as the ordinaries.

Article 165. The celebration of the extraordinary Courts shall not get in the way of the election of new deputies on the prescribed time.

Article 166. If the extraordinary Courts did not conclude their sessions on the day appointed for the reunion of the ordinaries, the first shall cease in their functions, and the ordinaries shall continue the business for which the others were called up.

Article 167. The permanent deputation of the Courts shall continue in the functions appointed for her in the articles 111 and 112, and in the case comprised in the previous article.

TITLE IV OF THE KING

Chapter I

Of the inviolability of the King, and his authority

Article 168. The person of the King is sacred and inviolable, and is not subject to responsibility.

Article 169. The King shall have the treatment of Catholic Majesty.

Article 170. The legal authority to make observe the laws lies exclusively in the King, and his authority extends to everything that leads to the preservation of the public order in the internal aspect, and to the security of the State in the exterior, according to the Constitution and the laws.

Article 171. Besides the prerogative incumbent to the King to sanction the laws and enact them, they correspond to him as main the following faculties:

First. Issue the decrees, regulations and instructions which He believes appropriate for the execution of the laws.

Second. Look after that in the entire kingdom justice is administered soon and punctually.

Third. Declare war, and make and confirm peace, giving notice afterwards to the Courts.

Fourth. Appoint the magistrates of all the common and criminal tribunals, upon proposal of the State Council.

Fifth. Provide all the civil and military employments.

Sixth. Present for every of the bishopric and for all the dignities and ecclesiastic benefits of the Royal Board, upon proposal of the State Council.

Seventh. Grant honors and distinctions of every class, according to the laws.

Eighth. Command the army and armada and appoint the generals.

Ninth. To have disposal of the armed force, distributing it as it best suits.

Tenth. Direct diplomatic and commercial relationships with the other powers, and appoint the ambassadors, ministers and consuls.

Eleventh. Look after the coin manufacturing, in which he shall stamp his bust and his name.

Twelfth. Decree the investment of the funds destined to each one of the public administration branches.

Thirteenth. To reprove the criminals, according to the laws.

Fourteenth. Do to the Courts the law or reform proposals, which he believes appropriate for the good of the Nation, so they deliberate in the prescribed form.

Fifteenth. Grant the pass or to hold the conciliatory decrees and the pontifical bulls with the Courts approval, if they contain general dispositions: hearing the State Council, if they are about particular or governmental matters, and if they contain litigious issues, passing its knowledge and decision to the Supreme Tribunal of Justice, for it to resolve according to the laws.

Sixteenth. Appoint and freely separate the State secretaries of the Dispatch.

Article 172. The restrictions to the authority of the King are the following:

First. The King cannot prevent under no pretext the celebration of the Courts during the period or cases appointed by the Constitution or suspend them or dissolve them, or in any manner hinder their sessions and deliberations. Those who might advice or aid him in any attempt for these acts, shall be declared traitors, and shall be pursued as such.

Second. The King cannot be absent of the kingdom without the consent of the Courts; and if he did his abdication to the Crown shall be understood.

Third. The King cannot transfer, hand over, renounce or in any manner transmit to another the royal authority, or any of his prerogatives.

If by any cause He would want to abdicate the throne in his immediate successor, He could not make it without the consent of the Courts.

Fourth. The King cannot transfer, hand over or exchange province, city, town or place, nor single part, for little it is, of the Spanish territory.

Fifth. The King cannot make offensive alliance, or special commerce treaty with any foreign power without the consent of the Courts.

Sixth. He cannot either oblige himself by any treaty to give subsidies to any foreign power without the consent of the Courts.

Seventh. The King cannot hand over nor transmit the national possessions without the consent of the Courts.

Eighth. The King cannot impose by himself directly or indirectly any contributions or make orders under any name or for any object that it is, but the Courts shall decree them always.

Ninth. The King cannot grant exclusive privilege to any person or corporation.

Tenth. The King cannot take the property of any particular or corporation, or perturb him in the possession, use and exploitation of it; and if in any case it were necessary for an object of known common utility to take the property of a particular, he should not be able to do it, without that at the same time he is compensated and he is given the good change upon approval of good men.

Eleventh. The King cannot deprive any individual of his liberty, or impose by himself any penalty. The Secretary of the Dispatch who signs the order, and the judge who executes it, shall be responsible to the Nation, and punished as convicts of affront against individual liberty. Only in case that the good and security of the State demand the arrest of a person, the King might issue orders for that effect; but with the condition that within forty eight hours he shall have him turned in to the disposal of the competent tribunal or judge.

Twelfth. The King before getting married shall give notice to the Courts to obtain their consent; and if he should not do it, it shall be understood that he abdicates the Crown.

Article 173. The King in his advent to the Throne, and if He were minor, when He enters to govern the kingdom, He shall present oath before the Courts under the following formula: *N (his name here) by the grace of God and the Constitution of the Spanish Monarchy, King of the Spains; I swear to God and to all the Holly Gospels that I shall defend and preserve the catholic, apostolic, roman religion, without allowing any other in the kingdom: that I shall observe and make observe the political Constitution and the laws of the Spanish Monarchy, not looking but to that which did good and benefit to it: that I shall not transmit, hand over or split any part of the kingdom; that I shall never demand any amount of fruits, money or another thing, but those which the Courts have decreed; that I shall never take from no one his property and that I shall respect especially the political freedom of the Nation, and the personal of each individual; and if in what I have sworn, or in part of it, I shall do the opposite, I should not be obeyed before that in which contravened, were null or of none value. So God help me, and in my defense; and if not, that He demands it to me.*

Chapter II

Of the succession to the Crown

Article 174. The kingdom of the Spains is indivisible, and shall only succeed in the Throne perpetually since the enactment of the Constitution by regular order of firstborns and representation amongst the legitimate descendants, males and females, of the lines to be expressed.

Article 175. They cannot be Kings of the Spains but those who are legitimate children born in constant and legitimate matrimony.

Article 176. In the same degree and line the males prefer the females and always the elder over the minor; but the females of better line or better degree in the same line prefer over males of posterior line or degree.

Article 177. The son or daughter of the firstborn of the King, in case of death of their father without having entered in the succession of the kingdom, prefers to the uncles and succeeds immediately to the grandfather by representation right.

Article 178. While the line in which it relies is not extinguished, the immediate does not come in.

Article 179. The King of the Spains is Mr. Don Fernando VII of Borbon, which currently prevails.

Article 180. In the absence of the Mr. Don Ferdinand VII of Borbon, his legitimate descendants shall succeed, both males and females: in absence of these his brother and uncles brothers of his father shall succeed, both males and females, and the legitimate descendants of these in the order that states prevented, observing in all the cases the representation right and the preference of the anterior and posterior lines.

Article 181. The Courts shall exclude from the succession that person or persons who are incapable to govern or have done something for which they deserve to loose the Crown.

Article 182. If all the lines here appointed were extinguished, the Courts shall do new callings, however they see that matters more to the Nation, following always the order and rules of succeeding here established.

Article 183. When the Crown were to immediately fall on or has fallen on a female, she should not be able to choose a husband without the consent of the Courts; and if she did the opposite, the abdication of the Crown shall be understood.

Article 184. In the case that a female gets to reign, her husband would not have any authority regarding the kingdom, or any part in the Government.

Chapter III

Of the minor King and the Regency

Article 185. The King is minor until his eighteen years old.

Article 186. During the minority of the King, the kingdom shall be governed by a Regency.

Article 187. It likewise shall be when the King is found disabled to exercise his authority by any physical or moral cause.

Article 188. If the disability of the King passed by two years, and if the immediate successor were elder than eighteen years, the Courts might appoint him Regent of the kingdom instead of the Regency.

Article 189. In the cases in which the Crown were vacant, the Prince of Asturias being a minor, until the extraordinary Courts shall get together, if the ordinaries were not, the provisional Regency shall be formed of the Queen mother, if there were, two deputies of the Permanent Deputation of the Courts, the eldest in order of election

in the deputation, and of two councilors of the State Council the eldest, namely: the dean and the one to follow him: if there were no Queen mother, the councilor of the State third in seniority shall enter in the Regency.

Article 190. The provisional Regency shall be presided by the Queen mother, if there were, otherwise, by the individual of the Permanent Deputation of the Courts who is the first appointed in it.

Article 191. The provisional Regency shall not dispatch other matters than those that do not admit delay, and shall not renew or appoint employees but interinly.

Article 192. Once together the extraordinary Courts, they shall appoint a Regency formed of three to five persons.

Article 193. In order to be individual of the Regency is required to be citizen in the exercise of his rights; being excluded the aliens, even though they own letter of citizen.

Article 194. The Regency shall be presided by that of its individual who the Courts shall designate; being responsibility of the latter to establish in necessary case, if there shall be or not turns in the presidency, and in which terms.

Article 195. The Regency shall exercise the authority of the King in the terms that the Courts shall consider.

Article 196. One and another Regency shall present oath according to the formula prescribe in the article 173, adding the clause that they shall be faithful to the King; and the permanent Regency shall in add as well, that they shall observe the condition that the Court shall have imposed them for the exercise of his authority, that when the King shall reach the majority, or the disability ceases, they shall render the government of the kingdom under penalty, if they delay it for a moment, of being its individuals acknowledged and punished as traitors.

Article 197. All the acts of the Regency shall be published in the name of the King.

Article 198. Shall be tutor of the minor King the person who the deceased King shall had appointed in his testament. If he had not appointed one, the Queen mother shall be the tutor, while she remains a widow. Otherwise, a tutor shall be appointed by the Courts. In the first and third cases the tutor shall be a natural of the kingdom.

Article 199. The Regency shall look over that the education of the minor King shall be the most convenient to the great object of his high dignity, and that it is carried out according to the plan that the Courts shall approve.

Article 200. These shall appoint the salary of which the individuals of the Regency shall enjoy.

Chapter IV

Of the Royal Family and the recognition of the Prince of Asturias

Article 201. The firstborn of the King shall be entitled Prince of Asturias.

Article 202. The other sons and daughters of the King shall be and shall be called Infantes of the Spains.

Article 203. Likewise, shall be and shall be called Infantes of the Spains the sons and daughters of the Prince of Asturias.

Article 204. To these persons precisely shall be limited the quality of Infante of the Spains, without being susceptible to extend it to others.

Article 205. The Infantes of the Spains shall enjoy of the distinctions and honors that they have had up to here, and they might be appointed for every class of destinies, except those of the judgeship and the deputation of the Courts.

Article 206. The Prince of Asturias could not go out of the kingdom without the consent of the Courts, and if he went out without it, He shall be, for that same fact, excluded from the calling to the Crown.

Article 207. The same shall be understood, remaining out of the kingdom for a longer time than the one prefixed in the permit, if once required him to come back, he would not do it in the term that the Courts shall appoint.

Article 208. The Prince of Asturias, the Infantes and Infantas and their children and descendants who are subjects of the King, could not marry without His consent and that of the Courts, under penalty of being excluded of the calling to the Crown.

Article 209. Of the birth, marriage and death certificates of all the persons of the Royal family, an authentic copy shall be sent to the Courts, or to the Permanent Deputation, so that it is preserved in their archive.

Article 210. The Prince of Asturias shall be recognized by the Courts with the formalities that the regulations for their internal government shall prevent.

Article 211. This acknowledgment will be made in the first Courts to be held after its birth.

Article 212. The Prince of Asturias, reaching the age of fourteen years old, shall present oath before the Courts under the following formula: *N. (here his name), the Prince of Asturias, swear to God and the Holly Gospels, that I shall defend and preserve the catholic, apostolic and roman religion, without allowing any other in the kingdom; that I shall observe the political Constitution of the Spanish Monarchy, and that I shall be faithful an obedient to the King. God help me so.*

Chapter V

Of the resources of the Royal Family

Article 213. The Courts shall appoint the King and the annual resources of his house that is adequate to the high dignity of his person.

Article 214. They belong to the King all the royal palaces of which his predecessors have enjoyed, and the Courts shall appoint the lands that they have for convenient to reserve for the recreation of his person.

Article 215. The Prince of Asturias since the day of his birth, and to the Infantes e Infantas since they reach the age of seven years, it shall be assigned by the Courts the corresponding annual quantity for their feeding to their respective dignity.

Article 216. To the Infantas, for when they shall marry, the Courts shall appoint the quantity they esteem in quality of dowry; and once given the latter, the annual alimony shall cease.

Article 217. To the Infants, if they shall marry while they reside in the Spains, their assigned alimony shall continue; if they shall marry and reside out, the alimony shall cease, and for once they shall be given the quantity that the Courts appoint.

Article 218. The Courts shall appoint the annual alimony that shall be given to the Queen Widow.

Article 219. The salaries of the individuals of the Regency shall be taken of the resources appointed to the house of the King.

Article 220. The resources of the house of the King and the alimonies of his family, of which the previous articles talk about, shall be appointed by the Courts at the beginning of each reign, and could not be altered during the latter.

Article 221. All these assignments are on count of the national treasury, by which they shall be satisfied to the administrator that the King shall appoint, with who the passive and active actions shall be discussed, that because of interests might be promoted.

Chapter VI

Of the Secretaries of State and the Dispatch

Article 222. The secretaries of the Dispatch shall be seven, namely: The Secretary of the Dispatch of State. The Secretary of the Dispatch of Government of the Kingdom for the Peninsula and adjacent Islands, the Secretary of the Dispatch of the Government of the Kingdom for Overseas, the Secretary of the Dispatch of Grace and Justice, the Secretary of the Dispatch of Treasury, the Secretary of the Dispatch of War, the Secretary of the Dispatch of Marine. The successive Courts shall make in this system of secretaries the Dispatch of the variation that the experience or the circumstances demand so.

Article 223. To be Secretary of the Dispatch it is required to be citizen in the exercise of his rights, being excluded the aliens, even though they have letter of citizen.

Article 224. By a particular regulations approved by the Courts shall be appointed to each Secretary the business which shall concern to it.

Article 225. All the orders of the King shall be signed by the Secretary of the Dispatch of the branch to which the matter corresponds. No tribunal or public person shall give compliance to the order that lacks this requirement.

Article 226. The secretaries of the Dispatch shall be responsible to the Courts of the orders that they authorize against the Constitution of the laws, without serving as excuse that the King sent it.

Article 227. The secretaries of the Dispatch shall form the annual budgets of the expenses of the public administration, which shall be esteemed to be done by their respective branch, and shall render expenses of those that might be done, in the manner that shall be expressed.

Article 228. To make effective the responsibility of the secretaries of the Dispatch, the Courts shall decree above all sustaining the formation of the cause.

Article 229. Once sustained this decree, the Secretary of the Dispatch shall be engrossed; and the Courts shall send to the Supreme Tribunal of Justice all the documents concerning to the cause which might be formed by the same tribunal, who shall substantiate it and decide according to the laws.

Article 230. The Courts shall appoint the salary of which the secretaries of the Dispatch shall enjoy during their entrustment.

Chapter VII

Of the Council of State

Article 231. There shall be a Council of State formed of forty individuals, who shall be citizens in the exercise of their rights, being excluded the aliens, even though they have letter of citizens.

Article 232. These shall be precisely in the following form, namely: four ecclesiastics, and no more, of known and proofed illustration and deserving, of which two shall be bishops; four Greats of Spain, and no more, embellished of the necessary virtues, talent and knowledge; and the remaining shall be elected from within the subjects who have distinguished more because of their illustration and knowledge, or by their appointed services in any of the main branches of the administration and government of the State. The Courts might not propose for these positions any individual who is Deputy of the Courts at the time of the election. Of the individuals of the Council of State, at least twelve of them shall be born in the overseas provinces.

Article 233. All the councilors of the State shall be appointed by the King upon proposal of the Courts.

Article 234. For the formation of this Council shall be disposed in the Courts a triple list of all the referred classes in the indicated proportion, of which the King shall elect the forty individuals who shall form the Council of State, taking the ecclesiastics from the list of their class, the Greats of theirs, and so the rest.

Article 235. When any vacancy aroused in the Council of State, the first Courts which shall celebrate shall present to the King three persons of the class in which the vacancy verified, so He elects the one he considers best.

Article 236. The Council of State is the only Council of the King who shall listen to their judgment on the serious governmental matters, and notably to grant or dismiss the sanction of the laws, declare war, and make treaties.

Article 237. It shall belong to this Council to make to the King the proposal of a list of three persons to the presentation of all the ecclesiastic benefits, and for the provision of the positions of the judiciary.

Article 238. The King shall form a regulation for the government of the Council of State, previously hearing the latter; and shall be presented to the Courts for their approval.

Article 239. The councilors of State might not be removed without a justified cause before the Supreme Tribunal of Justice.

Article 240. The Courts shall appoint the salary of which the councilors of State shall enjoy.

Article 241. The councilors of State, at the moment they take possession of their positions, they shall do in the hands of the King oath to observe the Constitution, be faithful to the King, and advise to him what they understood to be convenient to the good of the Nation, without particular look or private interest.

TITLE V OF THE TRIBUNALS AND THE ADMINISTRATION OF JUSTICE IN THE CIVIL AND CRIMINAL

Chapter I *Of the Tribunals*

Article 242. The legal authority to apply the laws in the civil and criminal causes belongs exclusively to the tribunals.

Article 243. Nor the Courts nor the King may exercise in any case the judiciary functions, advocate pending causes, or order to open the ended trials.

Article 244. The laws shall appoint the order and the formalities of the process, which shall be uniformed in all the tribunals; and nor the Courts nor the King might exempt them.

Article 245. The tribunals might not exercise other functions than those of judging and force to execute the judged.

Article 246. Neither might they suspend the execution of the laws nor do any regulations for the administration of justice.

Article 247. No Spaniard might be judged in civil or criminal causes by any commission, but by the competent tribunal previously determined by the Law.

Article 248. In the common, civil and criminal business there shall be only one jurisdiction for all classes of persons.

Article 249. The ecclesiastics shall continue to enjoy of the jurisdiction of their sate, in the terms that the laws prescribe or that in the future shall prescribe.

Article 250. The militaries shall enjoy also of particular jurisdiction, in the terms prevented by the ordinance or prevented in the future.

Article 251. To be appointed magistrate of judge is required to have been born in the Spanish territory, and be elder than twenty five years. The rest of the qualities that respectively these shall have shall be determined by the laws.

Article 252. The magistrates and judges might not be deposed of their destinies, may they be temporary of perpetual, but for legally proofed and sentenced cause; nor suspended but for accusation legally attempted.

Article 253. If to the King arrived complaints against any magistrate, and once formed a file, they seemed founded, He might, heard by the Council of the State, suspend him, making it to pass immediately the file to the Supreme Tribunal of Justice, so that it judges according to the laws.

Article 254. Every lack of observance of the laws which arrange the process in the civil and the criminal makes responsible personally to the judges who shall commit it.

Article 255. To suborn, bribery or the corruption of the magistrates and judges produce popular action against those who commit it.

Article 256. The Courts shall appoint to the magistrates and judges the competent income.

Article 257. The justice shall be administered in name of the King, and the judgments and provisions of the superior tribunals shall be headed also in his name.

Article 258. The civil, criminal and commerce code shall be the same for all the Monarchy, without prejudice of the variations that for particular circumstances the Courts might do.

Article 259. There shall be in the Court a tribunal, which shall be called Supreme Tribunal of Justice.

Article 260. The Courts shall determine the number of magistrates who shall form it, and the halls in which it shall be distributed.

Article 261. Concerns to this Supreme Tribunal:

First. To settle all the competences of the audiences amongst itself in the entire Spanish territory, and those of the audiences with the special tribunals that exist in the Peninsula and adjacent Islands. In overseas the latter shall be settled according to what the laws shall determine.

Second. To judge the secretaries of State and of the Dispatch, when the Courts shall decree to sustain the formation of a cause.

Third. To know about all the causes of separation and suspension of the councilors of State and of the magistrates of the audiences.

Fourth. To know about the criminal causes of the secretaries of State and of the Dispatch, of the councilors of State and of the magistrates of the audiences, belonging to the most authorized political chief the process to send it to this tribunal.

Fifth. To know about all the criminal causes that shall be promoted against the individuals of this Supreme Tribunal. If the case aroused in which shall be necessary to make effective the responsibility of this Supreme Tribunal, the Courts, previous the

formality established in the article 228, they shall proceed to appoint for that purpose a tribunal formed of nine judges, who shall be elected randomly from a double number.

Sixth. To know about the residence of every public employee who is subject to it by disposition to the laws.

Seventh. To know about all the litigious matters from the royal board.

Eighth. To know about the resources of force of all the ecclesiastical superior tribunals of the Court.

Ninth. To know about the motions of nullity, which are filed against the sentences given in the last instance for the precise effect of reestablishing the process, taking it back, and to make effective the responsibility of which article 254 is about. In what is concerning to overseas, these motions shall be known about in the audiences in the form that shall be said in its place.

Tenth. To hear the doubts of the rest of the tribunals on the intelligence of a Law and to consult on them to the King with the foundations that there shall be, so He promotes the convenient declaration in the Courts.

Eleventh. To examine the lists of the civil and criminal causes that the audiences shall send him to promote the soon administration of justice, to hand copy of them for the same purpose to the Government, and dispose their publication by means of press.

Article 262. All the civil and criminal causes shall end within the territory of each audience.

Article 263. It shall correspond to the audiences to know about all the civil causes of the inferior tribunals of its demarcation in second and third instance, and the same about the criminal, according to what the laws determine; and also about the suspension and separation causes of the inferior judges from their territory, in the manner that the laws prevent, giving report to the King.

Article 264. The magistrates who shall failed in the second instance, might not attend to the sight of the same action in the third.

Article 265. It shall belong likewise to the audiences to know about the competences amongst all the subordinate judges of their territory.

Article 266. I shall belong as well to know about the motions of force that are introduced of the tribunals and ecclesiastical authorities of their territory.

Article 267. Also belongs to them to receive from all the subordinate judges of their territory punctual notices of the causes which are formed by crimes, and lists of the civil and criminal causes pending in their tribunal, with expression of the current state of ones and others with the purpose of promoting the soonest admission of justice.

Article 268. To the overseas audiences shall correspond besides knowing about the motions of nullity, when these shall be filed, in those audiences that have sufficient number for the formation of three halls, in the one that has not known of the cause in any instance. In the audiences that are not formed with this number of ministries, these motions shall be filed from one to another in the comprehended in the district

of a same superior government; and in the case that in this there shall be no more than one audience they shall go to the most immediate of another district.

Article 269. Once declared the nullity, the audience who has known about it shall report, with testimony that contains the convenient inserts, to the Supreme Tribunal of Justice, to make effective the responsibility of which article 254 talks about.

Article 270. The audiences shall send every year to the Supreme Tribunal of Justice exact lists of the civil causes, and every sixth months of the criminals, both ended and pending, with expression of the state which these hold, including those received by the inferior tribunals.

Article 271. The number of the magistrates of the audiences, which can not be less than seven, shall be determined by laws and special regulations, the form of these tribunals and its place of residence.

Article 272. When the case arouses of doing the convenient division of the Spanish territory, indicated in the article 11, shall be determined according to it the number of audiences which are to be established, and the territory shall be appointed.

Article 273. There shall be established districts proportionally equal, and in each head of district there shall be a trial judge with his correspondent tribunal.

Article 274. The faculties of these judges shall be limited precisely to the litigious, and the laws shall determine those that shall belong to them in the capital and in the towns of their district, as well as up to what quantity they might know about in the civil business without appeal.

Article 275. In every town there shall establish mayors, and the laws shall determine the extension of their faculties, both in the litigious as in the economic.

Article 276. All the judges of the inferior tribunals shall report, at the latest within the third day, to their respective audience, the causes which might form for crimes committed within their territory, and after they shall continue reporting of their state in the periods that the audience prescribes.

Article 277. They shall, as well, send to the respective audience general lists of the civil causes every six months, and every three of the criminal, which were pending in their tribunals, with expression of their situation.

Article 278. The laws shall decide if there shall be special tribunals to know about specific matters.

Article 279. The magistrates and judges at the moment they take possession of their positions they shall oath to observe the Constitution, be faithful to the King, observe the laws and administrate justice impartially.

Chapter II

Of the administration of civil justice

Article 280. No Spaniard might be deprived of the right of ending up his differences by means of arbitrator judge, chosen by both parts.

Article 281. The sentence which the arbitrators shall give, shall be executed, if the parts at the moment of having done the compromise would not have reserved the right to appeal.

Article 282. The Mayor of each town shall exercise in the job of conciliator; and that who has to sue for civil business or for slanders, shall present to the major with this object.

Article 283. The Mayor with two good men, appointed one by each part, shall hear the plaintiff and the defendant, he shall know about the reasons in which they respectively support their intention; and shall take hearing of the report of the two associates, the providence which he thinks proper in order to end up the dispute without more progress, the manner in which it shall be ended up in fact, if the parts calm down with this extrajudicial decision.

Article 284. Without stating that the conciliatory means have been attempted, no dispute shall be filed at all.

Article 285. In every business, whatever its quantity, shall be at most three instances and three definitive sentences pronounced in them. When the third instance is filed of two concordant sentences, the number of judges who shall decide it shall be greater than the number of those who attended on the second, in the manner that the Law arranges. It is also to the third instance to determine, once dealt the entity of the business, and the nature and quality of the different trials, which sentence shall be the one that in each case shall be writ of execution.

Chapter III

Of the administration of criminal justice

Article 286. The laws shall arrange the administration of criminal justice, so that the process is formed briefly, without vices, in order that the crimes shall be promptly punished.

Article 287. No Spaniard might be imprisoned without previous summary information of the fact for which he deserves, according to the Law, to be punished with corporal penalty, and a written order from the judge, as well, in which he shall be notified of the proper act of the prison.

Article 288. Every person shall obey these orders: any resistance shall be reputed as serious felony.

Article 289. When there were resistance or an escape was feared, the force may be used to secure the person.

Article 290. The arrested, before being put into prison, shall be presented to the judge, as long as there shall not be anything that obstructs, so he receives his declaration; but if this could not take place, the arrested shall be taken to prison in state of detainee and the judge shall receive his declaration within the next twenty four hours.

Article 291. The declaration of the arrested shall be without pledge, that to no one shall be taken about own act.

Article 292. In flagrance every delinquent might be arrested, and everybody may arrest him and take him before the presence of the judge: once presented or set under custody, it shall be proceeded in everything, as it is prevented in the two previous articles.

Article 293. If it were resolved that the arrested shall be put into prison, or that he remains in state of imprisoned, motivated writ shall be decreed, and of this a copy shall be handed to the warden, so he inserts it in the book of prisoners, without this requirement the warden shall not receive any prisoner in such state, under the most strict responsibility.

Article 294. There shall only be seizure of goods when it is proceeded against felonies which carry with them pecuniary responsibility, and proportionally to the quantity to which this might extend.

Article 295. The guarantor shall not be taken into prison in the cases in which the Law does not expressly forbid that the bail is admitted.

Article 296. In any state of the trial in which arouses that a corporal penalty cannot be imposed to the prisoner, he shall be set in liberty, giving a bail.

Article 297. The prisons shall be arranged in order that they function to secure the prisoners and not to disturb them: so the warden shall have these under good custody and separated those who the judge order to have without any communication; but never in underground or unhealthy dungeons.

Article 298. The Law shall determine the frequency with which the visit to the jails shall be done, and there shall not be any prisoner who shall stop presenting to it under no pretext.

Article 299. The judge and the warden that outraged to what is disposed in the previous articles, shall be punished as convicts of arbitrary detention, which shall be understood as felony in the criminal code.

Article 300. Within the twenty four hours the cause of his imprisonment shall be expressed to the convict treated, and the name of the one who accuses him.

Article 301. When taking the confession of the convict treated, all the documents and declarations of the witnesses shall be completely read, with the name of the latter; and if he does not know them by name, he shall be given as many as notices he asks for in order to come to the knowledge of who they are.

Article 302. The process from there on shall be public in the manner and form in which the laws determine.

Article 303. The torment or the pressure shall never be used.

Article 304. The confiscation of goods should not be imposed either.

Article 305. No imposed penalty, whatever the felony, shall be transcendental by any term to the family of who is suffering it, but it shall have all its effect precisely on who deserved it.

Article 306. The house of any Spaniard cannot be broken into, but in the cases determined by the Law for the good order and security of the State.

Article 307. If with the time the Courts shall believe that is convenient to be distinctions between the judges of the fact and of the Law, they shall establish it in the form they judge convenient.

Article 308. If in extraordinary circumstances the security of the State shall demand it, in the entire Monarchy or in a part of it, the suspension of some prescribed formalities in this chapter for the arrest of the criminals, the Courts might decree it for a determined time.

TITLE VI
OF THE INTERNAL GOVERNMENT OF THE
PROVINCES AND OF THE TOWNS

Chapter I
Of the town council

Article 309. For the internal government of the towns there shall be town councils formed of the Mayor or mayors, the town councilors and the syndic solicitor, and it shall be presided by the political chief where there was one, and lacking this by the Mayor or the first appointed amongst the latter, if there were two.

Article 310. There shall be town council in the towns which do not have it, and in which is convenient to be one, there cannot be one missing in the towns in which on their own or with their region reach a thousand souls, and they shall be appointed with the corresponding term.

Article 311. The laws shall determine a number of individual of each class of which the town councils of the towns according to their neighborhood shall be formed of.

Article 312. The mayors, town councilors and the syndic solicitors shall be appointed by election in the towns, ceasing the town councilors and else who serve perpetual jobs in the tow council, whatever it is their title and denomination.

Article 313. Every year in the month of December the citizens of each town shall get together, to elect upon plurality of votes, proportionally to their neighborhoods, determining the number of electors who reside in the same town and are in the exercise of the citizen rights.

Article 314. The electors shall appoint in the same month upon absolute plurality of votes the Mayor or mayors, town councilors, and syndic solicitor or solicitors, so they enter to exercise their entrustments on the first of January of the next year.

Article 315. The mayors shall move every year, the town councilors by half every year, and the same the syndic solicitors where there were two: if there were only one he shall move every year.

Article 316. That who shall have exercised any of these entrustments could not be chosen again for any of them, without that at least two years have past, where the neighborhood allows it.

Article 317. To be Mayor, town councilor or syndic solicitor, besides being a citizen in the exercise of his rights, it is required to be elder than twenty five years, with at least five years of vicinity and residence in the town. The laws shall determine the rest of the qualities that these employees shall have.

Article 318. No public employee appointed by the King who is in exercise might be Mayor, town councilor or syndic solicitor, not being comprehended in this rule those who serve in the national militias.

Article 319. All the referred municipal employees shall be burden that no one might be excused without legal cause.

Article 320. There shall be a Secretary in every town council, chosen by the latter upon absolute plurality of votes, and gifted of the common funds.

Article 321. It shall be under the town councils responsibility:

First. The health and comfort police.

Second. To aid the Mayor in everything that belongs to the security of the persons and goods of the neighbors, and the preservation of the public order.

Third. The administration and investment of the own wealth and judgments according to the laws and regulations, with the responsibility of appointing a depositary under the responsibility of those who appoint him.

Fourth. To make the division and collection of the contributions, and send them to the respective treasury.

Fifth. Take care of all the schools of first letters, and the rest of the establishments which are paid with common funds.

Sixth. Take care of the hospitals, hospices, orphanages, and other charity establishments, under the rules which shall be prescribed.

Seventh. Take care of the construction and repairing of the roads, carriageways, bridges and prisons, of the mounts and fields of the common, and of all the public works of necessity, utility and ornamentation.

Eighth. To form the municipal ordinances of the town, and present them to the Courts for their approval by means of the provincial deputation, which shall be accompanied with a report.

Ninth. To promote the agriculture, the industry and the commerce according to the locality and circumstances of the towns, and whatever comes in useful and beneficial to them.

Article 322. If works of other objects of common utility were offered, and due that the own wealth was not sufficient and it were necessary to turn to the duties or taxes with which funds are arbitrated for public expenses, these might imposed, but obtaining by means of the provincial deputation the approval of the Courts, In case that the work or object to which it shall be destined was urgent, the town council

might use them provisionally with approval of the same deputation, while the resolution lies in the Courts. These duties and taxes shall be administrated in everything as own wealth.

Article 323. The town councils shall carry out all these entrustments under the inspection of the provincial deputation, to whom they shall give justified report every year of the public wealth which they have collected and invested.

Chapter II

Of the political government of the Provinces and the Provincial Deputations

Article 324. The political government of the provinces shall lie in the superior chief, appointed by the King in each of them.

Article 325. In each province shall be a deputation called provincial, to promote its prosperity, presided by the superior chief.

Article 326. This deputation shall be formed of the president, the intendant and seven individuals chosen in the form that shall be said, without prejudice that the Courts later on vary this number as they consider convenient, or the circumstances demand so once done the new division of provinces of which the article II talks about.

Article 327. The provincial deputation shall be renewed by half every two years, going out on the first time the greater number and the second the smaller and so on.

Article 328. The election of these individuals shall be done by party electors on the next day after the deputies of the Courts shall be appointed, on the same order with which the latter are appointed.

Article 329. At the same time and in the same form three substitutes for each deputation shall be chosen.

Article 330. To be individual of the provincial deputation it is required to be citizen in the exercise of his rights, elder than twenty five years, natural or neighbor of the province with at least seven years of residence, and that has enough to support himself with decency; and none of the employees with appointment of the King of which article 318 talks about might be individual of the deputation.

Article 331. For a person to be elected for a second time four years must have past after having ceased in his functions.

Article 332. When the superior chief of the province could not preside the deputation, the intendant shall preside it, and in absence of him the vocal who was the first appointed.

Article 333. The deputation shall appoint a Secretary, provided with the public funds of the province.

Article 334. Every year the deputation shall have at the most ninety days of sessions distributed in the periods that are considered the best. In the Peninsula the deputations shall be found reunited for the first day of March, and in Overseas for the first day of July.

Article 335. Is responsibility of these deputations:

First. To invest and approve the division done to the towns of the contributions which have fit into to the province.

Second. To look after the good investment of the public funds of the towns and to examine their accounts, so that with its consent the superior approval falls, taking care of that in everything the laws and regulations are observed.

Third. Take care that town councils are established where there should belong one, according to the article 310.

Fourth. If new works of common utility of the province or the reparation of old ones were necessary, to propose to the Government the duties and taxes which they believe more convenient for their execution, in order to obtain the corresponding permission of the Courts. In Overseas, if the urgency of the public orders could not allow the waiting for the solution of the Courts, the deputation with express consent of the chief of the province might use since then the duties and taxes, giving immediately notice to the Government for approval of the Courts. For the collection of the duties the deputation, under its responsibility, shall appoint a depository, and the accounts of the investment, examined by the deputation, they shall be sent to the Government so that they make them recognize and gloss and finally, pass them to the Courts for their approval.

Fifth. To promote the education of the youth according to the approved plans, and to promote the agriculture, the industry and the commerce, protecting the investors of new discoveries in any of these branches.

Sixth. Give notice to the Government of the abuses that they find in the administration of the public rents.

Seventh. To form the census and the statistics of the provinces.

Eighth. Take care that the merciful and charity establishments fulfill their respective objective, proposing to the Government the rules which are esteemed to be convenient for the reform of the abuses that they shall observe.

Ninth. Give notice to the Courts of the infractions to the Constitution observed in the province.

Tenth. The deputations of the Overseas provinces shall look after the economy, order and progress of the mission for the conversion of the unfaithful Indians, whose responsible shall report on their operations in this branch, to avoid the abuses: everything which the deputations shall give in notice of the Government.

Article 336. If any deputation shall abuse of its faculties, the King might suspend the vocals that form it, giving notice to the Courts of this deposition and the reasons of it for the corresponding termination: during the suspension the substitutes shall enter in functions.

Article 337. All the individuals of the town council and of the province deputations, at the moment of entering in their functions, they shall present oath, the first in hands of the political chief, where there was one, or in lack of this the mayor who

was appointed first, and the second in the hands of the superior chief of the province, to observe the political Constitution of the Spanish Monarchy, observe the laws and be faithful to the King, and to obey religiously the obligations of their entrustment.

TITLE VII OF THE CONTRIBUTIONS

Sole Chapter

Article 338. The Courts shall establish or annually confirm the contributions, whether direct or indirect, general, provincial or municipal, subsisting the old ones, it is enough that its derogation is published or the imposition of others.

Article 339. The contributions shall be divided amongst all the Spaniards proportionally to their faculties, without exception or privilege at all.

Article 340. The contributions shall be proportional to the expenses decreed by the Courts for the public services in all the branches.

Article 341. In order for the Court to be able to fix the expenses in all the branches of the public service, and the contributions which shall cover for them, the Secretary of the Dispatch of Treasury shall present them, after the Courts are reunited, the general budget of those which are considered precise, collecting from each of the other secretaries of the Dispatch the respective of their branch.

Article 342. The Secretary of the Dispatch of Treasury himself shall present with the expenses budget the plan of the contributions which are to be imposed to cover them.

Article 343. If in opinion of the King any contribution might seem burdensome or detrimental, He shall express it to the Courts by means of the Secretary of the Dispatch of Treasury, presenting at the same time that which He considers more convenient to substitute.

Article 344. Once fixed the due of the direct contribution, the Courts shall approve the division of it amongst the provinces, each of one shall be assigned the corresponding quota to their wealth, for which the Secretary of the Dispatch of Treasury shall present also the necessary budgets.

Article 345. There shall be a general treasury for the entire Nation, which shall dispose of all the products of any rent destined to the service of the State.

Article 346. There shall be in every province a treasury, in which all the wealth collected in her for the Exchequer shall enter. These treasuries shall be in correspondence with the general treasury, who shall have all of their funds to its disposal.

Article 347. No payment shall be admitted in count to the general treasurer, if it were not done in virtue of a decree of the King, ratified by the Secretary of the Dispatch of Treasury, in which is expressed the expense to which its import is destined, and the decree of the Courts with which it is authorized.

Article 348. In order for the general treasury to keep his count with the purity it corresponds, the position and the information shall be inspected respectively by the accounting office of values and distribution of the public rent.

Article 349. A particular regulation shall arrange these offices so that they serve for the purposes of their institute.

Article 350. For the examination of all the accounts of public wealth there shall be a major accounting office of accounts which shall be organized by a special Law.

Article 351. The account of the general treasury which shall comprehend the annual yield of all the contributions and rents, and its investment, after it receives the approval of the Courts it shall be printed, published and circulated to the provincial deputations and to the town councils.

Article 352. On the same manner they shall be printed, published and circulated the reports given by the secretaries of the Dispatch of the expenses done in their respective branches.

Article 353. The management of the public treasury shall always be independent from every other authority than that to which it is entrusted.

Article 354. There should not be customs but in the sea ports and in the frontiers; this disposition should not have effect until the Courts determine so.

Article 355. The recognized public debt shall be one of the first attentions of the Courts, and these shall pay the most attention that its progressive extinction shall be verifying, and always the payment of the interests in the part that accrues them, arranging everything concerning to the direction of this important branch, both regarding the duties and taxes established, which shall be managed with absolute separation of the general treasury, and regarding the offices of accounts and reason.

TITLE VIII OF THE NATIONAL MILITARY FORCE

Chapter I

Of the troops of continuous service

Article 356. There shall be a permanent national military force, of land and sea, for the external defense of the State and the preservation of the internal order.

Article 357. The Courts shall fix annually the number of troops that were necessary according to the circumstances and the manner of raising those which were more convenient.

Article 358. The Courts shall fix as well annually the number of ships of the military marine which shall be armed and kept armed.

Article 359. The Courts shall establish by means of the respective ordinances everything regarding to the discipline, order of promotions, salaries, administration and everything related to the good constitution of the army and navy.

Article 360. Military schools shall be established for the teaching and instruction of all the different arms of the army and navy.

Article 361. No Spaniard might excuse of the military service, when and in the form in which he were called by the Law.

Chapter II

Of the national militias

Article 362. In each province there shall be corps of national militias, formed of inhabitants of each of them, proportionally to their population and circumstances.

Article 363. They shall be arranged by a particular ordinance the manner of their formation, its number and special contribution in all of its branches.

Article 364. The service of these militias shall not be continuous, and shall only take place when the circumstances require so.

Article 365. In necessary case the King might dispose of this force within the respective province, but He could not use it out of it without permission of the Courts.

TITLE IX

OF THE PUBLIC INSTRUCTION

Sole Chapter

Article 366. In all the towns of the Monarchy schools of first letters shall be established, in which children shall be taught to read, write and count, and the catechism of the catholic religion, which shall comprehend also a brief exposition of the civil obligations.

Article 367. Likewise it shall be arranged and created the competent number of universities and other instruction establishments that are judged to be convenient for the teaching of all the sciences, literature and fine arts.

Article 368. The general teaching plan shall be uniform in the entire kingdom, having to be explained the political Constitution of the Monarchy in all the universities and literary establishments and where the ecclesiastical and political sciences are taught.

Article 369. There shall be a general direction of studies, formed of persons of known instruction, who shall be in charge, under the authority of the Government, the inspection of the public teaching.

Article 370. The Courts by means of plans and special statutes shall arrange whatever belongs to the important objective of the public instruction.

Article 371. All the Spaniard have the liberty to write, print and publish their political ideas without necessity of a license, revision or approval at all before the publication, under the restrictions and responsibilities established by the laws.

TITLE X
OF THE OBSERVANCE OF THE CONSTITUTION AND THE MANNER
TO PROCEED TO DO VARIATIONS IN IT

Sole Chapter

Article 372. The Courts during their first sessions shall take into consideration the infractions to the Constitution, which were made present to them, to put the convenient remedy and make effective the responsibility of those who shall contravened to her.

Article 373. Every Spaniard has right to represent the Courts or the King to claim the observance of the Constitution.

Article 374. Every person who exercises a public, civil, military or ecclesiastical position shall present oath, at the moment of taking possession of his destiny, to keep the Constitution, be faithful to the King and to carry out duly his entrustment.

Article 375. Until after eight years of putting in practice the Constitution in all of its parts, alteration, addition or reform in any of its articles might be proposed.

Article 376. In order to make any alteration, addition or reform in the Constitution it shall be necessary that the deputation who shall decree it definitively comes authorized with special powers for this purpose.

Article 377. Any proposition of reform in any article of the Constitution shall be done in written, and be supported and signed at least by twenty deputies.

Article 378. The proposition of reform shall be taken by three times, with the interval of six days from one reading to another; and after the third they shall deliberate if they grant or dismiss the discussion.

Article 379. Once admitted the discussion, they shall proceed in it under the same formalities and procedure which are prescribe for the formation of laws, after of which the voting to grant the petition to treat again the same discussion in the following general deputation shall be proposed: and so that it is declared so, two third parts of the votes shall agree.

Article 380. The following general deputation, previous the same formalities in all its parts, might declare in any of the two years of its sessions, agreeing on it two third parts of the votes, to grant the awarding of special powers to do the reform.

Article 381. Once done this declaration, it shall be published and communicated to all the provinces and according to the time in which it shall be done, the Courts shall determine if it shall be the immediately proximate Deputation of the following to the latter, the one who shall bring the special powers.

Article 382. These powers shall be awarded by the electoral province Boards, adding to the ordinary powers the following clause:

Likewise they are granted with a special power to do in the Constitution the reform of which the decree of the Courts is about, of which contents is the following: (here the decree liter-

ally). Everything with arrange to what is prevented by the Constitution itself. And they oblige to recognize and to have for constitutional whatever that in virtue of it they shall establish.

Article 383. The reform proposed shall be discussed again; and if it were approved by two third parts of the deputies, it shall pass to be constitutional Law, and as such it shall be published in the Courts.

Article 384. A deputation shall present the decree of reform to the King, so that He orders to publish and circulate it to all the authorities and towns of the Monarchy.

Cádiz, March eighteen of the year eighteen hundred and twelve.

TRATADOS DE CÓRDOBA

TRATADOS DE CÓRDOBA

Córdoba, Veracruz, 24 de agosto de 1821

17 artículos

Artículo 1. Esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano.

Artículo 2. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional moderado.

Artículo 3. Será llamado a reinar en el imperio mexicano (previo el juramento que designa el art. 4º del plan) en primer lugar el señor don Fernando VII, Rey Católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano, el serenísimo señor Infante don Carlos; por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor Infante don Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el señor don Carlos Luis, Infante de España, antes heredero de Etruria, hoy de Luca; y por la renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del imperio designaren.

Artículo 4. El emperador fijará su corte en México, que será la capital del imperio.

Artículo 5. Se nombrarán dos comisionados por el Excmo. Señor O'Donojú, los que pasarán a las Cortes de España a poner en las reales manos del señor don Fernando VII copia de este tratado y exposición que le acompañará para que le sirva a S. M. de antecedente, mientras las Cortes del imperio le ofrecen la corona con todas las formalidades y garantías que asunto de tanta importancia exige; y suplican a S. M. que, en el caso del art. 3, se digne noticiarlo a los serenísimos señores infantes llamados por el mismo artículo por el orden que en él se nombran, interponiendo su benigno influjo para que sea una persona de las señaladas de su augusta casa la que venga a este imperio, por lo que se interesa en ello la prosperidad de ambas naciones, y por la satisfacción que recibirán los mexicanos en añadir este vínculo a los demás de amistad con que podrán y quieren unirse a los españoles.

Artículo 6. Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del imperio, por sus virtudes, por sus destinos, por sus fortunas, representación y concepto, de aquellos que están designados por la opinión general, cuyo número sea bastante considerado para que la reunión de

luces asegure el acierto en sus determinaciones, que serán emanaciones de la autoridad y facultades que les conceden los artículos siguientes.

Artículo 7. La junta de que trata el artículo anterior se llamará Junta Provisional Gubernativa.

Artículo 8. Será individuo de la Junta Provisional de Gobierno el Teniente General Don Juan O'Donojú, en consideración a la conveniencia de que una persona de su clase tenga una parte activa e inmediata en el gobierno, y de que es indispensable omitir algunas de las que estaban señaladas en el expresado plan en conformidad de su mismo espíritu.

Artículo 9. La Junta Provisional de Gobierno tendrán un Presidente nombrado por ella misma, y cuya elección recaerá en uno de los individuos de su seno, o fuera de él, que reúna la pluralidad absoluta de sufragios; lo que si en la primera votación no se verificase, se procederá a segundo escrutinio, entrando a él los dos que hayan reunido más votos.

Artículo 10. El primer paso de la Junta Provisional de Gobierno será hacer un manifiesto al público de su instalación y motivos que la reunieron, con las demás explicaciones que considere convenientes para ilustrar al pueblo sobre sus intereses y modo de proceder en la elección de diputados a Cortes, de que se hablará después.

Artículo 11. La Junta Provisional de Gobierno nombrará, en seguida de la elección de su Presidente, una Regencia compuesta de tres personas, de su seno o fuera de él, en quien resida el Poder Ejecutivo y que gobierne en nombre del monarca hasta que éste empuñe el cetro del imperio.

Artículo 12. Instalada la Junta Provisional, gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se oponga al Plan de Iguala, y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado.

Artículo 13. La Regencia, inmediatamente después de nombrada, procederá a la convocación de Cortes, conforme al método que determinare la Junta Provisional de Gobierno; lo que es conforme al espíritu del art. 24 del citado plan.

Artículo 14. El Poder Ejecutivo reside en la Regencia, el Legislativo en las Cortes; pero como ha de mediar algún tiempo antes que éstas se reúnan, para que ambos no recaigan en una misma autoridad, ejercerá la Junta el Poder Legislativo: primero, para los casos que puedan ocurrir y que no den lugar a esperar la reunión de las Cortes, y entonces procederá de acuerdo con la Regencia: segundo, para servir a la Regencia de cuerpo auxiliar y consultivo en sus determinaciones.

Artículo 15. Toda persona que pertenece a una sociedad, alterado el sistema de gobierno, o pasando el país a poder de otro príncipe, queda en el estado de libertad natural para trasladarse con su fortuna adonde le convenga, sin que haya derecho a privarle de esta libertad, a menos que tenga contraída alguna deuda con la sociedad a que pertenecía, por delito o de otro de los modos que conocen los publicistas.

En este caso están los europeos avecindados en Nueva España y los americanos residentes en la Península; por consiguiente, serán árbitros a permanecer, adoptando

ésta o aquella patria, o a pedir su pasaporte, que no podrá negárseles, para salir del reino en el tiempo que se prefije, llevando o trayendo consigo sus familias y bienes; pero satisfaciendo a la salida, por los últimos, los derechos de exportación establecidos o que se establecieren por quien pueda hacerlo.

Artículo 16. No tendrá lugar la anterior alternativa respecto de los empleados públicos o militares, que notoriamente son desafectos a la independencia mexicana; sino que éstos necesariamente saldrán de este imperio, dentro del término que la Regencia prescriba, llevando sus intereses y pagando los derechos de que habla el artículo anterior.

Artículo 17. Siendo un obstáculo a la realización de este tratado, la ocupación de la capital por las tropas de la península, se hace indispensable vencerlo; pero como el primer jefe del ejército imperial, uniendo sus sentimientos a los de la Nación Mexicana, desea no conseguirlo con la fuerza, para lo que le sobran recursos, sin embargo del valor y constancia de dichas tropas peninsulares, por la falta de medios y arbitrios para sostenerse contra el sistema adoptado por la Nación entera, Don Juan O'Donojú se ofrece a emplear su autoridad, para que dichas tropas verifiquen su salida sin efusión de sangre y por una capitulación honrosa.

Villa de Córdoba, 24 de agosto de 1821. *Agustín de Iturbide. Juan O'Donojú.* Es copia fiel de su original. *José Domínguez.* Es copia fiel de la original que queda en esta comandancia general. *José Joaquín de Herrera.* Como ayudante secretario. *Tomás Illáñez.*

TREATIES OF CÓRDOBA

Córdoba, Veracruz, August 24th, 1821

17 articles

Article 1. This kingdom of America shall be recognized as a sovereign and independent nation; and shall, in future, be called the Mexican Empire.

Article 2. The government of the empire shall be monarchical, limited by a constitution.

Article 3. Ferdinand VII, catholic king of Spain, shall, in the first place, be called to the throne of the Mexican Empire, (on taking the oath designated on the article 4 of the plan,) and on his disclaim or non admission, his brother, the most serene infante Don Carlos; on his disclaim or non admission, the most serene infante Don Francisco de Paula; on his disclaim or non admission, the most serene Don Carlos Luis, infante of Spain, formerly heir of Tuscany, now of Luca; and upon his disclaim or non admission, the person whom the courts of the empire shall designate.

Article 4. The emperor shall fix his court in México, which shall be the capital of the empire.

Article 5. Two commissioners shall be appointed by his Excellency Señor O'Donoju, and these shall proceed to the Courts of Spain, and lie on the royal hands of Señor Don Ferdinand VII, a copy of this treaty, and exposition which will accompany it, in order to serve as case history to his Majesty, whilst the Courts of the empire offer him the crown with all the formalities and guarantees which a matter of so much importance requires; and they plead to his Majesty, that on the occurrence of the case provided for in Article 3, he would deign to notify it to the most serene señores infantes called in the same article in the order in which they are so named, interposing his kind influence so that it is one person of the indicated from his august home who shall be the one that comes to this empire, on account that the prosperity of both nations is interested on it and the satisfaction the Mexicans would feel in thus strengthening the bands of friendship, with which they may be, and wish to see themselves, united to the Spaniards.

Article 6. It shall be immediately named, according to the spirit of the *Plan de Iguala*, a board formed by the foremost men of the empire on account of their virtues, their rank, their fortunes, representation and witticism; of those who are designated by the general opinion, whose number may be sufficiently considerable in order that their collective knowledge insures the safety of their resolutions which will be emanations of the authority, and faculties that the following articles grant them.

Article 7. The assembly mentioned in the preceding article shall be called Provisional Governmental Board.

Article 8. Lieutenant-General Don Juan O'Donoju shall be a member of the Provisional Governmental Board, in consideration to the convenience of a person

of his class has an active and immediate part in the government, and that that it is an indispensable necessity to exclude some of which were mentioned in the previously mentioned plan according to itself.

Article 9. The Provisional Board of Government shall have a president named by the Board itself and whose election shall rely on one of the individuals from its own body, or from without it, to be determined by the absolute plurality of votes; and if on the first scrutiny this does not occur, a second scrutiny shall take place, which shall embrace those two who shall have received the greatest number of votes.

Article 10. The first act of the Provisional Board of Government shall be the drawing up of a manifesto of its installation, and the motives of its assemblage, with whatever explanations it may deem convenient for the information of the country on its interests and mode to proceed in the elections of deputies for the Courts, of which more shall be said hereafter.

Article 11. The Provisional Board of Government after the election of its president, shall name a regency composed of three people selected from its own body, or from without it, in whom shall be vested the executive power, and who shall govern on behalf of the monarch till the vacant throne be filled.

Article 12. The Provisional Board as soon as it is installed shall govern *ad interim* according to the existing laws, so far as they may not be contrary to the *Plan de Igualdad* and until the Courts shall have framed the Constitution of the State.

Article 13. The regency immediately on its nomination shall proceed to the convocation of the Courts in the manner which shall be prescribed by the Provisional Board of Government, conformably to the spirit of the article of the aforesaid plan.

Article 14. The Executive power is vested in the Regency, and the Legislative in the Courts; but as some time must elapse before the latter can assemble, and in order that the executive and legislative powers should not remain in the hands of one body, the Board shall be empowered to legislate; firstly, for those cases that may occur which are too pressing to wait till the assemblage of the Courts, and then the board shall proceed in concord with the Regency; secondly, to assist the Regency on its determinations in the character of an auxiliary and consultative body.

Article 15. Every individual who is domiciled amongst any community, shall, on an alteration taking place in the system of government, or on the country passing under the dominion of another prince, be at full liberty to remove himself, together with his effects, to whatever country he chooses, without any person having the right to deprive him of such liberty, unless he have contracted some obligation with the community to which he had belonged, by the commission of a crime, or by any other of those modes which publicists have laid down; this applies to the Europeans residing in New Spain, and to the Americans residing in the Peninsula. Consequently it will be at their option to remain, adopting either country, or to demand their passports, (which cannot be denied them,) for permission to leave the kingdom at such time as may be appointed before-hand, carrying with them their families and property; but

paying on the latter the regular export duties now in force, or which may hereafter be established by the competent authority.

Article 16. The option granted in the foregoing article shall not extend to persons in public situations, whether civil or military, known to be disaffected to Mexican independence; such persons shall necessarily quit the empire within the time which shall be allotted by the regency, taking with them their effects after having paid the duties, as stated in the preceding article.

Article 17. The occupation of the capital by the Peninsular troops being an obstacle to the execution of this treaty, it is indispensable to have it removed. But as the Commander-in-Chief of the imperial army fully participating in the sentiments of the Mexican nation, does not wish to attain this object by force, for which, however, he has more than ample means at his command, notwithstanding the known valor and constancy of the Peninsular troops, who are not in a situation to maintain themselves against the system adopted by the nation at large, Don Juan O'Donoju agrees to exercise his authority for the evacuation of the capital by the said troops without loss of blood, and upon the terms of an honorable capitulation.

Villa de Córdoba, on August 24, 1821. *Agustín de Iturbide. Juan. O'Donojú.* It is a faithful copy of the original. *José Domínguez.* It is a faithful copy of the original which is in this general command. *José Joaquín de Herrera.* As assistant Secretary. *Tomás Illáñez.*

CONSTITUCIÓN FEDERAL
DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, 4 de octubre de 1824

TÍTULO I

Sección Única

De la Nación Mexicana, su Territorio y Religión

Art. 1. Libertad e independencia de la Nación Mexicana.

Art. 2. Composición de la Nación Mexicana.

Art. 3. Catolicismo como religión oficial de la Nación Mexicana.

TÍTULO II

Sección Única

De la forma de gobierno de la Nación

Art. 4. República como forma de gobierno de la Nación Mexicana.

Art. 5. Estados y Territorios de la Federación.

Art. 6. División de Poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

TÍTULO III

DEL PODER LEGISLATIVO

Sección Primera

De su naturaleza y modo de ejercerlo

Art. 7. Congreso General y división en Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Sección Segunda

De la Cámara de Diputados

- Art. 8.* Población como base para el nombramiento de Diputados por dos años.
- Art. 9.* Cualidades de los electores.
- Art. 10.* Base general para el nombramiento de Diputados por la población.
- Art. 11.* Número de población como base para la elección de Diputados.
- Art. 12.* Censo en la población cada cinco años.
- Art. 13.* Diputados Suplentes.
- Art. 14.* Diputados Propietarios y Suplentes por los Territorios.
- Art. 15.* Diputados por Territorio.
- Art. 16.* Elección indirecta de Diputados, en octubre anterior a la renovación.
- Art. 17.* Remisión de los testimonios de las Actas de Elección a las Juntas Electorales.
- Art. 18.* Testimonios por el Presidente del Consejo de Gobierno en elección de Diputados.
- Art. 19.* Requisitos para ser Diputado.
- Art. 20.* Vecindad en el Territorio de la Nación para ser Diputados.
- Art. 21.* Excepciones para el requisito de vecindad.
- Art. 22.* Elección de Diputados por razón de vecindad.
- Art. 23.* Quiénes no pueden ser Diputados.
- Art. 24.* Cesación de impedimentos para ser Diputados con seis meses de antelación.

Sección Tercera

De la Cámara de Senadores

- Art. 25.* Composición de la Cámara de Senadores.
- Art. 26.* Cesación del cargo de Senador.
- Art. 27.* Vacantes de Senadores.
- Art. 28.* Requisitos para ser Senador.
- Art. 29.* Impedimentos para ser Senador.
- Art. 30.* Elección de Senadores.
- Art. 31.* Cargo de Senador es preferente.
- Art. 32.* Elección periódica de Senadores.
- Art. 33.* Procedimiento al concluir la elección de Senadores.

Sección Cuarta

De las funciones económicas de ambas Cámaras y prerrogativas de sus individuos

- Art. 34.* Reglamento de las Cámaras.
- Art. 35.* Calificación de las elecciones por las Cámaras.
- Art. 36.* Mínimo de miembros para abrir a sesiones las Cámaras.
- Art. 37.* Comunicaciones de las Cámaras a través de los Secretarios o Diputaciones.
- Art. 38.* Cámaras como Gran Jurado de Acusaciones.

- Art. 39.* Cámara de Representantes como Gran Jurado, en casos de Ministros o Presidente.
- Art. 40.* Cámara como Gran Jurado y mínimo de miembros presentes para formación de causa.
- Art. 41.* Proyectos de Ley.
- Art. 42.* Inviolabilidad por opiniones en el desempeño de sus funciones.
- Art. 43.* Causas criminales contra Senadores y Diputados.
- Art. 44.* Efectos cuando haya lugar a la formación de la causa.
- Art. 45.* Indemnización de Diputados y Senadores.
- Art. 46.* Efectos de sus resoluciones.

Sección Quinta

De las Facultades del Congreso General

- Art. 47.* Las resoluciones del Congreso General son leyes o decretos.
- Art. 48.* Resoluciones del Congreso, debe constar la firma del Presidente.
- Art. 49.* Objeto de las leyes o decretos.
- Art. 50.* Facultades del Congreso General.

Sección Sexta

De la formación de las leyes

- Art. 51.* Formación de las leyes por cualquiera de las dos Cámaras.
- Art. 52.* Iniciativas de leyes o decretos.
- Art. 53.* Discusión en ambas Cámaras las leyes o decretos.
- Art. 54.* Proyectos o leyes desechados.
- Art. 55.* Leyes o decretos aprobados, deben ser firmados y publicados por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
- Art. 56.* Facultad de veto del Presidente.
- Art. 57.* Término en que el Ejecutivo debe regresar los proyectos de leyes o decretos, y su sanción.
- Art. 58.* Proyectos de ley o decretos desechados por primera vez en su totalidad.
- Art. 59.* Proyectos de ley o decretos aprobados en segunda revisión, término para regresarlos a la Cámara de origen.
- Art. 60.* Publicación de leyes o decretos aprobados en segunda revisión y su publicación.
- Art. 61.* Leyes o decretos reprobados por segunda vez se tendrán por desechados.
- Art. 62.* Adiciones de la Cámara revisora a los proyectos o leyes.
- Art. 63.* Adiciones reprobadas por primera vez.
- Art. 64.* Interpretación, modificación o revocación de leyes o decretos.
- Art. 65.* Formalidades de las comunicaciones del Congreso General dirigidas al Presidente de la República.
- Art. 66.* Quórum necesario para la formación de ley o decreto.

Sección Séptima

Del tiempo, duración y lugar de las Sesiones del Congreso General

- Art. 67.* Reunión obligatoria del Congreso General.
- Art. 68.* Asistencia del Presidente de la República a la reunión anual del Congreso General.
- Art. 69.* Sesiones Ordinarias del Congreso General.
- Art. 70.* Espacio físico oficial para la realización de las Sesiones del Congreso General.
- Art. 71.* Fecha del cierre de las Sesiones Ordinarias del Congreso General.
- Art. 72.* Formación de las Sesiones Extraordinarias del Congreso General.
- Art. 73.* Comunicación de los cambios de las sesiones al Presidente de la República.

TÍTULO IV

DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

De las personas en quien se deposita y de su elección

- Art. 74.* Personas únicas en quien se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación.
- Art. 75.* Existencia de la figura del Vicepresidente en caso de sustitución del Presidente del Supremo Poder Ejecutivo de la Federación.
- Art. 76.* Requisitos para ocupar el cargo de Presidente o Vicepresidente del Supremo Poder Conservador.
- Art. 77.* Posibilidad de reelección del Presidente del Supremo Poder Conservador.
- Art. 78.* Lealtad al cargo de Presidente del Supremo Poder Conservador.
- Art. 79.* Elección de dos individuos por parte de las Legislaturas de los Estados el año próximo anterior en el que deba entrar en el ejercicio de las funciones el Presidente de la República.
- Art. 80.* Remisión del Acta de las Elecciones mencionadas en el artículo 79.
- Art. 81.* Fecha de apertura y lectura de testimonios de las Actas mencionadas en el artículo anterior.
- Art. 82.* Informe del testimonio de las actas de la elección mencionada en el artículo 79.
- Art. 83.* Calificación y enumeración de los votos.
- Art. 84.* Mayoría absoluta de votos de las Legislaturas, para ocupar el cargo de Presidente.
- Art. 85.* Elección del Presidente por mayoría de votos.
- Art. 86.* Elección del Presidente por parte de la Cámara de Diputados en caso de la inexistencia de mayoría.

- Art. 87.* Elección del Presidente y Vicepresidente por parte de la Cámara de Diputados en caso de empate en la mayoría de las elecciones.
- Art. 88.* Elección de Presidente y Vicepresidente por parte de la Cámara de Diputados en caso de empate del segundo lugar de la mayoría de las elecciones.
- Art. 89.* Decisión de la elección en caso de igual número de votos en las elecciones.
- Art. 90.* Casos de repetición de las elecciones.
- Art. 91.* Reducción de competidores en el caso de la obtención de mayoría en las elecciones tratándose de tres candidatos.
- Art. 92.* Reglas generales en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.
- Art. 93.* Votaciones sobre calificación en base a los Estados.
- Art. 94.* Quórum necesario en la deliberación de asuntos comprendidos en el artículo 93.

Sección Segunda

De la duración del Presidente y Vicepresidente, del modo de llenar las faltas de ambos y de su juramento

- Art. 95.* Fecha legal para el inicio de las funciones del Presidente y Vicepresidente.
- Art. 96.* Nombramiento del Presidente interino.
- Art. 97.* Nombramiento de Presidente o Vicepresidente interino en caso de impedimento temporal del candidato electo.
- Art. 98.* Responsabilidad del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en la tutela de Supremo Poder Ejecutivo durante el tiempo de elecciones.
- Art. 99.* Caso de elección por parte de las Legislaturas de los Estados cuando existe imposibilidad perpetua de los candidatos electos para ocupar el cargo.
- Art. 100.* No impedimento de la realización de las elecciones periódicas en caso de que las últimas hubieren sido llevadas a cabo por las Legislaturas de los Estados.
- Art. 101.* Obligación del Presidente y Vicepresidente de asistir al lugar de residencia oficial de los Supremos Poderes de la Federación en la fecha legal indicada a efecto de presentar juramento.
- Art. 102.* Consecuencia de la falta de juramento.
- Art. 103.* Obligación del Presidente para prestar juramento anterior al del Vicepresidente para de entrar en ejercicio de funciones ambos.
- Art. 104.* Juramento del Presidente y Vicepresidente ante las Cámaras.

Sección Tercera

De las Prerrogativas del Presidente y Vicepresidente

- Art. 105.* Facultad del Presidente en la realización de propuestas o reformas de ley.
- Art. 106.* Facultad del Presidente en la realización de observaciones a las leyes y decretos en una sola ocasión.

- Art. 107.* Acusación del Presidente durante el tiempo de su encargo ante las Cámaras por comisión de delitos prevenidos en el artículo 38.
- Art. 108.* Término para la acusación del Presidente ante las Cámaras concluido el tiempo de su encargo, por la comisión de delitos prevenidos en el artículo 38.
- Art. 109.* Acusación del Vicepresidente durante el tiempo de su encargo ante las Cámaras por la comisión de delito indistinto.

Sección Cuarta

De las atribuciones del Presidente y restricciones de sus facultades

- Art. 110.* Atribuciones del Presidente.
- Art. 111.* Fórmula legal utilizada para la publicación de leyes y decretos.
- Art. 112.* Restricciones de las facultades del Presidente.

Sección Quinta

Del Consejo de Gobierno

- Art. 113.* Existencia de Consejo de Gobierno.
- Art. 114.* Formación del Consejo durante los dos primeros años.
- Art. 115.* Figura en que recae la Presidencia del Consejo.
- Art. 116.* Atribuciones del Consejo.

Sección Sexta

Del despacho de los negocios de gobierno

- Art. 117.* Número establecido por ley de los secretarios necesarios para el despacho de los negocios de gobierno.
- Art. 118.* Firma del Secretario de Despacho respectivo en los decretos y órdenes del Presidente para su obediencia.
- Art. 119.* Responsabilidad de los secretarios de despacho en los actos que del Presidente autorizados con la firma.
- Art. 120.* Obligación anual del rendimiento de cuentas del ramo respectivo ante las Cámaras.
- Art. 121.* Requisitos de elegibilidad para el cargo de Secretario de Despacho.
- Art. 122.* Formación del Reglamento para la Distribución y giro de los Negocios del Gobierno.

TÍTULO V

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

De la naturaleza y distribución de este Poder

- Art. 123.* Poder Judicial de la Federación.

Sección Segunda

De la Corte Suprema de Justicia y de la elección, duración, y juramento de sus miembros

- Art. 124.* Composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 125. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 126. Carácter de perpetuidad del cargo dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 127. Elecciones de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 128. Envío de lista certificada del resultado de las elecciones por parte de las Legislaturas de los Estados al Presidente del Consejo de Gobierno.
Art. 129. Obligación del Consejo de dar curso a las listas según lo prevenido en el respectivo Reglamento.
Art. 130. Apertura de las listas en presencia del Congreso General reunido.
Art. 131. Calificación de las elecciones por medio de la Comisión dictaminadora del Congreso General.
Art. 132. Nombramiento de los Ministros por mayoría de votos de la legislatura.
Art. 133. Elección sucesiva de Ministros en forma de complementación para la cantidad requerida por ley.
Art. 134. Preferencia de Diputados y Senadores al cargo de Ministro o Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de resultar electos.
Art. 135. Reemplazo de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 136. Juramento de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Sección Tercera

De las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia

- Art. 137.* Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 138. Existencia de Ley Reglamentaria de la Corte Suprema de Justicia.

Sección Cuarta

Del modo de juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia

- Art. 139.* Procedimiento para juzgar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Sección Quinta

De los Tribunales de Circuito

- Art. 140.* Composición de los Tribunales de Circuito.
Art. 141. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Juez de Circuito.
Art. 142. Competencia de los Tribunales de Circuito.

Sección Sexta

De los Juzgados de Distrito

Art. 143. Composición y competencia de los Juzgados de Distrito.

Art. 144. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Juez de Distrito.

Sección Séptima

Reglas Generales a que se sujetará en todos los Estados y Territorios de la Federación la Administración de Justicia

Art. 145. Fe pública y crédito de los actos, registros y procedimiento de los Jueces y autoridades del Estado.

Art. 146. Merecimiento de la pena de infamia.

Art. 147. Prohibición de la pena de confiscación.

Art. 148. Prohibición de la retroactividad de la ley y de los juicios por comisión.

Art. 149. Prohibición en la aplicación de tormentos.

Art. 150. Prohibición de girar orden de aprehensión sin existencia de prueba semi-plena.

Art. 151. Prohibición de la detención por más de 72 horas.

Art. 152. Prohibición de girar orden de cateo en las casas.

Art. 153. Derecho a no rendir prueba testimonial en materia criminal.

Art. 154. Sujeción a las autoridades de los militares y eclesiásticos.

Art. 155. Procedencia del pleito en lo civil y en lo criminal.

Art. 156. Derecho de Audiencia.

TÍTULO VI

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

Del gobierno particular de los Estados

Art. 157. División de Poderes en cada Estado.

Art. 158. Poder Legislativo y su lugar de residencia.

Art. 159. Período de tiempo limitado para ejercicio el Poder Ejecutivo.

Art. 160. Ejercicio del Poder Judicial por medio de tribunales.

Sección Segunda

De las Obligaciones de los Estados

Art. 161. Obligación de los Estados.

Sección Tercera

De las restricciones de los Poderes de los Estados

Art. 162. Restricciones de los Poderes de los Estados.

TÍTULO VII
Sección Única

De la observancia, interpretación y Reforma de la Constitución y Acta Constitutiva

- Art. 163.* Juramento a la Constitución y Acta Constitutiva de los funcionarios públicos.
- Art. 164.* Facultad del Congreso para emitir leyes y decretos.
- Art. 165.* Facultad de Congreso General para realizar aclaraciones de leyes y preceptos de la Constitución y del Acta Constitutiva.
- Art. 166.* Ingerencia de las Legislaturas de los Estados sobre observaciones de preceptos Constitucionales y del Acta Constitutiva.
- Art. 167.* Procedimiento para la calificación de las observaciones realizadas por las Legislaturas de los Estados.
- Art. 168.* Realización de las observaciones por parte de las Legislaturas de los Estados.
- Art. 169.* Importancia de las reformas o adiciones propuesta en los años siguientes al 30.
- Art. 170.* Importancia del seguimiento de los requisitos prevenidos para la formación de leyes.
- Art. 171.* Prohibición de reformar los artículos relacionados con la libertad e independencia de la religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, división de Poderes de la Federación y de los Estados de la Nación Mexicana.

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

México, 4 de octubre de 1824

171 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO I

Sección Única.

De la Nación Mexicana, su territorio y religión

TÍTULO II

Sección Única.

*De la forma de gobierno de la Nación, de sus partes integrantes,
y división de su Poder Supremo*

TÍTULO III.

DEL PODER LEGISLATIVO

Sección Primera. *De su naturaleza y modo de ejercerlo*

Sección Segunda. *De la Cámara de Diputados*

Sección Tercera. *De la Cámara de Senadores*

Sección Cuarta. *De las funciones económicas de ambas cámaras y prerrogativas de sus individuos*

Sección Quinta. *De las facultades del Congreso General*

Sección Sexta. *De la formación de las leyes*

Sección Séptima. *Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso General*

TÍTULO IV.
DEL SUPREMO PODER
EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN

- Sección Primera. *De las personas en quien se deposita y de su elección*
Sección Segunda. *De la duración del Presidente y Vicepresidente, del modo de llenar las faltas de ambos y de su juramento*
Sección Tercera. *De las prerrogativas del Presidente y Vicepresidente*
Sección Cuarta. *De las atribuciones del Presidente y restricciones de sus facultades*
Sección Quinta. *Del Consejo de Gobierno*
Sección Sexta. *Del despacho de los negocios del gobierno*

TÍTULO V.
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- Sección Primera. *De la naturaleza y distribución de este poder*
Sección Segunda. *De la Corte de Justicia y de la elección, duración y juramento de sus miembros*
Sección Tercera. *De las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia*
Sección Cuarta. *Del modo de juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia*
Sección Quinta. *De los Tribunales de Circuito*
Sección Sexta. *De los Juzgados de Distrito*
Sección Séptima. *Reglas generales a que se sujetará en todos los Estados y territorios de la federación la administración de justicia*

TÍTULO VI.
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

- Sección Primera. *Del gobierno particular de los Estados*
Sección Segunda. *De las obligaciones de los Estados*
Sección Tercera. *De las restricciones de los poderes de los Estados*

- TÍTULO VII
- Sección Única. *De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva*

EL SUPREMO PODER EJECUTIVO, nombrado provisionalmente por el Soberano Congreso General de la Nación, a todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed:

Que el mismo Soberano Congreso ha decretado y sancionado la siguiente:

CONSTITUCIÓN FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS¹

En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad: El Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta lo siguiente:

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO I

Sección Única

De la Nación Mexicana, su territorio y religión

Artículo 1. La Nación Mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquiera otra potencia.

Artículo 2. Su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes Nueva España, el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y Occidente, y el de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la federación, luego que las circunstancias lo permitan.

Artículo 3. La religión de la Nación Mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.

TÍTULO II

Sección Única

De la forma de gobierno de la Nación, de sus partes integrantes, y división de su Poder Supremo

Artículo 4. La Nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal.

1 Cfr. 500 años de México en Documentación, Siglo XIX. COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: Enciclopedia Política de México. Obra conmemorativa de los 200 años de la Independencia de México, 100 años de la Revolución, VIII Tomos (12 volúmenes), Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, LXI Legislatura, México, 2010.

Artículo 5. Las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes: el Estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el Territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.

Artículo 6. Se divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

TÍTULO III DEL PODER LEGISLATIVO

Sección Primera

De su naturaleza y modo de ejercerlo

Artículo 7. Se deposita el Poder Legislativo de la Federación en un Congreso General. Este se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Sección Segunda

De la Cámara de Diputados

Artículo 8. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos de los estados.

Artículo 9. Las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones conforme a los principios que se establecen en esta Constitución.

Artículo 10. La base general para el nombramiento de diputados será la población.

Artículo 11. Por cada ochenta mil almas se nombrará un diputado, o por una fracción que pase de cuarenta mil. El Estado que no tuviere esta población nombrará sin embargo un diputado.

Artículo 12. Un censo de toda la federación, que se formará dentro de cinco años, y se renovará después cada decenio, servirá para designar el número de diputados que corresponda a cada Estado. Entretanto se arreglarán éstos, para computar dicho número a la base que designa el artículo anterior, y al censo que se tuvo presente en la elección de diputados para el actual Congreso.

Artículo 13. Se elegirá asimismo en cada Estado el número de diputados suplentes que corresponda, a razón de uno por cada tres propietarios, o por una fracción que llegue a dos. Los estados que tuvieren menos de tres propietarios, elegirán un suplente.

Artículo 14. El territorio que tenga más de cuarenta mil habitantes nombrará un diputado propietario y un suplente, que tendrá voz y voto en la formación de leyes y decretos.

Artículo 15. El territorio que no tuviere la referida población nombrará un diputado propietario y un suplente, que tendrá voz en todas las materias. Se arreglarán por una ley particular las elecciones de los diputados de los territorios.

Artículo 16. En todos los estados y territorios de la federación se hará el nombramiento de diputados el primer domingo de octubre próximo anterior a su renovación, debiendo ser la elección indirecta.

Artículo 17. Concluida la elección de diputados, remitirán las juntas electorales, por conducto de su Presidente al del Consejo de Gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones en pliego certificado, y participarán a los elegidos su nombramiento por un oficio que les servirá de credencial.

Artículo 18. El Presidente del Consejo de Gobierno dará a los testimonios de que habla el artículo anterior el curso que se prevenga en el reglamento del mismo consejo.

Artículo 19. Para ser diputado se requiere:

- I. Tener al tiempo de la elección la edad de 25 años cumplidos.
- II. Tener por lo menos dos años cumplidos de vecindad en el Estado que elige, o haber nacido en él, aunque esté avecindado en otro.

Artículo 20. Los no nacidos en el territorio de la Nación Mexicana, para ser diputados, deberán tener, además de ocho años de vecindad en él, ocho mil pesos de bienes raíces en cualquiera parte de la República, o una industria que les produzca mil pesos cada año.

Artículo 21. Exceptuándose del artículo anterior:

- I. Los nacidos en cualquiera otra parte de la América que en 1810 dependía de la España, y que no se haya unido a otra Nación, ni permanezca en dependencia de aquélla, a quienes bastará tener tres años completos de vecindad en el territorio de la federación, y los requisitos del artículo 19.
- II. Los militares no nacidos en el territorio de la República que con las armas sostuvieron la independencia del país, a quienes bastará tener la vecindad de ocho años cumplidos en la Nación, y los requisitos del artículo 19.

Artículo 22. La elección de diputados por razón de la vecindad, preferirá a la que se haga en consideración al nacimiento.

Artículo 23. No pueden ser diputados:

- I. Los que están privados o suspensos de los derechos de ciudadano.
- II. El Presidente y Vicepresidente de la federación.
- III. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia.
- IV. Los secretarios del Despacho y los oficiales de sus secretarías.
- V. Los empleados de hacienda, cuyo encargo se extiende a toda la federación.
- VI. Los gobernadores de los estados o territorios, los comandantes generales, los M. RR. arzobispos y RR. obispos, los gobernadores de los arzobispados y obispados, los provisores y vicarios generales, los jueces de Circuito, y los comisarios generales de hacienda y guerra, por los estados y territorios en que ejerzan su encargo y ministerio.

Artículo 24. Para que los comprendidos en el artículo anterior puedan ser elegidos diputados, deberán haber cesado absolutamente en sus destinos seis meses antes de las elecciones.

Sección Tercera

De la Cámara de Senadores

Artículo 25. El Senado se compondrá de dos senadores de cada Estado, elegidos a mayoría absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad de dos en dos años.

Artículo 26. Los senadores nombrados en segundo lugar, cesarán a fin del primer bienio, y en lo sucesivo los más antiguos.

Artículo 27. Cuando falte algún senador por muerte, destitución u otra causa, se llenará la vacante por la legislatura correspondiente, si estuviere reunida, y no estándolo luego que se reúna.

Artículo 28. Para ser senador se requieren todas las cualidades exigidas en la sección anterior para ser diputado, y además tener al tiempo de la elección la edad de treinta años cumplidos.

Artículo 29. No pueden ser senadores los que no puedan ser diputados.

Artículo 30. Respecto a las elecciones de senadores regirá también el artículo 22.

Artículo 31. Cuando un mismo individuo sea elegido para senador y diputado, preferirá la elección primera en tiempo.

Artículo 32. La elección periódica de senadores se hará en todos los estados en un mismo día, que será el 1º de septiembre próximo a la renovación por mitad de aquellos.

Artículo 33. Concluida la elección de senadores, las legislaturas remitirán en pliego certificado, por conducto de sus Presidentes al del Consejo de Gobierno, testimonio en forma de las actas de las elecciones, y participarán a los elegidos su nombramiento por un oficio que les servirá de credencial. El Presidente del Consejo de Gobierno dará curso a estos testimonios, según se indica en el artículo 13.

Sección Cuarta

De las funciones económicas de ambas cámaras y prerrogativas de sus individuos

Artículo 34. Cada Cámara en sus juntas preparatorias, y en todo lo que pertenezca a su gobierno interior, observará el reglamento que formará el actual Congreso, sin perjuicio de las reformas que en lo sucesivo se podrán hacer en él, si ambas Cámaras lo estimaren conveniente.

Artículo 35. Cada Cámara calificará las elecciones de sus respectivos miembros, y resolverá las dudas que ocurran sobre ellas.

Artículo 36. Ellas no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán

reunirse el día señalado por el reglamento de gobierno interior de ambos y compeler, respectivamente, a los ausentes bajo las penas que designe la ley.

Artículo 37. Las Cámaras se comunicarán entre sí y con el poder ejecutivo, por conducto de sus respectivos secretarios, o por medio de diputaciones.

Artículo 38. Cualquiera de las dos Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado sobre las acusaciones:

- I. Del Presidente de la federación, por delitos de traición contra la independencia nacional, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su empleo.
- II. Del mismo Presidente por actos dirigidos manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones de Presidente, senadores y diputados, o a que éstos se presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas en esta Constitución, o a impedir a las Cámaras el uso de cualquiera de las facultades que les atribuye la misma.
- III. De los individuos de la Corte Suprema de Justicia y de los secretarios del Despacho, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de sus empleos.
- IV. De los Gobernadores de los estados, por infracciones de la Constitución Federal, leyes de la Unión, u órdenes del Presidente de la federación, que no sean manifiestamente contrarias a la Constitución y leyes generales de la Unión, y también por la publicación de leyes y decretos de las legislaturas de sus respectivos estados, contrarias a la misma Constitución y leyes.

Artículo 39. La Cámara de representantes hará exclusivamente de gran jurado, cuando el Presidente o sus ministros sean acusados por actos en que hayan intervenido el Senado o el Consejo de Gobierno en razón de sus atribuciones. Esta misma cámara servirá del mismo modo de gran jurado en los casos de acusación contra el Vicepresidente, por cualesquiera delitos cometidos durante el tiempo de su destino.

Artículo 40. La Cámara ante la que se hubiere hecho la acusación de los individuos de que hablan los dos artículos anteriores, se erigirá en gran jurado, y si declarare por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de su encargo, y puesto a disposición del tribunal competente.

Artículo 41. Cualquier diputado o senador podrá hacer por escrito proposiciones, o presentar proyectos de ley o decreto en su respectiva Cámara.

Artículo 42. Los diputados y senadores serán inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Artículo 43. En las causas criminales que se intentaren contra los senadores o diputados, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cumplido su encargo, no podrán ser aquellos acusados sino ante la Cámara de éstos, ni éstos sino ante la de senadores, constituyéndose cada Cámara a su vez en gran jurado, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

Artículo 44. Si la Cámara que haga de gran jurado en los casos del artículo anterior, declarare, por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, haber lugar a la formación de causa, quedará el acusado suspenso de su encargo, y puesto a disposición del tribunal competente.

Artículo 45. La indemnización de los diputados y senadores se determinará por ley, y se pagará por la Tesorería General de la federación.

Artículo 46. Cada Cámara y también las juntas de que habla el artículo 36, podrán librar las órdenes que crean convenientes, para que tengan efecto sus resoluciones tomadas a virtud de las funciones que a cada una comete la Constitución en los artículos 35, 36, 39, 40, 44 y 45; y el Presidente de los Estados Unidos las deberá hacer ejecutar, sin poder hacer observaciones sobre ellas.

Sección Quinta

De las facultades del Congreso General

Artículo 47. Ninguna resolución del Congreso General tendrá otro carácter que el de ley o decreto.

Artículo 48. Las resoluciones del Congreso General, para tener fuerza de ley o decreto, deberán estar firmadas por el Presidente, menos en los casos exceptuados en esta Constitución.

Artículo 49. Las leyes y decretos que emanen del Congreso General tendrán por objeto:

- I. Sostener la independencia nacional, y proveer a la conservación y seguridad de la Nación en sus relaciones exteriores.
- II. Conservar la unión federal de los estados, y la paz y el orden público en lo interior de la federación.
- III. Mantener la independencia de los estados entre sí en lo respectivo a su gobierno interior, según el acta constitutiva y esta Constitución.
- IV. Sostener la igualdad proporcional de obligaciones y derechos que los estados tienen ante la ley.

Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes:

- I. Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados.
- II. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o su mejora, sin impedir a los estados la apertura o mejora de los suyos, estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de in-

- dustria, derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas introducciones.
- III. Proteger y arreglar la libertad política de imprenta, de modo que jamás se pueda suspender su ejercicio, y mucho menos abolirse en ninguno de los estados ni territorios de la federación.
 - IV. Admitir nuevos estados a la unión federal, o territorios, incorporándolos en la Nación.
 - V. Arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando sus diferencias cuando no hayan convenido entre sí sobre la demarcación de sus respectivos distritos.
 - VI. Erigir los territorios en estados, o agregarlos a los existentes.
 - VII. Unir dos o más estados a petición de sus legislaturas para que formen uno solo, o erigir otro de nuevo dentro de los límites de los que ya existen, con aprobación de las tres cuartas partes de los miembros presentes de ambas Cámaras, y ratificación de igual número de las legislaturas de los demás estados de la federación.
 - VIII. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determinar su inversión, y tomar anualmente cuentas al gobierno.
 - IX. Contraer deudas sobre el crédito de la federación, y designar garantías para cubrirlas.
 - X. Reconocer la deuda nacional, y señalar medios para consolidarla y amortizarla.
 - XI. Arreglar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los diferentes estados de la federación y tribus de los indios.
 - XII. Dar instrucciones para celebrar concordatos con la Silla Apostólica, aprobados para su ratificación, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la federación.
 - XIII. Aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad, de federación, de neutralidad armada, y cualesquiera otros que celebre el Presidente de los Estados Unidos con potencias extranjeras.
 - XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas y designar su ubicación.
 - XV. Determinar y uniformar el peso, ley, valor, tipo y denominación de las monedas en todos los estados de la federación, y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
 - XVI. Decretar la guerra en vista de los datos que le presente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
 - XVII. Dar reglas para conceder patentes de corso, y para declarar buenas o malas las presas de mar y tierra.

- XXVIII. Designar la fuerza armada de mar y tierra, fijar el contingente de hombres respectivo a cada Estado, y dar ordenanza y reglamentos para su organización y servicio.
- XXIX. Formar reglamentos para organizar, armar y disciplinar la milicia local de los estados; reservando a cada uno el nombramiento respectivo de oficiales, y la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
- XX. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la federación.
- XXI. Permitir o no la estación de escuadras de otra potencia por más de un mes en los puertos mexicanos.
- XXII. Permitir o no la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
- XXIII. Crear o suprimir empleos públicos de la federación, señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, retiros y pensiones.
- XXIV. Conceder premios y recompensas a las corporaciones o personas que hayan hecho grandes servicios a la República, y decretar honores públicos a la memoria póstuma de los grandes hombres.
- XXV. Conceder amnistías o indultos por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación, en los casos y previo los requisitos que previenen las leyes.
- XXVI. Establecer una regla general de naturalización.
- XXVII. Dar leyes uniformes en todos los estados sobre bancarrotas.
- XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las atribuciones del Poder Legislativo de un Estado.
- XXIX. Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario.
- XXX. Dar leyes y decretos para el arreglo de la administración interior de los territorios.
- XXXI. Dictar todas las leyes y decretos que sean conducentes para llenar los objetos de que habla el artículo 49, sin mezclarse en la administración interior de los estados.

Sección Sexta

De la formación de las leyes

Artículo 51. La formación de las leyes y decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, a excepción de las que versaren sobre contribuciones o impuestos, las cuales no pueden tener su origen sino en la Cámara de Diputados.

Artículo 52. Se tendrán como iniciativas de ley o decreto:

- 1°. Las proposiciones que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos tuviere por convenientes al bien de la sociedad, y como tales las recomendaré precisamente a la Cámara de Diputados.
- 2°. Las proposiciones o proyectos de ley o decreto que las legislaturas de los estados dirijan a cualquiera de las Cámaras.

Artículo 53. Todos los proyectos de ley o decreto, sin excepción alguna, se discutirán sucesivamente en las dos Cámaras, observándose en ambas con exactitud lo prevenido en el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Artículo 54. Los proyectos de ley o decreto que fueren desechados en la Cámara de su origen, antes de pasar a la revisora, no se volverán a proponer en ella por sus miembros en las sesiones de aquel año, sino hasta las ordinarias del año siguiente.

Artículo 55. Si los proyectos de ley o decreto, después de discutidos, fueren aprobados por la mayoría absoluta de los miembros presentes de una y otra Cámara, se pasarán al Presidente de los Estados Unidos, quien, si también lo aprobare, los firmará y publicará; y si no, los devolverá con sus observaciones dentro de diez días útiles, a la Cámara de su origen.

Artículo 56. Los proyectos de ley o decreto devueltos por el Presidente, según el artículo anterior, serán segunda vez discutidos en las dos Cámaras. Si en cada una de éstas fueren aprobados por las dos terceras partes de sus individuos presentes, se pasarán de nuevo al Presidente, quien sin excusa deberá firmarlos y publicarlos; pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de ambas Cámaras, no se podrán volver a proponer en ellas sino hasta el año siguiente.

Artículo 57. Si el Presidente no devolviera algún proyecto de ley o decreto dentro del tiempo señalado en el artículo 55, por el mismo hecho se tendrá por sancionado, y como tal se promulgará, a menos que corriendo aquél término, el Congreso haya cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá verificarse el primer día en que estuviere reunido el Congreso.

Artículo 58. Los proyectos de ley o decreto desechados por primera vez en su totalidad por la Cámara revisora, volverán con las observaciones de ésta a la de su origen. Si examinados en ella fueren aprobados por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, pasarán segunda vez a la Cámara que los desechó, y no se entenderá que ésta los reprueba, si no concurre para ello el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

Artículo 59. Los proyectos de ley o decreto que en segunda revisión fueren aprobados por los dos tercios de los individuos de la Cámara de su origen, y no desechados por las dos terceras partes de los miembros de la revisora, pasarán al Presidente, quien deberá firmarlos y circularlos, o devolverlos dentro de los diez días útiles con sus observaciones a la Cámara en que tuvieron su origen.

Artículo 60. Los proyectos de ley o decreto que según el artículo anterior devolviera el Presidente a la Cámara de su origen, se tomarán otra vez en consideración;

y si ésta los aprobare por el voto de los dos tercios de sus individuos presentes, y la revisora no los desechare por igual número de sus miembros, volverán al Presidente, quien deberá publicarlos. Pero si no fueren aprobados por el voto de los dos tercios de la Cámara de su origen, o fueren aprobados por igual número de la revisora, no se podrán promover de nuevo sino hasta las sesiones ordinarias subsecuentes.

Artículo 61. En el caso de la reprobación por segunda vez de la Cámara revisora, según el artículo 58, se tendrán los proyectos por desechados, no pudiéndose volver a tomar en consideración sino hasta el año siguiente.

Artículo 62. En las adiciones que haga la Cámara revisora a los proyectos de ley o decreto, se observarán las mismas formalidades que se requieren en los proyectos, para que puedan pasarse al Presidente.

Artículo 63. Las partes que de un proyecto de ley o decreto, reprobare por vez primera la Cámara revisora, tendrán los mismos trámites que los proyectos desechados por primera vez en su totalidad por ésta.

Artículo 64. En la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos, se guardarán los mismos requisitos que se prescriben para su formación.

Artículo 65. Siempre que se comunique alguna resolución del Congreso General al Presidente de la República, deberá ir firmada de los Presidentes de ambas Cámaras, y por un Secretario de cada una de ellas.

Artículo 66. Para la formación de toda ley o decreto, se necesita en cada Cámara la presencia de la mayoría absoluta de todos los miembros de que debe componerse cada una de ellas.

Sección Séptima

Del tiempo, duración y lugar de las sesiones del Congreso General

Artículo 67. El Congreso General se reunirá todos los años el día 1º de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

Artículo 68. A ésta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.

Artículo 69. Las sesiones ordinarias del Congreso serán diarias, sin otra interrupción que las de los días festivos solemnes; y para suspenderse por más de dos días, será necesario el consentimiento de ambas Cámaras.

Artículo 70. Éstas residirán en un mismo lugar, y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación, y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de una y otra. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difirieren en cuanto al tiempo, modo o lugar, el Presidente de los Estados Unidos terminará la diferencia, eligiendo precisamente uno de los extremos en cuestión.

Artículo 71. El Congreso cerrará sus sesiones anualmente el día 15 de abril, con las mismas formalidades que se prescriben para su apertura, prorrogándolas hasta por treinta días útiles, cuando él mismo lo juzgue necesario, o cuando lo pida el Presidente de la federación.

Artículo 72. Cuando el Congreso General se reúna para sesiones extraordinarias, se formará de los mismos diputados y senadores de las sesiones ordinarias de aquel año, y se ocupará exclusivamente del objeto u objetos comprendidos en su convocatoria; pero si no los hubiere llenado para el día en que se deben abrir las sesiones ordinarias, cerrará las suyas, dejando los puntos pendientes a la resolución del Congreso en dichas sesiones.

Artículo 73. Las resoluciones que tome el Congreso sobre su traslación, suspensión o prorrogación de sus sesiones, según los tres artículos anteriores, se comunicarán al Presidente, quien las hará ejecutar sin poder hacer observaciones sobre ellas.

TÍTULO IV

DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

De las personas en quien se deposita y de su elección

Artículo 74. Se deposita el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 75. Habrá también un Vicepresidente, en quien recaerán, en caso de imposibilidad física o moral del Presidente, todas las facultades y prerrogativas de éste.

Artículo 76. Para ser Presidente o Vicepresidente, se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, de edad de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, y residente en el país.

Artículo 77. El Presidente no podrá ser reelecto para este encargo, sino al cuarto año de haber cesado en sus funciones.

Artículo 78. El que fuere electo Presidente o Vicepresidente de la República, servirá estos destinos con preferencia a cualquier otro.

Artículo 79. El día 1º de septiembre del año próximo anterior a aquél en que deba el nuevo Presidente entrar en el ejercicio de sus atribuciones, la legislatura de cada Estado elegirá, a mayoría absoluta de votos, dos individuos, de los cuales, uno por lo menos, no será vecino del Estado que elige.

Artículo 80. Concluida la votación, remitirán las legislaturas al Presidente del Consejo de Gobierno, en pliego certificado, testimonio del acta de la elección, para que le dé el curso que prevenga el reglamento del consejo.

Artículo 81. El 6 de enero próximo se abrirán y leerán, en presencia de las cámaras reunidas, los testimonios de que habla el artículo anterior, si se hubieren recibido los de las tres cuartas partes de las legislaturas de los estados.

Artículo 82. Concluida la lectura de los testimonios, se retirarán los senadores, y una comisión nombrada por la Cámara de Diputados, y compuesta de uno por cada Estado de los que tengan representantes presentes, los revisará y dará cuenta con su resultado.

Artículo 83. Enseguida la Cámara procederá a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos.

Artículo 84. El que reuniere la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas será el Presidente.

Artículo 85. Si dos tuvieren dicha mayoría, será Presidente el que tenga más votos, quedando el otro de Vicepresidente. En caso de empate con la misma mayoría, elegirá la Cámara de Diputados uno de los dos para Presidente, quedando el otro de Vicepresidente.

Artículo 86. Si ninguno hubiere reunido la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas, la Cámara de Diputados elegirá al Presidente y Vicepresidente, escogiendo en cada elección uno de los dos que tuvieren mayor número de sufragios.

Artículo 87. Cuando más de dos individuos tuvieren mayoría respectiva e igual número de votos, la Cámara escogerá entre ellos al Presidente o Vicepresidente en su caso.

Artículo 88. Si uno hubiere reunido la mayoría respectiva, y dos o más tuvieren igual número de sufragios, pero mayor que los otros, la Cámara elegirá entre los que tengan números más altos.

Artículo 89. Si todos tuvieren igual número de votos, la Cámara elegirá de entre todos al Presidente y Vicepresidente, haciéndose lo mismo cuando uno tenga mayor número de sufragios, y los demás número igual.

Artículo 90. Si hubiere empate en las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, se repetirá por una sola vez la votación; y si aún resultare empatada, decidirá la suerte.

Artículo 91. En competencias entre tres o más que tengan iguales votos, las votaciones se dirigirán a reducir los competidores a dos o a uno, para que en la elección compita con el otro que haya obtenido mayoría respectiva sobre todos los demás.

Artículo 92. Por regla general, en las votaciones relativas a elección de Presidente y Vicepresidente, no se ocurrirá a la suerte antes de haber hecho segunda votación.

Artículo 93. Las votaciones sobre calificación de elecciones hechas por las legislaturas, y sobre las que haga la Cámara de Diputados, de Presidente o Vicepresidente, se harán por estados, teniendo la representación de cada uno un solo voto; y para que haya decisión de la Cámara, deberá concurrir la mayoría absoluta de sus votos.

Artículo 94. Para deliberar sobre los objetos comprendidos en el artículo anterior, deberán concurrir en la Cámara más de la mitad del número total de sus miembros, y estar presentes diputados de las tres cuartas partes de los estados.

Sección Segunda

De la duración del Presidente y Vicepresidente, del modo de llenar las faltas de ambos y de su juramento

Artículo 95. El Presidente y Vicepresidente de la federación, entrarán en sus funciones el 1º de abril, y serán reemplazados, precisamente en igual día cada cuatro años, por una nueva elección constitucional.

Artículo 96. Si por cualquier motivo las elecciones de Presidente y Vicepresidente, no estuvieren hechas y publicadas para el día 1º de abril, en que debe verificarse el reemplazo, o los electos no se hallasen prontos a entrar en el ejercicio de su destino, cesarán, sin embargo, los antiguos en el mismo día, y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en un Presidente que nombrará la Cámara de Diputados, votando por estados.

Artículo 97. En caso que el Presidente y Vicepresidente estén impedidos temporalmente, se hará lo prevenido en el artículo anterior; y si el impedimento de ambos acaeciere no estando el Congreso reunido, el Supremo Poder Ejecutivo se depositará en el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y en dos individuos que elegirá a pluralidad absoluta de votos el Consejo de Gobierno. Éstos no podrán ser de los miembros del Congreso General, y deberán tener las cualidades que se requieren para ser Presidente de la federación.

Artículo 98. Mientras se hacen las elecciones de que hablan los dos artículos anteriores, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se encargará del Supremo Poder Ejecutivo.

Artículo 99. En caso de imposibilidad perpetua del Presidente y Vicepresidente, el Congreso, y en sus recesos el Consejo de Gobierno, proveerán, respectivamente, según se previene en los artículos 96 y 97, y enseguida dispondrán que las legislaturas procedan a la elección de Presidente y Vicepresidente según las formas constitucionales.

Artículo 100. La elección de Presidente y Vicepresidente hecha por las legislaturas a consecuencia de imposibilidad perpetua de los que obtenían estos cargos, no impedirá las elecciones ordinarias que deben hacerse cada cuatro años el 1º de septiembre.

Artículo 101. El Presidente y Vicepresidente nuevamente electos cada cuatro años, deberán estar el 1º de abril en el lugar en que residan los poderes supremos de la federación, y jurar ante las Cámaras reunidas el cumplimiento de sus deberes, bajo la fórmula siguiente: *Yo, N., nombrado Presidente (o Vicepresidente) de los Estados Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que los mismos Estados Unidos me han confiado, y que guardaré y haré guardar exactamente la Constitución y leyes generales de la federación.*

Artículo 102. Si ni el Presidente ni el Vicepresidente se presentaren a jurar según se prescribe en el artículo anterior, estando abiertas las sesiones del Congreso, jurarán ante el Consejo de Gobierno luego que cada uno se presente.

Artículo 103. Si el Vicepresidente prestare el juramento prescrito en el artículo 101 antes que el Presidente, entrará desde luego a gobernar hasta que el Presidente haya jurado.

Artículo 104. El Presidente y Vicepresidente nombrados constitucionalmente según el artículo 99, y los individuos nombrados para ejercer provisionalmente el cargo de Presidente según los artículos 96 y 97, prestarán el juramento del artículo 101 ante las Cámaras, si estuviesen reunidas; y no estándolo, ante el Consejo de Gobierno.

Sección Tercera

De las prerrogativas del Presidente y Vicepresidente

Artículo 105. El Presidente podrá hacer al Congreso las propuestas o reformas de ley que crea conducentes al bien general, dirigiéndolas a la Cámara de Diputados.

Artículo 106. El Presidente puede por una sola vez, dentro de diez días útiles, hacer observaciones sobre las leyes y decretos que le pase el Congreso General suspendiendo su publicación hasta la resolución del mismo Congreso, menos en los casos exceptuados en esta Constitución.

Artículo 107. El Presidente, durante el tiempo de su encargo, no podrá ser acusado sino ante cualquiera de las Cámaras, y sólo por los delitos de que habla el artículo 38, cometidos en el tiempo que allí se expresa.

Artículo 108. Dentro de un año, contado desde el día en que el Presidente cesare en sus funciones, tampoco podrá ser acusado sino ante alguna de las Cámaras por los delitos de que habla el artículo 38, y además por cualesquiera otros, con tal que sean cometidos durante el tiempo de su empleo. Pasado este año; no podrá ser acusado por dichos delitos.

Artículo 109. El Vicepresidente, en los cuatro años de este destino, podrá ser acusado solamente ante la Cámara de Diputados por cualquier delito cometido durante el tiempo de su empleo.

Sección Cuarta

De las atribuciones del Presidente y restricciones de sus facultades

Artículo 110. Las atribuciones del Presidente son las que siguen:

- I. Publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso General.
- II. Dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva y leyes generales.
- III. Poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a conservar la integridad de la federación, y a sostener su independencia en lo exterior, y su unión y libertad en lo interior.
- IV. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho.
- V. Cuidar de la recaudación, y decretar las inversiones de las contribuciones generales con arreglo a las leyes.

- VI. Nombrar los jefes de las oficinas generales de hacienda, los de las comisarías generales, los enviados diplomáticos y cónsules, los coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y armada, con aprobación del Senado, y en sus recesos, del Consejo de Gobierno.
- VII. Nombrar los demás empleados del ejército permanente, armada y milicia activa, y de las oficinas de la federación, arreglándose a lo que dispongan las leyes.
- VIII. Nombrar, a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y promotores fiscales de circuito y de distrito.
- IX. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares conforme a las leyes.
- X. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra, y de la milicia activa, para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.
- XI. Disponer de la milicia local para los mismos objetos, aunque para usar de ella fuera de sus respectivos estados o territorios, obtendrá previamente consentimiento del Congreso General, quien calificará la fuerza necesaria; y no estando éste reunido, el Consejo de Gobierno prestará el consentimiento y hará la expresada calificación.
- XII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previo decreto del Congreso General, y conceder patentes de corso con arreglo a lo que dispongan las leyes.
- XIII. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica en los términos que designa la facultad XII del artículo 50.
- XIV. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, federación, neutralidad armada, comercio y cualesquiera otros; más para prestar o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del Congreso General.
- XV. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras.
- XVI. Pedir al Congreso General la prorrogación de sus sesiones ordinarias hasta por treinta días útiles.
- XVII. Convocar al Congreso para sesiones extraordinarias en el caso que lo crea conveniente, y lo acuerden así las dos terceras partes de los individuos presentes del Consejo de Gobierno.
- XVIII. Convocar también al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando el Consejo de Gobierno lo estime necesario por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes.
- XIX. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por la Corte Suprema, tribunales y juzgados de la federación, y de que sus sentencias sean ejecutadas según las leyes.
- XX. Suspender de sus empleos hasta por tres meses, y privar aún de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo, a los empleados de la federación, in-

fractores de sus órdenes y decretos; y en los casos que crea deberse formar causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la materia al tribunal respectivo.

- XXI. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos, con consentimiento del Congreso General, si contienen disposiciones generales; oyendo al Senado, y en sus recesos al Consejo de Gobierno, si se versaren sobre negocios particulares o gubernativos; y a la Corte Suprema de Justicia, si se hubieren expedido sobre asuntos contenciosos.

Artículo 111. El Presidente, para publicar las leyes y decretos, usará de la fórmula siguiente: *El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de la República, sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.*

Artículo 112. Las restricciones de las facultades del Presidente, son las siguientes:

- I. El Presidente no podrá mandar en persona las fuerzas de mar y tierra, sin previo consentimiento del Congreso General, o acuerdo en sus recesos del Consejo de Gobierno, por el voto de dos terceras partes de sus individuos presentes; y cuando las mande con el requisito anterior, el Vicepresidente se hará cargo del gobierno.
- II. No podrá el Presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna; pero cuando lo exija el bien y seguridad de la federación, podrá arrestar, debiendo poner las personas arrestadas, en el término de cuarenta y ocho horas, a disposición del tribunal o juez competente.
- III. El Presidente no podrá ocupar la propiedad de ningún particular ni corporación, ni turbarle en la posesión, uso o aprovechamiento de ella; y si en algún caso fuere necesario, para un objeto de conocida utilidad general, tomar la propiedad de un particular o corporación, no lo podrá hacer sin previa aprobación del Senado, y en sus recesos, del Consejo de Gobierno, indemnizando siempre a la parte interesada a juicio de hombres buenos elegidos por ella y el gobierno.
- IV. El Presidente no podrá impedir las elecciones y demás actos que se expresan en la segunda parte del artículo 38.
- V. El Presidente, y lo mismo el Vicepresidente, no podrá, sin permiso del Congreso, salir del territorio de la República durante su encargo y un año después.

Sección Quinta

Del Consejo de Gobierno

Artículo 113. Durante el receso del Congreso General, habrá un Consejo de Gobierno compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno por cada Estado.

Artículo 114. En los dos años primeros formarán este consejo los primeros nombrados por sus respectivas legislaturas, y en lo sucesivo los más antiguos.

Artículo 115. Este consejo tendrá por Presidente nato al Vicepresidente de los Estados Unidos, y nombrará, según su reglamento, un Presidente temporal que haga las veces de aquél en sus ausencias.

Artículo 116. Las atribuciones de este consejo son las que siguen:

- I. Velar sobre la observancia de la Constitución, del acta constitutiva y leyes generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo a estos objetos.
- II. Hacer al Presidente las observaciones que crea conducentes para el mejor cumplimiento de la Constitución y leyes de la Unión.
- III. Acordar por sí solo o a propuesta del Presidente, la convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, debiendo concurrir, para que haya acuerdo en uno y otro caso, el voto de las dos terceras partes de los consejeros presentes, según se indica en las atribuciones XVII y XVIII del artículo 110.
- IV. Prestar su consentimiento para el uso de la milicia local en los casos de que habla el artículo 110, atribución XI.
- V. Aprobar el nombramiento de los empleados que designa la atribución IV del artículo 110.
- VI. Dar su consentimiento en el caso del artículo 112, restricción I.
- VII. Nombrar dos individuos para que, con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ejerzan provisionalmente el supremo poder ejecutivo según el artículo 97.
- VIII. Recibir el juramento del artículo 101 a los individuos del supremo poder ejecutivo, en los casos prevenidos por esta Constitución.
- IX. Dar su dictamen en las consultas que le haga el Presidente a virtud de la facultad XXI del artículo 110, y en los demás negocios que le consulte.

Sección Sexta

Del despacho de los negocios de gobierno

Artículo 117. Para el despacho de los negocios de gobierno de la República, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso General por una ley.

Artículo 118. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, deberán ir firmados por el Secretario de despacho del ramo a que el asunto corresponda, según reglamento; y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 119. Los secretarios del Despacho serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con su firma contra esta Constitución, la acta constitutiva, leyes generales y constitucionales particulares de los estados.

Artículo 120. Los secretarios del Despacho darán a cada Cámara, luego que estén abiertas sus sesiones anuales, cuenta del Estado de su respectivo ramo.

Artículo 121. Para ser Secretario del Despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Artículo 122. Los secretarios de despacho formarán un reglamento para la mejor distribución y giro de los negocios de su cargo, que pasará el gobierno al Congreso para su aprobación.

TÍTULO V DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

De la naturaleza y distribución de este poder

Artículo 123. El Poder Judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de Circuito y en los juzgados de Distrito.

Sección Segunda

De la Corte Suprema de Justicia y de la elección, duración y juramento de sus miembros

Artículo 124. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros distribuidos en tres Salas, y de un fiscal, pudiendo el Congreso General aumentar o disminuir su número, si lo juzgare conveniente.

Artículo 125. Para ser electo individuo de la Corte Suprema de Justicia se necesita: estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados; tener la edad de treinta y cinco años cumplidos; ser ciudadano natural de la República, o nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco años cumplidos en el territorio de la República.

Artículo 126. Los individuos que compongan la Corte Suprema de Justicia serán perpetuos en este destino, y sólo podrán ser removidos con arreglo a las leyes.

Artículo 127. La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos.

Artículo 128. Concluidas las elecciones, cada legislatura remitirá al Presidente del Consejo de Gobierno, una lista certificada de los doce individuos electos, con distinción del que lo haya sido para fiscal.

Artículo 129. El Presidente del consejo, luego que haya recibido las listas por lo menos de las tres cuartas partes de las legislaturas, les dará el curso que se prevenga en el reglamento del consejo.

Artículo 130. En el día señalado por el Congreso, se abrirán y leerán las expresadas listas a presencia de las Cámaras reunidas, retirándose en seguida los senadores.

Artículo 131. Acto continuo, la Cámara de Diputados nombrará por mayoría absoluta de votos una comisión que deberá componerse de un diputado por cada Estado,

que tuviere representantes presentes, a la que se pasarán las listas para que revisándolas dé cuenta con su resultado, procediendo la Cámara a calificar las elecciones y a la enumeración de los votos.

Artículo 132. El individuo o individuos que reunieren más de la mitad de los votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que declararlo así la Cámara de Diputados.

Artículo 133. Si los que hubieren reunido la mayoría de sufragios prevenida en el artículo anterior, no llenaren el número de doce, la misma Cámara elegirá sucesivamente de entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas mayor número de votos, observando en todo lo relativo a estas elecciones, lo prevenido en la sección primera del Título IV, que trata de las elecciones de Presidente y Vicepresidente.

Artículo 134. Si un Senador o Diputado fuere electo para Ministro o Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos.

Artículo 135. Cuando falte alguno o algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, por imposibilidad perpetua, se reemplazarán conforme a un todo a lo dispuesto en esta sección, previo aviso que dará el gobierno a las legislaturas de los estados.

Artículo 136. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia, al entrar a ejercer su cargo, prestarán juramento ante el Presidente de la República, en la forma siguiente: ¿Juráis a Dios nuestro Señor haberos fiel y legalmente en el desempeño de las obligaciones que os confía la Nación? Si así lo hicieréis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.

Sección Tercera

De las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia

Artículo 137. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes:

- I. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro Estado de la Federación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia, y de las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares, sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.
- II. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones celebrados por el gobierno supremo o sus agentes.
- III. Consultar sobre paso o retención de bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en asuntos contenciosos.
- IV. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la federación, y entre éstos y los de los estados, y las que se muevan entre los de un Estado y los de otro.

V. Conocer:

Primero. De las causas que se muevan al Presidente y Vicepresidente, según los artículos 38 y 39, previa la declaración del artículo 40.

Segundo. De las causas criminales de los diputados y senadores indicadas en el artículo 43, previa la declaración de que habla el artículo 44.

Tercero. De las de los Gobernadores de los estados en los casos de que habla el artículo 38 en su parte tercera, previa la declaración prevenida en el artículo 40.

Cuarto. De las de los secretarios del Despacho, según los artículos 38 y 40.

Quinto. De los negocios civiles y criminales de los empleados diplomáticos y cónsules de la República.

Sexto. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y contrabandos; de los crímenes cometidos en alta mar; de las ofensas contra la Nación de los Estados Unidos Mexicanos; de los empleados de hacienda y justicia de la federación; y de las infracciones de la Constitución y leyes generales, según se prevenga por la ley.

Artículo 138. Una ley determinará el modo y grados en que deba conocer la Suprema Corte de Justicia en los casos comprendidos en esta sección.

Sección Cuarta

Del modo de juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia

Artículo 139. Para juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia, elegirá la Cámara de Diputados, votando por estados, en el primer mes de las sesiones ordinarias de cada bienio veinticuatro individuos, que no sean del Congreso General, y que tengan las cualidades que los ministros de dicha Corte Suprema. De éstos se sacarán por suerte un fiscal, y un número de jueces igual a aquél de que conste la primera Sala de la Corte, y cuando fuere necesario, procederá la misma Cámara, y en sus recesos el Consejo de Gobierno, a sacar del mismo modo los jueces de las otras Salas.

Sección Quinta

De los Tribunales de Circuito

Artículo 140. Los Tribunales de Circuito se compondrán de un juez letrado, un promotor fiscal, ambos nombrados por el Supremo Poder Ejecutivo a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, y de dos asociados según dispongan las leyes.

Artículo 141. Para ser Juez de Circuito se requiere ser ciudadano de la federación, y de edad de treinta años cumplidos.

Artículo 142. A estos tribunales corresponde conocer de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, contrabandos, crímenes cometidos en alta mar, ofensas contra los Estados Unidos Mexicanos, de las causas de los cónsules, y de las causas civiles cuyo valor pase de quinientos pesos, y en las cuales esté interesada la federación. Por una ley se designará el número de estos tribunales, sus respectivas jurisdicciones, el

modo, forma y grado en que deberá ejercer sus atribuciones en éstos y en los demás negocios cuya inspección se atribuye a la Corte Suprema de Justicia.

Sección Sexta

De los Juzgados de Distrito

Artículo 143. Los Estados Unidos Mexicanos se dividirán en cierto número de distritos, y en cada uno de éstos habrá un juzgado, servido por un juez letrado en que se conocerá, sin apelación, de todas las causas civiles en que esté interesada la federación, y cuyo valor no exceda de quinientos pesos; y en primera instancia, de todos los casos en que deban conocer en segunda los tribunales de Circuito.

Artículo 144. Para ser juez de Distrito se requiere ser ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos, y de edad de veinticinco años cumplidos. Estos jueces serán nombrados por el Presidente, a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia.

Sección Séptima

Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la Federación la Administración de Justicia.

Artículo 145. En cada uno de los estados de la federación se prestará entera fe y crédito a los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades de los otros estados. El Congreso General uniformará las leyes, según las que deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos.

Artículo 146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiere merecido según las leyes.

Artículo 147. Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes.

Artículo 148. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley retroactiva.

Artículo 149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual fuere la naturaleza y estado del proceso.

Artículo 150. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba, o indicio de que es delincuente.

Artículo 151. Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta horas.

Artículo 152. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las casas, papeles y otros efectos de los habitantes de la República, si no es en los casos expresamente dispuestos por ley, y en la forma que ésta determine.

Artículo 153. A ningún habitante de la República se le tomará juramento sobre hechos propios al declarar en materias criminales.

Artículo 154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad, según las leyes vigentes.

Artículo 155. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal, sobre injurias, sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la conciliación.

Artículo 156. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros, nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado del juicio.¹

TÍTULO VI DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

Sección Primera

Del gobierno particular de los estados

Artículo 157. El gobierno de cada Estado se dividirá para su ejercicio en los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y nunca podrán unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositará en un solo individuo.

Artículo 158. El Poder Legislativo de cada Estado residirá en una legislatura compuesta del número de individuos que determinarán sus constituciones particulares, electos popularmente, y amovibles en el tiempo y modo que ellas dispongan.

Artículo 159. La persona o personas a quien los estados confiaren su Poder Ejecutivo, no podrán ejercerlo sino por determinado tiempo, que fijará su Constitución respectiva.

Artículo 160. El Poder Judicial de cada Estado se ejercerá por los tribunales que establezca o designen la Constitución; y todas las causas civiles o criminales que pertenezcan al conocimiento de estos tribunales, serán fenecidas en ellos hasta su última instancia y ejecución de la última sentencia.

Sección Segunda

De las obligaciones de los estados

Artículo 161. Cada uno de los estados tiene obligación;

- I. De organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse a esta Constitución ni a la acta constitutiva.
- II. De publicar por medio de sus Gobernadores su respectiva Constitución, leyes y decretos.
- III. De guardar y hacer guardar la Constitución y leyes generales de la Unión, y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la federación con alguna potencia extranjera.
- IV. De proteger a sus habitantes en el uso de la libertad que tienen de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación; cuidando siempre de que se observen las leyes generales de la materia.
- V. De entregar inmediatamente los criminales de otros estados a la autoridad que los reclame.

- VI. De entregar los fugitivos de otros estados a la persona que justamente los reclame, o compelerlos de otro modo a la satisfacción de la parte interesada.
- VII. De contribuir para consolidar y amortizar las deudas reconocidas por el Congreso General.
- VIII. De remitir anualmente, a cada una de las Cámaras del Congreso General, nota circunstanciada y comprensiva de los ingresos y egresos de todas las tesorerías que haya en sus respectivos distritos, con relación del origen de unos y otros, del estado en que se hallen los ramos de industria agrícola, mercantil y fabril; de los nuevos ramos de industria que puedan introducirse y fomentarse, con expresión de los medios para conseguirlo, y de su respectiva población y modo de protegerla o aumentarla.
- IX. De remitir a las dos Cámaras, y en sus recesos al Consejo de Gobierno, y también al supremo poder ejecutivo, copia autorizada de sus constituciones, leyes y decretos.

Sección Tercera

De las restricciones de los poderes de los estados

Artículo 162. Ninguno de los estados podrá:

- I. Establecer, sin el consentimiento del Congreso General, derecho alguno de tonelaje, ni otro alguno de puerto.
- II. Imponer, sin consentimiento del Congreso General, contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, mientras la ley no regula cómo deban hacerlo.
- III. Tener en ningún tiempo tropa permanente ni buque de guerra, sin el consentimiento del Congreso General.
- IV. Entrar en transacción con alguna potencia extranjera, ni declararle la guerra; debiendo resistirle en caso de actual invasión, o en tan inminente peligro que no admita demora, dando inmediatamente cuenta, en estos casos, al Presidente de la República.
- V. Entrar en transacción o contrato con otros estados de la federación, sin el consentimiento previo del Congreso General, o en su aprobación posterior, si la transacción fuere sobre arreglo de límites.

TÍTULO VII

Sección Única

De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva

Artículo 163. Todo funcionario público, sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, deberá prestar juramento de guardar esta Constitución y la acta constitutiva.

Artículo 164. El Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o la acta constitutiva.

Artículo 165. Sólo el Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre inteligencia de los artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva.

Artículo 166. Las legislaturas de los estados podrán hacer observaciones, según les parezca conveniente, sobre determinados artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva; pero el Congreso General no las tomará en consideración sino precisamente el año de 1830.

Artículo 167. El Congreso en este año se limitará a calificar las observaciones que merezcan sujetarse a la deliberación del Congreso siguiente, y esta declaración se comunicará al Presidente, quien la publicará y circulará sin poder hacer observaciones.

Artículo 168. El Congreso siguiente, en el primer año de sus sesiones ordinarias, se ocupará de las observaciones sujetas a su deliberación, para hacer las reformas que crea convenientes; pues nunca deberá ser uno mismo el Congreso que haga la calificación prevenida en el artículo anterior, y el que decreta las reformas.

Artículo 169. Las reformas o adiciones que se propongan en los años siguientes al de 30, se tomarán en consideración por el Congreso en el segundo año de cada bienio, y si se calificaren necesarias, según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará esta resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas.

Artículo 170. Para reformar o adicionar esta Constitución o la acta constitutiva, se observarán además de las reglas prescritas en los artículos anteriores, todos los requisitos prevenidos para la formación de las leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al Presidente en el artículo 106.

Artículo 171. Jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y de la acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la Nación Mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y división de los poderes supremos de la federación y de los estados.

Dada en México, a 4 del mes de octubre del año del Señor de 1824, 4° de la independencia, 3° de la libertad y 2° de la federación. Lorenzo de Zavala, Diputado por el Estado de Yucatán, Presidente. Florentino Martínez, Diputado por el Estado de Chihuahua, Vicepresidente. Por el Estado de Chihuahua, José Ignacio Gutiérrez. Por el Estado de Coahuila y Tejas, Miguel Ramos Arizpe. Erasmo Seguí. Por el Estado de Durango, Francisco Antonio Elorriaga. Pedro Ahumada. Por el Estado de Guanajuato, Juan Ignacio Godoy. Víctor Márquez. José Felipe Vázquez. José María Anaya. Juan Bautista Morales. José María Uribe. José Miguel Llorente. Por el Estado de México, Juan Rodríguez. Juan Manuel Assorrey. José Francisco de Barrera. José Basilio Guerra. Carlos María Bustamante. Ignacio de Mora y Villamil. José Ignacio González Caralmuro. José Hernández Chico Condarco. José Ignacio Espinosa. Luciano Castoreña. Luis de Cortázar. José Agustín Paz. José María de Bustamante. Francisco María Lombardo. Felipe Sierra. José Cirilo Gómez y Anaya. Cayetano Ibarra. Antonio de Gama y

Córdoba. Bernardo González Pérez de Angulo. Francisco Patiño y Domínguez. Por el Estado de Michoacán, José María de Isazaga. Manuel Solórzano. José María de Cabre-
ra. Ignacio Rayón. Tomás Arriaga. Por el Estado de Nuevo León, Fray Servando Teresa
de Mier. Por el Estado de Oaxaca, Nicolás Fernández del Campo. Víctores de Manero.
Demetrio del Castillo. Joaquín de Míura y Bustamante. Vicente Manero Embides.
Manuel José Robles. Francisco de Larrazábal y Torre. Francisco Estévez. José Vicente
Rodríguez. Por el Estado de Puebla, Mariano Barbosa. José María de la Llave. José de
San Martín. Rafael Mangino. José María Jiménez. José Mariano Marín. José Vicente de
Robles. José Rafael Berruecos. José Mariano Castellero. José María Pérez Dunsлагuer.
Alejandro Carpio. Mariano Tirado Gutiérrez. Ignacio Zaldívar. Juan de Díaz More-
no. Juan Manuel Irrizarri. Miguel Wenceslao Gasca. Bernardo Copca. Por el Estado
de Querétaro, Félix Osoreo. Joaquín Guerra. Por el Estado de San Luis Potosí, Tomás
Vargas. Luis Gonzaga Gordo. José Guadalupe de los Reyes. Por el Estado de Sonora
y Sinaloa, Manuel Fernández Rojo. Manuel Ambrosio Martínez de Ve. José Santiago
Escobosa. Juan Bautista Escalante y Peralta. Por el Estado de Tamaulipas, Pedro Pa-
redes. Por Tlaxcala, José Miguel Garidi y Alcocer. Por el Estado de Veracruz, Manuel
Argüelles. José María Becerra. Por el Estado de Jalisco, José María Covarrubias. José
de Jesús Huerta. Juan de Dios Cañedo. Rafael Aldrete. Juan Cayetano Portugal. Por
el Estado de Yucatán, Manuel Crescencio Rejón. José María Sánchez. Fernando Valle.
Pedro Tarrazo. Joaquín Casares y Armas. Por el Estado de Zacatecas, Valentín Gómez
Farías. Santos Vélez. Francisco García. José Miguel Gordo. Por el Territorio de la Baja
California, Manuel Ortiz de la Torre. Por el Territorio de Colima, José María Jerónimo
Arzac. Por el Territorio de Nuevo México, José Rafael Alarid. Manuel de Viya y Cosío,
Diputado por el Estado de Veracruz, secretario. Epigmenio de la Piedra, Diputado por
México, Secretario. José María Castro, Diputado por el Estado de Jalisco, Secretario.
Juan José Romero.

Por lo tanto, mandamos a todos los tribunales, justicias, jefes, Gobernadores y
demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dig-
nidad que sean, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes la
Constitución inserta como Ley fundamental de la Nación. Tendréislo entendido para
su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. México, a 4 de octubre
de 1824. Guadalupe Victoria, Presidente. Nicolás Bravo. Miguel Domínguez. A don
Juan Guzmán.

Y lo comunico a V. de orden de S.A.S. para su más exacto cumplimiento. Dios
guarde a V. muchos años. México, 4 de octubre de 1824. Juan Guzmán.

EXTRACT OF THE FEDERAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

Mexico, October 4, 1824

TITLE I

Section One

Of the Mexican Nation, its Territory and Religion

Article 1. Freedom and independence of the Mexican Nation.

Article 2. Composition of the Mexican nation.

Article 3. Catholicism as the official religion of the Mexican nation.

TITLE II

Section One

In the form of government of the Nation

Article 4. Republic form of government of the Mexican Nation.

Article 5. States and Territories of the Federation.

Article 6. Division of branch in the Legislative, Executive and Judicial.

TITLE III

LEGISLATIVE BRANCH

Section One

Its nature and mode of exercise

Article 7. General Congress and its division into chambers, one of Deputies and the Senate.

Section Two

Chamber of Deputies

Article 8. Population as a basis for the appointment of deputies for two years.

Article 9. Qualifications of electors.

- Article 10.* General basis for the appointment of deputies by the people.
Article 11. Number of population as the basis for the election of Deputies.
Article 12. Population census every five years.
Article 13. Substitute Deputies.
Article 14. Deputies and Deputy for the Territories.
Article 15. Deputies for the Territory.
Article 16. Indirect election of Deputies in October prior to renewal.
Article 17. Referral of the testimony of the Acts of election the Electoral committees.
Article 18. Testimony by the Chairman of the Governing Council of Deputies election.
Article 19. Requirements to become a deputy.
Article 20. Neighborhood in the Territory of the Nation to be deputies.
Article 21. Exceptions to the requirement neighborhood.
Article 22. Election of Representatives on grounds of neighborhood.
Article 23. Who can not be Deputies.
Article 24. Cessation of impediments to be deputies with six months of notice.

Section Three

In the Senate

- Article 25.* Composition of the Senate.
Article 26. Cessation of office of Senator.
Article 27. Senate vacancies.
Article 28. Qualifications for Senator.
Article 29. Impediments to be a Senator.
Article 30. Election of Senators.
Article 31. A Senator office is preferred.
Article 32. Periodic election of Senators.
Article 33. Procedure to conclude the election of Senators.

Section Four

Economic functions and prerogatives of both Chambers of its members

- Article 34.* Rules of the Chambers.
Article 35. Certification of elections by the Chambers.
Article 36. Minimum of membership to the open of Chamber sessions.
Article 37. Communications of the chambers through the Provincial Secretaries
 or.
Article 38. Chambers and Grand Jury Indictments.
Article 39. Chamber of Representatives and Grand Jury, in cases of Ministers or the President.

Article 40. Chamber and Grand Jury members present for at least grounds for prosecution.

Article 41. Draft Law.

Article 42. Inviolability opinions in the performance of their duties.

Article 43. Criminal cases against Senators and Representatives.

Article 44. Effects when in the formation of the cause.

Article 45. Compensation of deputies and senators.

Article 46. Effects of their decisions.

Section Five

Branch of the General Congress

Article 47. The resolutions of the General Congress are laws or decrees.

Article 48. Resolutions of Congress, must contain the signature of the President.

Article 49. Purpose of laws or decrees.

Article 50. General Branch of General Congress.

Section Six

The enactment of laws

Article 51. Enactment of laws by any of the two Chambers.

Article 52. Bills or decrees.

Article 53. Discussion in both Chambers of laws or decrees.

Article 54. Projects or laws scrapped.

Article 55. Laws or decrees passed, must be signed and issued by the President of the United Mexican States.

Article 56. President's veto power.

Article 57. Term in which the executive must return the draft laws or decrees, and assent.

Article 58. Bills or decrees discarded for the first time in its entirety.

Article 59. Draft laws and decrees adopted on second review, the term for return to the origin Chamber.

Article 60. Publication of laws and decrees adopted on second review and publication.

Article 61. Laws or decrees disapproved a second time shall be considered rejected.

Article 62. Additions to the other chamber to projects or laws.

Article 63. Additions reproved for the first time.

Article 64. Interpretation, modification or repeal of laws or decrees.

Article 65. Formalities of communications of the General Congress to the President of the Republic.

Article 66. Quorum necessary for the formation of a Law or decree.

Section Seven

Time, duration and location of the General Conference Sessions

Article 67. Mandatory meeting of the General Congress.

Article 68. Assistance from President at the annual meeting of the General Congress.

Article 69. Ordinary Sessions of the General Congress.

Article 70. Physical space for conducting official of the General Conference Sessions.

Article 71. Closing date for regular sessions of the General Congress.

Article 72. Formation of Special Sessions of the General Congress.

Article 73. Notice of change of the session the President of the Republic.

TITLE IV

THE SUPREME POWER OF THE FEDERAL EXECUTIVE

Section One

Of those in whom it is deposited and their choice

Article 74. People who deposited only in the Supreme Executive Power of the Federation.

Article 75. Existence of the post of Vice President in case of replacement of the President of the Supreme Executive Power of the Federation.

Article 76. Requirements for the position of President or Vice Supreme Conservative Power.

Article 77. Re-eligibility of the President of the Supreme Conservative Power.

Article 78. Loyalty to the office of President of the Supreme Conservative Power.

Article 79. Election of two individuals by the Legislatures of the States earlier next year to be input to the exercise of the functions the President of the Republic.

Article 80. Referral of the Election Act referred to in Article 79.

Article 81. Date of opening and reading of testimony of the Acts mentioned in the preceding article.

Article 82. Report of the testimony of the minutes of the election referred to in Article 79.

Article 83. Qualification and count the votes.

Article 84. Absolute majority of the legislatures, to the position of President.

Article 85. Election of the President by majority vote.

Article 86. Election of the President by the Chamber of Deputies in case of lack of majority.

Article 87. Election of Chairman and Vice Chairman of the Chamber of Deputies in the event of a tie in most elections.

Article 88. Election of Chairman and Vice Chairman of the Chamber of Deputies in the event of a tie the second place in most elections.

Article 89. Decision of the election in case of equal number of votes in elections.

Article 90. Cases of repeated elections.

Article 91. Reduction of competitors in the case of obtaining a majority in elections in the case of three candidates.

Article 92. General rules on the election of President and Vice President.

Article 93. Voting on scaled score of states.

Article 94. Quorum for deliberation of matters contained in Article 93.

Section Two

The duration of the President and Vice President, as to fill the vacancies of both sworn and their oath.

Article 95. Legal date for the beginning of the functions of President and Vice President.

Article 96. Appointment of interim president.

Article 97. Appointment of President or interim vice president in case of temporary disability of the elected candidate.

Article 98. Responsibility of the President of the Supreme Court in the protection of the supreme executive power during election time.

Article 99. Case of election by the Legislatures of the States where there is perpetual inability of the elected candidates for the position.

Article 100. No impairment of the conduct of periodic elections if the latter may have been carried out by the Legislatures of the States.

Article 101. Obligation of the President and Vice President attend the official residence of the supreme powers of the Federation on the date indicated legal effect of presenting oath.

Article 102. Consequence of the lack of oath.

Article 103. Obligation of the President to be sworn before entering the Vice President in the exercise of both functions.

Article 104. Oath of the President and Vice President before the Chambers.

Section Three

Of the Privileges of the President and Vicepresident.

Article 105. Power of the President in carrying out reform proposals or legislation.

Article 106. Power of the President in carrying out observations on the laws and decrees on one occasion.

Article 107. Impeachment of the President during his term of office before the Chambers of crimes prevented in Article 38.

Article 108. Term for the indictment of President before the Chambers concluded his term of office for the commission of crimes prevented in Article 38.

Article 109. Impeachment of the Vicepresident during his term of office before the Chambers for the commission of crime indistinct.

Section Four

Of the Powers of President and restrictions to his faculter.

Article 110. Powers of the President.

Article 111. Legal formula used for the publication of laws and decrees.

Article 112. Restrictions on the powers of the President.

Section Five

Governing Council

Article 113. Existence of the Governing Council.

Article 114. Formation of the Council during the first two years.

Article 115. Included in that lies the Presidency of the Council.

Article 116. Powers of the Council.

Section Six

From the Office of Government business

Article 117. Statutory number of clerks necessary for the transaction of government business.

Article 118. Signature Office of the Secretary of the respective decrees and orders of the President for his obedience.

Article 119. Responsibility of secretaries in the office of the President acts authorized signature.

Article 120. Annual obligation of accountability to the respective industry chambers.

Article 121. Eligibility requirements for the position of Secretary of State.

Article 122. Training Regulations for the Distribution and turn of Government Business.

TITLE V

THE FEDERAL JUDICIARY BRANCH.

Section One

Of the nature and distribution of this Power

Article 123. Judicial of the Federation.

Section Two

Supreme Court of Justice and the choice, duration, and oath of its membership

Article 124. Composition of the Supreme Court of Justice.

Article 125. Eligibility requirements for the post of Minister of the Supreme Court's Office.

Article 126. Character of perpetuity of office in the Supreme Court of Justice.

Article 127. Election of Ministers of the Supreme Court of Justice.

Article 128. Send certified list of election results by the Legislatures of the States to the President of the Governing Council.

Article 129. Council's obligation to proceed with the lists according to the provisions in the respective Regulations.

Article 130. Opening of the lists in the presence of the General Congress assembled.

Article 131. Certification of elections by the General Commission on Prevention of Congress.

Article 132. Appointment of Ministers by a majority vote of the legislature.

Article 133. Successive election of Ministers as a complement to the amount required by Law.

Article 134. Preference of Deputies and Senate for the post of Minister or the Prosecutor of the Supreme Court be elected.

Article 135. Replacement of Ministers of the Supreme Court of Justice.

Article 136. Oath of Ministers of the Supreme Court of Justice.

Section Three

Branch of the Supreme Court of Justice

Article 137. Branch of the Supreme Court.

Article 138. Existence of Regulatory Law of the Supreme Court of Justice.

Section Four

The way to judge individuals in the Supreme Court

Article 139. Procedure to judge ministers of the Supreme Court of Justice.

Section Five

In the Circuit Courts

Article 140. Composition of the Circuit Courts.

Article 141. Eligibility requirements for the position of Circuit Judge.

Article 142. Jurisdiction of Circuit Courts.

Section Six

In the District Courts

Article 143. Composition and jurisdiction of the District Courts.

Article 144. Eligibility requirements for the office of District Judge.

Section Seven

General Rules to be subject in all States and Territories of the Federation Justice Administration

Article 145. Public faith and credit of the acts, records and proceedings of Judges and State authorities.

Article 146. Deserving of punishment of infamy.

Article 147. Prohibition of the penalty of confiscation.

Article 148. Prohibition of retroactivity of the law and judgment by commission.

Article 149. Prohibition on the use of torture.

Article 150. Ban turn warrant without the existence of prima facie evidence.

Article 151. Prohibition of detention for more than 72 hours.

Article 152. Ban turn search warrant at the home.

Article 153. Right not to give evidence as witnesses in criminal cases.

Article 154. Subject to the military authorities and the church ministers.

Article 155. Source of litigation in civil and criminal.

Article 156. Hearing Rights.

TITLE VI

THE STATES OF THE FEDERATION

Section One

The particular government of the United States

Article 157. Division of Powers in each state.

Article 158. Legislative and place of residence.

Article 159. Limited period to exercise the executive power.

Article 160. Judicial Power by courts.

Section Two

Obligations of States

Article 161. Obligation of states.

Section Three

Restrictions of the powers of the States

Article 162. Restrictions of the Powers of the States.

TITLE VII

Section One

Enforcement interpretation and Reformation of the Constitution and Articles of Association.

Article 163. Oath to the Constitution and Articles of Association of public officials.

Article 164. Congress' power to issue laws and decrees.

Article 165. Faculty of General Congress for clarification of laws and precepts of the Constitution and the Constitutive Act.

Article 166. Interference of the legislatures of the States on Constitutional precepts and observations of the Constitutive Act.

Article 167. Procedure for the classification of the observations made by the Legislatures of the States.

Article 168. Making observations by the Legislatures of the States.

Article 169. Importance of the proposed amendments or additions in the years after 30.

Article 170. Importance of monitoring the requisites provided for the formation of laws.

Article 171. Ban to amend articles related to freedom and independence of religion, governance, freedom of the press, separation of powers of the Federation and the States of the Mexican Nation.

FEDERAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

Mexico, October 4th, 1824

171 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE I

Sole Section.

Of the Mexican Nation, its territory and religion.

TITLE II

Sole Section.

Of the government form of the Nation, its integral parts, and of its supreme power division.

TITLE III

OF THE LEGISLATIVE POWER

Section First. *Of its nature and the exercising mode.*

Section Second. *Of the Chamber of Deputies.*

Section Third. *Of the Chamber of Senators.*

Section Fourth. *Of the economic functions of both chambers and its individual's prerogatives.*

Section Fifth. *Of the General Congress faculties.*

Section Sixth. *Of the formation of laws.*

Section Seventh. *Of the time, duration and location of the General Congress sessions.*

TITLE IV.
OF THE SUPREME EXECUTIVE POWER OF THE FEDERATION.

Section First

Of the people in whom the power is deposited and of its election.

Section Second. *Of the duration of the president and vice president, the manner of filling their absences and their pledge.*

Section Third. *Of the prerogatives of the president and vice president.*

Section Fourth. *Of the attributions of the president and restrictions of his faculties.*

Section Fifth. *Of the Government Council.*

Section Sixth. *Of the dispatch of government business.*

TITLE V.
OF THE JUDICIARY POWER OF THE FEDERATION

Section First. *Of the nature and distribution of this power.*

Section Second. *Of the Court of Justice and the election, duration and pledge of its members.*

Section Third. *Of the attributions of the Supreme Court of Justice.*

Section Fourth. *Of the form of judging the individuals of the Supreme Court of Justice.*

Section Fifth. *Of the Circuit Tribunals.*

Section Sixth. *Of the District Courts.*

Section Seventh. *General rules to which it will abide.*

TITLE VI.
OF THE STATES OF THE FEDERATION

Section First. *Of the individual government of the States*

Section Second. *Of the obligations of the States*

Section Third. *Restrictions of the Powers of the State*

TITLE VII
Sole Section.
*Of the Observance, Interpretation, and Amendment of the
Constitution and Constitutional*

Given in México, 4th October, 1824, fourth year of Independence, third of Liberty, and second of the Federation. Signed by the Members of Congress and the Supreme Executive Power.

The Supreme Executive Power, provisionally appointed by the general sovereign Congress of the Nation, to all who shall see these presents, know, and understand, that the same Congress has decreed and sanctioned the following.

FEDERAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

In the name of GOD, all powerful, author and supreme legislator of society. The general constituent Congress of the Mexican Nation, in the discharge of the duties confided to them by their constituents, in order to establish and fix its political Independence, establish and confirm its Liberty, and promote its prosperity and glory, decree as follows:

CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

TITLE I

Sole Section

Of the Mexican Nation, its Territory and Religion

1. The Mexican Nation is forever free and independent of the Spanish government, and every other power.
2. Its Territory consists of that, which was formerly called the viceroyalty of New Spain, that styled the captain generalship of Tucaton, that of the commandant generalship formerly called the Internal Provinces of East and West, and that of Lower and Upper California, with the lands annexed, and adjacent lands in both seas. By a constitutional Law, a demarcation of the limits of the Federation will be made as soon as circumstances will permit.
3. The Religion of the Mexican Nation, is, and will be perpetually, the Roman Catholic Apostolic. The Nation will protect it by wise and just laws, and prohibit the exercise of any other whatever.

TITLE II

Sole Section

Form of Government of the Nation, of its integral parts and division of Supreme Power

4. The Mexican Nation adopts for its Government, the form of Republican representative, popular Federal.
5. The parts of this Federation, are the States and Territories as follows: The State of the Chiapas, Chihuahua, Coahuila and Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora and Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Xalisco, Yucatán, Zacatecas; the Territory of Alta California, Baja California, Colima and Santa Fe of Nuevo México---a constitutional Law shall fix the character of Tlaxcala.

6. The supreme power of the Federation will be divided for its exercises, in Legislative, Executive, and Judicial.

TITLE III LEGISLATIVE POWER

Section First

Of its nature and the mode of exercising it

7. The legislative power of the Federation shall be disposed in a General Congress, this to be divided in two Chambers, one of Deputies (Representatives) and the other of Senators.

Section Second

Of the Chamber of Deputies

8. The Chamber of Deputies shall be composed of representatives elected totally every two years, by the citizens of the States.

9. The qualifications of the electors shall be constitutionally prescribed by the Legislatures of the States; to whom, likewise, appertains the regulation of the elections, in conformity with the principles established by this Constitution.

10. The general basis for the appointment of deputies, shall be the population.

11. For every 80,000 souls, one Representative shall be appointed, or for a fraction which passes 40,000. The State which may not contain this population, shall, notwithstanding, appoint one Representative.

12. A census of the whole Federation, which shall be formed in five years and renewed every ten, shall serve to designate the number of Deputies corresponding to each State; and in the mean time, it shall be regulated agreeably to the basis established in the former Article, by the census which governed in the election of Deputies in the present Congress.

13. In the same manner shall be elected in each State, the necessary number of supernumerary deputies, in the ratio of one for every three full representatives, or for a fraction amounting to two; the states which may contain less than three full representatives shall elect one supernumerary.

14. The Territory which may contain more than 40,000 inhabitants shall appoint a full representative and one supernumerary, who shall have a voice and vote in the formation of laws and decrees.

15. The Territory which may not contain the foregoing number of population, shall appoint one full representative and one supernumerary, who shall be entitled to a voice in all matters. The election of Representatives for the Territories shall be regulated by a special Law.

16. In every State and Territory of the Federation, the appointment of Representatives shall be made on the first Sunday in October previous to its renovation. The election shall be indirect.

17. The election of Representatives concluded, the electoral college shall remit through their President to the Council of Government, a legal return of the election, and notify the elected of their appointment by an official letter, which shall serve as a credential of election.

18. The President of the Council of Government shall give to the returns, referred to in the preceding Article, the direction prescribed by the regulations of said Council.

19. To be a Representative it is required:

- I. To be at the time of the election, twenty-five years of age complete.
- II. To have been a resident of the State, from which elected, at least two years, or born in the State, although a resident in another.

20. Those not born in the territory of the Mexican Nation, to be Representatives, must have, besides eight years' residence in it, 8000 dollars of real estate in any part of the Republic, or an occupation that produces them 1000 per year.

21. Exceptions to the foregoing Article:

- I. Those born in any other part of America, that in 1810 appertained to Spain, and has not united itself to another nation, nor remains subject to the former, to whom three years' residence in the Territory of the Federation is sufficient, in addition to the requisite prescribed in the 19th Article.
- II. The military not born in the Territory of the republic, who, with arms, sustained the independence of the country, eight years' residence, complete, is sufficient, and the requisites prescribed in the 19th Article.

22. In the election of Representatives, actual residence shall have preference over birth and non-residence.

23. Those cannot be Representatives:

- I. Those deprived or suspended from the rights of citizenship.
- II. The President and Vicepresident of the Federation.
- III. The members of the Supreme Judicial Court.
- IV. Secretaries of the Cabinet and the officers of their departments.
- V. Those employed in the Treasury, whose functions extend over the whole Federation.
- VI. Governors of States and Territories, Commandant Generals, Archbishops and Bishops, Governors of Archbishopsrics and Bishopsrics, Provisors and Vicar Generals, Circuit Judges, Commissary Generals of treasury and war, for the States and Territories over which they exercise their functions.

24. In order that any person enumerated in the foregoing Article may be eligible, it is necessary they should have ceased their functions six months previous to their election.

Section Third

Of the Chamber of Senators

25. The Senate shall be composed of two Senators from each State, elected by an absolute majority of the votes of the Legislatures, and renewed by one-half every two years.

26. The seats of the senators appointed in the second place, shall be vacated in two years, and the first appointed in four years, and so on in succession.

27. When a vacancy occurs by the death, resignation, or other cause, it shall be filled by the corresponding Legislature in session, if not as soon as it meets.

28. To be a Senator it is necessary to possess all the qualifications required by the former Section, to be a representative, and moreover, to be at the time of election, thirty years of age.

29. No person can be a Senator, who is disqualified from being a Representative.

30. In the election of Senators, the 22d Article shall also govern.

31. When the same individual is elected for a Senator and Representative, the first election shall have the preference.

32. The periodical election of Senators shall be made in all the States on the same day which shall be on the first day of September previous to the renewal of half the Senators.

33. The election of Senators concluded, the Legislature shall remit a legal return through their President, to the President of the Council of Government; and notify the elected of their appointment, by means of an official letter, which shall serve them as credentials. The President of the Council of Government shall give the direction to these to returns indicated in the 18th Article.

Section Fourth

Of the Individual Functions of both Chambers and Prerogatives of its Members

34. Each Chamber in its preparatory meeting, and in everything appertaining to its government, shall follow the rule formed by the present Congress; provided that amendments may be made to them in future, should both Chambers consider it necessary.

35. Each Chamber shall judge of the elections of its respective members, and resolve all doubts which may occur in them.

36. The Chambers cannot open their sessions without the presence of more than the half of the total number of its members; but those present of one and the other, must unite on the day appointed for the regulation of the internal government

of each, and respectively compel the attendance of the absentees, under the penalties prescribed by the Law.

37. The Chamber will communicate with one another, and with the Supreme Executive Power, by means of their respective Secretaries, or by means of deputations.

38. Either of the two Chambers may sit as Grand Jurors, on accusations.

- I. Against the President of the Federation, for the crime of Treason against the National Independence or the established form of Government, or for insubordination or bribery during the time of his service.
- II. Also, against the President, for acts manifestly intended to prevent them from entering on the exercise of their duties in the manner prescribed in this Constitution, or to deprive the Chambers of the use of any of the powers constitutionally vested in them.
- III. Against the members of the Supreme Court and the Secretaries of the departments, for any crime committed during the time of their service.
- IV. Against the Governors of the States, for infractions on the Federal Constitution, laws of the Union, or orders of the President of the Federation, which may not be manifestly contrary to the Constitution and general laws of the Union, and likewise by the publication of laws and decrees of the Legislatures of their respective States, contrary to the same constitution and laws.

39. The Chamber of Deputies will exclusively form a Grand Jury, when the President or his ministers may be accused of acts in which the Senate or the Council of Government have concurred by reason of its attributions. The Chamber will, in the same manner, serve as Grand Juror, in cases of accusation against the Vicepresident, for any offense committed during the term of his service.

40. The Chamber, before which has been made the accusation of the individual spoken of in the two preceding articles will form itself in a Grand Jury, and if it is declared, by the vote of two-thirds of the members present that there is cause of accusation, the functions of the accused shall be suspended, and he shall be placed at the disposition of the competent tribunal.

41. Any Deputy or Senator can make any proposition in writing, or present projects of a Law or decree in his respective chamber.

42. The Deputies and Senators shall be inviolable for the opinions manifested in the discharge of their duties, and never can be called to account for them.

43. In all criminal prosecutions instituted against senators or deputies, from the time of their election until two months after the expiration of their term of service, the former shall be accused before Chamber of the latter, and the latter before that of the former; each chamber composing a Grand Jury respectively for this object.

44. If the Chamber sitting as a Grand Jury, in the cases referred to in the last Article, declare by a vote of two-thirds of the members present, that there is cause for

accusation, the accused shall be suspended and placed at the disposition of the competent tribunal.

45. The emoluments of the Deputies and Senators shall be determined by Law, and paid from the general treasury of the Federation.

46. Each Chamber, and also the meetings spoken of in the 36th Article, shall have power to deliver such orders as they may deem necessary to carry their resolutions into effect, issued by virtue of the functions granted to each by the 35th, 36th, 39th, 40th, 44th, and 45th Articles of the Constitution, and the President of the United States shall cause them to be executed without making any observations upon them.

Section Fifth

Of the faculties of the General Congress

47. Every resolution of the General Congress shall have the character of a Law or decree.

48. The resolutions of the General Congress, to be entitled to the force of Law or decree, must be signed by the President, except in cases otherwise provided in this Constitution.

49. The laws and decrees which emanate from the General Congress, shall have for object:

- I. To sustain the National Independence, provide for the National security and preservation of its exterior relations.
- II. To preserve the Federal Union of the States, and the peace and public order of the interior of the Federation.
- III. Maintain the independence of the States among themselves, in all that relates to their interior government, in conformity to the constitutional Act, and this Constitution.
- IV. Sustain the proportional equality of obligations and rights, which the States are entitled to before the Law.

50. The exclusive faculties of the General Congress are the following:

- I. Promote illustration, assuring for a limited time, exclusive rights to authors for their respective works; establishing Colleges for marine, artillery, and engineers; erecting one or more establishments in which are to be taught, natural, political, and moral sciences, noble arts, and the languages, without prejudice to the power which the Legislatures have to regulate public education in their respective states.
- II. Promote the general prosperity, by opening and improving roads and canals, without impeding the States in the improvement of theirs; establishing mails and post offices, and securing for a limited time, exclusive right to the inventors, practitioners or introducers of any branch of industry, for their respective inventions, perfections or new introductions.

- III. Protect and regulate the political liberty of the press, in order that its exercises may never be suspended, and much less abolished in any of the States and Territories of the Federation.
- IV. Admit new States to the Federal Union or Territories, incorporating them in the Nation.
- V. Regulate definitively, the Limits of the States, when they cannot agree among themselves about the demarcation of their respective districts.
- VI. Form States out of Territories, or unite them to those already existing.
- VII. Unite two or more States, by a petition of their Legislatures, to form one only, or form a new one from the limits of those already exist, with the approbation of three-fourths of the members present of both Chambers, and a ratification of an equal number of the Legislatures of the other States of the Union.
- VIII. Fix the general expenses, establish the necessary contributions to cover them, regulated their collection, determine the inversion, and take annually accounts thereof from the government.
- IX. Contract debts upon the credit of the Federation, and designate guaranties to cover them.
- X. Acknowledge the National debt, and designate means for its consolidation and payment.
- XI. Regulate the commerce with foreign nations, and among the different States and Tribes of Indians.
- XII. Give instructions to celebrate covenants with the Apostolic Chair, approve them for ratification, and regulate the exercise of the patronage in all parts of the Nation.
- XIII. Approve treaties of peace, alliance, friendship, federation and armed neutrality, and whatsoever other which the President of the United States may celebrate with foreign powers.
- XIV. To establish all kinds of ports, customhouses, and designate their locations.
- XV. Determine and regulate the weight, standard, value, three and denomination of money in all the States of the Federation, and adopt a general system of weights and measures.
- XVI. Declare war after examining the data prescribed by the President of the United States.
- XVII. Form regulations relative to granting letters of marque and reprisal, and to declare good or bad captures by sea and land.
- XVIII. Designate the armed force of sea and land, fix the respective quota of men to each State, and give orders and regulations for their organization and service.
- XIX. Form regulations to organize, arm, and discipline the local militia of the State, reserving to each one the appointment of their respective officers,

and the faculty of training them conformably to the discipline prescribed by said regulations.

- XX. To grant or deny the entrance of foreign troops in the Territory of the Federation.
- XXI. Permit or not, the station of squadrons of any other power, for more than one month, in the Mexican ports.
- XXII. Permit or not, the departure of National troops without the limits of the Federation.
- XXIII. Create or suppress public offices of the Federation, designate, augment or diminish their emoluments and pensions.
- XXIV. Grant premiums and recompenses to corporations or persons who have rendered important service to the Republic, and decree public honors to the posthumous memory of great men.
- XXV. Grant amnesty or pardon for crimes, the cognizance of which appertains to the tribunal of the Federation, in the cases, and with the previous requirements prescribed by Law.
- XXVI. To establish a general Law of naturalization.
- XXVII. To give uniform laws in every State, on the subject of bankruptcies.
- XXVIII. To select a place to serve as a residence of the supreme powers of the Federation, and exercise within its limits the attributions of the legislative powers of the State.
- XXIX. To change such residence when they may deem necessary.
- XXX. Give laws and decrees for the regulation of the interior administration of the Territories.
- XXXI. Dictate all the laws and decrees that may be conducive to fulfill the object spoken of in the 49th Article, without interfering with the interior administration of the State.

Section Sixth

Formation of the Laws

51. The formation of laws and decrees can proceed indiscriminately from either of the two Chambers with the exception of those which arise from contributions or imposts, which cannot have origin except in the Chamber of Deputies.

52. There shall be considered as, incipient of Law or decree:

1° The propositions which the President of the United Mexican States may deem conducive to the general good of society, and as such, particularly recommend them to the Chamber of Deputies.

2° The propositions or plans of laws or decrees which the Legislatures may direct to either Chamber.

53. All projects of a Law or decree, without any exception, shall be successively discussed in both Chamber, observing in each with exactitude the rules relative to the form of debates, interval and mode, of proceeding in discussing and voting.

54. The projects of a Law or decree rejected in the Chamber where it originated, before being sent to the other Chamber, shall not be renewed in the same Chamber by its members in the sessions of that year, but must remain until the following.

55. If the project of a Law or decree, after having been debated, should be approved by the absolute majority of the members present of both Chambers, it shall be passed to the President of the United States, who also, if he approve it, shall sign and publish it, and if not, return it, with his observations, within the term of ten days (Sundays and solemn festivals excepted), to the Chamber of its origin.

56. The project of a Law or decree, returned by the President in conformity with the preceding Article, shall be a second time discussed in the two Chambers. If in both of these it should be approved by two-thirds of the members present, it shall be again returned to the President, who, without excuse, must sign and publish it; but if it was not approved by the vote of two-thirds of both Chambers, it cannot be renewed in either of them until the next year.

57. If the President does not return any project of a Law or decree within the time prescribed in the 55th Article, it shall, from that circumstance, be considered as sanctioned, and as such shall be promulgated, unless in the mean time the session of Congress should be closed or suspended, in which case the return must be made on the first day in which Congress shall be re-assembled.

58. The project of a Law or decree, totally rejected for the first time by the Chamber to which it has been sent, shall be returned With their observations to the one in which it originated: if after a re-examination the said Chamber shall again approve of it by a vote of two-thirds of the members present, it shall be sent a second time to the Camber that rejected it, who cannot a second time reject it without the concurrence of two-thirds of the members present.

59. The projects of a Law or decree, approved of after a second revision by two-thirds of the members of the I-louse where it originated, and not rejected by two-thirds of the members of the other Chamber, shall be sent to the President) who shall sign and publish it, or return it within ten days (Sundays, &c. excepted) to the Chamber where it originated, with his observations.

60. The project of a Law or decree, which, according to the foregoing Article, the President returned to the Chamber of its origin, shall be again taken into consideration, and if this approve it by a vote of two-thirds of the members present, and the revising body does not reject, by an equal number of its members, it shall be returned to the President, who must publish it. But if it was not approved by the vote of two-thirds of the Chamber, of its origin, or was rejected by an equal number of the revising body, it cannot be renewed until the ordinary subsequent sessions.

61. In the event of the rejection a second time of the revising body, in conformity with the 58th Article, the project shall be considered rejected, and cannot be reconsidered until the following year.

62. In the amendments which the revising body make to any project of a Law or decree, there shall be observed the same formalities required before the project of a Law can be sent to the President.

63. The parts of a project of a Law or decree rejected for the first time by the revising body, shall take the same course as those totally rejected by it for the first time.

64. In the interpretation, modification, or revocation of the laws or decrees, the same requisites shall be observed which are prescribed for their formation.

65. All resolutions of the general Congress communicated to the President of the Republic, must be signed by the President of both Chambers and by a Secretary of each of them.

66. For the formation of every Law or decree, it is necessary that an absolute majority of all the members of each Chamber should be present in their respective Chambers.

Section Seventh

Of the time, duration, and place of the Sessions of the General Congress

67. The General Congress shall meet every year on the first day of January at the place designated by Law; its internal rules shall prescribe the previous forms necessary at the opening of its sessions, and the formalities which are to be observed at its installation.

68. The President of the Federation shall assist at the installation, and pronounce a discourse analogous to this important act, and the person who presides in Congress shall answer it in general terms.

69. The ordinary sessions of Congress shall be daily, without any other interruption than that of the days of solemn festival; and in order to adjourn for more than three days, the consent of both Chambers shall be necessary.

70. Both Chambers shall reside in the same place, and cannot move to another, without first agreeing on the removal, the time and manner of doing it, designating the same point, for the reunion of one and the other. But if they agree on a removal, and differ as to the time, mode, and place, the President of the States shall determine the difference, electing one of those in question.

71. The Congress shall close its sessions annually on the 15th day of April, with the same formalities as are prescribed for its opening, proroguing the session thirty days (Sundays and solemn festivals excepted) when they may deem it necessary, or when the President of the Federation requires it.

72. When the General Congress is assembled for extraordinary sessions, it shall be formed of the same deputies and senators as the ordinary sessions of that year and shall occupy itself exclusively on the object or objects for which it was convened;

but if these should not be completed on the day in which the ordinary sessions are to commence, the extraordinary sessions shall cease, and the subject pending shall be determined by Congress in said ordinary sessions.

73. The resolutions that the Congress takes relative to the removal, suspension, or prorogation of their sessions, agreeably to the three preceding Articles, shall be communicated to the President, who shall cause them to be executed without making any observations upon them.

TITLE IV Section First

Of the Supreme Executive Power of the Nation

74. The supreme executive power of the Federation shall be deposited in one individual, who shall be styled President of the United Mexican States.

75. There shall likewise be a Vicepresident, on whom will devolve the faculties and prerogatives of the President in case of his physical or moral inability to serve.

76. To be President or Vicepresident, it is required to be a Mexican citizen by birth, thirty-five years of age at the time of the election, and to be a resident in the country.

77. The President cannot be re-elected for this office until after four years are passed from the time of his retirement.

78. He that is elected President or Vicepresident of the Republic shall accept these offices in preference to any others.

79. The first day of September, anterior to the year in which the new President must enter on the exercise of his duties, the Legislatures of each, state shall elect by an absolute majority of votes two individuals, one of which, at least, must not be a native of the State that elects.

80. The voting concluded, the Legislatures shall remit to the President of the Council of Government, a legal return of the election, in order that he may give it the course designated by the rules of the Council.

81. The sixth of January afterwards, the said returns shall be read in presence of both Chambers united, provided those of three-fourths of the Legislatures of the States have been received.

82. The reading of the said returns concluded, the Senators shall retire, and a committee appointed by the Chamber of Deputies, and composed of one for each State of those that have representatives present, shall revise them and render an account of the result.

83. The Chamber shall then proceed to class the elections and enumerate the votes.

84. He who has an absolute majority of the votes of all the Legislatures shall be the President.

85. If two should have said majority, he shall be President who has the most votes, and the other the Vicepresident. In case of a tie with said majority, the Chamber of Deputies shall elect one of the two for President and the other shall be Vicepresident.

86. If no one should have the absolute majority of the votes of the Legislatures, the Chamber of Deputies shall elect the President and Vicepresident, choosing in each election, one of the two who had the greatest number of suffrages.

87. When more than two individuals have a respective majority and equal number of votes, the Chamber shall choose from them the President or Vicepresident as the case may be.

88. If one has received the respective majority, and two or more have an equal number of suffrages, but greater than the others, the Chamber shall elect from among those who have the greatest number of votes.

89. If all have an equal number of votes, the Chamber shall elect from among them all the President and Vicepresident, doing the same when one has a number of suffrages and the others an equal number.

90. If there should be a tie upon the voting of the classing of the elections made by the Legislatures, the vote shall be repeated once, and if it should result in a tie, shall decide it by lot.

91. In the competitions between three or more that have an equal number of votes, the voting shall be directed to the reduction of the competitors to two or one, in order that in the election he may contend with the other, which may have obtained a relative majority over all the others.

92. For a general rule in voting relative to the election of President and Vicepresident, they shall not refer to lots before having made a second vote.

93. The voting on classifications of elections made by the Legislatures, and on those made by the Chamber of Deputies or President and Vicepresident, shall be made by States, the representation of each one having a single vote and in order that there may be a decision in the Chamber, it must contain an absolute majority of the votes.

94. In order to deliberate on the objects contained in the foregoing Article, there must be united in the Chamber more than the half of that total number of its members, and be present representatives from three-fourths of the States.

Section Second

Of the duration of the office of President and Vicepresident, manner of filling the vacancies of both, and their oath

95. The President and Vicepresident of the Federation shall enter upon the discharge of their duties on the first of April, and shall be replaced precisely on the same day ever, four years by a new constitutional election.

96. If for any motive, the elections of President and Vicepresident are not made and published by the first of April, when they ought to take their seats, or those elected should not immediately enter upon the discharge of their duties, nevertheless, the

former ones shall go out of office the same day, and the supreme executive power shall be deposited, provisionally, in a President, that shall be elected by the Chamber of Deputies, voting by States.

97. In case the President should be indisposed, then the provisions in the preceding Article shall have effect, and if both should be at the same time, and Congress not being in session, the supreme Executive Power shall be deposited in the hands of the Chief justice of the Supreme Court, and two individuals that shall be elected by an absolute plurality of votes by the Council of Government; these are not to be members of the general Congress, and are to have the qualities requisite to be a President of the Federation.

98. Until the elections are made to which the preceding Articles allude, the Chief justice of the Supreme Court shall be charged with the Supreme Executive Power.

99. In case of the perpetual inability of the President and Vicepresident to serve, Congress, or in its recess, the Council of Government, will respectively provide according to Articles 96 and 97, and so dispose that the Legislatures proceed to the election of President and Vicepresident, according to the forms prescribed by the Constitution.

100. The elections of President and Vicepresident made by the Legislatures in consequence of the perpetual inability of those to serve who had been elected for these offices, shall not impede the ordinary elections the first of September every four years.

101. The President and Vicepresident newly elected, must be on the first day of April, in the place where the supreme powers of the Federation reside and before both Chambers assembled, swear to observe the duties imposed on them under the following form: I, N---, Elected President (or Vicepresident) of the United Mexican States, swear before God and the Holy Evangelists, that I will exercise faithfully, the charge the same US have confided in me, and that I will keep, and cause to be kept exactly, the Constitution and general laws of the Federation.

102. If neither the President nor Vicepresident present themselves to swear as the preceding Article provides, and the sessions of Congress being open, they shall swear before the Council of Government as soon as each one presents himself.

103. If the Vicepresident takes the oath prescribed in Article 101, before the President, he shall enter immediately on the discharge of the duties of President until he shall have sworn.

104. The President and Vicepresident constitutionally appointed according to Article 99, and those individuals provisionally appointed to exercise the charge of President, according to Articles 96 and 97, shall be sworn as prescribed in Article 101, before both Chambers, if assembled, if not, before the Council of Government.

Section Third

Of the prerogatives of the President and Vicepresident

105. The President has the power to lay before Congress such propositions or amendments of laws as he may deem conducive of the general good, directing them to the Chamber of Deputies.

106. The President has the power once in the space of ten days (Sundays and solemn festivals excepted) to make observations upon the laws and decrees passed to him by Congress, suspending their publication until the resolution of Congress, except in the cases mentioned in this Constitution.

107. The President, during the time of his administration cannot be accused, except before either of the Chambers, and only in crimes alluded to in Article 38, committed in the time therein expressed.

108. Within one year from the day on which the President ceases his functions, he cannot be accused except before one of the Chambers for crimes alluded to in Article 38, or any others committed during the term of his administration, after this he cannot be accused for those crimes.

109. The Vicepresident, during the four years of his administration, cannot be accused except before the Chamber of Deputies, for whatever crime he commits during the time of his administration.

Section Fourth

Attributions of the President and the restrictions of his faculties

110. The attributions of the President are the following:

- I. To publish, circulate, and cause to be kept the laws and decrees of the general Congress.
- II. To issue rules, decrees and orders, for a better observance of the Constitution, constitutional acts and general laws.
- III. To put into execution the laws and decrees directed to preserve the integrity of the Federation, and to sustain its independence in its exterior, together with its union and liberty in its interior.
- IV. To freely appoint and dismiss, Secretaries of the departments.
- V. To direct the collection of and decree the inversion of general contributions agreeably to the laws.
- VI. To name the officers of the Treasury department, and those of the commissary generals, diplomatic ministers, and consuls, colonels and other superior officers of the permanent army, active militia and navy, with the approbation of the Senate, and should it not be in session, with the Council of Government.
- VII. To name all other officers of the permanent army, navy, and active militia, and officers of the Federation conformably to the laws.

- VIII. To appoint, after previous recommendation from the Supreme Court judges and Attorney Generals of the circuit and district.
- IX. To grant discharges and licenses, and regulate military pensions according to Law.
- X. To dispose of the permanent armed force by sea and land, and the active militia for the security of the interior and defense of the exterior of the Federation.
- XI. To dispose of the local militia for the same purposes, but to take them out of their respective States or Territories, it will require the previous consent of Congress, who will also designate the force necessary. Should Congress not be assembled, the consent of the Council of Government will be necessary, and who will also designate the number.
- XII. To declare war in the name of the United Mexican States, after a previous decree of Congress to that effect, and to grant commissions to privateers in conformity with the laws.
- XIII. To celebrate covenants with the Apostolic Chair, as designated in clause 12th of *Article 50*.
- XIV. To direct diplomatic negotiations, and to celebrate treaties of peace, amity, alliance, truce, federation, armed neutrality, commerce, and all others, but to give or deny the ratification of any of them, requires the approbation of the general Congress.
- XV. To receive ministers and other envoys from foreign nations.
- XVI. To request Congress to prorogue their sessions for thirty days, (Sundays, &c. excepted).
- XVII. To assemble Congress for extraordinary sessions, as he may deem the case necessary, by the consent of two-thirds of the Council of Government present.
- XVIII. Also to assemble an extraordinary session of Congress, when the Council of Government shall deem it necessary and the vote of two-thirds of the members present is given to that effect.
- XIX. To see that justice is promptly and impartially administered by the Supreme Courts, Tribunals, and inferior courts of the Federation, and that their sentences be executed according to Law.
- XX. To suspend from their employment, for the space of three months, and deprive one-half of their pay for the same time, all officers belonging to the Federation, violators of its orders and decrees; and should there be cause for a prosecution against such officers, he shall place the subject before its proper tribunal.
- XXI. To grant the passage, or retain the decrees of the Ecclesiastical Councils, Pontificate Bulls, Briefs and Rescripts, with the consent of the General Congress, if they contain general dispositions to be laid before the Senate,

or in its recess, before the Council of Government, if containing governmental business, and before the Supreme Court of justice, if it is a subject of litigation.

III. The President, in publishing laws and decrees, shall use the following formula: *The President of the United Mexican States, to the inhabitants of the Republic. Knowing, that the General Congress has decreed the following; Therefore, I command that it be printed, published, and circulated, and that due compliance be given it.*

II2. The restrictions of the faculties of the President are the following:

- I. The President cannot take command of the forces by sea or land in person, without the consent of the General Congress, or should it not be in session, without the Council of Government, by a vote of two-thirds of the members present. When he takes command of these requisites, the Vicepresident shall administer the government.
- II. The President does not have the right to deprive any one of his liberty nor inflict punishment on any individual but when the safety of the Federation requires it, he can arrest any person provided he places the person, arrested, within 48 hours, at the disposition of the competent judge or tribunal.
- III. The President cannot occupy the property of any individual or corporation, or disturb the possession, use or benefit of it; and should it be necessary for the public good, to take the property of any individual or corporation, it will require the approbation of the Senate, or in its recess, the approbation of the Council of government, indemnifying the party interested, by the decision of men chosen by the party and the Government.
- IV. The President cannot impede the elections and other acts expressed in the last clause of the 38th article.

Section Fifth

Of the Council of the Government

II3. During the recess of Congress there shall be a Council of Government, composed of one-half of the members of the Senate, one for each State.

II4. For the first two years, this Council of Government shall be composed of the first members elected by their respective legislatures and the succeeding year by the oldest members.

II5. This Council shall have for President, the Vicepresident of the United States, and also have the power to elect a President pro tem to fill the vacancy occasioned by the absence of the other.

II6. The attributions of this Council are the following:

- I. To see that the Constitution is strictly observed, and the constitutional act, and general laws, and to give their advice in any incident relative to these objects.
- II. To lay before the President any observations conducive to the better enforcement of the Constitution and laws of the Union.
- III. To determine of themselves only, the advice of the President, and the calling of extraordinary sessions of Congress; but in either, it shall require the vote of two-thirds of the counselors present, as stated in attributions 17 and 18 of Article 110.
- IV. To grant their consent to the calling out of the local militia, in the manner stated in Article 110, attribution 11.
- V. To approve the appointment of officers designated in attribution six of *Article 110*.
- VI. Their consent in the case referred to in Article 112, restriction first.
- VII. To name two individuals who shall, in conjunction with the Chief justice of the Supreme Court, provisionally exercise the Supreme executive power as prescribed in *Article 97*.
- VIII. To administer the oath stated in Article 101, to those individuals of the Supreme executive power, in the terms provided in this Constitution.
- IX. To give their opinion on subjects referred to them by the President by virtue of the 21st faculty of Article 110, and all business wherein he may consult them.

Section Sixth

Of the dispatch of government business

117. For the dispatch of government business of the Republic, there shall be the number of Secretaries of State which Congress by a Law may establish.

118. All the regulations, decrees, and orders of the President, must be signed by the Secretary of State of the departments to which the subject belongs, and without this prerequisite they shall not be obeyed.

119. The Secretaries of State shall give to each Chamber, as soon as their annual sessions are opened, an account of the state of their respective departments.

120. The Secretaries of State shall be responsible for the acts of the President, unauthorized by their signatures, contrary to the Constitution, constitutional act, and general laws and constitutions of the States.

121. To be a Secretary of State it is necessary to be a Mexican citizen by birth.

122. The Secretaries of State shall form a regulation for the better distribution and direction of their duties, which shall be passed by the Government to the Congress for their approbation.

TITLE V
Section First

Of the Judicial Power of the Confederation

123. The judicial power of the Federation shall reside in one Supreme Court of justice, and in the Circuit and District Courts.

Section Second

Of the Supreme Court of Justice, the Election, Term of Service, and Oath of its Members

124. The Supreme Court of justice shall be composed of eleven members divided into three halls, and one Attorney General. Congress may augment or diminish its number as it may deem necessary.

125. To be elected a Judge of the Supreme Court of Justice, it is necessary to have been instructed in the science of public rights, according to the judgments of the Legislatures of the States, to be 35 years of age, to be a native born citizen of the Republic, or born in any part of America, which in 1810, was dependent on Spain, and has separated from her, provided they have been five years resident within the territory of the Republic.

126. The Judges of the Supreme Court of Justice shall hold their offices during good behavior, and can only be removed in the mode prescribed by the laws.

127. The election of the Judges of the Supreme Court of Justice shall be made on the same day by the Legislatures of the States, by an absolute majority of votes.

128. The elections concluded, each Legislature shall remit to the Council of Government a certified list of the twelve persons elected, designating which one of them was elected the Attorney General.

129. The President of the Council, as soon as he shall have received the lists from at least three-fourths of the Legislatures of the States, shall give them direction indicated by the rules of the Council.

130. On the day designated, the Congress shall open and read the said lists in presence of both Chambers united, after which the Senate shall retire.

131. In continuation, the Chamber of Deputies shall appoint, by an absolute majority of votes, a committee, which shall be composed of one member from each State, from which there was any member present, to which committee the said lists shall be passed, who will revise and examine them, and render an account of the result; and the Chamber shall then proceed to class the election and count the votes.

132. The individual or individuals who may have received more than half the votes of the whole number of the Legislatures, without regard to the number of votes given by their respective members, shall be considered elected; and the declaration of the Chamber to that effect shall immediately entitle them to their seats.

133. Should those who may have received the necessary majority of votes agreeably to the last article, not amount to 12, the Chamber shall elect the balance from those who had the highest number of votes before the Legislatures observing in every

thing relative to these elections the provisions of the first section of the 4th title, which treats of the election of President and Vicepresident.

134. Should a Senator or Representative be elected a Judge of the Supreme Court of Justice, his election to that office shall be preferred over the other.

135. When a vacancy occurs in a Supreme Court of Justice by perpetual inability, it shall be filled agreeably to this section, after a previous notification given by the Governor to the Legislature of the state of said vacancy.

136. The members of the Supreme Court of Justice or entering upon the exercise of the office shall take an oath in the presence of the President of the Republic, in the following form:--*You swear to GOD our LORD, faithfully to discharge the duties and obligations confided to you by the nation-if you do this GOD will reward you, if otherwise he will punish you.*

Section Third

Of the attributions of the Supreme Court of Justice

137. The attributions of the Supreme Court are the following:

- I. To take cognizance of the difference which may arise between one and another state of the Federation, whenever it embraces a subject of litigation in which there must be a formal sentence, and those that arise between one state and one or more inhabitants of another, or between individuals about pretensions to lands under concession from states, without depriving the party of the right of reclaiming the concession from the authority which granted it.
- II. To terminate all disputes which arise, or contracts or negotiations made by the Supreme Government or its agents.
- III. Consult relative to publishing or retaining of Pontifical Bulls, Briefs, and Prescripts issued in matters litigant.
- IV. Adjust any dispute that may exist among the tribunals of the Federation, and between these and those of the states, and these which may arise between the tribunals of one state and those of another.
- V. To take cognizance:

First. Of the prosecution moved against the President and Vicepresident according to articles 38 and 39, after the previous declaration in article 40.

Second. Of the criminal prosecutions of the Deputies and Senators, indicated in article 43, after the previous declaration required in article 44.

Third. Of those against Governors of the states in the cases spoken of in article 38, in its third part, after the previous declaration required in article. 40.

Fourth. Of those of Secretaries of State in conformity with articles 38 and 40.

Fifth. Of the civil and criminal affairs of the Diplomatic Ministers and Consuls of the Republic.

Sixth. Of the Admiralty cases, captures by sea, land, and contraband, of crimes committed on the high sea, of the offences against the United Mexican States, of those employed in the Treasury and Judiciary of the Federation, and of the infractions of the Constitution and general laws, as may be provided for by Law.

138. A Law shall regulate the mode and grade by which the Supreme Court of Justice shall take cognizance of the cases comprehended in this section.

Section Fourth

Of the mode of judging the members of the Supreme Court

139. In order to Judge the members of the Supreme Court, the Chamber of Deputies shall elect, voting by States, in the first month of the ordinary sessions of each biennial, twenty-four individuals not appertaining to the general Congress, and who shall possess the qualifications required for Judges of the Supreme Court, from these there shall be elected by lot an Attorney General, and an equal number of Judges equal to that which composes the first Hall of the Court, and whenever it may be necessary the same Chamber shall proceed, and in its recess, the Council of Government, draw in the same manner Judges of the other Halls.

Section Fifth

Of the Circuit Courts

140. The Circuit Court shall be Composed of a Judge of the Law and a prosecuting Attorney, both appointed by the Supreme Executive Power, proposed by the Supreme Court, and two Associate Judges, as the Law may prescribe.

141. In order to be a Circuit Judge it is necessary to us a citizen of the Federation, and thirty years of age.

142. Is incumbent to these tribunals the cognizance of admiralty cases, captures by sea and land, contraband, crimes committed on the high sea, offences against the United Mexican States, cases of consuls, and civil cases whose value exceeds \$500, and in which the Federation are interested. By a Law, shall be designated the number of these Tribunals, their respective jurisdictions, the mode, form, and grade, in which they must exercise their powers in these and other matters which come under the cognizance of the Supreme Court of Justice.

Section Sixth

Of the District Courts

143. The United Mexican States shall be divided into a certain number of districts, and in each one of which, there shall be a tribunal presided by a judge of the Law, which shall take cognizance without appeal, of all civil cases in which the Federation is interested, the amount of which does not exceed \$500, and shall have original jurisdiction in all cases in which the Circuit Courts have appellate jurisdiction.

144. In order to be a District Judge, it is necessary to be a citizen of the United Mexican States, and twenty-five years of age. The Judges shall be appointed by the President, proposed by the Supreme Court.

Section Seventh

General Rules to which all the States and Territories in the Federation shall conform in the administration of Justice

145. In each one of the States of the Federation, full faith and credit shall be given to the acts, registers, and proceedings; of the judges and other authorities of the other States. The General Congress shall regulate the laws by which said acts, registers, and proceedings shall be authenticated.

146. The sentence of infamy shall not extend beyond the criminal that may have merited it according to Law.

147. There is forever prohibited the penalty of confiscation of estates.

148. There is forever prohibited all judgments by commission and all retroactive laws.

149. No authority shall apply any form of torture, whatever may be the nature or state of the prosecution.

150. No one shall be imprisoned, unless there is reasonable ground to suppose him criminal.

151. No one shall be imprisoned on suspicion for more than seventy hours.

152. No authority shall give an order for the search of any Chambers, papers, and other effects of the inhabitants of the Republic, except in the cases expressly provided for by Law, and in the form which it designates.

153. No inhabitant of the Republic shall be compelled to take an oath relative to his own acts in criminal affairs.

154. The military and ecclesiastics will remain subject to the authority under which they actually are, according to the existing laws.

155. No suit can be instituted, neither in civil or criminal cases, for injuries, without being able to prove, having legally attempted, the means of conciliation.

156. None can be deprived of the right of terminating his differences by means of arbitrators appointed by each party, whatever may be the situation of the controversy.

TITLE VI
OF THE STATES OF THE FEDERATION

Section First

Of the individual government of the States

157. The government of each State shall be divided for its exercise in three powers, Legislative, Executive, and Judicial, and never can be united two or more of these in one corporation or person, nor the Legislative deposited in one individual.

158. The Legislative Power of each State shall reside in one Legislature, composed of the number of individuals which their respective constitutions may determine, to be elected popularly, and removable in the time and manner which said constitutions may designate.

159. The person or persons to whom the States confide their executive power cannot exercise it except for a definite time, which shall be fixed by their respective constitutions.

160. The Judicial Power of each state shall be exercised by the Tribunals that the Constitution may establish or designate, and all cases, civil or criminal, which appertain to the cognizance of those Tribunals, shall be conducted in them to final judgment and execution.

Section Second

Of the obligations of the States

161. Each one of the States is obliged:

- I. To organize its interior government and administration, without contravening this Constitution or the constitutional act.
- II. To publish by means of their Governors, their respective Constitutions, laws and decrees.
- III. To obey, and cause to be obeyed the Constitution and general laws of the Union, and treaties made and those that henceforward may be made, by the supreme authority of the Federation with any foreign Power.
- IV. To protect its inhabitants in the free use and liberty which they have to write, print, and publish their political ideas, without the necessity of license, revision, or approbation previous to publication, always taking care to observe the general laws on the subject.
- V. To deliver immediately, the criminals of other states, to the authority which reclaims them.
- VI. To deliver the fugitives of other states, to the person that justly reclaims or compels them in some other mode to satisfy the interested party.
- VII. To contribute for the consolidation and extinguishment of the debts acknowledged by the general Congress.

- VIII. To remit annually to each one of the Chambers of Congress, a general, circumstantial, and comprehensive note, of the ingress and egress in all the treasuries they may have in their respective districts, with a relation of the origin of one and the other, of the situation in which are found the branches of industry, agriculture, commerce and manufactures, of the new branches of industry which they can introduce and extend, designating the means by which it can be obtained, and of their respective population and means of protecting and augmenting it.
- IX. To remit to both Chambers, and in their recess, to the Council of Government, and likewise to the Supreme Executive Power, authorized copies of the constitutions, laws and decrees.

Section Third

Restrictions of the Powers of the State

162. None of the States can:

- I. Establish, without the consent of the General Congress, any tonnage duty, or other port duty.
- II. Impose, without the consent of the general Congress, contributions or duties on importations or exportations, whilst the Law does not regulate it as it must do.
- III. Hold, at no time, a permanent troop nor vessels of war, without the consent of the General Congress.
- IV. Enter into no agreement or compact with any foreign power, nor declare war against them, resisting in case of actual invasion, or in such danger as will not admit of delay, giving immediate notice thereof to the President of the Republic.
- V. Enter into no agreement or compact with other States of the Federation, without the previous consent of the general Congress or its posterior approbation, if the transaction were upon the regulation of limits.

TITLE VII

Sole Section

Of the Observance, Interpretation, and Amendment of the Constitution and Constitutional Act

163. Every public functionary, without exception to the class, previous to entering on the discharge of his duties, must take the oath to obey the Constitution and Constitutional Act.

164. The Congress shall dictate all laws and decrees, which they may deem necessary to render effective the responsibility of those who violate this Constitution or the Constitutional Act.

165. The General Congress alone can resolve doubts, which may occur about the meaning or understanding of the Articles of this Constitution and of the Constitutional Act.

166. The Legislatures of the States can make such observations as they may deem proper about particular Articles of this Constitution and the Constitutional Act, but the General Congress will not take them into consideration until the year 1830.

167. The Congress in that year shall confine itself to examining the observations that merit the deliberation of the next Congress, and this declaration they shall communicate to the President, who shall publish and circulate them without any observations.

168. The following Congress in the first year of its ordinary sessions shall occupy itself in examining these observations submitted to their deliberation, in order to make such amendments as may be deemed necessary, but the same Congress which makes the examination provided in the last Article, cannot decree the amendments.

169. The amendments and additions that are proposed in the year following the 30th shall be taken into consideration by the Congress in the second year of each biennial, and if rendered necessary, in conformity with the provisions made in the preceding Article, they shall publish this resolution in order that the next Congress may notice them.

170. In order to reform or amend this Constitution or the Constitutional Act, shall be observed, besides the rules prescribed in the foregoing Articles, all the requisites provided for the formation of laws, excepting the right to make observations granted to the President in Article 106.

171. The Articles of this Constitution and the Constitutional Act which establishes the Liberty and Independence of the Mexican Nation, its Religion, form of Government, Liberty of the Press, and division of the Supreme Powers of the Federation, and of the States, can never be reformed.

Given in México, 4th October, 1824, fourth year of Independence, third of Liberty, and second of the Federation. Lorenzo de Zavala, Representative for the State of Yucatán, President. Florentino Martínez, Representative for the State of Chihuahua, Vicepresident. For the State of Chihuahua, José Ignacio Gutiérrez. For the State of Coahuila and Tejas, Miguel Ramos Arizpe. Erasmo Seguín. For the State of Durango, Francisco Antonio Elorriaga. Pedro Ahumada. For the State of Guanajuato, Juan Ignacio Godoy. Víctor Márquez. José Felipe Vázquez. José María Anaya. Juan Bautista Morales. José María Uribe. José Miguel Llorente. For the State of México, Juan Rodríguez. Juan Manuel Assorrey. José Francisco de Barrera. José Basilio Guerra. Carlos María Bustamante. Ignacio de Mora y Villamil. José Ignacio González Caraalmuro. José Hernández Chico Condarco. José Ignacio Espinosa. Luciano Castoreña. Luis de Cortázar. José Agustín Paz. José María de Bustamante. Francisco María Lombardo. Felipe Sierra. José Cirilo Gómez y Anaya. Cayetano Ibarra. Antonio de Gama y Córdoba. Bernardo

Pérez de Angulo. Francisco Patiño y Domínguez. For the State of Michoacán, José María de Isazaga. Manuel Solórzano. José María de Cabrera. Ignacio Rayón. Tomás Arriaga. For the State of Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier. For the State of Oaxaca, Nicolás Fernández del Campo. Víctores de Manero. Demetrio Castillo. Joaquín de Míura y Bustamante. Vicente Manero Embides. Manuel José Robles. Francisco de Larrazábal y Torre. Francisco Estévez. José Vicente Rodríguez. For the State of Puebla, Mariano Barbosa. José María de la Llave. José de San Martín. Rafael Mangino. José María Jiménez. José Mariano Marín. José Vicente Robles. José Rafael Berruecos. José Mariano Castellero. José María Pérez Dunsлагuer. Alejandro Carpio. Mariano Tirado Gutiérrez. Ignacio Zaldívar. Juan de Díaz Moreno. Juan Manuel Irrizarri. Miguel Wenceslao Gasca. Bernardo Copca. For the State of Querétaro, Félix Osore. Joaquín Guerra. For the State of San Luis Potosí, Tomás Vargas. Luis Gonzaga Gordo. José Guadalupe de los Reyes. For the State of Sonora and Sinaloa, Manuel Fernández Rojo. Manuel Ambrosio Martínez de Ve. José Santiago Escobosa. Juan Bautista Escalante y Peralta. For the State of Tamaulipas, Pedro Paredes. For Tlaxcala, José Miguel Garidi y Alcocer. For the State of Veracruz Manuel Argüelles. José María Becerra. For the State of Jalisco, José María Covarrubias. José de Jesús Huerta. Juan de Dios Cañedo. Rafael Aldrete. Juan Cayetano Portugal. For the State of Yucatán, Manuel Crescencio Rejón. José María Sánchez. Fernando Valle. Pedro Terrazo. Joaquín Casares y Armas. For the State of Zacatecas, Valentín Gómez Farías. Santos Vélez. Francisco García. José Miguel Gordo. For the Territory of the Baja California, Manuel Ortiz de la Torre. For the Territory of Colima, José María Jerónimo Arzac. For the Territory of Nuevo México, José Rafael Alarid. Manuel de Viya y Cosío, Representative for the State of Veracruz, Secretary. Epigmenio de la Piedra, Representative for México, Secretary. José María Castro, Representative for the State of Jalisco, Secretary. Juan José Romero.

Therefore sent to all courts, justices, officers, governors and the other authorities, as well as civilians and military and ecclesiastical, of any class and dignity as they are, observe and enforce, implement and execute all parts of the Constitution inserted as fundamental Law of the Nation. That shall be treated for compliance, and have printed, published and circulated. México, to October 4th, 1824. Guadalupe Victoria, President. Nicolás Bravo. Miguel Domínguez. To Don Juan Guzmán.

And I communicate it to you, by order of H.S.H. accurate for compliance. God keep you many years. México, October 4th, 1824. Juan Guzmán.

3.5. EXTRACTO DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES

Constitución de 1836.

PRIMERA

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS Y HABITANTES DE LA REPÚBLICA

- Art. 1.* Nacionalidad Mexicana.
- Art. 2.* Derechos de los Mexicanos.
- Art. 3.* Obligaciones de los Mexicanos.
- Art. 4.* Prerrogativas de los Mexicanos de orden civil.
- Art. 5.* Formas en que se pierde la Nacionalidad Mexicana.
- Art. 6.* Posibilidad de rehabilitación de la Nacionalidad Mexicana por medio del Congreso.
- Art. 7.* Calidad de ciudadanos de la República Mexicana.
- Art. 8.* Derechos de los ciudadanos Mexicanos.
- Art. 9.* Obligaciones de los ciudadanos Mexicanos.
- Art. 10.* Suspensión de los derechos particulares del ciudadano Mexicano.
- Art. 11.* Pérdida total de los derechos del ciudadano Mexicano.
- Art. 12.* Derechos de los extranjeros introducidos a la República Mexicana legalmente.
- Art. 13.* Prohibición de los extranjeros para la adquisición de propiedad raíz.
- Art. 14.* Adquisición de la vecindad.
- Art. 15.* Pérdida de la vecindad.

SEGUNDA

ORGANIZACIÓN DE UN SUPREMO PODER CONSERVADOR

- Art. 1.* Composición y organización del Supremo Poder Conservador.
- Art. 2.* Fecha legal de realización del sorteo para designar al individuo cuyo ejercicio del cargo ha terminado en el Supremo Poder Conservador.

- Art. 3.* Procedimiento de las elecciones bienales ordinarias y extraordinarias.
- Art. 4.* Posibilidad de reelección en el cargo.
- Art. 5.* Elección de tres suplentes con residencia en la capital.
- Art. 6.* Orden en que los suplentes ocupan el cargo de propietarios.
- Art. 7.* Suplencia de las faltas temporales o durante las elecciones.
- Art. 8.* Preferencia en la elección del cargo dentro del Supremo Poder Conservador a cualquier otro a excepción del cargo de Presidencia de la República.
- Art. 9.* Juramento de los individuos de Supremo Poder Conservador.
- Art. 10.* Sueldo de los miembros del Supremo Poder Conservador.
- Art. 11.* Requisitos para formar parte del Supremo Poder Conservador.
- Art. 12.* Atribuciones del Supremo Poder Conservador.
- Art. 13.* Quórum requerido para las resoluciones del Supremo Poder Conservador.
- Art. 14.* Nulidad de declaraciones y resoluciones tomadas de forma individual por parte del Supremo Poder Conservador.
- Art. 15.* Obligatoriedad de las declaraciones y disposiciones tomadas con arreglo a la función legal del Supremo Poder Conservador.
- Art. 16.* Prohibición de los miembros del Supremo Poder Conservador durante en tiempo de su encargo para ser elegidos como Presidente de la República, ni ningún otro empleo dentro del gobierno de la Nación.
- Art. 17.* Responsabilidad del Supremo Poder Conservador ante Dios y la opinión pública.
- Art. 18.* Comisión de delitos de los miembros del Supremo Poder Conservador.
- Art. 19.* Lugar físico de residencia de Supremo Poder Conservador.
- Art. 20.* Elección del Secretario y Presidente del Supremo Poder Conservador.
- Art. 21.* Recepción de comunicaciones al Supremo Poder Conservador por parte del secretario.
- Art. 22.* Carácter secreto de las votaciones y discusiones del Supremo Poder Conservador.
- Art. 23.* Inexistencia de horario fijo de las sesiones del Supremo Poder Conservador.

TERCERA

DEL PODER LEGISLATIVO, DE SUS MIEMBROS Y DE CUANTO DICE EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN DE LAS LEYES

- Art. 1.* Ejercicio del Poder Legislativo.

Cámara de Diputados

- Art. 2.* Número de población como base para la elección de Diputados.
- Art. 3.* Renovación periódica de la Cámara y su procedimiento.

- Art. 4.* Del tiempo de elección e inicio de funciones de los Diputados.
Art. 5. Calificación de las elecciones de los Diputados por parte de los Senadores.
Art. 6. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Senador.
Art. 7. Prohibición de determinar cargos públicos para el ejercicio del cargo de Senador.

Cámara de Senadores

- Art. 8.* Composición de la Cámara de Senadores.
Art. 9. Renovación periódica del Senado.
Art. 10. Verificación de las elecciones de la Cámara de Diputados, del Supremo Poder Conservador y de las Juntas Departamentales.
Art. 11. Vacantes de los Senadores.
Art. 12. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Senador.
Art. 13. Prohibición de determinados cargos para ser electos Senadores.

De las Sesiones

- Art. 14.* Fecha legal de inicio de las sesiones del Congreso General.
Art. 15. Carácter diario de las Sesiones.
Art. 16. Especificaciones de las Sesiones indicadas en el Reglamento del Congreso General.
Art. 17. Quórum necesario para la votación de ley o decreto.
Art. 18. Expedición de Decreto para la clausura del primer período de Sesiones.
Art. 19. Expedición del Decreto para la prórroga del primer período de Sesiones.
Art. 20. Facultad del Presidente de la República para citar a Sesiones Extraordinarias.
Art. 21. Posibilidad de tratar asuntos de suma importancia sin contravenir lo dispuesto en los artículos 14, 17 y 20.
Art. 22. Continuación de sesiones de la Cámara de Senadores en el caso de revisión de leyes pendientes.
Art. 23. Responsabilidad de la Diputación Permanente para citar al Congreso a continuar las sesiones en caso de que se verifique la suspensión permanente referida en el artículo 12, párrafo sexto.
Art. 24. Facultad del Presidente para aumentar el número de Diputados en la Cámara.

De la formación de leyes

- Art. 25.* Inicio de la creación de leyes en la Cámara de Diputados.
Art. 26. Cuerpos de gobierno a quienes corresponde la iniciativa de leyes.
Art. 27. Facultad del Ejecutivo y de la Alta Corte de justicia en lo referente a la iniciativa de leyes.

Art. 28. Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de las iniciativas realizadas por el Poder Ejecutivo o los Diputados.

Art. 29. Obligación de considerar las iniciativas de los poderes Ejecutivo y Judicial y del nombramiento y función de la comisión de peticiones.

Art. 30. Derecho de realizar y dirigir proyectos a los cuerpos legislativos con la posibilidad de elevarlos a iniciativa.

Art. 31. Probación de proyecto por parte de los Diputados y revisión por parte de los Senadores.

Art. 32. Seguimiento de la fórmula aprobado, desaprobado, en la revisión de los proyectos de ley por parte de la Cámara de Senadores.

Art. 33. Mayoría de votos en la aprobación de proyecto de ley por parte de la Cámara de Senadores en segunda revisión.

Art. 34. Sanción del Presidente de la República a los proyectos de ley aprobados por la Cámara correspondiente.

Art. 35. Derecho de veto en los proyectos de ley del Presidente de la República.

Art. 36. Facultad del Presidente de la República de aplicar sanción al proyecto de ley según lo prevenido en el artículo 33.

Art. 37. Imposibilidad de aplicar la sanción por parte del Presidente de la República por segunda ocasión en caso de ser examinado y aprobado por las dos Cámaras con mayoría de votos.

Art. 38. Imposibilidad de presentar un proyecto de ley desechado según lo prevenido en los artículos 33, 36, y 37 sino hasta la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados.

Art. 39. Publicación de la ley por parte del Presidente de la República.

Art. 40. No necesidad de publicación de ley en caso de ser dirigida a determinadas personas o corporaciones.

Art. 41. Fórmula legal de la publicación de leyes y decretos.

Art. 42. Entrada en vigor de las leyes o decretos a partir de su publicación.

Art. 43. Carácter de ley o decreto de las resoluciones del Congreso General.

Art. 44. Facultades exclusivas del Congreso General.

Art. 45. Prohibiciones del Congreso General.

Art. 46. Nulidad de ley o decreto en contravención del artículo 45.

Art. 47. Acusación por delitos comunes del Presidente de la República, Senadores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, Secretarios de Despacho, Consejeros y Gobernadores de los Departamentos durante el ejercicio de su encargo ante la Cámara de Diputados.

Art. 48. Pena de destitución o inhabilitación del cargo por la comisión de delitos oficiales del Presidente de la República, Senadores, Ministros de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, Secretarios de Despacho, Consejeros y Gobernadores de los Departamentos.

Art. 49. Declaración de la Cámara respectiva de la procedencia o improcedencia de la acusación y la respectiva disposición del reo al Tribunal competente en caso de resultar procedente.

Art. 50. Suspensión del acusado del ejercicio del cargo de resultar positiva la acusación.

Art. 51. Facultades independientes de las Cámaras entre sí.

Art. 52. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Art. 53. Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores.

Art. 54. Indemnización mayor de los Senadores en relación a la correspondiente a la de los Diputados.

Art. 55. Inviolabilidad de los Diputados y Senadores en relación a las opiniones manifestadas durante el tiempo de su encargo.

Art. 56. Prohibiciones de los Diputados y Senadores.

De la Diputación Permanente

Art. 57. Composición y nombramiento de las Diputaciones Permanentes.

Art. 58. Facultades de la Diputación Permanente.

CUARTA

ORGANIZACIÓN DEL SUPREMO PODER EJECUTIVO

Art. 1. Ejercicio y duración del Poder Ejecutivo.

Art. 2. Proceso de elección del Presidente de la República.

Art. 3. Nulidad de actuaciones cuando no sean realizados en fechas legalmente establecidas para tal efecto.

Art. 4. Expedición, publicación y comunicación del Decreto declaratorio de la elección.

Art. 5. Posibilidad de reelección del Presidente de la República.

Art. 6. Irrenunciabilidad del cargo de Presidente de la República.

Art. 7. Día prefijado en relación a la distancia del electo ausente.

Art. 8. Gobierno del Presidente del Consejo en caso de falta temporal del Presidente de la República.

Art. 9. Fecha legal de terminación del cargo de Presidente de la República.

Art. 10. Procedencia de elección en términos del artículo 2 en caso de muerte o destitución legal del Presidente de la República.

Art. 11. Procedimiento para el nombramiento de Presidente interino en todo caso de vacante en el puesto.

Art. 12. Juramento del Presidente propietario o interino bajo la fórmula legal.

Art. 13. Votos requeridos por la Cámara de Diputados y de Senadores para el nombramiento de nuevo Presidente de la República en caso de incapacidad física o moral de éste.

- Art. 14.* Requisitos de elegibilidad para el cargo de Presidente de la República.
Art. 15. Prerrogativas del Presidente de la República.
Art. 16. Prerrogativas del Presidente de la República interino.
Art. 17. Atribuciones del Presidente de la República.
Art. 18. Prohibiciones del Presidente de la República.
Art. 19. Nulidad de los actos contradictorios a los artículos anteriores.
Art. 20. Sueldo designado para la indemnización de los Magistrados.

Del Consejo de Gobierno

- Art. 21.* Composición del Consejo de Gobierno.
Art. 22. Elección de los Consejeros.
Art. 23. Carácter de perpetuidad del cargo del Consejero.
Art. 24. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Consejero.
Art. 25. Atribuciones de los Consejeros.
Art. 26. Responsabilidad de los Consejeros ante los dictámenes emitidos contra ley expresa.
Art. 27. Existencia de Reglamento para el Consejo de Gobierno.

Del Ministerio

- Art. 28.* Cuatro Ministros existentes para los asuntos de gobierno.
Art. 29. Designación exclusiva de los Ministros por parte del Presidente de la República.
Art. 30. Obligación del Presidente de la República de resolver todo asunto grave en Junta de cuatro Ministros.
Art. 31. Obligación de los Ministros.
Art. 32. Responsabilidad de los Ministros del cumplimiento de las leyes de su ministerio y de los actos del Presidente de la República que hayan autorizado a través de su firma.
Art. 33. Existencia de Reglamento para el mejor despacho de las Secretarías.
Art. 34. Establecimiento de la indemnización de los Ministros por medio de ley secundaria.

QUINTA

DEL PODER JUDICIAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

- Art. 1.* Ejercicio del Poder Judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 2. Composición de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 3. Obligación, desempeño y representación del Poder Judicial a través de los cuerpos que la componen.
Art. 4. Requisitos para resultar electo individuo de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 5. Proceso de elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 6. Declaración, expedición de decreto declaratorio y publicación del resultado de las elecciones de los individuos de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 7. Juramento del individuo electo.

Art. 8. Preferencia de cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio del cargo de Diputado.

Art. 9. Imposibilidad de juzgar a los individuos de la Corte Suprema de Justicia en negocios civiles o en causas criminales en contravención de lo establecido en la segunda y tercera ley constitucional.

Art. 10. Emisión de lista de nueve individuos con los mismos requisitos de elegibilidad para el cargo de Ministro de la Corte, a fin de resultar como suplentes.

Art. 11. Del nombramiento por parte de la Cámara de Diputados de los individuos electos para el cargo de suplentes en la Corte Suprema de Justicia.

Art. 12. Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 13. Unión de la Corte Suprema de Justicia con oficiales generales para erigirse en marcial con competencia en todos los negocios y causas del fuero de guerra.

Art. 14. Existencia de siete Ministros en la Corte Marcial.

Art. 15. Formación de una comisión con objeto determinado por los Ministros de la Suprema Corte.

Art. 16. Restricciones de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 17. Existencia de Reglamento para la Corte Suprema de Justicia.

De los Tribunales Superiores de los Departamentos

Art. 18. Existencia de un Tribunal Superior en la capital de cada Departamento.

Art. 19. Igualdad de facultades de todos los Tribunales.

Art. 20. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Ministro en dichos tribunales.

Art. 21. Juramento de los Jueces Superiores y Fiscales de los tribunales al tomar posesión del cargo.

Art. 22. Atribuciones de los Tribunales Superiores de los Departamentos.

Art. 23. Restricciones de los Tribunales y de sus Ministros.

Art. 24. Prohibición de los Ministros y Fiscales de estos Tribunales para el ejercicio de la profesión de abogado o apoderado en pleitos, asesor o árbitro de derecho, ni tener comisión alguna en el gobierno.

De los Jueces Subalternos de Primera Instancia

Art. 25. Despacho de causas civiles y criminales de Primera Instancia.

Art. 26. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Juez de Primera Instancia.

Art. 27. Prohibición de los Jueces de Primera Instancia para el ejercicio de la profesión de abogados, apoderados en pleitos, ni árbitros de derecho.

Art. 28. Límite de los Jueces de Primera Instancia de apego al conocimiento de los asuntos judiciales.

Art. 29. Habilitación de los Alcaldes para ejercer facultades establecidas por las leyes en relación a los Jueces de Primera Instancia.

*Previsiones Generales sobre la Administración de Justicia
en lo civil y en lo criminal*

Art. 30. Existencia de fueros personales de lo eclesiástico y militar.

Art. 31. Carácter de perpetuidad de los miembros y fiscales de la Corte Suprema.

Art. 32. Carácter de perpetuidad de los Ministros y Jueces letrados de primera instancia.

Art. 33. Sueldo de los Magistrados y Jueces designado por ley.

Art. 34. Posibilidad de recurrir a tres instancias en las causas prefijadas por la ley correspondiente.

Art. 35. Imposibilidad de los Ministros para fallar en una sola instancia.

Art. 36. Acción popular contra los Magistrados en caso de la existencia de prevaricación cohecho, soborno o baratería.

Art. 37. Nulidad del juicio en lo civil por falta de observancia del procedimiento establecido en la ley respectiva.

Art. 38. Responsabilidad de los Jueces por falta de observancia del procedimiento de orden penal establecido en la ley respectiva.

Art. 39. Derecho de los litigantes para dar por concluido el pleito civil o criminal en caso de injurias personales por medio de árbitros con sentencia ejecutada conforme a las leyes establecidas.

Art. 40. Establecimiento y procedimiento de la conciliación en caso de pleito civil o criminal sobre injurias personales.

Art. 41. Formalidades de la emisión de orden de aprehensión.

Art. 42. Utilización de la fuerza en caso de resistencia o temor fundado de fuga.

Art. 43. Procedencia de la orden de aprehensión.

Art. 44. Existencia suficiente de presunción o sospecha fundada para la procedencia legal de la detención.

Art. 45. Imposibilidad de realizar embargo en los bienes del preso, sino en caso de responsabilidad pecuniaria del mismo.

Art. 46. Restitución de la libertad del preso reo en caso de demostrarse que no debe ser castigado con pena corporal según el procedimiento establecido por la ley correspondiente.

Art. 47. Declaración preparatoria del reo durante los tres primeros días de la detención sin necesidad de juramento de hechos propios del procesado.

Art. 48. Confesión del reo y la imputación de cargos correspondientes del procesado.

Art. 49. Prohibición de la utilización de tormentos para la averiguación de ningún delito.

Art. 50. Prohibición de la pena de confiscación de bienes.

Art. 51. Carácter de personal e intrascendente del delito y la pena en relación a la imposibilidad de ser purgado por nadie más que el inculpado.

SEXTA

DIVISIÓN DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA Y GOBIERNO INTERIOR DE SUS PUEBLOS

Art. 1. División de la República Mexicana en Departamentos, Distritos y Partidos.

Art. 2. Período legal para realización por parte del primer Congreso Constitucional de la división del territorio por medio de Ley Constitucional.

Art. 3. División de los Departamentos en Distritos por medio de la Junta Departamental y su respectiva aprobación por parte del Congreso.

Art. 4. Gobierno de los Departamentos, su encargado y la sujeción de estos al Gobierno General.

Art. 5. Nombramiento, duración y posible reelección de los Gobernadores.

Art. 6. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Gobernador de Departamento.

Art. 7. Funciones de los Gobernadores de Departamentos.

Art. 8. Existencia y nombramiento de un Gobernador interino en caso de vacante del propietario.

Art. 9. Junta Departamental y su existencia en cada Departamento.

Art. 10. Elección de los individuos miembros de la Junta Departamental.

Art. 11. Renovación periódica de las Juntas Departamentales.

Art. 12. Calificación de las elecciones de los individuos miembros de las Juntas Departamentales.

Art. 13. Requisitos de elegibilidad para el ser miembro de la Junta Departamental.

Art. 14. Funciones de las Juntas Departamentales.

Art. 15. Restricciones de los Gobernadores y de las Juntas Departamentales.

Art. 16. Existencia, nombramiento, confirmación y duración de la figura de Prefecto por cada Cabecera de Distrito.

Art. 17. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Prefecto.

Art. 18. Funciones de los Prefectos.

Art. 19. Existencia, nombramiento, confirmación y duración de la figura de Subprefecto en Cabecera de cada Partido.

Art. 20. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Subprefecto.

Art. 21. Funciones del Subprefecto.

Art. 22. Existencia de Ayuntamientos en Departamentos con determinado número de población.

Art. 23. Elección Popular del Ayuntamiento regida por ley establecida para tal efecto, su conformación y número de miembros establecido por parte del Gobernador del Departamento.

Art. 24. Requisitos de elegibilidad para ser individuo del Ayuntamiento.

Art. 25. Funciones de los Ayuntamientos.

Art. 26. Funciones de los Alcaldes.

Art. 27. Funciones de los Jueces de Paz.

Art. 28. Requisitos de elegibilidad para el cargo de Juez de Paz.

Art. 29. Facultades de los Jueces de Paz.

Art. 30. Funciones de los Subprefectos.

Art. 31. Existencia de Ley Secundaria para los Prefectos, Subprefectos, Jueces de Paz, Alcaldes, Regidores y Síndicos.

SÉPTIMA

VARIACIONES DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES

Art. 1. Imposibilidad de realizar cambios durante seis años a la presente Constitución.

Art. 2. Observancia de los requisitos prevenidos para la realización de cambios a la presente Constitución pasado el término referido en el artículo primero de la sección séptima.

Art. 3. Posibilidad de alteración y modificación de los proyectos por parte de la Cámara de Diputados en los cambios de la presente Constitución para la perfección de la misma.

Art. 4. Sujeción de las variaciones al artículo 38 de la tercera Ley Constitucional en caso de actualización del mismo.

Art. 5. Facultad exclusiva del Congreso para dirimir las cuestiones sobre los artículos de la presente Constitución.

Art. 6. Juramento de los funcionarios públicos de guardar y hacer guardar la presente Constitución.

LEYES CONSTITUCIONALES

4. I. LEYES CONSTITUCIONALES

México, 1 de enero de 1837

226 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

PRIMERA

Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República

SEGUNDA

Organización de un Supremo Poder Conservador

TERCERA

Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice relación a la formación de las leyes

Cámara de Diputados

Cámara de Senadores

De las Sesiones

De la formación de las leyes

Facultades de las cámaras y prerrogativas de sus miembros

De la Diputación Permanente

CUARTA

Organización del Supremo Poder Ejecutivo

Del Consejo de Gobierno

Del Ministerio

QUINTA

Del Poder Judicial de la República Mexicana

De los Tribunales Superiores de los Departamentos
De los jueces subalternos de primera instancia
Previsiones generales sobre la administración de justicia en lo civil y en lo criminal

SEXTA

División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos

SÉPTIMA

Variaciones de las leyes constitucionales

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

El Presidente Interino de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:
Que el Soberano Congreso Nacional ha decretado las siguientes:

LEYES CONSTITUCIONALES

En el nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, por quien los hombres están destinados a formar sociedades y se conservan las que forman; los representantes de la Nación Mexicana, delegados por ella para constituirla del modo que entiendan ser más conducente a su felicidad, reunidos al efecto, en Congreso General, han venido en decretar y decretan las siguientes:

PRIMERA

Derechos y obligaciones de los mexicanos
y habitantes de la República

Artículo 1. Son mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o por naturalización.
- II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, estuvieren ya radicados en la República o avisaren que resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del año después de haber dado el aviso.
- III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo anterior.
- IV. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, que hayan permanecido en él hasta la época de disponer de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso.

- V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la República cuando esta declaró su independencia, juraron la acta de ella y han continuado residiendo aquí.
- VI. Los nacidos en territorio extranjero que, introducidos legalmente después de la independencia, hayan obtenido carta de naturalización, con los requisitos que prescriben las leyes.

Artículo 2. Son derechos del mexicano:

- I. No poder ser preso sino por mandamiento de juez competente dado por escrito y firmado, ni aprehendido sino por disposición de las autoridades a quienes corresponda según ley. Exceptúase el caso de delito in fraganti, en el que cualquiera puede ser aprehendido, y cualquiera puede aprehenderle, presentándole desde luego a su juez o a otra autoridad pública.
- II. No poder ser detenido más de tres días por autoridad ninguna política, sin ser entregado al fin de ellos, con los datos para su detención, a la autoridad judicial, ni por ésta más de diez días, sin proveer el auto motivado de prisión. Ambas autoridades serán responsables del abuso que hagan de los referidos términos.
- III. No poder ser privado de su propiedad, ni del libre uso y aprovechamiento de ella en todo ni en parte. Cuando algún objeto de general y pública utilidad exija lo contrario, podrá verificarse la privación, si la tal circunstancia fuere calificada por el Presidente y sus cuatro ministros en la capital, por el gobierno y junta departamental en los departamentos, y el dueño, sea corporación eclesiástica o secular, sea individuo particular, previamente indemnizado a tasación de dos peritos, nombrado el uno de ellos por él, y según las leyes el tercero en discordia, en caso de haberla.

La calificación dicha podrá ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la capital, y en los departamentos ante el superior tribunal respectivo. El reclamo suspenderá la ejecución hasta el fallo.

- IV. No poderse catear sus casas y sus papeles, si no es en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.
- V. No poder ser juzgado ni sentenciado por comisión ni por otros tribunales que los establecidos en virtud de la Constitución, ni según otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho que se juzga.
- VI. No podersele impedir la traslación de sus personas y bienes a otro país, cuando le convenga, con tal de que no deje descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y satisfaga, por la extracción de los segundos, la cuota que establezcan las leyes.

VII. Poder imprimir y circular, sin necesidad de previa censura, sus ideas políticas. Por los abusos de este derecho, se castigará cualquiera que sea culpable en ellos, y así en esto como en todo lo demás, quedan estos abusos en la clase de delitos comunes; pero

con respecto a las penas, los jueces no podrán excederse de las que imponen las leyes de imprenta, mientras tanto no se dicten otras en esta materia.

Artículo 3. Son obligaciones del mexicano:

- I. Profesar la religión de su patria, observar la Constitución y las leyes, obedecer las autoridades.
- II. Cooperar a los gastos del Estado con las atribuciones que establezcan las leyes y le comprendan.
- III. Defender la patria y cooperar al sostén y restablecimiento del orden público, cuando la ley y las autoridades a su nombre le llamen.

Artículo 4. Los mexicanos gozarán de todos los otros derechos civiles, y tendrán todas las demás obligaciones del mismo orden que establezcan las leyes.

Artículo 5. La cualidad de mexicano se pierde:

- I. Por ausentarse del territorio mexicano más de dos años, sin ocurrir durante ellos por el pasaporte del gobierno.
- II. Por permanecer en país extranjero más de dos años después de fenecido el término de la licencia, sin haber ocurrido por la prórroga.
- III. Por alistarse en banderas extranjeras.
- IV. Por aceptar empleos de otro gobierno.
- V. Por aceptar condecoraciones de otro gobierno, sin permiso del mexicano.
- VI. Por los crímenes de alta traición contra la independencia de la patria, de conspirar contra la vida del supremo magistrado de la Nación, de incendiario, envenenador, asesino alevoso y cualesquiera otros delitos en que impongan las leyes esta pena.

Artículo 6. El que pierda la cualidad de mexicano puede ordenar rehabilitación del Congreso, en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes.

Artículo 7. Son ciudadanos de la República mexicana:

- I. Todos los comprendidos en los cinco primeros párrafos del artículo 1 que tengan una renta anual no menos de cien pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad.
- II. Los que hayan obtenido carta especial de ciudadanía del Congreso General, con los requisitos que establezca la ley.

Artículo 8. Son derechos del ciudadano mexicano, a más de los detallados en el artículo 2 e indicados en el 4:

- I. Votar por todos los cargos de elección popular directa.
- II. Poder ser votado para los mismos, siempre que en su persona concurren las cualidades que las leyes exijan en cada caso.

Artículo 9. Son obligaciones particulares del ciudadano mexicano:

- I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad.
- II. Concurrir a las elecciones populares, siempre que no se lo impida causa física o moral.

- III. Desempeñar los cargos concejiles y populares para que fuese nombrado, si no es que tenga excepción legal o impedimento suficiente, calificado por la autoridad a quien corresponda según la ley.

Artículo 10. Los derechos particulares del ciudadano se suspenden:

- I. Durante la minoridad.
- II. Por el estado de sirviente doméstico.
- III. Por causa criminal, desde la fecha del mandamiento de prisión hasta el pronunciamiento de la sentencia absolutoria. Si ésta lo fuere en la totalidad se considerará al interesado en el goce de los derechos, como si no hubiese habido tal mandamiento de prisión, de suerte que no por ella le paren ninguna clase de perjuicio.
- IV. Por no saber leer ni escribir desde el año de 1846 en adelante.

Artículo 11. Los derechos de ciudadano se pierden totalmente:

- I. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano.
- II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante.
- III. Por quiebra fraudulenta calificada.
- IV. Por ser deudor calificado en la administración y manejo de cualquiera de los fondos públicos.
- V. Por ser vago, mal entretenido, o no tener industria o modo honesto de vivir.
- VI. Por imposibilitarse para el desempeño de las obligaciones de ciudadano por la profesión del estado religioso.

Artículo 12. Los extranjeros, introducidos legalmente en la República, gozan de todos los derechos naturales, y además los que se estimen en los tratados, para los súbditos de sus respectivas naciones; y están obligados a respetar la religión, y sujetarse a las leyes del país en los casos que puedan corresponderles.

Artículo 13. El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, si no se ha naturalizado en ella, casarse con mexicana y se arreglarse a lo demás que prescriba la ley relativa a estas adquisiciones. Tampoco podrá trasladar a otro país su propiedad mobiliaria, sino con los requisitos y pagando la cuota que establezcan las leyes. Las adquisiciones de colonizadores se sujetarán a las reglas especiales de colonización.

Artículo 14. La vecindad se gana por residencia continuada de dos años en cualquiera población manifestando durante ellos a la autoridad municipal la resolución de fijarse, y estableciendo casa, trato o industria provechosa.

Artículo 15. La vecindad se pierde por trasladarse a otro punto, levantando la casa, trato o giro, y fijándose allá con él.

SEGUNDA

Organización de un Supremo Poder Conservador

Artículo 1. Habrá un Supremo Poder Conservador que se depositará en cinco individuos, de los que se renovará uno cada dos años, saliendo en la primera, segunda, tercera y cuarta vez, el que designare la suerte, sin entrar en el sorteo el que o los que hayan sido nombrados para reemplazar.

De la quinta vez en adelante saldrá el más antiguo.

Artículo 2. El sorteo de que habla el artículo anterior, se hará por el senado el día 1º de agosto inmediato anterior a la renovación, y, si estuviere en receso, lo verificará el Consejo de Gobierno.

Artículo 3. Tanto las elecciones bienales ordinarias, como las extraordinarias ulteriores, se harán de la manera siguiente:

- I. Cada una de las juntas departamentales elegirá el número de individuos que deben nombrarse aquella vez.
- II. Estas elecciones se harán siempre por todas las juntas en el mismo día: las ordinarias bienales, en 1º de octubre del año inmediato anterior a la renovación; las extraordinarias, para la primera elección total de los cinco y para reemplazar por vacante, en el día que les prefijare el Supremo Poder Ejecutivo.
- III. La elección extraordinaria por vacante sólo tendrá lugar cuando ésta acaezca más de 6 meses antes de la renovación periódica; en el caso contrario, se diferirá para el 1º de octubre, en que se llenarán los huecos.
- IV. Verificada la elección a pluralidad absoluta de votos, remitirán las juntas, en pliego cerrado y certificado, por el correo inmediato siguiente, la acta de elección a la secretaría de la Cámara de Diputados.
- V. La omisión de la elección el día prefijado y la de envío de la acta de ella que prescribe el párrafo anterior, será caso de responsabilidad para las juntas departamentales, según lo que prevenga la ley de la materia.
- VI. El día 15 de noviembre inmediato anterior a la renovación bienal ordinaria, y a los cuarenta días de cualquiera elección extraordinaria, abrirá los pliegos la Cámara de Diputados, y acto continuo formará lista de los que han sido nombrados y sin salir de ella, elegirá, a pluralidad absoluta de votos, una terna de individuos por cada hueco.
- VII. Al día siguiente al de la elección de la terna o ternas, las pasará la Cámara de Diputados a la de senadores con todo el expediente de elecciones, y ésta, en el mismo día, elegirá un individuo de cada terna, publicará la elección, y la participará al Supremo Poder Ejecutivo para que avise de su nombramiento al electo o electos a fin de que se presenten a ejercer.

Artículo 4. El individuo que acaba puede ser reelegido; pero en tal caso, podrá o no aceptar el encargo.

Artículo 5. Se elegirán tres suplentes residentes en la capital, que tengan las mismas circunstancias que exige esta ley para los propietarios, y del mismo modo que éstos; renovándose en su totalidad cada elección bienal ordinaria.

Artículo 6. Por el orden que sean elegidos entrarán a ocupar el lugar de los propietarios que falten; y mientras estén funcionando, disfrutarán del mismo sueldo y de las mismas prerrogativas que dichos propietarios.

Artículo 7. Sólo suplirán las faltas temporales o mientras se hace la elección por alguna vacante.

Artículo 8. La elección para este cargo será preferente a cualquiera otra que no sea para la presidencia de la República, y el cargo no podrá ser renunciado, antes ni después de la posesión, sino por imposibilidad física, calificada por el Congreso General.

Artículo 9. Los individuos del Supremo Poder Conservador, prestarán juramento ante el Congreso General, reunidas las dos Cámaras, bajo la fórmula siguiente: *¿Juráis guardar y hacer guardar la Constitución de la República sosteniendo el equilibrio constitucional entre los poderes sociales, manteniendo o restableciendo el orden constitucional en los casos en que fuere turbado, valiéndose para ello del poder y medios que la Constitución pone en vuestras manos? Después de la respuesta afirmativa del otorgante, añadirá el Secretario la fórmula ordinaria: Si así lo hicieris, Dios os lo premie, y si no, os lo demande.* Cuando el Congreso no estuviere reunido, podrán jurar supletoriamente en el seno de su corporación; pero repetirán el juramento luego que se abran las sesiones del cuerpo legislativo.

Artículo 10. Cada miembro de dicho supremo poder disfrutará anualmente, durante su cargo, seis mil pesos de sueldo; su tratamiento será el de excelencia.

Artículo 11. Para ser miembro del Supremo Poder Conservador se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano.
- II. Tener el día de la elección cuarenta años cumplidos, de edad, y un capital (físico o moral) que le produzca por lo menos tres mil pesos de renta anual.
- III. Haber desempeñado alguno de los cargos siguientes: Presidente o Vicepresidente de la República, senador, diputado, Secretario del Despacho, magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 12. Las atribuciones de este Supremo Poder, son las siguientes:

- I. Declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de dos meses después de su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución, y le exijan dicha declaración, o el Supremo Poder Ejecutivo, o la alta Corte de Justicia, o parte de los miembros del Poder Legislativo, en representación que firmen dieciocho por lo menos.
- II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, haciendo esta declaración dentro de

cuatro meses contados desde que se comuniquen esos actos a las autoridades respectivas.

- III. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación de facultades.

Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal respectivo para que sin necesidad de otro requisito, proceda a la formación de causa, y al fallo que hubiere lugar.

- IV. Declarar, por excitación del Congreso General, la incapacidad física o moral del Presidente de la República, cuando le sobrevenga.
- V. Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de trastornar el orden público.
- VI. Suspender hasta por dos meses (a lo más) las sesiones del Congreso General, o resolver se llame a ellas a los suplentes, por igual término, cuando convenga al bien público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo.
- VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres poderes, o a los tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamente.
- VIII. Declarar, excitado por el Poder Legislativo, previa iniciativa de alguno de los otros dos poderes, cuál es la voluntad de la Nación, en cualquier caso extraordinario en que sea conveniente conocerla.
- IX. Declarar, excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo está el Presidente de la República en el caso de renovar todo el ministerio por bien de la Nación.
- X. Dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acordare al Congreso, previas las iniciativas, y en el modo y forma que establece la ley constitucional respectiva.
- XI. Calificar las elecciones de los senadores.
- XII. Nombrar, el día 1º de cada año, dieciocho letrados entre los que no ejercen jurisdicción ninguna, para juzgar a los ministros de la alta Corte de Justicia, y de la Marcial, en el caso y previos los requisitos constitucionales para esas causas.

Artículo 13. Para cualquier resolución de este supremo poder se requiere indispensablemente la absoluta conformidad de tres de sus miembros por lo menos.

Artículo 14. Toda declaración que haga el Supremo Poder Conservador, toda resolución que tome, no siendo las especificadas en el artículo 12, y aunque sea de ellas, si la toma *por sí* y sin la excitación que respectivamente se exige para cada uno en dicho artículo, es nula y de ningún valor.

Artículo 15. Toda declaración y disposición de dicho Supremo Poder Conservador, dada con arreglo a las disposiciones precedentes, y citando la respectiva, debe ser

obedecida al momento y sin réplica por todas las personas a quien se dirija y corresponda la ejecución.

La formal desobediencia se tendrá por crimen de alta traición.

Artículo 16. Los miembros de este supremo poder, durante el tiempo de su encargo, y dentro de los dos años inmediatos siguientes, no pueden ser elegidos para la presidencia de la República, ni obtener empleo que no les toque por rigurosa escala, ni ser nombrados para ninguna comisión, ni solicitar del gobierno ninguna clase de gracia para sí, ni para otro.

Tampoco pueden ser electos diputados en el tiempo que señala el artículo 42 de la ley de 30 de noviembre último.

Artículo 17. Este supremo poder no es responsable de sus operaciones más que a Dios y a la opinión pública, y sus individuos en ningún caso podrán ser juzgados ni reconvenidos por sus opiniones.

Artículo 18. Si alguno de ellos cometiere algún delito, la acusación se hará ante el Congreso General, reunidas las dos Cámaras, el cual, a pluralidad absoluta de votos, calificará si ha lugar a la formación de causa, y habiéndolo, seguirá ésta y la fenecerá la Suprema Corte de Justicia, ante la que se seguirá también las causas civiles en que sean demandados.

Artículo 19. Este supremo poder residirá ordinariamente en la capital; pero en el caso de que la seguridad pública, o la suya exija su traslación a otro punto cualquiera de la República, podrá acordarla o verificarla por tiempo limitado.

Artículo 20. El día 1º de cada bienio elegirá el Supremo Poder Conservador, entre sus individuos, un Presidente y un Secretario, pudiendo reelegir a los que acaban.

Artículo 21. Se dirigirán al Secretario todas las comunicaciones de los otros poderes.

Artículo 22. Todas las discusiones y votaciones de este cuerpo serán secretas, haciéndose las segundas por medio de bolas negras y blancas.

Artículo 23. Aunque se le destinará un salón correspondiente en el Palacio Nacional, no tendrá días ni horas, ni lugar preciso para sus sesiones, y el Presidente las emplazará, cuando convenga, por medio de esquelas citatorias a sus compañeros, en que especificará las dichas circunstancias.

TERCERA

Del Poder Legislativo, de sus miembros y de cuanto dice relación a la formación de las leyes

Artículo 1. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en el Congreso General de la Nación, el cual se compondrá de dos Cámaras.

Cámara de Diputados

Artículo 2. La base para la elección de diputados es la población. Se elegirá un diputado por cada ciento cincuenta mil habitantes, y por cada fracción de ochenta mil.

Los departamentos que no tengan este número elegirán, sin embargo, un diputado. Se elegirá un número de suplentes igual al de propietarios.

Artículo 3. Esta Cámara se renovará por mitad cada dos años: el número total de departamentos se dividirá en dos secciones proporcionalmente iguales en población: el primer bienio nombrará sus diputados una sección, y el siguiente la otra, y así alternativamente.

Artículo 4. Las elecciones de diputados se harán en los departamentos el primer domingo de octubre del año anterior a la renovación, y los nuevos electos comenzarán a funcionar en enero del siguiente año.

Una ley particular establecerá los días, modo y forma de estas elecciones, el número y las cualidades de los electores.

Artículo 5. Las elecciones de los diputados serán calificadas por el Senado, reduciendo esta Cámara su calificación a si en el individuo concurren las cualidades que exige esta ley, y si en las juntas electorales hubo nulidad que vicie esencialmente la elección.

En caso de nulidad en el cuerpo electoral, se mandará subsanar el defecto; en el de nulidad de los electos, se repetirá la elección, y en el de nulidad en el propietario y no en el suplente, vendrá éste por aquél.

En todo caso de falta perpetua del propietario se llamará al suplente.

Artículo 6. Para ser diputado se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento o natural de cualquiera parte de la América que en 1810 dependía de la España, y sea independiente, si se hallaba en la República al tiempo de su emancipación.
- II. Ser ciudadano mexicano en actual ejercicio de sus derechos, natural o vecino del departamento que lo elige.
- III. Tener treinta años cumplidos de edad el día de la elección.
- IV. Tener un capital (físico o moral) que le produzca al individuo lo menos mil quinientos pesos anuales.

Artículo 7. No pueden ser electos diputados: el Presidente de la República y los miembros del Supremo Poder Conservador, mientras lo sean, y un año después; los individuos de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; los secretarios del Despacho y oficiales de su Secretaría; los empleados generales de Hacienda; los Gobernadores de los departamentos, mientras lo sean, y seis meses después; los M. R.R. arzobispos y obispos, Gobernadores de mitras, provisoros y vicarios generales, los jueces, comisarios y comandantes generales por los departamentos a que se extienda su jurisdicción, encargo o ministerio.

Cámara de Senadores

Artículo 8. Esta se compondrá de veinticuatro senadores nombrados en la manera que sigue:

En cada caso de elección, la Cámara de Diputados, el gobierno en junta de ministros y la Suprema Corte de Justicia elegirán, cada uno a pluralidad absoluta de votos, un número de individuos igual al que debe ser de nuevos senadores.

Las tres listas que resultarán serán autorizadas por los respectivos secretarios y remitidas a las juntas departamentales.

Cada una de éstas elegirá, precisamente de los comprendidos en las listas, el número que se debe nombrar de senadores, y remitirá la lista especificativa de su elección al Supremo Poder Conservador.

Este las examinará, calificará las elecciones, ciñéndose a lo que prescribe el artículo 5º, y declarará senadores a los que hayan reunido la mayoría de votos de las juntas, por el orden de esa mayoría, y decidiendo la suerte entre los números iguales.

Artículo 9. El Senado se renovará por terceras partes cada dos años, saliendo, al fin del primer bienio, los ocho últimos de la lista, al fin del segundo, los ocho de en medio, y desde fin del tercero en adelante los ocho más antiguos.

Artículo 10. Las elecciones que deben verificar la Cámara de Diputados, el gobierno y la Suprema Corte de Justicia, con arreglo al artículo 8º, se harán precisamente en 3 de junio del año próximo anterior a la renovación parcial. En 15 del inmediato agosto verificarán la suya las juntas departamentales; y la calificación y declaración del Supremo Poder Conservador, se verificarán en 1º de octubre del mismo año, e inmediatamente participará el Ejecutivo el nombramiento a los electos.

Artículo 11. La vacante de un senador se reemplazará por elección hecha en el método que prescribe el artículo 8º; el electo entrará a ocupar el lugar vacío, y durará el tiempo que debía durar el que faltó.

Artículo 12. Para ser senador se requiere:

- I. Ser ciudadano en actual ejercicio de sus derechos.
- II. Ser mexicano por nacimiento.
- III. Tener de edad, el día de la elección, treinta y cinco años cumplidos.
- IV. Tener un capital (físico o moral), que produzca al individuo lo menos dos mil quinientos pesos anuales.

Artículo 13. No pueden ser senadores: el Presidente de la República mientras lo sea, y un año después; los miembros del Supremo Poder Conservador; los de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial; los secretarios del Despacho y oficiales de sus secretarías; los empleados generales de Hacienda, ni los Gobernadores de los departamentos, mientras lo sean y seis meses después.

De las sesiones

Artículo 14. Las sesiones del Congreso General se abrirán en 1º de enero y en 1º de julio de cada año. Las del primer periodo se podrán cerrar en 31 de marzo, y las del segundo durarán hasta que se concluyan los asuntos a que *exclusivamente* se dedican. El objeto exclusivo de dicho segundo periodo de sesiones será el examen y aprobación del presupuesto del año siguiente, y de la cuenta del Ministerio de Hacienda respectivo al año penúltimo.

Artículo 15. Las sesiones serán diarias, exceptuándose sólo los días de solemnidad eclesiástica, y los de civil que señalare una ley secundaria.

Artículo 16. El reglamento del Congreso especificará la hora a que deben comenzar cada día las sesiones, el tiempo que debe durar cada una, cómo y hasta por cuánto tiempo podrá suspender las suyas cada Cámara, y todos los demás requisitos preparatorios de cada sesión ordinaria o extraordinaria, y de las discusiones y votación.

Artículo 17. Para la votación de cualquiera ley o decreto deberá estar presente más de la mitad del número total de individuos que componen la Cámara, y toda votación se hará por la mayoría de sufragios de los que estuvieren presentes, excepto en los casos que la ley exija número mayor.

Artículo 18. Para la clausura de las sesiones, así ordinarias como extraordinarias, se expedirá formal decreto, pasado en ambas Cámaras, sancionado y publicado por el Ejecutivo.

Artículo 19. Si el Congreso resolviere no cerrar en 31 de marzo el primer periodo de sesiones ordinarias, o el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo pidieren esta prórroga, se expedirá previamente y publicará decreto de continuación.

En dicho decreto se especificarán los asuntos de que únicamente ha de ocuparse el Congreso en aquella prórroga; pero no el tiempo de la duración de ella, que será todo el necesario, dentro de los meses de abril, mayo y junio, para la conclusión de dichos asuntos.

Artículo 20. Puede el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo, y cuando el Congreso esté en receso, resolver se le cite a sesiones extraordinarias por la Diputación Permanente, señalándose los asuntos de que se ha de ocupar, sin que pueda, durante ella, tratar otros.

Igual facultad tendrá la Diputación Permanente, con tal de que convenga en la citación el Ejecutivo, quien no podrá negarse a ella, sino con acuerdo del Supremo Poder Conservador.

Artículo 21. La fijación de asuntos de que hablan los artículos 14, 19 y 20, no obstará para tratar alguno otro que pueda ocurrir improvisadamente, con tal de que sea muy urgente, y de interés común, a juicio del Ejecutivo y de la mayoría de ambas Cámaras. Tampoco obstará para poderse ocupar de las acusaciones que deben hacerse ante las Cámaras y demás asuntos económicos.

Artículo 22. Aunque el Congreso General cierre sus sesiones, la Cámara de Senadores continuará las suyas particulares, mientras haya leyes pendientes de su revisión.

Artículo 23. Cuando se verifique la suspensión de que habla el párrafo 6, artículo 12 de las atribuciones del Poder Conservador, la Diputación Permanente deberá citar al Congreso a que continúe sus sesiones interrumpidas, concluidos los dos meses, y él se reunirá para este fin con la citación o sin ella.

Artículo 24. Podrá también el Presidente, en el mismo caso y con los mismos requisitos del anterior artículo, aumentar con los suplentes el número de la Cámara de Diputados, por sólo dos meses a lo más.

De la formación de las leyes

Artículo 25. Toda ley se iniciará precisamente en la Cámara de Diputados: a la de senadores sólo corresponderá la revisión.

Artículo 26. Corresponde la iniciativa de las leyes:

- I. Al Supremo Poder Ejecutivo y a los diputados, en todas materias.
- II. A la Suprema Corte de Justicia, en lo relativo a la administración de su ramo.
- III. A las juntas departamentales en las relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y variaciones constitucionales.

Artículo 27. El Supremo Poder Ejecutivo y la alta Corte de Justicia podrán, cada uno en su línea, iniciar leyes declaratorias de otras leyes, y los diputados podrán hacer la misma iniciativa, si se reúnen quince para proponerla.

Artículo 28. Cuando el Supremo Poder Ejecutivo o los diputados iniciaren leyes sobre materia en que concede iniciativa el artículo 26 a la Suprema Corte de Justicia y juntas departamentales, se oirá el dictamen respectivo de aquélla y de la mayoría de éstas, antes de tomar en consideración la iniciativa.

Artículo 29. No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas de los poderes Ejecutivo y Judicial, ni aquellas en que convenga la mayor parte de las juntas departamentales. Las demás se tomarán o no en consideración, según lo calificare la Cámara, oído el dictamen de una comisión de nueve diputados, que elegirá en su totalidad cada año, y se denominará de *peticiones*.

Artículo 30. Cualquier ciudadano particular podrá dirigir sus proyectos o en derecho a algún diputado para que los haga suyos si quiere, o a los Ayuntamientos de las capitales, quienes, si los calificaren de útiles, los pasarán con su calificación a la respectiva junta departamental, y si ésta los aprueba, los elevará a iniciativa.

Artículo 31. Aprobado un proyecto en la Cámara de Diputados en su totalidad y en cada uno de sus artículos, se pasará a la revisión del Senado con todo el expediente de la materia.

Artículo 32. La Cámara de Senadores, en la revisión de un proyecto de ley o decreto, no podrá hacerle alteraciones, ni modificaciones, y se ceñirá a las fórmulas de *aprobado, desaprobado*; pero al volverlo a la Cámara de Diputados, remitirá extracto circunstanciado de la discusión, para que dicha Cámara se haga cargo de las partes que han parecido mal, o alteraciones que estime el Senado convenientes.

Artículo 33. Si la Cámara de Diputados, con dos terceras partes de los presentes, insistiere en el proyecto de ley o decreto devuelto por el Senado, esta Cámara, a quien volverá a segunda revisión, no lo podrá desaprobar sin el voto conforme de dos terceras partes de los senadores presentes; no llegando a este número los que desapruében, por el mismo hecho quedará aprobado.

Artículo 34. Todo proyecto de ley o decreto aprobado en ambas Cámaras, en primera o segunda revisión, pasará a la sanción del Presidente de la República; y si es variación constitucional, a la del Supremo Poder Conservador.

Artículo 35. Si la ley o decreto sólo hubiere tenido primera discusión en las Cámaras, y al Presidente de la República no pareciere bien, podrá, dentro de quince días útiles, devolverla a la Cámara de Diputados, con observaciones acordadas en el Consejo; pasado dicho término, sin hacerlo, la ley quedará sancionada y se publicará.

Artículo 36. Si el proyecto de ley o decreto hubiere sufrido en las Cámaras segunda revisión, y estuviere en el caso del artículo 33, puede el Presidente de la República (juzgándolo oportuno él y su Consejo) negarle la sanción sin necesidad de hacer observaciones, y avisará de su resolución al Congreso.

Artículo 37. La ley o decreto devuelto con observaciones por el Presidente de la República, deberá ser examinado de nuevo en ambas Cámaras, y si las dos terceras partes de una y otra insistieren, se pasará segunda vez al Presidente, quien ya no podrá negarle la sanción y publicación; pero si faltare en cualquiera de las Cámaras el dicho requisito, el proyecto se tendrá por desechado.

Artículo 38. El proyecto de ley o decreto desechado, o no sancionado, según los artículos 33, 36 y 37, no podrá volverse a proponer en el Congreso, ni tratarse allí de él, hasta que se haya renovado la Cámara de Diputados en su mitad, como prescribe el artículo 3°. Las variaciones de Constitución que no sancionare el Supremo Poder Conservador, si renovada la Cámara de Diputados en su mitad, insistiere en la iniciativa de ellas la mayor parte de las juntas departamentales, y en la aprobación las dos terceras partes de los miembros presentes de una y otra cámara, no pasarán de nuevo a la sanción, y se publicarán sin ella.

Artículo 39. Sancionada la ley, la hará publicar el Presidente de la República en la capital de ella, del modo acostumbrado, en todas las capitales de los departamentos y en todas las villas y lugares, circulándola al efecto a los Gobernadores, y por su medio a las demás autoridades subalternas.

Todos estos funcionarios serán responsables si no publican la ley dentro del tercer día de su recibo.

Artículo 40. No se necesita esa publicación en los decretos cuyo conocimiento sólo corresponda a determinadas personas o corporaciones; pero siempre se hará en los periódicos del gobierno.

Artículo 41. La fórmula para publicar las leyes y decretos, será la siguiente:

El Presidente de la República Mexicana a los habitantes de ella, sabed: que el Congreso General ha decretado lo siguiente (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le dé el debido cumplimiento.

Artículo 42. Publicada la ley en cada paraje, obliga en él desde la fecha de su publicación, a no ser que ella misma prefije plazo ulterior para la obligación.

Ninguna ley *preceptiva* obligará antes del mencionado requisito.

Artículo 43. Toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de ley o decreto.

El primer nombre corresponde a las que se versen sobre materia de interés común, dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo.

El segundo corresponde a las que, dentro de la misma órbita, sean sólo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas.

Artículo 44. Corresponde al Congreso General exclusivamente:

- I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas y dispensar su observancia.
- II. Aprobar, reprobado o reformar las disposiciones legislativas que dicten las juntas departamentales.
- III. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.

Toda contribución cesa con el año, en el hecho de no haber sido prorrogada para el siguiente.

- IV. Examinar y aprobar cada año la cuenta general de inversión de caudales respectiva al año penúltimo que deberá haber presentado el ministerio de Hacienda en el año último, y sufrido la glosa y examen que detallará una ley secundaria.
- V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra que debe haber en la República, y cada año el de la milicia activa que debe haber el año siguiente, sin perjuicio de aumentar o disminuir ésta durante él, cuando el caso lo exija.
- VI. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación y designar garantías para cubrirlas.
- VII. Reconocer la deuda nacional, y decretar el modo y medio de amortizarla.
- VIII. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con potencias extranjeras, y los concordatos con la Silla Apostólica.
- IX. Decretar la guerra, aprobar los convenios de paz y dar reglas para conceder las patentes de corso.
- X. Dar al gobierno bases y reglas generales para la habilitación de toda clase de puertos, establecimiento de aduanas y formación de los aranceles de comercio.
- XI. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y adoptar el sistema general de pesos y medidas que le parezca.
- XII. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida fuera del país de tropas nacionales.
- XIII. Conceder amnistías generales en los casos y del modo que prescriba la ley.

- XIV. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones y fijar las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones.
- XV. Dar reglas generales para la concesión de cartas de naturaleza y de ciudadanía, y conceder, según ellas, estas últimas.
- XVI. Aumentar o disminuir por agregación o división los departamentos que forman la República.

Artículo 45. No puede el Congreso General:

- I. Dictar ley o decreto sin las iniciativas, intervalos, revisiones y demás requisitos que exige esta ley y señale el reglamento del Congreso; siendo únicamente excepciones de esta regla las expresas en el referido reglamento.
- II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie directa ni indirectamente.

A la ley sólo corresponde designar con generalidad las penas para los delitos.

- III. Privar de su prosperidad directa ni indirectamente a nadie, sea individuo, sea corporación eclesiástica o secular.

A la ley sólo corresponde en esta línea establecer, con generalidad, contribuciones o arbitrios.

- IV. Dar a ninguna ley, que no sea puramente declaratoria, efecto retroactivo, o que tenga lugar directa ni indirectamente, en casos anteriores a su publicación.
- V. Privar, ni aún suspender a los mexicanos de sus derechos declarados en las leyes constitucionales.
- VI. Reasumir en sí o delegar en otros, por vía de facultades extraordinarias, dos o los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Artículo 46. Es nula cualquiera ley o decreto dictado con expresa contravención al artículo anterior.

Facultades de las Cámaras y prerrogativas de sus miembros

Artículo 47. En los delitos comunes, no se podrá intentar acusación criminal contra el Presidente de la República, desde el día de su nombramiento hasta un año después de terminada su presidencia, ni contra los senadores, desde el día de su elección hasta que pasen dos meses de terminar su encargo, ni contra los ministros de la alta Corte de Justicia y la Marcial, secretarios del Despacho, consejeros y Gobernadores de los departamentos, sino ante la Cámara de Diputados. Si el acusado fuere diputado, en el tiempo de su diputación y dos meses después, o el Congreso estuviere en receso, se hará la acusación ante el Senado.

Artículo 48. En los delitos oficiales del Presidente de la República, en el mismo tiempo que fija el artículo anterior, de los secretarios del Despacho, magistrados de la alta Corte de Justicia y de la Marcial, consejeros, Gobernadores de los departamentos y juntas departamentales, por infracción del artículo 3º, parte quinta de la segunda Ley Constitucional, del 3 de la cuarta y del 15 de la sexta en sus tres primeras partes, la

Cámara de Diputados, ante quien debe hacerse la acusación, declarará si ha o no lugar a ésta; en caso de ser la declaración afirmativa, nombrará dos de sus miembros para sostener la acusación en el Senado. Este, instruido el proceso, y oídos los acusadores y defensores, fallará, sin que pueda imponer otra pena que la de destitución del cargo o empleo que obtiene el acusado, o de inhabilitación perpetua o temporal para obtener otro alguno; pero si del proceso resulta ser, a juicio del mismo Senado, acreedor a mayores penas, pasará el proceso al tribunal respectivo para que obren según las leyes.

Artículo 49. En los delitos comunes, hecha la acusación, declarará la Cámara respectiva si ha o no lugar a la formación de causa; en caso de ser la declaración afirmativa, se pondrá el reo a disposición del tribunal competente para ser juzgado.

La resolución afirmativa sólo necesitará la confirmación de la otra Cámara, en el caso de ser acusado el Presidente de la República.

Artículo 50. La declaración afirmativa, así en los delitos oficiales como en los comunes, suspende al acusado en el ejercicio de sus funciones y derechos de ciudadanos.

Todos los demás requisitos de estos jurados y prevenciones relativas al acusador, al acusado y al modo de proceder, las especificará el reglamento del Congreso.

Artículo 51. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

- I. Tomar resoluciones que no pasen de económicas, relativas al local de sus sesiones, al mejor arreglo de su secretaría y demás oficinas anexas, al número, nombramiento y dotación de sus empleados, y a todo su gobierno puramente interior.
- II. Comunicarse entre sí, y con el Gobierno, por escrito o por medio de comisiones de su seno.

Artículo 52. Toca a la Cámara de Diputados exclusivamente, a más de los que ha especificado esta ley:

- I. Vigilar por medio de una comisión inspectora, compuesta de cinco individuos de su seno, el exacto desempeño de la contaduría mayor y de las oficinas generales de Hacienda. Una ley secundaria detallará el modo y términos en que la comisión inspectora deba desempeñar su encargo, según las atribuciones que en ella se le fijen.
- II. Nombrar los jefes y demás empleados de la contaduría mayor.
- III. Confirmar los nombramientos que haga el Gobierno para primeros jefes de las oficinas generales de Hacienda, establecidas o que se establezcan.

Artículo 53. Toca exclusivamente a la Cámara de Senadores:

- I. Prestar su conocimiento para dar el pase o retener los decretos conciliares y bulas y rescriptos pontificios, que contengan disposiciones generales o trascendentales a la Nación.
- II. En el receso del Congreso General, entender en las acusaciones de que habla el artículo 47, y dar o negar en caso urgente, los permisos de que habla el párrafo 12 del artículo 44, citándolo al efecto la Diputación Permanente.

- III. Aprobar los nombramientos que haga el Poder Ejecutivo para enviados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, de la armada y de la milicia activa.

Artículo 54. La indemnización de los senadores será mayor que la de los diputados, y las cuotas de ambas las designará una ley secundaria.

Artículo 55. Los diputados y senadores serán inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus encargos, y en ningún tiempo y por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos ni molestados por ellas.

Artículo 56. Los diputados y senadores no pueden, a más de lo que les prohíbe el reglamento del Congreso:

- I. Renunciar el encargo sin causa grave, justa y calificada de tal por su Cámara respectiva.
- II. Admitir para sí, ni solicitar para otros, durante el tiempo de su encargo y un año después, comisión ni empleo alguno de provisión del Gobierno ni un ascenso que no les toque por rigurosa escala.
- III. Obtener para sí, ni solicitar para otro, en el mismo periodo del párrafo anterior, pensión ni condecoración alguna de provisión del Gobierno.

De la Diputación Permanente

Artículo 57. Esta se compondrá de cuatro diputados y tres senadores, que al fin de las primeras sesiones ordinarias de cada bienio nombrarán sus respectivas Cámaras.

Artículo 58. Toca a esta Diputación:

- I. Citar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo resuelva el Presidente de la República, o ella lo crea necesario con arreglo al artículo 21.
- II. Citar al Congreso a la continuación de sus sesiones ordinarias, interrumpidas según el artículo 24.
- III. Citar al Senado a sesión particular en los casos y para los fines del artículo 53, párrafo 2º.
- IV. Dar o negar a los individuos del Congreso licencia para ausentarse de la capital, estando las Cámaras en receso.
- V. Velar durante él sobre las infracciones de la Constitución.

CUARTA

Organización del Supremo Poder Ejecutivo

Artículo 1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un supremo magistrado, que se denominará Presidente de la República; durará ocho años, y se elegirá de la manera siguiente:

Artículo 2. El día 16 de agosto del año anterior a la renovación, elegirán el Presidente de la República en junta del Consejo y ministros, el Senado y la Alta Corte de

Justicia, cada uno una terna de individuos, y en el mismo día las pasarán directamente a la Cámara de Diputados.

Esta, en el día siguiente, escogerá tres individuos de los especificados en dichas ternas, y remitirá la terna resultante a todas las juntas departamentales.

Estas elegirán un individuo de los tres contenidos en la terna que se les remita, verificando su elección el día 15 de octubre del año anterior a la renovación, y remitirán en pliego certificado el acta de elección, precisamente por el correo próximo inmediato, a la Secretaría de la Cámara de Diputados, siendo caso de responsabilidad, para las juntas departamentales, la falta de cumplimiento a lo prevenido en este párrafo.

El día 15 del inmediato mes de diciembre se reunirán las dos Cámaras, abrirán los pliegos de actas que se hubieren recibido, nombrarán una comisión especial de cinco individuos que las examina y califique las elecciones (sólo por lo respectivo a su validez y nulidad), haga la regulación de los votos y presente el correspondiente dictamen.

Discutido y aprobado dicho dictamen en el Congreso General reunido, se declarará Presidente al que hubiere obtenido mayor número de votos, y en caso de igualdad al que designe la suerte, verificándose el sorteo y todo lo demás en la misma sesión.

Artículo 3. Los actos especificados en el artículo anterior serán nulos, ejecutándose en otros días que los asignados en él, y sólo en el caso de que algún trastorno social imposibilite o la reunión del Congreso, o la de la mayor parte de las juntas departamentales, el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara, designará otros días, valiendo este acuerdo extraordinariamente y por aquella sola vez.

Artículo 4. Se expedirá decreto declaratorio de la elección, el cual se publicará solemnemente por el Gobierno, y se comunicará al interesado para que se presente a otorgar el juramento y a tomar posesión el día 2 del próximo enero.

Artículo 5. El Presidente que termine puede ser reelecto siempre que venga propuesto en las tres ternas de que habla el párrafo primero, artículo 2º, sea escogido para uno de los de la terna de la Cámara de Diputados, de que habla el párrafo segundo del mismo artículo, y obtenga el voto de las tres cuartas partes de las juntas departamentales.

Artículo 6. El cargo de Presidente de la República no es renunciable sino en el caso de reelección, y aun en él, sólo con justas causas, que calificará el Congreso General.

Artículo 7. Si el electo estuviere ausente, el Congreso, atendiendo la distancia, le prefijará el día para presentarse.

Artículo 8. En las faltas temporales del Presidente de la República, gobernará el Presidente del Consejo.

Este mismo se encargará del Gobierno en el intervalo que puede haber desde la cesación del antiguo hasta la presentación del nuevo Presidente.

Artículo 9. Las funciones del Presidente de la República terminan en 1º de enero del año de renovación.

Artículo 10. En caso de vacante por muerte o destitución legal del Presidente de la República, se procederá a las elecciones en los mismos términos dichos en el artículo 2º, designando el Congreso, por decreto especial, el día en que cada una deba verificarse.

Si la muerte o destitución aconteciere en el último año de su mando, se procederá a las elecciones de que habla el artículo siguiente, y el electo funcionará hasta la posesión del Presidente que se elija, en el tiempo y modo designados en el artículo 2º de esta ley.

Artículo 11. En todo caso de vacante, y mientras se verifique la elección y posesión del Presidente propietario, electo ordinaria y extraordinariamente, se nombrará un interino en esta forma:

La Cámara de Diputados elegirá tres individuos, en quienes concurren todas las calidades que exige esta ley para ese cargo, y remitirá al Senado la terna.

Esta Cámara, al día siguiente, escogerá de la terna el individuo que ha de ser Presidente interino, lo avisará a la Cámara de Diputados, y el decreto de nombramiento se comunicará al Gobierno para su publicación y comunicación al interesado, prefijando el día en que debe presentarse a otorgar el juramento.

Artículo 12. El Presidente, propietario o interino, para tomar posesión de su cargo, hará ante el Congreso General, reunidas las dos Cámaras, juramento bajo la fórmula siguiente:

Yo N., nombrado Presidente de la República Mexicana, juro por Dios y los Santos Evangelios, que ejerceré fielmente el encargo que se me ha confiado y observaré y haré observar exactamente la Constitución y leyes de la Nación.

El reglamento interior del Congreso detallará todas las ceremonias de este acto.

Artículo 13. Cuando al Presidente le sobrevenga incapacidad física o moral, la excitación de que habla el párrafo cuarto, artículo 12, de la segunda ley constitucional, deberá ser votada por las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara de Diputados, y confirmada por la mayoría absoluta de los individuos que deben componer la del Senado.

Artículo 14. Para ser elegido Presidente de la República se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento y estar en actual ejercicio de los derechos de ciudadano.
- II. Tener de edad, el día de la elección, 40 años cumplidos.
- III. Tener un capital físico o moral que le produzca al individuo anualmente cuatro mil pesos de renta.
- IV. Haber desempeñado alguno de los cargos superiores civiles o militares.
- V. No haber sido condenado en proceso legal por crímenes o mala versación de los caudales públicos.
- VI. Residir en la República al tiempo de la elección.

Artículo 15. Son prerrogativas del Presidente de la República:

- I. Dar o negar la sanción a las leyes y decretos del Congreso General, en los casos no exceptuados en la tercera ley constitucional.
- II. Que no puedan dejar de tomarse en consideración las iniciativas de ley o decreto que dirija al Congreso General, en todo lo que esté facultado para hacerlas.
- III. No poder ser acusado criminalmente, durante su presidencia y un año después, por ninguna clase de delitos cometidos antes, o mientras funge de Presidente, sino en los términos que prescriben los artículos 47 y 48 de la tercera ley constitucional.
- IV. No poder ser acusado criminalmente por delitos políticos cometidos antes o en la época de su presidencia, después de pasado un año de haber terminado ésta.
- V. No poder ser procesado, sino previa la declaración de ambas Cámaras prevenida en el artículo 49, párrafo último de la tercera ley constitucional.
- VI. Nombrar libremente a los secretarios del Despacho, y poderlos remover siempre que lo crea conveniente.
- VII. Elegir y remitir a las Cámaras oradores que manifiesten y apoyen la opinión del gobierno, en todos los casos en que la importancia del asunto haga, a su juicio y al del consejo, oportuna esta medida.

Artículo 16. Las mismas prerrogativas disfrutará el que funja de Presidente interino o supletoriamente; pero en éstos, el término para gozar de la 3°, 4° y 5°, se extenderá sólo a dos meses después de terminado el encargo.

Artículo 17. Son atribuciones del Presidente de la República:

- I. Dar, con sujeción a las leyes generales respectivas, todos los decretos y órdenes que convengan para la mejor administración pública, observancia de la Constitución y leyes, y, de acuerdo con el Consejo, los reglamentos para el cumplimiento de éstas.
- II. Iniciar todas las leyes y decretos que estime convenientes, de acuerdo con el Consejo, para el buen gobierno de la Nación.
- III. Hacer, con acuerdo del consejo, las observaciones que le parezca, a las leyes y decretos que el Congreso le comunique para su publicación, no siendo en los casos exceptuados en la tercera ley constitucional.
- IV. Publicar, circular y hacer guardar la Constitución, leyes y decretos del Congreso.
- V. Resolver, con acuerdo del Consejo, las excitaciones de que hablan los párrafos 1° y 6°, art. 12, de la segunda ley constitucional.
- VI. Pedir al Congreso la prórroga de sus sesiones ordinarias.
- VII. Resolver lo convoque la Diputación Permanente a sesiones extraordinarias, y señalar, con acuerdo del Consejo, los asuntos que deben tratarse en ellas.

- VIII. Negarse, de acuerdo con el Supremo Poder Conservador, a que la Diputación Permanente haga la convocatoria para que la faculte el artículo 20 de la tercera ley constitucional, en su 2º parte.
- IX. Cuidar de la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones, con arreglo a las leyes.
- X. Nombrar a los consejeros en los términos que dispone esta ley.
- XI. Nombrar a los Gobernadores de los departamentos a propuesta en terna de la junta departamental y con acuerdo del Consejo.
- XII. Remover a los empleados diplomáticos, siempre que lo juzgue conveniente.
- XIII. Nombrar a los empleados diplomáticos, cónsules, coroneles y demás oficiales superiores del ejército permanente, de la armada y de la milicia activa, y a los primeros jefes de las oficinas principales de Hacienda, establecidas o que se establezcan, con sujeción, en los primeros, a la aprobación el Senado, y en estos últimos, a la de la Cámara de Diputados, según prescriben los artículos 52 y 53 de la tercera ley constitucional.
- XIV. Nombrar para todos los demás empleos militares y de las oficinas con arreglo a lo que dispongan las leyes.
- XV. Intervenir en el nombramiento de los jueces e individuos de los tribunales de justicia, conforme a lo que establece la quinta ley constitucional.
- XVI. Dar retiros, conceder licencias y pensiones, conforme lo dispongan las leyes.
- XVII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra, para la seguridad interior y defensa exterior.
- XVIII. Declarar la guerra en nombre de la Nación, previo el consentimiento del Congreso, y conceder patentes de corso con arreglo a lo que dispongan las leyes.
- XIX. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, arreglado a las bases que le diere el Congreso.
- XX. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistades, alianza, tregua, neutralidad armada, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación.
- XXI. Recibir ministros y demás enviados extranjeros.
- XXII. Excitar a los ministros de justicia para la pronta administración de ésta, y darles todos los auxilios necesarios para la ejecución de sus sentencias y providencias judiciales.
- XXIII. Suspender de sus empleos, hasta por tres meses, y privar aún de la mitad de sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de su nombramiento, infractores de sus órdenes y decretos, y, en el caso que crea debérseles formar causa, pasará los antecedentes al tribunal respectivo.

- XXIV. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves y rescriptos con consentimiento del Senado, si contienen disposiciones generales, oyendo a la Suprema Corte de Justicia, si se versan sobre asuntos contenciosos, y al Consejo si fueren relativos a negocios particulares o puramente gubernativos.
- En cualquier caso de retención deberá dirigir al Supremo Pontífice, dentro de dos meses a lo más, exposición de los motivos, para que, instruido Su Santidad, resuelva lo que tuviere a bien.
- XXV. Previo el concordato con la Silla Apostólica, y según lo que en él se disponga, presentar para todos los obispados, dignidades y beneficios eclesiásticos, que sean del patronato de la Nación, con acuerdo del Consejo.
- XXVI. Conceder o negar, de acuerdo con el Consejo, y con arreglo a las leyes, los indultos que se le pidan, oídos los tribunales cuyo fallo haya causado la ejecutoria, y la Suprema Corte de Justicia, suspendiéndose la ejecución de la sentencia mientras resuelve.
- XXVII. Cuidar de la exactitud legal en la fabricación de moneda.
- XXVIII. Providenciar lo conducente al buen gobierno de los departamentos.
- XXIX. Contraer deudas sobre el crédito nacional, previa autorización del Congreso.
- XXX. Habilitar puertos o cerrarlos, establecer o suprimir aduanas y formar los aranceles de comercio, con absoluta sujeción a las bases que prefije el Congreso.
- XXXI. Conceder, de acuerdo con el Consejo, cartas de naturalización, bajo las reglas que prescriba la ley.
- XXXII. Dar pasaporte a los mexicanos para ir a países extranjeros, y prorrogarles el término de licencia.
- XXXIII. Dar o negar el pase a los extranjeros para introducirse a la República, y expeler de ella a los no naturalizados que le sean sospechosos.
- XXXIV. Conceder, de acuerdo con el Consejo, privilegios exclusivos en los términos que establezcan las leyes.

Artículo 18. No puede el Presidente de la República:

- I. Mandar en persona las fuerzas de mar o tierra, sin consentimiento del Congreso General, o en sus recesos, del Senado, por el voto de dos terceras partes de los senadores presentes.

Mientras esté mandando las fuerzas, cesará toda su intervención en el gobierno, a quien quedará sujeto como general.

- II. Privar a nadie de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna; pero cuando lo exijan el bien o la seguridad pública, podrá arrestar a los que le fueren sospechosos, debiendo ponerlos a disposición del tribunal o juez competente a los tres días a más tardar.

- III. Ocupar la propiedad de ninguna persona ni corporación, sino en el caso y con los requisitos que detalla el párrafo 3°, artículo 2° de la primera ley constitucional.
- IV. Salir del territorio de la República durante su presidencia, y un año después, sin el permiso del Congreso.
- V. Enajenar, ceder o permutar, ciudad, villa, lugar o parte alguna del territorio nacional.
- VI. Ceder ni enajenar los bienes sin el consentimiento del Congreso.
- VII. Imponer por sí, directa ni indirectamente, contribuciones de ninguna especie, generales ni particulares.
- VIII. Hacer ejecutar los actos que prohíben los párrafos 4°, 5°, 6° y 7°, artículo 2°, de la primera ley constitucional, y el 5°, artículo 45 de la tercera ley constitucional.
- IX. Impedir o diferir las elecciones establecidas en las leyes constitucionales.
- X. Impedir o turbar las reuniones del poder conservador o negar el cumplimiento a sus resoluciones.

Artículo 19. Todo acto, contrario al artículo precedente, es nulo, y hace responsable al Secretario del Despacho que lo autorice.

Artículo 20. Las leyes secundarias designarán el sueldo que debe indemnizar a este supremo magistrado, y todos los ceremoniales que se deben observar respecto de él.

Del Consejo de Gobierno

Artículo 21. Este se compondrá de trece consejeros, de los cuales dos serán eclesiásticos, dos militares y el resto de las demás clases de la sociedad, y se elegirán de la manera siguiente:

El actual Congreso formará una lista de treinta y nueve individuos y la remitirá el Presidente de la República, quien al día siguiente escogerá en ella y nombrará a los trece consejeros.

En lo sucesivo, en caso de vacante, el Senado propondrá una terna al Presidente de la República, para que éste elija y reemplace al que falte.

Artículo 22. Hecha la elección de los trece consejeros de que habla el anterior artículo, pasará la lista de ellos el Presidente de la República al Congreso, y éste, en el mismo día, nombrará de entre ellos al que ha de presidir el Consejo y al que haya de suplir sus faltas.

Esta elección se hará en lo sucesivo por la Cámara de Diputados cada dos años, en el día diez de enero, y se comunicará al Presidente de la República para que la publique.

El que acaba de Presidente puede ser reelecto.

Artículo 23. El cargo de consejero será perpetuo, y no se podrá renunciar sino por justa causa, calificada de tal por el Presidente de la República, con acuerdo del mismo Consejo.

Artículo 24. Para ser consejero se requiere ser mexicano por nacimiento y tener las mismas calidades que exige para los diputados el artículo 6º de la tercera ley constitucional.

Artículo 25. Son atribuciones del Consejo:

- I. Todas las que están expresadas en esta ley y en las otras constitucionales.
- II. Dar al Gobierno su dictamen en todos los casos y asuntos en que se lo exija.
- III. Nombrar de entre sus individuos al que ha de fungir de secretario, y al que haya de suplir sus faltas. La elección se hará el día diez de enero, cada dos años, y podrá reelegirse a los mismos que terminan.

Artículo 26. Los consejeros sólo serán responsables por los dictámenes que dieren contra ley expresa, singularmente si es constitucional, o por cohecho o soborno.

La responsabilidad no se les podrá exigir sino en el modo y términos prescritos en la tercera ley constitucional.

Artículo 27. Una ley secundaria reglamentará detalladamente todas las funciones del Consejo, el modo de desempeñarlas, todo su gobierno interior, y asignará la indemnización que deba darse a estos funcionarios.

Del Ministerio

Artículo 28. Para el despacho de los asuntos de gobierno, habrá cuatro ministros: uno de lo Interior, otro de Relaciones Exteriores, otro de Hacienda y otro de Guerra y Marina.

Artículo 29. Los ministros deberán ser de exclusiva elección del Presidente de la República, mexicanos por nacimiento, ciudadanos en actual ejercicio de sus derechos, y que no hayan sido condenados en proceso legal por crímenes o mala versación en los caudales públicos.

Artículo 30. Todo asunto grave del Gobierno será resuelto por el Presidente de la República en junta de ministros, quienes firmarán el acuerdo en el libro respectivo, especificando el que o los que disientan.

Artículo 31. Cada uno de los ministros corresponde:

- I. El despacho de todos los negocios de su ramo, acordándolos previamente con el Presidente de la República.
- II. Autorizar con su firma todos los arreglos, decretos y órdenes del Presidente, en que él esté conforme, y versen sobre asuntos propios de su ministerio.
- III. Presentar a ambas Cámaras una memoria especificativa del estado en que se hallen los diversos ramos de la administración pública respectivos a su Ministerio.

Esta memoria la presentará el Secretario de Hacienda en julio de cada año, y los otros tres en enero.

Artículo 32. Cada Ministro será responsable de la falta de cumplimiento a las leyes que deban tenerlo por su Ministerio, y de los actos del Presidente, que autorice con su firma y sean contrarios a las leyes, singularmente las constitucionales.

La responsabilidad de los ministros no se podrá hacer efectiva sino en el modo y términos que previene la tercera ley constitucional.

Artículo 33. El Gobierno formará un reglamento para el mejor despacho de sus Secretarías, y lo pasará al Congreso para su aprobación.

Artículo 34. La indemnización de los ministros se establecerá por ley secundaria, continuando entretanto la que han disfrutado hasta aquí.

QUINTA

Del Poder Judicial de la República Mexicana

Artículo 1. El Poder Judicial de la República se ejercerá por una Corte Suprema de Justicia, por los tribunales superiores de los departamentos, por los de Hacienda que establecerá la ley de la materia y por los juzgados de primera instancia.

Artículo 2. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal.

Artículo 3. Representa al Poder Judicial en lo que le pertenece y no puede des-
empeñarse por todo él. Debe cuidar de que los tribunales y juzgados de los departa-
mentos estén ocupados con los magistrados y jueces que han de componerlos, y de
que en ellos se administre pronta y cumplidamente justicia.

Artículo 4. Para ser electo individuo de la Corte Suprema se necesita:

Primero. Ser mexicano por nacimiento. Segundo. Ciudadano en ejercicio de sus derechos.

Tercero. Tener la edad de cuarenta años cumplidos.

Cuarto. No haber sido condenado por algún crimen en proceso legal.

Quinto. Ser *letrado* y en ejercicio de esta profesión por diez años a lo menos.

No se necesita la calidad de mexicano por nacimiento:

Primero. En los hijos de padres mexicanos por nacimiento que, habiendo nacido casualmente fuera de la República, se hubieren establecido en ella desde que entraron en el goce del derecho de disponer de sí.

Segundo: En los que hubieren nacido en cualquiera parte de la América, que antes del año de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, siempre que residieran en la República antes de hacerse su independencia.

Tercero: En los que, siendo naturales de provincia que fue parte del territorio de la misma República, hayan estado desde antes radicados en ésta.

Artículo 5. La elección de los individuos de la Corte Suprema, en las vacantes que hubiere en lo sucesivo, se hará de la misma manera y en la propia forma que la del Presidente de la República.

Artículo 6. Declarada la elección se expedirá en el propio día el decreto declaratorio, se publicará por el Gobierno y se comunicará al tribunal y al interesado, para que éste se presente a hacer el juramento y tomar posesión.

Artículo 7. El electo prestará el juramento ante la Cámara de Diputados, por su receso ante la de senadores, y por el de ambos ante la Diputación Permanente. Su fórmula será: *¿Juráis a Dios, nuestro Señor, guardar y hacer guardar las leyes constitucionales, administrar justicia bien y cumplidamente, y desempeñar con exactitud todas las funciones de vuestro cargo? Si así lo hicieris, Dios os lo premie; y si no, os lo demande.*

Artículo 8. Si un Diputado, Senador o Consejero, fuere electo Ministro o Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, preferirá la elección que se haga para estos destinos.

Artículo 9. Los individuos de la Corte Suprema de Justicia, no podrán ser juzgados en sus negocios civiles y en sus causas criminales, sino del modo y por el tribunal establecido en la segunda y tercera ley constitucional.

Artículo 10. En cada dos años, y en los seis primeros días del mes de enero, extenderán el Presidente de la República en Junta del Consejo y de ministros, el Senado y la alta Corte de Justicia, cada uno una lista de nuevos individuos residentes en la capital, y con las mismas calidades que se requieren para los ministros de dicho supremo tribunal, a fin de que, como suplentes, puedan cubrir las faltas de sus magistrados.

Artículo 11. Estas listas se pasarán inmediatamente a la Cámara de Diputados y ésta nombrará de entre los individuos comprendidos en ellas, los nueve que ejercerán el cargo de suplentes.

Artículo 12. Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son:

- I. Conocer de los negocios civiles y de las causas criminales que se muevan contra los miembros del Supremo Poder Conservador, en los términos y con los requisitos prevenidos en el artículo 18 de la segunda ley constitucional.
- II. Conocer de las causas criminales promovidas contra el Presidente de la República, diputados y senadores, Secretarios del Despacho, consejeros y Gobernadores de los departamentos, bajo los requisitos establecidos en la tercera ley constitucional.
- III. Conocer, desde la primera instancia, de los negocios civiles que tuvieren como actores o como reos el Presidente de la República y los Secretarios del Despacho, y en los que fueren demandados los diputados, senadores y consejeros.
- IV. Conocer en la tercera de los negocios promovidos contra los Gobernadores y los magistrados superiores de los departamentos, y en el mismo grado en las causas criminales que se formen contra éstos por delitos comunes.

- V. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales o juzgados de diversos departamentos o fueros.
- VI. Conocer de las disputas judiciales que se muevan sobre contratas o negociaciones celebradas por el Supremo Gobierno o por su orden expresa.
- VII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los departamentos.
- VIII. Conocer en todas las instancias en las causas criminales de los empleados diplomáticos y cónsules de la República, y en los negocios civiles en que fueren demandados.
- IX. Conocer de las causas de almirantazgo, de presas de mar y tierra, crímenes cometidos en alta mar, y ofensas contra la Nación Mexicana, en los términos que designará una ley.
- X. Conocer de las causas criminales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la misma Corte Suprema, por faltas, excesos o abusos cometidos en el servicio de sus destinos.
- XI. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia, por los tribunales superiores de tercera de los departamentos.
- XII. Conocer de los recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los muy RR. arzobispos y RR. obispos de la República.
- XIII. Iniciar leyes relativas a la administración de justicia, según lo prevenido en la tercera ley constitucional, preferentemente las que se dirijan a reglamentar todos los tribunales de la Nación.
- XIV. Exponer su dictamen sobre leyes iniciadas por el Supremo Gobierno, o por los diputados, en el mismo ramo de la administración de Justicia.
- XV. Recibir las dudas de los demás tribunales y juzgados sobre la inteligencia de alguna ley, y hallándolas fundadas, pasarlas a la Cámara de Diputados, exponiendo en juicio y promoviendo la declaración conveniente.
- XVI. Nombrar todos los subalternos y dependientes de la misma Corte Suprema.
- XVII. Nombrar los ministros y fiscales de los tribunales superiores de los departamentos, en los términos siguientes:

Los tribunales superiores de los departamentos formarán lista de todos los pretendientes a dichas plazas, y de los demás que a su juicio fueren aptos para obtenerlas: las pasarán enseguida al Gobernador respectivo, quien, en unión de la Junta Departamental, podrá excluir a los que estime que no merezcan la confianza pública del departamento, y hecha esta operación las devolverán a los mismos tribunales. Estos formarán de nuevo una lista comprensiva de los que quedaron libres después de la exclusión, calificando gradual y circunstancialmente la aptitud y mérito de cada uno: remitida esta lista al Supremo Gobierno, podrá éste, con su

Consejo, excluir a los que crea que no merecen el concepto y confianza de la Nación; y pasada por último, a la Corte Suprema de Justicia, procederá al nombramiento entre los que resulten expeditos.

- XVIII. Confirmar el nombramiento de los jueces propietarios de primera instancia, hecho por los tribunales superiores de los departamentos.
- XIX. Apoyar o contradecir las peticiones de indultos que se hagan a favor de los delincuentes.
- XX. Conocer de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de que goce la Nación.
- XXI. Consultar sobre el pase o retención de bulas pontificias, breves y rescriptos expedidos en negocios litigiosos.
- XXII. Oír y decidir sobre los reclamos que se interpongan, en la capital de la República, acerca de la calificación hecha para ocupar la propiedad, en los casos de que trata el párrafo 3°, artículo 2° de la primera ley constitucional.

Artículo 13. La Suprema Corte de Justicia, asociándose con oficiales generales, se erigirá en Marcial para conocer de todos los negocios y causas del fuero de guerra, en los términos que prevendrá una ley bajo las bases siguientes:

- I. De esta Corte Marcial sólo los ministros militares decidirán en las causas criminales, puramente militares.
- II. En los negocios civiles sólo conocerán y decidirán los ministros letrados.
- III. En las causas criminales comunes y mixtas conocerán y decidirán, asociados unos con otros, lo mismo que en las que se formen a los comandantes generales, por delitos que cometan en el ejercicio de su jurisdicción.

Artículo 14. En esta Corte Marcial habrá siete ministros militares propietarios y un fiscal, cuatro suplentes para los primeros y uno para el segundo.

La elección de todos se hará de la misma manera que la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y disfrutarán como éstos de la prerrogativa concedida en el artículo 9°. Sus calidades serán la 1°, 2°, 3° y 4° que expresa el artículo 4° de esta ley, debiendo ser, además, generales de división o de brigada.

Artículo 15. Los requisitos para que el Gobierno pueda destinarlos a cosas del servicio serán los mismos que exige el artículo 16 de esta ley, en la restricción 4°, para que puedan encargarse de alguna comisión los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 16. Las restricciones de la Corte Suprema de Justicia y de sus individuos son las siguientes:

- I. No podrá hacer por sí reglamento alguno, ni aun sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren las de las leyes.
- II. No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernamentales o económicos de la Nación.

- III. Tampoco podrá tomarlo en los contenciosos que se hallen pendientes en los tribunales de los departamentos, o que pertenezcan a la jurisdicción de su respectivo territorio.
- IV. Ninguno de los ministros y fiscales de la Corte Suprema, podrá tener comisión alguna de Gobierno. Cuando éste, por motivos particulares que interesen al bien de la causa pública, estimare conveniente nombrar a algún magistrado parra Secretario del Despacho, Ministro diplomático u otra comisión de esta naturaleza, podrá hacerlo con acuerdo del Consejo y consentimiento del Senado.
- V. Los ministros y fiscales de la Corte Suprema no podrán ser abogados ni apoderados en los pleitos, asesores, ni árbitros de derecho o arbitradores.

Artículo 17. La Corte Suprema de Justicia formará un reglamento para su gobierno interior y desempeño de todas sus atribuciones, lo pondrá desde luego en ejecución y lo pasará después al Congreso para su reforma o aprobación.

De los tribunales superiores de los departamentos

Artículo 18. En cada capital de departamento se establecerá un tribunal superior, organizado del modo que designará una ley.

Artículo 19. Todos estos tribunales serán iguales en facultades, e independientes unos de otros en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 20. Para ser electo Ministro de dichos tribunales se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento o hallarse en alguno de los casos que expresa el artículo 4º, párrafo 2º de esta ley.
- II. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.
- III. Tener la edad de treinta años cumplidos.
- IV. No haber sido condenado en proceso legal por algún crimen.
- V. Ser letrado en ejercicio práctico de esta profesión por seis años a lo menos.

Artículo 21. Los jueces superiores y fiscales de los tribunales, al tomar posesión de sus destinos, harán el juramento prevenido en el artículo 7º ante el Gobernador y Junta Departamental.

Artículo 22. Las atribuciones de estos tribunales son las que siguen:

- I. Conocer en segunda y tercera instancia de las causas civiles y criminales pertenecientes a su respectivo territorio; y en primera y segunda de las civiles de los Gobernadores de los departamentos, cuya capital esté más inmediata, y de las civiles y criminales comunes de los magistrados superiores de éstos.
- II. Conocer en primera y segunda instancia de las causas criminales comunes, de las de responsabilidad y de los negocios civiles en que fueren demandados los jueces inferiores de su territorio. En las mismas instancias, de las que deban formarse contra los subalternos y dependientes inmediatos del tribunal, por faltas, abusos o excesos cometidos en el servicio de sus destinos; y en tercera instancia de los negocios que se promuevan o

causas que se formen en iguales casos, en los departamentos cuya capital esté más inmediata.

- III. Conocer de los recursos de nulidad que se impongan en las sentencias dadas por los jueces de primera instancia en juicio escrito, y cuando no tuviere lugar la apelación, y de las de vista que causen ejecutoria.
- IV. Dirimir las competencias de jurisdicción que se susciten entre sus jueces subalternos.
- V. Conocer de los recursos de protección y de fuerza que se interpongan de los jueces eclesiásticos de su respectivo territorio, no arzobispos ni obispos.
- VI. Declarar en las causas de reos inmunes los casos en que deba pedirse a la jurisdicción eclesiástica su consignación.
- VII. Calificar a los letrados que deben ocupar las vacantes que ocurran en los mismos tribunales, verificándolo precisamente con intervención de los Gobernadores, y juntas departamentales respectivas, en los términos prevenidos en el párrafo XVII del artículo 12 de esta ley.
- VIII. Nombrar a los jueces de primera instancia de su territorio, precediendo la intervención de los gobiernos y juntas departamentales respectivas. Esta intervención se verificará de la manera dispuesta en la primera parte del mismo párrafo XVII del artículo 12 de esta ley y dando inmediatamente cuenta a la Corte Suprema, para la confirmación del nombramiento hecho por el tribunal.
- IX. Nombrar a sus subalternos y dependientes respectivos.

Artículo 23. Las restricciones de estos tribunales y de sus ministros, son las siguientes:

- I. No podrán hacer reglamento alguno, ni aún sobre materias de administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren o declaren las de las leyes.
- II. No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de sus departamentos.

Artículo 24. Ninguno de los ministros y fiscales de estos tribunales podrá ser abogado o apoderado en los pleitos, asesores o árbitros de derecho o arbitrador, ni tener comisión alguna de Gobierno en su respectivo territorio.

De los jueces subalternos de primera instancia

Artículo 25. En las cabeceras de distrito de cada departamento se establecerán jueces subalternos, con sus juzgados correspondientes para el despacho de las causas civiles y criminales en su 1ª instancia. Los habrá también en las cabeceras de partido que designen las juntas departamentales, de acuerdo con los Gobernadores, con tal de que la población de todo el partido no baje de veinte mil almas.

Artículo 26. Para ser juez de 1ª instancia se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento, o hallarse en alguno de los casos que expresa el párrafo segundo del artículo 4º de esta ley.
- II. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.
- III. No haber sido condenado en proceso legal por algún crimen.
- IV. Tener veintiséis años cumplidos de edad.
- V. Ser letrado y haber ejercido esta profesión cuatro años a lo menos.

Artículo 27. Los jueces de primera instancia no podrán ser abogados ni apoderados en los pleitos, ni árbitros de derecho o arbitradores.

Artículo 28. Se limitarán solamente al conocimiento de los asuntos judiciales.

Artículo 29. En éstos, los alcaldes de los pueblos ejercerán las facultades que se establezcan por las leyes.

Previsiones generales sobre la administración de justicia en lo civil y en lo criminal.

Artículo 30. No habrá más fueros personales que el eclesiástico y militar.

Artículo 31. Los miembros y fiscales de la Corte Suprema serán perpetuos en estos cargos, y no podrán ser ni suspensos ni removidos, sino con arreglo a las previsiones contenidas en la segunda y tercera ley constitucional.

Artículo 32. También serán perpetuos los ministros y los jueces letrados de primera instancia, y no podrán ser removidos sino por causa legalmente probada y sentenciada.

Artículo 33. Todos los magistrados y jueces gozarán el sueldo que se designará por una ley.

Artículo 34. En cada causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, no podrá haber más que tres instancias. Una ley fijará el número de las que cada causa deba tener para quedar ejecutoriada, según su naturaleza, entidad y circunstancia.

Artículo 35. Los ministros que hubieren fallado en alguna instancia, no podrán hacerlo en las demás.

Artículo 36. Toda prevaricación, por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra los magistrados y jueces que las cometieren.

Artículo 37. Toda falta de observancia, en los trámites esenciales que arreglan un proceso, produce su nulidad en lo civil y hará también personalmente responsables a los jueces. Una ley fijará los trámites que, como esenciales, no pueden omitirse en ningún juicio.

Artículo 38. En las causas criminales, su falta de observancia es motivo de responsabilidad contra los jueces que la cometieren.

Artículo 39. Todos los litigantes tienen derecho para terminar, en cualquier tiempo, sus pleitos civiles o criminales, sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será ejecutada conforme a las leyes.

Artículo 40. Para entablar cualquier pleito civil o criminal, sobre injurias puramente personales, debe intentarse antes el medio de la conciliación.

La ley arreglará la forma con que debe procederse en estos actos, los casos en que no tenga lugar, y todo lo demás relativo a esta materia.

Artículo 41. El mandamiento escrito y firmado del juez, que debe preceder a la prisión, según el párrafo I, artículo 2º de la primera ley constitucional, se hará saber en el acto al interesado; éste y todos deberán obedecer, cumplir y auxiliar estos mandamientos, y cualquiera resistencia o arbitrio, para embarazarlos o eludirlos, son delitos graves, que deberán castigarse según las circunstancias.

Artículo 42. En caso de resistencia o de temor fundado de fuga podrá usarse de la fuerza.

Artículo 43. Para proceder a la prisión se requiere:

- I. Que proceda información sumaria, de que resulte haber sucedido un hecho que merezca, según las leyes, ser castigado con pena corporal.
- II. Que resulte también algún motivo o indicio suficiente para creer que tal persona ha cometido el hecho criminal.

Artículo 44. Para proceder a la simple detención basta alguna presunción legal o sospecha fundada, que incline al juez contra persona y por delito determinado. Una ley fijará las penas necesarias para reprimir la arbitrariedad de los jueces en esta materia.

Artículo 45. Ningún preso podrá sufrir embargo alguno en sus bienes, sino cuando la prisión fuere por delitos que traigan de suyo responsabilidad pecuniaria, y entonces sólo se verificará en los suficientes para cubrirla.

Artículo 46. Cuando en el progreso de la causa, y por constancias particulares, apareciere que el reo no debe ser castigado con pena corporal, será puesto en libertad, en los términos y con las circunstancias que determinará la ley.

Artículo 47. Dentro de los tres días en que se verifique la prisión o detención, se tomará al presunto reo su declaración preparatoria; en este acto se le manifestará la causa de este procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere; y tanto esta primera declaración, como las demás que se ofrezcan en la causa, serán recibidas sin juramento del procesado, por lo que respecta a sus hechos propios.

Artículo 48. En la confesión, y al tiempo de hacerse al reo los cargos correspondientes, deberá instruírsele de los documentos, testigos y demás datos que obren en su contra, y desde este acto el proceso continuará sin reserva del mismo reo.

Artículo 49. Jamás podrá usarse del tormento para la averiguación de ningún género de delito.

Artículo 50. Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Artículo 51. Toda pena, así como el delito, es precisamente personal del delincuente, y nunca será trascendental a su familia.

*División del territorio de la República
y gobierno interior de sus pueblos*

Artículo 1. La República se dividirá en departamentos, conforme a la octava de las bases orgánicas. Los departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos.

Artículo 2. El primer Congreso Constitucional, en los meses de abril, mayo y junio del segundo año de sus sesiones, hará la división del territorio en departamentos por una ley, que será constitucional.

Artículo 3. Las juntas departamentales en el resto de ese año, harán la división de su respectivo departamento en distritos, y la de éstos en partidos; dando cuenta al gobierno y éste con su informe al Congreso para su aprobación.

Mientras tanto se hacen las divisiones de que tratan los dos artículos anteriores, se dividirán provisionalmente el territorio de la República por una ley secundaria.

Artículo 4. El gobierno interior de los departamentos estará a cargo de los Gobernadores, con sujeción al gobierno general.

Artículo 5. Los Gobernadores serán nombrados por éste a propuesta en terna de las juntas departamentales, sin obligación de sujetarse a ella en los departamentos fronterizos, y pudiendo devolverla una vez en los demás. Los Gobernadores durarán ocho años, pudiendo ser reelectos.

Artículo 6. Para ser Gobernador se necesita:

- I. Ser mexicano por nacimiento, o haber nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1810 dependía de la España, y que se ha separado de ella, siempre que residiera en la República al tiempo de hacerse su independencia.
- II. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.
- III. Ser natural o vecino del mismo departamento.
- IV. Tener de edad 30 años cumplidos.
- V. Tener un capital, físico o moral, que le produzca de renta anual dos mil pesos, a lo menos.
- VI. Pertenecer al estado secular.

Artículo 7. Toca a los Gobernadores:

- I. Cuidar de la conservación del orden público, en lo interior del departamento.
- II. Disponer de la fuerza armada, que las leyes les concedan con ese objeto.
- III. Cumplir y hacer cumplir los decretos y órdenes del gobierno general y las disposiciones de la junta departamental, previa la aprobación del Congreso, en los casos que la necesiten, según esta ley.
- IV. Pasar al gobierno general, con su informe, todas las disposiciones de la junta departamental.

- V. Nombrar los prefectos, aprobar el nombramiento de los subprefectos del departamento, confirmar el de los jueces de paz y remover a cualquiera de estos funcionarios, oído previamente el dictamen de la junta departamental, en cuanto a la remoción.
- VI. Nombrar los empleados del departamento, cuyo nombramiento no esté reservado a alguna otra autoridad.
- VII. Suspender hasta por tres meses, y privar aún de la mitad del sueldo por el mismo tiempo, a los empleados del departamento.
- VIII. Suspender a los Ayuntamientos del departamento, con acuerdo de la junta departamental. En el caso de que usen de alguna de las dos atribuciones anteriores, darán inmediatamente cuenta al gobierno general, para que éste, según sus facultades, determine lo que crea conveniente con respecto a la suspensión.
- IX. Resolver las dudas que ocurran sobre elecciones de Ayuntamientos, y admitir o no las renunciaciones de sus individuos.
- X. Ejercer, en unión de la junta departamental, con voto de calidad en caso de empate, la exclusiva de que hablan los artículos 12 en la atribución XVII, y el 22 en la VIII de la quinta ley constitucional.
- XI. Excitar a los tribunales y jueces para la más pronta y recta administración de justicia, poniendo en conocimiento de las autoridades superiores respectivas las faltas de los inferiores.
- XII. Vigilar sobre las oficinas de hacienda del departamento, en los términos que prevendrá la ley.

Artículo 8. En las faltas temporales del Gobernador, se nombrará uno interino del mismo modo que el propietario, debiendo tener las calidades que éste.

Si la falta fuere de poca duración, se hará cargo del gobierno el secular más antiguo de los individuos de la junta departamental, lo mismo que en el intervalo que haya desde la falta del propietario hasta el nombramiento interino.

Artículo 9. En cada departamento habrá una junta que se llamará departamental, compuesta de siete individuos.

Artículo 10. Estos serán elegidos por los mismos electores que han de nombrar a los diputados para el Congreso, verificándose la elección precisamente al día siguiente de haberse hecho la de los diputados.

Se elegirán también siete suplentes del mismo modo que los propietarios.

Artículo 11. Las juntas departamentales se renovarán en su totalidad cada cuatro años, comenzando a funcionar el día 1º de enero.

Artículo 12. Las elecciones de ellas se calificarán por las que acaben, de acuerdo con el Gobernador, y con sujeción a lo que después resolviere el Senado, al que se dará cuenta inmediatamente, sin perjuicio de la posesión.

Artículo 13. Para ser miembro de la junta departamental se necesitan las mismas calidades que para ser diputado.

Artículo 14. Toca a las juntas departamentales:

- I. Iniciar leyes relativas a impuestos, educación pública, industria, comercio, administración municipal y variaciones constitucionales, conforme al artículo 26 de la tercera ley constitucional.
- II. Evacuar los informes de que trata el artículo 28 de la misma ley.
- III. Establecer escuelas de primera educación en todos los pueblos de su departamento, dotándolas competentemente de los fondos de propios y arbitrios, donde los haya, e imponiendo moderadas contribuciones donde falten.
- IV. Disponer la apertura y mejora de los caminos interiores del departamento, estableciendo moderados peajes para cubrir sus costos.
- V. Dictar todas las disposiciones convenientes a la conservación y mejora de los establecimientos de instrucción y beneficencia pública, y las que se dirijan al fomento de la agricultura, industria y comercio; pero si con ellas se gravare de algún modo a los pueblos del departamento, no se pondrán en ejecución sin que previamente sean aprobados por el Congreso.
- VI. Promover, por medio del Gobernador, cuanto convenga a la prosperidad del departamento en todos sus ramos, y al bienestar de sus pueblos.
- VII. Formar, con el Gobernador, las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos y los reglamentos de policía interior del departamento.

Estas ordenanzas, las disposiciones que se dicten conforme a las facultades 3^o y 4^o, y las que según la 5^a no necesitan previa aprobación, podrán desde luego ponerse en práctica, pero con sujeción a lo que después resolviera el Congreso.
- VIII. Examinar y aprobar las cuentas que deben rendirse de la recaudación e inversión de los propios y arbitrios.
- IX. Consultar al gobierno en todos los asuntos en que éste se lo exija.
- X. Excitar al Supremo Poder Conservador para que declare cuándo está el Presidente de la República en el caso de renovar todo el Ministerio por bien de la Nación.
- XI. Hacer las elecciones de Presidente de la República, miembros del Supremo Poder Conservador, senadores e individuos de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, según está prevenido en las respectivas leyes constitucionales.
- XII. Proponer al gobierno general terna para el nombramiento de Gobernador.
- XIII. Ejercer, en unión de éste, la exclusiva de que hablan los artículos 12 y 22 de la quinta ley constitucional, en el nombramiento de los magistrados y jueces.

- XIV. Formar y dirigir anualmente la estadística de su departamento de gobierno general, con las observaciones que crean conveniente al bien y progresos del departamento.

Artículo 15. Restricciones de los Gobernadores y juntas departamentales:

- I. Ni con el título de árbitros, ni con cualquier otro, podrán imponer contribuciones, sino en los términos que expresa esta ley, ni destinarlas a otros objetos que los señalados por la misma.
- II. No podrán adoptar medida alguna para levantamiento de fuerza armada, sino en el caso que expresamente estén facultados por las leyes para este objeto, o en el de que se les ordene por el Gobierno General.
- III. No podrán usar de otras facultades que las que les señala esta ley, siendo la contravención a esta parte del artículo y las dos anteriores caso de la más estrecha responsabilidad.
- IV. No podrán los individuos de las juntas departamentales renunciar sus encargos, sino con causa legal, calificada por la misma junta, de acuerdo con el Gobernador.

Artículo 16. En cada cabecera de distrito habrá un prefecto nombrado por el Gobernador, y confirmado por el Gobierno General: durará cuatro años, y podrá ser reelecto.

Artículo 17. Para ser prefecto, se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.
- II. Natural o vecino del departamento.
- III. Mayor de treinta años.
- IV. Poseer un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos mil pesos anuales.

Artículo 18. Toca a los prefectos:

- I. Cuidar en su distrito del orden y tranquilidad pública, con entera sujeción al Gobernador.
- II. Cumplir y hacer cumplir las órdenes del gobierno particular del departamento.
- III. Velar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos, y en general, sobre todo lo concerniente al ramo de policía.

Artículo 19. En cada cabecera de partido habrá un subprefecto, nombrado por el prefecto y aprobado por el Gobernador: durará dos años, y podrá ser reelecto.

Artículo 20. Para ser subprefecto se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.
- II. Vecino de la cabecera de partido.
- III. Mayor de veinticinco años.
- IV. Poseer un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos quinientos pesos anuales.

Artículo 21. Las funciones de subprefecto en el partido, son las mismas que las del prefecto en el distrito, con sujeción a éste, y por su medio, al Gobernador.

Artículo 22. Habrá Ayuntamientos en las capitales de departamento, en los lugares en que los había el año de 1808, en los puertos cuya población llegue a cuatro mil almas, y en los pueblos que tengan ocho mil. En los que no haya esa población, habrá jueces de paz, encargados también de la policía, en el número que designen las juntas departamentales, de acuerdo con los Gobernadores respectivos.

Artículo 23. Los Ayuntamientos se elegirán popularmente en los términos que arreglará una ley. El número de alcaldes, regidores y síndicos, se fijará por las juntas departamentales respectivas, de acuerdo con el Gobernador, sin que puedan exceder: los primeros, de seis; los segundos de doce; y los últimos de dos.

Artículo 24. Para ser individuo del Ayuntamiento se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.
- II. Vecino del mismo pueblo.
- III. Mayor de veinticinco años.
- IV. Tener un capital, físico o moral, que le produzca por lo menos quinientos pesos anuales.

Artículo 25. Estará a cargo de los Ayuntamientos: la policía de salubridad y comodidad, cuidar de las cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia, que no sean de fundación particular, de las escuelas de primera enseñanza que se paguen de los fondos del común, de la construcción y reparación de puentes, calzadas y caminos, y de la recaudación e inversión de los propios y arbitrios, promover el adelantamiento de la agricultura, industria y comercio, y auxiliar a los alcaldes en la conservación de la tranquilidad y el orden público en su vecindario, todo con absoluta sujeción a las leyes y reglamentos.

Artículo 26. Estará a cargo de los alcaldes: ejercer en sus pueblos el oficio de conciliadores, determinar en los juicios verbales, dictar, en los asuntos contenciosos, las providencias urgentísimas que no den lugar a ocurrir al juez de primera instancia, instruir en el mismo caso las primeras diligencias en las causas criminales, practicar las que les encarguen los tribunales o jueces respectivos, y velar sobre la tranquilidad y el orden público, con sujeción en esta parte a los subprefectos, y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

Artículo 27. Los jueces de paz encargados también de la policía, serán propuestos por el subprefecto, nombrados por el prefecto, y aprobados por el Gobernador: durarán un año, y podrán ser reelectos.

Artículo 28. Para ser juez de paz, se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos.
- II. Vecino del pueblo.
- III. Ser mayor de veinticinco años

Artículo 29. Estos jueces ejercerán, en sus pueblos, las mismas facultades que quedan detalladas para los alcaldes y las designadas para los Ayuntamientos, con sujeción en ésta a los subprefectos, y por su medio a las autoridades superiores respectivas.

En los lugares que no lleguen a mil almas, las funciones de los jueces de paz se reducirán a cuidar de la tranquilidad pública y de la policía, y a practicar las diligencias, así en lo civil como en lo criminal, que por su urgencia no den lugar a ocurrir a las autoridades respectivas más inmediatas.

Artículo 30. Los cargos de subprefectos, alcaldes, jueces de paz encargados de la policía, regidores y síndicos, son concejiles; no se podrán renunciar sin causa legal, aprobada por el Gobernador, o en caso de reelección.

Artículo 31. Una ley secundaria detallará todo lo conducente al ejercicio de los cargos de prefectos, subprefectos, jueces de paz, alcaldes, regidores y síndicos, el modo de suplir sus faltas, la indemnización que se dará a los Gobernadores, miembros de las juntas departamentales y prefectos, y las exenciones de que gozarán los demás.

SÉPTIMA

Variaciones de las leyes constitucionales

Artículo 1. En seis años, contados desde la publicación de esta Constitución, no se podrá hacer alteración en ninguno de sus artículos.

Artículo 2. En las variaciones que pasado ese periodo se intenten hacer en ellos, se observarán indispensablemente los requisitos prevenidos en el artículo 12, párrafo 1º de la segunda ley constitucional, en el artículo 26, párrafo 1º y 3º, en los 28, 29 y 38 de la tercera ley constitucional, y en el 17, párrafo 2º de la cuarta.

Artículo 3. En las iniciativas de variación, lo mismo que en las de todas las otras leyes, puede la Cámara de Diputados no sólo alterar la redacción, sino aún añadir y modificar, para darle perfección al proyecto.

Artículo 4. Los proyectos de variación, que estuvieren en el caso del artículo 38 de la tercera ley constitucional, se sujetarán a lo que él previene.

Artículo 5. Sólo al Congreso General toca resolver las dudas de artículos constitucionales.

Artículo 6. Todo funcionario público, al tomar posesión, prestará juramento de guardar y hacer guardar, según le corresponda, las leyes constitucionales, y será responsable por las infracciones que cometa o no impida.

Artículos Transitorios

Artículo 1. Al día siguiente al que señalará la convocatoria para la elección de diputados, se verificará la de las juntas departamentales, calificando estas elecciones

donde no haya junta saliente, el Ayuntamiento de la capital con sujeción a lo que resolviera el Senado.

Artículo 2. El Congreso prefijará los días en que hayan de verificarse los actos electorales de que hablan el artículo 8º de la tercera ley constitucional, y el 2º de la cuarta: el Gobierno destinará el día en que se hayan de ejecutar las de que hablan los párrafos 1º y 2º, artículo 3º de la segunda ley constitucional.

Artículo 3. Una comisión de diecinueve representantes, nombrados por el Congreso, a pluralidad de votos, desempeñará en esta vez las funciones electorales que debería desempeñar la sola Cámara de Diputados, por el párrafo 6º, artículo 3º de la segunda ley constitucional, y 1º del artículo 8º de la tercera; y las que correspondían sólo al Senado por la cuarta ley, y artículos 5º, 10, 11 y 14 de la quinta ley constitucional.

Artículo 4. Todo el Congreso desempeñará las funciones electorales que, por el párrafo 6º, artículo 3º de la segunda ley constitucional, corresponden a sólo el Senado; las que corresponden al Supremo Poder Conservador, por los párrafos 3º y 4º, artículo 8º de la tercera ley, y las que correspondan a la sola Cámara de Diputados en el artículo 2º de la cuarta, y en los artículos 5º, 10, 11 y 14 de la quinta ley constitucional.

Artículo 5. El nombramiento, de que habla el párrafo 12, artículo 12 de la segunda ley constitucional, lo hará esta vez el Supremo Poder Conservador, dentro del mes primero de su instalación, y en el mismo día de ésta verificará la elección de Presidente y secretario, que prescribe el artículo 20 de la segunda ley constitucional.

Artículo 6. El primer Congreso Constitucional abrirá sus sesiones el día que señalará la convocatoria, y terminará el primer periodo de ellas en 30 de junio de 1837.

Artículo 7. En la organización de los tribunales superiores de los departamentos, se respetará por esta primera vez la propiedad de los actuales magistrados, en los términos que prevendrá una ley.

Esta misma determinará el modo con que se han de elegir, sujetándose, en cuanto fuere posible, a las prevenciones constitucionales.

Artículo 8. Los periodos de duración que prefijan las leyes constitucionales a todos los funcionarios que van a ser electos con arreglo a las presentes prevenciones, comenzarán a contarse desde el 1º de enero de 1837, sea cual fuere el día en que comiencen a ejercer los nombrados. México, veintinueve de diciembre de mil ochocientos treinta y seis.

Atenógenes Castillero, representante por el Departamento de Puebla, Presidente. *Tirso Vejo*, representante por el departamento de San Luis Potosí, Vicepresidente. Por el departamento de California, *José Antonio Carrillo*. *José Mariano Monterde*. Por el departamento de Chiapas, *Ignacio Loperena*. Por el departamento de Chihuahua, *José Antonio Arce*. Por los departamentos de Coahuila y Texas, *Víctor Blanco*. Por el departamento de Durango, *Pedro Ahumada*. *Guadalupe Victoria*. Por el departamento de Guanajuato, *Mariano Chico*. *Manuel de Cortázar*. *José Francisco Nájera*. *Luis de Portugal*. *Ángel María Salgado*. Por el departamento de México, *Basilio Arriaga*. *Ángel Besares*. *Juán Manuel de Elizalde*. *José María Guerrero*. *José Francisco Monter* y *Otamendi*. *José Ignacio Ormaechea*.

Francisco Patiño y Domínguez. Agustín Pérez de Lebrija. Jerónimo Villamil. Rafael de Irazábal. Por el departamento de Michoacán, *José Ignacio de Anzorena. Antonio Cumplido. Isidro Huarte. José R. Malo. Teodoro Mendoza. Luis Gonzaga Movellán. Francisco Manuel González de Tagle.* Por el departamento de Oaxaca, *Carlos María de Bustamante. Demetrio del Castillo. Manuel Miranda. Manuel Régules. José Francisco Irigoyen.* Por el departamento de Puebla, *Rafael Adorno. José Rafael Barruecos. José González y Ojeda. Manuel M. Gorozpe. Antonio Montoya. José María Santelices. Miguel Valentín.* Por el departamento de Querétaro, *Mariano Oyarzabal. Ángel García Quintanar. Felipe Sierra.* Por el departamento de San Luis Potosí, *Mariano Esparza. Mariano Medina y Madrid. Antonio Eduardo Valdés.* Por el departamento de Sonora, *Francisco G. Conde.* Por el departamento de Tabasco, *Juan de Dios Salazar.* Por el departamento de Tamaulipas, *Juan Martín de la Garza Flores. José Antonio Quintero.* Por el departamento de Veracruz, *José María Becerra. José Manuel Moreno Cora.* Por el departamento de Jalisco, *Pedro Barajas. José María Bravo. José María Echauri. Antonio Pacheco Leal. José Cirilo Gómez y Anaya. José Miguel Pacheco. Joaquín Parrés.* Por el departamento de Yucatán, *Wenceslao Alpuche. Néstor Escudero. Gerónimo López de Llergo. Tomás Requena.* Por el departamento de Zacatecas, *José María del Castillo. Casiano G. Veyna. Pedro María Ramírez. Julián Rivero. José C. Romo. Rafael de Montalvo,* representante por el Estado de Yucatán, Secretario. *Manuel Larráinzar,* representante por el departamento de Chiapas, Secretario. *Bernardo Guimbarda,* representante del Estado de Nuevo León, Secretario. *Luis Morales e Ibáñez de Corbera,* representante por el Estado de Oaxaca, Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule, y se le dé debido cumplimiento. Palacio de Gobierno Nacional en México, a 30 de diciembre de 1836. *José Justo Corro.*
A don *José María Ortiz Monasterio.*

4.2. EXTRACT OF CONSTITUTIONAL LAWS

Constitution of 1836.

FIRST RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEXICAN PEOPLE OF THE REPUBLIC

Article 1. Mexican nationality.

Article 2. Rights of Mexicans.

Article 3. Obligations of the Mexicans.

Article 4. Privileges of the Mexican civil order.

Article 5. Ways in which Mexican nationality is lost.

Article 6. Possibility of rehabilitation of Mexican nationality through Congress.

Article 7. Quality of citizenship of the Mexican republic.

Article 8. Rights of Mexican citizens.

Article 9. Obligations of Mexican citizens.

Article 10. Suspension of individual rights of Mexican citizens.

Article 11. Total loss of the rights of Mexican citizens.

Article 12. Rights of aliens introduced in Mexico legally.

Article 13. Ban on foreigners to purchase real estate.

Article 14. Acquisition of the neighborhood.

Article 15. Loss of the neighborhood.

SECOND ORGANIZATION OF A CONSERVATIVE SUPREME POWER

Article 1. Composition and organization of the Supreme Conservative Power.

Article 2. Legal date of the draw to refer to the individual whose tenure of office has ended in the Supreme Conservative Power.

Article 3. Conduct of elections biennial ordinary and extraordinary.

Article 4. Re-election in office.

- Article 5.* Choice of three alternates with residence in the capital.
- Article 6.* The order in which alternates owners hold office.
- Article 7.* Replacement of the temporary absence or during elections.
- Article 8.* Preference in the choice of the position within the Supreme Conservative Power to any other except the office of presidency.
- Article 9.* Oath of individuals Supreme Conservative Power.
- Article 10.* Salary of members of the Supreme Conservative Power.
- Article 11.* Requirements to join the Supreme Conservative Power.
- Article 12.* Powers of Supreme Conservative Power.
- Article 13.* Quorum required for decisions of the Supreme Conservative Power.
- Article 14.* Invalidity of statements and resolutions adopted individually by the Supreme Conservative Power.
- Article 15.* Mandatory statements and measures taken under the statutory role of the Supreme Conservative Power.
- Article 16.* Prohibition of the members of the Supreme Conservative Power in time of your order to be elected as President of the Republic or any other employment within the government of the nation.
- Article 17.* Responsibility of the Supreme Conservative Power before God and the public.
- Article 18.* Crimes of members of the Supreme Conservative Power.
- Article 19.* Physical place of residence of Supreme Conservative Power.
- Article 20.* Election of Secretary and President of the Supreme Conservative Power.
- Article 21.* Receipt of submissions to the Supreme Conservative Power by the secretary.
- Article 22.* Secrecy of voting and discussion of the Supreme Conservative Power.
- Article 23.* Lack of regular schedule of meetings of the Supreme Conservative Power.

THIRD

THE LEGISLATIVE BRANCH OF ITS MEMBERS AND SAY HOW ABOUT THE TRAINING OF LAW

- Article 1.* Exercise of Legislative Power.

Chamber of Deputies

- Article 2.* Number of population as the basis for the election of Deputies.
- Article 3.* Periodic renewal of the chamber and procedure.
- Article 4.* Election time and assumes office of Deputies.
- Article 5.* Certification of elections of Deputies by the Senate.
- Article 6.* Eligibility requirements for the office of Senator.

Article 7. Prohibition of public officials for determining tenure as Senator.

Chamber of Senators

Article 8. Composition of the Chamber of Senators.

Article 9. Periodic renewal of the Senate.

Article 10. Verification of election to the Chamber of Deputies, the Supreme Conservative Power and departmental boards.

Article 11. Vacancies in the Senate.

Article 12. Eligibility requirements for the office of Senator.

Article 13. Prohibition of certain positions to be elected Senators.

Sessions

Article 14. Legal date of commencement of sessions of the General Congress.

Article 15. Sessions daily basis.

Article 16. Sessions specifications listed in the Regulations of the General Congress.

Article 17. Quorum for the vote of a law or decree.

Article 18. Issuance of Order for the closure of the first session.

Article 19. Issuance of Order for the extension of the first session.

Article 20. Power of the President to summon Special Sessions.

Article 21. Ability to address issues of great importance without contravening the provisions of Articles 14, 17 and 20.

Article 22. Continued meetings of the Senate in the case of review of pending legislation.

Article 23. Responsibility of the Permanent Delegation to cite Congress to continue the sessions in case of verifying the discontinuance referred to in Article 12, paragraph six.

Article 24. President's power to increase the number of deputies in the Chamber.

The formation of laws

Article 25. Top of lawmaking in the chamber of Representatives.

Article 26. Bodies of government on the right to initiate laws.

Article 27. Faculty Executive and the High Court of Justice in relation to the initiative of laws.

Article 28. Opinion of the Supreme Court of the initiatives taken by the Executive or the Members.

Article 29. Obligation to consider the initiatives of the executive and judicial powers and the appointment and role of the Committee on Petitions.

Article 30. Right to make and manage projects together legislative bodies with the ability to raise them to lead.

Article 31. Probation Project by Members and review by the Senate.

Article 32. Follow-up formula approved, disapproved, the review of bills by the Senate.

Section 33. A majority vote in approving the bill by the Senate on second review.

Article 34. Sanction of the President to bills passed by the House concerned.

Article 35. Right to veto bills of the President of the Republic.

Article 36. Power of the President of the Republic to apply sanction to the bill as provisions of Article 33.

Article 37. Failure to apply the sanction by the President for the second time if reviewed and approved by both Chambers with the most votes.

Article 38. Failure to submit a bill rejected as laid down in Articles 33, 36, and 37 until the renewal of half of the Chamber of Deputies.

Article 39. Publication of the law by the President.

Article 40. No need for publication of case law be directed to individuals or corporations.

Article 41. Legal formula of the publication of laws and decrees.

Article 42. Entry into force of the laws or decrees from publication.

Article 43. Matter of law or decree of the resolutions of the General Congress.

Article 44. Exclusive powers of the General Congress.

Article 45. General Prohibitions Congress.

Article 46. Invalidation of a law or decree in contravention of Article 45.

Article 47. Common impeachment of the President of the Republic, Senators, judges of the Supreme Court and Martial, Office Secretaries, Directors and Governors of the Departments during the exercise of their duties to the House of Representatives.

Article 48. Penalty of dismissal or disqualification from office for committing crimes officers President, Senators, judges of the Supreme Court and Martial, Office Secretaries, Directors and Governors of the Departments.

Article 49. Declaration of the respective chamber of the appropriateness or inappropriateness of the charge and the respective provision of the accused to the competent court if found appropriate.

Article 50. Suspension of the defendant's exercise of the positive result by the prosecution.

Article 51. Independent powers of the chamber among them.

Article 52. Exclusive powers of the Chamber of Deputies.

Article 53. Exclusive powers of the Senate.

Article 54. Compensation greater than the Senators in relation to the corresponding to that of the Deputies.

Article 55. Immunity of deputies and senators in relation to the views expressed during the time of your order.

Article 56. Prohibitions of Deputies and Senators.

Of the Permanent Deputation

Article 57. Composition and appointment of the Standing Committees.

Article 58. Powers of the Standing Committee.

FOURTH

ORGANIZATION OF THE SUPREME EXECUTIVE POWER

Article 1. Exercise and duration of the executive.

Article 2. Process of electing the President of the Republic.

Article 3. Annulment of proceedings where dates are not made legally established for this purpose.

Article 4. Expedition, publication and communication of the decree declaring the election.

Article 5. Re-election of the President of the Republic.

Article 6. Indispensability of the office of President.

Article 7. Specified day in relation to the distance of elected absent.

Article 8. Government of Prime Minister in case of temporary absence of the President.

Article 9. Legal date of termination of office of President of the Republic.

Article 10. Election procedures in terms of Article 2 in case of death or legal removal of the President of the Republic.

Article 11. Procedure for the appointment of Acting President in any case of vacancy in the office.

Article 12. Oath owner or Acting President under the statutory formula.

Article 13. Votes required by the House of Representatives and Senate for the appointment of new President of the Republic in case of disability or or moral of it.

Article 14. Eligibility requirements for the post of President of the Republic.

Article 15. Prerogatives of the President of the Republic.

Article 16. Privilege Acting President.

Article 17. Powers of the President of the Republic.

Article 18. Prohibitions of the President of the Republic.

Article 19. Nullity of acts inconsistent with the preceding articles.

Article 20. Designated salary compensation of judges.

Governing Council

Article 21. Composition of the Governing Council.

Article 22. Election of Directors.

Article 23. Character of perpetuity of office of the Director.

Article 24. Eligibility requirements for the position of Director.

Article 25. Powers of Directors.

Article 26. Liability of the Directors to the opinions against express law.

Article 27. Existence of Regulations Governing Council.

Ministry

Article 28. Four Ministers existing government affairs.

Article 29. Exclusive designation of Ministers by the President of the Republic.

Article 30. Obligation of the President to resolve any serious issue in Board of four Ministers.

Article 31. Obligation of Ministers.

Article 32. Responsibility of Ministers of the enforcement of his ministry and the acts of the President that authorized by signature.

Article 33. Existence of Regulations for the better dispatch of the Secretariats.

Article 34. Establishment of compensation of ministers through law school.

FIFTH

THE JUDICIARY OF THE MEXICAN REPUBLIC

Article 1. Judicial power by the Supreme Court.

Article 2. Composition of the Supreme Court.

Article 3. Obligation, performance and representation of the judiciary through the bodies that compose it.

Article 4. Requirements to be elected a Supreme Court of Justice.

Article 5. Process of choosing individuals of the Supreme Court.

Article 6. Declaration, issued a declaratory decree and publication of results of the election of individuals to the Supreme Court.

Article 7. Oath of the individual elected.

Article 8. Preferred position of Minister of the Supreme Court of Justice in office of Deputy.

Article 9. Inability to judge individuals on the Supreme Court in civil matters or in criminal cases in violation of the provisions in the second and third constitutional law.

Article 10. Issue of list of nine individuals with the same eligibility requirements for the post of Minister of the Court, to be as alternates.

Article 11. The appointment by the House of Representatives of the individuals elected to the position of deputies in the Supreme Court.

Article 12. Powers of the Supreme Court.

Article 13. Union of the Supreme Court with general officers to establish itself as martial jurisdiction in all matters and causes of military law.

Article 14. Existence of seven ministers in the court-martial.

Article 15. Formation of a commission order determined by the judges of the Supreme Court.

Article 16. Restrictions on the Supreme Court.

Article 17. Existence of laws for the Supreme Court.

Of the Superior Courts of the Departments

Article 18. Existence of a Superior Court in the capital of each department.

Article 19. Equal powers of all courts.

Article 20. Eligibility requirements for the post of Minister in such courts.

Article 21. Oath of the Superior Court Judges and Prosecutors of the courts to take office.

Article 22. Powers of the Courts of the Departments.

Article 23. Restrictions of the Courts and their Ministers.

Article 24. Prohibition of Ministers and Prosecutors of the Tribunals for the exercise of the profession of lawyer or attorney in litigation, legal counsel or arbitrator, or hold any commission in the government.

Minions of Judges of First Instance

Article 25. Office of civil and criminal cases of first instance.

Article 26. Eligibility requirements for the position of Judge of First Instance.

Article 27. Prohibition of trial judges to exercise the profession of lawyers, attorneys in litigation, or arbitrators of law.

Article 28. Limit the Judges of First Instance of attachment to the knowledge of legal matters.

Article 29. Enable Mayors to exercise powers established by law in relation to the Judges of First Instance.

*General warnings on the Administration of
Justice in civil and criminal*

Article 30. Existence of personal privileges of the ecclesiastical and military.

Article 31. Perpetual quality of the members and prosecutors of the Supreme Court.

Article 32. Perpetual nature of the ministers and courts of first instance judges.

Article 33. Salaries of justices and judges appointed by law.

Article 34. Recourse to three instances in cases prefixed by applicable law.

Article 35. Inability of Ministers for failing a single instance.

Article 36. Class action against the judges in case of existence of prevarication bribery, corruption or barratry.

Article 37. Mistrial in a civil ceremony for lack of compliance with the procedure laid down in the respective law.

Article 38. Responsibility of Judges for lack of enforcement of a criminal procedure established in the respective law.

Article 39. Right of litigants to terminate the civil suit or criminal in case of personal injuries by referees statement executed in accordance with established laws.

Article 40. Establishment and procedure of conciliation in the event of civil or criminal litigation on personal injury.

Article 41. Formalities for the issuance of arrest warrant.

Article 42. Use of force in case of resistance or founded fear of leakage.

Article 43. Origin of the arrest warrant.

Article 44. There is enough suspicion for presumption or legal provenance of the arrest.

Article 45. But unable to carry the goods of the prisoner, except in cases of financial responsibility thereof.

Article 46. Restoration of freedom of the prisoner if proven guilty should not be punished by imprisonment under the procedure established by applicable law.

Article 47. Preliminary statement of the accused during the first three days of detention without oath to facts of the trial.

Article 48. Defendant's confession and the allocation of charges for processing.

Article 49. Prohibiting the use of torture for the investigation of any crime.

Article 50. Prohibition of the penalty of confiscation of property.

Article 51. Staff and inconsequential nature of crime and punishment in relation to the impossibility of being purged by anyone other than the accused.

SIXTH

DIVISION OF THE TERRITORY OF THE REPUBLIC GOVERNMENT AND ITS PEOPLE INSIDE

Article 1. Division Into Mexico Departments, districts and parties.

Article 2. Statutory Period for completion by the first Constitutional Congress of the division of Territory by Constitutional Law.

Article 3. Division Into Districts Departments Through the Departmental Board and Their Approval by Congress.

Article 4. Government Departments, and the subjection Their manager of These to the General Government.

Article 5. Appointment, duration and possible re-election of Governors.

Article 6. Eligibility Requirements for the Governorship of Department.

Article 7. Functions of the Governors of Departments.

Article 8. Existence and appointment of a interim governor in case of vacancy of the owner.

Article 9. Departmental Board and Its Existence in every department.

Article 10. Choice of single members of the Departmental Board.

Article 11. Periodic renewal of departmental boards.

Article 12. Qualification of the choices of single members of departmental boards.

Article 13. Eligibility for membership of the Departmental Board.

Article 14. Functions of the Departmental Boards.

Article 15. Restrictions of the Governors and departmental boards.

Article 16. Existence, appointment, confirmation and duration of the prefect figure for each 'Head of District.

Article 17. Eligibility Requirements for the office of Mayor.

Article 18. Functions of the Prefects.

Article 19. Existence, appointment, confirmation and duration of the sub-prefect appears in header of Each Party.

Article 20. Eligibility Requirements for the office of Provincial Governor.

Article 21. Functions of the Provincial Governor.

Article 22. Existence of Municipalities in Departments With A Uncertain number of people.

Article 23. Popular Election of the City governed by law for this purpose Established, composition and membership STI Established by the Governor of the Department.

Article 24. Eligibility Requirements for Individual City Council.

Article 25. Functions of the Municipalities.

Article 26. Functions of Mayors.

Article 27. Functions of the Justices of the Peace.

Article 28. Eligibility Requirements for the office of Justice of the Peace.

Article 29. Powers of Justices of the Peace.

Article 30. Functions of the sub-prefects.

Article 31. Existence of Secondary Act prefects, sub-prefects, Justices of the Peace, Mayors, Aldermen and Trustees

SEVENTH

CONSTITUTIONAL LAW CHANGES

Article 1. Unable to make changes for six years to the present Constitution.

Article 2. Prevented compliance with the requirements for making changes to this Constitution past the term referred to in section one of section seven.

Article 3. Possibility of alteration and modification of projects by the Chamber of Deputies in the changes of this Constitution for the perfection of it.

Article 4. Securing the changes to Article 38 of the Third Constitutional Act should update.

Article 5. Exclusive power of Congress to resolve the issues on the articles of this Constitution.

Article 6. Oath of public officials to protect and uphold this Constitution.

4.3. CONSTITUTIONAL LAWS

México, January 1st, 1837
226 articles

INDEX

PREAMBLE

FIRST.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MEXICANS
AND INHABITANTS OF THE REPUBLIC

SECOND.

ORGANIZATION OF A CONSERVATIVE SUPREME POWER

THIRD.

OF THE LEGISLATIVE POWER, ITS MEMBERS AND
ABOUT THE FORMATION OF THE LAWS

Chamber of Deputies

Chamber of Senators

Of the Sessions

Of the formation of the laws

Faculties of the chambers and prerogatives of its members

Of the Permanent Deputation

FOURTH.

ORGANIZATION OF THE SUPREME EXECUTIVE POWER
Of the Government Council

Of the Ministry

FIFTH

Of the Judiciary of the Mexican Republic

Of the Superior Tribunals of the Departments

Of the first instance subordinate judges

General preventions on the administration of justice in the civil and the criminal matters

SIXTH

Division of the territory of the Republic and internal government of its towns

SEVENTH

Variations of the constitutional laws

TRANSITORY ARTICLES

The Interim President of the Mexican Republic, to her inhabitants, all know:

That the Sovereign National Congress has decreed the following:

CONSTITUTIONAL LAWS

In the name of God All mighty, one and triune, for whom the men are destined to form societies and preserve those they form; the representatives of the Mexican Nation, delegates for her to build her in the manner that they understand to be the most convenient to their happiness, together for that purpose, in the General Congress, have come to decree and they decree the following:

FIRST

Rights and obligations of the Mexicans and inhabitants of the Republic

Article 1. Are Mexicans:

- I. Those that were born in the territory of the Republic, of Mexican father by birth or by naturalization.
- II. Those that were born in a foreign country of Mexican father by birth, if at the moment of becoming responsible for themselves, were already living in the Republic or let know that they have resolved to do it, and they do it within a year after giving the notice.

- III. Those that were born in foreign territory of Mexican father by naturalization that have not lost this quality, if they practice what is prevented in the previous paragraph.
- IV. Those that were born in the territory of the Republic of foreign father, who have remained in it until the time to be responsible for himself, and given the notice at the moment of coming to that time.
- V. Those that were not born in the territory, who were residing in the Republic when this declared its independence, have obtained naturalization letter, with the requirements that the Law prescribe.

Article 2. They are rights of the Mexican:

- I. Not to be prisoner but upon command of a competent judge given in writing and signed, nor apprehended but upon disposition of the authorities to whom it corresponds according to the Law. Except the case of in flagrant crime, in which anyone might be apprehended, and anyone might apprehend him, presenting him immediately to his judge or to another public authority.
- II. Not to be detained for more than three days by any political authority, without being presented at the end of them, with the information for his detention, to the judiciary authority, and neither by the latter for more than ten days, without issuing the motivated writ of prison. Both authorities shall be responsible of the abuse that they do of the referred periods of time.
- III. Not to be deprived of his property, or the free use and exploitation of it in all or in part. When a general and public utility purpose demands the opposite, the deprivation might take place, if such circumstance were qualified by the president and his four ministries in the capital, by the government and the departmental board in the departments, and the owner, whether it is an ecclesiastical corporation or secular, particular individual, previously indemnified upon valuation of two qualified engineers, appointed one of them by him, and according to the laws the third party in discord, in case there is one.

Such qualification might be claimed by the interested before the Supreme Court of Justice in the capital, and in the departments before the respective superior tribunal.

The claim shall suspend the execution until the sentence.

- IV. Not to be searched in their homes and papers, if it is not in the cases with the requirements literally prevented in the laws.
- V. Not to be judged or sentenced by commission or other tribunals that those established in virtue of the Constitution, neither according to other laws than those dictated previously to the fact that is being judged.

- VI. Not to be prevented from the translation of their persons and good to another country, when is convenient to him, as long as he does not leave uncovered in the Republic the responsibility of any gender, and satisfies, by the extraction of the goods, the quota established by the laws.
- VII. To be able to print and circulate, without previous necessity of censure, his political ideas. Because of the abuses of this right, anyone who is guilty shall be punished in them, and so in this as in everything else, these abuses are in the class of common crimes; but regarding the penalties, the judges might not extend of those that the press laws impose, meanwhile others are not dictated in this matter.

Article 3. They are obligations of the Mexicans:

- I. To profess the religion of his motherland, to observe the Constitution and the laws, to obey the authorities.
- II. To cooperate to the expenses of the State with the attributions that the laws establish and comprise him.
- III. To defend the motherland and cooperate to the support and reestablishment of the public order, when the Law and the authorities call him in her name.

Article 4. The Mexicans shall enjoy of all the other civil rights, and shall have all the other obligations of the same order that establishes the laws.

Article 5. The quality of Mexican is lost:

- I. For being absent of the Mexican territory for more than two years, without occurring during this time for the passport of the government.
- II. For staying in a foreign country for more than two years after ending the term of the license, without having occurred for the extension.
- III. For enrolling in foreign flags.
- IV. For accepting employments from another government.
- V. For accepting decorations from another government, without permission of the Mexican one.
- VI. For the crimes of high treason against the independence of the motherland, of conspiring against the life of the supreme magistrate of the Nation, of arsonist, poisoning, treacherous killer and any other crimes in which the laws impose this penalty.

Article 6. That who loses the quality of Mexican might order rehabilitation from the Congress, in the cases and with the requirements that the laws establish.

Article 7. They are citizens of the Mexican Republic:

- I. All those comprehended in the five first paragraphs of article 1 that have an annual rent of no less than one hundred pesos, from fixed capital or furniture, or of industry or personal, honest work useful for the society.
- II. Those who have obtained special citizenship letter from the General Congress, with the requirement that the Law establishes.

Article 8. They are rights of the Mexican citizen, besides those detailed in the article 2 and indicated in article 4:

- I. To vote for all the positions of direct popular election.
- II. To be voted for the same positions, provided that the qualities demanded by laws in each case are presented in his person.

Article 9. They are particular obligations of the Mexican citizen:

- I. To affiliate in the register of the municipality.
- II. To concur to the popular elections, provided that a physical or moral cause does not prevent him from it.
- III. To carry out the council and popular positions for which he were appointed, if he does not have a legal exception or sufficient impediment, qualified by the authority to which it corresponds according to the Law.

Article 10. The particular rights of the citizen are suspended:

- I. During the minority.
- II. For the state of domestic servant.
- III. For criminal cause, since the date of the writ of prison until the pronouncement of the absolutory sentence. If the latter were absolutory in its totality the interested one shall be considered in the enjoyment of his rights, as if there were not such writ of prison, in such manner that any class of harm entails him.
- IV. For not knowing how to write or read since the year 1846 and forward.

Article 11. The rights of citizen are totally lost:

- I. In the cases in which the quality of Mexican is lost.
- II. For judicial sentence that imposes dishonoring penalty.
- III. For qualified fraudulent bankruptcy.
- IV. For being qualified debtor in the administration and management of any of the public funds.
- V. For being idle, bad entertained, or not having industry or honest way of living.
- VI. For being disabled for the performance of the citizen obligations because of the profession of the religious state.

Article 12. The aliens, legally introduced in the Republic, enjoy of all the natural rights, and of those that are considered in the treaties as well, for the subjects of their respective nations; and are obliged to respect the religion, and to abide to the laws of the country in the cases that might correspond them.

Article 13. The alien might not acquire in the Republic real state, if he has not naturalized in it, married to a Mexican woman and arrange everything else that the respective Law of acquisitions prescribes. Neither might he move to another country his property, but with the requirements and paying the fee that the laws establish. The acquisitions of the colonizers shall abide to the special rules of colonization.

Article 14. The neighborhood is won for continued residence of two years in any town expressing during those years to the municipal authority the resolution of settling, and establishing Chamber, treat or profitable industry.

Article 15. The neighborhood is lost for moving to another point, raising the Chamber, treat or activity, and settling there with it.

SECOND

Organization of a Supreme Conservative Power

Article 1. There shall be a Supreme Conservative Power which shall be lied in five individuals, of which on shall be renewed every two years, going out in the first, second, third and fourth time, that who luck designated, without entering in the draw that or those who have been appointed to replace.

From the fifth time on the most antique shall go out.

Article 2. The draw of which the previous article talks about, shall be done by the senate on August 1st immediate previous to the renewal, and, if it were in recess, the Government Council shall do it.

Article 3. Both the ordinary biennial elections as well as the ulterior extraordinary, shall be done in the following manner:

- I. Each one of the departmental boards shall elect the number of individuals that shall be appointed in that time.
- II. These elections shall be done always for all the boards in the same day: the ordinary biennials, in October 1st of the immediate previous year to the renewal; the extraordinary ones, for the first total election of the five and to replace for vacancy, on the day that the Supreme Executive Power shall prefix them.
- III. The extraordinary election for vacancy shall only take place when this occurs more than six months before the periodic renewal; in contrary case, it shall be differed for October 1st, in which the gaps shall be filled up.
- IV. Once verified the election upon absolute plurality of votes, the boards shall send, in closed and certified document, through the following immediate mail, the act of election to the Secretary of the Chamber of Deputies.
- V. The omission of the election on the prefixed day and the remittance of the act of it that the previous paragraph prescribes, shall be case of responsibility for the departmental boards, according to what the Law of the matter prevents.
- VI. On November 15th previous immediate to the biennial ordinary renewal, and forty days past of any extraordinary election, the Chamber of Dep-

uties shall open the documents, and next they shall form a list of those who have been appointed and without going out of the list, elect, upon absolute plurality of votes, three individuals for each gap.

- VII. On the next day of the election the list or lists of three individuals, the Chamber of Deputies shall pass them to the Chamber of Senator along with the file of the elections, and the latter, in the same day shall choose an individual of each group of three, publish the election, and announce it to the Supreme Executive Power to let know about their appointment to the elected so they present to exercise.

Article 4. The individual who finishes might be reelected; but in such case, he might or not accept the entrustment.

Article 5. Three substitutes that reside in the capital shall be chosen, who have the same circumstances that this Law demands for the proprietors, and in the same manner that the latter are chose; renewing in their totality each biennial ordinary election.

Article 6. They shall enter to take the place of the proprietors that are missing on the order that they were chosen; and while they are functioning, they shall enjoy the same salary and the same prerogatives than such proprietors.

Article 7. They shall only substitute in temporary absences or while the election for a vacancy takes place.

Article 8. The election for this entrustment shall be preferential to any other that is not for the presidency of the Republic, and the position cannot be resigned, before or after the possession, but because of physical disability, qualified by the General Congress.

Article 9. The individuals of the Supreme Conservative Power, shall present oath before the General Congress, with both Chambers together, under the following formula: *Do you swear to observe and make to observe the Constitution of the Republic holding the constitutional equilibrium among the social powers, preserving or reestablishing the constitutional order in the cases where it were disturbed, making use of the power and the means that the Constitution puts in your hands for this purpose? After the affirmative answer of the giver, the Secretary shall add the ordinary formula: If so you did, God awards you, if not, shall He demand it.* When the Congress was not reunited, they might present oath, in substitution, in the heart of their corporation; but they shall repeat the oath after the sessions of the legislative corps are open.

Article 10. Each member of such Supreme Power shall enjoy annually, during their entrustment, six thousand pesos of salary; their treatment shall be that of Excellency.

Article 11. To be member of the Supreme Conservative Power it is required:

- I. To be Mexican by birth and to be in the current exercise of the rights of the citizen.
- II. To be at the moment of the election forty years old, and a capital (physical or moral) that produces him at least three thousand pesos of annual rent.

- III. To have carried out any of the following entrustments: president or vice president of the Republic, Senator, Deputy, Secretary of the Dispatch, magistrate of the Supreme Court of Justice.

Article 12. The attributions of this Supreme Power are the following:

- I. To declare the nullity of a Law or decree, within two month after its sanction, when they are contrary to an express article of the Constitution, and such declaration is demanded, or the Supreme Executive Power or the high Court of Justice or a part of the members of the Legislative Power at least eighteen sign in representation.
- II. To declare excited by the Legislative Power or by the Supreme Court of Justice, the nullity of the acts of the Executive Power, when they are contrary to the Constitution or the laws, making this declaration within four months counting since those acts are communicated to the respective authorities.
- III. To declare in the same terms the nullity of the Supreme Court of Justice acts, excited by any of the other two powers, and only in the case of usurpation of faculties.

If the declaration were affirmative, the information shall be sent to the respective court so that without need of another requirement, the formation of the lawsuit proceeds as well as the sentence that shall be declared.

- IV. To declare upon excitation of the General Congress, the physical or moral disability of the President of the Republic, when it arouses.
- V. To suspend the high Court of Justice, excited by any of the other two supreme powers, when it fails to recognize any of them, or attempts to disturb the public order.
- VI. To suspend for up to two months (at most) the sessions of the General Congress, or to decide to call up to them to the substitutes, for an equal period of time, when it is in the best interest of the public welfare, and the Supreme Executive Powers excites the Conservative Power for this purpose.
- VII. To constitutionally reestablish any of the previously mention powers, or the three of them when they have been dissolved revolutionarily.
- VIII. To declare, excited by the Legislative Power previous initiative of any of the other two powers, which is the will of the Nation, in any extraordinary case that is convenient to know it.
- IX. To declare, excited by the majority of the departmental boards, when the President of the Republic is in the case of renewing the whole ministry for the sake of the Nation.

- X. To grant or deny the sanction to the reforms of the Constitution that the Congress agreed, previous initiatives, and in the manner and form that the respective constitutional Law establishes.
- XI. To qualify the elections of the senators.
- XII. To appoint, the 1st day of each year, eighteen attorneys among those who do not exercise any jurisdiction, to judge the ministries of the high Court of Justice, and of the Martial Court, in the case and previous constitutional requirements for those claims.

Article 13. For any resolution of this Supreme Power it is required indispensably the absolute agreement of at least three of its members.

Article 14. Every declaration done by the Supreme Conservative Power, every resolution it takes, not being any of the specifications in the article 12, and even being of those, if the Power takes it for *yes* and without the excitement that respectively is demanded for each one in the mentioned article, is null and of any value.

Article 15. Every declaration and disposition of such Supreme Conservative Power, given according to the previous dispositions, and quoting the respective Law, shall be obeyed at the moment and without replica of all the persons to whom it is directed and to whom the execution corresponds.

The formal disobedience shall be had for high treason crime.

Article 16. The members of this Supreme Power, during the time of their entrustment, and within the immediate following years, cannot be chosen for the presidency of the Republic, or obtain an employment that does not corresponds them by rigorous scale, or be appointed for any commission, neither solicit for any class of grace for himself or another.

Neither can they be elected deputies in the time that the article 42 appoints of the Law of last November 30th.

Article 17. This Supreme Power is not responsible for its operation but to God and to the public opinion, and its individuals in no case might be judged or reprimanded for their opinions.

Article 18. If any of them shall commit any crime, the accusation shall be done before the General Congress, together both Chambers, who shall qualify upon absolute plurality of votes if they shall form the lawsuit, and if they do, they shall follow it and the Supreme Court of Justice shall end it, who shall in turn keep track as well of the civil lawsuits in which they result sued.

Article 19. This supreme power shall ordinarily reside in the capital; but in case that the public security or that of the supreme power itself demands its translation to any other point of the Republic, he might decree it or verify it for limited time.

Article 20. On the 1st day of each biennium the Supreme Conservative Power shall elect from among his individuals, a president and a Secretary, being able to reelect those who finish their entrustment.

Article 21. All the communications of the other powers shall be directed to the Secretary.

Article 22. All the discussions and elections of this body shall be secret, the elections being made through black and white balls.

Article 23. Even though a corresponding hall shall be appointed for them in the National Palace, they shall not have days or hours, neither precise place for their sessions, and the president shall notify them, when it is necessary by means of citatory notices to his mate, in which he shall specify such circumstances.

THIRD

Of the Legislative Power, its members and about the relation to the formation of the Laws

Article 1. The exercise of the Legislative Power shall lay in the General Congress of the Nation, which shall be formed of two Chambers.

Chamber of Deputies

Article 2. The base for the election of the deputies is the population. One Deputy shall be elected for each one hundred and fifty thousand inhabitants, and for each fraction of eighty thousand. The departments that do not have this number shall elect, nevertheless, a Deputy. An equal number of substitutes shall be elected.

Article 3. This Chamber shall be renewed by half every two years: the total number of departments shall be divided in two sections proportionally equal in population: the first biennium one section shall appoint its deputies, and the following biennium the other section, and so on alternating.

Article 4. The elections of the deputies shall be done in the departments on the first Sunday of October of the previous year to the renewal, and the newly elected shall start to function in January of the following year.

A particular Law shall establish the days, manner and form of these elections, of the number and the qualities of the electors.

Article 5. The elections of the deputies shall be qualified by the Senate, reducing, this Chamber, its evaluation to if the qualities that the Law demands concur in the individual, and if in the electoral boards there was a nullity that might vice essentially the election.

In case of nullity in the electoral body, the defect shall be sent to be rectified; in the case of nullity in the elected ones, the election shall be done again, and in the case of nullity in the proprietors and not in the substitute, the latter shall come in for the first.

In every case of perpetual absence of the proprietor the substitute shall be called up.

Article 6. To be Deputy it is required:

- I. To be Mexican by birth or by naturalization of any part of the America that in 1810 depended on the Spain, and is independent, if he was in the Republic at the time of his emancipation.
- II. To be Mexican citizen in current exercise of his rights, natural or neighbor of the department that elects him.
- III. To be thirty years old at the moment of the election.
- IV. To have a capital (physical or moral) that produces to the individual at least five hundred pesos annually.

Article 7. They cannot be elected deputies: the President of the Republic and the members of the Supreme Conservative Power, while they are, and a year after; the individuals of the Supreme Court of Justice and of the Martial; the secretaries of the dispatch and the officials of its Secretary; the general employees of Treasury; the governors of the departments, while they are, and six months after; the very Reverend Archbishops and bishops, governors of miters, general curates and vicars, the judges, commissioner and general commanders for the departments to where their jurisdiction, entrustment or ministry extends.

Chamber of Senators

Article 8. This shall be formed of twenty four senators appointed in the following manner:

In each election case, the Chamber of Deputies, the government as Board of ministries and the Supreme Court of Justice shall elect, each one upon absolute plurality of votes, a number of individuals equal to that of what the new senators shall be.

The three lists that result shall be authorized by the respective secretaries and sent to the departmental boards.

Each of the latter shall elect, precisely among those comprehended in the lists, the number of Senators that shall be appointed, and shall send the specific list of its election to the Supreme Conservative Power.

The latter shall examine them, qualify the elections, abiding to what the article 5 describes, and shall declare Senators those who have reunited the majority of votes from the boards, in the order of that majority, and chance shall decide among the equal numbers.

Article 9. The Senate shall be renewed by thirds every two years, going out, at the end of the first biennium, the last eight of the list, at the end of the second, the middle eight, and from the third year on the eldest eight.

Article 10. The elections that the Chamber of Deputies, the government and the Supreme Court of Justice shall supervise, according to the article 8, shall be done precisely on June 3rd of the next previous year to the partial renewal. On the 15th of the immediate August they shall have their election the departmental boards; the qualification and declaration of the Supreme Conservative Power, shall take place on

October 1st of the same year, and shall immediately notify the Executive the appointment of the elected.

Article 11. The vacancy of a Senator shall be replaced by election done in the manner that the article 8 prescribes; the elect shall enter to occupy an empty space, and shall last the time that the one who was absent should have lasted.

Article 12. To be Senator it is required:

- I. To be citizen in current exercise of his rights.
- II. To be Mexican by birth.
- III. To be, at the day of the election, thirty five years old.
- IV. To have a capital (physical or moral) that produces him at least five hundred pesos annually.

Article 13. They cannot be Senators: the President of the Republic while he still is so, and a year later; the members of the Supreme Conservative Power, the members of the Supreme Court of Justice and of the Martial; the secretaries of the dispatch and officials of their secretaries; the general Treasury employees, neither the governors of the departments, while they are and six month later.

Of the Sessions

Article 14. The sessions of the General Congress shall be opened in January 1st and July 1st of each year. The sessions of the first period might be closed in March 31st, and those of the second period shall last until all the matters which they exclusively take care of are concluded. The exclusive purpose of such second period of sessions shall be the examination and approval of the budget for next year, and of the account of the Ministry of Treasury regarding the second to last year.

Article 15. The sessions shall be daily, except the days of ecclesiastical solemnity, and those of civil solemnity that a secondary Law shall appoint.

Article 16. The regulations of the Congress shall specify the time in which the sessions shall begin each day, and the time they shall last, when and for how long each Chamber might suspend their sessions, and all the other preparatory requirements of each ordinary or extraordinary session, and of the discussions and voting.

Article 17. For the voting of any Law or decree they shall be present more than the half of the total number of individuals that form the Chamber, and every voting shall be done by the majority of suffrages of those who were present, except in the cases where the Law demands a greater number.

Article 18. For the closure of the sessions, both ordinary and extraordinary, a formal decree shall be issued, passed in both Chambers, sanctioned and published by the Executive.

Article 19. If the Congress shall resolve not to close in March 31st the first period of the ordinary sessions, or the President of the Republic, in agreement with the Congress, shall ask for this extension, it shall be issued previously and a decree of continuation shall be published.

In such decree the matters of which only the Congress shall take care of in that extension shall be specified; but not the time or the duration of it, which shall be all the necessary, within the months of April, May and June, for the conclusion of such matters.

Article 20. The President of the Republic might, in agreement with the Council, and when the Congress is in recess, resolve that the Permanent Deputation is summoned to extraordinary sessions, appointing the matter of which they shall take care, without them being able, during the extraordinary session, discuss any other matters.

The Permanent Deputation shall have the same faculty, provided that they agree in the summoning with the Executive, who might not deny to it, but with agreement of the Supreme Conservative Power.

Article 21. The statement of the matters of which the article 14, 19 and 20 talk about, shall not be an obstacle to treat another which might arouse improvised, provided that it is very urgent, and of common interest, in opinion of the Executive and the majority of both Chambers. It shall neither be an obstacle to be able to occupy of the accusation that shall be done before the Chambers and else economic matters.

Article 22. Even though the General Congress closes its sessions, the Chamber of Senators shall continue their particular ones, while there are laws pending its revision.

Article 23. When the suspension that the paragraph 6, article 12 of the attributions of the Conservative Power talks about takes place, the Permanent Deputation shall call the Congress to continue their interrupted sessions, once concluded the two moths, and the Congress shall get together for this purpose with or without the summon.

Article 24. The President might also, in the same case and with the same requirement of the previous article, increase with the substitutes the number of the Chamber of Deputies, only for two months at most.

Of the Formation of the Laws

Article 25. Every Law shall be started precisely in the Chamber of Deputies: the Senators shall only be in charge of revision.

Article 26. The initiative of the laws corresponds:

- I. To the Supreme Executive Power and to the Deputies, in all the subjects.
- II. To the Supreme Court of Justice, regarding to the administration of their branch.
- III. To the departmental boards regarding taxes, public education, industry, commerce, municipal administration and constitutional variations.

Article 27. The Supreme Executive Power and the high Court of Justice might, each one in their own line, initiate declaratory laws of other laws, and the deputies might do the same initiative, if fifteen of them get together to propose it.

Article 28. When the Supreme Executive Power or the deputies initiate laws about a subject in which the article 26 grant initiative to the Supreme Court of Justice

and the departmental boards, the respective report of the Supreme Court and of the majority of the boards shall be heard, before taking into consideration the initiative.

Article 29. The initiatives of the Executive and Judiciary cannot be left aside and neither those in which the most part of the departmental boards agree. The rest of the initiatives shall or shall not be taken into consideration, according to the evaluation of the Chamber, once heard the report of a nine-Deputy commission that shall choose in their totality every year, and shall be called of *petitions*.

Article 30. Any particular citizen might address his projects or directly to a Deputy so the latter makes them his if he wants to, or to the Town Councils of the capitals, who, if they qualify them as useful, shall pass them with their evaluation to the respective departmental Board, and if the latter approves it, they shall raise it to initiative.

Article 31. Once approved a project in the Chamber of Deputies in its totality and in each of its articles, it shall be passed for revision to the Senate with all the file of the subject.

Article 32. The Chamber of Senators, while revising a Law project or decree, might not do any alterations or modifications and shall abide to the formulas *approved*, *disapproved*; but when returning it to the Chamber of deputies, shall send an extract with the circumstances of the discussion, so that such Chamber takes care of the parts that are considered wrong, or the alterations that the Senate considers convenient.

Article 33. If the Chamber of Deputies, with two third parts of the present, insisted in the Law project or decree turned back by the Senate, this Chamber, to whom it shall return for a second revision, might not disapprove it without the satisfied vote of two third parts of the present Senators; not reaching this number those who disapprove it, by that sole fact the project shall be approved.

Article 34. Every Law project or decree approved in both Chambers, in first or second revision, shall pass to the Sanction of the President of the Republic; and if it is a constitutional variation, to the sanction of the Supreme Conservative Power.

Article 35. If the Law or decree had only had first discussion in the Chambers, and to the President of the Republic this shall not seem right, he might, within fifteen working days, return it to the Chamber of Deputies, with observations agreed in the Council; once passed such term, without having done it, the Law shall be sanctioned and published.

Article 36. If the Law project or decree had suffered in the Chambers a second revision, and it were in the case of the article 33, the President of the Republic (considering it opportune himself and his Council) might deny the sanction without necessity of making observations, and shall let know his resolution to the Congress.

Article 37. The Law or decree turned back with observations by the President of the Republic, shall be examined again in both Chambers, and of two third parts of one and another shall insist, the project shall be passed for a second time to the President, who might not deny again the sanction or publication; but if such requirement were missing in any of both Chambers, the project shall be dismissed.

Article 38. The dismissed or not sanctioned Law project or decree, according to the article 33, 36 and 37, might not be proposed again in the Congress, neither be treated there, until the Chamber of deputies has not been renewed in its half, as prescribed in *article 3*. The variations of the Constitution that the Supreme Conservative Power shall not sanction, if once renewed the Chamber of deputies in its half, the most part of the departmental boards insisted in the initiative, and in the approval of two third parts of the present members of one and the other Chamber, they shall not pass to the sanction, and the variation shall be published without it.

Article 39. Once the Law is sanction, the President of the Republic shall have it published in the capital, in the used manner, in all the capitals of the departments and in all the towns and places, circulating it to the governors, and through his means to the rest of the subordinate authorities.

All these servers shall be responsible if they do not publish the Law within the third day of its reception.

Article 40. Such publication is not needed in the decrees which knowledge corresponds only to certain persons or corporations; but it shall always be done in the papers of the government.

Article 41. The formula to publish laws and decrees shall be the following:

The President of the Mexican Republic to her inhabitants, know: that the General Congress has decreed the following (here the text). Therefore, I order it shall be printed, published, circulated and given the due compliance.

Article 42. Once published the Law in each place, all are obliged to it since the date of its publication, if the Law itself sets a subsequent term for the obligation.

No *perceptive* Law shall oblige before the mentioned requirement.

Article 43. Every resolution of the General Congress shall have the character of Law or decree.

The first name corresponds to those resolutions that are about subjects of common interest, within the orbit of attributions of the Legislative Power.

The second corresponds to those that, within the same orbit, are relating to certain times, places, corporation, establishments or persons.

Article 44. It corresponds exclusively to the General Congress:

- I. Dictate the laws, to which the public administration shall abide in all and each of its branches, derogate them, interpret them and exempt its observance.
- II. To approve, disapprove or reform the legislative dispositions that the departmental boards dictate.
- III. To annually decree the expenses which shall be done the following year, and the contributions with which they shall be covered.

Every contribution ceases with the year, in the case of not had been extended for the following.

- IV. To examine and approve each year the general account of investment of wealth relating to the previous to last year that the Ministry of Treasury shall have presented in the last year, and suffered the gloss and examination that shall be detailed in a secondary Law.
- V. To decree the number of permanent troop of sea and land that shall be in the Republic, and each year that of the active militia that there must be the following year, without harm of increasing or decreasing this during the period, when the case demands so.
- VI. To authorize the Executive to contract debts on the credit of the Nation and to designate guarantees to cover them.
- VII. To recognize national debt, and decree the manner and means to amortize it.
- VIII. To approve all class of treaties that the Executive celebrates with foreign powers, and the concordats with the Apostolic Chair.
- IX. To decree the war, approve peace agreements and issue rules to grant letters of marque.
- X. To give to the government the general basis and rules for the habilitation of all class of ports, the establishment of customs and the formation of the customs duties.
- XI. To determine the weigh, Law, type and denomination of the coins, and adopt the general system of weighs and measures that they consider to be best.
- XII. To grant or deny the entry of foreign troops into the territory of the Republic, and the exit of the national troops.
- XIII. To grant general amnesties in the cases and manner that the Law prescribes.
- XIV. To create or delete every class of public employments, to increase or decrease their remunerations and to set the general rules for the concession of retirements and pensions.
- XV. To give general rules for the concession of letters of naturalization and citizenship, and grant, according to such rules, the latter.
- XVI. To increase or decrease by adding or division the departments which form the Republic.

Article 45. The General Congress cannot:

- I. Dictate a Law or decree without the initiatives, intervals, revisions and other requirements that this Law demands and the regulation of the Congress appoints; being exceptions to this rule only those expressed in the referred regulation.
- II. Exile any Mexican neither impose any kind of penalty directly or indirectly.

It only corresponds to the Law to designate generally the penalties for the crimes.

- III. Deprive directly or indirectly no one of his prosperity, whether it is an individual or an ecclesiastic or secular corporation.

In this line it corresponds to the Law only to generally establish contributions or taxes.

- IV. Give to any Law, that is not purely declaratory, retroactive effect, or take place directly or indirectly in previous cases to its publication.
- V. Deprive, neither suspend to the Mexicans their rights declared in the constitutional laws.
- VI. Reassume in itself or to delegate in others, via extraordinary faculties, two or the three powers; Legislative, Executive and Judiciary.

Article 46. It is null any Law or decree dictated with express contradiction to the previous article.

Faculties of the Chambers and Prerogatives of its Members

Article 47. In the common crimes, criminal accusation might not be attempted against the President of the Republic, since the day of his appointment until one year after finished his presidency, neither against the Senators, since the day of their election until two months after this entrustment finishes, neither against the ministries of the high Court of Justice and the Martial, the secretaries of the dispatch, councils and governors of the departments, but before the Chamber of deputies. If the accused were a Deputy, during the time of his deputation and two months after, or the Congress were in recess, the accusation shall be done before the Senator.

Article 48. In the official crimes of the President of the Republic, during the same time that the previous article states, of the secretaries of the dispatch, the magistrates of the high Court of Justice and the Martial, councilors, governors of the departments and departmental Boards, for infraction of the article 3, fifth part of the Second Constitutional Law, of the 3rd of the Fourth and 15 of the Sixth in its first three parts, the Chamber of Deputies, before who the accusation shall be done, shall declare if they grant or not the motion; in case of being an affirmative declaration, they shall appoint two of its members to support the accusation in the Senate. The latter, once the process instructed, and the accusing and defendant heard, shall rule, without being able to sentence other penalty than that of the destitution of the position or employment that the accused holds, or that of perpetual or temporary disability to obtain any other; but if the process turns out to be, in the opinion of the Senate, deserving of greater penalties, the process shall pass to the respective tribunal so they act according to the laws.

Article 49. In the common crimes, once the accusation is done, the respective Chamber shall declare if the formation of the lawsuit shall be done or not; in the affirmative case, the detained shall be set to the disposal of the competent tribunal to be judged.

The affirmative resolution shall only need the confirmation of the other Chamber, in case that the defendant is the President of the Republic.

Article 50. The affirmative declaration, both in the official crimes as well as in the common ones, suspends to the defendant in the exercise of his functions and citizen rights.

All the rest of the requirements of this juries and preventions relating to the defendant, the prosecutor and the manner to proceed shall be specified in the regulation of the Congress.

Article 51. Each of the Chambers might, without intervention of the other:

- I. Take resolutions that are not economic, regarding to the place of their sessions, the best arrangement of their Secretary and other annex offices, the number, appointment and remuneration of their employees, and to all of their government purely internal.
- II. Communicate among them and with the Government in writing or through commissions in their heart.

Article 52. It is responsibility of the Chamber of Deputies exclusively, in additions to those that this Law has specified:

- I. To guard through an inspector commission, formed of five individuals of its heart, the exact performance of the Audit Office and of the general Treasury offices. A secondary law shall detail the manner and terms in which the inspector commission shall carry out its entrustment according the attributions stated in such Law.
- II. To appoint the chiefs and other servers of the Audit Office.
- III. To confirm the appointments that the Governments do for first chiefs of the general Treasury offices, already established or yet to establish.

Article 53. It is responsibility exclusively of the Chamber of Senators:

- I. Let their knowledge to give pass or retain the council decrees and bulls and pontifical rescripts that contain general or transcendental dispositions for the Nation.
- II. During the recess of the General Congress, take care of the accusations of which article 47 talks about, and grant or deny in urgent case, the permissions of which the paragraph 12 of article 44 talks about, quoting it for the purpose the Permanent Deputation.
- III. To approve the appointments that the Executive Power does for diplomatic envoys, consuls, coronels and else superior officers of the permanent army, navy and active militia.

Article 54. The severance pay of the Senators shall be greater than that of the Deputies and the quotas of both shall be stated by a secondary Law.

Article 55. The Deputies and Senators shall be inviolable for their expressed opinions in the exercise of their entrustments, and in no time and by any authority they might be reprimanded or bothered for them.

Article 56. The Deputies and Senators cannot, in addition to everything forbidden by the regulations of the Congress:

- I. Renounce to the entrustment without serious, just cause and qualified as such by his respective Chamber.
- II. Admit for him, nor solicit for others, during the time of his entrustment and a year after, any commission or employment from the Government neither promotion that is not for them by rigorous scale.
- III. Obtain for him, nor solicit for others, during the same period of the previous paragraph, any pension or decoration from the Government.

Of the Permanent Deputation

Article 57. This shall be formed of four Deputies and three Senators, who at the end of the first ordinary sessions of each biennium shall be appointed by their respective Chambers.

Article 58. It is responsibility of each Deputation:

- I. To call the Congress for extraordinary sessions when the President of the Republic resolves so, or the Permanent Deputation considers it necessary according to the article 21.
- II. To call the Congress for the continuation of its ordinary sessions interrupted according to the article 24.
- III. To call the Senate for particular session in the cases and for the purposes of the article 53, paragraph 2.
- IV. Grant or deny to the individuals of the Congress license to be absent of the capital, when the Chambers are in recess.
- V. To look after during the recess the infractions to the Constitution.

FOURTH

Organization of the Supreme Executive Power

Article 1. The exercise of the Executive is deposited in a supreme magistrate, who shall be called President of the Republic; he shall last eight years, and shall be chosen in the following manner.

Article 2. In August 16th of the previous year to the renewal, in meeting of the Council and the ministries, the Senate and the high Court of Justice, shall choose the President of the Republic, each a group of three individuals, and in the same day they shall directly pass it to the Chamber of Deputies.

The latter, on the next day, shall choose three individuals of those specified in such groups of three, and shall sent the resulting list of three to all the departmental boards.

These shall elect an individual from those three contained in the sent list, verifying its election on October 15th of the previous year to the renewal, and shall send

in a certified document the act of the election, precisely through the next immediate mail to the Secretary of the Chamber of Deputies, being a case for responsibility, for the departmental boards, the lack of compliance to what is prevented in this paragraph.

On the 15th day of the immediate month of December both Chambers shall get together, they shall open the documents of the acts that they had received, and shall appoint a special commission of five individuals to examine them and qualify the elections (only regarding their validity and nullity), and to make the regulation of the votes and present the corresponding report.

Once discussed and approved such report in the reunited General Congress, it shall be declared president that who had obtained the greatest number of votes and in case of equality the one that luck designates, the draw and everything else shall also take place in the same session.

Article 3. The events specified in the previous article shall be null, being executed in different days from those assigned in it, and only in the case that some social disruption makes impossible the reunion of the Congress or the most part of the departmental boards, the Congress, with the vote of two third parts of the present individuals of each Chamber, shall designate other days, being valid this agreement extraordinarily for that sole time.

Article 4. A declaratory decree of the election shall be issued which shall be solemnly published by the Government, and shall be communicated to the interested one so he presents to give the oath and take possession the 2nd day of next January.

Article 5. The President that finishes might be reelected provided that he is proposed within the three groups of three of which the first paragraph of article 2 talks about, he is chosen for one of the list of three of the Chamber of Deputies, of which the second paragraph of the same article talks about, and obtains the vote of three fourth parts of the departmental boards.

Article 6. The position of President of the Republic is not renounceable but in the case of reelection, and even in that case, only with fair causes, which the General Congress shall qualify.

Article 7. If the elected one were absent, the Congress, in attention to the distance, shall pre state him the day to present.

Article 8. During the temporary absences of the President of the Republic, the President of the Council shall govern.

The latter shall be in charge of the Government during the interval that might occur since the ceasing of the old one until the new President presents.

Article 9. The functions of the President of the Republic shall end in the 1st of January of the year of the renewal.

Article 10. In case of vacancy because of death or legal destitution of the President of the Republic, they shall proceed to elections in the same terms said in article 2, the Congress shall designate, through special decree, the day in which each one shall take place.

If death or destitution occurred in the last year of his command, they shall proceed to the elections of which the following article talks about, and the elected one shall function until the possession of the President that is elected, in the time and manner designated in the article 2 of this Law.

Article 11. In every vacancy case, and while the election and possession of the proprietor President takes place, elected ordinary and extraordinarily, an interim shall be appointed in this form:

The Chamber of Deputies shall choose three individuals, in who all the qualities that this Law demands for that position concur, and the list of three shall be sent to the Senate.

This Chamber, on the next day, shall choose from the list the individual who shall be interim President, they shall let it know to the Chamber of Deputies, and the decree of appointment shall be communicated to the Government for its publishing and communication to the interested one, previously stating the day in which he shall present to give the oath.

Article 12. The President, proprietor and interim, to take possession of the position, shall do before the General Congress, once reunited both Chambers, oath under the following formula:

I N., appointed President of the Mexican Republic, swear to God and the Holy Gospels that I shall exercise faithfully the entrustment that has been delegated to me and shall exactly observe and make observe the Constitution and the laws of the Nation.

The internal regulations of the Congress shall detail all the ceremonies of this event.

Article 13. When a physical or moral disability arouses to the President, the excitation of which paragraph fourth, article 12 of the second constitutional Law talks about, shall be voted by two third parts of the present individuals of the Chamber of Deputies and confirmed by the absolute majority of the individual who shall form the Senate.

Article 14. To be elected President of the Republic it is required:

- I. To be Mexican by birth and to be in the current exercise of the citizen rights.
- II. To be, at the day of the election, 40 years old.
- III. To have a physical or moral capital that produces to the individual four thousand pesos of rent annually.
- IV. To have carried out one of the superior civil or military positions.
- V. Not to have been condemned in a legal process for crimes or embezzlement of public wealth.
- VI. To reside in the Republic at the time of the election.

Article 15. They are prerogatives of the President of the Republic:

- I. To grant or deny the sanction of the laws and decrees of the General Congress, in the cases not excluded in the third constitutional Law.

- II. That the Law or decree initiatives that He addresses to the Congress cannot be left out of consideration, in everything that he is authorized to do so.
- III. Not to be criminally accused during his presidency and a year after, for any class of crimes committed before or while he serves as president, but in the terms prescribed in the article 47 and 48 of the third constitutional Law.
- IV. Not to be criminally accused for political crimes committed before or during the time of his presidency, after one year of the latter having ended.
- V. Not to be processed but previous declaration of both Chambers prevented in the article 49, last paragraph of the third constitutional Law.
- VI. To freely appoint the secretaries of the dispatch and be able to remove them when he considers it convenient.
- VII. To elect and send to the Chambers speakers that express and support the government, in all the cases in which the importance of the matter makes, to his opinion and to the Council, this measure appropriate.

Article 16. That who acts as interim President or substitute shall enjoy of the same prerogatives; but to these, the term to enjoy of the 3rd, 4th and 5th, shall be extended only to two months after finished their entrustment.

Article 17. They are attributions of the President of the Republic:

- I. To give, abiding to the respective general laws, all the decrees and orders that are best for the better public administration, observance of the Constitution and laws, and, in agreement with the Council, the regulations for the compliance of the latter.
- II. To initiate all the laws and decrees that he considers convenient, in agreement with the Council, for the good government of the Nation.
- III. To make, in agreement with the council, the observations that he considers, to the laws and decrees that the Congress communicates him for its publication, not being the cases excluded in the third constitutional Law.
- IV. To publish, circulate and make observe the Constitution, laws and decrees of the Congress.
- V. To resolve, in agreement with the Council, the excitation of which paragraphs 1 and 6 of article 12 of the second constitutional Law talk about.
- VI. To ask to the Congress the extension of their ordinary sessions.
- VII. To resolve that the Permanent Deputation calls to extraordinary sessions and appoint, with agreement of the Council, the matters that shall be discussed in them.
- VIII. To refuse, in agreement with the Supreme Conservative Power, that the Permanent Deputation makes the announcement for which the article 20 of the third constitutional Law in its second part authorizes.

- IX. To look after the recollection and to decree the investment of the contributions according to the laws.
- X. To appoint the councilors in the terms that this Law states.
- XI. To appoint the governors in the departments upon proposal in groups of three from the departmental board and in agreement with the Council.
- XII. To remove the diplomatic servers, whenever he judges it convenient.
- XIII. To appoint the diplomatic servers, consuls, coronels and else superior officers of the permanent army, navy and active militia, and the first chiefs of the main Treasury offices, already established or yet to establish, subject, in the first, to the approval of the Senate, and in the latter, to the Chamber of Deputies, according to the articles 52 and 53 of the third constitutional Law.
- XIV. To appoint for all the rest of the military employments and of the offices according to what the laws state.
- XV. To take part in the appointment of the judges and individuals of the tribunals of justice, according to what the fifth constitutional Law establishes.
- XVI. To give retirements, grant licenses and pensions, according to the laws.
- XVII. To have to his disposal the army and navy for internal security and external defense.
- XVIII. To declare war in name of the Nation, previous consent of the Congress, and to grant letters of marquee according to what the laws stipulate.
- XIX. To celebrate concordats with the Apostolic Chair, according to the bases that the Congress shall give.
- XX. To direct the diplomatic negotiation and to celebrate peace, friendly, alliance, truce, army neutrality treaties, making them subject to the approval of the Congress before its confirmation.
- XXI. To receive ministries and else foreign envoys.
- XXII. To excite the ministries of justice for the prompt administration of this, and give them all the necessary aids for the execution of their sentences and judiciary providences.
- XXIII. To suspend of their employments, up to for three months, and even deprive of half of their salaries, for the same period of time, the employees he appointed offenders of his commands and decrees, and, in the case that a lawsuit shall be formed, he shall pass the precedents to the respective tribunal.
- XXIV. To grant the pass or to retain the council decrees, pontifical bulls, briefs and rescripts with consent of the Senate if they contain general dispositions, hearing to the Supreme Court of Justice if they are about litigious matters and the Council if they were relating to particular matters or purely governmental.

In any case of retention he shall address to the Supreme Pontiff, within two month at most, an exposition of the motives, so that, once instructed His Holiness, resolves what he considers best.

- XXV. Previous concordat with the Apostolic Chair, and according to what in it is stipulated, present for all the bishoprics, dignities, and ecclesiastical benefits, who are part of the patronage of the Nation, in agreement with the Council.
- XXVI. To grant or deny, in agreement with the Council, and according to the laws, the pardons that are asked to him, once hear the tribunal whose sentence has caused it and the Supreme Court of Justice, suspending the execution of the sentence while it is resolved.
- XXVII. To look after the legal exactitude in the manufacture of the coin.
- XXVIII. To decide the appropriate for the good government of the departments.
- XXIX. To contract debts on the national credit, previous authorization of the Congress.
- XXX. To habilitate or close ports, establish and eliminate customs and to form commerce duties, with absolute subjection to the bases previously stated by the Congress.
- XXXI. To grant, in agreement with the Council, letters of naturalization, under the rules prescribed in the Law.
- XXXII. To give passport to the Mexicans to go to foreign countries and to extend for them the term of the license.
- XXXIII. To grant or deny the pass to the aliens to introduce in the Republic and to expel from her those not naturalized who are suspicious.
- XXXIV. To grant, in agreement with the Council, exclusive privileges in the terms that the laws establish.

Article 18. The President of the Republic might not:

- I. Command in person the sea or land forces, without consent of the General Congress, or in its recesses, of the Senate, through the vote of two third parts of the present Senators.
- II. While He is commanding the forces, every intervention in the government from him shall cease, who shall be subject as general.
- III. Occupy the property of any person or corporation, but in the case and with the requirements that the paragraph 3, article 2 of the first constitutional Law details.
- IV. Leave from the territory of the Republic during his presidency, and a year after without permit of the Congress.
- V. Transfer, cede or permute city, town, place or any part of the national territory.
- VI. Cede or transfer the goods without consent of the Congress.

- VII. Impose, direct or indirectly, contributions of any species, general or particular.
- VIII. Make execute the acts forbidden in the paragraphs 4, 5, 6 and 7, article 2 of the first constitutional Law, and the 5th, article 45 of the third constitutional Law.
- IX. Prevent or defer the elections established in the constitutional laws.
- X. Prevent or disturb the reunions of the Conservative Power or deny the compliance of its resolutions.

Article 19. Every act, contrary to the previous article, is null, and holds responsible to the Secretary of the Dispatch who authorizes it.

Article 20. The secondary laws shall designate the salary that shall indemnify to this supreme magistrate, and all the ceremonials which shall be observed relating to him.

Of the Council of Government

Article 21. This shall be formed of thirteen councilors, of which two shall be ecclesiastical, two militaries and the rest of the other classes of society, and shall be elected in the following manner.

The current Congress shall form a list of thirty nine individuals and shall send it to the President of the Republic, who in the next day shall choose from it and appoint the thirteen councilors.

In the future, in case of vacancy, the Senate shall propose a list of three individuals to the President of the Republic, so he elects and replaces the one who is missing.

Article 22. Once done the election of the thirteen councilors of which the previous article talks about, the President of the Republic shall pass the list of them to the Congress and the latter shall, on the same day, appoint from among them that who shall preside over the Council and that who shall substitute his absences.

This election shall be done in the future by the Chamber of Deputies every two years, in January 10th, and shall be communicated to the President so he publishes it.

The one who finishes as president might be reelected.

Article 23. The position of councilor shall be perpetual, and cannot be renounced but for fair cause, qualified as such by the President of the Republic, in agreement with the Council itself.

Article 24. To be councilor it is required to be Mexican by birth and to have the same qualities that the article 6 of the third constitutional Law demands for the deputies.

Article 25. They are attributions of the Council:

- I. All expressed in this Law and in the other constitutional laws.
- II. To give to the Government their report in all the cases and matters in which it is demanded so.

- III. To appoint from its individuals that who shall act as Secretary, and that who shall substitute his absences. The election shall be don on January 10th, every two years, and those who finish might be reelected.

Article 26. The councilors shall only be responsible for the reports that they shall give against a specific Law, mainly if it is constitutional, or for bribery and suborn.

This responsibility might not be demanded but in the manner and terms prescribed in the third constitutional Law.

Article 27. A secondary Law shall regulate in detail all the functions of the Council, the manner of performing them, all its internal government, and shall assign the indemnifying that shall be given to these servers.

Of the Ministry

Article 28. For the dispatch of the government matters, there shall be four ministers: one of the Interior, another of Foreign Affairs, another of Treasury and another of War and Marine.

Article 29. The ministers shall be of exclusive election of the President of the Republic, Mexicans by birth, citizens in the current exercise of their rights and that have not been condemned in legal process for crimes or embezzlement of the public wealth.

Article 30. Every serious matter of the Government shall be resolved by the President of the Republic in reunion with the ministry, who shall sign the agreement in the respective book, specifying the one or those who disagree.

Article 31. To each one of the ministries corresponds:

- I. The dispatch of all the business of his branch, previously agreed with the President of the Republic.
- II. To authorize with his signature all the arrangements, decrees and orders of the President, in which he agrees, and that are about matters proper of his ministry.
- III. To present to both Chambers a memoir specifying the state in which the different branches of the public administration relating to this Ministry are.

This memoir shall be presented by the Secretary of Treasury in July of each year, and the other three in January.

Article 32. Each minister shall be responsible of the lack of compliance to the laws that shall have for his Ministry, and of the acts of the President that he authorizes with his signature and are contrary to the laws, particularly the constitutional laws.

The responsibility of the ministers cannot be made effective but in the manner and terms that the third constitutional Law prevents.

Article 33. The Government shall form a by Law for the better dispatch of its Secretaries, and shall pass it to the Congress for its approval.

Article 34. The compensation of the Ministers shall be established by a secondary law, continuing, meanwhile, with the one they have been enjoying up to here.

FIFTH

Of the Judiciary of the Mexican Republic

Article 1. The Judiciary of the Republic shall be exercised by a Supreme Court of Justice, by the superior courts of the departments, by the courts of Treasury that the Law of the subject shall establish and by the first instance tribunals.

Article 2. The Supreme Court of Justice shall be formed of eleven ministers and one public prosecutor.

Article 3. It represents the Judiciary in all that belongs to it and everything that cannot be carried out by it. It shall look after that the courts and tribunals of the departments are occupied with the magistrates and judges who shall form them, and that justice is administered prompt and punctually in them.

Article 4. To be elected individual of the Supreme Court it is required:

- I. To be Mexican by birth.
- II. To be citizen in exercise of his rights.
- III. To be forty years old.
- IV. Not to have been condemned for any crime in a legal process.
- V. To be *attorney* and in exercise of this profession for ten years at least.

It is not necessary to have the quality of Mexican by birth:

- I. In the children of Mexican parents by birth that, having been born by chance out of the Republic, they had established in it since the moment they came into the enjoyment of being responsible of themselves.
- II. In those who were born in any part of the America that before 1810 depended on the Spain, and that has separated from her, provided that they resided in the Republic before its independences was done.
- III. In those that, being naturals of a province that was part of the territory of the Republic, have been since before residing in it.

Article 5. The election of the individuals of the Supreme Court, in the vacancies that aroused in the future, shall be done in the same manner and in the proper form than that of the President of the Republic.

Article 6. Once declared the election on the same day the declaratory decree shall be issued, and the Government shall publish it and communicate it to the tribunal and to the interested one so he presents himself to give oath and take possession.

Article 7. The elected individual shall give the oath before the Chamber of Deputies, because of their recess before the Chamber of Senators, and for the recess of both before the Permanent Deputation. His formula shall be: *Do you swear to God, our Lord, to observe and make observe the constitutional laws, to administer justice well and punctu-*

ally, and to carry out with exactitude all the functions of your entrustment? If so you did, God shall reward it, and of not, He shall demand it.

Article 8. If a Deputy, Senator or Councilor were elected minister or public prosecutor of the Supreme Court of Justice, he shall prefer the election done for these destinies.

Article 9. The individuals of the Supreme Court of Justice might not be judged in their civil business and in their criminal causes, but in the manner and through the tribunal established in the second and third constitutional Law.

Article 10. In every two years, and in the first six days of January, the President of the Republic in meeting of the Council and Ministers, the Senate and the high Court of Justice shall extend, each one a list of new individuals residents in the capital and with the same qualities required for the Ministers of such supreme tribunal, in order that, as substitutes, they might cover for the absences of their magistrates.

Article 11. These lists shall be passed immediately to the Chamber of Deputies and the latter shall appoint from among the individuals comprehended in them, those nine who shall exercise the position of substitutes.

Article 12. The attributions of the Supreme Court of Justice are:

- I. To know about the civil business and of the criminal lawsuits that move against the members of the Supreme Conservative Power, in the terms and with the requirements prevented in the article 18 of the second constitutional Law.
- II. To know about the criminal lawsuits filed against the President of the Republic, Deputies and Senators, Secretaries of the dispatch, councilors and governors of the departments, under the requirements established in the third constitutional Law.
- III. To know about, since the first instance, the civil business that had for plaintiff or for prisoners the President of the Republic and the Secretaries of the dispatch, and in those in which the deputies, senators and councilors were sued.
- IV. To know, in the third instance, about the business filed against the governors and superior magistrates of the departments, and in the same degree of the criminal lawsuits formed against them for common crimes.
- V. To resolve the competences that arouse among the tribunals or courts of the diverse departments or jurisdictions.
- VI. To know about the judiciary disputes that are moved on contracts or negotiations celebrated by the Supreme Government or by its express order.
- VII. To know about the causes of responsibility of the magistrates of the superior tribunals of the departments.
- VIII. To know about, in all the instances, the criminal lawsuits of the diplomatic servers and consuls of the Republic, and in the civil business in which they were sued.

- IX. To know about the causes of admiralship, of sea and land prays, crimes committed in high seas, and offenses against the Mexican Nation, in the terms that a Law shall designate.
- X. To know about the criminal lawsuits that shall be formed against the immediate subordinates of the same Supreme Court, because of faults, excesses or abuses committed in service of their destinies.
- XI. To know about the motions of nullity filed against the sentences dictated in last instance, by the superior tribunals of third of the departments.
- XII. To know about the motions of protection and force filed about the very Reverend Archbishops and Reverend Bishops of the Republic.
- XIII. To initiate laws relating to the administration of justice, according to what is prevented in the third constitutional Law, preferment those directed to regulate all the tribunals of the Nation.
- XIV. To expose their report about laws initiated by the Supreme Government, or by the Deputies, in the same branch of the administration of Justice.
- XV. To receive the doubts of all the other tribunals and courts about the intelligence of a Law, and having found them founded, pass them to the Chamber of Deputies, expressing in trial and promoting the convenient declaration.
- XVI. To appoint all the subordinates and clerks of the Supreme Court.
- XVII. To appoint the ministers and prosecutors of the superior tribunals of the departments, in the following terms:

The superior tribunals of the departments shall form a list of all the applicants to such position, and of the others that in their opinion were fit to obtain them: they shall pass it immediately to the respective governor, who, in union of the Departmental Board, might exclude those that he considers do not deserve the public trust of the department, and once done this operation they shall give the list back to the same tribunals. These tribunals shall form again a comprehensive list of those who were left free after the exclusion, evaluating gradually and circumstantially the ability and merit of each one: once sent this list to the Supreme Government, this might, with their Council, exclude those that they consider do not deserve the concept and trust of the Nation; and once passed finally to the Supreme Court of Justice, it shall proceed to the appointment among those who result free.

- XVIII. To confirm the appointment of the proprietor judges of first instance, done by the superior tribunals of the departments.
- XIX. To support or contradict the petitions of pardon made upon favor of the criminals.
- XX. To know about the litigious matters belonging to the patronage of which the Nation enjoys.

- XXI. To consult about the pass or retention of pontifical bulls, briefs and re-scripts issued in litigious business.
- XXII. To hear and decide about the claims filed, in the capital of the Republic, regarding the qualification done to occupy the property, in the cases of which paragraph 3rd, article 2 of the first constitutional Law treats.

Article 13. The Supreme Court of Justice, in association with general officers, shall erect in Martial Court to know about all the business and lawsuit of the war jurisdictions, in the terms that a Law shall prevent under the following bases:

- I. Of this Martial Court only the military ministers shall decide in the criminal lawsuits, purely military.
- II. In the civil business only the attorney ministers shall know and decide.
- III. In the criminal common and mix lawsuits they shall know and decide, associated ones and others, as well as in those formed to the general commanders for crimes they commit in the exercise of their jurisdiction.

Article 14. In this Martial Court there shall be seven military proprietor ministers and a prosecutor, four substitutes for the first ones and one for the second.

The election of all of them shall be done in the same manner than that of the ministers of the Supreme Court of Justice, and shall enjoy as them of the prerogative granted in the article 9. Their qualities shall be the 1st, 2nd, 3rd and 4th of this Law, having to be, additionally, division or brigade generals.

Article 15. The requirements so that the Government may destine them to matters of the service shall be those same that the article 16 of this Law demands, in the 4th restriction, so that the ministers of the Supreme Court of Justice may be in charge of any commission.

Article 16. The restrictions of the Supreme Court of Justice and of its individuals are the following:

- I. It might not make by itself any regulations, not even about matters belonging to the administration of justice, neither dictate providences containing general dispositions that alter or declare those of the laws.
- II. They might not have any knowledge about governmental or economic matters of the Nation.
- III. Neither might it have it in the litigious matters that are pending in the tribunals of the departments, or that belong to the jurisdiction of their respective territory.
- IV. None of the ministers and prosecutors of the Supreme Court might have any commission of the Government. When the latter, for particular reasons that are of interest for the good of the public cause, shall consider convenient to appoint a Magistrate for Secretary of the dispatch, diplomatic minister or any other commission of that nature, he might do it in agreement with the Council and consent of the Senate.

- V. The ministers and prosecutors of the Supreme Court might not be attorneys or representatives in the lawsuits, advisors, or Law arbitrators.

Article 17. The Supreme Court of Justice shall form regulations for its internal government and carrying out of all its attributions, they shall put it into execution right away and shall pass it after to the Congress for its reform and approval.

Of the Superior Tribunals of the Departments

Article 18. In every capital of department a superior tribunal shall be established, organized in the manner that a Law shall designate.

Article 19. All this tribunals shall be equal in faculties and independent ones from others in the exercise of their functions.

Article 20. To be elected minister of such tribunals it is required:

- I. To be Mexican by birth or to be found in one of the cases expressed in the article 4, paragraph 2 of this law.
- II. To be citizen in exercise of his rights.
- III. To be thirty years old.
- IV. Not to have been condemned in a legal process for any crime.
- V. To be attorney in practice of this profession for at least six years.

Article 21. The superior judges and prosecutors of the tribunals, at the moment of taking possession of their destinies, shall do the oath prevented in the article 7 before the Governor and the Departmental Board.

Article 22. The attributions of these tribunals are the following:

- I. To know in second and third instance about the civil and criminal lawsuits belonging to their respective territory; and in first and second of the civil of the governors of the departments whose capital is most immediate, and of the common civil and criminal of the superior magistrate of the departments.
- II. To know in first and second instance about the criminal common lawsuits, of those of responsibility and of the civil business in which the inferior judges of its territory were sued. In the same instances, of those that shall be formed against the subordinates and immediate clerks of the tribunal because of faults, abuses or excesses committed in the service of their destinies; and in third instance of the business that are filed or lawsuits formed in the same cases, in the departments whose capital is most immediate.
- III. To know about the motions of nullity appealed to the sentences dictated by the judges of first instance in written trial, and when the appeal had no place, and of those of hearing that are final and executory.
- IV. To resolve the competences of jurisdictions that arouse among its subordinate judges.
- V. To know about the motions of protection and force filed from the ecclesiastical judges of their respective territory, not archbishops or bishops.

- VI. To declare in the lawsuits of immune prisoners the case in which its consignment shall be asked to the ecclesiastical jurisdiction.
- VII. To qualify the attorneys that shall occupy the vacancies that occur in the same tribunals, verifying it precisely with intervention of the governors and the respective departmental Boards, in the terms prevented in the paragraph XVII of the article 12 of this Law.
- VIII. To appoint the judges of first instance of their territory, previous intervention of the governments and respective departmental boards. This intervention shall take place in the manner stated in the first part of the same paragraph XVII of article 12 of this Law and giving immediately report to the Supreme Court, for the confirmation of the appointment done by the tribunal.
- IX. To appoint its subordinates and respective clerks.

Article 23. The restrictions of these tribunals and of their ministers are the following:

- I. They might not do any regulation, not even about administration of justice matters, neither dictate providences containing general dispositions that alter or declare those of the laws.
- II. They might not have any knowledge about governmental or economic matters of their departments.

Article 24. None of the ministers and prosecutors of these tribunals might be attorney or representative in the lawsuits, advisors or Law arbitrators, neither have any commission of the Government in their respective territory.

Of the Subordinate Judges of First Instance

Article 25. In the heads of district each department shall establish subordinate judges, with their corresponding courts for the dispatch of the civil and criminal lawsuits in their first instance. They shall also be in the heads of party that the departmental boards designate, in agreement with the governors, provided that the population of the entire party is not less than twenty thousand souls.

Article 26. To be judge of first instance it is required:

- I. To be Mexican by birth or to be found in one of the cases expressed in the second paragraph of the article 4 of this Law.
- II. To be citizen in the exercise of his rights.
- III. Not to have been condemned in legal process for any crime.
- IV. To be twenty six years old.
- V. To be attorney and to have exercised this profession for at least four years.

Article 27. The judges of the first instance might not be attorneys or representatives in the lawsuits, neither Law arbitrators.

Article 28. They shall only limit to the knowledge of the judicial matters.

Article 29. In these, the mayors of the towns shall exercise the faculties established by the laws.

General preventions about the administration of justice in the civil and criminal.

Article 30. There shall not be more persona privileges than the ecclesiastical and military.

Article 31. The members and prosecutors of the Supreme Court shall be perpetual in these positions, and might not be suspended or removed, but according to the prevention contained in the second and third constitutional Law.

Article 32. Also the ministers and the attorney judges of first instance shall be perpetual, and might not be removed but for a legally proofed and sentenced cause.

Article 33. All the magistrates and judges shall enjoy of the salary that shall be designated by a Law.

Article 34. In each lawsuit, whatever it were its amount and nature, there shall not be more than three instances. A Law shall state the number of those that each lawsuit shall have to be left in executory, according to its nature, entity and circumstance.

Article 35. The ministers, who had ruled already in any instance, might not do it in the rest.

Article 36. Every breach of legal duty, through bribery, suborn or fraud, produces popular action against the magistrates and judges who committed them.

Article 37. Every lack of observance, in the essential procedures that arrange a process, produces its nullity in the civil and shall make personally responsible to the judges. A Law shall state the procedures that, as essentials, might not be omitted in any trial.

Article 38. In the criminal causes, its lack of observance is reason for responsibility against the competent judges.

Article 39. All the trial attorneys have the right to finish, in any moment, their civil or criminal lawsuits, regarding purely personal injuries, through arbitrator judges, whose sentence shall be executed according to the laws.

Article 40. To file any civil or criminal lawsuit, regarding purely personal injuries, the means of conciliation shall be attempted first.

The Law shall arrange the form in which they shall proceed in this acts, the cases in which it is not possible, and everything else relating to this subject.

Article 41. The written order and signed by the judge, that shall be previous to prison, according to the paragraph 1, article 2 of the first constitutional Law, shall be informed in the act to the interested individual; the latter and everybody else shall obey, comply and aid this orders, and any resistance or judgment, to embarrass or avoid them, are serious crimes, that shall be punished according to the circumstances.

Article 42. In case of resistance or founded fear of escape the force might be used.

Article 43. To proceed to prison it is required:

- I. That summary information proceeds, of having result an event that deserves, according to the laws, to be punished with a corporal penalty.
- II. That it results as well a reason or indication enough to believe that such person has committed the criminal act.

Article 44. In order to proceed to the simple detention it is enough any legal presumption or founded suspicion, which inclines the judge against a person and for determined crime. A Law shall state the necessary penalties to reprimand the arbitrariness of the judges in this subject.

Article 45. No prisoner might suffer any seizure in his goods, but when the prison were for crimes that carry a pecuniary responsibility, and only then it shall take place over enough goods to satisfy it.

Article 46. When in the progress of the lawsuit, and by particular proofs, it aroused that the detained should not be punished with corporal penalty, he shall be set free, in the terms and with the circumstances that the Law shall determine.

Article 47. Within the three days in which the prison or the detention take place, the preparatory declaration of the accused shall be taken; in this act they shall manifest to him the cause of this procedure, the name of the accusatory, if there were; and this first declaration, as well as the others that are offered in the lawsuit, shall be received without oath of the defendant, for what it relates to his own acts.

Article 48. At the moment of the confession, and at the time of making the corresponding charges to the accused, he shall be instructed with the documents, witnesses and other information that exists against him and since this event the process shall continue without reserve from the defendant.

Article 49. The torment might never be used for the enquiry of any gender of crimes.

Article 50. Neither the penalty of seizure of goods might be imposed.

Article 51. Every penalty, as well as the crime, are precisely personal of the criminal, and shall never be transcendental to his family.

SIXTH

Division of the territory of the Republic and Internal Government of its Towns

Article 1. The Republic shall be divided in departments, according to the eight of the organic bases. The departments shall be divided in districts and these into parties.

Article 2. The first Constitutional Congress, in the months of April, May and June of the second year of its sessions, shall do the division of the territory into departments through a Law, which shall be constitutional.

Article 3. The departmental boards in the rest of that year shall do the division of their respective department into districts, and of the latter into parties; reporting it to the government and this with his inform to the Congress for its approval.

While the divisions of which the previous two articles talk about are made, they shall provisionally divide the territory of the Republic by a secondary Law.

Article 4. The governor shall be in charge of the internal government of the departments, abiding to the general government.

Article 5. The governors shall be appointed by the General Government upon proposal of a list of three by the departmental boards, without any obligation to abide to it in the border departments, and being able to return it one time the rest. The governors shall last eight years and might be reelected.

Article 6. To be governor it is necessary:

- I. To be Mexican by birth, or to have been born in any part of the America that before 1810 depended of the Spain, and that has separated from her, provided that he resided in the Republic at the moment of its independence.
- II. To be citizen in exercise of his rights.
- III. To be natural or neighbor of the same department.
- IV. To be 30 years old.
- V. To have a capital, physical or moral, that produces him an annual rent of at least two thousand pesos.
- VI. To be part of the secular state.

Article 7. It is responsibility of the governors:

- I. To look after the preservation of the public order, in the internal aspect of the department.
- II. To have to his disposal the army, that the laws grant them with this purpose.
- III. To comply and make comply the decrees and orders of the general government and the dispositions of the departmental board, previous approval of the Congress, in the cases that require so, according to this Law.
- IV. To pass to the general government, with his report, all the dispositions of the departmental board.
- V. To appoint the prefects, approve the appointment of the sub prefects of the department, confirm that of the peace judges and to remove any of these servers, once previously heard the report of the departmental board, regarding the removal.
- VI. To appoint the employees of the department whose appointment is not reserved to any other authority.
- VII. To suspend for up to three months, and deprive even of half of the salary for the same period, to the employees of the department.

- VIII. To suspend the Town Councils of the department, in agreement with the departmental board. In the case that they use any of the two previous attributions, they shall immediately report it to the general government, so that the latter, according to his faculties, determines whatever he considers convenient regarding the suspension.
- IX. To resolve the doubts that arouse about elections of the Town Councils, and admit or not the renounces of its individuals.
- X. To exercise, in union of the departmental Board, with quality vote in case of tie, the exclusive of which the articles 12 in the attribution XVII, and 22 in the VIII of the fifth constitutional Law.
- XI. To excite the tribunals and judges for a more prompt and honest administration of justice, making of the knowledge of the respective superior authorities the faults of the inferior.
- XII. To look after the Treasury offices of the department, in the terms that the Law shall prevent.

Article 8. During the temporary absences of the governor, an interim shall be appointed in the same manner than the proprietor, needing to have the same qualities than the latter.

If the absence were for a short period, the oldest secular of the individuals of the departmental Board shall be in charge of the government, the same for the period that takes place since the absence of the proprietor to the appointment of the interim.

Article 9. In each department there shall be a Board called Departmental formed of seven individuals.

Article 10. These shall be elected by the same electors who shall appoint the deputies for the Congress, taking place, the election, precisely on the next day of having done that of the deputies.

Also seven substitutes shall be elected in the same manner than the proprietors.

Article 11. The departmental boards shall renew in its totality every four years, starting to function on January 1st.

Article 12. The elections of the boards shall be evaluated by the finishing Boards, in agreement with the governor, and abiding to what the Senate resolved after, to whom they shall immediately send report, without harm of the possession.

Article 13. To be member of the departmental Board it is necessary to have the same qualities than to be Deputy.

Article 14. It is responsibility of the departmental Boards:

- I. To initiate laws relating to taxes, public education, industry, commerce, municipal administration and constitutional variations, according to the article 26 of the third constitutional Law.
- II. To realize the reports of which the article 28 of the same Law talks about.
- III. To establish schools of first education in all the towns of its department, providing them competently with the proper funds and duties, where

they shall be, and imposing moderate contributions where they were missing.

- IV. To have to their disposal the opening and improvement of the interior ways of the department, establishing moderate tolls to cover their costs.
- V. To dictate all the dispositions convenient to the preservation and improvement of the instruction and public welfare establishments, and those directed to the promotion of the agriculture, industry and commerce; but if with those dispositions the towns of the department were taxed somehow, they cannot be put into execution without them being previously approved by the Congress.
- VI. To promote, through the governor, whatever is best for the prosperity of the department in all of its branches, and to the welfare of its towns.
- VII. To form, with the governor, the municipal by-laws of the Town Councils and the regulation of internal police of the department.

These by-laws, the dispositions dictated according to the faculties 3rd and 4th, and those that according to the 5th do not need previous authorization, might be put into practice right away, but abiding to what the Congress resolved after.

- VIII. To examine and approve the accounts that shall be given in of the recollection and investment of the own and duties.
- IX. To consult to the government all the matters in which it demands so.
- X. To excite the Supreme Conservative Power to declare when the President of the Republic is in the case of renewing the entire Ministry for the sake of the Nation.
- XI. To make the elections of the President of the Republic, members of the Supreme Conservative Power, Senators and individuals of the Supreme Court of Justice and Martial, according to what is prevented in the respective constitutional laws.
- XII. To propose to the general government the list of three individuals for the appointment of the governor.
- XIII. To exercise, together with the general government, the exclusive of which articles 12 and 22 of the fifth constitutional Law talk about, in the appointment of the magistrates and judges.
- XIV. To form and direct annually the statistics of its department of general government, with the observation that they believe to be convenient to the good and progress of the department.

Article 15. Restrictions of the governors and departmental Boards:

- I. Not even with the title of arbitrators, and any other, might they impose contributions, but in the terms expressed in this Law, neither destine them to different purposes than those appointed by the latter.

- II. They might not adopt any measure for the raising of the army, but in the case that they are expressly authorized by the laws for this purpose, or in the case that it is ordered to them by the General Government.
- III. They might not use other faculties than those appointed in this Law, the contravention to this part of the article and the two previous being case of the most slender responsibility.
- IV. The individuals of the departmental boards might not renounce their entrustments, but with legal cause, evaluated by the same Board, in agreement with the Governor.

Article 16. In each head of district there shall be a prefect appointed by the Governor, and confirmed by the General Government: he shall last four years, and might be reelected.

Article 17. To be prefect it is necessary:

- I. To be Mexican citizen in exercise of his rights.
- II. To be natural or neighbor of the department.
- III. Older than thirty years.
- IV. To own a capital, physic or moral, that produces him at least one thousand annual pesos.

Article 18. It is responsibility of the prefects:

- I. Take care of the order and public tranquility in their district, abiding entirely by the Governor.
- II. Observe and make observe the orders of the particular government of the department.
- III. To look after the compliance of the obligations of the Town Councils, and in general, after everything concerning to the police diligence.

Article 19. In each head of party there shall be a sub prefect, appointed by the prefect and approved by the governor: he shall last two years and might be reelected.

Article 20. To be sub prefect it is necessary:

- I. To be Mexican citizen in exercise of his rights.
- II. Neighbor of the head or party.
- III. Older than twenty five years.
- IV. To own a capital, physical or moral, that produces him at least five hundred pesos annually.

Article 21. The functions of the sub prefect in the party are the same as those of the prefect in the district, abiding by the latter, and through him by the governor.

Article 22. There shall be Town Councils in the capitals of department, in the places that there were in the year 1808, in the ports whose population reaches four thousand souls, and in the towns that have eight thousand. In those that do not have that population, there shall be peace judges, in charge also of the police, in the number that the departmental boards designate, in agreement with the respective governors.

Article 23. The Town Councils shall be elected popularly in the terms that a Law shall arrange. The number of mayors, regents and syndics shall be stated by the respective departmental Boards, in agreement with the governor, without them being able to exceed: the mayors, of six; the regents of twelve; and the last ones of two.

Article 24. To be individual of the Town Council it is necessary:

- I. To be Mexican citizen in the exercise of his rights.
- II. To be neighbor of the same town.
- III. To be older than twenty five years.
- IV. To have a capital, physical or moral, that produces him at least five hundred annual pesos.

Article 25. The Town Councils shall be in charge of: the health and comfort police, take care of the prisons, of the hospitals and charity Chambers that are not of particular foundation, of the schools of primary teaching that are paid from the common funds, the construction and repair of bridges, roads and ways, and of the recollection and investment of the own and duties, to promote the overtaking of the agriculture, industry and commerce, and aid the mayors in the preservation of the tranquility and public order in their neighborhood, everything with absolute submission to the laws and regulations.

Article 26. The mayors shall be in charge of: exercising in their towns the office of conciliators, to determine in the oral trials, dictate in the litigious matters the very urgent providences that do not allow to occur before the judge of first instance, to instruct in the same case the first diligences in the criminal causes, to practice those that the respective tribunals or judges entrust them, and to look after the public tranquility and order, with submission in this part to the sub prefects, and through them to the respective superior authorities.

Article 27. The peace judges en charge as well of the police shall be proposed by the sub prefect, appointed by the prefect, and approved by the governor: they shall last a year and might be reelected.

Article 28. To be peace judge it is necessary:

- I. To be Mexican citizen in exercise of his rights.
- II. To be neighbor of the town.
- III. To be older than twenty five years.

Article 29. These judges shall exercise, in their towns, the same faculties that are left detailed for the mayors and designated for the Town Councils, with submission in this to the sub prefects, and through them to the respective superior authorities.

In the places in which they do not reach thousand souls, the functions of the peace judges shall be reduced to take care of the public tranquility and of the police, and to practice the diligences, both in the civil and criminal, that because of their urgency do not allow to occur before the most immediate respective authorities.

Article 30. The positions of sub prefects, mayors, peace judges in charge of the police, regents and syndics, are public; they are not renounceable without legal cause, approved by the governor or in case of reelection.

Article 31. A secondary Law shall detail everything leading to the exercise of the positions of prefects, sub prefects, peace judges, mayors, regents and syndics, the manner to substitute their absences, the severance pay that shall be given to the governors, members of the departmental boards and prefects, and the exemptions of which the rest shall enjoy.

SEVENTH

Variations of the Constitutional Laws

Article 1. In six years, counting since the publication of this Constitution, no alteration of any of its articles might be done.

Article 2. In the variations that once passed that term are attempted in them, they shall be indispensably observed the requirements prevented in the article 12, paragraph 10 of the second constitutional Law, in the article 26, paragraph 1 and 3, in articles 28, 29 and 38 of the third constitutional Law, and in the article 17, paragraph 2 of the fourth.

Article 3. In the initiatives of variation, as well as in those of all the other laws, the Chamber of Deputies might not only alter the redaction, but even addition and modify to give perfection to the project.

Article 4. The projects of variation that were in the case of the article 38 of the third constitutional Law, shall abide by what it prevented in it.

Article 5. It is only up to the General Congress to resolve the doubts of the constitutional articles.

Article 6. Every public server, at the moment of taking possession, shall present oath to keep and make keep, according to what corresponds to him, the constitutional laws, and shall be responsible for the infractions that he commits or does not prevent.

Transitory Articles

Article 1. On the next day to that which shall be appointed in the summon for the election of deputies, the election of the departmental boards shall take place, evaluating these elections, where there was no outgoing board, the Town Council of the capital with submission to what the Senate shall resolve.

Article 2. The Congress shall pre-state the days in which the electoral acts of which the article 8 of the third constitutional Law, and the 2nd of the fourth shall take place: the Government shall assign the day in which the ones of which paragraphs 1 and 2, article 3 of the second constitutional Law talk about shall be executed.

Article 3. A commission of nineteen representatives, appointed by the Congress, upon plurality of votes, shall carry out in this time the electoral functions that the Chamber of Deputies should carry out alone, through the paragraph 6, article 3 of the second constitutional Law, and 1st of the article 8 of the third; and those that corresponded only to the Senate by the fourth Law, and article 5, 10, 11 and 14 of the fifth constitutional Law.

Article 4. The entire Congress shall carry out the electoral functions that, through paragraph 6, article 3 of the second constitutional Law, correspond only to the Senate; those that correspond to the Supreme Conservative Power, through paragraphs 3 and 4, article 8 of the third Law, and those that correspond only to the Chamber of Deputies in the article 2 of the fourth, and in the article 5, 10, 11 and 14 of the fifth constitutional Law.

Article 5. The appointment, of which paragraph 12, article 12 of the second constitutional Law talks about, shall do it for this time the Supreme Conservative Power, within the first month of its installation, and in the same day the latter shall do the election of president and Secretary, that the article 20 of the second constitutional Law prescribes.

Article 6. The first Constitutional Congress shall open its session the day that the notification shall appoint, and shall end the first period of them in June 30th, 1837.

Article 7. In the organization of the superior tribunals of the departments, for this first time it shall be respected the property of the current magistrates, in the terms that a Law shall prevent.

The latter shall also determine the manner with which they shall be elected, abiding, in as much as it is possible, to the constitutional preventions.

Articles 8. The duration periods that the constitutional laws pre-state to all the servers that shall be elected according to the present preventions, shall start counting since January 1st, 1837, whatever it is the day in which they started to exercise those appointed.

México, December twenty nine of eighteen hundred thirty six.

Atenógenes Castillero, representative for the Department of Puebla, President. Tirso Vejo, representative for the department of San Luis Potosí, Vicepresident. For the department of California, José Antonio Carrillo. José Mariano Monterde. For the department of Chiapas, Ignacio Loperena. For the department of Chihuahua, José Antonio Arce. For the departments of Coahuila and Texas, Víctor Blanco. For the department of Durango, Pedro Ahumada. Guadalupe Victoria. For the department of Guanajuato, Mariano Chico. Manuel de Cortázar. José Francisco Nájera. Luis de Portugal. Ángel María Salgado. For the department of México, Basilio Arriaga. Ángel Besares. Juan Manuel de Elizalde. José María Guerrero. José Francisco Monter y Otamendi. José Ignacio Ormaechea. Francisco Patiño y Domínguez. Agustín Pérez de Lebríja. Jerónimo Villamil. Rafael e Irazbal. For the department of Michoacán, José Ignacio de Anzorena. Antonio Cumplido. Isidro Huarte. José R. Malo. Teodoro Mendoza. Luis

Gonzaga Movellán. Francisco Manuel González de Tagle. For the department of Oaxaca, Carlos María de Bustamante. Demetrio del Castillo. Manuel Miranda. Manuel Régules. José Francisco Irigoyen. For the department of Puebla, Rafael Adorno. José Rafael Barruecos. José González y Ojeda. Manuel M. Gorozpe. Antonio Montoya. José María Santelices. Miguel Valentín. For the department of Querétaro, Mariano Oyarzabal. Ángel García Quintanar. Felipe Sierra. For the department of San Luis Potosí, Mariano Esparza. Mariano Medina y Madrid. Antonio Eduardo Valdés. For the department of Sonora, Francisco G. Conde. For the department of Tabasco, Juan de Dios Salazar. For the department of Tamaulipas, Juan Martín de la Garza Flores. José Antonio Quintero. For the department of Veracruz, José María Becerra. José Manuel Moreno Cora. For the department of Jalisco, Pedro Barajas. José María Bravo. José María Echauri. Antonio Pacheco Leal. José Cirilo Gómez y Anaya. José Miguel Pacheco. Joaquín Parres. For the department of Yucatán, Wenceslao Alpuche. Néstor Escudero. Gerónimo López de Llergo. Tomás Requena. For the department of Zacatecas, José María del Castillo. Casiano G. Veyna. Pedro María Ramírez. Julián Rivero. José C. Romo. Rafael de Montalvo, representative of the state of Yucatán, Secretary. Manuel Larráinzar, representative for the department of Chiapas, Secretary. Bernardo Guimbarda, representative for the State of Nuevo Leon, Secretary. Luis Morales e Ibáñez de Corbera, representative for the State of Oaxaca, Secretary.

Therefore, I order it is printed, published, circulated, and given the due compliance. National Government Palace in México, December 30th, 1836. José Justo Corro. To Don José María Ortiz Monasterio.

5. BASES ORGÁNICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 1843

5. I. EXTRACTO DE LAS BASES ORGÁNICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 1843

TÍTULO I DE LA NACIÓN MEXICANA, SU TERRITORIO FORMA DE GOBIERNO Y RELIGIÓN

- Art. 1.* Forma de Gobierno de la Nación Mexicana.
- Art. 2.* Extensión del Territorio de la República.
- Art. 3.* Número de Departamentos y sus límites.
- Art. 4.* División del Territorio de la República por Departamentos.
- Art. 5.* División de Poderes.
- Art. 6.* Religión católica.

TÍTULO II DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

- Art. 7.* Calidad de habitante de la República.
- Art. 8.* Obligaciones de los habitantes de la República.
- Art. 9.* Derechos de los habitantes.
- Art. 10.* Derechos de los extranjeros.

TÍTULO III DE LOS MEXICANOS, CIUDADANOS MEXICANOS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UNOS Y OTROS

- Art. 11.* Calidad de mexicano.
- Art. 12.* Derechos de los nacidos en el territorio de padre extranjero y fuera de él de padre mexicano.
- Art. 13.* Requisitos para dar carta de naturaleza a extranjeros.
- Art. 14.* Obligación del mexicano.
- Art. 15.* Derecho de los mexicanos.
- Art. 16.* Pérdida de la calidad de mexicano.

- Art. 17.* Rehabilitación de la calidad de mexicano.
Art. 18. Calidad de ciudadano mexicano.
Art. 19. Derechos de los ciudadanos.
Art. 20. Obligaciones del ciudadano.
Art. 21. Suspensión de los derechos del ciudadano.
Art. 22. Pérdida de los derechos del ciudadano.
Art. 23. Casos en que se requiere declaración de autoridad para privar de derechos.
Art. 24. Rehabilitación de derechos de ciudadano.

TÍTULO IV PODER LEGISLATIVO

- Art. 25.* Composición del Poder Legislativo.

Cámara de Diputados

- Art. 26.* Elección de Diputados.
Art. 27. Nombramiento de un Diputado por fracción.
Art. 28. Requisito para ser Diputado.
Art. 29. Restricciones para ser Diputado.
Art. 30. Renovación de la Cámara de Diputados.

Cámara de Senadores

- Art. 31.* Composición de la Cámara de Senadores.
Art. 32. Elección de los Senadores.
Art. 33. Senadores por cada Asamblea Departamental.
Art. 34. Las actas de las elecciones.
Art. 35. Cómputo de votos.
Art. 36. Sufragio para la elección del tercio de Senadores.
Art. 37. Elección del número que corresponda de entre los postulados.
Art. 38. Elección definitiva de Senadores por parte del Presidente de la República.
Art. 39. Postulación de Senadores.
Art. 40. Elección de Senadores por parte de las Asambleas Departamentales.
Art. 41. Cómputo de los votos de las Asambleas Departamentales.
Art. 42. Requisitos para ser Senador.
Art. 43. Renovación de la Cámara de Senadores.
Art. 44. Primera y segunda renovación.
Art. 45. Procedimiento de renovación.
Art. 46. Vacante del Senado.

De las Sesiones

Art. 47. Período de Sesiones.

Art. 48. Sesiones Extraordinarias.

Art. 49. Actividades exclusivas del segundo periodo de sesiones.

Art. 50. Continuación de Sesiones del Senado.

Art. 51. Prórroga de Sesiones Ordinarias.

Art. 52. Funciones electorales, económicas y de jurado del Congreso.

Formación de leyes

Art. 53. Iniciativa de leyes.

Art. 54. Consideración de las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial y Asamblea Departamental.

Art. 55. Las iniciativas serán presentadas a la Cámara de Diputados.

Art. 56. Revisión del Senado.

Art. 57. Aprobación, modificación o adición por parte del Senado.

Art. 58. Presencia requerida de la Cámara para la discusión de toda ley o Decreto.

Art. 59. Aprobación y publicación del proyecto de ley.

Art. 60. Publicación por parte del Presidente de la República.

Art. 61. Casos en que el senado reprueba o reforma una parte del Proyecto.

Art. 62. Proyectos desechados.

Art. 63. Interpretación, modificación o revocación de leyes.

Art. 64. Carácter de las resoluciones del Congreso.

De las atribuciones y restricciones del Congreso

Art. 65. Publicación de las leyes y decretos.

Art. 66. Facultades del Congreso.

Art. 67. Impedimentos del Congreso.

Facultades económicas de ambas Cámaras y particulares de cada una

Art. 68. Facultades de las Cámaras.

Art. 69. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados.

Art. 70. Aprobación de nombramientos.

Art. 71. Reglamento interior del Congreso.

Art. 72. Reglamento del 23 de diciembre de 1824.

Art. 73. Inviolabilidad por opiniones de Diputados y Senadores.

Art. 74. Forma de juzgar a Diputados y Senadores durante su encargo.

Art. 75. Comisiones o encargos de los Diputados y Senadores.

Art. 76. Acusaciones contra los individuos de las Cámaras.

Art. 77. Calidad de Gran Jurado por parte de las Cámaras.

Art. 78. Las dos Cámaras reunidas formarán un jurado en las acusaciones contra el Presidente.

Art. 79. Reunión para cómputo de votos.

Diputación Permanente

Art. 80. Elección de cuatro Senadores y cinco Diputados para la Diputación Permanente.

Art. 81. Formación de la Diputación Permanente.

Art. 82. Objeto de la Diputación Permanente.

TÍTULO V

PODER EJECUTIVO

Art. 83. Supremo Poder Ejecutivo.

Art. 84. Requisitos para ser Presidente.

Art. 85. El Presidente como Jefe de la Administración General de la República.

Art. 86. Obligaciones del Presidente.

Art. 87. Facultades del Presidente de la República.

Art. 88. Obligación del Presidente de oír la opinión del Consejo.

Art. 89. Limitaciones del Presidente.

Art. 90. Prerrogativas del Presidente.

Art. 91. Faltas temporales del Presidente.

Art. 92. El Presidente interino.

Del Ministerio

Art. 93. Despacho de los negocios del gobierno.

Art. 94. Requisitos para ser Ministro.

Art. 95. Obligaciones de cada uno de los Ministros.

Art. 96. Negocios del gobierno girados por el Ministerio en su ramo.

Art. 97. Obediencia de las autoridades de la República a las órdenes de los secretarios.

Art. 98. Derecho de los Ministros para concurrir a las Cámaras.

Art. 99. Formación del Reglamento del Ministerio.

Art. 100. Responsabilidad de los Ministros por autorización de actos del Presidente.

Art. 101. Reunión de los Ministros.

Art. 102. Responsabilidad de sus resoluciones.

Art. 103. Facultad del Presidente para resolver lo que le parezca.

Del Consejo de Gobierno

Art. 104. Composición del Consejo de Gobierno.

Art. 105. Requisitos para ser Consejero.

- Art. 106.* Nombramiento del Presidente del Consejo.
Art. 107. Perpetuidad del cargo de Consejero.
Art. 108. Restricciones de los Consejeros.
Art. 109. Responsabilidad de los Consejeros.
Art. 110. Reglamento Interior del Consejo.
Art. 111. Obligación del Consejo.
Art. 112. Atribución del Consejo.
Art. 113. Consejeros Supernumerarios.
Art. 114. Atribuciones de los Consejeros Supernumerarios.

TÍTULO VI DEL PODER JUDICIAL

- Art. 115.* Composición del Poder Judicial.
Art. 116. Composición de la Corte Suprema de Justicia.
Art. 117. Requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia

- Art. 118.* Facultades de la Suprema Corte de Justicia.
Art. 119. Limitaciones de la Suprema Corte de Justicia.
Art. 120. Limitaciones de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Art. 121. Causas civiles de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Corte Marcial

- Art. 122.* Composición de la Corte Marcial.
Art. 123. Organización de la Corte Marcial.

Tribunal para juzgar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia

- Art. 124.* Juicio a los Ministros.
Art. 125. Distribución en tres Salas del número de individuos.
Art. 126. Recusación.
Art. 127. Hueco de las recusaciones.
Art. 128. Elección de individuos a falta de letrados.
Art. 129. Complemento del número de letrados.
Art. 130. Los Jueces nombrados no votarán en el jurado de acusación.

TÍTULO VII GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS

- Art. 131.* Asamblea de los Departamentos.
Art. 132. Requisitos para ser vocal de las Asambleas Departamentales.

Art. 133. Duración de los Vocales.

Art. 134. Facultades de las Asambleas Departamentales.

Art. 135. Obligaciones de las Asambleas Departamentales.

De los Gobernadores

Art. 136. Gobernadores de los Departamentos.

Art. 137. Requisitos para ser Gobernador.

Art. 138. Suplencias de los Gobernadores.

Art. 139. La propuesta para Gobernador.

Art. 140. Obligaciones de los Gobernadores de los Departamentos.

Art. 141. Los Gobernadores como conducto de comunicación con las supremas autoridades de la República.

Art. 142. Atribuciones de los Gobernadores de Departamento.

Art. 143. Asistencia de la fuerza armada.

Art. 144. Designación de las facultades y atribuciones de los Gobernadores.

Art. 145. Juicio por causas civiles de los Gobernadores.

Administración de Justicia de los Departamentos

Art. 146. Tribunales y Jueces de los Departamentos.

TÍTULO VIII

PODER ELECTORAL

Art. 147. División en secciones de las poblaciones de la República.

Art. 148. Formación del Colegio Electoral de los Departamentos.

Art. 149. Función del Colegio Electoral.

Art. 150. Requisitos para ser elector primario o secundario.

Art. 151. Celebración de las elecciones.

Art. 152. Votación de los individuos pertenecientes a la milicia.

Art. 153. Validez de la elección.

Art. 154. Caso de empate.

Art. 155. Renovación del censo de la población de los Departamentos.

Art. 156. Celebración de las elecciones primarias y las secundarias.

Art. 157. Calificación sobre la validez de las elecciones.

Art. 158. Sufragio para Presidente de acuerdo a los votos de cada Asamblea Departamental.

Art. 159. Remisión del acta de elección.

Art. 160. Declaración de Presidente.

Art. 161. Elección del Presidente de acuerdo al número de votos.

Art. 162. Falta de mayoría respectiva.

Art. 163. Mayoría absoluta de votos y caso de empate.

- Art. 164.* Elección del Presidente en otros días que los señalados.
- Art. 165.* Fecha de renovación del Presidente.
- Art. 166.* Caso de vacantes en la Suprema Corte de Justicia.
- Art. 167.* Elecciones de los Senadores correspondientes al tercio que debe renovarse cada dos años.
- Art. 168.* Nulidad de las elecciones.
- Art. 169.* Prelación de los nombramientos.
- Art. 170.* Renovación de los Gobernadores de los Departamentos y su toma de posesión.
- Art. 171.* Decretos del Congreso y el Senado.
- Art. 172.* Días señalados de elecciones para cubrir vacantes.
- Art. 173.* Días designados para elecciones.
- Art. 174.* Omisión de las Elecciones Primarias, Secundarias o de Departamento.

TÍTULO IX DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

- Art. 175.* Disposición de cárceles.
- Art. 176.* No se exigirá juramento en materia civil.
- Art. 177.* Término para tomar la declaración preparatoria.
- Art. 178.* Confesión del reo.
- Art. 179.* Prohibición de la pena de confiscación de bienes.
- Art. 180.* La nota de infamia no es trascendental.
- Art. 181.* Pena de muerte.
- Art. 182.* Trámites esenciales en cada juicio.
- Art. 183.* No podrá haber más de tres instancias.
- Art. 184.* Imposibilidad de Magistrados y Jueces para fallar en más de dos instancias.
- Art. 185.* Intervención de los Jueces Árbitros.
- Art. 186.* Medio de conciliación en pleito civil o criminal.
- Art. 187.* Uniformidad de códigos.
- Art. 188.* Perpetuidad de Magistrados de los Tribunales Superiores y Jueces letrados.
- Art. 189.* Casos de suspensión de Jueces y Magistrados.
- Art. 190.* Decretos del Congreso General respecto a la responsabilidad del Presidente para Magistrados y Jueces.
- Art. 191.* Decretos del Congreso General respecto a la responsabilidad en que incurran los magistrados.
- Art. 192.* Juzgados fijos o ambulantes establecidos por el Congreso.
- Art. 193.* Modo de proceder de estos tribunales.

- Art. 194.* Establecimiento de fiscales generales.
- Art. 195.* Delitos de Imprenta.
- Art. 196.* Abusos de la Libertad de Imprenta.
- Art. 197.* Acción contra funcionarios por prevaricación, por cohecho, soborno o baratería.
- Art. 198.* Suspensión de formalidades prescritas en la Constitución.

TÍTULO X DE LA HACIENDA PÚBLICA

- Art. 199.* Hacienda pública y su división.
- Art. 200.* Ley que regulará la Hacienda General.

TÍTULO XI DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DE ESTAS BASES

- Art. 201.* Juramento de los funcionarios públicos antes de tomar posesión.
- Art. 202.* Se podrá hacer alteraciones o reformas a estas bases en cualquier tiempo. El Ejecutivo tendrá esta facultad.

5.2. BASES ORGÁNICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

México, 12 de junio de 1843

202 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO I.

DE LA NACIÓN MEXICANA, SU TERRITORIO, FORMA DE GOBIERNO
Y RELIGIÓN

TÍTULO II.

DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

TÍTULO III.

DE LOS MEXICANOS, CIUDADANOS MEXICANOS Y DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE UNOS Y OTROS

TÍTULO IV.

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Formación de Leyes

De las Atribuciones y Restricciones del Congreso

Facultades Económicas de ambas Cámaras y peculiares de cada una

Diputación Permanente

TÍTULO V.
PODER EJECUTIVO

Del Ministerio
Del Consejo de Gobierno

TÍTULO VI.
DEL PODER JUDICIAL

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia
Corte Marcial
Tribunal para Juzgar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia

TÍTULO VII.
GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS

De los Gobernadores
Administración de Justicia en los Departamentos

TÍTULO VIII.
PODER ELECTORAL

TÍTULO IX.
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TÍTULO X.
DE LA HACIENDA PÚBLICA

TÍTULO XI.
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DE ESTAS BASES

BASES ORGÁNICAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

Acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el supremo gobierno provisional con arreglo a los mismos decretos del día 15 de junio del año de 1843, y publicada por bando nacional el día 14 del mismo.

El C. VALENTÍN CANALIZO, General de División, Gobernador y Comandante General del Departamento de México.

Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobernación se me ha dirigido, con fecha 12 del actual, el decreto que sigue:

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA, Benemérito de la Patria, General de División y Presidente Provisional de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:

Que la Honorable Junta Nacional Legislativa, instituida conforme a los supremos decretos de 19 a 23 de diciembre de 1842, ha acordado, y yo sancionado con arreglo a los mismos decretos, las siguientes:

BASES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

TÍTULO I

DE LA NACIÓN MEXICANA, SU TERRITORIO, FORMA DE GOBIERNO Y RELIGIÓN

1. La Nación Mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como independiente, libre y soberana, adopta para su gobierno la forma de República representativa popular.

2. El territorio de la República comprende lo que fue antes virreinato de Nueva España, capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas provincias internas de Oriente y Occidente, Baja y Alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos e islas adyacentes en ambos mares.

3. El número de los departamentos y sus límites se arreglarán definitivamente por una ley, continuando por ahora como existen. Las Californias y Nuevo México podrán ser administrados con sujeción más inmediata a las supremas autoridades, que el resto de los departamentos, si así pareciere al Congreso, el cual dará las reglas para su administración. Lo mismo podrá verificarse en uno u otro punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares.

4. El territorio de la República se dividirá en departamentos, y éstos en distritos, partidos y municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme a la segunda parte del artículo anterior, se denominarán territorios.

5. La suma de todo el poder público reside esencialmente en la Nación y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No se reunirán dos o más

poderes en una sola corporación o persona, ni se depositará el Legislativo en un individuo.

6. La Nación profesa y protege la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquiera otra.

TÍTULO II DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA

7. Son habitantes de la República todos los que residen en puntos que ella reconoce por su territorio.

8. Son obligaciones de los habitantes de la República, observar la Constitución y las leyes, y obedecer a las autoridades.

9. Derechos de los habitantes de la República:

- I. Ninguno es esclavo en el territorio de la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase libre, quedando bajo la protección de las leyes.
- II. Ninguno puede ser molestado por sus opiniones: todos tienen derecho para imprimirlas y circularlas sin necesidad de previa calificación o censura. No se exigirá fianza a los autores, editores o impresores.
- III. Los escritos que versen sobre el dogma religioso o las sagradas escrituras, se sujetarán a las disposiciones de las leyes vigentes: en ningún caso será permitido escribir sobre la vida privada.
- IV. En todo juicio sobre delitos de imprenta intervendrán jueces del hecho, que harán las calificaciones de acusación y de sentencia.
- V. A ninguno se aprehenderá sino por mandato de algún funcionario a quien la ley dé autoridad para ello; excepto el caso de delito in fraganti, en que puede hacerlo cualquiera del pueblo, poniendo al aprehendido inmediatamente en custodia a disposición de su juez.
- VI. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, y sólo cuando obren contra él indicios suficientes para presumirlo autor del delito que se persigue. Si los indicios se corroboraren legalmente, de modo que presten mérito para creer que el detenido cometió el hecho criminal, podrá decretarse la prisión.
- VII. Ninguno será detenido más de tres días por la autoridad política sin ser entregado con los datos correspondientes al juez de su fuero, ni éste lo tendrá en su poder más de cinco días sin declararlo bien preso. Si el mismo juez hubiere verificado la aprehensión, o hubiere recibido al reo antes de cumplirse tres días de su detención, dentro de aquel término se dará el auto de bien preso, de modo que no resulte detenido más de ocho. El simple lapso de estos términos hace arbitraria la detención, y responsable a la autoridad que la cometa, y a la superior que deje sin castigo este delito.

- VIII. Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad, según las leyes vigentes.
 - IX. En cualquier estado de la causa, en que aparezca que al reo no puede imponerse pena corporal, será puesto en libertad, dando fianza.
 - X. Ninguno podrá ser estrechado por clase alguna de apremio o coacción a la confesión del hecho por que se le juzga.
 - XI. No será cateada la casa, ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos en las leyes.
 - XII. A ninguno podrá gravarse con otras contribuciones que las establecidas o autorizadas por el Poder Legislativo o por las Asambleas departamentales en uso de las facultades que les conceden estas bases.
 - XIII. La propiedad es inviolable, sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y ninguno puede ser privado ni turbado en el libre uso y aprovechamiento de la que le corresponda según las leyes, ya consista en cosas, acciones o derechos, o en el ejercicio de una profesión o industria que le hubiere garantizado la Ley. Cuando algún objeto de utilidad exigiere su ocupación, se hará ésta, previa la competente indemnización, en el modo que disponga la ley.
 - XIV. A ningún mexicano se le podrá impedir, la traslación de su persona y bienes a otro país, con tal de que no deje descubierta en la República responsabilidad de ningún género, y satisfaga por la extracción de sus intereses los derechos que establezcan las leyes.
10. Los extranjeros gozarán de los derechos que les concedan las leyes y sus respectivos tratados.

TÍTULO III

DE LOS MEXICANOS, CIUDADANOS MEXICANOS Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UNOS Y OTROS

II. Son mexicanos:

- I. Todos los nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y los que nacieren fuera de ella de padres mexicanos.
- II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821 y no hubieren renunciado su calidad de mexicanos: los que siendo naturales de Centro América cuando perteneció a la Nación Mexicana se hallaban en el territorio de esta, y desde entonces han continuado residiendo en él.

- III. Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta de naturaleza conforme a las leyes.
12. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, y fuera de ella de padre mexicano que no estuviere en servicio de la República, para gozar de los derechos de mexicano, han de manifestar que así lo quieren. La ley designará el modo de verificarla esta manifestación y la edad en que deba hacerse.
13. A los extranjeros casados o que se casaren con mexicanas, o que fueren empleados en servicio y utilidad de la República, o en los establecimientos industriales de ella, o que adquieren bienes raíces en la misma, se les dará carta de naturaleza sin otro requisito si la pidieren.
14. Es obligación del mexicano, contribuir a la defensa y a los gastos de la Nación.
15. Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusivamente empleos y comisiones de nombramientos de cualquiera autoridad, cuando para su ejercicio no se exija la calidad de ciudadano: si se requiere la circunstancia de pericia, serán preferidos los mexicanos a los extranjeros en igualdad de circunstancias.
16. Se pierde la calidad de mexicano:
- I. Por naturalizarse en país extranjero.
 - II. Por servir bajo la bandera de otra Nación sin licencia del Gobierno.
 - III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso.
17. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el Congreso.
18. Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Los Congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los departamentos, la renta que en cada uno de estos haya de requerirse para gozar los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante los que llegaren a la edad que se exige para ser ciudadano, además de la renta dicha antes para entrar en ejercicio de sus derechos políticos, es necesario que sepan leer y escribir.
19. Son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las elecciones populares, y cuando en ellos concurren los requisitos señalados por las leyes, el de ser nombrados para los cargos públicos y los de elección popular.
20. Son obligaciones del ciudadano:
- I. Adscribirse en el padrón de su municipalidad.
 - II. Votar en las elecciones populares.
 - III. Desempeñar los cargos de elección popular cuando no tengan impedimento físico o moral, o excepción legal.
21. Se suspenden los derechos de ciudadanos:
- I. Por el estado de sirviente doméstico.
 - II. Por el de interdicción legal.

- III. Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de prisión, o desde la declaración de haber lugar a formación de causa a los funcionarios públicos hasta la sentencia, si fuere absolutoria.
 - IV. Por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, o por tener casa de juegos prohibidos.
 - V. Por no desempeñar los cargos de elección popular, careciendo de causa justificada, en cuyo caso durará la suspensión el tiempo que debería desempeñar el encargo.
22. Se pierden los derechos de ciudadano:
- I. Por sentencia que imponga pena infamante.
 - II. Por quiebra declarada fraudulenta.
 - III. Por mala versación, o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo público.
 - IV. Por el estado religioso.
23. Para que un ciudadano se tenga por supuesto en los casos 2º, 4º y 5º del art. 21, o privado de los derechos de tal en el 3º del artículo anterior, se requiere declaración de autoridad competente en la forma que disponga la ley.
24. El ciudadano que haya perdido sus derechos puede ser rehabilitado por el Congreso.

TÍTULO IV PODER LEGISLATIVO

25. El Poder Legislativo se depositará en un Congreso dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, y en el Presidente de la República por lo que respecta a la sanción de las leyes.

Cámara de Diputados

26. Esta Cámara se compondrá de diputados elegidos por los departamentos, a razón de uno por cada setenta mil habitantes: el departamento que no los tenga elegirá siempre un diputado.

27. También se nombrará un diputado por cada fracción que pase de treinta y cinco mil habitantes, y por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

28. Para ser diputado se requiere:

- I. Ser natural del departamento que lo elige, o vecino de él con residencia de tres años por lo menos.
- II. Estar en ejercicio de los derechos de ciudadano.
- III. Tener treinta años de edad cumplidos al tiempo de la elección.
- IV. Tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente de capital físico o moral.

29. No pueden ser elegidos diputados por ningún departamento: el Presidente de la República, los secretarios del Despacho y oficiales de sus secretarías, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, los M. RR., arzobispos, y RR., obispos, gobernadores de mitras, provisos y vicarios generales, Gobernadores, y los comandantes generales no pueden serlo por los departamentos donde ejerzan su jurisdicción o autoridad.

30. La Cámara de Diputados se renovará por mitad cada dos años, saliendo los segundos nombrados por cada departamento en la primera renovación. Si fuere número impar, saldrá primero la parte mayor, y seguirán después alternándose la parte menor y la mayor. Los departamentos que nombren un solo diputado, los renovarán cada dos años.

Cámara de Senadores

31. Esta Cámara se compondrá de sesenta y tres individuos.

32. Dos tercios de senadores se elegirán por las Asambleas Departamentales, el otro tercio por la Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, en la forma que se dirá después.

33. Cada Asamblea Departamental elegirá cuarenta y dos senadores por la primera vez, y en lo sucesivo el número que le corresponda para el tercio de senadores que hubiere de renovarse.

34. Las actas de las elecciones, de que habla el artículo anterior, se remitirán por duplicado en la primera elección al consejo de representantes, y en lo sucesivo a la Cámara de Senadores, o Diputación Permanente.

35. Por la primera vez el consejo de representantes, y en lo sucesivo la Cámara de Senadores computará los votos dados por las Asambleas departamentales, y declarará senadores a los que hayan reunido el mayor número hasta completar los que deben ser elegidos. En caso de empate, entre dos o más individuos, decidirá la suerte.

36. Para la elección del tercio de senadores que corresponde postular a la Cámara de Diputados, al Presidente de la República y a la Suprema Corte de Justicia, sufragará cada una de estas autoridades un número igual al de los que hayan de ser elegidos, y la acta de elección se remitirá a la Cámara de Senadores o a la Diputación Permanente.

37. Esta Cámara elegirá de entre los postulados el número que corresponda, después de haber declarado senadores a los que hubieren reunido los sufragios de las tres autoridades postulantes.

38. Por esta primera vez el Presidente de la República en elección definitiva, y no por postulación, nombrará el tercio de senadores que en lo futuro ha de ser elegido según el artículo 32 y con las calidades que exige el artículo siguiente.

39. La Cámara de Diputados, el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, postularán para senadores precisamente sujetos que se hayan distinguido por sus servicios y méritos en la carrera civil, militar y eclesiástica.

40. Las Asambleas departamentales elegirán los senadores que les corresponde, nombrando precisamente cinco individuos de cada una de las clases siguientes: agricultores, mineros, propietarios o comerciantes, y fabricantes. La elección de los demás recaerá en personas que hayan ejercido algunos de los cargos siguientes: Presidente o Vicepresidente de la República, Secretario del Despacho por más de un año, Ministro plenipotenciario, Gobernador de antiguo Estado o Departamento por más de un año, senador al Congreso General, diputado al mismo en dos legislaturas, y antiguo Consejero de gobierno, o que sea obispo o General de División.

41. Al computarse los votos de las Asambleas departamentales, se hará con separación la de cada una de las clases expresadas en el artículo anterior, sin mezclar los votos que resulten a favor de la de una con los de la otra.

42. Para ser senador, se requiere: ser mexicano de nacimiento o estar comprendido en la parte segunda del artículo 11, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, y tener una renta anual notoria, o sueldo que no baje de dos mil pesos, a excepción de los que se elijan para llenar el número asignado a las cuatro clases de agricultores, mineros, propietarios o comerciantes y fabricantes; los cuales deberán tener además una propiedad raíz que no baje de cuarenta mil pesos.

43. La Cámara de Senadores se renovará por tercios cada dos años, eligiéndose por la de diputados, por el Presidente de la República, por la Suprema Corte de Justicia y por las Asambleas departamentales la parte que respectivamente les corresponda.

44. Para la primera renovación se sacará por suerte de entre todos los senadores el tercio que deberá salir: para la segunda se verificará entre los dos tercios que hayan quedado en la primera, y para lo sucesivo saldrán los más antiguos.

45. En cualquiera renovación de la Cámara de Senadores se procederá de modo que siempre resulten completos los dos tercios que toca elegir a las Asambleas departamentales, y el tercio que deben nombrar las supremas autoridades, y que resulten igualmente completas las clases de que habla el artículo 40.

46. Cualquier vacante que ocurra en el Senado se cubrirá por el nombramiento que hagan las autoridades a quienes corresponda, y si éstas fueren las Asambleas departamentales, lo harán según la clase a que pertenezca la vacante. El nuevamente nombrado durará el tiempo que faltaba al que va a reemplazar.

47. Tendrá el Congreso dos periodos únicos de sesiones en el año: cada uno durará tres meses: el primero comenzará el 1° de enero, y el segundo el 1° de julio.

48. Solo será convocado el Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo exija algún negocio urgente.

49. El segundo periodo de sesiones se destinará exclusivamente al examen y aprobación de los presupuestos del año siguiente, a decretar las contribuciones para cubrirlos, y al examen de la cuenta del año anterior que presente el Ministerio.

50. Sin embargo de que el Congreso General cierre sus sesiones, continuará las suyas el Senado hasta por treinta días, si tiene leyes pendientes en revisión.

51. Puede el Congreso prorrogar las sesiones ordinarias del segundo periodo por el tiempo necesario.

52. El Congreso y las Cámaras en el tiempo de prórroga de sesiones, y en las extraordinarias, pueden también ocuparse en sus funciones electorales, económicas y de jurado.

Formación de las Leyes

53. Corresponde la iniciativa de las leyes: al Presidente de la República, a los diputados y a las Asambleas departamentales en todas materias y a la Suprema Corte de Justicia en lo relativo a la administración de su ramo.

54. No podrán dejar de tomarse en consideración las iniciativas de los Poderes Ejecutivo y Judicial, las que dirigiere una Asamblea Departamental sobre asuntos privativos de su Departamento, y aquellas en que estuviere de acuerdo la mayoría de las Asambleas.

55. Toda iniciativa de ley se presentará en la Cámara de Diputados.

56. Los proyectos de ley o decreto aprobados en la Cámara de Diputados, pasarán al Senado para su revisión.

57. Si el Senado los aprobare, modificare o adicionare, volverán a la Cámara de su origen.

58. Para la discusión de toda ley o decreto en cualquier Cámara se necesita la presencia de la mitad y uno más del total de sus individuos, y para su aprobación, la mayoría absoluta de los presentes. En la segunda revisión se requieren los dos tercios de la Cámara iniciadora para ser reproducido el proyecto, y si en la Cámara revisora no llegare a dos tercios el número de los que reprobaren, modificaren o adicionaren, se tendrá por aprobado.

59. Aprobado un proyecto de ley o decreto en primera o segunda revisión, se pasará al Presidente de la República para su publicación.

60. Todas las leyes las publicará el Presidente de la República, en la forma acostumbrada, dentro de seis días de su sanción. Las demás autoridades políticas las publicarán dentro de tercero día de su recibo. Los decretos, cuyo conocimiento corresponda a determinadas autoridades o personas, bastará que se publiquen en los periódicos del Gobierno.

61. Cuando el Senado reprobare o reformare una parte del proyecto, la Cámara de Diputados se ocupará solamente de lo reprobado o reformado, sin poder alterar en manera alguna los artículos aprobados por el Senado.

62. Las proposiciones y proyectos desechados no pueden volver a proponerse en el mismo año, a no ser que sean reproducidos por nueva iniciativa de diverso origen que la primera.

63. En la interpretación, modificación, o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos, que deben observarse en su formación.

64. Toda resolución del Congreso, tendrá el carácter de ley o decreto.

De las Atribuciones y Restricciones del Congreso

65. Las leyes y decretos se publicarán bajo la siguiente fórmula:

N.N. (aquí el nombre y apellido del Presidente) Presidente de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed: Que el Congreso Nacional ha decretado y el Ejecutivo sancionado lo siguiente: (aquí el texto). Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

66. Son facultades del Congreso:

- I. Dictar las leyes a que debe arreglarse la administración pública en todos y cada uno de sus ramos, derogarlas, interpretarlas, y dispensar su observancia.
- II. Decretar anualmente los gastos que se han de hacer en el siguiente año, y las contribuciones con que deben cubrirse.
- III. Examinar y aprobar cada año la cuenta general que debe presentar el Ministerio de Hacienda por lo respectivo al año anterior.
- IV. Clasificar las rentas para los gastos generales de la Nación y los de los departamentos.
- V. Decretar el número de tropa permanente de mar y tierra, y el de la milicia activa; fijar el contingente de hombres respectivo a cada departamento, y dar reglamentos y ordenanzas para su servicio y organización.
- VI. Designar cada año el máximo de milicia activa que el Ejecutivo pueda poner sobre las armas.
- VII. Reconocer y clasificar la deuda nacional, y decretar el modo y arbitrios para autorizarla.
- VIII. Autorizar al Ejecutivo para contraer deudas sobre el crédito de la Nación, prefijando bases y designando garantías.
- IX. Aprobar toda clase de tratados que celebre el Ejecutivo con las potencias extranjeras.
- X. Aprobar su ratificación los concordatos celebrados con la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del patronato en toda la Nación.
- XI. Decretar la guerra por iniciativa del Presidente; aprobar los convenios y tratados de paz, y dar reglas para conceder patentes de corso.
- XII. Habilitar puertos para el comercio extranjero y de cabotaje, y dar al Gobierno bases y reglas generales para la formación de los aranceles de comercio.
- XIII. Determinar el peso, ley, tipo y denominación de las monedas, y decretar un sistema general de pesos y medidas.
- XIV. Conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, y la salida de tropas nacionales fuera del país.
- XV. Conceder indultos generales y amnistías cuando el bien público lo exija.

- XVI. Crear o suprimir toda clase de empleos públicos, aumentar o disminuir sus dotaciones, y fijar las reglas generales para la concesión de retiros, jubilaciones y pensiones.
- XVII. Reprobar los decretos dados por las Asambleas departamentales cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes, y en los casos prevenidos en estas bases.
- XVIII. Ampliar las facultades del Ejecutivo con sujeción al artículo 198 en los dos únicos casos de invasión extranjera, o de la sedición tan grave que haga ineficaces los medios ordinarios de reprimirla. Esta resolución se tomará por dos tercios de cada Cámara.
- XIX. Dar leyes excepcionales para la organización política de alguno o algunos departamentos, por iniciativa del Presidente de la República.

67. No puede el Congreso:

- I. Derogar, ni suspender las leyes prohibitivas de la introducción de géneros y efectos perjudiciales a la industria nacional sin el consentimiento previo de las dos terceras partes de las Asambleas departamentales.
- II. Proscribir a ningún mexicano, ni imponer pena de ninguna especie directa ni indirectamente.

A la Ley corresponde solo designar con generalidad las penas para los delitos.

- III. Dar a ninguna ley efecto retroactivo.
- IV. Suspender o minorar las garantías individuales, si no es en los casos y modo dispuestos en el artículo 198.

Facultades Económicas de ambas Cámaras y peculiares de cada una

68. Corresponde a cada una de las Cámaras, sin intervención de la otra, el arreglo de sus respectivas oficinas, el nombramiento, designación del número y dotación de los empleados en ellas, a quienes expedirá sus despachos el Presidente de la República, y cuando cada una resuelva por sí en estos puntos tendrá fuerza de ley: les corresponde, asimismo, arreglar la policía interior del local de sus sesiones: calificar las elecciones de sus individuos: resolver las dudas que ocurran sobre ellas, y todo lo que tenga relación con el desempeño de sus funciones.

69. Toca exclusivamente a la Cámara de Diputados:

- I. Vigilar, por medio de una comisión inspectora de su seno, el exacto desempeño de la contaduría mayor.
- II. Nombrar los jefes y empleados de la contaduría mayor, a los cuales dará sus despachos el Presidente de la República.

70. Toca a la Cámara de Senadores aprobar los nombramientos de plenipotenciarios, ministros y demás agentes diplomáticos y cónsules, y los de oficiales superiores del ejército y armada desde coronel inclusive arriba, y desempeñar las funciones que les señalan los artículos 36 y 37.

71. Todo lo relativo a juntas preparatorias, ceremonial, orden de debates y demás puntos conexos con el desempeño de las funciones encomendadas a las Cámaras, se fijará en el reglamento interior del Congreso.

72. Mientras el Congreso forma su reglamento, se regirá por el de 23 de diciembre de 1824.

73. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que viertan y votos que emitan en el desempeño de sus funciones, sin que en ningún tiempo, ni por autoridad alguna puedan ser molestados por esta causa.

74. Los diputados y senadores no podrán ser juzgados en sus causas criminales y civiles durante su encargo y dos meses después, sino en la forma prevenida por la Constitución y las leyes.

75. No pueden los diputados ni senadores obtener empleo o ascenso de provisión del gobierno, si no fuere de rigurosa escala; mas podrán obtener del mismo, con permiso de la Cámara respectiva y consentimiento del nombrado, comisiones o encargos de duración temporal, en cuyo caso el interesado cesará en sus antiguas funciones durante el encargo.

76. Cada una de las Cámaras conocerá de las acusaciones que se hicieren contra sus respectivos individuos para el efecto de declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

77. Cualquiera de las dos Cámaras podrá conocer en calidad de gran jurado, para el efecto de declarar si ha o no lugar a formación de causa, en las acusaciones por delitos oficiales o comunes de los secretarios del Despacho, ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial, consejeros de gobierno y de los Gobernadores de departamento.

78. Las dos Cámaras reunidas formarán jurado, con el objeto arriba expresado, en las acusaciones contra el Presidente de la República por los delitos oficiales especificados en el artículo 90, y en las que se hagan por delitos oficiales contra todo el ministerio, o contra toda la Corte Suprema de Justicia o la Marcial.

79. Se reunirán las dos Cámaras para computar los votos y declarar quien es Presidente de la República, y magistrados de la Suprema Corte de Justicia en el tiempo y modo dispuesto por estas bases, y para abrir y cerrar las sesiones.

Diputación Permanente

80. El día antes de cerrarse las sesiones de cualquier periodo del Congreso, la Cámara de Senadores elegirá cuatro individuos y la de diputados cinco.

81. Los individuos de que habla el artículo anterior, formarán la diputación permanente, que deberá durar hasta el periodo que sigue.

82. La diputación permanente tiene por objeto hacer la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando lo decrete el Gobierno; recibir las actas de elecciones de Presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia, citar a la Cámara respectiva para el desempeño de sus funciones cuando haya de ejercerlas según la Ley, y ejercer las económicas que le señale el reglamento.

TÍTULO V
PODER EJECUTIVO

83. El Supremo Poder Ejecutivo se deposita en un magistrado, que se denominará Presidente de la República. Este magistrado durará cinco años en sus funciones.

84. Para ser Presidente se requiere:

- I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de cuarenta años y residir en el territorio de la República al tiempo de la elección.
- II. Pertenecer al estado secular.

85. El Presidente es jefe de la administración general de la República, y le están encomendados especialmente el orden y tranquilidad en lo interior y en la seguridad en lo exterior.

86. Son obligaciones del Presidente:

- I. Guardar la Constitución y las leyes y hacerlas guardar por toda clase de personas sin distinción alguna.
- II. Hacer que a los tribunales se les den todos los auxilios respectivos para la ejecución de las sentencias y providencias judiciales.

87. Corresponde al Presidente de la República:

- I. Publicar y circular las leyes y decretos del Congreso Nacional y del Senado en su caso.
- II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho.
- III. Nombrar con aprobación del Senado ministros y demás agentes diplomáticos y cónsules de la República, y removerlos libremente.
- IV. Expedir órdenes y dar los reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes, sin alterarlas ni modificarlas.
- V. Decretar que se convoque al Congreso a sesiones extraordinarias, designando los únicos asuntos de que deberá ocuparse.
- VI. Nombrar los empleados y funcionarios públicos, cuyo nombramiento no esté cometido a otra autoridad, y en la forma que dispongan las bases y las leyes.
- VII. Expedir los despachos a todo empleado público cuando por la Ley no deba darlos otra autoridad.
- VIII. Suspender de sus empleos y privar, aún de la mitad de sus sueldos, hasta por tres meses, a los empleados de gobierno y hacienda infractores de sus órdenes. Si creyere que se les debe formar causa, o que es conveniente suspenderlos por tercera vez, los entregará con los datos correspondientes al juez respectivo.
- IX. Cuidar de que se administre pronta justicia por los tribunales y jueces, dirigiéndoles excitativas y pidiéndoles informes justificados sobre los puntos que estime convenientes, para el efecto de hacer que se exija la responsabilidad a los culpables.

- X. Hacer visitar, del modo que disponga la Ley, a los tribunales y juzgados, siempre que tuviere noticia de que obran con morosidad, o de que en ellos se cometen desórdenes prejudiciales a la administración de justicia: hacer que den preferencia a las causas que así lo requieran para el bien público; y pedir noticia del estado de ellas cada vez que lo crea conveniente.
- XI. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos a los que desobedecieren sus órdenes, o le faltaren al respeto debido, arreglándose a lo que dispongan las leyes.
- XII. Dar jubilaciones y retiros, conceder licencias y pensiones, con arreglo a lo que dispongan las leyes.
- XIII. Cuidar de la exactitud legal de la fabricación de la moneda.
- XIV. Cuidar de la recaudación e inversión de las rentas generales, distribuyéndolas del modo y en la forma que dispongan las leyes.
- XV. Formar los aranceles de comercio con sujeción a las bases que diere el Congreso.
- XVI. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados de paz, amistad, alianza, tregua, neutralidad armada, y demás convenios con las naciones extranjeras, sujetándolos a la aprobación del Congreso antes de su ratificación.
- XVII. Admitir ministros y demás enviados y agentes extranjeros.
- XVIII. Celebrar concordatos con la Silla Apostólica, sujetándolos a la aprobación del Congreso.
- XIX. Conceder el pase a los decretos conciliares, bulas, breves y rescriptos pontificios, o decretar su retención. Esta facultad la usará con acuerdo del Congreso, cuando se versen sobre asuntos generales; con audiencia del Consejo, si son sobre negocios particulares; y con la de la Corte de Justicia si versaren sobre puntos contenciosos. No se extiende dicha facultad a los breves sobre materias de penitenciaría, que, como dirigidos al fuero interno, no estarán sujetos a presentación.
- XX. Hacer dentro de treinta días observaciones con audiencia del Consejo a los proyectos aprobados por las Cámaras, suspendiendo su publicación; este término comenzará a contarse desde el mismo día en que los reciba. Si el proyecto aprobado fuere reproducido, el Gobierno podrá suspenderlo con audiencia del Consejo, hasta el inmediato periodo de sesiones, en que corresponda que las Cámaras puedan ocuparse del asunto, dándoles aviso de esta resolución dentro de igual término. Si fuere reproducido por los mismos dos tercios de ambas Cámaras, el Gobierno lo publicará. Cuando los treinta días de que habla este artículo concluyan estando ya cerradas las sesiones del Congreso, dirigirá el Gobierno a la Diputación Permanente las observaciones que hiciere, o el aviso que debe dar. Pasado

el referido término sin practicar nada de lo prevenido, se tendrá por acordada la sanción, y la Ley o decreto se publicará sin demora.

- XXI. Declarar la guerra en nombre de la Nación, y conceder patentes de corso.
- XXII. Disponer de la fuerza armada de mar y tierra conforme a los objetos de su institución.
- XXIII. Conceder cartas de naturalización.
- XXIV. Expeler de la República a los extranjeros no naturalizados, perniciosos a ella.
- XXV. Admitir las renunciaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y Marcial, de los individuos del Consejo, y de los Gobernadores de los Departamentos.
- XXVI. Conceder indultos particulares de la pena capital, en los casos y con las condiciones que disponga la ley.
- XXVII. Conceder privilegios exclusivos conforme a las leyes, a los inventores, introductores, o perfeccionadores, de algún arte o industria útil a la Nación.
- XXVIII. Conceder dispensas de edad y de cursos literarios, en los términos y con las circunstancias que prescriban las leyes.
- XXIX. Nombrar oradores del seno del Consejo, que concurran a las Cámaras cuando lo estimare conveniente, para manifestar o defender las opiniones del Gobierno.
- XXX. Aumentar o disminuir las fuerzas de policía de los departamentos, según lo exijan las necesidades de su institución.

88. Además de los casos expresados en estas bases, el Presidente tendrá obligación de oír la opinión del Consejo en los negocios a que se refieren las facultades 4º y 5º y 18º del artículo anterior.

89. No puede el Presidente:

- I. Mandar en persona las fuerzas de mar o tierra sin previo permiso del Congreso. El Presidente cesará en el ejercicio de sus funciones mientras mande las tropas, y sólo será reputado como general en jefe.
- II. Salir del territorio de la República durante su encargo y un año después sin permiso del Congreso.
- III. Separarse más de seis leguas del lugar de la residencia de los Supremos Poderes sin permiso del Cuerpo Legislativo.
- IV. Enajenar, ceder, permutar, o hipotecar parte alguna del territorio de la República.
- V. Ejercer ninguna de sus atribuciones sin la autorización del Secretario del Despacho del ramo respectivo.

90. Son prerrogativas del Presidente: No poder ser acusado ni procesado criminalmente durante su presidencia y un año después, sino por delitos de traición contra la independencia nacional y forma de gobierno establecida en estas bases. Tampoco

podrá ser acusado por delitos comunes, sino hasta pasado un año de haber cesado en sus funciones.

91. En las faltas temporales del Presidente de la República quedará depositado el Poder Ejecutivo en el Presidente del Consejo. Si la falta o ausencia pasare de quince días, el Senado elegirá la persona que debe reemplazarlo la cual deberá tener las cualidades que se requieren para este encargo. Si la falta es absoluta, y no ocurriere en el año en que deba hacerse la renovación, se verificará la elección en el modo prevenido en los artículos 158 y siguientes, y el nombrado durará el tiempo que falte a aquel en cuyo lugar entra.

92. El Presidente interino gozará de las mismas prerrogativas, honores y consideraciones que el propietario, sin otra limitación que reducirse a dos meses el término de que habla el artículo 90. Una ley señalará el sueldo del Presidente y el que deberá disfrutar el que le sustituya.

Del Ministerio

93. El despacho de todos los negocios del gobierno estará a cargo de cuatro ministros, que se denominarán, de relaciones exteriores, gobernación y policía; de justicia, negocios eclesiásticos, instrucción pública e industria; de hacienda, y de guerra y marina.

94. Para ser Ministro se requiere ser mexicano por nacimiento, o hallarse en el caso segundo del art. 11, y de ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.

95. Son obligaciones de cada uno de los ministros:

- I. Acordar con el Presidente el despacho de todos los negocios relativos a su ramo.
- II. Presentar anualmente a las Cámaras antes del 15 de enero una memoria especificativa del estado en que se hallen los ramos de la administración pública correspondiente a su ministerio, proponiendo en ella las reformas que estime convenientes.

El Ministro de Hacienda la presentará el 8 de julio, y con ella la cuenta general de gastos del año último, el presupuesto general de los del siguiente, y la iniciativa de las contribuciones con que deben cubrirse.

96. Todos los negocios de gobierno se girarán precisamente por el ministerio a cuyo ramo pertenezcan, sin que un Ministro pueda autorizar los que correspondan a otro.

Las órdenes que se expidieren contra esta disposición, y las del Presidente que no aparezcan con la debida autorización, no serán obedecidas ni cumplidas.

97. Todas las autoridades de la República, sin excepción alguna, prestarán cumplida obediencia a las órdenes que se les dirijan por los secretarios del Despacho, siendo libradas en la forma prescrita por estas bases.

98. Los ministros tienen derecho de concurrir a las Cámaras siempre que así lo disponga el Presidente; deberán hacerlo cuando cualquiera de ellas lo acuerde y les da-

rán de palabra o por escrito todos los informes que les pidan, salvando siempre el caso de que la revelación de un secreto comprometa el éxito de los negocios pendientes.

99. El ministerio formará un reglamento, especificando los negocios que correspondan a cada ramo, y lo presentará al Congreso dentro del primer periodo de sus sesiones para su aprobación. Este reglamento no podrá reformarse o alterarse sin permiso del Congreso.

100. Los ministros serán responsables de los actos del Presidente que autoricen con sus firmas contra la Constitución y las leyes.

101. Los ministros se reunirán en junta cuando el Presidente lo disponga, o cuando así lo pidiere el Ministro del ramo. Todos firmarán el acuerdo en el libro respectivo, anotándose los que disientan.

102. Serán responsables de las resoluciones que se tomaren en junta de ministros, los que las acordaren, y en todo caso lo será el Ministro que las autorice.

103. El Presidente, después de oír las opiniones emitidas por los ministros en la junta, es libre para resolver lo que le parezca.

Del Consejo de Gobierno

104. Habrá un Consejo de Gobierno compuesto de diez y siete vocales nombrados por el Presidente.

105. Para ser consejero se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, y haber servido sin nota por lo menos diez años en la carrera pública. El número de los consejeros se escogerá de modo que haya por lo menos tres personas que por su carrera se hayan versado en los negocios peculiares de cada ministerio.

106. El Presidente del Consejo será nombrado a principios de cada año por el Presidente de la República, de entre los vocales que sean mexicanos por nacimiento y del estado secular, a propuesta en terna del mismo Consejo.

107. El cargo de consejero es perpetuo, y sólo se perderá por sentencia ejecutoriada que imponga esta pena.

108. Los consejeros no podrán ser diputados ni senadores.

109. Los consejeros serán responsables de los dictámenes que dieren contra la Constitución y las leyes.

110. El Consejo formará su reglamento interior, y lo sujetará a la aprobación del Congreso.

111. Es obligación del Consejo dar su dictamen al gobierno en todos los asuntos que lo exijan estas bases y en los demás en que le consulte.

112. Es atribución del Consejo proponer al gobierno los reglamentos y medidas que le parezcan útiles al mejor servicio público en todos los ramos de la administración.

113. Serán consejeros supernumerarios los que hayan ejercido el cargo de Presidente de la República, los declarados beneméritos de la patria, los que hayan sido

secretarios del Despacho por más de un año, los ministros jubilados de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial, y los jefes supernumerarios de hacienda jubilados que cuenten cuarenta años cumplidos de servicio.

114. Estos suplirán las ausencias y faltas temporales de los propietarios por el orden de antigüedad; y tendrán también voto en los asuntos graves en que el gobierno quiera oír el dictamen del Consejo pleno; o cuando el mismo consejo acuerde la concurrencia de todos sus individuos.

TÍTULO VI DEL PODER JUDICIAL

115. El Poder Judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en los tribunales superiores y jueces inferiores de los departamentos, y en los demás que establezcan las leyes. Subsistirán los tribunales especiales de hacienda, comercio y minería mientras no se disponga otra cosa por las leyes.

116. La Corte Suprema de Justicia se compondrá de once ministros y un fiscal. La ley determinará el número de suplentes, sus calidades, la forma de su elección y su duración.

117. Para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia se requiere:

- I. Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos.
- II. Tener la edad de cuarenta años cumplidos.
- III. Ser abogado recibido, conforme a las leyes, y haber ejercido su profesión por espacio de diez años en la judicatura, o quince en el foro con estudio abierto.
- IV. No haber sido condenado judicialmente en proceso legal por algún crimen, o delito que tenga impuesta pena infamante.

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia

118. Son facultades de la Corte Suprema de Justicia:

- I. Conocer en todas instancias de las causas criminales que se promuevan contra los funcionarios públicos, a quienes el Congreso o las Cámaras declaren con lugar a la formación de causa, y de las civiles de los mismos.
- II. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales en que hagan de actores los funcionarios de que habla la fracción anterior, siempre que el reo lo solicite en cualquier estado del negocio, aún en el acto de citación para sentencia.
- III. Conocer en todas instancias de las causas civiles y criminales promovidas contra los ministros y demás agentes diplomáticos, y cónsules de la República.
- IV. Conocer en todas instancias de las disputas que se promuevan en tela de juicio sobre contratos autorizados por el Supremo Gobierno.

- V. Conocer de la misma manera de las demandas judiciales que un departamento intentare contra otro, o los particulares contra un departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso.
- VI. Conocer también en todas instancias de los asuntos contenciosos pertenecientes al patronato de la Nación.
- VII. Conocer de las causas llamadas de almirantazgo, presas de mar, y tierra y crímenes cometidos en alta mar.
- VIII. Conocer de las causas de responsabilidad de los magistrados de los tribunales superiores de los departamentos.
- IX. Conocer de las causas criminales que deban formarse contra los subalternos inmediatos de la Suprema Corte de Justicia por faltas, excesos, o abusos cometidos en el servicio de sus destinos.
- X. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales y juzgados de diversos departamentos o fueros.
- XI. Conocer en tercera instancia de los negocios civiles promovidos contra los Gobernadores, y de los civiles y causas criminales comunes de los magistrados superiores de los departamentos.
- XII. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las sentencias dadas en última instancia por los tribunales superiores de los departamentos. Más si conviniera a la parte, podrá interponer el recurso ante el tribunal del departamento más inmediato, siendo colegiado.
- XIII. Conocer de los recursos de fuerza de los M. RR. arzobispos y RR. obispos, provisoros y vicarios generales, y jueces eclesiásticos; más si conviniera a la parte, podrá introducirlo ante el tribunal del mismo departamento, siendo colegiado, o ante el más inmediato que lo sea.
- XIV. Oír las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y juzgándolas fundadas, iniciar la declaración correspondiente.
- XV. Nombrar todos los dependientes y subalternos de la misma Corte, a los que expedirá sus despachos el Presidente de la República.
- 119. No puede la Suprema Corte de Justicia:
 - I. Hacer reglamento alguno, ni aún sobre materias pertenecientes a la administración de justicia, ni dictar providencias que contengan disposiciones generales, que alteren o declaren las leyes.
 - II. Tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos o económicos de la Nación, o de los departamentos.
- 120. No pueden los ministros de la Corte Suprema de Justicia:
 - I. Tener comisión alguna del gobierno sin permiso del Senado.
 - II. Ser apoderados judiciales, ni asesores, ni ejercer la abogacía; sino en causa propia.
- 121. De las causas civiles de los ministros de la Suprema Corte de Justicia conocerá el tribunal de que hablan los artículos 124 y siguientes.

Corte Marcial

122. Habrá una Corte Marcial compuesta de generales efectivos y de letrados, nombrados por el Presidente de la República a propuesta en terna del Senado. Estos magistrados serán perpetuos.

123. La organización de la Corte Marcial, y el modo de conocer en las diversas clases de asuntos que le corresponden, será objeto de una ley.

Tribunal para Juzgar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia

124. Para juzgar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y Marcial, se elegirá un tribunal en esta forma. Cada bienio el segundo día de las sesiones, se insacarán todos los letrados que haya en ambas Cámaras. La de diputados sacará por suerte doce individuos, y los que resulten formarán el tribunal que conocerá las causas mencionadas.

125. Este número se distribuirá en tres salas en la forma que disponga el reglamento del Congreso.

126. El acusado y acusador pueden recusar cada uno un juez en cada sala sin expresión de causa.

127. El hueco de las recusaciones se llenará con jueces de la sala siguiente; y para los que falten en la última, se sortearán de los letrados insaculados pertenecientes a la Cámara que no haya hecho la declaración de haber lugar a la formación de causa.

128. Si faltare número de los letrados de que habla el artículo anterior, se elegirán por la Cámara respectiva de entre los demás individuos las personas que le parezcan para completar el total de jueces, no debiendo elegirse eclesiásticos.

129. Si no llegare a veinte el número de letrados insaculados de ambas Cámaras, se completará con otros individuos de las mismas, elegidos la mitad por cada una si la falta fuera de número par, si no lo fuere, la de diputados nombrará el número mayor, y la de senadores el menor; y si uno faltare, lo elegirá la Cámara de Diputados.

130. Los que resulten nombrados para jueces no votarán en el jurado de acusación.

TÍTULO VII

GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS

131. Cada departamento tendrá una asamblea compuesta de un número de vocales, que no pase de once ni baje de siete, a juicio por esta vez de las actuales juntas departamentales. El número de suplentes será igual al de propietarios.

132. Para ser vocal de las Asambleas departamentales se requiere la edad de veinticinco años cumplidos, y las demás cualidades que para ser diputado al Congreso, y no estar comprendido en ninguna de sus excepciones.

133. Los vocales mencionados durarán cuatro años en su encargo, y se renovarán por mitad cada dos, saliendo por la primera vez los segundos nombrados, y en lo su-

cesivo los más antiguos. Si el número fuere impar, saldrá primero el número menor, y seguirán alternándose después la parte mayor y la menor.

134. Son facultades de las Asambleas departamentales:

- I. Establecer arbitrios para completar sus gastos ordinarios, o para hacer los extraordinarios que determinen según sus facultades, con aprobación del Congreso, sin perjuicio de llevarlos a efecto inmediatamente que los decreten. El Presidente de la República puede suspender la ejecución de estos arbitrios, dando cuenta sin demora al Congreso.
- II. Arreglar la inversión y contabilidad de la hacienda del departamento.
- III. Crear los empleados necesarios para la recaudación y distribución de la hacienda departamental, asignarles sus dotaciones, y reglamentar las obligaciones de los empleados.
- IV. Crear fondos para establecimientos de instrucción, utilidad o beneficencia pública, con los requisitos designados en la atribución primera.
- V. Decretar lo conveniente, y conforme a las leyes respecto de la adquisición, enajenaciones y permutas de bienes que pertenezcan al común del departamento. Sobre enajenaciones de terrenos se observarán las leyes vigentes, y lo que determinen las de colonización.
- VI. Disponer la apertura y mejora de los caminos del departamento, y cuidar de su conservación, estableciendo en ellos peajes para cubrir sus costos; entendiéndose esta atribución sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre caminos generales.
- VII. Fomentar la enseñanza pública en todos sus ramos, creando y dotando establecimientos literarios, y sujetándose a las bases que diere el Congreso sobre estudios preparatorios, cursos, exámenes y grados.
- VIII. Crear y reglamentar establecimientos de beneficencia, corrección o seguridad.
- IX. Reglamentar el contingente de hombres que para el ejército deba dar el departamento.
- X. Hacer la división política del territorio del departamento, establecer corporaciones y funcionarios municipales, expedir sus ordenanzas respectivas, y reglamentar la policía municipal, urbana y rural.
- XI. Cuidar de la salubridad pública, y reglamentar lo conveniente para conservarla.
- XII. Fomentar la agricultura, industria y demás ramos de prosperidad, según sus facultades.
- XIII. Aprobar los planes de arbitrios municipales, y los presupuestos anuales de los gastos de las municipalidades.
- XIV. Establecer y organizar los tribunales superiores y juzgados inferiores respetando la propiedad de los actuales magistrados y jueces, y reglamentar

el ejercicio de sus funciones, sin alterar el orden de procedimientos que disponen o dispusieren las leyes.

- XV. Hacer al Congreso iniciativas de ley en uso de la facultad que les da el art. 53.
 - XVI. Consultar al gobierno en todos los asuntos en que este lo exija, y también en los que deba hacerlo conforme a estas bases y las leyes.
 - XVII. Proponer al Gobierno Supremo una lista de todas las personas que le parezcan a propósito, y que no sean menos de cinco para el nombramiento de Gobernador. En los departamentos fronterizos no tendrá obligación el gobierno de sujetarse a esta lista, y sucederá lo mismo cuando en algún otro departamento, y en caso extraordinario, lo acordare el Congreso por iniciativa del Presidente.
 - XVIII. Hacer las elecciones según estas bases, de Presidente de la República, individuos de la Suprema Corte de Justicia y senadores.
 - XIX. Decretar la fuerza de policía que debe haber en el departamento, y reglamentar su servicio, que se reducirá a conservar el orden, cuidar de la seguridad pública, y auxiliar la ejecución de los mandatos de las autoridades políticas y judiciales. Esta fuerza no gozará fuero, y deberá estar distribuida en las poblaciones con proporción a sus necesidades.
135. Son obligaciones de las Asambleas departamentales:
- I. Formar anualmente la estadística de su departamento, y dirigirla al Gobierno Supremo con las observaciones que crea convenientes al bien y progreso del departamento.
 - II. Formar los presupuestos anuales de los gastos del departamento y dirigirlos al Congreso General para que los tenga presentes al revisar los arbitrios que ellas establezcan, para completarlos.

De los Gobernadores

136. Habrá un Gobernador en cada departamento, nombrado por el Presidente de la República a propuesta de las asambleas departamentales, según la facultad XVII del art. 134. Durará cinco años en su encargo, contados desde el día que tome posesión.

137. Para ser Gobernador se requiere, ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta y cinco años, natural o vecino del departamento, tener dos mil pesos de renta efectiva, y haber servido por cinco años en empleos o cargos públicos.

138. Las faltas temporales de los Gobernadores se suplirán por el vocal más antiguo secular de la Asamblea Departamental: la falta absoluta se cubrirá por nueva elección en la forma prevenida en estas bases. El nombrado no podrá nunca durar más tiempo que el que faltaba al Gobernador reemplazado.

139. La propuesta para Gobernador, se hará en los diez primeros días de febrero del año en que debe renovarse.

140. Son obligaciones de los gobernadores de los departamentos:

- I. Cuidar de la conservación del orden público en lo interior del departamento.
- II. Publicar las leyes y decretos del Congreso Nacional, y los decretos del Presidente de la República, a más tardar, al tercer día de su recibo, haciendo que tengan su cumplimiento dentro del territorio en que ejercen sus funciones.
- III. Publicar, y hacer cumplir los decretos de las Asambleas departamentales.
- IV. Remitir al Gobierno Supremo los decretos de las Asambleas departamentales.

141. Los gobernadores son el conducto único y necesario de comunicación con las supremas autoridades de la República; exceptúense los casos de acusación, o queja contra ellos mismos, y la correspondencia oficial de los tribunales superiores, con la Suprema Corte de Justicia en materias judiciales.

142. Son atribuciones de los Gobernadores de departamento:

- I. Devolver dentro de ocho días a las asambleas departamentales sus decretos cuando lo consideren contrarios a estas bases o a las leyes; si insistieren en ellos, los remitirán al gobierno también dentro de ocho días para los efectos que prescribe la atribución XVII del art. 66, suspendiendo entretanto su publicación.
- II. Devolver por una vez, dentro de ocho días, a las asambleas departamentales sus decretos que no estén en el caso del artículo anterior, exponiéndole los motivos que tenga en su contra; si insistieren en ellos, los publicará precisamente.
- III. Nombrar las autoridades políticas subalternas del departamento.
- IV. Nombrar los empleados que se establezcan para recaudar y distribuir la hacienda que toque al departamento. En este nombramiento se respetará la propiedad de los actuales empleados.
- V. Presentar ternas al Presidente de la República con acuerdo de las asambleas departamentales para el nombramiento de magistrados superiores, jueces letrados y asesores; oyendo en todo caso los informes de los tribunales superiores.
- VI. Ejercer respecto de los empleados del departamento la misma facultad que da al Presidente de la República la atribución VIII del art. 87, e imponer multas a los que le falten al respeto, en los casos y en el modo que dispongan las leyes.
- VII. Vigilar para que se administre prontamente justicia en el departamento de la misma manera que debe hacerlo el Presidente de la República.
- VIII. Ser Presidente nato de la Asamblea Departamental con voto en ella, y el de calidad en caso de empate, no siendo la votación en ejercicio del poder electoral.
- IX. Disponer de la fuerza de policía para los objetos de su institución.

- X. Ser jefe de la hacienda pública del departamento, y tener en la general la vigilancia que le concede la ley.
- XI. Conceder permisos para el establecimiento de asociaciones públicas literarias, o de beneficencia, y revisar sus reglamentos, reformando en ellos cuanto fuere contrario a las leyes o al orden público.
143. A los Gobernadores se les ministrarán por la fuerza armada los auxilios que necesiten para la conservación del orden en sus departamentos.
144. Las leyes secundarias, y los decretos que las asambleas departamentales expidan en uso de las atribuciones que estas bases les otorgan, designarán las facultades y obligaciones de los Gobernadores, según las bases anteriores.
145. Los gobernadores en sus causas civiles serán juzgados en primera y segunda instancia por los tribunales superiores de los departamentos, en que ejercen sus funciones o de aquellos cuya capital sea más inmediata, a elección del actor.
- Administración de Justicia en los departamentos
146. Habrá en los departamentos tribunales superiores de justicia y jueces inferiores. Todos los negocios que comiencen en los juzgados inferiores de un departamento, terminarán dentro de su territorio en todas instancias. Una ley determinará el modo de suplir las segundas y terceras instancias en los departamentos que no pudiesen establecer tribunales superiores.

TÍTULO VIII

PODER ELECTORAL

147. Todas las poblaciones de la República se dividirán en secciones de quinientos habitantes, para la celebración de las juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por medio de boletas, un elector por cada quinientos habitantes. En las poblaciones que no lleguen a este número se celebrarán sin embargo juntas primarias, y se nombrará en ellas un elector.
148. Los electores primarios nombrarán a los secundarios que han de fomentar el colegio electoral del departamento, sirviendo de base el nombrar un elector secundario por cada veinte de los primarios que deben componer la junta.
149. El colegio electoral nombrado conforme al artículo anterior, hará la elección de diputados al Congreso, y de vocales de la respectiva Asamblea Departamental.
150. Para ser elector primario o secundario, se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, vecino del partido donde se le elija, y no ejercer en él jurisdicción contenciosa. Los electores primarios deberán ser residentes en la sección en que sean nombrados, y los secundarios en el partido: estos además deberán tener una renta anual de quinientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo honesto. Los congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los departamentos, la renta que en cada uno haya de requerirse para ser elector secundario.

151. Las autoridades políticas harán celebrar las elecciones en el día designado por la ley.

152. Los individuos pertenecientes a la milicia votarán en la sección de su cuartel, y no se presentarán armados ni formando cuerpo.

153. Las juntas electorales calificarán la validez de la elección anterior, y si los individuos en quienes haya recaído tienen los requisitos que exige la ley.

154. En caso de empate decidirá la suerte.

155. Cada seis años se renovará el censo de la población de los departamentos, y por él se computará el número de sus representantes.

156. Las elecciones primarias se verificarán cada dos años el segundo domingo de agosto; las secundarias el primer domingo de septiembre, y las de los colegios electorales para nombrar diputados al Congreso y vocales de las asambleas departamentales, el primer domingo de octubre y lunes siguiente.

157. Las asambleas departamentales calificarán si los vocales nombrados tienen los requisitos que se exigen para serlo. Cualquiera otra calificación sobre validez de estas elecciones quedará comprendida en la que haga la Cámara de Diputados según el artículo 68, sin perjuicio de que los electos entren desde luego a funcionar. Las actuales juntas departamentales harán por esta vez la calificación sobre si los individuos que han de sucederles tienen los requisitos que exige la ley.

158. El 1° de noviembre del año anterior a la renovación del Presidente de la República, cada Asamblea Departamental, por mayoría de votos, y en caso de empate conforme dispone el art. 154, sufragará para Presidente por una persona que reúna las calidades requeridas para ejercer esta magistratura.

159. La acta de esta elección se remitirá por duplicado y en pliego certificado a la Cámara de Diputados, y en su receso a la diputación permanente.

160. El día 2 de enero del año en que debe renovarse el Presidente, se reunirán las dos Cámaras y abrirán los pliegos, regularán los votos, calificarán las elecciones conforme a los artículos 164 y 168, y declararán Presidente al que haya reunido mayoría absoluta de sufragios.

161. Si no hubiere mayoría absoluta, las Cámaras elegirán Presidente de entre los dos que tuvieren mayor número de votos. Si hubiere más de dos que excedan en votos, pero en número igual a los demás, el Presidente será elegido entre estos.

162. Si no hubiere mayoría respectiva, y entre los que reúnan menos votos hubiere dos o más que tengan igual número, pero mayor que el resto, las Cámaras para hacer la elección de Presidente, elegirán entre estos últimos uno que compita con el primero. Todos estos actos se ejecutarán en una sola sesión.

163. Las votaciones de que hablan los artículos anteriores se harán por mayoría absoluta de votos; en caso de empate se repetirá la votación, y si volviere a resultar, decidirá la suerte.

164. Los actos especificados para la elección de Presidente serán nulos ejecutándose en otros días que los señalados, a no ser que la sesión haya sido continua y no se

haya podido acabar en el día. Sólo en el caso de que algún trastorno social imposibilite, o la reunión del Congreso, o la de la mayor parte de las Asambleas Departamentales, el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de cada Cámara, designará otros días valiendo este acuerdo extraordinariamente y por aquella sola vez.

165. El Presidente terminará en sus funciones el 1º de febrero del año de su renovación, y en el mismo día tomará posesión el nuevamente nombrado, o en defecto de éste el que haya de sustituirlo, conforme a estas bases.

166. Las vacantes que hubiere en la Suprema Corte de Justicia se cubrirán por elección de las asambleas departamentales, haciéndose la computación por las Cámaras en la forma prescrita para la elección de Presidente.

167. Las elecciones de senadores correspondientes al tercio de que debe renovarse cada dos años se verificarán por las asambleas departamentales, Cámara de Diputados, Presidente de la República y Suprema Corte de Justicia, el 1º de octubre del año anterior a la renovación. La elección y computación que debe hacer el Senado con arreglo a los artículos 35 y 37, se harán el 1º de diciembre siguiente.

Los nuevos senadores y diputados entrarán en posesión de su cargo el 1º de enero inmediato.

168. Ninguna elección podrá considerarse nula, sino por alguno de los motivos siguientes: 1º Falta de las calidades constitucionales en el electo. 2º Intervención o violencia de la fuerza armada en las elecciones. 3º Falta de mayoría absoluta de los que tienen derecho de votar en las elecciones que no sean primarias. 4º Error o fraude en la computación de los votos.

169. El nombramiento de Consejero prefiere al de Diputado y Senador: el de Senador al de Diputado: el de Senador electo por las asambleas departamentales al postulado por las primeras autoridades; y el de Diputado por vecindad al que lo fuere por nacimiento.

170. Los gobernadores de los departamentos serán nombrados en todo el mes de marzo del año en que deben renovarse, y tomarán posesión el 15 de mayo siguiente.

171. Los decretos que expidan el Congreso y el Senado en ejercicio de sus funciones electorales, conforme a estas bases, no están sujetos a observaciones del gobierno.

172. El Senado señalará los días en que deben hacerse las elecciones para llenar las vacantes de Presidente de la República, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

173. Las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y vocales de las asambleas departamentales, se harán en el año presente en los días designados en estas bases. El primer Congreso abrirá sus sesiones en el 1º de enero inmediato. El Consejo de Gobierno comenzará sus funciones el mismo día, nombrándose al efecto por el Presidente Provisional de la República: El Presidente Constitucional entrará a funcionar el 1º de febrero siguiente; y en los diez días primeros del propio mes se hará

la propuesta para Gobernadores de los departamentos. Las nuevas Asambleas departamentales comenzarán el 1º de enero inmediato. Para facilitar las elecciones primarias y secundarias en la primera vez, se observará lo que acerca de ellas está dispuesto en la Ley de 30 de noviembre de 1836, en lo que no se oponga a estas bases.

174. Si en cualquiera de los departamentos dejaren de celebrarse las elecciones primarias, secundarias o de departamentos en los días designados en estas bases, el Congreso, y en su receso la diputación permanente, señalará el día en que deban hacerse, y por esta vez el gobierno.

TÍTULO IX DISPOSICIONES GENERALES SOBRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

175. Se dispondrán las cárceles de modo que el lugar de la detención sea diverso del de la prisión.

176. A nadie se exigirá juramento en materia criminal sobre hecho propio.

177. Los jueces, dentro de los tres primeros días que esté el reo detenido a su disposición, le tomarán su declaración preparatoria, manifestándole antes el nombre de su acusador, si lo hubiere, la causa de su prisión, y los datos que haya contra él.

178. Al tomar la confesión al reo, se le leerá íntegro el proceso, y si no conociere a los testigos, se le darán todas las noticias conducentes para que los conozca.

179. Queda prohibida la pena de confiscación de bienes; más cuando la prisión fuere por delitos que traigan consigo responsabilidad pecuniaria, podrán embargarse los suficientes para cubrirla.

180. La nota de infamia no es trascendental.

181. La pena de muerte se impondrá sin aplicar ninguna otra especie de padecimientos físicos que importen más que la simple privación de la vida.

182. Cualquier falta de observancia en los trámites esenciales de un proceso produce la responsabilidad del juez, y en lo civil además la nulidad para solo el efecto de reponer el proceso. La ley señalará los trámites que son esenciales en cada juicio.

183. En ninguna causa, sea cual fuere su cuantía y naturaleza, podrá haber más de tres instancias. La ley fijará el número de las que en cada causa debe haber para que la sentencia quede ejecutoriada.

184. Los magistrados y jueces que hubieren fallado en una instancia, no podrán hacerlo en otra.

185. Los litigantes tienen derecho para terminar sus pleitos civiles, y los criminales sobre injurias puramente personales, por medio de jueces árbitros, cuya sentencia será ejecutada conforme a las leyes.

186. Para entablar cualquier pleito civil, o criminal sobre injurias puramente personales, debe intentarse antes el medio de la conciliación, en la forma y con las excepciones que establezca la ley.

187. Los códigos civil, criminal y de comercio, serán unos mismos para toda la Nación, sin perjuicio de las variaciones que en algunos lugares podrá hacer el Congreso por circunstancias particulares.

188. Los magistrados de los tribunales superiores y los jueces letrados serán perpetuos.

189. Los magistrados y jueces no podrán ser suspensos sino en los casos comprendidos en la parte 7º del art. 142, o en el art. 191, o por auto judicial; ni privados de sus cargos sino por sentencia ejecutoriada que imponga esta pena.

190. Si el Presidente de la República, por resultado del uso de las atribuciones IX y X contenidas en el artículo 87, o por quejas fundadas contra cualesquiera magistrados o jueces, creyere que se les debe exigir la responsabilidad, reunirá los datos convenientes, y oído el dictamen de su Consejo, pasará todo al juez respectivo, dejando al acusado suspenso de su empleo. No se entiende lo prevenido en este artículo respecto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de la Marcial.

191. El Congreso General, por sí, o excitado por el Presidente de la República, podrá decretar con respecto a la Suprema Corte de Justicia y a la Marcial las mismas visitas que se previenen en la facultad 10 del artículo 87 respecto de los tribunales superiores y juzgados inferiores, y si de la visita resultare que debe exigirse la responsabilidad a alguno o algunos magistrados, se pasarán los datos conducentes a la sección del Gran Jurado de alguna de las Cámaras.

192. Podrá el Congreso establecer, por determinado tiempo, juzgados especiales fijos o ambulantes, para perseguir y castigar a los ladrones en cuadrilla, con la circunstancia de que estos juzgados sean de primera instancia y que la confirmación de las sentencias se haga por los tribunales de segunda y tercera instancia del territorio donde dieren su fallo.

193. Una ley general fijará el modo de proceder de estos tribunales, y podrá también abreviar los trámites de las segundas y terceras instancias sin que en caso alguno puedan admitirse pruebas privilegiadas, ni privarse a los reos de los recursos que conceden las leyes para su defensa.

194. Se establecerán fiscales generales cerca de los tribunales para los negocios de Hacienda y los demás que sean de interés público.

195. En los delitos de imprenta no hay complicidad en los impresores; pero serán responsables si no se aseguran en la forma legal de la responsabilidad del editor o escritor, o si imprimieren escritos contra la vida privada, no entendiéndose por tales los que versen sobre crímenes o faltas de los funcionarios públicos, relativos al cumplimiento de sus deberes. La ley señalará el tiempo que debe durar la responsabilidad del impresor.

196. Una ley determinará los casos en que se abusa de la libertad de imprenta, designará las penas y arreglará el juicio, no pudiendo señalar otros abusos que los siguientes: contra la religión, contra la moral y buenas costumbres; provocación a la sedición y a la desobediencia a las autoridades; ataque a la independencia y forma de

gobierno que establecen estas bases, y cuando se calumnie a los funcionarios públicos en su conducta oficial.

197. Toda prevaricación por cohecho, soborno o baratería, produce acción popular contra cualquier funcionario público que la cometiere.

198. Si en circunstancias extraordinarias la seguridad de la Nación exigiere en toda la República, o parte de ella, la suspensión de las formalidades prescritas en estas bases, para la aprehensión y detención de los delincuentes, podrá el Congreso decretarla por determinado tiempo.

TÍTULO X DE LA HACIENDA PÚBLICA

199. La Hacienda pública se dividirá en general y departamental. En el primer periodo de sesiones del primer Congreso se dará la ley, distribuyendo las rentas en las dos partes expresadas, de modo que las asignadas a los departamentos sean proporcionadas a sus gastos, incluyendo en estos el pago de las dietas de sus respectivos diputados.

200. Una ley, que iniciará el gobierno en el primer periodo de sesiones del primer Congreso, arreglará la Hacienda General, y establecerá como base señalar los medios de amortizar la deuda pública, y los fondos con que debe hacerse.

TÍTULO XI DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DE ESTAS BASES

201. Todo funcionario público antes de tomar posesión de su destino o para continuar en él, prestará juramento de cumplir lo dispuesto en estas bases. El gobierno reglamentará el acto del juramento de todas las autoridades.

202. En cualquier tiempo podrán hacerse alteraciones o reformas a estas bases. En las leyes que se dieren sobre esta materia, se observará todo lo prevenido respecto de las leyes comunes, sin más diferencia que para toda votación, sea la que fuere, no se han de requerir ni más ni menos de dos tercios de votos en las dos Cámaras. El Ejecutivo tendrá en estos casos la facultad 20 del art. 87.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo provisional para los efectos consiguientes: Sala de Sesiones de la Honorable Junta Legislativa en México, a 12 de junio de 1843. Manuel Baranda, Presidente. Cayetano Ibarra, Vicepresidente. Dr. José María Aguirre. Ignacio Alas. Basilio Arrillaga. José Arteaga. Pedro Agustín Ballesteros. Pánfilo Barasorda. José Ignacio Basadre. Manuel Diez de Bonilla. José de Caballero. Sebastián de Camacho. Tiburcio Cañas. Martín Carrera. Crispiniano del Castillo. José Fernández de Celis. Luis G. Chavarri. José Florentino Conejo. José Gómez de la Cortina. Mariano Domínguez. Pedro Escobedo. Rafael Espinoza. Pedro García Conde. Simón de la Garza. Juan de Goríbar. José Miguel Garibay. Antonio de Icaza. Juan Manuel, Arzobispo de Cesarea. José María Iturralde. Juan Icaza. Manuel Larráinzar. Joaquín Lebrija. Fran-

cisco Lombardo. Diego Moreno. Dr. Manuel Moreno y Jove. José Francisco Nájera. Juan Gómez de Navarrete. Francisco Ortega. Juan de Orbegoso. Antonio Pacheco Leal. Manuel Payno y Bustamante. Manuel de la Peña y Peña. Tomás López Pimentel. Manuel, Arzobispo de México. Andrés Pizarro. José María Puchet. Andrés Quintana Roo. Santiago Rodríguez. Romualdo Ruano. Juan Rodríguez de San Miguel. Gabriel Sagaseta. Vicente Sánchez Vergara. Vicente Segura. Gabriel de Torres. Gabriel Valencia. José Mariano Vizcarra, Hermenegildo de Viya y Cosío. José Manuel Zozaya. Luis Zuñiga. Miguel Cervantes. Manuel Dublán. Mariano Pérez Tagle. Urbano Fonseca. Manuel Rincón. Juan José Quiñónez, vocal secretario. Juan Martín de la Garza y Flores, vocal secretario. José Lázaro Villamil, vocal secretario. José María Cora, vocal secretario.

Yo Antonio López de Santa-Anna, Presidente Provisional de la República, sanciono las bases orgánicas, formadas por la Junta Nacional Legislativa, con arreglo a lo prevenido en los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, y en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, hoy 12 de junio de 1843. Antonio López de Santa Anna. José María Bocanegra, Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. Pedro Vélez, Ministro de Justicia e Instrucción pública. Ignacio Trigueros, Ministro de Hacienda. José María Tornel y Mendívil, Ministro de Guerra y Marina.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno General en México, a 12 de junio de 1843. Antonio López de Santa Anna. Al Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Y lo comunico a V. E. para su inteligencia y exacto cumplimiento.

Dios y Libertad, México, 12 de junio de 1843. Bocanegra. Excmo. Sr. Gobernador del Departamento de México.

Y para que llegue a noticia de todos, mando se publique por bando en esta capital y en las demás ciudades, villas y lugares de la comprensión de este departamento, fijándose en los parajes acostumbrados y circulándose a quienes toque cuidar de su observancia. Dado en México, a 14 de junio de 1843. Valentín Canalizo. Luis G. De Chavarri, Secretario.

5.3. EXTRACT OF ORGANIC BASES OF THE MEXICAN REPUBLIC 1843

TITLE I

MEXICAN NATION, ITS TERRITORY FORM OF GOVERNMENT AND RELIGION

Article 1. Form of Government of the Mexican nation.

Article 2. Extension of the Territory of the Republic.

Article 3. Number of Departments and their limits.

Article 4. Division of the Territory of the Republic of Departments.

Article 5. Division of Powers.

Article 6. Catholic religion.

TITLE II

THE PEOPLE OF THE REPUBLIC

Article 7. Quality inhabitant of the Republic.

Article 8. Obligations of the inhabitants of the Republic.

Article 9. Rights of the inhabitants.

Article 10. Rights of foreigners.

TITLE III

OF MEXICAN AND MEXICAN CITIZENS RIGHTS AND OBLIGATIONS OF EACH OTHER

Article 11. Quality of Mexico.

Article 12. Rights of those born in the territory of a foreign father and out of a Mexican father.

Article 13. Requirements for certificate of naturalization to foreigners.

Article 14. Obligation of the Mexican.

Article 15. Mexican law.

Article 16. Loss of quality of Mexico.

Article 17. Rehabilitation of the quality of Mexico.

Article 18. Quality Mexican citizen.

Article 19. Citizens' rights.

Article 20. Obligations of citizens.

Article 21. Suspension of the rights of citizens.

Article 22. Loss of the rights of citizens.

Article 23. Cases in which authority is required to deprive declaration of rights.

Article 24. Rehabilitation of citizenship rights.

TITLE IV LEGISLATIVE BRANCH

Article 25. Composition of the Legislature.

Chamber of Deputies

Article 26. Election of Deputies.

Article 27. Appointment of a Deputy by fraction.

Article 28. Requirement for deputy.

Article 29. Restrictions to be a deputy.

Article 30. Renewal of the Chamber of Deputies.

Chamber of Senators

Article 31. Composition of the Chamber of Senators.

Article 32. Election of Senators.

Article 33. Senators from each departmental assembly.

Article 34. The minutes of the election.

Article 35. Counting of votes.

Article 36. Suffrage for the election of one third of Senators.

Article 37. Choosing the appropriate number from the postulates.

Article 38. Final selection of Senators by the President of the Republic.

Article 39. Nomination of Senators.

Article 40. Election of Senators by the departmental assemblies.

Article 41. Counting of votes of the departmental assemblies.

Article 42. Qualifications for Senator.

Article 43. Renewal of the Senate.

Article 44. First and second renewal.

Article 45. Renewal procedure.

Article 46. Senate vacancy.

Sessions

Article 47. Session.

Article 48. Special Sessions.

Article 49. Exclusive activities of the second session.
Article 50. Continuation of Sessions of the Senate.
Article 51. Extension of Regular Meetings.
Article 52. Electoral functions, economic and jury of Congress.

Making of a Law

Article 53. Laws Initiative.
Article 54. Consideration of the initiatives of the Executive and Judicial Departmental Assembly.
Article 55. The initiatives will be presented to the Chamber of Deputies.
Article 56. Review of the Senate.
Article 57. Approval, modification or addition by the Senate.
Article 58. Required presence of the chamber for discussion of any law or decree.
Article 59. Approval and publication of the bill.
Article 60. Publication by President of the Republic.
Section 61. Cases where the Senate disapproves or amends a portion of the Project.
Article 62. Abandoned projects.
Article 63. Interpretation, modification or repeal of laws.
Article 64. Character of the resolutions of Congress.

Of powers and congressional restrictions

Article 65. Publication of laws and decrees.
Article 66. Powers of Congress.
Article 67. Impairment of Congress.

Economic powers of both Chambers and individuals of each

Article 68. Powers of the chambers.
Article 69. Exclusive powers of the Chamber of Deputies.
Article 70. Approval of appointments.
Article 71. Internal rules of Congress.
Article 72. Regulation of 23 December 1824.
Article 73. Inviolability opinions of deputies and senators.
Article 74. Way of judging deputies and senators for their request.
Article 75. Committees or commissions of the Deputies and Senators.
Article 76. Charges against individuals in the Chambers.
Article 77. Quality Grand Jury by the Chambers.
Article 78. The two houses together form a jury on the charges against the President.
Article 79. Meeting for vote count.

Permanent Deputation

Article 80. Election of four Senators and five Representatives to the permanent Committee. Committee

Article 81. Formation of the Standing Committee.

Article 82. Purpose of the Standing Committee.

TITLE V

EXECUTIVE BRANCH

Article 83. Supreme executive power.

Article 84. Requirements to be President.

Article 85. The President as Chief of the General Administration of the Republic.

Article 86. Duties of the President.

Article 87. Powers of the President.

Article 88. Obligation of the President to hear the opinion of the Council.

Article 89. Limitations of the President.

Article 90. Prerogatives of the President.

Article 91. Temporary absence of the President.

Article 92. The Acting President.

Ministry

Article 93. Office of government business.

Article 94. Requirements to become a minister.

Article 95. Obligations of each of the Ministers.

Article 96. Government business drawn by the Ministry in its field.

Article 97. Obedience to the authorities of the Republic under the command of the secretaries.

Article 98. Law Ministers to attend the chamber.

Article 99. Regulation of the Ministry of Education.

Article 100. Responsibility of Ministers for approval of acts of the President.

Article 101. Meeting of the Ministers.

Article 102. Responsibility for their decisions.

Article 103. President's power to resolve what he likes.

Governing Council

Article 104. Composition of the Governing Council.

Article 105. Requirements to be a Director.

Article 106. Appointment of Chairman.

Article 107. Perpetuity the position of Director.

Article 108. Restrictions of directors.

Article 109. Liability of Directors.

Article 110. Council Rules of Procedure.
Article 111. Obligation of the Council.
Article 112. Attribution of the Council.
Article 113. Supernumerary Directors.
Article 114. Powers of Board Supernumerary.

TITLE VI JUDICIAL BRANCH

Article 115. Composition of the Judicial branch..
Article 116. Composition of the Supreme Court.
Article 117. Qualifications for Justice of the Supreme Court.

Powers of the Supreme Court

Article 118. Powers of the Supreme Court.
Article 119. Limitations of the Supreme Court.
Article 120. Limitations of the judges of the Supreme Court.
Article 121. Civil causes of Ministers of the Supreme Court.

Court Martial

Article 122. Composition of the Court Martial.
Article 123. Organization of the Court Martial.

Court to judge the judges of the Supreme Court

Article 124. Trial of Ministers.
Article 125. Distribution in three rooms of the number of individuals.
Article 126. Challenge.
Article 127. Hole of the challenges.
Article 128. Choice of individuals in the absence of lawyers.
Article 129. Complement the number of lawyers.
Article 130. The judges appointed not vote in the grand jury.

TITLE VII GOVERNMENT DEPARTMENTS

Article 131. Assembly Departments.
Article 132. Requirements to become a member of the departmental assemblies.
Article 133. Duration of Vowels.
Article 134. Powers of State Assemblies.
Article 135. Obligations of the departmental assemblies.

Governors

Article 136. Governors of the Departments.

Article 137. Qualifications for Governor.

Article 138. Substitutions of the Governors.

Article 139. The proposal for Governor.

Article 140. Obligations of Governors of the Departments.

Article 141. Governors as a conduit for communication with the highest authorities of the Republic.

Article 142. Powers of the Governors of the Department.

Article 143. Assistance of armed force.

Article 144. Designation of authority and powers of the Governors.

Article 145. Trial for civil cases of the Governors.

Administration of Justice Departments

Article 146. Courts and Judges of the Departments.

TITLE VIII

ELECTORAL POWER

Article 147. Division into sections of the population of the Republic.

Article 148. Electoral College Education Departments.

Article 149. Role of the Electoral College.

Article 150. Qualifications of elector primary or secondary.

Article 151. Elections.

Article 152. Vote of individuals belonging to the militia.

Article 153. Validity of the election.

Article 154. Case of a tie.

Article 155. Restock the population of the departments.

Article 156. Celebration of the primaries and secondaries.

Article 157. Rating on the validity of the elections.

Article 158. Vote for President according to the votes of each departmental assembly.

Article 159. Submission of the minutes of choice.

Article 160. Statement of President.

Article 161. Election of Chairman for the number of votes.

Article 162. Lack of respective majority.

Article 163. Absolute majority of votes and a tie.

Article 164. Election of the President on other days than those indicated.

Article 165. Renewal date of the President.

Article 166. Case of vacancies in the Supreme Court.

Article 167. Election of Senators for the third to be renewed every two years.

Article 168. Annulment of the elections.

Article 169. Priority appointments.

Article 170. Renewal of Governors of the Departments and his inauguration.

Article 171. Decrees of Congress and the Senate.

Article 172. Certain days of elections to fill vacancies.

Article 173. Days appointed for elections.

Article 174. Failure of the Primary Election or Secondary Department.

TITLE IX

GENERAL PROVISIONS ON ADMINISTRATION OF JUSTICE

Article 175. Disposition of prisons.

Article 176. Not be required oath in civil matters.

Article 177. Term to take the preliminary statement.

Article 178. Defendant's confession.

Article 179. Prohibition of the penalty of confiscation of property.

Article 180. The note of infamy is not transcendental.

Article 181. Death penalty.

Article 182. Essential steps in each trial.

Article 183. There shall be no more than three instances.

Article 184. Failure of Magistrates and Judges to rule on more than two instances.

Article 185. Role of Referees.

Article 186. Means of conciliation in civil or criminal litigation.

Article 187. Uniformity of codes.

Article 188. Perpetuity of Justices of the Superior Courts Judges and lawyers.

Article 189. Cases of suspension of judges and magistrates.

Article 190. Decrees of the General Congress regarding the President's responsibility for Magistrates and Judges.

Article 191. Decrees of the General Congress in respect of liability incurred by judges.

Article 192. Stationary or mobile courts established by Congress.

Article 193. Mode of action of these courts.

Article 194. Establishment of state attorneys general.

Article 195. Printing crimes.

Article 196. Abuses of Freedom of Speech.

Article 197. Action against officials for malfeasance, for bribery, corruption or barter.

Article 198. Suspension of formalities prescribed in the Constitution.

TITLE X
OF PUBLIC FINANCES

Article 199. Public finances and their division.

Article 200. Law to regulate the General Treasury.

TITLE XI
ENFORCEMENT OF THESE RULES AND REFORM

Article 201. Oath of public officers before taking office.

Article 202. It may make alterations or amendments to these rules at any time. The Executive shall have this power.

5.4. ORGANIC BASES OF THE MEXICAN REPUBLIC

México, June 12, 1843

202 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE I.
OF THE MEXICAN NATION, ITS TERRITORY, FORM OF
GOVERNMENT AND RELIGION

TITLE II.
OF THE INHABITANTS OF THE REPUBLIC

TITLE III.
OF THE MEXICANS, MEXICAN CITIZENS AND RIGHTS AND
OBLIGATIONS OF ONES AND OTHERS

TITLE IV.
LEGISLATIVE POWER
*Chamber of Deputies, Chamber of Senators, Formation of Laws
Of the Attributions and Restrictions of the Congress
Economic Faculties of both Chambers and peculiars of each one
Permanent Deputation*

TITLE V.
EXECUTIVE POWER

Of the Ministry
Of the Council of Government

TITLE VI.
OF THE JUDICIAL POWER

Attributions of the Supreme Court of Justice
Martial Court
Tribunal to Judge the Justices of the Supreme Court of Justice

TITLE VII.
GOVERNMENT OF THE DEPARTMENTS

Of the Governors
Administration of Justice in the Departments

TITLE VIII.
ELECTORAL POWER

TITLE IX.
GENERAL DISPOSITIONS ON ADMINISTRATION OF JUSTICE

TITLE X.
OF THE PUBLIC TREASURY

TITLE XI.
OF THE OBSERVANCE AND REFORM OF THESE BASES

ORGANIC BASES OF THE MEXICAN REPUBLIC

Agreed by the Honorable Legislative Board established in accordance with the decrees of December 19th and 23rd, 1842, sanctioned by the supreme provisional government with arrangement to the same decrees of June 15th, 1843, and published through national edict on the 14th of the same month.

The citizen VALENTÍN CANALIZO, General of Division, Governor and Commanding General of the Department of México.

Through the State and Home Department it is addressed to me, with date 12 of the current, the following decree:

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA, Meritorious of the Motherland, General of Division and Provisional President of the Mexican Republic, to her inhabitants, know:

That the Honorable National Legislative Board, instituted in accordance to the supreme decrees of December 19th to 23rd, 1842, has agreed, and I have sanctioned with arrangement to the same decrees, the following:

BASES OF POLITICAL ORGANIZATION OF THE MEXICAN REPUBLIC

TITLE I

OF THE MEXICAN NATION, ITS TERRITORY, FORM OF GOVERNMENT AND RELIGION

1. The Mexican Nation, in use of its prerogatives and rights, as independent, free and sovereign, adopts for its government the form of Popular Representative Republic.

2. The territory of the Republic comprises what was before viceroyalty of New Spain, general captaincy of Yucatan, command headquarters of the old internal provinces of West and East, Baja and Alta California, and the Chiapas, with the annex terrains and adjacent islands in both seas.

3. The number of the departments and its limits shall arrange definitely by a Law, continuing for now as they exist. The Californias and Nuevo México might be administered with more immediate submission to the supreme authorities, that the rest of the departments, if the Congress believes so, who shall give the rules for its administration. The same might occur in one or other coastal point that it demanded so because of its particular circumstances.

4. The territory of the Republic shall be divided in departments, and these into districts, parties and municipalities. The points, whose government is arranged in accordance to the second part of the previous article, shall be called territories.

5. The sum of all the public power resides essentially in the Nation and is divided for its exercise in Legislative, Executive and Judicial. Two or more power shall not reunite in a sole corporation or person, neither it shall be deposited the Legislative in one individual.

6. The Nation professes and protects the catholic, apostolic, roman religion excluding any other.

TITLE II
OF THE INHABITANTS OF THE REPUBLIC

7.They are inhabitants of the Republic all those that reside in points that it recognize as its territory.

8.They are obligations of the inhabitants of the Republic, to observe the Constitution and the laws, and obey the authorities.

9. Rights of the inhabitants of the Republic:

- I. No one is slave in the territory of the Nation, and that that enters, shall be considered in the free class, being left under the protection of the laws.
- II. No one may be disturbed for his opinion: everyone has the right to print and circulate them without necessity of previous evaluation or censure. Bail shall not be demanded to the authors, editors or printers.
- III. The documents that are about the religious dogma or the holly scriptures shall be subject to the dispositions of the laws in force: in any case it shall be allowed to write about the private life.
- IV. In every trial about press crimes, judges of the fact shall intervene and do the qualification of accusation and sentence.
- V. No one shall be apprehended but through an order from a server who the Law authorizes him for that; except in the case of *in fraganti* crime, where anyone in the town may do it, setting the apprehended individual immediately under custody to disposal of his judge.
- VI. No one shall be detained but through an order of a competent authority, given in writing and signed, and only when enough indicators exist against him in order to presume him as author of the crime pursued. If the indications are legally corroborated, in a manner that they have merit to believe the detained individual committed the criminal incident, prison might be decreed.
- VII. No one shall be detained for more than three day by the political authority without being turned in with the corresponding information to the judge of his jurisdiction, neither shall the latter have him under his power for more than five days without declaring him prisoner for good. If the same judge had done the apprehension, or had received the defendant before three days from his detention, within that term the writ of prison shall be issued, in order that he does not result detained more than eight days. The simple elapse of this terms make arbitrary the detention, and responsible the authority who commits it, as well as the superior who leaves this crime without punishment.
- VIII. No one might be judged or sentenced in his civil and criminal causes but by judges of its own jurisdiction and by laws already given and tribunals established prior to the event or crime of matter. The militaries and eccle-

siastics shall continue subject to the authorities to which they currently are, in accordance to the laws in force.

- IX. In any state of the lawsuit, in which arouses that a corporal penalty cannot be imposed to the defendant, he shall be set free, giving bail.
 - X. No one might be forced by any class of pressure or coercion to confession of the act for which he is being judged.
 - XI. It shall not be searched the Chamber, neither registered the papers of no individual, but in the cases and with the requirements literally prevented in the laws.
 - XII. No one might be burdened with other contributions than those established or authorized by the Legislative Power or by the departmental Assemblies in use of the faculties that these bases grant them.
 - XIII. The property is inviolable, whether it belongs to particulars or to corporations, and no one might be deprived or disturbed in the free use and exploitation that corresponds him according to the laws, whether it consists in things, shares or rights, or in the exercise of a profession or industry that the Law had guaranteed him. When any object of usefulness demanded its occupation, the latter shall be done, previous the competent compensation, in the manner that the Law arranges.
 - XIV. No Mexican might be prevented from translating his person and goods to another country, provided that he does not leaves uncovered in the Republic a responsibility of any kind, and satisfies the duties that the laws establish for the extraction of his interests.
10. The aliens shall enjoy of the rights that the laws and their respective treaties grant them.

TITLE III

OF THE MEXICANS, MEXICAN CITIZENS AND RIGHTS AND OBLIGATIONS OF ONES AND OTHERS

11. They are Mexicans:
- I. All those born in any point of the territory of the Republic, and those that were born out of it of Mexican parents.
 - II. Those who without being born in the Republic, were residing in it in 1821 and had not renounced to their quality of Mexicans: those who being naturals of Center America when it belonged to the Mexican Nation were found in that territory, and since then have continued to live in it.
 - III. The aliens who have obtained or shall obtain letter of naturalization in accordance to the laws.
12. Those born in the territory of the Republic of alien father, and out of it of Mexican father who was not in service of the Republic, to enjoy of the rights of Mex-

ican, shall express that so they desire it. The Law shall designate the manner of doing this expression and the age in which it shall be done.

13. The aliens married or that shall marry to Mexican women, or that were employees in service and utility of the Republic, or in her industrial establishments, or who acquire real state in it, shall be given letter of naturalization without any other requirement it so they asked for it.

14. It is obligation of the Mexican to contribute to the defense and to the expenses of the Nation.

15. It is a right of the Mexicans that they are conferred exclusively employments and commissions of appointments of any authority, when for their exercise the quality of citizen is not demanded: if the circumstance of expertise is required, Mexicans shall be preferred to the aliens in equality of circumstances.

16. The quality of Mexican is lost for:

- I. Becoming natural of another country.
- II. Serving under the flag of another Nation without license from the Government.
- III. Accepting employment or decoration from another government without permit of the Congress.

17. The Mexican, who loses such quality, might be rehabilitated by the Congress.

18. They are citizens the Mexicans who have reached the age of eighteen years old, being married, and twenty one if they are not yet, and that they have an annual rent of at least two hundred pesos, coming from physical capital, industry or personal honest work. The Constitutional Congresses might arrange, according to the circumstances of the departments, the rent that in each of these shall be required to enjoy the rights of citizen. Since 1850 and on those who reached the age demanded to be citizen, besides the rent said before to enter in the exercise of his political rights, it is necessary that they know how to read and write.

19. They are rights of the Mexican citizens to vote in the popular elections, and when they meet the requirements appointed by the laws, that of being appointed for the public positions and those of popular election.

20. They are obligations of the citizen:

- I. To become a member of the register of their municipality.
- II. To vote in the popular elections.
- III. To carry out the positions or popular election when they have no physical or moral impediment, or legal exception.

21. The rights of the citizens are suspended:

- I. For the state of domestic servant.
- II. For the state of legal interdiction.
- III. For being criminally processed, since the motivated writ of prison, or since the declaration to grant the formation of the lawsuit to the public servers until the sentence, if it were absolutory.

- IV. For being a consuetudinary drunk, or gambler for profession, or idle, or for having in home forbidden games.
 - V. For not carrying out the positions of popular election, lacking of justified cause, in which case the suspension shall last the time that he should carry out the entrustment.
22. The rights of citizen are lost:
- I. For sentence imposing dishonoring penalty.
 - II. For bankruptcy declared fraudulent.
 - III. For embezzlement or fraudulent debt contracted in the administration of any public funds.
 - IV. For the religious state.
23. In order that a citizen is had in the supposition of the cases 2, 4 and 5 of the article 21, or deprived of the rights in the 3rd of the previous article, it is required a declaration from a competent authority in the form stated by the Law.
24. The citizen who has lost his rights might be rehabilitated by the Congress.

TITLE IV LEGISLATIVE POWER

25. The Legislative Power shall be laid in a Congress divided in two Chambers, one of deputies and another of senators, and in the President of the Republic relating to the sanction of the laws.

Chamber of Deputies

26. This Chamber shall be formed of deputies elected by the departments, at a rate of one for each seventy thousand inhabitants: the department that does not have them shall always elect a Deputy.

27. Also a Deputy shall be appointed for each fraction that goes over thirty five thousand inhabitants, and for each proprietor Deputy a substitute shall be chosen.

28. To be Deputy it is required:

- I. To be natural of the department who is electing him or its residing neighbor for at least three years.
- II. To be in exercise of the rights of citizen.
- III. To be thirty years old at the moment of the election.
- IV. To have an annual effective rent of two hundred pesos, coming from a physical or moral capital.

29. They cannot be chose deputies for any department: the President of the Republic, the secretaries of the dispatch and officers of their secretaries, the magistrates of the Supreme Court of Justice and Martial, the very Reverend Archbishops and Reverend Bishops, Governors of miters, general curates and vicars, governors, and the commanding generals might not be so for the departments where they exercise their jurisdiction or authority.

30. The Chamber of Deputies shall be renewed by half every two years, going out the secondly appointed for each department in the first renewal. If they were an uneven number, the greater number shall go out first, and they shall continue alternating the smaller part the greater. The departments that shall appoint only one Deputy shall renew him every two years.

Chamber of Senators

31. This Chamber shall be formed of sixty three individuals.

32. Two thirds of the senators shall be elected by the Departmental Assemblies, the other third by the Chamber of deputies, the President of the Republic and the Supreme Court of Justice, in the form that shall be said later on.

33. Each Departmental Assembly shall elect forty two senators for the first time, and in the future the number that corresponds to them for the third of senators that shall be renewed.

34. The acts of the elections, of which the previous article talks about, shall be sent in duplicate in the first election to the council of representatives, and in the future to the Chamber of Senators, or Permanent Deputation.

35. For the first time the council of representatives, and in the future the Chamber of senators shall compute the votes given by the Departmental Assemblies, and shall declare senators those who have had the greater number until completing those that shall be elected. In case of tie, among two or more individuals, chance shall decide.

36. For the election of the third of the senators that corresponds to nominate to the Chamber of Deputies, the President of the Republic and the Supreme Court of Justice, each one of these authorities shall vote an equal number to those that shall be elected, and the act of the election shall be sent to the Chamber of Senators or to the Permanent Deputation.

37. This Chamber shall elect from within the nominated ones the corresponding number, after having declared senators those who have had the votes of the three nominating authorities.

38. For this first time the President of the Republic in definitive election, and not by nomination, shall appoint the third of senators that in the future shall be elected according to the article 32 and with the qualities that the following article demands.

39. The Chamber of deputies, the President of the Republic and the Supreme Court of Justice, shall precisely nominate for senators individuals who have distinguished for their services and merits in the civil, military and ecclesiastical careers.

40. The Departmental Assemblies shall elect the senators that corresponds them, precisely appointing five individuals of each one of the following classes: farmers, miners, proprietors or merchants and manufacturers. The election of the rest shall fall on persons who have exercised some of the following positions: President or Vice president of the Republic, secretary of the dispatch for over a year, plenipotentiary justice, governor of old State or department for more than one year, senator to the

General Congress, Deputy to the same in two legislatures, and previous Councilor of government, or that he is bishop or General of Division.

41. When computing the votes of the Departmental Assemblies, it shall be done separating that of each of the classes expressed in the previous article, without mixing the votes that result in favor of one class with another.

42. To be senator, it is required: to be Mexican by birth or to be comprised in the second part of the article 11, citizen in exercise of his rights, older than thirty five years, and to have a notorious annual rent, or salary that is no lower than two thousand pesos, excluding those that are elected to fill up the assigned number to the four classes of farmers, miners, proprietors or merchants and manufacturers; who shall in addition have a property that is worth not less than forty thousand pesos.

43. The Chamber of senators shall be renewed by thirds every two years, being elected by the Chamber of deputies, the President of the Republic, the Supreme Court of Justice and by the Departmental Assemblies the part that respectively correspond them.

44. For the first renewal it shall be draw by chance from among all the senators the first third that shall go out: for the second it shall take place among the two thirds that have been left in the first, and for the future the eldest shall go out.

45. In any renewal of the Chamber of senators they shall proceed in order that they always result complete the two thirds that the Departmental Assemblies have to elect, and the third that the supreme authorities shall appoint, and that result equally complete the classes of which article 40 talks about.

46. Any vacancy that arouses in the Senate shall be filled in by the appointment done by the authorities to whom it corresponds, and if these were the Departmental Assemblies, they shall do it according to the class that the vacancy belongs to. The newly appointed shall last the time that was missing to the one he is replacing.

47. The Congress shall have two sole periods of sessions in the year: each one shall last three months: the first shall start on January 1st and the second on July 1st.

48. The Congress shall only be called up to extraordinary sessions when any urgent business demands so.

49. The second period of sessions shall be exclusively destined to the examination and approval of the budgets for next year, to decree the contributions to meet them, and the examination of the account of the previous year that the Ministry presents.

50. Despite that the General Congress closes its sessions, the Senate shall continue theirs for up to thirty days, if they have laws pending in revision.

51. The Congress may extend the ordinary sessions of the second period for the necessary time.

52. The Congress and the Chambers during the time of the extension of the sessions, and during the extraordinary, may also occupy in their electoral, economic and jury functions.

Formation of the Laws

53. The initiative of the laws corresponds: to the President of the Republic, the deputies and the Departmental Assemblies in all the subjects and to the Supreme Court of Justice relating to the administration of its branch.

54. The initiatives of the Executive and Judicial Powers might not be left without consideration, neither those that a Departmental Assembly addressed on exclusive matters of its Department, and those in which the majority of the Assemblies agreed.

55. Every Law initiative shall be presented in the Chamber of Deputies.

56. The Law projects or decrees approved in the Chamber of Deputies shall pass to the Senate for its revision.

57. If the Senate shall approve, modify or addition them, they shall return to the Chamber of origin.

58. For the discussion of every Law or decree in any Chamber it is necessary the presence of half and one more of the total of its individuals, and for its approval, the absolute majority of those present. In the second revision they are required two thirds of the initiating Chamber for the project to be reproduced, and if in the revising Chamber the number of those who disapprove, modify or addition it did not reach two thirds, it shall be had for approved.

59. Once approved a Law project or decree in first or second revision, it shall be passed to the President of the Republic for its publication.

60. All the laws shall be published by the President of the Republic, in the accustomed manner, within six days of its sanction. The rest of the political authorities shall publish them within the third day of its receipt. The decrees, whose information corresponds to determined authorities or persons, shall be enough that it is published in the papers of the Government.

61. When the Senate shall disapprove or reform a part of the project the Chamber of deputies shall occupy only of that disapproved or reformed, without being able to alter in any way the articles approved by the Senate.

62. The rejected propositions and projects cannot be proposed again during the same year, unless that they are reproduced by new initiative of a diverse origin than the first one.

63. In the interpretation, modification or revocation of the laws and decrees, the same requirements that shall be observed during its formation shall be observed as well.

64. Every resolution of the Congress shall have the nature of Law or decree.

Of the Attributions and Restrictions of the Congress

65. The laws and decrees shall be published under the following formula: N. N. (here goes the first and last name of the President) President of the Mexican Republic, to her inhabitants, know: That the National Congress has decreed and the Executive

sanctioned the following: (here goes the text). Therefore, I order it to be printed, published, circulated and that it is given the due compliance.

66. They are faculties of the Congress:

- I. To dictate the laws to which the public administration shall abide in all and each of its branches, derogate them, interpret them and to excuse from its observance.
- II. To decree annually the expenses that shall be done in the following year, and the contributions with which they shall be filled in.
- III. To examine and approve each year the general account that the Ministry of Treasury shall present relating the previous year.
- IV. To classify the rents for the general expenses of the Nation and those of the departments.
- V. To decree the number of permanent troop of land and sea, and that of the active militia; state the contingent of men respective to each department, and to give regulations and ordinances for their service and organization.
- VI. To designate each year the maximum of active militia that the Executive might set on arms.
- VII. To recognize and classify the national debt, and decree the manner and duties to authorize it.
- VIII. To authorize the Executive to contract debts on the credit of the Nation, previously stating bases and designating guarantees.
- IX. To approve all class of treaties that the Executive celebrates with the foreign powers.
- X. To approve its confirmation the concordats celebrated with the Apostolic Chair, and to arrange the exercise of the patronage in the entire Nation.
- XI. To decree war by initiative of the President; to approve the peace agreements and treaties and to give rules to grant letters of marquee.
- XII. To habilitate ports for the foreign and coasting trade, and to give bases and general rules to the Government for the formation of the customs duties.
- XIII. To determine the weight, Law, type and denomination of the coins, and to decree a general system of weights and measures.
- XIV. To grant or deny the entrance to foreign troops into the territory of the Republic, and the departure of national troops out of the country.
- XV. To grant general pardons and amnesties when the public good demands so.

67. The Congress cannot:

- I. Derogate or suspend the prohibitive laws of the introduction of genders and detrimental effects to the national industry without the previous consent of the two third parts of the Departmental Assemblies.
- II. Exile any Mexican or impose any species of direct or indirect penalty.

It corresponds only to the Law to generally designate the penalties for the crimes.

III. Give retroactive effect to any Law.

IV. Suspend or reduce the individual rights, if it is not in the cases and manner disposed in the article 198.

Economic Faculties of both Chambers and Peculiar of Each

68. It corresponds to each of the Chambers, without intervention of the other, the arrangement of their respective offices, the appointment, designation of the number and remuneration of the servers in them, to whom the President of the Republic shall issue his dispatches, and when each one resolves by itself in these matters it shall have Law force: it corresponds to them, as well, to arrange the internal police of the place of their sessions: qualify the elections of its individuals: to resolve the doubts that arouse about them, and everything related to the carrying out of their functions.

69. The Chamber of Deputies exclusively has to:

I. Look after, by means of an inspector commission of its own heart, the exact performance of the Audit Office.

II. To appoint the chiefs and servers of the Audit Office, to whom the President of the Republic shall give his dispatches.

70. The Chamber of Senators has to approve the appointments of plenipotentiaries, justices and else diplomatic agents and consuls, and those of the superior officers of the army and navy sin coronel and even up, and to carry out the functions appointed in the articles 36 and 37.

71. Everything related to preparatory meeting, ceremonial, order of debates and else issues connected with the performance of the functions entrusted to the Chambers, and shall be state in the internal regulations of the Congress.

72. While the Congress forms its regulations, it shall abide by that of December 23rd, 1824.

73. The deputies and senators are inviolable for the opinions they express and the votes they cast during the performance of their functions, without that in any time, neither for any authority they might be bothered for this cause.

74. The deputies and senators might not be judged in their criminal and civil lawsuits during their entrustment and two months after, but in the form prevented by the Constitution and the laws.

75. The deputies and senators might not obtain employment of promotion from the government, if it were not of rigorous scale; but they might obtain from the government, with permission of the respective Chamber and consent of the appointed, temporary commissions or entrustments, in which case the interested individual shall cease in his previous functions during the entrustment.

76. Each one of the Chambers shall know about the accusation done against their respective individuals with the purpose of declaring if the lawsuit might or might not be formed.

77. Any of both Chambers might know in quality of great jury, for the purpose of declaring if the formation might or might not be formed, in the accusations for official and common crimes of the secretaries of the dispatch, justices of the Supreme Court of Justice and Martial, councilors of the government and of the governors of department.

78. Both Chambers reunited shall form jury, with the purpose above expressed, in the accusations against the President of the Republic for the official crimes specified in the article 90, and in those made for official crimes against the entire ministry, or against the entire Supreme Court of Justice or the Martial.

79. Both Chambers shall reunite to compute the votes and declare who is the President of the Republic, and magistrates of the Supreme Court of Justice in the time and manner stated by these bases, and to open and close the sessions.

Permanent Deputation

80. The day before closing the sessions of any period of the Congress, the Chamber of Senators shall elect four individuals and the deputies shall elect five.

81. The individuals, of who the previous article talks about, shall for he permanent deputation, which shall last until the next period.

82. The permanent deputation has for purpose to make the summon to extraordinary session when the Government decrees so; to receive the acts of the elections of President of the Republic, senators and justices of the Supreme Court of Justice, summon the respective Chamber for the performance of its functions when they have to be exercise in accordance to the Law, and exercise the economic functions that the regulations appoint.

TITLE V

EXECUTIVE POWER

83. The Supreme Executive Power is deposited in a magistrate, who shall be called President of the Republic. This magistrate shall last five years in his functions.

84. To be President it is required:

I. To be Mexican by birth, citizen in exercise of his rights, older than forty years and to reside in the territory of the Republic at the time of the election.

II. To belong to the secular state.

85. The President is chief of the general administration of the Republic, and they are specially entrusted to him the order and tranquility in the interior and the security in the exterior.

86. They are obligations of the President:

I. To observe the Constitution and the laws and to make them observe by all sorts of persons without any distinction.

- II. To make sure that all the respective aids are given to the tribunals for the execution of the sentences and judicial providences.
87. It corresponds to the President of the Republic:
- I. To publish and circulate the laws and decrees of the National Congress and the Senate in its case.
 - II. To freely appoint and remove the secretaries of the dispatch.
 - III. To appoint with approval of the Senate, ministers and else diplomatic agents and consuls of the Republic and freely remove them.
 - IV. To issue order and to give the necessary regulations for the execution of the laws, without altering or modifying them.
 - V. To decree that the Congress is summoned to extraordinary sessions, designating the only matters of which they shall occupy.
 - VI. To appoint the employees and public servers, whose appointment is not committed to any other authority, and in the form that the bases and the laws dispose.
 - VII. To issue the dispatches to every public server when by Law other authority does not have to give them.
 - VIII. To suspend from their employments and deprive, for even half of their salaries, for up to three months, the government and Treasury employees offenders of his orders. If he believed that a lawsuit shall be formed, or that it is convenient to suspend them for a third time, he shall give it in with the corresponding information to the respective judge.
 - IX. Look after that justice is administered promptly by the tribunals and judges, addressing them incitements and asking them for justified reports about the matters that he considers convenient, in order to have demanded the responsibility to the guilty individuals.
 - X. To have visit, in the manner that the Law stipulates, those tribunals and judges, provided that they had knowledge about them acting with slowness, or that in them disorders detrimental to the administration of justice are being committed: male that they give preference to the lawsuits that require so for the public good; and to ask for news of their state each time that he believes it convenient.
 - XI. Impose fines that do not pass from five hundred pesos to those who shall disobey his orders, or who are rude to him, abiding to what the laws stipulate.
 - XII. To give retirements, grant licenses and pensions, in accordance to what the laws stipulate.
 - XIII. To look after the legal exactitude in the manufacturing of the currency.
 - XIV. To look after the recollection and investment of the general rents, distributing them in the manner and form that the laws state.

- XV. To form the commerce duties with subjection to the bases that the Congress shall give.
- XVI. To direct the diplomatic negotiations, and celebrate peace, friendship, alliance, truce, army neutrality treaties and else agreements with the foreign nations, subject to the approval of the Congress before their approval.
- XVII. To admit ministers and else foreign envoys and agents.
- XVIII. To celebrate concordats with the Apostolic Chair, making them subject to the approval of the Congress.
- XIX. To grant the pass of the council decrees, bulls, briefs and pontific rescripts, or to decree their retention. This faculty he shall use it in accordance of the Congress, when they are about general issues; with audience of the Council if they are about particular business; and with the Court of Justice if they were about litigious matters. This faculty does not extend to the briefs in penitentiary subjects, that, as addressed to the internal jurisdiction, they shall not be subject to presentation.
- XX. To make within thirty days observations with hearing of the Council to the projects approved by the Chambers, suspending their publication; this term shall start to count since the same day in which he receives them. If the approved project were reproduced, the Government might suspend it with hearing of the Congress, until the immediate period of sessions, in which it corresponds that the Chambers may take care of the matter, giving them notice of this resolution within an equal term. If it were reproduced by the same two thirds of both Chambers, the Government shall publish it. When the thirty days of which this article talks about conclude being already closed the sessions of the Congress, the Government shall address to the Permanent Deputation the observations that he might do, or the notice that he has to give. Once passed the referred term without practicing anything of what is prevented, the sanction shall be had for approved, and the Law or decree shall be published without delay.
- XXI. To declare war in name of the Nation and to grant letters of marque.
- XXII. To have to his disposal the armed force of sea and land according to the purposes of his institution.
- XXIII. To grant letters of naturalization.
- XXIV. To exile from the Republic the non naturalized aliens who are pernicious to her.
- XXV. To admit the renounces of the justices of the Supreme Court of Justice and Martial, from the individuals of the Council, and the Governors of the Departments.
- XXVI. To grant particular reprieves, in the cases and with the conditions stipulated in the Law.

- XXVII. To grant exclusive privileges in accordance to the laws, to the inventors, introducers, or improvers of any art or industry useful to the Nation.
- XXVIII. To grant exemptions of age, and of literary courses, in the terms and with the circumstances that the laws prescribe.
- XXIX. To appoint orators in the heart of the Council, to occur to the Chambers when he considers it convenient, to express or defend the opinions of the Government.
- XXX. To increase or decrease the police forces of the departments, however the necessities of their institution demand so.

88. Besides the cases expressed in these bases, the President shall have the obligation to hear the opinion of the Council in the business to which the faculties 4, 5 and 18 of the previous article refer to.

89. The President cannot:

- I. Command in person the forces of sea or land without previous permission from the Congress. The President shall cease in the exercise of his functions while he commands the troops, and he shall only be referred to as General in chief.
- II. Leave the territory of the Republic during his entrustment and one year after without permission of the Congress.
- III. Separate more than six leagues from the place of residence of the Supreme Powers without permission of the Legislative Corps.
- IV. Transfer, cede, permute or mortgage any part of the territory of the Republic.
- V. Exercise any of his attributions without the authorization of the secretary of the dispatch of the respective branch.

90. They are prerogatives of the President: Not to be accused neither criminally processed during his presidency and one year after, but for crimes of treason against the national independence and form of government established in these bases. Neither might he be accused for common crimes, but until passed one year of having ceased in his functions.

91. In the temporary absences of the President of the Republic the Executive Power shall be deposited in the president of the Council. If the absence shall go over fifteen days, the Senate shall elect the person who must replace him which shall have the qualities required for this entrustment. If the absence is absolute, and it did not happen in the year in which the renewal shall be done, the election shall take place in the manner prevented in the articles 158 and following, and the appointed shall last the time that is missing for that in whose place he is coming in.

92. The interim president shall enjoy of the same prerogatives, honors and considerations than the proprietor, without any other limitation than being reduced to two month the term of which the article 90 talks about. A Law shall appoint the salary of the president and the one of the substitute.

Of the Ministry

93 The dispatch of all the business of the government shall be in charge of four ministers, who shall be called, of foreign affairs, government and police; of justice, ecclesiastic business, public instruction and industry; of treasury, and of war and marine.

94. To be minister it is required to be Mexican by birth, or to be found in the second case of the article 11 and to be citizen in the exercise of his rights.

95. They are obligations for each one of the ministers:

- I. Agree with the president the dispatch of all the business relating to their branch.
- II. Annually present to the Chambers before January 15th a specifying memoir of the state in which the branches of the public administration corresponding to their ministry are found, proposing in it the reforms that he considers convenient.

The Minister of Treasury shall present it on July 8th and with it the general account of expenses of the last year, the general budget of those from the next year, and the initiative of the contributions with which they shall be filled.

96. All the business of the government shall be ordered precisely by the ministry to whose branch they belong to, without that a minister might authorize those corresponding to another.

The orders issued against this disposition, and those of the president which appear without the due authorization, shall not be obeyed or complied.

97. All the authorities of the Republic, without any exception, shall lend attentive obedience to the orders addressed to them by the secretaries of the dispatch, being issued in the form prescribed by these bases.

98. The ministers have the right to concur to the Chambers provided that the President stipulates so; they shall do it when any of them agrees so and they shall give them orally or in writing all the informs that they ask for, always saving the case that the revelation of a secret compromises the success of the pending businesses.

99. The ministry shall form regulations, specifying the businesses that correspond to each branch and shall present it to the Congress within the first period of its sessions for its approval. These regulations might not be reformed or altered without permission of the Congress.

100. The ministers shall be held responsible for the acts of the president which they authorize with their signatures against the Constitution and the laws.

101. The ministers shall get together in meeting when the president stipulates it, or when the minister of the branch asked so. Everybody shall sign the agreement in the respective book, writing down those who disagreed.

102. They shall be held responsible for the resolutions that were taken in ministers meeting, those who agreed on them, and in every case the minister who authorizes it.

103. The President, after hearing the opinions expressed by the ministers in the meeting, is free to resolve whatever he considers.

Of the Government Council

104. There shall be a Government Council formed of seventeen members appointed by the president.

105. To be councilor it is necessary to be citizen in exercise of his rights, older than thirty five years, and to have served without annotation for at least ten years in the public career. The number of councilors shall be chosen in order that there are at least three persons that because of their career they have performed in the peculiar business of each ministry.

106. The president of the Council shall be appointed early each year by the President of the Republic, from among the members who are Mexicans by birth and from the secular state, upon proposal in a list of three of the Council itself.

107. The position of councilor is perpetual, and it shall only be lost for executed sentence that imposes this penalty.

108. The councilors might not be deputies or senators.

109. The councilors shall be responsible of the reports that they shall give against the Constitution and the laws.

110. The Council shall form its internal regulations, and shall subject them to the approval of the Congress.

111. It is obligation of the Council to give their report to the government in all the matters that demand so these bases and in the rest in which he consults them.

112. It is an attribution of the Council to propose to the government the regulations and measures that they believe useful to the best public service in all the branches of the administration.

113. They shall be supernumerary councilors those who have exercised the position of President of the Republic, those declared meritorious of the motherland, those who have been secretaries of the dispatch for over a year, the retired justices of the Supreme Court of Justice and of the Martial, and the supernumerary chiefs of Treasury already retired who have reached forty years in the service.

114. These shall substitute the temporary absences of the proprietors in attention to their antiquity; and they shall also have vote in the serious matters in which the government wants to hear the report of the full Council; or when the council itself agrees the concurrence of all its individuals.

TITLE VI

OF THE JUDICIAL POWER

115. The Judicial Power is deposited in a Supreme Court of Justice, in the superior tribunals and inferior judges of the departments, and in the rest that the laws establish. The special tribunals of treasury, commerce and mining shall subsist while another thing is not stated by the laws.

116. The Supreme Court of Justice shall be formed of eleven justices and a prosecutor. The Law shall determine the number of substitutes, their qualities, the form of their election and duration.

117. To be justice of the Supreme Court of Justice it is required:

- I. To be citizen in exercise of his rights.
- II. To be forty years old.
- III. To be attorney graduated according to the laws, and to have exercised their profession for a period of ten years in the judiciary, or fifteen in the Law court with open study.
- IV. Not to have been judicially condemned in a legal process for any crime or felony that has a dishonoring penalty.

Attributions of the Supreme Court of Justice

118. They are faculties of the Supreme Court of Justice:

- I. To know in all the instances the criminal causes filed against public servers, to whom the Congress or the Chambers declare the formation of the lawsuit, and of the civil of those same.
- II. To know in all the instances about the civil and criminal lawsuits in which the plaintiff part is the servers of which the previous article talks about, provided that the defendant solicits it in any state of the business, even in the act of citation for sentence.
- III. To know in all the instances about the civil and criminal lawsuits filed against the ministers and else diplomatic agents, and consuls of the Republic.
- IV. To know in all the instances about the disputes filed in trial about contracts authorized by the Supreme Government.
- V. To know in the same way about the judicial lawsuits that a department attempted against another one, or the particulars against a department, when they are reduced to a truly litigious trial.
- VI. To know also in all the instances of the litigious matters belonging to the patronage of the Nation.
- VII. To know about the lawsuits called of admiralty, sea and land preys, and crimes committed in the high seas.
- VIII. To know about the responsibility lawsuits of the magistrates of the superior tribunals in the departments.
- IX. To know about the criminal lawsuits that shall be formed against the immediate subordinated of the Supreme Court of Justices that because of faults, excesses or abuses committed in the service of their destinies.
- X. To resolve the competences that arouse among the tribunals and courts of the diverse departments or jurisdictions.

- XI. To know in the third instance about the civil businesses filed against the governors, and about the civil and criminal lawsuits of the superior magistrates of the departments.
 - XII. To know about the motions of nullity filed against the sentences given in the last instance by the superior tribunals of the departments. But if it were convenient to the part, he might file the motion before the tribunal of the most immediate department, it being collegiate.
 - XIII. To know about the motions of force of the Very Reverend Archbishops and Reverend bishops, general curates or vicars, and ecclesiastical judges; but if it were convenient to the part, he might file it before the tribunal of the same department, if it is collegiate, or before the most immediate that is so.
 - XIV. To hear the doubts of the tribunals about the intelligence of any Law, and once judging them founded, to initiate the corresponding declaration.
 - XV. To appoint all the clerks and subordinates of the Court itself, to whom they shall issue their dispatches the President of the Republic.
119. The Supreme Court of Justice might not:
- I. Make any regulations, not even on matters belonging to the administration of justice, neither dictate providences that contain general dispositions that alter or declare the laws.
 - II. Take any information about government or economic matters of the Nation, or the departments.
120. The justices of the Supreme Court of Justice might not:
- I. Have any commission in the government without permission of the Senate.
 - II. Be judicial representatives, or advisors, either practice Law; but in their own lawsuit.
121. About the civil lawsuits of the justices of the Supreme Court of Justice shall know the tribunal of which the article 124 and following talk about.
- Martial Court
122. There shall be a Martial Court formed of effective generals and attorneys, appointed by the President of the Republic upon proposal in a list of three from the Senate. These magistrates shall be perpetual.
123. The organization of the Martial Court, and the manner of knowing about the diverse classes of matters that correspond it, shall be object of a Law.
- Tribunal to Judge the Justices of the Supreme Court of Justice
124. In order to judge the justices of the Supreme Court of Justice and Martial, a tribunal shall be elected in this form. Each biennium on the second day of sessions, all the names of the attorneys in both Chambers shall be put into a sack. The Chamber of Deputies shall draw twelve individuals, and those who result shall form the tribunal that shall know about the mentioned lawsuits.

125. This number shall be distributed in three courtrooms in the form that the regulations of the Congress stipulate.

126. The defendant and prosecutor might recuse each one a judge in each hall without expression of the cause.

127. The blank of the recusal shall be filled with judges of the next courtroom; and for those who are missing in the last one; they shall be drawn from the attorneys in the sack belonging to the Chamber who has not done the declaration of forming the lawsuit.

128. If there were not enough attorneys of whom the previous article talks about, they shall be elected by the respective Chamber from among the rest of the individuals the persons who they consider best to complete the total of judges, not having to be chosen ecclesiastics.

129. If the number of attorneys in the sack of both Chamber would not reach twenty, it shall be completed with other individuals of the Chambers, elected half for each Chamber if the lack were an even number, if it were not, the Chamber of deputies shall appoint the greater number, and the senators the smaller; and if one were missing the Chamber of deputies shall elect him.

130. Those who result appointed for judges shall not vote in the jury of accusation.

TITLE VII

GOVERNMENT OF THE DEPARTMENTS

131. Each department shall have an assembly formed of a number of members that does not go over eleven or under seven, in opinion, for this time, of the current departmental Juntas. The number of substitutes shall be chosen equal to that of the proprietors.

132. In order to be member of the Departmental Assemblies it is required the age of twenty five years, and the other qualities than to be Deputy of the Congress, and not to be comprised in any of its exceptions.

133. The mentioned members shall last four years in their entrustment, and shall be renewed by half every two years, going out for the first time the secondly appointed, and in the future the most antique. If the number were uneven, the smaller number shall go out first, and they shall continue to alter in the future the greater and smaller part.

134. They are faculties of the departmental Assemblies:

- I. To establish duties to complete the ordinary expenses, or to make the extraordinary ones that they determine according to their faculties, with approval of the Congress, without harm of taking them into effect immediately after they decree them. The President of the Republic may

suspend the execution of these duties, giving notice without delay to the Congress.

- II. To arrange the investment and accounting of the treasury of the department.
- III. To create the employments necessary for the recollection and distribution of the departmental treasury, assign them their remunerations, and to regulate the obligations of the employees.
- IV. To create funds for the establishment of instruction, utility or public welfare, with the requirements designated in the first attribution.
- V. To decree what is convenient, and in accordance to the laws regarding the acquisition, transfer and barter of goods that belong to the common of the department. About transfers of terrains the laws in force shall be observe, and what the laws of colonization determine.
- VI. To state the opening and improvement of ways of the department, and to look after their preservation, establishing in them tolls to cover their cost; understanding this attribution without harm of what the laws prevent about general ways.
- VII. To promote the publish teaching in all of its branches, creating and providing literary establishments, and subjecting to the bases that the Congress shall give on preparatory studies, courses, tests and degrees.
- VIII. To create and regulate the welfare, correction or security establishments.
- IX. To regulate the contingent of men that the department has to give for the army.
- X. To make the political division of the territory of the department, establish municipal corporations and servers, issue their respective ordinances, and to regulate the municipal police, urban and rural.
- XI. To look after the public health and to regulate whatever it is convenient to preserve it.
- XII. To promote the agriculture, industry and else branches of prosperity, according to its faculties.
- XIII. To approve the plans of municipal duties, and the annual budgets of expenses of the municipalities.
- XIV. To establish and organize the superior tribunals and inferior courts respecting the property of the current magistrates and judges, and to regulate the exercise of their functions, without altering the order of procedures that state or shall state the laws.
- XV. To make Law initiatives to the Congress in use of the faculty that the article 53 grants them.
- XVI. To consult the government in all the matters in which it demands so, and also in those that it shall do it in accordance to these bases and the laws.

- XVII. To propose to the Supreme Government a list of all the persons that seem appropriate and that are not less than five, for the appointment of governor. In the border departments the government shall not have the obligation to subject to this list, and shall happen in the same when in any other department, and in extraordinary case, the Congress shall agree so by initiative of the President.
- XVIII. To make the elections according to these bases, of President of the Republic, individuals of the Supreme Court of Justice and Senators.
- XIX. To decree the police force that there shall be in the department, and to regulate its service, which shall be reduced to preserve the order, look after the public safety, and aid the execution of the orders of the political and judicial authorities. This force shall not enjoy of privilege, and shall be distributed in the towns proportionally to their needs.
- 135. They are obligations of the departmental Assemblies:
 - I. To annually form the statistics of its department, and address it to the Supreme Government with the observations that it believes convenient for the good and progress of the department.
 - II. To form the annual budgets of the expenses of the department and address them to the General Congress so that they have them present at the moment of revising the duties that they establish to complete them.

Of the Governors

136. There shall be a governor in each department, appointed by the President of the Republic upon proposal of the departmental assemblies, according to the faculty XVII of the article 134. He shall last five years in his entrustment, counting since the day in which he takes possession.

137. To be governor it is required, to be citizen in the exercise of his rights, elder than thirty five years, natural or neighbor of the department, to have two thousand pesos of effective rent, and to have served for five years in public employments or positions.

138. The temporary absences of the governors shall be substituted by the most antique secular member of the departmental Assembly: the absolute absence shall be covered by a new election in the form prevented in these bases. The appointed one might never last more time than that that was missing to the replaced governor.

139. The proposal to be governor shall be done in the first ten days of February of the year in which he shall be renewed.

140. They are obligations of the governors of the departments:

- I. Look after the preservation of the public order in the interior of the department.
- II. To publish the laws and decrees of the National Congress, and the decrees of the President of the Republic, no later than in the third day of

its receipt, making them to have their compliance within the territory in which they exercise their functions.

III. To publish, and have comply the decrees of the departmental Assemblies.

141. The governors are the only and necessary conduct of communication with the supreme authorities of the Republic; excluding the cases of accusation, or complaint against them, and the official correspondence of the superior tribunals, with the Supreme Court of Justice in judicial matters.

142. They are attributions of the governors of the department:

- I. To return within eight days to the departmental assemblies their decrees when they consider it contrary to these bases or to the laws; if they insisted on them, they shall send it to the government also within eight days for the purpose of the effects prescribed in the attribution XVII of the article 66, suspending meanwhile its publication.
- II. To return once, within eight days, to the departmental assemblies their decrees which are not in the case of the previous article, expressing the reasons that he has against it; if they shall insist, he shall precisely publish it.
- III. To appoint the political subordinate authorities of the department.
- IV. To appoint the employees that are established to recollect and distribute the treasury that is for the department. In this appointment the property of the current servers shall be respected.
- V. To present lists of three to the President of the Republic in accordance to the departmental Assemblies for the appointment of superior magistrates, learned judges and advisors; hearing in every case the reports of the superior tribunals.
- VI. To exercise relating to the servers of the department the same faculty that gives to the President of the Republic the attribution VIII of the article 87, and impose fines to those who are rude to him, or in the cases and in the manner that the laws stipulate.
- VII. To look after that justice is administered promptly in the department in the same way that the President of the Republic shall do it.
- VIII. To be born President of the departmental Assembly with vote in it, and the quality vote in case of tie, provided that the voting is not in exercise of the electoral power.
- IX. To have to his disposal the police force for the object of his institution.
- X. To be chief of the public treasury of the department, and to have in the general treasury surveillance that the Law grants him.
- XI. To grant permissions for the establishment of public literary or welfare associations, and to revise their regulations, reforming in them whatever it were contrary to the laws or the public order.

143. The governors shall be supplied with the aides that they need from the armed force for the preservation of the order in their departments.

144. The secondary laws, and the decrees that the departmental assemblies issue in use of the attributions that these bases grant them, shall designate the faculties and obligations of the governors, according to the previous bases.

145. The governors in their civil lawsuits shall be judged in first and second instance by the superior tribunals of the departments, in which they exercise their functions or of those whose capital is most immediate, upon election of the plaintiff.

Administration of Justice in the Departments

146. In the departments there shall be superior tribunals of justice and inferior judges. All the businesses that start in the inferior courts of a department shall finish within their territory in all instances. A Law shall determine the manner of substituting the second and third instances in the departments that might not establish superior tribunals.

TITLE VIII

ELECTORAL POWER

147. All the populations of the Republic shall divide in section of five hundred residents, for the celebration of the primary boards. The citizens shall vote, by means of ballots, an elector for every five hundred residents. In the towns where they do not reach this number they shall be celebrated nevertheless the primary boards, and an elector shall be appointed in them.

148. The primary electors shall appoint the secondary ones who shall promote the electoral college of the department, serving as a base to appoint a secondary elector for each twenty of the primaries that shall comprise the board.

149. The Electoral College appointed according to the previous article, shall do the election of deputies for the Congress, and of members of the respective departmental Assembly.

150. In order to be elected primary or secondary elector, it is necessary to be citizen in exercise of his rights, elder than twenty five years, neighbor of the party where he is elected, and not to exercise in it litigious jurisdiction. The primary electors shall be residents of the section in which they are appointed, and the secondary in the party: these shall also have an annual rent of five hundred pesos at least, coming from a physical capital, industry or honest employment. The constitutional congresses might arrange, according to the circumstances of the departments, the rent that in each of them must be required to be secondary elector.

151. The political authorities shall have the elections celebrated in the day appointed by the Law.

152. The individuals belonging to the militia shall vote in the section of their barracks, and they shall not present themselves armed or forming corps.

153. The electoral Juntas shall qualify the validity of the previous election, and if the individuals in whom it fell on have the requirements demanded by Law.

154. In case of tie luck shall decide.

155. The census of the departments shall be renewed every six years, and the number of its representatives shall be computed through it.

156. The primary elections shall be verified every two years in the second Sunday of August; the secondary ones in the first Sunday of September, and those of the electoral colleges to appoint deputies for the Congress and members of the departmental assemblies, in the first Sunday of October and following Monday.

157. The departmental assemblies shall qualify if the appointed members have the requirements that are demanded to be so. Any other qualification on validity of these elections shall be comprised in the one done by the Chamber of Deputies according to the article 68, without harm of the elected individuals coming in right away to function. The current departmental boards shall do for this time the qualification on if the individuals who shall succeed them have the requirements demanded by Law.

158. On November 1st of the previous year to the renewal of President of the Republic, each Departmental Assembly, upon majority of votes, and in case of tie in accordance to the article 154, it shall vote for President for a person who reunited the required qualities for exercising this magistracy.

159. The act of this election shall be sent by duplicate and in a certified document to the Chamber of Deputies and to the permanent deputation during its recess.

160. On January 2nd of the year in which the president shall be renewed, both Chambers shall reunite, and open the documents, regulate the votes, and qualify the elections according to the articles 164 and 168, and declare president that who has reunited the absolute majority of suffrages.

161. If there were not absolute majority, the Chambers shall elect president from among those two who had greater number of votes. If there were more than two who exceeded in votes, but in equal number to the rest, the President shall be elected among these.

162. If there were not respective majority, and among those who gathered less votes were two or more that had an equal number, but greater than the rest, the Chambers to do the election of President, shall elect among these last ones one who shall compete with the first. All these acts shall be executed in one sole session.

163. The votes of which the previous articles talk about shall be done upon absolute majority of votes; in case of tie the vote shall be repeated, and if it happened again, luck shall decide.

164. The acts specified for the election of President shall be null if they are executed in other days than those appointed, unless that the session had been continuous and prevents, whether the reunion of the Congress, or that of the greater part of the Departmental Assemblies, the Congress with the vote of the two third parts of the

present individuals of each Chamber, shall designate other days, being valid this agreement extraordinarily and only for that time.

165. The President shall finish his function on February 1st of the year of his renewal, and in the same day the newly appointed shall take possession, or in lack of the latter that who shall substitute him, according to these bases.

166. The vacancies that there were in the Supreme Court of Justice shall be covered by election of the Departmental Assemblies, the computing being done by the Chambers in the form prescribed for the election of the President.

167. The elections of senators corresponding to the third that shall be renewed every two years shall be held by the departmental assemblies, Chamber of Deputies, President of the Republic and Supreme Court of Justice, on October 1st of the previous year to the renewal. The election and computing that the Senate shall do with submission to the articles 35 and 37 shall be done on next December 1st.

The new Senators and deputies shall come in possession of their position on the immediate January 1st.

168. No election might be considered null, but for one of the following motives: 1st Lack of the constitutional qualities in the elected individual. 2nd Intervention or violence of the armed force in the elections. 3rd Lack of absolute majority of those who have the right to vote in the elections that are not primary. 4th Error or fraud in the computing of the votes.

169. The appointment of Councilor prefers to that of and senator: that of senator to that of Deputy: that of senator elected by the departmental assemblies than that proposed by the first authorities; and that of Deputy by vicinity to that who were by birth.

170. The governors of the departments shall be appointed during the whole month of March of the year in which they shall be renewed and shall take possession on the following May 15th.

171. The decrees issued by the Congress and the Senate in exercise of their electoral functions, in accordance to these bases, are not subject to the observations of the Government.

172. The Senate shall appoint the days in which the elections to fill the vacancies of President of the Republic, senators and justices of the Supreme Court of Justice shall be done.

173. The elections of deputies, senators, President of the Republic and members of the Departmental Assemblies, shall be done in the current year in the days designated in these bases. The first Congress shall open its sessions on the immediate January 1st. The Government Council shall start its functions on the same day, appointing it for that purpose, by the provisional President of the Republic: the Constitutional President shall come in functions on the following February 1st; and in the ten first days of the same month the proposal for governors of the departments shall be done. The new departmental Assemblies shall star on the immediate January 1st. To facilitate

the primary and secondary elections in the first time, it shall be observed what is prevented in the Law of November 30th, 1836 about them, in whatever does not oppose to these bases.

174. If in any of the departments the primary, secondary or departmental elections were not celebrated in the days designated in these bases, the Congress, and during its recess the Permanent Deputation, shall appoint the day in which they shall be done, and for this time the government.

TITLE IX

GENERAL DISPOSITIONS ABOUT THE ADMINISTRATION OF JUSTICE

175. The prisons shall be arranged in order that the place of the detention is different from that of prison.

176. No one shall be demanded oath in the criminal subject about an own fact.

177. The judges, within the first three days that the accused is detained to his disposal, shall take his preparatory declaration, expressing to him before the name of his accusatory, if there were, the cause of his imprisonment, and the information that there is against him.

178. At the moment of taking the confession of the defendant, the process shall be read entirely, and if he did not know the witnesses, he shall be given all the appropriate information so he knows them.

179. It is forbidden the penalty of seizure of goods; but when the imprisonment were for crimes that carry on pecuniary responsibility, enough goods might be sequester in order to cover it.

180. The annotation of infamy is not transcendental.

181. Death penalty shall be imposed without applying any other species of physical sufferings that mean more than the simple deprivation of life.

182. Any lack of observance in the essential procedures of a process produces the responsibility of the judge and in the civil subject the nullity in addition for the only purpose of replacing the process. The Law shall appoint the procedures that are essential in every trial.

183. In any lawsuit, whatever the quantity and nature is, might there be more than three instances. The Law shall state the number of which in each lawsuit there shall be for the sentence to be executory.

184. The magistrates and judges, who had ruled in an instance, might not do it in another.

185. The attorneys in Law have the right to finish their civil disputes, and the criminals on purely personal injuries, by means of arbitrators, whose sentence shall be executed according to the laws.

186. To initiate any civil dispute or criminal on purely personal injuries, it shall be attempted before the means of conciliation, in the form and with the exceptions that the Law establishes.

187. The civil, criminal and commerce code shall be one and only for the entire Nation, without harm of the variation that in some places the Congress might do because of particular circumstances.

188. The magistrates of the superior tribunals and the learned judges shall be perpetual.

189. The magistrates and judges might not be suspended but in the cases comprised in the part 7 of the article 142 or in the article 191, or because of judicial writ; neither deprived of their positions but through executory sentence that imposes this penalty.

190. If the President of the Republic, as a result of the attributions IX and X contained in the article 87, or because of founded complaints against any magistrate or judge, believed that they shall be held responsible, he shall gather the convenient information, and once heard the report of his Council, shall pass everything to the respective judge, leaving the defendant suspended from his employment. This article is not understood prevented relating to the justices of the Supreme Court of Justice and of the Martial.

191. The General Congress, by itself, or excited by the President of the Republic, might exercise regarding to the Supreme Court of Justice and to the Martial the same visits prevented in the faculty 10 of the article 87 regarding the superior tribunals and inferior courts, and if from the visit it resulted that responsibility shall be held against any of the magistrate or magistrates, the appropriate information shall be passed to the section of the Great Jury of any of the Chambers.

192. The Congress might establish, for a determined time, special courts fix or traveling, to pursue and punish the gang thieves, with the circumstance that these courts are of first instance and that the confirmation of the sentences is done by the tribunals of second and third instance of the territory wherever they gave their ruling.

193. A general Law shall state the manner of proceeding of these tribunals, and might also abbreviate the procedures of the second and third instances without that in any case privileged proofs may be admitted, or that the defendants are deprived of the resources that the laws grant them for their defense.

194. General Prosecutors shall be established near from the tribunals for the Treasury business and the others that are of public interest.

195. In the crimes of press there is no complicity in the printers; but they shall be held responsible if they do not make sure in the legal form of the responsibility of the editor or writer, or if they printed documents against the private life, not being understood by such those that are about crimes or faults of the public servers, relating to the compliance of their duties. The Law shall appoint the time that the responsibility of the printer shall last.

196. A Law shall determine the cases in which the press freedom is being abused, designate the penalties and arrange the trial, not being able to appoint other abuses than the following: against the religion, against the moral and good manners; provocation to sedition and disobedience of authorities; attack to the independence and form of government that these bases establish, and when public servers are libeled in their official conduct.

197. Every corruption by bribery, suborn or barratry, produces popular action against any public server who committed it.

198. If in extraordinary circumstances the security of the Nation demanded in the entire Republic, or in part of it, the suspension of the formalities prescribed in these bases, for the apprehension and detention of the criminals, the Congress might decree it for a determined period of time.

TITLE X OF THE PUBLIC TREASURY

199. The public Treasury shall be divided in general and departmental. In the first period of sessions of the first Congress it shall be given the Law, distributing the rents among the two expressed parts, in order that those assigned to the departments are proportional to their expenses, including in them the payment of the salaries of their respective deputies.

200. A Law, which the government shall initiate in the first period of sessions of the first Congress, shall arrange the General Treasury, and shall establish as a base to appoint the means to amortize the public debt, and the funds with which it shall be done.

TITLE XI OF THE OBSERVANCE AND REFORM OF THESE BASES

201. Every public server before taking possession of his destiny or in order to continue in it shall take an oath to comply everything stipulated in these bases. The government shall regulate the act of the oath of all the authorities.

202. In any time alterations or reforms to these bases might be done. In the laws given on this matter, everything prevented regarding the common laws shall be observed, without any difference than for every vote, whatever it were, there shall not be necessary more neither less than two third of votes in both Chambers. The Executive shall have in these cases the faculty 20 of the article 87.

Communicate this to the provisional Supreme Executive Power for the consequent effects: Court of Sessions of the Honorable Legislative Board in México, on June 12th, 1843. Manuel Baranda, President. Cayetano Ibarra, Vicepresident. Dr. José María Aguirre. Ignacio Alas. Basilio Arrillaga. José Arteaga. Pedro Agustín Ballesteros.

Pánfilo Barasorda. José Ignacio Basadre. Manuel Diez de Bonilla. José de Caballero. Sebastián de Camacho. Tiburcio Cañas. Martín Carrera. Crispiniano del Castillo. José Fernández de Celis. Luis G. Chavarri. José Florentino Conejo. José Gómez de la Cortina. Mariano Domínguez. Pedro Escobedo. Rafael Espinoza. Pedro García Conde. Simón de la Garza. Juan de Goríbar. José Miguel Garibay. Antonio de Icaza. Juan Manuel, Archbishop of Cesarea. José María Iturralde. Juan Icaza. Manuel Larrainzar. Joaquín Lebrija. Francisco Lombardo. Diego Moreno. Dr. Manuel Moreno and José Francisco Nájera. Juan Gómez de Navarrete. Francisco Ortega. Juan de Orbegoso. Antonio Pacheco Leal. Manuel Payno y Bustamante. Manuel de la Peña y Peña. Tomás López Pimentel. Manuel Archbishop of México. Andrés Pizarro. José María Puchet. Andrés Quintana Roo. Santiago Rodríguez. Romualdo Ruano. Juan Rodríguez de San Miguel. Gabriel Sagasetta. Vicente Sánchez Vergara. Vicente Segura. Gabriel de Torres. Gabriel Valencia. José Mariano Vizcarra. Hermenegildo de Viya y Cosío. José Manuel Zozaya. Luis Zuloaga. Miguel Cervantes. Manuel Dublan. Mariano Perez Tagle. Urbano Fonseca. Manuel Rincón. Juan José Quiñónez, secretary member. Juan Martín de la Garza y Flores, secretary member. José Lázaro Villamil, secretary member. José María Cora, secretary member.

I Antonio Lopez de Santa Anna, Provisional President of the Republic, sanction the organic bases, formed by the National Legislative Board, in accordance to that prevented in the decrees of December 19th and 23rd, 1842, and in use of the faculties that the Nation has served to confer me, today June 12th, 1843. Antonio López de Santa Anna. José María Bocanegra, Minister of State and Interior. Pedro Vélez, Minister of Justice and Public Instruction. Ignacio Trigueros, Minister of Treasury. José María Tornel y Mendívil, Minister of War and Marine.

Therefore I order it to be printed, published, circulated and that it is given the due compliance. Palace of General Government in Mexico, in June 12th, 1843. Antonio López de Santa Anna. To the Minister of State and Interior.

And I communicate it to Your Excellency for his intelligence and exact compliance.

God and Liberty, Mexico, June 12th, 1843. Bocanegra. Very Excellent Sir Governor of the Department of México.

And in order that it reaches the news of everybody, I order it is publication through edict in this capital and in the rest of the cities, towns and places comprising the department, stating it in the accustomed spots and circulating it to whom its observance concerns. Given in México, June 14th, 1843. Valentín Canalizo. Luis G. de Chavarri, Secretary.

ACTA DE REFORMAS

6. I. EXTRACTO DEL ACTA DE REFORMAS

5 de abril de 1847
(Contenidos Paradigmáticos)
22 artículos¹

- Art. 1.* Cualidades para ser ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.
- Art. 2.* Derechos del ciudadano.
- Art. 3.* Suspensión de los derechos del ciudadano.
- Art. 4.* Garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad.
- Art. 5.* Elección de Diputados y requisitos para serlo.
- Art. 6.* Elección de Senadores.
- Art. 7.* Requisitos para ser Senador.
- Art. 8.* Función exclusiva de la Cámara de Diputados.
- Art. 9.* Declaración de formación de causa por delitos del fuero común.
- Art. 10.* Aprobación de una ley.
- Art. 11.* Derogación de artículos referentes a la Vicepresidencia.
- Art. 12.* Responsabilidad para el Presidente de los delitos comunes que cometa.
- Art. 13.* Arreglo de las elecciones de servicios públicos.
- Art. 14.* Límites y derivación de los Poderes de la Unión.
- Art. 15.* Derechos de los Estados fijados en la Constitución.
- Art. 16.* La Ley Estatal que ataque a la Constitución será nula.
- Art. 17.* Reclamación de una ley que sea inconstitucional.
- Art. 18.* Invalidez de una ley anticonstitucional.
- Art. 19.* Amparo del ejercicio y conservación de derechos.
- Art. 20.* Las Leyes Reglamentarias de la Constitución no pueden alterarse ni derogarse.

¹ * Cfr. *500 años de México en Documentación, Siglo XIX*.

COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: *Enciclopedia Política de México*. Obra conmemorativa de los 200 años de la Independencia de México, 100 años de la Revolución, VIII Tomos (12 volúmenes), Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, LXI Legislatura, México, 2010.

Art. 21. Reforma de los artículos de la Constitución.

Art. 22. Arreglo de los Poderes Públicos al Acta de Reformas.

6.2. PROYECTO DE REFORMAS Y ACTA CONSTITUTIVA

México, 5 de abril de 1847

22 artículos

PROYECTO

En el nombre de Dios, criador y conservador de las sociedades, el Congreso Extraordinario Constituyente, considerando: Que los Estados Unidos Mexicanos, por un acto espontáneo de su propia e individual soberanía, y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno general, bajo la forma de República popular, representativa, y sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia; que aquel pacto de alianza, origen de la primera Constitución y única fuente legítima del Poder Supremo de la República, subsiste en su primitivo vigor, y es y ha debido ser el primer principio de toda la institución fundamental; que ese mismo principio constitutivo de la Unión Federal, si ha podido ser contrariado por una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por una nueva Constitución; y que para más consolidarle y hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia ha demostrado ser muy necesarias en la Constitución de 1824, ha venido en declarar y decretar, y en uso de sus amplios poderes declara y decreta:

- I. Que los estados que componen la Unión Mexicana han recobrado la independencia y soberanía que para su administración interior se reservaron en la Constitución.
- II. Que dichos estados continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez el modo de ser político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos.
- III. Que la Acta Constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas en 31 de enero y 24 de octubre de 1824, forman la única Constitución Política de la República.
- IV. Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente:

ACTA DE REFORMAS

1. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos, y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.

3. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago, por el estado religioso, por el de interdicción legal, en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse a servir los cargos públicos de nombramiento popular. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano, y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión.

4. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

Estas garantías son inviolables, y sólo en el caso de una invasión extranjera o de rebelión interior, podrá el Poder Legislativo suspender las formas establecidas para la aprehensión y detención de los particulares, y cateo de las habitaciones y esto por determinado tiempo.

Todo atentado contra dichas garantías es caso de responsabilidad, y no podrá recaer a favor de los culpables, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea emanada del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena.

5. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un Diputado al Congreso General. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no estar comprendido al tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la Constitución.

6. Además de los dos senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al número de estados, electos a propuesta de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones, del Senado y del Ejecutivo. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la Cámara de Diputados, votando por personas, nombrará los que falten de entre los otros postulados.

El Senado se renovará por tercios cada dos años.

7. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras calidades que se requieren para ser diputado, y además haber sido Presidente o Vicepresidente Constitucional de la República; o por más de seis meses Secretario del Despacho, o Gobernador de Estado; o individuo de las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura;

o por más de cinco años encargado diplomático; o Ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado.

8. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados erigirse en gran jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios a quienes la Constitución o las leyes conceden este fuero.

9. Declarado que ha lugar a la formación de causa, si el delito fuere común, pasará el expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos presentes. Hecha esta declaración, la Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley.

10. Para toda ley se necesita la aprobación de la mayoría de los individuos presentes en ambas Cámaras.

11. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de la República, y la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso en que faltaran ambos funcionarios.

12. El Presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo, y aún de los de oficio exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual consistan no esté autorizado por la firma del Ministro responsable.

Los ministros responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos de comisión, o sean de pura omisión.

13. Por medio de leyes se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 6° de esta Acta. La ley establecerá y organizará también los juzgados de primera y segunda instancia que han de correr de los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación.

14. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.

15. Sobre los objetos sometidos al Poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución, ni otro medio legítimo de intervenir en ellos que el de los Poderes Generales que la misma establece. La Constitución sólo reconoce como legítima entre todos o entre alguno de los estados, la relación que constituyó y actualmente constituye su federación.

16. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores.

17. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General fuere reclamada, como anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que

se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y esta publicará el resultado, quedando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas.

18. En el caso de los artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga.

19. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de ley o del acto que lo motivare.

20. Las leyes de que hablan los artículos 3º, 4º y 13 de esta Acta, la de libertad de imprenta, la orgánica de la Guardia Nacional y todas las que reglamenten estas disposiciones generales de la Constitución y de esta Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni derogarse, sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y su discusión.

21. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Constitución, siempre que así lo acuerden los dos tercios de ambas Cámaras o la simple mayoría de dos Congresos distintos e inmediatos. Las reformas que limiten en algún punto la extensión de los Poderes de los estados, necesitan además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. Pero en ningún caso se podrán alterar los principios primordiales y anteriores a la Constitución que establecen la independencia de la Nación, su forma de gobierno republicano, representativo, popular, federal, y la división, tanto de los Poderes Generales, como de los estados. En todo proyecto de reforma se observará la dilación establecida en el artículo anterior.

22. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes Públicos se arreglarán a ella. El Legislativo general continuará depositado en el actual Congreso hasta la reunión de las Cámaras. Los estados seguirán observando sus Constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus Poderes en los plazos y términos que ellas designen. México, 5 de abril de 1847. M. Otero.

ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS

(30 artículos)

SANCIONADA POR EL CONGRESO EXTRAORDINARIO CONSTITUYENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 18 DE MAYO DE 1847, JURADA Y PROMULGADA EL 21 DEL MISMO.

1. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.

3. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago; por el estado religioso, por el de interdicción legal; en virtud de proceso sobre aquellos delitos por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse, sin excusa legítima, a servir los cargos públicos de nombramiento popular.

4. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión. El ciudadano que haya perdido sus derechos políticos, puede ser rehabilitado por el Congreso General.

5. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

6. Son estados de la Federación los que se expresaron en la Constitución Federal y los que fueron formados después conforme a ella. Se erige un nuevo Estado con el nombre de Guerrero, compuesto de los distritos de Acapulco, Chilapa, Taxco y Tlapa, y la Municipalidad de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán, siempre que las Legislaturas de estos tres estados den su consentimiento dentro de los tres meses.

Mientras la ciudad de México, sea Distrito Federal, tendrá voto en la elección de Presidente y nombrará dos senadores.

7. Por cada cincuenta mil almas, o por una fracción que pase de veinticinco mil, se elegirá un Diputado al Congreso General. Para serlo se requiere únicamente tener veinticinco años de edad, estar en ejercicio de los derechos de ciudadano, y no hallarse comprendido al tiempo de la elección en las excepciones del artículo 23 de la Constitución.

8. Además de los senadores que cada Estado elija, habrá un número igual al de los estados, electo a propuesta del Senado, de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados, votando por diputaciones. Las personas que reunieren estos tres sufragios, quedarán electas, y la Cámara de Diputados, votando por personas, nombrará

los que falten de entre los otros postulados. La mitad más antigua de estos senadores pertenecerá también al Consejo.

9. El Senado se renovará por tercios cada dos años, alternando en ellos, año por año, la elección de los estados con la que deba verificarse por el tercio de que habla el artículo anterior.

10. Para ser senador se necesita la edad de treinta años, tener las otras calidades que se requieren para ser diputado, y además haber sido Presidente o Vicepresidente constitucional de la República; o por más de seis meses Secretario del Despacho; o Gobernador de Estado; o individuo de las Cámaras; o por dos veces de una Legislatura; o por más de cinco años enviado diplomático; o Ministro de la Suprema Corte de Justicia; o por seis años juez o magistrado; o Jefe Superior de Hacienda; o general efectivo.

11. Es facultad exclusiva del Congreso General dar bases para la colonización, y dictar las leyes conforme a las cuales los Poderes de la Unión hayan de desempeñar sus facultades constitucionales.

12. Corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, erigirse en Gran Jurado para declarar, a simple mayoría de votos, si ha o no lugar a formación de causa contra los altos funcionarios, a quienes la Constitución o las leyes conceden este fuero.

13. Declarado que ha lugar a la formación de causa, cuando el delito fuere común, pasará el expediente a la Suprema Corte; si fuere de oficio, el Senado se erigirá en Jurado de sentencia, y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable. Para esta declaración se necesita el voto de las tres quintas partes de los individuos presentes, y hecha que sea, la Suprema Corte designará la pena, según lo que prevenga la ley.

14. En ningún caso podrá tenerse por aprobado un proyecto de ley, con menos de la mayoría absoluta de votos de los individuos presentes en cada una de las Cámaras.

15. Se derogan los artículos de la Constitución que establecieron el cargo de Vicepresidente de la República, y la falta temporal del Presidente se cubrirá por los medios que ella establece, para el caso de que faltaran ambos funcionarios.

16. El Presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo; y aún de los de oficio exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual consistan, no esté autorizado por la firma del Secretario responsable.

17. Los secretarios del Despacho responden de todas las infracciones de ley que cometan, ora consistan en actos de comisión, o sean de pura omisión.

18. Por medio de leyes generales se arreglarán las elecciones de diputados, senadores, Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia, pudiendo adoptarse la elección directa, sin otra excepción que la del tercio del Senado que establece el artículo 8º de esta Acta. Más en las elecciones indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario, el ciudadano que ejerza mando político, jurisdicción civil, eclesiástica o militar, o cura de almas, en representación del territorio en el cual desempeñe su encargo.

19. La ley establecerá y organizará también los juzgados de primera y segunda instancia que han de conocer de los negocios reservados al Poder Judicial de la Federación.

20. Sobre los objetos cometidos al Poder de la Unión, ningún Estado tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución ni otro medio legítimo de intervenir en ellos, que el de los poderes generales que la misma establece.

21. Los Poderes de la Unión derivan todos de la Constitución, y se limitan solo al ejercicio de las facultades expresamente designadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restricción.

22. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores.

23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General, fuera reclamada como anticonstitucional, o por el Presidente, de acuerdo con su Ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres Legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y esta publicará el resultado, quedando anulada la Ley, si así lo resolviera la mayoría de las Legislaturas.

24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las Legislaturas a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la Ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley general a que se oponga.

25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la Ley o del acto que lo motivare.

26. Ninguna ley podrá exigir a los impresores fianza previa para el libre ejercicio de su arte, ni hacerles responsables de los impresos que publiquen, siempre que aseguren en la forma legal la responsabilidad del editor. En todo caso, excepto el de difamación, los delitos de imprenta serán juzgados por jueces de hecho y castigados sólo con pena pecuniaria o de reclusión.

27. Las leyes de que hablan los artículos 4º, 5º y 18 de la presente Acta, la de libertad de imprenta, la orgánica de la Guardia Nacional, y todas las que reglamenten las disposiciones generales de la Constitución y de esta Acta, son leyes constitucionales, y no pueden alterarse ni derogarse, sino mediando un espacio de seis meses entre la presentación del dictamen y su discusión en la Cámara de su origen.

28. En cualquier tiempo podrán reformarse los artículos de la Acta constitutiva, de la Constitución Federal y de la presente Acta, siempre que las reformas se acuerden

por los dos tercios de ambas Cámaras o por la mayoría de dos Congresos distintos e inmediatos. Las reformas que en lo sucesivo se propusieren limitando en algún punto la extensión de los Poderes de los estados, necesitarán además la aprobación de la mayoría de las Legislaturas. En todo proyecto de reformas se observará la dilación establecida en el artículo anterior.

29. En ningún caso se podrán alterar los principios que establecen la independencia de la Nación, su forma de gobierno republicano representativo, popular, federal, y la división, tanto de los poderes generales como de los estados.

30. Publicada esta Acta de reformas, todos los Poderes públicos se arreglarán a ella. El Legislativo general continuará depositado en el actual Congreso hasta la reunión de las Cámaras. Los estados continuarán observando sus constituciones particulares, y conforme a ellas renovarán sus poderes.

Dado en México, a diez y ocho de mayo de mil ochocientos cuarenta y siete. José J. De Herrera, diputado Presidente. Por el Estado de Chiapas, Clemente Castillejo. Pedro José Lanuza. Por el Estado de Chihuahua, José María Urquide. Manuel Muñoz. José Agustín Escudero. Por el Estado de Coahuila, Eugenio María de Aguirre. Por el Estado de Durango, José de la Bárcena. Por el Estado de Guanajuato, Octaviano Muñoz Ledo. Pascasio Echeverría. Juan José Bermúdez. Jacinto Rubio. Juan B. Sañudo. Ramón Reynoso. Por el Estado de México, J.J. Espinosa de los Monteros. Manuel Robledo. Joaquín Navarro. José María de Lacunza. M. Riva Palacio. José B. Alcalde. Manuel Terreros. José A. Galindo. Manuel M. Medina. Ramón Gamboa. J. Noriega. Pascual González Fuentes. José Trinidad Gómez. José Ma. Benítez. Francisco Herrera Campos. Agustín Buenrostro. Francisco S. Iriarte. Por el Estado de Michoacán, Juan B. Cevallos. E. Barandiarán. Luis Gutiérrez Correa. Miguel Zíncúnegui. Ignacio Aguilar. José Ignacio Álvarez. Teófilo G. Carrasquedo. Manuel Castro. Por el Estado de Oaxaca, Benito Juárez, Guillermo Valle. B. Carvajal. M. Iturribarría. Tiburcio Cañas. Manuel M. de Villada. M. Ortiz de Zárate. Por el Estado de Puebla, J. M. Lafragua. Ignacio Comonfort, Joaquín Cardoso. Joaquín Ramírez de España. Manuel Zetina Abad. J. Ambrosio Moreno. Juan N. de la Parra. José M. Espino. Fernando M. Ortega. Por el Estado de Querétaro, José Ignacio Yáñez. Miguel Lazo de la Vega. Por el Estado de San Luis Potosí, Lugardo Lechón. Juan Otón. Domingo Arriola. Por el Estado de Sinaloa, Pomposo Verdugo. Por el Estado de Sonora, Ricardo Palacio. Ramón Morales. Por el Estado de Tabasco, Manuel Zapata. Por el Estado de Tamaulipas, Ignacio Muñoz Campuzano. Por el Estado de Veracruz, A. M. Salonio. José Mariano Jáuregui. Miguel Bringas. Por el Estado de Jalisco, Mariano Otero. Bernardo Flores. Magdaleno Salcedo. José Ramón Pacheco. Por el Distrito Federal, Manuel Buenrostro. José Ma. del Río. Joaquín Vargas. Por el Territorio de Colima, Longinos Banda. Por el Territorio de Tlaxcala, Antonio Rivera López. José M. Berríel. Juan de Dios Zapata, diputado por el Estado de Puebla, Secretario. Francisco Banuet, Diputado por el Estado de Oaxaca, Secretario. Cosme Torres, Diputado por el Estado de Jalisco, Secretario. Mariano Talavera, Diputado por el Estado de Puebla, Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno Federal en México, a 21 de mayo de 1847. Antonio López de Santa Anna. A. D. Manuel Baranda.

Y lo comunico a usted para su puntual cumplimiento. Dios y Libertad. México, 21 de mayo de 1847. Baranda. NOTA. En la Acta de la primera sesión del día 22 de abril de 1847, se omitió lo siguiente:

2° Que dichos estados continúan asociados, conforme al pacto que constituyó una vez el modo de ser político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos.

Hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos señores de la votación anterior, más los Sres. Othon y Pacheco y menos el Sr. Lanuza.

3° Que la Acta constitutiva y la Constitución Federal, sancionadas en 31 de enero de 1824, forman la única Constitución Política de la República.

Discutido, hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos señores de la votación anterior, más los Sres. García Rojas y Lanuza, y menos los Señores García Vargas e Iturribarría.

4° Que además de esos códigos, debe observarse la siguiente:

Acta de reformas. Art. 1° Todo mexicano por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos. Discutido, hubo lugar a votar, y quedó aprobado por unanimidad de 71 votos.

6.3. EXTRACT OF THE REFORMS ACT

April 5, 1847
(Paradigmatic Content)
22 articles¹

- Article 1.* Qualities to be a citizen of the United Mexican States.
- Article 2.* Rights of citizens.
- Article 3.* Suspension of the rights of citizens.
- Article 4.* Guarantees of freedom, security, property and equality.
- Article 5.* Election of Deputies and requirements met.
- Article 6.* Election of Senators.
- Article 7.* Qualifications for Senator.
- Article 8.* Unique feature of the Chamber of Deputies.
- Article 9.* Statement for prosecution for offenses under local jurisdiction.
- Article 10.* Adoption of a law.
- Article 11.* Repeal of articles on the Vice Presidency.
- Article 12.* Responsibility for the President of committing common crimes.
- Article 13.* Settlement of the election of public services.
- Article 14.* Limits and derivation of the Powers of the Union.
- Article 15.* Rights of States established by the Constitution.
- Article 16.* State law to attack the Constitution is void.
- Article 17.* Claiming a law that is unconstitutional.
- Article 18.* Invalidity of a law unconstitutional.
- Article 19.* Safeguarding the exercise and preservation of rights.
- Article 20.* Statutory Laws of the Constitution can not be altered or waived.
- Article 21.* Amendment of Articles of the Constitution.
- Article 22.* Settlement of the Public Authorities Reform Act.

1 Fueron aprobados 35 artículos.

6.4. REFORM PROYECT AND CONSTITUTIVE ACT

Mexico, April 5th, 1847

22 articles

PROYECT

In the name of God, creator and preserver of the societies, the Extraordinary Constituent Congress, considering: That the Mexican United States, by an spontaneous act of his own and individual sovereignty, and to consolidate his independence, strengthen his freedom, provide to the common defense, establish peace and procure good, they confederated in 1823 and constituted after 1824 a political system of union for their general government, under the form of a popular, representative Republic, and over the preexistent bases of his natural and reciprocal independence; that that pact of alliance, origin of the first Constitution and only legitimate source of the Supreme Power of the Republic, subsists in its primitive vigor, and is and should have been the first principle of all the fundamental institution: that same constituent principle of the Federal Union, if it might been gone against by a superior force, it could not have been nor can be altered by a new Constitution; and that to consolidate more that principle and to make it effective, the reforms which the experience has proven to be very necessary in the Constitution of 1824 are urgent, has come to declare and decree, and in use of his wide range powers declares and decrees:

- I. That the states which form the Mexican Union have regained the independence and sovereignty that for their interior administration have reserved for themselves in the Constitution.
- II. That such states continue associated according to the pact that constituted once the political manner to be of the people of the Mexican United States.
- III. That the Constitutive Act and the Federal Constitution sanctioned on the December 31st and October 24th of 1824, form the sole Political Constitution of the Republic.

IV. That besides those codes, the following shall be observed:

REFORM ACT

1. Every Mexican, by birth or by naturalization, who has reached the age of twenty years, that has an honest way of living, and that has not been condemned in a legal process to a dishonorable penalty, is citizen of the Mexican United States.

2. Is a right of the citizens to vote in the popular elections, to exercise the petition right, get together to discuss the public business, and belong to the National Guard, everything according to the laws.

3. The exercise of the rights of the citizen are suspended for being a consuetudinary drunk or gambler by profession, or idle, for the religious state, for legal interdiction, in virtue of the process on those crimes for which the state of citizen is lost, and for refusing to serve the public positions of popular appointment. The exercise of this rights, the manner of proving the possession of the citizen quality, and the convenient forms to declare its lost or suspension, shall be arranged by a Law.

4. In order to secure the rights of men that the Constitution recognizes, a Law shall establish the rights of freedom, security, property and equality of which all the inhabitants of the Republic enjoy and shall establish the means through which make them effective.

These rights are inviolable, and only in the case of an alien invasion or internal rebellion, the Legislative Power might suspend the established forms for the apprehension and detention of the particulars, and the search of Chambers, and this for a determined period of time.

Every attempt against such rights is case of responsibility, and nor indult nor amnesty nor any other disposition that subtracts them from the tribunals or avoid that the penalty is made effective might fall on favor of those guilty not even if it is issued from the Legislative Power.

5. For every fifty thousand souls or for a fraction that goes over twenty five thousand, a Deputy of the General Congress shall be elected. To be so it is only required to be twenty five years old, to be in exercise of the rights of the citizen and not to be comprehended by the time of the election within the exception of the article 23 of the Constitution.

6. Besides the senators that each State elects, there shall be an equal number to the number of states, elected upon proposal of the Chamber of Deputies, voting by deputations, the Senate and the Executive. The persons who shall reunite these three suffrages, shall be elected, and the Chamber of Deputies, voting for persons, shall appoint those who were missing from among the other proposed.

The senate shall be renewed by thirds every two years.

7. To be Senator it is necessary to be thirty years old, to have the other qualities which are required to be Deputy, and also to have been Constitutional President of

Vicepresident of the Republic; or for more than six months Secretary of the dispatch, or governor of a State; or individual of the Chambers; or twice in a Legislature; or in diplomatic dignitary for more than five years; or ministry of the Supreme Court of Justices; or judge or magistrate for more than six years.

8. It is exclusively responsibility of the Chamber of Deputies to set itself as great jury to declare, upon simple majority of votes, if they sustain the motion to form a cause against the high officials to whom the Constitution or the laws grant this privilege.

9. Once sustained the motion of the formation of the cause, if the crime were common, the file shall pass to the Supreme Court; if it were court appointed, the Senate shall se itself as great jury of sentence, and it shall limit to declare if the accused is guilty or not guilty. For this declaration it is necessary the vote of the three fifth parts of the present individuals. Once done this declaration, the Supreme Court shall designate the penalty, according to what the Law prevents.

10. For every Law it is required the approval of the majority of the present individuals in both Chambers.

11. The articles of the Constitution that established the position of Vices president of the Republic are derogated, and the temporary absence of the President shall be covered by the means that it establishes for the case in which both officials were missing.

12. The President is responsible of the common crimes that he commits during the exercise of his entrustment, and even of the court-appointed excluded by the Constitution, provided that the act in which it consists is not authorized by the signature of the responsible ministry. The ministries are held responsible of all the Law infractions that they commit, whether they consist in commission acts, or simple omission.

13. By means of laws the elections of deputies, senators, President of the Republic and ministries of the Supreme Court of Justice shall be arranged, being in the possibility to adopt the direct election, without any other exception than the third of the Senate that the article 6 of this Act establishes. The Law shall establish and organize also the first and second instance tribunals which shall be responsible for the business reserved to the Judiciary of the Federation.

14. The Powers of the Union derive all from the Constitution, and are limited only to the exercise of the faculties expressly designated in the Constitution, without understanding allowed others in lack of express restriction.

15. About the objects subject to the Power of the Union, no State has other rights than those expressly stated in the Constitution, neither other legitimate means of intervening in them than that of the General Powers which the Constitution itself establishes. The Constitution only recognizes as legitimate among all or among some of the sates, the relationship that constituted and currently constitutes its federation.

16. Every Law of the states that attacks the Constitution or the general laws shall be declared null by the Congress; but this declaration might only be initiated in the Chamber of Senators.

17. If within a month after the publication of a Law of the General Congress it were claimed as anti constitutional, or by the President in agreement with his ministry, or by ten deputies, or six senators, or three Legislatures, the Supreme Court, before which the claim shall be done, shall submit the Law to the examination of the Legislatures, who within three months and precisely in one single day they shall give their vote.

The declarations shall be sent to the Supreme Court, and this shall publish the results, being resolved what the majority of the Legislatures say.

18. In the case of the previous articles, the General Congress and the Legislatures shall limit to decide only if the Law of which invalidity is being discussed is or not anti constitutional; and in every affirmative declaration shall be inserted the null Law and the text of the Constitution or general Law to which it opposes.

19. The tribunals of the Federation shall protect any inhabitant of the Republic in exercise and preservation of the rights that this Constitution and the constitutional laws grant him, against every attack of the Legislative and Executive Powers, whether it is of the Federation, or the States, limiting such tribunals to give their protection in the particular case of which the process is about, without making any general declaration regarding the Law of the act that motivated it.

20. The laws of which the articles 3, 4 and 13 of this Act talk about, the freedom of press, the organic of the National Guard and all those which regulate these general dispositions of the Constitution and this Act, are constitutional laws, and cannot be altered or derogated but mediating a space of six months between the presentation of the report and its discussion.

21. At any time the articles of the Constitution might be reformed, provided that two thirds of both Chambers or the simple majority of two different and immediate Congress agree so. The reforms that limit in any issue the extension of the Powers of the states need the approval of the majority of the Legislatures. But in no case the fundamental and previous principles to the Constitution which establish the independence of the Nation, its republican, representative, popular and federal government form, and the division, both of the General Powers as of the state cannot be altered. In every reform project the delay established in the previous article shall be observed.

22. Once published this reform Act, all the Public Powers shall arrange to it. The general Legislative shall continue laid in the current Congress until the reunion of the Chambers. The states shall continue observing their particular Constitutions, and according to them shall renew their Powers in the periods and terms that they designate.

Mexico, April 5th, 1847. M. Otero.

CONSTITUTIVE ACT AND REFORM ACT (30 articles)
SANCTIONED BY THE EXTRAORDINARY CONSTITUENT CONGRESS
OF THE MEXICAN UNITED STATES ON THE 18TH
OF MAY OF 1847, OATH AND ENACTED ON THE 21ST
OF THE SAME MONTH.

1. Every Mexican, by birth or by naturalization, who has reached the age of twenty years, who has an honest way of living, and who has not been condemned in a legal process to any dishonoring penalty, is citizen of the Mexican United States.

2. It is a right of the citizens to vote in the popular elections, to exercise the right of petition, to get together to discuss the public business and to belong to the National Guard, everything according to the laws.

3. The exercise of the rights of citizen is suspended for being a consuetudinary drunk, gambler by profession, or idle; because of the religious state or because of the legal interdiction; in virtue of the process on those crimes by which the quality of citizen is lost, and for refusing, without legitimate excuse, to serve the public entrustments of popular appointment.

4. Through a Law the exercise of these rights shall be arranged, the manner to prove the possession of the quality of citizen and the convenient forms to declare the lost or suspension. The citizen who has lost his political rights, might be rehabilitated by the General Congress.

5. To secure the rights of men that the Constitution recognizes, a Law shall establish the rights of freedom, security, property and equality of which all the inhabitants of the Republic enjoy and shall establish the means through which make them effective.

6. Are states of the Federation those that were expressed in the Federal Constitution and those that were formed after according to her. A new State shall be erected with the name of Guerrero, formed of the districts of Acapulco, Chilapa, Taxco and Tlapa, and the Municipality of Coyucan, belonging the first three to the State of Mexico, the fourth to Puebla and the fifth to Michoacán, provided that the Legislatures of these three States give their consent within the three months.

While México City is Federal District, it shall have vote in the election of President and appoint two senators.

7. For every fifty thousand souls or by a fraction that goes over twenty five thousand a Deputy of the General Congress shall be elected. To be so, it is only required to be twenty five years old, to be in exercise of the citizen rights, and not to be found at the time of the election within the exceptions of the article 23 of the Constitution.

8. Besides the senators that each States chooses, there shall be an equal number to that of the states, elected upon proposal of the Senate, of the Supreme Court of Justices and of the Chamber of Deputies, voting by deputations. The persons who shall reunite these three suffrages, shall be elected, and the Chamber of Deputies, voting by persons,

shall appoint those who miss from among the other proposed ones. The most antique half of these senators shall belong also to the Council.

9. The Senate shall renew by thirds every two years, alternating in them, year by year, the election of the states with which it shall verify by the third of which the previous article talks about.

10. To be senator it requires the age of thirty years, to have the other qualities that are required to be a Deputy, and besides to have been constitutional President or Vice president of the Republic; or Secretary of the Dispatch for more than six months; or State Governor; or individual of the Chambers; or of a Legislature twice; or diplomatic envoy for more than five years; or ministry of the Supreme Court of Justice; or judge or magistrate for six years; or superior chief of Treasury; or effective general.

11. It is exclusive faculty of the General Congress to give bases for the colonization, and to dictate the laws according to which the Powers of the Union shall carry on their constitutional faculties.

12. It belongs exclusively to the Chamber of Deputies, to set itself in Great Jury to declare, upon simple majority of votes, if they grant or not the formation of the lawsuit against high officers, to whom the Constitution or the laws award this privilege.

13. Once declared the granting of the formation of the lawsuit, when the crime were common the file shall pass to the Supreme Court; if it were court-appointed the Senate shall set itself in Jury of sentence, and shall limit to declare if the accused is guilty or not guilty. For this declaration the vote of three fifth parts of the present individuals is required, and once done, the Supreme Court shall designate the penalty, according to what the Law prevents.

14. In no case a Law project might be approved with less than the absolute majority of votes of the present individuals in each of the Chambers.

15. The articles of the Constitution which established the position of Vice president of the Republic are derogated, and the temporary absence of the President shall be covered by the means that are established in the Constitution for the case when both representatives were missing.

16. The president is responsible of the common crimes that he commits during the exercise of his entrustment; and even of those court-appointed which the Constitution excludes, provided that the act in which they consist, is not authorized by the firm of the responsible Secretary.

17. The secretaries of the dispatch are held responsible of all the infractions of Law they commit, whether they consist in acts of commission or they are of plain omission.

18. By means of laws the elections of deputies, senators, President of the Republic and ministries of the Supreme Court of Justice shall be arranged being possible to adopt the direct election, without any other exception than the third of the Senate that the article 8 of this Act establishes. But in the indirect election a primary

or secondary elector might not be appointed, the citizen who exercises the political command, civil, ecclesiastical or military jurisdiction, or the priest of souls, in representation of the territory in which he carries out his entrustment.

19. The Law shall establish and organize also the first and second instance tribunals which shall be responsible for the business reserved to the Judiciary of the Federation.

20. About the objects committed to the Power of the Union, no State has other rights than those expressly established in the Constitution and neither other legitimate means of intervening in them, than that of the general power that the latter establishes.

21. The Powers of the Union derive all from the Constitution, and they limit only to the exercise of the faculties expressly designated in it without being understood allowed others because of lack of express restriction.

22. Every Law of the states that attack the Constitution or the general laws shall be declared null by the Congress; but this declaration might only be initiated in the Chamber of Senators.

23. If within a month after the publication of a Law of the General Congress it were claimed as anti constitutional, or by the President in agreement with his ministry, or by ten deputies, or six senators, or three Legislatures, the Supreme Court, before which the claim shall be done, shall submit the Law to the examination of the Legislatures, who within three months and precisely in one single day they shall give their vote.

The declarations shall be sent to the Supreme Court, and this shall publish the results, being the Law annulled if the majority of the Legislatures decided so.

24. In the case of the two previous articles, the General Congress and the Legislatures in turn, shall limit to decide only if the Law of which invalidity is being treated is or not anti constitutional; and in every affirmative declaration the annulled Law and the text of the Constitution or the general Law to which it opposes shall be inserted.

25. The tribunals of the Federation shall protect any inhabitant of the Republic in the exercise and preservation of the rights that this Constitution and the constitutional laws, against the Legislative and Executive Powers, whether of the Federation or of the states; limiting such tribunals to give their protection in the particular case of which the process is about, without making any general declaration regarding the Law or the act that motivated it.

26. No Law might demand to the printers previous bail for the free exercise of his art, nor make them responsible for their publications, provided that they secure in the legal form the responsibility of the editor. In every case, except in the case of defamation, the press crimes shall be judged by judges of fact and punished only with pecuniary or reclusion penalty.

27. The laws of which the articles 4, 5 and 18 of this Act talk about, the Law of freedom of press, the organic of the National Guard and all those that regulate the general dispositions of the Constitution and this Act, are constitutional laws, and can-

not be altered or derogated, but mediating a space of six months between the presentation of the report and its discussion in the Chamber of its origin.

28. At any time the articles of the Constitutive Act, the Federal Constitution and the present Act might be reformed, provided that two thirds of both Chambers or by majority of two different and immediate Congress agree so. The reforms that successively were proposed limiting in any issue the extension of the Powers of the states need the approval of the majority of the Legislatures. In every reform project the delay established in the previous article shall be observed.

29. In no case the principles that establish the independence of the Nation, its republican, representative, popular, federal government form, and the division, both of the general powers and the states might be altered.

30. Once published this Reform Act, all the public Powers shall arrange to it. The general Legislative shall continue to lie in the current Congress until the reunion of the Chambers. The states shall continue observing their particular constitutions, and according to them they shall renew their powers.

Given in México, on May eighteenth of eighteen forty seven.

José J. De Herrera, President Deputy. For the State of Chiapas, Clemente Castillejo. Pedro José Lanuza. For the State of Chihuahua, José Maria Urquide. Manuel Muñoz. José Agustín Escudero. For the State of Coahuila, Eugenia María de Aguirre. For the State of Durango, José de la Bárcena. For the State of Guanajuato, Octaviano Muñoz Ledo. Pascasio Echeverría. Juan José Bermúdez. Jacinto Rubio. Juan B. Sañudo. Ramón Reynoso. For the State of México, J. J. Espinosa de los Monteros. Manuel Robledo. Joaquín Navarro. José María de Lacunza. M. Riva Palacio. José B. Alcalde. Manuel Terrenos. José A. Galindo. Manuel M. Medina. Ramón Gamboa. J. Noriega. Pascual González Fuentes. José Trinidad Gómez. José Ma. Benítez. Francisco Herrera Campos. Agustín Buenrostro. Francisco S. Iriarte. For the State of Michoacán, Juan B. Cevallos. E. Barandiarán. Luis Gutiérrez Correo. Miguel Zincunegui. Ignacio Aguilar. José Ignacio Álvarez. Teófilo G. Carrasquedo. Manuel Castro. For the State of Oaxaca, Benito Juárez, Guillermo Valle. B. Carvajal. M. Iturribarría. Tiburcio Cañas. Manuel M. de Villada. M. Ortiz de Zárate. For the State of Puebla, J. M. Lafragua. Ignacio Comonfort, Joaquín Cardoso. Joaquín Ramírez de España. Manuel Zetina Abad. J. Ambrosio Moreno. Juan N. de la Parra. José M. Espino. Fernando M. Ortega. For the State of Querétaro, José Ignacio Yáñez. Miguel Lazo de la Vega. For the State of San Luis Potosí, Lugardo Lechón. Juan Otón. Domingo Arriola. For the State of Sinaloa, Pomposo Verdugo. For the State of Sonora, Ricardo Palacio. Ramón Morales. For the State of Tabasco, Manuel Zapata. For the State of Tamaulipas Ignacio Muñoz Campuzano. For the State of Veracruz, A. M. Salonio. José Mariano Jáuregui. Miguel Bringas. For the State of Jalisco, Mariano Otero. Bernardo Flores. Magdaleno Salcedo. José Ramón Pacheco. For the Federal District, Manuel Buenrostro. José Ma. del Río. Joaquín Vargas. For the Territory of Colima, Longinos Banda. For the Territory of Tlaxcala, Antonio Rivera López. José M. Berriel. Juan de Dios Zapata, Deputy for the State of Puebla,

Secretary. Francisco Banuet, Deputy for the State of Oaxaca, Secretary. Cosme Torres, Deputy for the State of Jalisco, Secretary. Mariano Talavera, Deputy for the State of Puebla, Secretary.

Therefore, I send to print, publish and circulate and to give the due compliance. Palace of the Federal Government in México, on May 21st, 1847. Antonio López de Santa Anna. A. D. Manuel Baranda.

And I communicate it to you for it punctual compliance. God and Liberty. México, May 21st, 1847. Baranda. NOTE. In the Act of the first session of date April 22nd, 1847, the following was omitted:

2°. *That such states continue associated, according to the pact that once constituted the political manner of being of the people of the Mexican United Stats.*

The motion was granted and approved by the same gentlemen of the previous voting, plus the gentlemen Othon and Pacheco and except the gentleman Lanuza.

3°. *That the Constitutive Act and the Federal Constitution, sanctioned on January 31st, 1824, shall form the only Political Constitution of the Republic.*

Once discussed, the motion to vote was granted and approved by the same gentlemen of the previous voting, plus the gentlemen Garcia Rojas and Lanuza, and except the gentlemen Garcia Vargas and Iturribarría.

4°. *That besides those codes, the following shall be observed:*

Reform Act. Art. 1°. Every Mexican by birth or by naturalization, who has reached the age of twenty years, who has an honest way of living and who has not been condemned in a legal process to any dishonoring penalty, is citizen of the Mexican United States. Once discussed, the petition to vote was granted, and it was approved by unanimity of 71 votes.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA 1857

7.1. EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA MEXICANA 1857

Constitución Política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821.

TÍTULO I

Sección Primera

De los derechos del hombre

- Art. 1.* Derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales.
- Art. 2.* Libertad de los individuos de la República.
- Art. 3.* Libertad de enseñanza.
- Art. 4.* Libertad de profesión, industria o trabajo.
- Art. 5.* Restricción para prestar servicios personales.
- Art. 6.* Libertad de manifestación de ideas.
- Art. 7.* Libertad de escribir y publicar escritos.
- Art. 8.* Derecho de petición.
- Art. 9.* Derecho de asociación y reunión.
- Art. 10.* Derecho para poseer y portar armas.
- Art. 11.* Derecho para entrar y salir de la República.
- Art. 12.* Restricción del reconocimiento títulos de nobleza, prerrogativas y honores.
- Art. 13.* Derecho a no ser juzgados por leyes privativas ni por tribunales especiales.
- Art. 14.* No expedición de leyes retroactivas.
- Art. 15.* No extradición de reos políticos.
- Art. 16.* Derecho a no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de un mandamiento judicial.
- Art. 17.* Derecho a no ser preso por deudas de carácter puramente civil.

- Art. 18.* Restricción de la prisión solo por delito que merezca pena corporal.
Art. 19. Derechos respecto de la aprehensión.
Art. 20. Garantías del acusado en el juicio criminal.
Art. 21. Aplicación de penas.
Art. 22. Prohibición de determinadas penas.
Art. 23. Casos de aplicación de la pena de muerte.
Art. 24. Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias.
Art. 25. Respeto a la correspondencia.
Art. 26. Restricciones para exigir alojamiento los militares.
Art. 27. Derechos de propiedad.
Art. 28. Prohibición de monopolios.
Art. 29. Casos de suspensión de las garantías constitucionales.

Sección Segunda

De los Mexicanos

- Art. 30.* Calidad de mexicanos.
Art. 31. Obligaciones de los mexicanos.
Art. 32. Preferencia de los mexicanos sobre los extranjeros para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades.

Sección Tercera

De los extranjeros

- Art. 33.* Calidad de extranjeros, sus derechos y obligaciones.

Sección Cuarta

De los ciudadanos mexicanos

- Art. 34.* Calidad de ciudadano mexicano.
Art. 35. Prerrogativas del ciudadano.
Art. 36. Son obligaciones del ciudadano de la República.
Art. 37. Pérdida de la calidad de ciudadano.
Art. 38. Casos y forma en que se pierden los derechos de ciudadano.

TÍTULO II

Sección Primera

De la Soberanía Nacional y de la forma de gobierno

- Art. 39.* La Soberanía Nacional reside esencial y originariamente en el pueblo.
Art. 40. Forma de gobierno.
Art. 41. Ejercicio de la soberanía.

Sección Segunda

De las partes integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

- Art. 42. Composición del Territorio Nacional.
- Art. 43. Partes integrantes de la Federación.
- Art. 44. Límites de ciertos Estados.
- Art. 45. Límites de Colima y Tlaxcala.
- Art. 46. Territorio del Estado del Valle de México.
- Art. 47. Territorio de Nuevo León y Coahuila.
- Art. 48. Recuperación de extensión y límites de ciertos Estados.
- Art. 49. Incorporación de diversos Territorios.

TÍTULO III

DE LA DIVISIÓN DE PODERES

- Art. 50. División del Supremo Poder de la Federación.

Sección Primera

Del Poder Legislativo

- Art. 51. Ejercicio del Poder Legislativo.

Párrafo I

De la elección e instalación del Congreso

- Art. 52. Composición del Congreso de la Unión.
- Art. 53. Nombramiento de Diputado según el número de habitantes.
- Art. 54. Nombramiento de suplentes.
- Art. 55. Características de la elección de Diputados.
- Art. 56. Requisitos para ser Diputado.
- Art. 57. El cargo de Diputado es incompatible con cualquiera comisión o destino de la Unión en que disfrute sueldo.
- Art. 58. Restricción de los Diputados para tener otro empleo.
- Art. 59. Inviolabilidad de los Diputados respecto de sus opiniones.
- Art. 60. Calificación de las elecciones de los miembros del Congreso.
- Art. 61. Concurrencia mínima para abrir sesiones.
- Art. 62. Periodos de Sesiones.
- Art. 63. Apertura de Sesiones del Congreso.
- Art. 64. Carácter de las resoluciones del Congreso.

Párrafo II

De la iniciativa y formación de leyes

- Art. 65. Derecho de iniciar leyes.
- Art. 66. Destino de las iniciativas presentadas.

- Art. 67.* Proyecto de ley desechado.
Art. 68. Destino del segundo periodo de sesiones.
Art. 69. Examen y dictamen del presupuesto del siguiente año y la cuenta del año anterior.
Art. 70. Trámites de las iniciativas o proyectos de ley.
Art. 71. Estrechez o dispensa de los trámites del artículo 70.

Párrafo III

De las facultades del Congreso

- Art. 72.* Facultades del Congreso.

Párrafo IV

De la Diputación Permanente

- Art. 73.* Composición de la Diputación Permanente.
Art. 74. Atribuciones de la Diputación Permanente.

Sección Segunda

Del Poder Ejecutivo

- Art. 75.* Ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo.
Art. 76. Elección del Presidente.
Art. 77. Requisitos para ser Presidente.
Art. 78. Duración del encargo de Presidente.
Art. 79. Faltas del Presidente.
Art. 80. Nueva elección en caso de falta absoluta del Presidente.
Art. 81. Renuncia del Presidente.
Art. 82. Caso en que toma posesión el Presidente interino.
Art. 83. Juramento del Presidente.
Art. 84. No separación del Presidente del lugar de residencia de los Poderes Federales, y del ejercicio de sus funciones.
Art. 85. Facultades y obligaciones del Presidente.
Art. 86. Despacho de los negocios del orden administrativo.
Art. 87. Requisitos para ser Secretario de Despacho.
Art. 88. Firma de los Secretarios de Despacho de todos los reglamentos, decretos y ordenes del Presidente.
Art. 89. Cuenta de los Secretarios del Despacho al Congreso.

Sección Tercera

Del Poder Judicial

- Art. 90.* Ejercicio del Poder Judicial de la Federación.
Art. 91. Composición de la Suprema Corte de Justicia.
Art. 92. Duración y elección de los individuos de la Suprema Corte de Justicia.

- Art. 93.* Requisitos para ser individuo de la Suprema Corte de Justicia.
- Art. 94.* Juramento de los individuos de la Suprema Corte de Justicia.
- Art. 95.* Renuncia del cargo.
- Art. 96.* Establecimiento y organización de los Tribunales de Circuito y de Distrito.
- Art. 97.* Atribución de los Tribunales de la Federación.
- Art. 98.* Conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de controversias entre Estados.
- Art. 99.* Competencias suscitadas entre los Tribunales de la Federación.
- Art. 100.* La Suprema Corte de Justicia como Tribunal de Apelación o de última instancia.
- Art. 101.* Controversias que resolverán los Tribunales de la Federación.
- Art. 102.* Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán a petición de parte.

TÍTULO IV

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

- Art. 103.* Responsabilidad por delitos de los funcionarios públicos.
- Art. 104.* Procedibilidad por delitos del fuero común de los funcionarios públicos.
- Art. 105.* El Congreso como jurado de acusación y la Suprema Corte de Justicia como de sentencia, por delitos oficiales.
- Art. 106.* No concesión de indulto al reo.
- Art. 107.* Período de responsabilidad por delitos y faltas oficiales.
- Art. 108.* No habrá fuero ni inmunidad en las demandas del orden civil.

TÍTULO V

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

- Art. 109.* Régimen interior de los Estados.
- Art. 110.* Arreglos respecto a los límites de los Estados.
- Art. 111.* Restricciones de los Estados.
- Art. 112.* Otras restricciones de los Estados.
- Art. 113.* Obligación de los Estados de entregar a los criminales de otros Estados.
- Art. 114.* Obligación de los Gobernadores.
- Art. 115.* Fe y crédito de un Estado para con los actos, registros y procedimientos judiciales de otro.
- Art. 116.* Protección de los Estados contra toda invasión o violencia exterior.

TÍTULO VI
PREVENCIÓNES GENERALES

Art. 117. Facultades reservadas a los Estados.

Art. 118. Prohibición para desempeñar dos cargos a la vez.

Art. 119. No pago que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.

Art. 120. Compensación por servicios de los funcionarios de la Federación.

Art. 121. Juramento de todo funcionario público antes de poseer su encargo.

Art. 122. Funciones de las autoridades militares.

Art. 123. Intervención de los Poderes Federales en materia de culto religioso y la disciplina externa.

Art. 124. Aplicación de alcabalas y aduanas.

Art. 125. Inspección de los Poderes Federales en los fuertes, cuarteles, almacenes, depósitos y demás edificios.

Art. 126. Leyes Supremas de la Unión.

TÍTULO VII
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 127. Requerimientos para la adición o reforma de la Constitución.

TÍTULO VIII
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 128. Permanencia de fuerza y vigor de la Constitución.

7.2.CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

México, 5 de febrero de 1857
128 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO I

Sección I. *De los derechos del hombre*
Sección II. *De los mexicanos*
Sección III. *De los extranjeros*
Sección IV. *De los ciudadanos mexicanos*

TÍTULO II

Sección I. *De la soberanía nacional y de la forma de gobierno*
Sección II. *De las partes integrantes de la federación y del territorio nacional*

TÍTULO III.

DE LA DISTINCIÓN DE PODERES

Sección I. *Del Poder Legislativo*
Párrafo I. *De la elección e instalación del Congreso*
Párrafo II. *De la iniciativa y formación de las leyes*
Párrafo III. *De las facultades del Congreso*
Párrafo IV. *De la Diputación Permanente*
Sección II. *Del Poder Ejecutivo*

TÍTULO IV.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

TÍTULO V.
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

TÍTULO VI.
PREVENCIÓNES GENERALES

TÍTULO VII.
DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO VIII.
DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
IGNACIO COMONFORT,

Presidente Sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella, sabed:
Que el Congreso Extraordinario Constituyente ha decretado lo que sigue:
En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano.

Los representantes de los diferentes estados, del Distrito y territorios que componen la República de México, llamados por el Plan proclamado en Ayutla el 1º de marzo de 1854, reformado en Acapulco el día 11 del mismo mes y año, y por la convocatoria espedida el 17 de octubre de 1855, para constituir a la Nación bajo la forma de República democrática, representativa, popular, poniendo en ejercicio los poderes con que están investidos, cumplen con su alto encargo decretando la siguiente:

Constitución política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821.

TÍTULO I

Sección I

De los derechos del hombre

1. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

2. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes.

3. La enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir.

4. Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad.

5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte su proscripción o destierro.

6. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque a algún crimen o delito, o perturbe el orden público.

7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral, y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena.

8. Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario.

9. A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

10. Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuales son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren.

11. Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la República, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil.

12. No hay, ni se reconocen en la República, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios. Solo el pueblo, legítimamente representado, puede decretar recompensas en honor de los que hayan prestado o prestaren servicios eminentes a la patria o a la humanidad.

13. En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público, y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta concesión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción.

14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicada a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

15. Nunca se celebrarán tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país en donde cometieron el delito la condición de esclavos; ni convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos que esta Constitución otorga al hombre y al ciudadano.

16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito in fraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata.

17. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. Esta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales.

18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo de fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, o de cualquier otra manifestación de dinero.

19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. El solo lapso de este término, constituye responsables a la autoridad que la ordena o consiente y a los agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, es un abuso que deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades.

20. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:

- I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, si lo hubiere.
- II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que esté a disposición de su juez.
- III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra.
- IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso, para preparar sus descargos.
- V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio, para que elija el que o los que le convengan.

21. La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La política o administrativa solo podrá imponer, como corrección, hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente determine la ley.

22. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales.

23. Para la abolición de la pena de muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. Entre tanto, queda abolida para los delitos políticos, y no podrá extenderse a otros casos más que al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley.

24. Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda abolida la práctica de absolver de la instancia.

25. La correspondencia, que bajo cubierta circule por las estafetas, está libre de todo registro. La violación de esta garantía es un atentado que la ley castigará severamente.

26. En tiempo de paz ningún militar puede exigir alojamiento, bagaje, ni otro servicio real o personal, sin el consentimiento del propietario. En tiempo de guerra sólo podrá hacerlo en los términos que establezca la ley.

27. La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse.

Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

28. No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúanse únicamente, los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.

29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de éste, de la Diputación Permanente, puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión pueda contraerse a determinado individuo.

Si la suspensión tuviere lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificare en tiempo de receso, la Diputación Permanente convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Sección II

De los Mexicanos

30. Son mexicanos:

- I. Todos los nacidos dentro o fuera del territorio de la República, de padres Mexicanos.
- II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación.
- III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad.

31. Es obligación de todo mexicano:

- I. Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.
- II. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distinguen en cualquier ciencia o arte, estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios.

Sección III

De los Extranjeros

33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el art. 30. Tienen derecho a las garantías otorgadas en la sección 1ª, Título I de la presente Constitución, salvo en todo caso la facultad que el gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso. Tienen obligación de contribuir para los gastos públicos, de la manera que dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos, que los que las leyes conceden a los mexicanos.

Sección IV

De los Ciudadanos Mexicanos

34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes:

I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son.

II. Tener un modo honesto de vivir.

35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares.

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que la ley establezca.

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país.

IV. Tomar las armas en el Ejército o en la Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones.

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste.

II. Alistarse en la Guardia Nacional.

III. Votar en las elecciones populares, en el distrito que le corresponda.

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en ningún caso serán gratuitos.

37. La calidad de ciudadano se pierde:
- I. Por naturalización en país extranjero.
 - II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal. Exceptúase los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptarse libremente.
38. La ley fijará los casos y la forma en que se pierden o suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

TÍTULO II

Sección I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de su competencia, y por los de los estados para lo que toca a su régimen interior, en los términos respectivamente establecidos por esta Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto federal.

Sección II

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, y además el de las islas adyacentes en ambos mares.

43. Las partes integrantes de la Federación son los estados: de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de la Baja California.

44. Los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el Territorio de la Baja California, conservarán los límites que actualmente tienen.

45. Los estados de Colima y Tlaxcala conservarán, en su nuevo carácter de estados, los límites que han tenido como territorio de la Federación.

46. El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la actualidad comprende el Distrito Federal; pero la erección sólo tendrá efecto, cuando los Supremos Poderes Federales se trasladen a otro lugar.

47. El Estado de Nuevo León y Coahuila comprenderá el territorio que ha pertenecido a los dos distintos estados que hoy lo forman, separándose la parte de la hacienda de Bonanza, que se reincorporará a Zacatecas, en los mismos términos en que estaba antes de su incorporación a Coahuila.

48. Los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, recobrarán la extensión y límites que tenían en 31 de diciembre de 1852, con las alteraciones que establece el artículo siguiente.

49. El pueblo de Contepec, que ha pertenecido a Guanajuato, se incorporará a Michoacán. La municipalidad de Ahualulco, que ha pertenecido a Zacatecas, se incorporará a San Luis Potosí. Las municipalidades de Ojo Caliente y San Francisco de los Adames, que han pertenecido a San Luis, así como los pueblos de Nueva Tlaxcala y San Andrés del Teul, que han pertenecido a Jalisco, se incorporarán a Zacatecas. El departamento de Tuxpan continuará formando parte de Veracruz. El Cantón de Huimanguillo, que ha pertenecido a Veracruz, se incorporará a Tabasco.

TÍTULO III

DE LA DIVISIÓN DE PODERES

50. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo.

Sección I

Del Poder Legislativo

51. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Legislativo en una asamblea, que se denominarán Congreso de la Unión.

Párrafo I

De la Elección e Instalación del Congreso

52. El Congreso de la Unión se compondrá de representantes, elegidos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexicanos.

53. Se nombrará un diputado por cada cuarenta mil habitantes, o por una fracción que pase de veinte mil. El territorio en que la población sea menor de la que se fija en este artículo, nombrará sin embargo un diputado.

54. Por cada diputado propietario se nombrará un suplente.
55. La elección para diputados será indirecta en primer grado, y en escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral.
56. Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; tener veinte y cinco años cumplidos el día de la apertura de las sesiones; ser vecino del Estado o Territorio que hace la elección; y no pertenecer al estado eclesiástico. La vecindad no se pierde por ausencia en desempeño de cargo público de elección popular.
57. El cargo de diputado es incompatible con cualquiera comisión o destino de la Unión en que se disfrute sueldo.
58. Los diputados propietarios desde el día de su elección, hasta el día en que concluyan su encargo, no pueden aceptar ningún empleo de nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario para los diputados suplentes, que estén en ejercicio de sus funciones.
59. Los diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
60. El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre ellas.
61. El Congreso no puede abrir sus sesiones, ni ejercer su encargo, sin la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes, bajo las penas que ella designe.
62. El Congreso tendrá cada año dos periodos de sesiones ordinarias: el primero comenzará el 16 de septiembre y terminará el 15 de diciembre; y el segundo, improrrogable, comenzará el 1º de abril y terminará el último de mayo.
63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El Presidente del Congreso contestará en términos generales.
64. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de ley o acuerdo económico. Las leyes se comunicarán al Ejecutivo firmadas por el Presidente y dos secretarios, y los acuerdos económicos por solo dos secretarios.

Párrafo II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

65. El derecho de iniciar leyes compete:
- I. Al Presidente de la Unión.
 - II. A los Diputados al Congreso Federal.
 - III. A las Legislaturas de los estados.
66. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, las legislaturas de los estados o las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión.

Las que presentaren los diputados, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.

67. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

68. El segundo periodo de sesiones se destinará, de toda preferencia, al examen y votación de los presupuestos del año fiscal siguiente; a decretar las contribuciones para cubrirlos y a la revisión de la cuenta del año anterior, que presente el Ejecutivo.

69. El día penúltimo del primer periodo de sesiones, presentará el Ejecutivo al Congreso el proyecto de presupuesto del año próximo venidero y la cuenta del año anterior. Uno y otra pasarán a una comisión compuesta de cinco representantes nombrados en el mismo día, la cual tendrá obligación de examinar ambos documentos y presentar dictamen sobre ellos, en la segunda sesión del segundo periodo.

70. Las iniciativas o proyectos de ley deberán sujetarse a los trámites siguientes:

- I. Dictamen de comisión.
- II. Una o dos discusiones, en los términos que expresan las fracciones siguientes.
- III. La primera discusión se verificará en el día que designe el Presidente del Congreso, conforme a reglamento.
- IV. Concluida esta discusión se pasará al Ejecutivo copia del expediente, para que en el término de siete días manifieste su opinión, o exprese que no usa de esa facultad.
- V. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá, sin más discusión, a la votación de la ley.
- VI. Si dicha opinión discrepare en todo o en parte, volverá el expediente a la comisión, para que, con presencia de las observaciones del gobierno, examine de nuevo el negocio.
- VII. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y concluida ésta se procederá a la votación.
- VIII. Aprobación de la mayoría absoluta de los diputados presentes.

71. En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de dos tercios de los diputados presentes, el Congreso puede estrechar o dispensar los trámites establecidos en el art. 70.

Párrafo III

De las Facultades del Congreso.

72. El Congreso tiene facultad:

- I. Para admitir nuevos estados o territorios a la Unión Federal, incorporándolos a la Nación.

- II. Para erigir los territorios en estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su existencia política.
- III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siempre que lo pida una población de ochenta mil habitantes, justificando tener los elementos necesarios para proveer a su existencia política. Oirá en todo caso a las legislaturas de cuyo territorio se trate, y su acuerdo sólo tendrá efecto, si lo ratifica la mayoría de las legislaturas de los estados.
- IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre demarcación de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso.
- V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
- VI. Para el arreglo interior del Distrito Federal y territorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas, municipales y judiciales designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales.
- VII. Para aprobar el presupuesto de los gastos de la Federación que anualmente debe presentarle el Ejecutivo, e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo.
- VIII. Para dar bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; para aprobar esos mismos empréstitos, y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
- IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero, y para impedir, por medio de bases generales, que en el comercio de Estado a Estado, se establezcan restricciones onerosas.
- X. Para establecer las bases generales de la legislación mercantil.
- XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación; señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
- XII. Para ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo de los ministros, agentes diplomáticos y cónsules, de los empleados superiores de hacienda, de los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Nacional.
- XIII. Para aprobar los tratados, convenios o convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo.
- XIV. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
- XV. Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso; para dictar leyes, según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

- XVI. Para conceder o negar la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la Federación, y consentir la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en las aguas de la República.
- XVII. Para permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites de la República.
- XVIII. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión, y para reglamentar su organización y servicio.
- XIX. Para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservando a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados de la facultad de instruirla, conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
- XX. Para dar su consentimiento a fin de que el Ejecutivo pueda disponer de la Guardia Nacional, fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria.
- XXI. Para dictar leyes sobre naturalización, colonización y ciudadanía.
- XXII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos.
- XXIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que esta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesos y medidas.
- XXIV. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.
- XXV. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
- XXVI. Para conceder premios o recompensas por servicios eminentes prestados a la patria o a la humanidad, y privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora.
- XXVII. Para prorrogar por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias.
- XXVIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias para hacer concurrir a los diputados ausentes, y corregir las faltas u omisiones de los presentes.
- XXIX. Para nombrar y remover libremente a los empleados de su secretaría y a los de la contaduría mayor, que se organizará según lo disponga la ley.
- XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las facultades antecedentes y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Párrafo IV

De la Diputación Permanente

73. Durante los recesos del Congreso de la Unión, habrá una Diputación Permanente, compuesta de un diputado por cada Estado y Territorio, que nombrará el Congreso la víspera de la clausura de sus sesiones.

74. Las atribuciones de la Diputación Permanente, son las siguientes:

- I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el artículo 72, fracción XX.
- II. Acordar por sí sola, o a petición del Ejecutivo, la convocación del Congreso a sesiones extraordinarias.
- III. Aprobar en su caso los nombramientos a que se refiere el art. 85, fracción III.
- IV. Recibir el juramento al Presidente de la República, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en los casos prevenidos por esta Constitución.
- V. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los expedientes, a fin de que la legislatura que sigue tenga desde luego de que ocuparse.

Sección II

Del Poder Ejecutivo

75. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, en un sólo individuo que se denominará *Presidente de los Estados Unidos Mexicanos*.

76. La elección de Presidente será indirecta en primer grado y en escrutinio secreto, en los términos que disponga la ley electoral.

77. Para ser Presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección, no pertenecer al estado eclesiástico y residir en el país al tiempo de verificarse la elección.

78. El Presidente entrará a ejercer sus funciones el primero de diciembre y durará en su encargo cuatro años.

79. En las faltas temporales del Presidente de la República, y en la absoluta mientras se presenta el nuevamente electo entrará a ejercer el poder, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

80. Si la falta del Presidente fuere absoluta, se procederá a nueva elección con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76, y el nuevamente electo, ejercerá sus funciones hasta el día último de noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

81. El cargo de Presidente de la Unión, sólo es renunciable por causa grave calificada por el Congreso, ante quién se presentará la renuncia.

82. Si por cualquier motivo la elección de Presidente no estuviere hecha y publicada para el 1º de diciembre en que debe verificarse el reemplazo, o el electo

no estuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo al antiguo, y el Supremo Poder Ejecutivo se depositará interinamente en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

83. El Presidente al tomar posesión de su encargo, jurará ante el Congreso, y en su receso ante la Diputación Permanente, bajo la fórmula siguiente: *Juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.*

84. El Presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado por el Congreso, y en sus recesos por la Diputación Permanente.

85. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

- I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
- II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes.
- III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Congreso, y en sus recesos de la Diputación Permanente.
- IV. Nombrar con aprobación del Congreso, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército y Armada Nacional y los empleados superiores de Hacienda.
- V. Nombrar los demás oficiales del Ejército y Armada Nacional, con arreglo a las leyes.
- VI. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
- VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción XX del artículo 72.
- VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
- IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso.
- X. Dirigir las negociaciones diplomáticas, y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal.
- XI. Recibir ministros y otros enviados de las potencias extranjeras.
- XII. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Diputación Permanente.
- XIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.

XIV. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación.

XV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de la competencia de los tribunales federales.

86. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que hará la distribución de los negocios que han de estar a cargo de cada secretaría.

87. Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener veinte y cinco años cumplidos.

88. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, deberán ir firmados por el Secretario del Despacho encargado del ramo a que el asunto corresponde. Sin este requisito no serán obedecidos.

89. Los secretarios del Despacho, luego que estén abiertas las sesiones del primer periodo, darán cuenta al Congreso del Estado de sus respectivos ramos.

Sección III *Del Poder Judicial*

90. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de Distrito y de Circuito.

91. La Suprema Corte de Justicia se compondrá de once ministros propietarios, cuatro supernumerarios, un fiscal y un procurador general.

92. Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral.

93. Para ser electo individuo de la Suprema Corte de Justicia, se necesita: estar instruido en la ciencia del derecho, a juicio de los electores, ser mayor de treinta y cinco años y ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos.

94. Los individuos de la Suprema Corte de Justicia al entrar a ejercer su encargo, prestarán juramento ante el Congreso, y en sus recesos ante la Diputación Permanente, en la forma siguiente: *¿Juráis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Suprema Corte de Justicia que os ha conferido el pueblo, conforme a la Constitución, y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?*

95. El cargo de individuo de la Suprema Corte de Justicia sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la calificación se hará por la Diputación Permanente.

96. La ley establecerá y organizará los tribunales de Circuito y de Distrito.

97. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

- I. De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.
 - II. De las que versen sobre derecho marítimo.
 - III. De aquellas en que la Federación fuere parte.
 - IV. De las que se susciten entre dos o más estados.
 - V. De las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro.
 - VI. De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.
 - VII. De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.
98. Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desde la primera instancia, el conocimiento de las controversias que se susciten de un Estado con otro, y de aquellas en que la Unión fuere parte.
99. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación; entre estos y los de los estados, o entre los de un Estado y los de otro.
100. En los demás casos comprendidos en el artículo 97, la Suprema Corte de Justicia será tribunal de apelación, o bien de última instancia, conforme a la graduación que haga la ley de las atribuciones de los tribunales de Circuito y de Distrito.
101. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
- I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.
 - II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados.
 - III. Por leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la autoridad federal.
102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

TÍTULO IV

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

103. Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del Despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los Gobernadores de los estados lo son igualmente por infracción de la Constitución y leyes federales. Lo es también el

Presidente de la República; pero durante el tiempo de su encargo sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.

104. Si el delito fuere común, el Congreso erigido en gran jurado declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado queda por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.

105. De los delitos oficiales conocerán: el Congreso como jurado de acusación, y la Suprema Corte de Justicia como jurado de sentencia.

El jurado de acusación tendrá por objeto declarar a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no culpable. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo, y será puesto a disposición de la Suprema Corte de Justicia. Ésta, en Tribunal Pleno, y erigida en jurado de sentencia, con audiencia del reo, del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procederá a aplicar a mayoría absoluta de votos, la pena que la ley designe.

106. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la gracia de indulto.

107. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse durante el periodo en que el funcionario ejerza su encargo y un año después.

108. En las demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad para ningún funcionario público.

TÍTULO V

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

109. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular.

110. Los estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.

III. Los estados no pueden en ningún caso:

I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptúase la coalición, que pueden celebrar los estados fronterizos, para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros.

II. Expedir patentes de corso ni de represalias.

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, ni papel sellado.

112. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

I. Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puerto; ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

- II. Tener en ningún tiempo tropa permanente, ni buques de guerra.
- III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera. Exceptúase los casos de invasión o de peligro tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediatamente al Presidente de la República.
- 113. Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los criminales de otros estados a la autoridad que los reclame.
- 114. Los Gobernadores de los estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
- 115. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso puede, por medio de leyes generales, prescribir la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos.
- 116. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.

TÍTULO VI PREVENCIONES GENERALES

- 117. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.
- 118. Ningún individuo puede desempeñar a la vez, dos cargos de la Unión de elección popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
- 119. Ningún pago podrá hacerse, que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.
- 120. El Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por la ley y pagada por el tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o la disminuya, no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo.
- 121. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará juramento de guardar esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
- 122. En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones, que las que tengan exacta concesión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de la población, estableciere para la estación de las tropas.

123. Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes.

124. Para el día 1° de junio de 1858 quedarán abolidas las alcabalas y aduanas interiores en toda la República.

125. Estarán bajo la inmediata inspección de los poderes federales los fuertes, cuarteles, almacenes de depósitos y demás edificios necesarios al gobierno de la Unión.

126. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

TÍTULO VII

DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

127. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

TÍTULO VIII

DE LA INVOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

128. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y, con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta.

Esta Constitución se publicará desde luego y será jurada con la mayor solemnidad en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los estados, no comenzará a regir hasta el día 16 de septiembre próximo venidero, en que debe instalarse el primer Congreso Constitucional. Desde entonces el Presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia, que deben continuar en ejercicio hasta

que tomen posesión los individuos electos constitucionalmente, se arreglarán en el desempeño de sus obligaciones y facultades a los preceptos de la Constitución.

Dada en el salón de Sesiones del Congreso en México, a cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete, trigésimo séptimo de la independencia. Valentín Gómez Farías, Diputado por el Estado de Jalisco, Presidente. León Guzmán, Diputado por el Estado de México, Vicepresidente. Por el Estado de Aguascalientes: Manuel Buen Rostro. Por el Estado de Chiapas: Francisco Robles, Matías Castellanos. Por el Estado de Chihuahua: José Eligio Muñoz, Pedro Ignacio Irigoyen. Por el Estado de Coahuila: Simón de la Garza y Melo. Por el Estado de Durango: Marcelino Castañeda, Francisco Zarco. Por el Distrito Federal: Francisco de Paula Cendejas, José María de Río, Ponciano Arriaga, J. M. del Castillo Velasco, Manuel Morales Puente. Por el Estado de Guanajuato: Ignacio Sierra, Antonio Lemús, José de la Luz Rosas, Juan Morales, Antonio Aguado, Francisco P. Montañez, Francisco Guerrero, Blas Balcárcel. Por el Estado de Guerrero: Francisco Ibarra. Por el Estado de Jalisco: Espiridión Moreno, Mariano Torres Aranda, Jesús Anaya y Hermosillo, Albino Aranda, Ignacio Luis Vallarta, Benito Gómez Farías, Jesús D. Rojas, Ignacio Ochoa Sánchez, Guillermo Langlois, Joaquín M. Degollado. Por el Estado de México: Antonio Escudero, José L. Revilla, Julián Estrada, I. de la Peña y Barragán, Esteban Páez, Rafael María Villagrán, Francisco Fernández de Alfaro, Justino Fernández, Eulogio Barrera, Manuel Romero Rubio, Manuel de la Peña y Ramírez, Manuel Fernando Soto. Por el Estado de Michoacán: Santos Degollado, Sabás Iturbide, Francisco G. Anaya, Ramón I. Alcaráz, Francisco Díaz Barriga, Luis Gutiérrez Correa, Mariano Ramírez, Mateo Echaiz. Por el Estado de Nuevo León: Manuel P. de Llano. Por el Estado de Oaxaca: Mariano Zavala, G. Larrazabal, Ignacio Mariscal, Juan Nepomuceno Cerqueda, Félix Romero, Manuel E. Goytia. Por el Estado de Puebla: Miguel María Arrijoja, Fernando María Ortega, Guillermo Prieto, J. Mariano Viadas, Francisco Banuet, Manuel M. Vargas, Francisco Lazo Estrada, Juan N. Ibarra, Juan N. de la Parra. Por el Estado de Querétaro: Ignacio Reyes. Por el Estado de San Luis Potosí: Francisco J. Villalobos, Pablo Téllez. Por el Estado de Sinaloa: Ignacio Ramírez. Por el Estado de Sonora: Benito Quintana. Por el Estado de Tabasco: Gregorio Payró. Por el Estado de Tamaulipas: Luis García de Arellano. Por el Estado de Tlaxcala: José Mariano Sánchez. Por el Estado de Veracruz: José de Emparan, José María Mata, Rafael González Páez, Mariano Vega. Por el Estado de Yucatán: Benito Quijano, Francisco Iniestra, Pedro de Barranda, Pedro Contreras Elizalde. Por el Territorio de Tehuantepec: Joaquín García Granados. Por el Estado de Zacatecas: Miguel Auza, Agustín López de Nava, Basilio Pérez Gallardo. Por el Territorio de la Baja California: Mateo Ramírez. José María Cortés y Esparza, por el Estado de Guanajuato, Diputado Secretario. Isidoro Olvera, por el Estado de México, Diputado Secretario. Juan de Dios Arias, por el Estado de Puebla, Diputado Secretario. J.A. Gamboa, por el Estado de Oaxaca, Diputado Secretario.

7.3. EXTRACT OF POLITICAL CONSTITUTION OF THE MEXICAN REPUBLIC 1857

Political Constitution of México, on the indestructible basis of their rightful independence, proclaimed on September 16, 1810 and consummated on September 27, 1821.

TITLE I

Section One

Of human rights

- Article 1.* Human rights as the basis and purpose of social institutions.
- Article 2.* Freedom of individuals of the Republic.
- Article 3.* Freedom of education.
- Article 4.* Freedom of profession, industry or work.
- Article 5.* Restriction for personal services.
- Article 6.* Freedom of expression of ideas.
- Article 7.* Freedom to write and publish.
- Article 8.* Right of petition.
- Article 9.* Right of association and assembly.
- Article 10.* Right to keep and bear arms.
- Article 11.* Right to enter and leave the Republic.
- Article 12.* Restriction of recognition of nobility titles, privileges and honors.
- Article 13.* Right not to be judge by private laws or special tribunals.
- Article 14.* No issue of retroactive laws.
- Article 15.* Non-extradition of political offenders.

Article 16. Right not to be molested in his person, family, home, papers and possessions except by virtue of a judicial warrant.

Article 17. Right not to be imprisoned for debts of a purely civil matter.

Article 18. Restriction prison offense punishable only by imprisonment.

Article 19. Rights in detention.

Article 20. Guarantees of the accused in a criminal trial.

Article 21. Application of penalties.

Article 22. Prohibition of certain penalties.

Article 23. Cases of application of the death penalty.

Article 24. No criminal trial may have more than three instances.

Article 25. Respect for correspondence.

Article 26. Restrictions required for the accommodation the military.

Article 27. Property rights.

Article 28. Prohibition of monopolies.

Article 29. Cases of suspension of constitutional guarantees

Section Two

Of Mexicans

Article 30. Quality of Mexicans.

Article 31. Obligations of the Mexicans.

Article 32. Mexicans preference over foreigners for all employment, positions, or commissions appointed by the authorities.

Section Three

Of foreigners

Article 33. Quality of foreigners, their rights and obligations.

Section Four

Of Mexican citizens

Article 34. Quality of the Mexican citizen.

Article 35. Prerogatives of the citizen.

Article 36. The obligations of citizens of the Republic.

Article 37. Loss of a citizen ship.

Article 38. Cases and how they lost the rights of citizenship.

TITLE II

Section One

National Sovereignty and the form of government

Article 39. The national sovereignty resides essentially and originally in the people.

Article 40. Form of government.

Article 41. Exercise of sovereignty.

Section Two

Of the integral parts of the Federation and the National Territory

Article 42. Composition of the National Territory.

Article 43. Parts of the Federation.

Article 44. Limits of certain states.

Article 45. Limits of Colima and Tlaxcala.

Article 46. Territory of the Valley of Mexico.

Article 47. Territory of Nuevo Leon and Coahuila.

Article 48. Recovery area and boundaries of certain states.

Article 49. Incorporation of various territories.

TITLE III

DIVISION OF BRANCHS

Article 50. Division of the Supreme Power of the Federation.

Section One

The Legislative Branch

Article 51. Exercise of Legislative Branch.

Paragraph I

Of the election and installation of Congress

Article 52. Composition of Congress.

Article 53. Appointment of Deputy to the number of inhabitants.

Article 54. Appointment of substitutes.

Article 55. Features of Representatives election.

Article 56. Requirements to become a deputy.

Article 57. The office of deputy is incompatible with any commission or destination of the Union which receive a salary.

Article 58. Restriction of Deputies to have another job.

Article 59. Immunity of Deputies about their opinions.

Article 60. Certification of elections of members of Congress.

Article 61. Minimum attendance to open session.

Article 62. Sectional Period.

Article 63. Opening Session of Congress.

Article 64. Character of the resolutions of Congress.

Paragraph II

Of the initiative and creation of laws

Article 65. Right to initiate laws.

Article 66. Destination of the initiatives presented

Article 67. Bill dismissed.

Article 68. Destination of the second period of sessions.

Article 69. Review and opinion of the following year's budget and the federal bill of last year.

Article 70. Proceedings of the initiatives or bills.

Article 71. Narrowing or waiver of the procedures of Article 70.

Paragraph III

Congress Branchs

Article 72. Powers of Congress.

Paragraph IV

Of the Permanent Deputation

Article 73. Composition of the permanent deputation.

Article 74. Powers of the Standing Committee.

Section Two

Executive Branch

Article 75. Exercise of the Supreme Executive Power.

Article 76. Election of the President.

Article 77. Requirements to be President.

Article 78. Tenur of the President.

Article 79. Faults of the President.

Article 80. New election in case of absence of the President.

Article 81. President's resignation.

Article 82. If he takes possession the interim president.

Article 83. Oath of the President.

Article 84. No separation of the President's place of residence of the Federal Government, and the exercise of their functions.

Article 85. Powers and duties of the President.

Article 86. Business office of the administrative order.

Article 87. Qualifications of state to be Secretary.

Article 88. Signature of the Secretaries of State of all regulations, decrees and orders of the President.

Article 89. Account Office of the Secretaries to the Congress.

Section Three

Judicial Branch

Article 90. Judicial power of the Federation.

Article 91. Composition of the Supreme Court of Justice

Article 92. Duration and choice of individuals to the Supreme Court of Justice.

Article 93. Requirements to be an individual of the Supreme Court.

Article 94. Oath of ministers to the Supreme Court.

Article 95. Resignation from office.

Article 96. Establishment and organization of the Circuit and District Courts.

Article 97. Allocation of Federal courts.

Article 98. Knowledge of the Supreme Court of Justice of disputes between States.

Article 99. Competence arising between the Courts of the Federation.

Article 100. The Supreme Court of Appeal or last resort.

Article 101. Courts who resolve disputes of the Federation.

Article 102. All judgments of the preceding article shall continue at the request of a party.

TITLE IV

THE LIABILITY OF PUBLIC OFFICIALS

Article 103. Liability for offenses of public officials.

Article 104. Procedurability common Law offenses of public officials.

Article 105. Congress and the grand jury and the Supreme Court as above, for official crimes.

Article 106. No grant of pardon to the accused.

Article 107. Period of responsibility for crimes and misdemeanors officers.

Article 108. There will be no privilege or immunity in the demands of civil order.

TITLE V

THE STATES OF THE FEDERATION

Article 109. Internal governance of states.

Article 110. Arrangements regarding the limits of States.

Article 111. Restrictions of the States.

Article 112. Other restrictions of the States.

Article 113. Obligation of States to hand over criminals to other states.

Article 114. Obligation of Governors.

Article 115. Faith and credit of a State for the acts, records and judicial proceedings of another.

Article 116. Protection of States against all foreign invasion or violence.

TITLE VI

GENERAL MEASURES

Article 117. Powers reserved to the States.

Article 118. Prohibition to play two positions at once.

Article 119. No payment is not included in the budget or by subsequent Law.

Article 120. Compensation for services of officials of the Federation.

Article 121. Oath of a public official before taking office.

Article 122. Functions of the military authorities.

Article 123. Intervention of the Federal Government on religious worship and external discipline.

Article 124. Application of sales taxes and customs.

Article 125. Inspection of the Federal Government in the forts, barracks, stores, warehouses and other buildings.

Article 126. Supreme Laws of the Union.

TITLE VII

REFORM OF THE CONSTITUTION

Article 127. Requirements for the addition or amendment of the Constitution.

TITLE VIII

INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION

Article 128. Permanence of strength and force of the Constitution.

7.4. POLITICAL CONSTITUTION OF THE MEXICAN REPUBLIC

Mexico, February 5, 1857

128 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE I

Section I. *Rights of men*

Section II. *Mexicans*

Section III. *Aliens*

Section IV. *Mexican citizens*

TITLE II

Section I. *National sovereignty and form of government*

Section II. *Integral parts of the federation and national territory*

TITLE III.

DISTINCTION OF POWERS

Section I. *Legislative Power*

Paragraph I. *Election and installation of the Congress*

Paragraph II. *Initiative and formation of laws*

Paragraph III. *Faculties of the Congress*

Paragraph IV. *Permanent Deputation*

Section II. *Executive Power*

Section III. *Judiciary*

TITLE IV.
RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES

TITLE V.
THE STATES OF THE FEDERATION

TITLE VI.
GENERAL PREVENTIONS

TITLE VII.
REFORM OF THE CONSTITUTION

TITLE VIII.
INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION

POLITICAL CONSTITUTION OF THE MEXICAN REPUBLIC
IGNACIO COMONFORT, Substitute President of the Mexican Republic, to
her habitants, know:

That the Extraordinary constituent congress has decreed the following:

In the name of God and with the authority of the Mexican people.

The representatives of the different states, the District and the territories that form the Republic of México, called by the proclaimed Plan in Ayutla on March 1st, 1854, reformed in Acapulco the 11th day of the same month and year, and by the call issued on October 17th, 1855, to build the Nation under the form of a democratic, representative and popular republic, exercising the powers with which they are invested, they comply with they high commission decreeing the following:

Political Constitution of the Mexican Republic, above the indestructible base of its legitimate independence, proclaimed the 16th of September, 1810 and consummated on the 27th of September, 1821.

TITLE I

Section I

Rights of man

1. The Mexican people recognize that the rights of man are the base and the object of the social institutions. In consequence declares, that every Law and every authority in the country, shall respect and sustain the guarantees that the present Constitution grants.

2. In the Republic every one is born free. The slaves that step on national territory regain, because of that single event, their freedom and they have the right to the protection of the Law.

3. Education is free. The Law shall determine which professions require title for its practice, and the requirements for its issuance.

4. Every man is free to embrace the profession, industry or job that suits him, it being useful and honest, and to take advantage of its products. Nor one nor the other could be prevented but by judiciary sentence when it attacks the rights of third parties, or government resolution, dictated in the terms that check the Law when it offends those of society.

5. No one can be forced to provide personal work, without a fair retribution and his full consent. The Law cannot authorize any contract that has for object the loss nor the irrevocable sacrifice of the freedom of a man, whether it is because of work, education or religious vow. Neither it can authorize agreements in which a man pacts his exile or banishment.

6. The manifestation of ideas cannot be object of any judiciary or administrative inquisition, but in the case of attack to the moral, the rights of third persons, it causes a crime of felony, or it perturbs the public order.

7. It is inviolable the freedom to write and publish writings on any subject. No Law or authority may establish previous censorship, nor require bail to the authors or printers, nor inhibit the printing freedom which has no limits other than the respect to private life, the moral, and the public peace. The printing felonies shall be judged by a jury who qualifies the fact, and by another who applies the Law and designates the penalty.

8. It is inviolable the right of petition exercised in writing, in a pacific and respectful manner; but concerning to political matters only the citizens of the Republic may exercise it. To every petition, a written resolution shall be issued by the authority to which it was made, and the authority has the compulsion to give notice to the petitioner.

9. No one may be restricted in his right to associate or reunite peacefully with any licit objective; but only the citizens of the Republic may do it in order to take part in the political matters of the country. No armed reunion has the right to deliberate.

10. Every man has the right to possess and carry arms for his safety and legitimate defense. The Law will designate which are the banned arms and the penalty in which occur those who might carry them.

11. Every man has the right to enter and leave the Republic, travel through its territory and move his residence without having the necessity of security letter, passport, safe-conduct or any other similar requirement. The exercise of this right does not detriment the legitimate faculties of the judiciary or administrative authority, in cases of criminal or civil responsibility.

12. There are not, neither are recognized in the Republic, noble titles, nor prerogatives, nor hereditary honors. Only the people, legitimately represented, may decree rewards in honor of those who may have served or shall render eminent services to the motherland or humanity.

13. In the Mexican Republic no one can be judged by privative laws, or by special tribunals. No person or corporation may have privileges, or enjoy any remuneration which is not compensation for a public service, and are fixed by Law. War privileges persist only for crimes and faults which have exact concession with military discipline. The Law shall clearly fix the cases to this exception.

14. Retroactive laws cannot be issued. No person can be judged nor sentenced; but by laws given with precedence to the event and exactly applied to it, by the tribunal that the Law had previously established.

15. Treaties for the extradition of political convicts, or those criminals from common order who have had the condition of slaves in the country where they committed the crime, shall never be celebrated; nor agreements or treaties on grounds of which the guaranties and rights that this Constitution grant to man and the citizen are altered.

16. No person may be disturbed in his person, family, address, papers and possessions, but on grounds of written commandment of the competent authority that founds and motivates the legal cause of the procedure. In the case of crime *in fraganti*, every person may apprehend the criminal and his accomplices, putting them without delay to the immediate authority disposition.

17. No person may be taken prisoner because of purely common debts. No person may exercise violence to claim his right. The tribunal shall always be expeditious to administrate justice. This shall be gratis, being, in consequence, abolished the judiciary costs.

18. There shall be place to prison only for crime that deserves corporal punishment. In any state of the process in which appears that the defendant cannot be imposed such punishment, shall be set on bail. In any case may the prison or detention extend because of lack of fee payment, or any other money manifestation.

19. No detention may exceed a three day term, without a resolution that justifies prison and the other requirements that the Law establishes. The only lapse of this term constitutes responsible to the authority that orders or consents it and the agents, min-

istries, mayors or warders that execute it. Every mistreat during the apprehension or in the prisons, every bother that is inferred without legal motivation, every burden or contribution in the prisons, is an abuse that the laws shall correct and the authorities punish severely.

20. In every criminal trial, the defendant shall have the following guaranties:

- I. That the reason for the procedure and the name of the prosecutor, if there was one is informed to him.
- II. That his preparatory declaration is taken within forty eight hours, counting since he is presented to the judge.
- III. That he is brought face to face with the witnesses that depose against him.
- IV. That the information that he needs and that is stated in the process is easily provided, to prepare his discharges.
- V. That he is listened in defense for himself or a person worth his trust, or both, according to his will. In case of not having someone to defend him, lists of public defenders, in order that he selects the one or ones that are best for him.

21. The application of the penalties is exclusive of the judiciary authority. The political or administrative shall only be able to impose, as a correction, up to five hundred pesos fine, or one moth of imprisonment, in the cases and way that specifically the Law determines.

22. They are, for always, prohibited the penalties of mutilation and infamy, the marking, the whips, beating, the torment of any species, the excessive fine, the confiscation of goods and any other unusual or transcendental punishment.

23. For the abolition of the capital punishment, the administrative power is in charge to establish, briefly, the penitentiary regime. Meanwhile, it is abolished for political crimes, and cannot be extended to other cases other than to the traitor of the homeland in alien war, the highway man, the arsonist, the parricide, the homicide with treachery, premeditation or advantage, the severe crimes of military order and those of piracy that the Law shall define.

24. No criminal trial shall have more than three instances. No person can be judged two times for the same crime, whether he is acquitted in trial or he is condemned. It is abolished the practice of acquitting of the instance.

25. Correspondence, which under cover circulates through the post offices, shall be free of any register. The violation of this guarantee is an attempt that the Law shall punish severely.

26. In peaceful times no military may demand accommodation, baggage, or any other real or personal service, without the consent of the proprietor. In war times he may only according to the terms established in the Law.

27. Property of the persons may not be occupied without his consent, but because of public use and previous indemnity. The Law shall determine the authority which shall do the expropriation and the requirements that must take place.

No common or ecclesiastic corporation, whatever it is its character, denomination or object, shall have legal capacity to acquire in property or administer by itself real state, with the only exception of the buildings that are intended immediately and directly to the service or object of the institution.

28. There shall not be monopolies, or trusts of any kind, nor prohibitions by way of protection to the industry. Except, solely, those regarding to the minting of currency, to the post office and the privileges that, per limited time, the Law grants to the inventors or those who improvers.

29. In cases of invasion, severe perturbation of public peace, or whatever other that set society in great danger or conflict, solely the president of the Republic, in concordance with the ministries council and with the approval of the Congress of the Union, and, during the recesses of the latter, the Permanent Deputation, may suspend the guaranties granted by this Constitution, except those which assure the life of man; but he shall do it for a limited time, by means of general preventions and without being possible to constrict to a determined individual.

If the suspension had place being the Congress reunited, this will grant the authorizations that it believes necessary so that the Executive confront the situation. If the suspension occurred during recess time, the Permanent Deputation shall call without delay to the Congress so it can resolve them.

SECTION II

Mexicans

30. Mexicans are:

- I. All those born in or out the territory of the Republic, from Mexican parents.
- II. Those aliens who naturalize according to the laws of the Federation.
- III. Those aliens who acquire real state in the Republic or have Mexican children, as long as they do not express the resolution of preserving their nationality.

31. Is duty of every Mexican:

- I. Defend the independence, territory, honor, rights and interests of their homeland.
- II. To contribute to the public expenditures, of the federation, the State and Municipality where they reside, in the proportional and equitable manner provided by laws.

32. Under equal circumstances, Mexicans shall be preferred over aliens, for all jobs, offices or government commissions, where the qualification of the citizenship is not indispensable. Laws to improve the condition of hardworking Mexicans shall be issued, rewarding those who distinguish in any science or art, stimulating work and founding colleges and practice schools of arts and trades.

SECTION III

Aliens

33. Aliens are the ones who do not have the qualifications set in the article 30. They are entitled to the rights granted in section 1st, Title I of this Constitution, except in every case the faculty vested on the government to expel the pernicious alien. It is their duty to contribute to the public expenditures, in the manner provided by laws, and obey and respect instructions, laws and authorities of the country, abiding by to the rulings and sentences of the tribunals, without being able to try other appeals than those granted to Mexicans by Law.

SECTION IV

Mexican citizens

34. Citizens of the Republic, are all those who, having the status of Mexicans, fulfill, in addition, the following:

I. Being married, to have eighteen years of age, or twenty one if they are not.

II. To have an honest way of living.

35. Are prerogatives of the citizens:

I. To vote in popular elections.

II. To be elected for all public offices of popular election, and appointed for any other job or commission, having the qualifications set by Law.

III. Associate to participate in the political affairs of the country.

IV. To take arms in the Army or the National Guard to defend the Republic and its institutions.

V. To exercise the right of petition in all sorts of issues.

36. Are duties of citizens of the Republic:

I. To register in the municipality expressing the property they hold, or the industry, profession or job by which they earn their living.

II. To enroll in the National Guard.

III. To vote in popular election, in their corresponding district.

IV. To hold popular election offices of the Federation that shall never be performed for free.

37. The state of citizen is lost:

I. For the naturalization in a foreign country.

II. For officially serve another country's government, or admit from it decorations, titles or functions, without previous license of the Federal Congress. Except the literary, scientific and human titles which may be freely accepted.

38. The Law will set the cases and manner in which the citizen rights are lost or suspended, and the rehabilitation manner.

TITLE II
Section I

National Sovereignty and Form of Government

39. The national sovereignty essentially and originally lies on the people. All the public power arises from the people and it is instituted for its benefit. The people have in every moment the inalienable right to alter or modify the government form.

40. It is the will of the Mexican people to constitute in a representative, democratic, federal republic formed by free and sovereign states in all concerning its internal regime; but united in a federation established according to the principles of this fundamental Law.

41. The people exercise their sovereignty through the Powers of the Union under their cases of their jurisdiction, and through the Powers of the States concerning their internal regimes, in the terms respectively set by this Federal Constitution and the particular of the States, which in no case shall contravene the conventions of the federal pact.

SECTION II

The Integral Parts of the Federation and the National Territory

42. The national territory comprises the integral parts of the Federation, and in addition that from the adjacent islands in both seas.

43. The integral parts of the Federation are the states: of Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas and the Territory of the Baja California.

44. The states of Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas and the Territory of the Baja California, shall maintain the limits that they currently have.

45. The states of Colima and Tlaxcala shall maintain, in their new status of states, the limits which they have had as territory of the Federation.

46. The state of Mexico Valley shall form from the territory which currently comprises the Federal District; but the erection shall only have effect, when the Supreme Federal Powers move to a different location.

47. The state of Nuevo León and Coahuila shall comprise the territory which has belonged to the two different states that form it today, separating the part of the Bonanza hacienda, which shall reincorporate to Zacatecas, in the same terms in which it was before its incorporation to Coahuila.

48. The states of Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Yucatán and Zacatecas, shall recover the extension and limits that they had in December 31st, 1852, with the alterations that the following article sets.

49. The town of Contepec, which has been part to Guanajuato, shall incorporate to Michoacán. The municipality of Ahualulco, which has been part to Zacatecas, shall incorporate to San Luis Potosí. The municipalities of Ojo Caliente and San Francisco de los Adames, which have been part of San Luis, as well as the towns of Nueva Tlaxcala and San Andrés del Teul, which have been part of Jalisco, shall incorporate to Zacatecas. The department of Tuxpan shall continue forming part of Veracruz, The Canton de Huimanguillo, which has been part of Veracruz, shall incorporate to Tabasco.

TITLE III DIVISION OF POWERS

50. The Supreme Power of the Federation is divided for its exercise in Legislative, Executive and Judiciary. They shall never reunite two or more of this powers in one person or corporation, nor be deposited the legislative in one individual.

Section I *Legislative Power*

51. The exercise of the Supreme Legislative Power is deposited on an assembly, which shall be called Congress of the Union.

Paragraph I *The Election and Installation of the Congress*

52. The Congress of the Union shall be formed of representatives, elected all of them every two years by the Mexican citizens.

53. A depute shall be appointed for every forty thousand habitants, or a fraction over twenty thousand. The territory in which the population is smaller than the set in this article, shall appoint nevertheless a Deputy.

54. For every proprietor Deputy a substitute shall be appointed.

55. The Deputy election shall be indirect in first degree, and in secret count, in the terms that the electoral Law sets.

56. To be a Deputy is necessary; to be Mexican citizen in exercise of his rights; to have twenty five years of age on the day of the opening of the sessions; to be neighbor of the State or Territory doing the election; and not to belong to the ecclesiastic state. The neighborhood is not lost for absence during the performance of a popular election office.

57. The Deputy office is incompatible with any commission or destiny from the Union in which a salary is received.

58. The proprietor deputies since the day of their election, until the day in which they conclude their assignment, cannot accept any employment from the Executive of the Union by which a salary is received, without previous license of the Congress.

The same requirement is necessary for the substitute deputies, who are in exercise of their function.

59. The deputies are inviolable because of their opinions they express during the performance of their office, and shall never be claimed because of that.

60. The Congress evaluates the elections of his members and solves the doubts that occur about them.

61. The Congress cannot open his sessions, or exercise his office, without the concurrence of more than the half of the total number of his members; but those present shall reunite the day set by Law and to compel the absents, under the penalties that she sets.

62. The Congress shall have two periods of extraordinary sessions every year: the first shall begin on September 16th and shall end on December 15th; and the second, non deferrable, shall begin on April 1st and shall end on the last day of May.

63. To the opening of the sessions of the Congress the President of the Union shall assist, and he shall pronounce a speech in which he expresses the status of the country. The president of the Congress shall reply in general terms.

64. Every resolution from the Congress shall not have any other character than that of Law or economic agreement. The laws shall be communicated to the Executive signed by the president and two secretaries, and the agreements only by two secretaries.

Paragraph II

Initiative and Formation of Laws

65. The right to initiate laws is incumbent to:

- I. The President of the Union.
- II. The Deputies to the Federal Congress.
- III. The Legislatures of the states.

66. The initiatives presented by the President of the Republic, the legislatures of the states or the deputations of those, shall pass of course to committee. Those presented by the deputies, shall abide to the procedures that the debate regulations set.

67. Every Law project which was rejected by the Congress cannot be presented in the sessions of that year.

68. The second period of sessions shall be destined, with all preference, to the examination and voting of the budgets of the next fiscal year; to decree the contributions to meet them and to the revision of the last year's count, that the Executive presents.

69. The penultimate day of the first period of sessions, the Executive shall present to the Congress the budget project of the next year and the previous count. The first and the latter shall pass to a committee formed by five representatives appointed on the same day, which shall have the obligation to examine both documents and present a report on them, in the second session of the second period.

70. The initiatives or Law projects shall abide to the following procedures:

- I. Committee report.
 - II. One or two discussions, in the terms expressed in the following fractions.
 - III. The first discussion shall have place on the day designated by the president of the Congress, according to the regulations.
 - IV. Once concluded this discussion it shall be passed to the Executive a copy of the file, so that in the term of seven day he expresses his opinion or that he does not use that faculty.
 - V. If the opinion of the Executive were in agreement, it shall proceed, without further discussion, to the voting of the Law.
 - VI. If such opinion disagreed in everything or a part, the file shall return to the committee, so that, with the presence of the government observations, the matter is examined again.
 - VII. The new report shall suffer a new discussion, and this concluded the voting shall proceed.
 - VIII. Approval of absolute majority of the present deputies.
71. In case of notorious urgency, evaluated by the vote of two thirds of the present deputies, the Congress may stretch of excuse the procedures established in article 70.

Paragraph III *Faculties of the Congress*

72. Are faculties of the Congress:

- I. To admit new states or territories in the Federal Union, incorporating them to the Nation.
- II. To erect the territories in states when they have a population of eighty thousand habitants, and the necessary elements to provide its politic existence.
- III. To form new states within the limits of those existing, always that it is asked by a population of eighty thousand habitants, justifying having the necessary elements to provide its politic existence. Shall hear in every case to the legislatures of the concerning territory, and its agreement shall only have effect, if the majority of the legislatures of the states confirms it.
- IV. To definitely set the limits of the states, ending the differences aroused between them about the demarcation of their respective territories, but not when these differences have a litigious character.
- V. To change the residence of the Supreme Powers of the Federation.
- VI. For the internal arrangement of the Federal District and territories, having as a base that the citizens choose popularly the politic, municipal and judiciary authorities designating them rents to meet the local attentions.

- VII. To approve the budget of the expenses of the Federation that the Executive must present annually, and impose the necessary contributions to meet it.
- VIII. To set the bases under which the Executive may celebrate loans over the credit of the Nation; to approve these same loans, and to recognize and order the payment of the national debt.
- IX. To issue duties on the foreign commerce, and to prevent, by means of general bases, that in the commerce from State to State, burdensome restrictions are set.
- X. To establish the general bases of the commercial legislation.
- XI. To create and delete public employments of the Federation; point, increase or decrease its resources.
- XII. To confirm the appointments that the Executive does of the ministries, diplomatic agents and consuls, of the superior employees of treasury, of the coronels and other superior officials of the National Army.
- XIII. To approve the treaties, agreements or diplomatic conventions that the Executive celebrates.
- XIV. To declare war in sight of the data presented by the Executive.
- XV. To regulate the manner in which the letters of marque shall be issued; to dictate laws, according to which they shall declare good or bad the sea and land preys and to issue the relatives to the maritime Law of peace and war.
- XVI. To consent or deny the entry of alien troops into the territory of the Federation, and to consent the station of squads from another power, for more than a month, in waters of the Republic.
- XVII. To allow the exit of the national troops out of the limits of the Republic.
- XVIII. To lift and sustain the Army of the Union, and to regulate his organization and service.
- XIX. To issue regulation with the purpose to organize, arm and discipline the National Guard, reserving to the citizens that form it, the respective chiefs and officers appointments, and to the states the faculty of instruct it, according to the discipline prescribed by such regulations.
- XX. To give his consent in order that the Executive may use the National Guard, out of his respective states or territories, setting the necessary force.
- XXI. To dictate laws on naturalization, colonization and citizenship.
- XXII. To dictate laws on general communication means an on post and mails.
- XXIII. To establish mints, set the conditions that the latter shall have, determine the value of the foreign and adopt a general system of weights and measures.
- XXIV. To set the rules to which the occupation and transfer of vacant lots and the prices of these.

- XXV. To grant amnesties for crimes whose jurisdiction concerns to the tribunals of the Federation.
- XXVI. To grant prizes or rewards for eminent services rendered to the homeland or to the humanity and privileges for limited time to the inventors or perfectionist of any improvements.
- XXVII. To postpone for thirty working days for the first period of his ordinary sessions.
- XXVIII. To reform his internal regulations and take the necessary providences in order to make the absent deputies converge, and correct the faults or omissions of the presents.
- XXIX. To freely appoint and remove the employees of his department and those of the audit office, that shall organize according to what the Law sets.
- XXX. To issue all the laws that result necessary and appropriate to make effective the previous faculties and all the other granted by this Constitution to the Powers of the Union.

Paragraph IV

Permanent Deputation

73. During the recesses of the Congress of the Union, there shall be a Permanent Deputation, formed of a Deputy for each State and Territory that the Congress shall appoint on the eve of the closing of his sessions.

74. The attributions of the Permanent Deputation are the following:

- I. To lend his consent for the use of the National Guard, in the cases which the article 72, fraction XX mentions.
- II. Agree by himself, or by petition of the Executive, the call of the Congress to extraordinary sessions.
- III. Approve in its case the appointments to which the article 85 fraction III refers to.
- IV. To receive the oath from the President of the Republic, and to the ministries of the Supreme Court of Justice, in the cases prevented by this Constitution.
- V. Report on all the matters that remain without resolution in the files, so that the following legislature has of course matters to look after.

Section II

Executive Power

75. The exercise of the Supreme Executive Power of the Union, in only one individual who shall be called President of the Mexican United States.

76. The election of the president shall be indirect in first grade and in secret count, in the terms set by the electoral Law.

77. To be president is required: to be Mexican citizen by birth, in exercise of his rights, of thirty five years of age by the time of the election, not to belong to the ecclesiastic state and to reside in the country at the time of the election.

78. The president shall come in to exercise his functions on the first of December and shall last four years in his office.

79. During the temporary and in the absolute absences of the President of the Republic, while the newly elected is presented the President of the Supreme Court of Justice shall come in to exercise the power.

80. If the absence of the president were absolute, a new election shall proceed according to what the article 76 sets, and the newly elected, shall exercise his functions until the last day of November of the fourth year following to his election.

81. The office of President of the Union can only be resigned because of serious cause qualified by the Congress, to whom the resign shall be presented.

82. If by any reason the election of the president were not done and published by December 1st when the replacement shall take place, or the elected one were not ready to come in the exercise of his functions, he shall cease nevertheless the previous, and the Supreme Executive Power shall be deposited temporarily on the president of the Supreme Court of Justice.

83. At the moment of taking possession of his office the president, shall pledge before the Congress, and in his recess before the Permanent Deputation, under the following formula: *I swear to hold loyal and patriotically the office of President of the Mexican United States, according to the Constitution, and looking over in everything for the sake and prosperity of the Union.*

84. The president cannot separate of the place of residency of the federal powers, nor of the exercise of his functions, without serious cause qualified by the Congress, and in his recesses by the Permanent Deputation.

85. The faculties and obligations of the president, are the following:

- I. To promulgate and execute the laws that the Congress of the Union issues, providing in the administrative sphere to its exact observance.
- II. To freely appoint and dismiss the office, dismiss the diplomatic agents and superior employees of treasury, and freely appoint and dismiss the rest of the employees of the Union, whose appointment or dismissal are not determined in a different manner in the Constitution or the laws.
- III. To appoint the ministries, diplomatic agents and general consuls, with the approval of the Congress, and during his recess of the Permanent Deputation's.
- IV. To appoint with the approval of the Congress, the coronels and the other superior officers of the National Army and the superior employees of the Treasury Department.
- V. To appoint the rest of the officers of the National Army, according to the Law.

- VI. To dispose of the sea and land permanent army for the interior security and exterior defense of the Federation.
- VII. To dispose of the National Guard for the same purposes, on the terms prevented by the XX fraction of the article 72.
- VIII. To declare war in the name of the Mexican United States, previous Law of the Congress of the Union.
- IX. To grant letters of marquee under the bases established by the Congress.
- X. To direct the diplomatic negotiations, and celebrate treaties with foreign powers, subjecting them to the approval of the Federal Congress.
- XI. To receive ministries and other envoys from the foreign powers.
- XII. To call the Congress to extraordinary sessions, when the Permanent Deputation agrees so.
- XIII. To facilitate to the Judiciary the aids that he shall need for the expedite exercise of his functions.
- XIV. To fit out all types of ports, establish maritime and frontier customs and designate its location.
- XV. To grant, according to the laws, reprieves to the convicts for crimes of the competence of the federal tribunals.

86. For the dispatch of the administrative business of the Federation, there shall be the number of secretaries that the Congress establishes through a Law, which shall do the distribution for the business that shall be under each office.

87. To be secretary of the office it is required: to be Mexican citizen by birth, to be in exercise of his rights and to be twenty five years old.

88. Every ruling, decree and order of the President, shall be signed by the Secretary of the Dispatch in charge of the area to which the matter corresponds. Without this requirement they shall not be obeyed.

89. The secretaries of the dispatch, after the sessions of the first period are open, shall present report to the Congress of the State of its corresponding areas.

Section III

The Judiciary Power

90. The exercise of the Judiciary Power of the Federation relies on a Supreme Court of Justice and the District and Circuit tribunals.

91. The Supreme Court of Justice shall be formed by eleven proprietor ministries, four supernumeraries, a district attorney and a solicitor general.

92. Each one of the individuals of the Supreme Court of Justice shall last in their entrustment six years, and their election shall be indirect in first grade, according to the electoral Law.

93. To be elected individual of the Supreme Court of Justice, it is required: to be instructed in the science of Law, subject to the judgment of the electors, to be elder than thirty five years old and Mexican citizen by birth in exercise of his rights.

94. The individuals of the Supreme Court of Justice, at the moment when they come into exercise of their entrustment, shall present oath before the Congress, and during the recess of the latter before the Permanent Deputation, in the following manner; *You swear to carry out loyally and patriotically the position of magistrate of the Supreme Court of Justice that has conferred you the town, abiding to the Constitution, and looking after in everything the good and prosperity of the Union?*

95. The position of individual of the Supreme Court of Justice is only renounceable because of serious cause, evaluated by the Congress, before who the resign shall be presented. During the recesses of the latter, the evaluation shall be done by the Permanent Deputation.

96. The Law shall establish and organize the Circuit and District tribunals.

97. It is responsibility of the tribunals of the Federation to know:

- I. Of all the controversies aroused regarding the observance and application of the federal laws.
- II. Of those that are about maritime Law.
- III. Of those in which the Federation shall be part.
- IV. Of those aroused amongst two or more states.
- V. Of those aroused amongst a State and one or more neighbors of another.
- VI. Of those of common or criminal order aroused as a consequence of treaties celebrated with foreign powers.
- VII. Of the cases concerning the diplomatic agents and consuls.

98. Is responsibility of the Supreme Court of Justice since first instance, the knowledge of the controversies aroused from one State with another, and of those in which the Union shall be part.

99. Is also responsibility of the Supreme Court of Justice to resolve the competences that arouse amongst the tribunals of the Federation; amongst the latter and the states, or amongst those of one State and another.

100. In the rest of the cases comprised in the article 97, the Supreme Court of Justice shall be appeal tribunal, or last instance, according to the graduation that the Law of the attributions of the Circuit and District tribunals makes.

101. The tribunals of the Federation shall resolve every controversy that arouses:

- I. Because of laws or acts of any authority that violates the individual rights.
- II. Because of laws or acts of the federal authority that violate or restrict the sovereignty of the states.
- III. Because of laws or acts of the authorities of the latter, that invades the sphere of the federal authority.

102. All of the trials of which the previous articles talks shall be followed, upon request of offended party, by means of the procedures and forms of the legal order, that a Law shall determine. The sentence shall always be such that only occupies of particular individuals, limiting to protect and guard them on the special case of which

the process is about, without making any general declaration regarding the Law or act that caused it.

TITLE IV

OF THE RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT EMPLOYEES

103. The deputies to the Congress of the Union, the individuals of the Supreme Court of Justice and the dispatch secretaries, are responsible for the common felonies that they commit during the time of their entrustment, and for the felonies, faults or omissions in which they incur during the exercise of that same entrustment. The governors of the states are so by infraction of the Constitution and federal laws. Is also responsible the President of the Republic; but during the time of his entrustment he could only be accused for the felonies of treason to the motherland, express violation of the Constitution, attack to the electoral liberty, and serious felonies of the common order.

104. If the felony were common, the Congress erected in great jury shall declare, to absolute majority of votes, if it is sustained or overruled to proceed against the accused. In negative case any other ulterior procedure shall be overruled. In the affirmative case, the accused shall by the same fact, separated from his entrustment and subject to the action of the common tribunals.

105. About the official felonies shall know: the Congress as accusation jury, and the Supreme Court of Justice as sentence jury.

The accusation jury shall have as objective to declare in absolute majority of votes, if the accused is or not guilty. If the declaration were an acquittal, the government employee shall continue in the exercise of his entrustment. If it were a conviction, he shall be immediately separated from such entrustment, and he shall be made available to the Supreme Court of Justice. The latter, in Plenary Tribunal, and erected in sentence jury, with audience of the accused, the District attorney and the accusing, if there were, shall proceed to apply on account of absolute majority of votes, the penalty that the Law designates.

106. Once pronounced a responsibility sentence for official felonies, the grace of pardon cannot be granted.

107. The responsibility for official felonies and faults can only be demanded during the period in which the government employee exercises his entrustment and a year later.

108. In lawsuits of common order there is no privilege or immunity for any government employee.

TITLE V
OF THE STATES OF THE FEDERATION

109. The states shall adopt for their internal regime the form of republican popular representative government.

110. The states may arrange amongst them, by means of friendly agreements, their respective limits; but those arrangements shall not be taken into effect without the approval of the Congress of the Union.

111. The states cannot in any case:

I. Celebrate alliance, treaty or coalition with another State, or with foreign powers. Except the coalition that the frontier states can celebrate for offensive or defensive war against barbarians.

II. Issue letters of marque or reprisals.

III. Minting, issue paper money, or sealed paper.

112. The state cannot either, without consent of the Congress of the Union:

I. Establish tonnage rights or not any other of port; neither to impose contributions or rights over imports or exports.

II. Make war by itself to any foreign power. Excepting the cases of invasion or danger so imminent that does not admit delay. In these cases they shall give notice to the President of the Republic.

113. Each State has the duty of handing over without delay the criminals of other states to the authority who claims them.

114. The governors of the states are obliged to published and enforce the federal laws.

115. In each State of the Federation shall be given entire faith and credit to the public acts, registers and judiciary procedures of all the others. The Congress may, by means of general laws, prescribe the manner of proving such acts, registers and procedures and their effect.

116. The Powers of the Union have the duty of protecting the states against every invasion or external violence. In case of rebellion or internal disturb they shall offer the same protection, as long as they are incited by the Legislature of the State or by its Executive, if the latter were not reunited.

TITLE VI
GENERAL PREVENTIONS

117. The faculties that are not expressly granted by this Constitution to the federal employees are understood to be reserved to the states.

118. No individual may hold at once, to positions of the Union of popular election; but the appointed may choose between both the one he prefers to carry out.

119. No payment can be made, which is not comprehended within the budget or determined by a subsequent Law.

120. The President of the Republic, the individuals of the Supreme Court of Justice, the deputies and else government employees of the Federation, of popular appointment, shall receive a compensation for their services, which shall be determined by the Law and paid by the federal treasure. This compensation is not renounceable, and the Law that increases or decreases it, cannot be effective during the period in which an employee is exercising his entrustment.

121. Every government employee, without any exception, before taking possession of his entrustment, shall pledge to guard this Constitution and the laws that from her are emanated.

122. During peace time no military authority may exercise more functions, than those that have exact concession with the military discipline. There shall only be fix and permanent military commands in the castles, or the camps, the barracks or deposits that, outside the town, were established for the station of the troops.

123. It is incumbent exclusively to the federal powers to exercise, in matters of religious cult and external discipline, the intervention that the laws designate.

124. By June 1st of 1858 the internal levies and duties shall be abolished in the entire Republic.

125. Forts, barracks, storage warehouses and the rest of the necessary buildings to the government of the Union shall be under the immediate inspection of the federal powers.

126. This Constitution and the laws of the Congress of the Union which emanate from her and all the treaties done or which shall be done by the President of the Republic with approval of the Congress shall be Supreme Law for all the Union. The judges of each State shall arrange themselves to such Constitution, laws and treaties, despite the contrary dispositions that may exist in the constitutions or laws of the states.

TITLE VII OF THE REFORM OF THE CONSTITUTION

127. The present Constitution may be added or reformed. In order for the additions or the reforms form part of the Constitution, it is required that the Congress of the Union, by the vote of two third parts of his present individuals, sets forth the reforms or additions, and that these are approved by the majority of Legislatures of the states. The Congress of the Union shall do the compute of the votes of the legislatures and the declaration of the additions or reforms being approved.

TITLE VIII
OF THE INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION

128. This Constitution shall not lose her force and effect, even when for any rebellion her observance is interrupted. In case that because of a public disturb a government contrary to the principles that it sanctions is established, as soon as the people recovers his liberty, its observance shall be reestablished and, according to it and the laws that in virtue of it were issued, shall be judged, those who had figured in the government emanated from the rebellion, as well as those who had cooperated to this.

This Constitution shall be published of course and shall be sworn with the highest solemnity in the entire Republic; but with exception of the dispositions relative to the elections of the Supreme Federal Powers of the states, shall not start in force until the next to come 16th of September, when the first Constitutional Congress shall be installed. Since then the President of the Republic and the Supreme Court of Justice, shall continue in exercise until the constitutionally elected individuals take possession, they shall assemble to the precepts of the Constitution in the fulfillment of his obligations and faculties.

Given in the Sessions Hall of the Congress in México, on the fifth day of February of eighteen hundred fifty seven, thirty seventh of the independence. Valentín Gómez Farías, Deputy for the State of Jalisco, President. León Guzmán, Deputy for the State of México, Vicepresident. For the State of Aguascalientes: Manuel Buen Rostro. For the State of Chiapas: Francisco Robles, Matías Castellanos. For the State of Chihuahua: José Eligio Muñoz, Pedro Ignacio Irigoyen. For the State of Coahuila: Simón de la Garza y Melo. For the State of Durango: Marcelino Castañeda, Francisco Zarco. For the Federal District: Francisco de Paula Cendejas, José María de Río, Ponciano Arriaga, J. M. del Castillo Velasco, Manuel Morales Puente. For the State of Guanajuato: Ignacio Sierra, Antonio Lemus, José de la Luz Rosas, Juan Morales, Antonio Aguado, Francisco P. Montañez, Francisco Guerrero, Blas Balcárcel. For the State of Guerrero: Francisco Ibarra. For the State of Jalisco: Espiridión Moreno, Mariano Torres Aranda, Jesús Anaya y Hermosillo, Albino Aranda, Ignacio Luis Vallarta, Benito Gómez Farías, Jesús D. Rojas, Ignacio Ochoa Sánchez, Guillermo Langlois, Joaquín M. Degollado. For the State of Mexico: Antonio Escudero, José L. Revilla, Julián Estrada, I. de la Peña y Barragán, Esteban Páez, Rafael María Villagrán, Francisco Fernández de Alfaro, Justino Fernández, Eulogio Barrera, Manuel Romero Rubio, Manuel de la Peña y Ramírez, Manuel Fernando Soto. For the State of Michoacán: Santos Degollado, Sabás Iturbide, Francisco G. Anaya, Ramón I. Alcaráz, Francisco Díaz Barriga, Luis Gutiérrez Correa, Mariano Ramírez, Mateo Echaiz. For the State of Nuevo León: Manuel P. de Llano. For the State of Oaxaca: Mariano Zavala, G. Larrazabal, Ignacio Mariscal, Juan Nepomuceno Cerqueda, Félix Romero, Manuel E. Goytia. For the State of Puebla: Miguel María Arrijoja, Fernando María Ortega, Guillermo Prieto, J. Mariano Viadas, Francisco Banuet, Manuel M. Vargas, Francisco Lazo Estrada, Juan N. Ibarra, Juan N. de la Parra. For the State of Querétaro: Ignacio Reyes. For the State of San Luis Potosí:

Francisco J. Villalobos, Pablo Téllez. For the State of Sinaloa: Ignacio Ramírez. For the State of Sonora: Benito Quintana. For the State of Tabasco: Gregorio Payró. For the State of Tamaulipas: Luis García de Arellano. For the State of Tlaxcala: José Mariano Sánchez. For the State of Veracruz: José de Emparan, José María Mata, Rafael González Páez, Mariano Vega. For the State of Yucatán: Benito Quijano, Francisco Iniestra, Pedro de Baranda, Pedro Contreras Elizalde. For the Territory of Tehuantepec: Joaquín García Granados. For the State of Zacatecas: Miguel Azua, Agustín López de Nava, Basilio Pérez Gallardo. For the Territory of the Baja California: Mateo Ramírez. José María Cortés y Esparza for the State of Guanajuato, Secretary Deputy. Isidoro Olvera for the State of México, Secretary Deputy. Juan de Dios Arias for the State of Puebla, Secretary Deputy. J.A. Gamboa for the State of Oaxaca, Secretary Deputy.

ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

8.1. EXTRACTO DEL ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

TÍTULO I

DEL EMPERADOR Y DE LA FORMA DE GOBIERNO

- Art. 1.* Forma de gobierno.
- Art. 2.* Sustitución del Emperador.
- Art. 3.* Juramento del Emperador o Regente.
- Art. 4.* Ejercicio de la soberanía nacional.
- Art. 5.* Departamentos Ministeriales.
- Art. 6.* Consultas del Emperador respecto de la formación de leyes o Reglamentos.
- Art. 7.* Revisión y glosa de las cuentas de la Nación.
- Art. 8.* Derecho de todo mexicano para obtener audiencia del Emperador.
- Art. 9.* Nombramientos de Comisarios Imperiales y Visitadores.

TÍTULO II

DEL MINISTERIO

- Art. 10.* Toma de posesión de los Ministros.
- Art. 11.* Sesiones Ordinarias del Consejo de Ministros y orden que en ellas debe guardarse.
- Art. 12.* Responsabilidad por delitos comunes y oficiales.
- Art. 13.* Sustitución de un Ministro.

TÍTULO III

DEL CONSEJO DE ESTADO

- Art. 14.* Formación, atribuciones y nombramiento del Consejo de Estado.

TÍTULO IV
DE LOS TRIBUNALES

- Art. 15.* Administración de justicia.
Art. 16. Carácter de inamovible de Magistrados y Jueces.
Art. 17. Independencia del ejercicio de las funciones judiciales.
Art. 18. Prohibición de los Tribunales.
Art. 19. No habrá más de tres instancias.

TÍTULO V
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

- Art. 20.* Examen y liquidación de cuentas.
Art. 21. Jurisdicción del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VI
DE LOS COMISARIOS IMPERIALES Y VISITADORES

- Art. 22.* Facultades de los Comisarios Imperiales.
Art. 23. Funciones de los Visitadores.

TÍTULO VII
DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

- Art. 24.* Funciones del Cuerpo Diplomático.
Art. 25. Funciones del Cuerpo Consular.
Art. 26. Ley especial que arreglará el Cuerpo Diplomático y Consular.

TÍTULO VIII
DE LAS PREFECTURAS MARÍTIMAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO

- Art. 27.* Funciones de las Prefecturas Marítimas y Capitanías de Puertos.

TÍTULO IX
DE LOS PREFECTOS POLÍTICOS, SUBPREFECTOS
Y MUNICIPALIDADES

- Art. 28.* Encomienda de los Prefectos.
Art. 29. Gobierno Departamental de cada Prefecto.
Art. 30. Atribuciones del Consejo Departamental.
Art. 31. Reglamento del Consejo.
Art. 32. Presidencia Ordinaria y el asiento del Gobierno del Prefecto.

- Art. 33.* Nombramiento y faltas de los Prefectos.
Art. 34. Subprefectos como Subdelegados del Poder Imperial.
Art. 35. Nombramiento de Subprefecto.
Art. 36. Administración Municipal de cada población.
Art. 37. La Administración Municipal estará a cargo de los Alcaldes, Ayuntamientos y Comisarios Municipales.
Art. 38. Nombramiento de los Alcaldes.
Art. 39. Atribuciones de los Alcaldes.
Art. 40. Contribuciones Municipales.
Art. 41. Auxilio y sustitución de Alcaldes, por los Tenientes.
Art. 42. Nombramiento de un Letrado.
Art. 43. Consejo del Municipio.
Art. 44. Atribuciones de los Funcionarios Municipales.

TÍTULO X DE LA DIVISIÓN MILITAR DEL IMPERIO

- Art. 45.* Divisiones Militares del Territorio.
Art. 46. Obligaciones de los Jefes que mandan Divisiones Territoriales.
Art. 47. Reglamento Militar especial que determina facultades.
Art. 48. Respeto y auxilio de la autoridad militar con la autoridad civil.
Art. 49. Garantías que gozarán los habitantes de las plazas fuertes, campos retrincherados, o lugares en que sea necesario publicar la Ley Marcial.

TÍTULO XI DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- Art. 50.* Función de la Dirección de Obras Públicas.

TÍTULO XII DEL TERRITORIO DE LA NACIÓN

- Art. 51.* Límites del Territorio Mexicano.
Art. 52. División del Territorio para su administración.

TÍTULO XIII DE LOS MEXICANOS

- Art. 53.* Calidad de mexicano.
Art. 54. Obligaciones de los mexicanos.

TÍTULO XIV
DE LOS CIUDADANOS

Art. 55. Requisitos para ser ciudadano.

Art. 56. Obligaciones de los ciudadanos.

Art. 57. Suspensión, pérdida y rehabilitación de los derechos de mexicano.

TÍTULO XV
DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Art. 58. Garantías de los habitantes del Imperio.

Art. 59. Disfrute de derechos y garantías, y las obligaciones y deberes.

Art. 60. Derechos respecto de la detención.

Art. 61. Aprehesión de la autoridad administrativa.

Art. 62. No retroactividad de la ley.

Art. 63. Seguridad jurídica.

Art. 64. No existencia de la esclavitud.

Art. 65. Derechos del acusado en el juicio criminal.

Art. 66. Organización de las cárceles.

Art. 67. Separación de los encarcelados.

Art. 68. Inviolabilidad de la propiedad.

Art. 69. Derecho a que a ninguno pueda exigírsele servicios gratuitos.

Art. 70. Prohibición de obligar servicios personales.

Art. 71. Prohibición de la confiscación de bienes.

Art. 72. Generalidad de los impuestos.

Art. 73. Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley.

Art. 74. Cargas e impuestos Municipales.

Art. 75. Extinción y modificación de impuestos.

Art. 76. Manifestación de opiniones.

Art. 77. Suspensión de garantías.

TÍTULO XVI
DEL PABELLÓN NACIONAL

Art. 78. Características del Pabellón Nacional.

TÍTULO XVII
DE LA POSESIÓN DE LOS EMPLEOS Y FUNCIONES PÚBLICAS

Art. 79. Toma de posesión de los empleados y funcionarios públicos.

TÍTULO XVIII

DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL ESTADO

Art. 80. Expedición de leyes y Decretos.

Art. 81. Deber de las autoridades y funcionarios públicos de hacer observaciones al Estatuto.

8.2. ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO

Maximiliano, Emperador de México

México, 10 de abril de 1865

81 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO I.
DEL EMPERADOR Y DE LA FORMA DE GOBIERNO

TÍTULO II.
DEL MINISTERIO

TÍTULO III.
DEL CONSEJO DE ESTADO

TÍTULO IV.
DE LOS TRIBUNALES

TÍTULO V.
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

TÍTULO VI.
DE LOS COMISARIOS IMPERIALES Y VISITADORES

TÍTULO VII.
DEL CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR

TÍTULO VIII.
DE LAS PREFECTURAS MARÍTIMAS Y CAPITANÍAS DE PUERTO

TÍTULO IX.
DE LOS PREFECTOS POLÍTICOS, SUBPREFECTOS Y
MUNICIPALIDADES

TÍTULO X.
DE LA DIVISIÓN MILITAR DEL IMPERIO

TÍTULO XI.
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TÍTULO XII.
DEL TERRITORIO DE LA NACIÓN

TÍTULO XIII.
DE LOS MEXICANOS

TÍTULO XIV.
DE LOS CIUDADANOS

TÍTULO XV.
DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

TÍTULO XVI.
DEL PABELLÓN NACIONAL

TÍTULO XVII.
DE LA POSESIÓN DE LOS EMPLEOS Y FUNCIONES PÚBLICAS

TÍTULO XVIII.
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL ESTATUTO

A fin de preparar la organización definitiva del Imperio, habiendo oído a nuestros Consejos de Ministros y de Estado, decretamos el siguiente Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.

TÍTULO I
DEL EMPERADOR Y DE LA FORMA
DE GOBIERNO

Artículo 1. La forma de Gobierno, proclamada por la Nación y aceptada por el Emperador, es la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico.

Artículo 2. En caso de muerte o cualquier otro evento que ponga al Emperador en imposibilidad de continuar en el ejercicio del mando, la Emperatriz, su augusta esposa, se encargará, *ipso facto*, de la Regencia del Imperio.

Artículo 3. El Emperador o el Regente, al encargarse del mando, jurará en presencia de los grandes Cuerpos del Estado, bajo la fórmula siguiente: *Juro a Dios, por los Santos Evangelios, procurar por todos los medios que estén a mi alcance, el bienestar y prosperidad de la Nación, defender su independencia y conservar la integridad de su territorio.*

Artículo 4. El Emperador representa la Soberanía Nacional y, mientras otra cosa no se decrete en la organización definitiva del Imperio, la ejerce en todos sus ramos, por si o por medio de las autoridades y funcionarios públicos.

Artículo 5. El Emperador gobierna por medio de un Ministerio compuesto de nueve departamentos ministeriales, encomendados:

Al Ministro de la Casa Imperial.

“ “ de Estado.

“ “ de Negocios Extranjeros y Marina.

“ “ de Gobernación.

“ “ de Justicia.

“ “ de Instrucción Pública y Cultos.

“ “ de Guerra.

“ “ de Fomento.

“ “ de Hacienda.

Una ley establecerá la organización de los ministerios y designará los ramos que hayan de encomendárseles.

Artículo 6. El Emperador, además, oye al Consejo de Estado en lo relativo a la formación de las leyes y reglamentos, y sobre las consultas que estime conveniente dirigirle.

Artículo 7. Un Tribunal especial de cuentas revisará y glosará todas las de las oficinas de la Nación y cualesquiera otras de interés público que le pase el Emperador.

Artículo 8. Todo mexicano tiene derecho a obtener audiencia del Emperador, y para presentarle sus peticiones y quejas. Al efecto ocurrirá a su Gabinete en la forma dispuesta por el reglamento respectivo.

Artículo 9. El Emperador nombrará, cuando lo juzgue conveniente y por el tiempo que lo estime necesario, Comisarios Imperiales que se colocan a la cabeza de cada una de las ocho grandes divisiones del Imperio para cuidar del desarrollo y buena administración de los departamentos que forman cada una de estas grandes divisiones. Nombrará, además, visitadores para que recorran en su nombre departamentos o lugar que merezca ser visitado, o para que le informen acerca de la oficina, establecimiento o negocio determinado que exija eficaz remedio.

Las prerrogativas y atribuciones de estos funcionarios se establecen en el decreto de su creación.

TÍTULO II DEL MINISTERIO

Artículo 10. Los ministros toman posesión de sus cargos en la forma prevenida en el título XVII.

El Emperador de la posesión al Ministerio de la Casa Imperial y al de Estado, y éste a sus otros colegas en presencia del Emperador.

Artículo 11. Un reglamento fija los días de sesiones ordinarias del Consejo de ministros y el orden que en ellas deba guardarse. Y otro reglamento establece el buen orden y servicio en los Ministerios, y prohíbe a éstos ingerirse en el despacho de los negocios que no tocan a sus departamentos.

Artículo 12. Los ministros son responsables, ante la ley y en la forma que ella determina, por sus delitos comunes y oficiales.

Artículo 13. En el caso de ausencia, enfermedad o vacante de un Ministro, el Emperador designará al que lo deba sustituir, o autorizará por un decreto al Subsecretario del ramo para el despacho temporal de los negocios, en cuyo caso éste concurrirá al Consejo de ministros con las mismas prerrogativas que ellos.

TÍTULO III DEL CONSEJO DE ESTADO

Artículo 14. La formación, atribuciones y nombramientos del Consejo de Estado son los que determina la ley de su creación.

TÍTULO IV DE LOS TRIBUNALES

Artículo 15. La justicia será administrada por los tribunales que determina la ley orgánica.

Artículo 16. Los magistrados y jueces, que se nombraren con el carácter de inamovibles, no podrán ser destituidos sino en los términos que disponga la ley orgánica.

Artículo 17. Los magistrados y jueces, en el ejercicio de sus funciones judiciales, gozarán de absoluta independencia.

Artículo 18. Los tribunales no podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamentos.

Las audiencias de todos los tribunales serán públicas, a no ser que la publicidad sea peligrosa para el orden y las buenas costumbres, en cuyo caso el tribunal lo declarará así por medio de un previo acuerdo.

Artículo 19. En ningún juicio civil o criminal habrá más de dos instancias, sin perjuicio de los recursos de revisión y de nulidad que autoricen las leyes.

TÍTULO V DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 20. El examen y liquidación de las cuentas de que habla el art. 7° se harán por un tribunal de cuentas con autoridad judicial.

Artículo 21. La jurisdicción del tribunal de cuentas se extiende a todo el Imperio. Este tribunal, con inhibición de cualquier otro, de los negocios de su competencia, y no se admite apelación de sus faltas a otro tribunal.

Resuelve sobre lo relativo a las cuentas pero no procede contra los culpables en ellas, sino que los consigna al juez competente; más sí puede apremiar, a los funcionarios a quienes corresponda, a la presentación de las cuentas a que están obligados.

Vigila sobre la exacta observancia del presupuesto; comunica con el Emperador por medio del Ministerio de Estado, y sus miembros y Presidente son nombrados por el Emperador.

TÍTULO IV
DE LOS COMISARIOS IMPERIALES
Y VISITADORES

Artículo 22. Los comisarios imperiales son instituidos temporalmente para precaver y enmendar los abusos que puedan cometer los funcionarios públicos en los departamentos, e investigar la marcha que siga el orden administrativo, ejerciendo las facultades especiales que, en cada caso, les cometa el Emperador en sus instrucciones.

Artículo 23. Los visitadores recorrerán el departamento; visitan la ciudad, tribunal u oficina que se les señala, para informar sobre los puntos que les demarcan sus instrucciones, o para enmendar el determinado yerro o abuso cometido, cuyo conocimiento y examen se les encomienda.

Los visitadores, ya generales que visitan los departamentos, ya especiales a quienes se fija la localidad o asunto determinado, ejercen las facultades solas que les comunica el Emperador en sus títulos.

TÍTULO VII
DEL CUERPO DIPLOMÁTICO
Y CONSULAR

Artículo 24. El Cuerpo Diplomático representa, conforme a la ley, en el extranjero al Gobierno Imperial, para defender vigorosamente y velar por los intereses y derechos de la Nación, procurar su mayor prosperidad y proteger especial y eficazmente a los ciudadanos mexicanos.

Artículo 25. El Cuerpo Consular protege el comercio, en país extranjero, y coadyuva a su prosperidad conforme a la ley.

Artículo 26. Una ley especial arreglará el Cuerpo Diplomático y Consular.

TÍTULO VIII
DE LAS PREFECTURAS MARÍTIMAS
Y CAPITANÍAS DE PUERTO

Artículo 27. Habrá prefecturas marítimas y capitanías de puertos, cuyo número, ubicación y organización determinará una ley.

Las prefecturas vigilan la ejecución de las leyes, decretos y reglamentos concernientes a la marina, así como el perfecto ejercicio de la justicia marítima.

Las capitanías de puerto están encargadas de todo lo concerniente a la policía de la rada y del puerto, y de la ejecución de los reglamentos marítimos sobre la navegación y el comercio.

TÍTULO IX
DE LOS PREFECTOS POLÍTICOS,
SUBPREFECTOS Y MUNICIPALIDADES

Artículo 28. Los prefectos son los delegados del Emperador para administrar los departamentos cuyo gobierno se les encomienda, y ejercen las facultades del que las leyes se demarcan.

Artículo 29. Cada prefecto tendrá un Consejo de Gobierno departamental, compuesto del funcionario judicial más caracterizado, del administrador de rentas, de un propietario agricultor, de un comerciante y de un minero o industrial, según más convenga a los intereses del departamento.

Artículo 30. Las atribuciones del consejo departamental, son:

- I. Dar dictamen al prefecto en todos los negocios en que lo pida.
- II. Promover los medios de cortar abusos o introducir mejoras en la condición de los pueblos y en la administración departamental.
- III. Conocer de lo contencioso administrativo en los términos que la ley disponga.

Artículo 31. El consejo formará un reglamento que fije los días de sus sesiones y lo demás concerniente a su régimen interior, el cual podrá, desde luego, poner en práctica, pero remitiendo al Ministerio de Gobernación para que sea revisado.

Artículo 32. La residencia ordinaria y el asiento del gobierno del prefecto será en la capital de su departamento, sin que esto obste a las visitas frecuentes que deberá hacer a los lugares del mismo departamento.

Artículo 33. Los prefectos serán nombrados por el Emperador, y sus faltas temporales serán cubiertas por el suplente que en cada departamento se designe para reemplazarlo.

Artículo 34. En cada distrito los subprefectos son los subdelegados del poder imperial, y los representantes y agentes de sus respectivos prefectos.

Artículo 35. El nombramiento de subprefecto se hará por el prefecto departamental, salvo la aprobación del Emperador.

Artículo 36. Cada población tendrá una administración municipal propia y proporcionada al número de sus habitantes.

Artículo 37. La administración municipal estará a cargo de los alcaldes, Ayuntamientos y comisarios municipales.

Artículo 38. Los alcaldes ejercerán solamente las facultades municipales.

El de la capital será nombrado y removido por el Emperador; los demás por los prefectos en cada departamento, salva la rectificación soberana.

Los alcaldes podrán renunciar su cargo después de un año de servicio.

Artículo 39. Son atribuciones de los alcaldes:

- I. Presidir los Ayuntamientos.
- II. Publicar, comunicar y ejecutar las leyes, reglamentos o disposiciones superiores de cualquiera clase.

III. Ejercer en la municipalidad las atribuciones que les encomienda la ley.

IV. Representar judicial y extrajudicialmente la municipalidad, contratando por ella y defendiendo sus intereses en los términos que prevenga la ley.

Artículo 40. El Emperador decretará las contribuciones municipales con vista de los proyectos que formen los Ayuntamientos respectivos. Estos proyectos se llevarán al gobierno por conducto y con informe del prefecto del departamento a que la municipalidad corresponda.

Artículo 41. En las poblaciones que excedan de veinticinco mil habitantes, los alcaldes serán auxiliados en sus labores y sustituidos en sus faltas temporales por uno o más tenientes. El número de éstos se determinará conforme a la ley.

Artículo 42. En las poblaciones en que el gobierno lo estime conveniente, se nombrará un letrado que sirva de asesor a los alcaldes y ejerza las funciones de síndico procurador en los litigios que deba sostener la municipalidad. Este asesor percibirá sueldo de la municipalidad.

Artículo 43. Los Ayuntamientos formarán el Consejo de municipio, serán elegidos popularmente en elección directa, y se renovarán por mitad cada año.

Artículo 44. Una ley designará las atribuciones de los funcionarios municipales, y reglamentará su elección.

TÍTULO X

DE LA DIVISIÓN MILITAR DEL IMPERO

Artículo 45. El territorio del Imperio se distribuirá conforme a la ley en ocho divisiones militares, encomendadas a generales o jefes nombrados por el Emperador.

Artículo 46. Corresponde a los jefes que mandan las divisiones territoriales la sobrevigilancia enérgica y constante de los cuerpos puestos bajo sus órdenes, la observancia de los reglamentos de policía, de disciplina, de administración y de instrucción militar cuidando con eficaz empeño de todo lo que interesa al bienestar del soldado.

Artículo 47. Un reglamento militar especial determinará las facultades en el mando y relaciones entre los jefes de divisiones con las fuerzas en movimiento.

Artículo 48. La autoridad militar respetará y auxiliará siempre a la autoridad civil: nada podrá exigir a los ciudadanos, sino por medio de ella, y no asumirá las funciones de la misma autoridad civil, sino en el caso extraordinario de declaración de estado de sitio, según las prescripciones de la ley.

Artículo 49. En las plazas fuertes, campos retrincherados o lugares en que sea necesario publicar la ley marcial, o que se declare el estado de sitio, una disposición especial designará las garantías que han de gozar sus habitantes.

TÍTULO XI
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Artículo 50. La Dirección de Obras Públicas ejercerá su vigilancia sobre todas las que se ejecuten, a fin de precaver los peligros de su construcción. Una ley determinará su organización y facultades.

TÍTULO XII
DEL TERRITORIO DE LA NACIÓN

Artículo 51. Es territorio mexicano la parte del continente septentrional americano, que limitan:

Hacia el Norte, las líneas divisorias trazadas por los convenios de Guadalupe y la Mesilla, celebrados con los Estados Unidos;

Hacia el Oriente, el Golfo de México, el mar de las Antillas y el establecimiento inglés de Walize, encerrado en los límites que fijaron los tratados de Versalles;

Hacia el Sur, la República de Guatemala, en las líneas que fijará un tratado definitivo;

Hacia el Poniente, el mar Pacífico, quedando dentro de su demarcación el mar de Cortés o Golfo de California;

Todas las islas que le pertenecen en los tres mares;

El mar territorial conforme a los principios reconocidos por el derecho de agentes y salvas las disposiciones convenidas en los tratados.

Artículo 52. El territorio nacional se divide por ahora, para su administración, en ocho grandes divisiones; en cincuenta departamentos; cada departamento en distritos, y cada distrito en municipalidades.

Una ley fija el número de distritos y municipalidades y su respectiva circunscripción.

TÍTULO XIII
DE LOS MEXICANOS

Artículo 53. Son mexicanos:

Los hijos legítimos de padre mexicano, dentro o fuera del territorio del Imperio;

Los hijos ilegítimos nacidos de madre mexicana, dentro o fuera del territorio del Imperio;

Los extranjeros naturalizados conforme a las leyes;

Los hijos nacidos en México de padres extranjeros que, al llegar a la edad de veintiún años, no declaren que quieren adoptar la nacionalidad extranjera;

Los nacidos fuera del territorio del Imperio, pero que, establecidos en él antes de 1821, juraron el acta de independencia;

Los extranjeros que adquieran en el Imperio propiedad territorial de cualquier género, por el solo hecho de adquirirla.

Artículo 54. Los mexicanos están obligados a defender los derechos e intereses de su patria.

TÍTULO XIV DE LOS CIUDADANOS

Artículo 55. Son ciudadanos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además las siguientes:

Haber cumplido veintiún años de edad;

Tener un modo honesto de vivir;

No haber sido condenado judicialmente a alguna pena infamante.

Artículo 56. Los ciudadanos están obligados a inscribirse en el padrón de su municipalidad y a desempeñar los cargos de elección popular, cuando no tengan impedimento legal.

Artículo 57. Se suspenden o pierden los derechos de mexicano o ciudadano, y se obtiene la rehabilitación en los casos y forma que dispone la ley.

TÍTULO XV DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES

Artículo 58. El Gobierno del Emperador garantiza a todos los habitantes del Imperio, conforme a las prevenciones de las leyes respectivas:

La igualdad ante la ley;

La seguridad personal;

La propiedad;

El ejercicio de su culto;

La libertad de publicar sus opiniones.

Artículo 59. Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías, y están sujetos a las obligaciones, pago de impuestos y demás deberes fijados por las leyes vigentes o que en lo sucesivo se expidieren.

Artículo 60. Ninguno será detenido sino por mandato de autoridad competente, dado por escrito y firmado, y sólo cuando obren contra él indicios suficientes para presumirle autor de un delito. Se exceptúa el caso de delito *infraganti*, en que cualquiera puede aprehender al reo para conducirlo a la presencia judicial o de la autoridad competente.

Artículo 61. Si la autoridad administrativa hiciese la aprehensión, deberá poner dentro de tercero día al presunto reo a disposición de la que deba juzgarle, acompañando los datos correspondientes; y si el juez encontrare mérito para declararlo bien

preso, lo hará a más tardar dentro de cinco días; siendo caso de responsabilidad, la detención que pase de estos términos.

Pero si la aprehensión se hiciere por delitos contra el estado, o que perturben el orden público, la autoridad administrativa podrá prolongar la detención hasta dar cuenta al Comisario Imperial o al Ministro de Gobernación, para que determine lo que convenga.

Artículo 62. Ninguno puede ser sentenciado, sino en virtud de leyes anteriores al hecho por que se le juzgue.

Artículo 63. No será cateada la casa ni registrados los papeles de ningún individuo, sino en virtud de mandato por escrito y en los casos y con los requisitos literalmente prevenidos por las leyes.

Artículo 64. No existiendo la esclavitud, ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cualquier individuo que lo pise es libre por sólo este hecho.

Artículo 65. En todo juicio criminal, el acusado tendrá derecho a que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador si lo hubiere. También lo tendrá para exigir que se le faciliten, concluido el sumario, los datos del proceso que necesite para preparar sus descargos.

Artículo 66. Las cárceles se organizarán de modo que sólo sirvan para asegurar a los reos, sin exacerbar innecesariamente los padecimientos de la prisión.

Artículo 67. En las cárceles habrá siempre separación entre los formalmente presos y los simplemente detenidos

Artículo 68. La propiedad es inviolable y no puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública comprobada, mediante previa y competente indemnización, y en la forma que disponen las leyes.

Artículo 69. A ninguno puede exigirse servicios gratuitos ni forzados, sino en los casos que la ley disponga.

Artículo 70. Nadie puede obligar sus servicios personales, sino temporalmente, y para una empresa determinada. Los menores no lo pueden hacer sin la intervención de sus padres o curadores, o a falta de ellos, de la autoridad política.

Artículo 71. Queda prohibida para siempre la confiscación de bienes.

Artículo 72. Todos los impuestos para la Hacienda del Imperio serán generales y se decretarán anualmente.

Artículo 73. Ningún impuesto puede cobrarse sino en virtud de una ley.

Artículo 74. Ninguna carga ni impuesto municipal puede establecerse sino a propuesta del Consejo municipal respectivo.

Artículo 75. Ninguna exención ni modificación de impuestos puede hacerse sino por una ley.

Artículo 76. A nadie puede molestarle por sus opiniones ni impedírsele que las manifieste por la prensa, sujetándose a las leyes que reglamentan el ejercicio de este derecho.

Artículo 77. Solamente por decreto del Emperador o de los comisarios imperiales, y cuando lo exija la conservación de la paz y orden público, podrá suspenderse temporalmente el goce de alguna de estas garantías.

TÍTULO XVI DEL PABELLÓN NACIONAL

Artículo 78. Los colores del pabellón nacional son el verde, blanco y rojo. La colocación de éstos, las dimensiones y adornos del pabellón imperial, del de guerra, del nacional, del mercante y del gallardete de marina, así como el escudo de armas, se detallarán en una ley especial.

TÍTULO XVII DE LA POSESIÓN DE LOS EMPLEOS Y FUNCIONES PÚBLICAS

Artículo 79. Todos los empleados y funcionarios públicos tomarán posesión de sus cargos compareciendo ante la autoridad que deba dársele conforme a la ley. La autoridad los interpelará en estos términos: *¿Aceptáis el empleo (aquí su denominación) que se os ha confiado con los deberes y atribuciones que le corresponden?* La respuesta, para quedar en posesión, deberá ser *Acepto*. Enseguida la autoridad pronunciará esta fórmula: *Queda N. en posesión del empleo de... y responsable desde ahora a su fiel y exacto desempeño.*

TÍTULO XVIII DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL ESTATUTO

Artículo 80. Todas las leyes y decretos que en lo sucesivo se expidieren se arreglarán a las bases fijadas en el presente Estatuto, y las autoridades quedan reformadas conforme a él.

Artículo 81. Sin perjuicio de regir desde luego cuanto el Estatuto y sus decretos y leyes concordantes determinan, las autoridades y funcionarios públicos deberán, dentro de un año, elevar al Emperador las observaciones que su buen juicio, su anhelo por el mejor servicio y la experiencia les sugieran para que se pueda alterar el Estatuto en todo aquello que convenga al mayor bien y prosperidad del país.

Cada uno de nuestros ministros queda encargado de la ejecución de esta ley en la parte que le concierne, debiendo expedir a la mayor brevedad los reglamentos necesarios para su exacta observancia.

Dado en el Palacio de Chapultepec, a diez de abril de mil ochocientos sesenta y cinco. *MAXIMILIANO.* El Ministro de Negocios Extranjeros y encargado del de Estado, *José F. Ramírez.* El Ministro de Guerra, *Juan de D. Peza.* El Ministro de Fomento,

Luis Robles Pezuela. El Ministro de Justicia, *Pedro Escudero y Echánove.* El Ministro de Gobernación, *José M. Cortés y Esparza.* El Subsecretario de Hacienda, *Félix Campillo.*

8.3. EXTRACT OF PROVISIONAL STATUTE OF THE MEXICAN EMPIRE

TITLE I

THE EMPEROR AND THE FORM OF GOVERNMENT

- Article 1.* Form of government.
- Article 2.* Replacing the Emperor.
- Article 3.* Oath of the Emperor or Regent.
- Article 4.* Exercise of national sovereignty.
- Article 5.* Ministries.
- Article 6.* Emperor consultations on the formation of laws or regulations.
- Article 7.* Review and gloss on the accounts of the nation.
- Article 8.* Right of audience for Mexican Emperor.
- Article 9.* Imperial Commissioners Appointments and Visitors.

TITLE II

MINISTRY

- Article 10.* Inauguration of the Ministers.
- Article 11.* Regular meetings of the Council of Ministers and order them to be saved.
- Article 12.* Responsibility for common crimes and officers.
- Article 13.* Replacement of a Minister.

TITLE III

COUNCIL OF STATE

- Article 14.* Training and appointment powers of the State Council.

TITLE IV
OF THE COURTS

Article 15. Administration of justice.

Article 16. Unchanging quality of Magistrates and Judges.

Article 17. Independence of the exercise of judicial functions.

Article 18. Prohibition of the Courts.

Article 19. No more than three instances.

TITLE V
COURT OF AUDITORS

Article 20. Examination and settlement of accounts.

Article 21. Jurisdiction of the Court of Auditors.

TITLE VI
COMMISSIONERS OF IMPERIAL AND VISITORS

Article 22. Imperial powers of the Commissioners.

Article 23. Functions of the Visitors.

TITLE VII
THE DIPLOMATIC CORPS AND CONSULAR

Article 24. Functions of the Diplomatic Corps.

Article 25. Functions of the Consular Corps.

Article 26. Special law to fix the diplomatic and consular corps.

TITLE VIII
MARITIME AND PREFECTURAL HARBORMASTER

Article 27. Functions of the Prefectures Maritime and Port Captains.

TITLE IX
POLITICAL PREFECTS, DEPUTY PREFECTS AND MUNICIPALITIES

Article 28. Commendation of the Prefects.

Article 29. Government Departmental each Prefect.

Article 30. Duties of the Departmental Council.

Article 31. Council Regulation.

Article 32. Regular Presidency and the seat of government of the Prefect.

Article 33. Appointment and faults of the Prefects.

Article 34. Subdelegates subprefects as Imperial Power.

- Article 35.* Appointment of Provincial Governor.
Article 36. Municipal Administration of each population.
Article 37. The Municipal Administration will be responsible for Mayors, City Councils and Municipal Commissioners.
Article 38. Appointment of Mayors.
Article 39. Powers of Mayors.
Article 40. Municipal contributions.
Article 41. Help and replacement of Mayors, by Lieutenants.
Article 42. Appointment of Counsel.
Article 43. Council of the Municipality.
Article 44. Powers of Municipal Officials.

TITLE X
MILITARY DIVISION OF THE EMPIRE

- Article 45.* Military Divisions of the Territory.
Article 46. Duties of Heads who send Territorial Divisions.
Article 47. Military Regulation determines special powers.
Article 48. Respect and help of the military to civil authority.
Article 49. Guarantees shall the inhabitants of the fortresses, retrincherados fields, or places where it is necessary to publish the Martial Law.

TITLE XI
MANAGEMENT OF PUBLIC WORKS

- Article 50.* Role of the Public Works Department.

TITLE XII
LAND OF THE NATION

- Article 51.* Mexican territorial limits.
Article 52. Planning Division for administration.

TITLE XIII
MEXICANS

- Article 53.* Quality of Mexico.
Article 54. Obligations of the Mexicans.

TITLE XIV
CITIZENS

Article 55. Requirements for citizenship.

Article 56. Obligations of citizens.

Article 57. Suspension, loss and restoration of the rights of Mexico.

TITLE XV
WARRANTIES OF INDIVIDUAL

Article 58. Guarantees of the inhabitants of the Empire.

Article 59. Enjoyment of rights and guarantees and the obligations and duties.

Article 60. Rights regarding the detention.

Article 61. Seizure of the administrative authority.

Article 62. Non-retroactivity of the law.

Article 63. Legal certainty.

Article 64. No existence of slavery.

Article 65. Rights of the accused in the criminal trial.

Article 66. Organization of the prisons.

Article 67. Separation of prisoners.

Article 68. Inviolability of property.

Article 69. Entitled to any free services may be required.

Article 70. Prohibition of forcing personal services.

Article 71. Prohibition of confiscation of property.

Article 72. Government of taxes.

Article 73. No tax can be levied except by law.

Article 74. Municipal charges and taxes.

Article 75. Extinction and tax changes.

Article 76. Expression of opinions.

Article 77. Suspension of guarantees.

TITLE XVI
NATIONAL FLAG

Article 78. Characteristics of the national flag.

TITLE XVII
THE POSSESSION OF PUBLIC SERVICE JOBS AND

Article 79. Inauguration of the employees and public officials.

TITLE XVIII

ENFORCEMENT AND REFORM OF STATE

Article 80. Issuance of laws and decrees.

Article 81. Duty of the authorities and public officials to comment on the Statutes.

8.4. PROVISIONAL STATUTE OF THE MEXICAN EMPIRE

Maximilian, Emperor of México
México, April 10th, 1865
81 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE I.
OF THE EMPEROR AND THE GOVERNMENT FORM

TITLE II.
OF THE MINISTRY

TITLE III.
OF THE STATE COUNCIL

TITLE IV.
OF THE COURTS

TITLE V.
OF THE COURT OF AUDIT

TITLE VI.
OF THE IMPERIAL COMMISSIONERS AND THE INSPECTORS

TITLE VII.
OF THE DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS

TITLE VIII.
OF THE NAVAL PREFECTURES AND THE HARBOR MASTER

TITLE IX.
OF THE POLITICAL PREFECTS, SUBPREFECTS
AND MUNICIPALITIES

TITLE X.
OF THE MILITARY DIVISION OF THE EMPIRE

TITLE XI.
OF THE DIRECTION OF PUBLIC WORKS

TITLE XII.
OF THE TERRITORY OF THE NATION

TITLE XIII.
OF THE MEXICANS

TITLE XIV.
OF THE CITIZENS

TITLE XV.
OF THE INDIVIDUAL RIGHTS

TITLE XVI.
OF THE NATIONAL FLAG

TITLE XVII.
OF THE POSSESSION OF THE EMPLOYMENTS
AND PUBLIC FUNCTIONS

TITLE XVIII.
OF THE OBSERVANCE AND REFORM OF THE STATUTE

With the aim of preparing the definitive organization of the Empire, having heard to our Ministries Councils and the State Council, we decree the following Provisional Statute of the Mexican Empire.

TITLE I
OF THE EMPEROR AND THE GOVERNMENT FORM

Article 1. The Government form, proclaimed by the Nation and accepted by the Emperor, is the moderate monarchy, hereditary, with a catholic prince.

Article 2. In case of death or any other event that puts the Emperor in the impossibility of continuing in the exercise of the command, the Empress, his august wife, shall take care, *ipso facto*, of the Regency of the Empire.

Article 3. The Emperor of the Regent, at the moment of taking the command, shall oath in presence of the great Corps of the State, under the following formula: *I swear to God, for the Holly Gospels, to procure by all the means available to me, the welfare and prosperity of the Nation, to defend its independence and to preserve the integrity of its territory.*

Article 4. The Emperor represents the National Sovereignty and, while another thing is not decreed in the definitive organization of the Empire, He exercises it in all of its branches, by himself or by means of the authorities and civil servants.

Article 5. The Emperor governs by means of a Ministry formed of nine ministerial departments, entrusted:

To the Ministry of the Imperial Chamber
To the Ministry of the State
To the Ministry of the Foreign Affairs and Navy
To the Ministry of Government
To the Ministry of Justice
To the Ministry of Public Instruction and Cults
To the Ministry of War
To the Ministry of Promotion

To the Ministry of Treasury

A Law shall establish the organization of the ministries and shall designate the branches which are to be entrusted to them.

Article 6. The Emperor, besides, hears the State Council regarding the formation of the laws and regulations, and about the consults that He considers convenient to direct them.

Article 7. A special Court of Audit shall check and gloss all the audits of the offices of the Nation and any other of public interest that the Emperor passes them.

Article 8. Every Mexican has right to obtain audience of the Emperor, and present them their petitions and complaints. To this purpose shall attend his Cabinet in the form stated in the respective regulation.

Article 9. The Emperor shall appoint, whenever He judges convenient and by the time He considers necessary, Imperial Commissioners that place to the head of each of the eight great divisions of the Empire to take care of the development and well administration of the departments that form each of these great divisions.

He shall appoint, as well, inspectors to travel in his name the departments or place that deserves to be inspected, or to inform him about the office, establishment or determined business that demands effective remedy.

The prerogatives and attributions of these servants shall be established in the decree of his creation.

TITLE II OF THE MINISTRY

Article 10. The ministries take possession of their entrustments in the form prevented in the title XVII.

The Emperor gives possession to the ministry of the Imperial House and to the ministry of State; and the latter to his colleagues, in presence of the Emperor.

Article 11. A regulation shall state the days of ordinary sessions of the Council of Ministries and the order which shall be observed in them. And another regulation establishes the good order and service of the Ministries, and forbids to these to meddle in the dispatch of the business that do not concern to their departments.

Article 12. The ministries are responsible, in the eyes of Law and in the form that she determines, for their common and official crimes.

Article 13. In case of absence or sickness or vacancy of a ministry, the Emperor shall designate the one who shall substitute him or He shall authorize by a decree to the sub secretary of the branch for the temporary dispatch of the business, in which case this shall present to the Council of Ministries with the same prerogatives as them.

TITLE III
OF THE STATE COUNCIL

Article 14. The formation, attributions and appointments of the State Council are those that the Law of its creation determines.

TITLE IV
OF THE COURTS

Article 15. Justice shall be administered by the courts which the Organic Law determines.

Article 16. The magistrates and judges, who were appointed with immovable nature, might not be dismissed but in the terms that the Organic Law states.

Article 17. The magistrates and judges, in the exercise of their judiciary functions, shall enjoy of absolute independence.

Article 18. The courts might not suspend the execution of the laws or issue regulations.

The audiences of all the courts shall be public, as long as the publicity is not dangerous for the order and the good manners, in which case the court shall declare so through a previous order.

Article 19. In no civil or criminal trial shall be more than two instances, without prejudice of the revision and nullity that the laws authorize.

TITLE V
OF THE COUR OF AUDIT

Article 20. The examination and settlement of the accounts of which the article 7 talks about shall be done by a court of audit with judiciary authority.

Article 21. The jurisdiction of the court of audit is extended to the entire Empire. This tribunal, with inhibition of any other, of the business of its competence, and appeal is not admitted of its faults to another court.

It settles everything regarding the accounts but it does not proceed against the guilty in them, but it sends them before the competent judge; however he may force, to the servants to which corresponds, to the presentation of the accounts to which they are obliged.

Watch over the exact observance of the budget; it communicates with the Emperor through the Ministry of State, and its members and president and appointed by the Emperor.

TITLE VI
OF THE IMPERIAL COMMISSIONERS

Article 22. The imperial commissioners are temporary instituted to prevent and amend the abuses which might commit the civil servants in the departments, and investigate the rhythm that follows the administrative order, exercising a special faculty that, in each case, the Emperor assigns them in his instructions.

Article 23. The inspectors shall go through the department; they visit the city, court or office that is appointed, to inform on the issues that their instructions demarcate, or to amend the determined mistake or abuse committed, which knowledge and examination is entrusted.

The inspectors, whether they are general who visit the departments, or special to whom a locality or determine matter is assigned, exercise the only faculties that the Emperor communicates in their titles.

TITLE VII
OF THE DIPLOMATIC AND CONSULAR CORPS

Article 24. The Diplomatic Corps represents, according to the Law, abroad the Imperial Government, to vigorously defend and to watch over the interests and rights of the Nation, to procure its most prosperity and to specially and effectively protect the Mexican citizens.

Article 25. The Consular Corps protects the commerce, in foreign country, and aid to its prosperity according to Law.

Article 26. A special Law shall arrange the Diplomatic and Consular Corps.

TITLE VIII
OF THE NAVAL PREFECTURES AND THE HARBOR MASTERS

Article 27. There shall be marine prefectures and harbor masters, which number, location and organization shall be determined by a Law.

The prefectures guard the execution of the laws, decrees and regulations regarding the marine, as well as the perfect exercise of the maritime justice.

The harbor masters are in charge of everything concerning to the police of the roads and the port, and the execution of the maritime regulations about the navigation and the commerce.

TITLE IX
OF THE POLITICAL PREFECTS, SUBPREFECTS
AND MUNICIPALITIES

Article 28. The prefects are delegates of the Emperor to administrate the departments which government is entrusted, and they exercise the faculties which the laws demarcate.

Article 29. Each prefect shall have a council of departmental government, formed of the most characterized judiciary servant, of the administrator of the rents, a proprietor farmer, a merchant and a mining or an industrial, depending on what is best for the interests of the department.

Article 30. The attributions of the departmental council are:

- I. To give report to the prefect in all the business in which he asks for.
- II. To promote the means to cut abuses and introduce improvements in the condition of the towns and in the departmental administration.
- III. To know about the litigious administrative in the terms that the Law states.

Article 31. The council shall form a regulation that states the days of its sessions and the rest concerning its internal regimen, which might, since then, put into practice, but sending it to the Ministry of Government for revision.

Article 32. The ordinary residence and the base of the government of the prefect shall be in the capital of his department, without this objecting the frequent visits that he shall do to the places of the department.

Article 33. The prefects shall be appointed by the Emperor, and their temporary absences shall be covered by the substitute that in each department is designated to replace him.

Article 34. In each district the sub prefects are the sub delegates of the imperial power, and the representatives and agents of their respective prefects.

Article 35. The appointment of the sub prefect shall be done by the departmental prefect, upon approval of the Emperor.

Article 36. Each population shall have a municipal administration of its own, and proportional to the number of its inhabitants.

Article 37. The municipal administration shall be in charge of the mayors, town councils and municipal commissioners.

Article 38. The mayors shall exercise only the municipal faculties.

The mayor of the capital shall be appointed and removed by the Emperor; the rest by the prefects in each department, upon sovereign rectification.

Article 39. The following are attributions of the mayors:

- I. To preside the Town Councils.
- II. Publish, communicate and execute the laws, regulations or superior dispositions of any class.
- III. To exercise in the municipality the attributions that the Law entrusts.

IV. To represent in judicial and extrajudicial form the municipality, hired by her and defending her interests in the terms that the Law prevents.

Article 40. The Emperor shall decree the municipal contributions in sight of the projects that the respective Town Councils form. These projects shall be taken to the government by conduct and with inform of the prefect of the department to which the municipality corresponds.

Article 41. In the towns that exceed of twenty five thousand inhabitants, the mayors shall be aided in their labors and substituted during their temporary absences by one or more deputies. The number of these shall be appointed according to the Law.

Article 42. In the towns in which the government considers it convenient, a learned shall be appointed to serve as advisor to the mayors and exercises the functions of syndic solicitor in the lawsuits that the municipality has to sustain. This advisor shall receive a salary from the municipality.

Article 43. The Town Councils shall form the Council of municipality, shall be popularly elected in direct election, and shall be renewed by half each year.

Article 44. A Law shall designate the attributions of the municipal servants and shall regulate their election.

TITLE X OF THE MILITARY DIVISION OF THE EMPIRE

Article 45. The territory of the Empire shall be distributed according to the Law in eight military divisions, entrusted to Generals or chiefs appointed by the Emperor.

Article 46. It is responsibility of the Chiefs that command in the territorial divisions the energetic and constant over vigilance of the corps put under his command, the observance of the police regulations, the discipline, the administration and the military instruction looking after with efficient determination of all that interests to the welfare of the soldier.

Article 47. A special military regulation shall determine the faculties in the command and relationships between the chiefs of division with the forces in movement.

Article 48. The military authority shall respect and aid always to the civil authority: nothing might demand to the citizens, but through the latter, and it shall not assume the functions of the civil authority itself, but in the extraordinary case of the declaration of state of siege, according to the prescriptions of the Law.

Article 49. In the forts, the trenched fields or places where it shall be necessary to publish the marshal Law, or that state of siege is declared, a special disposition shall designate the rights of which its inhabitants shall enjoy.

TITLE XI
OF THE DIRECTION OF PUBLIC WORKS

Article 50. The Direction of Public Works shall exercise its vigilance on all of which are executed, in order to prevent the dangers of its construction. A Law shall determine its organization and faculties.

TITLE XII
OF THE TERRITORY OF THE NATION

Article 51. It is Mexican territory the part of the northern American part that limit:

To the North, the dividing lines traced by the agreements of Guadalupe and the Mesilla, celebrated with the United States; to the east with the Gulf of Mexico, the sea of the Antilles and the English establishment of Walize, enclosed in the limits that were stated in the treaties of Versailles; to the South, the republic of Guatemala, in the lines that a definitive treaty shall state; to the West, the pacific ocean, being within the demarcation the sea of Cortes or Gulf of California; all the islands that belong in the three oceans; the territorial sea according to the principles recognized by the Law of agents and except the dispositions agreed in the treaties.

Article 52. The national territory is dived meanwhile, for its administration, in eight great divisions; in fifty departments; each department in districts, and each district in municipalities.

A Law shall state the number of districts and municipalities and its respective circumscription.

TITLE XIII
OF THE MEXICANS

Article 53. Are Mexicans:

The legitimate children of Mexican father, within or out of the territory of the Empire; the illegitimate children born from Mexican mother, within or out of the territory of the Empire; the aliens naturalized according to the laws; the children born in Mexico of alien parents who, at the moment of reaching the age of twenty one years, do not declare that they desire to adopt the alien nationality; those born out of the territory of the Empire, but that, established in it before 1821, oath the independence Act; the aliens who acquire in the Empire a territorial property of any gender, by the sole fact of acquiring it.

Article 54. The Mexicans are obliged to defend the rights and interests of their motherland.

TITLE XIV
OF THE CITIZENS

Article 55. They are citizens those who having the quality of Mexicans reunite as well the following:

Having reached the age of twenty one years; have an honest way of living; not to have been condemned judicially to any dishonoring penalty.

Article 56. The citizens are obliged to sign up in the register of their municipality and to carry out the positions of popular election, when they do not have a legal impediment.

Article 57. The rights of Mexican or citizen are suspended or lost, and the rehabilitation is obtained in the cases and form that the Law states.

TITLE XV
OF THE INDIVIDUAL RIGHTS

Article 58. The Government of the Emperor guarantees to all the inhabitants of the Empire, according to the preventions of the respective laws:

The equality to the eyes of the Law; the personal security; the property; the exercise of their cult; the liberty to publish their opinions.

Article 59. All the inhabitants of the Empire enjoy of the rights and guarantees, and are subject to the obligations, payment of taxes and else duties states by the laws in force or that in the future were issued.

Article 60. No one shall be detained but through a command of a competent authority, given in writing and signed, and only when there are enough proofs against him in order to presume him author of a crime. It is excluded of this case the *red-handed* crime, in which anyone might apprehend the accused to conduct him before the judiciary presence or of the competent authority.

Article 61. If the administrative authority did the apprehension, he shall set within the third day the alleged accused before the authority who shall judge him, accompanied of the corresponding information; and if the judge found reason to declare him press, he shall do it at most within five days; being case of responsibility the detention that happens under these terms.

But if the apprehension were done for crimes against the state, or that disturb the public order, the administrative authority might postpone the detention until he gives report to the imperial commissioner or the Ministry of Government, so that the latter determines what is best.

Article 62. No one might be sentenced, but in virtue of laws previous to the fact for which he is being judged.

Article 63. No house shall be searched or papers registered of any individual, but in virtue of an order in writing and in the cases and with the requirement literally prevented by the laws.

Article 64. Not existing slavery, neither of fact or right in the Mexican territory, any individual that steps on it is free by this sole fact.

Article 65. In every criminal Lawsuit, the accused shall have the right to know the reason of the procedure and the name of the accusatory if there were. Also he shall have the right to demand that, once concluded the summary, the information of the process that he requires to prepare his discharges is lent to him.

Article 66. The prisons shall be organized in order that they serve to secure the accused, without exacerbating unnecessarily the sufferings of prison.

Article 67. In the prisons there shall always be division between those formally press and those simply detained.

Article 68. The property is inviolable and cannot be occupied but for cause of proven public utility, through previous and competent compensation, and in the form that the laws state.

Article 69. To no one might be demanded free or forced services, but in the cases that the Law states.

Article 70. No one might oblige his personal services, but temporarily, and for a determined enterprise. The minors might not do it without the intervention of their parents or guardian, or in lack of both, the political authority.

Article 71. The confiscation of good is forever forbidden.

Article 72. All the taxes for the Treasury of the Empire shall be general and shall be decreed annually.

Article 73. No tax might be charged but in virtue of a Law.

Article 74. No municipal burden or tax might be established but upon proposal of the respective municipal Council.

Article 75. No exemption or modification of taxes might be done but through a Law.

Article 76. No one might be bothered because of his opinions or prevented from expressing them through the press, abiding to the laws which regulate the exercise of this right.

Article 77. Only by decree of the Emperor or of the imperial commissioners, and when the preservation of the peace and public order demands so, might be temporarily suspended the enjoyment of any these rights.

TITLE XVI OF THE NATIONAL FLAG

Article 78. The colors of the national flag are green, white and red. The placement of these, the dimensions and adornments of the imperial flag, of the one of war, of the national one, of the merchant, and the one of the marine steamer, as well as the coat of arms, shall be detailed in a special Law.

TITLE XVII
OF THE POSSESSION OF THE PUBLIC EMPLOYMENTS AND
FUNCTIONS

Article 79. All the public servants and employees shall take possession of their entrustments appearing before the authority that shall be given according to Law. The Law shall question them in these terms: *Do you accept the employment of (here the denomination) which has been entrusted to you with the duties and attribution that correspond to it?* The answer, to remain in possession, shall be *I do*. Afterwards the authority shall pronounce this formula: *N. is in possession of the employment of... and responsible since now to its faithful and exact performance.*

TITLE XVIII
OF THE OBSERVANCE AND REFORM OF THE STATUTE

Article 80. All the laws and decrees which in the future shall be issued shall arrange to the bases stated in the present Statute, and the authorities remain reformed according to it.

Article 81. Without prejudice of governing as for the Statute and its decrees and concordant laws determine, the authorities and public servants shall, within a year, raise to the Emperor the observations that their good judgment, their yearning for the better service and the experience suggest them so that the Statute might be altered in all that that would be good to the greatest welfare and prosperity of the country.

Each of our ministries is left in charge of the execution of this Law in the part that concerns him, being in charge of issuing briefly the necessary regulations for its exact observance.

Given in the Palace of Chapultepec, on April tenth of eighteen sixty five. MAXIMILIAN. The Ministry of Foreign Business and in charge of the State, José F. Ramírez. The Ministry of War, Juan de D. Peza. The Ministry of Promotion, Luis Robles Pezuela. The Ministry of Justice, Pedro Escudero y Echánove. The Ministry of Government, José M. Cortés y Esparza. The Subsecretary of Treasury, Félix Campillo.

9. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917

9.1. EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917

TÍTULO I

Capítulo I

De las garantías individuales

- Art. 1.* Derecho de todo individuo de gozar las garantías Constitucionales.
- Art. 2.* Prohibición de la esclavitud.
- Art. 3.* Derecho a la educación.
- Art. 4.* Derecho a elegir la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor se acomode a cada individuo.
- Art. 5.* Prohibición de trabajos personales, obligatoriedad de servicios públicos.
- Art. 6.* Manifestación de las ideas.
- Art. 7.* Libertad de Imprenta.
- Art. 8.* Derecho de petición.
- Art. 9.* Derecho de asociación.
- Art. 10.* Derecho a poseer armas.
- Art. 11.* Libertad de tránsito.
- Art. 12.* No concesión de títulos nobiliarios.
- Art. 13.* Derecho a no ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales.
- Art. 14.* No retroactividad de la ley.
- Art. 15.* Extradición.
- Art. 16.* Garantías de seguridad jurídica.
- Art. 17.* Administración de justicia.
- Art. 18.* Organización del sistema penal.
- Art. 19.* Detención del acusado.

- Art. 20.* Garantías del acusado.
Art. 21. Imposición de penas.
Art. 22. Penas consideradas prohibidas, confiscación de bienes.
Art. 23. Instancias en un juicio criminal.
Art. 24. Libertad de creencia religiosa.
Art. 25. Circulación de la correspondencia.
Art. 26. Derechos de los miembros del ejército en tiempos de guerra.
Art. 27. Derecho de propiedad.
Art. 28. Prohibición de monopolios.
Art. 29. Suspensión de garantías.

Capítulo II

De los Mexicanos

- Art. 30.* Nacionalidad Mexicana.
Art. 31. Obligaciones de los mexicanos.
Art. 32. Doble nacionalidad, calidad de mexicano para desempeñar ciertos cargos y funciones.

Capítulo III

De los Extranjeros

- Art. 33.* Calidad de extranjero.

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

- Art. 34.* Requisitos para ser ciudadano mexicano.
Art. 35. Prerrogativas del ciudadano.
Art. 36. Obligaciones del ciudadano.
Art. 37. Pérdida de la calidad de ciudadano mexicano.
Art. 38. Suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos.

TÍTULO II

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

- Art. 39.* Soberanía Nacional.
Art. 40. Forma de gobierno.
Art. 41. Ejercicio de la soberanía.

Capítulo II

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

- Art. 42.* Integración del Territorio Nacional.
- Art. 43.* Partes integrantes de la Federación.
- Art. 44.* Distrito Federal.
- Art. 45.* Extensión y límites de los Estados de la Federación.
- Art. 46.* Cuestiones de límites entre Estados.
- Art. 47.* Extensión Territorial y límites del Estado de Nayarit.
- Art. 48.* Partes del Territorio que dependen del Gobierno de la Federación.

TÍTULO III

Capítulo I

De la División de Poderes

- Art. 49.* División, para su ejercicio, del Supremo Poder de la Federación.

Capítulo II

Del Poder Legislativo

- Art. 50.* Poder Legislativo.

Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

- Art. 51.* Composición de la Cámara de Diputados.
- Art. 52.* Elección de Diputados de acuerdo al número de habitantes.
- Art. 53.* Elección de Diputado suplente.
- Art. 54.* Características de la elección de Diputados.
- Art. 55.* Requisitos para ser Diputado.
- Art. 56.* Integración de la Cámara de Senadores.
- Art. 57.* Elección de Senador suplente.
- Art. 58.* Duración del encargo de Senador renovación de la Cámara.
- Art. 59.* Requisitos para ser Senador.
- Art. 60.* Calificación de las elecciones por las Cámaras.
- Art. 61.* Inviolabilidad de Diputados y Senadores.
- Art. 62.* Prohibición para Diputados y Senadores.
- Art. 63.* Concurrencia necesaria para abrir sesiones en las Cámaras.
- Art. 64.* Sanción por la no concurrencia de algún Diputado o Senador.
- Art. 65.* Inicio de Período de Sesiones.
- Art. 66.* Terminación del Período de Sesiones.
- Art. 67.* Sesiones Extraordinarias.
- Art. 68.* Lugar de residencia de las Cámaras.

Art. 69. Apertura de Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, asistencia e informe del Presidente.

Art. 70. Resoluciones del Congreso.

Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Art. 71. Facultad de iniciar leyes o decretos.

Art. 72. Proceso Legislativo.

Sección III

De las Facultades del Congreso

Art. 73. Facultades del Congreso.

Art. 74. Facultades de la Cámara de Diputados.

Art. 75. Aprobación del presupuesto de egresos.

Art. 76. Facultades del Senado.

Art. 77. Facultades de las Cámaras sin intervención de la otra.

Sección IV

De la Comisión Permanente

Art. 78. Composición de la Comisión Permanente.

Art. 79. Atribuciones de la Comisión Permanente.

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo

Art. 80. Poder Ejecutivo de la Unión.

Art. 81. Elección del Presidente.

Art. 82. Requisitos para ser Presidente.

Art. 83. Duración del encargo de Presidente y su no reelección.

Art. 84. Nombramiento de Presidente, Presidente Provisional, Presidente Sustituto.

Art. 85. Casos de falta del Presidente.

Art. 86. Renuncia del cargo de Presidente.

Art. 87. Protesta del Presidente.

Art. 88. Permiso del Congreso para las ausencias del Territorio Nacional del Presidente.

Art. 89. Facultades y obligaciones del Presidente.

Art. 90. Negocios del orden administrativo a cargo de las Secretarías.

Art. 91. Requisitos para ser Secretario de Despacho.

Art. 92. Requisitos para que sean obedecidos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y órdenes del Presidente.

Art. 93. Obligaciones de los Secretarios de Despacho.

Capítulo IV

Del Poder Judicial

- Art. 94.* Poder Judicial de la Federación.
- Art. 95.* Requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
- Art. 96.* Elección, por el Congreso de la Unión, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 97.* Nombramiento de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 98.* Falta temporal, o por defunción, renuncia o incapacidad de los Ministros.
- Art. 99.* Renuncia del cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 100.* Licencias de los Ministros.
- Art. 101.* Impedimentos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y los respectivos secretarios.
- Art. 102.* Organización del Ministerio Público de la Federación.
- Art. 103.* Controversias que resolverán los Tribunales de la Federación.
- Art. 104.* Asuntos que lo corresponde conocer a los Tribunales de la Federación.
- Art. 105.* Asuntos que le corresponde conocer solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 106.* Otros asuntos que también le compete dirimir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 107.* Bases en las que se sujetarán las controversias de que habla el artículo 103.

TÍTULO IV

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

- Art. 108.* Determinación de quiénes son servidores públicos.
- Art. 109.* Procedimiento en caso de delito común cometido por un Servidor Público.
- Art. 110.* Casos en que no gozan de fuero Constitucional los altos funcionarios de la Federación.
- Art. 111.* Procedimiento en caso de delitos oficiales.
- Art. 112.* No concesión al reo de la gracia del indulto.
- Art. 113.* Período en el que puede exigirse la responsabilidad por delitos y faltas oficiales.
- Art. 114.* No habrá fuero en demandas del orden civil.

TÍTULO V
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

- Art. 115.* Forma de gobierno adoptada por los Estados, organización política y administrativa del Municipio.
- Art. 116.* Arreglos entre los Estados respecto a sus límites.
- Art. 117.* Restricciones de los Estados.
- Art. 118.* Restricciones sin consentimiento del Congreso de la Unión.
- Art. 119.* Obligación de cada Estado a entregar los criminales que les reclamen.
- Art. 120.* Obligación de los Gobernadores.
- Art. 121.* Actos públicos, registros y procedimientos de los Estados.
- Art. 122.* Caso de invasión o violencia exterior.

TÍTULO VI
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

- Art. 123.* Derecho del trabajo.

TÍTULO VII
PREVENCIÓNES GENERALES

- Art. 124.* Facultades concedidas a los Estados.
- Art. 125.* Restricción para desempeñar dos cargos de elección popular a la vez.
- Art. 126.* Restricción para hacer pagos no comprendidos en el presupuesto.
- Art. 127.* Compensación de los servidores públicos.
- Art. 128.* Protesta de los servidores públicos.
- Art. 129.* Funciones de la autoridad militar en tiempos de paz.
- Art. 130.* Intervención de los poderes federales en materia de culto religioso y disciplina externa.
- Art. 131.* Facultad privativa de la Federación.
- Art. 132.* Bienes inmuebles destinados al servicio público.
- Art. 133.* Supremacía de la Constitución, leyes y tratados internacionales.
- Art. 134.* Contratos del gobierno para la ejecución de obras públicas.

TÍTULO VIII
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

- Art. 135.* Reformas a la Constitución.

TÍTULO IX
DE LA INVOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Art. 136. Involabilidad de la Constitución.

9.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Querétaro, 5 de febrero de 1917

136 artículos

ÍNDICE

PREÁMBULO

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I. *De las Garantías Individuales*

Capítulo II. *De los Mexicanos*

Capítulo III. *De los Extranjeros*

Capítulo IV. *De los Ciudadanos Mexicanos*

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I. *De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno*

Capítulo II. *De las partes integrantes de la Federación y del Territorio Nacional*

TÍTULO TERCERO

Capítulo I. *De la División de Poderes*

Capítulo II. *Del Poder Legislativo*

Sección I. *De la Elección e Instalación del Congreso*

Sección II. *De la Iniciativa y Formación de las Leyes*

Sección III. *De las Facultades del Congreso*

Sección IV. *De la Comisión Permanente*

Capítulo III. *Del Poder Ejecutivo*

Capítulo IV. *Del Poder Judicial*

TÍTULO CUARTO.
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

TÍTULO QUINTO.
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

TÍTULO SEXTO.
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

TÍTULO SÉPTIMO.
PREVENCIÓNES GENERALES

TÍTULO OCTAVO.
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO NOVENO.
DE LA INVIOLEABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULOS TRANSITORIOS (1-16).

CONSTITUCIÓN DE 1917

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

Que el Congreso constituyente reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionado el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tendido a bien expedir la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Que reforma la del 5 de febrero de 1857

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

De las Garantías Individuales

1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

2. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

3. La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ni Ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

4. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El Ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, los cargos concejiles y los cargos de elección popular, directa o indirecta, y obligatoria y gratuitas, las funciones electorales.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse.

Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá excederse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.

7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, *papeleros*, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.

8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente por cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.

No se considera ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido de que se desee.

10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la Nación reserve para el uso

exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía.

11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de ese derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviere complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido, en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.

16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse ninguna orden de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querrela de un hecho determinado

que la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los casos de flagrante delito en que cualquiera persona puede aprehender al delincuente y a su cómplices, poniéndolos sin demora a disposición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial, tratándose de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su ausencia, o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

17. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

18. Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus respectivos territorios, el sistema penal, colonias, penitenciarías o presidios sobre la base del trabajo como medio de regeneración.

19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen aquél; lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de esta disposición hace responsables a la autoridad que ordene la detención, o la consienta, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha come-

tido un delito distinto del que se persigue, deberá aquél ser objeto de acusación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

20. En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:

- I. Inmediatamente que los solicite será puesto en libertad bajo de fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad, u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla.
- II. No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto.
- III. Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.
- IV. Será careado con los testigos que depongan en su contra, los que declararán en su presencia si estuviesen en el lugar del juicio, para que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa.
- V. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.
- VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, vecinos del lugar y partido en que se cometiere el delito, siempre que éste pueda ser castigado con una pena mayor de un año de prisión. En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la Nación.
- VII. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
- VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera de ese tiempo.

- IX. Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y tendrá derecho a que éste se halle presente en todos los actos del juicio; pero tendrá obligación de hacerlo comparecer cuantas veces se necesite.
- X. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil, o algún otro motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana.

22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

No se considerará como confiscación de bienes la aplicación total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuesto o multas.

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plaguario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.

23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva, o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver da la instancia.

24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad.

25. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

26. En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular, contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tienen el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto, se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación de nuevos centros de población agrícola con las tierras y aguas que les sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y agua, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos que se hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de 6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades particulares necesarias para conseguir los objetos antes expresados, se considerará de utilidad pública.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos

de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

Son también propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional; las de las lagunas y esteros de las playas; las de los lagos inferiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos principales o arroyos afluentes desde el punto en que brota la primera agua permanente hasta su desembocadura, ya sea que corran al mar o que crucen dos o más estados; las de las corrientes intermitentes que atraviesen dos estados en su rama principal; las aguas de los ríos, arroyos o barrancos cuando sirvan de límites al territorio nacional o al de los estados; las aguas que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes anteriores en la extensión que fije la ley. Cualquiera otra corriente de aguas no incluida en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad privada que atraviese; para el aprovechamiento de las aguas, cuando su curso pase de una finca a otra, se considerará como de utilidad pública y quedará sujeta a las disposiciones que dicten los estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno Federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

- I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder, en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
- II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán, en ningún caso, tener capacidad para adquirir, poseer o ad-

ministrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos; los que tuvieren actualmente, por sí o por interpósita persona, entrarán al dominio de la Nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presunciones será bastante para declarar fundada la denuncia. Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispos, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los estados en sus respectivas jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren para el culto público, serán propiedad de la Nación.

- III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto inmediata o directamente destinados a él; pero podrán adquirir, tener y administrar capitales impuestos sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no excedan de diez años. En ningún caso las instituciones de esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, administración, cargo o vigilancia de corporaciones o instituciones religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimilados, aunque éstos o aquellos no estuvieren en ejercicio.
- IV. Las sociedades comerciales, por acciones, no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquiera industria fabril, minera, petrolera, o para algún otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión, o los de los estados, fijarán en cada caso.
- V. Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo.
- VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren

conforme a la ley de 6 de enero de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el repartimiento únicamente de las tierras.

- VII. Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los estados, el Distrito Federal y los territorios, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todo los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública, la ocupación de la propiedad privada; y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa, hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de valor que haya tenido la propiedad particular por las mejoras que se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución pericial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no este fijado en las oficinas rentísticas.

Se declararán nulas todas las diligencias, disposiciones, resoluciones y operaciones de deslinde, concesión, composición, sentencia, transacción, enajenación o remate que hayan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y aguas a los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que existan todavía, desde la ley de 25 de junio de 1856; y del mismo modo serán nulas todas las disposiciones, resoluciones y operaciones que tengan lugar en lo sucesivo y produzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras, bosques y aguas de que hayan sido privadas las corporaciones referidas, serán restituidas a éstas con arreglo al decreto de 6 de enero de 1915, que continuará en vigor como ley constitucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto no procediere por vía de restitución, la adjudicación de tierras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones mencionadas, se le dejarán aquéllas en calidad de dotación sin que en ningún caso deje de asignársele las que necesitare. Se exceptúan de la nulidad antes referida, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos a virtud de la citada ley de 25 de junio de 1856 o poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas. El exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comunidad indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes de restitución que por virtud de este precepto se decreten, serán de inmediata ejecución por la autoridad administrativa. Sólo los miembros de la comunidad tendrán derecho a los

terrenos de repartimiento y serán inalienables los derechos sobre los mismos terrenos mientras permanezcan indivisos, así como los de propiedad cuando se haya hecho el fraccionamiento.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras y aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes de que se dicte sentencia ejecutoriada.

Durante el próximo periodo constitucional, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propiedades, conforme a las bases siguientes:

a) En cada Estado y territorio se fijará la extensión máxima de tierra de que se puede ser dueño un solo individuo o sociedad legalmente constituida.

b) El excedente de la extensión fijada deberá ser fraccionado por el propietario en el plazo que señalen las leyes locales, y las fracciones serán puestas a la venta en las condiciones que aprueben los gobiernos de acuerdo con las mismas leyes.

c) Si el propietario se negare a hacer el fraccionamiento, se llevará éste a cabo por el Gobierno Local, mediante la expropiación.

d) El valor de las fracciones será pagado por anualidades que amorticen capital y réditos en un plazo no menos de veinte años, durante el cual el adquirente no podrá enajenar aquellas. El tipo del interés no excederá del cinco por ciento anual.

e) El propietario estará obligado a recibir bonos de una deuda especial para garantizar el pago de la propiedad expropiada. Con este objeto el Congreso de la Unión expedirá una ley facultando a los estados para crear su deuda agraria.

f) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno.

Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos, cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

28. En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio

de un sólo Banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinación, de cualquiera manera que se haga, de productores, industriales, comerciantes y empresarios de transportes o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general, o de alguna clase social.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquiera otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el Consejo de Ministros.

y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país, o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente, a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Si la suspensión se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Capítulo II

De los Mexicanos

30. La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización.

I. Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o fuera de la República, siempre que en éste último caso los padres sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la República de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban ante aquella que han residido en el país los últimos seis años anteriores a dicha manifestación.

II. Los mexicanos por naturalización:

a) Los hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo.

b) Los que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretaría de Relaciones.

c) Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana. En los casos de estos incisos, la ley determinará la manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen.

31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción Pública en cada Estado.

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar.

III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública.

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad

será indispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla además, los que compongan las dos terceras partes de la tripulación.

Capítulo III

De los Extranjeros

33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados o veintiuno, si no lo son, y
- II. Tener un modo honesto de vivir.

35. Son prerrogativas del ciudadano:

- I. Votar en las elecciones populares;
- II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
- III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país;
- IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
- V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

- I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en los padrones electorales, en los términos que determinen las leyes;
- II. Alistarse en la Guardia Nacional;
- III. Votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda;
- IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

- V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.
37. La calidad de ciudadano mexicano se pierde:
- I. Por naturalización en país extranjero.
 - II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él, condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal, exceptuando los títulos literarios, científicos y humanísticos que pueden aceptarse libremente; y
 - III. Por comprometerse en cualquiera forma, ante ministros de algún culto o ante cualquiera otra persona, al no observar la presente Constitución, o las leyes que de ella emanen.
38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
- I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;
 - II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
 - III. Durante la extinción de una pena corporal;
 - IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;
 - V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal; y
 - VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión;
- La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadanos, y la manera de hacer la rehabilitación.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Capítulo II

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

42. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación y además el de las islas adyacentes en ambos mares. Comprende, asimismo, la isla de Guadalupe, y las de Revillagigedo y la de la Pasión, situadas en el Océano Pacífico.

43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal y territorios de la Baja California y de Quintana Roo.

44. El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

45. Los estados y territorios de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

46. Los estados que tuviesen pendientes cuestiones de límites, las arreglarán o solucionarán en los términos que establece ésta Constitución.

47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el territorio de Tepic.

48. Las islas de ambos mares que pertenezcan al Territorio Nacional dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.

TÍTULO TERCERO

Capítulo I

De la División de Poderes

49. El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión conforme a lo dispuesto en el artículo 29.

Capítulo II

Del Poder Legislativo

50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada dos años, por los ciudadanos mexicanos.

52. Se elegirá un diputado propietario por cada sesenta mil habitantes o por fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada Estado y Territorio, la población del Estado o Territorio que fuese menor que la fijada en este artículo elegirá, sin embargo, un diputado propietario.

53. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.

54. La elección de diputados será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral.

55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.
- II. Tener veinticinco años cumplidos el día de la elección.
- III. Ser originario del Estado o territorio en que se haga la elección, o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.
- IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección cuando menos noventa días antes de ella.
- V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a menos que se separe de sus funciones noventa días antes de la elección.

Los Gobernadores de los estados, sus secretarios, los magistrados y jueces federales no podrán ser electos en los distritos de sus respectivas jurisdicciones si no se separan de sus cargos noventa días antes de su elección.

- VI. No ser Ministro de algún culto religioso.

56. La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal nombrados en elección directa.

La Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos.

57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.

58. Cada senador durará en su encargo cuatro años. La Cámara de Senadores se renovará por mitad cada dos años.

59. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de treinta y cinco años cumplidos el día de la elección.

60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas.

La resolución será definitiva e inatacable.

61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

62. Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones, ni ejercer su cargo, sin la concurrencia, en la de senadores, de las dos terceras partes, y en la de diputados, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.

Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Si no hubiere quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo entretanto transcurren los treinta días de que antes se habla.

64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada, o sin permiso del Presidente de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

65. El Congreso se reunirá el día 1 de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará de los asuntos siguientes:

- I. Revisar la cuenta pública del año anterior, que será presentada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones. La revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se extenderá el examen de la exactitud y justificación de los gastos hechos y a las responsabilidades a que hubiere lugar.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

- II. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto del año fiscal siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo, y
- III. Estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten, y resolver los demás asuntos que le correspondan, conforme a esta Constitución.

66. El periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar de todos los asuntos mencionados en el artículo anterior; pero no podrá prolongarse más que hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuviesen de acuerdo para poner término a las sesiones antes de la fecha indicada, resolverá el Presidente de la República.

67. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que Presidente de la República lo convoque para ese objeto; pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto o asuntos que el mismo Presidente sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. El Ejecutivo puede convocar a una sola Cámara a sesiones extraordinarias, cuando se trate de asunto exclusivo de ella.

68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.

69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe, por escrito, en el primer caso sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate las razones o causa que hicieren necesaria su convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.

70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los Presidentes de ambas Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: *El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).*

Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

- I. Al Presidente de la República;
- II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
- III. A las Legislaturas de los Estados.

Las iniciativas presentadas al Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates.

72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobaré, se remitirá al Ejecutivo quien, si no tuviese observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo éste término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionada por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto serán nominales.

d) Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a); pero si lo reprobare, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado, o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los

votos presentes de la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos de la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tomen en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

h) La formación de las leyes o decretos pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre los empréstitos, contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurran un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación o por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria que expida la Comisión Permanente, en el caso del artículo 84.

Sección III

De las Facultades del Congreso

73. El Congreso tiene facultad:

- I. Para admitir nuevos estados o territorios a la Unión Federal.
- II. Para erigir a los territorios en estados cuando tengan una población de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para proveer a su existencia política.
- III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario el efecto:

1°. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.

2°. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

3°. Que sean oídas las Legislaturas de los estados cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4°. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.

5°. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.

6°. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.

7°. Si las Legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás estados.

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso.

V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal y Territorios debiendo someterse a las bases siguientes:

1ª. El Distrito Federal y los territorios se dividirán en municipalidades, que tendrán la extensión territorial y número de habitantes suficientes para poder subsistir con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes.

2ª. Cada municipalidad estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa.

3ª. El Gobierno del Distrito Federal y de los territorios, estarán a cargo de Gobernadores que dependerán directamente del Presidente de la República. El Gobernador del Distrito Federal acordará con el Presidente de la República y los de los territorios, por el conducto que de termine la ley. Tanto el Gobernador del Distrito Federal como el de cada territorio serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República.

4ª. Los magistrados y los jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y de los territorios, serán nombrados por el Congreso de la Unión, que se erigirá en Colegio Electoral en cada caso.

En las faltas temporales o absolutas de los magistrados, se sustituirán estos por nombramientos del Congreso de la Unión, y en sus recesos por nombramientos provisionales de la Comisión Permanente. La ley orgánica determinará la manera de suplir a los jueces en sus faltas temporales y designará la autoridad en las que se les exigirá las responsabilidades en las que incurran, salvo lo dispuesto por esta misma Constitución respecto a las responsabilidades de funcionarios.

A partir del año 1923, los magistrados y los jueces a que se refiere este inciso, sólo podrán ser removidos de sus cargos, si observan mala conducta y previo el juicio de responsabilidad respectivo, a menos de que sean promovidos a empleo de grado superior. A partir de la misma fecha la remuneración que dichos funcionarios perciban por sus servicios, no podrá ser disminuida durante su encargo.

5ª. El Ministerio Público en el Distrito Federal y en los Territorios estará a cargo de un Procurador General, que residirá en la ciudad de México, y del número de agentes que determine la ley, dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de la República, quien lo nombrará y removerá libremente.

- VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
- VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación; para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional.
- IX. Para expedir aranceles sobre el comercio extranjero y para impedir que en el comercio de estado a estado se establezcan restricciones.
- X. Para legislar en toda la República sobre, minería, comercio, Instituciones de Crédito y para establecer el Banco de Emisión Único en los términos del artículo 28 de esta Constitución.
- XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
- XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
- XIII. Para reglamentar el modo cómo deban expedirse las patentes de corso; para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
- XIV. Para levantar y sostener el Ejército y la Armada de la Unión y para reglamentar su organización y servicio.
- XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose, a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados las facultades de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
- XVI. Para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad gen eral de la República:

1ª. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2ª. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

4ª. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo y degeneran la raza, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le competan.

- XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
- XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deberá tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas.
- XIX. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos y baldíos y el precio de éstos.
- XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicanos.
- XXI. Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse.
- XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
- XXIII. Para formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias a fin de hacer concurrir a los diputados y senadores ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes.
- XXIV. Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor.
- XXV. Para constituirse en Colegio Electoral y nombrar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios.
- XXVI. Para aceptar la renuncia de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios, y nombrar los sustitutos de dichos funcionarios en sus faltas temporales o absolutas.
- XXVII. Para establecer escuelas profesionales de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos

concernientes a la cultura superior general de los habitantes de la República, entre tanto dichos establecimientos puedan sostenerse por la iniciativa de los particulares, sin que esas facultades sean exclusivas de la Federación. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata, surtirán sus efectos en toda la República.

XXVIII. Para constituirse en Colegio Electoral y elegir ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de substituto, o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

XXIX. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.

XXX. Para examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen no sólo la conformidad de las partidas gastadas por el presupuesto de egresos, sino también la exactitud y justificación de tales partidas.

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

- I. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a la elección de Presidente de la República.
- II. Vigilar, por medio de una Comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor.
- III. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina.
- IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio deben decretarse para cubrir aquél.
- V. Conocer de las acusaciones que se hagan a los funcionarios públicos de que habla esta Constitución, por delitos oficiales, y en su caso, formular acusación ante la Cámara de Senadores y erigirse en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a proceder contra alguno de los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucional, cuando sean acusados por delitos del orden común.
- VI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

75. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo.

76. Son facultades exclusivas del Senado:

- I. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República con las potencias extranjeras.

- II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes supremos del Ejército, y Armada Nacional, en los términos que la ley disponga.
 - III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.
 - IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria.
 - V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo Gobernador constitucional, en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.
 - VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional, mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.
- La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.
- VII. Erigirse en Gran Jurado para conocer los delitos oficiales de los funcionarios que expresamente designa esta Constitución; y
 - VIII. Las demás que la misma Constitución le atribuye.
77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
- I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
 - II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno.
 - III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.
 - IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.

Sección IV

De la Comisión Permanente

78. Durante el receso del Congreso habrá una Comisión Permanente compuesta de veintinueve miembros, de los que quince serán diputados y catorce senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones.

79. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

- I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el artículo 76, fracción IV.
- II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados del Distrito Federal y territorios, si estos últimos funcionarios se encontraren en la ciudad de México.
- III. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución en los expedientes, a fin de que en el inmediato periodo de sesiones sigan tramitándose.
- IV. Convocar a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos oficiales o del orden común cometidos por secretarios de Estado o ministros de la Suprema Corte, y delitos oficiales federales, cometidos por los Gobernadores de los Estados, siempre que esté ya instruido el proceso por la Comisión del Gran Jurado, en cuyo caso no se tratará ningún negocio del Congreso, ni se prolongarán las sesiones por más tiempo que el indispensable para fallar.

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo

80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará *Presidente de los Estados Unidos Mexicanos*.

81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral.

82. Para ser Presidente, se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento.
- II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.
- III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección.
- IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser Ministro de algún culto.
- V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, noventa días antes del día de la elección.

VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, a menos de que se separe de su puesto noventa días antes del día de la elección.

VII. No haber figurado, directa o indirectamente, en alguna asonada, motín o cuartelazo.

83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.

El ciudadano que substituyese al Presidente Constitucional, en caso de falta absoluta de este, no podrá ser reelecto Presidente para el periodo inmediato.

Tampoco podrá ser reelecto Presidente para el periodo inmediato, el ciudadano que fuere nombrado Presidente interino en las faltas temporales del Presidente Constitucional.

84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos un Presidente; el mismo Congreso expedirá, la convocatoria para elecciones presidenciales, procurando que la fecha señalada para este caso coincida en lo posible con la fecha de las próximas elecciones de diputados y senadores al Congreso de la Unión.

Si el Congreso no estuviese en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un Presidente provisional quien convocará a sesiones extraordinarias del Congreso, para que a su vez, expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los mismos términos del artículo anterior.

Cuando la falta del Presidente ocurriese en los dos últimos años del periodo respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, elegirá al Presidente substituto que deberá concluir el periodo; si el Congreso no estuviere reunido; la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias, para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Presidente substituto.

El Presidente provisional podrá ser electo por el Congreso como sustituto.

El ciudadano que hubiese sido designado Presidente provisional para convocar a elecciones, en el caso de falta del Presidente en los dos primeros años del periodo respectivo, no podrá ser electo en las elecciones que se celebren con motivo de la falta del Presidente, para cubrir la cual fue designado.

85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada, el primero de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente provisional, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, la Comisión Permanente, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviere reunido, o, en su defecto, la Comisión Permanente, designará un Presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.

Si la falta de temporal se convierte en absoluta se procederá como dispone el artículo anterior.

En el caso de licencia el Presidente de la República, no quedará impedido el interino para ser electo en el periodo inmediato, siempre que no estuviere en funciones al celebrarse las elecciones.

86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión, o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: *Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.*

88. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.

89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

- I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
- II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, al Procurador General de la República, al Gobernador del Distrito Federal y a los Gobernadores de los territorios, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y territorios, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
- III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.
- IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada Nacional, y los empleados superiores de Hacienda.
- V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada Nacional con arreglo a las leyes.
- VI. Disponer de la de la Fuerza Armada permanente de mar y tierra, para la seguridad interior, y defensa exterior de la Federación.
- VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.
- VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.

- IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas por el Congreso.
 - X. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal.
 - XI. Convocar al Congreso o a alguna de las Cámaras a sesiones extraordinarias, cada vez que lo estime conveniente.
 - XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
 - XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación.
 - XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal y Territorios.
 - XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores, o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
 - XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer provisionalmente los nombramientos de que hablan las fracciones III y IV, a reserva de someterlos a la aprobación de dicha Cámara cuando esté reunida.
 - XVII. Y las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
90. Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso por una ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada Secretaría.
91. Para ser Secretario del Despacho, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.
92. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario del Despacho, encargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisitos no serán obedecidos. Los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente, relativos al Gobierno del Distrito Federal y a los Departamentos Administrativos, serán enviados directamente por el Presidente al Gobernador del Distrito y al Jefe del Departamento respectivo.
93. Los secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado para que informen, cuando se discuta una ley, o se estudie un negocio relativo a su Secretaría.

Capítulo IV

Del Poder Judicial

94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, y en Tribunales de Circuito y de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y funcionará siempre en Tribunal Pleno, siendo sus audiencias públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público así lo exigieren debiendo celebrar sus sesiones en los periodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la Corte se necesita que concurren cuando menos dos terceras partes del número total de sus miembros; y las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de votos.

Cada uno de los ministros de la Suprema Corte designados para integrar ese poder, en las próximas elecciones, durará en su encargo dos años; los que fueren electos al terminar este primer periodo durarán cuatro años y a partir del año de 1923 los ministros de la Corte, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito sólo podrán ser removidos cuando observen mala conducta, y previo el juicio de responsabilidad respectivo, a menos que los magistrados y los jueces sean promovidos a grado superior.

El mismo precepto regirá en lo que fuere aplicable dentro de los periodos de dos y cuatro años a que hace referencia este artículo.

95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- II. Tener treinta y cinco años cumplidos el día de la elección.
- III. Poseer título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello.
- IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
- V. Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.

96. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral, siendo indispensable que concurren cuando menos las dos terceras partes del número total de diputados y senadores. La elección se hará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos serán previamente propuestos, uno por cada Legislatura de los Estados, en la forma que disponga la ley local respectiva.

Sino se obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los dos candidatos que hubieren obtenido más votos.

97. Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrán los requisitos que exija la ley, durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, y no podrán ser removidos de este, sin previo juicio de responsabilidad o por incapacidad para desempeñarlo, en los términos que establezca la misma ley.

La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar a los jueces de Distrito pasándolos de un distrito a otro, o fijando su residencia en otra población, según lo estime conveniente para el mejor servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose de los magistrados de Circuito.

Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar magistrados de Circuito y jueces de Distrito supernumerarios, que auxilien las labores de los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la administración de justicia sea pronta y expedita; y nombrará a alguno o algunos de los miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito o designará uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de la Cámaras de la Unión, o el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado federal, o algún hecho o hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual o la violación del voto público, o algún otro delito castigado por la ley federal.

Los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito serán distribuidos entre los ministros de la Suprema Corte, para que estos los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los magistrados y jueces que los desempeñen, y reciban las quejas que hubiere contra ellos; y ejerzan las demás atribuciones que señala la ley. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá libremente a su Secretario y demás empleados que fije la planta respectiva aprobada por la ley. Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, nombrarán y removerán también a sus respectivos secretarios y empleados.

La Suprema Corte cada año designará a uno de sus miembros como Presidente, pudiendo éste ser reelecto.

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Congreso de la Unión, y en sus recesos, ante la Comisión Permanente, en la siguiente forma: Presidente: *¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?*

Ministro: *Sí, Protesto.*

Presidente: *Si no lo hicieréis así, la Nación os lo demande.*

Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte, o ante la autoridad que determine la ley.

98. Las faltas temporales de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no excediere de un mes, no se suplirán si aquella tuvieren quórum para sus sesiones; pero si no lo hubiere, el Congreso de la Unión o en su receso la Comisión Permanente, nombrará por el tiempo que dure la falta, un suplente de entre los candidatos presentados por los Estados para la elección del magistrado propietario de que se trate, y que no hubiere sido electo. Si la falta fuere por dos meses o menos, el Congreso, o en su caso la Comisión Permanente nombrará libremente un Ministro provisional.

Si faltare un Ministro por defunción, renuncia o incapacidad, el Congreso de la Unión hará nueva elección en los términos prescritos por el artículo 96.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente hará un nombramiento provisional mientras se reúne aquel y hace la elección correspondiente.

99. El cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. En los recesos de este, la calificación se hará por la Comisión Permanente.

100. Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, serán concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero las que excedieren de este tiempo, las concederá la Cámara de Diputados o en su defecto la Comisión Permanente.

101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los estados o de particulares, salvo los cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo.

102. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un Procurador General, el que deberá tener las mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal: y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la misma ley determinare.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los ministros, diplomáticos y cónsules generales, y en aquellos que se suscitaren entre dos o más

Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación o entre los poderes de un mismo Estado. En los demás casos en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General podrá intervenir por sí o por medio de alguno de sus agentes.

El Procurador General de la República será el consejero jurídico del gobierno. Tanto él como sus agentes se someterán estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsables de toda falta, omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones.

103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:

- I. Por las leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.
- II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados.
- III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invaden la esfera de la autoridad federal.

104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

- I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales, o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten a intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los estados, del Distrito Federal y territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para ante el superior inmediato del Juez que conozca del asunto en primer grado. De las sentencias que se dicten en segunda instancia, podrán suplicarse para ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparándose, introduciéndose y substanciándose el recurso, en los términos que determinare la ley.
- II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo.
- III. De aquellas en que la Federación fuese parte.
- IV. De las que susciten entre dos o más Estados, o un Estado y la Federación, así como de las que surgieren entre los tribunales del Distrito Federal y los de la Federación, o un Estado.
- V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro.
- VI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias que se susciten entre dos o más Estados, entre los Poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellas en que la Federación fuese parte.

106. Corresponde también a la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados, o entre los de un Estado y los de otro.

107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinara una la ley, que se ajustará las bases siguientes:

- I. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.
- II. En los Juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia se haya alegado en la segunda, por vía de agravio. La Suprema Corte, no obstante esta regla podrá suplirse la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa, o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.
- III. En los juicios civiles o penales sólo procederá el amparo contra la violación de las leyes del procedimiento, cuando se afecten las partes substanciales de él y de manera que su infracción deje sin defensa al quejoso.
- IV. Cuando el amparo se pida contra la sentencia definitiva, en el juicio civil, sólo procederá además del caso de la regla anterior, cuando llenándose los requisitos de la regla segunda, dicha sentencia sea contraria a la letra de la ley aplicable al caso o su interpretación jurídica, cuando comprenda personas, acciones, excepciones o cosas que no han sido objeto del juicio, o cuando no las comprenda todas por omisión o negativa expresa. Cuando se pida el amparo contra resoluciones no definitivas según lo dispuesto en la fracción anterior, se observaran estas reglas en lo que fuere conducente.
- V. En los juicios penales, la ejecución de la sentencia definitiva contra la que se pida amparo, se suspenderá por la autoridad responsable, a cuyo efecto el quejoso le comunicará, dentro del termino que fije la ley y bajo la protesta de decir verdad, la interposición del recurso, acompañando dos copias, una para el expediente y otra que se entregará a la parte contraria.
- VI. En juicios civiles, la ejecución de la sentencia definitiva sólo se suspenderá si el quejoso da fianza de pagar los daños y perjuicios que la suspensión

ocasionare, a menos que la otra parte diese contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban, si se concediese el amparo, y pagar lo daños y perjuicios consiguientes. En éste caso se comunicará la interposición del recurso, como indica la regla anterior.

- VII. Cuando se requiera pedir amparo contra una sentencia definitiva, se solicitará de la autoridad responsable copia certificada de las constancias que el quejoso señalare, la que se adicionará con las que indicare la otra parte, donde en ella la misma autoridad responsable, de una manera breve y clara, las razones que justifiquen el acto que se va a reclamar, de las que se dejará nota en los autos.
- VIII. Cuando el amparo se pida contra una sentencia definitiva, se interpondrá directamente ante la Suprema Corte, presentándole el escrito con la copia de que se habla en la regla anterior, o remitiéndolo por conducto de la autoridad responsable o del Juez de Distrito del Estado a que pertenezca. La Corte dictará sentencia sin más trámite ni diligencia que el escrito en que se interponga el recurso, el que produzca la otra parte y el Procurador General o el agente que al efecto designe, y sin comprender otra cuestión legal que la que la queja contenga.
- IX. Cuando se trate de actos de autoridad distinta de la judicial o de actos de ésta ejecutados fuera del juicio o después de concluido; o de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación o que afecten a personas extrañas al juicio, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción esté el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, limitándose la tramitación al informe de la autoridad, a una audiencia para la cual se citará en el mismo auto en que se mande pedir el informe y que se verificará a la mayor brevedad posible, recibiendo en ella las pruebas que las parte interesadas ofrecieren oyéndose los alegatos, que no podrán exceder de una hoja cada uno, y a la sentencia que se pronunciará en la misma audiencia. La sentencia causará ejecutoria, si los interesados no ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término que fija la ley, y de la manera que expresa la regla VIII. La violación de las garantías de los artículos 16, 19 y 20, se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa o ante el Juez de Distrito que corresponde, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, a la Corte contra la resolución que se dicte. Si el Juez de Distrito no residiere en el mismo lugar en que resida la autoridad responsable, la ley determinará el juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca.
- X. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspende el acto reclamado, debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resultare ilusoria o insuficiente, siendo en estos dos últimos

casos solidaria la responsabilidad penal y civil de la autoridad, con el que ofreciere la fianza y el que la prestare.

- XI. Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado, o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda para que la juzgue.
- XII. Los alcaides y carceleros que no reciban copia autorizada del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19, contadas desde que aquel esté a disposición de su juez, deberán llamar la atención de este sobre dicho particular, en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrán en libertad. Los infractores del artículo citado y de esta disposición serán consignados inmediatamente a la autoridad competente.

También será consignado a la autoridad o agente de ella, el que, verificada una aprehensión, no pusiere al detenido a disposición de su juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Si la detención se verificare fuera del lugar en que resida el Juez, al término mencionado se agregará el suficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho lugar y el en que se verificó la detención.

TÍTULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

108. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los secretarios del Despacho y el Procurador General de la República, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo.

Los Gobernadores de los Estados y diputados a las Legislaturas locales, son responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

109. Si el delito fuere común, la Cámara de Diputados erigida en Gran Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la formen, si ha o no lugar a proceder contra el acusado.

En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo para que la acusación continúe su curso, cuando el acusado haya dejado de tener fuero, pues la resolución de la Cámara no prejuzga absolutamente los fundamentos de la acusación.

En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto desde luego a la acción de tribunales comunes, a menos que se trate del Presidente de la República; pues en tal caso, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores, como si se tratase de un delito oficial.

110. No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la Federación, por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño de algún empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el periodo en que conforme a la ley se disfrute de fuero. Lo mismo sucederá respecto a los delitos comunes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, cargo o comisión. Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto funcionario haya vuelto a ejercer sus funciones propias, deberá procederse con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

111. De los delitos oficiales conocerá el Senado, erigido en Gran Jurado; pero no podrá abrir la averiguación correspondiente sin previa acusación de la Cámara de Diputados.

Si la Cámara de Senadores declarase, por mayoría de las dos terceras partes del total de sus miembros, después de oír al acusado y practicar las diligencias que estime convenientes, que éste es culpable, quedará privado de su puesto, por virtud de tal declaración, e inhabilitado para obtener otro, por el tiempo que determine la ley.

Cuando el mismo hecho tuviere señalada otra pena en la ley, el acusado quedará a disposición de las autoridades comunes, para que lo juzguen y castiguen con arreglo a ella.

En los casos de este artículo y en los del anterior, las resoluciones del Gran Jurado y la declaración, en su caso, de la Cámara de Diputados, son inatacables.

Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados los delitos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación y cuando la Cámara mencionada declare que ha lugar a acusar, ante el Senado, nombrará una comisión de su seno, para que sostenga ante aquél la acusación de que se trate.

El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación, determinando como faltas oficiales todos los actos u omisiones que puedan redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, aunque hasta la fecha no hayan tenido carácter delictuoso, estos delitos serán siempre juzgados por Jurado Popular, en los términos que para los delitos de imprenta establece el artículo 20.

112. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no puede concederse al reo la gracia de indulto.

113. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, sólo podrán erigirse durante el periodo en que el funcionario ejerza su encargo, y dentro de un año después.

114. En demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad, para ningún funcionario público.

TÍTULO QUINTO DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN

115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio libre conforme a las bases siguientes:

- I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
- II. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las suficientes para atender a las necesidades municipales.
- III. Los Municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales.

El Ejecutivo Federal y los Gobernadores de los estados tendrán el mando de la fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente.

Los Gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de cuatro años.

Son aplicables a los Gobernadores, substitutes o interinos, las prohibiciones del artículo 83.

El número de representantes en las Legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno, pero en todo caso, el número de representantes de una legislatura local no podrá ser menor de quince diputados propietarios.

En los Estados, cada distrito electoral nombrará un diputado propietario y un suplente.

Sólo podrá ser Gobernador constitucional de un Estado, un ciudadano mexicano por nacimiento, y nativo de el, o con vecindad no menor de cinco años, inmediatamente anterior al día de la elección.

116. Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.

117. Los Estados no pueden en ningún caso:

- I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con las potencias extranjeras.
- II. Expedir patentes de corso, ni de represalias.
- III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado.
- IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.

- V. Prohibir, ni gravar directa, ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
- VI. Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectuó por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.
- VII. Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
- VIII. Emitir títulos de deuda pública, pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional; contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones, o contraer obligaciones a favor de sociedades o particulares extranjeros, cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso.

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

- I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
- II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra.
- III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.

119. Cada Estado tiene obligación de entregar sin demora los criminales de otro Estado o del extranjero, a las autoridades que lo reclamen.

En estos casos, el auto del Juez que mande cumplir la requisitoria de extradición, será bastante para motivar la detención por un mes, si se tratare de extradición entre los estados, y por dos meses cuando fuere internacional.

120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

121. En cada estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimiento judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros o procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

- I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
- II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.

- III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

- IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros.

- V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros.

122. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado, o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

TÍTULO SEXTO

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo:

- I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
- II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de diez y seis años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche.
- III. Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato.
- IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.
- V. Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.

- VI. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades que será regulada como indica la fracción IX.
- VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad.
- VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
- IX. La fijación del tipo de salario mínimo, y de la participación en las utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a la Junta Central de Conciliación que se establecerá en cada Estado.
- X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.
- XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un ciento por ciento más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de diez y seis años y las mujeres de cualquiera edad, no serán admitidos en esta clase de trabajos.
- XII. En toda negociación agrícola, industrial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, por las que podrán cobrar rentas que no excederán del medio por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las negociaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un número de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera de las obligaciones mencionadas.
- XIII. Además, en estos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.
- XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos

deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con los que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.

- XV. El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.
- XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
- XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros.
- XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los obreros de los establecimientos fabriles militares del Gobierno de la República, no estarán comprendidos en las disposiciones de esta fracción, por ser asimilados al Ejército Nacional.
- XIX. Los paros que serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
- XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del gobierno.
- XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al Arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;

- XXII. El patrono que despidiera a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato, o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero se retire del servicio por falta de probidad de parte del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona, o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.
- XXIII. Los créditos a favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso, o de quiebra;
- XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrán exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes;
- XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquiera otra institución oficial o particular;
- XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario contratante;
- XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:
- a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.
 - b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
 - c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.
 - d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
 - e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.
 - f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, o por despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

XXIX. Se considera utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la previsión popular.

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad de los trabajadores en plazos determinados.

TÍTULO SÉPTIMO

PREVENCIONES GENERALES

124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.

127. El Presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicos de la Federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesoro Federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo.

128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

130. Corresponde a los Poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Los ministros de cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Las Legislaturas de los Estados únicamente tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno; no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona que está a cargo del referido tem-

plo. Todo cambio se avisará por el Ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de los templos, y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del Gobernador del Estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles.

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez en los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable y la dispensa o trámite referido será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto.

Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sea por su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que las relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

No podrán heredar por sí, ni por interpósita persona, ni recibir por ningún título un Ministro de cualquiera culto, un inmueble, ocupado por cualquiera asociación de propaganda religiosa, o de fines religiosos, o de beneficencia.

Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado.

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas, se regirán para su adquisición, por particulares, conforme al artículo 27 de esta Constitución.

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado.

131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar en el distrito y territorios federales, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; más para lo que estén igualmente los que en lo sucesivo adquiriera dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la Legislatura respectiva.

133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

134. Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada.

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden, las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

TÍTULO NOVENO

DE LA INVOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1 de mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resulte electo en las próximas elecciones por ejercer el cargo de Presidente de la República.

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerza en el Distrito Electoral respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos, al próximo Congreso de la Unión, los secretarios y los subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria respectiva.

2. El encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior.

3. El próximo periodo constitucional comenzará a contarse, para los diputados y senadores, desde el 1 de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1 de diciembre de 1916.

4. Los senadores que en las próximas elecciones lleven el número par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad, cada dos años.

5. El Congreso de la Unión elegirá a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo, para que este alto cuerpo quede solemnemente instalado el 1 de junio.

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer periodo de dos años que establece el artículo 94.

6. El Congreso de la Unión tendrá un periodo extraordinario de sesiones que comenzarán el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la Ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, y la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los nombramientos de magistrados de Circuito y jueces de

Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las elecciones de magistrados, jueces de Primera Instancia del Distrito Federal y territorios; expedirá también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, y los magistrados y jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes del primero de julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.

7. Por esta vez, el cómputo de los votos para senadores se hará por la Junta Computadora del 1er. Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta, a los senadores electos, las credenciales correspondientes.

8. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá los amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor.

9. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la Ley Electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los Poderes de la Unión.

10. Los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión contra el legítimo de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste.

11. Entretanto el Congreso de la Unión y los de los estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes se pondrán en vigor en toda la República.

12. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y las viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución, o a la instrucción pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán.

13. Quedan extinguidas en pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patronos, sus familiares o intermediarios.

14. Quedan suprimidas las Secretarías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes.

15. Se faculta al C. encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.

16. El Congreso Constitucional, en el periodo ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1 de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en el periodo extraordinario

a que se refiere el artículo 6 transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas a garantías individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo III de esta Constitución.

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente de Querétaro, a treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete. Presidente: Luis Manuel Rojas. Por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes, Aurelio L. González. Por el Estado de Baja California: Ignacio Roel. Por el Estado de Coahuila: Manuel Aguirre Berlanga, Manuel Cepeda Medrano, Ernesto Meade Fierro, José María Rodríguez, José Rodríguez González, Jorge E. Von Versen. Por el Estado de Colima: Francisco Ramírez Villareal. Por el Estado de Chiapas: Vidal J. Amilcar, Lisandro López, Cristóbal Castillo Llavén, Enrique Suárez, Daniel A. Zepeda. Por el Estado de Chihuahua: Manuel M. Prieto. Por el Territorio del Distrito Federal: Ciro B. Cevallos, Rafael L. de los Ríos, Carlos Duplán, Francisco Espinosa, Alfonso Herrera, Lauro López Guerra, Amador Lozano, Rafael Martínez, Antonio Norzagaray, Félix Palavicini, Ignacio L. Pesqueira, Román Rosas y Reyes, Arnulfo Silva, Gerzayn Ugarte. Por el Estado de Durango: Fernando Castaños, Jesús de la Torre, Silvestre Dorador, Rafael Ezpeleta, Fernando Gómez Palacio, Antonio Gutiérrez, Alberto Terrones Benítez. Por el Estado de Guanajuato: Luis M. Alcocer, Manuel G. Aranda, Nicolás Cano, Enrique Colunga, Francisco Díaz Barriga, Luis Fernández Martínez, Ramón Frausto, Fernando Lizardi, Ignacio López, Jesús López Lira, José Natividad Macías, Antonio Madrazo, Santiago Manrique, Hilario Medina, Gilberto M. Navarro, David Peñaflor, Carlos Ramírez Llaca, Vicente M. Valtierra, José Villaseñor Lomelí. Por el Estado de Guerrero: Francisco Figueroa, Fidel R. Guillén, Fidel Jiménez. Por el Estado de Hidalgo: Crisóforo Aguirre, Alfonso Cravioto, Alberto M. González, Antonio Guerrero, Federico E. Ibarra, Alfonso Mayorga, M. Refugio Mercado, Ismael Pintado Sánchez, Matías Rodríguez, Leopoldo Ruiz, Rafael Vega Sánchez. Por el Estado de Jalisco: Amado Aguirre, Joaquín Aguirre Berlanga, Sebastián Allende, Gaspar Bolaños V., Ramón C. y Castañeda, Esteban B. Calderón, Marcelino Dávalos, Manuel Dávalos Ornelas, Ernesto E. Ibarra, Francisco Labastida Izquierdo, Paulino Machorro y Narváez, José Manzano, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Rafael Ochoa, Ignacio Ramos Praslow, Juan de Dios Robledo, Luis Manuel Rojas, José I. Solórzano, Jorge Villaseñor, Carlos Villaseñor. Por el Estado de México: Antonio Aguilar, Donato Bravo Izquierdo, Enrique A. Enríquez, José E. Franco, Juan Manuel Gifard, Manuel A. Hernández, Rubén Martí, Fernando Moreno, Enrique O'Farril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Aldegundo Villaseñor. Por el Estado de Michoacán: Salvador Alcaraz Romero, Alberto Alvarado (Sup.), José Álvarez, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Amadeo Betancourt, Martín Castrejón, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Manuel Martínez Solórzano, Rafael Márquez, Francisco J. Música, Alberto Peralta, Jesús Romero Flores, José P. Ruiz, José Silva Herrera. Por el Estado de Morelos: Álvaro L. Alcázar, Antonio Garza Zambrano, José L. Gómez. Por el Estado de Nuevo León: Manuel Almaya, Ramón Gámez, Agustín Garza González, Reynaldo Garza, Luis Ilazilaliturri, Plutarco González (Sup.), Lorenzo Sepúlveda

(Sup.), Nicéforo Zambrano. Por el Estado de Oaxaca: Luis Espinoza, Manuel Herrera, José F. Gómez (Sup.), González Torres, Juan Sánchez, Porfirio Sosa, Leopoldo Payán, Celestino Pérez, Crisóforo Rivera Cabrera. Por el Estado de Puebla: Gabino Bandera y Malta, Alfonso Cabrera, Rafael P. Cañete, Froilán Cruz Manjarrez, Antonio de la Barrera, Gilberto de la Fuente, Porfirio del Castillo, Federico Dinorín, Salvador R. Guzmán, Epigmenio A. Martínez, Luis T. Navarro, David Pastrana Jaimes, José Rivera, Pastor Rouaix, Gabriel Rojano, Miguel Rosales, Leopoldo Vásquez Mellado, José Verástegui. Por el Estado de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perusquín, José María Truchuelo. Por el Estado de San Luis Potosí: Rafael Curiel, Cosme Dávila (Sup.), Samuel de los Santos, Rafael Martínez Mendoza (Sup.), Arturo Méndez, Rafael Nieto, Gregorio A. Tello, Dionisio Závila. Por el Estado de Sinaloa: Cándido Avilés, Emiliano C. García, Carlos M. Ezquerro Andrés Magallón, Pedro R. Zavala. Por el Estado de Sonora: Juan de Dios Bojórquez (Sup.), Flavio A. Bórquez, Luis G. Monzón, Ramón Ross. Por el Estado de Tabasco: Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes. Por el Estado de Tamaulipas: Pedro A. Chapa, Fortunato de Leija, Zeferino Fajardo, Emiliano P. Nafarrete. Por el Estado de Tepic: Marcelino Cedano (Sup.), Juan Espinosa Bávara, Cristóbal Limón. Por el Estado de Tlaxcala: Modesto González Galindo, Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal. Por el Estado de Veracruz: Cándido Aguilar, Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Victorio E. Góngora, Carlos L. Gracidas (Sup.), Heriberto Jara, Ángel S. Juarico, Josafat F. Márquez, Enrique Meza (Sup.), Benito Ramírez G., Saúl Rodiles, Alfredo Solares, Marcelo Torres. Por el Estado de Yucatán: Miguel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos, Enrique Recio, Héctor Victoria. Por el Estado de Zacatecas: Julián Adame, Juan Aguirre Escobar, Andrés L. Arteaga, Samuel Castañón, Antonio Cervantes, Jairo R. Dyer, Adolfo Villaseñor.

Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República para su debido cumplimiento.

Dado en Palacio Nacional de la ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.V. Carranza. Rúbrica.

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario encargado del Despacho de Gobernación. México.

Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.

Constitución y Reformas. México, cinco de febrero de mil novecientos diecisiete. Aguirre Berlanga. Rúbrica.

9.3. EXTRACT FROM THE POLITICAL CONSTITUTION OF THE MEXICAN UNITED STATES, 1917

TITLE I

Chapter I *Of individual rights*

- Article 1.* Right of every individual to enjoy the Constitutional guarantees.
- Article 2.* Prohibition of slavery.
- Article 3.* Right to education.
- Article 4.* Right to choose the profession, industry, trade or work that best suits each individual.
- Article 5.* Prohibition of personal, public service obligation.
- Article 6.* Expression of ideas.
- Article 7.* Freedom of Speech.
- Article 8.* Right of petition.
- Article 9.* Right of association.
- Article 10.* Right to bear arms.
- Article 11.* Freedom of Transit.
- Article 12.* No recognition of nobility titles.
- Article 13.* Right not to be judge by private laws or special tribunals.
- Article 14.* Non-retroactivity of the law.
- Article 15.* Extradition.
- Article 16.* Legal guarantees.
- Article 17.* Administration of justice.
- Article 18.* Organization of the penal system.
- Article 19.* Detention of the accused.

Article 20. Guarantees of the accused.
Article 21. Sentencing.
Article 22. Punishment considered prohibited, confiscation of property.
Article 23. Instances in a criminal trial.
Article 24. Freedom of religious belief.
Article 25. Transmission of correspondence.
Article 26. Rights of members of the military in wartime.
Article 27. Property rights.
Article 28. Prohibition of monopolies.
Article 29. Suspension of guarantees.

Chapter II
Of Mexicans

Article 30. Mexican nationality.
Article 31. Obligations of the Mexicans.
Article 32. Dual nationality, as the Mexican to play certain positions and functions.

Chapter III
Of Foreigners

Article 33. Quality of foreign.

Chapter IV
Mexican Citizens

Article 34. Requirements to become a Mexican citizen.
Article 35. Prerogatives of the citizen.
Article 36. Obligations of citizens.
Article 37. Loss of quality Mexican citizen.
Article 38. Suspension of rights or privileges of citizens.

TITLE II

Chapter I
National Sovereignty and Form of Government

Article 39. National Sovereignty.
Article 40. Form of government.
Section 41. Exercise of sovereignty.

Chapter II
Party Members of the Federation and the National Territory

Article 42. Integration of the National Territory.

- Article 43.* Parts of the Federation.
Article 44. Federal District.
Article 45. Extent and limits of the States of the Federation.
Article 46. Issues of boundaries between States.
Article 47. Territorial extent and limits of the State of Nayarit.
Article 48. Parts of the dependent territory of the Federation Government.

TITLE III

Chapter I

From the Division of Branch

- Article 49.* Division, for their exercise, the Supreme Power of the Federation.

Chapter II

The Legislative Branch

- Article 50.* Legislative Branch.

Section I

Election and Installation of Congress

- Article 51.* Composition of the Chamber of Deputies.
Article 52. Election of Representatives according to population.
Article 53. Election of Deputy substitute.
Article 54. Features of Representatives election.
Article 55. Requirements to become a deputy.
Article 56. Integration of the Senate.
Article 57. Election of Senator substitute.
Article 58. Senator and renewal of the House.
Article 59. Qualifications for Senator.
Article 60. Certification of elections by the Chambers.
Article 61. Inviolability of deputies and senators.
Article 62. Prohibition to Deputies and Senators.
Article 63. Attendance required to open session in the Chambers.
Article 64. Penalty for non-attendance of a deputy or senator.
Article 65. Start of period of Sessions.
Article 66. Termination of period of Sessions.
Article 67. Special Sessions.
Article 68. Location of the Houses.
Article 69. Opening of regular or special sessions, assistance and Chairman's report.
Article 70. Resolutions of Congress.

Section II

On the Initiative and forming the Laws

Article 71. Branch to initiate laws or decrees.

Article 72. Legislative Process.

Section III

Branch of Congress

Article 73. Branch of Congress.

Article 74. Branch of the House of Representatives.

Article 75. Approval of budget expenditures.

Article 76. Branch of the Senate.

Article 77. Branch of the Chambers without intervention of the other.

Section IV

The Permanent Commission

Article 78. Composition of the Permanent Commission.

Article 79. Powers of the Permanent Commission.

Chapter III

Executive Branch

Article 80. Executive Branch of the Union.

Article 81. Election of the President.

Article 82. Requirements to be President.

Article 83. Tenure of Chairman and no reelection.

Article 84. Appointment of Chairman, Interim President, acting president.

Article 85. Cases of absence of the President.

Article 86. Resignation of Chairman.

Article 87. Protest of the President.

Article 88. Permission from Congress to the absence of the President of the National Territory.

Article 89. Branch and duties of the President.

Article 90. Business of the administrative order by the Secretariats.

Article 91. Qualifications to be secretary of state.

Article 92. Requirements to be obeyed the regulations, decrees, resolutions and orders of the President.

Article 93. Duties of Clerks Office.

Chapter IV

The Judiciary Branch

Article 94. Judiciary of the Federation.

Article 95. Qualifications to be minister of Justice of the Supreme Court.

Article 96. Election, by the Congress, members of the Supreme Court's Office.
Article 97. Appointment of circuit magistrates and district judges, powers of the Supreme Court's of Justice.
Article 98. Temporary absence, or by death, resignation or incapacity of the ministers.
Article 99. Resignation as Minister of the Supreme Court's of Justice.
Article 100. Licensing of Ministers.
Article 101. Impediments to the justices of the Supreme Court's Office, Circuit Judges, District Judges and the respective secretaries.
Article 102. Organization of the Federal Public prosecutor.
Article 103. Courts resolve disputes of the Federation.
Article 104. It shall hear matters to the Courts of the Federation.
Article 105. Matters shall hear only the Supreme Court's of justice.
Article 106. Other issues that also is responsible to settle the Supreme Court's of Justice.
Article 107. Bases in which disputes shall be subject mentioned in Article 103.

TITLE IV RESPONSIBILITIES OF GOVERNMENT OFFICIALS

Article 108. Determination of who are public servants.
Article 109. Procedure in case of common crime committed by a public servant.
Article 110. Cases that do not enjoy constitutional immunity senior officials of the Federation.
Article 111. Procedure in case of official crimes.
Article 112. Not granting the defendant of a pardon.
Article 113. Period that may be claimed responsibility for official crimes and misdemeanors.
Article 114. There will be no jurisdiction in lawsuits of civil order.

TITLE V THE STATES OF THE FEDERATION

Article 115. Form of government adopted by States, political and administrative organization of the municipality.
Article 116. Arrangements between States with respect to its limits.
Article 117. Restrictions States.
Article 118. Restrictions without the consent of Congress.
Article 119. Obligation of each State to surrender criminals who claim them.
Article 120. Obligation of Governors.
Article 121. Public acts, records and procedures of the States.
Article 122. Case of foreign invasion or violence.

TITLE VI
LABOUR AND SOCIAL WELFARE

Article 123. Labor law.

TITLE VII
GENERAL MEASURES

Article 124. Powers granted to the States.

Article 125. Restriction to perform two elected offices simultaneously.

Article 126. Restriction to make payments not included in the budget.

Article 127. Compensation of public servants.

Article 128. Protest of public servants.

Article 129. Functions of the military in peacetime.

Article 130. Federal authorities to intervene in matters of religious worship and external discipline.

Article 131. Prerogative of the Federation.

Article 132. Property for a public service.

Article 133. Supremacy of the Constitution, laws and international treaties.

Article 134. Government contracts for public works.

TITLE VIII
OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 135. Amend mints to the Constitution.

TITLE IX
INVOLABILITY OF THE CONSTITUTION

Article 136. Inviolability of the Constitution.

9.4. POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

Querétaro, February 5th, 1917
136 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE ONE

Chapter I. Individual Rights
Chapter II. The Mexicans
Chapter III. The Aliens
Chapter IV. The Mexican Citizens

TITLE TWO

Chapter I. The National Sovereignty and the Form of Government
Chapter II. The Integral Parts of the Federation and the National Territory

TITLE THREE

Chapter I. The Division of Powers
Chapter II. The Legislative Power
Section I. The Election and Installation of Congress
Section II. The Initiative and Formation of the Laws
Section III. The faculties of the Congress
Section IV. The Permanent Committee
Chapter III. The Executive Power
Chapter IV. The Judicial Power

TITLE FOUR.
THE RESPONSIBILITIES OF THE PUBLIC SERVERS

TITLE FIVE.
THE STATES OF THE FEDERATION

TITLE SIX.
THE LABOR AND THE SOCIAL PREVENTION

TITLE SEVEN.
GENERAL PREVENTIONS

TITLE EIGHT.
REFORMS TO THE CONSTITUTION

TITLE NINE.
INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION
TRANSITORY ARTICLES (1- 16)

CONSTITUTION OF 1917

VENUSTIANO CARRANZA, First Chief of the Constitutionalist Army, in charge of the Executive Power of the Mexican United States, let you know:

That the Constituent Congress met in this city in December 1st, 1916, by virtue of the summon decree of September 19th of the same year, issued by the First Leadership, in accordance to what is prevented in the article 4 of the modifications that the 14th of the mentioned month were done to the decree of December 12th, 1914, given in the Honorable Veracruz, adding the Guadalupe Plan, of March 26th, 1913, has deigned to issue the following:

POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES
That reforms that of February 5th, 1857

TITLE ONE

Chapter I *Individual Rights*

Article 1. In the United Mexican States every individual shall enjoy the rights granted by this Constitution, which cannot be restricted or suspended but in such cases and under such conditions as are herein provided

Article 2. Slavery is forbidden in the United Mexican States. Slaves from abroad who enter national territory shall, by this act alone, recover their freedom and enjoy the protection afforded by the laws.

Article 3. The education is free; but it shall be secular that imparted in the official establishments of education, as well as the elementary primary and superior education imparted in the private establishments.

None religious corporation, or minister of any cult, might establish or direct primary instruction schools.

Private primary schools might only establish subjecting to official supervision.

In the official establishments primary education shall be gratuitously imparted.

Article 4. No person can be prevented from engaging in the profession, industry, commerce or occupation of his choice, provided that it is lawful. The exercise of this liberty shall only be forbidden by judicial order when the rights of third parties are infringed, or by administrative order, issued in the manner provided by Law, when the rights of society are violated. No one may be deprived of the fruits of his labor except by judicial decision.

The Law in each State shall determine the professions which may be practiced only with a degree, and set forth the requirements for obtaining it and the authorities empowered to issue it.

Article 5. No one might be compelled to render personal services without due remuneration and without his full consent, except labor imposed as a penalty by the judiciary, which shall abide by the provisions of fractions I and II of Article 123.

Only the following public services shall be obligatory, subject to the conditions set forth in the respective laws: military service and jury service as well as the discharge of the office of municipal councilman and offices of direct or indirect popular election.

The State cannot permit the execution of any contract, covenant, or agreement having for its object the restriction, loss or irrevocable sacrifice of the liberty of man, whether for work, education, or religious vows. The Law, therefore, does not allow the establishment of monastic orders, whatever be their denomination or purpose.

Likewise no person can legally agree to his own proscription or exile, or to the temporary or permanent renunciation of the exercise of a given profession or industrial or commercial pursuit.

A labor contract shall be binding only to render the services agreed on for the time set by Law and may never exceed one year to the detriment of the worker, and in no case may it embrace the waiver, loss, or restriction of any civil or political right.

Non-compliance with such contract by the worker shall only render him civilly liable for damages, but in no case shall it imply coercion against his person.

Article 6. The expression of ideas shall not be subject to any judicial or administrative investigation, unless it offends good morals, infringes the rights of others, incites to crime, or disturbs the public order.

Article 7. Freedom of writing and publishing writings on any subject is inviolable. No Law or authority may establish censorship, require bonds from authors or printers, or restrict the freedom of printing, which shall be limited only by the respect due to private life, morals, and public peace. Under no circumstances may a printing press be sequestered as the instrument of the offense.

The organic laws shall contain whatever provisions may be necessary to prevent the imprisonment of the vendors, newsboys, workmen, and other employees of the establishment publishing the work denounced, under pretext of a denunciation of offenses of the press, unless their guilt is previously established.

Article 8. Public officials and employees shall respect the exercise of the right of petition, provided that it is made in writing and in a peaceful and respectful manner; but in political matters this right may only be exercised by citizens of the Republic.

Every petition shall be replied to in writing by the official to whom it is addressed, and said official is bound to inform the petitioner of the decision taken within a brief period.

Article 9. The right to assemble or associate peaceably for any lawful purpose cannot be restricted; but only citizens of the Republic may do so to take part in the political affairs of the country. No armed deliberative meeting is authorized.

No meeting or assembly shall be deemed unlawful which has for its object the petitioning to any authority or the presentation of a protest against any act; nor may it be dissolved, unless insults are proffered against such authority or violence is resorted to, or threats are used to intimidate or compel such authority to render a favorable decision.

Article 10. The inhabitants of the Mexican United States are entitled to have arms of any kind in their possession for their protection and legitimate defense, except such as are expressly forbidden by Law, or which the nation may reserve for the exclusive use of the army, navy, or national guard; but they may not carry arms within inhabited places without complying with police regulations.

Article 11. Everyone has the right to enter and leave the Republic, to travel through its territory and to change his residence without necessity of a letter of security, passport, safe-conduct or any other similar requirement. The exercise of this right shall be subordinated to the powers of the judiciary, in cases of civil or criminal liability, and to those of the administrative authorities insofar as concerns the limita-

tions imposed by the laws regarding emigration, immigration and public health of the country, or in regard to undesirable aliens resident in the country.

Article 12. No titles of nobility, or hereditary or prerogatives and honors shall be granted in the Mexican United States, nor shall any effect be given to those granted by other countries.

Article 13. No one may be tried by private laws or special tribunals. No person or corporation shall have privileges or enjoy emoluments other than those given in compensation for public services and which are set by Law. Military jurisdiction shall be recognized for the trial of crimes against and violation of military discipline, but the military tribunals shall in no case have jurisdiction over persons who do not belong to the army. Whenever a civilian is implicated in a military crime or violation, the respective civil authority shall deal with the case.

Article 14. No Law shall be given retroactive effect to the detriment of any person whatsoever.

No person shall be deprived of life, liberty, property, possessions, or rights without a trial by a duly created court in which the essential formalities of procedure are observed and in accordance with laws issued prior to the act.

In criminal cases no penalty shall be imposed by mere analogy or by majority of reasoning. The penalty must be decreed in a Law in every respect applicable to the crime in question.

In civil suits the final judgment shall be according to the letter or the juridical interpretation of the Law; in the absence of the latter it shall be based on the general principles of Law.

Article 15. No treaty shall be authorized for the extradition of political offenders or of offenders of the common order who have been slaves in the country where the offense was committed. Nor shall any agreement or treaty be entered into which restricts or modifies the guarantees and rights which this Constitution grants to the individual and to the citizen.

Article 16. No one shall be molested in his person, family, domicile, papers, or possessions except by virtue of a written order of the competent authority stating the legal grounds and justification for the action taken. No order of arrest or detention shall be issued against any person other than by the competent judicial authority, and unless same is preceded by a charge, accusation, or complaint for a credible party or by other evidence indicating the probable guilt of the accused; in cases of *flagrante delicto*, any person may arrest the offender and his accomplices, turning them over without delay to the nearest authorities. Only in urgent cases instituted by the public attorney without previous complaint or indictment and when there is no judicial authority available, may the administrative authorities, on their strictest accountability, order the detention of an accused person, turning him over immediately to the judicial authorities. Every search warrant, which can only be issued by judicial authority and which must be in writing, shall specify the place to be searched, the person or persons to be

arrested, and the objects sought, the proceedings to be limited thereto; at the conclusion of which a detailed statement shall be drawn up in the presence of two witnesses proposed by the occupant of the place searched, or by the official making the search in his absence or should he refuse to do so.

Administrative officials may practice home visits for the sole purpose of ascertaining whether the sanitary and police regulations have been complied with; and may demand to be shown the books and documents required to prove compliance with fiscal rulings, in which latter cases they must abide by the provisions of the respective laws and be subject to the formalities prescribed for cases of search.

Article 17. No one may be imprisoned for debts of a purely civil nature. No one may take the Law into his own hands, or resort to violence in the enforcement of his rights. The courts shall be open for the administration of justice at such times and under such conditions as the Law may establish; their services shall be gratuitous and all judicial costs are, accordingly, prohibited.

Article 18. Arrest is permissible only for offenses punishable by imprisonment. The place of detention shall be completely separate from the place used for the serving of sentences.

The Federal and State governments shall organize the penal system within their respective jurisdictions on the basis of labor as a means of regeneration of the offender.

Article 19. No detention shall exceed three days without a formal order of commitment, which shall: the offense with which the accused is charged; the substance thereof; the place, time and circumstances of its commission; and the facts brought to light in the preliminary examination. These facts must be sufficient to establish the *corpus delicti* and the probable guilt of the accused. All authorities who order a detention or consent thereto, as well as all agents, subordinates, wardens, or jailers who execute it, shall be liable for any breach of this provision.

The trial shall take place only for the offense or offenses set forth in the formal order of commitment. Should it develop, during the course of the proceedings, that another offense, different from that charged, has been committed, a separate accusation must be brought. This, however, shall not prevent the joinder of both proceedings, if deemed advisable.

Any ill-treatment during arrest or confinement; any molesting without legal justification; any exaction or contribution levied in prison, are abuses which shall be punishable by Law and repressed by the authorities.

Article 20. In every criminal trial the accused shall enjoy the following guarantees:

- I. He shall be freed on demand and on furnishing bail which shall be fixed by the judge, according to his status and the gravity of the offense with which he is charged, provided, however, that such offense is not punishable with more than five years of imprisonment. No requirements shall be necessary other than placing the stipulated sum at the disposal of the

proper authorities or giving adequate security or personal bond enough to assure it.

- II. He may not be forced to be a witness against himself; wherefore denial of access or other means tending to this end is strictly prohibited.
- III. He shall be publicly notified within forty eight hours after being turned over to the judicial authorities of the name of his accuser and the nature of and cause for the accusation, so that he may be familiar with the offense with which he is charged and reply thereto and make a preliminary statement.
- IV. He shall be confronted with the witnesses against him, who shall testify in his presence if they are to be found in the place where the trial is held, so that he may cross-examine them in his defense.
- V. All witnesses and other evidence which he may offer shall be heard in his defense, for which he shall be given the time which the Law deems necessary for the purpose; he shall furthermore be assisted in securing the presence of the persons whose testimony he may request, provided they are to be found at the place where the trial is held.
- VI. He shall be entitled to a public trial by a judge or jury of citizens who can read and write and are also residents of the place and district where the offense was committed, provided the penalty for such offense exceeds one year of imprisonment. The accused shall always be entitled to a trial by jury for all offenses committed by means of the press against the public peace or against the domestic or foreign safety of the nation.
- VII. He shall be furnished with all information on record which he may request for his defense.
- VIII. He shall be tried within four months, if charged with an offense whose maximum penalty does not exceed two years of imprisonment; and within one year, if the maximum penalty is greater.
- IX. He shall be heard in his own defense, either personally or by counsel, or by both, as he may desire. Should he have no one to defend him, a list of official counsel shall be submitted to him, in order that he may choose one or more to act in his defense. If the accused does not wish to name any counsel for his defense, after being called upon to do so at the time of his preliminary examination, the court shall appoint his counsel for the defense. The accused may name his counsel immediately upon arrest, and shall be entitled to have him present at every stage of the trial; but he shall be obliged to make him appear as often as required by the court.
- X. In no event may imprisonment or detention be extended through failure to pay counsel fees or for any other monetary obligation, on account of civil liability, or for other similar cause.

Nor shall detention be extended beyond the time set by Law as the maximum for the offense charged.

The period of detention shall be reckoned as a part of the term of imprisonment imposed by sentence.

Article 21. The imposition of all penalties is an exclusive attribute of the judiciary. The prosecution of offenses pertains to the public prosecutor and to the judicial police, who shall be under the immediate command and authority of the public prosecutor. The punishment of violations of governmental and police regulations pertains to the administrative authorities, which punishment shall consist solely of imprisonment for a period not exceeding thirty-six hours or of a fine. Should the offender fail to pay the fine, it shall be substituted by a corresponding period of detention, which in no case may exceed fifteen days.

If the offender is a day laborer or a workman, his punishment cannot consist of a fine exceeding the amount of his wages, for one week.

Article 22. Punishment by mutilation and infamy, branding, flogging, beating with sticks, torture of any kind, excessive fines, confiscation of property and any other unusual or extreme penalties are prohibited.

Attachment proceedings covering the whole or part of the property of a person made under judicial authority to cover payment of civil liability arising out of the commission of an offense or for the payment of taxes or fines shall not be deemed a confiscation of property.

Capital punishment for political offenses is likewise prohibited; as regards other offenses, it can only be imposed for high treason committed during a foreign war, parricide, murder that is treacherous, premeditated, or committed for profit, arson, abduction, highway robbery, piracy, and grave military offenses.

Article 23. No criminal trial shall have more than three instances. No person, whether acquitted or convicted, can be tried twice for the same offense. The practice of absolving from the instance is prohibited.

Article 24. Everyone is free to embrace the religion of his choice and to practice all ceremonies, devotions, or observances of his respective faith, either in places of public worship or at home, provided they do not constitute an offense punishable by Law.

Every religious act of public worship must be performed strictly inside places of public worship, which shall at all times be under governmental supervision.

Article 25. Sealed correspondence sent through the mail shall be exempt from search and its violation shall be punishable by Law.

Article 26. No member of the army shall in time of peace be quartered in private dwellings without the consent of the owner, nor may he impose any obligation whatsoever. In time of war the military may demand lodging, equipment, provisions, and other assistance, in the manner laid down in the respective martial Law.

Article 27. Ownership of the lands and waters within the boundaries of the national territory is vested originally in the Nation, which has had, and has, the right to transmit title thereof to private persons, thereby constituting private property.

Private property shall not be expropriated except for reasons of public use and subject to payment of indemnity.

The Nation shall at all times have the right to impose on private property such limitations as the public interest may demand, as well as the right to regulate the utilization of natural resources which are susceptible of appropriation, in order to preserve them and to ensure a more equitable distribution of public wealth. With this purpose in view, necessary measures shall be taken to divide up large landed estates; to develop small landed holdings in operation; to create new agricultural centers, with necessary lands and waters; to encourage agriculture in general and to prevent the destruction of natural resources, and to protect property from damage to the detriment of society. Centers of population which at present either have no lands or water or which do not possess them in sufficient quantities for the needs of their inhabitants, shall be entitled to grants thereof, which shall be taken from adjacent properties, the rights of small landed holdings in operation being respected at all times. Therefore, they are confirmed the grants of terrains that have been done up to now in accordance to the decree of January 6th, 1915. The acquisition of the private properties necessary in order to achieve the before expressed objectives, shall be considered public use.

In the Nation is vested the direct ownership of all minerals or substances, which in veins, ledges, masses or ore pockets, form deposits of a nature distinct from the components of the earth itself, such as the minerals from which industrial metals and metalloids are extracted; deposits of precious stones, rock-salt and the deposits of salt formed by sea water; products derived from the decomposition of rocks, when subterranean works are required for their extraction; mineral or organic deposits of materials susceptible of utilization as fertilizers; solid mineral fuels; petroleum and all solid, liquid, and gaseous hydrocarbons.

In the Nation is likewise vested the ownership of the waters of the territorial seas, within the limits and terms fixed by international Law; those of lagoons and estuaries permanently or intermittently connected with the sea; those of natural, inland lakes which are directly connected with streams having a constant flow; those of rivers and their direct or indirect tributaries from the point in their source where the first permanent waters begin, to their mouth in the sea, whether they run to the sea or that they cross two or more states; those of intermittent flows that cross two states in its main tributary; the waters of the rivers, streams or gullies whenever they serve as a boundary of the national territory or of two federal divisions; waters extracted from mines and the channels, beds, or shores of interior lakes and streams in an area fixed by Law. Any other waters not included in the foregoing enumeration shall be considered an integral part of the property through which they flow or in which they are depos-

ited, but if they are located in two or more properties, their utilization shall be deemed a matter of public use, and shall be subject to laws enacted by the States.

In those cases to which the two preceding paragraphs refer, ownership by the Nation is inalienable and imprescriptible, and the exploitation, use, or appropriation of the resources concerned, by private persons or by companies organized according to Mexican laws, may not be undertaken except through concessions granted by the Federal Executive, in accordance with rules and conditions established by Law.

Legal capacity to acquire ownership of lands and waters of the Nation shall be governed by the following provisions:

- I. Only Mexicans by birth or naturalization and Mexican companies have the right to acquire ownership of lands, waters, and their appurtenances, or to obtain concessions for the exploitation of mines, waters or mineral fuels in the Mexican Republic. The State may grant the same right to foreigners, provided they agree before the Ministry of Foreign Relations to consider themselves as nationals in respect to such property, and bind themselves not to invoke the protection of their governments in matters relating thereto; under penalty, in case of noncompliance with this agreement, of forfeiture of the property acquired to the Nation. Under no circumstances may foreigners acquire direct ownership of lands or waters within a zone of one hundred kilometers along the frontiers and of fifty kilometers along the shores of the country.
- II. Religious institutions known as churches, regardless of creed, may in no case acquire, hold, or administer real property or hold mortgages thereon; such property held at present either directly or through an intermediary shall revert to the Nation, any person whosoever being authorized to denounce any property so held. Presumptive evidence shall be sufficient to declare the denunciation well founded. Places of public worship are property of the Nation, represented by the Federal Government, which shall determine which of them, may continue to be devoted to their present purposes. Bishoprics, rectories, seminaries, asylums, and schools belonging to religious orders, convents, or any other buildings built or intended for the administration, propagation, or teaching of a religious creed shall at once become the property of the Nation by inherent right, to be used exclusively for the public services of the Federal or State Governments, within their respective jurisdictions. All places of public worship hereafter erected shall be the property of the Nation.
- III. Public or private charitable institutions for the rendering of assistance to the needy, for scientific research, the diffusion of knowledge, mutual aid to members, or for any other lawful purpose, may not acquire more real property than actually needed for their purpose and immediately and directly devoted thereto; but they may acquire, hold, or administer mort-

gages on real property provided the term thereof does not exceed ten years. Under no circumstances may institutions of this kind be under the patronage, direction, administration, charge, or supervision of religious orders or institutions, or of ministers of any religious sect or of their followers, even though the former or the latter may not be in active service.

- IV. Commercial stock companies may not acquire, hold, or administer rural properties. Companies of this kind that are organized to operate any manufacturing, mining, or petroleum industry or for any other purpose that is not agricultural, may acquire, hold, or administer lands only of an area that is strictly necessary for their buildings or services, and this area shall be fixed in each particular case by the Federal or State Executive.
- V. Banks duly authorized to operate in accordance with the laws on credit institutions may hold mortgages on urban and rural property in conformity with the provisions of such laws but they may not own or administer more real property than is actually necessary for their direct purpose.
- VI. The centers of population which, by Law or in fact, possess a communal status shall have legal capacity to enjoy common possession of the lands, forests, and waters belonging to them or which have been or may be restored to them in accordance to the Law of January 6th, 1915; while the Law determines the manner of doing the division only of the lands.
- VII. With the exception of the corporate entities referred to in clauses III, IV, V and VI, no other civil corporate entity may hold or administer real property or hold mortgages thereon, with the sole exception of the buildings intended immediately and directly for the purposes of the institution. The States, the Federal District, and the Territories, and all Municipalities in the Republic, shall have full legal capacity to acquire and hold all the real property needed to render public services.

The federal and state laws, within their respective jurisdictions, shall determine in what cases the occupation of private property shall be considered to be of public utility; and in accordance with such laws, the administrative authorities shall issue the respective declaration. The amount fixed as compensation for the expropriated property shall be based on the value recorded in assessment or tax offices for tax purposes, whether this value had been declared by the owner or tacitly accepted by him by having paid taxes on that basis, increasing it in a ten percent. The increased value of such private property due to improvements which occurred after such assessment is the only portion of the value that shall be subject to the decision of experts and judicial proceedings. This same procedure shall be followed in the case of property whose value is not recorded in the tax offices.

They shall be declared null all the proceedings, dispositions, resolutions and operations of demarcation, concession, composition, sentences, transaction, transfer or auction which have deprived total or partially of their lands, forests, waters to the

population centers still existing, since the Law of June 25th, 1856; and they shall be null as well all the dispositions, resolutions and operations that take place in the future and produce equal effects. In consequence, all the lands, forests and waters of which the said corporations have been deprived, shall be restituted to them in accordance to the decree of January 6th, 1915, that shall continue in force as a constitutional Law. In case that, according to such decree via restitution was not appropriate the adjudication of the lands the one of the said corporations had solicited, the lands shall be left to them in state of endowment without that in any case they are left without the lands they needed. Exception made of the nullity before mention, only the lands which had been titled in the division done by virtue of the said Law of June 25th, 1856 or possessed in own name or in title of dominium for more than ten years, when its surface does not exceed from fifty hectares. The excess on this surface shall be immediately given back to the community compensating its value to the proprietor. All the restitution laws that by virtue of this precept are decreed shall be of immediate execution by the administrative authority. Only the members of the community shall be entitled to the terrains for division and shall the rights upon the same terrains be inalienable while they remain undivided, as well as those of property once the fraction has been done.

The exercise of actions pertaining to the Nation by virtue of the provisions of this article shall be made effective by judicial procedure, but during these proceedings and by order of the proper courts, which must render a decision within a maximum of one month, the administrative authorities shall proceed without delay to occupy, administer, auction, or sell the lands and waters in question and all their appurtenances, and in no case may the acts of such authorities be set aside until a final decision has been rendered.

During the next constitutional period, the Congress of the Union and the Legislatures of the states in their respective jurisdictions shall issue laws in order to carry out the fractioning of the great properties, according to the following basis:

a) In each State and territory it shall be stated the maximum extension of land of which one sole individual or legally constituted society might be proprietor.

b) The excess of the stated extension shall be fraction by the proprietor in the term that the local laws appoint, and the fractions shall be set on sale in the conditions that the governments approve in accordance to the laws.

c) If the proprietor shall deny doing the fractioning, it shall be done by the local Government, through expropriation.

d) The value of the fractions shall be paid by annual installments that amortize the capital and interests in no less than twenty years, during which the purchaser cannot sell the fractions. The type of interest shall not exceed of an annual five percent.

e) The proprietor shall be obliged to receive bonds of a special debt to guarantee the payment of the expropriated property. With this purpose the Congress of the Union shall issue a Law authorizing the states to create their agricultural debt.

f) The local laws shall organize the family assets, determining the good that shall constitute it, on the bases that it shall be inalienable and shall not be subject to seizure or any burden.

All contracts and concessions made by former Governments since the year 1876, which have resulted in the monopolization of lands, waters, and natural resources of the Nation, by a single person or company, are declared subject to revision, and the Executive of the Union is empowered to declare them void whenever they involve serious prejudice to the public interest.

Article 28. In the Mexican United States there shall be no monopolies or private or government entities of any kind; nor exemption from taxes; nor prohibitions under the guise of protection to industry; excepting only those relating to the minting of money, the mails, telegraph, and radiotelegraphy, to the issuance of paper money by a single bank to be controlled by the Federal Government, and to the privileges which for a specified time are granted to authors and artists for the reproduction of their works, and to those which, for the exclusive use of their inventions, may be granted to inventors and those who perfect some improvement.

Consequently, the Law shall punish severely and the authorities shall effectively prosecute every concentration or cornering in one or a few hands of articles of prime necessity for the purpose of obtaining a rise in prices; every act or proceeding which prevents or tends to prevent free competition in production, industry or commerce, or services to the public; every agreement or combination, in whatever manner it may be made, of producers, industrialists, merchants, and common carriers, or those engaged in any other service, to prevent competition among themselves and to compel consumers to pay exaggerated prices; and in general, whatever constitutes an exclusive and undue advantage in favor of one or more specified persons and to the harm of the public in general or of any social class.

Associations of workers, formed to protect their own interests, do not constitute monopolies.

Nor do cooperative associations or societies of producers constitute monopolies, which in defense of their interests or of the general interest, sell directly in foreign markets the domestic or industrial products which are the main source of wealth in the region in which they are produced, and which are not articles of prime necessity, provided that such associations are under the supervision and protection of the Federal or State Governments and that they were previously duly authorized for the purpose by the respective legislatures, which latter of themselves or on proposal of the Executive may, when the public need so requires, repeal the authorizations granted for the formation of the associations in question.

Article 29. In the event of invasion, serious disturbance of the public peace, or any other event which may place society in great danger or conflict, only the President of the Mexican Republic, with the consent of the Council of Ministers and with the approval of the Federal Congress, and during adjournments of the latter, of the Perma-

nent Committee, may suspend throughout the country or in a determined place the guarantees which present an obstacle to a rapid and ready combating of the situation; but he must do so for a limited time, by means of general preventive measures without such suspensions being limited to a specified individual. If the suspension should occur while the Congress is in session, the latter shall grant such authorizations that it deems necessary to enable the Executive to meet the situation. If the suspension occurs during a period of adjournment, the Congress shall be summoned without delay in order to grant them.

Chapter II

The Mexicans

Article 30. Mexican nationality is acquired by birth or by naturalization:

a) Mexicans by birth are, the children of Mexican parents, born within or out of the Republic, provided that in the last case the parents are Mexicans by birth. They are recognized as Mexicans by birth those who are born in the Republic of foreign parents, if within the next year that they are of age they express before the Secretariat of Foreign Affairs that they opt for the Mexican nationality and they prove before the latter that they have resided in the country for the last six years previous to such expression.

II) Mexicans by naturalization are:

a) The children of foreigner parents that are born in the country, if they opt for the Mexican nationality in the terms appointed in the previous bullet, without having the residence expressed in the latter.

b) Those who have resided in the country five consecutive years, they have an honest way of living and obtain letter of naturalization from the said Secretariat of Foreign Affairs.

c) The Indo-Latin's who establish in the Republic and express their desire to obtain the Mexican nationality. In the cases of these bullets, the Law shall determine the manner to prove the requirements in her demanded.

Article 31. The obligations of Mexicans are:

- I. To see that their children or wards, under fifteen years of age, attend public or private schools to obtain primary, elementary and military education during the time prescribed by the Law on Public Instruction in each State.
- II. To be present on the days and hours designated by the Town Council of the place in which they reside, to receive civic and military instruction which will equip them for the exercise of their rights as citizens, give them skill in the handling of arms, and acquaint them with military discipline.
- III. To enlist and serve in the National Guard, according to the respective organic Law, to secure and defend the independence, the territory, the

honor, the rights and interests of the motherland, as well as domestic tranquility and order; and

- IV. To contribute to the public expenditures of the Federation, and the State and Municipality in which they reside, in the proportional and equitable manner provided by Law.

Article 32. Mexicans shall have priority over foreigners under equality of circumstances for all class of concessions and for all employments, positions, or commissions of the Government in which the status of citizenship is not indispensable. In time of peace no foreigner can serve in the Army or in the police or public security forces.

In order to belong to the National Navy or the Air Force, and to discharge any office or commission, it is required to be a Mexican by birth. This same status is indispensable for captains, pilots, masters, engineers, mechanics of the Mexican merchant vessel, having also to be so, those who form the two third parts of the crew.

Chapter III

The Aliens

Article 33. Aliens are those who do not possess the qualifications set forth in *Article 30*. They are entitled to the guarantees granted by Chapter I, Title I, of the present Constitution; but the Federal Executive shall have the exclusive power to compel any foreigner whose remaining he may deem inexpedient to abandon the national territory immediately and without the necessity of previous legal action.

Foreigners may not in any way participate in the political affairs of the country.

Chapter IV

The Mexican Citizens

Article 34. All those who, having the status of Mexicans, likewise meet the following requirements are citizens of the Republic:

- I. Having reached eighteen years of age, if married, or twenty-one years of age if unmarried;
- II. Having an honest way of living.

Article 35. The prerogatives of citizens are:

- I. To vote at popular elections;
- II. To be voted for, for all offices subject to popular election, and to be appointed to any other employment or commission, if they have the qualifications established by Law;
- III. To associate together to discuss the political affairs of the country;
- IV. To bear arms in the Army or National Guard in the defense of the Republic and its institutions, under the provisions prescribed by Law;
- V. To exercise in all cases the right of petition.

Article 36. The obligations of citizens of the Republic are:

- I. To register on the tax lists of the municipality, declaring the property they possess, the industry, profession, or occupation by which they subsist; and also to register in the electoral poll books, according to the provisions prescribed by Law;
- II. To enlist in the National Guard;
- III. To vote in popular elections in the electoral district to which they belong;
- IV. To serve in the elective offices of the Federation or of the States, which shall in no case be gratuitous;
- V. To serve in municipal council positions where they reside, and to fulfill electoral and jury functions.

Article 37. The state of Mexican citizen is lost:

- I. By the voluntary acquisition of a foreign nationality;
- II. By officially serving the government of another country or accepting or using titles or functions without previous license of the Federal Congress, except the literary, scientific and humanistic titles that might be accepted freely; and
- III. By compromising in any form, before ministers of any cult or before any other person, to the non observation of the present Constitution or the laws emanated from it.

Article 38. The rights or prerogatives of citizens are suspended:

- I. Through failure to comply, without sufficient cause, with any of the obligations imposed by *Article 36*. This suspension shall last for one year and shall be in addition to any other penalties prescribed by Law for the same offense.
- II. Through being subjected to criminal prosecution for an offense punishable by imprisonment, the suspension to be reckoned from the date of the formal order of commitment;
- III. Throughout a term of imprisonment;
- IV. Through idleness or habitual drunkenness, affirmed in the manner prescribed by Law;
- V. Through being a fugitive from justice, the suspension being reckoned from the date of the order of arrest until the prescription of the criminal action;
- VI. Through final sentence imposing such suspension as a penalty.

The Law shall specify those cases in which civil rights may be lost or suspended and the manner of rehabilitation.

TITLE II

Chapter I

The National Sovereignty and Form of Government

Article 39. National sovereignty resides essentially and originally in the people. All public power originates in the people and is instituted for their benefit. The people at all times have the inalienable right to alter or modify their form of government.

Article 40. It is the will of the Mexican people to organize themselves into a federal democratic, representative Republic composed of free and sovereign States in all that concerns their internal government but united in a Federation established according to the principles of this fundamental Law.

Article 41. The people exercise their sovereignty through the Powers of the Union in those cases within its jurisdiction, and through those of the States, in all that relates to their internal affairs, under the terms established by the present Federal Constitution and the individual constitutions of the States respectively, the latter shall in no event contravene the stipulations of the Federal Pact.

Chapter II

The Integral Parts of the Federation and of the National Territory

Article 42. The national territory comprises the integral parts of the Federation and besides the islands in adjacent seas. It comprises as well the islands of Guadalupe and Revillagigedo situated in the Pacific Ocean.

Article 43. The integral parts of the Federation are the States of Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, the Federal District, and the territories of Baja California and Quintana Roo.

Article 44. The Federal District shall embrace its present territory, and in the event of the removal of the federal branches to some other place, it shall be erected into the State of Valle de Mexico, with such boundaries and area as the General Congress shall assign to it.

Article 45. The States and Territories of the Federation shall keep their present area and boundaries as of this day, provided that no difficulties arise concerning them.

Article 46. The States having pending boundary questions shall arrange or settle them as provided in this Constitution.

Article 47. The State of Nayarit shall have the territorial area and boundaries which at present comprises the Territory of Tepic.

Article 48. The islands of both seas which belong to the national territory, shall depend directly on the Government of the Federation, with the exception of those islands over which the States have up to the present exercised jurisdiction.

TITLE III

Chapter I

The division of Powers

Article 49. The Supreme Power of the Federation is divided, for its exercise, into Legislative, Executive, and Judicial.

Two or more of these Powers shall never be united in one single person or corporation, nor shall the Legislative be vested in one individual except in the case of extraordinary powers granted to the Executive of the Union, in accordance with the provisions of Article 29.

Chapter II

The Legislative Power

Article 50. The Legislative Power of the Mexican United States is vested in a General Congress, which shall be divided into two Chambers, one of deputies and the other of senators.

Section I

The election and Installation of Congress

Article 51. The Chamber of Deputies shall be formed of representatives of the Nation, elected in their totality every two years by the Mexican citizens.

Article 52. One proprietor Deputy shall be elected for sixty thousand inhabitants or fraction of over twenty thousand, according to the general census of the Federal District and of each State and Territory, the town of a State or territory whose population is less than that fixed by this article shall elect, nevertheless, a proprietor Deputy.

Article 53. For each proprietor Deputy there shall be elected one substitute.

Article 54. The election of deputies shall be direct and in the terms that the Electoral Law shall stipulate.

Article 55. The following are the requirements to be a Deputy:

- I. To be a Mexican citizen by birth, in the exercise of his rights;
- II. To have attained twenty-five years of age by the day of the election;
- III. To be a native of the State or Territory in which the election is held, or a resident thereof with effective residence for more than six months prior to its date. Residence is not lost by absence in the discharge of elective public office;
- IV. Not to be in active service in the federal army nor to hold command in the police or rural gendarmerie in the district where the election is held, within at least ninety days prior thereto;
- V. Not to be secretary or sub secretary of state, nor magistrate of the Supreme Court of Justice of the Nation, unless he shall have definitively resigned from his position ninety days before the election.

The governors of the States, their secretaries, the magistrates and federal judges cannot be elected in the districts of their jurisdiction, unless they separate from their positions ninety days before their election.

VI. Not to be a minister of any religious cult.

Article 56. The Chamber of Senators shall be formed of two members for each State and two for the Federal District appointed in direct election.

The legislature of each State shall declare elected the person obtaining a majority of the votes casted.

Article 57. For each proprietary senator a substitute shall be elected.

Article 58. Each senator shall last four years in his entrustment. The Chamber of senators shall be renewed by half every two years.

Article 59. To be a senator the same requirements must be met as to be a Deputy except that of age, which shall be thirty-five years of age attained by the date of the election.

Article 60. Each Chamber shall qualify the elections of its members and shall decide any doubts with respect thereto.

Its decision shall be final and unimpeachable.

Article 61. Deputies and senators are inviolable for opinions expressed by them in the discharge of their offices and shall never be called to account for them.

Article 62. Proprietary deputies and senators, during their terms of office, may not hold any other commission or employment of the Federation or of the States for which they receive a salary, without prior permission from the respective Chamber; but their representative functions shall thereupon cease, while they are holding the new position. The same rule shall apply to substitute deputies and senators when they were in the exercise. Infraction of this provision shall be punishable by loss of the status of Deputy or Senator.

Article 63. The Chambers cannot open their sessions nor exercise their duties without the presence, in the Senate, of two thirds, and in the Chamber of Deputies, of more than half of the total number of members; but those present in either Chamber must assemble on the day appointed by Law and compel the absentees to attend within thirty days following, with the warning that if they do not do so it shall be understood that by that sole fact they do not accept their office, and the substitutes shall be immediately called and must present themselves within an equal period, and if they fail to do so, the position shall be declared vacant and a new election shall be called.

It is also understood that deputies or senators who fail to attend for ten consecutive days, without justifiable cause or previous leave from the president of their respective Chamber, of which the Chamber shall be advised, renounce their attendance until the next period, and their substitutes shall be called at once.

If there shall be no quorum to install either Chamber or to exercise their functions when once installed, the substitutes shall be called immediately to present them-

selves within the shortest possible time, to discharge their office until the expiration of the thirty days above mentioned.

Article 64. Deputies and senators, who, without justifiable cause or without permission of the president of the respective Chamber, do not attend a session, shall have no right to remuneration for the day on which they were absent.

Article 65. The Congress shall meet on the first day of September of each year to celebrate ordinary sessions in which it shall occupy with the following matters:

- I. To audit the public accounts of the previous year that shall be submitted to the Chamber of Deputies within the first ten days after the opening of the session. The audit shall not be limited to investigation as to whether the amounts expended are or are not in accord with the respective items of the budget, but shall extend to an examination of the exactness and justification of the expenditures made and of any responsibilities arising there from.

There can be no secret items other than those considered necessary because of that character in the budget itself and which the secretaries shall make us of by written order of the President of the Republic.

- II. To examine, discuss, and approve the budget of the following fiscal year and to impose the necessary taxes to cover it;
- III. To study, discuss, and vote on all bills which are introduced, and to decide on all other matters which pertain to it according to this Constitution.

Article 66. The period of regular sessions shall continue for the time necessary to dispose of all matters mentioned in the preceding article; but it cannot be prolonged beyond December 31st of the same year.

If both Chambers are not in accord as to the termination of the sessions before the date indicated, the President of the Republic shall decide.

Article 67. The Congress shall meet in extraordinary sessions whenever the President of the Republic shall convoke them for that purpose; but in such case they shall occupy themselves only with the matter or matters which the President submitted to their attention, which shall be stated in the respective call. The Executive may convoke only one Chamber to extraordinary sessions, when it is about a matter exclusive to it.

Article 68. The two Chambers shall reside in the same place and cannot transfer to another unless they previously agree to the transfer and on the time and manner of so doing, designating the same place for the meeting of both. But if both in agreeing on transfer differ in regard to the time, manner, and place, the Executive shall settle the difference by choosing one of the two extremes in question. Neither Chamber may suspend its sessions for more than three days without the consent of the other.

Article 69. The President of the Republic shall attend the opening of the sessions of the Congress, whether ordinary or extraordinary, and shall submit a report, in writing, in the first case in which he shall indicate the general state of the administration

of the country; and in the second case to express as to the motives or reasons that led to the call and the matter or matters that merit a peremptory sentence.

Article 70. Every resolution of the Congress shall have the character of a Law or of a decree. The laws or decrees shall be communicated to the Executive signed by the Presidents of both Chambers and by a secretary of each, and shall be promulgated in this form: *The Congress of the Mexican United States decrees: (Text of the Law or decree).*

Section II

The initiative and Enactment of Laws

Article 71. The right to introduce laws or decrees belongs:

- I. To the President of the Republic;
- II. To the deputies and senators of the Congress of the Union; and
- III. To the legislatures of the States.

The bills submitted to the President of the Republic, by the Legislatures of the States or by deputations thereof shall be referred at once to Committee. Those which are presented by deputies or senators shall be subject to the procedure prescribed in the regulations on debates.

Article 72. Every bill or decree project, whose resolution does not pertain exclusively to one of the Chambers, shall be discussed successively in both, the regulations on debate being observed as to form, intervals of time, and mode of procedure in discussions and voting.

a. A bill approved in the Chamber of its origin shall be referred to the other for discussion. If the latter approves it, it shall be sent to the Executive who, if he has no objections to make, shall immediately publish it.

b. Every bill shall be regarded as approved by the Executive if it is not returned to the Chamber of its origin within ten business days; unless, during this time, the Congress shall have adjourned or suspended its sessions, in which case the return must be made on the first business day on which the Congress next meets.

c. A bill or decree project rejected in whole or in part by the Executive shall be returned, with his objections, to the Chamber of origin. It must be discussed anew by the latter, and if it is confirmed by a vote of two thirds of the total membership it shall again be sent to the revising Chamber. If it is sanctioned by the latter by the same majority, the bill shall become a Law or decree and shall be returned to the Executive for promulgation.

The voting on a Law or decree shall be by roll call.

d. If any bill or decree project is rejected in its entirety by the Chamber of revision, it shall be returned to that of its origin with the objections made by the former. If upon examining it anew, it is approved by an absolute majority of the members present, it shall be returned to the Chamber that rejected it, which shall again consider it and if it approves it by the same majority, it shall be sent to the Executive for the

purposes of fraction a) above; but if disapproved, it cannot be again introduced in the same period of sessions.

e. If a bill is rejected in part, or amended or added to by the revising Chamber, the new discussion in the Chamber of origin shall be confined to the part rejected or to the amendments or additions, without alteration in any way of the articles approved. If the additions or amendments made by the revising Chamber are approved by an absolute majority of votes present in the Chamber of origin, the entire bill is sent to the Executive for the purposes indicated in fraction a). If the additions or amendments made by the revising Chamber are disapproved by a majority of the votes in the Chamber of origin, they shall be returned to the former for consideration of the reasons of the latter, and if the amendments or additions are rejected in this second revision by an absolute majority of votes present, the bill, insofar as it has been approved by both Chambers, shall be sent to the Executive for the purposes indicated in fraction a). If the revising Chamber insists, by an absolute majority of votes present, upon such amendments or additions, the entire bill shall not be again presented until the following period of sessions unless both Chambers agree, by an absolute majority of their members present, that the Law or decree be issued only with the approved articles, and those added or amended shall be reserved for examination and vote at the following sessions.

f. In the interpretation, amendment, or repeal of laws or decrees, the same procedures shall be followed as that established for their enactment.

g. Every bill or proposed decree which is rejected in the Chamber of its origin cannot be again introduced in the sessions of that year.

h. The enactment of laws or decrees may commence in either of the two Chambers, without distinction, with the exception of bills dealing with loans, taxes, or imposts, or with the recruiting of troops, all of which must be discussed first in the Chamber of Deputies.

i. Bills or decree projects shall preferentially be discussed in the Chamber in which they are introduced, unless one month elapses since they were sent to the reporting committee without a report being made, in which case the bill may be discussed in the other Chamber.

j. The Federal Executive cannot offer objections to the resolutions of the Congress or of either Chambers, when they exercise functions of an electoral body or of a jury, nor when the Chamber of Deputies declares that a high functionary of the Federation should be impeached for official crimes.

Neither may he do so in regard to a decree of convocation issued by the Permanent Committee, in the case of article 84.

Section III

Powers of Congress

Article 73. The Congress has the power:

- I. To admit new States and Territories into the Federal Union;
- II. To erect the Territories into States when they shall have a population of eighty thousand inhabitants and the resources necessary to provide for their political existence;
- III. To form new States within the boundaries of existing ones, for which purpose it shall be necessary:
 1. That the fraction or fractions seeking to be made a State shall have a population of at least one hundred and twenty thousand inhabitants.
 2. That it be proven before Congress that they possess the resources necessary to provide for their political existence.
 3. That the legislatures of the States involved are heard as to the convenience or inconvenience of the formation of the new State, and they shall be required to render their report within six months from the date that the respective communication was submitted to them.
 4. That the Executive of the Federation likewise is heard, who shall send his report within seven days from the date on which it was requested of him.
 5. That the creation of the new State be adopted by a vote of two thirds of the deputies and senators present in their respective Chambers.
 6. That the resolution of the Congress be ratified by a majority of the legislatures of the States, with a copy of the record before them, provided that the legislatures of the States whose territory is involved have given their consent.
 7. If the legislatures of the States whose territory is involved have not given their consent, the ratification mentioned in the foregoing fraction must be given by two thirds of the legislatures of the other States.
- IV. To arrange permanently the boundaries of the States, settling any differences that may arise between them in regard to the demarcation of their respective territories, except when these differences may be of a contentious character.
- V. To change the seat of the Supreme Powers of the Federation.
- VI. To legislate on all matters concerning the Federal District and Territories, subject to the following bases:
 1. The Federal District and the Territories shall be divided into Municipalities, which shall have a land area and number of inhabitants sufficient to be able maintain themselves on their own resources and contribute to their ordinary expenditures.
 2. Each Municipality in the Territories shall be entrusted to a Town Council elected by direct popular vote.
 3. The Government of the Federal District and of the territories shall be entrusted to the governors who shall directly depend on the President of the Republic. The Governor of the Federal District shall agree with the President of the Republic and those of the territories, through the conduct that the Law determines. Both the

Governor of the Federal District as that of each territory shall be freely appointed and removed by the President of the Republic.

4. The magistrates and judges of First Instance of the Federal District and of the territories shall be appointed by the Congress of the Union, which shall erect in Electoral College in each case.

In the temporary or absolute absences of the magistrates, these appointments shall be substituted by the Congress of the Union, and during its recess by provisional appointments of the Permanent Commission. The organic Law shall determine the manner to substitute the judges during their temporary absences and shall designate the authority in which they shall be demanded the liabilities in which they incur, except that prevented by this Constitution regarding to the liabilities of the public servers.

Since 1923, the magistrates and judges to which this paragraph refers to, may only be removed from their positions, if they observe bad conduct and prior the respective liability trial, unless that they are promoted to a superior employment. Since the same date the remuneration that such servers shall receive in exchange of their services may not be decreased during their entrustment.

5. The public prosecutor in the Federal District and in the Territories shall be in charge of an Attorney General, who shall reside in México City, and such number of agents as shall be determined by Law; and he shall depend directly on the President of the Republic, who may freely appoint and remove him.

- VII. To levy the necessary taxes to cover the Budget.
- VIII. To fix the bases upon which the President of the Republic may borrow on the credit of the Nation; to approve such loans and to acknowledge and order payment of the national debt.
- IX. To issue duties on the foreign commerce and to prevent the establishment of restrictions on commerce from State to State.
- X. To legislate throughout the Republic on mining, commerce, credit institutions and to establish an Only Bank of Emission under the provisions of Article 28 of the Constitution.
- XI. To create and abolish public offices of the Federation and to fix, increase, or decrease their salaries.
- XII. To declare war, in the light of information submitted by the Executive.
- XIII. To regulate the manner in which the letters of marquee shall be issued; to enact laws pursuant to which captures on sea and land must be declared good or bad; and to enact maritime laws applicable in peace and war.
- XIV. To raise and maintain the armed forces of the Union, to wit: army, and navy and to regulate their organization and service.
- XV. To prescribe regulations for the purpose of organizing, arming, and disciplining the National Guard, reserving to the citizens who form it the appointment of their respective commanders and officers, and to the States

the power of training them in accordance with the discipline prescribed by such regulations.

XVI. To enact laws in regard to nationality, the legal status of foreigners, citizenship, naturalization, colonization, emigration and immigration, and the general health of the country.

1. The General Health Council shall depend directly upon the President of the Republic, without the intervention of any Secretariat of State, and its general provisions shall be compulsory throughout the country.

2. In case of serious epidemics or danger of invasion of the country by exotic diseases, the Department of Health shall be required to dictate immediately the necessary preventive measures, subject to subsequent approval by the President of the Republic.

3. The health authority shall be executive and its provisions shall be obeyed by the administrative authorities of the country.

4. The measures which the Council shall have put into effect in the campaign against alcoholism and the sale of substances which poison the individual and degenerate the race shall afterwards be examined by the Congress of the Union, in cases within its competency.

XVII. To enact laws concerning general means of communication and regarding to posts and post offices; to enact laws on the use and utilization of waters under federal jurisdiction.

XVIII. To establish mints, fix the standards of coins and coinage, to determine the value of foreign currencies, and to adopt a general system of weights and measures.

XIX. To establish rules for the occupation and alienation of vacant lands and fix their price.

XX. To enact laws for the organization of the Mexican Diplomatic Corps and Consular Corps.

XXI. To define crimes and offenses against the Federation and to prescribe the punishments to be imposed for them.

XXII. To grant amnesties for crimes within the jurisdiction of the federal courts.

XXIII. To prescribe its own rules and adopt necessary measures to enforce the attendance of absent deputies and senators, and to correct the offenses or omissions of those present.

XXIV. To enact the organic Law governing the Auditor General's Office.

XXV. To constitute itself in Electoral College and appoint the magistrates of the Supreme Court of Justice of the Nation, the magistrates and judges of the Federal District and Territories.

XXVI. To accept the resignation of the magistrates of the Supreme Court of Justice of the Nation and of the magistrates and judges of the Federal Dis-

strict and Territories, and to appoint their substitutes in their temporary or absolute absences.

- XXVII. To establish professional schools of scientific investigation, of fine arts, technical education, practical schools of agriculture, of arts and crafts, museums, libraries, observatories, and other institutions concerning the general culture of the inhabitants of the Nation, meanwhile such establishments may sustain themselves by the initiative of the particular individuals, without this power being exclusive of the Federation. The diplomas issued by the aforementioned establishments shall be valid throughout the Republic.
- XXVIII. To constitute itself in Electoral College and elect the citizen who shall substitute the President of the Republic, whether it is with substitute nature or provisional, in the terms prevented in the articles 84 and 85 of this Constitution.
- XXIX. To accept the resignation from office of the President of the Republic.
- XXX. To examine the account which the Executive must submit to it annually, which examination must include not only conformity of the items expended within the budget of expenditures, but also the correctness and justification of such items.
- XXXI. To enact all laws that may be necessary to enforce the foregoing powers, and all others granted by this Constitution to the Powers of the Union.

Article 74. The exclusive powers of the Chamber of Deputies are:

- I. To constitute itself as Electoral College in order to exercise the powers assigned to it by Law with respect to the election of the President of the Republic.
- II. To supervise, through a committee drawn from its body, the correct performance of the functions of the Auditor General's Office.
- III. To appoint the chiefs and other employees of that office.
- IV. To approve the annual budget of expenditures prior discussion of the taxes that in its opinion must be levied to cover it.
- V. To take cognizance of accusations against public officials mentioned in this Constitution, for official crimes, and in proper cases to present impeachment before the Chamber of Senators; and to constitute itself as a grand jury in order to decide whether or not to proceed against any of the public officials who enjoy constitutional prerogative, when they are accused of common crimes.
- VI. Any others which this Constitution expressly confers upon it.

Article 75. The Chamber of Deputies, upon approving the budget of expenditures, may not fail to fix the remuneration which corresponds to an office which is established by Law; and in the event that for any reason it fails to fix such remuneration,

the amount fixed in the previous budget or in the Law which established the office shall be understood to be designated.

Article 76. The exclusive powers of the Senate are:

- I. To approve the treaties and diplomatic conventions made by the President of the Republic with foreign powers.
- II. To confirm the appointments which said official makes of ministers, diplomatic agents, consuls general, superior employees of the Treasury, coronels and other superior chiefs of the national army and navy, in accordance with provisions of Law.
- III. To authorize him also to permit the departure of national troops beyond the borders of the country, the passage of foreign troops through the national territory, and the sojourn of squadrons of other powers for more than one month in Mexican waters.
- IV. To give its consent for the President of the Republic to order the National Guard outside of its respective States or Territories, fixing the necessary force.
- V. To declare, whenever the constitutional powers of a State have disappeared, that the condition has arisen for appointing a provisional governor, who shall call elections in accordance with the constitutional laws of the said State. The appointment of a governor shall be made by the Senate from a list of three proposed by the President of the Republic, with the approval of two thirds of the members present, and during adjournments, by the Permanent Committee, according to the same rules. The official thus appointed cannot be elected constitutional governor in the elections held pursuant to the call which he issues. This provision shall govern whenever the constitution of a State does not make provision for such cases.
- VI. To settle political questions which may arise between the powers of a State, whenever any of them shall apply to the Senate for the purpose, or whenever, by reason of such questions, the constitutional order shall be interrupted through a conflict of arms. In this event the Senate shall declare its decision, subjecting itself to the General Constitution of the Republic and to that of the State.

The Law shall regulate the exercise of this and of the foregoing powers.

- VII. To constitute itself as a grand jury to take cognizance of official crimes of the officials which this Constitution expressly designates.
- VIII. Any others which this Constitution may assign to it.

Article 77. Each of the Chambers, without the intervention of the other, may:

- I. Dictate economic resolutions relating to its internal organization.
- II. Communicate with the co-legislative Chamber and with the Executive of the Union, through committees of its own body.

- III. Appoint the employees of its secretariat and prescribe the internal regulations thereof.
- IV. Issue a call for extraordinary elections for the purpose of filling vacancies of its respective members.

Section IV

The Permanent Committee

Article 78. During the adjournment of Congress there shall be a Permanent Committee composed of twenty-nine members, of whom fifteen shall be deputies and fourteen senators, appointed by their respective Chambers on the eve of the close of the sessions.

Article 79. The Permanent Committee, in addition to the powers which this Constitution expressly confers upon it, shall have the following:

- I. To give its consent for the use of the National Guard, in the cases mentioned in Article 76, section IV.
- II. To receive the oath of the President of the Republic, the members of the Supreme Court of Justice of the Nation, and of the magistrates of the Federal District and Territories, if the latter officials should be in Mexico City.
- III. To report on all the matters that, are left without resolution in the files so that they may be acted upon at the next period of sessions.
- IV. To summon to extraordinary sessions, in the case of official crimes or of common nature committed by secretaries of the State of justices of the Supreme Court, and federal official crimes, committed by the Governors of the States, provided that it is not already instructed in process by the Committee of Grand Jury, in which case no business of the Congress shall be discussed, neither the sessions shall be prolonged for more time than that indispensable to rule.

Chapter III

The Executive Power

Article 80. The exercise of the Supreme Executive Power of the Union is vested in a single individual who is designated *President of the Mexican United States*.

Article 81. The election of the President shall be direct and under the terms prescribed by the Electoral Law.

Article 82. In order to be President it is required:

- I. To be a Mexican citizen by birth, in the full enjoyment of his rights, and son of Mexican parents by birth.
- II. To have attained 35 years of age at the time of the election.
- III. To have resided in the country during the entire year prior to the day of the election.

- IV. Not to possess ecclesiastic status nor be a minister of any cult.
- V. Not to be in active service, in case of belonging to the army, within ninety days prior to the day of the election.
- VI. Not to be a Secretary or Sub secretary of State, unless he shall have resigned such position ninety days prior to the day of the election.
- VII. Not to have appeared, directly or indirectly, in any riot, rebellion or putsch.

Article 83. The President shall assume the duties of office on the first of December and shall last four years in them and may never be reelected. A citizen who has held the office of President of the Republic, by popular election or by appointment as ad interim, provisional, or substitute President, may not be reelected president for the immediate period.

Article 84. In the event of the absolute absence of the President of the Republic, occurring during the first two years of his term, if the Congress is in session, it shall immediately constitute itself as an electoral college, and if there is at least two thirds of the total membership present, it shall name by secret scrutiny, and by an absolute majority of votes, a President; the same Congress shall issue, a call for the election of a President to complete the respective term; procuring that the appointed date for this event coincides as possible with the date of the next elections of deputies and senators for the Congress of the Union.

If the Congress is not in session, the Permanent Committee shall immediately name a provisional President and shall call Congress in extraordinary sessions in order that it, in turn, may designate an interim President and issue the call for presidential elections as indicated in the preceding paragraph.

When the absence of the President occurred within the last two years of his term, if the Congress were in sessions, it shall designate a substitute President to complete the term; if the Congress were not in sessions, the Permanent Committee shall name a provisional President and shall convoke the Congress in extraordinary sessions in order that it may constitute itself into an electoral college and elect the substitute President.

The provisional President may be elected by the Congress as substitute.

The citizen who had been designated provisional President to call to elections, in the case of the absence in the two first years of the period, he may not be elected in the elections celebrated in reason of the absence of the president, to cover the absence for which he was designated.

Article 85. If at the commencement of a constitutional period the elected President does not present himself, or if the elections have not been held and the results declared on December first, the President whose term has ended shall nevertheless cease to function, and at once the executive power shall be entrusted to an individual whom the Congress shall designate as interim President, or if Congress is not in session, to an individual whom the Permanent Committee shall designate as provisional President; proceeding according to the provisions of the preceding article.

When the absence of the President were temporary, the Congress, if in session, or if not, the Permanent Committee, shall designate an interim President to function during the period of the disability.

If the temporary absence becomes absolute, the procedure described in the preceding article shall be observed.

In case of leave the President of the Republic, the interim shall not be prevented to be elected in the immediate period, provided that he was not in discharge at the moment of the elections.

Article 86. The office of President of the Republic can be resigned only for grave cause, which shall be passed upon by the Congress of the Union, to which the resignation must be presented.

Article 87. The President, upon taking possession of his office, shall make before the Congress of the Union, or if in adjournment before the Permanent Committee, the following affirmation: *I solemnly promise that I will observe and enforce the Political Constitution of the United Mexican States and the laws enacted in pursuance thereof, and that I will discharge loyally and patriotically the office of President of the Republic which the people have conferred upon me, in all ways looking to the welfare and prosperity of the Union; and if I do not do so may the Nation demand it of me.*

Article 88. The President of the Republic may not absent himself from the national territory without the permission of the Congress of the Union.

Article 89. The powers and duties of the President are the following:

- I. To enact and execute the laws issued by the Congress of the Union, providing for their exact enforcement in the administrative sphere.
- II. To freely appoint and remove the secretaries of the Government, the Attorney General of the Republic, the governor of the Federal District and the governors of the Territories, the attorney general of the Federal District and Territories, to remove diplomatic agents and superior employees of the Treasury, and to freely appoint and remove all other employees of the Union whose appointment or removal is not otherwise provided for in the Constitution or by Law.
- III. To appoint ministers, diplomatic agents, and consuls general, with the approval of the Senate.
- IV. To appoint, with the approval of the Senate, the coronels and other superior officers of the army, navy, and air force, and the superior employees of the Treasury.
- V. To appoint the other officers of the army, navy, and air force, as provided by Law.
- VI. To dispose of the permanent armed forces, including the land army, the marine navy and the air force for internal security and exterior defense of the Federation.

- VII. To dispose of the National Guard for the same purposes, under the terms indicated in fraction IV of *Article 76*.
- VIII. To declare war in the name of the Mexican United States, pursuant to a previous Law of the Congress of the Union.
- IX. To grant letters of marque subjecting to the bases stated by the Congress.
- X. To direct diplomatic negotiations and make treaties with foreign powers, submitting them to the confirmation of the federal Congress.
- XI. To convoke the Congress in extraordinary session when the Permanent Committee so resolves.
- XII. To give to the judiciary whatever assistance it may need for the expeditious exercise of its functions.
- XIII. To open all classes of ports, establish maritime and frontier custom houses, and designate their location.
- XIV. To grant, according to Law, pardons to criminals convicted of crimes within the jurisdiction of the federal courts, and to those convicted of common crimes in the Federal District and Territories.
- XV. To grant exclusive privileges, for a limited time, in accordance with the respective Law, to discoverers, inventors, or improvers in any branch of industry.
- XVI. When the Chamber of Senators is not in session, the President of the Republic may make the appointments mentioned in fractions III and IV, provided that he subjects it to the approval of such Chamber when it is reunited.
- XVII. And all other expressly conferred on him by this Constitution.

Article 90. For the dispatch of the administrative business of the Federations there shall be the number of secretaries that the Congress shall establish by Law, which shall distribute the business to be entrusted to each Secretariat.

Article 91. To be a secretary it is required to be a Mexican citizen by birth, to be in exercise of his rights, and be at least thirty years of age.

Article 92. All regulations, decrees, and orders of the President must be signed by the Secretary of the Dispatch in charge of the branch to which the matter pertains, and without this requirement they shall not be obeyed. The regulations, decrees, and orders of the President relating to the Government of the Federal District and to the administrative departments, shall be sent directly by the President to the governor of the District and to the chief of the respective department.

Article 93. The secretaries of the Dispatch, as soon as the regular period of sessions is opened, shall give a report to the Congress on the state of their respective branches. Either of the Chambers may summon the secretaries of state for information, whenever a Law is under discussion or a matter is being studied relating to their secretariat.

Chapter IV

The Judicial Power

Article 94. The Judicial Power of the Federation is vested in a Supreme Court of Justice, in circuit and district tribunals, whose number and attribution shall be stipulated by a Law. The Supreme Court of Justice of the Nation shall be formed of eleven justices and shall function as a full Tribunal, having public hearings, except the cases in which the morals and the public interest demanded so having to celebrate their session in the periods and terms that the Law establishes. In order that there is session in the Court it is necessary that at least two third parts of the total of its member concur; and the resolutions shall be taken upon absolute majority of votes.

Each one of the justices of the Supreme Court designated to form this power, in the next elections, shall last two years in his entrustment; those that were elected at the end of this first period shall last four years and from 1923 and after the justices of the Court, the magistrates of Circuit and the District Judges may only be removed when they observe bad conduct, and prior due liability process, unless the magistrates and the judges are promoted to a superior degree.

The same precept shall rule in that applicable within the periods of two and four years to which this article refers to.

Article 95. To be elected minister of the Supreme Court of Justice, it is necessary:

- I. To be a Mexican citizen by birth, in full exercise of political and civil rights.
- II. To be thirty-five years of age on the day of the election.
- III. To hold professional degree of lawyer issued by an authority or corporation legally empowered to do so.
- IV. To enjoy a good reputation and not to have been convicted of a crime punishable by imprisonment of more than one year; but if it concerned robbery, fraud, forgery, abuse of confidence or other crime which seriously injures good fame as conceived by the public, he shall be disqualified for the office whatever the penalty may have been.
- V. To have resided in the country during the last five years, except in case of absence in the service of the Republic for a period of less than six months.

Article 96. The members of the Supreme Court of Justice of the Nation shall be elected by the Congress of the Union in functions of Electoral College, being indispensable that at least two third parts of the total number of deputies and senators concur. The election shall be done in secret scrutiny and upon absolute majority of votes. The candidates shall be previously proposed, one by each Legislature of the States, in the form prevented by the respective local Law.

If absolute majority were not obtained in the first voting, it shall be repeated among those two candidates who had obtained more votes.

Article 97. The circuit magistrates and district judges shall be appointed by the Supreme Court of Justice of the Nation, shall have the qualifications which the Law requires and shall hold office for four years, they may not be removed from office, without prior due process of liability or for the disability of discharging it, in the terms prevented by the Law itself.

The Supreme Court of Justice may also change the seat of the district judges, transferring them from one district to another, or fixing their residence in another town, as it may deem convenient for better public service. The same may be done with respect to circuit magistrates.

The Supreme Court of Justice of the Nation may also appoint supernumerary circuit magistrates and district judges to assist in the work of the courts and tribunals where there is an excess of business, in order to provide for prompt and expeditious administration of justice; and it shall appoint one or more of its members, or some district judge or circuit magistrate, or designate one or more special commissioners, when deemed advisable, or if the federal Executive, or one of the Chambers of Congress, or the governor of a State so requests, solely to investigate the conduct of any federal judge or magistrate, or any act or acts which may constitute a violation of any individual guarantee, or the violation of the public election, or some other crime punishable by federal Law.

The circuit courts and district courts shall be distributed among the justices of the Supreme Court, who shall visit them periodically, observe the conduct of the magistrates and judges presiding over them, hear complaints presented against such officials, and perform any other duties prescribed by Law. The Supreme Court of Justice may freely appoint and remove its clerk and any other employees serving it, with strict observance of the appropriate Law. In the same way, the circuit magistrates and district judges shall appoint and remove their respective clerks and employees.

The Supreme Court of Justice shall designate each year one of its members as president, with the right of reelection.

Each minister of the Supreme Court of Justice on assuming office, shall affirm before the Senate, or before the Permanent Committee if the former is in adjournment, in the following form:

President: *Do you solemnly promise that you will discharge loyally and patriotically the office of Minister of the Supreme Court of Justice of the Nation which has been conferred upon you, and that you will observe and enforce the Political Constitution of the United Mexican States and the laws enacted in pursuance thereof, in all ways looking to the welfare and prosperity of the Union?*

Justice: *Yes, I promise.*

President: *If you fail to do so, may the Nation call you to account.*

The circuit magistrates and district judges shall make their affirmation before the Supreme Court or before an authority designated by Law.

Article 98. A minister of the Supreme Court of Justice of the Nation who is temporarily absent from office, for a period not exceeding one month, he shall not be replaced if the Court had quorum for its sessions; but if it did not, the Congress of the Union or during its recess the Permanent Committee, shall appoint for the time of the absence, a substitute from among the candidates presented by the States for the election of the proprietor magistrate of the matter, and who was not elected. If the absence were for two months or less, the Congress, or in its case the Permanent Committee shall freely appoint a provisional justice.

If a justice were missing for death, resignation or incapacity, the Congress of the Union shall do a new election observing in each case the provisions of the final part of Article 96.

If the congress were adjourned, the Permanent Committee shall do a provisional appointment until the former meets to make the definitive election.

Article 99. Resignations of ministers of the Supreme Court of Justice may be submitted only for serious reasons qualified by the Congress of the Union before who they shall submit it. If adjourned to the Permanent Committee shall do the qualification.

Article 100. Leaves of absence of ministers, when they do not exceed one month, shall be granted by the Supreme Court of Justice of the Nation; those that exceed that time shall be granted by the Chamber of Deputies, or during its adjournment, of the Permanent Committee.

Article 101. The ministers of the Supreme Court of Justice, the circuit magistrates, the district judges, and their respective clerks may not in any case accept and hold employment or office of the Federation, the States, or of a private nature, except honorary positions in scientific, literary, or charitable associations. Violation of this provision shall be punishable by loss of office.

Article 102. The Law shall organize a public prosecutor of the Federation, whose officials shall be freely appointed and removed by the Executive, and which shall be presided over by an attorney general who shall have the same qualifications as those required to be a magistrate of the Supreme Court of Justice.

The prosecution before the tribunals of all federal offenses shall be the duty of the public prosecutor of the Federation; and, therefore, it shall request orders of arrest for offenders; procure and present evidence as to their liability; see that trials are conducted with due regularity in order that the administration of justice may be prompt and efficient; request the imposition of sentence; and intervene in all matters that the Law may determine.

The Attorney General of the Republic shall personally intervene in all matters in which the Federation is a party; in cases affecting ministers, diplomats, and consuls general, and in those that arise between two or more States of the Union, between one State and the Federation, or between the powers of one State. The Attorney General

may intervene in person or through one of his agents in other cases where the intervention of the public ministry of the Federation is necessary.

The Attorney General shall be the legal counselor of the Government. Both he and his agents shall strictly obey the provisions of Law, being responsible for every offense, omission, or violation that they may incur in the discharge of their duties.

Article 103. The federal tribunals shall decide all controversies that arouse:

- I. Out of Law or acts of the authorities that violate individual rights.
- II. Because of laws or acts of the federal authority restricting or encroaching on the sovereignty of the States.
- III. Because of laws or acts of State authorities that invade the sphere of federal authority.

Article 104. The federal courts shall have jurisdiction over:

- I. All controversies of a civil or criminal nature that arise from the enforcement and application of federal laws or from treaties made with foreign powers. Whenever such controversies affect only the interests of private parties, the regular local judges and courts of the States, or the Federal District and Territories may also assume jurisdiction, at the election of the plaintiff. Sentences of the courts of first instance may be appealed to the next higher court above that in which the case was first heard. Of the sentences dictated in second instance, they might be beseeched before the Supreme Court of Justice of the Nation, preparing, introducing and solving the motion, in the terms determined by Law.
- II. All controversies that involve admiralty Law.
- III. Those in which the Federation is a party.
- IV. Those that arise between two or more States, or one State and the Federation, and those that arise between courts of the Federal District and those of the Federation or a State.
- V. Those that arise between a State and one or more residents of another State.
- VI. All cases that involve members of the diplomatic and consular corps.

Article 105. The Supreme Court of Justice of the Nation has exclusive jurisdiction in all controversies that arise between two or more States, between the powers of one State concerning the constitutionality of their acts, and in disputes between the Federation and one or more States, and all those in which the Federation is a party.

Article 106. The Supreme Court of Justice shall likewise have the power to settle questions of jurisdiction that arise between courts of the Federation, between the latter and State courts, or between the courts of one State and those of another.

Article 107. All controversies mentioned in Article 103 shall be prosecuted upon offended party, subject to the legal forms and procedure prescribed by Law, on the following bases:

- I. The sentence shall always be such that it affects only private individuals, being limited to redress and protect them in the special case to which the complaint refers, without making any general declaration as to the Law or act on which the complaint is based.
- II. In judicial civil or criminal matters, except the case of the rule IX, the petition for legal protection only shall be granted against final judgments or awards against which no ordinary recourse is available by virtue of which these judgments can be modified or amended, provided that the violation of the Law is committed in the judgments or awards, or that committed during the course of the trial opportune objection and protest were made against it because of refusal to rectify the wrong and that if was committed in first instance, it was urged in second instance as a grievance. The Supreme Court, despite this rule may fill the deficiency of the complaint in a criminal trial, when it finds out that there has been against the complainer an express violation of the Law, that has left him without defense, or that he has been judged by a Law that is not exactly applicable to the case, and that only because of clumsiness the violation has not been duly combated.
- III. In civil or criminal matters, the petition of legal protection shall be granted against the violation of the laws of the procedure, only when the substantial parts of it are affected and in a manner that its offense leaves the complainer without defense.
- IV. When there is a petition of legal protection against final sentence, in civil trial, it shall be granted besides of the previous rule, only when having fulfilled the requirements of the second rule, such sentence is contrary to the letter of the Law applicable to the case or its judicial interpretation, when it comprises persons, action, exceptions or things that have not been object of the trial, or when it does not comprise all of them by omission or express negative. When the legal protection is petitioned against non final resolutions according to the previous fraction, these rules shall be observed in whatever it were convenient.
- V. In the criminal processes, the execution of the final sentence against the legal protection in petitioned, shall be suspended by the responsible authority, to which effect the plaintiff shall communicate thereto, within the term stated by the Law and under protest of telling the truth, the filing of the petition, accompanying two copies, one for the dossier and another that shall be given to the contrary part.
- VI. In the civil processes, the execution of the final sentence shall only be suspended if the plaintiff gives bail to pay for the damages and harms that the suspension may cause, unless that the other part gave a counter bail to assure the replacement of things to the state they had, if the legal protec-

- tion were granted, and to pay the consequent damages. In this case the filing of the petition shall be communicated as the previous rule stipulates.
- VII. When it is required to petition the legal protection against a final sentence, it shall be solicited from the responsible authority a certified copy of the evidences that the plaintiff appoints, which shall be annexed to those that the other part appointed, in the latter the same responsible authority, in a brief and clear manner, shall annotate the reasons that justify the claimed act.
- VIII. When the legal protection is petitioned against a final sentence, it shall be directly filed before the Supreme Court, presenting the document with the said copy of the previous rule, or sending it through the responsible authority or the Judge of District of the State to which he belongs. The Court shall rule sentence without any other procedure or errand than the document in which the petition is fled, that produced by the other part and the Attorney General or the agent designated to this purpose, and without containing any other legal question that the contained in the complaint.
- IX. When the legal protection is sought against acts of other authority than the judicial or acts executed outside of the trial after its conclusion; or acts in the trial which execution results in the impossible replacement or if persons foreign to the case are affected, it shall be petitioned before the Judge of District under whose jurisdiction is in the place in which the claimed act is executed or attempted to execute, the procedure shall be limited to the report of the authority, in a hearing for which in the same writ in which the report is solicited it shall be summoned, and the latter shall take place as briefly as possible. In it the proofs offered by the interested parts shall be received hearing their arguments, which may not be longer than a page each one, and to the sentence which shall be pronounced in the same hearing. The sentence shall be final, if the interested parties did not occur before the Supreme Court within the term appointed bylaw, and in the manner expressed in the rule VIII. The violation of the rights of the articles 16, 19 and 20, shall be claimed before the superior tribunal who commits it or before the Judge of District that correspond him, being it possible, in both cases, to the Court against the ruling. If the Judge of District did not reside in the same place in which the responsible authority does, the Law shall determine the judge before who the petition shall be filed, which may provisionally suspend the claimed act, in the cases and terms that the Law itself establishes.
- X. The responsible authority shall be brought before the corresponding authority, when he does not suspend the claimed act, having to do it, and when it admits bail that resulted insufficient, being joint in both cases the

criminal and civil liability of the authority, with who offered the bail and that who lent it.

- XI. If once after granted the legal protection, the responsible authority insisted in the repetition of the claimed act, or tried to elude the sentence of the federal authority, he shall be immediately separated from his position and brought before the corresponding Judge of District to judge him.
- XII. The wardens and jailers who do not receive an authorized copy of the writ of imprisonment of a detained, within the seventy two hours appointed by the article 19 counting since the latter was brought before the judge, they shall call the attention of the judge on this particular, at the end of the term, and if they do not receive the mentioned document, within the three next hours they shall set him free. The offenders of the said article and of this disposition shall be immediately brought before the competent authority.

Likewise, anyone who, after an arrest, does not take the arrested person before a judge within twenty-four hours, shall himself be turned over to such authority or his agent.

If the detention takes place outside the locality in which the judge resides, sufficient time is to be added to the above period to cover the distance involved.

TITLE IV

THE RESPONSIBILITIES OF PUBLIC OFFICIALS

Article 108. Senators and deputies of the Congress of the Union, magistrates of the Supreme Court of Justice of the Nation, secretaries of the Dispatch, and the Attorney General of the Republic are legally responsible for common crimes that they may commit during their term of office, and also for crimes, offenses, or omissions that they incur in the exercise of their office.

Governors of the States and deputies of the local legislatures are liable for violations of the federal Constitution and laws.

The President of the Republic, during his term of office, may be impeached only for treason to the motherland and serious common crimes.

Article 109. If the offense is of a common order, the Chamber of Deputies acting as a grand jury shall determine, by an absolute majority of votes of its total membership, whether or not there are grounds for proceeding against the accused.

If the finding is negative, there shall be no grounds for any further proceedings; but such decision shall not be an obstacle to continuing the prosecution of the charge, whenever the accused has relinquished his immunity, since the decision of the Chamber in no way prejudices the merits of the charge.

If the finding is affirmative, the accused shall thereby be suspended from office and is immediately subject to action by the ordinary courts, excepting the case of the

President of the Republic, who may be impeached only before the Chamber of Senators, as in the case of an official offense.

Article 110. Constitutional immunity shall not be enjoyed by high officials of the Federation with respect to official crimes, offenses or omissions incurred in the discharge of any office, employment or public commission which they have accepted during the period in which, according to Law, they enjoy constitutional immunity. The same shall apply with respect to common crimes which they may commit during the performance of such office, employment, or commission. The procedure to be followed to institute proceedings against a high official who has resumed the exercise of his own functions is that prescribed in the preceding article.

Article 111. The Senate, constituted as a grand jury, shall take cognizance of all official offenses; but it may not open the pertinent investigation without a previous bill of impeachment by the Chamber of Deputies.

If after conducting such proceedings as it deems advisable and hearing the accused, the Chamber of Senators shall decide by a two-thirds majority of all its members that he is guilty, the latter shall be removed from office by virtue of such decision and disqualified from holding any other office for a period determined by Law.

Whenever the Law provides another penalty for the same act, the accused shall be placed at the disposal of the regular authorities, who shall judge and punish him according to such Law.

In the cases governed by this article and those referred to in Article 109, the decisions of the grand jury and the findings of the Chamber of Deputies shall be final.

Any person has the right to denounce before the Chamber of Deputies the common or official offenses of high officials of the Federation whenever the aforesaid Chamber finds that there are grounds for impeachment, it shall appoint a committee from among its members to sustain before the Senate the charges brought.

As soon as possible, the Congress of the Union shall enact a Law covering the responsibilities of all officials and employees of the Federation and of the Federal District and Territories, defining as official offenses or misdemeanors all acts or omissions that may result in injury to public interests or to the proper conduct of business, even though they have not been considered previously as wrongful acts, these offenses or misdemeanors shall always be tried before a jury of the people, in the manner established by Article 20 for offenses of the press.

Article 112. The offender cannot be pardoned after a verdict of guilty is pronounced for official offenses.

Article 113. Responsibility for official offenses or misdemeanors may be exacted only during the term of office of the official in question, and within one year thereafter.

Article 114. There are no privileges or immunities for any public official with respect to claims of a civil character.

TITLE V
THE STATES OF THE FEDERATION

Article 115. For their internal government, the States shall adopt the popular, representative, republican form of government, with the free Municipality as the basis of their territorial division and political and administrative organization, in accordance with the following principles:

- I. Each Municipality shall be administered by a Town council, elected by direct popular vote, and there shall be no intermediate authority between this body and the Government of the State.
- II. Municipalities shall freely administer their finances, which shall be composed of the taxes imposed by the Legislatures of the States, and which, in all cases, shall be sufficient to meet the municipal needs.
- III. Municipalities shall be invested with juridical personality for all legal purposes.

The federal Executive and the governors of the States shall command the public forces in the municipalities where they customarily or temporarily reside.

Governors of the States may not be reelected neither hold their office for more than four years.

They are applicable to the Governors, substitutes or interims, the prohibitions of the Article 83.

The number of representatives in the state legislatures shall be proportional to the inhabitants of each State; but in no case shall there be less than fifteen proprietary deputies.

In the States, each electoral district shall appoint a proprietary Deputy and a substitute.

It may only be constitutional governor of a State, a Mexican citizen by birth, and native from it, or whit a no shorter than five years residence, previously immediate to the day of the election.

Article 116. The States have the power to fix their respective boundaries among themselves, by amicable agreements; but such agreements will not be put into effect without the approval of the Congress of the Union.

Article 117. The States may not in any case:

Make any alliance, treaty or coalition with another State, or with foreign powers.

- I. Issue letters of marque neither retaliate.
- II. Coin money, issue paper money, stamps, or stamped paper.
- III. Levy duty on persons or goods passing through their territory.
- IV. Prohibit or levy duty upon, directly or indirectly, the entrance into or exit from their territory of any domestic or foreign goods.
- V. Tax the circulation of domestic or foreign goods by imposts or duties, the exemption of which is made by local customhouses, requiring inspection or registration of packages or documentation to accompany the goods.

- VI. Enact or maintain in force fiscal laws or provisions that relate to differences in duties or requirements by reason of the origin of domestic or foreign goods, whether this difference is established because of similar production in the locality or because, among such similar production there is a different place or origin.
- VII. Issue bonds of public debt payable in foreign currency or outside the national territory; contract loans directly or indirectly with the Governments of other nations, or contract obligations in favor of foreign companies or individuals, when the bonds or securities are payable to bearer or are transmissible by endorsement.

The Congress of the Union and the Legislatures of the States shall dictate laws aimed at combating the alcoholism.

Article 118. Neither shall the States, without the consent of the Congress of the Union:

- I. Establish ship tonnage dues or any other port charges, or levy imposts or taxes on imports or exports.
- II. Have at any time permanent troops or ships of war.
- III. Make war themselves on any foreign power, except in cases of invasion and of danger so imminent that it does not admit of delay. In such cases, a report shall be made immediately to the President of the Republic.

Article 119. Each State has the obligation to give in without delay the criminals of another State or of a foreign State to the authorities who claim them.

In such cases, the writ of the judge who orders the certificate of extradition shall be sufficient to cause detention of the accused for one month in the case of extradition between States and for two months if it is international.

Article 120. The governors of the States are required to publish and enforce federal laws.

Article 121. Complete faith and credence shall be given in each State of the Federation to the public acts, registries, and judicial proceedings of all the others. The Congress of the Union, through general laws, shall prescribe the manner of proving such acts, registries, and proceedings, and their effect, by subjecting them to the following principles:

- I. The laws of a State shall have effect only within its own territory and consequently are not binding outside of that State;
- II. Real and personal property shall be subject to the laws of the place in which they are located;
- III. Judgments pronounced by the courts of one State on real rights or real property located in another State shall have executory effect in the latter only if its own laws so provide;

Judgments on personal rights shall be executed in another State only when the defendant has expressly or by reason of domicile submitted to the court that pronounced it and provided he has been personally cited to appear at the judicial hearing;

IV. Acts of a civil nature done in accordance with the laws of one State shall have validity in the others;

V. Professional degrees issued by the authorities of one State, subject to its laws, shall be respected in the others.

Article 122. The powers of the Union have the duty of protecting the States against all foreign invasion or violence. In any case of internal uprising or disturbance, they shall give equal protection, provided it is requested by the legislature of the State or by its Executive if the former is not assembled.

TITLE VI

LABOR AND SOCIAL SECURITY

Article 123. The Congress of the Union and the Legislatures of the States, without contravening the following basic principles, shall issue labor laws which shall apply to workers, day laborers, domestic servants, artisans and in a general way to all labor contracts:

The maximum duration of a working day shall be eight hours.

- I. The maximum duration of night work shall be seven hours. The unhealthful or dangerous works are forbidden for women and by minors under sixteen years of age. It is also forbidden to women and minors the industrial night work; and in commercial establishments after ten o'clock at night.
- II. Young people older than twelve years and less than sixteen shall have a maximum work day of six hours. The labor of children under twelve years old may not be subject to contract.
- III. For every six days of work a worker must have at least one day of rest.
- IV. During the three months prior to childbirth, women shall not perform physical labor that requires excessive material effort. In the month following childbirth they shall necessarily enjoy the benefit of rest and shall receive their full wages and retain their employment and the rights acquired under their labor contract. During the nursing period they shall have two special rest periods each day, of a half hour each, for nursing their infants.
- V. The minimum wage to be received by a worker shall be that considered sufficient, considering the conditions of every region, in order to satisfy normal necessities of the life of the workman, his education and his honest pleasures, considering him as head of a family. In every agricultural, commercial, manufacturing or mining enterprise, the workers shall be

entitled to a participation in the utilities which shall be regulated as prevented in fraction IX.

- VI. Equal wages shall be paid for equal work, regardless of sex or nationality.
- VII. The minimum wage shall be exempt from attachment, compensation, or deduction.
- VIII. The stipulation of the type of minimum wages, and the participation in the utilities to which the fraction VI refers to, shall be done through special commissions formed in each Municipality, subordinated to the Central Board of Conciliation which shall be established in each State.
- IX. Wages must necessarily be paid in money of legal tender and cannot be paid in goods, promissory notes, or any other token intended as a substitute for money.
- X. Whenever, due to extraordinary circumstances, the regular working hours of a day must be increased, one hundred percent shall be added to the amount for normal hours of work as remuneration for the overtime. Overtime work may never exceed three hours a day nor three times consecutively. Persons under sixteen years of age and women of any age may not be admitted to this kind of labor.
- XI. In any agricultural, industrial, or mining enterprise or in any other kind of work, employers shall be obliged to furnish workmen comfortable and hygienic living quarters for which they may collect rent that shall not exceed one half percent monthly of the assessed valuation of the property. They also must establish schools, hospitals, and any other services necessary to the community. If the enterprise is situated within a town and employs more than one hundred workers, it shall be responsible for the first of the above obligations.
- XII. In addition, in these same work centers, when the population exceeds two hundred inhabitants, a tract of land of not less than five thousand square meters must be reserved for the establishment of public markets, the erection of buildings destined for municipal services, and recreation centers. Establishments for the sale of intoxicating liquors and houses for games of chance are prohibited in all work centers.
- XIII. Employers shall be responsible for labor accidents and for occupational diseases of workers, contracted because of or in the performance of their work or occupation; therefore, employers shall pay the corresponding indemnification whether death or only temporary or permanent incapacity to work has resulted, in accordance with what the Law prescribes. This responsibility shall exist even if the employer contracts for the work through an intermediary.
- XIV. An employer shall be required to observe, in the installation of his establishments, the legal regulations on hygiene and health, and to adopt

adequate measures for the prevention of accidents in the use of machines, instruments, and materials of labor, as well as to organize the same in such a way as to ensure the greatest possible guarantee for the health and safety of workers as is compatible with the nature of the work, under the penalties established by Law in this respect.

- XV. Both employers and workers shall have the right to organize for the defense of their respective interests, by forming unions, professional associations, etc.
- XVI. Laws shall recognize as a right of the workmen and the employers the strikes and lockouts.
- XVII. Strikes shall be legal when they have as their purpose the attaining of the equilibrium among the various factors of production, by harmonizing the rights of labor with those of capital. In public services it shall be obligatory for workers to give notice ten days in advance to the Board of Conciliation and Arbitration as to the date agreed upon for the suspension of work. Strikes shall be considered illegal only when the majority of strikers engage in acts of violence against persons or property, or in the event of war, when the workers belong to establishments or services of the Government. Workmen of the military manufacturing establishments of the Government of the Republic shall not be comprised in the dispositions of this fraction, because of being part of the National Army.
- XVIII. Lockout shall be legal only when an excess of production makes it necessary to suspend work to maintain prices at a level with costs, and with prior approval of the Board of Conciliation and Arbitration.
- XIX. Differences or disputes between capital and labor shall be subject to the decisions of a Board of Conciliation and Arbitration, consisting of an equal number of workmen and employers, with one from the Government.
- XX. If an employer refuses to submit his differences to arbitration or to accept the decision rendered by the Board, the labor contract shall be considered terminated and he shall be obliged to indemnify the worker to the amount of three months wages and shall incur any liability resulting from the dispute. If the refusal is made by workers, the labor contract shall be considered terminated.
- XXI. An employer who dismisses a worker without justifiable cause or because he has joined an association or union, or for having taken part in a lawful strike, shall be required, at the election of the worker, either to fulfill the contract or to indemnify him to the amount of three month wages. He shall also have the obligation to indemnify a worker to the amount of three month wages, if the worker leaves his employment due to lack of honesty on the part of the employer or because of ill treatment from him,

either to himself or to his wife, parents, children, or brothers and sisters. An employer may not relieve himself of this responsibility when the ill treatment is attributable to his subordinates or members of his family acting with his consent or tolerance.

- XXII. Credits in favor of workers for wages or salary earned within the last year, and for indemnity compensation, shall have priority over all other obligations in the event of receivership or bankruptcy.
- XXIII. A worker alone shall be responsible for debts contracted by himself and payable to his employer, his associates, members of his family, or dependents, and in no case and for no purpose may payment be exacted from members of the family of the worker, nor are these debts demandable for an amount exceeding the wages of the worker for one month.
- XXIV. Services of employment placement for workers shall be gratuitous, whether such service is performed by a municipal office, labor exchange, or any other official or private institution.
- XXV. Every labor contract made between a Mexican and a foreign employer must be notarized by a competent municipal authority and countersigned by the consul of the nation to which the worker intends to go, because, in addition to the ordinary stipulations, it shall be clearly specified that the expenses of repatriation shall be borne by the contracting employer.
- XXVI. The following conditions shall be considered null and void and not binding on the contracting parties, even if expressed in the contract:
 - a. Those that stipulate a working day that is inhuman because it is obviously excessive, considering the kind of work;
 - b. Those that fix wages that are not remunerative, in the judgment of Boards of Conciliation and Arbitration;
 - c. Those stipulating a period of more than one week before payment of a day's wages;
 - d. Those indicating as the place of payment of wages a place of recreation, an inn, café, tavern, bar, or store, except for the payment of employees of such establishments;
 - e. Those that include the direct or indirect obligation of acquiring consumer goods in specified stores or places;
 - f. Those that permit the retention of wages as a fine;
 - g. Those that constitute a waiver by the worker of indemnification to which he is entitled due to labor accidents or occupational diseases, damages occasioned by the non fulfillment of the contract, or by being discharged;
 - h. All other stipulations that imply waiver of any right designed to favor the worker in the laws of protection and assistance for workmen;
- XXVII. The laws shall determine what property constitutes the family patrimony, property that shall be inalienable, not subject to encumbrances of attach-

ment, and that shall be transmissible by inheritance with simplification of the formalities of succession.

XXVIII. It is considered social usefulness: the establishments of banks of popular, invalidity, life, involuntary ceasing of work, accident insurance and others with analogue purposes, therefore, both the Federal Government as that of each State, shall promote the organization of institutions of this type, in order to instill the popular prevention.

XXIX. Likewise, cooperative societies established for the construction of low-cost and hygienic houses to be purchased on installments by workers, shall be considered of social utility;

TITLE VII GENERAL PREVENTIONS

Article 124. The powers not expressly granted by this Constitution to federal officials are understood to be reserved to the States.

Article 125. No individual may fill two popularly elected federal offices at the same time, nor one federal and one state office, also by popular election; but an elected candidate may choose which of the two he desires to hold.

Article 126. No payment may be made that is not included in the budget or provided for by a subsequent Law.

Article 127. The President of the Republic, the members of the Supreme Court of Justice, the deputies and senators, and other elective public officials of the Federation shall receive remuneration for their services that shall be specified by Law and paid by the federal Treasury. This compensation cannot be refused and any Law that increases or decreases it shall not take effect during the term in which an official holds office.

Article 128. Every public official, without exception of any kind, before taking possession of his office, shall take an affirmation to uphold the Constitution and the laws emanating from it.

Article 129. No military authority may, in time of peace, perform any functions other than those that are directly connected with military discipline. There shall be fixed and permanent military commands only in the castles, forts, and warehouses immediately subordinate to the Government of the Union; or in encampments, barracks, or arsenals established for the quartering of troops outside towns.

Article 130. The federal powers shall exercise the supervision required by Law in matters relating to religious worship and outward ecclesiastical forms. Other authorities shall act as auxiliaries of the Federation.

Congress cannot enact laws establishing or prohibiting any religion.

Marriage is a civil contract. This and other acts of a civil nature concerning persons are within the exclusive competence of civil officials and authorities, in the manner prescribed by Law, and shall have the force and validity defined by said Law.

A simple promise to tell the truth and to fulfill obligations that are contracted is binding on the one who promises so, and in the event of failure to do so, he shall be subject to the penalties that the Law prescribes for this purpose.

The Law does not recognize any personality in religious groups called churches.

Ministers of cults shall be considered as persons who practice a profession and shall be directly subject to the laws enacted on such matters.

Only the legislatures of the States shall have the power to determine the maximum number of ministers of cults necessary for local needs.

To practice the ministry of any cult in the Mexican United States it is necessary to be a Mexican by birth.

Ministers of cults may never, in a public or private meeting constituting an assembly, or in acts of worship or religious propaganda, criticize the fundamental laws of the country or the authorities of the Government, specifically or generally. They shall not have an active or passive vote neither the right to form associations for religious purposes.

Permission to dedicate new places of worship open to the public must be obtained from the Secretariat of Government, with previous consent of the government of the State. There must be in every church building a representative who is responsible to the authorities for compliance with the laws on religious worship in such building, and for the objects pertaining to the worship.

The representative of each church building, together with ten other residents of the vicinity, shall inform the municipal authorities immediately who is the person in charge of the church in question. Any change of ministry must be reported by the departing minister in person, accompanied by the new incumbent and ten other residents. The municipal authority, under penalty of removal from office and a fine of up to one thousand pesos for each violation, shall see that this provision is complied with; under the same penalty, he shall keep one registry book of church buildings and another of the representatives in charge. The municipal authority shall give notice to the Secretariat of Government, through the governor of the State, of every permit to open a new church building to the public, or of any changes among representatives in charge. Donations in the form of movable objects shall be kept in the interior of church buildings.

No privilege shall be granted or confirmed, nor shall any other step be taken which has for its purpose the validation in official courses of study, of courses pursued in establishments devoted to the professional training of ministers of cult. Any authority that violates this provision shall be criminally liable, and the privilege or step referred to shall be void and shall thereby cause the voidance of the professional degree for the attainment of which the violation of this provision was made.

Periodical publications of a confessional character, whether they are such because of their program, title, or merely because of their general tendencies, may not comment on national political matters or public information on acts of the authorities of the country or of private persons directly related to the functioning of public institutions.

The formation of any kind of political groups of which the name contains any word or indication whatever that it is related to any religious belief, is strictly prohibited. Meetings of a political character may not be held in places of worship.

A minister of any denomination may not by himself or through an intermediary inherit or receive any real property occupied by any association for religious propaganda or for religious or charitable purposes.

Ministers of cult are legally incapacitated as testamentary heirs of ministers of the same denomination or of any private person who is not related to them within the fourth degree.

The acquisition by private parties of personal or real property owned by the clergy or by religious organizations shall be governed by Article 27 of this Constitution.

Trials for violation of the above provisions shall never be heard before a jury.

Article 131. The Federation has exclusive power to levy duties on goods that are imported or exported or that pass in transit through the national territory, as well as to regulate at all times, and even to prohibit, for police or security reasons, the circulation in the interior of the Republic of all classes of goods, regardless of origin; however, the Federation itself may not establish or enact, in the Federal District and the Territories, those taxes and laws mentioned in fractions VI and VII of Article 117.

Article 132. The forts, barracks, storage warehouses, and other buildings used by the Government of the Union for public service or for common use, shall be subject to the jurisdiction of the federal powers in accordance with provisions to be established in a Law enacted by the Congress of the Union; but, in order that property acquired in the future within the territory of any State shall likewise be under federal jurisdiction, the consent of the respective legislature shall be necessary.

Article 133. This Constitution, the laws of the Congress of the Union that emanate from it, and all treaties that have been made and shall be made by the President of the Republic, with the approval of the Congress, shall be the supreme Law of the whole Union. The judges of each State shall abide by the said Constitution, the laws, and treaties, despite of any contradictory provisions that may appear in the constitutions or laws of the States.

Article 134. All contracts that the Government may negotiate for the execution of public works shall be awarded by auction, after a call for bids to be submitted under seal and opened in public meeting.

TITLE VIII
REFORMS TO THE CONSTITUTION

Article 135. The present Constitution may be added or reformed. In order that the additions or reforms shall become a part thereof, it shall be required that the Congress of the Union, by a vote of two thirds of the present individuals agree to the reforms or additions and that they are approved by a majority of the Legislatures of the States. The Congress of the Union shall count the votes of the legislatures and shall announce those additions or reforms that have been approved.

TITLE IX
THE INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION

Article 136. This Constitution shall not lose its force and effect, even if its observance is interrupted by rebellion. In the event that a government whose principles are contrary to those that are sanctioned herein should become established through any public disturbance, as soon as the people recover their liberty, its observance shall be reestablished, and those who have taken part in the government emanating from the rebellion, as well as those who have cooperated with such persons, shall be judged in accordance with this Constitution and the laws that have been enacted by virtue thereof.

TRANSITORY ARTICLES

Article 1. This Constitution shall be published at once and with the greatest solemnity it shall be oath to preserve it and cause it to be preserved throughout the Republic; but with exception of the provisions relating to the election of the supreme federal and state powers which shall enter into force at once, it shall not take effect until the first day of May 1917, on which date the Constitutional Congress shall be formally installed and the citizen elected in the next elections shall make the affirmation of Law so as to exercise the office of President of the Republic.

In the elections that must be called in accordance with the following article, fraction V of Article 82 shall not apply, nor shall it be an impediment to being a Deputy or Senator to be in active service in the army, provided such service is not command of forces in the electoral district in question; neither shall secretaries and sub secretaries of state be barred from election to the next Congress of the Union, provided that they have been definitely separated from their position on the day that the respective call is issued.

Article 2. As soon as this Constitution is published, the citizen entrusted with the Executive Power of the Nation shall call for elections of the federal powers, endeavoring to do this in such a way that the Congress shall be organized promptly in order that following the count of the votes cast in the presidential election it may declare

who has been elected President of the Republic, so that he may comply with the provisions of the preceding article.

Article 3. The next constitutional term for deputies and senators shall begin to run as of last September first, and for the President of the Republic from December 1, 1916.

Article 4. Senators bearing even numbers at the next election shall hold office for two years only, in order that thereafter one half of the Chamber of Senators shall be renewed every two years.

Article 5. The Congress of the Union shall elect the magistrates of the Supreme Court of Justice of the Nation next May in order that this august body shall be installed by June first.

At this election Article 96 shall not govern with respect to the proposals of candidates by the local legislatures; but candidates shall be so proposed for the first two-year term provided for in Article 94.

Article 6. The Congress of the Union shall have an extraordinary session period which shall begin April 15, 1917, in order to organize the electoral college, to count the votes and approve the election of a President of the Republic, by appropriate declaration; and also to enact the Organic Law for the circuit and district courts and the Organic Law for the Federal District and territorial courts, in order that the Supreme Court of Justice of the Nation may immediately appoint the circuit magistrates and district judges, and the Congress of the Union may select the judges of first instance for the Federal District and Territories; it shall also enact all laws requested by the executive branch of the Nation. The circuit magistrates and district judges and the magistrates and judges of the Federal District and Territories must assume office before July 1, 1917, at which time those persons who had been appointed by the official in charge of the Executive Power of the Nation shall cease to function.

Article 7. This once, the count of the votes for Senators shall be made by the counting board of the first electoral district in each State or the Federal District, as organized for counting the votes for deputies, and these boards shall issue appropriate credentials to the senators elected.

Article 8. The Supreme Court of Justice of the Nation shall rule on pending cases in petitions of legal protection, subject to laws in effect.

Article 9. The citizen in command of the constitutionalist army, entrusted with the Executive Power of the Union, is empowered to issue the Electoral Law, under which, this once, the elections shall be held to fill the Powers of the Union.

Article 10. Persons who have taken part in the government formed by the rebellion against the legitimate Government of the Republic, or those who cooperated with it, afterwards taking up arms or holding office or employment with the factions that attacked the constitutionalist Government, shall be tried under laws in force, unless pardoned by such Government.

Article 11. While the Congress of the Union and the State legislatures enact laws governing the agrarian and labor problems, the bases established in this Constitution for these laws shall be put into effect throughout the Republic.

Article 12. Mexicans who have fought in the constitutionalist army, and their children and widows, and other persons, who rendered services to the cause of the Revolution or to public education, shall have priority in the acquisition of parcels of land referred to in Article 27 and the right to discounts specified by Law.

Article 13. All debts contracted by workers, by reason of their labor, up to the date of this Constitution, with employers, their families, or intermediaries are hereby extinguished in full.

Article 14. The Secretariat of Justice and Public Instruction and Fine Arts are hereby abolished.

Article 15. The citizen entrusted with the executive power of the Nation is empowered to issue a Law on civil liability applicable to the principals, accomplices, and those who cover up of crimes perpetrated against the constitutional order during the month of February 1913 and against the constitutionalist Government.

Article 16. The constitutionalist Congress, in its ordinary period of sessions, beginning September 1st this year, shall enact all organic laws of the Constitution that have not already been enacted in the extraordinary period referred to in transitory Article 6, and shall give priority to laws relating to individual guarantees and to Articles 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 and the final part of Article 111 of this Constitution.

Given in the Hall of Sessions of the Constituent Congress of Querétaro, on January 31st, 1917. President: Luis Manuel Rojas. For the State of Aguascalientes: Daniel Cervantes, Aurelio L. González. For the State of Baja California: Ignacio Roel. For the State of Coahuila: Manuel Aguirre Berlanga, Manuel Cepeda Medrano, Ernesto Meade Fierro, José María Rodríguez, José Rodríguez González, Jorge E. Von Versen. For the State of Colima: Francisco Ramírez Villareal. For the State of Chiapas: Vidal J. Amilcar, Lisandro López, Cristóbal Castillo Llavén, Enrique Suárez, Daniel A. Zepeda. For the State of Chihuahua: Manuel M. Prieto. For the Territory of the Federal District: Ciro B. Cevallos, Rafael L. de los Ríos, Carlos Duplán, Francisco Espinosa, Alfonso Herrera, Lauro López Guerra, Amador Lozano, Rafael Martínez, Antonio Norzagaray, Félix Palavicini, Ignacio L. Pesqueira, Román Rosas y Reyes, Arnulfo Silva, Gerzayn Ugarte. For the State of Durango: Fernando Castaños, Jesús de la Torre, Silvestre Dorador, Rafael Ezpeleta, Fernando Gómez Palacio, Antonio Gutiérrez, Alberto Terrones Benítez. For the State of Guanajuato: Luis M. Alcocer, Manuel G. Aranda, Nicolás Cano, Enrique Colunga, Francisco Díaz Barriga, Luis Fernández Martínez, Ramón Frausto, Fernando Lizardi, Ignacio López, Jesús López Lira, José Natividad Macías, Antonio Madrazo, Santiago Manrique, Hilario Medina, Gilberto M. Navarro, David Peñaflor, Carlos Ramírez Llaca, Vicente M. Valtierra, José Villaseñor Lomelí. For the State of Guerrero: Francisco Figueroa, Fidel R. Guillén, Fidel Jiménez. For the State of Hidalgo: Crisóforo Aguirre, Alfonso Cravioto, Alberto M. González,

Antonio Guerrero, Federico E. Ibarra, Alfonso Mayorga, M. Refugio Mercado, Ismael Pintado Sánchez, Matías Rodríguez, Leopoldo Ruiz, Rafael Vega Sánchez. For the State of Jalisco: Amado Aguirre, Joaquín Aguirre Berlanga, Sebastián Allende, Gaspar Bolaños V., Ramon C. y Castañeda, Esteban B. Calderón, Marcelino Dávalos, Manuel Dávalos Ornelas, Ernesto E. Ibarra, Francisco Labastida Izquierdo, Paulino Machorro y Narváez, José Manzano, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Rafael Ochoa, Ignacio Ramos Praslow, Juan de Dios Robledo, Luis Manuel Rojas, José I. Solórzano, Jorge Villaseñor, Carlos Villaseñor. For the State of México: Antonio Aguilar, Donato Bravo Izquierdo, Enrique A. Enríquez, José E. Franco, Juan Manuel Gifard, Manuel A. Hernández, Rubén Martí, Fernando Moreno, Enrique O'Farril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Aldegundo Villaseñor. For the State of Michoacán: Salvador Alcaraz Romero, Alberto Alvarado (Sub.), José Álvarez, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Amadeo Betancourt, Martín Castrejón, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Manuel Martínez Solórzano, Rafael Márquez, Francisco J. Múgica, Alberto Peralta, Jesús Romero Flores, José P. Ruiz, José Silva Herrera. For the State of Morelos: Álvaro L. Alcazar, Antonio Garza Zambrano, José L. Gómez. For the State of Nuevo León: Manuel Almaya, Ramón Gámez, Agustín Garza González, Reynaldo Garza, Luis Ilazilaliturri, Plutarco González (Sub.), Lorenzo Sepúlveda (Sub.), Nicéforo Zambrano. For the State of Oaxaca: Luis Espinoza, Manuel Herrera, José F. Gómez (Sub.), González Torres, Juan Sánchez, Porfirio Sosa, Leopoldo Payán, Celestino Pérez, Crisóforo Rivera Cabrera. For the State of Puebla: Gabino Bandera y Malta, Alfonso Cabrera, Rafael P. Cañete, Froilán Cruz Manjarrez, Antonio de la Barrera, Gilberto de la Fuente, Porfirio del Castillo, Federico Dinorín, Salvador R. Guzmán, Epigmenio A. Martínez, Luis T. Navarro, David Pastrana Jaimes, José Rivera, Pastor Rouaix, Gabriel Rojano, Miguel Rosales, Leopoldo Vázquez Mellado, José Verástegui. For the State of Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía, José María Truchuelo. For the State of San Luis Potosí: Rafael Curiel, Cosme Dávila (Sub.), Samuel de los Santos, Rafael Martínez Mendoza (Sub.), Arturo Méndez, Rafael Nieto, Gregorio A. Tello, Dionisio Zavala. For the State of Sinaloa: Cándido Avilés, Emiliano C. García, Carlos M. Ezquerro, Andrés Magallón, Pedro R. Zavala. For the State of Sonora: Juan de Dios Bojórquez (Sub.), Flavio A. Bórquez, Luis G. Monzón, Ramón Ross. For the State of Tabasco: Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes. For the State of Tamaulipas: Pedro A. Chapa, Fortunato de Leija, Zeferino Fajardo, Emiliano P. Nafarrete. For the State of Tepic: Marcelino Cedano (Sub.), Juan Espinosa Bávara, Cristóbal Limón. For the State of Tlaxcala: Modesto González Galindo, Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal. For the State of Veracruz: Cándido Aguilar, Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Victorio E. Góngora, Carlos L. Gracidas (Sub.), Heriberto Jara, Ángel S. Juarico, Josafat F. Márquez, Enrique Meza (Sub.), Benito Ramírez G., Saúl Rodiles, Alfredo Solares, Marcelo Torres. For the State of Yucatán: Miguel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos, Enrique Recio, Héctor Victoria. For the State of Zacatecas: Julián Adame,

Juan Aguirre Escobar, Andrés L. Arteaga, Samuel Castañón, Antonio Cervantes, Jairo R. Dyer, Adolfo Villaseñor.

Therefore, I order it to be printed, circulated and published through solemn edict and proclamation in the entire Republic for its due compliance.

Given in the National Palace of the city of Querétaro, in February 5th, 1917. V. Carranza. Signature.

To the citizen Manuel Aguirre Berlanga, Sub secretary in charge of the Dispatch of State. México.

Which I honor to communicate to you for its publication and other effects. Constitution and Reforms. México, February 5th, 1917. Aguirre Berlanga. Signature.

10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(VIGENTE).

10.1. EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VIGENTE FEBRERO 2013)

TÍTULO I

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

- Art. 1.* Derecho de todo individuo de gozar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, prohibición de la esclavitud y de toda discriminación.
- Art. 2.* Derechos de los pueblos y comunidades indígenas y obligaciones de las autoridades.
- Art. 3.* Derecho a la educación.
- Art. 4.* Igualdad del varón y la mujer ante la ley, derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna y decorosa.
- Art. 5.* Derecho a elegir la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor se acomode a cada individuo, prohibición de trabajos personales, obligatoriedad de servicios públicos.
- Art. 6.* Manifestación de las ideas, derecho a la información.
- Art. 7.* Libertad de Imprenta.
- Art. 8.* Derecho de petición.
- Art. 9.* Derecho de asociación.
- Art. 10.* Derecho a poseer armas.
- Art. 11.* Libertad de tránsito.
- Art. 12.* No concesión de títulos nobiliarios.

- Art. 13.* Derecho a no ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales.
- Art. 14.* No retroactividad de la ley.
- Art. 15.* Extradición.
- Art. 16.* Garantías de seguridad jurídica.
- Art. 17.* Administración de justicia.
- Art. 18.* Organización del sistema penal.
- Art. 19.* Detención del indiciado.
- Art. 20.* Garantías del inculcado y la víctima u ofendido.
- Art. 21.* Imposición de penas, sistema de seguridad pública.
- Art. 22.* Penas consideradas prohibidas, confiscación de bienes.
- Art. 23.* Instancias en un juicio criminal.
- Art. 24.* Libertad de creencia religiosa.
- Art. 25.* Protección del Desarrollo Nacional y Rectoría Económica del Estado.
- Art. 26.* Plan Nacional de Desarrollo.
- Art. 27.* Derecho de propiedad.
- Art. 28.* Prohibición de monopolios, funciones del Banco Central.
- Art. 29.* Suspensión de garantías.

Capítulo II

De los Mexicanos

- Art. 30.* Nacionalidad Mexicana.
- Art. 31.* Obligaciones de los mexicanos.
- Art. 32.* Doble nacionalidad, calidad de mexicano para desempeñar ciertos cargos y funciones.

Capítulo III

De los Extranjeros

- Art. 33.* Calidad de extranjero.

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

- Art. 34.* Requisitos para ser ciudadano mexicano.
- Art. 35.* Derechos del ciudadano.
- Art. 36.* Obligaciones del ciudadano.
- Art. 37.* Derecho de los mexicanos por nacimiento a no perder la nacionalidad, casos en que se pierde la nacionalidad por naturalización, pérdida de la ciudadanía.

Art. 38. Suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos.

TÍTULO II

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Art. 39. Soberanía Nacional.

Art. 40. Forma de gobierno.

Art. 41. Ejercicio de la soberanía, renovación de poderes.

Capítulo II

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

Art. 42. Integración del Territorio Nacional.

Art. 43. Partes integrantes de la Federación.

Art. 44. Distrito Federal.

Art. 45. Extensión y límites de los Estados de la Federación.

Art. 46. Convenios de los Estados, respecto de sus límites.

Art. 47. Extensión Territorial y límites del Estado de Nayarit.

Art. 48. Partes del Territorio que dependen del Gobierno Federal.

TÍTULO III

Capítulo I

De la División de Poderes

Art. 49. División, para su ejercicio, del Supremo Poder de la Federación.

Capítulo II

Del Poder Legislativo

Art. 50. Poder Legislativo.

Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

Art. 51. Composición de la Cámara de Diputados, elección de suplentes.

Art. 52. Votación mayoritaria relativa, representación proporcional.

- Art. 53.* Demarcación Territorial de los Distritos Electorales uninominales y de las Circunscripciones Electorales Plurinominales.
- Art. 54.* Bases para la elección de Diputados según el principio de Representación Proporcional y sistema de asignación por Listas Regionales.
- Art. 55.* Requisitos para ser Diputado.
- Art. 56.* Integración de la Cámara de Senadores, elección según el principio de votación mayoritaria relativa y representación proporcional.
- Art. 57.* Elección de Senador suplente.
- Art. 58.* Requisitos para ser Senador.
- Art. 59.* No reelección de Diputados y Senadores.
- Art. 60.* Funciones del Instituto Federal Electoral, resoluciones del Tribunal Federal Electoral.
- Art. 61.* Fuero Constitucional de los miembros de las Cámaras.
- Art. 62.* Prohibición para Diputados y Senadores.
- Art. 63.* Concurrencia necesaria para abrir sesiones en las Cámaras.
- Art. 64.* Sanción por la no concurrencia de algún Diputado o Senador.
- Art. 65.* Inicio de período de Sesiones.
- Art. 66.* Terminación del Período de Sesiones.
- Art. 67.* Sesiones Extraordinarias.
- Art. 68.* Lugar de residencia de las Cámaras.
- Art. 69.* Apertura de Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, asistencia e informe del Presidente.
- Art. 70.* Resoluciones del Congreso.

Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

- Art. 71.* Facultad de iniciar leyes o decretos.
- Art. 72.* Proceso Legislativo.

Sección III

De las Facultades del Congreso

- Art. 73.* Facultades del Congreso.
- Art. 74.* Facultades de la Cámara de Diputados.
- Art. 75.* Aprobación del presupuesto de egresos.
- Art. 76.* Facultades del Senado.
- Art. 77.* Facultades de las Cámaras sin intervención de la otra.

Sección IV
De la Comisión Permanente

Art. 78. Composición de la Comisión Permanente.

Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación

Art. 79. Funciones de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados.

Capítulo III
Del Poder Ejecutivo

Art. 80. Poder Ejecutivo de la Unión.

Art. 81. Elección del Presidente.

Art. 82. Requisitos para ser Presidente.

Art. 83. Duración del encargo de Presidente y su no reelección.

Art. 84. Nombramiento de Presidente Interino, Presidente provisional, Presidente sustituto.

Art. 85. Casos de falta del Presidente.

Art. 86. Renuncia del cargo de Presidente.

Art. 87. Protesta del Presidente.

Art. 88. Permiso del Congreso para las ausencias del Territorio Nacional del Presidente.

Art. 89. Facultades y obligaciones del Presidente.

Art. 90. Administración Pública Federal a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

Art. 91. Requisitos para ser Secretario de Despacho.

Art. 92. Requisitos para que sean obedecidos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente.

Art. 93. Obligaciones de los Secretarios de Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos.

Capítulo IV
Del Poder Judicial

Art. 94. Ejercicio del Poder Judicial de la Federación.

Art. 95. Requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Art. 96. Designación, por el Senado, a propuesta del Presidente, de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Art. 97.* Nombramiento de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 98.* Faltas, renunciaciones y licencias de los Ministros.
- Art. 99.* Organización, facultades, administración e integración del Tribunal Federal Electoral.
- Art. 100.* Integración, función, facultades y decisiones del Consejo de la Judicatura Federal.
- Art. 101.* Impedimentos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, los respectivos Secretarios, Consejeros de la Judicatura Federal y los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.
- Art. 102.* Organización del Ministerio Público Federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Art. 103.* Controversias que resolverán los Tribunales de la Federación.
- Art. 104.* Asuntos que lo corresponde saber a los Tribunales de la Federación.
- Art. 105.* Asuntos que le corresponde conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Art. 106.* Controversias que le corresponde dirimir al Poder Judicial de la Federación.
- Art. 107.* Bases en las que se sujetarán las controversias de que habla el artículo 103.

TÍTULO IV

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

- Art. 108.* Determinación de quiénes son servidores públicos.
- Art. 109.* Prevenciones conforme a las cuales se expedirán las leyes y demás normas de responsabilidades de servidores públicos.
- Art. 110.* Sujetos de juicio político.
- Art. 111.* Proceso penal contra servidores públicos.
- Art. 112.* No declaración de procedencia en caso de que algún servidor público cometa un delito.
- Art. 113.* Obligaciones determinadas por las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las sanciones aplicables.
- Art. 114.* Período en el que puede iniciarse el procedimiento de juicio político.

TÍTULO V

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y EL DISTRITO FEDERAL

- Art. 115.* Forma de gobierno adoptada por los Estados, organización política y administrativa del Municipio.
- Art. 116.* Organización del poder público de los Estados.
- Art. 117.* Restricciones de los Estados.
- Art. 118.* Restricciones sin consentimiento del Congreso de la Unión.
- Art. 119.* Caso de invasión o violencia exterior, entrega por los Estados y el Distrito Federal de indiciados, procesados y sentenciados, extradiciones requeridas por Estado exterior.
- Art. 120.* Obligación de los Gobernadores.
- Art. 121.* Actos públicos, registros y procedimientos de los Estados.
- Art. 122.* Organización política del Distrito Federal.

TÍTULO VI DEL TRABAJO Y LA PREVISIÓN SOCIAL

- Art. 123.* Derecho del trabajo.

TÍTULO VII PREVENCIÓNES GENERALES

- Art. 124.* Facultades concedidas a los Estados.
- Art. 125.* Restricción para desempeñar dos cargos de elección popular a la vez.
- Art. 126.* Restricción para hacer pagos no comprendidos en el presupuesto.
- Art. 127.* Remuneración de los servidores públicos.
- Art. 128.* Protesta de los funcionarios públicos.
- Art. 129.* Funciones de la autoridad militar en tiempos de paz.
- Art. 130.* Disposiciones en materia de culto público, iglesias y agrupaciones religiosas.
- Art. 131.* Facultad privativa de la Federación, facultad del Ejecutivo.
- Art. 132.* Bienes inmuebles destinados al servicio público.
- Art. 133.* Supremacía de la Constitución, leyes y Tratados Internacionales.
- Art. 134.* Manejo de los recursos económicos federales.

TÍTULO VIII DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

- Art. 135.* Adiciones o reformas a la Constitución.

TÍTULO IX
DE LA INVOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 136. Involabilidad de la Constitución.

10.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Texto vigente, última reforma de 30 de noviembre de 2012
136 artículos

Índice

Preámbulo

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I.

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Capítulo II.

De los Mexicanos

Capítulo III.

De los Extranjeros

Capítulo IV.

De los Ciudadanos Mexicanos

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I.

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Capítulo II.
De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

TÍTULO TERCERO

Capítulo I.
De la División de Poderes

Capítulo II.
Del Poder Legislativo

Sección I. *De la Elección e Instalación del Congreso*

Sección II. *De la Iniciativa y Formación de las Leyes*

Sección III. *De las Facultades del Congreso*

Sección IV. *De la Comisión Permanente*

Sección V. *De la Fiscalización Superior de la Federación*

Capítulo III.
Del Poder Ejecutivo

Capítulo IV.
Del Poder Judicial

TÍTULO CUARTO.
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y
PATRIMONIAL DEL ESTADO

TÍTULO QUINTO.
DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL DISTRITO

TÍTULO SEXTO.
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

TÍTULO SÉPTIMO.
PREVENCIÓNES GENERALES

TÍTULO OCTAVO.
DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO NOVENO.
DE LA INVOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

TRANSITORIOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917

TEXTO VIGENTE

Última reforma publicada DOF 9-2-2012

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto:

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:

Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 10. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el artículo 40. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857

TÍTULO PRIMERO

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 20. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
- III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
- V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

- VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
- VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

- VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

- I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
- II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido

regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

- III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
- IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
- V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
- VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
- VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
- VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
- IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Artículo 30. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

- I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
- II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

- III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Fede-

ral, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.

- IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
- V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
- VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
 - a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
 - b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;
- VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y
- VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Artículo 50. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta li-

bertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

- I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que

fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

- II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.
- III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
- IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
- V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
- VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
- VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Artículo 70. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, *papeleros*, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.

Artículo 80. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 90. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una

autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado

las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculcados y sentenciados por delincuencia

organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decreta la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculcado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

- I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
- II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
- III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
- IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
- V. V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
- VI. VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;
- VII. VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
- VIII. VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
- IX. IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
- X. X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;
- II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
- III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

- IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
- V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

- VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarle. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea

imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

- VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
- VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
- IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

- I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
- II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

- III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
- IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

- V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

- VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
- VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

- I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
- II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

- III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción

de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.

Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.

La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.

La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones:

- I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por

ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.

- II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
- III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;
- IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.

En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.

La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción;

- V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo.
- VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada.

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al

ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria;

VIII. Se declaran nulas:

a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas;

b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de población.

c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de población.

Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.

IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos,

materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos.

- X. (Se deroga)
- XI. (Se deroga)
- XII. (Se deroga)
- XIII. (Se deroga)
- XIV. (Se deroga)
- XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.

Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.

Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.

Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.

Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;

- XVI. (Se deroga)
- XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.

El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación correspon-

diente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.

Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;

XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.

XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la (la, *sic* DOF 3-2-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos.

Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.

La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (las, *sic* DOF 3-2-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de

impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las (las, sic DOF 3-2-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha

por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia (*beneficencia, sic DOF 20-8-1993*). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los resultados de ésta.

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a

la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación.

Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión.

Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.

Capítulo II

De los Mexicanos

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

- I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
- II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
- III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B) Son mexicanos por naturalización:

- I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
- II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

- I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
- II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
- III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior; y
- IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practica y comandante de aeródromo.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Capítulo III

De los Extranjeros

Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.

El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Capítulo IV

De los Ciudadanos Mexicanos

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido 18 años, y
- II. Tener un modo honesto de vivir.

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

- I. Votar en las elecciones populares;
- II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;
- III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
- IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;
- V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
- VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley;
- VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Federal Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y
- VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

10. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

- a) El Presidente de la República;
- b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
- c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

20. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

30. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

40. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 10. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

50. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

60. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

70. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

- I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

- II. Alistarse en la Guardia Nacional;
- III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la ley;
- IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y

- V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 37.

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

- I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y
 - II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
- C) La ciudadanía mexicana se pierde:
- I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
 - II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
 - III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
 - IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;
 - V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y
 - VI. En los demás casos que fijan las leyes.

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

- I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;
- II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
- III. Durante la extinción de una pena corporal;
- IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo I

De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno

Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

- I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

- II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políti-

cos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión solamente

la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

- IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

- V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto

Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus

miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

- VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Capítulo II

De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional

Artículo 42. El territorio nacional comprende:

- I. El de las partes integrantes de la Federación;
- II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
- III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
- IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
- V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;
- VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.

Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar,

se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.

Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución.

Artículo 47. El Estado de Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que comprende actualmente el Territorio de Tepic.

Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

TÍTULO TERCERO

Capítulo I

De la División de Poderes

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Capítulo II

Del Poder Legislativo

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Sección I

De la Elección e Instalación del Congreso

Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones (*circunscripciones, sic DOF 15-12-1986*) plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

- I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
- II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;
- III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinomial. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
- IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
- V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación

nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

- VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

- I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.
- II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
- III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

- IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.
- V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdic-

ciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.

Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.

Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.

Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.

Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habersele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habersele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula

de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.

Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla.

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.

Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 10. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 10. de febrero de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En ambos Periodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

En cada Periodo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley orgánica.

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.

Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.

Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los Presidentes de ambas Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: *El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto).*

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Sección II

De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

- I. Al Presidente de la República;
- II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
- III. A las Legislaturas de los Estados; y
- IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución.

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, (, *sic* DOF 5-2-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.

D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los

efectos de la fracción A; pero si lo reprobare, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.

I (*J, sic DOF 24-11-1923*). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Sección III

De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

- I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
- II. Derogada.
- III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
 10. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
 20. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política.
 30. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.
 40. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
 50. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
 60. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
 70. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás Estados.
- IV. Derogada.
- V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.
- VI. Derogada;
- VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
- VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la

ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública;

- IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones.
- X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
- XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
- XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.
- XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.
- XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
- XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de insuirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
- XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

- XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
- XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas;
- XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.
- XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
- XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

- XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
- XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
- XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;
- XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación

científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

- XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
- XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.
- XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
- XXIX. Para establecer contribuciones:
 - 1o. Sobre el comercio exterior;
 - 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
 - 3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
 - 4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
 - 5o. Especiales sobre:
 - a) Energía eléctrica;
 - b) Producción y consumo de tabacos labrados;
 - c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
 - d) Cerillos y fósforos;
 - e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
 - f) Explotación forestal.
 - g) Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal

determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.

- XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.
- XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución.
- XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
- XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
- XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
- XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
- XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones;
- XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y
- XXIX-J. Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el artículo 40. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios; así como de la participación de los sectores social y privado;
- XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federa-

ción, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado.

XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado.

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 40. de esta Constitución.

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares.

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

- I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
- II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;
- III. Derogada

- IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el Secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.

Quinto párrafo. (Se deroga)

Sexto párrafo. (Se deroga)

Séptimo párrafo. (Se deroga)

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;

- V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo III de esta Constitución.

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.

- VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

VII. (Se deroga).

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus

servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

- I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;
- II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
- III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.
- IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria.
- V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.
- VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.

- La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.
- VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.
 - VIII. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario.
 - IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución.
 - X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas.
 - XI. Se deroga.
 - XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

- I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
- II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones de su seno.
- III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.
- IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.

Sección IV

De la Comisión Permanente

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:

- I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV;

- II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;
- III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;
- IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o sustituto, la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría;
- V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;
- VI. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República;
- VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y
- VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Sección V

De la Fiscalización Superior de la Federación

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

- I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federa-

les, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

- II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se incluirán

las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.

El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

- III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de

fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y

- IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la Ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

Capítulo III *Del Poder Ejecutivo*

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará *Presidente de los Estados Unidos Mexicanos*.

Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.
- II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
- III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
- IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser Ministro de algún culto.
- V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.
- VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, Gobernador de algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y
- VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1.º de diciembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución.

Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de Estado, ni al Procurador General de la República, sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su encargo.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso electoral

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente sustituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente sustituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

Artículo 85. Si al comenzar un período constitucional no se presentase el Presidente electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 10. de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Cuando la falta del Presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviere reunido, o en su defecto la Comisión Permanente, designará un Presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.

Cuando la falta del Presidente sea por más de treinta días y el Congreso de la Unión no estuviere reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al Presidente interino.

Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.

Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: «Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande».

Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

- I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
- II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
- III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.
- IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.
- V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.
- VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
- VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

- VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.
- IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República.
- X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
- XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.
- XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.
- XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su ubicación.
- XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal.
- XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.
- XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión Permanente.
- XVII. Se deroga.
- XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renunciias a la aprobación del propio Senado.
- XIX. Se deroga.
- XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

Artículo 91. Para ser Secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.

Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Capítulo IV *Del Poder Judicial*

Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y funcionará en Pleno o en Salas.

En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.

El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados.

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su Presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.

Artículo 95. Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;
- III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
- IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
- V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y
- VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni Gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Artículo 96. Para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

(Párrafo tercero. Se deroga)

La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su Secretario y demás funcionarios y empleados. Los Magistrados y Jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial.

Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma:

Presidente: *¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?*

Ministro: *Sí protesto.*

Presidente: *Si no lo hicieris así, la Nación os lo demande.*

Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución.

Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta Constitución.

Las renunciaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.

Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

- I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
- II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.

La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

- III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;
- IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;
- V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;
- VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
- VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;
- VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o

morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

IX. Las demás que señale la ley.

Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renunciaciones, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes prevean.

Artículo 102. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador

General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculcados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.

En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.

El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas.

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

- I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

- II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
- III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

- I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal;
- II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común.

Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado;

- III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;
- IV. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
- V. De aquellas en que la Federación fuese parte;
- VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
- VII. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
- VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

- I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
 - a) La Federación y un Estado o el Distrito Federal;
 - b) La Federación y un municipio;
 - c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;
 - d) Un Estado y otro;

- e) Un Estado y el Distrito Federal;
- f) El Distrito Federal y un municipio;
- g) Dos municipios de diversos Estados;
- h) Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
- i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;
- j) Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y
- k) Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

- a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión;
- b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
- c) El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
- d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y
- e) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo.

Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.

- III. De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de esta Constitución.

Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito

Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal.

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
- II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Quando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Quando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Quando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que pue-

dan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al

estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado;

b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

- IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;

- V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparable por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

- VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones;
- VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
- VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
 - a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.
 - b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;

- IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

- X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiese ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;

- XI. La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante los tribunales de los Estados en los casos que la ley lo autorice;
- XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII.

Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca;

- XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción

ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les compete, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción;

XIV. Se deroga;

XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público.

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ejecución de

la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;

- XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente;
- XVIII. Se deroga.

TÍTULO CUARTO

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL ESTADO

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes,

teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

- I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

- II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal; y
- III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el Secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las

Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculcado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculcado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se

seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la *(las, sic DOF 28-12-1982)* Cámaras de Diputados *(y, sic DOF 28-12-1982)* Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo III cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo III, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo III.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

TÍTULO QUINTO

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

- I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los Presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por

alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (*hacer los, sic DOF 3-2-1983*) alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso,

será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.

VII. La policía preventiva estará al mando del Presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente;

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.

IX. Derogada.

X. Derogada.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

- I. Los Gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.

La elección de los Gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

Los Gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

- a) El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

- b) El Gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

Sólo podrá ser Gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad Federativa.

- II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.

Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;

Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso.

III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la

administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo (*encargo, sic DOF 17-3-1987*) el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los Gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 20., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo

modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de Gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de Gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares, estableciendo las

normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;

- VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y
- VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

- I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras.
- II. Derogada.
- III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
- IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
- V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
- VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía.
- VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues (*impuestos, sic DOF 5-2-1917*) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacional+es o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
- VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.

- IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:

- I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.
- II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.
- III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.

Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.

Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:

- I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
- II. Los bienes muebles e inmuebles se registrarán por la ley del lugar de su ubicación.

- III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.

- IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.

- V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán (*serán, sic DOF 5-2-1917*) respetados en los otros.

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

- I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;
- II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
- III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
- IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y
- V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:

- I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;
- II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

- III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley;
- IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y
- V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

BASE PRIMERA. Respecto a la Asamblea Legislativa:

- I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta Constitución;
- II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;
- III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;
- IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos periodos de sesiones ordinarios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal;
- V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:
 - a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;
 - b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir

dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa.

Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a

las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a Gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g) Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 30. de esta Constitución;

m) Expedir la ley orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y

o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA. Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:

I. Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.

Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán

estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial.

Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto.

II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad con el Estatuto de Gobierno; y

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

BASE TERCERA. Respecto a la organización de la Administración Pública local en el Distrito Federal:

- I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados.
- II. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.

Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

BASE CUARTA. Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero común:

- I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

- II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo. Los miembros restantes serán: un Magistrado y dos jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del Pleno de Magistrados; uno designado por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado y serán personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los elegidos por el Pleno de Magistrados deberán gozar, además, con reconocimiento por sus méritos profesionales en el ámbito judicial. Durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los jueces del Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.

- III. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución;
- IV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial;
- V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución;
- VI. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

BASE QUINTA. Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por su ley orgánica.

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso.

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico;

transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán:

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.

TÍTULO SEXTO

DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

- I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
- II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años.
- III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
- IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.

- V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.
- VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
- Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
- Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
- VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
- VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
- IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:
- a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores.
 - b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales.
 - c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.
 - d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares.

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley.

f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.

- X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda.
- XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.
- XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos.

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar.

- XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patronos deberán cumplir con dicha obligación.
- XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.
- XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;
- XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
- XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.
- XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependen del Gobierno.
- XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje.
- XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno.

- XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará abligado (*obligado, sic DOF 21-11-1962*) a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.
- XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él.
- XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.
- XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes.
- XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular.
- En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia.
- XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.
- XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados.

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra.

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a:

a) Ramas industriales y servicios:

1. Textil;

2. Eléctrica;

3. Cinematográfica;

4. Hulera;

5. Azucarera;

6. Minera;

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;

8. De hidrocarburos;

9. Petroquímica;

10. Cementera;

11. Calera;

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;

14. De celulosa y papel;

15. De aceites y grasas vegetales;

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;

18. Ferrocarrilera;

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o aglutinados de madera;

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco;

22. Servicios de banca y crédito.

b) Empresas:

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas; y

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las

estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente.

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

- I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;
- II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;
- III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;
- IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el Distrito Federal y en las Entidades de la República.

- V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
- VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes;
- VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
- VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
- IX. (IX, *sic* 5-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

- X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última.

- XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

- XIV. bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado.
- XV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

TÍTULO SÉPTIMO

PREVENCIÓNES GENERALES

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior.

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

- I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
- II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
- III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
- IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
- V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
- VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para

heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respecti-

vos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

TÍTULO OCTAVO

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes,

acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

TÍTULO NOVENO

DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 10. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.

En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria respectiva.

Artículo Segundo. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo Tercero. El próximo periodo constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 10. de Diciembre de 1916.

Artículo Cuarto. Los Senadores que en las próximas elecciones llevarán el número par, sólo durarán dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos años.

Artículo Quinto. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el primero de Junio.

En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer periodo de dos años que establece el artículo 94.

Artículo Sexto. El Congreso de la Unión tendrá un periodo extraordinario de sesiones que comenzará el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la Ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión de su cargo antes del 10. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.

Artículo Séptimo. Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes.

Artículo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor.

Artículo Noveno. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los Poderes de la Unión.

Artículo Décimo. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste.

Artículo Decimoprimer. Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la República.

Artículo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado ser-

vicios a la causa de la Revolución o a la Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán.

Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios.

Artículo Decimocuarto. Queda suprimida la Secretaría de Justicia.

Artículo Decimoquinto. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.

Artículo Decimosexto. El Congreso Constitucional en el periodo ordinario de sus sesiones, que comenzará el 10. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en el periodo extraordinario a que se refiere el artículo 60. transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo III de esta Constitución.

Artículo Decimoséptimo. Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica.

Artículo Decimoctavo. Derogado.

Artículo Decimonoveno. Derogado.

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete. Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco. Primer Vicepresidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz. Segundo Vicepresidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca. Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes. Diputado por el Territorio de la Baja California: Ignacio Roel. Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. Rodríguez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente). Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ramírez Villarreal. Diputados por el Edo. de Chiapas: Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal. Diputado por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. Prieto. Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa (Suplente). Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto Terrones B., Jesús de la Torre. Diputados por el Edo. de Guajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peña-

flor, José Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos Ramírez Llaca. Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, Fidel Guillén, Francisco Figueroa. Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. González, Rafael Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga. Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Gaspar Bolaños B., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. Amado Aguirre, José I. Solórzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, Crnl. Sebastián Allende, Jr. Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, Enrique O'Fárril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hernández, Enrique A. Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí. Diputados por el Edo. de Michoacán: José P. Ruíz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Alvarez, Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores. Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar, José L. Gómez. Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis Ilizaliturri, Crnl. Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente). Diputados por el Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Celestino Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa. Diputados por el Edo. de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José Rivera, Crnl. Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinorín, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, José Verástegui. Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía. Diputados por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente). Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés, Emiliano C. García. Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross. Diputados por el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes, - Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, Emiliano Próspero Nafarrete. Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara. Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal,

Modesto González y Galindo. Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra. Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria A. Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar. Secretario: Fernando Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato. Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila. Secretario: José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro. Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán. Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato. Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango. Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora. Prosecretario: Flavio A. Bórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.

Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República para su debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.
V. CARRANZA. Rúbrica.

Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación. México.

Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.

Constitución y Reformas. México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete. AGUIRRE BERLANGA.

Al Ciudadano ...

11. REFORMAS A LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO

II.1. NÚMERO DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO

Artículo	Reformas	Artículo	Reformas	Artículo	Reformas
1	3	46	3	93	6
2	3	48	1	94	12
3	10	49	2	95	5
4	13	51	2	96	2
5	5	52	8	97	10
6	6	53	3	98	5
7	1	54	8	99	6
10	1	55	8	100	5
11	1	56	5	101	4
14	1	58	3	102	8
15	1	59	2	103	3
16	6	60	6	104	10
17	4	61	1	105	12
18	8	62	1	106	3
19	4	63	3	107	16
20	7	65	5	108	9
21	6	66	2	109	2
22	6	67	1	110	8
24	2	69	4	111	11
25	5	70	1	112	1
26	6	71	3	113	3
27	19	72	2	114	2
28	10	73	68	115	15
29	4	74	17	116	13
30	4	75	1	117	6
31	5	76	15	119	4
32	3	77	2	120	1
33	1	78	7	121	1
34	2	79	15	122	13
35	4	82	8	123	25
36	4	83	5	124	1
37	3	84	4	125	1
40	2	85	3	127	4
41	11	87	1	130	2
42	2	88	2	131	3
43	7	89	17	133	2
44	2	90	3	134	4
45	6	92	2	135	2

Número de artículos de la Constitución: 136

Artículos reformados: 114

Artículos sin reformar: 22

Total de reformas (23 de febrero de 2016): 617 artículos, 2 títulos y 1 capítulo

11.2. EXTRACT FROM THE CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

TITLE I

Chapter I

Human Rights and it's Guarantees

Article 1. Right of every individual to enjoy the human rights recognized in the Constitution and international treaties, prohibition of slavery and discrimination.

Article 2. Rights of indigenous peoples and communities and obligations of the authorities.

Article 3. Right to education.

Article 4. Equality of man and women before the law, right to decide the number and spacing of children, protection of health, an adequate environment and adequate housing and decent.

Article 5. Right to choose the profession, industry, trade or work that best suits each individual, prohibition of personal, public services obligation.

Article 6. Expression of ideas, right to information.

Article 7. Freedom of Speech.

Article 8. Right of petition.

Article 9. Right of association.

Article 10. Right to bear arms.

Article 11. Freedom of Transit.

Article 12. No grating of titles of nobility.

Article 13. Right not to be judged by private laws or special tribunals.

Article 14. Non-retroactivity of the law.

Article 15. Extradition.
Article 16. Legal guarantees.
Article 17. Administration of justice.
Article 18. Organization of the penal system.
Article 19. Arrest of the suspect.
Article 20. Guarantees of the accused and the victim or offended.
Article 21. Sentencing, the public security system.
Article 22. Punishment considered prohibited, confiscation of property.
Article 23. Instances in a criminal trial.
Article 24. Freedom of religious belief.
Article 25. Protection of National Development and Economic Stewardship State.
Article 26. National Development Plan.
Article 27. Property rights.
Article 28. Prohibition of monopolies and functions of the Central Bank.
Article 29. Suspension of guarantees.

Chapter II *Of the Mexicans*

Article 30. Mexican nationality.
Article 31. Obligations of the Mexicans.
Article 32. Double nationality, as the Mexican to play certain positions and functions.

Chapter III *Of Foreigners*

Article 33. Quality of foreign.

Chapter IV *Mexican Citizens*

Article 34. Requirements to become a Mexican citizen.
Article 35. Rights of citizen.
Article 36. Obligations of citizens.
Article 37. Right of Mexicans by birth not to lose citizenship, where citizenship is lost by naturalization, loss of citizenship.
Article 38. Suspension of rights or privileges of citizens.

TITLE II

Chapter I *National Sovereignty and Form of Government*

Article 39. National Sovereignty.

Article 40. Form of government.

Article 41. Exercise of sovereignty, renewal of powers.

Chapter II

Party Members of the Federation and the National Territory

Article 42. Integration of the National Territory.

Article 43. Parts of the Federation.

Article 44. Federal District.

Article 45. Extent and limits of the States of the Federation.

Article 46. Conventions of States, about their limits.

Article 47. Territorial extent and limits of the State of Nayarit.

Article 48. Dependent parts of the Territory of the Federal Government.

TITLE III

Chapter I

From the Division of Powers

Article 49. Division, for their exercise, the Supreme Power of the Federation.

Chapter II

The Legislative Power

Chapter II

The Legislative Power

Article 50. Legislature.

Section I

Election and Installation of Congress

Article 51. Composition of the Chamber of Deputies, election of deputies.

Article 52. Relative majority, proportional representation.

Article 53. Territorial demarcation of electoral districts and multiple electoral areas.

Article 54. Basis for the election of Deputies on the principle of proportional representation and allocation system for regional lists.

Article 55. Requirements to become a deputy.

Article 56. Integration of the Senate, election on the principle of relative majority vote and proportional representation.

Article 57. Election of substitute senators.

Article 58. Qualifications for Senator.

Article 59. No re-election of deputies and senators.

Article 60. Functions of the Federal Electoral Institute and the Federal Electoral Court's decisions.

Article 61. Constitutional immunity of the members of the Chambers.

Article 62. Prohibition for Deputies and Senators.

Article 63. Attendance required to open session in the Chambers.

Article 64. Penalty for non-attendance of a deputy or senator.

Article 65. Start of sessions period.

Article 66. Termination of Sessions periods.

Article 67. Special Sessions.

Article 68. Location of the Chambers.

Article 69. Opening of regular or special sessions, assistance and President.

Article 70. Resolutions of Congress.

Section II

Initiative and formation of the Laws

Article 71. Power to initiate laws or decrees.

Article 72. Legislative Process.

Section III

Of the Powers of Congress

Article 73. Powers of Congress.

Article 74. Powers of the House of Representatives.

Article 75. Approval of federal budget.

Article 76. Powers of the Senate.

Article 77. Powers of the Chambers without intervention of the other.

Section IV

The Permanent Commission

Article 78. Composition of the permanent commission.

Section V

Audit Institutions of the Federation

Article 79. Functions of Supreme Audit Institution of the Federation, of the Chamber of Deputies.

Chapter III

Executive Power

Article 80. Executive Branch of the Union.

Article 81. Election of the President.

Article 82. Requirements to be President.

Article 83. Presidential term and no reelection.

Article 84. Appointment of Interim President temporary and substitute.
Article 85. Cases of absence of the President.
Article 86. Resignation of President.
Article 87. Protest of the President.
Article 88. Permission from Congress to the absence of the President of the National Territory.
Article 89. Branch and duties of the President.
Article 90. Federal Public Administration in charge of ministries and administrative departments.
Article 91. Qualifications of state Secretary.
Article 92. Requirements to be obeyed regulations, decrees and orders of the President.
Article 93. Duties of the Secretaries, and Heads of Administrative Departments.

Chapter IV *The Judicial Branch*

Article 94. Exercise of the Judicial Branch.
Article 95. Qualifications of the Supreme Court of Justice.
Article 96. Designation by the Senate from a proposal of the President, Ministers of the Supreme Court of Justice.
Article 97. Appointment of circuit magistrates and district judges, powers of the Supreme Court of Justice.
Article 98. Fouls, waivers and licenses of the Ministers.
Article 99. Organization, powers, management and integration of the Federal Electoral Court.
Article 100. Integration, function, powers and decisions of the Judicature council.
Article 101. Impediments to the ministers of the Supreme Court of Justice, Circuit Judges, District Judges, the respective Secretaries, Counselors of the Judicature Council and magistrates Federal Electoral Court.
Article 102. Organization of the Federal Public Prosecutor and the National Commission on Human Rights.
Article 103. Disputes resolved by courts of the Federation.
Article 104. Issues that corresponds to the Courts of the Federation.
Article 105. Issues that corresponds Supreme Court of Justice.
Article 106. Disputes that corresponds to the Judicial Branch.
Article 107. Bases in which disputes shall be subject mentioned in Article 103

TITLE IV RESPONSIBILITIES OF PUBLIC SERVANTS

Article 108. Determination of who are public servants.

Article 109. Warnings under which will be issued laws and other rules of responsibility of public servants.

Article 110. Subject to political trial.

Article 111. Criminal proceedings against public servants.

Article 112. No declaration of origin in case of a public servant commits an offense.

Article 113. Obligations determined by the laws of administrative responsibilities of public servants and its penalties.

Article 114. Period in which to begin political trial.

TITLE V

THE STATES OF THE FEDERATION AND THE FEDERAL DISTRICT

Article 115. Form of government adopted by States, political and administrative organization of the municipality.

Article 116. Organization of public power of the States.

Article 117. Restrictions States.

Article 118. Restrictions without the consent of Congress.

Article 119. Case of foreign invasion or violence, delivery by the States and Federal District indicted, prosecuted and sentenced, extradition requested by foreign state.

Article 120. Obligation of Governors.

Article 121. Public acts, records and procedures of the States.

Article 122. Political organization of the Federal District.

TITLE VI

LABOUR AND SOCIAL WELFARE

Article 123. Labor laws.

TITLE VII

General measures

Article 124. Powers granted to the States.

Article 125. Restriction to perform two elected offices simultaneously.

Article 126. Restriction to make payments not included in the budget.

Article 127. Remuneration of public servants.

Article 128. Protest of public officials.

Article 129. Functions of the military in peacetime.

Article 130. Arrangements for public worship, churches and religious groups.

Article 131. Prerogative of the Federation, the executive power.

Article 132. Property for a public real state.

Article 133. Supremacy of the Constitution, laws and international treaties.

Article 134. Management of federal financial resources.

TITLE VIII

OF AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 135. Additions or amendments to the Constitution.

TITLE IX

INVOLABILITY OF THE CONSTITUTION

Article 136. Inviolability of the Constitution.

11.3. POLITICAL CONSTITUTION OF THE UNITED MEXICAN STATES

Existing text. Last reform on November, 2012
136 articles

INDEX

PREAMBLE

TITLE ONE

Chapter I.
Fundamental rights

Chapter II.
Mexican nationals

Chapter III.
The foreigners

Chapter IV.
The Mexican citizens

TITLE TWO

Chapter I.
National sovereignty and form of governance

Chapter II.
Composition of the Federation and Mexican territory

TITLE THREE

Chapter I.
Division of power

Chapter II.
The legislature

Section I.
Election and inauguration of the Congress

Section II.
Bills and Law enactment

Section III.
Powers of Congress

Section IV.
Permanent Committee

Section V.
Federal Auditing Office

Chapter III.
The Federal Executive Branch

Chapter IV.
The Judicial Branch

TITLE FOUR.

PUBLIC SERVANTS' ACCOUNTABILITIES AND STATE PATRIMONY

TITLE FIVE.
MEXICAN STATES AND THE FEDERAL DISTRICT

TITLE SIX.
LABOR AND SOCIAL SECURITY

TITLE SEVEN.
GENERAL CONSIDERATIONS

TITLE EIGHT.
CONSTITUTIONAL REFORMS

TITLE NINE.
THE INVIOABILITY OF THE CONSTITUTION

TRANSITORY ARTICLES

This Constitution was published in the *Diario Oficial de la Federación* (Federal Official Gazette) the 5 day of February, 1917.

It was updated through the reforms published on February 9th, 2012.

The Commanding Officer of the Constitutional Army, Nation's Chief Executive, has addressed to me the following decree:

I, VENUSTIANO CARRANZA, Commanding Officer of the Constitutional Army, Chief Executive of the United Mexican States, inform that:

The Constituent Congress, which has met in this city this 1 day of December, 1916, under the call issued on September 19, same year, by the First Head of State, according to that provided by the Article 4 of modifications made on September 14 on the decree issued on December 12, 1914 in Veracruz, and attaching the Plan of Guadalupe proclaimed on March 26, 1913, has issued the following:

POLITICAL CONSTITUTION OF THE
UNITED MEXICAN STATES

This Constitution reforms the constitution issued on February 5, 1857.

TITLE ONE

Chapter I

Human rights and guarantees

Article 1. In the United Mexican States, all individuals shall be entitled to the human rights granted by this Constitution and the international treaties signed by the Mexican State, as well as to the guarantees for the protection of these rights. Such human rights shall not be restricted or suspended, except for the cases and under the conditions established by this Constitution itself.

The provisions relating to human rights shall be interpreted according to this Constitution and the international treaties on the subject, working in favor of the protection of people at all times.

All authorities, in their areas of competence, are obliged to promote, respect, protect and guarantee the human rights, in accordance with the principles of universality, interdependence, indivisibility and progressiveness. As a consequence, the State must prevent, investigate, penalize and redress violations to the human rights, according to the Law.

Slavery shall be forbidden in Mexico. Every individual who is considered as a slave at a foreign country shall be freed and protected under the Law by just entering the country.

Any form of discrimination, based on ethnic or national origin, gender, age, disabilities, social status, medical conditions, religious, opinions, sexual orientation, marital status, or any other form, which violates the human dignity or seeks to annul or diminish the rights and freedoms of the people, is prohibited.

Article 2. The Mexican Nation is unique and indivisible. The nation is multicultural, based originally on its indigenous tribes.

Descendants of those inhabiting the country before colonization and that preserve their own social, economic, cultural and political institutions, or some of them.

Consciousness of indigenous identity will be the fundamental criteria to determine to whom apply the provisions on indigenous people.

Indigenous community is defined as the community that constitutes a cultural, economic and social unit, settled in a territory and that recognizes its own authorities, according to their customs.

Indigenous people's right to self-determination shall be subjected to the Constitution in order to guarantee national unity. States' and Federal District's constitutions and laws must recognize indigenous peoples and communities, taking into account the general principles established in the previous paragraphs, as well as ethnic-linguistic and land settlement criteria.

A. This Constitution recognizes and protects the indigenous peoples' right to self-determination and, consequently, the right to autonomy, so that they can:

- I. Decide their internal forms of coexistence, as well their social, economic, political and cultural organization.
- II. Apply their own legal systems to regulate and solve their internal conflicts, subjected to the general principles of this Constitution, respecting the fundamental rights, the human rights and, above all, the dignity and safety of women. The Law shall establish the way in which judges and courts will validate the aforementioned regulations.
- III. Elect, in accordance with their traditional rules, procedures and customs, their authorities or representatives to exercise their own form of government, guaranteeing women's participation under equitable conditions before men, and respecting the federal pact and the sovereignty of the States and the Federal District.
- IV. Preserve and enrich their languages, knowledge and all the elements that constitute their culture and identity.
- V. Maintain and improve their environment and lands, according to this Constitution.
- VI. Attain preferential use of the natural resources of the sites inhabited by their indigenous communities, except for the strategic resources defined by this Constitution. The foregoing rights shall be exercised respecting the forms of property ownership and land possession established in this Constitution and in the laws on the matter as well as respecting third parties' rights. To achieve these goals, indigenous communities may form partnerships under the terms established by the Law.
- VII. Elect indigenous representatives for the town council.

The constitutions and laws of the States shall recognize and regulate these rights in municipalities, with the purpose of strengthening indigenous peoples' participation and political representation, in accordance with their traditions and regulations.

- VIII. VIII. Have full access to State jurisdiction. In order to protect this right, in all trials and proceedings that involve natives, individually or collectively, their customs and cultural practices must be taken into account, respecting the provisions established in this Constitution. Indigenous people have, at all times, the right to be assisted by interpreters and counsels, who are familiar to their language and culture.

The constitutions and laws of the States and the Federal District shall establish those elements of self-determination and autonomy that may best express the conditions and aspirations of indigenous peoples, as well as the rules, according to which indigenous communities will be defined as public interest entities.

B. In order to promote equal opportunities for indigenous people and to eliminate discriminatory practices, the Federation, the Federal District, the States and the

local councils shall establish the necessary institutions and policies to guarantee full force of indigenous people's rights and comprehensive development of indigenous communities. Such institutions and policies shall be designed and operated together with them.

In order to eliminate the needs and backwardness affecting indigenous towns and communities, authorities are obliged to:

- I. Stimulate regional development in indigenous areas with the purpose of strengthening local economies and improving the quality of life. To achieve this goal, the three levels of government and the indigenous communities must take part in a coordinated manner. Local governments shall equitably determine the budget that is to be directly managed by the indigenous communities for specific goals.
- II. Guarantee education and increase educational level of indigenous peoples, favoring bilingual and cross-cultural education, literacy, completion of the elementary and secondary education, technical training, high education and university education. Also, the authorities must establish a scholarship system for indigenous students at all grades, as well as define and carry out regional educational programs, according to indigenous peoples' cultural heritage and opinion, and according to the Law. Authorities must promote respect towards the several cultures of the Nation and knowledge about them.
- III. Enforce an effective access to health services by increasing the coverage of the national health services, but making good use of traditional medicine; improve nutrition for indigenous people through food programs, specially for children.
- IV. Improve conditions of indigenous communities and their spaces for socializing and recreation through public and private financing for housing construction and improvements; extend the coverage of basic social services.
- V. Promote incorporation of indigenous women to development by supporting their productive projects, protecting their health and granting incentives for their education; foster participation of indigenous women in decision making process of their communities.
- VI. Extend the communication infrastructure, enabling integration of communities to the rest of the country, by constructing and expanding transportation routes and telecommunication means. Also, authorities are obliged to develop the conditions required so that indigenous peoples and communities may acquire, operate and manage media, in accordance with the Law.
- VII. Support productive activities and sustainable development of indigenous communities through: a) actions that allow them to become self-suffi-

cient; b) granting incentives for public and private investments that create new jobs; c) the use of new technology to increase productive capacity and to assure equitable access to supply and marketing systems.

VIII. Establish social policies to protect indigenous immigrants both, in Mexican territory and foreign countries, through: a) actions that assure farm workers' labor rights; b) improve women's health; c) carry out special educational and nutrition programs for children and young people belonging to immigrant families; d) ensure indigenous people's human rights are respected and e) spread indigenous peoples' culture.

IX. Consult indigenous peoples' opinion and recommendations while preparing the National Development Plan, the State plans and the local plans and, if appropriate, to incorporate their recommendations and proposals.

In order to enforce the obligations set forth herein, the Chamber of Deputies, the legislative bodies of the Federal District and the States, as well as the City Councils, within the scope of their jurisdictions, shall establish specific budgets to comply with these obligations, as well as the procedures enabling communities to participate in the exercise and supervision thereof.

Any community comparable to indigenous peoples shall have the same rights as the indigenous people, according to the Law, without detrimental to rights of natives, their communities and peoples.

Article 3. All people have the right of education. The State – Federation, States, Federal District and Municipalities– will provide preschool, elementary, middle and high education. Preschool, elementary and middle education are part of the basic education; these and the high education will be mandatory.

Education provided by the State shall develop harmoniously all human abilities, inducing in pupils love for the country, the respect for human rights and international solidarity on independence and justice.

I. According to the Article 24, the education provided by the State shall be secular, therefore, state education shall be maintained entirely apart from any religious doctrine.

II. The guiding principles for state education shall be scientific progress and the fight against ignorance, servitude, fanaticism and prejudices.

Furthermore, guiding principles for state education shall:

a) Be democratic, understanding democracy not only as a legal structure and political regime, but also as a way of life grounded on the continuous economic, social and cultural development;

b) Be national, which means that, without hostilities or exclusivism, state education shall study national problems and the utilization of our resources, shall defend our political independence, shall assure our economic independence and shall preserve and develop our culture; and

- c) Contributing to a better human coexistence, in order to strengthen the appreciation and respect for cultural diversity, human dignity, the integrity of the family, the conviction of the society general interest, the fraternity and fairness ideals of everyone's rights, avoiding race, religion, group, sex or individual privileges.
- III. To fully comply with the provisions established in the second paragraph and under section II, the President of the Republic shall establish the syllabus for preschool, elementary and secondary education, as well as for teacher training college that is to be applied throughout the country. The President of the Republic shall take into account the opinion of the states and the Federal District governments, as well as the opinions of all groups of society involved in education, under the terms provided by the Law.
- IV. Education provided by the State shall be free.
- V. In addition to providing the preschool, elementary, middle and high education mentioned in the above paragraph, the State will promote and deal with all educational types and modalities, from the starting education to the higher education, necessary for the development of the nation, and will support the scientific and technology research and will promote strengthening and spreading our culture.
- VI. Private entities may provide all kinds of education. In accordance with the Law, the State shall have powers to grant and cancel official accreditation to studies done at private institutions. In the case of pre-school, elementary and secondary education, as well as teacher training college, private schools must:
 - a) Provide education in accordance with the same purposes and criteria established in paragraph second and section II, as well as to comply with the syllabus mentioned in section III; and
 - b) Obtain a previous and explicit authorization from the authorities, under the terms provided by the Law.
- VII. Universities and other higher education institutions upon which the Law has conferred autonomy, shall have the powers and responsibility to govern themselves. They must subject themselves to the principles established in this Article to educate, do research and promote culture, respecting academic freedom, researching freedom, freedom to apply exams and to discuss ideas. These institutions shall develop their academic plans; they shall establish the terms for admission, promotion and tenure of their academic personnel; and they shall manage their estate. Labor relationships between institution and academic and administrative personnel shall be governed by section A of Article 123 of this Constitution, according to the terms established by the National Labor Relations Act for a specially

regulated work, without interfering with the autonomy, academic freedom, researching freedom and the goals of the institutions referred herein.

- VIII. In order to unify and coordinate education throughout the country, the Congress of the Union shall issue the necessary laws to distribute the social duty of educating among the Federation, the Federal District, the states and the municipalities, and shall establish the pertinent budget and the penalties applicable to such civil servants who fail to comply or enforce these provisions, and to any one infringing them.

Article 4. Man and woman are equal under the Law. The Law shall protect the organization and development of the family.

Every person has the right to decide, in a free, responsible and informed manner, the number of children desired and the timing between each of them.

All individuals have the right to nutritional, sufficient and quality nourishment. The State shall guarantee this.

Every person has the right to access to health services.

Any person has the right to a healthy environment for his/her own development and wellbeing. The State will guarantee the respect to such right. Environmental damage and deterioration will generate a liability for whoever provokes them in terms of the provisions by the Law.

Any person has the right of access, provision and drainage of water for personal and domestic consumption in a sufficient, healthy, acceptable and affordable manner. The State will guarantee such right and the Law will define the bases, supports and modality for the equitable and sustainable access and use of the freshwater resources, establishing the participation of the Federation, federal entities and municipalities, as well as the participation of the citizens for the achievement of such purposes.

Any family has the right to enjoy a decent and respectable Chamber . The Law will set the instruments and supports necessary to achieve such objective.

Every person has the right to live in an environment that is suitable for his development and wellbeing.

Every family has the right to live in a dignified and decorous housing.

The State, in all decisions it makes and all actions it carried out, will safeguard and comply with the principle of doing what is in the best interest of children, thus entirely guaranteeing their rights. Boys and girls have the right to having their nutritional, health, educational and recreation needs satisfied for their proper development. This principle should guide the design, enforcement, following up and evaluation of the policies published dealing with children.

Ascendant relatives and guardians have the obligation of maintaining and demanding the compliance of these rights and principles.

The State will grant aid to individuals to assist with the compliance of the rights of children.

Ascendants, tutors and guardians have the duty to protect these rights.

Every person has cultural rights, has the right of access to culture and the right to enjoy state cultural services. The State shall provide the means to spread and develop culture, taking into account the cultural diversity of our country and respecting creative freedom. The Law shall provide instruments that guarantee access and participation of any cultural expression.

All individuals have a right to physical culture and the practice of sports. The State shall promote and stimulate this with laws on the matter.

Article 5. No person may be prevented from performing the profession, industry, business or work of his choice, provided that it is lawful. This right may only be banned by judicial resolution, when third parties' rights are infringed, or by government order, issued according to the Law when society's rights are infringed. No one can be deprived of legal wages, except by a judicial ruling.

In each state, the Law shall determine which professions require a degree to be practiced, the requirements for such degree and the appropriate authorities to issue it.

No one can be compelled to work or render personal services without obtaining a fair compensation and without his full consent, unless the work has been imposed as a penalty by a judicial authority, which shall be subjected to the provisions established in the Article 123, sections I and II.

Only the following public services may be mandatory, and always according to the Law: military service, jury service, councilman service and positions granted through the direct or indirect vote. Electoral and census duties shall be mandatory and free; however, those services performed professionally shall be paid as provided by this Constitution and any applicable laws. Social professional services shall be mandatory and remunerated according to the Law and with the exceptions established in it.

Any contract, pact or agreement, which purpose is the demerit, loss or irrevocable sacrifice of a person's liberty is prohibited.

Any contract by which a person agrees to his own proscription or exile, or by which he temporarily or permanently waives his right to practice certain profession, industry or business shall not be authorized either.

A work contract will oblige the person only to render the service mentioned in that contract and during the term established by Law, which may not exceed one year. The work contract cannot include the waiver, loss or damage of any political or civil right.

In the event that the worker fails to fulfill said contract, he only may be subjected to civil liability, but never may be exerted any coercion on him.

Article 6. Expression of ideas shall not be submitted to judicial or administrative inquiry, except for the cases when such expression of ideas goes against the moral or third party's rights, or causes perpetration of a felony, or disturb Law and order. The right of reply shall be exercised according to Law. The State shall guarantee the right to information.

In order to guarantee the right to information, the Federation, the states and the Federal District, according to their powers, shall be ruled by the following principles:

- I. All information in custody of any federal, state or local authority, entity or organ, is public. It may be reserved only temporarily due to public interest and according to the Law. The principle of maximum disclosure shall prevail when interpreting this right.
- II. Information regarding private life and personal data shall be protected according to Law and with the exceptions established therein.
- III. Every person shall have free access to public information and his personal data, as well as to their rectification, without the necessity to argue interest or justification.
- IV. Free mechanisms to access information and review procedures shall be established. These procedures shall be formalized before specialized and impartial agencies, which shall have operational, managerial and decision making independence.
- V. Government agencies shall keep their documents in updated administrative files, and shall disclose, through electronic media, the complete and updated information about the indicators of their management and the use of public resources.
- VI. The Law shall establish procedures for governmental agencies to disclose information concerning the use of public resources paid to natural or artificial persons.
- VII. Failure to comply with these dispositions shall be penalized according to the Law.

Article 7. Freedom to write and publish texts on any topic is unrestricted. No Law or authority can previously censor the press, or ask for a bail to authors or printers, or restrict freedom of the press, which has its limits in respect to private life, morality and public peace. In no case, printing press can be seized as the instrument of a crime.

Organic laws shall establish all the necessary provisions to prevent that, on the pretext of accusations, sellers, newsboys, paper industry workers, printers and any other employees of the workshop that published the reported publication was jailed, unless their liability is previously demonstrated.

Article 8. Public officers and employees will respect the exercise of the right to petition provided that petition is made in writing and in a peaceful and respectful manner.

Regarding political petitioning, only citizens have this right. Every petition must be decided in writing by the authority to whom it was addressed, who has the duty to reply to the petitioner within a brief term.

Article 9. The right to peacefully associate or assembly for any licit purpose cannot be restricted. Only citizens of the Republic may take part in the political affairs of the country. No armed meeting has the right to deliberate.

Meetings organized to make a petition or to submit a protest to any authority cannot be considered as unlawful, nor be broken, provided that no insults are uttered against the authority and no violence or threats are used to intimidate or force the decision of such authority.

Article 10. The inhabitants of the United Mexican States have the right to keep arms at home, for their protection and legitimate defense, with the exception of those which are prohibited by the Federal Law and those which are reserved for the exclusive use of the Army, Navy, Air Force and National Guard. Federal Law will state the cases, conditions, requirements and places where inhabitants can be authorized to carry weapons.

Article 11. Every person has the right to enter and leave the country, to travel through its territory and to move house without the necessity of a letter of safe passage, passport, safe-conduct or any other similar requirement. In the event of criminal or civil liability, the exercise of this right shall be subject to the judicial authority. Relating to limitations imposed by the laws on immigration and public health, or in respect to undesirable aliens residing in the country, the exercise of this right shall be subject to the administrative authority.

In case of political persecution, any person has the right to seek political asylum, which will be provided for humanitarian reasons. The Law shall regulate the cases in which political asylum should be provided, as well as the exceptions.

Article 12. No titles of nobility, nor prerogatives and hereditary honors shall be granted in the United Mexican States. Furthermore, those granted by any other country shall have no effect.

Article 13. No one can be tried under special laws or special courts. No person or corporation can have any privileges, nor enjoy emoluments, other than those given in compensation for public services and which must be established by the Law. Military jurisdiction prevails for crimes and faults against military discipline; but, under no case and for no circumstance, military courts can extend their jurisdiction over persons who are not members of the Armed Forces. Civilians involved in military crimes or faults shall be put on trial before the competent civil authority.

Article 14. No Law will have retroactive effect.

No one can be deprived of his freedom, properties or rights without a fair trial before previously established courts, complying with the essential formalities of the proceedings and according to those laws issued beforehand.

With regard to criminal trials, it is forbidden to impose any penalty which has not been expressly decreed by a Law applicable to the crime in question, arguing mere analogy or majority of reason.

In civil trials, final sentence must agree the Law writing or the legal interpretation thereof. In the case of lack of the appropriate Law, sentence must be based on the general principles of Law.

Article 15. The United Mexican States disallow international treaties for extradition when the person to be extradited is politically persecuted, or accused of ordinary crime while having the condition of a slave in the country where he/she committed the crime, as well as the agreements or treaties that alter the human rights established by this Constitution and the international treaties signed by the Mexican State.

Article 16. No person shall be in his private affairs, or his home invaded, without a written order from a competent authority, duly explaining the legal cause of the proceeding.

All people have the right to enjoy protection on his personal data, and to access, correct and cancel such data. All people have the right to oppose disclosure of his data, according to the Law. The Law shall establish exceptions to the criteria that rule the handling of data, due to national security reasons, Law and order, public security, public health, or protection of third party's rights.

Only judicial authority can issue an arrest warrant. Such arrest warrant shall always be preceded by a formal accusation or charge of misconduct considered as criminal offence, punishable with imprisonment, provided that there is evidence to prove that a crime has been committed and that the defendant is criminally liable.

The authority executing an arrest warrant shall bring the accused before the judge without any delay and under its sole responsibility. Fail to comply with this provision will be punished under criminal Law.

In cases of *flagante delicto*, any person may arrest the offender, turning him over without delay to the nearest authorities, which in turn, shall bring him before the Public Prosecution Service. A record of such arrest must be done immediately.

The Public Prosecution Service may order arrest of the accused, explaining the causes of such decision, only under the following circumstances all together: a) in urgent cases, b) when dealing with serious offence, c) under reasonable risk that the accused could evade the justice and, d) because of the time, place or circumstance, accused cannot be brought before judicial authority.

In cases of urgency or flagrancy, the judge before whom the prisoner is presented shall immediately confirm the arrest or order his release, according to the conditions established in the Law.

In the case of organized crime, and at the request of the Public Prosecution Service, judicial authority can order to put a person into hold restraint, complying with the terms of time and place established by Law and without exceeding forty days, whenever necessary for the success of the investigation, the protection of people or legal goods, or when the accused could avoiding the action of justice. The forty days term can be extended, provided that the Public Prosecution Service proves that the causes that originate hold restraint still remain. In any case, the hold restraint shall not last more than eighty days.

The term organized crime is defined as the organization of three or more people gathered together to commit crimes in a permanent or frequent manner, in the terms provided by the correspondent Law.

No accused person shall be held by the Public Prosecution Service for more than forty eight hours. After this term, his release shall be ordered or he shall be brought before a judicial authority. Such term may be duplicated in case of organized crime. Any abuse shall be punished by criminal Law.

Only a judicial authority can issue a search warrant at the request of the Public Prosecution Service. The search warrant must describe the place to be searched, the person or persons to be apprehended and the objects to be seized. Upon the conclusion of the search, a report must be compiled at the site and before two witnesses proposed by the occupant of the place searched or, in his absence or refusal, by the acting authority.

Private communications shall not be breached. The Law shall punish any action against the liberty and privacy of such communications, except when they are voluntarily given by one of the individuals involved in them. A judge shall assess the implications of such communications, provided they contain information related to the perpetration of a crime. Communications that violate confidentiality established by Law shall not be admitted in any case.

Only the federal judicial authority can authorize telephone tapping and interception of private communications, at the request of the appropriate federal authority or the State Public Prosecution Service. The authority that makes request shall present in writing the legal causes for the request, describing therein the kind of interception required, the individuals subjected to interception and the term thereof. The federal judicial authority cannot authorize telephone tapping nor interception of communications in the following cases: a) when the matters involved are of electoral, fiscal, commercial, civil, labor or administrative nature, b) communications between defendant and his attorney.

The judiciaries shall have control judges who shall immediately and by any means solve the precautionary measures requests and investigation techniques, ensuring compliance with the rights of the accused and the victims. An authentic registry of all the communications between judges and the Public Prosecution Service and other competent authorities shall be kept.

Authorized telephone tapping and interception of communications shall be subjected to the requirements and limitations set forth in the Law. The results of telephone tapping and interception of communications that do not comply with the aforesaid requirements will not be admitted as evidence.

Administrative authorities shall have powers to search private households only in order to enforce sanitary and police regulations. Administrative authorities can require the accounts books and documents to corroborate compliance with fiscal provisions, following the procedures and formalities established for search warrants. The sealed

correspondence circulating through the mail shall be exempt from any search and the violation thereof shall be punishable by the Law.

During peacetime, no member of the Army can be quartered in a private house against the owner's will nor impose any requirements.

During a war, soldiers can demand lodging, baggage, food and other requirements in the terms set forth by the applicable martial Law.

Article 17. Nobody can take justice into their own hands, nor have resort to violence to enforce his rights.

All people have the right to enjoy justice before the courts and under the terms and conditions set forth by the laws. The courts shall issue their rulings in a prompt, complete and impartial manner. Court's services shall be free, judicial fees are prohibited.

The Mexican Congress shall enact laws to regulate collective actions. Such laws shall establish the cases in which each Law applies, as well as the judicial proceedings and the remedies for redress. Only the federal judges have jurisdiction on these proceedings and remedies.

The laws shall provide alternative mechanisms to resolve controversies. Regarding to criminal matter, the laws shall regulate application of such mechanisms, ensure redress and establish the cases in which judicial supervision is required.

Oral proceedings shall end with a sentence, which shall be explained in a public hearing before the parties.

Federal and local laws shall provide the necessary means to guarantee the independence of the courts and the full enforcement of their rulings.

The Federation, the states and the Federal District must have a good public defender office and shall provide the conditions for a professional career service for the defenders. The defenders' fees shall not be inferior to the public prosecutors' fees.

Imprisonment shall be forbidden as a way to punish civil debts.

Article 18. Preventive custody shall be reserved for crimes punishable by imprisonment. Preventive prisons shall be completely separated from the prisons used for convicted persons.

Prison system shall be organized on the basis of the respect for human rights, as well as the work, training, education, health and sports as a means to achieve inmate's social rehabilitation, advising him/her not to transgress again and explaining him/her the benefits of complying with the Law. Women and men shall be imprisoned in separate places.

The Federation, the states and the Federal District can make and execute agreements to send inmates to serve their sentence in prisons under a different jurisdiction.

The Federation, the states and the Federal District shall establish, within the field of their respective powers, an integral justice system for minor offenders between twelve and seventeen years of age, guaranteeing their fundamental rights recognized by this Constitution are ensured, as well as those specific rights for children. People

under twelve years of age who have committed a crime shall only be subjected to rehabilitation and social assistance.

The management of this system will be organized by institutions, courts and authorities who are specialized on legal proceedings regarding teenagers. This system must give advice and protect teenagers, and shall study each particular, protecting teenager's interests.

If appropriate, alternative forms of justice may be used. Due process of Law and independence among authorities in charge shall be observed whenever an adolescent is prosecuted. Measures imposed to teenagers shall be proportional to the misconduct and shall seek teenager's social and family reintegration, as well as his complete development. Confinement shall only be used as an extreme measure and for a brief period of time. Confinement can be applied only to teenagers above fourteen years old who have committed grave and antisocial behavior.

Mexicans who are serving imprisonment penalties in foreign countries may be brought to the United Mexican States to serve their sentences. Foreigners who are serving imprisonment penalties may be transferred to their countries, in accordance with international treaties. Prisoner must grant his consent for transfer.

Convicts may serve their sentence in the penitentiaries closer to their home, in order to encourage their reintegration to the community. This provision shall not be applicable to organized crime and to inmates who require special security measures.

Special centers shall be created for preventive imprisonment and for penalties regarding organized crime. The competent authority can restrict communication between accused person or prisoner and third parties in the event of organized crime, except for defender. The authority also can impose measures of special surveillance on these inmates. This provision can be applied to other inmates who require special security measures.

Article 19. Detention before a judicial authority in excess of 72 hours are prohibited without formal charges indicating the crime, place, time and circumstances of such crime; as well as the evidence of the crime and of the probable liability of the accused.

The Public Prosecution Service can request the judge preventive prison only when other precautionary measures are not enough to ensure the presence of the accused in his trial, the development of the investigation, the protection of the victim, witnesses or community, as well as when the accused is on trial or had been previously convicted for having committed an intentional crime. Also, the judge will order preventive prison, by its own motion, in the following cases: organized crime; deceitful homicide; rape; kidnap; trafficking in persons; crimes committed using firearms, explosives or other violent instruments; and serious crimes against national security, the right to freely develop personality and the public health.

The Law shall establish the cases in which the judge can revoke liberty granted to the individuals subjected to trial.

The term to issue the detention order may be extended only at the request of the accused, according to the procedure set forth by the Law. Prolonging the detention shall be sanctioned by penal Law. The authority in charge of the establishment where the accused is, shall attract the judge's attention if it does not receive a copy of the detention order or the extension request in the term indicated above as soon as the term ends. If the authority does not receive the detention order within the next three hours, the accused shall be freed.

Every proceeding will treat only the crime or crimes mentioned in the detention order. If within the course of proceedings, another crime appears, it shall be charged on a separate investigation. Charge accumulation may be ordered, if appropriate.

In the event that, after the detention order has been issued for an organized crime charge, the accused evades the justice or is transferred to a foreign judge, the trial and the expiry date of the criminal action will be suspended.

Treatment during the arrest or imprisonment, any annoyance without legal justification, any tax or contribution in jails, constitute an abuse which the Law shall correct and the authorities shall repress.

Article 20. Criminal proceedings will be accusatory and oral. It shall be ruled by the principles of open trial, contradiction, concentration, continuity and contiguity.

A. General principles:

- I. Criminal proceedings shall aim elucidation of the facts, innocent person's protection, preventing impunity and redress.
- II. In every hearing, a judge must be present. The judge cannot delegate to somebody else the submission and evaluation of evidence, which shall be done in a free and logic manner.
- III. Only the evidence submitted in the hearing shall be used for the sentence. The Law shall establish the exceptions for the above and the pertinent requirements.
- IV. The trial shall be carried out before a judge who has not previously handled the case. All arguments and evidence shall be presented in a public, contradictory and oral manner.
- V. The accuser must provide the evidence necessary to demonstrate defendant's guilt. Both parties are equal during the proceeding.
- VI. No judge can talk about the trial with one of the parties without the presence of the other one, taking always into account the principle of contradiction, except for the cases predicted by this Constitution.
- VII. Criminal proceeding can be terminated in advance, provided that the defendant agrees and according to the Law. If the defendant, voluntarily and aware of the consequences, acknowledges his guilt and there is enough evidence to corroborate the charges, the judge shall call to a sentence hearing. The Law shall establish the benefits granted to the defendant in case he accepts his guilt.

- VIII. The judge shall convict only when the guilt of accused is certain.
- IX. Any evidence obtained by violating the defendant's fundamental rights shall be null and void.
- X. These principles shall be observed also in the preliminary hearings.

B. Defendant's rights

- I. The defendant is innocent until proven guilty through a sentence issued by a judge.
- II. Accused has the right to keep silent. From the moment of his arrest, the defendant shall be informed about the charges against him and his right to keep silent, which cannot be used against him. All forms of intimidation, torture and lack of communication are forbidden and shall be punished by the Law. Any confession made without the assistance of a defender shall have no weight as evidence.
- III. Every arrested person has the right to be informed of the grounds of arrest and of his rights at the moment of his arrest and while appearing before the Public Prosecution Service or a judge. In the case of organized crimes, the judicial authority can authorize to keep the accuser's name in secret.

The Law shall establish benefits for the accused or convicted person who provides effective assistance in the investigation of felonies related to organized crime.

- IV. All witnesses and any other evidence submitted by the defendant shall be admitted within the term established by Law. Judicial authority shall assist defendant to enforce appearance of those witnesses whose testimony he may request, in the terms set forth by the Law.
- V. Defendant shall be judged in an open trial by a judge or court. This provision may be restricted for reasons related to national security, public safety, protection of victims, witnesses and minors, disclosure of legally protected data or when the court considers that it is justified to do so.

In the case of organized crime, all acts performed during the investigation shall serve as evidence when they cannot be reproduced during the trial or there is a risk for witnesses or victims. The accused has the right to object or contest such evidence.

- VI. The defendant has the right to be provided with all the information on record in the proceeding for his defense.

The accused and his counsel can access to the investigation records: a) when the accused is under arrest, b) when he makes his statement or is interviewed, c) before the first hearing. Once the first hearing has been carried out, information on investigation cannot be kept in secret, except for exceptional cases determined by the Law, whenever that is imperative

to ensure the success of the investigation and provided that they are revealed in time to safeguard defendant's rights.

- VII. Accused shall be tried within a term of four months in the case of crimes punishable with a maximum penalty of two years of imprisonment; and within a term of one year if the crime is punishable with a penalty exceeding such term, unless he requests a longer term to prepare his defense.
- VIII. Defendant has the right to a lawyer, whom he shall freely choose even from the moment of his arrest. If he does not want a lawyer or cannot appoint one, the judge shall appoint a public defender. Defendant's lawyer is obliged to appear in all the acts related to defendant's proceeding.
- IX. Prison or arrest cannot be extended due to the lack of money to pay lawyer's fees or any other monetary cause, civil liability or any other similar motive.

Preventive prison cannot exceed the time established by Law as maximum punishment for the crime in question. In no case, preventive prison shall exceed the term of two years, unless defendant asks for a longer time to prepare his defense. If after said term a sentence has not been pronounced, the defendant shall be freed immediately while the trial continues. However, other precautionary measures may be used.

The duration of detention counts for a sentence term.

C. Victim's rights:

- I. The victim has the right to be informed about his rights and, whenever he should so require it, to be informed about the state of the criminal proceedings.
- II. The Public Prosecution Service must receive all the evidence submitted by the victim during the preliminary criminal inquiry as well as during proceedings. The Public Prosecution Service must carry out the necessary steps to assist the victim. The victim has the right to intervene in the trial and to use the legal instruments according to the Law.

Whenever the Public Prosecution Service does not consider necessary to carry out the steps required by the victim, he must state the grounds of Law and fact justifying his refusal.

- III. The victim has the right to receive urgent medical and psychological assistance from the moment the crime was committed.
- IV. The victim has the right to redress. Whenever it should be legally admissible, the Public Prosecution Service is obliged to require redress. The victim also can request such redress by himself. The judge cannot acquit the convict of redress in the case of conviction.

The Law shall set forth agile procedures to enforce redress sentences.

- V. The judge must keep in secret victim's identity and other personal data in the following cases: minor involved; rape, trafficking in persons, kid-

nap, organized crime; and when necessary to protect the victim, always respecting the defendant's rights.

The Public Prosecution Service shall ensure the protection of victims, offended parties, witnesses and all others who take part in the trial. The judges are obliged to oversee proper compliance with this obligation.

VI. The victim can request the necessary precautionary measures to protect his rights.

VII. The victim can contest, before the judicial authority, the Public Prosecution Service's omissions in the criminal investigation, as well as the resolutions with reservation, lack of exercising, abandonment of criminal prosecution or proceeding suspension when redress has not been completed.

Article 21. It is the Public Prosecution Service's responsibility to investigate crimes together with police bodies, who shall work under the Public Prosecution Service's command.

The exercise of the criminal prosecution before the courts is exclusive to the Public Prosecution Service.

The Law shall define the cases in which civilians can exercise criminal prosecution before the judicial authority.

Only judicial authority can impose penalties, modify them and state the pertinent term for them.

It is the administrative authority's responsibility to apply the penalties for breaking the rules. Such penalties may be fines, arrest up to thirty six hours or community work. The fine may be exchanged by the appropriate incarceration term, which shall never exceed thirty six hours.

If the offender is a laborer, worker or employee, he may not be fined for an amount exceeding one day of wage.

If the offender is not a salaried worker, the fine shall not exceed the amount equivalent to one day of his income.

The Public Prosecution Service can state exceptions to support exercising of criminal prosecution in the cases and conditions set forth by the Law.

The President of the Mexican Republic can accept the jurisdiction of the International Criminal Court, provided that he has obtained Senate's approval.

Public security is a responsibility of the Federation, the Federal District, the states and the local councils. Public security includes prevention of crimes, investigation and prosecution, as well as punishment for breaking the administrative rules, but according to the Law. Performance of the institutions in charge of public security shall be ruled by the principles of legality, objectivity, efficiency, professionalism, honesty and respect to the human rights acknowledged by this Constitution.

Institutions in charge of public security shall be of a civil nature, disciplined and professional. The Public Prosecution Service and the police forces of three government levels shall coordinate each other to guarantee public security. They shall con-

stitute the Public Security National System, which shall be subjected to the following provisions:

a) There should be a regulation for selection, admission, training, continuance, evaluation, appreciation and certification of the members of public security institutions. The Federation, the Federal District, the states and the local councils shall operate and develop public security actions in the field of their respective powers.

b) There should be a criminal and personnel database. No one can be recruited unless he has been duly certified and registered in the system.

c) There should be public policies intended to the prevention of crimes.

d) The community shall participate in processes like evaluation of the public security institutions and the policies intended to prevent crime.

e) Funds for public security, provided by the federal government to the states and local councils shall be used only for such goal.

Article 22. Cruel and unusual punishment is prohibited. Specifically, penalties of death, mutilation, infamy, marks, physical punishments, torture, excessive fines, confiscation of assets, and other similar. Every penalty shall be in proportion to the crime committed and to the legally protected interest.

Appropriation of assets shall not be considered as confiscation when such appropriation is ordered by the authority for the payment of taxes, fines or civil liability. Appropriation in the following cases shall not be deemed as confiscation: a) appropriation of property ordered by the judicial authority under the terms provided by Article 109 in case of illicit enrichment; b) appropriation of seized goods that were abandoned by the owner; and c) appropriation of goods, which ownership has been declared extinct by a sentence. In the event of ownership extinction, there shall be a procedure according to the following regulations:

I. Ownership extinction procedure shall be jurisdictional and autonomous from the criminal proceedings.

II. Ownership extinction procedure shall be applied in cases of organized crime, drug trafficking, kidnapping, car theft and human trafficking. Ownership extinction procedure is to be applied to the following goods:

a) Those goods that are instrument, object or product of a crime, even though criminal responsibility has not been established by a sentence, as long as there is enough evidence to determine that the crime has occurred.

b) Those goods that have been used to hide or mix crime assets, provided that the elements established in the previous clause have been met.

c) Those goods that are being used for the perpetration of a crime by a third party, if the owner was aware, but he did not notify to the proper authority or he did not try to stop it.

d) Those goods that are the property of third parties, but there are enough elements to conclude that they are the product of patrimonial or organized crime, and the accused of such felonies behaves like the owner.

III. Affected person can use the appropriate legal instrument to demonstrate the licit origin of the goods, the good faith and the ignorance about mis-use of the goods.

Article 23. No criminal trial shall have more than three levels of government. No one can be tried twice for the same crime, whether he was acquitted or convicted. The practice of acquitting is prohibited.

Article 24. Every person is free to pursue the religious belief that best suits him, and to practice its ceremonies, devotions or cults, as long as they do not constitute a crime.

Congress cannot dictate laws that establish or abolish any given religion.

Ordinarily, all religious acts will be practiced in temples, and those that extraordinarily are practiced outside temples must adhere to Law.

Article 25. The State will plan, determine, and carry out an integral and sustainable development of the Nation, so that it strengthens national sovereignty and democracy. National development must stimulate economic growth and a fair distribution of income and wealth, it shall allow for a broader exercise of freedom and dignity of the individuals, groups and social classes.

The State shall plan, conduct, coordinate and direct national economic activity and shall carry out the regulation and promotion of the activities required by public interest within the frame established by this Constitution.

The public, social and private sectors shall contribute to the national economic development, with social responsibility, without detriment to other forms of economic activity that contribute to the development of the country.

The public sector shall be in charge, in an exclusive manner, of those strategic areas established in Article 28, paragraph fourth of the Constitution, and the Federal Government shall at all times keep ownership and control over the entities established for this purpose.

Likewise, the State may, alone or together with the social and private sectors, stimulate and organize such areas which are a priority for development, in accordance with the Law.

The State shall support and stimulate social and private enterprises, under criteria of social equity and productivity, and subjected to the public interest and to the use of the productive resources, preserving them and the environment.

The Law shall establish mechanisms to facilitate organization and expansion of economic activity of the social sector: farming cooperatives (ejidos), workers' organizations, cooperatives, rural communities, enterprises which are majority or exclusively owned by workers and, in general, all the different social organizations for production, distribution and consumption of such goods and services that are necessary for society.

The Law shall encourage and protect economic activities carried out by private persons and shall provide the conditions required so that the private sector could contribute to national economic development, according to the terms set forth by this Constitution.

Article 26. A. The State shall organize a democratic planning system to support national development, which shall offer solidity, dynamism, continuity and equity to the economic growth and to the political, social and cultural independence and democratization of the nation.

National objectives, included in this Constitution, shall determine national planning. National planning shall be democratic. The democratic planning system shall collect the different aspirations and demands from the whole society to include them into the development programs and plan. All the programs carried out by the federal government must be subjected to the national development plan.

The President of the Republic shall establish the appropriate procedures for people's participation and popular consultation for the national democratic planning system, as well as the criteria to prepare, implement, control and assess the development plan and programs. The Law shall provide the appropriate agencies for the planning process and shall empower the President of the Republic to coordinate the activities intended to prepare and implement the national development plan, through agreements made with state governments and private persons.

The Law shall define the intervention of the Congress of the Union in the democratic planning system.

B. The State shall have a National System of Statistical and Geographical Information, which shall provide official data. All data contained in this system shall be mandatory for the Federation, the states, the Federal District and the local councils, according to the Law.

The National System of Statistical and Geographical Information shall be ruled and coordinated by an organism, which shall have technical and management autonomy, legal personality and its own assets. Such organism will have the necessary powers to regulate data collection, processing and publication of information.

The organism shall have a board composed by five members, one of them shall be the chairman of both, the board and the organism. The five members shall be designated by the President of the United Mexican States and approved by the Senate, or by the Permanent Committee during recess.

The Law shall define the organization and functioning of the National System of Statistical and Geographical Information, according to the principles of access to information, openness, objectivity and independence. The Law also shall establish the requirements to become a member of the board, as well as the tenure term and promotions.

The members of the board may be removed only due to a serious cause. They cannot have any other job, position or assignment, except for unpaid services in edu-

cational, scientific, cultural or beneficiary institutions. Board members shall be subjected to that established in the Title Four of this Constitution.

Article 27. The property of all land and water within national territory is originally owned by the Nation, who has the right to transfer this ownership to particulars. Hence, private property is a privilege created by the Nation.

Expropriation is authorized only where appropriate in the public interest and subject to payment of compensation.

The Nation shall at all time have the right to impose on private property such restrictions as the public interest may demand, as well as to regulate, for social benefit, the use of those natural resources which are susceptible of appropriation, in order to make an equitable distribution of public wealth, to conserve them, to achieve a balanced development of the country and to improve the living conditions of rural and urban population. Consequently, appropriate measures shall be issued to put in order human settlements and to define adequate provisions, reserves and use of land, water and forest. Such measures shall seek construction of infrastructure; planning and regulation of the new settlements and their maintenance, improvement and growth; preservation and restoration of environmental balance; division of large rural estates; collective exploitation and organization of the farming cooperatives; development of the small rural property; stimulation of agriculture, livestock farming, forestry and other economic activities in rural communities; all this avoiding destruction of natural resources.

The following elements are the property of the Nation: all natural resources of the continental shelf and the seabed of the islands; all minerals and substances that are in seams, layers, masses or deposits and that have a nature different from the components of the soil, such as minerals from which metals and metalloids are extracted; beds with gemstones or salt; salt mines formed by sea water; the products derived from rock breaking, when their exploitation requires underground works; minerals or organic deposits susceptible to be utilized as fertilizers; solid mineral fuels; petroleum and all solid, liquid or gaseous hydrocarbons; and the space located over national territory, according to the extension and terms established by International Law.

The following elements are the property of the Nation, according to the extension and terms established by International Law: waters of the territorial sea; internal sea waters; waters of lagoons and estuaries permanently or intermittently connected with the sea; waters of natural lakes which are directly connected with streams constantly flowing; river and affluent waters, from the site where the first permanent, intermittent or torrential waters start to flow, to the mouth in the sea, lakes, lagoons or estuaries owned by the nation; waters of the continuous or intermittent currents and their direct or indirect affluent, whenever their bed serves as border of national territory or between two states, or when they flow from one state to another or cross the country's border; waters of lakes, lagoons or estuaries, which vessels, zones or shores are crossed by borderlines dividing one or more states or between the country

and a neighboring country, or when the shoreline serves as a border between two states or between the country and a neighboring country; waters of springs flowing from beaches, maritime areas, streams, vessels or shores; waters extracted from mines; and the internal beds, shores and banks. Underground waters may be freely extracted by artificial works and may be appropriated by the owner of the land. However, when the public interest so require or whenever other uses are affected, the President of the Republic may regulate extraction and use of underground waters and, even, establish prohibited zones. The same criteria shall apply to other waters belonging to the nation. Any other waters not included in the foregoing list, shall be considered as an integral part of the land through which they flow. Nevertheless, if such waters are located in two or more properties, their use shall be considered as public, complying with provisions issued by the states.

Nation's property, regarding the previous paragraphs, is inalienable and imprescriptible. The President of the Republic can grant licenses for exploitation or use of these resources by private persons or companies, in accordance with the rules and conditions set forth by the laws. Legal provisions regarding the exploitation of minerals and substances mentioned in paragraph fourth, shall govern the performance and verification of such exploitation activities, regardless of the date the licenses were granted. Failure to comply such legal provisions shall cause the cancellation of the licenses. Federal Government can establish and suppress national reserves through the pertinent declaration and according to the provisions established by Law.

In the case of petroleum and solid, liquid or gaseous hydrocarbons, or in the case of radioactive minerals, neither licenses nor contracts shall be granted, nor shall survive the ones previously granted, if any. The State shall carry out exploitation of such resources under the terms set forth in the respective Law. Only the State can produce, conduct, transform, distribute and supply electric power for public use. The State shall use the goods and natural resources required to serve such purpose.

Only the State can use nuclear minerals to generate nuclear energy. The State shall regulate the use of nuclear minerals. Nuclear energy will be used only for peaceful goals.

The Nation has sovereign rights and jurisdiction on the exclusive economic zone, situated outside the territorial sea. The exclusive economic zone stretches from the seaward edge of the country's territorial sea out to two hundred nautical miles from its coast. In cases where said zone should produce a superposition over the exclusive economic zones of other countries, fixing of the boundaries shall be done through agreements with such countries.

The legal capacity to own Nation's lands and waters shall be governed by the following provisions:

- I. Only Mexicans by birth or naturalization and Mexican companies have the right to own lands and waters, and to obtain exploitation licenses for mines and waters. The State may grant the same right to foreigners, pro-

vided that they agree before the Department of Foreign Affairs to consider themselves as Mexicans regarding such property and not to invoke the protection of their governments in reference to said property, under penalty of forfeiting the property in favor of the country. Foreigners cannot acquire properties within the zone that covers one hundred kilometers along the international borders and fifty kilometers along the beach.

The State can authorize foreign States to acquire real estate for their embassies or legations in the same city where federal government powers reside, in accordance to the principle of reciprocity.

- II. Religious associations, created in accordance with the terms provided in Article 130 and its regulatory Law, can acquire, possess or manage properties essential for their religious activities.
- III. Public and private charitable institutions, devoted to public assistance, scientific research, education, mutual assistance to their members, or any other lawful purpose cannot acquire other real estate than that which is essential to fulfill their objective, according to the regulatory Law.
- IV. Corporations based on shares can own rural lands, but only in the extension necessary to fulfill their objective.

The maximum area of land that such class of companies can hold in ownership for agricultural, livestock farming or forest activities is equivalent to twenty five times the limits specified in section XV of this Article. The Law shall determine the capital structure and minimum number of shareholders so that the lands owned by each shareholder do not exceed the limits established for small rural property. All individual rural properties, based on shares, will be cumulative for this purpose. Likewise, the Law shall establish the requirements for the participation of foreigners in said corporations.

The Law shall establish the registration and control procedures required to comply with the provisions of this section.

- V. Duly authorized banks, in accordance with the credit institution Law, can have capital imposed on urban and rural properties, but they cannot hold in property or in management, any more real estate than that which is entirely necessary to fulfill their direct objective.
- VI. The Federal District, the states and local councils shall have full legal capacity to acquire and possess all the real estate required for public services.

Federal and state laws shall establish the cases in which expropriation of private property is necessary for the public welfare, issuing the corresponding statement. Compensation for expropriation shall be based on the property value registered in the records of the land registry or Tax collector's office, regardless such value has been defined by the owner or by the State and tacitly accepted by owner when paying taxes. Only the

increased or decreased value of said private property, due to any improvements or deteriorations made after the tax appraisal, can be subjected to assessment by experts and to judicial resolution. Objects, whose value is not fixed in the tax collector's office, can also be subjected to assessment by experts and to judicial resolution.

The Nation shall execute the actions established in this Article through judicial proceedings. During said proceedings and under the appropriate court's order, which shall be issued within one month, administrative authorities shall occupy, manage, auction or sell the lands or waters in question along with their appurtenances. In no case may such actions be revoked by the corresponding authorities before the execution sentence is pronounced.

- VII. The legal capacity of farming cooperatives and communal land is recognized and their ownership over the land is protected, whether for human settlements or for productive activities.

The Law shall protect the wholeness of the indigenous groups' lands.

In order to promote respect and strengthening of the community life of farming cooperatives and communal land, the Law shall protect the lands for human settlements and shall regulate the uses of communal lands, forests and waters. The State shall implement actions to improve the quality of life of in such communities.

The Law shall regulate the exercise of indigenous peoples' rights over their land and of joint-title farmers over their parcels, respecting their will to adopt the best conditions for the use of their productive resources. The Law shall establish the procedures whereby the members of a cooperative and indigenous people may: associate among themselves or with the State or with third parties; grant the use of their lands; transfer their land rights to other members of their rural community, in the event of farming cooperative. The Law shall also set forth the requirements and procedures whereby the cooperative assembly shall grant their members private rights over land. In cases of transfer of ownership, the right of preference set forth by the Law shall be respected.

Within a same rural community, no member of a cooperative can hold land exceeding five percent of the total land belonging to the farming cooperative. Land ownership must always adjust to the restrictions established in section XV.

The general assembly is the supreme authority of the farming cooperative or indigenous community, within the organizational structure and powers granted by Law. The communal property commission is a body democratically elected according to the terms provided by the Law. It is

the representative organ of the farming cooperative and the one responsible to carry out the assembly's decisions.

Restitution of lands, forests and waters to rural communities shall be done according to the terms provided in the Law.

VIII. The following actions are null and void:

a) All appropriation of lands, waters and mountains from towns, villages, settlements or communities, made by political chiefs, governors or any other local authority in contravention of the Law published on June 25, 1856, and other applicable laws and provisions;

b) All concessions, arrangements or sales of lands, waters or mountains, made by the Secretariat of Public Works, the Department of the Treasury or any other federal authority from the first day of December, 1876, to this date, which have illegally invaded farming cooperatives, indigenous land or lands of any other kind belonging to towns, villages, hamlets or communities.

c) All demarcation procedures, transactions, transfers or auctions performed during the period mentioned in previous paragraph and made by companies, judges or federal or state authorities, which have illegally invaded farming cooperatives, indigenous land or lands of any other kind belonging to towns, villages, hamlets or communities.

The only lands excepted from the nullity herein mentioned are those which have been distributed in accordance with the Law published on June 25, 1856, and have been owned for more than ten years, provided that the area does not exceed fifty hectares.

IX. Division or distribution made with error or vice among neighbors of a rural settlement may be annulled at the request of the three quarters of the neighbors who possess one quarter of the lands in question; or at the request of one quarter of the neighbors who possess three quarters of the lands in question.

X. Repealed

XI. Repealed

XII. Repealed

XIII. Repealed

XIV. Repealed

XV. Large rural estates are prohibited in the United Mexican States.

Small agricultural property is defined as the land which area does not exceed one hundred hectares of irrigated or damp soil per person, or the equivalent in other kind of soil.

Equivalence: one hectare of irrigated soil = two hectares of seasonal soil = four hectares of good quality pastureland = eight hectares of forest, mountain or arid pastureland.

The following properties are also considered as small agricultural property: a) up to one hundred and fifty hectares per person when the ground is dedicated to cotton cultivation if the lands are irrigated; b) up to three hundred hectares when dedicated to cultivate banana, sugar cane, coffee, henequen, rubber, palm, grapevine, olives, quinine, vanilla, cacao, agave, prickly pear or fruit trees.

Small livestock property is defined as the area that does not exceed the land necessary to maintain up to five hundred heads of big livestock or the equivalent in small livestock per person, in accordance with the Law and with the fodder capacity of the soil.

When the owners or users improve the quality of land by reason of irrigation, drainage or any other works, the land will still be considered as small agricultural property, even if it exceeds the maximum limits established for good quality lands, provided that the requirements established by the Law are met.

If the owner or user of a small livestock property improves the land and uses it for agricultural purposes, the area so utilized shall not exceed the limits mentioned under paragraphs second and third of this section corresponding to the quality of said lands before the improvement.

XVI. Repealed

XVII. Federal and state legislative bodies, shall enact laws establishing the procedures to transfer and divide out into plots large areas of land exceeding the limits set forth under sections IV and XV of this Article.

Excess land shall be partitioned and sold by the owner within a term of one year from the date of notification. If at the end of such term the excess land has not been transferred, it shall be sold by public auction. Under equal conditions, the right of preference established in the Statutory Law shall be respected.

Local laws shall organize the family estate, establishing which properties and goods must compose it. Family estate shall be inalienable and unencumbered.

XVIII. All contracts and concessions executed by previous governments, since 1876 to date, which have resulted in monopolization of national lands, waters and natural resources, under one sole person or company are declared subject to review, and the President of the Republic is empowered to declare any of them null and void whenever they imply a serious damage to public interest.

XIX. Based on this Constitution, the State shall establish the measures required to provide agrarian justice in a prompt and honest manner, in order to guarantee legal certainty in land ownership. The State shall provide legal advisers for farm workers.

All conflicts that could arise or are pending between two or more communities related to land limits or land ownership, are under federal jurisdiction. The Law shall establish agrarian courts vested with autonomy and full jurisdiction, which shall be made up of judges proposed by the President of the Republic and approved by the Senate or by the Permanent Committee during recess period. The Law shall establish an agency that provides agrarian justice to peasant farmers.

- XX. The State shall provide good conditions to achieve total development in rural communities, for the purpose of creating jobs, guaranteeing welfare of the peasant population and their participation in national development. The State shall stimulate agricultural, livestock and forestry activities for optimal uses of the land through infrastructure works, supply of raw materials, credits, training and technical support. The State shall also issue the statutory Law for planning, organization, industrialization and marketing of agricultural and livestock production, since these are activities of public interest.

The comprehensive and sustainable rural development referred to in the previous paragraph shall also include, among its aims, that the State shall guarantee the sufficient and timely supply of basic nourishment established by Law.

Article 28. In the United Mexican States, all monopolies, monopoly practices, state monopolies and tax exemptions are prohibited. Protectionist policies are also prohibited.

Consequently, the Law shall severely punish, and the authorities shall efficiently prosecute: a) any concentration or hoarding of essential products in one or in few hands for the purpose of raising prices; b) any agreement, procedure or combination of both made by producers, manufacturers, merchants or service providers, with the purpose of preventing free market in order to force consumers to pay exaggerated prices, and c) in general, any exclusive and improper advantage in favor of one or more specific persons at the expense of the general public or a social class.

The laws shall establish bases to set maximum prices for articles, commodities or products considered as essential for the country's economy or for popular consumption. Such laws shall also define distribution of said articles, commodities and products, in order to prevent that unnecessary or excessive intermediation cause shortage or price increases. The Law shall protect and organize consumers' interest.

The areas of the economy in direct control of the government, such as post, telegraph, oil and its derivatives, basic petrochemical industries, radioactive minerals, generation of nuclear energy, generation of electricity and other defined by the Congress of the Union are not considered to be monopolies. The State will protect areas of priority in the economy, such as satellite communications and railroads, in accordance with the Article 25 of this Constitution. This way, the State protects national security

and sovereignty. The State can grant concessions or licenses, but keeping ownership of the communication means.

The State shall have the agencies and companies required to efficiently manage the strategic and priority areas, where it may participate alone or together with the private and social sectors.

The Nation will have an autonomous Central Bank with the primary objective of procuring the stability of the national currency, thus strengthening the guidance of the State in respect to national development. No authority can order the Central Bank to provide financing.

The Central Bank and its activities, such as coin minting and bill issue, won't be considered monopolies. The Central Bank shall regulate exchange rates, as well as banking and financial services. The management of the Central Bank shall be entrusted to the persons appointed by the President of the Republic and approved by the Senate or the Permanent Committee. They shall hold office for terms which duration and sequences are best suited to the autonomous exercise of their duties; they may only be removed for a serious cause and they cannot hold any other employment, position or assignment, except for those in which they act in the name of the Bank, and those unpaid activities carried out in educational, scientific, cultural or charitable organizations. The persons in charge of the Central Bank may be subjected to impeachment in accordance with the provisions established in the Article 110 of this Constitution.

Unions and workers associations will not be considered monopolies, which have been constituted to protect their own interests. Producers' cooperatives or associations will not be considered monopolies either, provided that their objective is to sell directly in foreign markets the domestic and industrial products which are the main source of wealth in the region where they are produced or which are not essential products. Such associations shall always be under the supervision or protection of federal or state government and shall obtain the previous authorization from the appropriate legislative body. Such legislative bodies can repeal any authorization granted to constitute the associations in question, by themselves or by the President of the Republic's request.

Privileges granted for a given period of time to authors and artists for them to produce their pieces of work and to inventors and those individuals who improve inventions will not be considered monopolies.

The State can grant concessions for the provision of public services or for the exploitation and use of property owned by the Nation, except for the exceptions established by the Law. The laws shall set forth the requisites and conditions to guarantee that licensed services will be efficient and goods will be used for society's interest.

The laws shall prevent concentration of State property in private hands. Concession of public services shall be carried out according to this Constitution.

Benefits can be granted to economic key activities, provided that such benefits general and temporary and do not impact substantially the Nation's finances. The State shall supervise application of benefits and evaluate their results.

Article 29. In case of invasion, serious breach of the peace or any other event which may place society in severe danger or conflict, only the President of the Republic can suspend, throughout the country or in a certain region, those constitutional rights and guarantees which may constitute obstacles to rapidly and easily face up to the situation. For this purpose, the President must consult all the secretaries and the Attorney General of the Republic, and must obtain the Congress of the Union's approval, or in the recess, the Permanent Committee's approval. Such suspension of constitutional rights and guarantees shall be temporary and general, never a suspension can be applied on a single person. If suspension of constitutional rights and guarantees is requested within the period when the Congress is working, it shall grant the necessary authorizations for the President to cope with the situation. However, if suspension is requested during the Congress recess, the Congress will be convened immediately.

However, the decrees enacted under the situations described in the previous paragraph cannot restrict or suspend the exercise of the following rights and principles: the right to non discrimination, the right to legal personality, the right to life, the right of personal integrity, the right of protection to the family, the right to have a name, the right to have a nationality, the children's rights, the political rights, the freedom of thought, the freedom of religion, the principles of legality and retroactivity, the prohibition on the death penalty, the prohibition on slavery and servitude, the prohibition of disappearance and torture, and the judicial guarantees that are necessary to protect these rights and principles.

Restriction or suspension of constitutional rights and guarantees should be based on the provisions established by this Constitution, should be proportional to the danger, and should observe the principles of legality, rationality, notification, publicity and non discrimination.

When the restriction or suspension of the constitutional rights and guarantees ends, because the deadline was met or the Congress so ordered, all legal and administrative measures taken during the restriction or suspension will be void immediately. The President of the Republic cannot make comments to the decree, through which the Congress revokes the restriction or suspension of the constitutional rights and guarantees.

The decrees enacted by the President of the Republic, during the restriction or suspension of the constitutional rights and guarantees, shall be immediately reviewed by the Supreme Court of Justice of the Nation, which shall rule on their constitutionality and validity as soon as possible.

Chapter II

Mexican nationals

Article 30. Mexican nationality is acquired by birth or by naturalization.

A. The Mexican nationals by birth are:

- I. Those born in the Mexican territory, regardless of their parents' nationality;
- II. Those born in a foreign country of Mexican parents born in national territory, of Mexican father born in national territory, or of Mexican mother born in national territory;
- III. Those born in a foreign country of Mexican parents by naturalization, of Mexican father by naturalization, or of Mexican mother by naturalization; and
- IV. Those born on board of Mexican military or merchant vessels or aircrafts.

B. The Mexicans by naturalization are:

- I. Those aliens who obtain from the Department of Foreign Affairs a naturalization card.
- II. Any foreign woman or man who marries a Mexican man or woman and establishes residence inside the Mexican territory, provided that foreigner complies with the other requirements set forth by the Law for that purpose.

Article 31. Obligations of the Mexicans are:

- I. To make their children or pupils attend to the public or private schools to receive preschool, elementary, middle and higher education and the military under the terms set by the Law.
- II. To join the Nation Guard, according to the pertinent organic Law, in order to defend and assure the Nation's independence, territory, honor, rights and interest, as well as domestic peace and order, and
- III. To pay taxes for federal, state and local spending, in accordance with the proportions established by Law.

Article 32. The Law shall regulate the way in which Mexicans having a second nationality will exercise their rights and shall also issue norms to avoid double citizenship conflicts.

Only Mexicans by birth can perform all government employments, positions, or commissions in which the status of citizenship is indispensable.

During peacetime, foreigners shall neither serve in the Army nor in the police bodies. During peacetime, only Mexicans by birth can serve in the Army, in the Navy or in the Air Force as well can perform any employment or commission within such corporations.

The same condition applies to captains, pilots, skippers, ship engineers, flight engineers and, in general, to every crew member in a ship or an airplane carrying the

Mexican flag. In the same way, only Mexicans by birth can be port harbormasters, steersmen and airport superintendents.

Mexicans shall have priority over foreigners, under equal circumstances, for all kind of concessions, employments, positions or commissions of the government in which the status of citizenship is not indispensable.

Chapter III

The foreigners

Article 33. The individuals lacking the qualities determined by Article 30 shall be considered as foreigners. They shall be entitled to the human rights and guarantees conferred by this Constitution.

The President of the Republic shall have the power to expel from national territory any foreigner, according to the Law and after a hearing. The Law shall establish the administrative procedure for this purpose, as well as the place where the foreigner should be detained and the time for that.

Foreigners may not in any way participate in the political affairs of the country.

Chapter IV

The Mexican citizens

Article 34. Mexican citizens shall be those individuals who are considered as Mexicans and fulfill the following conditions:

- I. To be at least 18 years old, and
- II. To have an honest way of life.

Article 35. Rights of citizens:

- I. Right to vote.
- II. To be elected for all popular election positions, having the capacity set by the law. The right to request registration of candidates before the electoral authority corresponds to the political parties, as well as citizens requesting independent registration and who meet the requirements, conditions and terms set by the law;
- III. Right of assembly in order to peacefully participate in the country's political affairs.
- IV. Right to join Army or National Guard in order to defend the country and its institutions under the law.
- V. Right to petition.
- VI. To be appointed for any job or commission of the public service, having the qualities set by the law;
- VII. To initiate laws, in the terms and with the requirements appointed by the Constitution and the Law of the Congress. The Federal Electoral Institute will have the faculties granted in this matter by law, and

VIII. To vote in the referendum about national importance topics, which will be subject to the following:

10. They will be called by the Congress of the Union and requested by:

- a) The President of the Republic;
- b) The equivalent to thirty three percent of the members of any of the Chambers of the Congress of the Union; or
- c) The citizens, in an equivalent number, at least, to two percent of those subscribed in the voters registration list, under the terms set by the law.

With the exception of the hypothesis mentioned in item c) above, the petition should be approved by the majority of each Chamber of the Congress of the Union;

20. When the total participation corresponds, at least, to forty percent of the citizens subscribed in the voters registration list, the result will be binding for the Federal Executive and Legislative powers and for the competent authorities;

30. The restriction of the human rights considered in this Constitution, the principles of article 40 therein; the electoral matter; State income and expenses; national security and the organization, operation and discipline of the permanent Army, may not be subject to popular consultation; The Supreme Court of Justice of the Nation will resolve, previous to the call by the Congress of the Union, about the constitutionality on the consultation matter;

40. The Federal Electoral Institute will be directly in charge of verifying the requirement set in item c) of section 1st of this paragraph, as well as the organization, development, account and declaration of results;

50. Referendum will be performed on the same federal electoral day;

60. Rulings of the Electoral Federal Institute may be challenged under the terms stated in section VI of article 41, as well as section III of article 99 of this Constitution; and

70. Laws will set the necessary to make this section effective.

Article 36. Responsibilities of citizens:

- I. To register himself at the respective tax office, declaring his property and profession or work. To register himself in the National Citizen Register, according to the Law.

The State and the citizens shall organize and operate the National Citizen Register, which shall issue the Mexican citizen identity card.

- II. To join the National Guard.
- III. Right of assembly in order to peacefully participate in the country's political affairs.
- IV. To hold a federal or state elective office, which shall never be unpaid.
- V. To be councilor, electoral assistant and jury in the local council.

Article 37. A) The Mexican nationality by birth shall never be revoked.

B) The Mexican nationality by naturalization can be revoked in the following cases:

- I. If the person voluntarily acquires a foreign nationality, pretends to be foreign citizen when subscribing a public document, uses a foreign passport or accepts or uses nobility titles which imply submission to a foreign State.
- II. If the person lives abroad for five years in a row.
- C) Mexican citizenship can be revoked in the following cases:
 - I. If the person accepts or uses nobility titles issued by foreign governments.
 - II. If the person voluntarily provides official services to a foreign government without approval of the Federal Congress or the Permanent Committee.
 - III. If the person accepts or uses foreign decorations without approval of the Federal Congress or the Permanent Committee.
 - IV. If the person accepts titles or employment from other country's government without approval of the Federal Congress or the Permanent Committee, except by literary, scientific or humanitarian titles, which can be freely accepted.
 - V. If the person helps a foreigner or foreign government against the Nation in any diplomatic controversy or international court.
 - VI. If the person performs any other act that can be punished by citizenship evocation according to the Law.

Regarding paragraphs II to IV, the Congress shall define the exceptional cases in which permits and licenses shall be considered as granted after deadline established by Law has expired, by the sole application.

Article 38. Citizens' rights and prerogatives can be suspended in the following cases:

- I. Unjustifiably failure to comply with the duties imposed by *Article 36*. This suspension shall last for one year and shall be imposed along with any other punishment which can be applied for such failure under the Law.
- II. If the person is on trial for a crime which deserves physical punishment. In such a case the trial counts from the date the detention order was issued.
- III. If the person is serving time in prison.
- IV. Due to vagrancy or customary inebriation.
- V. If the person is a fugitive, from the moment in which the detention order has been issued to the moment when prosecution has expired.
- VI. As a result of a sentence.

The Law shall define the ways in which citizens' rights will be revoked or suspended, as well as the recovery procedures.

TITLE TWO

Chapter I

National sovereignty and form of state governance

Article 39. The powers of the sovereignty are vested in the people. Public power comes from the people and it is institutionalized for the people's benefit. People can change or modify its form of government.

Article 40. Mexican people want to constitute into a representative, democratic, secular, federal, Republic, made up by free and sovereign States in everything related to its domestic regime, but united in a federation established according to the principles of this fundamental law.

Article 41. People exercises sovereignty through the Powers of the Union and the state powers, according to the distribution of jurisdictions. The Federal Pact foundations shall never be challenged by the states' constitutions.

The legislative and the executive branches of Federal Government shall be renewed by the means of free, authentic and periodical elections. Such elections shall be subjected to the following principles:

- I. Political parties shall be considered as entities of public interest. The legislation shall specify the norms and requirements for their legal registry and participation in the electoral process. National political parties shall have the right to participate at state and local elections.

The political parties' main objectives shall be: a) to promote people's participation in democracy, b) to contribute to national representative positions, c) to allow access by citizens to public power, according to their programs, principles and ideas and through universal, free, secret and direct vote. Only citizens can form and join a political party. Intervention of labor unions, social associations or any other group is prohibited.

Electoral authorities can intervene in the internal issues of political parties only within the scope of the Law and this Constitution.

- II. Federal Law shall fairly provide national political parties with all necessary resources to carry out political activities. The Law shall also regulate financing system for the parties, in order to prevent private funding to prevail over public funding.

Public funding for political parties shall consist of: a) public financing directed to cover the expenses generated by their ordinary and permanent activities, b) public financing for electoral activities during electoral processes. Public funding will be provided according to the Law and the following principles:

a) Public funding directed to cover ordinary and permanent activities shall be established annually according to the following method: To multiply the total quantity of citizens registered in the electoral register

by sixty five percent of daily minimum wage in the Federal District. The 30% of the amount obtained by such calculus shall be equally distributed among political parties, 70% shall be distributed according to the vote percentage they have obtained at the previous Chamber of Deputies election.

b) Public financing for electoral activities in the year when President of the Republic, senators and federal deputies are elected shall be equal to the 50% of public funding provided under the previous paragraph. Public financing for electoral activities in the year when only representatives are elected shall be equal to the 30% of public funding provided under the previous paragraph.

c) Public funding for specific activities, related to education, training, socioeconomic and political research and publishing activities, shall be equal to the 3% of the total public financing for all parties according to paragraph “a” per year. The 30% of the amount obtained by such calculus shall be equally distributed among political parties, 70% shall be distributed according to the vote percentage they have obtained at the previous Chamber of Deputies election.

The Law shall define limits for spending in the internal process for candidate selection, as well as for electoral campaigns. The Law shall also establish limits for monetary contributions provided by sympathizers. Total amount of such contributions per year cannot exceed 10% of the limit established for the last presidential campaign expenses. The Law shall also establish procedures to control and monitor the origin and use of financial resources of the parties, and shall determine the measures to punish any illegal activity in this respect.

The Law shall establish procedures to help parties to pay their liabilities in the event that they loss registration, as well as to regulate the way their properties will be transferred to the State.

III. Political parties have the right to use the media permanently.

Section A. The Federal Electoral Institute shall define media time for the State and political parties at radio and television, according to the Law and to the following provisions:

a) From the run-up to the election campaign until the election date, the Federal Electoral Institute shall get 48 minutes daily, distributed in 2-3 minutes segments per hour in each radio station and channel, according to the schedule defined in paragraph “d” of this section.

b) During run-up, political parties shall get, jointly, one minute per hour at each radio station and channel. Remaining time shall be used according to the Law.

c) During electoral campaigns, the media shall allocate at least 85% of the time established in paragraph “a” of this section.

d) Transmissions about political parties shall be distributed between 18:00 and 24:00 hours.

e) Airtime shall be distributed among political parties in the following way: the 30% of airtime shall be equally distributed among political parties, 70% shall be distributed according to the vote percentage they have obtained at the previous Chamber of Desputies election.

f) Political parties that are not present in the Mexican Congress shall get at radio and television only the proportional part they deserve from the 30% mentioned in the previous paragraph.

g) The Federal Electoral Institute (FEI) shall get at radio and television up to 12% of the total airtime allocated for the State. From this 12%, the Federal Electoral Institute shall allocate 50% equally to political parties. Remaining 50% shall be used by the FEI or by another federal or state electoral authority. Every political party shall distribute its airtime in the following way: a 5 minutes monthly program, and remaining airtime shall be divided into 20 seconds messages. Transmissions shall be subjected to the schedule established by the FEI according to paragraph “d” of this section. The FEI can transfer airtime from one or more parties to another in special situations.

Political parties cannot buy airtime on television or radio by themselves or through third persons.

No private individual or legal entity can buy airtime on television or radio to influence political preference, or to promote or attack certain candidate or party. Such kind of media messages that have been contracted in a foreign country cannot be transmitted in the Mexican territory.

The States and the Federal District shall issue laws to enforce observance of the provisions established in the two previous paragraphs.

Section B. During elections, the FEI shall manage to allocate airtime to the states at local radio and television, according to the Law and to the following provisions:

a) In the event of state elections that coincide with federal elections, airtime for the state shall be included within the total time allocated in accordance with paragraphs “a”, “b” and “c” of section “A”.

b) For the rest of electoral processes, allocation shall be done according to the Law and to the criteria provided in this Constitution.

c) Airtime distribution among the parties, including local parties, shall be carried out in accordance with the criteria established in section “A” and with the applicable legislation.

If the FEI considers that total airtime at radio and television granted by the previous paragraphs is not enough for its purposes or for another electoral authority's purposes, it can issue orders to cover the deficit within the powers vested to it.

Section C. In the political and election campaign advertising, the political parties cannot use terms or expressions that denigrate or insult institutions or political parties, or that slander people.

During federal and local election campaigns until the election date, all governmental advertising shall be suspended, no matter it belongs to federal, state or local government, or to the Federal District government or to any other governmental agency. The only exceptions shall be: a) informative campaigns carried out by electoral authorities, b) educational and health campaigns and c) civil protection campaigns in the event of emergencies.

Section D. The Federal Electoral Institute will punish violations of these provisions through free proceedings, which may include cancellation of transmissions at radio and television, cancellation of licenses of concessionaires that violate this Law.

- IV. The Law shall demarcate the terms for selection and nomination processes. The Law shall also establish the appropriate rules for run-up and election campaign.

The duration of the election campaign shall be ninety days for the year the President of the Republic, senators and federal deputies will be elected. The duration of the election campaign shall be sixty days for the year that only representatives will be elected. Never the duration of run-up to the election campaign shall exceed two-thirds of the period granted for election campaigns.

Infringement of these provisions by parties, private individuals or legal entities will be punished according to the Law.

- V. The State organizes federal elections through a public autonomous agency named Federal Electoral Institute (FEI), which is endowed with legal personality and patrimony of its own. The legislative branch, the national political parties and the citizens participate in the integration of the FEI. The FEI's guiding principles for election procedures shall be: certainty, legality, independence, impartiality and objectivity.

The Federal Electoral Institute shall have electoral jurisdiction and independent character regarding its decisions and functioning, and shall be professional in its performance. The FEI's structure shall include managerial, executive, technical and surveillance bodies. The main directive body of the FEI is the General Council, consisting of one President Councilor and eight Electoral Councilors with the right to vote and to

participate in debates, and of members who have the right to participate in debates, but are not entitled to vote, such members are Congressional councilors, political parties' representatives and an Executive Secretary. The Law shall regulate organization and functioning of the FEI's organs. The executive and technical bodies shall employ the qualified personnel necessary to professionally prepare, organize and conduct the electoral processes. The General Watchdog Office shall inspect FEI's incomes and expenses. The electoral Law and its derived regulations shall regulate labor relations between the FEI and its employees. Surveillance bodies shall be integrated mainly by national political parties' representatives. The district commissions shall be integrated by citizens.

The President Councilor is elected to serve for a period of six years and may be reelected once only. The Electoral Councilors are elected at phased intervals for a period of nine years, but may not be reelected. The President Councilor and the eight Electoral Councilors shall be elected through the vote of two-thirds of the members present in the Chamber of Deputies, from among the proposals put forward by the parliamentary groups, after an open consultation. The substitutes will conclude the period in the absence of the President Councilor or any Electoral Councilor. The Law shall establish the appropriate rules and procedures.

The President Councilor and the Electoral Councilors cannot hold any other employment, job or commission, but those in which they represent the General Council as well as those performed for free in educational, scientific, cultural, researching or philanthropic associations. The wage of both the President Councilor and the Electoral Councilors shall be equal to the wage granted to the Supreme Court Ministers.

The General Watchdog shall be elected through the vote of two-thirds of the members present in the Chamber of Deputies, from among the proposals put forward by public high education institutions, according to the Law. The General Watchdog is elected to serve for a period of six years and may be reelected once only. He shall be assigned to the President Councilor and shall maintain technical coordination with the Federal Government Watchdog Office.

The Executive Secretary shall be appointed by two-thirds of the General Council after his nomination by the President Councilor.

Federal Law shall establish the requisites that every individual must meet in order to be appointed as the President Councilor, Electoral Councilor, the General Watchdog or the Executive Secretary of the Federal Electoral Institute. The President Councilor, the Electoral Councilors and the Executive Secretary cannot hold a public office within the two years after termination of their duties in the FEI.

Congressional councilors shall be appointed by parliamentary groups with party affiliation in any of the two Chambers of Congress, at a ratio of one per registered party or coalition, even though the respective political party is represented at both Chambers of Congress.

The FEI attributions are the following, among others established by Law: to provide civic education and training; to periodically determine and revise the electoral geography; to register national political groups and parties, as well as guard their rights and prerogatives; to elaborate and update the Federal Registry of Voters and issue the voting card; to design, print and distribute all electoral materials; to prepare elections; to count the electoral results; to declare the validity and grant certificates in the elections for senators and deputies; to count the electoral results in the election for the President of the Republic; and to regulate the electoral observation and the opinion surveys and polls. The deliberations performed within all collegial directive boards shall be public under federal Law.

The General Council shall have an autonomous technical department to oversee and audit parties' resources. The chief of this technical department shall be appointed by two-thirds of the General Council after his nomination by the President Councilor. The Law shall establish organization and functioning of this organ, as well as the procedures to impose sanctions by the General Council. In order to carry out its liabilities, the technical department shall not be limited by the bank secrecy, the fiduciary secrecy or the fiscal secrecy.

State electoral authorities shall be supported by the technical department in order to obtain financial information from the parties without the limitation of the bank secrecy, the fiduciary secrecy or the fiscal secrecy.

The Federal Electoral Institute shall organize local elections under covenants made and executed with the states and according to the Law.

- VI. A judicial appeal system shall be established in accordance to this Constitution and the Law in order to protect the constitutionality and the legality principles, under which electoral decisions and resolutions must be made. Such system shall provide definitive resolutions in every stage of election process and shall protect the citizens' political right to vote, right to be elected and right to assembly, according to the Article 99 of this Constitution.

Appeals will not suspend the appealed resolution or act.

Chapter II

Composition of Composition of the Federation and Mexican territory

Article 42. National territory is composed of:

- I. The territory belonging to the states.
- II. The territory of islands, including the reefs and cays in adjacent seas.
- III. The territory of the islands of Guadalupe and Revillagigedo located in the Pacific Ocean.
- IV. The continental shelf and the seabed of the islands, cays and reefs.
- V. The waters of the territorial seas in the extension and under the terms established by the International Law and domestic maritime laws.
- VI. The air space located above national territory, in the extension and with the particularities established by the International Law.

Article 43. The Mexican territory is comprised of the following states: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, State of Mexico, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas and the Federal District.

Article 44. The Mexico City is the capital of the United Mexican States. Mexico City is also the Federal District, seat of the federal government. It shall be integrated by its current territory. In the event that federal government has to be moved to another place, Mexico City will be a part of the State of Valle de México. The Congress shall set down the limits and territorial extension for the new State.

Article 45. The states will keep their current borders and extensions, as long as there is not a controversy about it.

Article 46. The States can deal with their respective limits by friendly agreements among each other at any time; however, these arrangements will not be effective without the approval of the Chamber of Senators.

Should there not be an agreement referred in the above paragraph, and at the request of any of the conflicting parties, the Supreme Court of Justice of the Nation will know, substantiate and resolve with an unassailable capacity, disputes on territory limits that take place between States, and under the terms of section I of article 105 of this Constitution.

Article 47. The State of Nayarit shall have the territorial area and boundaries which presently comprise the territory of Tepic.

Article 48. Federal government shall be in charge of: a) all the islands, cays and reefs within the adjacent seas belonging to national territory; b) the continental shelf; c) the seabed of islands, cays and reefs; d) territorial seas; e) inland maritime waters and f) the space located above the national territory; except by the islands that belong to the states.

TITLE THREE

Chapter I

Division of power

Article 49. The political authority or power is shared by the executive, the legislature and the judiciary.

Two or more of these powers cannot be united in one single person or corporation, nor shall the legislative branch be vested in one single person, except for the case where extraordinary powers are granted to the President of the Republic as provided in *Article 29*. In no other case, except as provided under the second paragraph of *Article 131*, shall extraordinary powers be granted to legislate.

Chapter II

The legislature

Article 50. The legislative power is vested in a Congress of the United Mexican States, which shall consist of a Senate and Chamber of Deputies.

Section I

Elections and inauguration of the Congress

Article 51. The Chamber of Deputies shall be composed of members chosen every third year by the people of the several states. For each deputy, a substitute shall be elected.

Article 52. The Chamber of Deputies shall be integrated by 300 members, who shall be elected according to the principle of majority voting through the uninominal voting system in all the electoral districts; and 200 members chosen according to the principle of proportional representation, using a system of regional lists and majority rule with representation for the electoral minority in proportion to the way the people vote.

Article 53. The borders separating the 300 electoral districts from each other shall be set down after dividing the country's population by the number of districts, taking into account the most recent census. Each state shall have at least two deputies elected under the principle of majority voting.

In order to elect 200 deputies under the principle of proportional representation, using a system of regional lists, five electoral districts shall be established in the country. The Law shall set down the ways in which such territorial division will be made.

Article 54. The election of 200 deputies under the principle of proportional representation, using a system of regional lists, shall be subjected to the following principles:

- I. To register its regional list, a political party must prove that it participates with candidates to the Chamber of Deputies to be elected by the principle of majority voting in at least two hundred uninominal districts.

- II. Every political party attaining at least two percent of the total votes casted for the regional lists shall be entitled to have deputies under the principle of proportional representation.
- III. The political party complying with the two principles above established, shall have appointed the number of representatives from the list corresponding to each plurinominal district, according to the way the people vote. The order established in the regional lists shall be respected for appointments.
- IV. No political party shall have more than 300 deputies, no matter which principle they have been elected under.
- V. The political parties shall never have a number of deputies, which percentage of the Chamber exceeds by eight points the percentage they have obtained in vote. This restriction shall not be applied to the political party that, due to its electoral victories at uninominal districts, obtains a percentage of seats greater than the addition of the percentage obtained in national vote plus eight percent.
- VI. After that seats have been distributed according to previous paragraphs III, IV and V, the leftover proportional representation seats shall be awarded to the remaining political parties which have a right in each one of the plurinominal district, in proportion to the way the people vote. The Law shall regulate procedures and formalities to apply this article's principles.

Article 55. Requirements to be a Deputy:

- I. To be a Mexican national by birth in the full exercise of his rights.
- II. To have attained to the age of twenty one years on the election date.
- III. To be an inhabitant of that state in which he shall be chosen for at least six months before the election date.

In order to qualify for registration in the regional lists of plurinominal districts, the candidate must be a native of one of the states included in such plurinominal district, or be an inhabitant of that district for at least six months prior to the date of the election.

Residence is not lost in cases where absence is by reason of serving as holder of an elective public office.

- IV. To be free of duties at the Army, Law enforcement agencies and rural police forces with jurisdiction over the electoral district in which the election is going to take place, at least ninety days before the election date.
- V. Not to be in charge of one of the organs, granted with autonomy by this Constitution. Not to be Secretary or Undersecretary of the State. Not to be in charge of one of the decentralized organs of the federal government, unless the candidate is definitely separated from his duties at least 90 days before election date takes place.

In order to be a representative, the candidate must not to be: minister in the Supreme Court, judge, Secretary in the Electoral Court of the Judicial Power of the Mexican Federation, President Councilor or Electoral Councilor in the Federal Electoral Institute, Executive Secretary or manager in the FEI, unless the candidate is definitely separated from his duties at least three years before election date takes place.

State Governors and the Federal District Mayor cannot be elected to represent the states over which they have jurisdiction, even though they definitely separate themselves from their duties.

State Secretaries, the Secretaries of the Federal District, the federal or state judges, the judges of the Federal District, the mayors and persons in charge of any political-administrative entity in the Federal District, cannot be elected in the states where they exercise their respective duties, unless they resign their positions definitively at least ninety days before the election.

VI. Not to be priest or minister of any religion.

VII. To be unaffected by the inabilities established under article 59.

Article 56. The Senate shall be composed of 128 senators, two Senators from each state and the Federal District elected in accordance to the principle of majority voting and one Senator shall be apportioned to the largest minority. For this purpose, political parties must register a list with two sets of candidates. The largest minority seat shall be granted to the set of candidates heading the list of the political party that shall have attained the second place in the number of votes casted in the corresponding state.

The remaining thirty two senators shall be elected under the principle of proportional representation, through the system of lists voted in one sole national plurinominal district. The Law shall establish the regulations and formalities that shall be applied for these purposes.

The Senate shall be totally renewed every six years.

Article 57. There shall be an elected substitute for each senator.

Article 58. The Senators shall fulfill the same requirements than the deputies, except by the age. All senators must be at least 25 years old on the election date.

Article 59. Senators and Deputies to the Congress of the Union may not be re-elected for the immediately following term.

Substitute Senators and Deputies may be elected as incumbents for the immediately following term, provided that they have not held office as incumbents. However, incumbent senators and deputies cannot be elected for the immediately following term as substitutes.

Article 60. The Federal Electoral Institute (FEI) shall declare the validity of the elections of both, deputies and senators in each one of the uninominal districts, as well as in each state. The FEI shall also issue the respective certificates to the registered candidates who have obtained the majority of votes. The FEI shall appoint the senators

corresponding to the largest minority, according to the Article 56 of this Constitution and the Law. Likewise, the FEI shall declare validity of the election and shall appoint the representatives corresponding to the principle of proportional representation, in accordance to the Article 54 of this Constitution and the Law.

The resolutions made on validity of the election, on awarding certificates and on appointed deputies or senators can be appealed before the regional courts of the Electoral Court of the Judicial Power, according to the procedures established by Law.

The regional court's rulings may be reviewed only by the High Court of the Electoral Court of the Judicial Power, through the appeals submitted by political parties, provided that such offences could modify an election result. The verdicts given by the High Court of the Electoral Court of the Judicial Power shall be definitive and irrefutable. The Law shall establish the conditions, requirements and formalities for such appeal system.

Article 61. Deputies and senators shall be above criticism related to their opinions in the performance of their duties, they may never be questioned for such opinions.

The speaker of each Chamber shall be responsible for enforcing respect to Chamber members' constitutional immunity and to the inviolability of the Chamber.

Article 62. No Senator or Deputies shall, during the time for which he was elected, be appointed to any federal or state government office which grants emolument without a license granted by the respective Chamber. In such case, representative duties shall be suspended for as long as their new occupation lasts. The same rule shall be applied to the substitute deputies and senators if they have been called to service. Removal from office shall be the punishment imposed on any offender of this article's rules.

Article 63. In order to open sessions and to exercise the duties of the offices, the Chamber of Deputies and the Senator shall have more than 50% of attendance of the total number of their members. Those present shall compel the absentees to attend within the next thirty days, under penalty of being removed from the seat. In such case, the substitutes shall be called, who must appear within the next thirty days. In the event that substitute does not appear either, the seat shall be declared vacant. All vacancies shall be filled, no matter vacancy was generated at the beginning of legislature or during exercising. Regarding Deputies or Senators elected under the principle of majority voting, the respective Chamber shall call extraordinary elections according to the Article 77, paragraph IV of this Constitution. Regarding representatives appointed by the principle of proportional representation, vacancy shall be filled by the next candidate in the list of the party in question. Regarding Senators appointed by the principle of proportional representation, vacancy shall be filled by the next candidate in the list of the party in question. Regarding Senators appointed by the principle of largest minority, vacancy shall be filled by the second candidate in the list of the party in question of the respective state.

Deputies and Senators shall inform their Speaker about absences. Any Deputy or Senator who have been absent from his duties for ten days in a row without the permit of the Speaker shall not be allowed to take his seats back until the opening of the following period of sessions. In such a case, substitutes shall be called to service.

In the event of lack of quorum in either Chamber, the substitute shall be called immediately to attend as promptly as possible, while the aforesaid thirty days term elapses.

Absent Deputies or Senator, who does not have previous permit, shall be liable and subjected to the penalties established by the Law. National political parties shall also be liable and subjected to the penalties set forth by the Law if order their candidates not to appear in the respective Chamber to perform their duties.

Article 64. Deputies and Senators who, unjustifiably and without a permit, are absent from one session, shall not be entitled to claim any wage for that particular day.

Article 65. The Congress shall assemble every year on September 1, for the first ordinary period of sessions, and on February 1st for the second ordinary period of sessions.

In both periods of sessions, the Congress shall study, discuss and vote the bills submitted thereto and shall resolve any other affairs pertaining to it according to this Constitution.

The Congress shall preferably devote itself to the issues established by its Organic Law.

Article 66. Each ordinary period of sessions shall last as long as necessary to solve the affairs mentioned at the previous article. The first period cannot be extended beyond December 15 of the respective year, except on those years when according to Article 83, a new President of the Republic is going to be inaugurated. In such a case, sessions may be extended until December 31. The second period shall not be extended beyond April 30 of the respective year.

If no agreement is reached by both Chambers about the date to close sessions, then the President of the Republic shall resolve the dispute.

Article 67. The Congress or just one of the Chambers, when dealing with an issue under its exclusive jurisdiction, shall assemble in extraordinary period of sessions at the Permanent Committee's request. In such case, the Congress shall only resolve the issue or issues submitted by the Permanent Committee and indicated in the notification.

Article 68. Both Chambers shall be located at the same place and shall not be moved to a different one without a previous agreement on moving, period and procedure, but both Chambers must reside in the same site. If no agreement is reached on the transfer's duration, procedures and place, the President of the Republic resolve the issue by choosing one of the alternatives. No Chamber shall adjourn sessions for more than three days without the explicit consent from the other one.

Article 69. Every year, at the opening of the first ordinary period of sessions, the President of the Republic shall provide a written report, indicating the state of the country's public administration. At the opening of an extraordinary period of sessions of the Congress, or only of one of the Chambers, the Speaker of the Permanent Committee shall inform about the reasons leading to such extraordinary period of sessions.

Each of the Chambers shall analyze the report and can request the President of the Republic to expand on the information through written questions. The Chambers can summon the Secretaries, the Attorney General and the chairmen of decentralized entities, who shall appear before the Congress to report under oath. The Law and regulations of the Congress shall rule this attribution.

Article 70. Every resolution of the Congress shall have force of Law or decree. Laws and decrees shall be communicated to the President of the Republic by a document signed by the Speakers of both Chambers. Laws and decrees shall be enacted as follows: "The Congress of the United Mexican States decrees: (text of the respective Law or decree)".

The Congress shall issue a Law that will regulate its own structure and internal functioning.

Such Law shall specify the ways and procedures allowing associations of representatives to be formed according to their party affiliation in order to protect the freedom of speech of all ideological trends represented at the Chamber of Deputies.

Such a Law shall never be vetoed nor require to be enacted by the President of the Republic in order to enter into force.

Section II

Bills and Law enactment

Article 71. The ones who have the right to propose laws or decrees are:

- I. The President of the Republic;
- II. The representatives and senators;
- III. The state legislatures.
- IV. To citizens in a number equivalent, at least to zero point thirteen percent of the voters registration list, under the terms set by the law.

The Law of the Congress will determine the procedure for the initiatives.

The opening day of each ordinary session period, the President of the Republic may present up to two initiatives for preferential procedure, or under such character appoint up to two initiatives that had already been presented in previous periods, when ruling pending. Each initiative should be discussed and voted by the Plenary of the Chamber of origin on a max thirty natural days period. Otherwise, the initiative under its terms and without any higher procedure, will be the first matter that will be discussed and voted in the next Plenary session. If approved or modified by the originating Chamber, the respective bill of law or decree will immediately be passed

to the Reviewing Chamber for discussion and vote on the same period and under the above mentioned conditions.

The addition or reform initiatives of this Constitution will not have a preferential character.

Article 72. Every single bill shall be discussed successively at both Chambers, except by the issues that are within the exclusive jurisdiction of one of the Chambers. The Chamber shall observe the methods, periods of time and debating and voting procedures established by the Congress Act and its regulations.

a) After being approved by one of the Chambers, every bill shall be submitted to the other one in order to be discussed there. If the second Chamber approves it, the bill shall be submitted to the President of the Republic who, after deciding that no further corrections should be made, shall publish it without delay.

b) A bill forwarded to the President of the Republic which is not returned by him with his objections to the Chamber where it was originated within 30 calendar days of the receipt, shall be deemed approved. After such term, the President of the Republic shall pass and publish the Law or decree in the following 10 calendar days. After this second term, the Law or decree shall be deemed enacted; then, in the following 10 calendar days, the President of the Chamber, where the bill was originated, shall order publication of the Law or decree in the Official Gazette of the Federation, without requiring endorsement. These deadlines shall not be suspended if the Congress closes or adjourns its sessions. In this case, the President of the Republic shall return the bill to the Permanent Committee.

c) Any bill rejected partially or totally by the President of the Republic shall be returned with the respective corrections to the original Chamber. The bill shall be discussed again in such Chamber and, if confirmed by a two-thirds majority of votes, it shall be submitted again to the reviewer Chamber. If a two-thirds majority of votes supports the bill at the second Chamber, it shall be considered as enacted Law or decree and shall be sent to the President of the Republic in order to be published.

Voting for enacting laws or decrees shall be nominal.

d) If any bill is rejected in whole by the reviewing Chamber, it shall be returned to the Chamber where it was originated with the appropriate objections. The bill shall be again discussed in said Chamber and, if approved by the absolute majority of its members present, it shall return to the Chamber that rejected it, which shall analyze it again. If the second Chamber approves the bill by the same majority, it shall be submitted to the President of the Republic, who has to comply the purposes of paragraph "a". If the second Chamber does not approve the bill, it shall not be reintroduced in the same period of sessions.

e) Any bill partially rejected, modified or added by the reviewing Chamber, the new discussion in the original Chamber shall be focused on the rejected, reformed or added parts, leaving the already approved articles unchanged. If the additions or reforms made by the reviewing Chamber are approved by absolute majority in the

original Chamber, the whole bill shall be submitted to the President of the Republic, who has to observe the provisions established in paragraph “a”. If the additions or reforms made by the reviewing Chamber are rejected by majority of the members attending the original Chamber, the bill shall be returned to the reviewing Chamber which shall study the reasons of the first Chamber. If those additions or reforms are rejected again after a second review, the part of the bill approved by both Chambers shall be sent to the President of the Republic, who has to observe the provisions established in paragraph “a”. If the absolute majority of the attending members at the reviewing House insists on enacting the additions and reforms, the whole bill shall be postponed until a the new period of sessions, unless the absolute majority of attending congressmen at both Chambers agrees on enacting only the approved articles of the bill and on submitting additions or reforms to the next period of sessions.

f) Regarding interpretation, reforms and repeal of laws or decrees, the same formalities established for enacting them shall be observed.

g) Any bill rejected in the first Chamber shall not be reintroduced in other period of sessions corresponding to the same year.

h) Either of the two Chambers can propose a Law or decree first, except by the bills about debenture loans, taxes or conscription, which shall be discussed first at the Chamber of Deputies.

i) If the Consultative Commission of the first Chamber delays to present an opinion about the bill for more than one month, then the bill can be submitted to the other Chamber for discussion.

j) The President of the Republic cannot make comments on the resolutions of the Congress or any of the Chambers when act as electoral body or judge, as well as when the Chamber of Deputies charges a top-ranking official with official offences.

The President of the Republic cannot make comments on the decree of call for extraordinary period of sessions issued by the Permanent Committee.

Section III

Powers of Congress

Article 73. The Congress shall have the power to:

- I. Admit new states into the Union.
- II. Repealed.
- III. Create new states inside the limits of the existing ones. For this purpose, the following requirements must be met:
 - 1st The fraction or fractions that intend to a new state must have at least 120 thousand inhabitants.
 - 2nd The fraction or fractions that intend to become a new state shall prove, before the Congress, that possess enough elements to assure the new state’s political existence.

3rd The legislatures of the states involved shall submit a report to the Congress, within the six months after notification was sent to them, about usefulness or inappropriateness of creation of the new state.

4th The President of the Republic must submit a report to the Congress within the seven days after notification about usefulness or inappropriateness of creation of the new state.

5th Proposal of creation of the new state shall obtain the two-thirds of the votes in each Chamber.

6th The ruling pronounced by the Congress shall be ratified by majority of the state legislatures after reviewing of the file, provided that legislatures of the affected states have approved such ruling.

7th In the event that legislatures of the affected states do not consent creation of a new state, then ratification mentioned in the previous paragraph shall be done by two-thirds of the legislatures of the rest of the states.

- IV. Repealed.
- V. Move seat of Federal Government.
- VI. Repealed.
- VII. Lay and collect taxes in order to fund national budget.
- VIII. Establish the basis in order to allow the President of the Republic to make debenture loans based on the country's credit. The Congress shall have the power to approve such debenture loans, to accept the foreign debt and to order payment of such foreign debt. Only credits producing an increase in public revenue shall be contracted, except by those acquired for monetary regulation purposes, for exchange purposes and those acquired to face an emergency situation stated by the President of the Republic according to the *Article 29*. The Congress shall also have the power to annually approve debt amount, which shall be included in the Revenue Law, for the Federal District Government and the government agencies, according to the applicable Law. The President of the Republic shall submit to the Congress an annual report about the spending of the debt. For this purpose, the Federal District Mayor shall submit to the President a report about the spending corresponding to the Federal District. The Federal District Mayor shall also inform the Federal District Assembly about such spending together with the report of the public spending.
- IX. Regulate commerce among nations in order to avoid restrictions.
- X. Make rules and regulations over the whole country on hydrocarbons, mining, chemical substances, explosives, pyrotechnics, movie industry, commerce, bets, draw and raffles, intermediation and financial services, electrical and nuclear energy, and labor relations.

- XI. Create and cut public jobs in federal government, as well as to establish, increase or decrease salaries for such jobs.
- XII. Declare war, based on the information submitted by the President of the Republic.
- XIII. Enact laws that assess quality of maritime and land dams, and the maritime legislation that shall be applied at both, peacetime and wartime.
- XIV. Support and maintain the country's armed forces: the Army, the Navy and the Air Force. The Congress shall have the power to regulate organization and service of these armed forces.
- XV. Make rules and regulations that organize, arm and discipline the National Guard. However, citizens participating in the National Guard shall appoint its chiefs and officers, and the states shall train its own National Guard.
- XVI. Enact laws on nationality, legal status of foreigners, citizenship, naturalization, colonization, immigration and public health:
 - 1st The General Board of Health shall report directly to the President of the Republic, without intervention of any government department. Orders, regulations, measure and provisions issued by the General Board of Health shall be compulsory for the whole country.
 - 2nd In the event of serious epidemic or risk of invasion of exotic diseases, the Secretariat for Public Health shall issue immediately the appropriate measures, which shall be approved by the President of the Republic.
 - 3rd The Secretariat for Public Health shall be an executive organ, its orders, regulations, measures and provisions shall be observed by the administrative authorities throughout the country.
 - 4th Measures issued by the General Board of Health for campaigns against alcoholism, drugs and pollution shall be reviewed, after the campaign, by the Mexican Congress if applicable.
- XVII. Enact laws on communal communication routes, mail services and the use of federal waters.
- XVIII. Establish mints and regulate them, to make rules to determine exchange rate, and to adopt a general system of weights and measures.
- XIX. Regulate occupation and alienation of the areas of waste land, as well as the price thereof.
- XX. Enact laws to regulate the Mexican diplomatic and consular bodies.
- XXI. Define offences against the country and the punishments to be applied. The Congress shall have the power to enact federal laws to fight kidnapping and trafficking in persons, which shall establish, at least, the different kinds of kidnapping and trafficking in person, the punishment to be applied, the powers of the different levels of government and coordination

ways between the federal, state and local agencies and the Federal District's agencies. The Congress shall also have the power to legislate on organized crime matter.

The federal authorities will be able to know also the common law offenses, when they are connected to federal offenses or offenses against journalists, people of facilities that affect, limit or infringe the right to information or freedom of expression or printing.

Also, federal laws shall establish the cases in which local authorities shall resolve federal crimes because of concurrence of crimes established in this Constitution.

- XXII. Grant an amnesty for federal crimes.
- XXIII. Enact laws to regulate coordination between the Federal Government, the Federal District, the states and the local councils, as well as to create and organize federal public security bodies, according to the Article 21 of this Constitution.
- XXIV. Enact a Law to regulate, control and evaluate the Department of the Treasury, the Powers of the Union and the federal agencies.
- XXV. Set, organize and maintain throughout the country rural schools, elementary schools, secondary schools, high schools, universities, scientific research education, art schools, technical schools, schools specialized in agriculture and mining, colleges for study of arts and crafts, museums, libraries, observatories, and other institutions related to general culture.

The congress shall have power to legislate about: a) fossil vestiges; b) archaeological, artistic and historical monuments, which conservation belongs to national interest matters; c) distribution of educational liabilities among the Federal Government, the Federal District, the states and the local councils, as well as financing for such service, seeking for standardization and coordination of educational programs. Academic certificates issued by public institutions shall be valid and accepted throughout the country. The Congress shall have the power to regulate copyrights and patents.
- XXVI. To grant a leave to the President of the Republic and to make up the Electoral College and to appoint the citizen that should substitute the President of the Republic either as interim or alternate, under the terms of articles 84 and 85 of this Constitution.
- XXVII. Accept the President of the Republic's resignation.
- XXVIII. Enact laws to regulate public accounts and submission of financial reports, as well as patrimony reports, which shall apply to the Federal government, the states, local councils and the Federal District.
- XXIX-A. To lay and collect taxes on the following items:
 - 1st Foreign trade.

2nd The use of natural resources mentioned in the Article 27, paragraphs 4 and 5.

3rd Credit institutions and insurance companies.

4th Public services, either provided by concessionaires or by the government.

5th The Congress shall have the power to lay and collect special taxes on:

a) Electrical energy.

b) Production and consumption of carved tobacco.

c) Gasoline and other products derived from oil.

d) Matches.

e) Maguey juice and its products.

f) Forest exploitation.

g) Production and consumption of beer.

The states shall receive, under federal legislation, a percentage of the revenue generated by the special taxes. Local legislatures shall set the percentage corresponding to local councils, in their income from tax over electric power service.

XXIX-B. Regulate characteristics and use of the national flag, anthem and coat of arms.

XXIX-C. To regulate coordination between the Federal Government, the states and the local councils to order human settlements, complying this way with the goals established the Article 27, in paragraph 3, of this Constitution.

XXIX-D. Enact laws regarding national economic and social planning, as well as statistical and geographical information.

XXIX-E. Enact laws for programming, promotion, covenants and implementation of economic measures, especially those related to supply, as well as those intended to achieve adequate and timely production of goods and services, considered as socially necessary.

XXIX-F. Enact laws: a) to promote Mexican investment; b) to regulate foreign investment and transfer of technology; and c) to regulate generation, spreading and implementation of scientific and technological knowledge necessary for the country's development.

XXIX-G. Enact laws establishing the concurrence of the Federal Government, the states and the local councils, within their respective jurisdictions, on matters concerning protection of the environment, as well as preservation and restoration of ecological balance.

XXIX-H. To legislate for the creation of completely autonomous administrative courts empowered to resolve the legal controversies between the federal public administration and individuals. Administrative courts shall impose

- penalties on public employees originated by administrative liabilities. The Law shall establish regulations for organization, functioning and proceedings of administrative courts. The Law shall also define the legal instruments to be used to appeal administrative courts' rulings.
- XXIX-I. Enact laws that coordinate the measures implemented by the Federal Government, the states, the Federal District and the local councils regarding civil protection matter.
- XXIX-J. To legislate physical culture and sports with the purpose of complying with that which is outlined in article 4 of this Constitution, establishing the concurrence between the Federation, the States, the Federal District and the municipalities, as well as the participation of social and private sectors;
- XXIX-K. Legislate on matters concerning tourism, establishing general bases to coordinate the concurrent attributions of the Federal Government, the states, the Federal District and the local councils; as well as the participation of the private and social sectors.
- XXIX-L. Legislate on matters concerning fishing and aquaculture, establishing general bases to coordinate the concurrent attributions of the Federal Government, the states, the Federal District and the local councils; as well as the participation of the private and social sectors.
- XXIX-M. Enact laws in matters of national security, establishing the requirements and limits to the corresponding investigations.
- XXIX-N. Issue laws regarding the formation, organization, functioning and suppression of cooperatives. These laws shall establish the bases to coordinate the concurrent attributions of the Federal Government, the states, the Federal District and the local councils regarding promotion and sustainable development of cooperatives.
- XXIX-Ñ. Legislate on matters concerning culture, establishing general bases to coordinate the concurrent attributions of the Federal Government, the states, the Federal District and the local councils, except by that established in the section XXV of this article. This Law shall also define the mechanisms through which social and private sectors shall participate, complying this way with the goals indicated in the Article 4, paragraph ninth, of this Constitution.
- XXIX-O. Regulate the use and protect personal data handled by private entities.
- XXIX-P. To emit laws that establish the concurrence of the Federation, the States, the Federal District and the Municipalities, in their respective competencies, on the subject of the rights of girls, boys and adolescents, while at all times safeguarding their best interest and complying with international agreements that Mexico may be a part of on this subject.
- XXIX-Q. To legislate over citizen initiative and referendum.

- XXIX. Enact all laws required to make effective the foregoing powers and any other powers vested by this Constitution on the Powers of the Union.

Article 74. The Constitution grants the Chamber of Deputies several exclusive powers:

- I. The power to issue the Solemn Edict in order to inform the whole country that the Electoral Court of the Judicial Power has issued a declaration stating that the President of the Republic has been elected.
- II. The power to coordinate and evaluate performance of the Federal Auditing Office, according to the Law and without damage to its own technical and managerial autonomy.
- III. Repealed.
- IV. The power to annually approve the Nation's budget, after assessment, discussion and, if applicable, modification of the project submitted by the President of the Republic; and after approval of taxes and contributions to cover such budget. The Chamber of Deputies shall have the exclusive power to authorize multiannual expenditures for construction of infrastructure, so subsequent budgets shall include these multiannual expenditures.

The President of the Republic shall submit to the Chamber of Deputies his proposal of the Income Act and the Expenditure Budget no later than September 8, the pertinent Secretary shall appear before the Chamber in order to clarify the accounts. The Chamber of Deputies shall approve the Budget no later than November 15.

In the first year of the President of the Republic's term of office, he shall submit to the Chamber of Deputies his proposal of the Income Act and the Expenditure Budget no later than December 15.

Only the absolutely necessary secret items may be included in the Expenditure Budget. The Secretaries shall use such secret items under written consent of the President of the Republic.

Repealed

Repealed

Repealed

The President of the Republic can request an extension to submit his proposal of the Income Act and the Expenditure Budget, justifying the causes. The pertinent Secretary shall appear before the Chamber to inform about the reasons for extension.

- V. The power to approve or object criminal proceedings against civil servants who have committed an offense according to the Article 111 of this Constitution.

The Chamber of Deputies shall be notified about the charges against public employees mentioned in the Article 110 of this Constitu-

tion. The Chamber shall have the power to become an accusing organ in impeachments against civil servants.

- VI. The power to review the public accounts corresponding to the previous year, in order to assess the results thereof, to check observance of the criteria stated in the approved budget, and to verify achievement of the objectives indicated in the several programs.

The Chamber of Deputies shall review the public accounts through the Federal Auditing Office. If this office finds out discrepancies related to revenues or expenditures, or if it finds out inaccuracy or unjustified revenues or expenditures, the Law shall be applied to punish misconduct. Regarding achievement of the objectives stated in the several programs, the Chamber can only issue a recommendation in accordance to the Law.

Public account shall be submitted to the Chamber of Deputies no later than April 30 of the next year. This term may be extended only in the case mentioned in paragraph IV, last rows, of this Article. Extension shall not exceed 30 days. In such case, the Federal Auditing Office shall have the same extension to present the respective report.

The Chamber will complete the review of the Public Account, the latest, on October 31 of the following year after presentation, based on the analysis of the content and technical conclusions of the result report of the superior auditing entity of the Federation, referred in Article 79 of this Constitution, recognizing that the observation procedures, recommendation and actions filed by the superior auditing entity of the Federation will continue under the terms provided in such article.

The Chamber of Deputies shall evaluate performance of the Federal Auditing Office, the Chamber can require it to report about the progress of the auditing process.

- VII. Repealed.

- VIII. Other exclusive powers conferred by this Constitution.

Article 75. The Chamber of Deputies shall indicate, in the Expenditure Budget, the wages for all public employments created under the Law. In the event that the Chamber fails to indicate such wages, the wages established in the previous Budget or in the Law that created the job shall be in force.

Nonetheless, remuneration shall be established observing the provisions of the Article 127 of this Constitution and the applicable laws.

The federal executive, legislative and judicial branches, as well as autonomous bodies recognized in this Constitution, and which exercise resources of the Expenditure Budget, shall include in their project budgets detailed tables of remunerations proposed for their public servants. Such project budgets shall observe the procedure for approval of budget expenditures provided in the Article 74, paragraph IV of this Constitution and other applicable laws.

Article 76. The Constitution grants the Senate several exclusive powers:

- I. Power to analyze the foreign policy developed by the President of the Republic, based on the annual reports submitted by the President and the Secretary of Foreign Affairs.

The Senate shall have the power to approve the international treaties and conventions subscribed by the President of the Republic, as well as his decision to end, condemn, suspend, modify, amend, withdraw reservations and make interpretative declarations related such treaties and conventions.

- II. Ratify appointments that the same public servant performs of the Federal Attorney General, ambassadors, General Councils, upper management employees of Taxation, members of the collegiate bodies in charge of regulating in telecommunication matter, energy and economic competence, coronels and other chiefs of the National Army, Navy and Air Forces under the terms set by the law;
- III. Power to authorize the President of the Republic to allow departure of Mexican troops outside the country, passing of foreign troops through the country and stay of foreign troops for more than one month on Mexican waters.
- IV. Power to authorize the President of the Republic to dispose the National Guard outside its respective states, and to determine the necessary forces.
- V. In the event that all constitutional powers of one state disappear, the Senate shall have the power to appoint a provisional governor, who shall call elections according to the Constitution of the state in question. The President of the Republic shall propose three candidates to become provisional governor. The two-thirds of the Senate or the Permanent Committee shall approve one of the candidates. Provisional governor cannot be nominated as constitutional governor in the elections called by him. This provision shall govern whenever the constitutions of the states do not provide otherwise.
- VI. Power to resolve the political disputes that arise between the powers of a state when one of the parties submits the case to the Senate, or in the event that such disputes have generated an armed conflict. In such a case, the Senate will pronounce a resolution based on the Federal Constitution and the constitution of the state in question.

Law shall regulate exercise of the two previous powers.

- VII. Power to become jury in impeachments against civil servants, according to the Article 110 of this Constitution.
- VIII. Power to appoint the ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation among the candidates proposed by the President of the Republic.

The Senate has the power to approve or reject leaves or resignations of ministers.

- IX. Power to appoint and dismiss the Head of the Federal District Government, in the cases provided by this Constitution.
- X. Power to authorize amicable covenants made by the states regarding their borders. Such covenants shall be authorized by the two-thirds of the members present in Senate.
- XI. Repealed.
- XII. Other exclusive powers conferred by this Constitution.

Article 77. Each of the Chambers may, without the intervention of the other one:

- I. Pronounce resolutions regarding its internal economic affairs.
- II. Communicate with the other Chamber and with the President of the Republic through internal committees.
- III. Appoint the employees for its own secretary's office and issue regulations for it.
- IV. In the event of a vacancy of a seat awarded according to the principle of majority voting, the Chamber in question shall call to extraordinary elections within the 30 days after the vacancy appears. Elections shall be carried out within the 90 days after the call (see Article 63 of this Constitution). Except in the case the vacancy occurs in the last year of the term.

Section IV

Permanent Committee

Article 78. During recesses of the Congress of the Union, there shall be a Permanent Committee composed of 37 members –19 Deputies and 18 Senators–, appointed by their respective Chamber the day before the closing of the ordinary period of sessions. A substitute shall be appointed for each member of the Permanent Committee.

Besides the powers conferred by this Constitution, the Permanent Committee shall have the following powers:

- I. To consent the use of National Guard in the cases described in the Article 76, paragraph IV.
- II. To receive the President of the Republic's oath, if applicable.
- III. To resolve issues within its jurisdiction. To receive bills, comments to the bills made by the President of the Republic, and proposals, as well as to dispatch them to the appropriate commission to be resolved in the next ordinary period of sessions.
- IV. Agree or by proposal of the Executive, the Congress convocation or from a single Chamber for extraordinary sessions, being necessary, in both cases, the vote of other two thirds of the attendants. The convocation will appoint the objective or objectives of the extraordinary meetings. When the convocation is to the General Congress to be in the Electoral College

- and appoints the interim or alternate president, the approval of the convocation will by majority;
- V. To ratify or reject the candidate nominated by the President of the Republic to be the Attorney General.
 - VI. Granting leave up to sixty natural days to the President of the Republic;
 - VII. Ratify appointments that the President performs for ambassadors, general councils, upper management employees of Taxation, members of the collegiate bodies in charge of regulating in telecommunication matter, energy and economic competence, coronels and other chiefs of the National Army, Navy and Air Forces under the terms set by the law, and
 - VIII. To receive and resolve requests of leaves submitted by legislators.

Section V

The Federal Auditing Office

Article 79. The Federal Auditing Office, which belongs to the Chamber of Deputies, shall have autonomy regarding technical and managerial matters, as well as regarding its internal organization, functioning and decisions, according to the Law.

Auditing function shall be exercised according to the principles of posteriority, annuity, legality, definitiveness, impartiality and reliability.

The Federal Auditing Office shall be responsible for:

- I. Supervision of: a) revenue and expenditures; b) management, safekeeping and use of funds and resources belonging to the Powers of the Union and to the federal agencies. The Federal Auditing Office shall audit fulfillment of the objectives included in the several federal programs, using the reports submitted according to the Law.

The Federal Auditing Office shall also supervise: a) the management or use of federal resources made by the states, local councils, the Federal District and their government agencies, except by federal contributions; b) the use of federal resources granted to any public or private entity or individual, those transferred to trusts, mandates, funds or any other legal instrument, in accordance with the procedures established by Law and without damage to other authorities' jurisdiction and to the users' rights.

Entities that are subjected to fiscal supervision according to the previous paragraph, shall do the accounts, registering federal patrimony and budget transferred to them, in accordance with the criteria established by Law.

Despite the principle of annuity, the Federal Auditing Office can request and review concrete information of a year previous to that of the public account being revised, only when a project or program covers more than one year or when fulfillment of objectives is under revision. However, comments and recommendations issued by the Federal Audit-

ing Office shall only refer to the public account belonging to the year under revision.

Despite the principle of posteriority, the Federal Auditing Office can request the entities subjected to review to submit a report of the public account corresponding to current year about specific items that have been condemned. If the entity does not meet the deadline and formalities established by Law, it shall be punished according to the Law. The Federal Auditing Office shall submit a report about the case to the Chamber of Deputies and, if applicable, it shall fix responsibilities or initiate responsibilities before the appropriate authority.

- II. Submission of the report of public account review to the Chamber of Deputies no later than February 20 of the year next to that when the public account was presented. The Chamber shall study such report, which will be public. The report must include audits, opinions, inspection of specific items and assessment of the fulfillment of the objectives established in the federal programs. The report shall also include the comments, explanations and justifications of the entity under revision.

For this purpose, before the submission of the report to the Chamber of Deputies, the Federal Auditing Office shall notify the entities under revision about the results obtained from their public accounts, so that they could submit the pertinent justifications and explanations.

The Head of the Federal Auditing Office shall send to the entities under revision the recommendations and measures suggested no later than 10 business days after submission of the report to the Chamber of Deputies. The entities under revision shall, within a 30 business days term, present the appropriate information and carry out the suitable measures. The Law shall establish punishments for failures thereof. This provision shall not apply to the lists of comments and accusations, which shall observe the procedures and terms established by Law.

The Federal Auditing Office shall, within a 120 business days term, answer the explanations and justifications submitted by the entities under revision. Failure to do so, means that explanations and justifications have been accepted.

Regarding fulfillment of the objectives, the entities under revision shall describe the improvements carried out or justify the inappropriateness of the measures suggested by the Federal Auditing Office.

On May 1 and November 1 of every year, the Federal Auditing Office shall submit to the Chamber of Deputies a report about the progress of recommendations and measures suggested to the public entities.

The Federal Auditing Office shall keep secret on its acts and comments until the report has been submitted to the Chamber of Deputies. The Law shall establish appropriate punishments for offenders thereof.

- III. Investigation of actions or omissions related to irregularities or illicit conducts about income, expenditures, management, safekeeping and use of funds and federal resources. The Federal Auditing Office can make home visits only to review the books, documents and files necessary for the investigation, in accordance to the Law and formalities.
- IV. Determination of damages and losses affecting the public finances or patrimony and fixation of responsibilities and pecuniary penalties; promotion of the liability actions mentioned in the Title Four of this Constitution; and reporting offences and crimes, participating as far as the Law allows.

Penalties and resolutions issued by the Federal Auditing Office may be appealed by the affected entities or public servants before the same Federal Auditing Office or before the courts mentioned in the Article 73, paragraph XXIX-H, of this Constitution, according to the Law.

The Head of the Federal Auditing Office shall be appointed by the two-thirds of the members present in the Chamber of Deputies, in accordance with the procedure established for this purpose. The head of the Federal Auditing Office is appointed to serve for a period of eight years and may be appointed again once only. He may be removed, exclusively for serious misdemeanor described in the Law, by the two-thirds of the members present in the Chamber of Deputies. He may be also removed due to the causes established in the Title Four of this Constitution.

To qualify for the position of Head of the Federal Auditing Office, it is necessary to fill the requirements established in paragraphs I, II, IV, V and IV of the Article 95 of this Constitution, as well as the other requirements established by the Law. While holding the office, the Head of the Federal Auditing Office cannot join any political party nor perform any other job, position or assignment, except for unpaid services in scientific, educational, cultural or beneficiary institutions.

The different Powers of the Union, the states and the government agencies subjected to revision shall assist the Federal Auditing Office in carrying out its work.

Refusal to do so shall be punished according to the Law. This provision applies also to federal and local employees, as well as to any private or public entity, trust, mandate or fund that uses public federal resources. This provision does not damage the jurisdiction of other authorities nor the user's rights.

The president of the Republic shall apply an administrative proceeding to enforce payment of compensations and pecuniary penalties defined in the paragraph IV of this article.

Chapter III *The Federal Executive Branch*

Article 80. The power of the Executive Branch is vested in one single person, the President of the United Mexican States.

Article 81. The President of the United Mexican States is directly elected by the people according to the electoral Law.

Article 82. Qualifications for the Presidency:

- I. The candidate for the Presidency must be a natural born citizen, with legal capacity to exercise his rights, born of Mexican father or mother and must have live in the country for at least 20 years.
- II. The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date.
- III. The candidate for the Presidency must have live in the country for a full year prior to the day of the election. Absences for up to 30 days do not interrupt residence.
- IV. The candidate for the Presidency cannot be priest or minister of any religion.
- V. The candidate should not be in active duty in the Army at least six months before the day of the election.
- VI. The candidate should not be State Secretary or Under-Secretary, Attorney General, Governor or Head of the Federal District Government, unless he resigns his position six months before the election date.
- VII. To be unaffected by the inabilities established under the Article 83.

Article 83. The President will begin his tenure on December 1st and will last six years in office. The citizen who had performed as President of the Republic, popularly elected or under the interim or alternate character, or provisionally takes the titularity of the Federal Executive, in no case and under any circumstances may perform again this position.

Article 84. In case of a complete absence of President of the Republic, while the Congress appoints the interim or alternate president, in a term no longer than sixty days, the Minister of Interior will provisionally take the titularity of the Executive Power. In this case, sections II, III and VI of Article 82 of this Constitution will not be applicable.

Whoever provisionally takes the Presidency will not be able to withdraw or appoint State Secretaries, or the Attorney General of the Republic, without the previous authorization of the Chamber of Senators. Likewise, he will delivered to the Congress of the Union a work report in a no longer than ten days period, starting at the moment when his commission ends.

When there is complete absence of President during the two first years of the respective period, if the Congress of the Union was in sessions and attending, at least two thirds of the total number of members of each Chamber, immediately the Elec-

toral College will be constituted and through secret ballot and absolute majority of votes, an interim president will be appointed, under the terms set by the Law of the Congress. The same Congress will issue, within ten days following such appointment, the call for the election of President that should end the respective period having to mediate between the notification and appointed to perform the election day, in a no less than seven months period or over nine months period. The person elected will start office and swear before the Congress seven days after the electoral process has ended

If the Congress is not in sessions, the Permanent Commission will immediately call for extraordinary sessions to constitute the Electoral College, appoint an interim president and issue the call to presidential elections under the terms of the previous paragraph.

When there is a complete absence of President in the last four years of the respective period, if the Congress of the Union is in session, it will appoint an alternate president, who will complete the period, following in that capacity, the same procedure as in the case of the interim president.

If the Congress was not meeting, the Permanent Commission will immediately call for extraordinary sessions to constitute the Electoral College and to appoint an alternate president, following in that capacity, the same procedure as in the case of interim president.

Article 85. If at the beginning of a presidential term, the elected President does not appear, or the election had not yet been carried out, or the election has been declared invalid on December 1, the President whose term has concluded shall anyway cease to hold office. Then, the Congress shall appoint an interim President or, if the Congress is in recess, the Permanent Committee shall appoint a provisional President and call the Congress to an extraordinary period of sessions in order to elect a new President according to the previous article.

During a temporary absence of the President of the Republic, the Congress, or the Permanent Committee, shall appoint an interim President for the period corresponding to the temporary absence.

In the event that the President of the Republic's absence exceeds 30 days, and provided that the Congress is in recess, the Permanent Committee shall call the Congress to an extraordinary period of sessions to resolve about leave and, if applicable, to appoint an interim President.

If a temporary absence of the President becomes into an absolute absence, the Congress shall act as indicated in the previous article.

Article 86. The President of the Republic can resign his position only due to a serious cause, which shall be evaluated by the Congress, to whom the resignation shall be submitted.

Article 87. The President, upon taking office, takes the following oath before the Congress, or before the Permanent Committee during the recess of the Congress: "I

swear to observe and uphold the Political Constitution of the United Mexican States and the laws that emanate from it, and to loyally and patriotically perform the position of President of the Republic, which the people have conferred upon me, pursuing the welfare and prosperity of the country; and if I do not fulfill these obligations, may the Nation demand it of me.”

If by any circumstance the President could not swear in as such under the terms of the above paragraph, he will do so immediately before the Executive Boards of the Chambers of the Congress of the Union.

In case that the President could not swear in before the Congress of the Union, before the Permanent Commission or before the Executive Boards of the Chambers of the Congress of the Union, he will do so immediately before the President of the Supreme Court of Justice of the Nation.

Article 88. The President of the Republic can leave the national territory for up to seven days, previously notifying his reasons to the Senate or the Permanent Committee, as applicable, as well as the outcome of his activities. For absences larger than seven days, the President shall request a permit from the Senate or the Permanent Committee.

Article 89. The President of the Republic’s powers and rights include the following:

- I. To enact and execute the laws issued by the Congress of the Union in the administrative field.
- II. To freely appoint and remove the Secretaries of State; to remove diplomatic agents and top-ranking officials of the Department of the Treasury; to freely appoint and remove all the other employees of the federal administration, whose appointment or dismissal is not otherwise provided by the Constitution or the laws.
- III. To appoint the ministers, diplomatic agents and consuls general, with the approval of the Senate.
- IV. To appoint colonels and other top-ranking officers of the Army, Navy and Air Force, as well as top-ranking officials of the Department of the Treasury, with the approval of the Senate.
- V. To appoint, according to the Law, the rest of the officers of the Army, Navy and Air Force.
- VI. To protect national security, in accordance to the applicable Law, for this purpose, The President of the Republic can make use of the permanent armed forces: the Army, the Navy and the Air Force.
- VII. To make use of the National Guard to assure domestic security and to protect the nation from other nations, observing the provisions established in the Article 76, section IV.
- VIII. To declare war in the name of the United Mexican States, having the previous authorization of the Congress.

- IX. To appoint the Attorney General with the approval of the Congress.
- X. To lead the foreign policy; to make and execute international treaties; as well as to end, condemn, suspend, modify, amend, withdraw reservations and make interpretative declarations relating such treaties and conventions, requiring the authorization of the Senate. For these purposes, the President of the Republic shall observe the following principles: the right to self-determination; non-intervention; peaceful solution of controversies; outlawing the use of force or threat in international relations; equal rights of States; international cooperation for development; the respect, protection and promotion of human rights; and the struggle for international peace and security.
- XI. To call the Congress to an extraordinary period of sessions at Permanent Committee's request.
- XII. To provide the Judicial Branch with all the assistance necessary for the free performance of its duties.
- XIII. To equip all kind of ports; to set up maritime and border customs, indicating the place to install them.
- XIV. To grant, according to the Law, a pardon to the convicts sentenced because of federal crimes or common crimes committed in the Federal District.
- XV. To grant exclusive privileges, for a limited period of time, to discoverers, inventors or improvers in any branch of industry, according to the applicable Law.
- XVI. During the recess of the Congress, the President of the Republic can make the appointments mentioned in the paragraphs III, IV and IX, having the approval of the Permanent Committee.
- XVII. Repealed.
- XVIII. To submit to the Senate a list of candidates to become ministers of the Supreme Court of Justice; and to require authorization for their leaves and resignations.
- XIX. Repealed.
- XX. Other powers expressly conferred by this Constitution.

Article 90. Federal Public Administration shall be centralized and semipublic, according to the organic Law issued by the Congress, which shall distribute the federal administrative affairs among the several Secretariats and shall define the general bases to create semipublic entities and the President of the Republic's intervention there.

The laws shall regulate relationships between semipublic entities and the President of the Republic and the Secretariats.

Article 91. In order to become a member of the Cabinet, it is required to be a Mexican citizen by birth, with legal capacity to exercise his rights, and to be 30 years old.

Article 92. All regulations, decrees, covenants and orders issued by the President of the Republic shall be signed by the Secretary in question, otherwise they won't be compulsory.

Article 93. Members of the Cabinet, as soon as the ordinary period of sessions is open, shall answer to the Congress for the state of their respective affairs.

Any of the Chambers can call the Secretaries, the Attorney General, the directors and managers of semipublic entities and the heads of autonomous agencies in order to provide information, under oath, whenever the Congress is studying or discussing a Law or affair related to them.

The Chamber of Deputies, by request of a quarter of its members, and the Senate, by request of a half of its members, have the power to create committees to investigate functioning of decentralized and semipublic entities. Results of investigations shall be submitted to the President of the Republic.

Any of the Chambers can require, in writing, the heads of the federal agencies to provide information or documents, who shall answer within the 15 days after request was received.

These attributions shall be exercised according to the Law and regulations of the Congress.

Chapter IV *The Judicial Branch*

Article 94. The judicial power of the United Mexican States is vested in a Supreme Court of Justice, an Electoral Court, specialized circuit courts, unitary circuit courts and the district courts.

The Federal Judicial Council shall deal with matters of administration, supervision and discipline for Mexican federal judges, except by the Supreme Court of Justice of the Nation, according to the provisions established by Law.

The Supreme Court of Justice of the Nation shall consist of 11 ministers and shall work at plenary meetings or at courtrooms.

Sessions in plenary meeting or in courtrooms shall be public, in accordance with the Law. Sessions may be secret whenever public interest or public morality should so require it.

The laws shall regulate, based on this Constitution, powers and functioning of the Supreme Court of Justice, the circuit courts, the district courts and the Electoral Court. The Law shall establish liabilities for the Judicial Power's employees.

The Federal Judicial Council shall define the number of districts and territory belonging to each specialized circuit court, unitary circuit court and district court, as well as the attributions and, if necessary, specialization thereof.

The Supreme Court of Justice shall have the power to issue general covenants in order to create circuit courts, according to the number and specialization of the courts

that belong to each circuit. The laws shall regulate integration and operation of these circuit courts.

The Supreme Court of Justice in plenary meeting shall have the power to issue general covenants in order to achieve an adequate distribution of issues among the courts and to submit to the specialized circuit courts those cases where they shall have established precedents and those affairs selected by the Supreme Court in order to deal with the cases promptly. Said covenants shall come into force after being published.

Constitutional adjudications, constitutional controversies and unconstitutionality claims shall have priority when one of the chambers of the Congress, through its President or the President of the Republic, justifies the urgency on the basis of social interest or the Law and order, in accordance with the regulatory laws. This priority shall be requested by the Government Legal Advisor.

The Law shall define the cases where precedents established by the federal and circuit courts shall be compulsory, relating to interpretation of the Constitution and general laws, as well as the requirements for interruption and modification thereof.

Remuneration granted to the ministers of the Supreme Court, the associated judges, the district judges, the councilors of the Federal Judiciary and the electoral judges, cannot be reduced during their term.

Ministers of the Supreme Court shall be appointed for a 15 years term, they may be removed only in the cases provided in the Title Fourth of this Constitution. Ministers shall be entitled to a retirement payment at the end of their term.

Ministers cannot serve a second term, unless they have held the office as provisional or interim ministers.

Article 95. To be appointed as minister of the Supreme Court of Justice of the Nation, it is required:

- I. To be a Mexican citizen by birth, with legal capacity to exercise his political and civil rights.
- II. To be at least 35 years old.
- III. To have a Law degree, at least 10 years ago, issued by an institution legally empowered for that purpose.
- IV. To have a good reputation and not have been convicted for a crime punishable by imprisonment for more than one year. However, should the crime have been robbery, fraud, forgery, breach of confidence or any other which would seriously damage good reputation, he shall be disqualified for office, whatever penalty may have been.
- V. To have lived in the country the last two years before appointment.
- VI. Not have been Secretary, Attorney General, Minister of Justice of the Federal District, senator, deputie, governor or Head of the Federal District Government the whole year before the appointment.

Preferably, ministers shall be persons who have served with efficiency, ability and integrity in the dispensation of justice, or who have distinguished themselves by their honor, ability and career in the legal field.

Article 96. For appointment of a minister of the Supreme Court of Justice, the President of the Republic shall submit a list of three candidates to the Senate, who should listen them and then choose one by the two-third vote within a 30 days period of time. This period may not be extended. Should the Senate not decide within such term, then the President of the Republic shall appoint one person from the list he has proposed.

If the Senate rejects all the three candidates in the list, the President of the Republic shall submit a new one, then the provisions established in the previous paragraph shall be observed. If the Senate rejects this second list completely, the President of the Republic shall appoint one person from such list.

Article 97. District and circuit judges shall be appointed by the Federal Judicial Council, based on objective criteria and observing the requirements and procedures established by Law. District and circuit judges shall be appointed for a six years term. At the end of such term, they may be ratified or promoted, in such case, they may be dismissed only in the cases described by the Law and following the established procedure.

The Supreme Court of justice of the Nation can request the Federal Judicial Council to investigate the behavior of a federal judge or magistrate.

Paragraph has been repealed.

The Supreme Court of Justice shall have the power to appoint and remove its secretary, officials and employees. Magistrates and judges shall have the power to appoint and remove the officials and employees for the circuit courts and district courts, observing the regulation about the judicial career.

Every four years, the Supreme Court of Justice, in plenary meeting, shall appoint a president for the Supreme Court from among its members. The President of the Supreme Court cannot be reelected for the next immediate term.

Each minister of the Supreme Court of Justice, upon taking office, takes the following oath before the Senate:

President of the Senate: "Do you swear loyally and patriotically perform the position of Minister of the Supreme Court of Justice of the Nation, which has been conferred upon you and to observe and uphold the Political Constitution of the United Mexican States and the laws that emanate from it, pursuing the welfare and prosperity of the country?"

Minister: "Yes, I do."

President of the Senate: "if you do not fulfill these obligations, may the Nation demand it of you."

Circuit magistrates and district judges shall take the oath before the Supreme Court of Justice and the Federal Judicial Council.

Article 98. Whenever the absence of a minister exceeds one month, the President of the Republic shall submit a list of three candidates to the Senate in order to elect one interim minister according to that established in the Article 96 of this Constitution.

Should a minister be absent by cause of death or any other definitive cause, the President of the Republic shall submit a list of three candidates to the Senate in order to elect one according to that established in the Article 96 of this Constitution.

Resignation of a minister shall be accepted only due to serious offence. Resignation shall be submitted to the President of the Republic, who, if accepts it, shall in turn submit resignation to the Senate.

The leaves for the ministers that do not exceed one month can be granted by the Supreme Court of Justice. Those leaves exceeding such term, shall be granted by the President of the Republic with the Senate's approval. No leave may exceed a term of two years.

Article 99. The Electoral Court shall be the highest authority in this area and the specialized body of the Federal Judicial Branch, except by that established in the Article 105, paragraph II, of this Constitution.

The Electoral Court shall work on a permanent basis, it shall have a Superior Electoral Court and regional electoral courts. Resolving sessions of the Electoral Court shall be public in accordance with the Law. The Electoral Court shall have enough legal and administrative personnel for an appropriate performance.

The Superior Electoral Court shall be integrated by seven electoral magistrates, who shall appoint a president of the Electoral Court among them to hold the office for a period of four years.

The Electoral Court shall resolve the issues listed below, in a definitive and irrefutable manner, observing the provisions established by this Constitution and the applicable Law:

- I. Appeals of elections regarding deputies and senators.
- II. Contestation of election of the President of the Republic. Only the Superior Electoral Court can resolve such kind of contestations.

The Superior electoral Court and the regional electoral courts can annul an election only due to the causes expressly indicated in the Law.

The Superior Electoral Court shall carry out the final count of votes in the election of the President of the Republic, provided that contestations thereof have been resolved. Then, the Electoral Court shall declare the validity of the election and shall name the elected President, i.e., the candidate who has obtained the highest number of votes.

- III. Contestations of acts and resolutions issued by the federal electoral authority, different to those mentioned in the two previous paragraphs.
- IV. Contestations of final acts and resolutions issued by the state electoral authorities related to organization and assessment of elections; as well

as controversies arisen during the election process that could affect such election process or the results thereof. This procedure shall be admissible only when the remedy requested is physically and legally possible within the electoral terms, and provided that it is feasible to be implemented before the date legally established for set up of the electoral bodies or for inauguration of elected officials. V. Contestations regarding acts and resolutions that infringe political-electoral rights of citizens: right to vote, right to be elected, right to freely join a party, right to peaceful assembly, according to this Constitution and laws.

Contestations, filed by citizens against the political party they are affiliated, will be valid only if the plaintiff has exhausted all the instances provided by the party for solution of internal conflicts. The Law shall establish regulations and terms for this kind of contestations.

- V. Labor conflicts between the Electoral Court and its employees.
- VI. Labor conflicts between the Federal Electoral Institute and its employees.
- VII. Definition and imposition of sanctions by the Federal Electoral Institute on political parties, political associations, or private or legal entities, either national or foreign, who have infringe dispositions provided by this Constitution and the laws.
- IX. Other issues specified by the Law.

The courtrooms of the Electoral Court shall make use of the necessary coercive means in order to enforce their sentences and resolutions, in accordance with the terms established by Law.

Without prejudice to the Article 105 of this Constitution, the courtrooms of the Electoral Court can determine not to apply electoral laws which are contrary to this Constitution. Such kind of resolutions shall be limited to the concrete case in question. In such event, the Superior Electoral Court shall notify the Supreme Court of Justice of the Nation.

When a courtroom of the Electoral Court defends an argument on the unconstitutionality of an act or resolution, or on the interpretation of a constitutional provision, and such argument may be contradictory to the one sustained by the Supreme Court of Justice, then any of the ministers, courtrooms or parties can denounce the contradiction, according to the terms established by the Law. The Supreme Court of Justice of the Nation, in plenary meeting, shall decide definitely which argument shall prevail. Such kind of resolutions shall not affect the cases already decided.

This Constitution and the laws shall regulate the organization of the Electoral Court, the jurisdiction of the courtrooms, the procedures to decide the affairs, as well as the mechanisms to set mandatory legal precedents in this matter.

The Superior Electoral Court can bring cases from regional electoral courts at their request. Likewise, the Superior Electoral Court can submit cases to the regional

electoral courts for resolution. The Law shall establish regulations and procedures to exercise such kind of power.

In accordance with the terms provided by the Law, the administration, supervision and discipline of the Electoral Court shall pertain to a committee of the Federal Judicial Council, which shall be composed of: a) the president of the Electoral Court, who shall chair; b) a magistrate from the Superior Electoral Court, elected by secret vote; and c) three members of the Federal Judicial Council. The Electoral Court shall submit its proposal about its own budget to the president of the Supreme Court of Justice in order to be included in the budget of the federal judicial branch. The Electoral Court shall issue its own internal regulations and decrees it should require to operate adequately.

Magistrates composing the High Court and the regional courts of the Electoral Court shall be proposed by the Supreme Court of Justice and elected by the vote of the two-thirds of the senators present. Election of the magistrates shall be staggered, observing the rules and procedures established by Law.

Magistrates composing the High Court of the Electoral Court shall meet the requirements stated by the Law, which may not be less than those required to be a minister of the Supreme Court of Justice of the Nation. Magistrates shall hold the office for a term of nine years. This term cannot be extended. The magistrates of the High Court of the Electoral Court shall submit their resignations, leaves and permits to the High Court of the Electoral Court, which shall process and grant them, as applicable according to the Article 98 of this Constitution.

Magistrates composing the regional courts of the Electoral shall meet the requirements stated by the Law, which may not be less than those required to be a circuit magistrate. Regional magistrates shall hold the office for a term of nine years. This term cannot be extended, unless they got a promotion.

In case of a definitive vacancy, a new magistrate shall be appointed, who shall finish the term.

Labor relations between the Electoral Court and its employees shall be regulated by the rules applicable to the federal judicial branch and by the special laws and exceptions applicable to them.

Article 100. The Federal Judicial Council shall be a body belonging to the federal judicial branch and shall have technical and operational independence, it shall also be independent to issue its resolutions.

The Federal Judicial Council shall be composed of seven members: the president of the Supreme Court of Justice, who shall also be the chairman of the Council; three councilors appointed by the Supreme Court in plenary meeting, by at least eight votes; the candidates proposed by the Supreme Court shall be circuit magistrates or district judges; two councilors appointed by the Senate and one councilor appointed by the President of the Republic.

All councilor shall meet the requirements established in the Article 95 of this Constitution and shall be individuals who have distinguished themselves through professional and administrative capacity, honesty and honor in the conduct of their activities. In the case of the councilor appointed by the Supreme Court, they must also have a good professional reputation within the field of the judiciary.

The Federal Judicial Council shall work at plenary meeting or at committees. The plenary meeting of the Council shall decide on appointment, assignment, ratification and dismissal of magistrates and judges, as well as on other affairs defined by the Law.

Except by the chairman of the Council, the councilor shall hold the office for a period of five years, they shall be replaced in a staggered manner. Councilors cannot be appointed for a second period.

The councilors do not represent the institutions appointing them, therefore, they shall perform their duties in an independent and impartial manner. They may be dismissed only in accordance with the provisions established in the Title Four of this Constitution.

The Law shall create the basis to provide training and updating to the public officials, as well as to develop judicial career, which shall be governed by the principles of excellence, objectivity, impartiality, professionalism and independence.

The Federal Judicial Council shall have the power to make and execute general covenants in order to achieve an adequate performance of its duties. The Supreme Court of Justice can request the Council to make and execute those general covenants that are necessary to achieve an adequate performance of the federal duties. The Supreme Court of justice can also review such covenants and, if necessary, revoke them by a majority of at least eight votes. The Law shall regulate the exercise of these powers.

Federal Judicial Council's decisions are final and irrefutable, therefore, no trial or legal instrument is accepted against such decisions, except by decisions related to appointment, assignment, ratification and dismissal of magistrates and judges. Such kind of decisions can be reviewed by the Supreme Court of Justice only with the purpose to verify they have been taken according to the rules established in the applicable organic Law.

The Supreme Court of Justice shall propose its own budget, and the Federal Judicial Council shall propose the budget for the rest of the federal judicial branch, but complying with the provisions established in the Article 99, paragraph seventh, of this Constitution. These budgets shall be submitted by the President of the Supreme Court of Justice in order to include them into the Nation's federal budget. The President of the Supreme Court of Justice shall manage the Supreme Court's internal affairs.

Article 101. The ministers of the Supreme Court of Justice, the circuit magistrates, the district judges, their respective clerks, the councilors of the Federal Judicial Council and the magistrates of the High Court of the Electoral Court cannot accept or perform any other job or assignment, either in a private company or in the federal

or state government, or in the Federal District Government, except for those performed for free in scientific, educational, literary or charitable associations.

The ministers of the Supreme Court of Justice, the circuit magistrates, the district judges, the councilors of the Federal Judicial Council and the magistrates of the High Court of the Electoral Court, within the two years after finishing their respective term, shall not be allowed to work as attorneys, lawyers or legal representatives in any case before the agencies belonging to the federal judicial power.

During the same term, the former ministers cannot be appointed for such positions mentioned in the Article 95, paragraph VI of this Constitution, unless they have been provisional or interim ministers.

Impediments established in this article will apply also to the judicial officials who have leaves.

In the event of infringement of the provisions stated in the previous paragraphs, the offenders shall be punished with dismissal and loss of benefits, even benefits that could correspond to such position in the future, in addition to the other penalties established by Law.

Article 102. A.- The Law shall organize the Public Prosecution Service, which official shall be appointed and removed by the President of the Republic in accordance to the applicable Law. The Federal Public Prosecution Service shall be presided by the Attorney General, who shall be appointed by the President of the Republic and ratified by the Senate, or by the Permanent Committee during the Senate's recess. To become Attorney General it is required: to be a Mexican citizen by birth; to be at least 35 years old; to be a Law graduate for a minimum of 10 years; to have a good reputation; and not to have been convicted due to an intentional crime. The President of the Republic has the power to freely dismiss the Attorney General.

The Public Prosecution Service shall have the power to prosecute in court all the federal crimes and to request the arrest warrant against the accused. The Public Prosecution Service has the duty to procure and submit evidence to prove the defendant's liability, to make sure that trials are carried out with regularity so that justice may be provided in a prompt and clear manner, to request the imposition of penalties and to intervene in all matters determined by Law.

The Attorney General shall personally intervene in all the controversies and actions mentioned in the Article 105 of this Constitution.

The Attorney General shall participate, either by himself or through his agents, in all trials in which the Nation is a party, also in the legal affairs involving diplomats and consuls general, and in other cases under the jurisdiction of the Public Prosecution Service.

The Attorney General and the public prosecutors shall be liable for any faults, omissions or infringements they commit because of their duties.

The duty of legal counsel for Government shall be in charge of an agency under the President of the Republic.

B.- The Congress of the Union and the state legislatures shall provide, under their respective jurisdictions, agencies directed to protect the human rights which are recognized by the Mexican legal system. Such agencies shall receive all the complaints against administrative actions or omissions committed against human rights by any public employee, except for the officials working for the federal judicial branch.

These agencies shall issue public recommendations, which shall not be compulsory. They also shall file accusations and complaints with the appropriate authorities. All public servants are obliged to answer the recommendations issued by these agencies. When the authorities or public servants responsible do not accept or enforce these recommendations, they must substantiate such refusal and make it publish. In addition, the Senate, the Permanent Committee or the state congresses, as appropriate, may call, at the request of these agencies, the authorities or public servants responsible to appear and explain the reasons of such refusal.

These agencies shall not have jurisdiction over electoral and jurisdictional matters.

Such kind of agency, created by the Congress of the Union, shall be called National Human Rights Commission. It shall have managerial autonomy, legal status and its own wealth and budget.

The state constitutions and the Federal District Government Code shall establish and guarantee the autonomy of the agencies that protect the human rights.

The National Human Rights Commission shall have a Board of Advisors, which will be composed of ten councilors, who shall be elected by two-thirds of the members present at the Senate, or at the Permanent Committee during the congress recess. The Law shall establish the procedure to be followed by the Senate to nominate the candidates. Every year, the most senior councilors shall be replaced, unless they are proposed and ratified for a second term.

The President of the National Human Rights Commission shall be elected following the procedure established in the previous paragraph, he/she shall be also the chairman of the Board of Advisors. He/she shall hold office for a five years term and may be reelected once only. He/she may be dismissed only in the cases established in the Title Fourth of this Constitution.

The election of the President of the National Human Rights Commission, as well as the members of the Board of Advisors and the heads of the state human rights commissions, shall be subject to a referendum, which shall meet the requirements established by Law.

The President of the National Human Rights Commission shall submit an annual report to the three branches of the Union. For this purpose, he/she shall appear before both Chambers under the terms established by Law.

The National Human Rights Commission shall hear complaints against the resolutions, covenants and omissions made by the state human rights commissions.

The National Human Rights Commission can investigate serious violations of human rights, at the request of the President of the Republic, the Senate, the Chamber of Deputies, a governor, the Head of the Federal District Government, or a state congress.

Article 103. The federal courts shall resolve all disputes concerning:

- I. Laws or acts issued by the authority, or omissions committed by the authority, which infringe the fundamental rights recognized and protected by this Constitution and the international treaties signed by Mexico.
- II. Laws or acts issued by the federal government and which break or restrict the sovereignty of the Mexican states or the Federal District.
- III. Laws and acts issued by the state authorities or the Federal District Government, which invade the federal authority's jurisdiction.

Article 104. The federal courts shall have jurisdiction over:

- I. Proceedings relating to federal crimes.
- II. Any civil or mercantile controversy arisen about the observance and enforcement of federal laws or international treaties signed by Mexico. The plaintiff can file such kind of controversy with an ordinary court when the controversy affects only private interests. Sentences pronounced by a trial court may be challenged with the appropriate appellate court.
- III. Review resources filed against final rulings pronounced by the contentious-administrative courts mentioned in the article 73, paragraph XX-IX-H and in the Article 122, section IV, subdivision (e), of this Constitution, but only in the cases indicated by the Law. Review resources that are to be heard by the specialized circuit courts shall be subject to the formalities established by the statutory Law of the articles 103 and 107 of this Constitution. No trial or legal instrument shall be admissible against the rulings pronounced by the specialized circuit courts on such review resources.
- IV. Any controversy relating to maritime Law.
- V. Any controversy where the Federal Government is an interested party.
- VI. Any controversy or action mentioned in the Article 105, which can be resolved exclusively by the Supreme Court of Justice.
- VII. All disputes between a Mexican state and one or more inhabitants of another state.
- VIII. All controversies regarding diplomats and consuls.

Article 105. The Supreme Court of Justice of the Nation shall resolve the cases related to the following topics, in accordance with the provisions established by the applicable statutory Law:

- I. About constitutional disputes, except for those referring to electoral matters, between:
 - a) The Federal Government and one state or the Federal District.

- b) The Federal Government and one local authority.
- c) The President of the Republic and the Congress of the Union; the President of the Republic and any of the Houses; or the President of the Republic and the Permanent Committee, acting as federal bodies or as Federal District's bodies.
- d) Two states.
- e) A state and the Federal District.
- f) The Federal District and a local council.
- g) Two local councils belonging to different states.
- h) Two powers belonging to the same state about the constitutionality of their acts or regulations.
- i) A state and one of its local councils, about the constitutionality of their acts or regulations.
- j) A state and a local council belonging to another state, about the constitutionality of their acts or regulations.
- k) Two agencies belonging to the Federal District Government, about the constitutionality of their acts or regulations.

The rulings taken by the Supreme Court of Justice, by a majority of eight vote, invalidating general provisions, shall have general compulsory effect; provided that the respective controversy is generated by the general provisions issued by a state or local council, and which are challenged by the Federal Government; or by the general provisions issued by a local council and which has been challenged by the state; or in the cases indicated in paragraphs "c", "h" and "k".

In all other cases, the rulings pronounced by the Supreme Court of Justice shall have effect only on the particular case in question.

II. Unconstitutionality lawsuits directed to raise a contradiction between a general regulation and this constitution.

Unconstitutionality lawsuits shall be initiated within the 30 days after publication of the regulation, they shall be initiated by:

- a) The 33% of the members of the Chamber of Deputies against federal laws or laws enacted by the Congress and applicable to Federal District.
- b) The 33% of the members of the Senate against federal laws or laws enacted by the Congress and applicable to Federal District, or against international treaties signed by the Mexican State.
- c) The Attorney General, against federal and state laws, or laws applicable to the Federal District, or against international treaties signed by the Mexican State.
- d) The 33% of the members of a state legislature, against laws enacted by such state legislature.

e) The 33% of the members of the Federal District's Assembly of Representatives, against laws enacted by the Assembly.

f) The political parties duly registered before the Federal Electoral Institute, through their national leaders and against federal or local electoral laws; also, the state parties, through their leaders, only against laws enacted by the state legislature that granted them registration.

g) The National Human Rights Commission, against federal or state laws, against laws enacted by the Federal District Government, against international treaties signed by the President of the Republic and approved by the Senate, which break human rights established in this Constitution. Also, unconstitutionality lawsuits can be initiated by: a) the state human rights agencies, against laws issued by the state legislature; and b) the Human Rights Commission of the Federal District against laws issued by the Federal District's Assembly of Representatives.

The only legal instrument to appeal the unconstitutionality of an electoral Law is the one provided in this article.

Federal and local electoral laws shall be enacted and published at least 90 days before the electoral process begins. During an electoral process, essential amendments cannot be carried out.

The rulings of the Supreme Court of Justice can invalidate the regulations that have been challenged only if such rulings have been approved by a majority of eight votes.

III. By its own motion, or by motion justified and submitted by the corresponding unitary circuit court or by the Attorney General, the Supreme Court of Justice can hear appeals against sentences pronounced by district judges, provided that the Federal Government is an interested party in the case and such case is transcendental.

Invalidations mentioned in the sections I and II of this article shall not have retroactive effect, except by criminal matter, where criminal general principles and legal provisions shall govern.

In case of failure to comply with the rulings mentioned in the sections I and II of this article, the procedures established in the Article 107, first two paragraphs of the section XVI, of this Constitution shall be applied.

Article 106. The Judicial Branch shall resolve the controversies that could arise between two federal courts related to their jurisdictions, or between a federal court and a state court, or between a federal court and a Federal District's court, or between two courts belonging to different states, or between a state court and a Federal District's Court.

Article 107. All controversies mentioned in the article 103 of this Constitution, except for electoral controversies, shall follow the legal procedures and formalities established by the statutory Law, according to the following principles:

- I. The constitutional adjudication (appeal on the grounds of unconstitutionality) shall be carried out at the request of the offended party. The offended party is the holder of an individual or collective right, which has been violated by the challenged act, affecting his/her legal framework, either directly or by the means of his/her special situation before the legal system.

Regarding acts or rulings pronounced by administrative or labor courts, the plaintiff must argue that he/she holds a subjective right that has been directly and personally affected.

- II. The sentence pronounced in a constitutional adjudication shall cover only to the plaintiffs, protecting them only in the specific case concerned in the complaint.

If a court rules unconstitutionality of a general provision for a second consecutive time in constitutional adjudications, the Supreme Court of Justice of the Nation must notify the authority which enacted such provision.

When the bodies belonging to the Federal Judicial Branch establish legal precedents by repetition, ordering unconstitutionality of a general provision, the Supreme Court of Justice of the Nation shall notify the authority which enacted such provision. If after 90 days the unconstitutionality is not overcome, the Supreme Court of Justice of the Nation shall issue a declaration of unconstitutionality, indicating its scope and conditions, according to the statutory Law. Such declaration must be approved by a majority of 8 votes.

The previous two paragraphs do not apply to general provisions which regulate taxes.

In a constitutional adjudication, any deficiency regarding the terms “violation” and “grievances” should be corrected by the court, according to that established in the statutory Law.

Whenever the acts claimed in the constitutional adjudication deprive or may deprive the farming cooperatives or communities or their members of their lands, waters, pasture and mountains, all evidence that could benefit any of the aforesaid entities or individuals must be obtained at the court’s own motion, and any proceedings that could be necessary to prove their rights must be ordered. Also, the nature and consequences of the claimed acts shall be defined.

In the constitutional adjudication mentioned in the preceding paragraph, dismissal of the suit because of procedural inactivity or by

discontinuance shall not be admissible to the detriment of farming co-operatives or indigenous communities, or to the detriment of a native or joint-title farmer. However, this kind of proceedings shall be admissible to their benefit. Waiving or express consent shall not be accepted when the claimed acts affect the community's rights, unless waiving or express consent are agreed by the General Assembly of the farming cooperative.

III. The constitutional adjudication against rulings pronounced by judicial, administrative or labor courts shall be admissible only in the following cases:

a) Against final rulings, binding judgments or resolutions that end the trial, no matter if infringement is committed by such rulings, binding judgments or resolutions, or during the proceeding affecting the plaintiff's defense and the verdict. Regarding the constitutional adjudication mentioned in this subdivision and in the section V of this article, the specialized circuit court shall decide on all infringements to the proceedings and the corrections to the brief, establishing the terms for the new ruling. If such violations were not reported in the first constitutional adjudication, and the specialized court did not decide on the subject, then they cannot be invoked in a second constitutional adjudication.

The party who has obtained a favorable ruling, as well the party who has legal interest that the act in question persists, can file a constitutional adjudication in addition to the one filed by any of the parties involved in the trial that generated the challenged act. The Law shall determine the procedure and requirements to file such trial.

For the constitutional adjudication admissibility, first the plaintiff must exhaust the ordinary instruments provided by the applicable Law, which may be suitable to modify or revoke the final sentence, binding judgment or ruling, except for the cases when the Law allows plaintiff to waive such resources.

Violations to the procedural Law should be invoked when challenging the final rulings, binding judgments or resolutions that end the trial, provided that the plaintiff has challenged them through the ordinary instruments. However, this requirement does not apply to the constitutional adjudication filed against acts which affect the rights of minors or disabled persons, or affect the marital status or the family's order and stability, or the criminal acts filed by the defendant.

b) Against acts during a trial which enforcement would render them impossible to retribute, provided that all applicable appeals have been exhausted.

c) Against acts affecting persons who are not involved in the trial.

- IV. Regarding the administrative matter, the constitutional adjudication is accepted also against rulings pronounced by other authorities, different to the judicial, administrative and labor courts, which caused irreparable offence. It is necessary to exhaust these means of impugment, provided that the effects of such acts have been suspended by the court or by the plaintiff through the appropriate legal instrument. In this case, the constitutional adjudication shall have the same scope than the one indicated by the statutory Law, and the requirements will be the same as required to grant the final suspension. Also, the term shall not be greater than the one established for provisional suspension, regardless of whether the act may be suspended or not, according to the Law.

It is not necessary to exhaust such means of impugment when the challenged act has no grounds, or when only direct violations to this Constitution are argued.

- V. The constitutional adjudication against final sentences, binding judgments or rulings that end the trial, shall be filed with the competent specialized circuit court, according to the Law, in the following cases:

a) Relating to criminal matter, against final rulings pronounced by federal, ordinary or military courts.

b) Relating to administrative matter, when private persons challenge final sentences or rulings pronounced by administrative or judicial courts, provided that such sentences or rulings are not repairable through a legal instrument, trial or any other ordinary means.

c) Relating to civil matter, against final sentences pronounced in federal trials, or in federal or local mercantile trials, or in trials for common crimes.

In federal civil cases, sentences may be challenged through the constitutional adjudication by any of the interested parties, even the Federal Government, in defense of its pecuniary interests.

d) Relating to labor issues, when the constitutional adjudication challenges binding judgments pronounced by a federal or local Commission for Conciliation and Arbitration, or by the Federal Court of Conciliation and Arbitration for public employees.

The Supreme Court of Justice may hear direct constitutional adjudications that are important or transcendental, by its own motion or by motion justified and submitted by a specialized circuit court or by the Attorney General.

- VI. The Statutory Law shall indicate the procedure and conditions to be met by the specialized circuit courts and the Supreme Court in order to pronounce a ruling relating to section V of this Article.

- VII. The constitutional adjudication against acts or omissions committed during a trial, in the trial context or after that the trial, or against acts that affect persons who are not involved in the trial, or against general laws or administrative authority's acts or omissions, shall be lodged before the district judge having jurisdiction over the place where the harmful actions have been committed or have been tried to be committed. The procedure for such constitutional adjudication is as follows: 1) authority's report, 2) a hearing, 3) receipt of evidence provided by the interested parties, and 4) argument hearing. The sentence shall be pronounced in the hearing.
- VIII. The sentences pronounced as a result of a constitutional adjudication by a district judge or a unitary circuit court may be reviewed. Such review shall be lodged before the Supreme Court of Justice:
- a) In the event that the unconstitutionality still remains after the constitutional adjudication filed against general provisions.
 - b) In the cases mentioned in the Article 103, sections II and III, of this Constitution.
- The Supreme Court of Justice may hear the constitutional adjudications that are important or transcendental, by its own motion or by motion justified and submitted by a specialized circuit court or by the Attorney General.
- In all other cases, reviews shall be lodged before a specialized circuit court, which sentence shall be final and shall not admit any further review.
- IX. Regarding the direct constitutional adjudication, the review resource is appropriate to challenge the sentences concerning the unconstitutionality of general provisions, or make a direct interpretation of a constitutional provision, or failed to rule on these issues, provided that the Supreme Court of Justice considers that such rulings create an important and transcendent criterion. In the constitutional adjudication, only the constitutional issues shall be analyzed.
- X. Claimed acts may be suspended in the cases and under the terms established by Law. For this purpose, the judge shall take into account the correct Law and the public interest.
- Regarding criminal matter, such suspension shall be applied while notifying the constitutional adjudication lodged. Regarding civil, mercantile and administrative matters, such suspension shall be applied when the plaintiff pays a bail, which shall be used to pay for the damages caused by the suspension to a third party. Such suspension shall be void if the other party pays an indemnity bond in order to assure reinstallment of the situation as if the constitutional adjudication has been granted.
- XI. The direct constitutional adjudication shall be lodged before the authority responsible, which shall rule on the suspension. In other cases, sus-

pension shall be filed with the district court or the unitary circuit court, which shall rule on suspension, or with the state courts where allowed by Law.

- XII. Appeals against violations to the constitutional rights provided under articles 16, related to criminal matter, 19 and 20, shall be filed with the superior court standing directly above the court that committed the infringement, or with the appropriate district judge or unitary circuit court. The rulings pronounced hereby may be reviewed according to the provisions established in the paragraph VIII of this article.

In the event that the district judge or unitary circuit court does not reside in the same place than the authority responsible, then the Law shall define the appropriate judge or court to lodge the constitutional adjudication. Such judge or court can suspend temporarily the challenged act in accordance with the Law.

- XIII. In the event that specialized courts of the same circuit defend contradictory criteria regarding constitutional adjudication under their jurisdiction, then the Attorney General, the specialized circuit courts, their members, the district judges or the parties can report this contradiction to the appropriate circuit court, which shall decide which argument shall prevail as legal precedent.

In the event that circuit courts belonging to different circuits, or the specialized circuit courts belonging to the same circuit, or the circuit courts of the same circuit with different specialization defend contradictory criteria, then the ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation, the circuit courts or the bodies mentioned in the previous paragraph can report this contradiction to the Supreme Court of Justice, so that the Plenary Meeting or the respective courtroom decides which argument shall prevail.

In the event that the courtrooms belonging to the Supreme Court of the Nation defend contradictory criteria in the constitutional adjudications under their jurisdiction, then the ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation, the specialized circuit courts, their members, the district judges, the Attorney General or the parties can report this contradiction to the Supreme Court of Justice, so that the Plenary Meeting or the respective courtroom decides which argument shall prevail.

Rulings pronounced by the Plenary Meeting of the Supreme Court of Justice or by one of its courtrooms, or by the circuit courts according to the previous paragraphs, shall only establish jurisprudence. They shall not affect the specific legal situations derived from the sentences pronounced in the trials where contradictory legal precedents arose.

- XIV. Repealed

- XV. The Attorney General, or the federal public prosecutor appointed by him/her, shall be an interested party in all constitutional adjudications. However, they can abstain from intervening when they consider that the case has not public interest.
- XVI. If the authority responsible fails to enforce the sentence pronounced in the constitutional adjudication, but such failure is justified, then the Supreme Court of Justice of the Nation shall grant the authority responsible a reasonable term to enforce the sentence, according to the procedure provided by the Law. This term may be extended at the request of the authority responsible. If failure to observe the sentence is not justified, or the term has expired, then the Supreme Court of Justice shall separate the head of the authority responsible from office and bring him/her to trial before the appropriate district judge. This will apply also to the superior of the authority responsible if he/she is liable, as well as to the previous heads of the authority responsible, if they failed to enforce the sentence.
- If, after that the constitutional adjudication has been granted, the act in question is repeated, the Supreme Court of Justice shall separate the head of the authority responsible from office, according to the procedure established by Law, notifying the Federal Public Prosecution Service, unless the authority responsible acted with no premeditation and cancels the act in question before the Supreme Court of Justice pronounces the respective ruling.
- The Supreme Court of Justice can replace the sentence pronounced in a constitutional adjudication, by its own motion or at the request of plaintiff, when the execution of such sentence affects seriously the society or third parties, more than the benefits granted to the plaintiff, or when it is impossible or excessively expensive restore the previous situation. Then, the sentence should be exchanged by an economic compensation to the plaintiff. For this purpose, the parties shall sign a covenant before the Supreme Court of Justice.
- The constitutional adjudication cannot be filed until the sentence is enforced.
- XVII. The responsible authority shall be prosecuted before the appropriate authority if it fails to suspend the challenged act having the duty to do so, as well as if it accepts a false or inadequate bail.
- XVIII. Repealed.

TITLE FOUR

Public servants' accountabilities

Article 108. For the purposes of this Title, public servants or civil servants are the representatives elected by popular vote, the members of the Federal Judicial Branch, the members of the Judicial Branch of the Federal District, the officials, the public employees and, in general, any person who holds any position or assignment in the Congress of the Union, in the Federal District's Assembly of Representatives, in the federal government or in the Federal District Government. Public servants are also the persons who work in the autonomous bodies created by this Constitution. Public servants are accountable for the acts or omissions they commit in the performance of their duties.

The President of the Republic, during his term in office, may be impeached only for treason or serious common crimes.

Governors, Deputies of the state Chambers, magistrates of the state Supreme Courts and members of the local Judicial Councils shall be liable for infringements of this Constitution and federal laws, as well as for mishandling federal funds and resources.

The constitutions of the states shall call public servant every person that performs a job, position or assignment in the state government or in a local council, and shall define his accountabilities.

Article 109. The Congress of the Union and the state legislatures shall issue, within their jurisdiction, the laws and penalties applicable to the public servants, and shall define their liabilities according to the following provisions.

- I. The public servants mentioned in the Article 110 can be impeached and punished when they commit acts or omissions that affect fundamental public interests or their defense.

Impeachment due to expression of ideas is not accepted.
- II. Perpetration of crimes by any public servant shall be prosecuted and punished according to the criminal Law.
- III. Administrative penalties shall be imposed to the public servants who commit acts or omissions affecting their legality, honesty, loyalty, impartiality and efficiency while performing their duties.

Procedures to impose the penalties shall be carried out independently. Penalties of the same nature may not be imposed twice for the same act.

The Law shall define the cases and circumstances under which a civil servant can be punished with imprisonment due to illicit enrichment. A public servant commits the criminal offense of illicit enrichment when, during his term, his assets significantly increase in a manner that cannot reasonably be explained in relation to his lawful income, either the public servant perpetrates the offense by himself or through an intermediary. The applicable penalty established by the criminal Law for the criminal

offense of illicit enrichment is confiscation and loss of properties, plus the other applicable penalties.

Any citizen can lodge an accusation related to illicit enrichment before the Chamber of Deputies. Such citizen must provide the necessary evidence.

Article 110. The following civil servants may be impeached: senators, deputies, ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation, councilors of the Federal Judicial Council, secretaries of state, members of the Federal District's Assembly of Representatives, the Head of the Federal District Government, the Attorney General of the Nation, the Attorney General of the Federal District, the circuit magistrates, district judges, magistrates and judges of ordinary courts, councilors of the Federal District's Judicial Council, the President Councilor, the electoral councilors, the Executive Secretary of the Federal Electoral Institute, magistrates of the Electoral Court and general managers of the decentralized agencies, semipublic companies, associations assimilated by semipublic companies and public trusts.

Governors, state deputies, magistrates of the state Superior Courts and the members of the state Judicial Councils may be impeached only because of serious infringement of this Constitution and the federal laws derived from it, mishandling federal funds and resources. However, the ruling shall be only declarative and shall be notified to the state legislature in order to implement the pertinent proceeding.

Penalties shall be removal from office and disqualification to perform any public function, job, position or assignment.

The procedure shall be as follows: the Chamber of Deputies shall substantiate the case, shall hear the accused, the absolute majority of the members of the Chamber shall declare the impeachment, the Chamber of Deputies shall submit the impeachment to the Senate.

Then, the Senate shall carry out the necessary proceedings and shall hear the accused. The Senate then shall become jury and shall impose the appropriate penalty by the vote of the two-thirds of the members present.

Rulings pronounced by the Chamber of Deputies and the Senate are irrefutable.

Article 111. In order to indict the senators, deputies, ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation, magistrates of the Supreme Court of the Electoral Court, councilors of the Federal Judicial Council, secretaries of state, members of the Federal District's Assembly of Representatives, the Head of the Federal District Government, the Attorney General of the Nation, the Attorney General of the Federal District, the President Councilor and the electoral councilors for perpetration of crimes during their terms, the Chamber of Deputies shall declare, by absolute majority, whether there are grounds to proceed against the accused.

A negative declaration by the Chamber of Deputies shall suspend any further procedure. However, such a suspension shall not resolve the indictment in a definitive way. Once the accused finish his term in office, he can be put on criminal trial if the charges remain.

If the Chamber of Deputies declares the indictment, the individual shall be turned over the respective authorities, which shall proceed according to the Law.

The President of the Republic may be charged only before the Senate and according to the provisions established by the *Article 110*. The senate shall resolve the case observing the applicable criminal Law.

In order to indict governors, state deputies, magistrates of the state Superior Courts and the members of the state Judicial Councils for federal crimes, the procedure established in this article shall be followed. However, the ruling shall be only declarative and shall be notified to the state legislature in order to implement the pertinent proceedings.

Rulings pronounced by the Chamber of Deputies and the Senate are irrefutable.

Penalties shall be removal from office while the accused is on trial. In the event of acquittal, the accused can resume duties. In the event of guilty verdict, pardon may not be granted to the accused, provided that the crime was perpetrated during his term.

Related to lawsuits on civil matter against any public servant, it is not necessary that the Congress declares the properness of the proceedings.

Prison sentences shall be applied according to that established in the criminal Law. In the case of crimes where the perpetrator obtains economic benefit or cause damage or loss to property, prison sentence shall be proportional to the profit obtained by the accused and to the damages and losses caused by his unlawful conduct.

Economic penalties cannot exceed three times the amount of gains obtained or the damages or losses caused.

Article 112. It is not necessary that the Chamber of Deputies declares the properness of the proceedings when any public servant, mentioned in the first paragraph of the *Article 111*, perpetrate a crime when he is not holding office.

However, if the public servant resumes duties or has been appointed or elected for a new position, which is mentioned in the *Article 111*, he shall be indicted according to such article.

Article 113. The laws on administrative liabilities shall define public servants' duties in order to specify their legal obligation to perform their functions, jobs, positions or assignments in a legal, honest, loyal, impartial and efficient way. Such laws shall also specify the punishments applicable to offenders, as well as the procedures to be followed and the authorities who shall apply such penalties. Penalties may include, in addition to those established by Law: suspension, removal from office, disqualification and economic penalties. Economic penalties shall be proportional to the profits obtained by the offender and to the damages and losses caused by his acts or omissions according to the *Article 109*, paragraph III. Economic penalties may not exceed three times the gain obtained by the offender.

The State shall have direct and objective liability regarding the damages caused by its irregular administrative activities on the properties or rights of private persons.

Private persons shall be entitled to an indemnification according to the bases, limitations and procedures established by Law.

Article 114. Impeachment against a public servant can be initiated only during the period of time he is holding office and within the first year after such term. Punishments shall be applied within the first year after that proceedings have initiated.

Crimes perpetrated by a public servant during the period of time he is holding the office shall be punished according to the statutes of limitations provided by the criminal Law. Such terms shall never be shorter than three years. Statute of limitations shall be interrupted while the public servant holds any of the offices listed in the Article III.

The Law shall establish the cases where the statute of limitations shall be applied to administrative liability, taking into account the nature and consequences of the acts or omissions mentioned in the Article 109, paragraph III. Statute of limitations shall never be shorter than three years for serious offenses.

TITLE FIVE

Mexican states and the Federal District

Article 115. The states comprising the United Mexican States shall adopt a republican, representative and popular form of government. The states shall be divided into municipalities, which shall be the basis of the political and administrative organization according to the following criteria:

- I. Each municipality shall be governed by a City Council, which shall be composed of a mayor and the number of councilors and community representatives established by Law, who shall be elected by direct vote. The City Council shall exercise the powers granted by this Constitution to the local governments. There is no intermediate authority between the City Council and the state government.

Mayors, councilors and community representatives may not be re-elected for the immediate next term. Persons who, through indirect election or appointment, perform duties corresponding to said offices, no matter the position name, may not be elected for the immediate next term. The incumbent mayors, councilors and community representatives may not be elected as substitutes for the immediate next term. However, the substitutes may be elected as incumbents for the immediate next period, unless they have performed the duties of the office.

State legislatures, by resolution of the two-thirds of their members, can suspend a City Council, eliminate it or suspend or revoke the powers of any of its members due to a serious cause mentioned by Law, provided that the members of the City Council have had sufficient opportunity to submit evidence and provide arguments.

Substitutes shall be appointed to the vacant positions, unless otherwise ordered by Law.

In the event that the state legislature eliminates a City Council, or in the event of resignation or absolute absence of the majority of its members, when the Law does not allow the substitutes to finish the term nor to call elections, the state legislature shall appoint some inhabitants to make up a city board, which shall finish the term. The Law shall establish the number of members for such city board. The members of the city board shall meet the same requirements than the councilors.

- II. Municipalities shall be vested with legal status and shall manage their own assets in accordance with the Law.

The state legislatures shall enact laws to empower City Councils to approve judicial edicts, government ordinances, regulations, notifications and administrative orders within their respective jurisdictions. The state legislatures shall empower the City Councils also to organize local government, to regulate public procedures, functions, affairs and services and to encourage citizen participation.

The purpose of such laws shall be to define:

a) The general basis of the local public administration and the administrative procedures, including legal remedies and the bodies that shall resolve the controversies that could arise between the local government and private individuals, observing the principles of equality before the Law, open trial, hearing and legality.

b) The cases where the consent of the two-thirds of the City Council members is required to pronounce rulings affecting the City Council's assets, or to make and execute agreements or acts for a period longer than the term of the City Council in question.

c) The norms to be applied to the agreements mentioned in the paragraphs III and IV of this article and in the second paragraph of the Article 116 of this Constitution.

d) The procedure to be followed by the state government in order to take charge of a local function or service because of the lack of a service provision agreement. In this case, it shall be necessary a previous request from the City Council in question, approved by at least the two-thirds of its members.

e) The provisions to be applied in those municipalities where there are not ordinances.

State legislatures shall establish the procedures to be followed in order to resolve conflicts that may arise between the City Councils and the state government, or between two or more City Councils, caused by the acts mentioned in the previous paragraphs "c" and "d".

III. City Councils shall be in charge of the following functions and public services:

- a) Drinking water, drainage, sewerage system, treatment and disposal of sewage.
- b) Street lighting.
- c) Garbage cleaning, collection, transport, treatment and final disposal.
- d) Municipal markets and wholesale markets.
- e) Cemeteries.
- f) Slaughterhouse.
- g) Streets, parks and gardens, as well as their equipment.
- h) Public security, according to the provisions established by the Article 21 of this Constitution, as well as the local police.
- i) Other affairs determined by the state legislature, depending on the territorial, social and economic conditions of the municipality and on the administrative and financial resources of the City Council.

The City Councils shall observe the federal and state laws, provided that they do not affect their functions or public service provision.

Two or more City Councils can coordinate their activities and collaborate to improve public services and their functions. For this purpose, the approval of the state legislature is necessary. When two or more City Councils belonging to different states want to collaborate, the approval of their respective state legislature is necessary. Likewise, a City Council and the respective state can make and execute agreements to authorize the state to temporarily take charge of one or some public services, directly or through the appropriate body. The City Council and the respective state can also agree to provide public services in a coordinated manner.

Indigenous communities belonging to the same municipality can also coordinate their activities and collaborate according to the Law and for the purposes indicated thereof.

IV. City Councils shall freely manage their properties and assets, which shall be composed of the yields generated by their properties, as well as of the taxes and other revenues authorized by the state legislatures. City Council's assets shall include:

- a) Property tax and taxes on breaking up, division, consolidation, improvement and transfer of property, as well as any others that result from a change in the value of real estate.

City Councils can make and execute agreements with the state to authorize the state government to take charge of some functions regarding to management of local taxes.

b) Federal contributions authorized annually by the state legislature, specifying conditions, amounts and terms.

c) Revenue generated by provision of public services.

Federal laws shall not restrict the power of the state legislatures to fix the taxes and prices of the public services mentioned in the previous paragraphs “a” and “c”. Federal laws shall not grant tax exemptions thereof. State laws shall not grant tax exemptions or allowances to the benefit of any person or institution. Only the properties belonging to the federal, state and local governments shall be exempt from taxes, provided that they are not used by semipublic or private entities for purposes different to those defined as public purpose.

City Councils shall submit to the state legislature their proposal for tolls, charges, rates, taxes and the table of property value, which serve as basis to fix the property tax.

State legislatures shall approve the revenue Law for the City Councils, and shall review their public accounts. The expense budget shall be approved by the City Council, based on the available revenue. The expense budget shall include detail information about the salaries of the local public servants, according to that established in the Article 127 of this Constitution.

The resources constituting the municipal treasury shall be applied directly by the City Council or by whoever it authorizes, according to the Law.

V. In accordance with the terms provided by the applicable federal and state laws, the City Councils shall have power to:

a) Plan, approve and manage urbanization and urban development.

b) Participate in the creation and administration of its own territorial reserves.

c) Participate in regional development planning. Federal and state governments shall invite City Councils to participate in regional development planning.

d) Authorize, control and supervise land use within their territory and jurisdiction.

e) Intervene in regularization of urban land tenure.

f) Grant construction permits.

g) Participate in creation and administration of nature reserves and in development and application of rules on this topic.

h) Intervene in development and implementation of public transportation programs, provided that such programs affect the City Council's territory.

i) Make and execute agreements to manage and protect federal zones.

The City Councils shall have power to issue administrative regulations and provisions necessary for the performance of their duties, where applicable and according to the purposes established in the third paragraph of the Article 27 of this Constitution.

VI. When two or more shanty towns located in two or more different municipalities or states tend to form one single urban settlement, then the federal, state and local governments involved shall collaborate to plan and regulate the development of such urban settlement, observing the applicable federal Law.

VII. Local police shall be under the Mayor's command, according to the terms established by the State Public Security Act. Local police shall obey the orders given by the Governor in case of force majeure or serious disturbances of public order.

The President of the Republic shall have command of public force in the place where he resides regularly or temporarily.

VIII. State laws shall introduce the principle of proportional representation in the election of the City Council members. Labor relations between the City Council and its employees shall be guided by the applicable state laws, in accordance with the Article 123 of this Constitution and its statutory provisions.

IX. Repealed.

X. Repealed.

Article 116. Public power of a state shall be divided into three branches: executive, legislative and judicial. Two or more of these powers cannot be united in one single person or corporation, nor shall the legislative branch be vested in one single person.

Public powers of a state shall be subjected to the state constitution, according to the following provisions:

I. Governors shall hold the office during a term of six years.

Governors and state deputies shall be elected by direct vote in accordance with that established in the applicable electoral Law.

The incumbent governors cannot be elected for a second period, even as interim, provisional, substitute or secretary in a state department.

The following public servants may never be elected for the subsequent term:

a) The substitute of a governor or the person appointed to finish the term due to the absolute absence of the incumbent governor, even if the position has a different name.

b) The interim governor, the provisional governor or the person appointed to substitute the governor during temporary absences, which take place during the last two years of the governor's term.

To become governor, a person shall: a) be a Mexican citizen by birth, b) be a native of the respective state or live in such state for no less than five years immediately before the day of the election, and c) be at least 30 years old the day of the election. The state constitution can establish a younger age for the governor.

- II. The quantity of representatives in the state congress shall be proportional to the number of inhabitants. The minimum quantity of representatives shall be seven, even if the state has a population of less than 400 000 inhabitants. The states with a population between 400 000 and 800 000 inhabitants, shall have nine representatives. The states having a population of more than 800 000 inhabitants shall have a minimum of 11 representatives.

State deputies may not be elected for the subsequent term. Substitute deputies may be elected for the subsequent term as incumbents, provided that they did not hold the office. However, incumbent deputies may not be elected for the subsequent term as substitutes.

State deputies shall be elected according to the principle of majority voting and the principle of proportional representation, observing the conditions established by the state laws.

The state legislature shall approve the annual expense budget. Salaries for the public servants shall be subjected to the provisions established in the Article 127 of this Constitution.

The state legislative, executive and judicial branches, as well as the autonomous entities recognized by the state constitution, shall include detailed information about salaries for their employees in their proposals for the expense budget. These proposals shall follow the procedures provided by the state constitution and the applicable state laws.

State legislatures shall have an Auditing Office, which shall have autonomy regarding technical and managerial matters, as well as regarding its internal organization, functioning and decisions, according to the Law. Auditing function shall be exercised according to the principles of posterity, annuity, legality, impartiality and reliability.

The head of the state Auditing Office shall be appointed by the two-thirds of the members present in the Chamber of Deputies of the state. The head of the state Auditing Office is appointed to serve for a period no less than seven years. He must have five years experience in matters of control, financial auditing and liabilities.

The State Legislature will regulate the terms for the citizens to submit federal bills before the respective Congress.

III. State judicial power shall be exercised by the courts established by the state constitution.

Independence of magistrates and judges in the performance of their duties must be guaranteed by the state constitution and the state organic laws, which shall establish the requirements for admission, training and staying to be complied by the employees of the state judicial branch.

Local magistrates shall meet the requirements established in sections I to V of the Article 95 of this Constitution. Persons that have held the office of Secretary or equivalent in a state department, of the state Attorney General or state Deputy during the year immediate previous to the day of appointment, may not be magistrates.

Magistrates and judges shall preferably be persons who have served efficiently and honestly in the judiciary, or who deserve the position because of their honorability, abilities and judicial career.

Magistrates shall hold the office during the period of time specified in the local constitution, they may be reelected, they may be removed from office only according to the state constitution and to the Public Service Accountability Act of the state.

Magistrates and judges shall receive an adequate remuneration, which is non-negotiable and may not be reduced.

IV. State constitutions and state electoral laws shall guarantee that:

a) Elections of governors, members of the local legislatures and members of the City Councils are carried out through the universal, free, secret and direct suffrage, and that the elections take place the first Sunday of July of the respective year. This provision shall not be applicable to the states where elections take place the same year than federal elections, but not the same day.

b) The principles of certainty, impartiality, independence, legality and objectivity govern the work of the electoral authorities.

c) The authorities in charge of organizing elections and the authorities that resolve electoral disputes are autonomous in the exercise of their functions and are independent while making decisions.

d) The administrative electoral authority has the power to make and execute an agreement with the Federal Electoral Institute, so that this entity organizes local elections.

e) Political parties are composed only of citizens, without intervention of labor-unions or other organizations, and that political parties are not affiliated to a corporation. State constitutions and state electoral laws shall also guarantee that the political parties have the right to register can-

didates, except by that established in the Article 2, section A, paragraphs III and VII, of this Constitution.

f) Electoral authorities shall intervene in the internal affairs of the parties only according to the provisions established by the electoral laws.

g) Political parties receive public funding, in a fair manner, for their permanent ordinary activities and electoral activities. State constitutions and state electoral laws shall also establish procedures to settle political parties that lose registration and shall decide over their properties and balances.

h) State constitutions and state electoral laws shall define restrictions to the expenditures made by the political parties during run-up and campaigns, as well as to the contributions made by sympathizers. The total amount of such contributions must not exceed 10% of the expenditure permitted by Law for campaigns for governors. State constitutions and state electoral laws shall also establish procedures to control and supervise the origin and use of the political parties' resources, and shall define the penalties applicable to offenders.

i) The political parties have access to airtime in radio and television, according to the rules established in the Article 41, section III, paragraph B, of this Constitution.

j) State constitutions and state electoral laws shall regulate run-up and electoral campaigns and shall establish the appropriate penalties to offenders. Campaigns for governors shall last no longer than 90 days, campaigns for state deputies and members of the City Council shall last no longer than 60 days. Run-up shall last no longer than two-thirds of the campaign term.

k) Compulsory basis are established in order to coordinate financial inspection of political parties between the Federal Electoral Institute and the electoral authorities, according to the provisions established in the two last paragraphs of the section V of the Article 41 of this Constitution.

l) A system of legal remedies is established in order to guarantee legality of the electoral acts and rulings. State constitutions and state electoral laws shall establish conditions and rules to partially or totally recount votes.

m) The causes to annul elections for governors, for state deputies and for members of the City Councils are specified. State constitutions and state electoral laws shall also indicate the terms to file legal remedies and appeals, taking into account the principle of definitivity in setting the stages of electoral processes.

n) Crimes are classified and omissions are determined in electoral matters, as well as the sanctions that may be imposed for these.

- V. The constitutions and laws of the states may institute courts of administrative questions, given full autonomy in making their rulings, that have as their responsibility to settle the controversies that arise between the state government and private parties. The constitutions and laws of the states shall establish the standards for organization and functioning of such courts, as well as the legal remedies and procedures against their rulings.
- VI. Labor relations between the state government and its employees shall be regulated by the laws enacted by the state legislature, based on the Article 123 of this Constitution and on its statutory regulations.
- VII. Federal government and state governments can agree transfer among them of some functions, provision of public services or implementation of works, whenever it is necessary for the economic and social development of the country.

State government and City Councils can make and execute agreements to provide public services or perform functions mentioned in the previous paragraph.

Article 117. In not case shall the states:

- I. Conclude alliances or coalitions, or make treaties with any other state or foreign government.
- II. Repealed
- III. Mint money or issue money, stamps or stamped paper.
- IV. Levy a road tax on the persons or goods that pass through their territory.
- V. Impede, directly or indirectly, the entrance or exit of domestic or foreign merchandises, or levy a tax on them.
- VI. Levy a tax on circulation and consumption of domestic and foreign products when taxes or fees are collected by the local customs, or the packages are subject to inspection or registration, or require it to be accompanied by documents.
- VII. Enact or keep in force fiscal laws or provisions that establish differences between the taxes and requirements for domestic products and those stated for foreign products, either such differences are established in respect to similar local products or between similar products of different origin.
- VIII. To make and execute, directly or indirectly, bonds or loan agreements with foreign governments, foreign associations or foreign private parties, or when such bonds or loans are to be paid with foreign currency or outside the country.

States, City Councils, decentralized bodies and public companies can make and execute bonds or loan agreements only when such resources are to be allocated to productive public projects. State legislature shall include the projects to be supported and the amounts for such bonds and

loan agreements in the annual budget. Executives in charge shall inform about the use of these resources while submitting their public account.

- IX. Levy a different tax on production, store or sale of leaf snuff than the tax authorized by the Congress of the Union.

The Congress of the Union and the state legislatures shall enact laws to fight alcoholism.

Article 118. Without the Congress of the Union's consent, the states cannot:

- I. Establish tonnage duties or any other port duties, or levy a tax on importing or exports.
- II. Have permanent troops or warships.
- III. Declare war against foreign nation, except for cases of invasion or imminent danger. In such case, the state shall notify immediately the President of the Republic.

Article 119. The Powers of the Union have the duty to protect the states against foreign invasion or violence. In the event of uprising or internal social unrest, the Powers of the Union must protect the state, as long as they are called by the state legislature, or by the governor if legislature is not in session.

Each state and the Federal District are obliged to deliver, without delay, those suspected, processed or convicted persons required by another state, as well as to carry out confiscation and delivery of objects and instruments used in perpetration of the crime and the benefits thereof. These obligations will be complied through the respective Ministries of Justice, observing the conditions established in the collaboration agreements made by the states. For this purpose, the states and the Federal District can make and execute collaboration agreements with the Federal Government, who shall act through the Attorney General's Office.

Calls for extradition, made by a foreign State, shall be processed by the President of the Republic, with the intervention of the judicial authority in accord with the provisions stated in this Constitution, in the applicable international treaties and in the statutory laws. In those cases, the writ of the judge, ordering to comply with the call for extradition, shall be enough to cause the person requested to be detained for up to 60 calendar days.

Article 120. Governors are obliged to publish and uphold federal laws.

Article 121. Each state of the Federation shall give full faith and credit to the public acts, registrations and judicial proceedings made by the other states. The Congress of the Union, through general laws, shall establish the way for proving such acts, registrations and judicial proceedings and their effect, in accord with the following bases:

- I. The laws of a state only have effect inside its territory, as a consequence, they have no effect outside thereof.
- II. Personal property and real estate shall be subject to the local Law applicable to the place where they are located.

- III. Sentences passed by a court of a state about property rights on properties located in another state, may only be enforced in the other state when its own laws so provide it.

Sentences about personal rights may only be enforced in other state when the person judged has, expressly or by reason of residence, submitted himself to the jurisdiction of the courts that pronounced such sentences, provided that the person has been summoned to appear in the trial.

- IV. Acts pertaining to marital status, carried out according to the laws of a state, shall be valid in the other states.
- V. University degrees issued by a state government, in accord with its laws, shall be valid in the other states.

Article 122. The legal nature of the Federal District has been defined in the Article 44 of this Constitution. The Federal District Government is entrusted to the Powers of the Union together with the local executive, legislative and judicial branches, observing the provisions established in this article.

The local authorities of the Federal District are: the Legislative Assembly, the Head of the Federal District Government and the Supreme Court of Justice.

The Federal District's Legislative Assembly shall consist of a number of deputies elected according to the principle of relative majority and the principle of proportional representation, following the procedures established by this Constitution and the Government Code.

The Head of the Federal District Government shall exercise the executive power and shall be responsible for the public administration of the entity. The Head of the Federal District Government shall be vested in one single person, elected through universal, free, direct and secret suffrage.

The Supreme Court of Justice and the Judicial Council of the Federal District, together with the other bodies established by the Government Code, shall perform the judicial functions related to common Law in the Federal district.

The distribution of areas of jurisdiction among the Powers of the Union and the local authorities of the Federal District shall be subject to the following provisions:

A. It pertains to the Congress of the Union:

- I. To legislate on what is relative to the Federal District, except for the affairs expressly conferred on the Legislative Assembly.
- II. To issue the Government Code for the Federal District.
- III. To enact laws that regulate the public debt of the Federal District.
- IV. To issue the general provisions that guarantee the appropriate, timely and efficient functioning of the Powers of the Union.
- V. The other powers conferred by this Constitution.

B. It pertains to the President of the Republic:

- I. To propose laws to the Congress of the Union related to the Federal District.
- II. To propose to the Senate the person who should substitute the Head of the Federal District Government in the event of his removal.
- III. To submit annually to the Congress of the Union his proposal of indebtedness in order to fund the expenditure budget of the Federal District, based on the proposal submitted to him by the Head of the Federal District Government, which shall meet the requirements established by Law.
- IV. To uphold the administrative laws enacted by the Congress of the Union related to the Federal District.
- V. The other powers conferred by this Constitution, the Government Code and the laws.

C. The Government Code of the Federal District shall be subject to the following bases:

FIRST BASE. Regarding the Legislative Assembly:

- I. The members of the Legislative Assembly shall be elected every three years through universal, free, direct and secret vote, in accord with the provisions established by Law. The Legislative Assembly shall take into account that established in the Articles 41, 60 and 99 of this Constitution in order to organize elections, issue the certificates of majority and accept the legal remedies on electoral matter.
- II. Qualifications to be a representative in the Assembly shall not be less than those required to be a federal deputy. The compatible provisions included in the Articles 51, 59, 61, 62, 64 and 77, paragraph IV, of this Constitution shall be applied to the Legislative Assembly and its members.
- III. The political party that attains the largest number of certificates of majority and at least the 30% of the votes in the Federal District, shall obtain a sufficient number of representatives by proportional representation to attain an absolute majority in the Assembly.
- IV. The Legislative Assembly shall fix the dates for the beginning of two ordinary periods of sessions per year, and shall establish the procedure to make up an internal organ of government that will act during its recesses, as well as the attributions of such internal organ. The internal organ of government can call to an extraordinary period of sessions at the request of the majority of its members or of the Head of the Federal District Government.
- V. The Legislative Assembly, observing the Government Code, shall have the following powers:

a) To issue its own organic Law and to send it to the Head of the Federal District Government so that it is published.

b) To review, discuss and approve annually the expense budget and the revenue Law for the Federal District, approving first the contributions necessary to cover the budget. Such budget shall include the salaries of the public servants, which shall be subject to the provisions established in the Article 127 of this Constitution.

All the legislative, executive and judicial organs of the Federal District, as well as the autonomous bodies mentioned in the Government Code of the Federal District, shall include the salaries of their employees in their proposals of expenditure budgets. The Government Code of the Federal District and the applicable laws shall establish the procedure to approve the expenditure budget of the Federal District.

The revenue Law for the Federal District cannot include indebtednesses higher than those previously approved by the Congress of the Union for the financing of the expenditure budget for such entity.

Only the Head of the Federal District Government can submit the revenue Law and the expenditure budget. The term to submit them ends on November 30, except for the years when the election of the Head of the Federal District Government takes place, in which case deadline shall be December 20.

The Legislative Assembly shall submit annually its proposal for the budget to the Head of the Federal District Government in order to include it in the general proposal.

The provisions included in the Article 115, section IV, point “c”, second paragraph, of this Constitution shall be applicable to the treasury of the Federal District in all matters consistent with its nature and organic system of government.

c) To review the public account corresponding to the year before, through its Auditing Office and in accord with the applicable criteria established in the Article 74, section VI, of this Constitution.

Public account corresponding to the previous year shall be submitted to the Legislative Assembly in the first ten days of June. This term may be extended only when the Head of the Federal District Government justifies it sufficiently. The same shall apply for the extensions for submitting the revenue Law and the expenditure budget.

The Head of the Auditing Office of the Federal District shall be elected by the two-thirds of the members present in the Legislative Assembly. He shall hold the office for a seven years period and shall have five years experience in matters of control, financial auditing and liabilities.

d) To appoint a substitute for the Head of the Federal District Government in case of absolute absence.

e) To issue the legal provisions required to organize public treasury, the budget, bookkeeping and public spending of the Federal District, as well as the provisions required to organize the Auditing Office, vesting it with technical and operational autonomy to perform its functions and to decide its internal organization, functioning

and decision making. Auditing function shall be exercised according to the principles of posteriority, annuity, legality, impartiality and reliability.

f) To issue the provisions required to guarantee free and authentic elections in the Federal District through the universal, free, secret and direct suffrage, according to the bases established by the Government Code, which shall observe the principles and rules provided in the Article 116, section IV, paragraphs “b” to “n”, of this Constitution. Provisions established in the paragraphs “j” and “m” for governors, local deputies and City Councils shall apply, respectively, to the Head of the Federal District Government, members of the Legislative Assembly and district chiefs.

g) To legislate in matters of local administration, its internal organization and internal administrative procedures.

h) To regulate the Human rights Commission and to legislate in civil and criminal matters and in other matters like citizen participation, defender service, notary service and the land and commerce registry.

i) To establish standards for civil protection, for penalties applicable to the employees of police bodies and the government, for the security services provided by private companies, for prevention and social readjustment, for public health and social work, and for social security.

j) To legislate in matters of development planning; urban development, specially on land use; environmental preservation; housing; construction; public roads; traffic and parking; acquisitions and public works; and exploitation and use of the Federal District’s resources.

k) To regulate provision and contracts of public services; to legislate in matters of public transport, cleaning services, tourism and lodging, markets, slaughterhouse, wholesale markets and cemeteries.

l) To issue regulations on economic stimulations; employment protection; development of the agricultural and livestock sector; commercial establishments; animal protection; public shows; cultural, civic and sports promotion; and social education in accord with the Article 3, section VIII, of this Constitution.

m) To enact the organic Law of the courts in charge of common affairs under the jurisdiction of the Federal District, which shall specify the accountabilities of their public servants.

n) To enact the organic Law of the Court of Administrative Litigation of the Federal District.

ñ) To submit bills to the Congress related to the Federal District’s affairs.

o) To set in law the terms and requirements for the citizens of the Federal District to exercise the right of initiative before the Assembly, and

p) Other powers conferred expressly by this Constitution.

SECOND BASE: Regarding the Head of the Federal District Government:

I. The Head of the Federal District Government shall hold office for a six years term, beginning on the 5th day of December of the year in which

election was carried out, in accordance with that established in the electoral Law.

In order to be eligible for the office of the Head of the Federal District Government, the individual shall meet the requirements established by the Government Code, including: a) to be a Mexican citizen by birth with legal capacity to exercise his rights; b) to have lived in the Federal District for the three years previous to the date of the election, if he was born in the Federal District; c) to have lived in the Federal District for the five years previous to the date of the election, in a continuous manner, if he was born in another entity; d) to be at least 30 years old on the election day; e) not to have discharged previously the office of the Head of the Federal District Government with any character. Residence is not interrupted by the discharge of federal public duties in another state.

In the event of dismissal of the Head of the Federal District Government, the Senate shall appoint a substitute to finish the mandate. Such substitute must be proposed by the President of the Republic. In the event of a temporary absence of the Head of the Federal District Government, the office shall be entrusted to the public servant indicated in the Government Code. In case of absolute absence, because of resignation or any other cause, the Legislative Assembly shall appoint a substitute that finishes the term. Resignation of the Head of the Federal District Government shall be accepted only due to serious causes. The Government Code shall regulate the leaves for this office.

II. The Head of the Federal District Government shall have the following powers and duties:

a) To comply and execute the administrative laws applicable to the Federal District, which are enacted by the Congress of the Union.

b) To pass, publish and execute the administrative laws issued by the Legislative Assembly means of issuing regulations, decrees and covenants. The Head of the Federal District Government, within a ten days term, can make comments about the laws submitted to him by the Legislative Assembly for enactment. Should the project with comments be confirmed by the two-thirds of the deputies present, it must be enacted by the Head of the Federal District Government.

c) To submit bills to the Legislative Assembly.

d) To appoint and remove freely the public servants subordinated to the local executive organ, whose appointment or dismissal is not foreseen in a different manner by this Constitution or by the applicable laws.

e) To manage public security services in accord with the Government Code.

f) Other powers and duties conferred by this Constitution, the Government Code and the Law.

THIRD BASE. Regarding the organization of the local public administration in the Federal District:

- I. The Government Code shall distribute attributions among the central organs and the decentralized bodies.
- II. The Government Code shall establish the political-administrative agencies in every neighborhood of the Federal District.

It shall also specify: the criteria to carry out the territorial division of the Federal District; the responsibilities of each one of the political-administrative agencies, the way to create them and their functioning; relationships between such political-administrative agencies and the Head of the Federal District Government.

Directors of the political-administrative agencies shall be elected through a universal, free, secret and direct manner, according to the Law.

FOURTH BASE. Regarding the Supreme Court of Justice of the Federal District and the other judicial bodies in charge of common affairs:

- I. Magistrates composing the Supreme Court of the Federal District shall meet the same requirements than the ministers of the Supreme Court of Justice of the Nation. Besides, they should have professional experience at judicial affairs, preferably in the Federal District. The Supreme Court of the Federal District shall have the number of magistrates indicated in the applicable organic Law.

In the event of vacancies, the Head of the Federal District Government shall submit his proposal to the Legislative Assembly for approval. Magistrates shall hold the office for a term of six years. They may be ratified by the Legislative Assembly, if so, they may be removed from office only in the cases established in the Title Four of this Constitution.

- II. Administration, supervision and discipline of the Supreme Court, the trial courts and the other judicial organs shall be the responsibility of the Federal District Judicial Council, which shall be composed of seven members: the president of the Supreme Court of Justice of the Federal District, who shall chair; a magistrate and two judges, elected by the two thirds of the members of the Supreme Court, in plenary meeting; one councilor appointed by the Head of the Federal District Government; and two councilors appointed by the Legislative Assembly. Councilors must meet the same requirements than magistrates. They must have professional and administrative experience, they must be honest and honorable. Councilors appointed by the Supreme Court must have proven experience in judicial field. Councilors shall serve for a five years term,

they shall be replaced in a staggered way. Councilors may not be appointed for a second term.

The Federal District Judicial Council shall appoint the judges for the Federal District, according to the provisions regulating the judicial career. The Judicial Council shall also define the quantity of courts and courtrooms belonging to the Supreme Court that shall build up the Judicial Branch of the Federal District, as well as their specialization.

- III. Responsibilities and operating standards of the Federal District Judicial Council shall be determined taking into account the provisions established in the Article 100 of this Constitution.
- IV. The Organic Law shall state rules to provide training and updating to the public officials, as well as to develop their judicial career.
- V. Impediments and penalties established in the Article 101 of this Constitution shall be applicable to the councilors, magistrates and judges.
- VI. The Federal District Judicial Council shall prepare the budget for the Federal District courts and shall submit it to the Head of the Federal District Government to include it in the general budget that shall be sent to the Legislative Assembly.

FIFTH BASE. There shall be a court of administrative litigation, which shall have full autonomy to resolve conflicts between private individuals and the Federal District Government.

This court shall have an organic Law, which will establish its creation and attributions.

D. The head of the Federal District Public Prosecution Service shall be the Federal District Attorney General, who must be elected according to the conditions provided by the Government Code. The Government Code and the applicable organic Law shall determine organization, powers and operation of the Federal District Public Prosecution Service.

E. The provisions set forth in the section VII of the Article 115 of this Constitution shall apply to the President of the Republic. Appointment and dismissal of the public servant in direct charge of the public force shall be carried out according to the terms established in the Government Code.

F. The Senate, or the Permanent Committee, can dismiss the Head of the Federal District Government due to serious causes affecting relationship between him and the Powers of the Union, or affecting the public order in the Federal District. Dismissal request must be presented by a half of the members of the Senate or of the Permanent Committee.

G. The City Councils of the Federal District suburbs can make and execute agreements with the Federal District Government and the Federal Government in order to create metropolitan commissions that coordinate planning and implementation of actions related to human settlements, protection of the environment, preserva-

tion and restoration of ecological balance, transport, drinking water, drainage, garbage collection, treatment and disposal of solid waste, and public security, observing the provisions established in the Article 115, section VI, of this Constitution.

The commissions will be created by mutual agreement of the participants. The document of creation shall determine the procedure for integration, structure and functions.

Through the commissions, it shall be established:

a) The bases to make and execute agreements inside the commissions. Such agreements shall define the territorial scope and functions of each City Council regarding public works, provision of public services or actions mentioned in the first paragraph of this part.

b) The bases to define the specific functions of the members of the commissions, as well as the contributions of material, human and financial resources.

c) Other rules for the mutual and coordinated regulation of development of the suburbs, provision of public services and implementation of other actions approved by the commissions.

H. The prohibitions and limitations that this Constitution establishes for the states shall apply to the Federal District authorities.

TITLE SIX

Labor and social security

Article 123. Every person has the right to have a decent and socially useful job. Therefore, job creation and social organization of work shall be encouraged according to the Law.

The Congress of the Union, without contravening the following basic principles, shall formulate labor laws which shall apply to:

A. Workers, day laborers, domestic servants, artisans and, in a general way, to all labor contracts:

- I. The maximum duration of the working day shall be eight hours.
- II. The maximum duration of night work shall be seven hours. The following jobs are prohibited for persons under sixteen years: unhealthful or dangerous work, industrial night work and any work after ten o'clock at night.
- III. The use of labor of minors under fourteen years of age is prohibited. Persons above that age and less than sixteen shall have a maximum working day of six hours.
- IV. For every six days of work a worker must have at least one day of rest.
- V. During pregnancy, women shall not perform such work that requires excessive physical effort and could be dangerous regarding pregnan-

cy. Women have the right to enjoy a disability leave due to childbirth, which shall cover six weeks previous to the birth and six weeks thereafter. During such disability leave, women shall receive their full wages and retain their employment and the rights acquired under their labor contract. During the nursing period, they shall have two special rest periods per day, consisting of half hour each one, to feed their babies.

- VI. The minimum wage shall be established in a general way or according to the occupation. General minimum wage shall govern over the different economic zones. Professional wages shall apply on specific industries, professions, trades or special works.

The general minimum wage must be sufficient to satisfy the normal material, social, and cultural needs of a family, and to provide the compulsory education of children. The professional minimum wage shall be fixed by taking into account, in addition, the conditions of the different industrial and commercial activities.

Minimum wages shall be fixed by a national commission composed of representatives of the workers, employers, and the Government. This national commission may be assisted by those special advisory committees it should consider necessary for a better performance of its duties.

- VII. Equal wages shall be paid for equal work, regardless of sex or nationality.
VIII. The minimum wage shall be exempt from attachment, compensation, or deduction.

- IX. Workers are entitled to participate in profit sharing, which shall be regulated in conformity with the following rules:

a) A national commission, composed of representatives of workers, employers, and the Government, shall fix the percentage of profits to be distributed among workers.

b) The national commission shall research and study the general conditions of the national economy. It shall also take into consideration the need to promote the industrial development of the country, the reasonable interest that should be obtained by capital, and the necessary reinvestment of capital.

c) The national commission may revise the percentage fixed under paragraph "a" of this section, whenever new studies and research so justify.

d) The Law may exempt newly established enterprises from the obligation of sharing profits for a specified and limited number of years, as well as the exploration works and other activities so justified by their nature or peculiar conditions.

e) In order to determine the amount of the profits of each enterprise, the basis to be taken is the taxable income according to the provisions of the Income Tax Law. Workers may submit to the appropriate

office of the Department of the Treasury their objections, in accordance with the procedure indicated in the Law.

f) The workers' right to participate in profit sharing does not imply the power to intervene in the management or administration of the company.

- X. Wage must necessarily be paid in legal tender and cannot be paid in goods, coupons, tokens or any other instrument intended to substitute the money.
- XI. When, due to extraordinary circumstances, working hours must be extended, the salary to be paid for overtime shall be 100% more than the amount fixed for regular hours. Overtime work may never exceed three hours a day nor three times consecutively. Persons under sixteen years of age may not perform overtime.
- XII. All farming, industrial, or mining enterprise or any other kind of business, employers are obliged to provide to workers comfortable and hygienic housing. This obligation shall be discharged through contributions made by the companies to a national housing fund, which shall provide the workers with inexpensive loans, sufficient to acquire a house.

The Law shall create a body composed of representatives of the Federal Government, of the workers and of the employers. Such body shall manage the resources of the national housing fund.

The Law shall establish the procedures to be followed by the workers in order to get a loan to acquire a house.

The companies located outside the villages are obliged to establish schools, medical services and other services necessary in the community. In addition, in these work centers, when the population of the community exceeds 200 inhabitants, a tract of land of not less than five thousand square meters must be set aside for the establishment of public markets, municipal services and recreation centers.

Establishments for the sale of intoxicating liquors and casinos are prohibited in all work centers.

- XIII. The companies are obliged to provide their workers with training for the job. The statutory Law shall establish the systems, methods and procedures through which employers will meet this liability.
- XIV. Employers shall be responsible for labor accidents and for occupational diseases of workers. Therefore, employers shall pay the appropriate compensation, depending on the consequences of the accident or disease: death or only temporary or permanent incapacity to work, in accordance with the Law. This liability shall survive even when the employer contracts the work through an intermediary.

- XV. The employer shall observe the legal regulations on hygiene and health that are applicable to his establishment, and to adopt adequate measures for the prevention of accidents in the use of machines, instruments and materials. The employer must organize the work in such a way to protect the health and safety of workers and of unborn children, in the case of pregnant women. The Law shall define the penalties applicable to offenders.
- XVI. Both, employers and workers shall have the right to join together for the defense of their respective interests, by forming unions, professional associations, etc.
- XVII. The laws shall recognize strikes and lockouts as rights of workers and employers.
- XVIII. Strikes shall be legal when their purpose is to attain equilibrium between the several factors of production, harmonizing labor rights and the possibilities of the capital. In the case of public services, the workers must notify, at least ten days in advance, the Commission for Conciliation and Arbitration about the date agreed for the suspension of work. Strikes shall be considered as illegal only when the majority of strikers carries out violent acts against persons or property, or in the event of war, when the workers belong to governmental establishments or services.
- XIX. Lockouts shall be legal only when an excess of production makes it necessary in order to maintain prices at a reasonable level, with prior approval of the Commission for Conciliation and Arbitration.
- XX. Differences or disputes between employers and workers shall be subject to the decisions of the Commission for Conciliation and Arbitration, which shall consist of an equal number of workers and employers, and one government representative.
- XXI. If an employer refuses to submit the conflict to the Commission for Conciliation and Arbitration or to accept the decision thereof, the work contract shall be terminated and the employer shall give to the worker a compensation equal to three months salary, plus the liabilities originated by the conflict. This provision shall not be applicable in the case of actions covered in the following section. If the workers refuse to submit the conflict to the Commission for Conciliation and Arbitration, the work contract shall be terminated.
- XXII. If an employer fires a worker without just cause or because he has joined an association or union, or for having taken part in a lawful strike, then the employer is obliged to fulfill the work contract or to indemnify the worker with a quantity equal to three months salary, whatever the worker chooses. The Law shall specify those cases in which the employer may be exempted from the obligation of paying an indemnity. The employer is

also obliged to pay a three months salary compensation to the worker if the worker leaves his employment due to the employer's lack of honesty or because the employer mistreats the worker or worker's wife, parents, children, brothers or sisters. The employer cannot be exempted from this liability when the mistreatment is inflicted by his subordinates or members of his family acting with his consent or tolerance.

XXIII. Credits in favor of workers for wages earned within the last year, and for compensations, shall have priority over all other obligations in the event of receivership or bankruptcy.

XXIV. Only the worker shall be responsible for debts acquired by himself and payable to his employer or to his employer's associates, relatives or dependents. In no case may payment be exacted from the members of the worker's family, nor are these debts demandable for an amount exceeding one month salary.

XXV. Employment services shall be free for workers, whether such service is performed by a municipal office, an employment agency or any other public or private institution.

When providing employment services, labor demand must be taken into account. In equal conditions, the persons who are the only income source for their family shall have preference.

XXVI. Every work contract made between a Mexican and a foreign employer must be authenticated by the responsible municipal authority and countersigned by the consul of the country to which the worker intends to go. Such work contract shall include a clause clearly specifying that the employer will bear the costs of repatriation.

XXVII. The following conditions or clauses shall be considered null and void and not binding on the contracting parties, even if expressed in the contract:

a) Those that fix an inhuman working day.

b) Those that fix wages that are not remunerative, according to the criteria of the Commission for Conciliation and Arbitration.

c) Those providing a period longer than one week for the payment of a daily wage.

d) Those indicating as the place of payment of wages a recreation center, cheap restaurant, coffee shop, tavern, bar, or store, except for the employees of such establishments;

e) Those indicating the direct or indirect obligation of acquiring basic products in specific stores or places.

f) Those that allow the retention of wages as a fine.

g) Those that constitute a waiver by the worker of indemnification to which he is entitled due to labor accidents, occupational diseases, damages caused by breach of contract or dismissal.

- h) Any other provision that imply waiver of any right granted to workers by the laws.
- XXVIII. The laws shall determine what property constitutes the family patrimony. Such property shall be inalienable, not subject to taxes or attachment, and shall be transferrable as inheritance, simplifying the formalities thereof.
- XXIX. Social Security Act is enacted for social welfare. This act shall include disability benefit, retirement pension, life insurance, unemployment benefit, health services, nursery services, and other services intended to guarantee wellbeing of workers, farm workers and other kind of employees.
- XXX. Cooperatives established for the construction of inexpensive and hygienic houses to be purchased on installments by workers, shall be considered of social utility.
- XXXI. Enforcement of the labor laws belongs to the authorities of the states, within their respective jurisdictions. However, it is the exclusive jurisdiction of the federal authorities in matters relating to:
- a) Industrial sector and services:
 1. Textile industry.
 2. Electricity.
 3. Movie industry.
 4. Rubber.
 5. Sugar.
 6. Mining.
 7. Metallurgical, iron and steel industries, including the exploitation of basic minerals, their processing and steelworks, production of iron and steel in all their forms and alloys, and their rolled products.
 8. Hydrocarbons.
 9. Petrochemistry.
 10. Cement.
 11. Limekilns.
 12. Automobile industry, including car parts.
 13. Chemical industry, including pharmaceutical and drug industry.
 14. Cellulose and paper.
 15. Oils and vegetable fat.
 16. Food production, applicable only to industries producing packed, canned or bottled products.
 17. Bottled and canned drinks, and related industries.
 18. Railroad workers.
 19. Basic lumber industry, including sawmills and manufacture of plywood and agglutinate materials.
 20. Manufacture of glass bottles and flat glass, either smooth or carved.

21. Tobacco industry, including manufacture of tobacco products.

22. Bank and credit institutions.

b) Enterprises:

1. Those enterprises that are administered directly or in a decentralized form by the Federal Government.

2. Those enterprises that have a contract or license granted by the Federal Government, and connected industries.

3. Those enterprises working in federal zones, in territorial waters or inside the exclusive economic zone of the nation.

The following topics shall be the exclusive jurisdiction of the federal authorities:

a) labor disputes that affect two or more states; b) collective work contracts that have been declared obligatory in more than one state; c) employer's obligations related to educational matters, according to the respective Law; d) employer's liabilities regarding training for workers, and safety and hygiene at work. State authorities shall assist federal authorities in matters under local jurisdiction, in accord with the applicable statutory Law.

B. The Powers of the Union, the Federal District Government and their employees:

I. The maximum duration of the working day shall be eight hours. The maximum duration of night work shall be seven hours. Those in excess will be considered overtime, the salary to be paid for overtime shall be 100% more than the amount fixed for regular hours. Overtime work may never exceed three hours a day nor three times consecutively.

II. For every six days of work, the employee must have at least one day of rest, with full payment of wage.

III. Workers shall be entitled to vacations of not less than twenty days a year.

IV. Wages shall be fixed in the respective budgets, and their amount may not be decreased while a given budget is in effect, observing the provisions stated by the Article 127 of this Constitution.

In no case, the wages of the public servants may be lower than the minimum wage established for the Federal District and the states.

V. Equal wages shall be paid for equal work, regardless the gender.

VI. Withholdings, discounts, deductions or attachments from wages may be made only in those cases provided by Law.

VII. There shall be a system to appointment personnel according to their knowledge and skills. The State shall organize schools on public administration.

VIII. There shall be a scale in order to grant promotions in accordance with knowledge, skills and seniority. Under the same conditions, the individual representing the only source of income for his family shall have preference.

- IX. Workers may be suspended or fired only due to just cause and according to the Law.

In the event of unjustifiable dismissal, employees have the right to choose between reinstatement and the appropriate indemnity through the appropriate legal proceedings. In case of positions axing, the affected workers shall have the right to get another position equivalent to the position that has been axed or to get an indemnity.

- X. Public employees shall have the right to join together in order to protect their common interests. They may also exercise their right to strike, observing the requirements prescribed by Law, whenever the rights established by this article are generally and systematically violated.
- XI. Social security shall be organized according to the following minimum bases:

a) Social security shall cover work accidents, occupational diseases and other diseases, motherhood, retirement, disability, old age, and death.

b) In case of accident or illness, the right to work shall be retained for the time specified by Law.

c) During pregnancy, women shall not perform such work that requires excessive physical effort and could be dangerous regarding pregnancy. Women have the right to enjoy a disability leave due to childbirth, which shall cover one month previous to the birth and two months thereafter. During such disability leave, women shall receive their full wages and retain their employment and the rights acquired under their labor contract. During the nursing period, they shall have two special rests per day, consisting of half hour each one, to feed their babies. In addition, they shall enjoy medical and obstetrical services, medicines, nursing aid and nursery services.

d) Worker's family has the right to medical care and medicines, in those cases and in the proportions specified by Law.

e) The Social Security System shall create centers for vacations and convalescence, as well as cheap grocery stores for workers and their families.

f) The Social Security System shall provide to workers inexpensive housing for rent or sale, in accordance with previously approved programs. Additionally, the State shall create a national housing fund and shall make contributions to it. Such fund shall provide the workers with inexpensive loans, sufficient to acquire a comfortable and hygienic house, or to build, renovate or improve their home or to pay loans used to buy a house.

Contributions made to the national housing fund shall be notified to the Social Security Institute. The Law of such Institute, as well as the

other applicable laws, shall regulate the administration of the national housing fund and shall establish procedures to grant loans to workers.

- XII. Individual, collective and inter-union conflicts shall be submitted to a federal court for conciliation and arbitration, which shall be organized as provided in the statutory Law.

Disputes between the federal judicial branch and its employees shall be settled by the Federal Judicial Council. Disputes arising between the Supreme Court of Justice and its employees shall be resolved by the first one.

- XIII. Military and naval personnel, Foreign Service personnel, public prosecutors, legal experts and members of the public security corps, shall be governed by their own laws.

Public prosecutors, legal experts and members of the police forces belonging to the Federation, the Federal District, the states and the local councils, can be dismissed if they do not meet the requirements established by Law or due to corruption. If the jurisdictional authority determines that dismissal, redundancy or any other form of termination is not justified, the State shall be obliged only to pay to the employee the compensation and other benefits established by Law, but this shall not mean to bring the employee back to service, regardless the ruling pronounced in the trial.

The federal, state and local authorities, as well as the Federal District Government, shall implement complementary social security systems to strengthen social security for the employees of the Public Prosecution System, of the police forces and of the legal services, as well as for their families.

The State shall provide active members of the Army, Air Force and Navy with the benefits mentioned in the paragraph “f” of section XI of this part, through the body created for this purpose in such institutions.

- XIII bis. The Central Bank and all the organs belonging to the Mexican banking system shall follow the provisions established in this part regarding labor relations between them and their employees.

- XIV. The Law shall determine what positions are to be considered as trusted positions. Persons who hold such positions shall be entitled to the social security and protection of wages.

TITLE SEVEN

General considerations

Article 124. The powers not expressly granted by this Constitution to federal officials, shall be understood to be reserved to the states.

Article 125. No person may hold two elective offices at the same time, nor one federal and one state elective office; but an elected candidate may choose which of the two he desires to hold.

Article 126. No payment may be made if it is not included in the budget or provided for by a subsequent Law.

Article 127. Employees of the Federal Government, the state governments, the Federal District Government and the City Councils, as well as the employees of any governmental agency, semipublic companies, public trusts, autonomous bodies and of any other public entity, shall receive an adequate remuneration for their work, which shall be proportional to the liabilities.

This remuneration shall be non-negotiable and shall be fixed annually in the expenditure budgets of each organ in accord with the following bases:

- I. Remuneration is any payment made in cash or in kind, including expenses, Christmas bonus, bonus, rewards, incentives, commissions, compensations and any other payment, except for expenses allowance that must be supported by receipts and invoices and for labor costs for traveling in official activities.
- II. No public servant can have a salary higher than the President of the Republic's salary.
- III. No public servant can have a salary equal or higher than his/her superior's salary, except when the exceeding part is due to the performance of several public duties or to the characteristics of the job, like a specialized technical job or a very specialized function. The addition of such remunerations shall not exceed a half of the President of the Republic's remuneration.
- IV. Only pensions, payments, loans and credits established by Law, a decree, a labor contract or labor covenant shall be granted. Such benefits are not part of the remuneration. Social security services are excluded.
- V. Public servants' remunerations and detailed tables shall be public information, such information shall specify every fixed and variable element, including payments in cash and in kind.
- VI. The Congress of the Union, the state legislatures and the Federal District Legislative Assembly, within the scope of their powers, shall enact the laws necessary to enforce the provisions included in this article and all related constitutional provisions. They shall also establish criminal and administrative penalties to be applicable to public servants that circumvent this article.

Article 128. Every public official, without exception, before taking office, shall swear allegiance to the Constitution and to the laws emanating thereof.

Article 129. No military authority may, during peacetime, perform any functions other than those directly related to military affairs. There shall be fixed and permanent

military command headquarters only in the castles, forts and warehouses immediately subordinate to the Federal Government, or in the camps, barracks or dumps established outside towns for the troops by the Federal Government.

Article 130. The historic principle of separation of the State and the churches guides the provisions established in this article. Churches and any other religious groups shall observe the Law.

Only the Congress of the Union can legislate on matters of public worship, churches and religious groups. The respective public statutory Law shall develop and detail the following provisions:

a) Churches and religious groups shall have legal status after registration. The Law shall regulate the religious associations and shall establish the requirements to get registration.

b) The government shall not intervene in the internal affairs of the religious associations.

c) Mexicans can become ministers of any religious denomination. For this purpose, Mexicans and foreigners must meet the requirements established by Law.

d) Religious ministers cannot hold public offices, according to the statutory Law. As citizens, religious ministers have the right to vote, but they do not have the right to be elected. Those who have ceased being church ministers in anticipation of running and in the form established by Law, may be elected.

e) Church ministers cannot join together for political purposes nor proselytize in favor of certain candidate, party or political association or against them. Neither may they oppose the laws of the Nation or its institutions, nor insult patriotic symbols in any form, in public meetings, in worship or in religious literature.

The formation of any kind of political group with a name containing any word or other symbol related to any religion is strictly prohibited. No meeting of a political character may be held in churches or temples.

The simple promise of truthfulness and fulfillment, subjects the person to the penalties established by Law in the event of failing to fulfill them.

Church ministers, their antecedents, children, brothers, sisters and spouses, as well as their religious associations, cannot inherit by will from their followers, who do not have a family relationship of up to fourth grade.

Acts of marital status pertain only to the administrative authorities under the terms established by Law. The Law shall define the effect and validity for the marital status acts.

The Law shall confer powers and duties on civil matters to the federal, state and local authorities.

Article 131. Only the Federal Government can tax imports and exports, and merchandises that pass in transit through the national territory, as well as to regulate at all times, and even to prohibit, for security reasons, the circulation of merchandises across the country, regardless of their origin. However, the Federal Government

cannot establish or enact, in the Federal District, those taxes and laws mentioned in sections VI and VII of the Article 117.

The President of the Republic can be empowered by the Congress of the Union to: increase, decrease, or abolish tariff rates on imports and exports, that were imposed by the Congress; to establish new tariff rates; to restrict and to prohibit the importation, exportation or transit of products, articles and goods in order to regulate foreign trade, the economy of the country, the stability of domestic production, or for accomplishing any other purpose to the benefit of the country. The President of the Republic shall send to the Congress, together with the annual budget, a report about the way he has exercised this power.

Article 132. The forts, barracks, warehouses and other buildings used by the Federal Government to provide public services or for public use, shall be subject to the jurisdiction of the federal powers in accordance with the Law enacted by the Congress of the Union. However, if the Federal Government acquires properties in the future within the territory of any state, in order to put such property under federal jurisdiction, the consent of the respective legislature shall be necessary.

Article 133. This Constitution, the laws derived from the and enacted by the Congress of the Union, and all the treaties made and execute by the President of the Republic, with the approval of the Senate, shall be the supreme Law of the country. The judges of each state shall observe the Constitution, the laws derived from it and the treaties, despite any contradictory provision that may appear in the constitutions or laws of the states.

Article 134. Economic resources available for the federal, state and local governments, for the Federal District, and for the political-administrative bodies belonging to them, shall be managed with efficiency, effectiveness, savings, openness and honesty in order to achieve the objectives for which they are intended.

The results of the use of such resources shall be assessed by the agencies created by the federal, state and local governments in order to guarantee that such resources are distributed in the appropriate budgets observing the principles stated in the previous paragraph, without prejudice to that established in the articles 74, section VI, and 79.

All contracts made by the authorities and entities mentioned before on acquisitions, renting, transfers, provision of services and works shall be awarded by open tender, where qualified bidders submit their sealed bids. These sealed bids are opened in public for scrutiny in order to assess their offers about price, quality, financing, opportunity and other appropriate conditions.

When tender is not appropriate to guarantee the conditions mentioned in the previous paragraph, the Law shall establish the bases, procedures, regulations, requirements and other conditions necessary to prove the good price, effectiveness, efficiency, impartiality and honesty of the process for the benefit of the state.

Management of federal economic resources by state governments, local governments, the Federal District Government and their political-administrative bodies shall be carried out observing the bases established in this article and the applicable statutory laws. Revision of the use of such resources shall be made by the specialized state agencies mentioned in the second paragraph of this article.

Public servants shall be accountable, according to the terms stated in the Title Four of this Constitution, for any violation committed against the provisions established in this article.

The public servants working in the federal, state and local governments, as well as the Federal District public servants are always obliged to impartially invest the public resources under their management and not to affect the equity of the competition between political parties.

Propaganda disseminated through any media by the government, the autonomous bodies, the government agencies or any other entity belonging to any of the three levels of government, shall be institutional and shall bring information, education or guiding. Such propaganda cannot include names, images, voices or symbols which imply the promotion of a public servant.

The laws shall, within their field, guarantee enforcement of the two previous paragraphs and shall define penalties to be applied to offenders.

TITLE EIGHT

Constitutional reforms

Article 135. Additions and amendments may be done to this Constitution, but to become a part of it, such additions and amendments must be agreed by the Congress of the Union, by the vote of two-thirds of the members present, and must be approved by the majority of the state legislatures.

The Congress of the Union or the Permanent Committee, as appropriate, shall count the votes of the legislatures and shall announce those additions or amendments that have been approved.

TITLE NINE

The inviolability of the Constitution

Article 136. This Constitution shall not lose force and effect, even if its observance is interrupted by a rebellion. In the event that a government, whose principles are contrary to those that are sanctioned herein, is established through any public disturbance, as soon as the people recover their liberty, its observance shall be re-established, and those who have taken part in the government emanating from the rebellion, as well as those who have cooperated with such persons, shall be judged in accordance with this Constitution and the laws derived from it.

TRANSITORY ARTICLES

First Article.—This Constitution shall be published at once and, with the greatest solemnity, an oath of allegiance to the Constitution must be taken in order to uphold it throughout the Republic; except for the provisions relating to the election of the supreme federal and state powers, which shall enter into force at once. This Constitution will come into force the first day of May 1917. In such date, the Constitutional Congress shall be formally installed, and the citizen elected as the President of the Republic in the next elections shall swear an oath to exercise the office.

In the elections that must be called in accordance with the following article, section V of the Article 82 shall not apply, and to be in active service in the Army shall not be an impediment to become a deputy or senator, provided that such service is not command of forces in the electoral district in question. In the same way, Secretaries and under-Secretaries can be elected for the next Congress of the Union, provided that they definitely resigns their position on the day that the respective call is issued.

Second Article. As soon as this Constitution is published, the President of the Republic shall call for elections for the federal powers, endeavoring to do this in such a way that the Congress shall be organized promptly, since it must declare the winner of the elections for the Presidency, after the count of the votes casted, so that the provisions of the preceding article could be complied.

Third Article. The next constitutional term for deputies and senators shall begin to run on September first of last year, and for the President of the Republic from December 1, 1916.

Fourth Article. Senators bearing even numbers at the next election shall hold office for two years only, in order to change the half of the Senate every two years.

Fifth Article. The Congress of the Union shall elect the magistrates of the Supreme Court of Justice of the Nation next May in order to have the Court installed by June first.

At this election, the Article 96 shall not govern with respect to the proposals of candidates by the local legislatures. However, the elected candidates shall hold office only for the first two-year term established in the Article 94.

Sixth Article. The Congress of the Union shall have an extraordinary period of session, which will begin on April 15, 1917. In such period, the Congress shall become an electoral college to count the votes, approve the election for the President of the Republic and declare the winner. In this same extraordinary period of sessions, the Congress shall enact the Organic Law for the circuit and district courts and the Organic Law for the Federal District courts, so that the Supreme Court of Justice of the Nation may immediately appoint the circuit magistrates and district judges. In addition, the Congress of the Union shall appoint the judges of first instance for the Federal District and shall enact all laws requested by the President of the Republic. The circuit magistrates, the district judges and the magistrates and judges of the Fed-

eral District must assume office before July 1, 1917, at which time those persons who had been appointed by the current President of the Republic shall resign.

Seventh Article. This time only, a counting board must be created for each electoral district. The counting board of the first electoral district in each states and the Federal District shall count the votes for Senators, and these boards shall issue the majority certificate to the senators elected.

Eighth Article. The Supreme Court of Justice of the Nation shall settle the pending Amparo trials, observing the current laws.

Ninth Article. The President of the Republic is empowered to enact the Electoral Law, under which, this time the elections shall be held to create the Powers of the Union.

Tenth Article. Persons who have taken part in the government formed by the rebellion against the legitimate Government of the Republic, or those who cooperated with it, afterwards combating with arms or holding office or employment with the factions that attacked the Constitutional Government, shall be tried under laws in force, unless they have been pardoned by the Constitutional Government.

Eleventh Article. Until the Congress of the Union and the state legislatures enact laws governing the agrarian and labor affairs, the bases established in this Constitution for such affairs shall take effect throughout the country.

Twelfth Article. Mexicans who have fought in the Constitutional Army, and their children and widows, as well as other persons who rendered services to the Revolution or to public education, shall have priority to acquire land according to the Article 27 and shall have the right to discounts specified by Law.

Thirteenth Article. All debts contracted by workers, by reason of their labor, until the date of this Constitution, with employers, their families, or intermediaries are hereby extinguished in full.

Fourteenth Article. The Secretariat of Justice is hereby abolished.

Fifth Article. Hereby, the President of the Republic is empowered to issue the tort Law applicable to the offenders, accomplices and accessories to the crimes perpetrated against the constitutional order during the month of February 1913 and against the Constitutional Government.

Sixteenth Article. The Constitutional Congress, in the next ordinary period of sessions starting on September 1 this year, shall enact all organic laws of this Constitution that have not already been enacted in the extraordinary period of sessions mentioned in the sixth transitory article. The Congress shall give priority to laws related to fundamental rights and to the Articles 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 and the last part of the Article III of this Constitution.

Seventeen Article. Churches, temples and other properties belonging to the Federal Government, based on the provisions established in the section II of the Article 27 of this Constitution, which is reformed through this decree, shall maintain their current legal status.

This Constitution has been issued in the Congress Chamber in Queretaro on January 31, 1917. President: Luis Manuel Rojas. For the State of Aguascalientes: Daniel Cervantes, Aurelio L. González. For the State of Baja California: Ignacio Roel. For the State of Coahuila: Manuel Aguirre Berlanga, Manuel Cepeda Medrano, Ernesto Meade Fierro, José María Rodríguez, José Rodríguez González, Jorge E. Von Versen. For the State of Colima: Francisco Ramírez Villareal. For the State of Chiapas: Vidal J. Amilcar, Lisandro López, Cristóbal Castillo Llavén, Enrique Suárez, Daniel A. Zepeda. For the State of Chihuahua: Manuel M. Prieto. For the Territory of the Federal District: Ciro B. Cevallos, Rafael L. de los Ríos, Carlos Duplán, Francisco Espinosa, Alfonso Herrera, Lauro López Guerra, Amador Lozano, Rafael Martínez, Antonio Norzagaray, Félix Palavicini, Ignacio L. Pesqueira, Román Rosas y Reyes, Arnulfo Silva, Gerzayn Ugarte. For the State of Durango: Fernando Castaños, Jesús de la Torre, Silvestre Dorador, Rafael Ezpeleta, Fernando Gómez Palacio, Antonio Gutiérrez, Alberto Terrones Benítez. For the State of Guanajuato: Luis M. Alcocer, Manuel G. Aranda, Nicolás Cano, Enrique Colunga, Francisco Díaz Barriga, Luis Fernández Martínez, Ramón Frausto, Fernando Lizardi, Ignacio López, Jesús López Lira, José Natividad Macías, Antonio Madrazo, Santiago Manrique, Hilario Medina, Gilberto M. Navarro, David Peñaflo, Carlos Ramírez Llaca, Vicente M. Valtierra, José Villaseñor Lomelí. For the State of Guerrero: Francisco Figueroa, Fidel R. Guillén, Fidel Jiménez. For the State of Hidalgo: Crisóforo Aguirre, Alfonso Cravioto, Alberto M. González, Antonio Guerrero, Federico E. Ibarra, Alfonso Mayorga, M. Refugio Mercado, Ismael Pintado Sánchez, Matías Rodríguez, Leopoldo Ruiz, Rafael Vega Sánchez. For the State of Jalisco: Amado Aguirre, Joaquín Aguirre Berlanga, Sebastián Allende, Gaspar Bolaños V., Ramon C. y Castañeda, Esteban B. Calderón, Marcelino Dávalos, Manuel Dávalos Ornelas, Ernesto E. Ibarra, Francisco Labastida Izquierdo, Paulino Machorro y Narváez, José Manzano, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, Rafael Ochoa, Ignacio Ramos Praslow, Juan de Dios Robledo, Luis Manuel Rojas, Jose I. Solórzano, Jorge Villaseñor, Carlos Villaseñor. For the State of México: Antonio Aguilar, Donato Bravo Izquierdo, Enrique A. Enríquez, José E. Franco, Juan Manuel Gifard, Manuel A. Hernández, Rubén Martí, Fernando Moreno, Enrique O'Farril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Aldegundo Villaseñor. For the State of Michoacán: Salvador Alcaraz Romero, Alberto Alvarado (Sub.), José Álvarez, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Amadeo Betancourt, Martín Castrejón, Gabriel R. Cervera, Onésimo López Couto, Manuel Martínez Solórzano, Rafael Márquez, Francisco J. Múgica, Alberto Peralta, Jesús Romero Flores, José P. Ruiz, José Silva Herrera. For the State of Morelos: Álvaro L. Alcazar, Antonio Garza Zambrano, José L. Gómez. For the State of Nuevo León: Manuel Almaya, Ramón Gámez, Agustín Garza González, Reynaldo Garza, Luis Ilazilaliturri, Plutarco González (Sub.), Lorenzo Sepúlveda (Sub.), Nicéforo Zambrano. For the State of Oaxaca: Luis Espinoza, Manuel Herrera, José F. Gómez (Sub.), González Torres, Juan Sánchez, Porfirio Sosa, Leopoldo Payán, Celestino Pérez, Crisóforo Rivera Cabrera. For the State of Puebla: Gabino Bandera y Malta, Alfonso Cabrera, Rafael P.

Cañete, Froilán Cruz Manjarrez, Antonio de la Barrera, Gilberto de la Fuente, Porfirio del Castillo, Federico Dinorín, Salvador R. Guzmán, Epigmenio A. Martínez, Luis T. Navarro, David Pastrana Jaimes, José Rivera, Pastor Rouaix, Gabriel Rojano, Miguel Rosales, Leopoldo Vázquez Mellado, Jose Verástegui. For the State of Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía, José María Truchuelo. For the State of San Luis Potosí: Rafael Curiel, Cosme Dávila (Sub.), Samuel de los Santos, Rafael Martínez Mendoza (Sub.), Arturo Méndez, Rafael Nieto, Gregorio A. Tello, Dionisio Zavala. For the State of Sinaloa: Cándido Avilés, Emiliano C. García, Carlos M. Ezquerro, Andrés Magallón, Pedro R. Zavala. For the State of Sonora: Juan de Dios Bojórquez (Sub.), Flavio A. Bórquez, Luis G. Monzón, Ramón Ross. For the State of Tabasco: Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes. For the State of Tamaulipas: Pedro A. Chapa, Fortunato de Leija, Zeferino Fajardo, Emiliano P. Nafarrete. For the State of Tepic: Marcelino Cedano (Sub.), Juan Espinosa Bávara, Cristóbal Limón. For the State of Tlaxcala: Modesto González Galindo, Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal. For the State of Veracruz: Cándido Aguilar, Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Victorio E. Góngora, Carlos L. Gracidas (Sub.), Heriberto Jara, Ángel S. Juarico, Josafat F. Márquez, Enrique Meza (Sub.), Benito Ramírez G., Saúl Rodiles, Alfredo Solares, Marcelo Torres. For the State of Yucatán: Miguel Alonso Romero, Antonio Ancona Albertos, Enrique Recio, Héctor Victoria. For the State of Zacatecas: Julián Adame, Juan Aguirre Escobar, Andrés L. Arteaga, Samuel Castañón, Antonio Cervantes, Jairo R. Dyer, Adolfo Villaseñor.

Therefore, I order it to be printed, circulated and published through solemn edict and proclamation in the entire Republic for its due compliance.

Given in the National Palace of the city of Querétaro, in February 5th, 1917. V. Carranza. Signature.

To the citizen Manuel Aguirre Berlanga, Sub secretary in charge of the Dispatch of State. México.

II.4. NUMBER OF REFORMS TO THE ARTICLES OF THE POLITICAL CONSTITUTION OF MÉXICO.

Article	Reforms	Article	Reforms	Article	Reforms
1	3	46	3	93	6
2	3	48	1	94	12
3	10	49	2	95	5
4	13	51	2	96	2
5	5	52	8	97	10
6	6	53	3	98	5
7	1	54	8	99	6
10	1	55	8	100	5
11	1	56	5	101	4
14	1	58	3	102	8
15	1	59	2	103	3
16	6	60	6	104	10
17	4	61	1	105	12
18	8	62	1	106	3
19	4	63	3	107	16
20	7	65	5	108	9
21	6	66	2	109	2
22	6	67	1	110	8
24	2	69	4	111	11
25	5	70	1	112	1
26	6	71	3	113	3
27	19	72	2	114	2
28	10	73	68	115	15
29	4	74	17	116	13
30	4	75	1	117	6
31	5	76	15	119	4
32	3	77	2	120	1
33	1	78	7	121	1
34	2	79	15	122	13
35	4	82	8	123	25
36	4	83	5	124	1
37	3	84	4	125	1
40	2	85	3	127	4
41	11	87	1	130	2
42	2	88	2	131	3
43	7	89	17	133	2
44	2	90	3	134	4
45	6	92	2	135	2

Number of articles of the Constitution

136

Articles reformed

114

Articles without reforming

22

Total of reforms (February 23, 2016)

617 Articles, 2 Titles, 1 Chapter

12. CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

12.1. EXTRACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Artículo I

- Sección 1.* Los poderes legislativos residen en un Congreso, compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados.
- Sección 2.* Composición de la Cámara de Representantes.
- Sección 3.* Composición de la Cámara de Senadores.
- Sección 4.* Las asambleas legislativas de cada Estado deberán fijar la fecha, lugar y modo de celebrar las elecciones de representantes y senadores, así como la obligación de reunirse por lo menos una vez al año.
- Sección 5.* Cada Cámara es el único juez de las elecciones y de capacidad de sus propios miembros. La mayoría de cada una de ellas constituirá quórum para realizar sus actividades, deben adoptar un reglamento y llevar un Diario de Sesiones.
- Sección 6.* Remuneraciones y restricciones a los senadores y representantes.
- Sección 7.* Origen de las leyes y del proceso legislativo.
- Sección 8.* Facultades del Congreso.
- Sección 9.* Imposición de impuestos o derechos a la importación; suspensión del privilegio de *habeas corpus*; no aplicación de decretos de proscripción, ni *leyes ex post facto*; no imposición de contribuciones o derechos a las exportaciones de cualquier Estado; no habrá preferencia de reglamento de comercio o de rentas internas de un Estado sobre otro; no habrá retiro de cantidad alguna del Tesoro sino es como consecuencias de asignaciones por ley; no se concederán títulos de nobleza ni nadie podrá aceptar donativo, emolumento, empleo o título de clase alguna, sino por consentimiento del Congreso.
- Sección 10.* Prohibición a los estados de celebrar tratados, alianza o confederación alguna y de fijar impuestos o derechos sobre importaciones o exportaciones sin la aprobación del Congreso.

Artículo II

Sección 1. El Poder Ejecutivo reside en el Presidente de los Estados Unidos de América y de su elección.

Sección 2. El Presidente es el Comandante en Jefe del Ejército y de la Armada.

Sección 3. Obligación del Presidente de informar periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y las recomendaciones que considere pertinentes.

Sección 4. Destitución de los cargos de Presidente, Vicepresidente y funcionarios civiles.

Artículo III

Sección 1. El Poder Judicial reside en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales inferiores.

Sección 2. Jurisdicción de la Corte Suprema.

Sección 3. Delito de traición contra los Estados Unidos.

Artículo IV

Sección 1. Fe de los estados.

Sección 2. Derecho de los ciudadanos de disfrutar los privilegios e inmunidades de los estados; derecho de los estados de solicitar a otro Estado sea devuelta alguna persona que haya cometido algún delito; obligación a servir en un Estado.

Sección 3. Unión de nuevos estados.

Sección 4. Forma de gobierno republicana para los estados y protección de ellos contra invasión y violencia interna.

Artículo V

Facultad del Congreso de proponer enmiendas a la Constitución.

Artículo VI

Validez de las deudas adquiridas antes de esta Constitución y supremacía de las leyes y tratados celebrados.

Artículo VII

La Constitución rige en los estados que la ratifiquen.

ENMIENDA I

Libertad de religión, palabra, prensa y de reunión.

ENMIENDA II

Derecho de portar armas.

ENMIENDA III

En tiempos de paz y de guerra, no habrá alojamiento de soldados sin consentimiento del propietario.

ENMIENDA IV

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y bienes, sino es mediante orden, apoyada por juramento o declaración solemne.

ENMIENDA V

Garantías de seguridad jurídica.

ENMIENDA VI

En causas criminales, derecho a un juicio rápido, público y ante un jurado imparcial.

ENMIENDA VII

En litigios de derecho común, derecho a un juicio por jurado y sus resoluciones no son revisables por otro tribunal, salvo las reglas previstas.

ENMIENDA VIII

Prohibición de fianzas y multas excesivas y de castigos crueles.

ENMIENDA IX

Catálogo enunciativo más no restrictivo de derechos.

ENMIENDA X

Poderes reservados a los Estados.

ENMIENDA XI

Restricción del Poder Judicial de los Estados Unidos contra ciudadanos de otro Estado.

ENMIENDA XII

Elección de Presidente y Vicepresidente,

ENMIENDA XIII

Sección 1. Prohibición de la esclavitud y servidumbre involuntaria.

Sección 2. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus determinaciones.

ENMIENDA XIV

Sección 1. Requisitos para ser ciudadano estadounidense. Prohibición de leyes que restrinjan sus privilegios o inmunidades, sino es mediante el debido proceso.

Sección 2. División de los representantes de los Estados.

Sección 3. Prohibición de ser Senador o Representante o elector para elegir Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos quien haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión, salvo que las dos terceras parte de cada Cámara subsanen dicha incapacidad.

Sección 4. Validez de la deuda pública autorizada por ley. No se pagará aquella que hubiese sido contraída en ayuda de insurrección o rebelión contra Estados Unidos.

Sección 5. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus disposiciones.

ENMIENDA XV

Sección 1. Prohibición de negar o limitar el sufragio de los ciudadanos por discriminación.

Sección 2. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus disposiciones.

ENMIENDA XVI

Facultad del Congreso para imponer y recaudar contribuciones sobre ingresos.

ENMIENDA XVII

Composición del Senado, de su duración y elección.

ENMIENDA XVIII

Sección 1. Prohibición de fabricar, vender o transportar bebidas embriagantes dentro de los Estados Unidos y de los territorios sujetos a su jurisdicción.

Sección 2. Facultad de los Congresos de los Estados de hacer cumplir sus disposiciones.

Sección 3. Sólo tendrá efecto si es ratificado como enmienda dentro de los siete años.

ENMIENDA XIX

Prohibición de desconocer o limitar el derecho de sufragio por razón de sexo. Facultad del Congreso para hacer cumplir este artículo.

ENMIENDA XX

Sección 1. Conclusión del encargo del Presidente y Vicepresidente.

Sección 2. Periodo de sesiones del Congreso.

Sección 3. Muerte del Presidente o falta de requisitos de él o del Vicepresidente.

Sección 4. Facultad del Congreso para preveer mediante ley la falta de Presidente y Vicepresidente.

Sección 5. Entrada en vigor de las secciones 1 y 2.

Sección 6. Ratificación de la enmienda.

ENMIENDA XXI

Sección 1. Deroga la enmienda decimoctava.

Sección 2. Prohibición de transportar o importar licores embriagantes dentro del territorio en contravención a las leyes.

Sección 3. Ratificación de la enmienda.

ENMIENDA XXII

Sección 1. Prohibición de elegir más de dos veces a una persona para el cargo de Presidente.

Sección 2. Ratificación de la enmienda.

ENMIENDA XXIII

Sección 1. Elección de Presidente y Vicepresidente en el distrito sede del Gobierno de los Estados Unidos.

Sección 2. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus disposiciones.

ENMIENDA XXIV

Sección 1. Prohibición de restringir o negar el derecho a votar por no haber pagado un impuesto electoral o cualquier otro impuesto.

Sección 2. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus disposiciones.

ENMIENDA XXV

Sección 1. Casos de falta de Presidente.

Sección 2. Vacante en el cargo de Vicepresidente.

Sección 3. Presidente Interino por escrito de incapacidad del Presidente.

Sección 4. Escrito de incapacidad presentado por el Vicepresidente y otros, de que el Presidente es incapaz.

ENMIENDA XXVI

Sección 1. Prohibición de negar o limitar el sufragio por razón de edad a los ciudadanos de dieciocho años o más.

Sección 2. Facultad del Congreso para hacer cumplir sus disposiciones.

ENMIENDA XXVII

Prohibición de la retroactividad de la ley que varíe la remuneración de los senadores y representantes.

12.2. CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

54 Secciones, 7 Artículos, 27 Enmiendas

Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, proveer para la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

Artículo I

Sección 1. Todos los poderes legislativos otorgados por esta Constitución residirán en un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes.

Sección 2. La Cámara de Representantes se compondrá de miembros elegidos cada dos años por el pueblo de los distintos Estados, y los electores en cada Estados cumplirán con los requisitos exigidos a los electores de la rama más numerosa de la asamblea legislativa de dicho Estado.

No podrá ser representante ninguna persona que no haya cumplido los veinticinco años de edad, que no haya sido durante siete años ciudadano de los Estado Unidos y que, al tiempo de su elección, no resida en el Estado que ha de elegirlo.

Tanto los representantes como las contribuciones directas (Modificada por la Decimosexta Enmienda) se prorratearán entre los diversos Estados que integren esta Unión, de acuerdo al número respectivo de sus habitantes, el cual se determinará añadiendo al número total de personas libres, incluyendo a las que estén obligadas al servicio por determinado número de años, y excluyendo a los indios que no paguen contribuciones, las tres quintas partes de todas las demás (Denegada por Decimocuarta Enmienda). Se efectuará el censo dentro de los tres años de la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos y en lo sucesivo cada diez años, en la forma en que éste lo disponga por ley. No habrá más de un representante por cada treinta mil habitantes, pero cada Estado tendrá por lo menos un representante. Y hasta que se realice el censo, el Estado de New Hampshire tendrá derecho de elegir tres representantes; Mas-

sachusetts, ocho; Rhod Island y las Plantaciones de Providence, uno; Connecticut, cinco; New York, seis; New Jersey, cuatro; Pensylvania, ocho; Delawere, uno; Maryland, seis; Virginia, diez; Carolina del Norte, cinco; Carolina del Sur, cinco y Georgia, tres.

Cuando ocurran vacantes en las representaciones de cualquier Estado, la autoridad ejecutiva de este promulgará autos para la celebración de elecciones para cubrirlas.

La Cámara de Representantes elegirá su Presidente y demás funcionarios y tendrá la facultad exclusiva de iniciar procedimientos de residencia.

Sección 3. El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos por sus respectivas asambleas por el término de seis años. Cada senador tendrá un voto.

Tan pronto como se reúnan [los senadores] en consecuencia de la primera elección, se les dividirá en tres grupos de lo más iguales posible. El puesto de los senadores del primer grupo quedará vacante al finalizar el segundo año; el segundo grupo, al finalizar el cuarto año, y el del tercer grupo, al finalizar el sexto año, de forma que cada dos años se renueve una tercera parte de sus miembros. Si ocurren vacantes por renuncia o por cualquier otra causa, mientras esté en receso la asamblea legislativa del Estado respectivo, la autoridad ejecutiva del mismo podrá hacer nombramientos provisionales hasta la próxima sesión de la asamblea legislativa, la que entonces cubrirá tales vacantes.

No podrá ser senador quien no haya cumplido treinta años de edad, no haya sido durante nueve años ciudadano de los Estados Unidos y no resida, al tiempo de su elección, en el Estado que ha de elegirlo.

El Vicepresidente de los Estados Unidos será Presidente del Senado, pero no tendrá voto, excepto en caso que los votos estén igualmente divididos.

El Senado elegirá sus demás funcionarios, así como, también un Presidente *pro tempore* en ausencia del Vicepresidente o cuando éste desempeñe el cargo de Presidente de los Estados Unidos.

Tan sólo el Senado tendrá el poder de hacer juicios en procedimientos de destitución. Cuando se reúnan con este fin, los senadores estarán bajo juramento o declaración solemne. Si se destituye al Presidente de los Estados Unidos, presidirá la sesión el juez Presidente de la Corte Suprema. Nadie será convicto sin que concurran las dos terceras partes de los miembros presentes.

La sentencia en procedimientos de destitución no podrá exceder de la destitución del cargo e inhabilitación para obtener y desempeñar ningún cargo de honor, confianza o de retribución en el gobierno de los Estados Unidos; pero el individuo convicto quedará, no obstante, sujeto a ser acusado, juzgado, sentenciado y castigado de acuerdo a la ley.

Sección 4. La fecha, lugar y modo de celebrar las elecciones de senadores y representantes se determinarán por la asamblea legislativa de cada Estado; pero el Congreso podrá en cualquier momento, mediante legislación pertinente, hacer o modificar tales disposiciones, excepto en relación al lugar donde se habrá de elegir a los senadores.

El Congreso se reunirá por lo menos una vez al año y tal sesión comenzará el primer lunes de diciembre, a no ser que por ley se fije otro día.

Sección 5. Cada Cámara será el único juez de las elecciones, de los resultados de las mismas y de la capacidad de sus propios miembros; y la mayoría de cada una de ellas constituirá quórum para realizar sus actividades; pero un número menor podrá aplazar de día en día y estará autorizado para completar la asistencia de los miembros ausentes, en la forma y bajo las penalidades que determine cada Cámara. Cada Cámara adoptará su reglamento, podrá castigar a sus miembros por conducta impropia y expulsar a un miembro con el voto de dos terceras partes.

Cada Cámara tendrá un Diario de Sesiones, que publicará periódicamente, con excepción de las partes, que a su juicio, deban mantenerse en secreto; y al pedido de la quinta parte de los miembros presentes, se harán constar diario los votos afirmativos y negativos de los miembros de una u otra Cámara sobre cualquier asunto. Mientras esté reunido en el Congreso, ninguna Cámara podrá sin el consentimiento de la otra levantar sus sesiones por más de tres días, ni reunirse en otro lugar que no sea aquel en que las dos estén instaladas.

Sección 6. Los Senadores y Representantes recibirán por sus servicios una remuneración fijada por la ley y pagadera por el Tesorero de los Estados Unidos. Mientras asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como mientras se dirijan a ellas o regresen de las mismas, no podrán ser arrestados, excepto en casos de traición, delito grave o alteración al orden público. Tampoco podrán ser interrogados fuera de la Cámara por ninguno de sus discursos o debates en ella.

Ningún Senador o Representante, mientras dure el término por el cual fue elegido, será nombrado para ningún cargo civil bajo la autoridad de los Estados Unidos, que hubiese sido creado o cuyos emolumentos hubiesen sido aumentados durante tal término; y nadie que desempeñe un cargo bajo la autoridad de los Estados Unidos podrá ser miembro de ninguna de las Cámaras mientras ocupe tal cargo.

Sección 7. Todo proyecto de ley para imponer contribuciones se originará en la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer enmiendas o concurrir en ellas como en los demás proyectos de ley.

Todo proyecto que haya sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, antes de convertirse en ley, será sometido al Presidente de los Estados Unidos. Si él lo aprueba, lo firmará; y si no, lo devolverá con sus objeciones a la Cámara en donde se originó el proyecto, la que anotará en su Diario las objeciones íntegramente, y procederá a reconsiderarlo. Si después de tal reconsideración las dos terceras partes de dicha Cámara convienen en aprobar el proyecto, éste se enviará, junto con las objeciones a la otra Cámara, la que también lo reconsiderará y si resultara ser aprobado por las dos terceras partes de sus miembros, se convertirá en ley. En todos los casos, la votación en cada Cámara será nominal y los votos en pro y en contra del proyecto, así como los nombres de los votantes se inscribirán en el Diario de cada una de ellas. Si el Presidente no devuelve el proyecto de los diez días (excluyendo los domingos),

después de haberle sido presentado, dicho proyecto se convertirá en ley, tal cual si lo hubiese firmado, a no ser que, por haberlo aplazado, el Congreso impida su devolución; en tal caso el proyecto no se convertirá en ley.

Toda orden, resolución o votación que requiera la concurrencia del Senado y de la Cámara de Representantes (excepto cuando se trate de levantar las sesiones) se presentará al Presidente de los Estados Unidos; y no tendrá efecto hasta que este la apruebe o, en caso de ser desaprobada por él, hasta que dos terceras partes del Senado y de la Cámara la aprueben nuevamente, de acuerdo a las reglas y restricciones prescritas para los proyectos de ley.

Sección 8.

El Congreso tendrá la facultad:

- Para imponer y recaudar contribuciones, derechos [de aduanas, consumo, etc.], impuestos y arbitrios; para pagar deudas y proveer para la defensa común y el bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los derechos, impuestos y arbitrios serán uniformes a través de los Estados Unidos.
- Para tomar dinero a préstamo con cargo al crédito de los Estados Unidos.
- Para reglamentar el comercio con naciones extranjeras, así como entre los diferentes Estados y con las tribus indias.
- Para establecer una regla uniforme de naturalización y leyes uniformes de quiebras a través de los Estados Unidos.
- Para acuñar moneda, reglamentar el valor de esta y de la moneda extranjera, y fijar normas de pesas y medidas.
- Para fijar penas por las falsificaciones de los valores y de la moneda de los Estados Unidos.
- Para establecer oficinas de correos y vías postales.
- Para fomentar el progreso de las ciencias y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos.
- Para establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema.
- Para definir y castigar la piratería y las felonías graves cometidas en alta mar, así como las infracciones al derecho internacional.
- Para declarar la guerra, conceder patentes de corso y represalia y establecer reglas relativas a capturas en mar y tierra.
- Para reclutar y mantener ejércitos; pero ninguna asignación para este fin lo será por un periodo mayor de dos años.
- Para formar y mantener una armada.
- Para establecer reglas para el gobierno y reglamentación de las fuerzas de mar y tierra.
- Para dictar reglas para llamar a la milicia para hacer cumplir las leyes de la Unión, suprimir insurrecciones y rechazar invasiones.

- Para proveer para la organización, armamento y disciplina de la milicia y el gobierno de aquella parte de ella que estuviese al servicio de los Estados Unidos, reservando a los Estados los respectivos nombramientos de los oficiales y autoridades para adiestrar a la milicia de acuerdo con la disciplina prescrita por el Congreso.

- Para ejercer legislación exclusiva en todas las materias concernientes a aquel distrito (que no excederá de diez mil millas cuadradas) que, por cesión de algunos Estados y aceptación del Congreso, se convirtiese en la sede del gobierno de los Estados Unidos; y para ejercer igual autoridad sobre todas aquellas tierras adquiridas con el consentimiento de la asamblea legislativa del Estado en que se encuentren, con el fin de construir fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios que sean necesarios, y

- Para aprobar todas las leyes que sean necesarias y apropiadas para poner en práctica las facultades precedentes, así como todas aquellas que en virtud de esta Constitución puedan estar investidas en el gobierno de los Estados Unidos o en cualquiera de sus departamentos o funcionarios.

Sección 9. Antes del año 1808, el Congreso no podrá prohibir la inmigración o importación de aquellas personas cuya admisión considere conveniente cualquiera de los Estados existentes; pero podrá imponer un impuesto o derecho a tal importación que no excederá diez dólares por persona.

No se suspenderá el privilegio del auto de habeas corpus, a menos que, en caso de rebelión o invasión, la seguridad pública así lo exija.

No se aplicarán decretos de proscripción ni leyes *ex post facto*.

No se impondrá capacitación u otra contribución directa, sino en proporción al censo o enumeración que esta Constitución ordene que se lleve a cabo.

No se impondrán contribuciones o derechos sobre los artículos que se exporten de cualquier Estado.

No se dará preferencia, por ningún reglamento de comercio o de rentas internas, a los puertos de un Estado sobre los de otro; tampoco podrá obligarse a las embarcaciones que se dirijan a un Estado o salgan de él, a que entren, descarguen y paguen derechos de otro.

No se podrá retirar cantidad alguna del Tesoro sino como consecuencias de asignaciones hechas por ley; y periódicamente se publicará una declaración de cuentas de los ingresos y egresos públicos.

Los Estados Unidos no concederán títulos de nobleza; y ninguna persona que desempeñe bajo la autoridad del gobierno un cargo retribuido o de confianza podrá aceptar, sin el consentimiento del Congreso, donativo, emolumento, empleo o título de clase alguna, de ningún rey, príncipe o Nación extranjera.

Sección 10. Ningún Estado celebrará tratado, alianza o confederación alguna; concederá patente de corso o represalia; acuñará moneda; emitirá cartas de crédito; hará pago de deudas en otro numerario que no sea oro y plata; aprobará ningún proyecto

de ley para condenar sin celebración de juicio, ley de *ex post facto*, o que menoscabe la obligación de los contratos, ni concederá títulos de nobleza.

Ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, fijar impuestos o derechos sobre las importaciones o exportaciones, excepto cuando sea absolutamente necesario para hacer cumplir sus leyes de inspección; y el producto neto de todos los derechos e impuestos que fije cualquier Estado sobre las importaciones o exportaciones, ingresará en el Tesoro de los Estados Unidos; todas las leyes quedarán sujetas a la revisión y dirección del Congreso.

Ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, fijar derecho alguno de tonelaje, ni mantener tropas o embarcaciones de guerra en tiempos de paz, ni celebrar acuerdos o pactos con otro Estado o con potencias extranjeras, ni entrar en guerra, a menos que fuese de hecho invadido o estuviese en peligro tan inminente que su defensa no admita demora.

Artículo II

Sección 1. El Poder Ejecutivo residirá en el Presidente de los Estados Unidos de América. Este desempeñará sus funciones por un término de cuatro años y junto con el Vicepresidente, escogido para el mismo término, se elegirá de la siguiente manera:

Cada Estado designará, en la forma que lo prescriba su asamblea legislativa, un número de electores igual al número total de Senadores y Representantes que le corresponda en el Congreso; pero no será nombrado elector ningún Senador o Representante que ocupe un cargo de confianza o sea retribuido bajo la autoridad de los Estados Unidos.

Los electores se reunirán en sus respectivos Estados y votarán bajo votación secreta por dos personas, de las cuales, por lo menos una será residente del mismo Estado que ellos. Harán una lista de las personas quienes se hayan votado, así como del número de votos que obtengan cada una. [Los electores] firmarán y certificarán esta lista y la remitirán sellada a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigida al Presidente del Senado. En presencia del Senado y de la Cámara de Representantes, el Presidente del Senado abrirá todos los certificados y se contarán los votos. Será Presidente la persona que obtengan el mayor número de votos. Será Presidente la persona que obtenga el mayor número de votos si dicho número es la mayoría del número total de electores designados; si más de una persona obtiene tal mayoría y recibe el mismo número de votos, entonces, de entre ellas, la Cámara de Representantes, por votación secreta, elegirá al Presidente de entre las cinco personas que hayan obtenido más votos en la lista. Pero en la elección de Presidente, la votación será por Estados, con un voto para la representación de cada Estado. Para este fin, el quórum consistirá en uno o más miembros de las dos terceras partes de las Representaciones de los Estados, y para que haya elección será necesaria una mayoría en todos los Estados. En cualquier caso, una vez elegido el Presidente, será Vicepresidente la persona que obtenga el mayor número de votos de los electores. Pero si hay dos o más con un número igual de votos,

el Senado, por votación secreta, elegirá entre ellas al Vicepresidente (Revisada por la Decimosegunda Enmienda).

El Congreso determinará la fecha de seleccionar a los electores y el día que habrán de votar; y el día será el mismo en todos los Estados Unidos.

No será elegible para el cargo de Presidente quien no sea ciudadano por nacimiento o ciudadano al tiempo que se adopte esta Constitución; tampoco lo será quien no haya cumplido los treinta y cinco años de edad y no haya residido catorce años en los Estados Unidos.

En el caso de destitución, muerte, renuncia o incapacidad para desempeñar las funciones de su cargo, éste cargo pasará al Vicepresidente; en caso de destitución, muerte, renuncia o incapacidad tanto del Presidente como del Vicepresidente, el Congreso dispondrá, mediante legislación, quién desempeñará la Presidencia y tal funcionario ejercerá el cargo hasta que cese la incapacidad o se elija un nuevo Presidente.

Como remuneración por sus servicios el Presidente recibirá, en las fechas que se determinen, una compensación, que no podrá ser aumentada ni disminuida durante el tiempo para el cual se eligió y no recibirá durante dicho término ningún otro emolumento de los Estados Unidos ni de ninguno de los Estados.

Antes de comenzar a desempeñar su cargo, el Presidente prestará el siguiente juramento o declaración solemne; *Juro (o declaro) solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de Presidente de los Estados Unidos y que de la mejor manera a mi alcance, guardaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos.*

Sección 2. El Presidente será el Comandante en Jefe del Ejército y de la Armada de los Estados Unidos, así como de la milicia de los distintos Estados cuando ésta sea llamada al servicio activo de los Estados Unidos; podrá exigir opinión por escrito al jefe de cada departamento ejecutivo, sobre cualquier asunto que se relacione con los deberes de sus respectivos cargos, y tendrá facultad para suspender la ejecución de sentencias y para indultar por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de destitución.

Con el consejo y consentimiento del Senado, tendrá poder para firmar tratados, siempre que concurran en ellos las dos terceras partes de los Senadores presentes; asimismo, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará embajadores, otros ministros y cónsules públicos, los jueces de la Corte Suprema y todos los demás funcionarios de los Estados Unidos cuyos cargos se establezcan por ley y cuyos nombramientos esta Constitución no prescriba; pero por ley El Congreso podrá confiar el nombramiento de aquellos funcionarios subalternos que crea prudente, únicamente al Presidente, a los tribunales de justicia o a los jefes de departamento.

El Presidente tendrá el poder para cubrir todas las vacantes que ocurran durante el receso del Senado, otorgando nombramientos que expiran al finalizar la próxima sesión del Senado.

Sección 3. El Presidente informará periódicamente al Congreso sobre el estado de la Unión y le recomendará para su consideración aquellas medidas que estime neces-

rias y convenientes; podrá, en ocasiones extraordinarias, convocar a ambas Cámaras o a una de ellas, y en caso de que las Cámaras no estuviesen de acuerdo en cuanto a la fecha para recesar, el Presidente podrá fijarla según lo juzgue apropiado; [el Presidente] recibirá a los embajadores y demás miembros públicos; velará por el fiel cumplimiento de las leyes y nombrará todos los funcionarios de los Estados Unidos.

Sección 4. El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de su cargo mediante procedimientos de destitución por previa acusación y fallo condenatorio por traición, soborno u otros delitos graves y delitos menores.

Artículo III

Sección 1. El Poder Judicial de los Estados Unidos, residirá en una Corte Suprema y en aquellos tribunales inferiores que periódicamente el Congreso instituya y establezca. Los jueces, tanto de la Corte Suprema como tribunales inferiores, desempeñarán su cargo, mientras observen buena conducta y en determinadas fechas recibirán por sus servicios una compensación que no será rebajada mientras desempeñen su cargo.

Sección 2. El Poder Judicial se extenderá a todo caso que en derecho y equidad surja de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos, así como de tratados celebrados o que se celebren bajo su autoridad; a todos los casos que afecten a embajadores y a otros ministros y cónsules públicos: a todos los casos almirantazgo y jurisdicción marítima; a todas las controversias en que los Estados Unidos sea parte; (Modificada por Decimoséptima Enmienda) a las controversias entre dos más Estados; entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado; entre los ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras en virtud de concesiones hechas por diversos Estados y entre un Estado o sus ciudadanos y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.

La Corte Suprema tendrá jurisdicción en todos los casos que afecten a embajadores, ministros y cónsules públicos y en aquellos en que un Estado sea parte. De todos los demás casos antes mencionados la Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación, tanto en cuestiones de derecho como de hecho con las excepciones y bajo la reglamentación que establezca el Congreso.

Todas las causas criminales se juzgarán ante jurado, excepto las que den lugar al procedimiento de destitución; y el juicio se celebrará en el Estado en que se cometió el delito; si no se cometió en ningún Estado, se celebrará el juicio en el sitio o en los sitios que el Congreso ordene por ley.

Sección 3. El delito de traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en hacer la guerra contra ellos o en unirse a sus enemigos, dándole ayuda y confortación. Nadie será convicto de traición sino por el testimonio de dos testigos del mismo hecho evidente o por confesión en corte abierta.

El Congreso tendrá poder para fijar la pena correspondiente al delito de traición, pero la sentencia por traición no tendrá efectos en los herederos del culpable ni

llevará consigo la confiscación de sus bienes, excepto durante la vida de la persona sentenciada.

Artículo IV

Sección 1. Se dará entera fe y crédito en cada Estado a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de los otros Estados. El Congreso podrá prescribir mediante leyes generales la manera de probar tales actos, documentos y procedimientos, así como sus efectos.

Sección 2. Los ciudadanos de cada Estado disfrutarán de todos los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de otros Estado.

Toda persona acusada de traición, delito grave o cualquier otro delito, que huyese de la justicia y fuese hallada de otro Estado, a solicitud de la autoridad ejecutiva del Estado de donde se fugó, será entregada a dicha autoridad para ser devuelta al Estado que tenga jurisdicción para juzgar sobre el delito.

Ninguna persona obligada a servir o trabajar en un Estado, bajo las leyes allí vigentes, huyese a otro Estado, será dispensada de prestar dicho servicio o trabajo amparándose en las leyes o reglamentos del Estado al cual se acogiese, sino que será entregada a petición de la parte que tuviese derecho a dicho servicio o trabajo.

Sección 3. El Congreso podrá admitir nuevos Estados a esta Unión; pero no se formará ni establecerá ningún Estado nuevo dentro de la jurisdicción de ningún otro Estado por unión de dos o más Estados, sin el consentimiento tanto de las asambleas legislativas de los Estados en cuestión como del Congreso.

El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios relacionados u otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos; nada en esta Constitución se interpretará en forma tal que pueda perjudicar cualesquiera reclamaciones de los Estados Unidos o de algún Estado en particular.

Sección 4. Los Estados Unidos garantizará a cada Estado de esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerá a cada uno de ellos contra toda invasión; y cuando lo solicite la asamblea legislativa o el ejecutivo (si no pudiese convocar a la legislatura), le protegerá contra violencia interna.

Artículo V

El Congreso propondrá enmiendas a esta Constitución, siempre que dos terceras partes de las dos cámaras lo estimen necesario, o a petición de las dos terceras partes de las asambleas legislativas de los Estados, se convocará a una convención para proponer las enmiendas, las cuales, en uno u otro caso serán válidas, para todos los fines y propósitos, como parte de esta Constitución, cuando las ratifiquen las tres cuartas partes de las asambleas legislativas de los Estados, o las convenciones celebradas en las tres cuartas partes de los mismos, de acuerdo con uno o el otro modo de ratificación propuesto por el Congreso; disponiéndose que ninguna enmienda antes del año mil ochocientos ocho afectará de modo alguno la primera y la cuarta cláusula de la novena sección

del primer artículo; y que no se privará a ningún Estado, sin su consentimiento, de la igualdad de sufragio en el Senado.

Artículo VI

Todas las deudas y obligaciones contraídas antes de promulgarse esta Constitución, serán tan válidas en los Estados Unidos bajo esta Constitución como lo eran bajo la Confederación.

La presente Constitución, las leyes de los Estados Unidos que en seguimiento de ella se aprueben; y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán ley suprema del país; los jueces de cada Estado estarán obligados a observarla aun cuando hubiese alguna disposición en contrario en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.

Los Senadores y Representantes antes mencionados, los miembros de las asambleas legislativas de los diversos Estados, así como todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos Estados, serán obligados bajo juramento o declaración solemne a acatar esta Constitución; pero nunca habrá un requisito religioso para desempeñar ningún cargo o empleo, retribuido o de confianza, bajo la autoridad de los Estados Unidos.

Artículo VII

La ratificación de las convenciones de nueve Estados serán suficiente para que esta Constitución rija entre los Estados que la ratifiquen.

Dada en convención, con el consentimiento unánime de los Estados presentes, el día diecisiete de septiembre del año de Nuestro Señor mil setecientos ochenta y siete, año doce de la independencia de los Estados Unidos de América. Como testigos del acto, los presentes hemos inscrito aquí nuestros nombres (Los siguientes son los nombres de los firmantes, los cuales, en algunos casos, no son los de las firmas contenidas en el documento).

George Washington, Presidente y delegado de Virginia

New Hampshire: John Langdon, Nicholas Gilman

Massachusetts: Nathaniel Gorham, Rufus King

Connecticut: William Samuel Johnson, Roger Sherman

New York: Alexander Hamilton

New Jersey: William Livingston, David Brearly, William Paterson

Pennsylvania: Benjamin Franklin, Thomas Mifflin, Robert Morris, George Clymer, Thomas Fitz Simons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouverneur Morris

Delaware: George Read, Gunning Bedford, Jr., John Dickinson, Richard Basset, Jacob Broom

Maryland: James McHenry, Jonathan Dayton, Daniel de St. Thomas J., Daniel Carroll

Virginia: John Blair, James Madison, Jr.

Carolina del Norte: William Blount, Richard Dobbs S., Hugh Williamson
Carolina del Sur: John Rutledge, Charles Cotesworth P., Charles Pinckney, Pierce Butler

Georgia: William Few, Abraham Baldwin

Las Convenciones de los Estados, habiendo expresado en el momento de adoptar la Constitución el deseo de que, para prevenir la mala interpretación o el abuso de sus facultades, se agreguen ciertas cláusulas declaratorias y restrictivas: Y a fin de ampliar las bases de la confianza pública en el Gobierno, como mejor se garanticen los propósitos beneficios de su institución.

Resolvieron por medio del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, en una reunión del Congreso a lo cual concurrieron dos terceras partes de ambas Cámaras, que los siguientes Artículos fueran propuestos a las Asambleas Legislativas de los diferentes estados como enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, considerando que todos o cualquiera de sus Artículos, una vez ratificados por tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas, serán válidos para todos los fines y propósitos, como parte de dicha Constitución; a saber.

Artículos que como agregados y Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América, propuso el Congreso y ratificaron las Legislaturas de los diversos Estados, en cumplimiento con el Artículo V de la Constitución original (Este encabezado sólo aparece en la resolución presentada por el Congreso en el que se proponen las primeras diez Enmiendas).

ENMIENDA I

El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o que limite la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar reparación de agravios.

ENMIENDA II

Siendo necesaria para la seguridad del Estado libre una milicia bien organizada, no se limitará el derecho del pueblo de tener y portar armas.

ENMIENDA III

En tiempos de paz ningún soldado será alojado en casa alguna, sin el consentimiento del dueño, ni tampoco lo será en tiempos de guerra, sino de la manera prescrita por ley.

ENMIENDA IV

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y bienes, contra registros y aseguramientos irrazonables, y no se expedirá ninguna orden, sino en virtud de causa probable, apoyado por juramento o declaración

solemne, y que describa a detalle el lugar que ha de ser registrado, y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas.

ENMIENDA V

Ninguna persona será obligada a responder por delito capital o infamante, sino en virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, excepto en los casos en que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando se hallen en servicio activo en tiempos de guerra o en peligro público; ni nadie podrá ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o de la integridad corporal; ni será obligado en ningún caso criminal; a declarar contra sí mismo, ni será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso legal; ni se podrá tomar propiedad privada para uso público, sin justa compensación.

ENMIENDA VI

En todas las causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y público, ante un jurado imparcial del Estado y Distrito en que el delito se haya cometido, Distrito que será previamente fijado por ley; a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; a confrontarse con los testigos en su contra; a que se adopten medidas compulsivas para la comparecencia de los testigos que cite a su favor y a la asistencia de un abogado para su defensa.

ENMIENDA VII

En litigios de derecho común, en que el valor en controversia exceda de veinte dólares, se mantendrá el derecho a un juicio por jurado, y ningún hecho decidido por un jurado será revisado por ningún tribunal de los Estados Unidos, sino de acuerdo con las reglas del derecho común.

ENMIENDA VIII

No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni castigos crueles e inusitados.

ENMIENDA IX

La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no se interpretará en sentido de negar o de traer otros derechos al pueblo.

ENMIENDA X

Los poderes que esta Constitución no delegue a los Estados Unidos, ni prohíba a los Estados, quedan reservados a los Estados respectivamente o al pueblo.

ENMIENDA XI

(Adoptada en 1798)

El Poder Judicial de los Estados Unidos no será interpretado en el sentido de extenderse a los litigios en derecho o equidad, invocados o seguidos contra uno de los Estados de la Unión por ciudadanos de otro Estado, o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado extranjero.

ENMIENDA XII

(Adoptada en 1804)

Los electores se reunirán en sus respectivos Estados y votarán por votación secreta para Presidente y Vicepresidente, uno de los cuales, por lo menos, no será residente del mismo Estado que ellos; designarán en sus papeletas la persona votada para Presidente, y en papeleta distinta la persona votada para Vicepresidente, y harán listas distintas de todas las personas votadas para Presidente y de todas las personas votadas para Vicepresidente, con indicación del número de votos emitidos en favor de cada uno, listas que serán firmadas y certificadas y remitidas por ellos, debidamente selladas en la sede del Gobierno de los Estados Unidos, dirigidas al Presidente del Senado, en presencia del Senado y de la Cámara de Representantes, abrirá todos los certificados y se contarán los votos; la persona que obtenga el mayor número de votos para el cargo de Presidente, será Presidente, si tal número constituye la mayoría del número total de los electores nombrados; y si ninguna persona obtuviese tal mayoría, entonces de entre las tres personas que obtengan el mayor número de votos para Presidente, la Cámara de Representantes elegirá inmediatamente, por votación secreta, al Presidente. Pero al elegir al Presidente, los votos se emitirán por Estados, teniendo un voto la representación de cada Estado; a este fin, el quórum consistirá de un miembro o miembros de dos terceras partes de los Estados, siendo necesaria la mayoría de todos los Estados para la elección. Si la Cámara de Representantes, cuando el derecho de elegir recaiga sobre ella, no elige al Presidente antes del cuatro día del mes de marzo siguiente, entonces el Vicepresidente actuará como Presidente, al igual que en el caso u otra incapacidad constitucional del Presidente. Será el Vicepresidente la persona que tenga el mayor número de votos para el cargo, si dicho número equivale a la mayoría del número total de electores designados; y si ninguna persona obtiene la mayoría, entonces el Senado elegirá al Vicepresidente de entre las dos personas que obtengan mayor número de votos; a este fin, el quórum consistirá en las dos terceras partes del número total de Senadores, requiriéndose la mayoría del número total para la elección.

Pero ninguna persona inelegible constitucionalmente para el cargo de Presidente será elegible para Vicepresidente de los Estados Unidos.

ENMIENDA XIII

(Adoptada en 1865)

Sección 1. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirá en los Estados Unidos o en cualquier lugar sujeto a su jurisdicción, excepto como castigo por un delito del cual la persona haya sido convicta.

Sección 2. El Congreso tendrá facultad para hacer cumplir las disposiciones de este artículo mediante legislación pertinente.

ENMIENDA XIV

(Adoptada en 1868)

Sección 1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, serán ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado que residan. Ningún Estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido proceso de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes.

Sección 2. Los representantes serán prorrateados entre los diversos Estados, de acuerdo con sus respectivos números [de habitantes], contando el número total de personas en cada Estado, excluyendo a los indios que no paguen contribuciones. Pero cuando en cualquier elección para la designación de electores que hayan de elegir al Presidente y al Vicepresidente de los Estados Unidos, a los representantes del Congreso, a los funcionarios ejecutivos y judiciales de cualquier Estado o a los miembros de su asamblea legislativa, se niegue el derecho de votar a cualquiera de sus residentes varones de tal Estado que tenga veintiún años de edad (Revisada por la Enmienda XXVI) y sea ciudadano de los Estados Unidos, o cuando de cualquier modo ese derecho sea restringido, excepto participar en una rebelión o en otro delito, la base de la representación será reducida en dicho Estado en la proporción que el número de tales ciudadanos varones tenga con respecto al total de ciudadanos varones de veintiún años de edad de tal Estado.

Sección 3. No será Senador o Representante en el Congreso, o elector para elegir al Presidente y Vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno, bajo la autoridad de los Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente defender la Constitución de los Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de los Estados Unidos, como miembro de la legislatura de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo, haya tomado parte de una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, o haya suministrado ayuda o confortación a sus enemigos. Pero el Congreso, por el voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá apartar tal incapacidad.

Sección 4. No se cuestionará la validez de la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, inclusive las deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas por servicios prestados para suprimir insurrecciones o rebeliones. Pero

ni los Estados Unidos ni ningún otro Estado asumirá o pagará deuda u obligación alguna contraída en ayuda de insurrección o rebelión contra los Estados Unidos, ni reclamación alguna por la pérdida o emancipación de ningún esclavo; y tales deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales y nulas.

Sección 5. El Congreso tendrá facultad para hacer cumplir las disposiciones de este artículo mediante legislación pertinente.

ENMIENDA XV

(Adoptada en 1870)

Sección 1. Ni los Estados Unidos ni ningún otro Estado de la Unión negará o limitará a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho al sufragio por razón de raza, color o condición previa de esclavitud.

Sección 2. El Congreso tendrá facultad para hacer cumplir las disposiciones de este artículo mediante legislación pertinente.

ENMIENDA XVI

(Adoptada en 1913)

El Congreso tendrá facultad para imponer y recaudar contribuciones sobre ingresos, de cualquier fuente que se deriven, sin prorrateo entre los diversos Estados y sin considerar ningún censo o enumeración.

ENMIENDA XVII

(Adoptada en 1913)

El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos Senadores por cada Estado, elegidos por el pueblo de éste por un periodo de seis años, y cada Senador tendrá un voto. Los electores de cada Estado deberán poseer los requisitos necesarios para ser electores de la rama más numerosa de las asambleas legislativas estatales.

Cuando en el Senado ocurran vacantes en la representación de algún Estado, la autoridad Ejecutiva de tal Estado dará orden escrita de elecciones para cubrir tales vacantes. Previsto, que la asamblea legislativa de cualquier Estado podrá facultar a su Ejecutivo a extender nombramientos provisionales hasta que el pueblo cubra las vacantes por elección, en la forma que disponga la asamblea legislativa.

Esta enmienda no será interpretada en el sentido de afectar la elección o término de ningún Senador elegido antes de convertirse en parte de la Constitución.

ENMIENDA XVIII

(Adoptada en 1919) (Revocada en 1919 por la Enmienda XXI)

Sección 1. Al cabo de un año de la ratificación de este artículo, por la presente queda prohibida la fabricación, venta o transporte de bebidas embriagantes dentro de los Estados Unidos y todos los territorios sujetos a su jurisdicción, así como su importación a, o su exportación desde los mismos.

Sección 2. El Congreso y los diversos Estados tendrán facultades concurrentes para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de la legislación.

Sección 3. Este artículo no tendrá efecto alguno, a menos que las Asambleas Legislativas de los distintos Estados la ratifiquen como una enmienda a la Constitución, conforme a lo preceptuado en ésta, en un plazo de siete años contados a partir de la fecha en la que el Congreso la someta a la consideración de los Estados.

ENMIENDA XIX

(Adoptada en 1920)

El derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos no será desconocido ni limitado por los Estados Unidos o por Estado alguno por razón de sexo.

El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo por medio de leyes apropiadas.

ENMIENDA XX

(Adoptada en 1933)

Sección 1. Los periodos del Presidente y el Vicepresidente terminarán al medio día del veinte de enero y los periodos de los senadores y representantes al medio día del tres de enero, de los años en que dichos periodos habrían terminado si este artículo no hubiera sido ratificado, y en ese momento principiarán los periodos de sus sucesores.

Sección 2. El Congreso se reunirá, cuando menos, una vez cada año y dicho periodo de sesiones se iniciará al mediodía del tres de enero, a no ser que por medio de una ley fije una fecha diferente.

Sección 3. Si el Presidente electo hubiera muerto en el momento fijado para el comienzo del periodo presidencial, el Vicepresidente electo será Presidente. Si antes del momento fijado para el comienzo de su periodo no se hubiere elegido Presidente o si el Presidente electo no llenare los requisitos exigidos, entonces el Vicepresidente electo fungirá como Presidente electo hasta que haya un Presidente idóneo, y el Congreso podrá prever por medio de una ley el caso de que ni el Presidente electo ni el Vicepresidente electo satisfagan los requisitos constitucionales, declarando quien hará las veces de Presidente en ese supuesto o la forma en que se escogerá a la persona que habrá de actuar como tal, y la referida persona actuará con ese carácter hasta que se cuente con un Presidente o un Vicepresidente que reúna las condiciones legales.

Sección 4. El Congreso podrá prever mediante una ley el caso de que muera cualquiera de las personas de las cuales la Cámara de Representantes está facultada para elegir Presidente cuando le corresponda el derecho de elección, así como el caso de que muera alguna de las personas entre las cuales el Senado está facultado para escoger Vicepresidente cuando pasa el derecho de elegir.

Sección 5. Las secciones 1 y 2 entrarán en vigor el día quince de octubre siguiente a la ratificación de este artículo.

Sección 6. Este artículo quedará sin efecto a menos de que sea ratificado como enmienda a la Constitución por las legislaturas de las tres cuartas partes de los distintos Estados, dentro de los siete años posteriores a la fecha en que se les someta.

ENMIENDA XXI

(Adoptada en 1933)

Sección 1. Queda derogado por el presente el decimoctavo de los artículos de enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Sección 2. Se prohíbe por el presente que se transporte o importen licores embriagantes a cualquier Estado, Territorio o posesión de los Estados Unidos, para ser entregados o utilizados en su interior con violación de sus respectivas leyes.

Sección 3. Este artículo quedará sin efecto a menos de que sea ratificado como enmienda a la Constitución por convenciones que se celebrarán en los diversos Estados, en la forma prevista por la Constitución, dentro de los siete años siguientes a la fecha en que el Congreso lo someta a los Estados.

ENMIENDA XXII

(Adoptada en 1951)

Sección 1. No se elegirá a la misma persona para el cargo de Presidente más de dos veces, ni más de una vez a la persona que haya desempeñado dicho cargo o que haya actuado como Presidente durante más de dos años de un periodo para el que se haya elegido como Presidente a otra persona. El presente artículo no se aplicará a la persona que ocupaba el puesto de Presidente cuando el mismo se propuso por el Congreso, ni impedirá que la persona que desempeñe dicho cargo o que actúe como Presidente durante el periodo en que el repetido artículo entre en vigor, desempeñe el puesto de Presidente o actúe como tal durante el resto del referido periodo.

Sección 2. Este artículo quedará sin efecto a menos de que las legislaturas de tres cuartas partes de los diversos Estados lo ratifiquen como enmienda a la Constitución dentro de los siete años siguientes a la fecha en que el Congreso los someta a los Estados.

ENMIENDA XXIII

(Adoptada en 1961)

Sección 1. El distrito que constituye la Sede del Gobierno de los Estados Unidos nombrará, según disponga el Congreso:

Un número de electores para elegir al Presidente y al Vicepresidente, igual al número total de Senadores y Representantes ante el Congreso al que el Distrito tendría derecho si fuere un Estado, pero en ningún caso será dicho número mayor que el del Estado de menos población; estos electores se sumarán al número de aquellos electores nombrados por los Estados, pero para fines de la elección del Presidente y del Vicepresidente, serán considerados como electores nombrados por un Estado; ce-

lebrarán sus reuniones en el Distrito y cumplirán con los deberes que se estipulan en la Enmienda XII.

Sección 2. El Congreso queda facultado para poner en vigor este artículo por medio de legislación adecuada.

ENMIENDA XXIV

(Adoptada en 1964)

Sección 1. Ni los Estados Unidos ni ningún Estado podrán denegar o coartar a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho al sufragio en cualquier elección primaria o de otra clase para Presidente o Vicepresidente, por electores para elegir al Presidente o al Vicepresidente o para Senador o Representante ante el Congreso, por motivo de no haber pagado un impuesto electoral o cualquier otro impuesto.

Sección 2. El Congreso queda facultado para poner en vigor este artículo por medio de legislación adecuada.

ENMIENDA XXV

(Adoptada en 1967)

Sección 1. En caso de remoción del Presidente de su puesto, o de su muerte o renuncia, el Vicepresidente se convertirá en Presidente.

Sección 2. Cuando haya una vacante en el puesto de Vicepresidente, el Presidente nombrará un Vicepresidente que ocupará el puesto de confirmarse el nombramiento por una mayoría de votos de ambas Cámaras del Congreso.

Sección 3. Cuando el Presidente transmita al Presidente *pro tempore* del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que es incapaz de desempeñar las facultades y obligaciones de su puesto y hasta que les transmita una declaración escrito en contrario, el Vicepresidente se encargará de cumplir con esas facultades y obligaciones como Presidente Interino.

Sección 4. Siempre que el Vicepresidente y una mayoría, ya sea de los funcionarios principales de los departamentos ejecutivos o de otros cuerpos que por ley pueda señalar el Congreso, transmitan al Presidente *pro tempore* del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que el Presidente es incapaz de cumplir con las facultades y obligaciones del puesto como Presidente interino.

En adelante, cuando el Presidente transmita al Presidente *pro tempore* del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que no existe ninguna incapacidad, asumirá de nuevo las facultades y obligaciones de su puesto, a menos que el Vicepresidente y una mayoría, ya sea de los funcionarios principales del departamento ejecutivo o de otro cuerpo que el Congreso pueda señalar por ley, transmitan, dentro de cuatro días, al Presidente *pro tempore* del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes, su declaración escrita de que el Presidente es incapaz de desempeñar las facultades y obligaciones de su cargo. En consecuencia, el Congreso resolverá el problema reuniéndose para tal efecto dentro de 48 horas, si no está en se-

sión. Si el Congreso, dentro de los 21 días después de recibir la declaración escrita y, si no está en sesión, dentro de los 21 días después de que se pida su reunión, determina por voto de las dos terceras partes de ambas Cámaras que el Presidente es incapaz de desempeñar las facultades y obligaciones de su puesto el Vicepresidente continuará desempeñándolas como Presidente interino; en caso de lo contrario, el Presidente reasumirá las facultades y obligaciones de su cargo.

ENMIENDA XXVI

(Adoptada en 1971)

Sección 1. El derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos, que sean de la edad de dieciocho años o más, no será negado o limitado por los Estados Unidos o por ningún Estado por razón de edad.

Sección 2. El Congreso tendrá el poder para hacer cumplir las disposiciones de este artículo mediante legislación pertinente.

ENMIENDA XXVII

(Adoptada en 1992)

Ninguna ley que varíe la remuneración de los servicios de los senadores y representantes tendrá efecto hasta después de que se haya realizado una elección de representantes.

12.3. EXTRACT FROM THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Article I

Section 1. All legislative branch herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and Chamber of Representatives.

Section 2. Composition of the Chamber of Representatives.

Section 3. Composition of the Senate.

Section 4. The legislatures of each state shall fix the date, place and manner of holding elections for representatives and senators, as well as the obligation to meet at least once a year.

Section 5. Each Chambers shall be the sole judge of the elections and qualifications of its own members. The majority of each shall constitute a quorum to conduct its business, must adopt rules of procedure and keep a Journal of its sessions.

Section 6. Compensations and restrictions on for senators and representatives.

Section 7. Origin of the laws and the legislative process.

Section 8. Branch of the Congress.

Section 9. Imposition of taxes or import duties, suspension of the privilege of habeas corpus, no bill of attainder application or ex post facto laws, no taxation or duty on exports of any state, there will be no preference for a regulation of commerce or internal revenue of one State over another, there will be no retreat from the Treasury but is as a consequence of appropriations by law, no titles of nobility shall be granted and no one can accept a gift, emolument, office or title of any kind, but by consent of Congress.

Section 10. States ban treaties, alliance or confederation of any kind, lay any imposts or duties on imports or exports without congressional approval.

Article II

Section 1. Executive power is vested in the President of the United States of America and of from elections.

Section 2. The President is the Commander in Chief of the Army and the Navy.

Section 3. Obligation of the President to inform periodically to the Congress on the State of the Union and the recommendations it deems appropriate.

Section 4. Remove from office of the President, Vice President and civil officers.

Article III

Section 1. The judicial power resides on the Supreme Court and inferior courts.

Section 2. Jurisdiction of the Supreme Court.

Section 3. Treason against the United States.

Article IV

Section 1. Faith to the acts of the states.

Section 2. Right of the citizens to enjoy the privileges and immunities of the states, the right of states to request another state to return any person who has committed a crime; obligation to serve in a State.

Section 3. Admission of new states.

Section 4. Republican form of government to the states and protection against invasion and domestic violence.

Article V

Power of the Congress to propose amendments to the Constitution.

Article VI

Validation of debts acquired prior to this Constitution and supremacy of the laws and treaties.

Article VII

The Constitution governs in the states that confirm it.

AMENDMENT I

Freedom of religion, speech, press and assembly.

AMENDMENT II

Right to bear arms.

AMENDMENT III

In times of peace and war, there will be no accommodation of soldiers without owner's consent.

AMENDMENT IV

Not violated the right of the people to be secure in their persons, houses, papers and property, but by order, supported by oath or solemn declaration.

AMENDMENT V

Legal guarantees.

AMENDMENT VI

In criminal, the accused right to a speedy trial, public and before an impartial jury.

AMENDMENT VII

In suits of common law, right to trial by jury and its decisions are not reviewable by another court, unless the rules provided.

AMENDMENT VIII

Prohibition of excessive bail and fines and cruel punishments.

AMENDMENT IX

Catalog of example but not restrictive of rights.

AMENDMENT X

Powers reserved to the States.

AMENDMENT XI

Restriction of the Judicial branch of the United States against citizens of another state.

AMENDMENT XII

Election of President and Vicepresident.

AMENDMENT XIII

Section 1. Prohibition of slavery and involuntary servitude.

Section 2. The Congress power to enforce its determinations.

AMENDMENT XIV

Section 1. Requirements to become a U.S. citizen. Prohibition of laws that restrict the privileges or immunities, except by due process.

Section 2. Division of representatives.

Section 3. Prohibition to be come Senator or Representative, or elector of President and Vicepresident of the United States to had taken part in insurrection or rebellion, except that two thirds of each House remove the disability.

Section 4. Validity of public debt authorized by law. It will not be paid that would have been incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States.
Section 5. Congress power to enforce its provisions.

AMENDMENT XV

Section 1. Prohibition for denying or limiting the suffrage of the citizens by discrimination.
Section 2. Congress power to enforce its provisions.

AMENDMENT XVI

Congressional power to lay and collect income taxes.

AMENDMENT XVII

Composition of the Senate, its duration and election.

AMENDMENT XVIII

Section 1. Prohibition of manufacture, sell or transport alcoholic beverages within the United States and the territories under its jurisdiction.
Section 2. Faculty of the Congresses of the States to enforce its provisions.
Section 3. It will only have effect if it is ratified as an amendment within seven years.

AMENDMENT XIX

Prohibition to ignore ban or limit the right to vote based on sex. Congress power to enforce this article.

AMENDMENT XX

Section 1. Conclusion of the term of the President and Vicepresident.
Section 2. Assemble of the Congress.
Section 3. Death of the President or lack of his or the Vicepresident requirements.
Section 4. Congress power to foresee the lack of law by President and Vicepresident.
Section 5. To come in effect of sections 1 and 2.
Section 6. Ratification of the amendment.

AMENDMENT XXI

Section 1. Repealed of the Eighteenth Amendment.
Section 2. Prohibition of intoxicating liquors transported or imported into the territory in violation of the law.
Section 3. Ratification of the amendment.

AMENDMENT XXII

Section 1. Prohibition to select more than one person twice for the office of President.

Section 2. Ratification of the amendment.

AMENDMENT XXIII

Section 1. Election of President and Vice President in the district headquarters of the United States Government.

Section 2. Congress power to enforce its provisions.

AMENDMENT XXIV

Section 1. Prohibition to restrict or deny the right to vote for failure to pay poll tax or other tax.

Section 2. Congress' power to enforce its provisions.

AMENDMENT XXV

Section 1. Cases of absence of the President.

Section 2. Vacancy in the office of Vicepresident.

Section 3. Interim President in writing of inability of the President.

Section 4. Written disability presented by the Vice President and others, that the President is unable.

AMENDMENT XXVI

Section 1. Prohibition from denying or limiting the suffrage by reason of age for citizens eighteen years or more.

Section 2. Congress' power to enforce its provisions.

AMENDMENT XXVII

Prohibition of retroactivity of the law which changes the compensation of senators and representatives.

12.4. CONSTITUTION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

54 Sections, 7 Articles, 27 Amendments

We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Article I

Section 1. All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

Section 2. The House of Representatives shall be composed of members chosen every second year by the people of the several states, and the electors in each state shall have the several states, and the electors in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the state legislature.

No person shall be a Representative who shall not have attained to the age of twenty five years, and been seven years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state in which he shall be chosen.

Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included within this union, according to their respective numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other Persons. The actual Enumeration shall be made within three years after the first meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent term of ten years, in such manner as they shall by Law direct. The number of Representatives shall not exceed one for every thirty thousand, but each state shall have at least one Representative; and until such enumeration shall be made, the state of New Hampshire shall be entitled to choose three, Massachusetts eight, Rhode Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five,

South Carolina five, and Georgia three. When vacancies happen in the Representation from any state, the executive authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies.

The House of Representatives shall choose their speaker and other officers; and shall have the sole power of impeachment.

Section 3. The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each state, chosen by the legislature thereof, for six years; and each Senator shall have one vote.

Immediately after they shall be assembled in consequence of the first election, they shall be divided as equally as may be into three classes. The seats of the Senators of the first class shall be vacated at the expiration of the fourth year, and the second class at the expiration of the sixth year, so that one third may be chosen every second year; and if vacancies happen by resignation, or otherwise, during the recess of the legislature of any state, the executive thereof may make temporary appointments until the next meeting of the legislature, which shall then fill such vacancies.

No person shall be a Senator who shall not have attained to the age of thirty years, and been nine years a citizen of the United States and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state for which he shall be chosen.

The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no vote, unless they be equally divided.

The Senate shall choose their other officers, and also a President pro tempore, in the absence of the Vice President, or when he shall exercise the office of President of the United States.

The Senate shall have the sole power to try all impeachments. When sitting for that purpose, they shall be on oath or affirmation. When the President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no person shall be convicted without the concurrence of two thirds of the members present.

Judgment in cases of impeachment shall not extend further than to removal from office, and disqualification to hold and enjoy any office of honor, trust or profit under the United States: but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to indictment, trial, judgment and punishment, according to Law.

Section 4. The times, places and manner of holding elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each state by the legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such regulations, except as to the places of choosing Senators.

The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall be on the first Monday in December, unless they shall by Law appoint a different day.

Section 5. Each House shall be the judge of the elections, returns and qualifications of its own members, and a majority of each shall constitute a quorum to do business; but a smaller number may adjourn from day to day, and may be authorized to

compel the attendance of absent members, in such manner, and under such penalties as each House may provide.

Each House may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two thirds, expel a member.

Each House shall keep a journal of its proceedings, and from time to time publish the same, excepting such parts as may in their judgment require secrecy; and the yeas and nays of the members of either House on any question shall, at the desire of one fifth of those present, be entered on the journal.

Neither House, during the session of Congress, shall, without the consent of the other, adjourn for more than three days, nor to any other place than that in which the two Houses shall be sitting.

Section 6. The Senators and Representatives shall receive a compensation for their services, to be ascertained by Law, and paid out of the treasury of the United States. They shall in all cases, except treason, felony and breach of the peace, be privileged from arrest during their attendance at the session of their respective Houses, and in going to and returning from the same; and for any speech or debate in either House, they shall not be questioned in any other place.

No Senator or Representative shall, during the time for which he was elected, be appointed to any civil office under the authority of the United States which shall have been created, or the emoluments whereof shall have been increased during such time: and no person holding any office under the United States, shall be a member of either House during this continuance in office.

Section 7. All bills for raising revenue shall originate in the House of Representatives; but the Senate may propose or concur with amendments as on other Bills.

Every bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, shall, before it become a Law, be presented to the President of the United States; if he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his objections to that House in which it shall have originated, who shall enter the objections at large on their journal, and proceed to reconsider it. If after such reconsideration two thirds of that House shall agree to pass the bill it shall be sent, together with the objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in all such cases the votes of both Houses shall be determined by yeas and nays, and the names of the persons voting for and against the bill shall be entered on the journal of each House respectively. If any bill shall not be returned by the President within ten days (Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the same shall be a Law, in like manner as if he had signed it, unless the Congress by their adjournment prevent its return, in which case it shall not be a Law.

Every order, resolution, or vote to which the concurrence of the Senate and House of Representatives may be necessary (except on a question of adjournment) shall be presented to the President of the United States; and before the same shall take

effect, shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be repassed by two thirds of the Senate and House of Representatives, according to the rules and limitations prescribed in the case of a bill.

Section 8. The Congress shall have power to lay and collect taxes, duties, imposts and excises, to pay the debts and provide for the common defense and general welfare of the United States; but all duties, imposts and excises shall be uniform throughout the United States;

- To borrow money on the credit of the United States;
- To regulate commerce with foreign nations, and among the several states, and with the Indian tribes;
- To establish a uniform rule of naturalization, and uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States;
- To coin money, regulate the value thereof, and of foreign coin, and fix the standard of weights and measures;
- To provide for the punishment of counterfeiting the securities and current coin of the United States;
- To establish post offices and post roads;
- To promote the progress of science and useful arts, by securing limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries;
- To constitute tribunals inferior to the Supreme Court;
- To define and punish piracies and felonies committed on the high seas, and offenses against the Law of nations;
- To declare war, grant letters of marque and reprisal, and make rules concerning captures on land and water;
- To raise and support armies, but no appropriation of money to that use shall be for a longer term than two years;
- To provide and maintain a navy;
- To make rules for the government and regulation of the land and naval forces;
- To provide for calling forth the militia to execute the laws of the union, suppress insurrections and repel invasions;
- To provide for organizing, arming, and disciplining, the militia, and for governing such part of them as may be employed in the service of the United States, reserving to the states respectively, the appointment of the officers, and the authority of training the militia according to the discipline prescribed by Congress;
- To exercise exclusive legislation in all cases whatsoever, over such District (not exceeding ten miles square) as may, by cession of particular states, and the acceptance of Congress, become the seat of the government of the United States, and to exercise like authority over all places purchased by the consent of the legislature of the state in which the same shall be, for the erection of forts, magazines, arsenals, dockyards, and other needful buildings;--And.

· To make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers, and all other powers vested by this Constitution in the government of the United States, or in any department or officer thereof.

Section 9. The migration or importation of such persons as any of the states now existing shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the year one thousand eight hundred and eight, but a tax or duty may be imposed on such importation, not exceeding ten dollars for each person.

The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended, unless when in cases of rebellion or invasion the public safety may require it.

No bill of attainder or *ex post facto* Law shall be passed.

No capitation, or other direct, tax shall be laid, unless in proportion to the census or enumeration herein before directed to be taken.

No tax or duty shall be laid on articles exported from any state.

No preference shall be given by any regulation of commerce or revenue to the ports of one state over those of another: nor shall vessels bound to, or from, one state, be obliged to enter, clear or pay duties in another.

No money shall be drawn from the treasury, but in consequence of appropriations made by Law; and a regular statement and account of receipts and expenditures of all public money shall be published from time to time.

Not title of nobility shall be granted by the United States: and no person holding any office of profit or trust under them, shall, without the consent of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any kind whatever, from any king, prince, or foreign state.

Section 10. No state shall enter into any treaty, alliance, or confederation; grant letters of marquee and reprisal; coin money; emit bills of credit; make anything but gold and silver coin a tender in a payment of debts; pass any bill of attainder, *ex post facto* Law, or Law impairing the obligation of contracts, or grant any title of nobility.

No state shall, without the consent of the Congress, lay any imposts on imports or exports, except what may be absolutely necessary imposts, laid by any state on imports or exports, shall be for the use of the revision and control of the Congress.

No state shall, without the consent of Congress, lay any duty of tonnage, keep troops, or ships of war in time of peace, enter into any agreement or compact with another state, or with a foreign power, or engage in war, unless actually invaded, or in such imminent danger as will not admit of delay.

Article II

Section 1. The executive power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his office during the term of four years, and, together with the Vice President, chosen for the same term, be elected, as follows:

Each state shall appoint, in such manner as the Legislature thereof may direct, a number of electors, equal to the whole number of Senators and Representatives to

which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or Representative, or person holding an office of trust or profit under United States, shall be appointed an elector.

The electors shall meet in their respective states, and vote by ballot for two persons, of whom one at least shall not be an inhabitant of the same state with themselves. And they shall make a list of all the persons voted for, and of the number of votes for each; which list they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate. The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates, and the votes shall then be counted. The person having the greatest number of votes shall be the President, if such number be a majority of the whole number of electors appointed; and if there be more than one who have such majority, and have an equal number of votes, then the House of Representatives shall immediately choose by ballot one of them for President; and if no person have a majority, then from the five highest on the list the said House shall in like manner choose the President. But in choosing the President, the votes shall be taken by States, the representation from each state having one vote; A quorum for this purpose shall consist of a member or members from two thirds of the states shall be necessary to a choice. In every case, after the choice of the President, the person having the greatest number of votes of the electors shall be the Vice President. But if there should remain two or more who have equal votes, the Senate shall choose from them by ballot the Vice President.

The Congress may determine the time of choosing the electors, and the day on which they shall give their votes; which day shall be the same throughout the United States.

No person except a natural born citizen, or a citizen of the United States, at the time of the adoption of this Constitution, shall be eligible of the office of President; neither shall any person be eligible to that office who shall not have attained to the age of thirty five years, and been fourteen years a resident within the United States.

In case of the removal of the President from office, or of his death, resignation, or inability to discharge the powers and duties of the said office, the same shall devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the case of removal, death, resignation or inability, both of the President and Vice President, declaring what officer shall then act as President, and such officer shall act accordingly, until the disability be removed, or a President shall be elected.

The President shall, at stated times, receive for his services, a compensation, which shall neither be increased nor diminished during the period for which he shall have been elected, and he shall not receive within that period any other emolument from the United States, or any of them.

Before he enter on the execution of his office, he shall take the following oath or affirmation:--*I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President*

execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.

Section 2. The President shall be commander in chief of the Army and Navy of the United States, and of the several states, when called into the actual service of the United States; he may require the opinion, in writing, of the principal officer in each of the executive departments, upon any subject relating to the duties of their respective offices, and he shall have power to grant reprieves and pardons for offenses against the United States, except in cases of impeachment.

He shall have power, by and with the advice and consent of the Senate, to make treaties, provided two thirds of the Senators present concur; and he shall nominate, and by and with the advice and consent of the Senate, shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the Supreme Court, can all other officers of the United States, whose appointments arte not herein otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress may by Law west the appointment of such inferior officers, as they think proper, in the alone, in the courts of Law, or in the heads of departments.

The President shall have power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate, by granting commission which shall expire at the end of their next session.

Section 3. He shall from time to time give to the Congress information of the state of the union, and recommend to their consideration such measures as he shall judge necessary and expedient; he may, on extraordinary occasions, convene both Houses, or either of them, and in case of disagreement between them, with respect to the time of adjournment, he may adjourn them to such time as he shall think proper; he shall receive ambassadors and other public ministers; he shall take care that the laws be faithfully executed, and shall commission all the officers of the United States.

Section 4. The President, Vice President and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.

Article III

Section 1. The judicial power of the United States, shall be vested in one Supreme Court, and in such inferior courts as the Congress may from time to time ordain and establish. The judges, both of the supreme inferior courts, shall hold their offices during good behaviour, and shall, at stated times, receive for their services, a compensation, which shall not be diminished during their continuance in office.

Section 2. The judicial power shall extend to all cases, in Law and equity, arising under this Constitution, the laws of the United States, and treaties made, or which shall be made, under their authority;--to all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls;--to all cases of admiralty and maritime jurisdiction;--to controversies to which the United States shall be a party;--to controversies between two

or more states;--between a state and citizens of another state;-- between citizens of different states;--between citizens of the same state claiming lands under grants of different states, and between a state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects.

In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a state shall be party, the Supreme Court shall have original jurisdiction. In all the other cases before mentioned, the Supreme Court shall have appellate jurisdiction, both as to law and fact, with such exceptions, and under such regulations as the Congress shall make.

The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury, and such trial shall be held in the state where the said crimes shall have been committed; but when not committed within any state, the trial shall be at such place or places as the Congress may by Law have directed.

Section 3. Treason against the United States, shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of two witnesses to the same overt act, or on confession in open court.

The Congress shall have power to declare the punishment of treason, but no attainder of treason shall work corruption of blood, or forfeiture except during the life of the person attainted.

Article IV

Section 1. Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every other state. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.

Section 2. The citizens of each state shall be entitled to all privileges and immunities of citizens in the several states.

A person charged in any state with treason, felony, or other crime, who shall flee from justice, and be found in another state, shall on demand of the executive authority of the from which he fled, be delivered up, to be removed to the state having jurisdiction of the crime.

No person held to service or labor in one state, under the laws thereof, escaping into another, shall, in consequence of any Law or regulation therein, be discharged from such service or labor, but shall be delivered up on claim of the party to whom such service or labor may be due.

Section 3. New states may be admitted by the Congress into this union; but no new states shall be formed or erected within the jurisdiction of any other state; nor any state be formed by the junction of two or more states, or parts of states, without the consent of the legislature res of the concerned as well as of the Congress.

The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory or other property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to prejudice any claims of the United States, or of any particular State.

Section 4. The United States shall guarantee to every state in this union a republican form of government, and shall protect each of them against invasion; and on application of the legislature, or of the executive (when the legislature cannot be convened) against domestic violence.

Article V

The Congress, whenever two thirds of both houses shall deem it necessary, shall propose amendments to this Constitution, or, on the application of the legislatures of two thirds of the several states, shall call a convention for proposing amendments, which, in either case, shall be valid to all intents and purposes, as part of this Constitution, when ratified by the legislatures of three fourths of the several states, or by convention in three fourths thereof, as the one or the other mode of ratification may be proposed by the Congress; provided that no amendment which may be made prior to the year one thousand eight hundred and eight shall in any manner affect the first and fourth clauses in the ninth section of the first article; and that no state, without its consent, shall be deprived of its equal suffrage in the Senate.

Article VI

All debts contracted and engagements entered into, before the adoption of this Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as under the Confederation.

The Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme Law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding.

The Senators and Representatives before mentioned, and the members of the several states legislatures, and all executive and judicial officers, both of the United States and of the several states, shall be bound by oath or affirmation, to support this Constitution; but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States.

Article VII

The ratification of the conventions of nine states, shall be sufficient for the establishment of this Constitution between the states so ratifying the same.

Done in convention by the unanimous consent of the states present the seventeenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and

eighty seven and of the independence of the United States of America the twelfth. In witness whereof We have hereunto subscribed our Names,

G. Washington—Presidt. and Deputy from Virginia

New Hampshire: John Langdon, Nicholas Gilman

Massachusetts: Nathaniel Gorham, Rufus King

Connecticut: Wm: Saml. Johnson, Roger Sherman

New York: Alexander Hamilton

New Jersey: Will: Livingston, David Brearly, Wm. Paterson, Jona: Dayton

Pennsylvania B. Franklin, Thomas Mifflin, Robt. Morris, Geo. Clymer, Thos. Fitz Simons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv Morris Delaware: Geo: Read, Gunning Bedford jun, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco: Broom

Maryland: James McHenry, Dan of St. Thos. Jenifer, Daniel Carroll

Virginia: John Blair—, James Madison Jr.

North Carolina: Wm Blount, Richd. Dobbs Spaight, Hu Williamson

South Carolina: J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler

Georgia: William Few, Abr Baldwin

The Conventions of a number of the States having, at the time of adoption the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstruction or abuse of its powers, that further declaratory and restrictive clauses should be added, and as extending the ground of public confidence in the Government will best insure the beneficent ends of its institution;

Resolved, by the Senate and House of Representatives of the United States of America, in Congress assembled, two-thirds of both Houses concurring, that the following articles be proposed to the Legislatures of the several States, as amendments to the Constitution of the United States; all or any which articles, when ratified by three-fourths of the said Legislatures, to be valid to all intents and purposes as part of the said Constitution, namely:

AMENDMENT I

Congress shall make no Law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

AMENDMENT II

A well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed.

AMENDMENT III

No soldier shall, in time of peace be quartered in any house, without the consent of the owner, nor in time of war, but in a manner to be prescribed by Law.

AMENDMENT IV

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

AMENDMENT V

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of Law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

AMENDMENT VI

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed, which district shall have been previously ascertained by Law, and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel for his defense.

AMENDMENT VII

In suits at common Law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to the rules of the common Law.

AMENDMENT VIII

Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

AMENDMENT IX

The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.

AMENDMENT X

The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.

AMENDMENT XI

(1798)

The judicial power of the United States shall not be construed to extend to any suit in Law or equity, commenced or prosecuted against one of the United States by citizens of another state, or by citizens or subjects of any foreign state.

AMENDMENT XII

(1804)

The electors shall meet in their respective states and vote by ballot for President and Vicepresident, one of whom, at least, shall not be an inhabitant of the same state with themselves; they shall name in their ballots the person voted for as President, and in distinct ballots the person voted for as Vice-President, and they shall make distinct lists of all persons voted for as President, and of all persons voted for as Vicepresident, and of the number of votes for each, which lists they shall sign and certify, and transmit sealed to the seat of the government of the United States, directed to the President of the Senate;--The President of the Senate shall, in the presence of the Senate and House of Representatives, open all the certificates and the votes shall then be counted;--the person having the greatest number of votes for President, shall be the President, if such number be a majority of the whole number of electors appointed; and if no person have such majority, then from the persons having the highest numbers not exceeding three on the list of those voted for as President, the House of Representatives shall choose immediately, by ballot, the President. But in choosing the President, the votes shall be taken by states, the representation from each state having one vote; a quorum for this purpose shall consist of a member or members from two-thirds of the states, and a majority of all the states shall be necessary to a choice. And if the House of Representatives shall not choose a President whenever the right of choice shall devolve upon them, before the fourth day of March next following, then the Vicepresident shall act as President, as in the case of the death or other constitutional disability of the President. The person having the greatest number of votes as Vice-President, shall be the Vice-President, if such number be a majority of the whole number of electors appointed, and if no person have a majority, then from the two highest number on the list, the Senate shall choose the Vicepresident; a quorum for the purpose shall consist of two-thirds of the whole number of Senators, and a majority of the whole number of Senators, and a majority of the whole number shall be necessary to a choice. But no person constitutionally ineligible to the office of President shall be eligible to that of Vicepresident of the United States.

AMENDMENT XIII

(1865)

Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

Section 2. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XIV

(1868)

Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any Law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of Law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

Section 2. Representatives shall be apportioned among the several states according to their respective number, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in Congress, the executive and judicial officers of a state, or the members of the legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such state, being twenty-one years of age, an citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

Section 3. No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

Section 4. The validity of the public debt of the United States, authorized by Law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any state shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

Section 5. The Congress shall have power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

AMENDMENT XV

(1870)

Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of race, color, or previous condition of servitude.

Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XVI

(1913)

The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several states, and without regard to any census of enumeration.

AMENDMENT XVII

(1913)

The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each state, elected by the people thereof, for six years; and each Senator shall have one vote. The electors in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the state legislatures.

When vacancies happen in the representation of any state in the Senate, the executive authority of such state shall issue writs of election to fill such vacancies: Provided, that the legislature of any state may empower the executive thereof to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election as the legislature may direct.

This amendment shall not be so construed as to affect the election of term of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.

AMENDMENT XVIII

(1919) (Repealed by the 21st amendment in 1919)

Section 1. After one year from the ratification of this article the manufacture, sale, or transportation of intoxicating liquors within, the importation thereof into, or the exportation thereof from the United States and all territory subject to the jurisdiction thereof for beverage purposes is hereby prohibited.

Section 2. The Congress and the several states shall have concurrent power to enforce this article by appropriate legislation.

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of the several states, as provided

in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the states by the Congress.

AMENDMENT XIX

(1920)

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any state on account of sex.

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XX

(1933)

Section 1. The terms of the President and Vice President shall end at noon on the 20th day of January, and the terms of Senators and Representatives at noon on the 3d day of January, of the years in which such terms would have ended if this article had not been ratified; and the terms of their successors shall begin.

Section 2. The Congress shall assemble at least once in every year, and such meeting shall begin at noon on the 3d day of January, unless they shall by Law appoint a different day.

Section 3. If at the time fixed for the beginning of the term of the President, the President elect shall have died, the Vice President elect shall become President. If a President shall not have been chosen before the time fixed for the beginning of his term, or if the President elect shall have failed to qualify, then the Vice President elect shall act as President until a President shall have qualified; and the Congress may by Law provide for the case wherein neither a President elect nor a Vice President elect shall have qualified, declaring who shall then act as President, or the manner in which one who is to act shall be selected, and such person shall act accordingly until a President or Vice President shall have qualified.

Section 4. The Congress may by Law provide for the case of the death of any of the persons from whom the House of Representatives may choose a President whenever the right of choice shall have devolved upon them, and for the case of the death of any of the persons from whom the Senate may choose a Vice President whenever the right of choice shall have devolved upon them.

Section 5. Sections 1 and 2 shall take effect on the 15th day of October following the ratification of this article.

Section 6. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several states within seven years from the date of its submission.

AMENDMENT XXI

(1933)

Section 1. The eighteenth article of amendment to the Constitution of the United States is hereby repealed.

Section 2. The transportation or importation into any state, territory, or possession of the United States for delivery or use therein of intoxicating liquors, in violation of the laws thereof, is hereby prohibited.

Section 3. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by conventions in the several states, as provided in the Constitution, within seven years from the date of the submission hereof to the states by the Congress.

AMENDMENT XXII

(1951)

Section 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected to the office of the President more than once. But this article shall not apply to any person holding the office of President when this article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term.

Section 2. This article shall be inoperative unless it shall have been ratified as an amendment to the Constitution by the legislatures of three-fourths of the several states within seven years from the date of its submission to the states by the Congress.

AMENDMENT XXIII

(1961)

Section 1. The District constituting the seat of government of the United States shall appoint in such manner as the Congress may direct:

A number of electors of President and Vice President equal to the whole number of Senators and Representatives in Congress to which the District would be entitled if it were a state, but in no event more than the least populous state; they shall be in addition to those appointed by the states, but they shall be considered, for the purposes of the election of President and Vice President, to be electors appointed by a state; and they shall meet in the District and perform such duties as provided by the twelfth article of amendment.

Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XXIV

(1964)

Section 1. The right of citizens of the United States to vote in any primary or other election for President or Vice President, for electors for President or Vice President, or for Senator or Representative in Congress, shall not be denied or abridged by the United States or any state by reason of failure to pay any poll tax or other tax.

Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XXV

(1967)

Section 1. In case of the removal of the President from office or of his death or resignation, the Vice President shall become President.

Section 2. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President, the President shall nominate a Vice President who shall take office upon confirmation by a majority vote of both Houses of Congress.

Section 3. Whenever the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that he is unable to discharge the powers and duties of his office, and until he transmits to them a written declaration to the contrary, such powers and duties shall be discharged by the Vice President as Acting President.

Section 4. Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or of such other body as Congress may by Law provide, transmit to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall immediately assume the powers and duties of the office as Acting President.

Thereafter, when the President transmits to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives his written declaration that no inability exists, he shall resume the powers and duties of his office unless the Vice President and a majority either the principal officers of the executive department or of such other body as Congress may by Law provide, transmit within four days to the President pro tempore of the Senate and the Speaker of the House of Representatives their written declaration that the President is unable to discharge the powers and duties of his office. Thereupon Congress shall decide the issue, assembling within forty-eight hours for that purpose if not in session. If the Congress, within twenty-one days after receipt of the latter written declaration, or, if Congress is not in session, within twenty-one days after Congress is required to assemble, determines by two-thirds vote of both Houses that the President is unable to discharge the powers and duties of his office, the Vice President shall continue to discharge the same as Acting President; otherwise, the President shall resume the powers and duties of his office.

AMENDMENT XXVI

(1971)

Section 1. The right of citizens of the United States, who are 18 years of age or older, to vote, shall not be denied or abridged by the United States or any state on account of age.

Section 2. The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation.

AMENDMENT XXVII

(1992)

No Law varying the compensation for the services of the Senators and Representatives shall take effect until an election of Representatives shall have intervened.

SEGUNDA PARTE

EVOLUCIÓN DE LAS
NORMAS MIGRATORIAS
EN MÉXICO.
SIGLOS XIX-XXI

1.CONSTITUCIONALES

SIGLOS XIX-XXI

1.1. ANTECEDENTE ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 1.

Cronología 1812-1917

FECHA DOCUMENTO

1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1813	Sentimientos de la Nación de José María Morelos.
1814	Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina.
1822	Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano.
1824	Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
1824	Mensaje del Congreso Federal Constituyente a los habitantes de la Federación.
1836	Leyes Constitucionales de la República Mexicana.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente.
1842	Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1843	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1847	Exposición de motivos y voto particular de Mariano Otero.
1847	Acta Constitutiva y de Reforma.
1865	Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.
1856	Comunicación de José María Lafragua.
1856	Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1856	Congreso Constituyente.
1857	Constitución Política de la República Mexicana.

1865	Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
1910	Plan de San Luis Potosí.
1916	Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
1916	Congreso Constituyente.
1917	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Constitución Española de Cádiz, 1812.

Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.

Sentimientos de la Nación de José María Morelos, 1813.

Art. 12. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, 1814.

Art. 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común.

Art. 24. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas.

Art. 27. La seguridad de los ciudadanos consiste en la garantía social: ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822.

Art. 6. El Imperio Mexicano es único e indivisible, porque se rige por unas mismas leyes en toda la extensión de su territorio, para la paz y armonía de sus miembros, que mutuamente deben auxiliarse, a fin de conspirar la común felicidad.

Art. 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal, y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos.

Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, 1824.

Art. 30. La nación esta obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano.

Mensaje del Congreso Federal Constituyente
a los habitantes de la Federación, 1824.

Tercer Párrafo: En efecto, crear un gobierno firme y liberal sin que sea peligroso, hacer tomar al pueblo mexicano el rango que le corresponde entra las naciones civilizadas, y ejercer la influencia que deben darle su situación, su nombre y sus riquezas, hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad.

Sexto Párrafo: He aquí las ventajas del sistema de federación. Darse cada pueblo a sí mismo leyes análogas a sus costumbres, localidad y demás circunstancias, dedicarse sin trabas a la creación y mejoría de todos los ramos de prosperidad, dar a su industria todo el impulso de que sea susceptible, sin las dificultades que oponía el sistema colonial, u otro cualquier gobierno, que hallándose a enormes distancias perderá de vista los intereses de los gobernados, proveer a sus necesidades en proporción a su adelantados, poner a la cabeza de su administración sujetos que amantes del país, tengan al mismo tiempo los conocimientos suficientes para desempeñarla con acierto, crear los tribunales necesarios para el pronto castigo de los delincuentes y la protección de la propiedad y seguridad de sus habitantes, terminar sus asuntos domésticos sin salir de los límites de su estado, en una palabra entrar en el pleno goce de los derechos de hombres libres.

Undécimo Párrafo: Pero en medio de esos progresos de civilización la patria exige de nosotros grandes sacrificios, y un religioso respeto a la moral. Vuestro representantes anuncian que si queréis ponerlos al nivel de la República feliz de nuestros vecinos del norte, es preciso que procuréis elevarlos al alto grado de virtudes cívicas y privadas que distinguen a ese pueblo singular. Esta es la única base de la verdadera libertad, y la mejor garantía de vuestros derechos y de la permanencia de vuestra constitución. La fe en la promesas, el amor al trabajo, la educación de la juventud, el respeto a sus semejantes, he aquí, mexicanos, las fuentes de donde emanará vuestra felicidad y la de vuestros nietos. Sin estas virtudes, sin la obediencia debida a las leyes y a las autoridades, sin un profundo respeto a nuestra adorable religión, en vano tendremos un código lleno de máximas liberales, en vano haremos ostentación de buenas leyes, en vano proclamaremos la santa libertad.

Duodécimo Párrafo. El congreso General espera igualmente del patriotismo y actividad de las autoridades y corporaciones de la Federación, como de las particulares de los estados, que empeñaran todos sus arbitrios para establecer y consolidar nuestras nacientes instituciones. Pero si en lugar de ceñirse a la órbita de sus facultades, hacen esfuerzos para traspasarla, si en vez de dar ejemplo de una justa observancia de la constitución y leyes generales, procuran eludir su cumplimiento con interpretaciones

y subterfugios, hijos del escolasticismo de nuestra educación, en ese caso renunciaremos ya el derecho de ser libres, y sucumbiremos fácilmente al capricho de un tirano, nacional o extranjero, que nos pondrá en la paz de los sepulcros o en la quietud de los calabozos.

Decimotercer Párrafo. A vosotros, pues legisladores de los estados, toca desenvolver el sistema de nuestra ley fundamental, cuya clave consiste en el ejercicio de las virtudes públicas y privadas. La sabiduría de vuestras leyes resplandecerá en su justicia y utilidad, y su cumplimiento será el resultado de una vigilancia severa sobre las costumbres. Inculcad, pues, a vuestros comitentes las reglas eternas e la moral y del orden público: enseñadles la religión sin fanatismo, el amor a la libertad sin exaltación, el respeto más inviolable a los derechos de los demás que es fundamento de las asociaciones humanas. Los Marats y los Robespierres se elevaron sobre sus conciudadanos proclamando aquellos principios, y estos monstruos inundaron en llanto y sangre a la nación más ilustrada de la tierra, tan luego por los escalones manchados de crímenes subieron a unos puestos desde donde insultaban la credulidad de sus compatriotas. Washington proclamó las mismas máximas, y este hombre inmortal hizo la felicidad de los estados del norte ¿Cómo distinguiremos al segundo de los primeros? Examinando sus costumbres, observando sus pasos, puesto que sin justicia no hay libertad, y la base de la justicia no puede ser otra que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros. He aquí resuelto el problema de la ciencia social.

Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836.

Art. 45. No puede el congreso general:

V. Privar, ni aun suspender a los mexicanos, de sus derechos declarados en las leyes constitucionales.

Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 4. Todos los poderes públicos emanan de la Constitución, y su ejercicio no puede obtenerse, conservarse ni perderse, sino por los medios, formas y condiciones que ella misma establece en sus respectivos casos. Ninguna autoridad, incluso la del Poder Legislativo, puede en manera alguna dispensar su observancia, ni conceder impunidad a sus violaciones para que deje de ser efectiva la responsabilidad de los infractores.

Art. 6. Son habitantes de la República todos los que habiten en puntos que ella reconoce por su territorio, y desde el momento en que lo pisan, quedan sujetos a sus leyes y gozan de los derechos que respectivamente les otorguen.

Art. 7. La Constitución declara a todos los habitantes de la República el goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones siguientes: ...

II. La ley es una para todos, y de ella emanan la potestad de los que mandan y las obligaciones de los que obedecen. La autoridad pública no puede más que lo que la ley le concede, y el súbdito puede todo lo justo y honesto que ella no le prohíbe.

Art. 81. No puede el Congreso Nacional: ...

II. Proscribir a ningún mexicano, imponerle pena de ninguna especie directa o indirectamente, ni suspender el goce de los derechos que garantiza esta Constitución a los habitantes de la República.

Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente, 1842.

Art. 4. La Constitución reconoce los derechos del hombre como la base y el objeto de las instituciones sociales. Todas las leyes deben respetar y asegurar estos derechos, y la protección que se les concede es igual para todos los individuos.

Art. 6. Las garantías establecidas por esta Constitución son inviolables: cualquiera atentado cometido contra ellas, hace responsable á la autoridad que lo ordena y al que lo ejecuta: debe ser castigado como un crimen privado cometido con abuso de la fuerza: esta responsabilidad podrá exigirse en todo tiempo y no podrá recaer sobre los culpados ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribunales o impida que se haga efectiva la pena.

Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 3. Son habitantes de la República, todos los que estén en puntos que ella reconoce por de su territorio, y desde el momento en que lo pisan quedan sujetos a sus leyes, y gozan de los derechos que respectivamente se les concedan.

Art. 13. La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías.

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843.

Art. 67. No puede el Congreso: ...

IV. Suspender o minorar las garantías individuales, si no es en los casos y modo dispuestos en el Artículo 198.

Exposición de Motivos y Voto Particular del Mariano Otero, 1847.

En las más de las Constituciones conocidas, no solo se fijan los principios relativos á la organización de los poderes públicos, sino que se establecen las bases de las garantías individuales, probablemente porque la condición, social de los asociados es el objeto primordial de las instituciones, y uno de los caracteres más señalados de la verdadera naturaleza de los gobiernos: y sin embargo de que estas garantías, en la realidad de las cosas, dependen de las disposiciones particulares de los Estados, nuestra Constitución federal declaró que la Nación estaba obligada á proteger por leyes sabias y justas los derechos del ciudadano; y á imitación del Código de los Estados Unidos, en

varios de sus artículos se encuentran disposiciones verdaderamente filosóficas dirigidas al mismo fin.

Yo no he hallado todavía una razón sólida contra este medio de poner las garantías del hombre bajo la égida del poder general, y no son pocas las que han debido decidirse á su favor. En este punto la generalidad de las declaraciones constitucionales no presenta ningún inconveniente, porque los principios dictados por la razón son los mismos en todos los países y bajo y bajo todos los climas.

Pero sin ellas, ¿cómo podría el gobierno general proteger esos derechos, ni afianzar en los Estados todos la realidad de las instituciones democráticas? ¿Cómo hacer efectivos los principios de libertad? Es, por otra parte, incontestable que en el estado actual de nuestra civilización no se podría dejar tan interesante arreglo á la absoluta discreción de los Estados.

De consiguiente entiendo que la Constitución actual debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de tal manera estables, que ninguno de los hombres que habiten en cualquiera parte del territorio de la República, sin distinción de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar sobre este punto las mejores leyes de la tierra.

Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando á una ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos.

Porque los señores Diputados habrán observado ya en esta materia que aun reduciéndose á los principios fundamentales, es necesario darles una extensión poco conveniente á los límites y al carácter, por decirlo así, elemental de la Constitución: y sin un poder ha de proclamar el principio en su vaga y abstracta generalidad, y otro ha de señalar los pormenores de que depende su realidad, aquel nada habrá hecho.

Para conocer en esta materia la insuficiencia de los principios generales, basta escoger como al acaso, cualquier punto: sea por ejemplo la seguridad: todas nuestras Constituciones establecen un cierto plazo entre la detención y la formal prisión, previniendo que en él se tome al acusado su declaración; y todas, olvidando el caso de la aprehensión del reo verificada en un lugar distinto del de su juez, han dejado una excepción en la cual la infracción de la ley viene á ser inevitable: lo mismo puede observarse respecto de la propiedad: las más amplias declaraciones no han bastado para hacer cesar el sistema de los préstamos forzosos y la ocupación de los bagajes, que no son más que atentados contra la propiedad.

Una ley más extensa, que fije exactamente los principios, que reconozca las excepciones, y sobre todo, que establezca los medios de hacerlas efectivas, en el único medio que podrá llenar necesidad tan importante.

En la Constitución solo propongo que se anuncie el principio general, que se declare su inviolabilidad y se fije el único caso en que puedan suspenderse las garantías, no todas, sino solo las respectivas á la detención de los acusados y al cateo de las habitaciones. Si viniendo tiempos más tranquilos el Congreso pudiese ocuparse en la formación de

esa ley, semejante trabajo, por sí solo, elevaría á su memoria un monumento de muy grato recuerdo.

[...]

Ya he dicho que en mi juicio esta es la base y la garantía de toda Constitución, y muy especialmente de las democráticas, que hacen emanar de la elección todos los poderes del Estado, porque de ella depende que los funcionarios públicos sean buenos ó malos, que representen á la Nación entera, ó solo á un partido más ó menos numeroso, vencedor y exclusivo.

Pero como este final resultado no depende solo de la declaración general que establece á quién corresponde el derecho de sufragio, sino de todas las disposiciones que arreglan el modo de ejercerlo, todos los pormenores son interesantes, y de aquí se sigue que en este particular, como en el de las garantías individuales, no sea posible reducirlo todo á los principios fundamentales, únicos propios de la Constitución, y que solo una ley extensa y bien combinada puede realizar la apetecida reforma.

Art. 40. Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad é igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

Estas garantías son inviolables, y solo en el caso de una invasión extranjera ó de rebelión interior, podrá el Poder Legislativo suspender las formas establecidas para la aprehensión y detención de los particulares, y cateo de las habitaciones y esto por determinado tiempo.

Todo atentado contra dichas garantías es caso de responsabilidad, y no podrá recaer á favor de los culpables, ni indulto, ni amnistía, ni cualquiera otra disposición, aunque sea emanada del Poder Legislativo, que los sustraiga de los tribunales ó impida que se haga efectiva la pena.

Acta Constitutiva y de Reforma, 1847.

Art. 5. Para asegurar los derechos del hombre que la constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856.

Art. 3. Son habitantes de la República todos los que estén en puntos que ella reconoce por de su territorio; y desde el momento en que lo pisan, quedan sujetos a sus leyes, y gozan de los derechos que respectivamente se les concedan.

Art. 5. El ejercicio de los derechos civiles es independiente de la calidad de ciudadano. En consecuencia, a excepción de los casos en que se exija dicha calidad, todos los habitantes de la República gozarán de los derechos civiles conforme a las leyes, y de las garantías que se declaran por este Estatuto; pero los extranjeros no disfrutarán en

México de los derechos y garantías que no se concedan conforme a los tratados, a los mexicanos en las naciones a que aquéllos pertenezcan.

Art. 30. La nación garantiza a sus habitantes la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad.

Art. 73. No podrá establecerse distinción alguna civil ni política por razón del nacimiento, ni del origen o raza.

Art. 77. Estas garantías son generales, comprenden a todos los habitantes de la República y obligan a todas las autoridades que existen en ella. Únicamente queda sometido a lo que dispongan las leyes comunes generales.

VII. El modo de proceder contra los militares en los delitos cometidos en el servicio militar.

VIII. Las reglas a que han de someterse la entrada y permanencia de los extranjeros en el país, y el derecho de éstos para el ejercicio de las profesiones y giros, gozando en todo lo demás de las garantías que esta ley consigna.

Art. 84. No puede el presidente de la República: ...

III. Suspender o restringir las garantías individuales si no es en los casos del artículo 82.

Comunicado de José María Lafragua, 1856.

Octavo Párrafo. La sección quinta es la ofrecida Ley de Garantías Individuales, y en general está tomada del acuerdo aprobado por el último Senado constitucional. Como en esa Cámara fue escrupulosamente discutido el Proyecto, el gobierno cree haber aceptado, adoptándolo con las modificaciones que han parecido necesarias y que son consecuencia de los principios de progresos y de justicia proclamados por la administración. La libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad, están suficientemente garantizadas, y los ciudadanos pueden vivir tranquilos bajo la égida de la ley, que imponiendo reglas al poder supremo asegura a la sociedad contra los avances del despotismo y pone freno a las pasiones, que muchas veces visten coón su vergonzosa librea los actos que deben ser únicamente frutos de la razón y de la justicia. En esta sección se proclama la abolición de la esclavitud, se establecen bases para el servicio personal, se declara la libertad de la enseñanza, se prohíben todos los monopolios, las distinciones, los privilegios perjudiciales, las penas degradantes y los préstamos forzosos, se restringe la pena de muerte, ya que, por desgracia, no se puede aún decretar su abolición completa, se establecen las penitenciarias, se respeta la propiedad, y en suma, se hacen efectivos los principios de libertad, orden, progreso, justicia y moralidad que el gobierno proclamó desde el instante primero de su instalación.

La república verá si, en cuanto ha sido posible, se han cumplido las promesas hechas en 22 de diciembre de 1855.

Duodécimo Párrafo. Pero como el ilustrísimo señor presidente sustituto está muy distante de querer ejercer una dictadura sin límites, ha marcado la línea de sus atribuciones y señalado los derechos de los ciudadanos para los casos ordinarios.

Sin embargo, como hay momentos de supremo peligro en que la salud pública debe ser la única ley, el artículo 82 declara que para ofender la independencia o la integridad del territorio, para sostener el orden establecido o conservar la tranquilidad pública, el gobierno puede usar del poder discrecional. Esto es tanto más necesario, cuanto que de otra manera las garantías individuales servirían no más de escudo a los revolucionarios, con positivo perjuicio de la sociedad.

Esta tiene tantos derechos o más que los individuos para ser atendida, y aunque el deber y la voluntad del gobierno son no lastimar a los ciudadanos, como su primera obligación es salvar a la comunidad, cuando por desgracia hay que elegir entre ésta y aquéllos, el bien público será necesariamente preferido.

Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856.

Art. 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales: en consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y defender las garantías que otorga la presente constitución.

Art. 2. Todos los habitantes de la República, sin distinción de clases, ni de origen, tienen iguales derechos. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede ser investida de fueros o privilegios exclusivos, ni dotada de emolumentos que redunden en gravamen de la sociedad. Solamente subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley penal fijará con toda claridad los casos de esta excepción.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, se presentó como artículo 1 en el Proyecto de Constitución de 1856 y corresponde al 1 de 1917. Se refiere a los *derechos del hombre como base y objeto de las instituciones sociales*; se aprobó el 11 de julio de 1856 con 70 votos a favor (75.3 %) y 23 en contra (24.7 %). En relación a los debates, el 10 de julio de 1856, Díaz González cuestionó el por qué las autoridades debían defender las garantías y Arriaga argumentó por la defensa de las garantías. Ignacio Ramírez señaló la necesidad de definir los derechos ya que el hombre nace con ellos. Guzmán comentó que los derechos son el fin de la ley y por tanto toda ley debe comenzar hablando de ellos. Aranda comentó que este artículo era sólo una repetición superflua. El 11 de julio de 1856, Vallarta explicó que no es el pueblo quien reconoce los derechos sino sus representantes, por lo que la Constitución sólo debía contener disposiciones preceptivas y no teóricas abstractas o científicas. Mata comparó con la ley fundamental de Estados Unidos. Díaz González, Guzmán y Ruiz señalaron que esta redacción estaría mejor en el capítulo de prevenciones. Fuentes asintió que las leyes y autoridades debían respetar las garantías. Arriaga señaló que ninguna ley puede atacar los derechos del hombre. Así mismo, tiene relación con el artículo que se presentó como 10 en el Proyecto de Constitución de 1856, *Libertad*

de los individuos de la República, y corresponde al 2 de 1917. El 8 de julio de 1856 fue aprobado sin discusión con 82 votos a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 1. El pueblo mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.

Art. 2. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el Territorio Nacional recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865.

Art. 58. El Gobierno del Emperador garantiza á todos los habitantes del Imperio, conforme á las prevenciones de las leyes respectivas: la igualdad ante la ley, la seguridad personal, la propiedad, el ejercicio de su culto, la libertad de publicar sus opiniones.

Art. 59. Todos los habitantes del Imperio disfrutan de los derechos y garantías, y están sujetos á las obligaciones, pago de impuestos y demás deberes fijados por las leyes vigentes ó que en lo sucesivo se expidieren.

Plan de San Luis Potosí, 1910.

Si en el ánimo del General Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y sus consejeros, hubiera evitado esta revolución, haciendo algunas concesiones al pueblo; pero ya que no lo hizo ... ¡tanto mejor!, el cambio será más rápido y más radical, pues el pueblo mexicano, en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto, y ya que el General Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudir ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.

Conciudadanos:- No vaciléis pues un momento: tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombre libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron: invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria.

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916.

Más, desgraciadamente, los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesidades del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfacción; de manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva.

En efecto, los derechos individuales que la Constitución de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales, han sido conculcados de una manera casi constante

por los diversos gobiernos que desde la promulgación de aquélla se han sucedido en la república : las leyes orgánicas del juicio de amparo ideado para protegerlos, lejos de llegar a un resultado pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar la marcha de la justicia, haciéndose casi imposible la acción de los tribunales, no sólo de los federales, que siempre se vieron ahogados por el sinnúmero de expedientes, sino también de los comunes, cuya marcha quedó obstruida por virtud de los autos de suspensión que sin tasa ni medida se dictaban.

[...]

Siendo el objeto de todo gobierno el amparo y protección del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compone el agregado social, es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución Política tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre.

La Constitución de un pueblo no debe procurar, si es que ha de tener vitalidad que le asegure larga duración, poner límites artificiales entre el Estado y el individuo, como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción de uno y restringir la del otro, de modo que lo que se da a uno sea la condición de la. protección de lo que se reserva el otro; sino que debe buscar que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes, dado que a él no le es posible ejercerla directamente, no pueda convertirse en contra de la sociedad que la establece, cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un momento hay que perder de vista que el gobierno tiene que ser forzosa y necesariamente el medio de realizar todas las condiciones sin las cuales el derecho no puede existir y desarrollarse.

Partiendo de este concepto, que es él primordial, como que es el que tiene que figurar en primer término, marcando el fin y objeto de la institución del gobierno, se dará a las instituciones sociales su verdadero valor, se orientará convenientemente la acción de los poderes públicos y se terminarán hábitos y costumbres sociales y políticas, es decir, procedimientos de gobierno que hasta hoy no han podido fundamentarse, ‘debido a que si el pueblo mexicano no tiene la creencia en un pacto social en que repose toda la organización política ni en el origen divino de un monarca, señor de vidas y haciendas, sí comprende muy bien que las instituciones que tiene, si bien proclaman altos principios, no se amoldan a su manera de sentir y de pensar, y que lejos de satisfacer necesidades, protegiendo el pleno uso de la libertad, carecen por completo de vida, dominados como han estado por mi despotismo militar enervante, y por explotaciones inicuas, que han arrojado a las clases más numerosas a la desesperación y a la ruina.

Ya antes dije que el deber primordial del gobierno es facilitar las condiciones necesarias para la organización del derecho, o, lo que es lo mismo, cuidar de que se mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad individual, para que desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez que conseguirse la coexistencia pacífica

de todas las actividades, realizarse la unidad de esfuerzos y tendencias en orden a la prosecución del fin común: la felicidad de todos los asociados.

Por esta razón, lo primero que debe hacer la Constitución política de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia y completa posible, la libertad humana, para evitar que el gobierno a pretexto del orden o de la paz, motivos que siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso íntegro, atribuyéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa individual y la actividad social, esclavizando al hombre y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente.

La Constitución de 1857 hizo, según antes he expresado, la declaración de que los derechos del hombre son la base y objeto de todas las instituciones sociales; pero, con pocas excepciones, no otorgó a esos derechos las garantías debidas, lo que tampoco hicieron las leyes secundarias, que no llegaron a castigar severamente la violación de aquéllas, porque sólo fijaron penas nugatorias, por insignificantes, que casi nunca se hicieron efectivas. De manera que sin temor de incurrir en exageración, puede decirse que a pesar de la Constitución mencionada, la libertad individual quedó por completo a merced de los gobernantes.

El número de atentados contra la libertad y sus diversas manifestaciones, durante el período en que la Constitución de 1857 ha estado en vigor, es sorprendente; todos los días ha habido quejas contra los abusos y excesos de la autoridad, de uno a otro extremo de la república; y sin embargo de la generalidad del mal y de los trastornos que constantemente ocasionaba, la autoridad judicial de la federación no hizo esfuerzos para reprimirlo, ni mucho menos para castigarlo.

[...]

La simple declaración de derechos, bastante en un pueblo de cultura elevada, en que la sola proclamación de un principio fundamental de orden social y político, es suficiente para imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una larga tradición y por usos y costumbres inveterados, la autoridad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha atribuido poderes para todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que callar y obedecer.

A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el gobierno de mi cargo propone, respecto a la sección primera del título primero de la Constitución de 1857, y abrigo la esperanza de que con ellas y con los castigos severos que el código penal imponga a la conculcación de las garantías individuales, se conseguirá que los agentes del poder público sean lo que deben ser: instrumentos de seguridad social, en vez de ser lo que han sido, los opresores de los pueblos que han tenido la desgracia de caer en sus manos.

[...]

Esta es la oportunidad, señores diputados, de tocar una cuestión que es casi seguro se suscitará entre vosotros, ya que en los últimos arios se ha estado discutiendo,

con el objeto de hacer aceptable cierto sistema de gobierno que se recomienda como infalible, por una parte, contra la dictadura, y por la otra, contra la anarquía, entre cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su independencia, los pueblos latinoamericanos, a saber: el régimen parlamentario.

Creo no sólo conveniente, sino indispensable, deciros, aunque sea someramente, los motivos que he tenido para no aceptar dicho sistema entre las reformas que traigo al conocimiento de vosotros, Tocqueville observó en el estudio de la historia de los pueblos de América de origen español, que éstos van a la anarquía cuando se cansan de obedecer, y a la dictadura cuando se cansan de destruir; considerando que esta oscilación entre el orden y el desenfreno, es la ley fatal que ha regido y regirá por mucho tiempo a los pueblos mencionados.

No dijo el estadista referido cuál sería, a su juicio, el medio de librarse de esa maldición, cosa que le habría sido enteramente fácil con sólo observar los antecedentes del fenómeno y de las circunstancias en que siempre se ha reproducido.

Los pueblos latinoamericanos, mientras fueron dependencias de España, estuvieron regidos por mano de hierro; no había más voluntad que la del virrey; no existían derechos para el vasallo; el que alteraba el orden, ya propalando teorías disolventes o que simplemente socavaban los cimientos de la fe o de la autoridad, o ya procurando dar pábulo a la rebelión, no tenía más puerta de escape que la horca.

Cuando las luchas de independencia rompieron las ligaduras que ataban a esos pueblos a la metrópoli, deslumbrados con la grandiosidad de la revolución francesa, tomaron para sí todas sus reivindicaciones, sin pensar que no tenían hombres que los guiasen en tan ardua tarea, y que no estaban preparados para ella.

Las costumbres de gobierno no se imponen de la noche a la mañana; para ser libre no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo ser.

Los pueblos de que se trata, han necesitado y necesitan todavía de gobiernos fuertes, capaces de contener dentro del orden a poblaciones indisciplinadas, dispuestas a cada instante y con el más fútil pretexto a desbordarse, cometiendo toda clase de desmanes; pero por desgracia, en ese particular se ha caído en la confusión y por gobierno fuerte se ha tomado al gobierno despótico.

Error funesto que fomentado las ambiciones de las clases superiores, para poder apoderarse de la dirección de los negocios públicos.

En general, siempre ha habido la creencia. De que no se puede conservar el orden sin pasar sobre la ley, y ésta y no otra es la causa de la ley fatal de que habla Tocqueville; porque la dictadura jamás producirá el orden, como las tinieblas no pueden producir la luz.

Así, pues, dispese el error, enséñese al pueblo a que no es posible que pueda gozar de sus libertades si no sabe hacer uso de ellas, o lo que es igual, que la libertad tiene por condición el orden, y que sin éste aquélla es imposible.

Constrúyase sobre esa base el gobierno de las naciones latinoamericanas y se habrá resuelto el problema.

En México, desde su independencia hasta hoy, de los gobiernos legales que han existido, unos cuantos se apegaron a este principio, como el de Juárez, y por eso pudieron salir avantes, los otros, como los de Guerrero y Madero, tuvieron que sucumbir, por no haberlo cumplido. Quisieron imponer el orden enseñando la ley, y el resultado fue el fracaso.

Si, por una parte, el gobierno debe ser respetuoso de la ley y de las instituciones por la otra debe ser inexorable con los trastornadores del orden y con los enemigos de la sociedad: sólo así pueden sostenerse las naciones y encaminarse hacia el progreso.

[...]

A mi juicio, lo más sensato, lo más prudente y a la vez lo más conforme con nuestros antecedentes políticos, y lo que nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orígenes diversos del nuestro, es, no me cansaré de repetirlo, constituir el gobierno de la república respetando escrupulosamente esa honda tendencia a la libertad, a la igualdad y a la seguridad de sus derechos, que siente el pueblo mexicano.

Porque no hay que perder de vista, y sí, por el contrario, tener constantemente presente, que las naciones, a medida que más avanzan, más sienten la necesidad de tomar su propia dirección para poder conservar y ensanchar su vida, dando a todos los elementos sociales el goce completo de sus derechos y todas las ventajas que de ese goce resultan, entre otras, el auge poderoso de la iniciativa individual.

Este progreso social es la base sobre la que debe establecerse el progreso político; porque los pueblos se persuaden muy fácilmente de que el mejor arreglo constitucional, es el que más protege el desarrollo de la vida individual y social, fundado en la posesión completa de las libertades del individuo, bajo la ineludible condición de que éste no lesione el derecho de los demás.

[...]

Señores diputados, no fatigaré por más tiempo vuestra atención, pues larga y cansada sería la tarea de hablaros de las demás reformas que contiene el proyecto que tengo la honra de poner en vuestras manos, reformas todas tendentes a asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley, a garantizar los derechos de todos los mexicanos por el funcionamiento de una justicia administrada por hombres probos y aptos, y a llamar al pueblo a participar, de cuantas maneras sea posible, en la gestión administrativa.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 1 *Derecho de todo individuo de gozar las garantías Constitucionales*. En el proyecto de Constitución se presentó como 1, y corresponde al 1 de 1857. El 9 de diciembre de 1916 se formuló el dictamen que se presentó en la sesión de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre siguiente. El 13 de diciembre en mención, formuló debates Rafael Martínez y habló a favor de los indígenas, así como de que las garantías eran irrenunciables.

Martínez de Escobar precisó que el Estado era la sociedad organizada a través de la Constitución, del centralismo, derecho social e indígena. Macías refirió que en México todo individuo gozaría de las garantías. Múgica se expresó por las Comisiones. El 13 de diciembre de 1916, fue aprobado con 144 votos a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 2 *Prohibición de la esclavitud*. En el proyecto de Constitución se presentó como 2, y corresponde al 2 de 1857. El 9 de diciembre de 1916 se formuló el dictamen, el cual se presentó en la sesión de 11 de diciembre siguiente. El 13 de diciembre de 1916 se sometió a debate en el que Múgica solicitó cambiar Estados Unidos Mexicanos por República Mexicana. Se aprobó sin discusión el 13 de diciembre de 1916, en la 11ª sesión, con 177 a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 2. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Texto original

Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

3 Reformas 1917-2012

DOF 14 de agosto de 2001: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al Territorio Nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

DOF 4 de diciembre de 2006: “...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

DOF 10 de junio de 2011: “TÍTULO PRIMERO De los Derechos Humanos y sus Garantías... En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Texto actual

Art. 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

1.2. ANTECEDENTE ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 2

Antecedentes 1810-1917

FECHA	DOCUMENTO
1810	Bando de Hidalgo en el que se declara abolida la esclavitud.
1810	Bando de José María Anzorena aboliendo la esclavitud.
1810	Bando de José María Morelos que abole la esclavitud.
1811	Decreto de Morelos contra la guerra de castas.
1811	Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón.
1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1813	Sentimientos de la Nación de José María Morelos.
1840	Proyecto de reformas a las Leyes Constitucionales de 1836.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente.
1842	Segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1856	Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.
1856	Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana
1856	Congreso Constituyente.
1857	Constitución Política de la República Mexicana 1857.
1857	Manifiesto de Juan Álvarez a los pueblos cultos de Europa y América.
1865	Estatuto provisional del Imperio Mexicano.

- 1865 Reglamento del artículo 6° del Decreto de Maximiliano sobre Emigrantes Extranjeros.
- 1916 Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
- 1916 Congreso Constituyente.
- 1917 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bando de hidalgo en el que se Declara Abolida la Esclavitud, 1810.

Art. 1. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días, so pena de muerte, que se les aplicará por trasgresión de este artículo.

Bando de José María Anzonera aboliendo la esclavitud, 1810.

En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del Excelentísimo Señor Capitán General de la Nación Americana Doctor Don Miguel de Hidalgo y Costilla; de que debe estarle rendirle las mas expresivas gracias por tan singulares beneficios: Prevengo a todos los Dueños de Esclavos y Esclavas, que luego inmediatamente que llegue a su noticia esta Plausible Superior Orden, los pongan en Libertad otorgándoles las necesarias ESCRITURAS DE A LA HORRIA, con las interciones acostumbradas para que puedan tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos, y ejecutar las demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres; y no lo haciendo así los citados Dueños de esclavos y esclavas sufrirán irremisiblemente la Pena Capital, confiscación de todos sus bienes. Bajo la misma que igualmente se impone, no comprarán en lo sucesivo, ni venderán esclavo alguno: ni los Escribanos, ya sean del Número o reales, extenderán escrituras concernientes a este género de contratos, pena de suspensión de oficio, y Confiscación de Bienes por no exigirlo la humanidad, ni dictarlo la misericordia.

Bando de José María Morelos que abole la esclavitud, 1810.

Decreto de Morelos contra la guerra de castas Don José María Morelos, teniente general de ejército y general en jefe de los del Sur etc.

Por cuanto un grandísimo equívoco que se ha padecido en esta costa, iba á precipitar á todos sus habitantes á la mas horrorosa anarquía, ó mas bien en la mas lamentable desolación, provenido éste daño de excederse los oficiales de los límites de sus facultades, queriendo proceder el inferior contra el superior, cuya revolución ha entorpecido en gran manera los progresos de nuestras armas; y para cortar de raíz semejantes perturbaciones y desórdenes, he venido en declarar por decreto de este día los puntos siguientes.

Que nuestro sistema solo se encamina á que el gobierno político y militar que reside en los europeos recaiga en los criollos, quienes guardarán mejor los derechos del Sr. Fernando VII; y en consecuencia, de que no haya distinción de calidades, sino

que todos generalmente nos nombremos americanos, para que mirándonos como hermanos, vivamos en la santa paz, que nuestro Redentor Jesucristo nos dejó cuando hizo su triunfante subida á los cielos, de que se sigue que todos deben conocerlo, que no hay motivo para que las que se llamaban castas quieran destruirse unos con otros, los blancos contra los negros, ó éstos contra los naturales, pues seria el yerro mayor que podían cometer los hombres, cuyo hecho no ha tenido ejemplar en todos los siglos y naciones, y mucho menos debíamos permitirlo en la presente época, porque seria la causa de nuestra total perdición espiritual y temporal.

Que siendo los blancos los primeros representantes del reino, y los que primero tomaron las armas en defensa de los naturales de los pueblos y demás castas, uniformándose con ellos, deben ser los blancos por este mérito el objeto de nuestra gratitud y no del odio que se quiere formar contra ellos.

Que los oficiales de las tropas, jueces y comisionados, no deben excederse de los términos de las facultades que se conceden á sus empleos, ni menos proceda el inferior contra el superior si no fuere con especial comisión mía ó de la suprema junta, por escrito y no de palabra, la que manifestará á la persona contra quien fuere á proceder.

Que ningún oficial como juez, ni comisionado, ni gente sin autoridad, dé auxilio para proceder el inferior contra el superior, mientras no se le manifieste orden especial mía ó de S. M. la suprema junta, y se le haga saber por persona fidedigna.

Que ningún individuo sea quien fuere, tome la voz de la nación para estos procedimientos ú otros alborotos, pues habiendo superioridad legítima y autorizada, deben ocurrir á esta en los casos arduos y de traición, y ninguno procederá con autoridad propia.

Que no siendo como no es nuestro sistema proceder contra los ricos por razón de tales, ni menos contra los ricos criollos, ninguno se atreverá á echar mano de sus bienes por muy rico que sea; por ser contra todo derecho semejante acción, principalmente contra la ley divina, que nos prohíbe hurtar y tomar lo ajeno contra la voluntad de su dueño, y aun el pensamiento de codiciar las cosas ajenas.

Que aun siendo culpados algunos ricos europeos ó criollos, no se eche mano de sus bienes sino con orden expresa del superior de la expedición, y con el orden y reglas que debe efectuarse por secuestro ó embargo, para que todo tenga el uso debido.

Que los que se atreviesen á cometer atentados contra lo dispuesto en este decreto, serán castigados con todo el rigor de las leyes; y la misma pena tendrán los que idearen sediciones y alborotos en otros acontecimientos que aquí no se expresan por indefinidos en los espíritus de malignidad, pero que son opuestos á la ley de Dios, tranquilidad de los habitantes del reino y progreso de nuestras armas.

Y para que llegue á noticia de todos y nadie alegue ignorancia, mando se publique por bando en esta ciudad y su partido, y en los demás de la comprensión de mi mando, y se fije en los parajes acostumbrados.

Es hecho en la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, a 13 de Octubre de 1811.

Decreto de Morelos contra la Guerra de Castas, 1811.

“Don José María Morelos, teniente general de ejército y general en jefe de lo del sur...

“Por cuanto un grandísimo equívoco que se ha padecido en esta costa, iba a precipitar a todos sus habitantes a la más horrorosa anarquía, o más bien en la más lamentable desolación, proveniente este daño de excederse los oficiales de los límites de sus facultades, queriendo proceder el inferior contra el superior, cuya revolución ha entorpecido en gran manera los progresos de nuestra armas: y para cortar de raíz semejantes perturbaciones y desórdenes, he venido en declarar por decreto de este día los puntos siguientes:

“Que nuestro sistema sólo se encamina a que el gobierno político y militar que reside en los europeos recaiga en los criollos, quienes guardarán mejor los derechos del señor don Fernando VII; y en consecuencia, de que no haya distinción de calidades, sino que todos generalmente nos nombremos americanos, para que mirándonos como hermanos, vivamos en la santa paz que nuestro redentor Jesucristo nos dejó cuando hizo su triunfante subida a los cielos, de que se sigue que todo deben conocerlo, que no hay motivo para que las que se llaman castas quieran destruirse unos con otros, los blancos contra los negros, o éstos contra los naturales, pues sería el yerro mayor que podían cometer los hombres, cuyo hecho no ha tenido ejemplar en todos los siglos y naciones, y mucho menos debíamos permitirlo en la presente época, porque sería la causa de nuestra total perdición espiritual y temporal.

“Que siendo los blancos los primeros representantes del reino y los que primero tomaron las armas en defensa de los naturales de los pueblos y demás castas, uniformándose con ellos, deben ser los blancos, por este mérito, el objeto de nuestra gratitud y no del odio que se quiere formar contra ellos.

“Que los oficiales de las tropas, jueces y comisionados, no deben excederse de los términos de las facultades que se conceden a sus empleos, ni menos proceda el inferior contra el superior si no fuese con especial comisión mía o de la Suprema Junta, por escrito y no de palabra, la que manifestará a la persona contra a quien fuere a proceder.

“Que ningún oficial como juez, ni comisario, ni gente sin autoridad, dé auxilio para proceder el inferior contra el superior, mientras no se le manifieste orden especial mía o de su majestad la Suprema Junta, y se la haga saber por persona fidedigna.

“Que ningún individuo, sea quien fuere, tome la voz de la nación para estos procedimientos y otros alborotos, pues habiendo superioridad legítima y autorizada, deben ocurrir a ésta en los casos arduos y de traición, y ninguno procederá con autoridad propia.

“Que no siendo como no es nuestro sistema proceder contra los ricos por razón de tales, ni menos contra los ricos criollos, ninguno se atreverá a echar mano de sus bienes por muy rico que sea; por ser contra todo derecho semejante acción, principalmente contra la ley divina, que nos prohíbe hurtar y tomar lo ajeno contra la voluntad de su dueño, y aun el pensamiento de codiciar las cosas ajenas.

“Que aun siendo culpados algunos ricos europeos o criollos, no se eche mano de su bienes sino con orden expresa del superior de la expedición, y con el orden y reglas que deben efectuarse por secuestro o embargo, para que todo tenga el uso debido.

“Que los que se atrevieren a cometer atentados contra lo dispuesto de este decreto, serán castigados con todo el rigor de las leyes, y la misma pena tendrán los que idearen sediciones y alborotos en otros acontecimientos que aquí no se expresan por indefinidos en los espíritus de malignidad, pero que son opuestos a la ley de Dios, tranquilidad de los habitantes del reino y progreso de nuestras armas.

Y para que llegue a noticia de todos y nadie alegue ignorancia, mando se publique por bando en esta ciudad y su partida, y en los demás de los de la comprensión de mi mando, y se fije en los parajes acostumbrados.

“Es hecho en la ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, a 13 de octubre de 1811”.

Elementos constitucionales elaboradas por Ignacio López Rayón, 1811.

Punto 24. Queda enteramente proscrita la esclavitud.

Parte final del documento: El pueblo americano olvidado de unos, compadecido por otros, y despreciado por la mayor parte aparecerá ya con el esplendor y dignidad de que se ha hecho acreedor por la bizarría con que ha roto las cadenas del despotismo, la cobardía y la ociosidad será la única que infame al ciudadano, y el templo del honor abrirá indistintamente las puertas del mérito, y la virtud una santa emulación llevará a nuestros hermanos, y nosotros tendremos la dulce satisfacción de decirnos: Os hemos ayudado y dirigido, hemos hecho substituir la abundancia a la escasez, la libertad a la esclavitud, y la felicidad a la miseria; bendecid pues al Dios de los destinos que se ha dignado mirar por compasión su pueblo.

Constitución Española de Cádiz, 1812.

Art. 5. Son Españoles: Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Sentimientos de la Nación de José María Morelos, 1813.

Punto 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud.

Proyecto de reformas a las leyes Constitucionales de 1836, 1840.

Art. 4. En el territorio mexicano ninguno es esclavo, ni noble o plebeyo por su origen. Todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley, sin otras distinciones, que las que ella establezca en consideración a la virtud, a la capacidad y al servicio público.

Si llegare el caso de que se introduzca en la República algún esclavo, por el mismo hecho quedará éste en la clase de libre bajo la protección de las autoridades, las cuales perseguirán al introductor como reo de violencia contra la libertad personal.

Primer Proyecto de Constitución política de la República Mexicana, 1842.

Art. 7. Nadie es esclavo en el territorio de la Republica.

Voto particular de la minoría de la comisión constituyente, 1842.

Art. 50. La Constitución otorga á los derechos del hombre, las siguientes garantías.

Libertad personal.

- I. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su territorio quedan en libertad por el mismo hecho.

Segundo proyecto de la Constitución política de la Republica, 1842.

Art. 13. La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías. ...

Libertad VIII. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su territorio, quedan en libertad por el mismo hecho.

Bases Orgánicas de la Republica Mexicana, 1842.

Art. 9. Derechos de los habitantes de la República.

- I. Ninguno es esclavo en el territorio de la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase de libre, quedando bajo la protección de las leyes.

Estatuto Orgánico provisional de la Republica Mexicana.

Art. 31. En ningún punto de la República mexicana se podrá establecer la esclavitud: los esclavos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de la nación.

Proyecto de Constitución Política de la Republica Mexicana

Art. 10. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por sólo ese hecho su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes.

Constitución Política de la Republica Mexica, 1857.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, artículo 2º *Libertad de los individuos de la República*, se presentó como 10 en el Proyecto de Constitución de 1856 y corresponde al 2 de 1917, se aprobó el 8 de julio de 1856 con 82 votos a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 2. En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el Territorio Nacional recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes.

Se reformó el 25 de septiembre de 1873, en los términos siguientes:

El matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Manifiesto de Juan Álvarez a los pueblos cultos de Europa y America, 1856.

“Los hacendados en su mayoría y sus dependientes, comercian y enriquecen con el mísero sudor del infeliz labriego: los enganchan como esclavos, y deudas hay que pasan hasta la octava generación, creciendo siempre la suma y el trabajo personal del desgraciado, y menguando la humanidad, la razón, la justicia y la recompensa de tantos afanes, tantas lágrimas y fatigas tantas.

“La expropiación y el ultraje es el barómetro que aumenta y jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados, porque ellos lentamente se posesionan, ya de los terrenos de particulares, ya de los ejidos o de los de la comunidad, cuando existían estos, y luego, con el descaro más inaudito, alegan propiedad, sin presentar un título legal de adquisición, motivo bastante para que los pueblos en general clamen justicia, protección, amparo; pero sordos los tribunales a sus clamores y a sus pedidos, el desprecio, la persecución y el encarcelamiento es lo que se da en premio a los que reclaman lo suyo.

“Si hubiere quien dude, siquiera un momento, de esta verdad, salga al campo de los acontecimientos públicos, válgase de la prensa, que yo los satisfaré insertando en cualquier periódico las innumerables quejas que he tenido; las pruebas que conservo como una rica joya para demostrar el manejo miserable de los que medran con la sangre del infeliz y con las desgracias del pueblo mexicano”.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865.

Art. 64. No existiendo la esclavitud ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cualquier individuo que lo pise es libre por sólo ese hecho.

Reglamento del artículo 6 del Decreto de Maximiliano
sobre Emigrantes y Extranjeros, 1865.

Art. 1. Con arreglo a las leyes del Imperio, todos los hombres de color son libres por el sólo hecho de pisar el territorio mexicano.

Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916.

Art. 2. del Proyecto. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos de otros países que entrasen al territorio nacional, alcanzarán por este sólo hecho su libertad y la protección de las leyes.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 2º *Prohibición de la esclavitud*, en el proyecto de Constitución se presentó como 2º, y corresponde al 2º de 1857; el 9 de diciembre de 1916 se efectuó el dictamen que se mostró en la sesión de 11 de diciembre siguiente, el 13 de diciembre de ese año, se efectuaron los debates en los cuales Múgica solicitó cambiar Estados Unidos Mexicanos por República Mexicana. Se aprobó sin discusión el 13 de diciembre de 1916, en la 11ª sesión, con 177 a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 2. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

1 Reforma 1917-2012

DOF 14 de agosto de 2001: “La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el Territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un Territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco Constitucional de autonomía que asegure la unidad Nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía para:

- I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;
- II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de

manera relevante. La dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los Jueces o Tribunales correspondientes;

- III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los Estados;
- IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;
- V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución;
- VI. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley;
- VII. Elegir, en los Municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos. Las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas reconocerán y regularán estos derechos en los Municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas;
- VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las Constituciones y Leyes de las Entidades Federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada Entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las

carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

- I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos;
- II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la Nación;
- III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema Nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil;
- IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos;
- V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria;
- VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen;
- VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permita alcanzarla suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización;

- VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas; y
- IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los Estatales y Municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.”

Texto actual

Art. 2. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

- I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
- III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
- IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
- V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.
- VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
- VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

- VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

- I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
- II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
- III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
- IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
- V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
- VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
- VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia

de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

- VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
- IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

1.3. ANTECEDENTE ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 30

Antecedentes

1811-1917

FECHA	DOCUMENTO
1811	Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón.
1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1813	Sentimientos de la Nación de José María Morelos.
1814	Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana
1822	Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano.
1824	Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
1828	Ley Sobre Naturalización del Extranjero.
1836	Leyes Constitucionales de la República Mexicana.
1840	Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente 1842.
1842	Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1843	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1847	Acta Constitutiva y de Reformas.
1854	Decreto del Gobierno sobre Extranjería y Nacionalidad.
1856	Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.

1856	Dictamen y Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1856	Congreso Constituyente de 1856.
1857	Constitución Política de la República Mexicana.
1865	Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
1906	Programa del Partido Liberal Mexicano.
1916	Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
1916	Congreso Constituyente.
1917	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Elementos Constitucionales Elaborados por Ignacio López Rayón, 1811.

Punto 20. Todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios de ciudadano americano, deberá impetrar carta de naturaleza de la suprema junta que se concederá con acuerdo del ayuntamiento respectivo y disensión del protector nacional: mas sólo los patricios obtendrán los empleos, sin que en esta parte pueda valer privilegio alguno o carta de naturaleza.

Constitución Española de Cádiz, 1812.

Art. 5. Son españoles:

Primero. Todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, y los hijos de éstos.

Segundo. Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes cartas de naturaleza.

Tercero. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, ganada según la ley en cualquier pueblo de la Monarquía.

Cuarto. Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas.

Sentimientos de la Nación, 1813.

Art. 10. Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos de instruir y libres de toda sospecha.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 1814.

Art. 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella.

Art. 14. Los extranjeros radicados en este suelo que profesaren la religión católica, apostólica romana, y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará, y gozarán de los beneficios de la ley.

Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, 1822.

Art. 7. Son mexicanos sin distinción de origen, todos los habitantes del imperio, que en consecuencia del glorioso grito de Iguala han reconocido la independencia; y los extranjeros que vinieren en lo sucesivo, desde que con conocimiento y aprobación del gobierno se presenten al ayuntamiento del pueblo que elijan para su residencia, y juren fidelidad al emperador y a las leyes.

Art. 8. Los extranjeros que hagan o hayan hecho servicios importantes al imperio; los que puedan serle útiles por sus talentos, invenciones o industria, y los que formen grandes establecimientos, o adquieran propiedad territorial por la que paguen contribución al estado, podrán ser admitidos al derecho de sufragio. El emperador concede este derecho, informado del ayuntamiento respectivo, del ministro de relaciones y oyendo al consejo de estado.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1824.

Art. 50. Las facultades exclusivas del congreso general, son las siguientes:...

XXVI. Establecer una regla general de naturalización.

Ley Sobre Naturalización del Extranjero, 1828.

Art. 1. Todo extranjero que haya residido dentro de los límites de los Estados Unidos Mexicanos por el espacio de dos años continuos, podrá pedir carta de naturaleza, con arreglo á lo que se prescribe en esta ley.

Art. 2. Para conseguirla deberán producir antes el juez de distrito ó de circuito más cercano al lugar de su residencia, con citación y audiencia del promotor fiscal en los juzgados de circuito, y del síndico del ayuntamiento en los distritos, información legal, primero: de que es católico, apostólico romano, ó la fê de bautismo que lo acredite. Segundo: que tiene giro, industria útil, ó renta de que mantenerse, debiendo expresar los testigos cuál es el giro, industria ó renta. Tercero: que tiene buena conducta.

Art. 3. Deberá asimismo todo el que intente naturalizarse, presentarse por escrito, un año antes ante el ayuntamiento del lugar en que reside, haciendo manifestación del designio que tiene de establecerse en el país. Un testimonio de esa manifestación deberá acompañar á los documentos de que habla el artículo anterior.

Art. 4. Con estos documentos se presentará ante el gobernador del Estado, ó jefe principal político del distrito federal, ó territorios de la federación, pidiendo la carta de naturaleza.

Art. 5. La exposición con que pida su carta de naturaleza, deberá contener una renuncia expresa de toda sumisión y obediencia de cualquiera nación ó gobierno extranjero, especialmente de aquel ó aquella á que pertenezca. Segundo, de que renuncia igualmente á todo título, condecoración ó gracia, que hayan obtenido de cualquiera gobierno. Tercero, que sostendrá la constitución, acta constitutiva y leyes generales de los Estados-Unidos Mexicanos.

Art. 6. Verificadas estas condiciones, el gobernador del Estado, ó jefe principal político del distrito ó territorio, expedirá la carta de naturaleza en los términos que se expresa á continuación de esta ley.

Art. 7. La ausencia á países extranjeros con pasaporte del gobierno, no interrumpirá la residencia continua de los aspirantes, siempre que no exceda de ocho meses.

Art. 8. Se consideran naturalizados en cabeza del marido, la mujer y los hijos, cuando éstos no estén emancipados.

Art. 9. Los hijos de los ciudadanos mexicanos que nazcan fuera del territorio de la nación, serán como nacidos en él.

Art. 10. El derecho de naturalización no descende á los hijos de los que nunca hayan residido dentro del territorio mexicano.

Art. 11. Los hijos de los extranjeros no naturalizados, nacidos en el territorio mexicano, podrán obtener carta de naturaleza, siempre que dentro del año que siga á su emancipación, se presenten ante el gobernador del Estado, distrito ó territorio, en donde quiera residir.

Art. 12. La naturalización en país extranjero y admisión de empleo, comisión, renta ó condecoración de otro gobierno, privará de los derechos de naturalización.

Art. 13. Todo empresario que vega con objeto de colonizar, y que con arreglo á la ley general, y particular del Estado respectivo, lo verifique, tendrá derecho á pedir carta de naturaleza, la que se le concederá, jurando la debida obediencia á la constitución y leyes.

Art. 14. Los colonos que vengan á poblar en los terrenos colonizables, serán tenidos por naturalizados pasado un año de su establecimiento.

Art. 15. Los extranjeros que estando en el servicio de la marina, en la clase de soldado ó marineros, ó matriculados en ella, declaren ante la autoridad política mas inmediata al lugar de su residencia, que quieren naturalizarse, se tendrán por naturalizados, presentado en manos de la misma autoridad, juramento de sostener la constitución, acta constitutiva y leyes generales, de que renuncian toda sumisión de obediencia de cualquiera dominación ó gobierno extranjero, como también á todo título, condecoración ó gracia, que sea de la nación mexicana.

Art. 16. Las autoridades ante quienes se presenten los extranjeros de que habla el artículo anterior, remitirán cada seis meses lista exacta á los gobernadores de los Estados respectivos, que comprenda los nombres, lugares del nacimiento, edad y estado de las personas, que en virtud de él se hubieren naturalizado.

Art. 17. No se concederán cartas de naturalización á los súbditos ó ciudadanos de la nación con que se hallen en guerra los Estados-Unidos Mexicanos.

Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836.

Art. 1. Son mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio de la república, de padre mexicano por nacimiento o por naturalización.

- II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, estuvieren ya radicados en la república, o avisaren que se resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del año, después de haber dado el aviso.
- III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo anterior.
- IV. Los nacidos en el territorio de la república de padre extranjero, que hayan permanecido en él hasta la época de disponer de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso.
- V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la república cuando ésta declaró su independencia, juraron el acta de ella, y han continuado residiendo aquí.
- VI. Los nacidos en territorio extranjero, que introducidos legalmente después de la independencia, hayan obtenido carta de naturalización con los requisitos que prescriben las leyes.

Art. 13. El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, si no se ha naturalizado en ella, casare con mexicana, y se arreglare a lo demás que prescriba la ley relativa a estas adquisiciones. Tampoco podrá trasladar a otro país su propiedad mobiliaria, sino con los requisitos y pagando la cuota que establezcan las leyes.

Proyecto de Reforma a las Leyes Constitucionales de 1836, 1840.

Art. 7. Son mexicanos por nacimiento:

- I. Los nacidos en el territorio de la República de padre mexicano.
- II. Los no nacidos en el territorio de la Nación, que estaban avecindados en ella en 1821, prestaron servicios a su independencia, y han continuado residiendo aquí.
- III. Los que habiendo nacido en territorio, que fue parte de la Nación mexicana, desde entonces han permanecido en ella.
- IV. Los nacidos fuera del territorio de la República de padre mexicano por nacimiento, que se halle ausente en servicio de la Nación, o de paso y sin avecindarse en país extranjero.

Art. 8. Son mexicanos por naturalización:

- I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre extranjero, que habiendo permanecido en él hasta la época de disponer de sí, avisaren ser su ánimo continuar aquí su residencia.
- II. Los no nacidos en la República, que se habían fijado en ella, cuando declaró su independencia, juraron la Acta de ésta, y continuaron residiendo aquí.

- III. Los nacidos en territorio extranjero, que introducidos legalmente en la República, después que se hizo independiente, hayan obtenido u obtengan carta de naturalización, con los requisitos prescritos en las leyes.
- IV. Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si al entrar en el derecho de disponer de sí, ya estuvieren aquí radicados, o avisaren que se resuelven a hacerlo, y la verificaren dentro de un año después de haber dado el aviso.

Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 14. Son mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio de la nación o fuera de ella, de padre o madre que sean mexicanos por nacimiento, o de padre por naturalización.
- II. Los no nacidos en el territorio de la nación que estaban avecindados en él en 1821, y que no han perdido la vecindad.
- III. Los que habiendo nacido en territorio que fue parte de la nación han continuado en ésta su vecindad.
- IV. Los nacidos en el territorio de la nación de pare extranjero, si durante el primer año de su nacimiento no manifestare el padre que quiere que su hijo sea considerado como extranjero.
- V. Los extranjeros que adquieran legítimamente bienes raíces en la República, o que se casen con mexicana, y los que, aunque no tengan estas cualidades, adquieran carta de naturaleza por las circunstancias que determinen las leyes.

Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente, 1842.

Art. I. Son mexicanos;

- I. Todos los nacidos en el territorio de la Nación.
- II. Los nacidos fuera de él, de padre ó madre mexicano.
- III. Los extranjeros que adquieran legalmente bienes raíces en la República y los que hubieren adquirido ó adquieren la naturalización conforme á las leyes.

Segundo Proyecto de Constitución política de la República Mexicana, 1842.

Art. 4. Son mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio de la Nación.
- II. Los nacidos fuera de él, de padre o madre mexicanos.
- III. Los no nacidos en el territorio de la Nación, que estaban avecindados en él en 1821 y que no han perdido la vecindad.
- IV. Los que habiendo nacido en el territorio que fue parte de la Nación, han continuado en ésta su vecindad.

V. Los extranjeros que obtengan la naturalización conforme a las leyes.

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843

Art. 11. Son mexicanos:

- I. Todos los nacidos en cualquier punto del territorio de la República, y los que nacieren fuera de ella de padre mexicano.
- II. Los que sin haber nacido en la República, se hallaban avecindados en ella en 1821 y no hubieren renunciado su calidad de mexicanos: los que siendo naturales de Centro-América cuando perteneció a la Nación Mexicana se hallaban en el territorio de esta, y desde entonces han continuado residiendo en él.
- III. Los extranjeros que hayan obtenido u obtuvieren carta de naturaleza conforme a las leyes.

Art. 12. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, y fuera de ella de padre mexicano que no estuviere en servicio de la República, para gozar de los derechos de mexicano, han de manifestar que así lo quieren. La ley designará el modo de verificar esta manifestación y la edad en que deba hacerse.

Art. 13. A los extranjeros casados o que se casaren con mexicana, o que fueren empleados en servicio y utilidad de la República, o en los establecimientos industriales de ella, o que adquirieren bienes raíces en la misma, se les dará carta de naturaleza sin otro requisito, si la pidieren.

Acta Constitutiva y de Reformas, 1847.

Art. 1. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto del Gobierno sobre Extranjería y Nacionalidad, 1854.

Art. 7. El extranjero se tendrá por naturalizado:...

II. Si casare con mexicana y manifestare querer residir en el país gozando de la calidad de mexicano. Esta declaración la verificará dentro de un mes de celebrado el matrimonio, cuando esté se haga n el territorio de la República, y dentro de un año si se hubiere contraído fuera.

Art. 14. Son mexicanos para el goce de los mismos derechos civiles:

- I. Los nacidos en el mismo territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o naturalización.
- II. Los nacidos en el mismo territorio nacional, de madre mexicana y cuyo padre no sea legalmente conocido según las leyes de la República.

- III. Los nacidos fuera de la República de padre mexicano que estuviere al servicio de ella, o por causa de estudios, o de transeúnte, pero sin perder la calidad de mexicanos, según los artículos correspondientes de esta ley.
- IV. Los nacidos fuera de la República de madre mexicana, sea soltera o viuda, que no habiendo cumplido los veinticinco años de su edad, avise la madre querer gozar de la calidad mexicana.
- V. Los mismos hijos de madre mexicana soltera o viuda, que llegados a la mayor de edad, reclamen dentro de un año la calidad de mexicanos.
- VI. Los mexicanos que habiendo perdido esta calidad según las prevenciones de esta ley, la recobren por los mismos medios y con las formalidades establecidas respecto de los demás extranjeros.
- VII. Los mexicanos que habiéndoseles juzgado por la falta del párrafo XI del artículo 3 o de haber tomado parte contra la nación con el enemigo extranjero, fueren absueltos por los tribunales de la República.
- VIII. Los nacidos fuera de la República, pero que establecidos en ella en 1821, juraron la Acta de Independencia, han continuado su residencia en el territorio de la Nación y o han cambiado su nacionalidad.
- IX. Los extranjeros naturalizados.

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856.

Art. 10. Son mexicanos los nacidos en el territorio de la nación: los nacidos fuera de él de padre o madre mexicanos: los nacidos fuera de la República, pero que establecidos en ella en 1821, juraron la acta de Independencia y no han abandonado la nacionalidad mexicana: los extranjeros naturalizados conforme a las leyes.

Art. 11. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, y fuera de él de madre mexicana, para gozar de los derechos de mexicanos, han de manifestar que así lo quieren. Esta manifestación se hará ante la primera autoridad política del lugar, si el interesado reside en México, o ante el ministro o cónsul respectivo, si reside fuera del país.

Art. 12. La mexicana que casare con extranjero, seguirá la condición de su marido; pero si enviuda, podrá recobrar su nacionalidad en la forma prevenida en el artículo anterior.

Art. 13. A los extranjeros casados o que casaren con mexicana, o que fueren empleados en alguna comisión científica o en los establecimientos industriales de la República, o que adquieran bienes raíces en ella conforme a la ley, se les dará carta de naturaleza, sin otro requisito, si la pidieren.

Art. 14. El extranjero que quiera naturalizarse, deberá acreditar previamente en forma legal, que ejerce alguna profesión o industria útil para vivir honradamente.

Art. 15. El extranjero se tendrá por naturalizado si aceptare algún cargo público de la nación o perteneciere al ejército o armada, a excepción del caso prevenido en el artículo 7o.

Art. 16. No se concederán cartas de naturaleza a los súbditos de otra nación que se halle en guerra con la República.

Art. 17. Tampoco se concederán a los habidos, reputados y declarados judicialmente en otros países por piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, monederos falsos o falsificadores de billetes de banco u otros papeles que hagan veces de moneda, así como a los parricidas y envenenadores.

Dictamen y Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856.

Trigésimo octavo párrafo del dictamen. En los artículos que tienen por objeto la condición de los mexicanos y de los ciudadanos de la República, sus derechos, prerrogativas y obligaciones, no se encontrara más que la repetición de los principios comunes del derecho público y las prevenciones que nuestros códigos y leyes han admitido. Se dice en uno de esos artículos para que todos los empleos o comisiones en que no sea indispensable la calidad de ciudadanos, los mexicanos por nacimiento o naturalización serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias: que nuestras leyes futuras procurarán mejor la condición de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distinguan, fundando colegios y escuelas prácticas, estableciendo bancos populares y agrícolas, y concediendo a los mexicanos otras exenciones y prerrogativas. Este artículo es, en concepto de los que suscriben, la genuina expresión de un sentimiento popular tan arraigado y profundo, que ha podido algunas veces criticarse como una necia preocupación; pero que no carece enteramente de justicia.

Artículo 35 del proyecto. Son mexicanos todos los nacidos en el territorio de la República, los nacidos fuera de él de padres mexicanos, los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten expresamente la resolución de conservar su nacionalidad y los que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, el artículo 30 *Calidad de mexicanos*, se presentó como 35 en el Proyecto de Constitución de 1856 y corresponde al 30 de 1917; el 26 de agosto de 1856 fue aprobado por 81 votos a favor, ninguno en contra (Acta Oficial señala 80 a favor, ninguno en contra), la Comisión realizó modificaciones.

Art. 30. Son mexicanos:

- I. Todos los nacidos dentro o fuera del Territorio de la República, de padres mexicanos.
- II. Los extranjeros que se naturalicen conforme a las leyes de la Federación.
- III. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o tengan hijos mexicanos, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865.

Art. 53. Son mexicanos:

Los hijos legítimos nacidos de padre mexicano dentro o fuera del territorio del Imperio;

Los hijos legítimos nacidos de madre mexicana, dentro o fuera del territorio del Imperio.

Los extranjeros naturalizados conforme a las leyes;

Los hijos nacidos en México de padres extranjeros, que al llegar a la edad de veintiún años, no declaren que quieren adoptar la nacionalidad extranjera;

Los nacidos fuera del territorio del Imperio, pero que establecidos en él antes de 1821, juraron la acta de independencia;

Los extranjeros que adquieran en el Imperio propiedad territorial, de cualquier género, por el solo hecho de adquirirla.

Programa del Partido Liberal Mexicano, 1906.

Punto 15. Prescribir que los extranjeros, por el solo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexicanos.

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916.

Quincuagésimo párrafo del mensaje: En la reforma al artículo 30 de la Constitución de 1857, se ha creído necesario definir, con toda precisión y claridad, quiénes son los mexicanos por nacimiento y quiénes tienen esa calidad por naturalización, para dar término a la larga disputa que en épocas no remotas se estuvo sosteniendo sobre si el hijo de un extranjero nacido en el país, que al llegar a la mayor edad opta por la ciudadanía mexicana, debía de tenerse o no como mexicano por nacimiento.

Artículo 30 del proyecto. Los mexicanos lo serán por nacimiento o naturalización:

I. Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos que nacieron dentro o fuera de la República;

II. Son mexicanos por naturalización:

a) Los que nacieren de padres extranjeros dentro de la República, si al mes siguiente a su mayor edad no manifiesten ante la Secretaría de Relaciones Exteriores su propósito de conservar la nacionalidad de su origen.

b) Los extranjeros que teniendo modo honesto de vivir e hijos nacidos de madre mexicana o naturalizados mexicanos, manifiesten a la Secretaría de Relaciones Exteriores su propósito de quedar también nacionalizados.

c) Los que hubieren residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones.

En los casos de esta fracción y de la interior, la ley determinará la manera de comprobar los requisitos que en ella se exigen.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, el artículo 30 *Nacionalidad mexicana*, corresponde en el Proyecto de Constitución como 30, y al 30 de 1857. El 16 de enero de 1917 se formuló el dictamen que se presentó en sesión

de la misma fecha. El 17 de enero de 1917 se presentaron los debates, participando Machorro Álvarez en contra de que los mexicanos hijos de extranjeros nacionalizados se consideraran mexicanos. Colunga se manifestó en contra de que sólo los nacidos en el país se consideraran mexicanos sin considerar a los hijos de las mujeres mexicanas nacidos en el extranjero que también tenían derecho. El estudio se dividió en partes. El 19 de enero de ese año, Lizardi y Saúl Rodiles opinaron en contra de que los hijos de madres mexicanas fueran considerados mexicanos. Martínez de Escobar habló de los lazos así como de que los hijos de extranjeros nacidos en el país pudiesen ser Diputados una vez cumplidos los veintiún años y manifestado su deseo de ser mexicanos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. González Galindo en contra de la Nacionalidad para los hijos de extranjeros por la posibilidad de doble Nacionalidad. Múgica habló del derecho internacional que establecía que la mujer casada perdía su nacionalidad y adquiría la del esposo. Se suspendió la sesión, y fue reanudada; Macías habló del *jus sanguinis* y defendió al ciudadano por nacimiento y por naturalización. Rivera Cabrera propuso que los hijos de extranjeros, al no declarar en sus consulados seguir perteneciendo a su nacionalidad, la perdieran y adquirieran la mexicana. Martínez de Escobar habló del *jus soli* y *jus sanguinis*. Martí citó supuestos en que se renunciaba a la nacionalidad. Macías mencionó que los padres no podían disponer de la nacionalidad de los hijos sino hasta que estos adquirieran la mayoría de edad y pudiesen decidir. Colunga consideró que las leyes sólo surtían efectos en su territorio. González A., en contra de que se señalara en la Constitución quién era mexicano por nacimiento y por naturalización, sino que en todo caso sería en una ley orgánica o Ley de Extranjería. Múgica se pronunció porque fueran considerados mexicanos los nacidos fuera o dentro de la República pero hijos de mexicanos por nacimiento. El 21 de enero siguiente, se presentó un nuevo dictamen, en el cual no hubo debate, aprobándose con 140 votos a favor (100%) y ninguno en contra.

Art. 30. La calidad de mexicano se adquiere por nacimiento o por naturalización.

I. Son mexicanos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por nacimiento los que nazcan en la República de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban ante aquélla que han residido en el país los últimos seis años anteriores a dicha manifestación.

II. Los mexicanos por naturalización:

a) Los hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo.

b) Los que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la citada Secretaría de Relaciones.

c) Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana.

En los casos de estos incisos, la ley determinará la manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen.

3 Reformas 1917-2012

La primera reforma, *Nacionalización y naturalización*, en la cual se incluyeron los artículos 37, 73 fracción XVI y 133 Constitucionales; a iniciativa de la Cámara de Senadores; el dictamen se formuló el 3 de octubre de 1933. Se sometió a discusión y aprobación el 28 de octubre del año en cita. No se registraron oradores. Se aprobó con 39 votos a favor (100%), ninguno en contra. El 9 de noviembre siguiente, se turnó a la Cámara de Diputados, que dictaminó, discutió y aprobó el 19 de diciembre de 1933. No hubo oradores registrados. Se aprobó por 115 votos a favor (100%), ninguno en contra. La declaratoria fue formulada el 23 de diciembre de ese año. Se publicó en el DOF 18 de enero de 1934:

La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A. Son mexicanos por nacimiento:

- I. Los que nazcan en Territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de los padres;
- II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano y madre extranjera, o de madre mexicana y padre desconocido, y
- III. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B. Son mexicanos por naturalización:

- I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, y;
- II. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano y tenga o establezca su domicilio dentro del Territorio Nacional.

Por lo que se refiere a la segunda reforma, *Transmitir nacionalidad mexicana a hijos de madre mexicana*, a iniciativas de las Diputadas Fidelia Sánchez de Mendiburu y Diana Torres Ariceaga, presentada el 25 de octubre de 1966; el dictamen se realizó el 7 de noviembre siguiente. La discusión y aprobación fue el 14 de noviembre en cita. En los debates participaron Fidelia Sánchez de Mendiburu, Juan Manuel Gómez Morín (PAN), Humberto Acevedo Astudillo (Comisión), María Guadalupe Calderón, José de la Fuentes Rodríguez, Hortensia Rojas Velásquez (PPS), y Manuel González Hinojosa (PAN). Se aprobó con 149 votos a favor (99.3%) y 1 en contra (.3%). El 16 de noviembre en cita, se turnó a la Cámara de Senadores, que formuló el dictamen el 19 de diciembre siguiente. La discusión y aprobación fue el 23 de diciembre de ese año.

En los debates participó Alicia Arellano Tapia. Se aprobó con 51 votos a favor (100%), ninguno en contra. La declaratoria fue formulada el 13 de junio de 1968. Se publicó en el DOF 26 de diciembre de 1969:

La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A. Son mexicanos por nacimiento: ...

...II. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de padre mexicano o de madre mexicana...”

La tercera reforma *Igualdad jurídica entre el hombre y la mujer*, presentada ante la Cámara de Diputados el 24 de septiembre de 1974, por Luis Echeverría Álvarez, Presidente de la República, en la que se modificaron también los artículos 4, 5 y 123 Constitucionales, se aprobó por la Cámara de Senadores el 28 de noviembre del año en cita (ver primera reforma del artículo 4 Constitucional). Se publicó en el DOF 31 de diciembre de 1974:

...II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su domicilio dentro del Territorio Nacional.”

La cuarta reforma, *No pérdida de la Nacionalidad Mexicana*, incluyó los artículos 30, 32 y 37, se presentó a iniciativa de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República, ante la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1996; el dictamen, discusión y aprobación se efectuó el 5 de diciembre siguiente. En los debates participó Amador Rodríguez Lozano por las Comisiones. El 6 de diciembre de la anualidad en cita, se turnó a la Cámara de Diputados, que formuló el dictamen el 9 de diciembre de ese año. Se sometió a discusión y aprobación el siguiente día 10. En los debates participaron Augusto Gómez Villanueva (Comisiones), Raúl Alejandro Fuentes Cárdenas (PT), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (PRD), Luis Felipe Mena Salas (PAN), Emilio Solórzano Solís (PRI), Adolfo Miguel Aguilar Zinser, Antonio Tenorio Adame (PRD) y Gloria Sánchez Fernández. Se aprobó por 405 votos a favor (99.75%) y 1 en contra (.25%). La declaratoria fue el 26 de junio de 1996. Se publicó en el DOF 20 de marzo de 1997:

...A. ...II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en Territorio Nacional, o de madre mexicana nacida en Territorio Nacional;

III. Los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos por naturalización, padre mexicano por naturalización, madre mexicana por naturalización; y

IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B. ... II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del Territorio Nacional y cumplan con los requisitos que al efecto señale la ley.

Texto Actual:

Art. 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A) Son mexicanos por nacimiento:

- I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
- II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en Territorio Nacional, de padre mexicano nacido en Territorio Nacional, o de madre mexicana nacida en Territorio Nacional;
- III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
- IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B). Son mexicanos por naturalización:

- I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
- II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del Territorio Nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

1.4. ANTECEDENTE ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 32

Antecedentes
1811-1917

FECHA	DOCUMENTO
1811	Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón.
1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1813	Sentimientos de la Nación de José María Morelos.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1843	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1856	Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1856	Congreso Constituyente.
1857	Constitución Política de la República Mexicana.
1916	Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
1916	Congreso Constituyente.
1917	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Elementos Constitucionales Elaborados por Ignacio López Rayón, 1811.

Art. 20. Todo extranjero que quiera disfrutar los privilegios de Ciudadano Americano, deberá impetrar Carta de Naturaleza de la Suprema Junta que se concederá con acuerdo del Ayuntamiento respectivo, y disensión del Protector Nacional: mas solo los

Patricios obtendrán los empleos sin que en esta parte pueda valer privilegio alguno, ó carta de naturaleza.

Art. 25. Al que hubiere nacido después de la feliz independencia de nuestra Nación, no obstarán, sino los defectos personales, sin que pueda oponérsele la Clase de su linaje: lo mismo deberá observarse con los que presenten haber obtenido en los Ejércitos Americanos graduación de Capitán arriba, ó acrediten algún singular servicio á la Patria.

Constitución Política de la Monarquía Española, 1812.

Art. 23. Sólo los que sean ciudadanos podrán obtener empleos municipales, y elegir para ellos en los casos señalados por la ley.

Sentimientos de la Nación de José María Morelos, 1813.

Punto 9. Que los empleos los obtengan sólo los americanos.

Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 19. Los cargos, empleos y comisiones de nombramiento de las autoridades, para cuyo ejercicio no exija la ley la condición de ciudadano, ni alguna otra cualidad individual de pericia prescrita por ella misma, se conferirán exclusivamente a los mexicanos.

Una ley arreglará el ejercicio de los derechos concedidos a los naturalizados por lo que respecta a la opción de empleos y cargos públicos.

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843.

Art. 15. Es derecho de los mexicanos que se les confieran exclusivamente los empleos y comisiones de nombramiento de cualquier autoridad, cuando para su ejercicio no se exija la calidad de ciudadano: si se requiere la circunstancia de pericia, serán preferidos los mexicanos a los extranjeros en igualdad de circunstancias.

Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856.

Art. 37. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Las leyes del país procurarán mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia, o arte, estimulando el trabajo y fundando colegios o escuelas prácticas de artes y oficios.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, artículo 32 *Preferencia de los mexicanos sobre los extranjeros para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades*, el cual se presentó como 36 en el Proyecto de Constitución de 1856; el 27 de agosto de 1856 se aprobó la primera parte por 80 votos a favor (100%), ninguno en contra; y la segunda parte por 43 votos a favor (53%) y 38

en contra (47%); en los debates Prieto mencionó dividir el artículo para su estudio y no ser considerado como artículo Constitucional. Ortega propuso la creación de una ley orgánica. Arriaga habló de la desigualdad entre mexicanos y extranjeros. Ignacio Ramírez señaló que los gobiernos tienen la obligación de mejorar las condiciones de los mexicanos laboriosos. El 27 de agosto de 1856 se aprobó. Por lo que se refiere a la parte final de este artículo, que se había presentado como artículo 37, segunda parte, en el Proyecto de Constitución de 1856 y corresponde al 123 de 1917, relativa a la *Protección de la clase trabajadora*, el 27 de agosto de 1856 se aprobó con 43 votos a favor (53%) y 38 en contra (47%). En los debates, Prieto propuso la división en el estudio y estuvo a favor del sistema errado de protección. Ortega y Arriaga por la protección de la clase trabajadora. Ignacio Ramírez mencionó que el gobierno tenía la obligación de mejorar las condiciones de los mexicanos a través de premios en las ciencias de arte, estimular el trabajo, y fundar escuelas prácticas de artes y oficios.

Art. 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, premiando a los que se distingan en cualquier ciencia o arte, estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios.

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916

Art. 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 32 *Calidad de mexicano para desempeñar ciertos cargos y funciones*, se emitió dictamen el 16 de enero de 1917, y en esa misma fecha en que se presentó en sesión. El 19 de enero siguiente Cravioto opinó que los mexicanos fueran preferidos a toda clase de concesiones, y se aprobó con 139 votos a favor (100%) y ninguno en contra.

Art. 32. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública.

Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones y primeros maquinistas de los buques mercantes mexicanos, debiendo tenerla además, los que compongan las dos terceras partes de la tripulación.

3 Reformas 1917-2012

Primer reforma, *Mexicanos por nacimiento para desempeñar funciones de agente aduanal*, a iniciativa de la Liga de Empleados de Veracruz presentada ante la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 1924. El dictamen se formuló el 15 de diciembre de 1933, se sometió a discusión y aprobación el 19 de diciembre siguiente, no se registraron oradores y fue aprobado con 115 votos a favor (100%), ninguno en contra. Se turnó a la Cámara de Senadores el 20 de diciembre de ese año y se realizó la declaratoria el 21 de noviembre de 1934. Se publicó en el DOF 15 de diciembre de 1934.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos cargos o comisiones del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. En tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra y desempeñar cualquier cargo o comisión en ella, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinista y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación que se ampare con la bandera mercante mexicana. Será también necesaria la calidad de ciudadano mexicano por nacimiento para desempeñar el cargo de Capitán de Puerto y todos los servicios de practica, así con las funciones de Agente Aduanal en la República.

En la segunda reforma, *La Aeronáutica Militar Nacional dentro de la Organización de la Defensa Nacional*, también fueron reformados los artículos 73 fracción XIV, 76 fracción II, y 89 fracciones IV, V y VI. Se presentó ante la Cámara de Diputados el 22 de septiembre de 1942, a iniciativa del Presidente de la República Manuel Ávila Camacho. El dictamen, discusión y aprobación se efectuó el 6 de octubre de 1942. Participó en los debates Ángel H. Corzo Molina, y se aprobó con 90 votos a favor (100%), ninguno en contra. 16 de octubre siguiente, se turnó a la Cámara de Senadores, que formó dictamen, discusión y aprobación el 30 de octubre de ese año, no se registraron oradores para debate y fue aprobada por unanimidad. Se efectuó la declaratoria el 27 de diciembre de 1943. Esta segunda reforma se publicó en el DOF 10 de febrero de 1944.

...Para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de Capitán de Puerto, y todos los servicios de practica y Comandante de Aeródromo, así como todas las funciones de Agente Aduanal en la República.

La tercer reforma, relativa a la *No pérdida de la Nacionalidad Mexicana*, en la también se reformaron los artículos 30 y 37, se presentó ante la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1996, a iniciativa de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente

de la República, y fue aprobada 5 de diciembre de 1996 por esta Cámara y el 10 de diciembre siguiente por la Cámara de Diputados (ver cuarta reforma del artículo 30). Se publicó en el DOF 20 de marzo de 1997.

La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, establecerá normas para evitar conflictos por nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución se requiera ser mexicano por nacimiento reserva a quienes tengan esa calidad y adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen las leyes del Congreso de la Unión. En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército ni en las fuerzas de policía y seguridad pública. Para pertenecer al activo Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñen cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad será indispensable para capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación, aeronave que se ampare con la bandera o insignias mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto, todos los servicios de practica y comandante aeródromo. Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

Texto Actual:

Art. 32. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la Legislación Mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad.

El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión.

En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practica y comandante de aeródromo.

Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.

1.5. ANTECEDENTE ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 34

Antecedentes
1812-1917

FECHA	DOCUMENTO
1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1814	Decreto Constitucional para la Libertad de la América Española.
1823	Aclaración Segunda al Acta de Casa Mata.
1825	Proyecto de Constitución formulada por J. Joaquín Fernández de Li-
zardi.	
1835	Bases Constitucionales de la República Mexicana.
1836	Leyes Constitucionales de la República Mexicana.
1840	Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente.
1842	Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexica-
na.	
1843	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1847	Voto Particular de Mariano Otero.
1847	Acta Constitutiva y de Reformas.
1856	Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.
1856	Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1857	Constitución Política de la República Mexicana.
1856	Congreso Constituyente.

- 1865 Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
- 1870 Decreto del Congreso General que Autoriza al Ejecutivo para Habilitar de Edad a los Mayores de 18 Años y Legitimar a los Hijos Naturales.
- 1916 Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.
- 1916 Congreso Constituyente.
- 1917 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Constitución Política de la Monarquía Española, 1812.

Art. 18. Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos dominios.

Art. 19. Es también ciudadano el extranjero que gozando ya de los derechos de español, obtuviere de las Cortes carta especial de ciudadano.

Art. 20. Para que el extranjero pueda obtener de las Cortes esta carta, deberá estar casado con española, y haber traído o fijado en las Españas alguna invención o industria apreciable, o adquirido bienes raíces por los que pague una contribución directa, o establecidos en el comercio con un capital propio y considerable a juicio de las mismas Cortes, o hecho servicios señalados en bien y defensa de la Nación.

Art. 21. Son, asimismo, ciudadanos los hijos legítimos de los extranjeros domiciliados en las Españas, que habiendo nacido en los dominios españoles, no hayan salido nunca fuera sin licencia del Gobierno, y teniendo veinte y un años cumplidos, se hayan avecindado en un pueblo de los mismos dominios, ejerciendo en él alguna profesión, oficio o industria útil.

Art. 22. A los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados por originarios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser ciudadanos: en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil con un capital propio.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina

Art. 13. Se reputan ciudadanos de esta América todos los nacidos en ella.

Art. 14. Los extranjeros radicados en este suelo, que profesaren la religión católica, apostólica, romana, y no se opongan a la libertad de la nación, se reputarán también ciudadanos de ella, en virtud de carta de naturaleza que se les otorgará, y gozarán de los beneficios de la ley.

Aclaración Segunda al Acta de Casa Mata, 1823.

Son ciudadanos, todos, sin distinción, los nacidos en este suelo, los españoles y extranjeros radicados en él, y los extranjeros que obtuviesen del Congreso carta de ciudadano, según la ley.

Proyecto de Constitución Formulado por J. Joaquín Fernández de Lizardi, 1825.

Art. 1. Son ciudadanos todos los hombres que sean útiles de cualquier modo a la República, sean de la nación que fuesen.

Bases Constitucionales de la República Mexicana, 1835.

Art. 2. A todos os transeúntes, estantes y habitantes del Territorio mexicano, mientras respeten la religión y las leyes del país, la nación les guardará y hará guardar los derechos que legítimamente les correspondan: el derecho de gentes y el internacional designan cuáles son los de los extranjeros: una ley constitucional declarará los particulares al ciudadano mexicano.

Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836.

Art. 1. Son mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o por naturalización.
- II. Los nacidos en país extranjero de padre mexicano por nacimiento, si al entrar en el derecho de disponer de sí, estuvieren ya radicados en la República o avisaren que resuelven hacerlo, y lo verificaren dentro del año después de haber dado el aviso.
- III. Los nacidos en territorio extranjero de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si practican lo prevenido en el párrafo anterior.
- IV. Los nacidos en el territorio de la República de padre extranjero, que hayan permanecido en él hasta la época de disponer de sí, y dado al entrar en ella el referido aviso.
- V. Los no nacidos en él, que estaban fijados en la República cuando ésta declaró su independencia, juraron la acta de ella y han continuado residiendo aquí.
- VI. Los nacidos en territorio extranjero que, introducidos legalmente después de la independencia, hayan obtenido carta de naturalización, con los requisitos que prescriben las leyes.

Art. 7. Son ciudadanos de la República mexicana.

- I. Todos los comprendidos en los cinco primeros párrafos del Artículo 1, que tengan una renta anual lo menos de cien pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario o de industria o trabajo personal honesto y útil a la sociedad.
- II. Los que hayan obtenido carta especial de ciudadanía del congreso general, con los requisitos que establezca la ley.

Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, 1840.

Art. 7. Son mexicanos por nacimiento:

- I. Los nacidos en el territorio de la República de padre mexicano.
- II. Los no nacidos en el territorio de la Nación, que estaban avecindados en ella en 1821, prestaron servicios a su independencia, y han continuado residiendo aquí.
- III. Los que habiendo nacido en territorio, que fue parte de la Nación mexicana, desde entonces han permanecido en ella.
- IV. Los nacidos fuera del territorio de la República de padre mexicano por nacimiento, que se halle ausente en servicio de la Nación, o de paso y sin avecindarse en país extranjero.

Art. 8. Son mexicanos por naturalización:

- I. Los nacidos en el territorio de la República, de padre extranjero, que habiendo permanecido en él hasta la época de disponer de sí, avisaren ser su ánimo continuar aquí su residencia.
- II. Los no nacidos en la República, que se habían fijado en ella, cuando declaró su independencia, juraron la Acta de ésta, y continuaron residiendo aquí.
- III. Los nacidos en territorio extranjero, que introducidos legalmente en la República, después que se hizo independiente, hayan obtenido u obtengan carta de naturalización, con los requisitos prescritos en las leyes.
- IV. Los nacidos fuera del territorio de la República, de padre mexicano por naturalización, que no haya perdido esta cualidad, si al entrar en el derecho de disponer de sí, ya estuvieren aquí radicados, o avisaren que se resuelven a hacerlo, y la verificaren dentro de un año después de haber dado el aviso.

Art. 14. Son ciudadanos de la República Mexicana:

- I. Todos los comprendidos en el artículo 7o. y en los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 8o., teniendo una renta anual lo menos de sesenta pesos, procedentes de capital fijo o mobiliario, o de industria, o trabajo personal, honesto y útil a la sociedad.
- II. Los que teniendo carta de naturalización, obtengan después la de ciudadanía con los requisitos que establezca la ley.

Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 20. Son ciudadanos mexicanos todos los que obteniendo la calidad de mexicanos reunieren además las siguientes:

- I. Haber cumplido la edad de dieciocho años, siendo casado, o la de veintuno, si no lo ha sido.

- II. Tener una renta anual de 100 pesos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto, y saber leer y escribir desde el año de 1850 en adelante.

Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente, 1842.

Art. 7. Todo mexicano que haya cumplido veintiún años, que sepa leer y escribir, y que tenga una renta anual de 150 pesos, está en ejercicio de los derechos del ciudadano.

Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 7. Todo mexicano que haya cumplido la edad de 18 años, siendo casado, o la de 21 si no lo ha sido, y que tenga ocupación y modo honesto de subsistir, está en ejercicio de los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante, además de dicho requisito es necesario que sepa leer y escribir.

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843.

Art. 18. Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital físico, industria o trabajo personal honesto. Los Congresos constitucionales podrán arreglar, según las circunstancias de los Departamentos, la renta que en cada uno de estos haya de requerirse para gozar los derechos de ciudadano. Desde el año de 1850 en adelante los que llegaren a la edad que se exige para ser ciudadano, además de la renta dicha antes para entrar en ejercicio de sus derechos políticos, es necesario que sepan leer y escribir.

Voto Particular de Mariano Otero, 1847.

Art. 1. Todo mexicano, por nacimiento ó por naturalización, que haya llegado á la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal á alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados-Unidos Mexicanos.

Párrafo 17. La regla adoptada sobre este punto, verá el Congreso que no podía ser más liberal. Concediendo el de ciudadanía á todo mexicano que haya cumplido la edad de veinte años, que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante y que tenga modo honesto de vivir, se establece y asegura en todos los Estados de la Unión el principio democrático de la manera más franca que pudiera desearse.

La idea de exigir cierta renta, como necesaria para gozar de los derechos de ciudadano, idea recomendada por algunos escritores de acreditado liberalismo, y adoptada también en algunas de nuestras leyes constitucionales, no me parece conveniente porque nunca puede darse una razón que justifique más bien una cuota que otra.

Acta Constitutiva y de Reformas, 1847.

Art. 1. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856.

Art. 1. Todo mexicano, por nacimiento o por naturalización, que haya llegado a la edad de veinte años, que tenga modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena infamante, es ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos.

Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856.

Art. 40. Son ciudadanos de la República: todos los que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes: haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Desde el año de 1860 en adelante, además de las calidades expresadas, se necesitará la de saber leer y escribir.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, artículo 34, *Calidad de ciudadano mexicano*, se presentó como 40 del Proyecto de Constitución de 1856 y corresponde al 34 de 1917. En los debates del 1 de septiembre de 1856 Peña y Ramírez estuvieron en contra del requisito de saber leer y escribir, Arriaga y Gamboa a favor de que el pueblo se instruyera y en esa fecha se aprobó con 82 votos a favor (100%), ninguno en contra.

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes:

- I. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son.
- II. Tener un modo honesto de vivir.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865.

Art. 55. Son ciudadanos, los que teniendo calidad de mexicanos reúnan además las siguientes:

Haber cumplido veintiún años de edad;

Tener un modo honesto de vivir;

No haber sido condenados judicialmente a alguna pena infamante.

Decreto del Congreso General que Autoriza al Ejecutivo para Habilitar de edad a los Mayores de 18 años y Legitimar a los Hijos Naturales, 1870.

“Ministro de Justicia e Instrucción Pública. Sección 1ª EL C. Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

“Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

“Que el congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

“El congreso de la Unión decreta:

“Artículo 1°. Los mayores de 18 años y menores de 21 en el Distrito Federal y en el territorio de la Baja California, podrán administrar libremente sus bienes, acreditando que tienen la edad expresada y la aptitud necesaria para los actos de administración, sin gozar en ningún caso del beneficio de restitución *in integrum*.

“Podrán así mismo ejercer las profesiones para que se requiera mayor edad, acreditando tener la de 18 años por lo menos, y la instrucción que exijan las leyes y los reglamentos sobre la profesión a que aspiren.

“Por último, los hijos naturales que acreditaren tener ese carácter y pretendieren ser legitimados, podrán serlo en efecto, en el Distrito Federal y en el territorio de la Baja California, mediante solicitud de parte legítima.

“Artículo 2°. Esta ley será aplicada a cada caso por el Ejecutivo de la Unión en el Distrito Federal, y en la Baja California por el jefe político del territorio”

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916.

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes:

- I. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son.
- II. Tener un modo honesto de vivir.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 34, *Requisitos para ser ciudadano mexicano*, el 23 de enero de 1917 se presentó el dictamen en sesión de esa misma fecha y el 26 de enero de 1917 se aprobó sin debates con 166 votos a favor (98.81%) y 2 en contra (1.19%).

Art. 34. Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido dieciocho años, siendo casados o veintiuno, si no lo son,
y
- II. Tener un modo honesto de vivir.

2 Reformas 1917-2012

La primera reforma, *Equiparación del hombre y la mujer en el ejercicio de los derechos políticos*, también abarcó el artículo 115 fracción I. Fue a iniciativa de Adolfo Ruiz Cortines, Presidente de la República y se presentó ante la Cámara de Diputados el 9 de diciembre de 1952. Se formuló el dictamen respectivo el 18 de diciembre siguiente, sometiéndose a discusión y aprobación el 22 de diciembre de ese año. Participaron en los debates Francisco Chávez González (Comisiones). En contra, Francisco Chávez González (PAN), quien consideró que sólo se reconoce un derecho no se concede; y Felipe Gómez Mont (PAN), pues señaló que ya estaba la reforma catorce años antes en las elecciones municipales. A favor, Manuel Hinojosa Ortiz, que citó a Montesquieu, Antonio Ponce Lagos (PN), Máximo Gámiz Fernández (PPS), Juan Sabines Gutiérrez y Ramón Cabrera Cosío. Se aprobó en lo general con 135 votos a favor (97.1%) y cua-

tro en contra (2.9%); en lo particular con 138 votos a favor (99.2%) y uno en contra (.8%). El 23 de diciembre siguiente, se turnó a la Cámara de Diputados que formuló el dictamen, discusión y aprobación el 24 de diciembre de ese año, participando en los debates Aquiles Elorduy, en contra, al considerar que las mujeres al ser mayoría y católicas, podrían beneficiar candidatos católicos y descuidar los hogares. Luis I. Rodríguez a favor de la igualdad absoluta de los hombres y mujeres; también intervinieron Lauro G. Caloca y Pedro de Alba. Fue aprobada con 47 votos a favor (97.9%), uno en contra (2.1%) y la declaratoria se formuló el 6 de octubre de 1953. Fue publicada en el DOF 17 de octubre de 1953:

Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y;
- II. Tener un modo honesto de vivir.

La segunda reforma, *Derechos ciudadanos para varones y mujeres, independientemente del estado civil*, la iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados el 23 de diciembre de 1968, por Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de la República. El dictamen se efectuó 23 de octubre de 1969. Se sometió a discusión y aprobación el 28 de octubre de ese año. En los debates participaron Celso Vázquez Ramírez, Adrián Tiburcio González, Indalecio Sayazo Herrera (PPS), Efraín González Morfín (PAN), Carlos Sánchez Cárdenas, Carlos Armando Biebrich. Fue aprobada con 149 votos a favor (100%), ninguno en contra. El 30 de octubre de 1969, se turnó a la Cámara de Senadores que formuló el dictamen, sometió a discusión y aprobación el 4 de noviembre siguiente. No se registraron oradores y fue aprobada por unanimidad. La declaratoria se realizó el 18 de diciembre de ese año. Se publicó en el DOF 22 de diciembre de 1969:

Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido 18 años, y;
- II. Tener un modo honesto de vivir.

Texto Actual:

Art. 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:

- I. Haber cumplido 18 años, y;
- II. Tener un modo honesto de vivir.

1.6. ANTECEDENTE ARTÍCULO 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 37

Antecedentes

1811-1917 (19)

FECHA	DOCUMENTO
1811	Elementos Constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón.
1812	Constitución Política de la Monarquía Española.
1814	Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.
1836	Leyes Constitucionales de la República Mexicana.
1840	Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836.
1842	Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1842	Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente.
1842	Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1843	Bases Orgánicas de la República Mexicana.
1847	Acta Constitutiva y de Reformas.
1856	Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana.
1856	Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana.
1856	Congreso Constituyente.
1857	Constitución Política de la República Mexicana.
1865	Estatuto Provisional del Imperio Mexicano.
1867	Convocatoria para la elección de los Supremos Poderes.
1916	Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza.

- 1916 Congreso Constituyente.
1917 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes:

Elementos Constitucionales Elaborados por Ignacio López Rayón, 1811.

Punto 27. Toda persona que haya sido perjura á la Nación sin perjuicio de la pena que se aplique, se declarará infame, y sus bienes pertenecientes á la Nación.

Constitución Política de la Monarquía Española

Art. 24. La calidad de ciudadano español se pierde:

Primero. Por adquirir naturaleza en país extranjero.

Segundo. Por admitir empleo de otro Gobierno.

Tercero. Por sentencia en que se impongan penas afflictivas o infamantes, si no se obtiene rehabilitación.

Cuarto. Por haber residido cinco años consecutivos fuera del territorio español sin comisión o licencia del Gobierno.

Art. 26. Sólo por las causas señaladas en los dos artículos precedentes se pueden perder o suspender los derechos de ciudadano, y no por otras.

Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, 1814.

Artículo 15. La calidad de ciudadano se pierde por crimen de herejía, apostasía y lesa nación.

Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836.

Art. 11. Los derechos de ciudadano se pierden totalmente:

- I. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano.
- II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante.
- III. Por quiebra fraudulenta calificada.
- IV. Por ser deudor calificado en la administración y manejo de cualquiera de los fondos públicos.
- V. Por ser vago, mal entretenido, o no tener industria o modo honesto de vivir.
- VI. Por imposibilitarse para el desempeño de las obligaciones de ciudadano por la profesión del estado religioso.

Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, 1840.

Art. 12. La cualidad de mexicano se pierde:

- I. Por ausentarse del territorio de la República más de dos años, sin ocurrir durante ellos por el pasaporte del gobierno.

- II. Por permanecer en país extranjero más de dos años, después de fenecido el término de la licencia, sin haber ocurrido por la prórroga.
- III. Por alistarse en banderas extranjeras.
- IV. Por aceptar empleos de otro gobierno.
- V. Por aceptar condecoraciones de otro gobierno sin permiso del mexicano. Por los crímenes de alta traición contra la independencia de la Patria, de conspirar contra la vida del Supremo Magistrado de la Nación, de incendiario, envenenador, asesino alevoso, y cualesquiera otros delitos en que imponga las leyes esta pena.

Art. 13. El que pierda la cualidad de mexicano, puede obtener rehabilitación del Congreso, en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes.

Artículo 18. Los derechos del ciudadano se pierden:

- I. En los casos en que se pierde la cualidad de mexicano.
- II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante.
- III. Por quiebra fraudulenta calificada.
- IV. Por ser deudor calificado en la administración y manejo de cualquiera de los fondos públicos.

Artículo 64. No puede el Congreso Nacional:

V. Privar, ni suspender a los mexicanos de sus derechos, declarados en el título segundo de esta Constitución.

Primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 15. Los mexicanos gozarán de los derechos que les conceden la constitución y las leyes, y por éstas se les dispensarán exenciones y prerrogativas que hagan su condición mejor que la de los extranjeros. Los que pierdan la calidad de mexicano, por condenación judicial, y los que estén legalmente presos, no podrán usar del derecho de libertad de imprenta, sino para su propia defensa.

Art. 17. Se pierde la calidad de mexicano:

- I. Por naturalizarse en país extranjero.
- II. Por servir bajo las banderas de una potencia que esté en guerra con la República.
- III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del mexicano.

Art. 18. El que pierda la calidad de mexicano puede obtener rehabilitación del congreso en la manera y casos que disponga la ley.

Art. 25. Los derechos de ciudadano se pierden:

- I. Perdiéndose la calidad de mexicano.
- II. Por sentencia judicial que imponga pena infamante, o que declare a alguno reo de contrabando de efectos prohibidos en favor de la industria nacional o de la agricultura.
- III. Por quiebra fraudulenta calificada.

IV. Por mala versación o deuda fraudulenta en la administración de cualquiera fondo público.

Art. 79. Corresponde al Congreso Nacional: ...

Fracción XXXII. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano, mas sin que por la rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por alguno de los delitos siguientes: por traición contra la independencia de su patria, conspiración contra el Poder Legislativo o contra la vida del Presidente de la República; por incendiario, envenenador, asesino o alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho.

Voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente, 1842.

Art. 2. La calidad de mexicano se pierde por la naturalización en país extranjero y por servir al gobierno de otra nación, ó admitir de él condecoración o pensión sin licencia del mexicano.

Art. 8. Este ejercicio se pierde por sentencia judicial que imponga pena infamante, y se suspende por el oficio de doméstico, por ser ebrio consuetudinario, ó tahúr de profesión, vago o mal entretenido, por tener casa de juegos prohibidos, por el estado religioso ó de interdicción legal, y por proceso sobre aquellos delitos por los que se pierde la cualidad de mexicano.

Art. 11. Tanto para privar, como para suspenderá un ciudadano de sus derechos, se necesita declaración de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco podrán ejercerlos, sin justificar la posesión de estado con el documento que la ley establezca.

Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1842.

Art. 5. La cualidad de mexicano se pierde por naturalización en país extranjero y por servir al gobierno de otra nación o admitir de él alguna condecoración o pensión.

Art. 8. Este ejercicio se pierde por sentencia judicial que imponga pena infamante, y se suspende por el oficio de doméstico cerca de la persona, o ser ebrio consuetudinario o tahúr de profesión, vago o mal entretenido; por tener casas de juegos prohibidos; por el estado religioso o de interdicción legal; por no desempeñar los cargos de nombramiento popular, o aquellos que la ley declara no renunciables, careciendo de excusa legal calificada por la autoridad competente. La suspensión durará el duplo del tiempo que debía durar el cargo que no desempeñó.

Art. 11. Tanto para privar, como para suspender a un ciudadano de sus derechos, se necesita declaración de la autoridad competente en las formas que prevenga la ley. Tampoco podrá ejercerlos, sin justificar la posesión de estado, con el documento que la ley establezca.

Art. 70. Corresponde exclusivamente al Congreso Nacional :

XXX. Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano; mas sin que por la rehabilitación pueda restituir el derecho de obtener ningún empleo ni cargo público a los que hayan sido condenados judicialmente y en la forma legal por algunos de los delitos siguientes: por traición contra la independencia de la patria, conspiración contra el Poder Legislativo, o contra la vida del Presidente de la República, por incendiario, envenenador, asesino o alevoso; por quiebra fraudulenta, robo, prevaricación o cohecho.

Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843.

Art. 16. Se pierde la calidad de mexicano:

- I. Por naturalizarse en país extranjero.
- II. Por servir bajo la bandera de otra nación sin licencia del Gobierno.
- III. Por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso.

Art. 17. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el Congreso.

Art. 22. Se pierden los derechos de ciudadano:

- I. Por sentencia que imponga pena infamante.
- II. Por quiebra declarada fraudulenta.
- III. Por mala versación, o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo público.
- IV. Por el estado religioso.

Art. 23. Para que un ciudadano se tenga por suspenso en los casos 2, 4 y 5 del artículo 21, o privado de los derechos de tal en el 3 del artículo anterior, se requiere declaración de autoridad competente en la forma que disponga la ley.

Art. 24. El ciudadano que haya perdido sus derechos puede ser rehabilitado por el Congreso.

Acta Constitutiva y de Reformas, 1847.

Art. 3. El ejercicio de los derechos de ciudadano se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahúr de profesión, o vago; por el estado religioso, por el de interdicción legal; en virtud de proceso sobre aquellos delitos, por los cuales se pierde la cualidad de ciudadano, y por rehusarse, sin excusa legítima, a servir los cargos públicos de nombramiento popular.

Art. 4. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos derechos, la manera de probar la posesión de la cualidad de ciudadano y las formas convenientes para declarar su pérdida o suspensión. El ciudadano que haya perdido sus derechos políticos, puede ser rehabilitado por el congreso general.

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, 1856.

Art. 19. La calidad de mexicano se pierde:

- I. Por naturalizarse legalmente en país extranjero.
- II. Por servir bajo la bandera de otra nación sin licencia del gobierno.
- III. Por admitir empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del mexicano: se exceptúa la admisión de los empleados y condecoraciones literarias.
- IV. Por enarbolar en sus casas algún pabellón extranjero en caso de ocupación por el enemigo exterior. Probado el delito el culpable será expulso del territorio de la República.

Art. 20. El mexicano que pierda la calidad de tal, puede ser rehabilitado por el gobierno.

Art. 25. Se pierden los derechos de ciudadano.

- I. Por sentencia que imponga pena infamante.
- II. Por quiebra declarada fraudulenta.
- III. Por malversación o deuda fraudulenta contraída en la administración de cualquier fondo público.
- IV. Por el estado religioso.

Art. 26. Para que un ciudadano se tenga por suspenso en los casos, I, II, y III del artículo 24, o privado de los derechos de tal en el III del artículo 25, se requiere declaración de autoridad competente.

Art. 27. El ciudadano que haya perdido sus derechos, puede ser rehabilitado por el gobierno.

Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, 1856.

Artículo 43. La calidad del ciudadano se pierde:

- 1o. Por naturalización en país extranjero:
- 2o. Por establecer en él una residencia permanente y voluntaria con bienes y familia:
- 3o. Por servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del congreso federal.

Constitución Política de la República Mexicana, 5 de febrero de 1857, artículo 37 *Pérdida de la calidad de ciudadano*, se presentó como 43 en el Proyecto de Constitución y corresponde al 37 de 1917, el 5 de septiembre de 1856 fue aprobada la primera y segunda parte por 79 votos a favor (100%), ninguno en contra (el Acta Oficial señala que la segunda parte se aprobó por 82 votos a favor (95.3%), 4 en contra (4.7%); Zarco solicitó suprimir la residencia permanente como requisito y una excepción respecto a los títulos científicos o literarios. Arriaga consideró excepcionar lo referente a los títulos. Reyes propuso que perdieran la calidad de ciudadanos los sentenciados por quiebras fraudulentas y malversación de fondos públicos. Arias señaló que perdieran sus derechos quienes se negasen sin causa a servir en cargos públicos. También intervinieron Cendejas, Arriaga y Moreno.

Art. 37. La calidad de ciudadano se pierde:

- I. Por naturalización en país extranjero.
- II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso Federal. Exceptúase los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptarse libremente.

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 1865.

Art. 57. Se suspenden o pierden los derechos de mexicano y ciudadano, y se obtiene la rehabilitación de los casos y forma que dispone la ley.

Convocatoria para la elección de los Supremos Poderes, 1867.

Art. 22. Conforme a la ley de 16 de agosto de 1863, los que prestaron servicios o ejercieron actos expresos de reconocimiento de la intervención extranjera o del llamado gobierno que pretendió establecer y los que, habiendo tenido cargos o empleos públicos bajo el gobierno nacional, permanecieron después en lugares sometidos al enemigo, están privados de los derechos de ciudadano y, en consecuencia, mientras no sean rehabilitados por el Congreso o el gobierno de la Unión, no tienen voto activo ni pasivo en las elecciones para los cargos de la federación, ni para los de los estados.

Sin embargo, deseando ampliar en lo posible la acción electoral, se modifican los efectos de dicha ley, en lo relativo a elecciones, según las reglas que se establecen en los artículos siguientes.

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, 1916.

Art. 37 del Proyecto. La calidad de ciudadano mexicano se pierde:

- I. Por naturalización en país extranjero.
- II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él, condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos y humanísticos que pueden aceptarse libremente.

Constitución Política de México, Querétaro, 5 de febrero de 1917, artículo 37 *Pérdida de la calidad de ciudadano mexicano*, se presentó en la sesión de 23 de enero de 1917, el dictamen se efectuó en esa fecha, y se aprobó el 26 de enero siguiente, sin haberse efectuado debates.

Art. 37. La calidad de ciudadano mexicano se pierde:

- I. Por naturalización en país extranjero.
- II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él, condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos y humanísticos que pueden aceptarse libremente; y

- III. Por comprometerse en cualquiera forma, ante ministros de algún culto o ante cualquiera otra persona, al no observar la presente Constitución, o las leyes que de ella emanen.

2 Reformas y 1 Fe de Erratas 1917-2012

Fe de Erratas 6 de febrero de 1917, relativa al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el número 30 de fecha 5 de febrero de 1917, del “Diario Oficial”

Página 152. 2ª. Columna. Línea 25. Artículo 37, fracción I, dice: “Por naturalización en país extranjero; y”

Debe decir: “Por naturalización en país extranjero;”

Página 152. 2ª. Columna. Línea 20. Artículo 37, fracción II, dice: “...humanitarios que pueden aceptarse libremente.”

Debe decir: “...humanísticos que pueden aceptarse libremente; y”

La primer reforma *Nacionalización y naturalización*, se efectuó a iniciativa de la Cámara de Senadores, el dictamen se formuló el 3 de octubre de 1933 y fue sometida a discusión y aprobación el 28 de octubre siguiente, no se registraron oradores para debates, y fue aprobada con 39 votos a favor (100%), ninguno en contra. El 9 de noviembre de ese año, se turnó a la Cámara de Diputados que realizó el dictamen, sometió a discusión y aprobación el siguiente 19 de diciembre; no se registraron oradores para debates y se aprobó con 115 votos a favor (100%), ninguno en contra. La declaratoria correspondiente fue el 23 de diciembre de 1933. Se publicó en el DOF 18 de enero de 1934:

La nacionalidad mexicana se pierde:

- I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera;
- II. Por aceptar o utilizar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero;
- III. Por residir, siendo mexicano por naturalización, durante cinco años continuos, en el país de su origen, y
- IV. Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, siendo mexicano por naturalización, como extranjero, o por obtener y usar pasaporte extranjero.

A. La ciudadanía mexicana se pierde:

- I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un gobierno extranjero;
- II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal, o de su Comisión Permanente;
- III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal, o de su Comisión Permanente;
- IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los

títulos literarios, científicos o humanitarios que puedan aceptarse libremente;

V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero en cualquiera reclamación diplomática, o ante un Tribunal Internacional, y

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

La segunda reforma *No pérdida de la Nacionalidad Mexicana*, también abarcó a los artículos 30 y 32; se efectuó a iniciativa presentada el 3 de diciembre de 1996, por Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República, ante la Cámara de Senadores y fue aprobada el 5 de diciembre de 1996 por esta Cámara; la Cámara revisora la aprobó el 10 de diciembre siguiente (ver cuarta reforma del artículo 30 Constitucional). Reforma publicada en el DOF 20 de marzo de 1997:

...A. Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B. La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

C. La ciudadanía mexicana se pierde:

I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;

II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;

IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos, o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;

V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y

VI. En los demás casos que fijan las leyes.

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.

Texto Actual:

Art. 37. A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

- I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y
- II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

C) La ciudadanía mexicana se pierde:

- I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
- II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
- III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente;
- IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente;
- V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y
- VI. En los demás casos que fijan las leyes.

En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud del interesado.

2.LEGISLATIVOS DE LA LEY DE POBLACIÓN

2.1. DECRETO DE GOBIERNO: ACTA DE INDEPENDENCIA.

6 de octubre de 1821.

La soberana Junta Provisional Gubernamental del Imperio Mexicano congregada en la capital de él en 28 de septiembre anterior, pronunció la siguiente:

Acta de Independencia del Imperio Mexicano.

La Nación Mexicana que por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido.

Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados, y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, por el amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables.

Restituida, pues, cada parte del Septentrión al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por inajenables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones, y declara solemnemente por medio de la junta suprema del imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescribieren los tratados: que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas, cuantos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías, y en fin que sostendrá a todo trance y con sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos (si fuere necesario) esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año 1821, primero de la independencia mexicana, Agustín de Iturbide.- Antonio, Obispo de Puebla.- Juan

O'Donojú.- Manuel de la Barcena.- Matías Monteagudo.- Isidro Yáñez.- Lic. Juan Francisco de Azcárate.- Juan José Espinosa de los Monteros.- José Ma. Fagoaga.- José Miguel Guridi y Alcocer.- El Marqués de Salvatierra.- El Conde de la Casa de Heras Soto.- Juan Bautista Lobo.- Francisco Manuel Sánchez de Tagle.- Antonio de Gama y Córdova.- José Manuel Sartorio.- Manuel Velázquez de León.- Manuel Montes Argüelles.- Manuel de la Sota Riva.- El Marqués de San Juan de Rayas.- José Ignacio García Illueca.- José Ma. de Bustamante.- José Ma. Cervantes y Padilla.- José Manuel Velázquez de la Cadena.- Juan de Horbegoso.- Nicolás Campero.- El Con de la Jala y de Regla.- José Ma. de Echevers y Valdivielso.- Manuel Martínez Mancilla.- Juan Bautista Raz y Guzmán.- José Ma. de Jáuregui.- José Rafael Suárez Pereda.- Anastasio Bustamante.- Isidro Ignacio de Icaza.- Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario.

Téndralo entendido la regencia, mandándola imprimir, publicar y circular.- México, 6 de octubre de 1821, primero de la independencia de este imperio.- Antonio, Obispo de Puebla, presidente.- Juan José Espinosa de los Monteros, vocal secretario.- José Rafael Suárez Pereda, vocal secretario.

2.2. DECRETO DE GOBIERNO: SE SEÑALA DÍA PARA LA SOLEMNE JURA Y PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL IMPERIO EN LA CAPITAL Y LUGARES QUE NO LO HAYAN PROCLAMADO Y FORMULA DE JURAMENTO

6 de octubre de 1821.

La soberana junta provisional gubernativa del imperio mexicano, en consideración a que aunque muchas ciudades y pueblos del imperio está ya solemnemente jurada y proclamada la independencia, aun no se han practicado tan necesarios actos en esta capital y algunos otros lugares, ha venido en decretar y decreta.

1. Que el juramento y solemne proclamación de la independencia de este imperio se verifique en la capital el día 27 del corriente Octubre, y en la demás ciudades que no la hayan proclamado, dentro de un mes después de que reciba la orden que se les comuniquen.

2. Que para el día señalado concurran en la mañana a los ayuntamientos para mayor solemnidad del acto, dos individuos nombrados de antemano por cada uno de los tribunales y corporaciones de esta ciudad respectiva, y presididos los ayuntamientos por el jefe político, donde lo haya, o por el alcalde donde no, otorguen individualmente el juramento debido, bajo esta formula: “Reconocéis la soberanía de este imperio, representada por la junta provisional gubernativa? Si reconozco. Juráis obedecer sus decretos, observar las garantías proclamadas en Iguala por el ejército del imperio mexicano con su primer jefe, los tratados celebrados en la Villa de Córdoba, y desempeñar fielmente vuestro encargo.

2.3. ORDEN DE PROHIBICIÓN PARA CLASIFICAR A LOS CIUDADANOS MEXICANOS POR SU ORIGEN. 17 DE SEPTIEMBRE 1822

“El soberano Congreso constituyente mexicano”, con el fin de que tenga su debido cumplimiento el artículo 12 del Plan de Iguala, por ser uno de los que forman la base social del edificio de nuestra independencia ha venido a decretar y decreta:

1. Que en todo registro y documento público o privado al sentar los nombres de los ciudadanos de este imperio, se omita, clasificarlos por su origen.

2. Que aunque a virtud de lo prevenido en el artículo anterior no deberá ya hacerse en los libros parroquiales distinción alguna de clases, continuará no obstante por ahora la que actualmente se observa en aranceles para la sola graduación de derechos y obvenciones, ínterin estas se clasifican por otro método más justo y oportuno.

2.4. EL PACTO FEDERAL DE ANÁHUAC

México, 28 de julio de 1823.

¡Deplorable, sin duda, es la constitución humana a vista de lo que por ella pasa! Nada más innato al hombre que el deseo de su libertad: pero ninguna cosa es la más inaccesible. Por ella sacrifica su quietud, su reposo, su existencia misma y después de tan caro precio sobre las aras de esta deidad; mas no por eso han conseguido poseerla tantas naciones desgraciadas que en último resultado transigieron con sus déspotas. Testigo sea Francia de esta verdad.

De siglo en siglo suele aparecer para consuelo de la humanidad un momento feliz que pasa muy breve y no vuelve a asomar jamás, ¡Desventurados los pueblos que dejan escapar inútilmente! Tal es el que en la presente ocasión ofrece el cielo en sus misericordias a la Nación de Anáhuac. Santa libertad, joya inestimable, dulce consuelo del mortal afligido, ¿Qué dejarás burladas para siempre nuestras esperanzas? No ocultes tras de espesas nubes esa faz preciosa, que ya nos has mostrado pasajera y déjanos establecer entre los mexicanos que te adoran, coloca tu trono en medio de nosotros, que una vez elevado juramos a costa de nuestras propias vidas.

Conciudadanos, nuestra época es singular: venturosamente nos hallamos en la mejor ocasión para ser felices si acertamos a constituirnos de un modo digno y correspondiente a las luces del siglo en que vivimos. Quizá otro pueblo no se ha visto en oportunidad tan favorable. Ninguna potencia nos amenaza, no hay una sola que nos perturbe. Nuestras vecinas de contacto, antes nos presentan motivos de confianza que de sospecha. Las sordas tentativas que puedan hacerlos que nos sean desafectos será inútiles si nosotros no las fomentamos con rivalidades necias. Las reliquias del Imperio son impotentes, y las pretensiones de los centralistas quedarán reducidas a la órbita que les prescriba la Carta de nuestra Federación, si todas las provincias obran de consumo con sabiduría, con circunspección y con firmeza.

La Nación se ha pronunciado suficientemente por el sistema de República Federada: no podía ser otros sus votos puesto que quiere ser libre en toda la extensión de la palabra. Este invento feliz de la política, indicado por los sentimientos de la naturaleza, siempre iguales, siempre constantes, y nunca resistibles: este gobierno, quizás el único exclusivamente capaz de proveer enteramente a las necesidades del hombre, es sin duda alguna el que nos debe hacer felices. Su influjo benéfico desarrollará muy pronto el germen de la verdadera riqueza que la naturaleza depositó en nuestro fértil suelo. El será el taller de la moralidad, el plantel de la filantropía, el foco de la ilustración, y el seminario de las virtudes sociales. Él multiplicará en breves años nuestra población, asegurará nuestra paz, será el escudo impenetrable de nuestras libertades, hará pulular hacia todas partes la heroicidad, y colocará a los americanos en el distinguido rango que son llamados a ocupar entre las naciones ilustres. Perspectiva es ésta de muchos embelesos y objeto demasiado lisonjero para no llevar a la exaltación el patriotismo que es connatural al genio ardoroso de los mexicanos.

Compatriotas, ¿Qué deseo más noble, qué interés más puro, qué ambición más heroica puede tener el ciudadano que vivir bajo un gobierno equitativo y protector de sus derechos imprescriptibles, garantizado por una constitución liberal, justa y benéfica? Tal es pues el que nos presenta el sistema de la república federada porque suspiramos. Cobremos aliento, trabajemos constantemente y no desmayemos al ver las dificultades que son casi ningunas. Unamos nuestros votos, concordemos nuestros sentimientos y la empresa es ya conseguida.

Las ventajas de este gobierno celestial son evidentemente conocidas, están consagradas por una experiencia que tenemos a la vista, las confiesan sus mismos adversarios, que no pudiendo reprobarnos, sólo pretenden contraponerles dificultades ponderadas, como si hubiese sistema que no ofreciera tropiezos en sus principios. Otras tantas oponían para establecer la Constitución Española en América, y ella se estableció en gran parte. Muchas más para pronunciar su independencia de la metrópoli, y ella se verificó. Infinitas para constituirnos en la república, y ya de hecho estamos en ella. Ved aquí en poco más de tres años fallidos sus pronósticos y desmentidos sus cálculos: por lo que se ve, como que no eran fruto de una previsión política, sino de la más refinada malicia. La intriga de los malos ha ido perdiendo terreno sucesivamente a proporción que los pueblos se han ido ilustrando: la causa de nuestra libertad sigue e sus avances, las luces jamás retroceden, el término deseado se aproxima por momentos. ¡Insensatos! Desistid de una empresa tan imposible como ridícula. ¿Cómo queréis poner diques al impetuoso torrente de toda una Nación que corre presurosa a su felicidad? ¿Quién es capaz de contrariar la voluntad de seis o más millones de hombres, que exasperados en la esclavitud han jurado ser libres?

La principal dificultad y la más favorita con que se nos quiere espantar como a niños medrosos, es la imbecilidad en que suponen va a quedar la Nación para resistir las agresiones extranjeras, por la separación gubernativa de sus provincias; pero esto tiene más de ilusión de malicia que de solidez. Es verdad que en el sistema federado

se divide la Nación en Estados pequeños e independientes entre sí para todo aquello que les conviene, a fin de concurrir a sus necesidades políticas y domésticas; más inmediatamente, a menor costo, con mejor conocimiento y con mayor interés que el que queda tomar por ellos una provincia lejana y extraña, cuya autoridad la mayoría de las veces obra ignorante, o mal informada, y por consiguiente sin tino ni justicia. Pero esta independencia recíproca de los estados, en nada debilita la fuerza nacional, porque ella en virtud de la federación, rueda siempre un solo eje y se mueve por un resorte central y común. Permítaseme explicar con símiles familiares en obsequio de la claridad. Una compañía de comercio gira felizmente con estos solos elementos: estipulaciones justas entre los compañeros, capital competente y factores fieles, instruidos y ampliamente autorizados. Cuanto mayores sean estas cualidades, tanto más ventajosos será los progresos de la sociedad y ésta subsistirá vigorosamente, mientras aquellos elementos no se debiliten. Mas ¿A qué conduciría que los compañeros se obligaran a vivir bajo un mismo techo, no tener más de un solo hogar, una mesa común y a vestir promiscuamente una misma ropa? ¿Para qué conferir los intereses personalísimos y domésticos, que sin hacer por eso más poderosa ni lucrativa a la compañía sólo les acarrearía a los socios una incomodidad insoportable, inútil y fastidiosa?

El objeto de las asociaciones civiles fue la comodidad y el bienestar de los ciudadanos, no el privarlos de su libertad, ni comprometerlos a sacrificios estériles que para nada contribuyen a hacerlos felices. Siempre que la seguridad y el buen orden de una Nación se pueda obtener sin encadenar a los pueblos, dicta la naturaleza que se profiera el medio suave y se economice el desperdicio de la libertad, por razones de humanidad, de justicia y de conveniencia; porque nada es más contrario a la dignidad y gusto del hombre, a su voto general y a la subsistencia del pacto social, que el que se exija más parte de libertad que aquella necesaria para asegurar la otra porción que se reserva. Un Estado bien constituido no debe dar a los gobernantes más autoridad sobre los súbditos que la que sea bastante para mantener el instituto social. Todo cuanto sea excederse de estos límites es abuso, es tiranía, es usurpación porque nunca el hombre se despoja por voluntad más que lo de lo muy preciso, para darlo en cambio de otro mayor bien; y de aquí es que el ánimo de donar nunca se presume.

A un magistrado o jefe encargado de la seguridad de un lugar le basta la autoridad competente sobre los ciudadanos que lo componen para obligarlos a cumplir con su deber procomunal, ya con sus personas, ya con sus caudales. ¿Pero podrá indicarse una sola razón para que su inspección y conocimiento se quisiera extender al gobierno interior de sus casas, de sus familias, de sus negocios y de sus más privados intereses? ¿No sería ésta una opresión insufrible y un vejamen atroz, aunque se vistiera de los colores y pretextos más especiosos? Pues aplíquese esto a las provincias como a las familias que componen el todo de la Nación y forzosamente se sacará la misma consecuencia.

El fútil argumento que se hace, de que igual pretensión harán los partidos y pueblos más pequeños para substraerse de sus capitales, así como las provincias de su

metrópoli, no tiene fundamento en que apoyarse, porque semejante solicitud no la dicta la razón, la naturaleza, ni la necesidad, que solo hace apetecer al hombre lo posible, lo útil y lo conveniente. Las pasiones y deseos del individuo moral, así como los del físico, no se excitan ni despiertan, sino cuando su fuerza y vigor se halla en estado de satisfacerlos.

Así vemos que la joven de diez años no tiene la inclinación al enlace conyugal, como lo tiene la de veinte; con que bien puede ser que las provincias, como bastante capaces de gobernarse por sí mismas, tengan una justa y natural tendencia a su separación, sin que por eso los partidos entren en la menor tentación de hacer otro tanto, pues no son tan insensatos que no conozcan la falta de elementos para emanciparse: pero sí deben gozar, y de ipso gozan toda aquella independencia mutua de que son capaces, teniendo cada pueblo su autoridad privada, y su ordenanza municipal.

No se separan las provincias para ser otras tantas naciones independientes en lo absoluto: ninguna ha pensado en semejante delirio, sino que respecto a su gobierno interior se han pronunciado estados soberanos, por que quieren ejercer éste sin subordinación a otra autoridad. Se independizan mutuamente para administrarse y regirse por sí mismas, puesto que nadie mejor que ellas pueden hacerlo con más interés, con mayor economía ni con mejor acierto, y para esto tienen un derecho incontestable, así como la tiene cada ciudadano para ser el señor de su casa y sistematizar su régimen doméstico como mejor le acomode. Pero, sin embargo, ellas aseguran que quieren permanecer siempre partes integrantes del gran todo de la Nación de que son miembros, unidas por el vínculo insoluble de federación, bajo una autoridad central que dirija la fuerza en masa, tanto para asegurar a todas y a cada una de las agresiones extranjeras, como para garantizar su independencia recíproca.

Puede suceder que se hayan confundido por algunos escritores las teorías del federalismo con las de una alianza entre potencias absolutamente separadas y soberanas en todo sentido; ¿Pero que hay que extrañar en esto, atendida la novedad del objeto y las ningunas lecciones que sobre esta materia hemos recibido? En ellos será laudable siempre, su decidido amor por la libertad y sus sanas intenciones para recomendarnos esta bella forma de gobierno. Podrá decirse que el paso dado por algunas provincias, pronunciado su separación, ha sido intempestivo, peligroso y expuesto; pero si ellas se han anticipado a darlo, nunca serán culpables porque lo han hecho con el mayor orden, circunspección y decoro, temiendo y quizá con razón, que se les escape de entre las manos una ocasión favorable. Si esto pudiera decirse un mal, no consistiría el remedio en retraerlas de su intento, porque esto es imposible y su resistencia inevitable; sino aunar sus opiniones poniéndose de parte de sus justos deseos.

Ellas conocen muy bien, que si este sistema es halagüeño para el ciudadano pacífico y amante de su Patria, es detestable para todos aquellos que intentan sobreponer sus intereses aislados y mezquinos a la felicidad de sus semejantes. Un militar ambicioso de gloria, el empleado prostituido, y aquel magistrado venal son otros tantos enemigos que secreta o descaradamente, según les favorezcan las circunstancias, pondrán todo el

embarazo posible a su consecución, porque esperan; y sí nada por el contrario, todo lo temen del arreglo, austeridad y buen orden que son inseparables del federalismo: no de otra suerte los asalariados de una hacienda mal impuestos en su manejo, tiemblan al verla administrada por su propio dueño, a quien su propio interés debe dictarle toda clase de reformas. El que aún abraza esperanzas monárquicas, quisiera el centralismo como más análogo a aquella forma, de la que distan muy pocos pasos. El genio emprendedor y atrevido quisiera el centralismo, porque todo el teatro de su ambición lo vería concretado en un punto a donde asestar sus tiros. El insulto aspirante quisiera el centralismo, para tener un campo más abierto a sus deseos y no tributar incienso sino a unas pocas deidades. El funcionario déspota o infiel quisiera el centralismo, porque así sería más remota y embrollada su responsabilidad. El que todavía considera posible anular las rotas cadenas de los dos mundos quisiera el centralismo y abomina altamente la federación porque, en el primer caso, fascinada la capital, era menos difícil el triunfar del todo; más en el segundo son necesarios tantos triunfos, cuantos sean los estados que se interesan en la conservación. No basta contrahacer una llave, sino que es indispensable forzar todas las cerraduras. En suma, todos los que tienen sobre la Patria miras siniestras, y los que no se han fijado más norte que su interés individual, sostendrán el centralismo contra la deseada federación, porque ésta desvanece sus proyectos tenebrosos y burla para siempre sus depravadas esperanzas.

Nos suponen ya en medio de la más desastrosa anarquía: pero ¿Dónde está ese desorden tan ponderado? Nos pintan formidables escuadras que pueden invadirnos, y a las que no seremos capaces de resistir por la debilidad en que nos va a poner la separación. ¡Ah! Cuán ignorantes nos figuran, y cuán espantadizos nos creen los que de este modo nos asustan. Tememos, es verdad, destrozarnos en una espantosa anarquía; pero a esta dará principio el primer tiro que se dispare para contrariar la voluntad general. No es imposible que alguna potencia insista en subyugarnos de cualquier modo; pero sabemos que nunca podrá hacerlo con fuerzas competentes ni con expediciones formidables, sino con intrigas y arterias, fomentando nuestras rivalidades para hacernos la guerra, si posible fuere, con nuestras propias armas y estamos ya persuadidos que semejantes supercherías no se resisten con ejércitos numerosos, ni con caudales inmensos que en ellos forzosamente se consumirían, sino con opinión decidida, con virtudes sociales, con el más acendrado patriotismo, y por decirlo en cuatro palabras, “con una buena Constitución”, que todo esto se debe producir.

Ciudadanos: tiempo es ya de abrir los ojos y examinar a mejor luz nuestros verdaderos intereses. Están convencidos de que una República Federada, que lo sea en la realidad y no en el nombre, es la que solamente nos lo pueden proporcionar; pues manos a la obra y no apartemos el dedo del renglón. Entonces está la Patria más defendida cuando el ciudadano está más seguro de sus derechos, y más bien hallado y contento con el gobierno y leyes que se los garantiza; sean éstas buenas y necesariamente el Estado tendrá defensores, porque el interés bien entendido es el productor de la heroicidad, el valor y de las virtudes marciales. Ver si no a la España oponer una

resistencia denotada contra un coloso formidable, en defensa de la libertad que apenas principiaba a gustar.

Una sola dificultad puede retardar nuestra gloriosa empresa y es la divergencia de opinión en las provincias, no respecto del federalismo que todas apetecen, sino en cuanto a los medios de establecerlo y acerca de las bases o puntos cardinales en que todas deben convertir para proceder con uniformidad. Las Diputaciones Provinciales que desde el grito dado en Casa Mata y en virtud de la revolución, tomaron por necesidad y conveniencia pública para hacer la salud de la Patria (ley superior a todas las escritas) por un carácter muy distinto de aquel con que se hallaban investidas por la Constitución Española, son las que han dirigido la opinión de sus provincias y puestas todas de acuerdo, han sido el órgano de la voz de la Nación. Ellas estuvieron conformes en adherirse a las proposiciones del Ejército y desbarataron el trono con débil soplo. Lo estuvieron así mismo para pedir la convocatoria de un nuevo Congreso, y a pesar de la comisión que lo resistía, se consiguió en menos de cuatro horas. También lo están para querer República Federada y de hecho ya estaríamos en ellas sin la menor contradicción, si el Congreso actual hubiera contribuido a sus deseos, como se lo pedíamos seis Diputados. Mas dejemos a la posteridad imparcial que haga la crítica de un proceder en que se pudo haber uniformado la opinión y salvado a la Patria de todo peligro con un decreto de pocos renglones, sin que por eso se dijera que en él se trataba de constituir a la Nación, sino solo de impedir el extravío y el desorden, preparando de antemano los medios para la federación, supuesto que no cabe duda que éste es el voto nacional y que el Congreso también asegura que se halla decidido por este sistema, a pesar de que las bases impresas son mal comprobante de esta aserción. No sucedió así, porque no es dado al hombre acertado todo. Respeto la autoridad de un Congreso pero lamento la pérdida de un lance que nos pudo haber excusado mil tropiezos acercándonos al deseado fin por un camino muy breve.

La convocatoria para el nuevo Congreso circula ya por todas las provincias: su admiración es enteramente necesaria, porque nada urge más que un Congreso legítimamente autorizado para entender en los negocios grandes del estado general; las elecciones se verificarán y en el día señalado se reunirá el Congreso para constituir a la Nación mexicana, ¿Pero bajo qué forma de gobierno? Vean aquí todo el motivo de los celos de unas provincias y no sabré decir, si la única esperanza de la capital de Guadalajara, Yucatán, Oaxaca, Zacatecas y las Internas de Oriente, deseosas del federalismo e impacientes de que se les retarde este bien, ayudadas de la localidad y de sus circunstancias, no considerándose ligadas por el antiguo pacto ya disuelto, se han anticipado a darse por sí mismas lo que acaso desconfían obtener por mano ajena y se han declarado independientes de toda autoridad para darse su Constitución peculiar y gobernarse con entera separación de las demás, a las que no obstante quieren permanecer unidas con los vínculos fraternales de una justa federación que les garantice su tranquilidad mutua y su seguridad externa. Querétaro, Valladolid, Guanajuato y San Luis Potosí, han manifestado iguales sentimientos, aunque no han dado pasos tan ace-

lerados como las primeras. Las demás no han contradicho la opinión general y todas ciertamente, quieren la federación; mas con la diferencia que estas últimas esperan obtenerla por la decisión del Congreso General, porque temen que la desmembración intempestiva y no asegurada por una preexistente garantía, puede acarrear el desorden, faltando un centro de autoridad competentemente facultado para deliberar en las dificultades y las dudas que sean consiguientes a su separación. Temor que yo no puedo menos de confesar justo y conducta bastante prudente; mas no por eso diré que carecen de fundamentos los recelos de las primeras, porque hablemos de buena fe: si ellas ciegamente se comprometiesen en la decisión del futuro Congreso, para que éste las constituyera como mejor lo tuviese por conveniente, entendidas de que deferiría de sus ya manifestados deseos por el federalismo, ¿No les quedarían todavía motivos grandes para sospechar que sus esperanzas pudieran quedar burladas? Pues que ¿Han olvidado las ansiedades que padeció en el miércoles santo? ¿Qué no tienen presente los escandalosos sucesos del diecinueve de mayo? ¿Qué no vieron que un decreto gloriosamente sostenido contra tres ataques fue miserablemente revocado, no pudiendo ya resistir al cuarto? Es verdad que hasta el día no descuella un ambicioso tan astuto ni de tanto prestigio como el que entonces nos perturbaba; pero siempre temerán las arterias y las intrigas que puedan corromper, fascinar o comprometer a unos Diputados que aunque sean los más selectos, pelagra su virtud aislada y sin recursos en la Babilonia de México. ¿Qué remedio pues para precaver este peligro y calmar todo recelo? Ved aquí, ciudadanos, mi pensamiento, que si no fuere acertado, ni mereciere vuestra aprobación, yo tendré la dulce complacencia de haberlo propuesto a mi cara Patria como un tributo de que le son deudores mis cortos alcances.

Vosotros estáis en tiempo de elegir Diputados para el nuevo Congreso; lo podéis hacer con toda libertad y sin las trabaja injustas de la antigua convocatoria. Sean estos, pues, lo ciudadanos más desinteresados, los menos comprometidos al anterior y al actual gobierno, los más instruidos y los de mejor carácter para llevar adelante la empresa del federalismo. No os son desconocidos los sujetos más adictos al sistema federal y por eso los más a propósito para tamaña comisión. Ellos deben arreglarse a la voluntad general que es la soberana y no como se os quiere persuadir, que la Nación debe quedar sujeta a sus dictámenes y opiniones singulares. Resta pues, que ellos conozcan de un modo infalible cuales son vuestros votos en orden a la forma de gobierno que apetecéis para que teniendo por norte vuestra voluntad, nunca se vean en el caso de contrariarla. A las provincias toca darles sobre esto a sus Diputados las instrucciones competentes, sean éstas unas, sean del todo conformes, todas sean iguales y lo serán necesariamente las decisiones de vuestros representantes.

Discutirá enhorabuena el futuro congreso las condiciones y los pormenores de la Constitución General que os debe dar: tendrá sus debates sobre cada uno de sus artículos; les dará más o menos extensión; pero nunca hará otra cosa que daros una carta federal, siempre que ésta sea vuestra constante voluntad. Nuevos padres de la Patria, venid persuadidos de que la opinión general es la que sostiene a las autoridades en un

gobierno libre; muy fresca tenéis la memoria de Irturbide, que por haberla contrariado pasó de ídolo de los corazones a objeto de ira y abominación de sus mismos amigos. Está bien que cada Estado proceda a darse su Constitución y leyes peculiares que sean más conformes a su localidad, costumbres y demás circunstancias; pero nunca pasará los límites de su objeto interior, quedando en todo sujeto a las leyes de federación y sus consecuencias prevenidas y consagradas en la Constitución General.

Yo pues, con el interesante fin de que sea una opinión, tengo la noble osadía de presentaros ciertos objetos de coincidencia que las provincias no pueden dejar de aceptar por ser análogos a su tendencia, o llámese si se quiere las bases de la Constitución Federal y de las privativas de cada Estado. Ciudadanos, esta grandiosa empresa demandaba meditaciones más profundas en la ciencia difícil de los gobiernos y conocimientos más prácticos del estado presente de la Nación que los que yo puedo tener; confieso mi insuficiencia para llenar debidamente objeto tan sublime; pero el celo me anima y la llama patriótica me inflama por el bien de mi adorada Patria. Fijemos unánimes votos en las instrucciones de nuestros representantes la esfera de la legislatura central y queda puesta ya la piedra angular de nuestra federación.

La Nación queda una, indivisible, independiente y absolutamente soberana en todo sentido, porque bajo de ningún respecto político reconoce superioridad sobre la tierra. Sus intereses generales los administra la autoridad central dividida en tres poderes supremos. El Congreso General representando a la Nación, dictará las leyes más sabias y convenientes para conservar la mutua separación de los estados y mantener la unión federal. El Supremo Poder Ejecutivo será el resorte de la autoridad práctica, el timonel de la nave y el gobernante de toda la fuerza nacional, ya para oponerla al enemigo común, ya para contraponerla a la ambición de algún Estado que quiera invadir o perturbar los derechos de otro, manteniendo el equilibrio mutuo entre todos ellos. El Supremo Poder Judicial será el que termine las discordias y oposiciones de un Estado con otro en lo contencioso; su fallo será el que deba contenerlos dentro de los límites de lo racional y justo y evitará de este modo que descuelle el germen de la anarquía. Será asimismo el que juzgue y haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios generales y la de todos los infractores del Pacto Federal.

Cada Estado es independiente de los otros en todo lo concerniente a su gobierno interior, bajo cuyo respecto se dice soberano de sí mismo. Tiene su legislatura, su gobierno y sus tribunales competentes para darse por sí las leyes que mejor le convengan, ejecutarlas, aplicarlas y administrarse justicia, sin tener necesidad de recurrir a otra autoridad externa, pues dentro de sí tiene toda la que ha menester.

Conciudadanos, mi espíritu se dilata, el corazón no cabe en el pecho y dos torrentes de lágrimas me inundan en el más puto gozo, al considerar que no son éstas unas vanas teorías, sino la práctica más fácil y sencilla, con solo que vosotros lo queráis eficazmente.

Excelentísimas Diputaciones Provinciales, que ya sois el simulacro de las futuras asambleas y que tenéis a la vista el termómetro de la opinión pública, dirigiéndola

y rectificándola en sus justos deseos, delante de vosotros está el bien; no lo dejéis escapar de vuestras manos; continuad en aquella unión fraternal y uniformidad de sentimientos con que comenzasteis a obrar nuestra felicidad; que sea una sola vuestra voz, que ella será terrible y hará desgajarse las soberbias murallas del despotismo central. La Nación del Anáhuac os debe en mucha parte la libertad que goza, porque trabajasteis de consumo con el Ejército, uniendo la opinión y por eso los buenos os tributan mil bendiciones. Ilustres generales del Ejército Libertador, dad este último testimonio de filantropía y poned un nuevo trofeo al escudo de vuestras heroicas virtudes, completando la obra que entonces comenzasteis. Jefes, oficiales y soldados despreocupados que no habéis querido desvair la espada ni teñiros en la sangre de vuestros hermanos para conciliar opiniones encontradas, porque vuestra sensibilidad e ilustración os han desengañado de que no hay triunfo más completo que el de la razón y el convencimiento, continuad en esa máxima filosófica y humana que os colmará para siempre de honor y de gloria. Acordaos que aunque militares, no dejáis por eso de ser una parte selecta de los ciudadanos que componen el Estado, cuyo carácter os debe ser muy agradable; tenéis amorosas consortes, tenéis hijos queridos y tenéis otras caras prendas que os enlazan con el resto de la sociedad; no os opongáis a sus justos deseos, no violentéis a marcha que lleva hasta aquí nuestra feliz revolución; poneos de parte de la justicia con que las provincias reclaman y defienden un derecho tan sagrado como lo es el de la verdadera libertad. Mis indicaciones llevan consigo el carácter de imparcialidad y el sello del desinterés. No os puede ser sospechoso de ambición un simple ciudadano que por la desconfianza que tiene de sí mismo jamás ha figurado en público, sino es cuando su provincia lo arrancó del seno de su familia, donde vivía contento en un ángulo remoto de la Nueva Galicia. De muy poco he servido en la asamblea legislativa; pero tengo la satisfacción de haberme puesto siempre al lado de la libertad a que genialmente propendo. Alma Patria, se feliz por siglos indefinidos, que yo no aspiro a otra cosa, que a veros bien constituida y puesta en el goce de tus más preciosos derechos. Vean estos mis ojos y ciérrense para siempre.

Indicaciones previas al pacto federal

1. Ínterin se reúne el nuevo Congreso, será reconocido el presente y el actual Supremo Poder Ejecutivo, como centro de unión de todas las provincias.

2. Toda providencia que emanare de su autoridad para mantener el orden público e impedir las desavenencias de provincias con provincias y de éstas con sus partidos y pueblos serán puntualmente obedecidas en calidad de interinas y sujetas a la revisión de nuevo Congreso.

3. En el remoto e inesperado caso de que se dicte una ley o se tome alguna providencia dirigida a impedir o entorpecer el pacto federal a que la Nación aspira no debe ser admitida porque tiende a la anarquía contrariando el voto general de los pueblos.

4. Todos los empleos que en tiempo intermedio se confieran por el Supremo Poder Ejecutivo, aunque sea a propuesta de las Diputaciones Provinciales, se estimarán por interinos y amovibles a juicio de las legislaturas de los estados.

5. Los gastos comunes que se impendan en los funcionarios generales mientras se verifica la separación de todos los estados, serán satisfechos por las provincias, ministrando oportunamente las cantidades que se les asignen sin que sea necesario un prorrateo exacto; pues basta llevar cuenta de las cantidades con que cada uno contribuya para que entren a colación y se devenguen a su tiempo del cupo anual que les corresponda satisfacer, quedando de este modo indemnizadas.

6. El nuevo Congreso, verificará la separación de los estados que de hecho no están divididos y terminará las discordias que tanto en estos como en los demás puedan suscitarse sobre la integridad de su terreno, demarcación de sus límites y demás puntos consiguientes a la separación.

7. Mientras no se verifiquen estos precisos antecedentes, no se procederá por las legislaturas a sancionar la Constitución de sus estados, aunque se hallen reunidas.

8. Las disputas en el fuero contencioso que en él, entre tanto puedan originarse por causa de la separación entre particulares contra una provincia, ésta contra particulares o provincia con provincia serán terminantes por el Supremo Tribunal de Justicia, que se ha mandado establecer.

9. Las causas y negocios pendientes en las audiencias serán terminados por ellas y lo mismo las apelaciones y demás recursos que se hagan de los juzgados inferiores de sus antiguos distritos, mientras no se establezcan los superiores de cada estado.

Bases para la Constitución General

1. La Nación de Anáhuac es la reunión de todas sus provincias que forman el estado general.

2. Es una, es soberana, es indivisible y es independiente, tanto de la antigua dominación española como de cualquiera otra potencia de dentro y fuera de su continente.

3. Las provincias que la componen son las que en el fin del último gobierno se hallaban en el rango de tales, sujetas al virreinato para todo lo relativo a su gobierno interior.

4. Las que actualmente se hallan con una población de doscientas mil personas arriba serán en el rango de tales, sujetas al virreinato de la Nueva España.

5. Las que no lleguen a esta población se unirán con otra u otras de sus inmediatos vecinos que mejor les acomode para formar con ellas un Estado independiente y llegado el caso de que cada una tenga la referida población quedarán por el hecho separadas para formar estados distintos.

6. Las naciones bárbaras a quienes la ilustran y el tiempo vaya dando a conocer las ventajas de la vida social y se las haga desear se admitirán a la agregación voluntaria en el Estado que la pretendan y teniendo la población antes dicha y la capacidad bastante para gobernarse por sí mismos, formarán un Estado distinto.

7. La religión de todos los estados será la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera con exclusión de otro culto.

8. Su gobierno será popular, representativo federado.

De la autoridad central

9. Ésta consistirá en los tres Supremos Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se establecerán en el Estado que designe la Constitución.

Poder Legislativo

10. Éste residirá en el Congreso de Diputación enviados por los estados con arreglo a su población electos popularmente en el modo y bajo las circunstancias que prevenga la Constitución y serán inviolables por sus opiniones.

11. La legislación central tendrá por objeto primero: la seguridad y el bien de la Nación en todo lo concerniente a sus relaciones exteriores.

Segundo. Conservar la unión federal de todos los estados que la componen, dictando las providencias necesarias para que ésta no padezca relajación.

Tercero. Mantener la separación e independencia de los estados entre sí en todo lo respectivo a su gobierno interior.

Cuarto. Mantener la igualdad de obligaciones y derechos que todos los estados deben tener para conservar la tranquilidad recíproca de unos y otros.

12. Toca al Congreso General reconocer la deuda pública y sistematizar su amortización.

13. Le toca asimismo aprobar el presupuesto anual de todos los gastos de la administración federal.

14. Estos se cubrirán con el producto líquido de las aduanas marítimas y de otras contribuciones que por su naturaleza deban ser generales y el déficit que resulte lo cubrirán los estados particulares, asignándosele por el Congreso General a cada uno e cupo correspondiente con arreglo a su población y riqueza.

15. Le toca al Congreso central sistemar el modo de juzgar a los funcionarios generales y establecer las penas correspondientes a las infracciones de la federación.

16. Le corresponde decretar las ordenanzas del Ejército, de la armada, de la marina mercantil, de las aduanas marítimas, de los correos, de las casas de moneda; un reglamento común de pesos y medidas, de contribuciones sobre importación y exportación marítima, de fe pública de los instrumentos, el concordato con Roma, y el plan general de estudios.

17. Toda ley o providencia en que se versen intereses individuales de los estados, aprobada que sea por la mayoría de los representantes del Congreso pasará a segunda votación en la que sólo tendrán un voto los Diputados de cada Estado sean los que fueren, y no podrá sancionarse si no la confirma la mayoría en este segundo caso.

Poder Ejecutivo

18. Residirá éste en uno o tres individuos electos popularmente y amovibles por tiempo. Sus cualidades, el modo de elegirlos y su duración se determinará por la Ley constitucional.

19. Sus principales atribuciones serán: promulgar las leyes generales y mandarlas circular a todas las autoridades.

Proveer los empleos militares del Ejército Permanente y la Armada, en el modo que disponga la Constitución. Nombrar los generales y dirigir sus expediciones. Distribuir la fuerza armada en las fronteras y en los puertos, como mejor convenga a la seguridad externa; y en las provincias mediterráneas con acuerdo del Senado. Declarar la guerra y hacer la paz con acuerdo del mismo Senado, ratificándose después por el Congreso. Nombrar y separar los secretarios del despacho bajo su responsabilidad. Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales, nombrando los embajadores, ministros y cónsules con acuerdo del Senado. Proveer a los empleos generales a propuesta del mismo. Conceder el paso o retener los decretos conciliares y bulas pontificias en el modo que disponga la Constitución. Indultar a los delincuentes cuando la Ley se lo permita.

Del Senado

20. Éste es parte de Poder Ejecutivo; se compondrá de uno o dos senadores por cada Estado, nombrados popularmente y amovibles por mitad en el período que disponga la Constitución.

21. Sus atribuciones serán: acordar la guerra y la paz para que pueda declararla el Poder Ejecutivo. Dar dictamen en todos los asuntos diplomáticos y ratificar el nombramiento de ministros y sus respectivas instrucciones. Hacer propuestas por ternas al Poder Ejecutivo para todos los empleos generales. Velar sobre la observancia de la Constitución, para que se mantenga el orden tanto en la Federación como en la independencia recíproca de los estados, dando cuenta al Congreso de las infracciones que advierta para que disponga lo conveniente. Convocar a Congreso extraordinario en los casos que la Constitución prevenga.

Poder Judicial

22. Éste será compuesto de un competente número de letrados nombrados a propuesta del Senado en los términos que la Constitución disponga, en la que se determinará si conviene renovarlos periódicamente.

23. Sus atribuciones serán: conocer en los negocios contenciosos de unos Estados con otros particulares contra un Estado o viceversa. Dirimir las competencias de los tribunales de un Estado con los de otro. Juzgar a los secretarios del despacho. Conocer en las causas de separación, suspensión y responsabilidad de los funcionarios generales. Juzgar todo delito contra la Federación y contra la seguridad nacional.

24. Aprobar que sea la Constitución por el Congreso General, se discutirá por éste si conviene reservar la revisión y la sanción al Congreso General siguiente, o a las legislaturas particulares de los estados.

Bases para las constituciones particulares de los Estados

1. Cada Estado es soberano e independiente en todo lo respectivo a su gobierno interior.

2. Será diócesis de un obispado y de se dividirá en más a proporción que se vaya aumentando su población; pero mientras esto no pueda ser por falta de relaciones con Roma, habrá en los estados que no tengan obispo un vicario general con facultades amplias para proporcionara comodidad a los diocesanos.

3. Todo Estado se dividirá en partidos proporcionales según su extensión y población cada partido en municipalidades que no podrán dejar de ser todos los pueblos que con su comarca lleguen a mil almas. Cada municipalidad será una parroquia, excepto las capitales y pueblos numerosos que se dividirán en más según sea su población.

4. El gobierno de cada Estado se dividirá en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que se establecerán en la capital de cada uno, y a la asamblea particular le toca designar cual ha de ser ésta.

Poder Legislativo

5. Éste residirá en una asamblea compuesta de un número suficiente de individuos que determinará su particular Constitución, electos popularmente y amovibles en el modo y periodo que ella misma disponga.

6. El objeto de legislación particular será: Primero: La seguridad interna del Estado, proporcionando a los individuos por leyes justas la garantía de sus derechos sociales, exigiéndoles sus deberes con igualdad y declarando el modo de adquirir la ciudadanía, perderla, suspenderla y reasumirla. Segundo: La protección y fomento de la población, comercio, agricultura y toda clase de industria, dictando cuantas leyes y providencias sean necesarias para hacerlas progresar. Tercero: La beneficencia pública, proporcionando toda clase de establecimientos para comodidad, provecho y consuelo de la humanidad. Cuarto: La economía del Estado, imponiendo contribuciones directas o indirectas para formar la hacienda pública y decretando su inversión para cubrir sus gastos particulares y el cupo que se le asignase para los generales de la Nación.

7. Tocaré también las legislaturas particulares: resolver terminantemente las dudas y competencias que ocurran en el gobierno de las municipalidades. Proveer por sí todos los empleos en cualquier ramo del Estado, previo informe del Gobernador. Representar al Congreso General sobre el cupo de gastos comunes que se le haya asignado si lo juzgaré excesivo y por circunstancias particulares no pueda llenarlo. Fijará anualmente los gastos de su gobierno. Examinar y aprobar las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos. Proteger la libertad de la imprenta. Suspender al gobernador en caso necesario, previa declaración de haber lugar a la formación de causa. Disponer

que se haga efectiva la responsabilidad de todo funcionario público que falte al cumplimiento de su deber. Presentar para los beneficios eclesiásticos. Ratificar la Constitución General y todo punto relativo a ella si se acordare así por el Congreso.

Gobernadores

8. Habrá uno en cada Estado, que será el Jefe del Poder Ejecutivo, electo popularmente según disponga la Constitución; será amovible dentro del periodo que ésta señale y podrá ser reelegido después de un intervalo, si el Estado lo tiene a bien.

9. Sus atribuciones serán; recibir las leyes y decretos que emanen del Congreso general y de la Legislatura del Estado, pudiendo representar en contra de las últimas los inconvenientes que juzgue para su observancia en la práctica, dentro del término que señale la Constitución del Estado. Formar reglamento de policía y buen gobierno, presentándolos a la asamblea para su aprobación. Cuidar de que se administre justicia prontamente, excitando a los tribunales al efecto y dando cuenta a la asamblea con las morosidades que note. Suspender al funcionario que falte al cumplimiento de su deber, mandándole formar la competente sumaria y dando cuenta con ella a la asamblea. Anunciar al público la vacante de todo empleo en cualquier ramo, para que el se considere con derecho reúna y le presente sus documentos, para que agregando su informe los presente a la asamblea. Será el Jefe Superior de la Milicia Nacional, pudiendo disponer de su fuerza como mejor convenga a la seguridad del Estado.

Tribunales de Justicia

10. Todo negocio sea de la naturaleza o cuantía que fuere, se terminará dentro del Estado y al efecto, se establecerán en él tribunales inferiores y superiores para la primera y segunda instancias.

11. En cada partido habrá un tribunal superior de tres individuos letrados y un fiscal, para conocer en todas las apelaciones que se haga a la primera instancia.

12. En las capitales habrá un tribunal superior de tres individuos letrados y un fiscal, para conocer en todas las apelaciones que se hagan en la primera instancia. En los recursos de nulidad que se interpongan de los juzgados inferiores. Para los de fuerza que se hagan contra los tribunales eclesiásticos y para dirimir las competencias de los jueces inferiores entre sí.

13. Las terceras instancias y las nulidades interpuestas de los tribunales superiores se juzgarán por un magistrado nombrado con anterioridad por la asamblea, acompañado de dos colegas que él mismo nombre de un número duplo que le presentarán las partes.

14. Las causas mandadas formar por la asamblea a los funcionarios públicos por faltas en sus obligaciones, tendrá principios en el Tribunal Superior de segunda instancia y en sus aplicaciones conocerá un tribunal momentáneo que nombrará la asamblea para cada caso, en los términos que la Constitución disponga.

México, 28 de julio de 1823. Prisciliano Sánchez.

2.5. DECRETO DE GOBIERNO: MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA. 23 DE DICIEMBRE DE 1824

El soberano congreso general constituyente de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido a bien decretar:

1. Estando en las facultades del gobierno expeler del territorio de la República a todo extranjero cuando lo juzgue oportuno, cuidará dar el correspondiente pasaporte a los que en las actuales circunstancias le parezca conveniente.
2. Se autoriza al gobierno para remover de uno a otro punto, cuando le parezca conveniente a la seguridad de la República, a los empleados de la federación y habitantes de los territorios y del Distrito Federal.
3. También podrá remover en el mismo caso a particulares de los estados por medio de sus respectivos gobernadores.
4. Si las autoridades supremas de los estados conspirasen contra la independencia o sistema adoptado de federación, el supremo gobierno general de la República la sujetará con la fuerza armada, conforme a la facultad del artículo 110 de la Constitución.

2.6. LEY DE EXPULSIÓN DE ESPAÑOLES. 20 DE DICIEMBRE DE 1827

Art. 1. Los españoles capitulados y los demás de que habla el artículo 16 de los tratados de Córdoba, saldrán del territorio de la República en el término que les señale el gobierno, no pudiendo pasar éste de seis meses.

Art. 2. El gobierno podrá exceptuar de la disposición anterior: primero a los casados con mexicana que tengan vida marital; segundo, a los que tengan hijos que no sean españoles; tercero, a los que estén impedidos físicamente con impedimento perpetuo.

Art. 3. Los españoles que se hayan introducido en el territorio de la República después del año de 1821, con pasaporte o sin él, saldrán igualmente en el término prescrito por el gobierno, no pasando tampoco de seis meses.

Art. 4. Las excepciones que contiene el artículo 2º, tendrán lugar para los que hayan entrado legítimamente después del año 21.

Art. 5. Los españoles del clero regular, saldrán también de la república, pudiendo exceptuar el gobierno a los que estén comprendidos en la tercera y cuarta parte del artículo 2º.

Art. 6. Los solteros que no tiene hogar conocido, por lo menos de dos años a esta parte, los mismo que fueren calificados de vagos conforme a las leyes de la parte del territorio de la República donde residan, quedan sujetos a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º y 5º.

Art. 7. El gobierno podrá exceptuar de las clases de españoles que conforme a esta ley deban salir del territorio de la República, a los que hayan prestado servicios distinguidos a la independencia y hayan acreditado su afección a nuestras instituciones, y a los hijos de éstos que no hayan desmentido la conducta patriótica de sus padres, y residan en el territorio de la República, y a los profesores de alguna ciencia, arte o industria útil en ella, que no sean sospechosos al mismo gobierno.

Art. 8. El presidente, en consejo de ministros y previo informe del gobernador del Estado respectivo, hará la exención del artículo anterior.

La presente ley fue modificada por la del 20 de marzo de 1829. Ambas, lo mismo que la de 10 de Mayo del mismo año, y todas las relativas a españoles, publicadas en la época referida, fueron obra de aquellas circunstancias. Una vez reconocida la independencia de la nación por España; los españoles, lo mismo que los demás extranjeros, han tenido abiertas las puertas de la República, en la que encuentran una hospitalidad franca y la oportunidad de labrarse una fortuna al abrigo y bajo amplia protección de nuestras leyes.

Art. 9. En la misma forma calificará el peligro que pueda importar la permanencia en el país de los demás españoles que no están comprendidos en los artículos anteriores, y dispondrá la salida de aquellos que tenga por inconvenientes.

Art. 10. Las atribuciones que se conceden al gobierno en los artículos 7º y 9º, cesaran dentro de seis meses contados desde el día de la publicación de la presente ley.

Art. 11. El gobierno dará cada mes parte al congreso sobre el cumplimiento de esta ley, y éste en su vista podrá estrechar el término que señala el artículo anterior.

Art. 12. Los españoles empleados cuyo sueldo no llegue a mil quinientos pesos, y a los que á juicio del gobierno no puedan costear su viaje y transporte, se les costeará por cuenta de la Hacienda Pública de la Federación, hasta el primer puerto de la nación española o la de Estados-Unidos del Norte, según elijan los interesados, procediendo el gobierno con la más estrecha economía, según la clase y rango de todo individuo.

Art. 13. En los mismos términos se costeará por la hacienda pública el viaje y transporte de los religiosos a quienes no pueda costeárselos, por falta de fondos, la provincia o el convento a que pertenezcan.

Art. 14. Los empleados que salgan en virtud de esta ley y que elijan para su residencia un país que no sea enemigo, disfrutarán de su sueldo, pagadero en el punto de la República que señale el gobierno.

Art. 15. La separación de los españoles del territorio de la República, solo durará mientras España no reconozca nuestra independencia.

Art. 16. Los españoles que, conforme a esta ley, pudieren permanecer en el territorio de la República, prestarán juramento con las solemnidades que el gobierno estimare convenientes, de sostener la independencia de la nación mexicana, su forma de gobierno popular representativa federal, la Constitución y leyes del Estado, distrito y territorios en que residan.

Art. 17. Los españoles que rehusaren prestar el juramento prevenido en el artículo anterior, saldrán del territorio de la República.

Art. 18. Se derogan los artículos 2º y 3º de la ley de 25 de Abril de 1826, quedando en todo su vigor el 1º, en que se prohíbe la introducción por los puertos de la república de los nacidos en España o súbditos de su gobierno.

Art. 19. Los españoles que hayan de permanecer en la República, no podrán fijar en los sucesivos su residencia en las costas, y a los que actualmente residan en ellas,

podrá el gobierno obligarlos a que se internen en caso de que el tema una invasión próxima de tropas enemigas.

Art. 20. Se concede amnistía a los que hayan tomado parte en los movimientos sobre expulsión de españoles, por lo que respecta al conocimiento de los tribunales de la federación, dejando a salvo el derecho de los Estados.

Art. 21. La amnistía concedida a los individuos que han tomado parte en los movimientos sobre expulsión de españoles, no comprende a los que también hayan procurado un cambio en la forma de gobierno representativa popular federal que adoptó la Nación Mexicana.

José María Irigoyen, Presidente de la Cámara de Diputados- *Pedro Paredes*, presidente del senado- *Feliz María Aburto*, diputado secretario- *Antonio Fernández Monjardin*, senador secretario. México 20 de Diciembre de 1827.

D. Juan José Espinosa de los Monteros.

2.7. LEY SOBRE EXPULSIÓN DE ESPAÑOLES. MARZO 20 DE 1829

Art. 1. Saldrán de la República todos los españoles que residen en los Estados o Territorios internos de Oriente y Occidente, Territorios de la Alta y Baja California y Nuevo México, dentro de un mes después de publicada la ley, del Estado o Territorio de su residencia, y dentro de los tres meses de la República.

Los residentes en los estados y territorios intermedios y Distrito Federal; dentro de un mes del Estado, Territorio y Distrito de su residencia, y de dos de la República, y los habitantes en los Estados litorales al mar Norte, saldrán de la República dentro de un mes contado desde la publicación de esta ley.

Art. 2. Se entienden por españoles los nacidos en los puntos dominados actualmente por el Rey de España y los hijos de españoles nacidos en alta mar.

Se exceptúan solamente los nacidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Art. 3. Se exceptúan de lo prevenido en el artículo 1º: primero, los impedidos físicamente mientras dure el impedimento; segundo, los hijos de americanos.

Art. 4. Dentro de un mes, contado desde la publicación de esta ley; los comprendidos en el artículo anterior presentaran por sí o remitirán al gobierno por conducto inmediato de la Secretaría de Relaciones, los documentos que acrediten su excepción.

Art. 5. Los españoles, si no salieren dentro del término prefijado en el artículo 1º, serán castigados seis meses en una fortaleza y después embarcados; lo mismo que los que vuelvan al Territorio de la República mientras dure la guerra con España.

Art. 6. El gobierno dará cada mes parte al congreso sobre el cumplimiento de esta ley.

Art. 7. Los que a juicio del gobierno no puedan costear su viaje y transporte, se les costeará por cuenta de la Hacienda Pública de la Federación, hasta el primer puerto de los Estados-Unidos del Norte, procediendo el gobernado con la más economía.

Art. 8. En los mismos términos se costeará por parte de la Hacienda Pública, el viaje y transporte de los religiosos, a quienes no puedan costeárselo por falta de fondos la provincia o convento a que pertenezcan.

Art. 9. El gobierno expedirá el correspondiente documento en que conste la excepción a los españoles que hayan permanecido en la República, quienes no podrán en los sucesivos avencindarse en las costas, pudiendo el gobierno obligar a lo que actualmente residan en ellas, a que se internen en el caso de que tema una invasión próxima de tropas enemigas.

Art. 10. Los españoles que obtengan pensión, sueldos de la federación o beneficio eclesiástico, disfrutaran la parte que les corresponda según derecho, si se establecen en alguna de las repúblicas o naciones amigas, con noticia de su existencia o residencia por los cónsules de ésta, y lo perderán si pasan a los puntos dominados por el Rey de España.

Art. 11. Se deroga la ley de 20 de diciembre de 1827, a excepción del artículo 18, que prohíbe la introducción en la república de los españoles y súbditos de su gobierno.

2.8. REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EXPULSIÓN DE ESPAÑOLES DEL 20 DE MARZO DE 1829

Art. 1. Los gobiernos de los Estados cuidarán de que, conforme al artículo 1º del anterior decreto, salgan respectivamente de ellos todos los españoles que no fueren exceptuados, con arreglo a las disposiciones de los artículos 3º, 4º y 9º de dicho decreto.

Art. 2. Los mismos gobiernos señalarán a los individuos que, conforme al artículo antecedente, deben salir de su propio Estado, el derrotero por donde han de conducirse, dando el correspondiente aviso a los gobiernos del tránsito y del puerto en que hayan de embarcarse, para que estén a la mira de la efectiva salida

Art. 3. Iguales avisos darán al supremo gobierno, publicándolos por la imprenta; y sin perjuicio de ellos, a la conclusión del término señalado en el artículo 1º del citado decreto, le pasarán una nota circunstanciada de todos los individuos que hayan salido de su territorio, y de sus clases, con expresión de quedar en él entera y exactamente cumplidas las disposiciones del mismo decreto.

Art. 4. Los gobernadores del tránsito del puerto por donde se verifique la salida, darán los avisos oportunos al gobierno del estado de donde hayan salido los individuos que deben caminar a embarcarse, y los comunicarán asimismo al supremo gobierno general.

Art. 5. En todos los correos darán puntual y exacta noticia de cuanto se haya practicado y quede por practicar en ejecución del anterior decreto, para que el supremo gobierno pueda cumplir con lo que se previene en el artículo 6º de él.

Art. 6. Para cumplir con el artículo 7º los gobiernos de los Estados, de acuerdo con los comisarios generales o sub-comisarios, harán la calificación correspondiente de la imposibilidad que tengan algunos individuos seculares de los que deban salir del territorio de cada Estado para costear su viaje y transporte.

Art. 7. Del mismo modo calificarán la cantidad que con la más estrecha economía deba ministrarles la Hacienda Pública de la Federación para hacer su viaje hasta el

puerto, según las distancia y la clase y rango de cada individuo, disponiendo que con efecto se les ministre, no excediendo la asignación que hicieren desde dos reales por legua hasta un peso.

Art. 8. Entre estos dos extremos harán del mismo modo la asignación correspondiente a los empleados cuyo sueldo no llegue a mil quinientos pesos anuales.

Art. 9. De las calificaciones que hagan los gobiernos de cada Estado en la forma explicada sobre la imposibilidad de algunos individuos, para costear su viaje y transporte, darán aviso a los gobiernos de los Estados a que correspondan los puertos por donde deben embarcarse, y a este supremo gobierno.

Art. 10. Los gobiernos a que correspondan los puertos, de acuerdo con los comisarios generales o sub-comisarios, dispondrán que se costee el transporte, de cada individuo de los que se ha hablado, bajo las consideraciones y con la más estrecha economía que previene el referido artículo 7°.

Art. 11. Precediendo constancia formal que la provincia o convento a que pertenezcan los religiosos de que habla el artículo 8° del mismo decreto, no tiene fondos para costearles el viaje y transporte, dispondrán los gobiernos de los Estados, de acuerdo con los comisarios, que se les costee de cuanta de la Hacienda Pública de la Federación, abonándoles lo que corresponda a razón de veinte reales por jornada de diez leguas, según las distancias, hasta el puerto en que deban embarcarse; y para su transporte por mar se observará lo proveniente en la prevención anterior.

Art. 12. Los españoles de que habla el artículo 10° del mencionado decreto, percibirán la parte que les corresponda según derecho, en los lugares en que actualmente la cobran, siempre que acrediten con la noticia que el mismo artículo previene, su existencia o residencia en alguna de las repúblicas o naciones amigas.

Art. 13. Por lo que toca al Distrito Federal y Territorios, procederán respectivamente el gobernador y jefes políticos con total sujeción a lo que queda prevenido.

2.9. FACULTADES DEL GOBIERNO POR LO RELATIVO A EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS NO NATURALIZADOS. 22 DE FEBRERO DE 1832

Esta en las facultades del supremo gobierno expedir pasaporte y hacer salir del territorio de la república á cualquier extranjero no naturalizado, cuya permanencia califique de perjudicial al orden público, aun cuando aquel se haya introducido y establecido con las reglas prescritas en las leyes.

(Se circuló por la Secretaría de Relaciones en éste día, y se publicó en bando del 27).

2.10. DECRETO DEL GOBIERNO. SE DEJA EN LIBERTAD A LOS ESPAÑOLES QUE POR LOS TRATADOS DE CÓRDOBA Y PLAN DE IGUALA, SE CONSIDERARON COMO MEXICANOS, PARA QUE PUEDAN QUEDAR COMO TALES O COMO ESPAÑOLES DE 1842

Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que usando de las facultades que me concede la sétima de las bases acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los Departamentos, he tenido á bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Los españoles que residan en la República al declararse la independencia nacional el año de 1821, que hayan inscrito sus nombres en los registros que se mandaron abrir en los departamentos, por circular de 25 de Octubre último, expedida por el Ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación, quedan en libertad de renunciar a la calidad de ciudadanos mexicanos que les fue concedida por el plan de Iguala y los tratados de Córdoba.

Art. 2. Los españoles que renunciaren esa prerrogativa, usando de la libertad que les concede el artículo anterior, quedan desde ese acto sujetos en todo a las leyes vigentes de extranjería.

Art. 3. Los españoles por nacimiento que hubiesen disfrutado de la cualidad de ciudadanos de México desde el año de 1821 hasta ahora, continuarán considerados como corresponde a los que la gozan, si no la hubieren renunciado a los seis meses de expedido el presente decreto.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

2.11. DECRETO DEL GOBIERNO.
PARA QUE CONCEDAN DERECHOS
Y OBLIGACIONES DE MEXICANOS A
LOS EXTRANJEROS EMPLEADOS EN EL
SERVICIO DE LA NACIÓN. 12 DE AGOSTO
DE 1842

Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que deseando alejar cualquiera duda sobre el goce y uso de derechos adquiridos por los extranjeros, que entren al servicio de la República en la marina de Guerra, o en la fuerza terrestre; en uso de la séptima de las bases adoptadas en Tacubaya y juradas por los representantes de los Departamentos, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Los individuos de otras nacionalidades que fueren admitidos por el gobierno al servicio militar, sea en el ejercicio o en la marina de guerra de la República, serán considerados como mexicanos, y en consecuencia, tendrán los derechos y obligaciones de éstos.

Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento.

2.12. DECRETO DEL GOBIERNO. SOBRE NATURALIZACIÓN DE EXTRANJEROS. SEPTIEMBRE 10 DE 1846

En Excmo. Sr. general en jefe, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

José Mariano Salas, general de brigada y jefe del ejército libertador republicano, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, a los habitantes de la República, sabed: que teniendo en consideración que uno de los medios más eficaces para procurar la felicidad de la República, es el de promover el aumento de la población, y facilitar la naturalización en ella, de hombres industriosos, removiendo las trabas que han opuesto las leyes dictadas bajo principios menos francos y liberales de los que hoy profesa la administración, he tenido a bien resolver, que entretanto el congreso nacional se ocupa de la forma que ellas se exigen, se observen los artículos siguientes:

Art. 1. Todo extranjero que manifieste su deseo de naturalizarse en la República, y que acredite tener alguna profesión o industria útil, que le proporcionen los medios honestos de adquirir su subsistencia, obtendrá la carta de naturaleza.

Art. 2. Del mismo modo la obtendrá cualquier extranjero que entre al servicio de la nación, en el ejército o armada.

Art. 3. Las cartas de naturaleza se expedirán por el presidente de la República, en papel de sello primero de despachos, y sin exigir otros derechos, que el del papel, a los individuos de que habla el artículo 1º, y en papel común, a los comprendidos en el 2º.

Art. 4. En el Ministerio de Relaciones Interiores se llevara un registro en el que se asiente el nombre, patria y profesión de los extranjeros que se naturalicen.

Art. 5. Los extranjeros naturalizados por virtud de las disposiciones contenidas en este decreto, serán considerados como mexicanos, y en consecuencia, tendrán los derechos y obligaciones de éstos.

Art. 6. No se concederán carta de naturaleza, a los súbditos o ciudadanos de cualquiera nación que se halle en guerra con la República.

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno nacional en México, á 10 de septiembre de 1846.- José Mariano Salas.- A D. Manuel Crecencio Rejón.

Y lo comunicó a vd. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios y Libertad, México, Septiembre 10 de 1846- Rejón.

2.13. DECRETO DEL GOBIERNO: EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD. 30 DE ENERO DE 1854

Ministerio de Relaciones Exteriores. S.A.S. el general presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que en uso de las facultades que la nación se ha servido conferirme, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Sobre Extranjería y Nacionalidad de los Habitantes de la República

Capítulo primero.

De los extranjeros y sus clases.

Art. 1. Son extranjeros para efectos de las leyes:

- I. Los que, nacidos fuera del territorio, sean súbditos de otro gobierno y no estén naturalizados por carta especial firmada por el presidente de la República.
- II. Los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional hasta la edad de veinticinco años, si se mantuvieron bajo la patria potestad.
- III. Los mismos hijos de que se trata el párrafo anterior, cuando emancipados declarasen ante la autoridad política del lugar de su residencia y dentro del año siguiente de su emancipación, que no quieren naturalizarse.
- IV. Los hijos de mexicanos que residiendo con sus padres fuera de la República dejasen pasar un año después de la mayor edad de veinticinco años sin reclamar la calidad de mexicanos. Se exceptúa el caso de que la residencia fuera de la República sea por causa del servicio público.
- V. Los ausentes de la República sin licencia ni comisión del gobierno, ni por causa de estudios o de interés público, que dejaren pasar diez años sin pedir permiso para prorrogar su ausencia. Este permiso no excederá de cin-

co años en cada vez que se solicite, necesitándose después de concedido el primero, exponer justas y calificadas causas para obtener cualquier otro.

- VI. Los hijos de mexicano mayores de edad y residentes fuera de la República, que habiendo perdido su padre la calidad de mexicano, no reclamaren para sí esta misma calidad; pasados cinco años desde la privación de los derechos de su expresado padre. En caso de esa reclamación, se obligará a establecer su domicilio en la República dentro de un año de verificar aquella.
- VII. La mexicana que contrajere matrimonio con extranjero, por deber seguir la condición de su marido.
- VIII. Los mexicanos que sin licencia del gobierno aceptaren honores o cargos públicos de soberanos u otros gobiernos extraños.
- IX. Los que se naturalicen en otros países.
- X. Los que se establecieren fuera de la República con ánimo manifiesto y declarado de no pertenecer más como súbditos de ella.
- XI. Los que en la ocupación de algunas ciudades o poblaciones de la República por el enemigo extranjero, en caso de guerra con alguna potencia, enarbolaren en sus casas para resguardo el pabellón de cualquiera nación extraña, debiendo ser por este acto juzgados, y en caso de probada esta falta, expulsados del territorio nacional como extranjeros sospechosos contra la nacionalidad del país. Se consideran como parte del territorio de la república los buques nacionales sin ninguna distinción.

Art. 2. Los extranjeros tendrán obligación de pedir carta de seguridad, que será renovada en el mes de Enero de cada año, para poder gozar de los derechos civiles de la República. En caso de contravención sufrirán por primera vez multa conforme a las leyes vigentes o que se dieren en los sucesivo, doble en caso de reincidencia, y por otra mayor serán expulsados del territorio nacional.

Art. 3. Los extranjeros que se introdujeran al territorio nacional sin el correspondiente pasaporte y sin los requisitos de la ley, serán detenidos en el puerto o primer lugar de su arribo, hasta que dada cuenta al gobierno por el Ministerio de Relaciones e impuesto de las calidades del extranjero, disponga lo conveniente sobre su expulsión o libre entrada.

Art. 4. No se permite la entrada al territorio nacional de grupos de gente armada; las armas serán entregadas y depositadas hasta que el gobierno resuelva su devolución según juzgue conveniente.

Art. 5. Se declara vigente en todas sus partes el decreto del 14 de marzo de 1842, sobre adquisiciones de bienes raíces por extranjeros, excepto en los casos en que por tratados se modificare cualquiera de sus disposiciones.

Art. 6. El extranjero que quiera naturalizarse, deberá acreditar previamente en forma legal que ejerce alguna profesión o industria útil para vivir honradamente.

Art. 7. El extranjero se tendrá por naturalizado:

- I. Si aceptare algún cargo público de la nación o perteneciere al ejército o armada.
- II. Si casare con mexicana y manifestare querer residir en el país gozando de la calidad de mexicano. Esta declaración la verificará dentro de un mes de celebrado el matrimonio, cuando éste se haga en el territorio de la República, y dentro de un año si se hubiere contraído fuera.

Art. 8. No se concederán cartas de naturaleza a los súbditos de otra nación que se halle en guerra con la república.

Art. 9. Tampoco se concederán a los habitantes, reputados y declarados judicialmente en otros países por piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, monederos falsos ó falsificadores de billetes de banco u otros papales que hagan veces de moneda, así como a los parricidas y envenenadores.

Art. 10. Los extranjeros que residan en el territorio mexicano, siempre que su permanencia sea para largo tiempo por establecer casa abierta o poblada, o por adquirir bienes raíces, o fundar alguna industria que suponga una residencia siquiera de tres años, se tendrán como domiciliados para los efectos de las leyes; mas si no tuvieren residencia fija ni hicieren una mansión larga en el país, se considerarán como transeúntes.

Art. 11. Así los domiciliados como transeúntes, están obligados al pago de impuestos y contribuciones de todas clases sobre bienes raíces de su propiedad y sobre las establecidas al comercio o industria que ejercieren, con arreglo a las disposiciones y leyes generales de la República.

Art. 12. Los domiciliados estarán sujetos además al servicio militar en caso de guerra exterior que no fuere con sus respectivos gobiernos, y al pago de toda clase de contribución extraordinaria o personal, de que estarán exceptuados los transeúntes. Se exceptúan de esta disposición los que por tratados con sus respectivos gobiernos no deban sujetarse a alguna de estas obligaciones.

Art. 13. En los abintestados de los extranjeros domiciliados y transeúntes, el juez del lugar correspondiente, de acuerdo con el cónsul de la nación del finado, formará el inventario de bienes y efectos, adoptará las disposiciones convenientes para que estén en segura custodia hasta que se presente el heredero legítimo o la persona que legalmente le represente. Así en este caso como en los de las sucesiones testamentarias, solo conocerán los tribunales de las reclamaciones que ocurran sobre embargo de bienes de acreedores, y cualquiera otra que tenga por objeto el cumplimiento de obligaciones o responsabilidades contraídas en la República o a favor de súbditos mexicanos.

Capítulo II

De los nacionales o mexicanos.

Art. 14. Son mexicanos para el goce de los mismos derechos civiles:

- I. Los nacidos en el mismo territorio de la República, de padre mexicano por nacimiento o naturalización.

- II. Los nacidos en el mismo territorio nacional, de madre mexicana y cuyo padre no sea legalmente conocido según las leyes.
- III. Los nacidos fuera de la República de padre mexicano que estuviere al servicio de ella, o por causa de estudios, o de transeúnte, pero sin perder la calidad de mexicano, según los artículos correspondientes de esta ley.
- IV. Los nacidos fuera de la República de madre mexicana, sea soltera o viuda, que no habiendo cumplido los veinticinco años de su edad, avise la madre querer gozar de la calidad de mexicana.
- V. Los mismo hijos de madre mexicana soltera o viuda, que llegados a la mayor edad, reclamen dentro de un año la calidad de mexicanos.
- VI. Los mexicanos que habiendo perdido esta calidad según las prevenciones de esta ley, la recobren por los mismos medios y con las formalidades establecidas respecto de los demás extranjeros.
- VII. Los mexicanos que habiéndoseles juzgado por falta del párrafo XI del artículo 3º o de haber tomado parte contra la nación con el enemigo extranjero, fueren absueltos por los tribunales de la República.
- VIII. Los nacidos fuera de la República, pero que establecidos en ella en 1821, juraron la acta de independencia, han continuado su residencia en el territorio de la nación y no han cambiado su nacionalidad.
- IX. Los extranjeros naturalizados.

Capítulo III

Prevenciones generales.

Art. 15. El mexicano podrá ser citado ante los tribunales de la República para responder en juicio sobre obligaciones contraídas en país extranjero, ya proceda la demanda de otro mexicano o de un extranjero.

Art. 16. El extranjero, demandante, fuera de los casos por negocios mercantiles, dará fianza para el pago, en caso necesario, de las costas, intereses, daños y perjuicios con ocasión del litigio que entablare, a menos que tengan bienes raíces en la república suficientes a cubrir dicho pago.

Art. 17. Los extranjeros, en contratos de *seguridad comercial* con los mexicanos, seguirán la condición de éstos para el efecto de reputar la sociedad como mexicana: esto tendrá lugar en caso de que las tres partes de personas en dichas sociedades, sean de extranjeros sujetos a un mismo gobierno, que entonces tendrán el carácter de extranjeras.

Art. 18. La calidad de nacional y extranjero no es transmisible a tercera persona: en consecuencia, ni el nacional puede gozar de los derechos de extranjero, ni el extranjero los de nacional por razón de una y otra calidad.

Art. 19. Los extranjeros no gozan de los derechos políticos propios de los nacionales, ni pueden obtener beneficios eclesiásticos, ni ejercer la pesca en las costas de la República, ni con sus buques hacer el comercio de cabotaje, ni tampoco el de altura para conducir efectos que no sean frutos o artefactos de su respectiva nación, cuando

esto se reserve por las leyes a los mexicanos, conforme a los tratados vigentes. Asimismo, no pueden obtener empleos o cargos municipales, ni cualesquiera otros propios de las carreras del Estado.

Art. 20. En negocios entre extranjeros o contra ellos, por obligaciones contraídas en la República, aunque no sean por acción real o personal, serán competentes los tribunales para los efectos de evitar un fraude o dictar mediadas urgentes provisionales y precautorias contra un deudor que intente ausentarse con el fin de eludir el pago, o causar cualquiera otro perjuicio semejante a sus acreedores o huérfanos bajo su cuidado, y otros casos análogos.

Art. 21. Los contratos y demás actos públicos notariados en país extranjero, surtirán sus efectos ante los tribunales de la República, siempre que a mas de lo lícito de la materia de ellos, y de la aptitud y capacidad de los contrayentes para obligarse, según las leyes del país en que aquellos se celebren tenga además los siguientes requisitos: 1° que el contrato no esté prohibido ni aun en cuanto a sus formas adicionales por las leyes de la República, 2° que el otorgamiento se haya observado también las fórmulas del país en que hubieren pasado, 3° que cuando sobre ellos haya constituida hipoteca de bienes estables en la República, el registro de ley, propio del lugar donde se hallen las fincas, se haya hecho dentro de cuatro meses, respecto de contratos celebrados en los Estados de Europa, de seis en los de Asia, y para otros seis, excepto en los Estados-Unidos y los de América Central, que será el de tres meses; y 4° que en el país del otorgamiento se preste igual fuerza y eficacia a los actos y contratos celebrados en el territorio de la República.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en Palacio nacional de México, a 30 de enero de 1854. Antonio López de Santa Anna. Al ministro de Relaciones Exteriores.

2.14. DECRETO DEL GOBIERNO. SOBRE PASAPORTES. MARZO 15 DE 1854

Ministerio de Gobernación. S.A.S. el general presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: que en uso de las facultades con que me hallo investido por la nación, he tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1. Los pasaportes de que habla la ley de 24 de Septiembre del año próximo pasado, se expedirán por las respectivas autoridades, sin exigir por ellos derecho alguno.

Art. 2. Estarán únicamente obligados a llevar pasaporte: Primero, los militares (a quienes se expedirá por los comandantes generales o particulares).

Segundo, los empleados del gobierno, de cualquiera clase que sean, cuando tengan que transitar de un punto a otro de la República. Tercero, los extranjeros al internarse del puerto donde lleguen, a quienes se recogerá el pasaporte visado por el cónsul, que deben presentar cuando desembarque. Cuarto, los que para viajar recaben de la autoridad licencia para portar armas, Quinta, los conductores de ganados, de cualquiera especie que sean.

Art. 3. Los pasaportes que se den a éstos últimos, expresarán precisamente el número de cabezas que llevan, el lugar de su procedencia y el del final destino. Si se omitiere alguno de estos requisitos o resultare exceso en el número de animales, los sobrantes o que no se expresen en el pasaporte, serán embarcados a costa del omiso, hasta que justifique su propiedad o el título legítimo porque los lleva. Si así no lo hiciere dentro de un término prudente según las circunstancias, se tendrá como sospechoso de abigeato, y se pondrá a disposición del juez competente, para que proceda a lo que haya lugar.

Art. 4. Lo prevenido en la parte tercera del artículo 2º respecto de los extranjeros, se entenderá solo en el caso de que antes de internarse no hayan obtenido su correspondiente carta de seguridad.

Art. 5. Los individuos de que habla el mismo artículo 2º que caminen sin el pasaporte correspondiente expedido por la autoridad, y en la forma que designa la ley de

24 de septiembre, podrán ser arrestados por las autoridades y agentes de la administración, de que habla el artículo 12 de dicho decreto, y detenidos hasta que justifiquen la inculpabilidad de su omisión: si no lo hicieren dentro del término prudente que se les designe, probando cuál es su residencia fija y ocupación habitual, serán reputados por vagos y juzgados como tales.

Los militares y empleados se podrán a disposición de sus jefes o superiores respectivos.

Art. 6. Queda sin efecto la repetida ley de 24 septiembre de 1853, y su reglamento de 29 del mismo, en la parte que pugne con lo dispuesto en la presente.

Por lo tanto mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dios y libertad. México, Marzo, 15 de 1854. El ministro de Gobernación, Ignacio Aguilar.

2.15. LEY DE MATRICULACIÓN DE EXTRANJEROS. MARZO 16 DE 1861

Que los extranjeros que quieran conservar los derechos de tales, se inscriban en el registro que se abrirá en la Secretaría de Relaciones.

El Excmo. Sr. Presidente interino constitucional de la República mexicana, a los que el presente vieren, sabed:

Que usando las facultades con que me hallo investido he tenido a bien decretar lo que sigue:

Art. 1. Con el fin de que todos los extranjeros residentes en la República puedan hacer constar su nacionalidad y gozar de los derechos de extranjería que les conceden las leyes y los tratados con las respectivas naciones, se abrirá en la secretaría de Estado y el despacho de relaciones Exteriores un registro a fin de que en él se matriculen.

Art. 2. Se concede el plazo de tres meses improrrogables, contados desde la publicación de este decreto, en cada lugar, para que se presenten a inscribirse los extranjeros que deseen gozar de los derechos de tales.

Art. 3. Al efecto, lo que se encontraren fuera de esta capital, se dirigirán, con sus respectivos comprobantes, a los señores gobernadores de los Estados y Territorios, quienes se entenderán directamente con el Ministerio de Relaciones para los efectos de este decreto, y al cual remitirán las listas y filiaciones de los individuos que se les presentaren como queda dicho.

Art. 4. Los extranjeros que de nuevo ingresaren a la República están en la obligación de presentarse a la primera autoridad política del puerto de su destino, y de recabar de ella el certificado del que se hablará después.

Art. 5. Los capitanes de los puertos están en la obligación de remitir al Ministerio de Relaciones con toda oportunidad, una noticia de los pasajeros que llegaren a ellos, y de su nacionalidad.

Art. 6. A los extranjeros que no matriculen, dentro del plazo referido, se les impondrá una multa de diez pesos, y uno más por cada mes desde el que debieron inscribirse en el registro hasta el en que lo efectúen.

Art. 7. Ninguna autoridad, oficina, o funcionario reconocerá como extranjero al que no presentare certificado de matrícula, expedido por el Ministerio de Relaciones.

Art. 8. Los tribunales y jueces el entablar ante ellos cualquiera demanda a algún extranjero, le exigirán la presentación previa del certificado referido, haciendo constar su fecha y número, y no serán oídos en juicio o fuera de él, si no lo presentaren.

Art. 9. Ningún escribano autorizará documento alguno de alguno, sin que proceda la presentación de dicho certificado, del que también harán especial mención en el instrumento público que autorizaren.

Art. 10. Tampoco se admitirá en las oficinas de la República reclamación ni gestión alguna de extranjeros, si al hacerla no presentaren el certificado de matrícula, del que se tomará razón en el negocio que promuevan.

Art. 11. Los extranjeros para obtener aquel documento, comprobarán su nacionalidad con el pasaporte con que ingresaron a la República, o con el certificado del agente diplomático o consular de la nación, sin que para obtener el referido certificado de matrícula, tengan que hacer solicitud alguna por escrito al Ministerio de Relaciones.

Art. 12. El funcionario o autoridad que faltare a lo dispuesto en este decreto, será suspendido un mes de su empleo; y si fuere escribano pagará una multa de cincuenta pesos.

Art. 13. A los matriculados se les expedirá un certificado del Ministerio de Relaciones, a quien únicamente corresponde la facultad de expedirlos.

Art. 14. Por todo gasto en la expedición de dichos certificados, se cobrará un peso por cada uno, que se pagará en el acto de asentarse en el registro.

Art. 15. Los jueces del registro civil quedan en la obligación de dar parte mensualmente al Ministerio de Relaciones de los cambios en el estado civil de los extranjeros.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Dado en México, a 16 de marzo de 1861.

Benito Juárez, Al C. Francisco Zarco, Ministro de Relaciones Exteriores.

Y lo Comunico a ud. para su cumplimiento.

Dios y Libertad. México, etc. Zarco.

2.16. CORRESPONDENCIA SOBRE LA RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON LOS ESTADOS DE EUROPA 1867

Durante el periodo en que fue retomada la restauración de la República Mexicana, se establece un prolongado lapso de aislamiento internacional a partir del siguiente texto: “Quedan suspendidas relaciones diplomáticas de la República Mexicana con las potencias que participaron en la intervención o que reconocieron el imperio, estos es, con el conjunto de naciones, menos los Estados Unidos y las repúblicas hispanoamericanas” No se dio paso alguno para reanudar relaciones con esta familia de naciones hasta 1869.

NÚMERO 6196

Diciembre 11, 1867.

Ministerio de Relaciones.

Envía los pasaportes que pidieron los individuos de la Legación Inglesa.

México, Diciembre 11, 1867.- Señor:

Tengo la honra de enviarle a ud. Los pasaportes que me ha pedido en su nota de 8 de éste mes para ud. mismo, y para las demás personas que me ha indicado.

Acerca de los motivos que han inducido al gobierno de S.M.B. a dar a ud. instrucciones con ese objeto se ha servido ud. manifestarme, que pide los pasaportes en consecuencia de la decisión del gobierno de México, para no comunicarse con los agentes de las potencias que reconocieron al llamado gobierno del Archiduque Maximiliano.

No ha sido efecto de la voluntad del gobierno de México la posición en que se ha visto y se ve colocado respecto de aquellos gobiernos. Ellos fueron los que adoptaron la decisión de poner término a las relaciones amistosas de los tratados que tenían con la República mexicana, desconociéndola en la sociedad de las naciones.

La República ha existido y existe por la voluntad del pueblo mexicano, Su gobierno ha tenido y tiene el propósito de que cuando aquellos gobiernos quieran de nuevo tratar con la República, no se oponga por ella, dificultad para hacerlo en términos justos y convenientes.

El gobierno ha cuidado de que los súbditos ingleses residentes en México, estén bajo la eficaz protección de las leyes. En los lugares que durante la guerra permanecieron sujetos a las autoridades de la República, y en toda ella desde que terminaron los efectos de la intervención extranjera, no tiene el gobierno conocimiento de que haya habido un solo caso de queja. Lo mismo que hasta ahora, el gobierno de la República cumplirá los deberes que le imponen el derecho de gentes y sus propias leyes.

La escolta que ud. desea para cuando termine los preparativos de su marcha, será facilitada tan luego como ud. se sirva pedirla.

Tengo la honra de ser de ud. señor, con la mayor consideración.

Su muy respetuoso y obediente servidor.-

S. Lerdo de Tejada. Al sr. R. J. C. Middleton, etc., etc., etc.,

2.17. CIRCULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN: MEDIDAS PARA PREVENIR LA INVASIÓN DEL CÓLERA ASIÁTICO. JULIO 16 DE 1885

Secretaría de Estado y del despacho gobernación.- Circular.- Siendo uno de los más importantes deberes de la administración velar por la salubridad general del país, y temiendo que el cólera asiático, reinante hoy en España, pueda comunicarse a México, supuestas las constantes relaciones que mantiene con dicha península, el presidente de la República cree llegado el caso de dictar nuevas providencias para prevenir en lo posible ese grave mal, o hacer siquiera menos desastrosos los efectos de la epidemia, si a pesar de todos los medios que se empleen para evitarlo aparece por desgracia en nuestro territorio. Con el fin de que las medidas que hubieran tomarse fuesen acertadas, y de acuerdo con los progresos e indicaciones de la ciencia, el mismo primer magistrado se sirvió disponer que el Consejo Superior de salubridad propusiera las más oportunas, según las circunstancias, consultando a la vez las instrucciones cuya observancia sería de recomendarse en su oportunidad a los particulares.

En cumplimiento de ese acuerdo la citada corporación ha discutido y aprobado el siguiente dictamen:

Consejo Superior de Salubridad. México. La comisión de epidemiología, cumpliendo con el acuerdo de este Consejo fecha 30 del mes próximo pasado, tiene la honra de someter a su deliberación el conjunto de medidas profilácticas que se considera deben adoptarse, así por las autoridades como por los particulares, con el fin de prevenir se comunique la epidemia del cólera asiático a nuestro territorio, o con el de hacer menos funestos sus estragos en el caso desgraciado de que llegue a invadir el país.

Ya en otras ocasiones el Consejo se ha ocupado de las principales cuestiones relativas a tan interesante asunto, por cuyo motivo poco tendríamos que agregar en esta vez, y tanto menos cuanto que no obstante los últimos estudios muy interesantes acerca de esta enfermedad, casi nada se ha adelantado respecto de su profilaxis. Sin

embargo, teniendo en cuenta que esos estudios confirman cada día más la idea que ya se tiene de que esa afección reconoce por causa el desarrollo de la economía, de un microbio, hemos juzgado muy interesante proponer de una manera más extensa la desinfección de las deyecciones, de las habitaciones, ropas y cualquier objeto que pudiera estar contaminado y el aislamiento de los enfermos, con el objeto de destruir el germen morbooso o de evitar su propagación a las personas sanas.

Comprendiendo igualmente que las condiciones higiénicas de las poblaciones influyen de una manera notable en su mayor o menor receptividad respecto de las enfermedades infecciosas, insistimos en la necesidad de procurar por todos los medios posibles el saneamiento de esas mismas poblaciones, recomendando como bases de éste la canalización del suelo (drenaje), el plantío de numerosas arboledas, la desecación de los pantanos, el abastecimiento de los centros poblados de agua en abundancia, y la adopción de un sistema adecuado de evacuación de las inmundicias. Aun cuando estas medidas son de costo muy grande y exigen muchos años para realizarse, las señalamos, sin embargo, porque no sólo servirán para el objeto con que ahora se proponen, sino que mejoraran de manera notable la salubridad pública, disminuyendo les enfermedades infecciosas, la tuberculosis, el paludismo en sus diferentes formas, etc., dando a la vez mayor vigor a los habitantes y contribuyendo a aumentar su vida media. Importa, por tanto, que aun cuando sea de manera lenta y a costa de grandes sacrificios, procuren las autoridades todas de la República plantearlas y darles cada día mayor extensión.

No obstante que el congreso nacional de higiene aprobó una serie de medidas para impedir la propagación de las enfermedades epidémicas de un punto de la República a otros, no las consultamos ahora, sin negar por eso su importancia inequívoca, porque para su realización seria necesaria una organización completa de los servicios sanitarios en toda la República y una legislación adecuada, de todo lo cual carecemos absolutamente, y lo que no creemos fuera de posible improvisar, llegado el caso de que el país se viera invadido por la epidemia del cólera; bueno seria; sin embargo, pensar desde ahora en esto, que es la mayor utilidad en todo caso, y mucho más en el desgraciado a que nos referimos. Nos limitamos, por tanto, a consultar solo la comunicación absoluta en casos determinados con los lugares donde reine la epidemia.

Respecto de la cartilla para instrucción popular que tenemos la honra de presentar, solo diremos que la hemos redactado conforme a los mejores preceptos sobre la materia y en vista de las que con el mismo objeto se han publicado en los principales países de Europa y en los Estados Unidos del Norte, y muy especialmente teniendo en cuenta la que en 1849 formó la escuela de Medicina de México y que fue escrita por los distinguidos médicos Erazo, Jiménez y Lucio.

En vista de lo expuesto, sometemos a la aprobación del consejo las siguientes.

2.18. MEDIDAS PRESERVATIVAS DEL CÓLERA ASIÁTICO QUE DEBERÁN PONERSE EN PRÁCTICA EN LA REPÚBLICA MEXICANA

I. Cuarentenas marítimas.

1. Cualquier buque que llegue a alguno de nuestros puertos deberá ser visitado por la Junta de sanidad respectiva, y no podrá ponerse en libre plática sin la autorización de esa misma junta.

2. La visita de los buques en los puertos de altura donde no haya junta de sanidad, se practicará por dos o tres médicos nombrados al efecto.

3. En su visita la junta, antes de penetrar al buque, examinará la patente de sanidad y hará el interrogatorio conveniente al capitán del buque y a los pasajeros, para saber si éste ha tocado algún punto infestado por el cólera, si vienen enfermos de esa afección a bordo; y por último, si en la travesía se han presentado algunos casos, ya sea de cólera confirmado o de diarrea premonitoria.

4. Cuando del examen practicado por la Junta de sanidad resultare que el buque proviene de o ha tocado algún punto donde exista el cólera, pero sin que en su travesía se haya presentado ningún accidente sospechoso, si ésta ha durado más de ocho días se someterá el buque a una cuarentena de observación de siete días.

5. Si la travesía ha sido de menor duración que la antes indicada, se prolongará la cuarentena tantos días más cuantos fueren necesarios para que haya un intervalo de quince entre el día en que salió el buque del último punto donde existía el cólera y aquel en que deben cesar la observación.

6. En el caso de que durante la travesía haya habido enfermos o algún caso de defunción a consecuencia del cólera, pero sin que al llegar

el buque se encuentre accidente alguno sospechoso, se someterá a los pasajeros a una cuarentena de diez días de duración.

7. Si el buque llega trayendo a bordo enfermos de cólera o con accidentes que hagan sospechar esta afección, solo se permitirá su desembarque en los puertos donde haya lazaretos bien arreglados para tratar a los enfermos en riguroso aislamiento.

8. En estos puertos se separará a los enfermos de cólera para su tratamiento, y se impondrá a los demás pasajeros una cuarentena de diez días, contados desde el momento en que se haya hecho la separación de los enfermos.

9. Cuando el buque provenga de un punto infestado o haya tocado alguno que lo ésta, o cuando vengan á bordo pasajeros o tripulantes con accidentes que hagan sospechar el cólera, se hará la desinfección conveniente de las ropas de uso, equipajes, mercancías y correspondencia.

10. En el caso de que el buque llegue con enfermos de cólera, o los haya tenido durante la travesía, se hará, además, la desinfección del buque mismo.

11. La desinfección de las mercancías, ropas, etc., se hará, siempre que fuere posible, en el lazareto y en estufas cuya temperatura se eleve a 110 grados centígrados por lo menos, o por medio de ácido sulfuroso teniendo cuidado en humedecer el piso y las paredes de la cámara de desinfección y de quemar en ella el azufre en la proporción de 30 gramos por metro cúbico de capacidad.

12. Si durante la cuarentena a que sea sometido algún buque se desarrollan casos de cólera, se procederá respecto de él como si se tratara de alguno que acabase de llegar en esas condiciones.

13. Es de suma urgencia que en los puertos de Veracruz, Tampico, Progreso y Matamoras para el golfo mexicano, y en los de Acapulco, Manzanillo, Mazatlán y Guaymas para el mar Pacífico. Se proceda a la erección de lazaretos en sitios perfectamente aislados y con las condiciones convenientes para que se lleven a efecto las cuarentenas de rigor y de observación.

II. Inspección sanitaria y desinfección en la frontera del Norte, e incomunicación con la República de Guatemala

14. Tan luego como se tenga noticia de haberse desarrollado el cólera en los Estados Unidos del Norte, no se permitirá el tránsito de pasajeros y mercancías de ese país al territorio de la República, sino por los puntos siguientes: Matamoras, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Paso del Norte y Nogales.

15. En cada una de estas poblaciones se establecerá una estación sanitaria, en la que los pasajeros sean sometidos a un examen médico, con

el fin de averiguar si están o no enfermos de cólera o de accidentes que pudieran hacer sospechar esta enfermedad, y en la que se practicará la desinfección de sus ropas y equipajes, así como la de las mercancías que provengan de lugares infectados por el cólera.

16. Las estaciones sanitarias se establecerán fuera de todo lugar poblado, y se compondrán de un lazareto para enfermos, aislado, así como su personal, de las otras oficinas de la estación; de un departamento para el reconocimiento de los pasajeros; de habitaciones para el personal de la estación, y de la estufa y cámaras de desinfección necesarias.

17. Se expedirá a los pasajeros en quienes no se encontrare accidente sospechoso alguno, un certificado por el que conste que han sufrido un examen médico respectivo, con el cual podrá permitirse su entrada a las poblaciones.

18. A los que estuvieran enfermos del cólera se les conducirá desde luego al lazareto, donde permanecerán hasta su completa convalecencia.

19. A las personas que presentaren solo accidentes sospechosos, se les permitirá regresar a territorio de los Estados Unidos, si así lo desearan, o serán asistidos en tiendas situadas a una distancia del pabellón principal del lazareto, bastante para impedir el contagio.

20. Los cadáveres de los que sucumban en los lazaretos serán cremados, así como las ropas y colchones que hubieren servido para su asistencia.

21. En las poblaciones de la frontera se someterá a un examen médico a los pasajeros que se sospeche vengan de los Estados Unidos, y no se presenten, sin embargo, el certificado de inspección de las estaciones sanitarias. En este caso se desinfectarán también sus equipajes y mercancías.

22. En cada estación habrá, por lo menos, tres médicos con título legal, de los cuales dos practicarán el interrogatorio y reconocimiento que estimen necesario, para averiguar si los pasajeros no padecen del cólera o de accidentes que pudieran hacerlo sospechar, y el otro se encargará de la asistencia de los enfermos en el lazareto.

23. Los trenes de los Estados Unidos que provengan de lugares infestados o que hayan atravesado por ellos, no podrán llegar a las poblaciones, sino que serán detenidos en las estaciones sanitarias, donde se transbordarán los pasajeros y mercancías después de la inspección médica y la desinfección, debiendo volver inmediatamente a territorio de los Estados Unidos el tren que los haya conducido.

24. La desinfección de los pasajeros se hará por medio de baños, y la de las ropas, los equipajes y mercancías se hará por el calórico en estufas húmedas cuya temperatura se eleve de 110 á 120 grados centígrados o

por ácido sulfuroso, quemando azufre en la cámara de desinfección, en la proporción de 30 gramos por metro cúbico de la capacidad de esta última.

25. Si el cólera se presentare en la República de Guatemala, se interrumpirá toda comunicación terrestre con ese país mientras dure la epidemia.

III. Saneamiento de Poblaciones

26. Se procurará alcanzar por todos los medios posibles el saneamiento radical de las poblaciones, fijándose con especialidad en los puntos siguientes:

- I. La canalización subterránea del suelo (drenaje), en todos los lugares que fuere necesario.
- II. El plantío de arboledas, evitando a la vez la tala de montes.
- III. La desecación o el saneamiento de los pantanos.
- IV. El abastecimiento del agua potable en abundancia, de los centros poblados.
- V. El establecimiento de un sistema de evacuación de las inmundicias.
- VI. Medidas para evitar la propagación del cólera de una a otra población de la república.

27. Se incomunicarán con el resto de la República las primeras poblaciones invadidas por el cólera, en el caso de que por sus elementos propios de vida, sus pocas relaciones comerciales y su situación topográfica relativa, puedan aislarse.

28. En este caso se establecerá la incomunicación, impidiendo la salida de pasajeros y mercancías por un cordón sanitario que se establecerá a una legua, cuando menos, del lugar donde se haya desarrollado la epidemia. Solo se permitirá el paso de la correspondencia, teniendo cuidado de desinfectarla de una manera conveniente tan luego como se reciba.

V. Medidas de la policía para alcanzar que la epidemia haga de los menores estragos posibles en las poblaciones que sean invadidas.

29. Se hará la limpia de los caños, atarjeas y otros derrames de las poblaciones, cuidando en lo sucesivo de mantenerlos siempre con buena corriente.

30. Esta limpia deberá hacerse observando las prescripciones siguientes:

- I. No deberá depositarse en azolve a los lados de los caños y atarjeas, sino que será transportado inmediatamente después de extraído.
- II. Es también conveniente para la salubridad, que la limpia se haga exclusivamente por la noche, de las diez a las cinco, y que las atarjeas queden cubiertas al comenzar el día.
- III. En una medida prudente que durante las horas en que se haga la limpia, se haga funcionar un hogar, con su tiro conveniente dispuesto para quemar las mismas y diseminar ampliamente los que escapan a la combustión.
- IV. Es igualmente útil verter alguna sustancia desinfectante en las atarjeas y caños antes de remover el azolve.

31. Se cuidará de quemar diariamente las basuras acumuladas en los muladares y de que éstos estén situados en un lugar conveniente.

32. Es importante que se tenga especial cuidado en el barrido de las calles, y de evitar que los vecinos arrojen basuras y materias excrementicias en sitios que no estén destinados a ese objeto.

33. Es muy interesante que se cuide de que constantemente estén en buen estado de conservación los acueductos y perfectamente limpias las fuentes públicas y demás depósitos de agua.

34. La autoridades respectivas procuraran, por todos los medios posibles, que en los comunes y en todos los caños de las casas haya sess-pool u otros obturadores hidráulicos que impidan el paso de los gases de las letrinas y atarjeas al interior de las habitaciones.

35. Las mismas autoridades, antes de que aparezca la epidemia, deberán, no sólo aconsejar, sino favorecer por todos los medios posibles, la emigración de los habitantes, para disminuir así la aglomeración.

36. Todas las poblaciones se proveerán, con la debida oportunidad, de los medicamentos más indispensables, así como de los desinfectantes de que se hablará más adelante.

37. En los grandes centros de población, al menos, se organizarán con la anticipación debida, un servicio de asistencia médica preventiva y las juntas de socorro que fueren necesarias para prestar toda clase de auxilios a las familias indigentes.

38. El servicio de asistencia médica preventiva, que será formado por médicos o estudiantes de los últimos años de medicina, tendrá por objeto visitar diariamente a las familias de la última clase de la sociedad, que por su falta de ilustración y abandono en que viven no estén en aptitud de utilizar las prescripciones contenidas en la instrucción de la profilaxis individual formulada por este Consejo.

39. Las juntas de socorro tendrán las atribuciones principales que siguen:

- I. Colectar los fondos que para el socorro de los enfermos pobres destinen el gobierno general, a los gobiernos de los Estados y los ayuntamientos, así como las cantidades que los particulares cedan con el mismo fin.
- II. Establecer igualas con algunas boticas para el abastecimiento de medicinas a los enfermos pobres y hacer la compra de ropa, alimentos y medicinas que fueran necesarias y distribuir las equitativamente.
- III. Establecer, de acuerdo con las juntas de sanidad locales o con los ayuntamientos respectivos, los hospitales provisionales necesarios para el tratamiento de los cólicos.

40. Tan luego como se declare el cólera en alguna población, comenzaran a funcionar las juntas de caridad, así como el servicio de asistencia médica preventiva, y se observarán las siguientes prevenciones:

- I. Cada médico o estudiante encargado del servicio de asistencia médica preventiva, pasará a lo menos una vez al día a las casas que le hayan sido

asignadas, limitándose a visitar a las familias que por su pobreza o poca ilustración no puedan acudir a un médico, no observar las instrucciones las instrucciones populares formuladas por el Consejo superior de salubridad. En esta visita interrogarán a los miembros de la familia para averiguar si alguno tiene cualquier síntoma que indique el principio del cólera, en cuyo caso formulará la prescripción conveniente para llenar las indicaciones, e instruirá a la familia de las precauciones que debe tomar para evitar el contagio.

- II. Todas las noches habrá en cada de las inspecciones de policía o en el lugar que se juzgue oportuno, según las poblaciones, una guardia de médicos dedicados exclusivamente al servicio nocturno, para que a cualquiera hora los vecinos puedan disponer de los socorros facultativos. Estos empleados no podrán exigir retribución alguna de los enfermos pobres.
- III. Se evitarán, hasta donde sea posible, las grandes reuniones; se ordenará la desocupación de los cuarteles, dejando solo en las poblaciones las tropas que fueren indispensables para el servicio; se disminuirá, hasta donde se pueda, la aglomeración de las cárceles, y se disminuirán las horas de asistencia a las escuelas públicas.
- IV. Agentes de policía visitarán diariamente las plazas del mercado y expendios de frutas y verduras, y separarán de la venta las que estén alteradas, así como las frutas verdes.
- V. Deberá prohibirse, durante la epidemia, la venta de frazadas, colchones, sábanas, y la de cualquiera otra pieza de ropa blanca, cuando estos objetos estén ya usados.
- VI. Deben suspenderse los trabajos en las fábricas de almidón en que se siga el procedimiento de fermentación y en las otras industrias en que se emplean sustancias orgánicas que pueden entrar fácilmente en putrefacción. En las fábricas de cerveza se tendrá cuidado de que diariamente se extraigan los residuos de las sustancias usadas, y se vigilará que en las tocinerías se saponifiquen todos los días las grasas, sin que se deje nada de ellas en depósito de los llamados “barcos de pudrición”.
- VII. De acuerdo con las juntas de sanidad locales o con los ayuntamientos respectivos, se elegirá en su oportunidad en cada población un terreno conveniente para que sirva de cementerio para los cadáveres de los pobres que sucumban del cólera.
- VIII. En los demás panteones se designará un sitio especial para el enterramiento de los coléricos, y en todos se dará a las fosas una profundidad de dos metros por lo menos.
- IX. En los cementerios en donde se hagan inhumaciones de coléricos, habrá un médico para comprobar las defunciones.

- X. No se permitirá que los cadáveres de los coléricos permanezcan en las habitaciones por más de veinticuatro horas.
- XI. Por ningún motivo se permitirán las misas de cuerpo presente, ni cualquiera otra ceremonia fúnebre en presencia de los cadáveres de las personas que hayan sucumbido al cólera.

41. Las personas que ejerzan la medicina si se juzga conveniente, o bien los jefes de familia, los directores de los colegios, los de las fábricas e industrias, los dueños o encargados de los hoteles, mesones, casas de huéspedes, etc., estarán obligados a dar aviso a la autoridad dentro de las primeras veinticuatro horas, de cualquier caso de cólera que observen o que se presente en su habitación o en los establecimientos a su cargo.

42. Inmediatamente que la autoridad respectiva tenga conocimiento de algún caso de cólera, remitirá a la familia del enfermo un ejemplar de la cartilla de higiene individual formulada por este Consejo, y si el enfermo no estuviere asistido por ningún médico, hará que lo visite alguno, ministrando además a la familia cuando fuere pobre, los desinfectantes necesarios.

43. En las poblaciones donde se hayan podido organizar debidamente los servicios sanitarios, la autoridad, además de lo antes dicho, hará que un médico visite en el acto la casa y resuelva si el enfermo podrá asistirse de una manera conveniente en ella.

44. Cuando así fuere, se cuidará de que tan luego como el enfermo sane o sucumba, se desinfecte la pieza en donde haya estado, e igualmente los comunes y caños de las casas.

45. En el caso de que a juicio del médico fuere inconveniente el tratamiento del enfermo en su propia habitación, se procurará por todos los medios posibles alcanzar de la familia que sea conducido para su asistencia a un hospital o casa de salud.

46. Los comisarios de policía o autoridades a quienes corresponda, darán diariamente al Consejo de salubridad, a las juntas locales de sanidad o a los ayuntamientos respectivos, una noticia de los casos de la enfermedad epidémica de que tengan conocimiento, con indicación de las casas donde se hayan presentado y de las medidas practicadas.

47. Remitirán igualmente un parte de los enfermos pobres de que hubieren tenido conocimiento, a las juntas de socorros, para que éstas los auxilien con los alimentos, ropas y medicinas que fuere posible.

48. Por ningún motivo se permitirá la asistencia de los enfermos de cólera en las escuelas, hoteles, mesones y otros establecimientos de aglomeración.

49. Con la debida oportunidad deberán repartirse con profusión las instrucciones populares del Consejo superior de salubridad, referentes a la profilaxis del cólera y cuidados que deben impartirse a los enfermos al principiar la afección, antes de que sean vistos por un médico.

INSTRUCCIONES SOBRE LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE DURANTE UNA EPIDEMIA DE CÓLERA ASIÁTICO.

VI. Emigración

50. Todas las personas para quienes el cambio de residencia sea posible, pasando del lugar infectado a otro que no lo esté, deberán hacerlo, desde el momento en que se tenga noticia de los primeros casos y teniendo cuidado después de no recibir huéspedes, alimentos, bebidas, ropas o cualquiera otro objeto procedente del lugar infestado.

51. Para el cambio de residencia deberán elegirse principalmente las poblaciones de poco tránsito, de reducidas relaciones comerciales con los lugares infestados, distantes de los ríos y cuando menos dos leguas del lugar donde reine el cólera, y del suelo granítico o por lo menos seco y poco poroso.

52. Las personas que hubieren cambiado de residencia no deberán volver a las poblaciones donde se haya presentado el cólera, sino después de transcurridos dos meses contados desde la fecha en que se hayan dado los últimos casos, aun benignos, de la enfermedad epidémica.

VII. Alimentos

53. En tiempo de cólera no deben modificarse el régimen alimenticio a que se esté acostumbrado respecto de las horas de las comidas y de las cantidades de alimentos que se tomen en cada una de ellas.

54. Todos los alimentos de que se haga uso deberán estar bien cocidos, evitando por lo tanto las ensaladas de lechuga o de cualquiera otra verdura, que según costumbre se hacen en crudo.

55. Deben desecharse en general los alimentos de difícil digestión o que suelten el estómago, especialmente las carnes y pescados salados, los mariscos, al menos en los lugares donde no son de uso diario, las carnes picadas, los rellenos, los chorizos y longanizas, los huevos, excepto los pasados por agua o tibios, y por último, los helados, la nieve y demás preparaciones congeladas.

56. La leche podrán tomarla las personas acostumbradas a su uso, pero siempre hervida. Respecto de las frutas no hay inconveniente en comerlas en cantidad moderada y con tal de que estén bien maduras, teniendo cuidado, sin embargo, en todo caso, de pelarlas, o comerlas mejor cocidas.

57. Como respecto de la facilidad de digerir se encuentran diferencias notables en cada individuo, cada uno deberá consultar a su propia experiencia y omitir el uso de aquellas sustancias que no digiere con facilidad o que le suelten el vientre, aunque no suceda así a los demás.

VIII. Bebidas

58. El agua que se emplee, tanto para la bebida como para los usos domésticos, debe ser perfectamente pura, prefiriéndose en las poblaciones donde sea posible, el agua de manantial o la de pozos artesanos.

59. Las aguas de cisternas, de jagüeyes, y en general de cualquier otra, de cuya pureza se dude, sólo deberán utilizarse para bebida o para preparación de los alimentos después de haberlas hecho hervir durante diez minutos y teniendo cuidado de airearlas luego que se hayan enfriado, agitándolas un rato en la vasija que las contenga.

60. Las bebidas fermentadas como el pulque, la cerveza, los vinos de mesa y otros semejantes, sólo deberán tomarlos las personas habituadas a ellos, pero nunca en exceso sino en cantidades bastante moderadas.

Las personas que no están acostumbradas a esas bebidas, deben mejor abstenerse completamente de ellas.

61. Los aguardientes, el rum, el coñac y los licores espirituosos, solo deberán tomarlos, y con mucha moderación, las personas muy acostumbradas a ellos u cuya digestión se entorpece sin su auxilio.

Fuera de este caso nada más deberán emplearse para su uso medicinal.

62. Todas las bebidas, así como los alimentos, se conservarán de manera de evitar con especial cuidado que las moscas caigan o se paren sobre ellos.

IX. Vestidos

63. Será muy conveniente el uso de vestidos aseados y secos; cuando los vestidos o el calzado se mojen accidentalmente, deberán cambiarse por otros sin demora.

64. Los vestidos muy ligeros son malos porque dejan percibir fácilmente el frío cuando baja la temperatura de una manera brusca o cuando se mojan por el sudor. Una faja de franela ligera en el vientre, es buen medio contra los enfriamientos.

X. Baños y otros cuidados personales

65. Los baños tibios deberán tomarse solo cuando sean indispensables para asear el cuerpo, y entonces deben ser de corta duración y de modo que se evite toda impresión de frío al entrar o al salir de ellos. Los de regadera serán también, muy cortos, y conviene que nada más los usen las personas que tengan el hábito de tomarlos cotidianamente.

Los rusos, creemos que deben reservarse para uso medicinal cuando sean prescritos por el médico.

66. Es muy conveniente en tiempo de epidemia no evacuar en los lugares comunes, sino mejor en un servicio especial que se vaciará inmediatamente y se mantendrá en perfecto aseo. Esto no obstante, se cuidará, como se ha dicho, de la limpieza de los comunes y caños.

67. Deben evitarse los ejercicios fuertes o largo tiempo prolongados, los placeres venéreos frecuentes, las desveladas y todos los desórdenes en los hábitos ordinarios.

68. Es muy importante evitar las pasiones tristes, y sobre todo el temor a la epidemia, no concurriendo a aquellos lugares como los cementerios, hospitales, etc., donde

se ven en conjunto los funestos resultados de la enfermedad, y absteniéndose de las lecturas y conversaciones en que se trate de los estragos de la misma.

XI. Habitación

69. Las habitaciones deben estar ventiladas, pero sin que produzcan en ellas fuertes corrientes de aire, que hagan notar a los que las ocupan, repentinas variaciones de temperatura.

70. La hora más cómoda para renovar el aire en las piezas, es cuando ya han pasado tres o cuatro horas de la salida del sol y la niebla de la mañana se ha disipado.

71. Por la misma razón la hora menos dañosa para salir de las casas, es cuando ya no se advierte diferencia en la temperatura ni vapores húmedos en la atmósfera.

72. Debe cuidarse en las casas de que haya el mayor aseo, que no se deje mucho tiempo amontonado el estiércol, los desperdicios de las cocinas, ni ningunas otras inmundicias ni materias capaces de entrar en putrefacción.

73. No debe fregarse el suelo de las habitaciones, o regarlas demasiado al tiempo de barrer, para evitar que el aire de las piezas se haga muy húmedo.

74. Debe cuidarse de una manera especial la limpieza de los caños y comunes de las casas, arrojando en ellos, con frecuencia, agua en cantidad bastante para arrastrar hacia afuera las inmundicias que contengan. Conviene también desinfectarlos por medio de alguna de las soluciones indicadas al fin de esta cartilla.

75. Debe evitarse el que vivan reunidas muchas personas en una habitación estrecha, y con más razón a la hora de dormir, pues se ha observado que la aglomeración de muchas gentes en habitaciones bajas, frías, húmedas o de poca extensión, favorece eficazmente el desarrollo del cólera.

76. Habiendo en muchos de los cuartos bajos de México una excesiva humedad y aun en agua debajo de las vigas que forman el piso, deberán no ser habitados si no se les remedia este defecto.

XII. Primeros socorros que se tienen que dar a los enfermos

77. Tan luego como la enfermedad comience y por ligeros que sean los síntomas primeros (deposiciones, vómitos dolores de estómago o calambres), entretanto llega el médico, se pondrá al enfermo en cama, teniendo cuidado de poner un hule debajo de las sábanas, y se cubrirá perfectamente; se suspenderá toda alimentación, se le dará una bebida muy caliente de té, hierbabuena o manzanilla, con una cucharada de coñac, rum o aguardiente refino, y se le administrará una lavativa pequeña de agua simple con diez gotas de láudamo tratándose de una persona mayor de doce años de edad. Si las evacuaciones son muy repetidas, se dará el láudano a la misma dosis por la boca, y si los enfermos vomitan demasiado y arrojan la bebida dicha, se les dará pedacitos de hielo, a que se fundan en la boca. La dosis de láudamo podrá repetirse cada hora mientras no haya mejoría, y siempre que el enfermo éste bien despierto, debiendo suspenderse en caso contrario.

Al mismo tiempo se harán fricciones en todo su cuerpo con un cepillo de ropa o con un pedazo de franela mojado con linimento volátil o con esencias de trementina o de mostaza.

XIII. Aislamiento

78. El enfermo se colocará en una pieza que se pueda ventilar bien y lo más aislada posible de las otras de la misma casa.

79. En dicha pieza no habrá alfombras ni cortinas, y se dejarán en ella solo los muebles y objetos absolutamente indispensables.

80. La asistencia de los enfermos se hará por el menor número posible de personas, evitando que entre a la pieza alguna otra que no sea necesaria.

81. Si la habitación no permite una aislamiento suficiente del enfermo, será preferible conducirlo al hospital o a una casa de salud.

XIV. Desinfección

82. Es la mayor importancia, y así se logrará que la enfermedad no se extienda a otras personas, que los vómitos, evacuaciones y orinas de los enfermos, se desinfecten inmediatamente después de su expulsión.

Para lograr esto, se mezclarán desde luego con una cantidad igual a la suya de uno de los líquidos desinfectantes que señalamos en seguida.

83. Las ropas y sábanas que hayan servido al enfermo, se sumergirán antes de sacarlas de la pieza donde se halle éste, en algunos de los líquidos desinfectantes, y antes de entregarlas a la lavandera será conveniente hervirlas.

84. Si se cayeran vómitos o evacuaciones en el piso o en las paredes, se lavarán luego, valiéndose de alguno de los licores desinfectantes.

85. La pieza donde hubiere estado el enfermo se desinfectará luego que éste sane o sucumba o sea llevado al hospital, quemando azufre flor en la proporción de 30 gramos por metro cúbico de capacidad. Esta operación se hará de la manera siguiente: se regará primero el piso con agua, y se quemará en seguida el azufre en charolas de hoja de lata sin soldadura, que fácilmente puedan improvisarse, las que se colocaran en varios anafres con lumbre, una vez que comience a arder el azufre, se cerrarán las puertas y se tapanán las hendeduras con tiras de papel pegadas con engrudo.

86. Medidas que deben observar las personas las personas que asistan a algún enfermo.

87. Las personas que estén asistiendo a algún enfermo, no deberán tomar ningún alimento ni bebida en la pieza ocupada por él.

88. Siempre que les sea posible tendrán, mientras estén en la pieza del enfermo, una bata que cubra todos sus otros vestidos, la que se quitarán cada vez que salgan de la pieza, con el fin de evitar así, hasta donde es posible, llevar los gérmenes morbosos.

89. Antes de comenzar a comer se enjuagarán la boca y se lavaran las manos con una solución de bórax al dos por ciento.

90. Todas las ropas que hubieren usado durante la enfermedad, serán desinfectadas de la misma manera que las de los enfermos.

Soluciones desinfectantes.-

1a Agua, un litro (dos cuartillos).- Sulfato de cobre, 50 gramos (casi tres cucharadas).

2a Agua, un litro (dos cuartillos), Sulfato de zinc, 50 gramos (casi tres cucharadas).

3a Agua destilada, un litro (dos cuartillos).- Cloruro de cal en polvo, 100 gramos (cinco cucharadas).

4a Agua destilada, un litro (dos cuartillos).- Bicloruro de mercurio, 25 centímetros.- Nicolás R. de Arellano.- D. Orvañanos.

Y habiendo sido aprobado por el ejecutivo el dictamen que precede, tengo la honra de insertarlo a vd. recomendando a ese gobierno, y por su digno conducto a las autoridades políticas, municipales, sanitarias y, en general, a todos los habitantes del Estado, la adopción inmediata o sucesiva según los casos o circunstancias; de las providencias consultadas; encargándole, además, se procure la reimpresión y circulación profusa de las medidas e instrucciones a que me he referido, sobre todo si llega a aparecer el cólera en las naciones vecinas, y más aún, si por desgracia se presenta en la República.

Con este motivo, el presidente ha juzgado oportuno se recomiende también de un modo eficaz a los ayuntamientos, la observancia de una práctica, útil aun en tiempos normales, seguida en algunas ciudades de Europa y América, cuyas autoridades gastan anualmente diversas sumas en la compra de desinfectantes, que comisionados especiales o agentes de la policía se encargan de mezclar diariamente a todas las sustancias fermentescibles que se acumulan en los grandes centros de población. Esos desinfectantes se arrojan a los caños, albañales, inodoros públicos, etc., y aun se mezclan con las aguas de riego de las calles y plazas, todo por cuenta de los municipios respectivos, a más de que por una disposición de policía, tiene que hacer otro tanto por cuenta propia en sus establecimientos, los dueños de hoteles, baños, etc., así como los encargados de hospitales, asilos, cuarteles y en general todos los edificios en donde exista o pueda haber acumulación de individuos. Siendo inconcusa la utilidad de las medidas o de otras análogas, siquiera en las grandes ciudades de la República, para impedir la invasión y desarrollo de epidemias, el ejecutivo de la Unión confía en que el gobierno del digno cargo de vd. tomará el mayor empeño por que desde luego se adopten por quien corresponda, en la comprensión de esa entidad federativa.

Propuesto a ud. las seguridades de mi atenta consideración.

Libertad y Constitución. México, Julio de 16 de 1885, Romero Rubio.

2.19. LEY DE EXTRANJERÍA Y NATURALIZACIÓN. MAYO 20 DE 1886

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:

El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta la siguiente:

Ley de Extranjería y Naturalización.

Art. 1. Son Mexicanos:

- I. Los nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano por nacimiento o por naturalización.
- II. Los nacidos en el mismo territorio nacional, de madre mexicana y de padre que no sea legalmente conocido, según las leyes de la República.
En igual caso se considerarán los que nacen de padres ignorados o de nacionalidad desconocida.
- III. Los nacidos fuera de la República, de padre mexicano que no haya perdido su nacionalidad. Si esto hubiere sucedido, los hijos se reputarán extranjeros, pudiendo, sin embargo, optar por la calidad de mexicanos dentro del año siguiente al día en que hubieren cumplido 21 años, siempre que hagan la declaración respectiva ante los agentes diplomáticos o consulares de la República, si residieran fuera de ella, o ante la secretaría de relaciones si residiesen en el territorio nacional.- Si los hijos de que se trata la fracción presente, residieran en el territorio nacional, y al llegar a la mayor edad hubieren aceptado algún empleo público o servicio en el ejército, marina o guardia nacional, se les concederá por tales actos como mexicanos, sin necesidad de más formalidades.
- IV. Los nacidos fuera de la República, de madre mexicana, si el padre fuera desconocido y ella no hubiese perdido su nacionalidad según las disposiciones de esta ley. Si la madre se hubiere naturalizado en país extranjero, sus hijos serán extranjeros, pero tendrán el derecho de optar por la calidad

de mexicanos, ejerciendo en los mismos términos y condiciones que determina la fracción anterior.

- V. Los mexicanos que, habiendo perdido su carácter nacional conforma a las prevenciones de esta ley, lo recobren cumpliendo con los requisitos que ella establece, según los diversos casos de que se trate.
- VI. La mujer extranjera que contraiga matrimonio con mexicano, conservando la nacionalidad mexicana aun durante su viudez.
- VII. Los nacidos fuera de la República, pero que, establecidos en ella en 1821 juraron el acta de Independencia, han continuado su residencia en el territorio nacional y no han cambiado de nacionalidad.
- VIII. Los mexicanos que, establecidos en los territorios cedidos a los Estados Unidos por los tratados de 2 de Febrero de 1848 y 30 de noviembre de 1853, llenaron las condiciones exigidas por esos tratados para conservar su nacionalidad mexicana. Con igual carácter se considerará a los mexicanos que continúen residiendo en territorios que pertenezcan a Guatemala, y a los ciudadanos de esta república que queden en los que corresponden a México, según el tratado de 27 de septiembre de 1882, siempre que esos ciudadanos cumplan con las prevenciones estipuladas en el artículo 5° del mismo tratado.
- IX. Los extranjeros que se naturalicen conforme a la presente ley.
- X. Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la República, siempre que no manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad. El acto de verificarse la adquisición, el extranjero manifestará al notario o juez receptor respectivo, si desea o no obtener la nacionalidad mexicana que le otorga la fracción III del artículo 30 de la Constitución, haciéndose constar en la escritura la resolución del extranjero sobre este punto.- Si elige la nacionalidad mexicana u omite hacer alguna manifestación sobre el particular, podrá ocurrir a la Secretaría de Relaciones dentro de un año, para llenar los requisitos que expresa el artículo 19, y ser tenido como mexicano.
- XI. Los extranjeros que tengan hijos nacidos en México, siempre que no prefieran conservar su carácter de extranjeros. En el acto de hacer la inscripción del nacimiento, el padre manifestará ante el juez del registro civil su voluntad respecto de ese punto, los que se hará constar en la misma acta; y si opta por la nacionalidad mexicana u omite hacer alguna manifestación sobre el particular, podrá ocurrir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de un año, para llenar los requisitos que expresa el artículo 19, y ser tenido como mexicano.
- XII. Los extranjeros que sirvan oficialmente al gobierno mexicano o que acepten de él títulos o funciones públicas, con tal de que dentro de un año de haber aceptados los títulos o funciones públicas que se les hubieren conferido, o de haber comenzado a servir oficialmente al gobierno

mexicano, ocurran a la Secretaría de Relaciones para llenar los requisitos que expresa el artículo 19, y ser tenidos como mexicanos.

Art. 2. Extranjeros:

- I. Los nacidos fuera del territorio nacional, que sean súbditos de gobiernos extranjeros y que no se hayan naturalizado en México.
- II. Los hijos de padre extranjero o de madre extranjera y padre desconocido, nacidos en el territorio nacional, hasta llegar á la edad que conforme a la ley de la nacionalidad del padre o de la madre, respectivamente, fuesen mayores. Transcurrido el año siguiente a esa edad, sin que ellos manifesten ante la autoridad política del lugar de su residencia que siguen la nacionalidad de sus padres, serán considerados como mexicanos.
- III. Los ausentes de la república sin licencia ni comisión del gobierno, ni por causa de estudios, de interés público, de establecimiento de comercio o industria, o de ejercicio de una profesión, que dejen pasar diez años sin pedir permiso para prorrogar su ausencia. Este permiso no excederá de cinco años cada vez que se solicite, necesitándose después de concedido el primero, justa y calificadas causas para obtener cualquiera otro.
- IV. Las mexicanas que contrajeran matrimonio con extranjero, conservando su carácter de extranjeras aun durante su viudez. Disuelto el matrimonio, la mexicana de origen puede recuperar su nacionalidad, siempre que además de establecer su residencia en la República, manifieste, ante el juez del estado civil, su domicilio, su resolución de recobrar esa nacionalidad.- La mexicana que no adquiera por el matrimonio la nacionalidad de su marido, según las leyes del país de éste, conservará la suya.- El cambio de nacionalidad del marido, posterior al matrimonio, importa el cambio de la misma nacionalidad en la mujer e hijos menores sujetos a la patria potestad; con tal de que residan en el país de la naturalización del marido o padre respectivamente, salva la excepción establecida en el inciso anterior de esta fracción.
- V. Los mexicanos que se naturalicen en otros países.
- VI. Los que sirvieren oficialmente a gobiernos extranjeros en cualquier empleo político, administrativo, judicial, militar o diplomático, sin licencia del congreso.
- VII. Los que acepten condecoraciones, títulos o funciones extranjeras sin previa licencia del congreso federal, exceptuando los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptarse libremente.

Art. 3. Para el efecto de determinar el lugar de nacimiento en los casos de los artículos anteriores, se declara que los buques nacionales, sin distinción alguna, son parte del territorio nacional, y que los que nazcan a bordo de ellos, se consideran como nacidos dentro de la República.

Art. 4. En virtud del derecho de extraterritorialidad de que gozan los agentes diplomáticos, tampoco se podrán nunca reputar como nacidos fuera del país, para los efectos de esta ley, los hijos de los ministros y empleados de las legaciones de la República.

Art. 5. La nacionalidad de las personas o entidades morales jurídicas se regula por la ley que autoriza su formación: en consecuencia, todas las que se constituyan conforme a las leyes de la República, serán mexicanas siempre que además tengan en ella su domicilio legal.— Las personas morales extranjeras gozan en México de los derechos que les conceden las leyes del país de su domicilio, siempre que éstos no sean contrarios á las leyes de la nación.

Capítulo II

De la expatriación.

Art. 6. La república mexicana reconoce el derecho de la expatriación como natural e inherente á todo hombre, y como necesario para el goce de la libertad individual: en consecuencia, así como permite a sus habitantes ejercer ese derecho, pudiendo ellos salir de su territorio y establecerse en país extranjero, así como también protege el de los extranjeros de todas nacionalidades para venir a radicarse dentro de su jurisdicción. La república, por tanto, recibe a los súbditos o ciudadanos de otros Estados, y los naturaliza según las prescripciones de esta ley.

Art. 7. La expatriación y naturalización consiguiente obtenida en país extranjero, no eximen al criminal de la extradición, juicio y castigo a que está sujeto, según los tratados, las prácticas internacionales y las leyes del país.

Art. 8. Los ciudadanos naturalizados en México, aunque se encuentren en el extranjero, tienen derecho a igual protección del gobierno de la República, que los mexicanos por nacimiento, ya sea que se trate de sus personas o de sus propiedades. Esto no impide que si regresan a su país de origen, queden sujetos a responsabilidades en que hayan incurrido antes de su naturalización, conforme a las leyes de ese país.

Art. 9. El gobierno mexicano protegerá por los medios que autoriza el derecho internacional, a los ciudadanos mexicanos en el extranjero. El presidente, según lo estime conveniente, usará de esos medios siempre que no constituyan actos de hostilidad; pero si no bastará la intervención diplomática y tales medios fueran insuficientes, o si los agravios a la nacionalidad mexicana fueren tan graves, el presidente dará luego cuenta al congreso, con los documentos respectivos, para los efectos constitucionales.

Art. 10. La naturalización de un extranjero queda sin efecto por su residencia en el país de su origen durante dos años, a menos que sea motivada por el desempeño de una comisión oficial del gobierno mexicano o con permiso de éste.

Capítulo III

De la naturalización.

Art. 11. Puede naturalizarse en la república todo extranjero que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley.

Art. 12. Por lo menos seis meses antes de solicitar la naturalización, deberá presentarse por escrito al ayuntamiento del lugar de su residencia, manifestándole el designo que tiene de ser ciudadano mexicano y de renunciar a su nacionalidad extranjera. El ayuntamiento le dará copia certificada de esa manifestación, guardando la original en su archivo.

Art. 13. Transcurridos esos seis meses y cuando el extranjero haya cumplido dos años de residencia en la república, podrá pedir al gobierno federal que le conceda su certificado de naturalización. Para obtenerlo, deberá antes presentarse ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre, ofreciendo probar los siguientes hechos:

- I. Que según la ley de su país goza de la plenitud de los derechos vigentes por ser mayor de edad.
- II. Que ha residido en la República por lo menos dos años, observando buena conducta
- III. Que tiene giro o industria, profesión ó rentas de que vivir.

Art. 14. A la solicitud que presente al juez de distrito pidiendo que practique esa información, agregará la copia certificada expedida por el ayuntamiento, de que habla el artículo 12; acompañará además una renuncia expresa de toda sumisión, obediencia y fidelidad a todo gobierno extranjero, y especialmente a aquel de quien el solicitante haya sido súbdito; a toda protección extraña a las leyes y autoridades de México, y a todo derechos que los tratados o la ley internacional concedan a los extranjeros.

Art. 15. El juez de distrito, previa ratificación de que la solicitud que haga el interesado, mandará recibir, con audiencia del promotor fiscal, información de testigos sobre los puntos a los que se refiere el artículo 13, pudiendo recabar, si lo estima necesario, el informe que respecto de ellos deberá dar el Ayuntamiento, y del que habla el artículo 12.- El juez admitirá igualmente las demás pruebas que sobre los puntos indicados en el artículo 13 presentare el interesado, y pedirá su dictamen al promotor fiscal.

Art. 16. El mismo juez, en el caso de que su declaración sea favorable al peticionario, remitirá el expediente original a la Secretaría de Relaciones para que expida el certificado de naturalización, si a juicio de ello no hay motivo legal que lo impida. Por conducto del referido juez, el interesado elevará una solicitud a esa secretaría pidiéndole el certificado de naturalización, ratificando su renuncia de extranjería, y protestando su adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República.

Art. 17. Los extranjeros que sirvan en la marina nacional mercante, pueden naturalizarse, bastando un año de servicio a bordo, en lugar de los dos años que requiere el artículo 13. Para practicar las diligencias de naturalización, será competente el juez de distrito de cualquiera de los puertos que toque el buque, y de la misma manera

cualquiera de los ayuntamientos de ellos podrá recibir la manifestación a que se contrae el artículo 12.

Art. 18. No están comprendidos en las disposiciones de los artículo 12, 13, 14, 15 y 16, los extranjeros que se naturalicen por virtud de la ley, y los que tienen el derecho de optar por la nacionalidad mexicana: en consecuencia, los hijos de mexicano o mexicana que ha perdido su ciudadanía, a quienes se refieren las fracciones II y IV del artículo 1º; la extranjera que se case con mexicano; de la que habla la fracción VI del mismo artículo; los hijos de padre extranjero o de madre extranjera y padres desconocido, nacidos en el territorio nacional, de que se trata la fracción II del artículo 2º, y la mexicana viuda de extranjero, de que habla la fracción IV de ese mismo artículo, se tendrán como naturalizados para todos los efectos legales con solo cumplir los requisitos legales establecidos en estas disposiciones, y sin necesidad de más formalidades.

Art. 19. Los extranjeros que se encuentran en los casos de las fracciones X, XI, y XII del artículo 1º, podrán acudir a la secretaría de relaciones en demanda de su certificado de naturalización, dentro del término que dichas fracciones expresan. A su solicitud acompañarán el documento que acredite que han adquirido bienes raíces, ó tenido hijos en México, aceptado algún empleo público, según los casos. Presentarán además la renuncia y protesta que para la naturalización ordinaria exigen los artículos 14 y 16.

Art. 20. La ausencia en país extranjero con permiso del gobierno, no interrumpe la residencia que requiere el artículo 13, siempre que no exceda de seis meses durante el período de dos años.

Art. 21. No se concederán certificados de naturalización a los súbditos o ciudadanos de nación con quien la República, se halle en estado de guerra.

Art. 22. Tampoco se darán a los reputados y declarados judicialmente en otros países piratas, traficantes de esclavos, incendiarios, monederos falsos o falsificadores de billetes de banco o de otros papeles que hagan las veces de moneda, ni a los asesinos plagiarios y ladrones. Es nula de pleno derecho la naturalización que fraudulentamente haya obtenido el extranjero en violación a la ley.

Art. 23. Los certificados de naturalización se expedirán gratuitamente, sin

Art. 24. Poder cobrar por ellos derecho alguno a título de costas, registro, sello o con cualquier nombre.

Art. 25. Siendo personalísimo el acto de naturalización, sólo con poder especial y bastante para ese acto y que contenga la renuncia y protesta que debe hacer el mismo interesado personalmente, según los artículos 14 y 16, podrá ser éste representado, pero en ningún caso el poder suplirá la falta de residencia actual del extranjero en la república.

Art. 26. La calidad de nacional o extranjero es intransferible a terceras personas; en consecuencia, ni el nacional puede gozar de los derechos de extranjero, ni éste de las prerrogativas de aquel por razón de una y otra calidad.

Art. 27. El cambio de nacionalidad no produce efecto retroactivo. La adquisición y rehabilitación de los derechos de mexicanos no surten sus efectos, sino desde el día siguiente a aquel en que se ha cumplido con las condiciones y formalidades establecidas en esta ley para obtener la naturalización.

Art. 28. Los colonos que vengan al país en virtud de los contratos celebrados por el gobierno, y cuyos gastos de viaje e instalación sean costeados por éste, se considerarán como mexicanos. En su contrato de enganche se hará constar su resolución de renunciar su primitiva nacionalidad y de adoptar la mexicana, y, al establecerse en la colonia, extenderán ante la autoridad competente la renuncia y protesta que exigen los artículos 14 y 16: ésta se remitirá al ministro de relaciones para que expida en favor del interesado el certificado de naturalización.

Art. 29. Los colonos que lleguen al país por su propia cuenta o por la de compañías o empresas particulares no subvencionadas por el gobierno, así como los inmigrantes de toda clase pueden naturalizarse en su caso, según las prescripciones de esta ley. Los colonos establecidos hasta hoy quedan sujetos también a ella en todo lo que no contraríen los derechos que han adquirido, según sus contratos.

Art. 30. El extranjero naturalizado será ciudadano mexicano luego que reúna las condiciones establecidas por el artículo 34 de la Constitución, quedando equiparado en todos sus derechos y obligaciones con los mexicanos; pero será inhábil para desempeñar aquellos cargos y empleos, que conforme a las leyes exigen la nacionalidad por nacimiento, a no ser que hubiere nacido dentro del territorio nacional y su naturalización se hubiere efectuado conforme a la fracción II del artículo 2º.

Capítulo IV

De los derechos y obligaciones de los extranjeros.

Art. 31. Los extranjeros gozan en la República de los derechos civiles que competen a los mexicanos, y de las garantías otorgadas en la sección 1ª del título I de la Constitución, salva la facultad que tiene el gobierno de expeler al extranjero pernicioso.

Art. 32. En la adquisición de terrenos baldíos y nacionales, de bienes raíces y buques, los extranjeros no tendrán necesidad de residir en la República, pero quedarán sujetos a las restricciones que les imponen las leyes vigentes; bajo el concepto de que se reputará enajenación, todo arrendamiento de inmueble hecho a un extranjero, siempre que el término del contrato exceda de diez años.

Art. 33. Solo la Ley Federal puede modificar y restringir los derechos civiles de que gozan los extranjeros, por el principio de reciprocidad internacional, y para que así queden sujetos en la República a las mismas incapacidades que las leyes de su país impongan a los mexicanos que residan en él: en consecuencia, las disposiciones de los Códigos civiles y de procedimientos del Distrito sobre esta materia, tiene el carácter de federales y serán obligatorias en toda la Unión.

Art. 34. Los extranjeros, sin perder su nacionalidad, pueden domiciliarse en la República para todos los efectos legales. La adquisición, cambio o pérdida del domicilio se rigen por las leyes de México.

Art. 35. Declarada la suspensión de las garantías individuales en los términos que lo permite el artículo 29 de la Constitución, los extranjeros quedan como mexicanos, sujetos a las prevenciones de la ley que decrete la suspensión, salva las estipulaciones de los tratados.

Art. 36. Los extranjeros tiene obligación de contribuir para los gastos públicos de manera que lo dispongan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes concedan a los mexicanos. Sólo pueden apelar vía diplomática en el caso de denegación de justicia o retardo voluntario en su administración, después de agotar inútilmente los recursos comunes creados por las leyes y de la manera que lo determina el derecho internacional.

Art. 37. Los extranjeros no gozan de los derechos políticos que competen a los ciudadanos mexicanos; por tanto, no pueden votar ni ser votados para el cargo de elección popular, no nombrados para cualquier otro empleo o comisión propios de las carreras del estado; no permanecer al ejército, marina o guardia nacional; ni asociarse para tratar los asuntos políticos del país; ni ejercer el derecho de petición en esta clase de negocios. Esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1º fracción, XII, y 19 de esta ley.

Art. 38. Los extranjeros están exentos del servicio militar. Los domiciliados, sin embargo, tiene obligación de hacer el de policía, cuando se trate de seguridad de las propiedades y de la conservación del orden en la misma población en que estén radicados.

Art. 39. Los extranjeros que tomen parte en las disensiones civiles del país, podrán ser expulsados de su territorio como extranjeros perniciosos, quedando sujetos a las leyes de la República, por los delitos que contra ella cometan, y sin perjuicio de que sus derechos y obligaciones durante el estado de guerra, se regulen por la ley internacional y por los tratados.

Art. 40. Se derogan las leyes que establecieron la matricula de extranjeros. Solo el ministerio de relaciones puede expedir certificados de nacionalidad determinada en favor de extranjeros que los soliciten. Estos certificados constituyen la presunción legal de la ciudadanía extranjera, pero no excluyen la prueba en contrario. La comprobación definitiva de determinada nacionalidad, se hace ante los tribunales competentes y por los medios que establezcan las leyes o los tratados.

Art. 41. Esta ley no concede a los extranjeros los derechos que les niegan la ley internacional, los tratados o la legislación vigente de la República.

Capítulo V

Art. 1. Los extranjeros que hayan adquirido bienes raíces, tenido hijos en México, o ejercido algún empleo público, y de quienes hablan las fracciones X, XI y XII del artículo 1º de esta ley, quedan obligados a manifestar, dentro de seis meses de su publicación, siempre que no lo hayan hecho anteriormente a la autoridad política del lugar de su residencia, si desean obtener la nacionalidad mexicana, o conservar la extranjera. En el primer caso, deberán luego pedir su certificado de naturalización, en la forma establecida por el artículo 19 de esta ley.

Si omitiesen hacer la manifestación de que se trata, serán considerados como mexicanos, con excepción de los casos en que haya habido declaración oficial sobre este punto.

Art. 2. Los colonos residentes en el país, a quienes se refiere el inciso final del artículo 28 de la presente ley, se manifestarán en los mismos términos fijados en el artículo anterior, la racionalidad con que deben ser considerados, pidiendo también su certificado de naturalización como en el artículo se ordena, en el caso de que fuese la mexicana.

Art. 3. Al expedir el ejecutivo los reglamentos necesarios para la ejecución de esta ley, cuidará de dictar las disposiciones convenientes a fin de que las autoridades locales le den el debido cumplimiento en la parte que les concierne. *Juan J. Baz*, diputado presidente. *Roberto Núñez*, diputado secretario. *Gildardo Gómez*, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el palacio nacional de México, a 28 de mayo de 1886. *Porfirio Díaz*. Al C. Lic. D. Ignacio Mariscal, secretario de Estado y despacho de relaciones exteriores.

Al comunicarlo a vd. para su conocimiento y fines consiguientes, le protesto mi atenta consideración.- Mariscal. Señor.

2.20. DECRETO DEL CONGRESO.
AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA
DECLARAR EN CASOS PARTICULARES,
QUE NO HAN PERDIDO SU
NACIONALIDAD LOS MEXICANOS
QUE LLEVEN MÁS DE 10 AÑOS
DE RESIDIR EN EL EXTRANJERO.
DICIEMBRE 12 DE 1891

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el siguiente:

“Porfirio Díaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitante sabed: Que el Congreso de la Unión ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para declarar, en casos particulares, y a solicitud de los interesados, que no han perdido su nacionalidad los mexicanos que lleven más de diez años de residir en el extranjero, sin haber solicitado el permiso prevenido por las leyes, ni hallarse comprendidos en alguna de las excepciones, siempre que aparezca que esa omisión ha provenido de ignorancia acerca de la legislación vigente.

M.O. de Montellano, diputado presidente. Ignacio Pombo, senador presidente. Pedro Sánchez Castro, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en México, a 12 de Diciembre de 1891. Porfirio Díaz.– Al C. Lic. Ignacio Mariscal, Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores”.

Y lo comunico a vd. para su conocimiento y demás fines. Mariscal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dicho proyecto tiene como base primera la de permitir la libre entrada a la República de todo elemento que no sea notoriamente nocivo en el orden moral ni en el

sanitario, no estableciéndose más prohibiciones que las indispensables y comúnmente impuestas por todas las naciones.

Obrar de otra manera sería contrario a los intereses generales del país, pues impediría que la escasez de brazos, que tanto se resiente en toda clase de trabajo y en toda la extensión de la República, pudiera encontrar el importante alivio de la inmigración de trabajadores extranjeros.

Se ha procurado en el proyecto establecer las formas de inspección más sencillas y fáciles, para no molestar, sino en los límites de lo estrictamente indispensable, a los extranjeros que lleguen, y se han establecido, para su tratamiento, las reglas más de acuerdo con los principios de humanidad, aunque sin crear gravamen alguno para el erario en favor de los inmigrantes, porque sería injusto gravar a los nacionales y a los extranjeros ya residentes, para ejercer, con los que lleguen, actos que propiamente debieran calificarse de filantrópicos.

Por estos motivos no se prohíbe la entrada de los extranjeros afectados de enfermedades transmisibles de carácter agudo que lleguen por puertos de mar, sino que se prescribe que sean aislados en lazareto hasta su curación. Solamente a los extranjeros que a su arribo padezcan de una enfermedad transmisible de carácter crónico, no se les permite que desembarquen, salvo el caso de que obtengan un permiso especial, porque aseguren que a sus propias expensas se pondrán en curación, manteniéndose aislados en local adecuado.

Otra de las bases fundamentales del proyecto es la de la más completa igualdad de todos los países y de todas las razas, no estableciendo un solo precepto especial para ciudadanos de alguna nación, ni para los individuos de raza determinada. El Ejecutivo no encuentra por ahora motivo para establecer distinción alguna, y, por lo mismo, no consulta en su proyecto sino disposiciones de aplicación común y general para todos.

Para la formación del proyecto, se han tenido a la vista varias de las leyes expedidas sobre la materia en los Estados Unidos de América, y algunos de sus principios han sido aceptados por considerárseles aplicables a México, puesto que, en el fondo, la vecina República y nosotros, lo mismo que la inmensa mayoría de las naciones, tenemos el mismo interés en defender nuestra salubridad, tanto en el orden material cuanto en el moral; pero como la situación de los Estados Unidos, en aumento de su población y a las consiguientes necesidades de atraer o rechazar determinada calidad de inmigrantes, es notoriamente diversa de las condiciones en que nuestro país se encuentra, no se ha aceptado en el proyecto el conjunto de las medidas restrictivas establecidas en dichas leyes.

Respecto de la emigración, el Ejecutivo no estima necesario, por ahora, proponer a la sabiduría del Congreso, medida alguna, pues considera que no hay motivo para modificar ni para ampliar las disposiciones que, respecto a la expatriación, contiene la Ley de Extranjería y Naturalización de 28 de mayo de 1886.

2.21. LEY DE INMIGRACIÓN DE 1909

Capítulo I

Disposiciones generales.

Art. 1. Los extranjeros que vengan a la República, solamente podrán entrar en ella:

- I. Por los puertos de altura;
- II. Por los lugares fronterizos habilitados para el comercio internacional o que especialmente designe el Ejecutivo.

Art. 2. Todo extranjero que pretenda entrar al territorio nacional, será sometido a reconocimiento, para determinar si puede ser admitido conforme a esta Ley.

Igualmente serán reconocidos los mexicanos, con objeto de tomar las precauciones necesarias en el caso de que padezcan enfermedades transmisibles.

Art. 3. No tendrán derecho a entrar los extranjeros comprendidos en las siguientes clases:

- I. Los enfermos de peste bubónica, cólera, fiebre amarilla, meningitis cerebro-espinal, fiebre tifoidea, tifo exantemático, erisipela, sarampión, escarlatina, viruela, difteria, o de cualquier otra enfermedad aguda que deba considerarse transmisible, en virtud de declaración del Ejecutivo;
- II. Los enfermos de tuberculosis, lepra, beri-beri, tracoma, sarna egipcia, o de cualquier otra enfermedad crónica que deba considerarse transmisible, en virtud de declaración del Ejecutivo;
- III. Los epilépticos y los que padecen enajenación mental;
- IV. Los que, por ancianos, raquíticos, deformes, cojos, mancos, jorobados, paralíticos, ciegos, o de otro modo lisiados, o por cualesquiera defectos físicos o mentales, sean inútiles para el trabajo y hayan de convertirse en una carga para la sociedad;

- V. Los niños menores de dieciséis años que no vengan bajo la dependencia de otro pasajero, ni consignados a personas residentes en el país y que haya de tomarlos a su cargo;
- VI. Los prófugos de la justicia y los que hubieren sido condenados por delito que, conforme a las leyes mexicanas, debiera castigarse con pena corporal de más de dos años, con excepción, para unos y otros de los delitos políticos o meramente militares;
- VII. Los que pertenezcan a sociedades anarquistas, o que propaguen, sostengan o profesen la doctrina de la destrucción violenta de los gobiernos o el asesinato de los funcionarios públicos;
- VIII. Los mendigos y personas que de cualquier modo vivan de la caridad pública;
- IX. Las prostitutas y los individuos que intenten introducirlas en el país para comerciar con ellas o vivir a sus expensas.

Art. 4. Los extranjeros comprendidos en las fracciones II, III y IV del artículo anterior, podrán entrar y permanecer en el país por concesión especial del Ejecutivo, siempre que otorguen la caución que éste considere suficiente para garantizar, según fuere el caso, que a sus propias expensas se pondrán en curación, manteniéndose aislados en el local adecuado al objeto, o que no se convertirán en una carga social.

Art. 5. Si un extranjero que hubiere fijado su residencia en la República y declarado en forma autorizada por la Ley su intención de naturalizarse mexicano hiciere venir a su esposa, a sus padres o a sus hijos menores, y alguno de ellos padeciere enfermedad de las comprendidas en las fracciones II y III del artículo

3o., el Ejecutivo podrá permitir la entrada del enfermo fijando las condiciones a que haya de estar sujeto, en los términos del Reglamento de esta Ley.

Art. 6. Los extranjeros que hayan residido en la República por más de 3 años y que vuelvan a ella sin haber estado ausentes más de uno, serán equiparados a los mexicanos, para los efectos de esta Ley.

Art. 7. Cuando se encuentre un extranjero que haya entrado durante la vigencia de esta Ley y con violación de sus preceptos, el Ejecutivo podrá ordenar que sea remitido al país de su procedencia, si el extranjero no tuviere más de tres años de residencia en la República al ser detenido. La expulsión se hará en buque o ferrocarril de la misma empresa a que pertenezca aquel en que haya venido al país, y si esto no fuere posible, en otro buque o ferrocarril a costa de dicha empresa.

Art. 8. El Ejecutivo podrá suspender, con los requisitos que en cada caso estime convenientes, la expulsión de algún extranjero entrado con violación de esta Ley, si a su juicio fuere necesario su testimonio en alguna causa penal.

Art. 9. Las compañías navieras y las de inmigración, son pecuniariamente responsables de las violaciones de esta Ley, cometidas por sus empleados y agentes: en consecuencia, cuando el comandante de un buque o el médico de a bordo no cubran

las multas que se les impusieren, se harán efectivos en bienes de la correspondiente empresa.

Art. 10. Los preceptos de esta Ley no son aplicables a los agentes diplomáticos extranjeros, ni a sus familias y séquitos, ni a las personas exceptuadas de la jurisdicción territorial, conforme a las reglas de derecho internacional.

Art. 11. La Secretaría de Gobernación dictará los reglamentos necesarios para el exacto cumplimiento de esta Ley, y por medio de acuerdos y disposiciones generales resolverá las dudas que en su aplicación puedan suscitarse.

Capítulo II

De la entrada de pasajeros por puertos de mar.

Art. 12. A la llegada de un buque que conduzca pasajeros que hayan de desembarcar en la República, se observarán las reglas siguientes:

- I. El comandante del buque presentará al inspector de inmigración listas por duplicado, de todos los pasajeros, numeradas ordinalmente y expresando respecto de cada uno el nombre y apellido, sexo, edad, estado civil, nacionalidad, raza, oficio u ocupación, grado de instrucción, última residencia en el extranjero, puerto de embarque y punto de final destino en el país. Las listas serán cuantas fueren necesarias para que ninguna comprenda más de treinta pasajeros.
- II. En la lista se anotará con toda claridad y precisión cuáles sean los pasajeros que vengan enfermos, con expresión de su enfermedad, bajo la fe del médico de a bordo, quien las firmará en unión del comandante, protestando que son exactas las noticias que contienen;
- III. Cada pasajero deberá tener una tarjeta, que le dará el comandante del buque, expresando el nombre completo de aquél y el número que le corresponda en la lista respectiva, para que pueda ser fácilmente identificado;
- IV. También anotará el comandante en las listas, todos los informes que tenga respecto de los pasajeros, para determinar si algunos de ellos no deben ser admitidos en la República;
- V. Cada pasajero será sometido a un reconocimiento médico para investigar si está enfermo o si tiene algún defecto que motive su expulsión.

El comandante del buque que infringere cualquiera de las disposiciones de este artículo o que dejare de hacer constar en las listas el verdadero estado de personas comprendidas en cualquiera de los casos que menciona el artículo 3º., será castigado administrativamente con la pena de cien a quinientos pesos de multa. La misma pena se impondrá al médico de a bordo, si autorizare con su firma declaraciones falsas.

Art. 13. El desembarque deberá efectuarse precisamente en el sitio y a la hora que hubiere señalado el inspector de inmigración, observándose todas las precauciones que éste disponga para impedir cualquier desorden o que entren personas que no tengan derecho de hacerlo.

El desembarque que se hiciere en sitio u hora que no sean los señalados por el inspector, se considerará ilegal, y todas las personas que hubieren llegado a tierra serán reembarcadas inmediatamente, aplicándose al comandante del buque la pena de cien a mil pesos de multa, o la de arresto mayor, o ambas a juicio del juez.

Art. 14. Cuando lo permitiere la capacidad de la estación sanitaria, a la llegada del buque serán recibidos en ella los pasajeros, para ser sometidos a los reconocimientos que fueren necesarios, a efectos de determinar acerca de su admisión o de las precauciones a que hayan de sujetarse conforme a esta Ley y sus reglamentos.

Los pasajeros que no deban de ser admitidos serán reembarcados desde luego.

Si la estación sanitaria no tuviere capacidad suficiente, los reconocimientos se harán a bordo del buque.

Art. 15. Los pasajeros que a su arribo se encuentren enfermos de alguna enfermedad transmisible de las que expresa la fracción I del artículo 3º., serán aislados en el lazareto del puerto, hasta que estén sanos. Los gastos de asistencia y curación serán por cuenta del pasajero mismo y si éste careciera de recursos, de la empresa que lo haya conducido. Cuando se trate de mexicanos insolventes, los gastos serán a cargo de la administración pública.

Art. 16. A los extranjeros que a su arribo se encuentren enfermos de alguna enfermedad transmisible de las comprendidas en la fracción II del artículo 3º., no se les permitirá que desembarquen, a no ser que hayan obtenido concesión especial del Ejecutivo, conforme al artículo 4º.

Art. 17. A los mexicanos enfermos de alguna enfermedad transmisible de las que expresa la fracción II del artículo 3º. se les permitirá que desembarquen y se les consignará para su aislamiento y curación, al correspondiente hospital, a no ser que otorguen caución suficiente para garantizar que a sus expensas se pondrán en curación y se mantendrán aislados, observando en su caso las disposiciones de las leyes sanitarias.

Art. 18. Cuando llegare a desembarcar algún extranjero que tenga enfermedad de las comprendidas en la fracción II del artículo 3º. o que resulte con algunos de los motivos de exclusión que señalan las fracciones III a IX del mismo artículo, se les hará reembarcar desde luego en el mismo buque y si éste hubiere ya salido, en el buque de la misma empresa que salga inmediatamente después para el país de procedencia, o en cualquier otro que salga con ese destino, si la empresa no despachare alguno en el término de un mes.

Los pasajeros que hayan de ser reembarcados permanecerán bajo custodia en la estación sanitaria o en otro lugar que designe el inspector de inmigración por cuenta de la empresa que los haya transportado a la República.

Art. 19. Cuando el comandante del buque se negara a cumplir una orden para el reembarque de extranjeros, se le impondrá administrativamente una multa de cien a quinientos pesos y el buque no será despachado mientras no se cumpla dicha orden. La empresa pagará también una multa igual a la que se imponga al comandante y a su costa se hará la remisión del extranjero o extranjeros en otro buque.

Si el buque que condujo a los extranjeros expulsados hubiere ya salido, la orden de reembarque se dará a la empresa que los hubiere transportado y a ella se impondrá la pena fijada en el párrafo anterior, si no obedeciere.

Capítulo III

De los inmigrantes-trabajadores y de las empresas de inmigración.

Art. 20. Para los efectos de esta Ley, se consideraran como inmigrantes-trabajadores los extranjeros que vengan a la República, para dedicarse, temporal o definitivamente, a un trabajo corporal. Bajo la misma denominación se comprende a las personas que constituyan la familia de un inmigrante-trabajador.

Respecto de la entrada de inmigrantes-trabajadores, se observarán las disposiciones de este capítulo y del anterior.

Art. 21. La entrada de inmigrantes-trabajadores, cuando vengan en número mayor de diez en el mismo buque, solamente se permitirá por los puertos señalados al efecto por el Ejecutivo.

Art. 22. Las empresas navieras cuyos buques estén destinados exclusivamente al transporte de inmigrantes-trabajadores, o que de ordinario traigan más de diez de ellos en cada uno de sus viajes, estarán obligadas:

- I. A dotar sus buques de los aparatos y útiles necesarios para hacer su desinfección en términos que aseguren la destrucción de los gérmenes patógenos;
- II. A que haya siempre en cada buque un médico de a bordo;
- III. A tener en los puertos para donde conduzcan inmigrantes, si el gobierno no tuviere establecimientos sanitarios con capacidad suficiente, estaciones destinadas al aislamiento y observación de aquellos y a la asistencia de los que resulten enfermos, con capacidad para alojar el *maximum* de los que traigan en un viaje y conforme a los reglamentos y acuerdos que dicte el Ejecutivo;
- IV. A mantener y atender en todo, por su cuenta, y en los términos que ordene el Ejecutivo, a los inmigrantes que hayan transportado, mientras permanezcan en los lazaretos o de observación;
- V. A conducir de regreso en sus buques y por su cuenta, a los inmigrantes que no sean admitidos conforme a esta Ley y a los que fueren expulsados por haber entrado ilegalmente, siempre que unos u otros hayan venido en buques de la empresa;
- VI. A tener en la Ciudad de México, un representante con facultades bastantes para tratar de los asuntos que se ofrecieren y a quien se puedan hacer efectivas las responsabilidades en que incurra la empresa y otro representante con esas mismas calidades en cada uno de los puertos para donde conduzcan inmigrantes sus buques;

VII. Otorgar caución suficiente, a satisfacción del Ejecutivo, de que cumplirán con las obligaciones que les impone esta Ley, y a reponer esa caución siempre que sea necesario.

Art. 23. Las empresas que no dieren cumplimiento a las obligaciones que señalan las fracciones I, II y VII del artículo anterior, serán requeridas por el Ejecutivo para hacerlo, y si no lo verificaren en el término que se les señale, no les será admitido en los puertos mexicanos, buque alguno que traiga inmigrantes.

Cuando una empresa no cumpliera con las obligaciones que les impone las fracciones IV y V del precedente artículo, se hará efectiva, en la cantidad que fuere necesaria, la caución a que se refiere la fracción VII del mismo artículo, o usando de la facultad económico-coactiva, se exigirá a la empresa el pago de la suma debida, si dicha caución no estuviere constituida o no fuere bastante.

Art. 24. Cuando uno traiga mayor número de inmigrantes que el que pueda contener la estación sanitaria del gobierno, y la que tenga la respectiva empresa, sólo se podrá autorizar el desembarque del número que quepa en dichas estaciones; los demás sufrirán su reconocimiento y, en su caso, el periodo de observación o de curación, a bordo del buque.

Cuando llegare un buque sin tener estación sanitaria ni haber arreglado disponer de la otra empresa para sus inmigrantes, y no hubiere estación del gobierno o no se pudiese disponer de ella, los inmigrantes que conduzca permanecerán a bordo y sufrirán en el buque su reconocimiento y, en su caso, el periodo de observación o de curación que se les impusiere.

Art. 25. Cuando se trate de buques que traigan en cantidad considerable inmigrantes-trabajadores contratados para el servicio de empresas mineras, industriales o agrícolas, el Ejecutivo podrá permitir el desembarque en puertos que no sean de los autorizados para la entrada ordinaria de inmigrantes, observándose en cada caso las precauciones que al efecto determine el Ejecutivo para asegurar el cumplimiento de esta Ley.

Art. 26. Cuando en un mismo buque vengán pasajeros comunes e inmigrantes-trabajadores, las listas que de estas deban formarse con arreglo al artículo 12, serán por separado.

Art. 27. Además de las listas generales que previene el artículo 12, se formarán listas especiales de los enfermos.

Art. 28. Cuando no hubiere enfermos infecciosos entre los inmigrantes, ni los hubiere en los últimos diez días de la travesía, ni tampoco hubiera tocado el buque puerto sospechoso o infestado, los inmigrantes quedarán en completa libertad para internarse o entrar en el país, luego que hubiere terminado su reconocimiento.

Art. 29. Los inmigrantes-trabajadores podrán ser sometidos a un periodo de observación hasta de diez días, cuando hubiere entre ellos individuos enfermos o sospechosos de alguna enfermedad transmisible, o los hubiere habido durante la travesía y, en general, en cualquier otro caso en que lo disponga el Ejecutivo.

Art. 30. Si durante el periodo de observación se descubrieran inmigrantes en quienes concurra alguno de los motivos de exclusión enumerados en el artículo 3º., serán reembarcados en los términos del artículo 18.

Art. 31. Los inmigrantes que no estén vacunados lo serán en la estación sanitaria.

Art. 32. Las estaciones sanitarias de las empresas de inmigración, así como el personal que les sirva, estarán a las órdenes y bajo la vigilancia del delegado sanitario del puerto.

Art. 33. Los gastos que se originen en el sostenimiento de las estaciones sanitarias de las empresas de inmigración, sus reparaciones, mueblaje, útiles y enseres, alimentación de los inmigrantes, medicinas, sueldos de médicos y del personal necesario, serán por cuenta de la empresa respectiva.

Capítulo IV

De la entrada de pasajeros por vía terrestre.

Art. 34. La entrada de pasajeros por vías terrestres se sujetará a las reglas siguientes:

- I. El reconocimiento que prescribe el artículo 2º. se hará a bordo de los trenes de ferrocarril.
- II. El inspector de inmigración recogerá de cada pasajero, por medio de boletas, los datos que enumera la fracción I del artículo 12;
- III. Para no detener por largo tiempo los trenes de ferrocarril, se enviarán agentes que a bordo de los carros reconozcan a los pasajeros y recojan de ellos los datos necesarios;
- IV. Cuando los pasajeros no lleguen por ferrocarril, podrán ser detenidos en los lugares de entrada el tiempo necesario para examinarlos y recoger los datos que previene la fracción I del artículo 12;
- V. Los trenes de ferrocarril que conduzcan exclusivamente inmigrantes trabajadores o en que vengan más de treinta de estos, serán detenidos a su entrada al territorio nacional, con objeto de que desde luego se haga el reconocimiento de los inmigrantes y se recojan de ellos los datos correspondientes;
- VI. Los extranjeros enfermos de alguna enfermedad transmisible, serán excluidos desde luego y sólo se les permitirá la entrada mediante la caución que previene el artículo 4º.;
- VII. A los extranjeros sospechosos de padecer de una enfermedad transmisible, se les permitirá que permanezcan en el lugar de entrada aislados y en observación, siempre que aseguren el pago de su asistencia.

Los pasajeros que hicieren declaraciones falsas serán castigados administrativamente, con multas de cinco a veinte pesos o arrestos de tres a quince días.

Art. 35. El inspector de inmigración podrá fijar horas y sitio para la entrada de pasajeros que no vengan por ferrocarril. También podrá fijar horas para la entrada de trenes extraordinarios con pasajeros.

La entrada que se haga a hora o por sitios no autorizados, será castigada imponiendo a los conductores, maquinistas, cocheros y demás empleados a cuyo cargo esté el tren, y a los que hubieren ordenado su entrada, la pena de cien a mil pesos de multa, o la de arresto mayor, o ambas, a juicio del juez.

Si la entrada se hubiere hecho por ferrocarril, los pasajeros ilegalmente entrados serán castigados con multas de diez a cien pesos o con arresto mayor hasta de dos meses.

Capítulo V

De la jurisdicción administrativa en materia de inmigración.

Art. 36. Todo lo relativo a inmigración dependerá de la Secretaría de Gobernación, la que administrará el ramo por medio de los funcionarios y cuerpos siguientes:

- I. Inspectores de inmigración que se establecerán en los puertos y lugares fronterizos por las cuales esté autorizada la entrada de pasajeros procedentes del exterior;
- II. Agentes auxiliares que, en los términos que dispongan los reglamentos o los acuerdos que dicte el Ejecutivo, bajo las órdenes y vigilancia del respectivo inspector, auxiliarán a éste en sus labores, y desempeñarán las funciones que les delegue;
- III. Consejos de inmigración, que se establecerán en cada uno de los lugares en que hubiere inspectores y que se compondrán de tres personas especialmente nombrados al efecto, o si no se hicieren nombramientos especiales del delegado sanitario, del administrador de la aduana o jefe de sección aduanera y de otro empleado federal que de común acuerdo designe los dos expresados.

Art. 37. En los lugares donde no hubiere inspector de inmigración, los delegados sanitarios desempeñarán las funciones que a aquél corresponden.

Art. 38. Las resoluciones de los inspectores relativas a admisión, exclusión o expulsión, serán revisadas por los consejos de inmigración, siempre que lo pida el mismo individuo interesado, el comandante del buque o su consignatario, el representante de la empresa que haya conducido al pasajero, o el delegado sanitario.

Las resoluciones se harán constar por escrito bajo la firma del inspector o de los miembros del consejo que las dicte.

Art. 39. Corresponde a los inspectores de inmigración imponer las penas administrativas que fije esta Ley. Sus determinaciones serán revisadas por la Secretaría de Gobernación, la cual tendrá la facultad de confirmarlas, derogarlas o modificarlas.

Si las penas fueren pecuniarias, se exigirá su inmediato pago y su importe quedará en depósito entre tanto la Secretaría de Gobernación revisa la pena.

Si la pena que debe imponerse fuera corporal, el responsable será detenido inmediatamente, dándose cuenta a la Secretaría de Gobernación por telégrafo.

Capítulo VI

De la jurisdicción penal concerniente a esta ley.

Art. 40. Los tribunales federales son competentes para conocer de todos los casos de violación de la presente Ley.

Art. 41. En los lugares en donde no resida juez de distrito los jueces del fuero común practicarán, en auxilio de la justicia federal, las primeras diligencias y podrán dictar el auto de formal prisión y aún poner el negocio, con autorización del tribunal federal competente, en estado de sentencia. Para este efecto y en todo caso, darán aviso al juez de distrito que corresponda, siempre que tomen conocimiento de un negocio de este género.

TRANSITORIO

Se derogan, el artículo 49 del Código Sanitario y en general, todas las disposiciones que se opongan a los preceptos de esta Ley, que comenzará a regir el primero de marzo de mil novecientos nueve.

J.R. Aspe, Diputado presidente. Emilio Rabasa, Senador vicepresidente. Guillermo Povs, Diputado secretario. A. Castañares, Senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a 22 de diciembre de 1908. Porfirio Díaz. Al C. Ramón Corral, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. Presente.

Libertad y Constitución. México, diciembre 22 de 1908. Corral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La experiencia ha venido demostrando de manera elocuente y reiterada, las graves deficiencias de que adolece la Ley de Inmigración de los Estados Unidos Mexicanos, de 22 de diciembre de 1908, actualmente en vigor; pues si sus disposiciones pudieron responder a las necesidades de la época en que fueron promulgadas, en la actualidad, más bien que encauzar de manera satisfactoria la inmigración extranjera, constituyen un obstáculo grave, que impide al Gobierno seleccionar los elementos extraños que vienen a mezclarse con nuestra sociedad, y permiten la constante entrada de individuos no tan sólo no deseables, sino abiertamente nocivos y peligrosos para nuestro pueblo y para nuestra patria.

A la luz de la expresada Ley, el Ejecutivo se encuentra casi imposibilitado para impedir o suspender, aun cuando sea temporalmente, la entrada de braceros al territorio nacional; por lo cual quedan nuestros trabajadores expuestos a sufrir las consecuencias del exceso de oferta y la competencia de elementos que, por su situación especial, ofrecen su trabajo a cambio de jornales ínfimos, impidiendo el mejoramiento de nuestras clases laborantes y determinando la constante emigración de trabajadores que buscan en el extranjero mejores condiciones.

La emigración todavía no ha sido objeto de reglamentación legal alguna y, por lo mismo, el Gobierno no tan sólo carece de medios legales para controlarla, sino que se ve obligado a vencer dificultades de conteo, para la formación de la estadística correspondiente.

Es innegable que la migración extranjera a nuestro territorio puede constituir un factor poderosísimo para el progreso de la nación; pero para que esto sea, es indispensable que el Poder público esté en posibilidad de seleccionar los inmigrantes y de excluir a los individuos que, por su moralidad, su índole, su educación, sus costumbres y demás circunstancias personales, no sean elementos indeseables o constituyan un peligro de degeneración física para nuestra raza, de depresión moral para nuestro pueblo o de disolución para nuestras instituciones políticas.

El Gobierno debe tener asimismo el poder suficiente para suspender, en determinados casos, la entrada de inmigrantes, cuando ésta, por cualquier motivo, venga a alterar la situación económica del país, a producir el desequilibrio entre sus fuerzas productivas, o a causar perjuicios a nuestras clases trabajadoras; principalmente en la actualidad, en que, como una consecuencia de las graves alteraciones que han conmovido a casi todas las naciones del mundo, grandes masas de población buscan su acomodo, emigrando para países que, por estar poblados con menor intensidad o por sus recursos naturales, les ofrecen mejores oportunidades para radicarse.

Por estas consideraciones y por el alarmante incremento de la corriente de elementos extranjeros perniciosos que constantemente están pugnando por entrar a nuestro territorio lográndolo muchas veces, a pesar de las autoridades, el Ejecutivo Federal ha formulado el proyecto de Ley de Migración adjunto que, en uso de la facultad que le concede el artículo 71 de la Constitución de la República, somete a la aprobación de las Cámaras.

El proyecto reproduce en gran parte las disposiciones de la ley vigente, pero contiene importantes innovaciones, sugeridas por la observación de las necesidades; reglamenta la emigración y organiza sobre bases más amplias los servicios de migración.

Se establece la obligación que tiene todo inmigrante, de someterse a la inspección de las autoridades de migración y de comprobar ante ellas que observa buena conducta y tiene profesión o manera honesta de vivir.

Esta disposición contenida en los artículos 6º. y 8º. del proyecto, es indispensable si se tiene en cuenta, en primer lugar, que no debe permitirse la entrada al territorio nacional de ningún individuo que no reúna tales requisitos y en segundo, que si no carga con la prueba el inmigrante, las autoridades de migración que carecen de toda clase de elementos para comprobar la condición de los extranjeros que se les presentan, tratando de inmigrar, se verán imposibilitadas para excluir a los que carezcan de tales calidades.

Por estas mismas razones, el artículo 8º del proyecto sanciona el principio contenido en el artículo 63 del Reglamento vigente, de que la prueba de las presunciones será suficiente para conceptuar a un inmigrante comprendido en los casos de exclu-

sión; pues sería imposible para los inspectores comprobar en muchos casos las calidades personales de extranjeros que viniendo de lugares remotos, se presentan por primera vez a las inspecciones.

En concordancia con tales disposiciones, el artículo 98, fracción II, faculta a nuestros cónsules en el extranjero para extender a los inmigrantes certificados de buena conducta, cuando ésta les conste de ciencia cierta. Así pues, los inmigrantes que reúnan los requisitos legales, podrán proveerse de tales certificados en el lugar de su salida, preestableciendo una prueba a su favor que les simplifique las molestias legales en el lugar de la inspección y satisfagan las exigencias de la ley.

El artículo 7º enumera los casos en que los extranjeros no tienen derecho a inmigrar en la República. Reproduce el artículo 3º de la ley anterior, ampliando la enumeración de los casos de exclusión, de conformidad con las necesidades actuales: establece en su fracción V que los niños varones menores de edad y las mujeres menores de 25 años, que no vengan bajo la autoridad de persona de su familia mayor de edad, o consignados a persona honorable, mayor de edad, residente en el país, que haya de tomarlos a su cuidado y hacerse responsable de su sostenimiento y educación, no podrán ser admitidos como inmigrantes.

Esta disposición tiende a evitar la entrada de individuos que conforme a la Ley Civil no tengan el pleno goce de sus derechos, y que tales individuos puedan convertirse, por su falta de preparación y de apoyo, en una carga para la sociedad, o en sujetos nocivos por la perniciosa influencia que en su condición podrían ejercer los elementos maleantes que por desgracia existen en todas las sociedades. Para las mujeres se fija la edad de 25 años, por considerar que en ella la mujer tiene suficiente discernimiento y cabal desarrollo físico y mental, para poder vivir por sí sola, con menor peligro de constituirse en elemento perjudicial para la sociedad.

La fracción VI dispone que no sean admitidos en el país los varones mayores de edad que no sepan leer y escribir por lo menos un idioma o dialecto, con excepción de los ascendientes y los descendientes de algún inmigrante legalmente admisible, o de algún extranjero residente en el país o de algún ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización.

Todos los países se preocupan por la grave carga que constituye la población iletrada y principian a prohibir la entrada de tales elementos a su territorio. Con mayor razón debe preocuparse el Ejecutivo Federal por evitar que el crecido número de analfabetas existente en el país para cuya ilustración se ha iniciado vigoroso esfuerzo, vengan a sumarse los extranjeros que emigren al territorio nacional.

La fracción IX prohíbe la entrada de los toxicómanos y de los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas heroicas, lo fomenten o exploten.

Es tal la necesidad de esta medida por el notorio incremento que ha tomado en todo el mundo el uso de las drogas heroicas, con gravísimo peligro para las razas que se degeneran y para las sociedades que sufren trastornos de orden moral, que no es necesario recomendar a esa H. Cámara la conveniencia de tal disposición.

Finalmente, la fracción XII previene que no se permita la entrada al territorio nacional a los extranjeros que no demuestren traer recursos pecuniarios suficientes para subsistir en él por un término de dos meses por lo menos. Así se evitará que los inmigrantes puedan constituirse desde su llegada en una carga social por su carencia de recursos para subsistir y por las dificultades para conseguir desde luego alguna ocupación o establecer cualquier industria. El proyecto estima que el término de dos meses es racionalmente bastante para que los inmigrantes no braceros puedan proveer por su propio esfuerzo a su sostenimiento.

Los artículos 16 y 17 del proyecto establecen el uso de tarjetas de identificación para los inmigrantes, las cuales servirán a los interesados para comprobar en cualquier momento su calidad de extranjeros y que han cumplido con las leyes de migración; y facilitarán a las autoridades sus labores de hacer cumplir la Ley de Migración, las violaciones de la cual serán en esta forma más fáciles de comprobar. Dichas tarjetas en ninguna forma constituyen un requisito previo para inmigrar, sino que, por el contrario, serán una constancia de haber inmigrado legalmente.

Se impone a los comandantes de buque la obligación de presentar, además de las listas de pasajeros que establece la ley vigente, una de tripulantes que evitará desembarquen clandestinamente miembros de la tripulación o embarquen nuevos sin llenar los requisitos que establece la Ley para emigrar.

Igualmente se manda que las personas que desciendan al puerto durante la permanencia del buque, se provean de una carta de identificación que les extenderá el comandante, a fin de evitar que en esta forma se queden individuos que no llenen los requisitos para inmigrar.

Se considera igualmente la facultad de las autoridades de migración para reglamentar las visitas de particulares a los buques, puesto que tales visitas pueden constituir un medio para violar la ley, inmigrando o emigrando ilegalmente.

Dado el desarrollo que ha alcanzado la navegación aérea se ha creído conveniente establecer las reglas a que debe sujetarse la inmigración que se haga por tales medios; y de ello se ocupa el capítulo IV del proyecto, equiparando el tráfico aéreo con el marítimo, en lo conducente.

Para designar el espacio que se encuentra sobre el territorio nacional y sus aguas territoriales, se emplea la expresión *espacio territorial* por las analogías jurídicas que existen entre él y las aguas llamadas territoriales.

El artículo 43 impone a los inmigrantes la obligación de presentarse a la Oficina de Migración; de tal manera que, aun cuando los servicios, por cualquier motivo, no sean tan eficientes como sería de desearse, todos los que pretendan inmigrar, tendrán la obligación de presentarse a cumplir con la ley ante los inspectores.

El capítulo VI, que trata de la inmigración de colonos y trabajadores, reproduce las disposiciones relativas de la ley vigente, con las modificaciones que demandan las necesidades. Así, se faculta al Ejecutivo para prohibir temporalmente la entrada de trabajadores extranjeros cuando a su juicio exista escasez de trabajo en el país.

Igualmente se faculta al Presidente de la República para permitir la entrada de colonos y trabajadores en determinados casos, aun cuando se encuentren comprendidos en algunos de los motivos de exclusión enumerados por el artículo 7°.

El capítulo VII se ocupa de reglamentar la emigración, imponiendo a los emigrantes la obligación de presentarse a la Inspección de Migración del lugar de salida para llenar los requisitos que marca la ley.

Se establece el uso de tarjetas de identificación que sirvan a los emigrantes para comprobar que cumplieron con la Ley al abandonar el país y a los nacionales para demostrar, además, su carácter de tales ante nuestros funcionarios diplomáticos y cónsules en el extranjero.

Como sanción a la falta de cumplimiento de los preceptos de este capítulo, se faculta a los funcionarios diplomáticos y consulares para rehusarse a inscribir en el Registro de Nacionales a quienes no comprueben haber llenado los requisitos de migración; pudiendo, asimismo, rehusarles sus auxilios cuando lo estimen conveniente.

También se faculta a las autoridades de migración para impedir la entrada al país de los extranjeros que habiendo residido en él, hayan emigrado sin llenar los requisitos que marca la ley.

Debe tenerse presente, sin embargo, que esta sanción no se estatuye como necesariamente aplicable a todas las violaciones, sino que solamente se consigna la facultad para aplicarla, el Reglamento vendrá posteriormente a establecer en cualquier caso harán uso de ella los funcionarios diplomáticos o consulares y cuando solamente se impondrá la sanción que establece el artículo 85 de la ley.

El artículo 68 impone a los mexicanos que emigren, en virtud de contrato de trabajo que deba prestarse en el extranjero, la obligación de comunicarlo al inspector de migración, exhibiendo el documento relativo, el cual debe llenar los requisitos que establece la fracción XXVI del artículo 123 de la Constitución y los que señalen las leyes reglamentarias relativas.

Se impone a los enganchadores y agentes de emigración en general, la obligación de sujetarse a lo que sobre el particular disponga el Reglamento, considerando punible el hecho de sacar trabajadores del país sin llenar tales requisitos.

Se establecen las formalidades que deben llenar los comandantes de buques y de aeronaves para salir de territorio nacional, y se faculta a las autoridades de migración para usar de la fuerza pública a fin de impedir la salida de individuos que no hayan cumplido los requisitos que establece la ley.

El capítulo VIII principia por declarar que las violaciones a la Ley de Migración se perseguirán de oficio; y establece penas administrativas y judiciales.

Corrigiendo la anomalía existente en la Ley actual, conforme a la cual solamente los inmigrantes entrados en violación de la Ley por vías terrestres son castigados, estatuye penas para todos los que penetren al país ilegalmente por cualquier medio o lugar; sin perjuicio de que sean deportados cuando se encuentren comprendidos en cualquiera de los casos de expulsión enumerados por el artículo 7°.

Para señalar las penas se han tenido en cuenta la mayor o menor gravedad de la violación, atendiendo a sus consecuencias.

Castiga con arresto mayor y multa de cien a mil pesos a los que celebren contratos de trabajo que deba prestarse en el extranjero, sin llenar los requisitos que establezca el Reglamento.

Al que sin celebrar tales contratos saque trabajadores del país, y al que aun cuando los hubiere celebrado los saque ilegalmente, se le impone la pena de uno a dos años de prisión y multa de cien a dos mil pesos, duplicando dicha pena cuando se empleare coacción o engaño para hacer salir a los trabajadores del país.

El conato, delito intentado, delito frustrado y los cómplices o encubridores, se castigan en los términos que establece el Código Penal del Distrito Federal.

Sanciona el mismo principio contenido en la ley vigente, de que las compañías de inmigración, emigración, etcétera, serán responsables pecuniariamente de las violaciones a la Ley que cometan sus empleados.

El capítulo IX se ocupa de la organización de los servicios de migración, sobre bases más amplias que las consignadas en la Ley actual.

Los artículos 87, 98, 90 y 91 establecen la Dirección General de Migración, dando así entidad propia a los servicios de migración, aumentando su eficiencia y facilitando las labores a la Secretaría de Gobernación, de que depende, para dirigir el ramo. En dichos artículos se establecen las facultades que tendrá la Dirección y la manera como será nombrado el director general.

Se suprimen los consejos de inmigración que establece la ley actual en los lugares de entrada, y en su lugar se manda el establecimiento de consejos locales de Migración, que deberán funcionar uno en cada entidad federativa, con el carácter de auxiliares y con las atribuciones que el mismo proyecto les asigna.

Igualmente se conceptúan auxiliares de las autoridades de migración, los cónsules mexicanos en el extranjero y las autoridades sanitarias, los cuales tendrán las facultades y obligaciones que la misma Ley les asigna.

Se adscribe un agente de salubridad a cada inspección para los servicios del ramo, el cual dependerá del Departamento de Salubridad, pero deberá sujetarse para el desempeño de sus funciones a lo dispuesto por la Ley de Migración y sus reglamentos.

Las funciones del agente de salubridad serán esencialmente técnicas respecto de los casos de exclusión que por motivos de salubridad contiene el artículo 7°.

La exposición que precede da una idea sucinta de los preceptos contenidos en el proyecto que tengo el honor de adjuntar; el cual, a juicio del Ejecutivo, responde a las necesidades presentes y quizá a las que puedan presentarse en un futuro próximo en el ramo de migración.

2.22. LEY DE MIGRACIÓN DE 1926

Capítulo I

Disposiciones generales.

Art. 1. Todo individuo puede inmigrar al territorio nacional o emigrar, con las limitaciones establecidas en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la presente Ley y su Reglamento.

Art. 2. Sólo podrá efectuarse el tránsito de inmigración y emigración, por los lugares y en horas legalmente autorizados, con la intervención de las autoridades correspondientes.

Art. 3. Son lugares autorizados para el tránsito migratorio:

- I. Los puertos de altura;
- II. Los lugares fronterizos autorizados para el comercio internacional;
- III. Los lugares fronterizos y marítimos autorizados especialmente por la
- IV. Secretaría de Gobernación.

Art. 4. La Secretaría de Gobernación puede establecer delegaciones auxiliares en los puertos marítimos o lugares fronterizos en que se autorice temporalmente el tránsito internacional. Los delegados auxiliares dependerán directamente del delegado que se designe y tendrá las atribuciones que señalen los reglamentos y acuerdos relativos.

Art. 5. La Secretaría de Gobernación dictará el Reglamento y las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley; y por medio de acuerdos resolverá las dudas que se suscitaren en su aplicación.

Art. 6. Es obligación de las autoridades del Servicio de Migración, observar y hacer cumplir el Código Sanitario vigente, y cuantas disposiciones se relacionen con la Sanidad Marítima y Fronteriza.

Art. 7. El Departamento de Salubridad Pública designará a los delegados o agentes sanitarios en los lugares que se autoricen al tránsito migratorio. En los casos de falta temporal o absoluta de dichos delegados o agentes, la designación podrá recaer

en algún médico de la localidad, y cuando no lo hubiere, en la persona no titulada que pueda desempeñar temporalmente las funciones sanitarias que correspondan.

Los delegados de Migración darán en tales casos aviso inmediato al Departamento de Salubridad, indicándole los médicos que hubiere en el lugar, o, en su defecto, las personas que puedan sustituirlos.

En caso necesario, los delegados o agentes de Migración asumirán las funciones que a los de Salubridad correspondieren, sujetándose a las instrucciones que dicte el citado Departamento.

Art. 8. Los cónsules mexicanos y el personal administrativo que de ellos dependa, son agentes auxiliares en el extranjero, del Servicio de Migración Mexicano, y, en consecuencia, les obliga el estricto cumplimiento de esta Ley y su Reglamento, así como todas las disposiciones que de acuerdo con el artículo 5° expida la Secretaría de Gobernación.

Art. 9. Las autoridades locales de los estados de la Federación, están obligadas a la observancia de la presente Ley y su Reglamento, lo mismo que de todas las disposiciones que se dicten en lo sucesivo sobre esta materia.

Art. 10. Los agentes del Resguardo Marítimo y Fronterizo, dependientes de las capitanías de puertos o de las aduanas, prestarán ayuda al personal de Migración, observando las prevenciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.

Art. 11. Los empleados de Migración deberán solicitar el auxilio de la fuerza pública para evitar que salgan o entren al país individuos que no cumplan los requisitos establecidos por la presente Ley, y por consecuencia, pueden pedir la ayuda de las capitanías de puerto, de los resguardos marítimos y fronterizos, de las fuerzas federales o de las autoridades locales, a fin de hacer cumplir todas y cada una de estas disposiciones.

Art. 12. La Secretaría de Gobernación velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones que rijan la Estadística Nacional, y llevará, además, un minucioso registro del movimiento de inmigración, emigración y repatriados.

Art. 13. Se establece en la República el Registro de Extranjeros y Nacionales, que entren o salgan del país, que se llevará de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento de la presente Ley.

Art. 14. Es obligatorio, para todo extranjero o mexicano que entre o salga del país, proveerse de una Tarjeta Individual de Identificación, de acuerdo con los requisitos exigidos en el Reglamento.

Las tarjetas de identificación no son necesarias para las personas comprendidas en las excepciones de que trata esta Ley.

Art. 15. Los cónsules mexicanos, lo mismo que los delegados de Migración de la República, tienen obligación de expedir tarjetas individuales de identificación, a solicitud escrita de los interesados, quienes deben exhibir pruebas documentales respecto a nacionalidad, estado civil, moralidad, contrato previo de trabajo, etcétera, para demostrar que se hallan en aptitud legal de emigrar o inmigrar al país.

La tarjeta de identificación no concede el derecho de inmigrar o emigrar, porque él queda subordinado al cumplimiento de los demás requisitos que impone la Ley.

Art. 16. La Secretaría de Gobernación procederá periódicamente a formar y publicar el censo del movimiento migratorio de la República.

Art. 17. La Secretaría de Gobernación tiene, exclusivamente, la facultad de dictar las providencias tendientes a evitar que emigren braceros mexicanos La Secretaría de Gobernación tiene, exclusivamente, la facultad de dictar las providencias tendientes a evitar que emigren braceros en condiciones ilegales respecto a las leyes del país a que se dirijan, o en contravención de los mandatos proteccionistas, de esta Ley y su Reglamento.

Al efecto, la Secretaría establecerá los servicios permanentes o provisionales de vigilancia en los lugares de la República que para el caso estime convenientes.

Art. 18. La Secretaría de Gobernación reglamentará, de acuerdo con las necesidades públicas y propias de cada región nacional, y conforme a convenios internacionales y especiales si los hubiere, el tránsito cotidiano y local entre poblaciones aledañas y fronterizas, con los Estados Unidos de Norteamérica, República de Guatemala u Honduras Británica.

Art. 19. El Reglamento de la presente Ley determinará las reglas a que debe estar sujeta la vigilancia de individuos de la clase de tripulantes en buques nacionales o extranjeros, que efectúen travesías de altura internacional; y, asimismo, dispondrá los requisitos para permitir en nuestros puertos el desembarque de tripulantes extranjeros y su internación al país.

Art. 20. El individuo que inmigre al país con violación de las leyes que rigen la materia, después de pagar la multa o sufrir el arresto correspondiente será conducido al lugar que designa la Secretaría de Gobernación, para ser reembarcado en su oportunidad.

Art. 21. Las solicitudes, instancias y escritos en general, que los particulares de cualquiera nacionalidad dirijan a los funcionarios de Migración, deberán, para su trámite y efectos, ser escritos en idioma español, porque sin este requisito no se les dará curso.

Art. 22. Las disposiciones de esta Ley no son aplicables a los agentes diplomáticos extranjeros, ni a los representantes de otros países que vengan a la República en comisión oficial, y por consiguiente, ni a sus familiares, empleados y servidumbre, ni a aquellas personas exceptuadas de la jurisdicción territorial, conforme a las prácticas del Derecho Internacional; pero dichos agentes o representantes deberán mostrar su identificación previamente a su internación en la República.

Capítulo II

Del impuesto del inmigrante.

Art. 23. Se crea el impuesto del inmigrante, cuyo monto general por individuos será determinado por la Ley de Ingresos.

Art. 24. En el Reglamento de la presente Ley se consignarán todos los casos de excepción para el cobro de tal impuesto.

Art. 25. Las delegaciones del Servicio de Migración serán las auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de la recaudación de tal impuesto, en la forma que determinen las disposiciones respectivas.

Capítulo III

De la inmigración.

Art. 26. Para los efectos de la presente Ley, se considera:

- I. Inmigrante: El extranjero que arribe a la República con el propósito expreso de establecerse en ella por cualesquiera causas o fines lícitos, o cuya temporalidad de establecimiento exceda, sin interrupción, más de seis meses a partir de la fecha de su internación.
- II. Emigrante: El individuo, cualquiera que sea su nacionalidad, profesión u oficio, que manifieste el propósito de abandonar, por más de seis meses, el territorio nacional, habiendo permanecido en él, sin interrupción, siendo extranjero, igual temporalidad; y los braceros mexicanos que por móviles de trabajo salen periódicamente de la República, aun cuando su ausencia sea menor de seis meses.
- III. Turistas: Con esta designación se comprende al extranjero que visita la República por distracción o recreo, y cuya permanencia en territorio nacional no excede de seis meses.
- IV. Se equiparan a los turistas, los extranjeros que vienen al país por móviles mercantiles, industriales, científicos, artísticos, familiares, siempre que su permanencia no exceda de seis meses.

Art. 27. Se exceptúan de la calidad de inmigrantes, a los siguientes:

- I. Los enviados diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados ante el Gobierno; los representantes de otros países que vengan a la República en comisión oficial, así como su familia, empleados y séquitos que los acompañen, previa declaración del jefe de la misión.
- II. El extranjero en tránsito por el territorio nacional, siempre que su permanencia no exceda de seis meses.
- III. El turista.
- IV. El extranjero radicado en el país, que haya salido de él dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que pretenda internarse nuevamente, de acuerdo con el artículo 33.
- V. El individuo que haya entrado al país ilegalmente.
- VI. Los extranjeros domiciliados en las poblaciones fronterizas con los Estados Unidos Mexicanos, ya sea de los Estados Unidos de Norteamérica, de Guatemala o de Honduras Británica, que por cualesquier fines lícitos y

previo permiso de los funcionarios de este servicio, entren a las poblaciones mexicanas aledañas.

Art. 28. El extranjero que pretenda inmigrar a los Estados Unidos Mexicanos, deberá manifestarlo previamente al cónsul de México en el lugar más próximo al de su residencia o en el de su salida, para que se le inscriba en el Registro de Extranjeros, conteste el cuestionario respectivo y se le extienda la correspondiente tarjeta individual de identificación, en la que constarán las generales del interesado, su fotografía y media filiación.

El cumplimiento de tales requisitos no concede derecho al extranjero para entrar a la República, porque, para lograrlo, será indispensable que se someta al reconocimiento de las autoridades sanitarias y de inmigración en el lugar de entrada, comprobando documentalmente que observa buena conducta y tiene algún oficio, profesión, o manera honesta de vivir, o que trae contrato previo de trabajo, y que posee los recursos que exija a los inmigrantes el Reglamento de esta Ley.

Los mexicanos sólo serán reconocidos para los efectos de Sanidad y para que sean recabados los datos estadísticos prevenidos en el Reglamento de la presente Ley.

Art. 29. No podrán internarse en la República y, por consiguiente, serán rechazados, los extranjeros comprendidos en alguno de los casos siguientes:

- I. Los que, por ancianos, raquíticos, deformes, mancos, cojos, jorobados, paralíticos, ciegos o de otro modo lisiados, sean ineptos para el trabajo y hayan de constituirse en una carga para la sociedad;
- II. Los varones menores de edad y las mujeres menores de veinticinco años, que no vengan bajo la autoridad de alguna persona de su familia, mayor de edad, o a cargo de persona honorable residente en el país, que legalmente haya de tomarlos bajo su cuidado y hacerse responsable de su sostenimiento y educación;
- III. Los varones mayores de edad que no sepan leer y escribir, por lo menos un idioma o dialecto, con excepción de los ascendientes y los descendientes de algún inmigrante legalmente admisible o de algún extranjero residente ya en el país, o, también, de algún ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización, comprendiendo esta excepción a los parientes en primer grado de los extranjeros mencionados;
- IV. Los prófugos de la justicia, los que hubieren sido condenados y no haya cumplido su condena, y los que sean perseguidos por delitos que conforme a las leyes mexicanas, o a las del país en que hayan delinquido, debieran castigarse con pena corporal de más de dos años, con excepción de los delitos políticos;
- V. Las prostitutas, los que pretendan introducirlas al país, las personas que vivan a sus expensas, las que las acompañen, los que exploten o fomenten la prostitución y los que no tengan profesión, oficio, trabajo o manera honesta de vivir;

- VI. Los toxicómanos y los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas enervantes, lo fomenten o exploten;
- VII. Los que pertenezcan a sociedades anarquistas o que propaguen, sostengan o profesen la doctrina de la destrucción violenta de los gobiernos o el asesinato de los funcionarios públicos;
- VIII. Los inmigrantes-trabajadores que no exhiban, en el momento de ser practicada la visita de inspección, el contrato previo de trabajo (requisito preferente) conforme a la legislación mexicana, no menor de un año de duración, o, en su caso, la demostración inmediata de traer recursos pecuniarios bastantes a cubrir las necesidades individuales y familiares de los mismos, por un término de tres meses, a partir de la fecha de internación, independientemente de disponer de la suma necesaria para cubrir los gastos de transporte y manutención, hasta el lugar de su destino en el país;
- IX. Los que tengan una profesión cuyo ejercicio no les sea permitido en la República;
- X. Los que no hagan el entero del impuesto del inmigrante;
- XI. Los demás que, a juicio del Ejecutivo Federal, no deban entrar al país.

Art. 30. La simple existencia de presunciones, es bastante para considerar a un inmigrante comprendido en cualquiera de los casos enumerados por el artículo anterior. En caso de duda, los inmigrantes serán detenidos en observación, a costa propia o de las compañías navieras o ferrocarrileras, bajo la vigilancia de las autoridades de Migración, mientras se efectúen las averiguaciones del caso. Incumbe a los inmigrantes exhibir la prueba documental de tener buena conducta, así como alguna profesión, oficio o manera honesta de vivir.

Art. 31. Los extranjeros que se encuentren comprendidos en la fracción I del artículo 29, sólo podrán ser admitidos en la República, por acuerdo expreso del Ejecutivo de la Unión, siempre que demuestren no convertirse en una carga para la sociedad.

Art. 32. El extranjero que hubiere fijado su residencia en la República y obtenido su carta de naturalización, podrá hacer llegar a territorio nacional a sus ascendientes y descendientes y hermanos que sean menores de edad, aun cuando alguno de ellos se halle comprendido dentro de los casos restrictivos de las fracciones I, II, III, VIII y X del artículo 29, previo acuerdo de la Secretaría de Gobernación, que fijará las condiciones para la admisión; pero el interesado está obligado a comprobar el parentesco en forma legal.

Art. 33. Al extranjero que haya residido en el país por más de cinco años y vuelve a él sin haber estado ausente más de seis meses, no se le exigirá nuevamente el cumplimiento de los requisitos de inmigración prevenidos por la Ley, siempre que su primera entrada a la República haya sido legal, así como que haya observado buena conducta durante todo el tiempo de su estancia en el país.

Art. 34. El extranjero que durante la vigencia de esta Ley, entre al territorio nacional violando las disposiciones de la misma, será expulsado del país, siempre que

no haya permanecido en territorio nacional por más de cinco años. La expulsión se efectuará en el buque que haya conducido al pasajero, en otro de la misma empresa, o en cualquiera otro y por cuenta de la compañía a que pertenezca la embarcación en que el extranjero hubiese venido al país; o, en su caso, por vías terrestres y a costa del inmigrante o del Gobierno, cuando aquél sea insolvente.

Si el extranjero hubiere sido sometido a juicio alguno, una vez extinguida la condena, será puesto a disposición de las autoridades de Migración, para que éstas procedan de acuerdo con la primera parte de esta regla.

Los gastos que ocasione el sostenimiento de los inmigrantes que deban ser rechazados, serán por cuenta de la empresa que los haya traído al país.

Art. 35. La Secretaría de Gobernación podrá suspender, con los requisitos que en cada caso estime convenientes, la expulsión de algún extranjero entrado con violación de esta Ley, si a su juicio fuere necesaria la estancia del mismo en el país.

Art. 36. El individuo que pretenda venir al país, deberá proporcionar a las autoridades consulares y de Migración, previa protesta de decir verdad, y sujeto a las sanciones que señala la presente Ley, en caso de falsedad, los informes previstos en la misma y su Reglamento, informaciones que se harán constar en la tarjeta de identificación, la que firmará por triplicado en unión del cónsul, o delegado, correspondientes.

Art. 37. Al inmigrante admitido en la República, le será sellada la tarjeta de que trata el artículo anterior, por las autoridades de Migración del lugar de entrada, haciendo constar dichos funcionarios, por medio del sello requerido, que el extranjero a quien pertenece dicho documento ha inmigrado cumpliendo las disposiciones de la presente Ley. La falta de la tarjeta de identificación o del sello respectivo, establece la presunción de que penetró a la República sin cumplir con los requisitos legales, salvo prueba en contrario.

La tarjeta perteneciente a un extranjero que haya sido rechazado por las autoridades de Migración, será recogida por éstas al efectuarse la visita de inspección reglamentaria, a fin de darle el destino que el Reglamento determine.

Art. 38. Los delegados de Migración pueden conceder permiso para que penetren al país extranjeros en tránsito por la República; pero comprobando, en cada caso, que dichos individuos reúnen todos los requisitos de inmigración, para poder entrar al país a donde se dirigen, y que no permanecerán en territorio nacional más de seis meses.

Art. 39. Las autoridades de Migración en la República, podrán impedir la entrada a territorio nacional a los extranjeros que, habiendo residido en el país, hayan emigrado sin cumplir los requisitos que establece la presente Ley, salvo lo dispuesto en el artículo 33.

Art. 40. Los artistas extranjeros contratados por compañías de espectáculos, deberán cumplir individualmente los requisitos que exige la presente Ley y su Reglamento, siempre que se propongan permanecer en la República más de seis meses; pero, en

todo caso, habrán de exhibir los contratos previos de trabajo, constituyendo en depósito la garantía pecuniaria que determine la Secretaría de Gobernación.

Los estudiantes originarios de otros países exhibirán la prueba documental de que vienen a estudiar en alguno de los planteles oficiales o particulares de la República. La Secretaría de Gobernación podrá eximirles del cumplimiento de los requisitos inmigratorios, previa solicitud individual.

Capítulo IV

De la inmigración por puertos marítimos.

Art. 41. El capitán de un buque que transporte pasajeros que hayan de desembarcar en la República, deberá cumplir todas las obligaciones impuestas por los reglamentos respectivos.

Art. 42. Los capitanes de barcos que no transporten pasajeros o tripulantes que hayan de desembarcar en la República, se sujetarán, cuando toquen puertos nacionales, a lo que dispongan los reglamentos respectivos.

Art. 43. Declarado el buque a libre plática por los funcionarios de la Delegación de Sanidad Marítima, corresponde a las autoridades de Migración subir a bordo, y, después de éstas, tocará el turno a las aduanas; pero por economía de tiempo y siempre que las condiciones sanitarias del buque lo permitan, podrán los comisionados de Migración, ir acompañando al médico de Sanidad, para dar principio a las labores propias del servicio migratorio.

Art. 44. El desembarque se efectuará en el sitio y a la hora que señale el delegado de Migración, sin perjuicio de las atenciones que en primer término corresponden a Sanidad Marítima, así como a las capitanías de puerto, debiéndose observar todas aquellas precauciones tendientes a impedir cualquier desorden, o que desembarquen individuos que no deban hacerlo.

El desembarque de pasajeros o de tripulantes que se hiciere por sitios y a la hora que no sean los indicados por el delegado de Migración, se considerará ilegal, y todas las personas que hubieren llegado a tierra, serán reembarcadas inmediatamente.

A fin de no entorpecer y demorar los servicios a cargo de la aduana respectiva, tanto las autoridades fiscales como las de Migración, procederán en estos casos de común y previo acuerdo.

Art. 45. El inmigrante que no reúna los requisitos prevenidos en esta Ley, no podrá desembarcar, salvo autorización expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 46. Las visitas de particulares a los buques, serán permitidas, con sujeción a los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley, siendo autorizadas, únicamente, por los delegados de Migración.

Art. 47. A los polizones extranjeros que lleguen en algún buque, procedente igualmente de puerto extranjero, se les impedirá el desembarque, reteniéndolos con las debidas seguridades, bajo la responsabilidad del capitán, y se les regresará en la misma

embarcación a costa de la compañía respectiva, conforme a lo determinado en el artículo 34 de la presente Ley.

Art. 48. Los buques que procedentes del exterior se dirijan a alguna de las islas de los Estados Unidos Mexicanos, transportando inmigrantes, sean o no trabajadores y contratados por cualquiera empresa o compañía, deberán cumplir las obligaciones que impone esta Ley y su Reglamento, tanto por lo que concierne individualmente a inmigrantes, cuanto por lo que respecta a tripulantes; y, al efecto, tocarán el puerto nacional autorizado más inmediato a la isla, para que la delegación de Migración que en él se halle, verifique el cumplimiento de los requisitos generales aquí previstos.

Art. 49. Concluida la visita de inspección, el delegado de Migración hará, dado el caso, una lista suficientemente explícita de extranjeros comprendidos en alguna de las prevenciones restrictivas, y que, por consiguiente, no deban desembarcar; lista que entregará, previa revista de los sujetos no admitidos, a los agentes del propio Servicio en turno de escala, para que éstos, bajo su inmediata responsabilidad, ejerzan la debida vigilancia de los rechazados.

El delegado procederá a levantar acta de la diligencia, consignando en ella todos los hechos que se hubieren registrado, así como los nombres de los individuos indeseables, documento que será suscrito por el capitán del barco, agente consignatario y por las autoridades mexicanas que en el acto hubieren intervenido. Un tanto de dicha constancia será remitido a la Secretaría de Gobernación, a la brevedad posible.

Art. 50. El delegado, una vez practicada la visita y el desembarque, se abstendrá de resolver en cualquier sentido, respecto a la admisión de los detenidos, limitándose simplemente a una intervención informativa, pues sólo a la Secretaría de Gobernación, conforme lo previsto en el artículo 45 de esta Ley, compete resolver todos y cada uno de los casos particulares.

Capítulo V

De la entrada y salida de pasajeros por vías aéreas.

Art. 51. Los aviones que conduciendo pasajeros pretendan penetrar al *espacio territorial* de la República, deberán efectuarlo por los lugares autorizados para el tránsito de inmigración en el país y a las horas reglamentarias, en el concepto de que los pilotos de aeronaves deberán estar provistos de los despachos consulares respectivos, de acuerdo con las disposiciones que sobre la materia dicten las secretarías de Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Obras Públicas, y Guerra y Marina, así como los tratados y convenciones internacionales.

Art. 52. El avión que se interne en el *espacio territorial* de la República, estará obligado a descender a la primera señal de las autoridades de Migración, y si no fuere posible efectuarlo inmediatamente, tan pronto como sea practicable el descenso.

Art. 53. El avión que conduciendo pasajeros pretenda aterrizar en cualquier lugar del territorio nacional, deberá detenerse en el lugar de entrada y someterse a la inspección de las autoridades de Migración.

Art. 54. Son aplicables a la inmigración aérea, las disposiciones de los capítulos III y IV de esta Ley.

Art. 55. Terminada la inspección reglamentaria, se entregará al piloto o conductor de la aeronave un certificado o constancia de haber llenado tal requisito, documento que estará obligado a presentar las autoridades del país, siempre que sea para ello requerido.

Art. 56. El avión que conduciendo pasajeros salga del país o de sus aguas territoriales, deberá efectuarlo precisamente por los lugares autorizados para el tránsito de Migración.

Capítulo VI

De la inmigración por vías terrestres.

Art. 57. Los extranjeros y mexicanos que pretendan entrar al país por vías terrestres, deberán presentarse a la delegación respectiva, sometiéndose al cumplimiento de los requisitos legales.

Art. 58. La inspección de inmigrantes y emigrantes será efectuada en las oficinas de la delegación respectiva, por el delegado, y, en ausencia o ayuda de éste, por el subdelegado, pues sólo en casos urgentes o por orden de la Secretaría de Gobernación podrá efectuarse la inspección a bordo de los trenes; pero siempre y en todos los casos, por el jefe de la propia oficina, quien es el responsable inmediato de las deficiencias que se registren. La calificación legal de los inmigrantes o emigrantes, no será delegada a los agentes, quienes, salvo que hubiere flagrante contravención, no podrán arrogarse la facultad de resolver sobre la procedencia o improcedencia de aceptar o repudiar a un inmigrante o emigrante.

Art. 59. Los agentes comisionados en el servicio de vigilancia, sea en garitas o a bordo de trenes, se sujetarán a las atribuciones e instrucciones que serán previstas en el Reglamento respectivo.

Art. 60. El extranjero que resulte incluido en cualquiera de las fracciones restrictivas del artículo 29, será regresado desde luego, conforme al artículo 34 de esta Ley.

Art. 61. Los delegados de Migración deberán señalar los sitios y las horas hábiles para la entrada de inmigrantes que no lleguen por ferrocarril.

Art. 62. La deportación de los inmigrantes que ilegalmente hayan entrado a la República por vías terrestres o aéreas, se efectuará por cuenta del interesado, a costa de la empresa que lo haya transportado, o en caso de insolvencia, a cargo del Gobierno.

Capítulo VII

De la inmigración de colonos y trabajadores en grupos mayores de diez.

Art. 63. Para los efectos de esta Ley, se considerarán como inmigrantes-trabajadores a los extranjeros que vengan a la República a dedicarse, temporal o definitivamente, a trabajos corporales, mediante salario o jornal; y, como colonos, a los extranjeros que vengan al país con el objeto de radicarse en una región determinada, dedicándose en

ella por su propia cuenta, a trabajos agrícolas o industriales, previos los requisitos de la Ley de Colonización.

Los familiares de los colonos y de los inmigrantes-trabajadores, serán considerados bajo las mismas denominaciones.

Art. 64. Los colonos y los inmigrantes-trabajadores que se internen a la República, deberán sujetarse a lo dispuesto en el presente capítulo, además de cumplir lo previsto en los anteriores de la presente Ley.

Art. 65. La Secretaría de Gobernación podrá prohibir temporalmente la entrada de inmigrantes-trabajadores, cuando a su juicio exista escasez de trabajo en el país; pero a este respecto, conservará siempre la facultad de hacer la selección que juzgue conveniente

Art. 66. Las empresas de transporte migratorio están obligadas a tener en la Ciudad de México un representante con facultades bastantes para tratar todos los asuntos que se ofrecieren y a quien se puedan hacer efectivas las responsabilidades en que incurran; y otro representante, con esas mismas calidades, en cada uno de los lugares de la República a donde conduzcan inmigrantes.

Art. 67. Asimismo, están obligadas a otorgar caución suficiente, a satisfacción de la Secretaría de Gobernación de que cumplirán con las obligaciones que les impone esta Ley, y a reponer esta caución siempre que sea necesario.

Art. 68. Cuando se trate de buques que transporten en cantidad considerable colonos o inmigrantes (trabajadores contratados, para el servicio de empresas mineras, industriales o agrícolas), la Secretaría de Gobernación podrá permitir el desembarque en puertos que no sean de los autorizados para la entrada ordinaria de inmigrantes, observándose, en cada caso, las precauciones que al efecto determine la misma Secretaría, a efecto de asegurar el cumplimiento de lo mandado en la presente Ley.

Capítulo VIII

De la emigración.

Art. 69. El mexicano o extranjero que pretenda emigrar del territorio nacional, deberá presentarse a las autoridades de Migración del lugar de salida, manifestando su intención de salir, el lugar de su final destino en el extranjero y los demás datos que prevenga el Reglamento, los que se harán constar en una tarjeta de identificación, que firmará el emigrante por triplicado, en unión del delegado de Migración.

Art. 70. Los emigrantes mexicanos o extranjeros recibirán del delegado respectivo un ejemplar de la tarjeta a que se refiere el artículo anterior, la que servirá para su identificación ante los funcionarios diplomáticos o consulares en el exterior y para comprobar que cumplieron las disposiciones legales al emigrar de la República.

Art. 71. La falta de tarjeta de identificación establece la presunción de que el emigrante no cumplió los requisitos determinados en esta Ley, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que a los mexicanos se les preste la protección del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a que tienen derecho, si comprueban su nacionalidad.

Art. 72. Los mexicanos que emigren de la República, en razón de cumplir un contrato de trabajo en el extranjero, deberán manifestarlo así al delegado de Emigración, exhibiendo el documento en que se haya hecho constar tal obligación. Los contratos deberán reunir los requisitos que establece la fracción XXVI del artículo 123 de la Constitución y los que señalen las leyes reglamentarias relativas.

Art. 73. Los enganchadores, los agentes de Emigración, y en general todos los que por cuenta propia o ajena celebren contratos para cuya ejecución se requiera la emigración de trabajadores mexicanos, deberán sujetarse a las disposiciones relativas del Reglamento de esta Ley.

Art. 74. Ningún buque podrá salir de puertos nacionales, antes de haberse practicado la visita de salida por las autoridades de Migración y de haber recibido de éstas, la autorización para emprender el viaje.

Art. 75. Los capitanes de buques que tomen tripulantes o pasajeros en puertos nacionales, deberán exigirles, previamente, que cumplan los requisitos que para los emigrantes establece esta Ley.

Art. 76. El capitán del buque deberá presentar a las autoridades de emigración correspondientes, en el momento de practicar la visita de salida, listas de los pasajero o tripulantes que hayan embarcado en el lugar o estén de tránsito, con expresión del nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, procedencia y punto de destino, así como los demás datos previstos en el Reglamento de esta Ley.

Art. 77. El avión que conduciendo pasajeros salga del país, deberá hacerlo precisamente por los lugares autorizados para el tráfico de emigración.

Son aplicables a las aeronaves en viaje de salida las disposiciones de este capítulo.

Art. 78. El individuo que haya perpetrado alguno de los hechos penados por las leyes mexicanas no podrá emigrar sin antes probar el haber compurgado la pena correspondiente, o de exhibir la autorización judicial para efectuar su salida.

Art. 79. En relación con el artículo 48, los buques que zarpen de una isla de los Estados Unidos Mexicanos, para dirigirse al extranjero conduciendo emigrantes, sean o no trabajadores, deberán tocar el puerto nacional autorizado más inmediato a la isla, para que la delegación respectiva compruebe el cumplimiento de las obligaciones generales previstas en esta Ley y su Reglamento.

Capítulo IX

De las penas.

Art. 80. Las infracciones a la presente Ley, se perseguirán administrativamente y serán castigadas de conformidad con los artículos siguientes:

Art. 81. La negligencia u omisión en el cumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 11 de esta Ley, será castigada con un mes de suspensión de empleo, y en caso de reincidencia con la destitución.

Art. 82. El capitán de un buque que faltare al cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley y su reglamento, será castigado con una multa de cien mil pesos.

Art. 83. El desembarque que se efectúe por sitios u horas que no sean los señalados por el delegado de Migración, conforme al artículo 44 de esta Ley, se castigará imponiendo al capitán del buque la pena de cien mil pesos.

Art. 84. La misma pena de que trata el artículo anterior, será impuesta al capitán de un buque cuando llegare a bajar a tierra cualquier pasajero o tripulante, antes de que sea practicada la visita reglamentaria por las autoridades de Migración.

Art. 85. El extranjero que penetre al país violando la presente Ley o contraviniendo las disposiciones reglamentarias o económicas de los funcionarios de Migración, será castigado, sin perjuicio de lo ordenado en el artículo 34, con la multa de cien a mil pesos.

Art. 86. El extranjero en tránsito que desembarque en un puerto sin llevar la tarjeta de identificación a que se refiere el Reglamento de esta Ley, será obligado a reembarcarse inmediatamente.

Art. 87. Al extranjero en tránsito que desembarque en algún puerto nacional con objeto de visitarlo, y permanezca en tierra después de la salida del barco en que hace la travesía, y no se presenta dentro de las veinticuatro horas siguientes a justificarse en la oficina de Migración respectiva, se le aplicará una multa de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de ser conducido al lugar que designe la Secretaría de Gobernación, para ser reembarcado en su oportunidad.

Art. 88. La persona que visite o aborde un buque, sin el previo consentimiento de los funcionarios de Migración, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley, será castigada con multa de diez a quinientos pesos.

Art. 89. El capitán de un buque que se negare a obedecer una orden de reembarque, será castigado con multa de cien a mil pesos. Cuando la orden sea a un representante de la empresa y este se niegue a obedecerla, se le impondrá la misma pena y, en ambos casos, no será despachado el buque hasta que se entere la multa y sea cumplida la orden de reembarque.

Art. 90. La entrada de extranjeros por vías terrestres, efectuada por sitio y a hora que no sean los autorizados, o sin cumplir lo dispuesto por el artículo 57, será castigada, imponiendo a los pasajeros ilegalmente entrados, la multa de cincuenta a quinientos pesos.

Art. 91. Las empresas navieras que infrinjan lo dispuesto en cada uno de los artículos 66 y 67 de la presente Ley, serán requeridas por la Secretaría de Gobernación para efectuarlo en el plazo que ésta determine, y si no lo hicieren en el término que se les señale, no les será admitido en los puertos mexicanos buque alguno en que traigan inmigrantes.

Art. 92. El capitán de un buque que salga de algún puerto nacional antes de haberse practicado la visita de salida, de que trata el artículo 74, por los funcionarios de Migración y de haber recibido de éstos la autorización respectiva, será castigado con multa de cien a mil pesos.

Art. 93. La misma pena fijada en el artículo anterior será impuesta a los capitanes de los buques que tomen tripulantes o pasajeros en puertos nacionales, sin exigirles previamente el cumplimiento de los requisitos que para emigrar establece la presente Ley.

Art. 94. La infracción a los artículos 48 y 79 de la presente Ley será castigada administrativamente, con multa de quinientos a mil pesos. En caso de reincidencia, se dará a conocer a los cónsules mexicanos el nombre y matrícula del barco infractor a efecto de que no se le extiendan despachos para puertos mexicanos. Si el barco carente de tales despachos, se internase en aguas territoriales, será perseguido como pirata.

Art. 95. El que sin llenar los requisitos establecidos en el artículo 73 celebre contratos de los expresados en el mismo, será castigado con multa de cien a mil pesos.

Art. 96. El que sin celebrar con los trabajadores los contratos a que se refiere el artículo 73 de esta Ley, los haga emigrar del país; y el que cuando hubiere celebrado tales contratos los haga abandonar la República, sin cumplir los requisitos aquí establecidos, será castigado por la autoridad judicial con la pena de uno a dos años de prisión o multa de cien a dos mil pesos. Si se empleare la coacción o el engaño para hacerles salir del país, se duplicará la pena.

Art. 97. Cuando no llegaren a realizarse los actos a que se refiere el artículo anterior, se procederá en los términos del capítulo III, título quinto, del libro I del Código Penal del Distrito Federal.

Los cómplices y los encubridores de los actos a que se refiere el artículo anterior, serán castigados en la forma que establece el capítulo V del mismo título quinto, libro I del Código Penal del Distrito Federal.

Art. 98. En el caso previsto en el artículo 96, los delegados de Inmigración y Emigración, levantarán el acta correspondiente y procederán a la detención de infractor, haciendo la consignación de uno y otra al agente del Ministerio Público Federal, para los efectos correspondientes.

Art. 99. Las infracciones a la presente Ley y su Reglamento, no previstas en los artículos anteriores, se castigarán administrativamente con multa de diez a quinientos pesos.

Art. 100. Las compañías navieras, las de Inmigración, Emigración y Colonización, y las empresas de transporte aéreo, serán pecuniariamente responsables de las violaciones a la presente Ley, que cometan sus empleados o agentes; en consecuencia, cuando alguno de ellos no cubra las multas que se le impusieren por infracciones a la presente Ley, cometidas en el servicio a que están destinados, se harán efectivas en bienes de la compañía, empleándose la facultad económico-coactiva, en su caso.

Art. 101. Corresponde a los delegados de Migración imponer las penas administrativas establecidas en la presente Ley; pero sus determinaciones serán revisadas, a petición de parte, por la Secretaría de Gobernación.

Si la pena fuere pecuniaria, se exigirá su pago inmediato, y en caso de inconformidad, la cantidad quedará en calidad de depósito en las jefaturas de Hacienda o Aduanas respectivas, mientras la propia Secretaría resuelva lo conducente.

Art. 102. En todo caso en que se imponga una multa, y ésta no sea pagada, se conmutará por arresto, que nunca podrá exceder de quince días. En este caso, el infractor será detenido desde luego, comunicándose a la Secretaría de Gobernación, por la vía telegráfica, así como la instancia de revisión si la hubiere.

Capítulo X

De la organización de los servicios de inmigración y emigración.

Art. 103. Estos servicios dependerán directamente de la Secretaría de Gobernación; en consecuencia, todo lo relativo al personal que desempeñe las funciones propias de este Ramo, será de la competencia de dicha Secretaría de Estado, quien organizará y reglamentará tales funciones, de acuerdo con las necesidades legales, económicas y administrativas del mismo servicio.

TRANSITORIOS.

Art. 1 La presente Ley comenzará a regir a partir del día primero de junio del presente año.

Art. 2 Se derogan, la Ley de Inmigración de 22 de diciembre de 1908, y, en general, todas las disposiciones que se opongan a los preceptos de esta Ley.

Art. 3 El Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Secretaría de Gobernación, expedirá a la brevedad posible, el Reglamento correspondiente.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los nueve días del mes de marzo de mil novecientos veintiséis. P. Elías Calles. Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. A. Tejeda. Al C. Ing. Adalberto Tejeda, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación.

Presente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, 12 de marzo de 1926. El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación. A. Tejeda.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando que la Ley de Migración vigente no llena las necesidades de la época, ya que el movimiento migratorio en el país va siendo mayor que el de años anteriores, se formuló un proyecto para reformarla.

El proyecto contiene reformas de suma importancia, sobre todo en lo concerniente a la admisión de los extranjeros que por diferentes motivos se internan en la República, algunos de los cuales debido a las deficiencias de la Ley relativa sobre este

capítulo, han sido admitidos no obstante ser personas cuya permanencia en México no es nada deseable.

Con el fin de iniciar las reformas a la Ley, tuvo lugar una convención de delegados de Migración, en el mes de diciembre de 1929, quienes se encargaron de formular las bases fundamentales del proyecto, teniendo en cuenta para su elaboración las necesidades y problemas más interesantes de cada una de las oficinas del Servicio establecidas en las diferentes regiones de la República.

2.23. LEY DE MIGRACIÓN DE 1930

Capítulo I

Disposiciones generales.

Art. 1. Todo individuo puede entrar y salir del territorio nacional, si llena los requisitos exigidos por la presente Ley y su Reglamento.

Art. 2. El tránsito personal, por puertos y fronteras, sólo puede efectuarse por los lugares designados para ello, dentro de las horas reglamentarias y con la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 3. Queda a cargo exclusivo de la Secretaría de Gobernación la facultad de fijar los lugares destinados al tránsito personal, por puertos y fronteras, oyendo previamente a la Secretaría de Hacienda y de Comunicaciones y Obras Públicas.

No obstante que la Secretaría de Comunicaciones permita la construcción de puentes, pontones u otros medios de comunicación internacional fronteriza, queda a cargo exclusivo de la Secretaría de Gobernación autorizar o no el movimiento migratorio por dichos lugares.

Art. 4. La Secretaría de Gobernación reglamentará, de acuerdo con las necesidades de cada región, las visitas de extranjeros a nuestras poblaciones marítimas y fronteras, así como el tránsito diario entre éstas y las colindantes del extranjero; pero, en todo caso, respetará los tratados y convenios internacionales sobre la materia.

Art. 5. La Secretaría de Gobernación queda facultada para sujetar, a modalidades diversas, la migración de extranjeros que, según su mayor o menor facilidad de asimilación a nuestro medio, sea considerada como especialmente benéfica o perjudicial.

Dentro de las facultades concedidas a la mencionada Secretaría por este artículo, queda comprendida la de fijar lugares especiales para el movimiento migratorio de determinados extranjeros.

Art. 6. El Servicio de Migración tiene carácter de prioridad para verificar la inspección a la entrada o salida de personas, en cualquier forma en que lo hagan, aun tratándose de transportes, nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en

las costas y fronteras, sobre todo los demás servicios federales, con excepción del de sanidad.

Art. 7. Son horas hábiles para el tránsito migratorio las que, de acuerdo con las circunstancias locales, fije, para cada oficina, la Secretaría de Gobernación; sin perjuicio de que, por lo que hace a las mercancías, se sujeten los interesados a los horarios aduanales.

Art. 8. Para los efectos anteriores, propondrán, los jefes de las oficinas de migración, los horarios convenientes, a la Secretaría de Gobernación, los cuales entrarán en vigor y se darán a conocer tan pronto como se reciba la aprobación de dicha dependencia.

Art. 9. En casos especiales, y tratándose de personas cuya ocupación lo exija, los jefes de migración podrán permitir el tránsito, exclusivamente personal, fuera de las horas ordinarias.

Art. 10. El personal de migración, en las poblaciones fronterizas, cuidará de que el tránsito local entre éstas se verifique con las mayores facilidades, procurando, con atingencia y buen criterio, evitar todo retardo en su revisión, a quienes lo ameriten.

Art. 11. Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas, en el tráfico de vapores, con excepción de las funciones de policía y sanidad, queda a cargo de las oficinas de migración.

Art. 12. A defecto de las autoridades de sanidad, las del servicio de Migración se encargarán de hacer cumplir las disposiciones del Código Sanitario, en cuanto se refiera exclusivamente al movimiento migratorio.

Art. 13. La inspección que practiquen las autoridades migratorias tendrán por único objeto el de cerciorarse de si las personas que pretendan entrar o salir del país, han llenado los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento, o si faltan de llenar alguno o algunos.

Art. 14. En el primer caso autorizarán la entrada o salida de los interesados; en el segundo la negarán, y tomarán las disposiciones necesarias para que se cumpla su determinación.

Art. 15. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 13, los representantes de gobiernos extranjeros que vengan en comisión especial a nuestro país, con sus familiares, séquito, empleados y servidumbre, así como todas las personas que, conforme a los principios del Derecho Internacional, quedan exentos de la jurisdicción territorial; pero esta prerrogativa sólo se concederá a base de estricta reciprocidad.

De igual franquicia gozarán las personas que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, determine el C. Presidente de la República.

Art. 16. Todas las personas que gocen de la franquicia anterior están obligadas a comunicar a la Secretaría de Gobernación, los casos en que dejen sin ocupación a cualesquiera de los individuos que trajeren a su servicio, y a pagar los gastos de repatriación de los mismos; a menos que los interesados, cumpliendo previamente con todos

los requisitos legales, hayan obtenido el permiso correspondiente para permanecer en nuestro país, con el carácter que deseen.

Art. 17. El tránsito de funcionarios extranjeros de migración no estará sujeto a requisito alguno de parte de las autoridades migratorias, las que les darán toda clase de facilidades; a condición, siempre, de absoluta reciprocidad.

Art. 18. Todas las autoridades federales, de los estados y municipios, quedan obligadas a presentar a las de Migración, la ayuda que éstas les soliciten, para hacer cumplir sus determinaciones, facilitándoles, para el efecto, la fuerza pública necesaria.

Art. 19. La Secretaría de Gobernación velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen la estadística nacional; llevará un minucioso registro de los movimientos de personas de que se ocupa esta Ley, y cooperará, con el Departamento de la Estadística Nacional, para la elaboración de la estadística de migración.

Capítulo II

Del servicio migratorio

Art. 20. El Servicio Migratorio estará a cargo exclusivo de la Secretaría de Gobernación.

Art. 21. Quedará constituido este servicio por el Departamento del Ramo y sus dependencias, tanto en el interior como en el extranjero; y será auxiliado, en sus funciones, por los cuerpos diplomático y consular, por los ejecutivos locales y por los ayuntamientos de la República.

Este servicio se dividirá en:

- I. Central;
- II. De Puertos y Fronteras;
- III. Interior; y
- IV. Exterior.

Art. 22. El Servicio Central estará constituido por el Departamento de Migración de la Secretaría de Gobernación que será la jefatura de los demás; el de Puertos y Fronteras, por las dependencias del servicio en esos lugares, y, en su defecto, por las de Sanidad, Capitanías de Puerto o Aduanas, en su caso; el interior, por las dependencias del Ramo en el interior del país, los ejecutivos locales y los ayuntamientos de la República, en su carácter de auxiliares, y por último, el Exterior, por los delegados que al efecto comisione la Secretaría de Gobernación y por los cuerpos diplomático y consular, en su carácter de auxiliares.

Art. 23. El Departamento de Migración como jefatura de los demás, tendrán aparte de las funciones que le correspondan, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, las siguientes:

- I. Dirección, administración y vigilancia del personal;
- II. Distribución del mismo, de acuerdo con las necesidades de la República;

- III. Estudio de los problemas del Ramo y resolución de los mismos, de acuerdo con las necesidades del país, cuando se relacione con el fenómeno o restricción de la inmigración y emigración;
- IV. Resolución de los casos particulares dudosos que consulten las oficinas del Ramo, sobre admisión o rechazo de extranjeros, modalidades del tráfico internacional y otros que pudieran presentarse; y
- V. Iniciar o implantar toda clase de innovaciones que tiendan a mejorar y hacer más eficaz el servicio.

Art. 24. El Servicio de Puertos y Fronteras se encargará de:

- I. Vigilar que el tránsito de migración se efectúe apegado a las disposiciones de la Ley;
- II. Impedir que entren o salgan del país, las personas que, para hacerlo, no hayan llenado los requisitos exigidos, en su respectivos casos, por esta Ley y su Reglamento;
- III. El examen de los individuos que pretendan internarse en la República, de acuerdo con el carácter con que intenten hacerlo;
- IV. La documentación de entrada de los individuos que no vengan documentados por los cónsules u oficinas del Servicio Exterior;
- V. La documentación de salida de los individuos que no hayan sido documentados por el Servicio Interior;
- VI. La aplicación de las penas correspondientes, conforme al capítulo respectivo de esta Ley;
- VII. La inspección de personas a bordo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos, ya sean nacionales o extranjeros;
- VIII. Cumplir y hacer cumplir el Código Sanitario y las disposiciones que se relacionen con la sanidad marítima y fronteriza, en su carácter de auxiliar del Servicio Sanitario Federal;
- IX. Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de esta Ley; y
- X. La protección de los inmigrantes, de acuerdo con la presente Ley y su Reglamento y las disposiciones que al efecto dicte la Secretaría de Gobernación.

Art. 25. El Servicio Interior se encargará:

- I. De la distribución y el acomodamiento de los contingentes que proporcione la inmigración;
- II. De la recepción, información y guía de turistas, así como de prevenir y remediar, dentro del radio de acción de sus respectivas jurisdicciones, y con el auxilio de las autoridades municipales, todo abuso que se cometa o pretenda contra aquellos;

- III. De la investigación de las causas de la emigración regional, su previsión y remedio, y de la información e instrucción a los emigrantes, a fin de evitarles dificultades en el extranjero; y
- IV. De la documentación de los emigrantes que lo soliciten.

Art. 26. El Servicio Exterior tendrá a su cargo:

- I. La inspección previa y documentación de los inmigrantes y transeúntes;
- II. La organización y protección de los inmigrantes mexicanos en países extranjeros; y
- III. Fomentar, de acuerdo con las instrucciones de la Secretaría de Gobernación, la inmigración y el turismo hacia México.

Art. 27. Además de las obligaciones enumeradas, tendrán estos servicios todos los demás que les imponga esta Ley y su Reglamento, o que en lo sucesivo acuerde la Secretaría de Gobernación.

Art. 28. El Servicio de Migración contará, en cada uno de sus ramos, con el personal que fije el Reglamento de la presente Ley, y será nombrado y removido por el Secretario de Gobernación.

Capítulo III

Del consejo consultivo de migración

Art. 29. Se crea el Consejo Consultivo de Migración, que se integrará por el C. Secretario de Gobernación, como presidente nato, el jefe del Departamento de Migración, como vicepresidente, y por un representante de cada una de las siguientes dependencias:

- a) Secretaría de Relaciones Exteriores;
- b) Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas;
- c) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- d) Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo;
- e) Secretaría de Agricultura y Fomento;
- f) Departamento de Salubridad Pública; y
- g) Departamento de la Estadística Nacional.

Art. 30. En casos especiales y por el voto de la mayoría de los miembros citados, pueden admitirse, en el seno del Consejo, representantes de las cámaras de Agricultura, Industria y Comercio, con voz puramente informativa.

Art. 31. El Consejo Consultivo tendrá carácter de Consejo Técnico del Ramo, y se encargará del estudio y dictamen de los siguientes asuntos:

- I. Necesidades generales del servicio, a efecto de proponer las reformas necesarias para obtener los mejores resultados;
- II. Dificultades de carácter técnico que se presenten en el Ramo;
- III. Medidas que deben adoptarse para la protección de los nacionales en el extranjero, y para su repatriación en casos necesarios;

- IV. Medios que tiendan a fomentar la inmigración, así como la apropiada distribución y establecimiento de sus contingentes en el territorio del país, de acuerdo con las necesidades especiales de cada región;
- V. Medidas que deban adoptarse para evitar o restringir la emigración, previo estudio de las causas que en cada región la motiven, y
- VI. Facilidades y servicios que deban establecerse para la más amplia y eficaz labor pro-turismo.

Art. 32. Previo acuerdo del C. Secretario de Gobernación, el Consejo Consultivo se abocará al conocimiento de los asuntos de su competencia, por citación que le haga el jefe del Departamento de Migración.

Art. 33. Los acuerdos tomados por el Consejo Consultivo se cumplirán en su caso por el Departamento de Migración.

Art. 34. Fuera de los casos de que trata el artículo 32, el Consejo se reunirá cuando lo consideren necesario su presidente, o cualesquiera de sus miembros previa aprobación del primero.

Capítulo IV

Calidad de las personas respecto a migración

Art. 35. Para los efectos de esta Ley, se considera inmigrantes a los extranjeros que, llenando todos los requisitos correspondientes, han entrado al país con el propósito, expreso o presumible, de radicarse en él, o por motivos de trabajo.

Son igualmente inmigrantes los extranjeros que han permanecido en el país por más de seis meses, llenando todos los requisitos legales.

No pierden su carácter de inmigrantes los extranjeros radicados en el país, que, al salir, han expresado que no estarán ausentes de la República más de dos años.

Art. 36. Todo extranjero que entre al país con móviles diversos de los señalados en el artículo anterior, se considerará como transeúnte.

Art. 37. Turista es el transeúnte que viene al país en viaje de recreo.

Art. 38. Visitantes locales son los transeúntes que entran al país sin salir de la circunscripción territorial de los municipios marítimos y fronterizos, y por término que no exceda de 72 horas.

Art. 39. Son colonos los inmigrantes a quienes considere como tales la Ley de la materia.

Art. 40. Emigrantes son los mexicanos o extranjeros residentes, que salen del país con el propósito de radicarse en el extranjero, o por móviles de trabajo, y aquellos que han estado fuera del país más de dos años.

Capítulo V

Requisitos generales de migración

Art. 41. Para entrar o salir de la República deben los interesados llenar, previamente, los siguientes requisitos:

- I. Satisfacer el examen de las autoridades sanitarias, salvo los casos de exención por las mismas;
- II. Rendir, a la autoridad de migración correspondiente, las informaciones estadísticas personales que les pida, y
- III. Identificarse, por medio de la tarjeta respectiva.

Este último requisito no es exigible a los turistas, cuando vengan en grupos organizados, y su entrada haya sido obtenida por los directores u organizadores de la excursión; pues entonces basta la identificación que de sus acompañantes hagan dichos directores u organizadores, ante las autoridades migratorias.

Art. 42. La tarjeta de identificación será expedida, a solicitud de los interesados, por las autoridades de Migración, y constituye, por sí sola, el medio identificativo de preferencia. Su falta, o la de alguno de sus requisitos, hace presumir ilegalidad en la entrada o salida de los interesados, salvo prueba en contrario.

Art. 43. En el extranjero, a falta de delegados de Migración, las tarjetas de identificación serán expedidas por las oficinas consulares.

Art. 44. Tanto las oficinas de Migración, como las consulares, en su caso, serán responsables de la correcta requisitación de las mencionadas tarjetas.

Art. 45. Queda prohibida la expedición de estas tarjetas a las personas que no hayan llenado todos y cada uno de los requisitos que exija esta Ley o su Reglamento.

Art. 46. El Reglamento de la presente Ley fijará los requisitos que deba satisfacer la tarjeta de identificación.

Capítulo VI

Requisitos especiales para entrar al país

Art. 47. Son requisitos indispensables para entrar al país:

- I. Tener profesión, oficio, u otro medio honesto de vivir;
- II. Acreditar su buena conducta anterior;
- III. No tener impedimento alguno de los siguientes:
 - a) Los al efecto establecidos y que en el futuro se establezcan en materia de salubridad pública;
 - b) Haber cometido, en el extranjero, un hecho que, conforme a nuestras leyes, se considere delictuoso y merezca pena corporal mayor de dos años de prisión, a no ser que se trate de delitos políticos o se demuestre que se ha extinguido la acción penal o la pena, en su caso;
 - c) Ser toxicómanos alcohólicos o propagar o fomentar el hábito de las drogas enervantes, o cualquier otro vicio punible, aunque, en ello, no se persiga lucro alguno;
 - d) Ejercer la prostitución, explotarla o fomentarla, o pretender la introducción de prostitutas, acompañarlas o vivir a sus expensas, o dedicarse a la trata de blancas o de niños.

e) Pertenecer a sociedades anarquistas, o propagar, sostener o fomentar doctrinas disolventes, contra los gobiernos, o la de la supresión personal de los funcionarios públicos;

f) La prueba de falsedad de las declaraciones que el interesado rinda a las autoridades migratorias, y

g) La determinación que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dicte el Ejecutivo de la Unión.

Art. 48. Los mexicanos sólo satisfarán el examen de sanidad y las informaciones estadísticas legales.

Cuando un mexicano arribe enfermo de un mal contagioso, según el dictamen de las autoridades de sanidad, las de migración cooperarán con aquéllas para la pronta internación del individuo en el lazareto, estación sanitaria u hospital más próximos, que designen las propias autoridades sanitarias.

Capítulo VII

Requisitos particulares para los inmigrantes

Art. 49. Las personas que pretendan entrar al país, con carácter de inmigrantes, deben llenar, además de los requisitos generales de migración y especiales para entrar al territorio nacional, los siguientes:

- I. Poseer elementos económicos, bastantes, a juicio de las autoridades de Migración, para subvenir a todas sus necesidades; y
- II. A falta de los elementos anteriores, sólo se permitirá la entrada a los interesados, cuando justifiquen previamente venir contratados por más de seis meses, obligatorios para el patrono, y con salarios suficientes para satisfacer todas sus necesidades.

Para que estos contratos sean admitidos por las autoridades migratorias, deben llenar, además de los requisitos generales exigidos por la legislación del trabajo, los siguientes:

a) Deberán extenderse precisamente por escrito y por triplicado, uno de cuyos ejemplares quedará en poder de las autoridades del ramo; será visado por la autoridad municipal del lugar en donde el contrato se celebre, y visado por el cónsul mexicano en dicho lugar, cuando se celebre fuera del país;

b) Se estipulará en él que los gastos de transporte, alimentos del trabajador y de sus familiares, en su caso, y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones de migración, serán por cuenta exclusiva del patrón o contratista;

c) Que el trabajador percibirá íntegro el salario convenido, sin que pueda descontársele cantidad alguna por cualquiera de los conceptos a que se refiere el inciso anterior;

d) Que el empresario o contratista otorgue, a satisfacción de las autoridades migratorias y a su favor caución hipotecaria, en primer término, o personal, o constituya

depósito previo en efectivo para garantizar los gastos de alimentación y repatriación del trabajador y su familia en su caso, en cualquier momento en que el trabajador quede desocupado y sea una carga para el país, sea cual fuere el motivo de su desocupación, y

e) Que tanto el patrono contratista, como el trabajador, se obliguen, ante las autoridades migratorias, a justificar periódicamente, por lo menos cada seis meses, la subsistencia del contrato de trabajo, o, en su defecto, que el trabajador posea ya los elementos de que trata la fracción I de este artículo.

Solamente se devolverá al patrón o contratista el importe del depósito, o se cancelará la fianza o hipoteca, cuando justifique haber cumplido con la obligación de repatriar al trabajador y sus familiares, en su caso; no adeudar al trabajador ninguna cantidad por concepto de salario o indemnizaciones a que tuviere derecho, o la negativa del mismo a salir de la República, siempre, en este último caso, que las autoridades migratorias le permitan su estancia en el territorio nacional, por llenar todos los requisitos que esta Ley y su Reglamento exigen;

- III. Solicitar su admisión al agente nacional de migración en el extranjero, o, en su defecto, al cónsul de México más próximo al lugar de su residencia o de su salida, y recoger, de dichos funcionarios, la documentación que están obligados a expedirle.
- IV. Presentar la mencionada documentación a la oficina de migración del lugar por donde se pretenda entrar;
- V. Inscribirse en el Registro de Extranjeros dentro de los seis meses siguientes a su entrada a la República;
- VI. Exhibir, en cualquier tiempo, dentro del territorio nacional, y a solicitud de las autoridades migratorias, su documentación legal como inmigrantes, y, en su caso, la que les corresponda como residentes, y
- VII. No tener impedimento alguno de los siguientes:

a) Todo defecto físico o fisiológico que imposibilite al individuo para atender personalmente a su subsistencia, a no ser que el interesado sea capitalista o dependa legalmente, para el objeto indicado, de otra persona que con él venga y sea admitida, o que se encuentre ya radicada en la República, exigiéndosele, en todo caso, comprobación plena de su posibilidad pecuniaria de sufragar todos los gastos del interesado;

b) La minoridad, si el menor no se halla bajo la autoridad de persona honorable, mayor de edad, que lo acompañe y sea admitida o que ya resida en el país, y que legalmente se haga cargo de su sostenimiento y educación, y

c) La intención manifiesta de venir a ejercer, en el país, una actividad cualquiera no permitida por nuestras leyes.

Art. 50. Los delegados de Migración, o quienes hagan sus veces, podrán admitir, como inmigrantes o transeúntes, a los extranjeros que lleguen carentes de documentación consular, o cuando ésta sea defectuosa; expidiéndoselas al momento de la inspec-

ción, siempre y cuando no tengan impedimento legal, ni estén comprendidos dentro de las restricciones que, en casos particulares, dicte la Secretaría de Gobernación.

Capítulo VIII

Requisitos particulares para los transeúntes

Art. 51. Además de los requisitos generales de Migración y de los especiales para entrar al país, los transeúntes están obligados a satisfacer los siguientes:

- III. No permanecer en la República, con tal carácter, por tiempo mayor de seis meses, salvo los casos de admisión condicional, conforme a esta Ley;
- IV. Legalizar, cuando hayan de permanecer por tiempo mayor al indicado, su estancia en el territorio nacional, con carácter de inmigrantes;
- V. Entregar a las autoridades de Migración, al vencimiento del plazo de seis meses o del prorrogado, en su caso, la tarjeta de identificación, cuando la hayan obtenido, para ser cancelada; a no ser que se encuentren gozando de admisión condicional, y
- VI. No dedicarse a actividad alguna, salvo cuando se trate de representantes de compañías que vengan a estudiar las posibilidades económicas nacionales, con intención de establecer en el país alguna industria, por sueldo, salario u otra clase de lucro inmediato, sin obtener previamente su documentación como inmigrantes, llenando todos los requisitos correspondientes.

Art. 52. Los visitantes locales de las ciudades marítimas y fronterizas estarán, por regla general, exentos del cumplimiento de todo requisito de migración; pero la Secretaría de Gobernación puede, en cualquier momento, sujetar la entrada de los mismos a las modalidades que crea convenientes.

Dentro de las facultades concedidas por este artículo, queda comprendida la de restringir la entrada como tales visitantes a los extranjeros que la propia Secretaría determine.

Art. 53. La admisión de transeúntes queda encomendada al criterio y recto juicio de las autoridades locales de Migración, cuya resolución, en todo caso, podrá ser revocada por el departamento del Ramo.

Art. 54. Para los efectos del artículo anterior, bastará el simple examen personal que de los extranjeros hagan las autoridades migratorias.

Art. 55. En casos dudosos, las oficinas de Migración deben exigir que los interesados satisfagan todos y cada uno de los requisitos señalados para los inmigrantes, o que constituyan, ante el jefe de la oficina de Migración del lugar de entrada, un depósito, cuyo monto fijará el mismo Jefe, de acuerdo con las circunstancias, sin que pueda ser menor de cien pesos.

Art. 56. El importe de dicho depósito lo integrará el interesado al jefe de la oficina de Migración del lugar de entrada, quien lo situará, por correo o telégrafo, según la urgencia del caso, al jefe de la oficina de Migración del lugar de salida.

El jefe de esta última oficina hará efectivo el giro, cuyo importe entregará al interesado cuando éste abandone el país.

Capítulo IX

Requisitos particulares para los turistas

Art. 57. Además de los requisitos generales de Migración y de los requisitos generales de Migración y de los especiales para entrar al país, los turistas están obligados a satisfacer los requisitos exigidos por las fracciones I y II del artículo 51 de esta Ley.

Art. 58. Está facultada la Secretaría de Gobernación para conceder a los turistas en mayor número posible de facilidades, dentro de su esfera de acción; pero tiene la obligación de que los interesados le garanticen, debidamente, que no se aprovecharán de esas facilidades para entrar al país con móviles diversos, y, por lo mismo, con carácter distinto del de turistas.

Art. 59. En cualquier momento y por cualquier causa que los turistas violen la parte final del artículo anterior, sin perjuicio de las penas correspondientes, la Secretaría de Gobernación les reiterará las facilidades concedidas.

Capítulo X

De la inmigración en general

Art. 60. Se considera de público beneficio la inmigración individual o colectiva, de extranjeros sanos, capacitados para el trabajo, de buen comportamiento y pertenecientes a razas que, por sus condiciones, sean fácilmente asimilables a nuestro medio, con beneficio para la especie y para las condiciones económicas del país; y se faculta a la Secretaría de Gobernación para fomentarla por cuantos medios juzgue conveniente, así como relevar de alguno o algunos de los requisitos que fija esta Ley, a los que, viniendo en grupos y contando con elementos de provecho para la nación, puedan ser considerados por dicha Secretaría como inmigrantes benéficos y de radicación definitiva.

Art. 61. Cuando se trate de colonos extranjeros, contratados por la nación o por empresas particulares, o que vinieren por su cuenta y sean considerados como particularmente benéficos, la Secretaría usará de la misma facultad, así como en los casos en que la inmigración sea espontánea, individual o colectiva.

Art. 62. Se faculta a la Secretaría de Gobernación para estimular la naturalización de los inmigrantes y colonos a que se refieren los artículos anteriores.

Art. 63. Las facultades que, en los términos de los artículos anteriores, conceda la Secretaría de Gobernación a los colonos, serán sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley de Colonización y su Reglamento, cuyo cumplimiento será exigido por las autoridades dependientes de la secretaría respectiva.

Art. 64. En casos especiales, y de acuerdo con las necesidades étnicas, sanitarias y económicas del país, puede la Secretaría de Gobernación restringir la inmigración extranjera, en los términos que juzgue convenientes, salvo lo prescrito en los tratados internacionales.

Igualmente la propia Secretaría tiene facultades para limitar la radicación de extranjeros en los lugares marítimos y fronterizos que estime conveniente.

Art. 65. Previo acuerdo de la Secretaría de Gobernación, en cada caso, pueden inmigrar, libres de los impedimentos de que habla la fracción VII del artículo 49 de esta Ley, y exentos de las restricciones temporales que prevalezcan, de conformidad con el artículo anterior, los ascendientes, descendientes o hermanos menores de los mexicanos por naturalización, o de los extranjeros no nacionalizados, que hayan residido en México más de cinco años; siempre que unos y otros tengan bienes bastantes, a juicio de la misma Secretaría, para sostener a los parientes cuya inmigración se pretenda.

Art. 66. Cuando se trate de extranjeros no nacionalizados, cuya residencia en la República sea menor de cinco años, la admisión de sus parientes queda condicionada además, a la precalificación que, como benéficos para la inmigración, haga de ellos la Secretaría de Gobernación.

Art. 67. Queda condicionada al depósito de repatriación, en los términos de los artículos siguientes, la internación al país de:

- I. Los extranjeros cuya entrada libre haya restringido la Secretaría de Gobernación, en virtud de la imposibilidad de su asimilación perfecta a nuestro medio, o en virtud de crisis de trabajo en la República, y
- II. Los turistas y toda clase de transeúntes que pretendan, antes o después de su entrada, permanecer dentro del territorio nacional por más de seis meses, con los mismos caracteres.

Art. 68. Por ningún motivo se admitirá a los extranjeros de que trata la fracción I del artículo anterior, si se encuentran comprendidos en cualesquiera de los incisos de la fracción VII del artículo 49 de esta Ley, ni por término mayor de un año, al cabo del cual deben salir de la República.

Art. 69. La Secretaría de Gobernación puede prorrogar, a los turistas y demás transeúntes de que trata la fracción II del artículo 67 de esta Ley, el plazo de seis meses, durante el cual pueden permanecer en el país; pero esa prórroga no podrá ser mayor de otros seis meses, al final de los cuales los interesados deben ausentarse de la República, a menos de que legalicen su estancia con el carácter de inmigrantes, llenando todos los requisitos exigidos para tal caso.

Art. 70. El depósito de repatriación se constituirá, cuando menos, por la cantidad necesaria para los gastos del viaje de regreso de los interesados a su país de origen, más lo del agente de Migración que haya de acompañarlos, cuando sea necesario.

Art. 71. El depósito de repatriación será constituido por los extranjeros a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, como condición para ser admitidos; debiendo hacerse

dicho depósito en el Banco de México, a satisfacción de la Secretaría de Gobernación y a disposición del departamento del Ramo.

Art. 72. Todos los extranjeros que tengan que salir de la República al finalizar algún plazo determinado, de conformidad con las disposiciones de los artículos anteriores, lo harán con cargo a su propio depósito de repatriación.

Art. 73. Cuando se trate de extranjeros cuya entrada se encuentre restringida por la Secretaría de Gobernación, cualquiera que sea el concepto de la restricción, no deben ser documentados como inmigrantes por los cónsules de México, ni por las autoridades de Migración, en su caso, a menos de que los interesados exhiban previamente el permiso que, para inmigrar en nuestro territorio, les haya otorgado la propia Secretaría.

Art. 74. Todos los ocursos, contratos y documentos que, en materia de migración, dirijan los interesados a las autoridades del Ramo, deberán estar redactados en español, y, si lo están en idiomas extranjeros, deberán acompañarlos de su traducción correspondiente al castellano, en cuyo caso las traducciones deberán estar debidamente autenticadas.

Capítulo XI

Requisitos particulares para los emigrantes

Art. 75. Las personas que pretendan emigrar del país están obligadas a satisfacer, además de los requisitos generales de migración, los siguientes:

- I. Ser mayores de edad o, si no lo son, ir acompañados de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, en su caso, o acreditar el permiso correspondiente, concedido al efecto, por dichas personas; pero no bastará este permiso cuando los emigrantes sean menores de dieciocho años;
- II. Tratándose de nacionales, y como medida preventiva y de protección, la comprobación, ante las autoridades migratorias, de que los interesados pueden cumplir todos los requisitos que para entrar exijan las leyes del país a donde se dirijan, según el carácter con que pretendan hacerlo;
- III. Solicitar, de la oficina respectiva de Migración, la documentación correspondiente, y presentarla a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda salir, y
- IV. No tener impedimento alguno de los siguientes:
 - a) Estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia, y
 - b) Estar arraigado, por cualquier causa, en virtud de resolución judicial.

Art. 76. Además de los requisitos anteriores, sólo se permitirá la salida de emigrantes trabajadores cuando justifiquen ir contratados por más de seis meses, obligatorios para el patrón o contratista, y con salario suficiente para satisfacer todas sus necesidades.

Para que estos contratos sean admitidos por las autoridades migratorias, deben llenar, además de los requisitos generales exigidos por la legislación del trabajo, los siguientes:

- I. Deberán extenderse precisamente por escrito y por triplicado, uno de cuyos ejemplares quedarán en poder de las autoridades del Ramo, y estarán visados por el cónsul de la Nación a donde vayan a presentarse los servicios, y legalizados por la autoridad municipal competente;
- II. Que los gastos de transporte, alimentos del trabajador y de sus familiares, en su caso, y todos los que se originen por el paso de fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, serán por cuenta exclusiva del patrón o contratista;
- III. Que el trabajador percibirá íntegro el salario convenido, sin que pueda descontársele cantidad alguna por cualesquiera de los conceptos a que se refiere la fracción anterior, y
- IV. Que el empresario o contratista otorgue, a satisfacción de las autoridades migratorias y a su favor, caución hipotecaria en primer término, o personal, o constituya depósito previo en efectivo para garantizar los gastos de alimentación y repatriación del trabajador y su familia, cuando el traslado de ésta al extranjero haya sido hecho por cuenta de dicho empresario o contratista.

Solamente se devolverá al patrón o contratista el importe del depósito, o se cancelará la fianza o hipoteca, cuando justifique haber cumplido con la obligación de repatriar al trabajador y sus familiares, en su caso, a menos de negativa de éste para regresar al país y no adeudar al trabajador cantidad alguna por concepto de salarios o indemnizaciones a que tuviere derecho.

El contrato de trabajo de que habla este artículo no se exigirá cuando esté en oposición con las disposiciones de migración del país a que se dirijan los interesados.

Capítulo XII

De la emigración en general

Art. 77. La emigración de trabajadores mexicanos al extranjero deberá ser objeto de constante estudio y vigilancia por parte de la Secretaría de Gobernación, a efecto de que no se constituya en grave problema o perjudicial factor para el país. Queda, por tanto, obligada dicha Secretaría a dictar las medidas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, garanticen los intereses de la comunidad, en lo relativo a despoblación, y a los particulares de los emigrantes, en cuanto a su condición de tales.

En consecuencia, se faculta a la propia Secretaría para reglamentar la emigración colectiva de nuestros nacionales, en el sentido que las necesidades del momento y de cada región exijan.

Art. 78. Es deber de la Secretaría de Gobernación evitar la emigración clandestina y castigar administrativamente, de acuerdo con las sanciones que esta Ley establece, a quienes la protejan, fomenten o disimulen.

Art. 79. La emigración motivada por contrato previo de trabajo, sea para países extranjeros o para embarcaciones extranjeras, en tráfico de altura, deberá ser controlada por el Departamento de Migración, por medio de sus oficinas respectivas, las que, en cada caso, se asegurarán de que previamente se han llenado por los requisitos exigidos en el capítulo anterior.

Art. 80. La translación de los trabajadores mexicanos y aun la venta de boletos para su transporte, que se verifique dentro del territorio nacional, deberá ser vigilada por las autoridades de Migración, a efecto de evitar abusos y conseguir el *maximum* de facilidades y garantías para los referidos emigrantes.

Art. 81. Los agentes de migración, en el exterior, cooperarán con nuestros cónsules en los lugares de su radicación, para llevar a cabo las disposiciones encaminadas a la organización y protección de nuestros emigrantes en el extranjero, que adopte la Secretaría de Relaciones Exteriores y les sean comunicadas por conducto de la de Gobernación.

Art. 82. La Secretaría de Gobernación facilitará la repatriación de nuestros emigrantes, con preferencia, en igualdad de circunstancias, a la inmigración extranjera cuando se trate de fomentar ésta bajo auspicios oficiales.

Capítulo XIII

Del tránsito marítimo

Art. 83. Los extranjeros que lleguen por puerto de mar, carentes de algún requisito que no pueda satisfacerse en el momento de su examen, podrán desembarcar provisionalmente, mientras la jefatura del Departamento resuelve sobre el particular, si constituyen depósito o dan fianza satisfactoria, o si la compañía naviera que los trajo garantiza su regreso, en caso de que se les rechace en definitiva. Esta franquicia no es extensiva a los que adolezcan de algún impedimento legal, y nunca podrá exceder del plazo de treinta días, e igualmente no es aplicable a los tripulantes que no demuestren su legal separación del trabajo.

Art. 84. Las empresas de transportes marítimos están obligadas a conducir, por su cuenta, fuera del territorio nacional, a los extranjeros traídos por ellas, que sean rechazados por las autoridades de Migración, en virtud de impedimento legal, dejando a salvo su derecho de repetir contra los interesados.

Art. 85. Las empresas de que habla el artículo anterior están obligadas a mantener, en la capital de la República y en los lugares que toquen sus vehículos, representantes legales, plenamente autorizados para tratar con la Secretaría de Gobernación, o las oficinas de Migración que correspondan, todos los asuntos relacionados con el transporte de extranjeros.

Art. 86. La Secretaría de Gobernación exigirá que las empresas mencionadas constituyan fianzas, a su satisfacción, por el monto y en la forma que juzgue convenientes, para cuando hayan de hacerse efectivas las responsabilidades en que incurran; debiendo siempre mantener íntegro el monto inicial de la fianza.

Art. 87. Las empresas de que se habla serán responsables por la conducción a México de extranjeros cuya inmigración esté prohibida, bien sea por disposiciones expresas de esta Ley, o por acuerdos posteriores de carácter general, que dicte la Secretaría de Gobernación.

Art. 88. Son responsables las propias empresas por sus tripulantes o pasajeros, cuando por culpa de las mismas queden éstos en nuestro territorio, sin haber sido admitidos por las autoridades de Migración, en virtud de sus impedimentos o falta de requisitos legales.

Art. 89. Los capitanes de los buques que toquen nuestros puertos, a excepción de los nacionales que lo hagan en tráfico de cabotaje, están obligados a presentar a los oficiales de Migración, una lista detallada de los pasajeros y otra de los tripulantes, visada esta última por el cónsul mexicano del último puerto extranjero que hayan tocado.

Art. 90. Los transportes marítimos no podrán conducir, a ningún lugar del territorio nacional, a los extranjeros que arriben, sin someterse antes al examen de las autoridades de Migración más próximas al punto que toquen, al internarse en aguas territoriales.

Asimismo, ninguno de dichos transportes podrán conducir pasajeros, nacionales o extranjeros, que salgan del territorio nacional, si no han sido examinados previamente por los oficiales del Ramo más próximos al lugar de salida.

Art. 91. Las empresas de transportes marítimos responderán pecuniariamente de las infracciones que, de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones relativas, cometan sus empleados, agentes o representantes.

Art. 92. Tratándose de barcos que lleguen de arribada forzosa, los jefes de las oficinas de Migración permitirán el tránsito fuera de las horas ordinarias.

Art. 93. Las personas que bajen a tierra antes que las autoridades de Migración efectúen a los barcos la visita correspondiente, serán reembarcadas en seguida, a fin de someterlas a dicho examen, sufrido el cual, podrán desembarcar, si han llenado los requisitos necesarios.

Art. 94. El inmigrante que no reúna los requisitos prevenidos por esta Ley, no podrá desembarcar, salvo autorización expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 95. A los polizones extranjeros que lleguen en algún buque, procedentes de puertos extranjeros, se les impedirá el desembarco, reteniéndolos, con las debidas seguridades, bajo la responsabilidad del capitán, y se les regresará en la misma embarcación.

Art. 96. Concluida la visita de inspección, el delegado de Migración hará, dado el caso, una lista suficientemente explícita de los extranjeros comprendidos en algunas de las prevenciones respectivas, y que por consiguiente, no deban desembarcar; lista que entregará, previa revista de los sujetos no admitidos, a los agentes de servicio, en turno

de escala, para que éstos, bajo su inmediata responsabilidad, ejerzan la debida vigilancia de los rechazados.

El delegado procederá a levantar un acta de la diligencia consignando en ella todos los hechos que se hubieren registrado, así como los nombres de los individuos cuya entrada esté prohibida; documento que será suscrito por el capitán del barco, por el agente consignatario y por las autoridades que en el acto hubieren intervenido. Un tanto de dicha constancia será remitido a la Secretaría de Gobernación, a la brevedad posible.

Art. 97. El delegado, una vez practicada la visita y el desembarco, se abstendrá de resolver, en cualquier sentido, respecto a la admisión de los detenidos, limitándose simplemente a una intervención informativa, pues sólo a la Secretaría de Gobernación compete resolver todos y cada uno de los casos particulares.

Sin embargo, si el buque en que arribaron los detenidos ha de zarpar antes de que conozca la resolución de la Secretaría, el delegado podrá permitirles que permanezcan dentro del territorio de su jurisdicción, si la compañía del barco se compromete a regresarlo por su cuenta, o si los propios interesados garantizan por sí mismos su regreso.

Art. 98. Ningún buque podrá salir de puertos nacionales antes de haberse practicado la visita de salida por las autoridades de Migración, y de haber recibido de ésta autorización para emprender el viaje, salvo los casos de fuerza mayor, de acuerdo con las disposiciones de Marina.

Art. 99. Los capitanes de buques que tomen tripulantes o pasajeros en puertos nacionales, deberán exigirles previamente el cumplimiento de los requisitos que para los emigrantes establece esta Ley.

Art. 100. El capitán del buque deberá presentar a las autoridades de Migración correspondientes, en el momento de practicar la visita de salida, lista de los pasajeros o tripulantes que hayan embarcado en el lugar, o estén de tránsito, con expresión del nombre, edad estado civil, profesión, nacionalidad, procedencia y punto de destino; así como los demás datos que se prevengan en el reglamento de esta Ley.

Art. 101. La persona que visite un buque, sin el previo consentimiento de los funcionarios de Migración, será bajada a tierra inmediatamente; sin perjuicio de aplicarle la pena que en esta Ley se señala.

Art. 102. Todos los extranjeros en tránsito, que desembarquen en puertos, sin llevar la tarjeta de identificación que se prevenga en el reglamento de esta Ley, serán obligados a reembarcarse inmediatamente.

Art. 103. Los extranjeros cuya inmigración esté prohibida y que, encontrándose en tránsito, desembarquen en algún puerto nacional, con objeto de visitarlo, y permanezcan en tierra después de la salida del barco en que hacen la travesía, sin presentarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, a justificarse en la oficina de Migración respectiva, serán conducidos al lugar que designe la Secretaría de Gobernación, para

ser reembarcados en su oportunidad; sin perjuicio de aplicarles la sanción correspondiente.

Art. 104. Los tripulantes extranjeros de los barcos que toquen puertos nacionales, pueden, con anuencia del delegado de Migración, bajar libremente a tierra y permanecer en ella mientras se hallen surtos los buques a cuya tripulación pertenecen. En los casos en que el delegado lo estime conveniente, tal permiso se otorgará mediante depósito o fianza a su satisfacción.

Art. 105. El Reglamento de la presente Ley determinará las reglas a que debe quedar sujeta la vigilancia de individuos de la clase de tripulantes extranjeros, en buques de cualquier nacionalidad, y, asimismo, fijará los requisitos para permitir que tales tripulantes visiten el país o se internen en él.

Art. 106. El orden en que debe pasarse visita a los barcos será el siguiente:

- I. Sanidad;
- II. Migración, y
- III. Aduanas.

Por acuerdo mutuo, y cuando por circunstancias especiales así convenga, tales visitas o inspecciones podrán efectuarse simultáneamente.

Art. 107. Las visitas de particulares a los buques serán permitidas con sujeción a los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley; siendo autorizadas únicamente por los delegados de Migración.

Art. 108. Las disposiciones de este capítulo que se refieren a desembarco de pasajeros y estancia temporal en los puertos, no tendrán aplicación cuando las autoridades sanitarias hubieren determinado, dentro de sus atribuciones legales, el no desembarco de dichos pasajeros, por existir causas que lo ameriten.

Capítulo XIV

Del tránsito aéreo

Art. 109. Son aplicables a los transportes y empresas aéreas, las prevenciones de los artículos 85, 86, 87, 88, 90 y 91 de esta Ley.

Art. 110. La presentación de las listas de que habla el artículo obliga igualmente a los pilotos de las aeronaves civiles, que transporten pasajeros a nuestro país; pero dichas listas no requerirán el visto bueno consular. Estos documentos serán entregados, por los pilotos, a los oficiales de Migración, en el primer lugar que toquen los autorizados para el tráfico aéreo.

Art. 111. Al practicar a una aeronave la inspección reglamentaria, y una vez terminada ésta, las autoridades de Migración anotarán en las listas que el piloto o conductor les presente, de conformidad con el artículo una constancia de haber cumplido tal inspección, constancia que el piloto estará obligado a presentar a las autoridades del país, siempre que para ello sea requerido.

Capítulo XV

Del tránsito terrestre

Art. 112. El orden en que se inspeccione a los pasajeros, en las fronteras, será el mismo en que debe pasarse visita a los barcos en los puertos, de conformidad con el artículo de este ordenamiento.

Art. 113. La deportación de los inmigrantes que ilegalmente hayan entrado a la República por vías terrestres, se efectuará por cuenta del interesado o, por su insolvencia, a cargo del Gobierno.

Capítulo XVI

Del registro de extranjeros

Art. 114. Se establece en la República el Registro de Extranjeros.

Art. 115. Este registro será llevado por los Ayuntamientos de la República y por las delegaciones de los gobiernos locales del Distrito y territorios federales.

Art. 116. Para este efecto, todos los extranjeros radicados o que en el futuro se radiquen en el país, quedan obligados a manifestar, ante las autoridades correspondientes, todas las circunstancias de su identificación personal, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de esta Ley en los lugares de su residencia, o dentro de seis meses de su entrada al país, en su caso.

Art. 117. Las oficinas encargadas del Registro estarán obligadas a inscribir, en las formas o libros que autorice el Departamento de Migración, a todos los extranjeros que inmigren legalmente, y a los que residan sin haberse registrado anteriormente en la jurisdicción de los municipios o delegaciones a que dichas oficinas correspondan.

Art. 118. Los ayuntamientos y delegaciones de que se habla, vigilarán, por medio de sus cuerpos de policía, en los lugares en donde no haya empleados del Servicio de Migración, que se cumpla este mandato.

Art. 119. Los extranjeros a que se refieren los artículos anteriores comprobarán las circunstancias de su entrada legal o de su residencia anterior al primero de mayo de 1926, ante las oficinas del Registro de Extranjeros, en la forma y términos que fije el Reglamento, o en su defecto, la Secretaría de Gobernación.

Art. 120. Tienen carácter de preferentes, para la comprobación de las circunstancias de la entrada legal, los documentos, constancias y anotaciones expedidas por las oficinas de Migración.

Art. 121. Los extranjeros que no posean dichos documentos, constancias o anotaciones, por haber inmigrado con anterioridad a las fechas en que fueron exigibles, comprobarán su residencia en la República, en la forma que fije el Reglamento o, en su defecto, la Secretaría de Gobernación.

Art. 122. Para ser inscritos en el Registro de Extranjeros, los interesados rendirán, bajo protesta de decir verdad, la siguiente información:

- I. Nombres y apellidos;
- II. Edad;

- III. Estado civil;
- IV. Profesión, oficio u ocupación;
- V. Si es o no jefe de familia, y, en caso afirmativo, el número de los miembros de ella;
- VI. Nacionalidad;
- VII. Lugar de procedencia en el extranjero;
- VIII. Domicilio en el país, y,
- IX. Fecha y lugar de entrada a la República, y carácter con que se haya hecho.

Art. 123. La Secretaría de Gobernación instruirá a las oficinas del Registro de Extranjeros, en los lugares en donde no haya empleados de migración, por medio de circulares y resoluciones a sus consultas, sobre todo lo relativo al examen de extranjeros y justificación de legal internación.

Art. 124. En los lugares en donde haya empleados del Servicio de Migración, éstos verificarán el examen previo al Registro.

Art. 125. Las oficinas del Registro de Extranjeros enviarán trimestralmente al Departamento de Migración, noticia detallada de sus labores, con los datos de que se habla en el artículo 122, y de las altas y bajas que en su jurisdicción hubiere habido.

Art. 126. Las propias oficinas expedirán a los extranjeros que se inscriban, un comprobante, cuyo modelo proporcionará el Departamento de Migración. Este documento bastará a los interesados para comprobar, en cualquier tiempo, su legal estancia en el país, ante las autoridades de Migración.

Art. 127. Ninguna oficina del Registro de Extranjeros podrá proporcionar el mencionado documento a los extranjeros que no comprueben su legal internación, su residencia anterior al primero de mayo de 1926 o los haberes sido examinados y admitidos previamente por las autoridades de Migración.

Art. 128. Los extranjeros que, al pretender inscribirse, se encuentre que han inmigrado ilegalmente, y aquellos cuya documentación sea irregular, defectuosa o de dudosa legitimidad, no podrán ser inscritos en el Registro, y las oficinas respectivas darán cuenta inmediata de cada caso al Departamento de Migración, el que resolverá en definitiva.

Art. 129. Periódicamente los ayuntamientos del país y los gobiernos del Distrito y territorios federales enviarán al Departamento de Migración, los duplicados de las tarjetas de registro que hubieren expedido, en cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, así como los demás datos que la Secretaría de Gobernación determine.

Art. 130. Los extranjeros están obligados, al cambiar su residencia de un municipio a otro de la República, a presentarse al ayuntamiento del nuevo domicilio y a exhibir su tarjeta de registro; pudiendo los ayuntamientos adoptar las medidas que estimen pertinentes para hacer efectiva esta disposición.

La autoridad municipal, en caso de que el extranjero no exhiba la credencial del Registro, lo obligará a inscribirse en él.

Capítulo XVII

Del impuesto de migración.

Art. 131. Todo inmigrante mayor de seis años deberá cubrir el impuesto que al efecto asigne la ley respectiva.

Art. 132. Para los efectos de la percepción del impuesto de que habla el artículo anterior, las oficinas de Migración funcionarán como auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Art. 133. Una vez causado el impuesto de Migración, sólo procede su reintegro dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se cubrió, si se demuestra que hubo error en su aplicación o que, conforme a la Ley, se tiene derecho a su devolución. Esta prueba incumbe al interesado, así como la solicitud de devolución que deberá ser por escrito.

Art. 134. Se exceptúa del pago del impuesto de Migración a los estudiantes extranjeros que vengan a estudiar en algún plantel universitario de la República. Su calidad de estudiantes la comprobarán previamente a su entrada, a satisfacción de la oficina del Ramo; pero quedan obligados a exhibir ante el Departamento de Migración, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su entrada, su credencial de estudiantes, que les expida la facultad universitaria o plantel técnico, industrial, o de cualquier otra índole, de la República en donde estudien, y sólo en este caso se les confirmará definitivamente la exención del pago del impuesto, quedando sujetos a cubrirlo en caso contrario, y sin perjuicio, en el primero, de que el Departamento niegue la exención, si por otros medios se cerciora de que los interesados carecen de la calidad de estudiantes efectivos.

Capítulo XVIII

Disposiciones penales.

Art. 135. Las infracciones a la presente Ley serán castigadas administrativamente, de conformidad con las siguientes disposiciones.

Art. 136. Las violaciones, por las autoridades de Migración, de los artículos 14, 24, 45, 50, 55, 68 y 73, se castigarán imponiendo al culpable la pena de destitución, sin perjuicio de su consignación a las autoridades competentes, en caso de comisión de un delito.

Art. 137. Las violaciones, por las mismas autoridades, de los artículos 6o., 7o., 9o., 10, 12, 71, 79, 83, 97 y 127, se castigarán imponiendo al responsable, por primera vez, suspensión de empleo hasta por un mes, sin goce de sueldo, y destitución en caso de reincidencia.

Art. 138. Las violaciones, por los funcionarios y empleados de Migración, que no estén penadas en los artículos anteriores, se castigarán con multa de diez a quinientos pesos, y con la destitución, en caso de reincidencia.

Art. 139. Las penas de que hablan los tres artículos anteriores, las aplicará discrecionalmente la Secretaría de Gobernación, y su resolución será siempre definitiva.

Art. 140. Las violaciones cometidas por los particulares, se castigarán administrativamente, en los términos de los artículos siguientes, a no ser que constituya un delito, en cuyo caso se hará la consignación de los responsables a las autoridades competentes.

Art. 141. Las violaciones, por los interesados, de los artículos 2o., 47, fracción III, inciso f; 51, 58, 102, 103 y 130, se castigarán con multa de cien a mil pesos, según la circunstancias personales del responsable.

Art. 142. Al extranjero ilegalmente admitido, se le impondrá una multa de cien a quinientos pesos, sin perjuicio de deportarlo.

Art. 143. El extranjero en tránsito que permanezca en el territorio nacional más de seis meses, sin legalizar la continuación de su estancia, será multado con cincuenta a quinientos pesos, y conducido al lugar que designe la Secretaría de Gobernación para ser expulsado; pero si no está prohibida su inmigración, puede permitírsele su permanencia como inmigrante, si paga la multa y llena los requisitos de la Ley.

Art. 144. A los extranjeros que no se presenten a registrar dentro de los términos fijados por el artículo 116 de esta Ley, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos pesos.

Art. 145. El extranjero que entre ilegalmente al país, o contraviniendo las disposiciones que dicte la Secretaría de Gobernación, pagará una multa de cien a quinientos pesos y, además, será deportado; a no ser, para esto último, que obtenga permiso para residir en el territorio nacional, por haber llenado todos los requisitos legales.

Art. 146. La pena de expulsión de que trata el artículo anterior, prescribirá a los cinco años de residencia efectiva en el territorio nacional.

Esta prescripción debe entenderse sin perjuicio de la facultad que al Ejecutivo de la Unión concede el artículo 33 constitucional.

Art. 147. Cuando los extranjeros sujetos a expulsión se hallen sometidos a un juicio o sea necesaria su permanencia en el país, la Secretaría de Gobernación podrá suspenderla por el tiempo indispensable.

Art. 148. La persona que visite un buque, con violación al artículo 101, será castigada con una multa de diez a quinientos pesos.

Art. 149. Las empresas de transportes aéreos o marítimos que abandonen en nuestro territorio pasajeros o tripulantes rechazados o no admitidos por nuestras autoridades de Migración, serán multadas con cien a mil pesos, sin perjuicio de conducir a su costa a dichos individuos fuera del territorio nacional.

Art. 150. El desembarque o aterrizaje efectuados por sitios o a horas que no sea los señalados legalmente, se castigará imponiendo a la empresa responsable o a los representantes o consignatarios, la pena de cien a mil pesos.

Art. 151. La pena de que trata el artículo anterior será impuesta a las empresas de transportes aéreos o marítimos, cuando de éstos baje a tierra algún pasajero o tripulante antes de que las autoridades de Migración le practiquen la visita correspondiente.

Art. 152. Las empresas navieras, sus representantes o consignatarios, cuando los capitanes de los buques desobedezcan una orden de conducción de pasajeros que les

hayan sido rechazados, serán multados con cien a quinientos pesos, y el transporte no será despachado hasta que se entere la multa y se cumpla la orden de conducción, salvo caso de fuerza mayor, de acuerdo con las disposiciones de Marina.

Art. 153. Las empresas aeronáuticas, sus representantes o consignatarios, cuando los pilotos de las aeronaves o los representantes de aquellas cometan falta igual a la consignada en el artículo anterior, serán castigados con la multa señalada en el mismo artículo; pero el transporte no podrá ser detenido; limitándose la intervención, en este caso, a levantar un acta detallada, en que se consignen todas las circunstancias.

Art. 154. Las empresas de transportes aéreos o marítimos que no cumplan con lo prescrito en los artículos 85 y 86 de esta Ley, serán requeridas por la Secretaría de Gobernación para efectuarlo dentro del plazo que la misma determine, y, de no cumplirlo en tal término, pagarán una multa de cien a quinientos pesos.

De negarse definitivamente a cumplir con tales requisitos, se les suspenderá la autorización para viajes subsecuentes, por lo que se refiere a la conducción de personas.

Art. 155. El capitán de un buque o el piloto de una aeronave que emprenda un viaje de salida, antes de ser inspeccionado el pasaje por las autoridades de Migración y de recibir de ellas la autorización correspondiente, será multado con cien a mil pesos.

Cuando el capitán o el piloto, según el caso, no cubran la multa, se hará ésta efectiva a las empresas respectivas, sus representantes o consignatarios.

Art. 156. La infracción a los artículos 90, 99 y 107 será castigada con multa de quinientos a mil pesos, y, en caso de reincidencia, se dará a conocer a los cónsules mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor, a efecto de que no se le extiendan despachos para puertos mexicanos, por lo que se refiere a la conducción de personas.

Art. 157. Los enganchadores, agentes de Migración y en general todos los que por cuenta propia o ajena celebren contratos para cuya ejecución se requiera la emigración de trabajadores mexicanos, que no se sujeten a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, serán castigados con multa de cien a mil pesos.

Art. 158. Cuando no sean cubiertas las multas que se impongan por violaciones a esta Ley, su Reglamento y disposiciones relativas, que cometan las empresas de transportes, sus empleados, agentes y representantes o consignatarios, se harán efectivas en los propios bienes de las referidas empresas, empleándose en su caso, la facultad económico-coactiva.

Art. 159. En los demás casos en que no sea pagada la multa impuesta, se conmutará con arresto no mayor de quince días, que sufrirá el responsable de la infracción, el cual será detenido desde luego, comunicándose el caso a la Secretaría de Gobernación, por la vía telegráfica.

Art. 160. Las infracciones a esta Ley, no previstas en este capítulo, se castigarán, según su gravedad, con multa de diez a quinientos pesos, a juicio del jefe de la oficina de Migración correspondiente.

Art. 161. Los jefes de las oficinas de Migración impondrán las penas administrativas establecidas en este capítulo; pero tal aplicación será revisada, a petición de parte, por la Secretaría de Gobernación.

Si la pena fuere pecuniaria, deberá hacerse efectiva inmediatamente, y, en caso de inconformidad, su monto se constituirá en depósito en la jefatura de Hacienda o Aduana respectiva, mientras resuelve la Secretaría.

TRANSITORIOS

Art. 1. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Art. 2. Se derogan todas las leyes y disposiciones vigentes, en lo que se opongan a la presente.

Art. 3. Entretanto se expide el Reglamento correspondiente, tendrán el carácter de reglamentarias las circulares e instrucciones giradas por el Departamento de Migración, siempre que no estén en oposición con las disposiciones de esta Ley.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta días del mes de agosto de mil novecientos treinta. P. Ortiz Rubio. Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Carlos Riva Palacio.

Rúbrica. Al C. Secretario de Gobernación. Presente.

Sufragio Efectivo. No reelección.

México, D.F., a 30 de agosto de 1930. El Secretario de Gobernación, Carlos Riva Palacio. Rúbrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Plan Sexenal formulado por el Partido Nacional Revolucionario, que fue aprobado en la Convención de Querétaro, y que sirve de pauta a las labores del Ejecutivo de mi cargo, estima como necesaria la reorganización del Servicio de Migración, atendiendo al hecho de que los movimientos de población en nuestro país a últimas fechas han venido presentando características especiales, cuya consecuencia ha sido la aparición de problemas migratorios de resolución urgente. Ahora bien, como la reorganización expresada y la solución de los problemas enunciados exigen una revisión total de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, solicito se le autorice al Ejecutivo para que expida la Ley General de Población en la que deberán quedar comprendidas las materias de migración, demografía, turismo, identificación personal y las demás que fueren necesarias para el desarrollo de la política demográfica del país y atribuciones de los órganos respectivos. El Ejecutivo dará cuenta oportunamente al Congreso de la Unión del uso que haga de esta facultad.

2.24. LEY GENERAL DE POBLACIÓN DE 1936

TÍTULO PRIMERO ORGANIZACIÓN

Capítulo I

Art. 1. Los problemas demográficos fundamentales de cuya resolución se ocupa esta Ley, comprenden:

- I. El aumento de la población;
- II. Su racional distribución dentro del territorio;
- III. La fusión étnica de los grupos nacionales entre sí;
- IV. El acrecentamiento del mestizaje nacional mediante la asimilación de los elementos extranjeros;
- V. La protección a los nacionales en sus actividades económicas, profesionales, artísticas o intelectuales, mediante disposiciones migratorias;
- VI. La preparación de los núcleos indígenas para constituir mejor aporte físico, económico y social desde el punto de vista demográfico;
- VII. La protección general, conservación y mejoramiento de la especie, dentro de las limitaciones y mediante los procedimientos que señala esta Ley.

Art. 2. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictar o promover, en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

Art. 3. La aplicación y ejecución de los procedimientos necesarios para conseguir cada uno de los fines de la política demográfica nacional, corresponderá a las dependencias del Poder Ejecutivo, según las atribuciones que a cada una señale la Ley de Secretarías de Estado, o a los gobiernos de las entidades federativas; pero la definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de las labores de dichas depen-

dencias o gobiernos locales en materia de movimiento de población corresponderá exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.

Art. 4. El aumento de la población deberá procurarse:

- I. Por el crecimiento natural;
- II. Por la repatriación;
- III. Por la inmigración.

Art. 5. Para lograr el crecimiento natural, se dictarán o promoverán las medidas adecuadas al fomento de los matrimonios, aumento de la natalidad, protección biológica y legal de la infancia, su mejor alimentación, higienización de las habitaciones, centro de trabajo y lugares poblados, elevación del tipo medio de subsistencia, y la relación equilibrada entre las actividades y los elementos necesarios de vida.

Art. 6. Se fomentará la repatriación de los mexicanos, colocándoseles en lugares y medios donde puedan ser útiles los conocimientos y adiestramientos que hayan adquirido en el extranjero, y dotándoseles de los elementos necesarios para convertirlos en factores en factores de producción.

Art. 7. Compete a la Secretaría de Gobernación:

- I. Dictar las medidas necesarias para impedir o restringir, en su caso, la emigración de nacionales, a fin de evitar la disminución excesiva de la población;
- II. Promover, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se fijen en cada caso genérico y para resolver problemas étnicos o para llenar necesidades económicas o culturales, la venida al país de extranjeros de la nacionalidad, raza, sexo, edad, estado civil, ocupación, instrucción de ideología que considere adecuadas, en el número y por la temporalidad que sea necesaria, pudiendo otorgarse a los inmigrantes facilidades económicas para su establecimiento;
- III. Formar y publicar en el mes de octubre de cada año, independientemente de lo que previene la fracción anterior, tablas diferenciales que marquen el número máximo de extranjeros que podrán admitirse durante el año siguiente. Tales tablas señalarán las condiciones de nacionalidad, raza, sexo, estado civil, edad, ocupación, instrucción, medios económicos, y demás características que se juzguen pertinentes de los extranjeros admisibles, así como la calidad migratoria y temporalidad de admisión. Se formarán teniendo en cuenta el interés nacional, el grado de asimilabilidad racial y cultural, y la conveniencia de su admisión, a fin de que no constituyan factores de desequilibrio;
- IV. Delimitar sectores o lugares en donde precisamente habrán de radicar los extranjeros que se admitan en el país, por lo menos durante cinco años, pasados lo cuales podrán mudar su radicación si así les conviene. Los sectores de inmigración se fijarán teniendo en cuenta las necesidades nacio-

- nales y la procedencia de los extranjeros, a efecto de que no constituyan, para éstos, lugares inadecuados;
- V. Promover, estimular y realizar el traslado de contingentes humanos de las zonas muy pobladas de la República hacia regiones de débil densidad de población, después de prepararlas, previos los estudios correspondientes y los arreglos con las autoridades competentes, para una radicación fácil y permanente;
 - VI. Procurar el establecimiento de fuertes núcleos nacionales de población en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados, pudiendo ministrar los elementos económicos y culturales que fueren precisos;
 - VII. Formular los programas de acción que desarrollarán las dependencias del Ejecutivo para realizar la fusión étnica de los grupos nacionales, que se estima de interés social;
 - VIII. Fomentar el turismo del exterior y del interior como un elemento de cultura, como coadyuvante indirecto al desarrollo de la política demográfica, y como medio de conocimiento de los recursos que ofrece el territorio nacional;
 - IX. Dar facilidades a los extranjeros asimilables y cuya fusión sea más conveniente para las razas del país.

Capítulo II

Art. 8. Para el estudio de las cuestiones a que se contrae esta Ley, formulación de los proyectos respectivos y ejecución de las resoluciones y acuerdos en la materia, se crea dentro de la Secretaría de Gobernación la Dirección General de Población.

Art. 9. Son funciones de la Dirección General de Población atender lo relativo a:

- I. Demografía,
- II. Migración y
- III. Turismo.

Art. 10. En relación con la demografía, la Dirección General tendrá a su cargo:

- I. El estudio y tramitación de las cuestiones relativas al movimiento de población y al registro de nacionales y extranjeros;
- II. La distribución y acomodamiento de la población interior;
- III. La distribución y acomodamiento de los contingentes que proporcione la inmigración;
- IV. La investigación de las causas de la emigración regional, su previsión y remedio, y la información e instrucción de los emigrantes, a efecto de evitarles dificultades en el extranjero;
- V. La documentación de los emigrantes nacionales, y
- VI. La repatriación de nacionales.

Art. 11. Para el registro de nacionales y extranjeros, la Dirección General de Población será especialmente auxiliada por las oficinas de correos y telégrafos federales,

las oficinas federales de Hacienda, los ayuntamientos y los gobiernos de los estados, en la forma que dispone esta Ley y reglamentos respectivos.

Art. 12. En materia de migración, la Dirección General de Población dividirá sus servicios en:

- I. Central e interior,
- II. De puertos y fronteras, y
- III. Exterior.

Art. 13. El Servicio Central e interior será desempeñando por las dependencias de la Dirección en la capital de la República y en el interior del país; el de Puertos y Fronteras se desempeñará por las dependencias del servicio en esos lugares, y en su defecto, por las de Salubridad Federal, Capitanías de Puertos o Aduanas, en su caso; y el exterior, por los delegados de la Dirección General de Población y por los miembros del Servicio Exterior de la República en su carácter de auxiliares.

Art. 14. En el ramo de migración, la Dirección General de Población tendrá a su cargo:

- I. La entrada y salida de extranjeros;
- II. El estudio de los problemas del ramo para proponer la resolución de los mismos, de acuerdo con las necesidades del país, en cuanto se relacione con el fomento o restricción de la inmigración;
- III. El estudio de los casos particulares que consulten las oficinas del ramo sobre admisión o no admisión de extranjeros, modalidades del tráfico internacional y otros que pudieran presentarse;
- IV. La documentación de extranjeros que pretendan salir del país;
- V. Vigilar porque se cumplan los requisitos y condiciones fijadas a los extranjeros para su internación al país;
- VI. Vigilar que el tránsito de migración se efectúe con estricto apego a las disposiciones de la Ley;
- VII. La inspección de personas a bordo de los transportes terrestres, marítimos y aéreos, ya sean nacionales o extranjeros;
- VIII. Cumplir y hacer cumplir el Código Sanitario y las disposiciones que se relacionen con la sanidad marítima y fronteriza, en su carácter de auxiliar del Servicio Sanitario Federal;
- IX. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Secretaría de Gobernación respecto a la residencia y a las actividades de los extranjeros;
- X. La organización y protección de los emigrantes y emigrados mexicanos.

Art. 15. EL Servicio de Migración es de carrera. La Secretaría de Gobernación dictará el Reglamento especial correspondiente, sin contravenir las disposiciones fundamentales de la Ley del Servicio Civil.

Quedarán fuera de la carrera los jefes superiores de Migración, los jefes del Servicio y los visitadores que especialmente se designen.

Art. 16. En materia de turismo, la Dirección General de Población tendrá a su cargo:

- I. Hacer propaganda de los atractivos turísticos de la República y coordinar la de todas las instituciones o empresas interesadas;
- II. Vigilar los servicios de hoteles, casas de huéspedes y demás lugares de alojamiento que se destinen a los turistas, sólo en cuanto concierna al fomento y protección del turismo;
- III. Promover ante las autoridades correspondientes las medidas necesarias para que no se eleven los precios normales con motivo del desarrollo del turismo;
- IV. Poner en conocimiento de las autoridades respectivas las deficiencias que notare en los servicios de transporte;
- V. Fomentar y mejorar los centros de turismo y procurar la creación de otros nuevos en la República;
- VI. Organizar con los gobiernos de los estados y ayuntamientos el establecimiento de campos para turistas;
- VII. Promover lo conducente para que en las carreteras, caminos y poblaciones se establezcan servicios eficientes para la atención de los turistas;
- VIII. Proponer que se convoque a convenciones de turismo y congresos similares que lo beneficien, y cooperar en la organización de exposiciones, conferencias y reuniones con igual fin;
- IX. Fomentar de modo sistemático el turismo interior.

Art. 17. La Secretaría de Gobernación hará los arreglos necesarios a efecto de que los gobiernos de los estados, con cargo a su erario, establezcan oficinas de turismo.

Art. 18. Corresponde a la Secretaría de Gobernación designar agencias o agentes honorarios de turismo y autorizar a los que se estime pertinente, sean honorarios o no, para que gestionen los documentos colectivos o individuales para los extranjeros turistas.

Art. 19. Para hacer cumplir las determinaciones de esta Ley, de los reglamentos respectivos y los acuerdos que conforme a ellos se dicten, los funcionarios de los servicios de población podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Art. 20. Para auxiliar a la Dirección General en el estudio de los problemas de población, se formará, como dependencia de la misma, un Consejo Consultivo de Población que estará integrado por un representante de las siguientes Secretarías y Departamentos:

Relaciones Exteriores;
Economía Nacional;
Agricultura y Fomento;
Comunicaciones y Obras Públicas;
Educación Pública;
Salubridad Pública;

Trabajo;
Agrario;
Asuntos Indígenas.

Este Consejo funcionará bajo la presidencia del Director General de Población con arreglo al Reglamento que la Secretaría de Gobernación expida.

Art. 21. La Secretaría de Gobernación resolverá los casos dudosos de interpretación de esta Ley y sus reglamentos.

TITULO SEGUNDO DEMOGRAFÍA

Capítulo I

Art. 22. La Secretaría de Gobernación coadyuvará con el Departamento de Salubridad Pública para vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones tendientes a evitar el matrimonio y las uniones de las personas que padezcan sífilis, locura o enfermedades crónicas o incurables, que sean además contagiosas o hereditarias, o que tengan el vicio de la ebriedad o usen indebida y persistentemente drogas enervantes.

Art. 23. La Secretaría de Gobernación promoverá las disposiciones necesarias para que los hijos naturales no reconocidos legalmente gocen sin embargo del derecho de alimentos.

Art. 24. También promoverá la Secretaría de Gobernación que se dicten medidas para que en las uniones de hecho, el hombre quede obligado a dar a la mujer protección económica, estipulando que cuando la unión se prolongue por un año y se disuelva sin asentimiento de la mujer y sin que existan por su parte faltas graves que lo justifiquen, el hombre queda igualmente obligado a continuar impartiendo dicha protección por todo el tiempo que la necesite y observe una honesta soltería.

Art. 25. Se procurará ayudar económicamente a las familias nacionales más prolíficas, y que los padres y madres de familia que lo necesiten obtengan preferentemente trabajo.

Capítulo II

Art. 26. La Dirección General de Población estudiará las condiciones del país en lo referente a la densidad y a los elementos de riqueza con que cuenta cada zona del territorio nacional, con el fin de obtener una mejor distribución de los habitantes.

Art. 27. De acuerdo con dichos estudios, la Secretaría de Gobernación sugerirá a los Gobiernos de los Estados la conveniencia de establecer nuevos centros de población en los lugares elegidos, proponiendo los medios de trabajo que deban proporcionarse para una radicación definitiva; solicitando, si fuere necesario, la colaboración de las secretarías y departamentos federales y pudiendo tratar con las instituciones de crédito o de transportes para que cooperen en la realización del proyecto.

Art. 28. Se fomentará la corriente migratoria interior hacia los lugares convenientes, tendiendo a limitar o restringir la que se dirige hacia los centros densamente poblados o de recursos insuficientes.

Art. 29. Es facultad de la Secretaría de Gobernación distribuir y acomodar a los repatriados e inmigrantes, fundando, si fuere el caso, colonias agrícolas o industriales, en colaboración con las secretarías y departamentos correspondientes. En casos justificados podrán proporcionarse facilidades a los contingentes humanos que deban trasladarse.

Art. 30. Se dictarán las medidas pertinentes para que los individuos y grupos profesionales ejerzan sus actividades en los lugares de mayor beneficio para la colectividad.

Art. 31. Se prohíbe, dentro del territorio nacional, el ejercicio de profesiones liberales a los extranjeros, salvo casos excepcionales o de notoria utilidad a juicio de la Secretaría de Gobernación.

Art. 32. Se delimitarán las actividades comerciales o industriales de los extranjeros, en los distintos lugares del país, tanto como protección a los nacionales, como con el fin de asegurarles el control de la vida económica.

Art. 33. Se dictarán disposiciones para restringir a los extranjeros el ejercicio sistemático y remunerado de actividades intelectuales o artísticas en el grado que lo exija la protección de los nacionales.

Capítulo III

Art. 34. La Secretaría de Gobernación patrocinará las medidas adecuadas para conseguir la asimilación de los extranjeros a la vida cultural del país; pudiendo imponerles la obligación de naturalizarse en breve plazo, de adquirir el idioma oficial o de inscribirse en centros docentes nacionales.

Art. 35. Se otorgarán facilidades para su arraigo a los extranjeros que contraigan matrimonio con mujer mexicana por nacimiento.

Capítulo IV

Art. 36. La repatriación de los nacionales se llevará a cabo sistemáticamente hasta lograr su más completa reintegración al país.

Art. 37. El servicio exterior de población informará cuando menos semestralmente acerca del número, condiciones económicas, actividades principales y situación general de los mexicanos emigrados, así como respecto a los que por los conocimientos o adiestramientos que hayan adquirido en el extranjero, puedan ser un factor útil y conveniente.

Art. 38. Se promoverá la adquisición de tierras, maquinaria, útiles, aperos, elementos de trabajo, y refacciones y semillas para el establecimiento y acomodo de los contingentes que proporcionen los repatriados-agricultores.

Art. 39. Igualmente se promoverá la adquisición de la maquinaria, útiles de trabajo, instrumentos, etc., y el otorgamiento de las refacciones necesarias cuando se

trate de la acomodación de repatriados que hayan de dedicarse a industrias, talleres o cualesquiera actividades diversas de la producción agrícola.

Art. 40. La Dirección General de Población informará periódicamente a los agentes de servicio exterior acerca de las condiciones económicas de las diferentes regiones del país. Los agentes del servicio exterior están obligados a proporcionar dichos informes a los mexicanos que deseen retornar al país y tengan medios para hacerlo, insistiendo en las ventajas que les reporta residir en las zonas o lugares que señale la propia Secretaría.

Art. 41. La Dirección General de Población organizará en los lugares en donde resida un número considerable de emigrados mexicanos, oficinas de protección para los mismos.

Art. 42. Los agentes de los servicios de población expedirán a los repatriados toda clase de certificados y documentos gratuitamente.

Art. 43. Los mexicanos que regresen al país después de haber permanecido en calidad de emigrados por más de un año en el extranjero, pueden introducir libres de derechos, además de los efectos que señala la Ley

Aduanal y disposiciones fiscales respectivas, todos aquellos que hayan obtenido en el lugar de su residencia para la explotación de algún negocio el ejercicio de profesión u oficio propio o cualquiera otra actividad a que se hubieren dedicado.

Capítulo V

Art. 44. Todos los extranjeros que entren al país, o que residan en él, con excepción de los visitantes locales, turistas o transmigrantes, están en la obligación de registrarse ante las autoridades que señala el Reglamento respectivo, dentro de los treinta días siguientes a su llegada al país. El registro será por una sola vez, salvo que se trate de una nueva internación.

Art. 45. Los extranjeros en el momento de registrarse deberán comprobar las circunstancias de su entrada legal y de su permanencia en el país por medio de documentos fehacientes.

Art. 46. Como anexo al Registro de Extranjeros se establecerá el Servicio de Identificación correspondiente.

Art. 47. Los extranjeros están obligados, al cambiar su domicilio, a presentarse a la autoridad política local, comprobando haberse registrado e informando su nuevo domicilio.

TITULO TERCERO MIGRACIÓN

Capítulo I

Art. 48. Los individuos que pretendan entrar al territorio nacional o salir de él deberán llenar los requisitos exigidos por la presente Ley y su Reglamento.

Art. 49. El tránsito personal, por puertos y fronteras, sólo puede efectuarse por los lugares designados para ello, dentro de las horas reglamentarias y con la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 50. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito personal, por puertos y fronteras, oyendo previamente a las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Obras Públicas.

Art. 51. La Secretaría de Gobernación reglamentará, de acuerdo con las necesidades de cada región, las visitas de extranjeros a nuestras poblaciones marítimas y fronterizas, así como el tránsito diario entre éstas y las colindantes del extranjero; respetando en todo caso los tratados y convenios internacionales sobre la materia.

Art. 52. El Servicio de Migración tiene carácter de prioridad para verificar la inspección a la entrada o salida de personas en cualquier forma en que lo hagan, aun tratándose de transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas y fronteras, sobre todos los demás servicios federales, con excepción del de Sanidad.

Art. 53. Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas, en el tráfico de vapores, con excepción de las funciones de policía y sanidad, queda a cargo de las oficinas de Migración.

Art. 54. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 52, los representantes de gobiernos extranjeros que vengan en comisión especial a nuestro país con sus familiares, séquito, empleados y servidumbre, así como todas las personas que, conforme a los principios del Derecho Internacional, quedan exentas de la jurisdicción territorial, en los términos de la Ley respectiva.

De igual franquicia gozarán las personas que la Secretaría de Gobernación determine.

Art. 55. El tránsito de funcionarios extranjeros de migración y de turismo no estará sujeto a requisito alguno de parte de las autoridades migratorias, las que les darán toda clase de facilidades a condición, siempre, de absoluta reciprocidad.

Art. 56. La Dirección General de Población velará, en lo que respecta a su ramo, por el estricto cumplimiento de las disposiciones que rigen la estadística nacional; llevando al efecto un minucioso registro de los movimientos de personas de que se ocupa esta Ley.

Art. 57. El gobierno mexicano se reserva la facultad de mandar cerrar todas o algunas de las entradas marítimas o fronterizas y prohibir la internación y salida de

nacionales y extranjeros, cuando por circunstancias políticas lo estime conveniente y por el tiempo estrictamente necesario.

Art. 58. Los extranjeros que vengan de su país huyendo de persecuciones políticas serán admitidos por las autoridades de Migración, previa identificación, con carácter provisional, con obligación de permanecer en el puerto de entrada mientras resuelve cada caso la Secretaría de Gobernación, a la cual se comunicará inmediatamente.

Art. 59. Las disposiciones de esta Ley en relación con los extranjeros, se aplicarán teniendo en cuenta preferentemente los tratados internacionales.

Capítulo II

Art. 60. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país, con cualquiera de las siguientes calidades: turistas, transmigrantes, visitante local, visitante, inmigrante o inmigrado.

Art. 61. Turista es el extranjero que entra al país exclusivamente con móviles de recreo. La estancia de los turistas nunca podrá exceder de seis meses.

Art. 62. Transmigrante es el extranjero que cruza el territorio nacional para dirigirse a otro país. No podrá permanecer en territorio mexicano por más de treinta días.

Art. 63. Visitantes locales son los extranjeros que entran al país con el objeto de permanecer en los puertos marítimos o fronterizos por un término que no exceda de tres días, y los residentes en ciudades extranjeras fronterizas que pasan habitualmente por razón de actividad o de paseo a las ciudades mexicanas limítrofes, sin salir de los límites de estas poblaciones ni permanecer en ellas más del término indicado.

Art. 64. Visitante es el extranjero no inmigrante que se interna con móviles diversos de los de recreo o trans migración, pudiendo dedicarse a actividades remuneradas o lucrativas. No podrá permanecer en el país por más de seis meses.

Art. 65. Inmigrante es el extranjero que entra al país con el propósito de radicarse en él, pudiendo ejercer actividades remuneradas o lucrativas. Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años, siempre que anualmente demuestren que subsisten las condiciones y los requisitos con que fueron admitidos.

Art. 66. Inmigrado es el extranjero que obtiene derecho de radicación definitiva en el país.

Art. 67. Sólo a los turistas y a los transmigrantes no se les podrá autorizar el cambio de su situación migratoria, a no ser que se encuentren en el caso del artículo 91 de esta Ley.

Art. 68. Son emigrantes los mexicanos o inmigrantes que salgan del país con el propósito de radicarse en el extranjero.

Art. 69. Los nacionales que vuelven al país después de radicar por lo menos un año en el extranjero, se considerarán como repatriados.

Art. 70. Los extranjeros que sean deportados del país por violaciones a esta Ley o sus reglamentos, no podrán retornar al mismo sino con autorización expresa de la

Secretaría de Gobernación, y después de que hayan cumplido con las sanciones y condiciones que se les hubieren impuesto.

Art. 71. A los polizones extranjeros que lleguen en algún buque, aeronave, ferrocarril o autocamión procedentes del extranjero, se le impedirá el ingreso, y en caso de que efectúen éste subrepticamente, las empresas respectivas quedan obligadas a hacerlos regresar inmediatamente en sus vehículos. Tratándose de buques, los polizontes serán retenidos a bordo bajo la directa responsabilidad del capitán y se les regresará en la misma embarcación.

Capítulo III

Art. 72. Para entrar a la República deben los interesados llenar, previamente, los requisitos siguientes: satisfacer el examen de las autoridades sanitarias, salvo los casos de exención por las mismas; rendir, a la autoridad de migración correspondiente, las informaciones estadísticas o personales que les pida; identificarse, por medio de la tarjeta respectiva, y en su caso acreditar su calidad migratoria; tener profesión, oficio u otro medio honesto de vivir; acreditar su buena conducta; no tener alguno de los siguientes impedimentos: los efectos establecidos y que en el futuro se establezcan en materia de salubridad pública.

Haber sido condenado por un delito infamante. Ser toxicómanos, alcohólicos, o propagar o fomentar el hábito de las drogas enervantes, o cualquier otro vicio punible, aunque en ello no se persiga lucro alguno. Ejercer la prostitución, explotarla o fomentarla, o pretender la introducción de prostitutas, acompañarlas o vivir a sus expensas, o dedicarse a la trata de blancas o de niños. Pertenecer a sociedades anarquistas, o propagar, sostener o fomentar doctrinas disolventes contra los gobiernos, o la de la supresión personal de los funcionarios públicos.

Haber declarado falsamente ante las autoridades migratorias.

Art. 73. Los mexicanos sólo satisfarán el examen de sanidad y las informaciones estadísticas legales. Cuando un mexicano arribe enfermo de un mal contagioso, según el dictamen de las autoridades de sanidad, las de Migración cooperarán con aquéllas para la pronta internación del individuo en el lazareto, estación sanitaria u hospital más próximos que designen las propias autoridades sanitarias.

Art. 74. Aun cuando se llenen todos los anteriores requisitos, la Secretaría de Gobernación puede ordenar que se impida la internación de determinados extranjeros indeseables.

Capítulo IV

Art. 75. Con excepción de los turistas en los términos de la presente Ley, y de los transmigrantes y visitantes locales, todos los extranjeros que se internen al país deberán constituir fianza o depósito que garantice sus gastos de repatriación y el pago de las sanciones que pudieran imponérseles por violaciones a las disposiciones migratorias.

Los inmigrados que hayan salido del país y regresen sin haber perdido sus derechos de tales, no estarán obligados a constituir dicha garantía.

Art. 76. Solamente la Secretaría de Gobernación puede autorizar la entrada de extranjeros con carácter de visitantes, inmigrantes o inmigrados.

Art. 77. Los visitantes locales deberán proveerse de los documentos de identificación y del permiso de las autoridades migratorias.

Art. 78. Los mexicanos residentes en ciudades extranjeras fronterizas pueden pasar libremente a las ciudades mexicanas limítrofes sin más requisitos que proveerse de una tarjeta de identificación que acredite además su nacionalidad.

Art. 79. La admisión como visitantes sólo da derecho a dedicarse a la actividad que se les hubiere permitido.

Art. 80. Para ser admitido como inmigrante, se requiere haber sido llamado por la Secretaría de Gobernación en los términos de la fracción II del artículo 7 de esta Ley; o ser de los admisibles conforme a la tablas diferenciales a que se refiere la fracción III del mismo artículo.

Art. 81. Los diplomáticos y agentes consulares que radiquen en el país sin estar sujetos a la jurisdicción territorial, así como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar sus representaciones desean seguir radicados en la República, deberán llenar los requisitos ordinarios. Se exceptuarán los casos de arraigo de exrepresentantes oficiales que hayan vivido en México no menos de diez años, y aquellos que, en razón de reciprocidad para determinados países, ameriten procedimiento distinto.

Art. 82. La admisión como inmigrante da derecho a traer consigo al cónyuge, a los hijos e hijas solteros, a los ascendientes si dependen económicamente del inmigrante, y a los parientes por consanguinidad dentro del tercer grado, menores de edad, si dependen económicamente del admitido; estos familiares serán aceptados exactamente por el tiempo que dure la admisión del inmigrante.

Art. 83. La inmigración del cónyuge se autorizará con iguales derechos de permanencia a los que tenga concedidos el esposo extranjero residente, siempre que el matrimonio se haya efectuado antes de la internación de éste en la República. Tratándose de matrimonios efectuados con posterioridad a su internación o por efectuarse, el cónyuge de nueva aceptación sólo será autorizado como inmigrante, sujeto a garantía de repatriación, y con impedimento expreso para dedicarse a cualquier actividad remunerada o lucrativa. En caso de ruptura del vínculo matrimonial antes de cinco años contados desde la fecha de internación del segundo admitido, se procederá a su repatriación o deportación en su caso, a menos que satisfaga los requisitos de la inmigración ordinaria.

Art. 84. Se prohíbe por tiempo indefinido la entrada al país de inmigrantes trabajadores. La Secretaría de Gobernación, al formar las tablas diferenciales a que se refiere

la fracción III del artículo 7o. de esta Ley, determinará concretamente las excepciones a esta prohibición.

Art. 85. Los patrones o empresas no deben dar ocupación a extranjeros que previamente no les comprueben encontrarse legalmente en el país. La infracción a esta disposición se castigará con multa o en su defecto con el arresto correspondiente.

Art. 86. La admisión de técnicos de cualquier rama de la ciencia quedará condicionada a los dictámenes generales del Consejo Consultivo de Población y a la obligación de instruir en su especialidad a aprendices nacionales preparados, en los términos que disponga el Reglamento.

Art. 87. Queda terminantemente prohibido a los inmigrantes ejercer el comercio con excepción del de mera exportación. Sólo podrán ser admitidos para dedicarse a la agricultura, a la industria o al comercio de exportación.

Art. 88. La inmigración de inversionistas se sujetará a los siguientes requisitos: la comprobación previa de la posesión, por el presunto inmigrante, de un capital mínimo de \$100,000.00 (cien mil pesos), si pretende establecer negocio agrícola, industrial o de exportación en el Distrito Federal; de \$20,000.00 (veinte mil pesos) si pretende establecerlos dentro de los municipios de las capitales de los estados, y de \$5,000.00 (cinco mil pesos), para cualquier otro lugar del país; La inversión se efectuará en forma estable, distinta a la de sociedades por acciones, y que proporcione utilidades suficientes para la atención de las necesidades personales del inmigrante, y las de sus familiares en su caso; La admisión se sujetará al requisito previo de constitución u otorgamiento de depósito o fianza que durará cinco años, para responder de que la inversión quedará hecha y subsistirá a satisfacción de la Secretaría en el plazo señalado; La admisión será condicional durante el plazo de cinco años, sujeta al requisito de que durante el primer semestre se efectúe la inversión, en los términos indicados; y por cada uno de los años siguientes, hasta el quinto, a refrendos anuales, siempre que el interesado conserve su calidad de inversionista en la forma y por la cantidad aprobadas.

Art. 89. El carácter de inmigrado se adquiere después de permanecer legalmente en el país durante los cinco años próximos anteriores, sin haberse ausentado dentro de este término por más de dos años consecutivos o con intermitencias. Si el residente ha salido de la República varias veces, se computarán los lapsos de ausencia.

Art. 90. Los extranjeros que hayan permanecido en territorio nacional sin llenar los requisitos legales, serán autorizados como inmigrados si comprueban que han residido en el país durante los diez años próximos anteriores, sin haberse ausentado dentro de este término por periodo o periodos que sumados excedan de dos años.

Art. 91. Los extranjeros que antes de cumplir los cinco o diez años de residencia a que se refieren los artículos 89 y 90 contraigan matrimonio con mujer mexicana contando con medios lícitos de subsistencia, serán considerados como inmigrados mientras subsista el vínculo matrimonial, entretanto adquieren por sí mismos el derecho de residencia definitiva.

Art. 92. Las oficinas federales, las de los estados y municipios, así como los notarios públicos y corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal residencia en el país como visitantes, inmigrantes o inmigrados; debiendo dar aviso oportuno a las autoridades migratorias en caso de que los extranjeros no satisfagan dicho requisito.

Capítulo V

Art. 93. Todo visitante y todo inmigrante mayor de quince años deberán cubrir a su internación los impuestos de migración y de registro ante las oficinas del servicio, que funcionarán como auxiliares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los inmigrantes deberán, además, pagar el primero de dichos impuestos en ocasión de cada refrendo anual, mientras no obtengan la calidad de inmigrados.

Art. 94. Una vez causados los impuestos sólo procede su reintegro dentro de los seis meses de la fecha en que se cubrieron, si se demuestra que hubo error en su aplicación o que conforme a la Ley se tiene derecho a la devolución; esta prueba incumbe al interesado.

Art. 95. Todos los visitantes, inmigrantes o inmigrados deberán inscribirse en el Registro de Extranjeros.

Art. 96. Se exceptúa del pago del impuesto de migración y del otorgamiento de fianza de repatriación a los estudiantes extranjeros que vengan a estudiar en algún plantel oficial de la República y a los asilados políticos, que no se dediquen a actividades lucrativas.

Capítulo VI

Art. 97. Los extranjeros que lleguen por puerto de mar, carentes de algún requisito que no pueda satisfacerse en el momento de su examen, podrán desembarcar provisionalmente, mientras la Dirección de Población resuelve sobre el particular, si constituyen depósitos o dan fianza satisfactoria, o si la compañía naviera que los trajo garantiza su regreso, en caso de que se les rechace en definitiva. Esta franquicia no es extensiva a los que adolezcan de algún impedimento legal y nunca podrá exceder del plazo de treinta días, e igualmente no es aplicable a los tripulantes que no demuestren su legal separación del trabajo.

Art. 98. Las empresas de transportes marítimos están obligadas a conducir, por su cuenta, fuera del territorio nacional, a los extranjeros traídos por ellas, que sean rechazados por las autoridades de Migración, en virtud de impedimento legal o por acuerdos posteriores de la Secretaría de Gobernación, dejando a salvo sus derechos de repetir contra los interesados.

Art. 99. Son responsables las propias empresas por sus tripulantes o pasajeros, cuando por culpa de las mismas queden éstos en nuestro territorio, sin haber sido

admitidos por las autoridades de Migración, en virtud de sus impedimentos o falta de requisitos legales.

Art. 100. Los capitanes de los buques que toquen nuestros puertos, a excepción de los nacionales que lo hagan en tráfico de cabotaje, están obligados a presentar a los oficiales de migración, una lista detallada de los pasajeros y otra de los tripulantes, visada esta última por el cónsul mexicano del último puerto extranjero que hayan tocado.

Art. 101. Los transportes marítimos no podrán conducir, a ningún lugar del territorio nacional, a los extranjeros que arriben sin someterse antes al examen de las autoridades de Migración más próximas al punto que toquen, al internarse en aguas territoriales. Asimismo, ninguno de dichos transportes podrá conducir pasajeros, nacionales o extranjeros, que salgan del territorio nacional, si no han sido examinados previamente por los oficiales del Ramo más próximos al lugar de salida.

Art. 102. Las empresas de transportes marítimos responderán pecuniariamente de las infracciones que, de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones relativas, cometan sus empleados, agentes o representantes.

Art. 103. Tratándose de barcos que lleguen de arribada forzosa, los jefes de las oficinas de Migración permitirán el tránsito fuera de las horas ordinarias.

Art. 104. Las personas que bajen a tierra antes de que las autoridades de Migración efectúen a los barcos la visita correspondiente, serán reembarcados en seguida, a fin de someterlas a dicho examen; satisfecho el cual, podrán desembarcar, si han llenado los requisitos necesarios.

Art. 105. El extranjero que no reúna los requisitos prevenidos por esta Ley, no podrá desembarcar, salvo autorización expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 106. Ningún buque podrá salir de puertos nacionales antes de haberse practicado la visita de salida por las autoridades de Migración, y de haberse recibido de éstas la autorización para emprender el viaje, salvo los casos de fuerza mayor, de acuerdo con las disposiciones de Marina.

Art. 107. Los capitanes de buques que tomen tripulantes o pasajeros en puertos nacionales, deberán exigirles previamente el cumplimiento de los requisitos que para los emigrantes establece esta Ley.

Art. 108. El capitán del buque deberá presentar a las autoridades de Migración correspondientes, en el momento de practicar la visita de salida, lista de los pasajeros o tripulantes que hayan embarcado en el lugar, o estén en tránsito, con expresión del nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, procedencia y punto de destino; así como los demás datos que se prevengan en el Reglamento de esta Ley.

Art. 109. La persona que visite un buque, sin el previo consentimiento de los funcionarios de Migración, será bajada a tierra inmediatamente; sin perjuicio de aplicarle la sanción que en esta Ley se señala. Los permisos para efectuar estas visitas serán otorgados únicamente por los encargados de la oficina de Migración en los puertos respectivos.

Art. 110. Todos los extranjeros en tránsito, que desembarquen en puerto, sin llevar la tarjeta de identificación que se prevengan en el Reglamento de esta Ley, serán obligados a reembarcarse inmediatamente.

Art. 111. Los extranjeros cuya inmigración está prohibida y que, encontrándose en tránsito, desembarquen en algún puerto nacional, con objeto de visitarlo, y permanezcan en tierra después de la salida del barco en que hacen la travesía, sin ocurrir dentro de las veinticuatro horas siguientes, a justificarse en la oficina de Migración respectiva, serán conducidos al lugar que designe la Secretaría de Gobernación, para ser reembarcados en su oportunidad; sin perjuicio de aplicarles la sanción correspondiente.

Art. 112. Los tripulantes extranjeros de los barcos que toquen puertos nacionales, pueden, con anuencia del jefe del Servicio de Migración, bajar libremente a tierra y permanecer en ella mientras se hallen surtos los buques a cuya tripulación pertenecen. En los casos en que dicho jefe del Servicio lo estime conveniente, tal permiso se otorgará mediante depósito o fianza a su satisfacción.

Art. 113. El Reglamento de la presente Ley determinará las normas a que debe quedar sujeta la vigilancia de individuos de la clase de tripulantes extranjeros, en buques de cualquier nacionalidad, y asimismo, fijará los requisitos para permitir que tales tripulantes visiten el país o se internen en él.

Art. 114. Las disposiciones de este capítulo que se refieren a desembarco de pasajeros y estancia temporal en los puertos, no tendrán aplicación cuando las autoridades sanitarias hubieren determinado, dentro de sus atribuciones legales, el no desembarco de dichos pasajeros, por existir causas que lo ameriten.

Capítulo VII

Art. 115. Las personas que pretendan emigrar del país están obligadas a satisfacer, además de los requisitos generales de migración, los siguientes:

- I. Identificarse y rendir a la autoridad de Migración correspondiente las informaciones estadísticas o personales que les pida;
- II. Ser mayores de edad o, si no lo son, ir acompañados de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad, o la tutela en su caso, o acreditar el permiso correspondiente, concedido al efecto, por dichas personas; pero no bastará este permiso cuando los emigrantes sean menores de dieciocho años y pretendan ir a trabajar;
- III. tratándose de nacionales, y como medida preventiva y de protección, la comprobación ante las autoridades migratorias, de que los interesados pueden cumplir todos los requisitos que para entrar exijan las leyes del país a donde se dirijan, según el carácter con que pretendan hacerlo;
- IV. solicitar, de la oficina respectiva, la documentación correspondiente, y presentarla a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda

salir, y no estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia ni estar arrai-
gado, por cualquier causa, en virtud de resolución judicial.

Art. 116. Además de los requisitos anteriores sólo se permitirá la salida de emi-
grantes trabajadores mexicanos cuando justifiquen ir contratados por más de seis me-
ses, obligatorios para el patrón o contratista, y con salarios suficientes para satisfacer
todas sus necesidades. Los contratos llenarán los requisitos que señalen los reglamentos
respectivos.

Art. 117. La translación de los trabajadores mexicanos, y aun la venta de boletos
para su transporte, que se verifique dentro del territorio nacional, deberá ser vigilada
por las autoridades de población, a efecto de evitar abusos y conseguir el máximo de
facilidades y garantías para los referidos emigrantes.

Capítulo VIII

Art. 118. Son aplicables, a los transportes y empresas aéreas, las prevenciones de
los artículos. 98, 99 y 102 de esta Ley.

Art. 119. La presentación de las listas de que habla el artículo 100, obliga igual-
mente a los pilotos de las aeronaves civiles que transporten pasajeros a nuestro país;
pero dichas listas no requerirán el visto bueno consular. Estos documentos serán en-
tregados, por los pilotos, a los oficiales de Migración, en el primer lugar que toquen de
los autorizados para el tráfico aéreo.

Art. 120. Al practicar a una aeronave la inspección reglamentaria, y una vez
terminada ésta, las autoridades de Migración anotarán en las listas que el piloto o
conductor les presenten, de conformidad con el artículo 100, una constancia de haber
cumplido tal inspección; constancia que el piloto estará obligado a presentar a las au-
toridades del país, siempre que para ello sea requerido.

Art. 121. La deportación de los extranjeros que ilegalmente hayan entrado a la
República por vías terrestres, si no procede efectuarla a costa de las empresas de trans-
portes, se hará por cuenta del interesado, o, por su insolvencia, a cargo del Gobierno.

TITULO CUARTO TURISMO

Capítulo I

Art. 122. Los turistas tendrán autorización para permanecer hasta seis meses en
el territorio nacional.

Art. 123. Todo extranjero que se interne al país en calidad de turista, deberá
abandonarlo con la misma calidad, de acuerdo con el artículo 61, con excepción de
los que contrajeran matrimonio con mujer mexicana por nacimiento, de conformidad
con los artículos 35 y 91 de esta Ley.

Art. 124. Para internarse en la República en calidad de turista, se requiere comprobar que se está en posesión de dinero suficiente para el viaje y sostenimiento durante el término que se solicite.

Art. 125. Los turistas procedentes de cualquier lugar del continente americano, no estarán obligados a otorgar depósito o fianza de repatriación, sino en los casos especiales en que haya razón fundada para ello, a juicio de la Dirección General de Población.

Art. 126. La Secretaría de Gobernación podrá, cuando lo estime conveniente y de un modo transitorio, eximir de garantía de repatriación a los turistas provenientes de otros continentes.

Art. 127. Está facultada la Secretaría de Gobernación para conceder a los turistas el mayor número de facilidades posibles, dentro de su esfera de acción; pero los interesados tienen la obligación de no aprovecharse de esas facilidades para internarse al país con móviles diferentes de los que deben tener como turistas que son.

Art. 128. Los turistas no podrán dedicarse a ninguna actividad remunerada o lucrativa durante su permanencia en el país.

Art. 129. Los turistas que permanezcan en el país por más tiempo que el autorizado, sufrirán la sanción pecuniaria que dispone esta Ley y se les requerirá para que abandonen el país en el plazo que les fije la Dirección General de Población, la que resolverá si además de la multa procede exigirles depósito o fianza de repatriación. En caso de que el infractor se niegue a satisfacer el importe de la multa y los demás requisitos que en su caso se le fijen, podrá conmutársele aquélla por el arresto correspondiente y en cuanto lo cumpla, será deportado.

Art. 130. Los turistas que deseen dedicarse a la caza y a la pesca deportiva, deberán satisfacer los requisitos que señala el Departamento Forestal y de Caza y Pesca y, en su caso, las reglas para portación de armas. Los cónsules mexicanos y el Servicio Exterior de Población deberán ayudar a esos turistas tramitando las autorizaciones que necesiten.

Art. 131. Los turistas podrán internar al país los vehículos en que viajen, sujetándose a las disposiciones aduanales.

Art. 132. Los turistas podrán tomar fotografías y películas cinematográficas que no estén destinadas a fines comerciales ni acusen propósitos de desprestigio al país.

Art. 133. Los turistas que vengan al país en grupos organizados gozarán de las facilidades que señala el Reglamento respectivo.

Art. 134. Los turistas deberán cubrir el importe de las tarjetas que se les expidan para su debida identificación, pero quedarán exentos de cualquier otro impuesto de migración.

Art. 135. La tarjeta de turista dará derecho a su poseedor para manejar su propio automóvil dentro del país durante el tiempo que se hubiere autorizado su permanencia.

Capítulo II

Art. 136. El servicio de guía de turista se considera como un servicio auxiliar del oficial federal de turismo; en consecuencia, sólo con autorización de la Dirección General de Población se podrá ejercer dicha actividad.

Art. 137. La Dirección General, al expedir las autorizaciones respectivas, señalará los lugares o zonas en que los guías deben prestar sus servicios, procurando hacer una distribución equitativa para evitar prácticamente el monopolio de tales actividades.

Art. 138. Para ser autorizado como guía de turistas, será indispensable llenar los requisitos siguientes:

- I. Ser de reconocida honorabilidad y buena conducta;
- II. No padecer enfermedades contagiosas ni tener defectos físicos o funcionales que incapaciten para el ejercicio de la actividad;
- III. Poseer los conocimientos necesarios;
- IV. Otorgar fianza por la cantidad que señale el Reglamento.

Art. 139. El Reglamento respectivo señalará la forma de comprobar los requisitos mencionados. Satisfechos éstos se expedirá al interesado una credencial señalando la zona que comprenda la autorización y comunicándolo a los gobiernos de las entidades que comprenda dicha zona.

Art. 140. La falta de cumplimiento a las obligaciones contraídas por los agentes, así como cualquier acto de éstos que resulte material o moralmente nocivo para el Servicio de Turismo, ameritarán la cancelación de la credencial a que alude el artículo anterior, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley, y sin exclusión de otras sanciones.

Capítulo III

Art. 141. Todas las agencias de turismo que se establezcan en la República, deberán registrarse en la Dirección General de Población.

Art. 142. Para obtener el mencionado registro, deberán otorgar fianza por la cantidad que señale el Reglamento, para responder de las obligaciones que contraigan con los turistas y con la Dirección General de Población.

Art. 143. Las agencias de turismo deberán tener oficinas con dirección perfectamente definida, pues de ninguna manera se reconocerán las agencias ambulantes. Las agencias de turismo radicadas en el extranjero que ejerzan actividades en el país, deberán tener en la capital de la República, un representante debidamente acreditado.

Art. 144. Para garantizar, tanto los intereses de los excursionistas como los de las agencias de turismo, al organizarse una excursión fuera del país, las agencias firmarán con los interesados un contrato en los términos que señale el Reglamento.

Art. 145. Si para proteger sus intereses una empresa organizadora de excursiones se ve precisada a cancelar un viaje anunciado, ocurrirá a la

Dirección General a solicitar permiso para dicha cancelación, manifestando de una manera clara los motivos que tenga para ello y acreditando haber devuelto pre-

viamente todas las cantidades recibidas a cuenta de la excursión. Si esa solicitud no es presentada por lo menos cinco días antes de la fecha en que debiere iniciarse el viaje, la cancelación será nula y la empresa será obligada a cumplir el contrato de que habla el artículo anterior.

Art. 146. Los organizadores de excursiones deberán en cada caso dar aviso a la Dirección General de Población, a fin de que se llenen los términos de Ley.

Art. 147. La Dirección General de Población comunicará a las agencias ferroviarias, navieras, de aviación y en general a todas las que se dediquen a medios de transporte, los nombres de las agencias de turismo que no cumplan los compromisos que contraigan con sus clientes o con la Dirección General de Población, que les cancelará su registro de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Art. 148. Se publicarán en la prensa los nombres de las agencias de turismo reconocidas, así como los de aquéllas a las que se les cancele el registro.

Art. 149. Las agencias cooperarán a la publicidad que haga el Departamento de Turismo editando y distribuyendo monografías, guías, mapas y planos o reproduciendo gráficas y fotografías que puedan servir para la propaganda.

TITULO QUINTO DE LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Capítulo I

Art. 150. Para cooperar al cumplimiento de lo que dispone la fracción I del artículo 36 constitucional, en relación con la inscripción catastral a que están obligados todos los ciudadanos mexicanos manifestando el trabajo, industria, profesión o bienes que constituyen sus medios de vida, se establece, con el carácter de servicio público nacional, la identificación para todos los habitantes del país, en la forma y términos que señale el Reglamento respectivo.

Art. 151. Los empleados y funcionarios públicos federales, están obligados a inscribirse en el Registro de Identificación.

Art. 152. El Servicio de Identificación tendrá por objeto:

- I. Facilitar, en forma práctica y científica, el reconocimiento e identidad de los habitantes del país, por razón de sus características físicas y sociales;
- II. Clasificar a esos mismos habitantes, atendiendo a su nacionalidad, sexo, edad, ocupación, estado civil, ciudadanía y lugar de residencia;
- III. Crear un documento especial de costo mínimo y fácil manejo que con el carácter de instrumento público sirva en todo momento de prueba fehaciente, justificativa de los datos que contenga en relación con su portador;
- IV. Coordinar, mediante disposiciones reglamentarias, los usos, métodos y medios actualmente dispersos y en vigor en las distintas dependencias de

la administración pública para instituir un solo sistema elaborado científicamente;

- V. Centralizar este servicio público en un solo órgano con facultades para ir ampliando paulatinamente su jurisdicción, hasta dejar comprendidos dentro de sus disposiciones a todos los habitantes del país, y
- VI. Constituir, mediante la concentración de todos los datos relativos a la identificación de los habitantes de la República, la base para perfeccionar la reglamentación de los derechos y obligaciones de los mismos, prescritas por la Constitución General.

Art. 153. El Servicio Nacional de Identificación tendrá sus oficinas centrales en la capital de la República. Habrá, además, oficinas dependientes directamente de la Secretaría de Gobernación, en cada capital de estado y territorio federal y en las demás ciudades que se estime conveniente.

Art. 154. Son funciones del Servicio Nacional de Identificación:

I. En la capital de la República:

- a) La dirección general de los servicios de identificación y la vigilancia sobre las oficinas de las capitales y los territorios;
- b) La expedición de cédulas de identidad;
- c) El archivo de fichas individuales del sistema dactiloscópico y demás documentos identificativos;
- d) El servicio de informes sobre identificación;
- e) El canje de fichas dactiloscópicas;
- f) La enseñanza de la identificación; La
- g) La organización de un laboratorio técnico de identificación;
- h) Las demás funciones propias de su naturaleza y destino que el Reglamento señale

II. En las oficinas regionales de las capitales de los estados y territorios:

- a) La dirección inmediata de las oficinas identificadoras locales;
- b) La expedición de cédula de identidad;
- c) El archivo de fichas individuales dactiloscópicas y demás documentos identificativos de su circunscripción;
- d) La remisión inmediata de los documentos respectivos a la Oficina Central;
- e) Las demás que señale el Reglamento.

III. En las oficinas locales:

- a) La expedición de cédulas de identidad, en la forma y modo que esta Ley y su Reglamento establezca.
- b) El archivo y custodia de las fichas dactiloscópicas de las personas identificadas en ellas;
- c) La remisión inmediata a la oficina regional de que dependa, de los ejemplares de fichas dactiloscópicas que les ordene la Dirección General o la Oficina Regional.

d) Las demás que señale el Reglamento.

Art. 155. Las autoridades todas de la Federación y de los estados, serán auxiliares del Registro Nacional de Población para el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento. Especialmente se encargarán de hacer el servicio de identificación los jueces u oficiales del Registro Civil, salvo en las ciudades en que haya oficina del Servicio de Identificación, dependiente directamente de la Secretaría de Gobernación.

Art. 156. La Secretaría de Gobernación proveerá a las oficinas del Registro Civil encargadas del Servicio de Identificación, de las formas, modelos, instrumentos y útiles especiales que se necesiten para hacer la identificación de las personas.

Capítulo II

Art. 157. El registro es obligatorio para las personas que señala esta Ley, y potestativo o voluntario para las demás.

Art. 158. Se abrirá desde luego el registro para:

- I. Los funcionarios y empleados federales, los del Distrito Federal y Territorios, y los de las Beneficencias Pública y Privada;
- II. Los funcionarios y empleados de los gobiernos de los Estados y de los Municipios;
- III. Los miembros del Ejército y Armada Nacionales;
- IV. Los tripulantes y empleados de la marina mercante;
- V. Los ejidatarios y los campesinos que soliciten tierras;
- VI. Los trabajadores y empleados sindicalizados;
- VII. Los gerentes, directores, consejeros y todos los empleados y funcionarios de las instituciones públicas de crédito o de empresas de servicios públicos que tengan concesión del Gobierno Federal, de los estados o de los municipios;
- VIII. Los que ostenten título profesional expedido en el país o en el extranjero y los que ejerzan cualquiera profesión liberal, sin título legalmente reconocido;
- IX. Los ministros de los cultos en general, sus auxiliares y los vecinos encargados de los templos en las poblaciones en que no haya ministros;
- X. Los propietarios de bienes raíces;
- XI. Los mayores de dieciséis años que reciban asistencia pública en establecimientos dependientes de la Federación y de los estados, y los que la reciban de establecimientos particulares de beneficencia, así como los jefes, directores y encargados de esos establecimientos;
- XII. Los que trabajen como contratistas en obras públicas;
- XIII. Los que tengan o soliciten autorización para portar armas;
- XIV. Los chóferes, los automovilistas y los conductores de cualquier vehículo;

- XV. Los mayores de dieciséis años que se dediquen al servicio doméstico en casas particulares o en hoteles, restaurantes o en cualquier establecimiento abierto al público;
- XVI. Las demás personas que designe la Secretaría de Gobernación oportunamente, por disposición de observancia general y a medida que el desarrollo de la Ley General de Población lo vaya permitiendo, en lo que a identificación se refiere.

Art. 159. Las autoridades del país están en la obligación de hacer ver a todos los habitantes las ventajas que implica la posesión de la cédula de identificación personal.

Art. 160. En los actos y contratos en que intervengan las personas que porten cédula de identificación personal, se consignará el número de ella.

Art. 161. Los secretarios de Estado y jefes de departamentos federales, cuidarán de que los funcionarios y empleados de su dependencia cumplan con las disposiciones del Registro. Igual encargo tendrán los jefes de los respectivos poderes de los estados y los ayuntamientos, por los empleados de su dependencia.

Capítulo III

Art. 162. Los mexicanos, para comprobar su nacionalidad, presentarán: certificados de su partida de nacimiento expedida en el Registro Civil, si la tuvieren; y a falta de esto, constancia que expedirán de oficio y gratuitamente las oficinas del Registro Civil, sobre que la persona de que se trata no está inscrita en dicho Registro; y a falta de esta constancia, información de dos personas, dignas de crédito, a juicio del funcionario o empleado que haga la identificación.

La oficina encargada de efectuar el registro, esta facultad para investigar la veracidad de los datos que le aporten, cuando haya razón fundada para ello.

Art. 163. El registro de una persona se hará sólo una vez, aunque se encuentre comprendida en dos o más de los casos que previene esta Ley; y la cédula de identificación que se le dio por cualquiera de esos casos servirá para justificar su registro en los demás.

Art. 164. La Secretaría de Gobernación señalará, por disposiciones de observancia general, la época en que debe llevarse a cabo el registro de las personas en las oficinas dependientes de la misma Secretaría y en las dependientes de los estados.

Art. 165. Una vez hecho el registro en la época fijada por la Secretaría de Gobernación, tal registro y la cédula de identidad, que se expida, serán válidas por diez años, transcurridos los cuales, deberá renovarse la tarjeta.

Capítulo IV

Art. 166. La cédula de identidad tendrá la validez de un documento público y producirá prueba plena respecto a la identidad del titular, en los casos en que éste tenga que acreditar su personalidad ante cualquier autoridad u oficina administrativa o judicial.

Art. 167. Queda expresamente prohibido consignar en la cédula de identidad, palabras, iniciales o signos que puedan denigrar al identificado.

Art. 168. En ningún caso será denegada la cédula a la persona que la solicite, si satisface los requisitos legales.

Art. 169. La cédula de identidad es nula:

- I. Si aparece raspada, enmendada, con señales de alteración o deteriorada de tal modo que se haga dudosa su identidad o la clara inteligencia de sus atestaciones, y
- II. En los casos que prevenga el Reglamento.

Art. 170. La cédula es intransferible; pertenece única y exclusivamente a la persona a cuyo nombre ha sido concedida. Los cambios de nombre autorizados por juez competente no modifican la identidad declarada en la cédula.

Art. 171. La cédula de identidad será renovada:

- I. En los casos de cambio de nombre;
- II. Cuando se extinga el plazo de su vigencia, de conformidad con el artículo 165.

Art. 172. En caso de renovación de la cédula de identidad, deberá llevar el mismo número de matrícula pero con la anotación claramente visible de haber sido renovada. En casos de pérdida y reposición, los nuevos ejemplares llevarán la anotación de ser duplicados, triplicados, etcétera.

Art. 173. Cuando fallezca una persona que estuviere registrada, el médico que expida el certificado de defunción deberá mencionar el número de la matrícula de la cédula de identidad del fallecido, recabando los datos necesarios de la familia; y los parientes más cercanos tendrán la obligación de avisarlo a la oficina de identificación inmediata.

Art. 174. Los encargados de la identificación en las oficinas locales comunicarán a la oficina central de registro, dentro del más breve plazo, los cambios de estado civil que ante ellos se justifiquen y registren, dejando en la cédula de identidad respectiva, la debida constancia. Igual obligación tendrán los jueces y oficiales de Registro Civil.

Capítulo V

Art. 175. Para el sostenimiento del servicio nacional de identificación, que se crea el derecho de cobrar por cada cédula de identidad, la cuota de veinte centavos, en la que queda comprendido el valor de la misma cédula.

Art. 176. Quedan exceptuados del pago de la cuota a que se refiere el artículo anterior, los campesinos y los soldados de la clase de la tropa.

Art. 177. En el caso de insolvencia debidamente comprobada, la expedición de la cédula se hará gratuitamente.

Art. 178. Los jueces y oficiales del Registro Civil que se encarguen en las oficinas locales de las labores de identificación, percibirán una participación del cincuenta por ciento de lo recaudado por este concepto.

El sobrante que hubiere del impuesto, hecha la deducción anterior, ingresará al erario federal.

Capítulo VI

Art. 179. El archivo de identificación será secreto y solamente podrán proporcionarse sus datos a los jueces, agentes de policía autorizados, a funcionarios administrativos que oficialmente los soliciten. Sólo se exhibirá a otras personas, con autorización de la Secretaría de Gobernación, para fines de carácter científico o instructivo.

Art. 180. El laboratorio de criminalística e identificación de la Jefatura de Policía y del servicio militar de identificación de la Secretaría de Guerra y Marina, remitirán al Gabinete Nacional de Identificación, una cédula dactiloscópica (forma 3), de los delincuentes dactilografiados.

Art. 181. La Secretaría de Gobernación queda facultada para expedir, por medio de acuerdos de observancia general, las instrucciones necesarias para la organización y el funcionamiento interior del Registro Nacional de Identificación y de las oficinas respectivas.

TITULO SEXTO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Art. 182. Las infracciones a esta Ley que constituyan delitos, se sancionarán con arreglo al Código Penal.

Art. 183. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, las infracciones a la presente Ley, no sancionadas especialmente en este capítulo, se castigarán administrativamente con multa de uno a mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Art. 184. Las infracciones por parte de las autoridades o empleados del servicio de población, a las disposiciones de esta Ley, se castigarán con amonestación, suspensión de empleo o destitución, o con multa de uno a mil pesos, o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de quince días.

Art. 185. El extranjero que entre ilegalmente al país, o contravenga las disposiciones que dicte la Secretaría de Gobernación, pagará la multa que se le imponga y, además será deportado, si la Secretaría de Gobernación lo determina.

Art. 186. La deportación no podrá llevarse a cabo si el extranjero ha adquirido derechos de residencia definitiva.

Esta prescripción debe entenderse sin perjuicio de la facultad que al Ejecutivo de la Unión concede el artículo 33 constitucional.

Art. 187. Cuando los extranjeros sujetos a deportación se hallen sometidos a un juicio, o sea necesaria su permanencia en el país, la Secretaría de Gobernación podrá suspenderla por el tiempo indispensable.

Art. 188. La persona que visite un buque, sin consentimiento de las autoridades de Migración, será castigada con multa de cinco a cien pesos.

Art. 189. Las empresas de transportes aéreos o marítimos que abandonen en nuestro territorio pasajeros o tripulantes rechazados o no admitidos por nuestras autoridades de Migración, serán multadas con cien a mil pesos, sin perjuicio de conducir a su costa a dichos individuos, fuera del territorio nacional.

Art. 190. El desembarque o aterrizaje efectuado por sitios o a horas que no sean señalados legalmente, se castigará imponiendo a la empresa responsable o a los representantes o consignatarios, la pena de cien a mil pesos, salvo casos de fuerza mayor.

Art. 191. La misma pena a que se refiere el artículo anterior, será impuesta a las empresas de transportes marítimos, cuando de éstos baje a tierra algún pasajero o tripulante antes de que las autoridades de Migración le practiquen la visita correspondiente.

Art. 192. Las empresas navieras, sus representantes o consignatario, cuando los capitanes de los buques desobedezcan una orden de conducción de pasajeros que les hayan sido rechazados, serán multados con cien a quinientos pesos, y el transporte no será despachado hasta que se entere la multa y se cumpla la orden de conducción, salvo casos de fuerza mayor, de acuerdo con las disposiciones de Marina.

Art. 193. Las empresas aeronáuticas, sus representantes o consignatarios, cuando los pilotos de las aeronaves o los representantes de aquéllas cometan falta igual a la consignada en el artículo anterior, serán castigadas con la multa señalada en el mismo artículo, pero el transporte no podrá ser detenido; limitándose la intervención, en este caso, a levantar un acta detallada, en que se consignen todas las circunstancias.

Art. 194. Las empresas de transportes aéreos o marítimos que no tengan representantes legales en la capital de la República, ni hayan constituido fianzas a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, serán requeridas por la propia Secretaría, para efectuarlo dentro del plazo que la misma determine, y, de no cumplirlo pagarán una multa de cien a quinientos pesos. En caso de reincidencia, se duplicará la multa.

De negarse definitivamente a cumplir con tales requisitos, se les suspenderá la autorización para los viajes subsecuentes, por lo que se refiere a la conducción de personas.

Art. 195. El capitán de un buque o el piloto de una aeronave que emprenda un viaje de salida, antes de ser inspeccionado el pasaje por las autoridades de Migración y de recibir de ellas la autorización correspondiente, será multado con cien a mil pesos. Cuando el capitán o el piloto, según el caso, no cubran la multa, se hará ésta efectiva a las empresas respectivas, sus representantes o consignatarios.

Art. 196. La infracción a los artículos 100 y 107, será castigada con multa de quinientos a mil pesos y, en caso de reincidencia, se dará a conocer a los cónsules mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor, a efecto de que no se le extiendan despachos para puertos mexicanos, por lo que se refiere a la conducción de personas.

Art. 197. Los enganchadores, agentes y, en general, todos los que por cuenta propia o ajena celebren contratos para cuya ejecución se requiera la emigración de trabajadores mexicanos, que no se sujeten a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, serán castigados con multa de cien a mil pesos.

Art. 198. Los individuos que auxilien o aconsejen a cualquiera persona para violar las disposiciones de esta Ley o reglamentos respectivos, o las disposiciones migratorias de países extranjeros, en materias que no constituyan delito, serán castigadas administrativamente con multa hasta de mil pesos, o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor no pagare la multa, se permutará ésta por el arresto correspondiente.

Art. 199. Las personas que conforme el artículo 151 están obligadas a inscribirse en el Registro General de Identificación y no cumplan con este requisito, serán castigadas con multa de uno a veinte pesos.

Art. 200. Los que se registren o pretendan registrarse con documentos apócrifos y los que al tiempo de registrarse ministren informes falsos, serán castigados por el delito de falsedad, conforme al Código Penal.

Art. 201. Los que falsifiquen las cédulas de identidad, los que utilicen en su provecho cédulas ajenas de identidad, serán castigados igualmente como reos del delito de falsedad.

Art. 202. Los encargados del Registro Nacional de Identificación, que se nieguen a expedir la cédula de identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha cédula una vez expedida, serán castigados con multa de cincuenta a cien pesos y destitución del empleo.

Art. 203. Los empleados que expidan cédulas de identidad, sin llenar los requisitos requeridos, serán castigados administrativamente, y los que vendan o proporcionen cédulas de identidad en blanco, sufrirán prisión de dos a seis años e inhabilitación para otro empleo, de cinco a diez años.

Art. 204. Los empleados del Registro Nacional de Identificación que den informes a personas extrañas a la oficina, sobre antecedentes del personal registrado o proporcionen copias de documentos sin orden superior, serán suspendidos en su empleo o destituidos, según la gravedad del caso.

Art. 205. En todos los casos en que no sea pagada desde luego la multa impuesta, se hará efectiva por el procedimiento económico-coactivo, y si éste no diere resultado, se permutarán aquéllas por el arresto correspondiente, que sufrirá el responsable de la infracción, el cual será detenido desde luego, comunicándose el caso a la Secretaría de Gobernación, por la vía telegráfica.

Art. 206. Los empleados públicos que no cumplan con lo que dispone el artículo 92 de esta Ley, serán castigados con amonestación, suspensión, destitución de

empleo, o multa, a juicio de la Secretaría de Gobernación. En cuanto a los notarios y corredores públicos que no acaten la propia disposición, serán castigados con multa de cincuenta a quinientos pesos.

Art. 207. La Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Población y los jefes de las oficinas de Migración impondrán las penas administrativas establecidas en este capítulo. Cuando sean impuestas por los dichos jefes de las oficinas, la aplicación será revisada, a petición de parte, por la Secretaría de Gobernación.

Si la pena fuere pecuniaria, deberá hacerse efectiva inmediatamente, y, en caso de inconformidad, su monto se constituirá en depósito en la jefatura de Hacienda o aduana respectiva, mientras resuelve la Secretaría.

TRANSITORIOS

Art. 1. La presente Ley entrará en vigor desde el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial*.

Art. 2. Se deroga la Ley de Migración de 30 de agosto de 1930, y las demás disposiciones en vigor sobre la materia, en cuanto se opongan a la presente.

Art. 3. Entretanto se expiden los reglamentos correspondientes, continuarán observándose los vigentes, así como las instrucciones giradas por la Secretaría de Gobernación, en lo que no se opongan a esta Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo la presente Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, D.F., a los veinticuatro días del mes de agosto de mil novecientos treinta y seis. L. Cárdenas. Rúbrica. El Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, Silvano Barba González. Rúbrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No es un propósito meramente revisionista el que se persigue al someter este proyecto a la ilustrada consideración de Vuestra Soberanía, sino el de ajustar a las realidades del presente, derivadas del fenómeno de la posguerra, la conducta del Estado ante los problemas demográficos que México confronta, y poder tomar de este modo, con amplia determinación, todas las medidas previsibles que tienden a fijar, al propio tiempo que la más adecuada política migratoria, imbuida de un propósito lleno de humanidad y comprensión, la defensa de la población nacional.

Debo advertir de antemano que este proyecto no es, en ningún modo, discriminatorio en el aspecto racial, ya que México propugna la igualdad de todas las razas frente al derecho y la libertad; sino que se dirige fundamentalmente a la más eficaz selección de los inmigrantes, tomando en cuenta que el país necesita con urgencia incrementar su riqueza humana en forma conveniente, sin lesionar, como se ha expresado antes, los intereses de nuestros connacionales; antes bien, defendiéndolos de una inmigración no controlada que podría colocarlos en obvio peligro de substitución o

suplantación, que serían, por otro lado, antieconómicas y antisociales por todos conceptos.

Trata igualmente este proyecto que la absorción de las actividades productoras mejor remuneradas se haga gradual pero sistemáticamente por los mexicanos, con objeto de establecer un necesario equilibrio entre ellos y los extranjeros que buscan el amparo de la República para desenvolverse.

Es evidente, por lo demás, que han fracasado los intentos de asimilar a un alto porcentaje de los inmigrantes ya admitidos. No son numerosos y sí excepcionales los casos de extranjeros que se han convertido en auténticos nacionales por su contacto cordial con el ambiente de nuestro país, por su identificación con el modo de ser mexicano, por la adopción de costumbres y hábitos vitales.

No es posible ignorar, por otra parte, que existe un crecido número de connacionales en condiciones de vida deficiente y que, además, sobrevive económicamente inactivo. La Ley General de Población viene a coadyuvar en la resolución de este problema ofreciendo facilidades a la inmigración de inversionistas —especialmente en las industrias agrícolas, de elaboración y transformación de nuestras materias primas— y a los técnicos, peritos o especializados, a quienes se impone la obligación de adiestrar a los nacionales con el fin de conseguir su capacitación y el empleo de métodos modernos en la producción.

El desgarramiento de las naciones europeas con motivo de la guerra, las condiciones actualmente imperantes en esos propios países, la promesa de holgura y fácil desenvolvimiento que brinda México, canalizarán, seguramente, hacia nuestro país grandes corrientes de extranjeros que un día perdieron patria, familia y hogar. Aquí podrán ser acogidos sin más limitación que la que impone la realidad mexicana y la tarea de consolidar el futuro nacional, por lo que se hará una estricta selección de elementos que convengan al país y estén en aptitud de llenar finalidades económicas, docentes, profesionales —con las condiciones que impone la ley sobre la materia—, artísticas, técnicas, etc., urgentes en nuestro medio.

Especial importancia se da en el proyecto a la repatriación de nuestros connacionales, por considerar que esos núcleos de mexicanos residentes en el extranjero, en razón de los conocimientos y experiencia adquiridos en países más evolucionados que el nuestro, son los mejores elementos para acrecentar la población activa de la República.

El proyecto establece una indispensable división entre la inmigración colectiva y la individual, porque es a todas luces más trascendente para la República la venida en grupos de nacionales de otros países y de cuya asimilación correcta y fecunda ya se tienen pruebas, sujetos a más fácil control y dirigidos a poblar regiones de escasa concentración humana.

Toda internación de extranjeros, de acuerdo con el proyecto que vengo a someter a la ilustrada consideración de ese H. Cuerpo, quedará sujeta a un previo examen de sus antecedentes, capacidades y condiciones en que deseen venir a nuestra nación para el desarrollo de sus actividades.

Por lo que se refiere a la clasificación, tan múltiple y compleja que estableció la Ley General de Población de veinticuatro de agosto de mil novecientos treinta y seis, se simplifican las calidades migratorias creando exclusivamente las de *Inmigrante* y *No Inmigrante*, con lo que se resuelve un difícil y antiguo problema: el de los cambios de calidades, que en su mayor parte eran solicitadas con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones —aún las más elementales— que los extranjeros contraen al internarse en territorio nacional. Los No Inmigrantes —antes clasificados en turistas, visitantes y transmigrantes— deberán abandonar el país sin aspirar a residir en México, si desde el extranjero no llenan los forzosos requisitos que se imponen a quienes no sólo desean venir a México, sino convertirse en elementos útiles a la comunidad mexicana.

El proyecto incluye una innovación en lo que mira el registro de nacionales y extranjeros. Por lo que hace a los primeros se creyó justificada la conveniencia de llevar un registro total, sin distinción de sexo o edad, e incluyendo, además a los mexicanos residentes en el extranjero, para establecer así un control más efectivo sobre nuestra población y que, por lo demás, vendrá a facilitar al Estado el cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas. Por lo que se refiere a los extranjeros, el registro —ya existente— obligará únicamente a los Inmigrantes e Inmigrados, por considerar que el otro grupo, el de los No Inmigrantes, por su corta permanencia en el país, no ameritan sino la vigilancia que sobre ellos ejercen normalmente los servicios de inspección de la Secretaría de Gobernación.

Otra modalidad que establece el proyecto es la de suprimir el otorgamiento de fianzas individuales o garantías personales de repatriación, aplicables en el caso de que los extranjeros no cumplan las condiciones de su admisión o falten, reincidiendo, a las normas que se les fijen. De este modo se crea un Fondo Común de Repatriación, impuesto pagadero una sola vez por los extranjeros, que será depositado en una institución bancaria, y que se afectará para cubrir los gastos de deportación o expulsión, sin cargar al erario público, como ahora y con frecuencia acontece.

Ningún extranjero, en lo de adelante —de merecer este proyecto la aprobación del H. Congreso de la Unión— podrá ejecutar algún acto público o privado, sin la plena comprobación de que su estancia en la República está ajustada a la ley; y se establece, además, la obligación a las autoridades judiciales de comunicar al órgano del Ejecutivo encargado de la aplicación de este mandato la filiación de los extranjeros sujetos a proceso para depurar de este modo la población extranjera en la República.

Especial atención se concede al turismo cuya jurisdicción se ensancha, a fin de que la dependencia encargada de controlarlo coordine sus actuales y dispersas actividades, formule un programa racional de todos los organismos, públicos o privados, que se dediquen al turismo, y su incremento para beneficio del país.

Una ley como la presente, de tanta trascendencia para México, ha debido ser completada con un capítulo destinado a especificar las sanciones que serán aplicadas a

los extranjeros que la infrinjan e impedir de este modo la comisión de faltas graves que siempre se cometen en detrimento de los intereses superiores del país.

Finalmente, este proyecto fue elaborado tomando en consideración las conclusiones a que llegó el Primer Congreso Demográfico Interamericano, con lo cual se cohonestan los compromisos contraídos por México en aquella reunión y las vitales necesidades que en materia demográfica tiene nuestro país.

2.25. LEY GENERAL DE POBLACIÓN DE 1947

Capítulo I

Organización y competencia

Art. 1. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictar o promover en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

Art. 2. Los problemas demográficos de cuya resolución se ocupa esta Ley comprenden:

- I. El aumento de la población;
- II. Su racional distribución dentro del territorio;
- III. La fusión étnica de los grupos nacionales entre sí;
- IV. La asimilación de los extranjeros al medio nacional;
- V. La protección a los nacionales en sus actividades económicas, profesionales, artísticas o intelectuales; y
- VI. La preparación de los núcleos indígenas para incorporarlos a la vida nacional en mejores condiciones físicas, económicas y sociales desde el punto de vista demográfico.

Art. 3. Corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo, según las atribuciones que a cada una señala la Ley de Secretarías de Estado o a los gobiernos de las entidades federativas, la aplicación y ejecución de los procedimientos necesarios para realizar cada uno de los fines de la política demográfica nacional; pero la definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de las labores de dichas dependencias o gobiernos locales en materia demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.

Art. 4. El aumento de la población debe procurarse:

1. Por el crecimiento natural, y
2. Por la migración.

Art. 5. Para activar el crecimiento natural, se dictarán o promoverán, de acuerdo con las resoluciones del Consejo Consultivo de Población, las medidas adecuadas al fomento de los matrimonios, aumento de la natalidad, disminución de la mortalidad, protección biológica y legal de la infancia, su mejor alimentación, higienización de las habitaciones, centros de trabajo y lugares poblados y elevación del tipo medio de subsistencia.

Art. 6. El estado estimulará la repatriación de los mexicanos, procurando, al efecto, radicarlos en los lugares en donde puedan ser útiles, de acuerdo con los conocimientos y prácticas que hayan adquirido en el extranjero.

Art. 7. Se facilitará la inmigración colectiva de extranjeros sanos, de buen comportamiento y que sean fácilmente asimilables a nuestro medio, con beneficio para la especie y para la economía del país. Esta inmigración quedará sujeta a las disposiciones que en cada caso dicte la Secretaría de Gobernación consultando cuando lo juzgue pertinente, la opinión de otras dependencias del Ejecutivo.

Art. 8. Compete a la Secretaría de Gobernación:

- I. Dictar las medidas necesarias para restringir la emigración de nacionales cuando el interés público así lo exija.
- II. Sujetar a las modalidades que juzgue pertinentes la inmigración de extranjeros, según su mayor o menor facilidad de asimilación a nuestro medio.
- III. Promover, estimular y realizar el traslado de contingentes humanos de las zonas muy pobladas de la República hacia las regiones de débil densidad de población, después de prepararlas, previos los estudios correspondientes y los arreglos con las autoridades competentes, para su radicación fácil y permanente.
- IV. Procurar el establecimiento de fuertes núcleos de población en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados.
- V. Formular, escuchando las sugerencias del Consejo Consultivo, el programa de acción que desarrollarán las Dependencias del Ejecutivo para realizar la fusión étnica de los grupos nacionales y el acrecentamiento del mestizaje como medio de beneficio social; y
- VI. Aplicar esta Ley y sus reglamentos.

Art. 9. Para el estudio de los problemas demográficos y realización de las resoluciones que con respecto a los mismos se tomen por parte de la Secretaría de Gobernación, se constituirá como dependencia de la misma, con carácter permanente, un Consejo Consultivo de Población que estará integrado por un representante de las siguientes secretarías y departamentos de Estado:

Gobernación.

Economía Nacional.

Relaciones Exteriores.

Agricultura y Ganadería.

Educación Pública.
Salubridad y Asistencia.
Trabajo y Previsión Social.
Agrario.

Art. 10. El Consejo funcionará bajo la presidencia del representante que designe la Secretaría de Gobernación y con arreglo al Reglamento que se expida.

Capítulo II

Demografía

Art. 11. Las funciones de la Secretaría de Gobernación en materia demográfica serán: a) El estudio y resolución de los problemas demográficos del país; b) El registro de la población e identificación personal.

Art. 12. En relación con el inciso a) del artículo 11, la Secretaría de Gobernación:

- I. Dedicará especial atención a la repatriación de los nacionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6o.
- II. Cooperará con la de Agricultura y Ganadería y con los demás organismos federales y locales que correspondan, para lograr la fundación de colonias agrícolas a efecto de radicar en ellas a los contingentes repatriados que en forma colectiva se internen en el país.
- III. Propondrá a las dependencias oficiales y empresas particulares los proyectos que estime pertinentes, a efecto de que se proporcione a los repatriados el mayor número de facilidades para el mejor éxito de las labores a que se dediquen.
- IV. Presentará sugerencias a los gobiernos de las entidades federativas, en relación con las que formulen los organismos oficiales capacitados para ello, respecto a la conveniencia de crear nuevos centros de población y proveer a su establecimiento, prestándole toda la ayuda que sea necesaria.
- V. Promoverá las medidas adecuadas para conseguir la asimilación y el arraigo de los extranjeros, otorgándoles facilidades cuando contraigan matrimonio con mexicanos por nacimiento o tengan hijos nacidos en el país.

Art. 13. Llevará a cabo, igualmente, el estudio de las siguientes materias:

- I. Distribución y acomodo de los contingentes que proporcione la inmigración.
- II. Problemas relacionados con el movimiento, acomodo y la redistribución de la población nacional y extranjera.
- III. Investigación de las causas que den o puedan dar origen a la emigración y medidas para prevenirla y evitarla.
- IV. Recopilación de datos para proporcionar informes a los emigrantes mexicanos acerca de las condiciones de trabajo y documentación requerida en el extranjero a efecto de evitarles dificultades.

V. Manera de coadyuvar con las secretarías de Estado y demás dependencias oficiales para vigilar el cumplimiento de las disposiciones que a ellas competen y promover al efecto los acuerdos necesarios del Consejo Consultivo de Población.

Art. 14. La Secretaría de Gobernación, por causas de interés público, podrá suspender o cancelar definitivamente la admisión de extranjeros, cuya internación pueda poner en peligro el equilibrio económico o social de la República.

Art. 15. En relación con el inciso b) del artículo 11, la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro e identificación personal de todos los individuos residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Art. 16. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Gobernación organizará las oficinas del Registro de Población e Identificación Personal que sean necesarias, estableciéndose la Oficina Central en la capital de la República.

Art. 17. El Registro de Población e Identificación Personal, tiene por objeto:

- I. Llevar el padrón de los mexicanos residentes en el extranjero.
- II. Recabar todos los datos relativos a la identificación de los habitantes de la República, mexicanos y extranjeros, para los efectos de la fracción V de este artículo.
- III. Facilitar en forma práctica y científica el reconocimiento e identidad de los habitantes del país, clasificándolos de acuerdo con su nacionalidad, edad, sexo, ocupación, estado civil, ciudadanía y lugar de residencia.
- IV. Coordinar los métodos de identificación y registro actualmente en uso en las distintas dependencias de la administración pública, con el propósito de constituir un solo sistema elaborado científicamente.
- V. Crear un documento especial que se denominará cédula de identidad personal, y que con el carácter de instrumento público sirva en todo momento de prueba fehaciente, justificativa de los datos que contenga en relación con su portador.

Art. 18. Todas las autoridades de la Federación, de los estados, territorios y representantes consulares en el extranjero, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en el Registro de Población e Identificación Personal.

Art. 19. Una vez hecho el registro en la época fijada por la Secretaría de Gobernación, tal registro y la cédula de identidad que se expida, serán válidos por diez años, transcurridos los cuales deberán revalidarse o renovarse.

Art. 20. El archivo de identificación será confidencial y solamente podrán proporcionarse los datos que contenga por mandamiento fundado de autoridad.

Art. 21. El registro de la población comprende:

- I. El registro de los nacionales, y
- II. El registro de los extranjeros.

Art. 22. El registro de los nacionales residentes dentro y fuera del país es gratuito y obligatorio, sin distinción de sexo ni edad. El de los extranjeros es también obligatorio y quedará sujeto al pago de la cuota que le señale la Ley.

Art. 23. Las autoridades federales y locales, los propietarios de empresas, negociaciones, industrias, comercios; los directivos de cooperativas y organizaciones de profesionistas, de obreros y de campesinos; cámaras de comercio o de industria; los partidos políticos, asociaciones, etc., cuidarán de que sus funcionarios, empleados, afiliados o agremiados, cumplan con las disposiciones del registro.

Art. 24. Los extranjeros que se internen al país en calidad de inmigrantes, están obligados a inscribirse en el Registro de Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación. Dicho registro será por una sola vez, salvo que se trate de una nueva internación o hayan perdido sus derechos de residencia.

Art. 25. Los extranjeros residentes en el país, con carácter de inmigrados, que no se hayan inscrito, tienen la obligación de hacerlo, en la fecha, el lugar y la forma que la Secretaría de Gobernación determine.

Art. 26. Los extranjeros, en el momento de registrarse, deberán comprobar su legal internación y permanencia, las actividades a que se dediquen y llenarán los demás requisitos que señalen esta Ley y sus reglamentos.

Art. 27. Los extranjeros registrados están obligados a informar al servicio de registro de sus cambios de domicilio.

Capítulo III

Inmigración

Art. 28. A la Secretaría de Gobernación corresponde:

- I. La organización y coordinación de los distintos servicios migratorios.
- II. La vigilancia de la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y la documentación de los mismos.
- III. El estudio de los problemas migratorios para dictar las resoluciones que correspondan de acuerdo con las necesidades del país, en cuanto se relacionen con esta materia.
- IV. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que dicte, respecto a la permanencia en el país y actividades de los inmigrantes y no inmigrantes; y
- V. La organización y protección de los emigrantes mexicanos.

Art. 29. Los servicios de migración serán:

- I. Central e interior,
- II. De puertos y fronteras, y
- III. Exterior.

Art. 30. El servicio central e interior estará a cargo de las oficinas establecidas en el interior del país por la Secretaría de Gobernación; el de puertos y fronteras por las dependencias del servicio en esos lugares y, en su defecto, por las de Salubridad y Asis-

tencia, Capitanías de Puerto o Aduanas, en su caso; y el exterior por los delegados de la Secretaría en el extranjero y por los miembros del servicio diplomático y consular de la República en su carácter de auxiliares.

Art. 31. Las personas que pretendan entrar al territorio nacional o salir de él, deberán llenar los requisitos exigidos por la presente Ley y sus reglamentos.

Art. 32. El tránsito personal, por puertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los lugares designados para ello dentro de las horas reglamentarias y con la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 33. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación, fijar los lugares destinados al tránsito personal por puertos y fronteras, oyendo previamente a las secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Obras Públicas y a la de Salubridad y Asistencia.

Art. 34. La Secretaría de Gobernación reglamentará, de acuerdo con las necesidades de cada región, las visitas de extranjeros a nuestras poblaciones marítimas y fronterizas, así como el tránsito diario entre éstas y las colindantes del extranjero respetando en todo caso los tratados y convenios internacionales sobre la materia.

Art. 35. El Servicio de Migración tiene prioridad, con excepción del de Sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República.

Art. 36. Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas en el tránsito internacional de vapores y aeronaves, con excepción de las funciones de policía y sanidad, queda a cargo de los funcionarios y agentes del Servicio de Migración.

Art. 37. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 35, los representantes de gobiernos extranjeros que vengan en comisión oficial a nuestro país, con sus familias, séquito, empleados y servidumbre, así como todas las personas que, conforme a las leyes o a los tratados o prácticas internacionales, estén exentos de la jurisdicción territorial y siempre que haya reciprocidad.

Art. 38. A los funcionarios de gobiernos extranjeros que en comisión oficial se internen en el país, se les darán las facilidades necesarias de acuerdo con las costumbres y reglas de reciprocidad.

Art. 39. La Secretaría de Gobernación vigilará, en relación con el servicio migratorio, el cumplimiento de las disposiciones relativas a estadística nacional. Las personas a que se refieren los artículos 37 y 38 deberán proporcionar para este efecto los datos necesarios al internarse al país.

Art. 40. La Secretaría de Gobernación podrá cerrar las entradas marítimas y fronterizas y prohibir la entrada y salida de nacionales y extranjeros, cuando así lo estime necesario.

Art. 41. Los extranjeros que vengan de países americanos huyendo de persecuciones políticas serán admitidos provisionalmente por las autoridades de Migración, con obligación de permanecer en el puerto de entrada mientras resuelve cada caso la Secretaría de Gobernación.

Art. 42. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país como inmigrantes y no inmigrantes.

Art. 43. Inmigrante es el extranjero que se interna legal y condicionalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado.

Art. 44. La admisión como inmigrante implica la obligación para el extranjero de cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen en su permiso de internación.

Art. 45. Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años y tienen obligación de comprobar anualmente a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, que están cumpliendo con las condiciones que les fueron señaladas al autorizar su internación y con las demás disposiciones migratorias aplicables, a fin de que sea refrendada, si procede, su documentación migratoria.

Art. 46. El inmigrante que permanezca fuera del país diez y ocho meses, en forma continua o con intermitencias, perderá su calidad de tal; en la inteligencia de que durante los dos primeros años de su internación no podrá ausentarse de la República por más de noventa días cada año.

Art. 47. Los mexicanos que por cualquier causa pierdan su nacionalidad, para entrar al país o para seguir residiendo en él, tendrán que llenar los requisitos que según el caso exige esta Ley a los extranjeros.

Art. 48. Se consideran inmigrantes los extranjeros que con permisos de la Secretaría de Gobernación se internen al país:

- I. Para disfrutar de sus rentas, pensiones, depósitos, cuentas bancarias o cualquier otro ingreso permanente y lícito.
- II. Para invertir su capital en cualquier ramo de la industria, la agricultura o el comercio de exportación, en forma estable y distinta a la de sociedades por acciones.
- III. Para invertir su capital en certificados, títulos o bonos del Estado o de las instituciones nacionales de crédito, en la forma y términos que determine la Secretaría de Gobernación.
- IV. Los profesionistas, en casos excepcionales y de acuerdo con las leyes vigentes sobre la materia.
- V. Para asumir la administración u otro cargo de responsabilidad y absoluta confianza al servicio de empresas o instituciones establecidas en la República, siempre que a juicio de la Secretaría no exista duplicidad de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación.
- VI. Para prestar servicios técnicos o especializados que no puedan ser prestados, a juicio de la Secretaría, por residentes en el país.
- VII. Para iniciar, completar o perfeccionar sus estudios en planteles educativos oficiales o particulares incorporados.
- VIII. Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo dentro del tercer grado, inmigrante, inmigrado o mexicano.

Los hijos, hermanos y sobrinos varones, dentro del citado grado de parentesco, sólo podrán admitirse dentro de esta categoría cuando sean menores de edad, salvo que tengan un impedimento debidamente comprobado a juicio de la Secretaría, para trabajar.

Art. 49. El no inmigrante que contraiga matrimonio con mexicano por nacimiento podrá adquirir la calidad de inmigrante que conservará mientras subsista el vínculo matrimonial. Igual calidad podrá adquirir cuando tenga hijos nacidos en el país, conservándola mientras éstos sean menores de edad y estén bajo su dependencia económica. En ambos casos el extranjero de que se trate necesitará cumplir con los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley y la Secretaría de Gobernación.

Art. 50. No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país, temporalmente:

- I. Con móviles de recreo.
- II. En tránsito para otro país.
- III. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad artística o deportiva o cualquiera otra temporal, lícita y honesta; y
- IV. Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas.

Art. 51. En el caso de la fracción I del artículo anterior, la autorización se concederá hasta por seis meses; en el caso de la fracción II, hasta por treinta días; en el caso de la fracción III, hasta por seis meses prorrogables por una sola vez, a juicio de la Secretaría; y en el caso de la fracción IV, por el tiempo que la propia Secretaría autorice de acuerdo con las condiciones políticas del país de origen del extranjero de que se trate.

Art. 52. No se cambiará la calidad migratoria en los casos comprendidos en la fracción II del artículo 50. En los demás que dicho precepto señala, queda a juicio de la Secretaría de Gobernación hacerlo cuando se llenen los requisitos que esta Ley fija para la nueva calidad migratoria que se pretenda adquirir, y previo pago de las cuotas que para el efecto determinen otras disposiciones legales.

Art. 53. En casos especiales y de una manera completamente excepcional, la Secretaría de Gobernación podrá otorgar permisos de cortesía para internarse y residir en el país hasta por 6 meses, a periodistas o personas prominentes. Estos permisos no concederán derechos de residencia para adquirir la calidad de inmigrado y podrán ser renovables.

Art. 54. Las autoridades de Migración podrán autorizar el ingreso al país de los extranjeros que deseen permanecer en puertos marítimos o fronterizos, o visitar las ciudades mexicanas limítrofes. Este permiso no podrá exceder de tres días.

Art. 55. A los polizones extranjeros que lleguen al país se les regresará inmediatamente por cuenta de la empresa de transportes respectiva.

Art. 56. La Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en la República las condiciones que estime convenientes respecto a las actividades a que habrán de dedicarse y al lugar o lugares de su residencia.

Cuidará asimismo la propia Secretaría de que los inmigrantes sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su subsistencia y, en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica.

Art. 57. Las empresas, personas o instituciones que soliciten la internación de extranjeros con el propósito de utilizar sus servicios o para que vivan bajo su dependencia económica, tendrán obligación de informar a la Secretaría de Gobernación, dentro de tres días, sobre cualquier circunstancia que altere, contraríe o pueda modificar las condiciones que se señalaron al extranjero de que se trate, en el permiso de internación respectivo. Además, quedan obligadas a sufragar los gastos que origine la deportación del citado extranjero cuando la Secretaría lo ordene.

Art. 58. La Secretaría de Gobernación podrá, cuando lo juzgue conveniente, fijar las cuotas de internación de extranjeros, bien por nacionalidades, por calidades migratorias o por actividades.

Art. 59. Para internarse en la República, los extranjeros deberán llenar los requisitos siguientes:

- I. Satisfacer el examen de las autoridades sanitarias;
- II. Rendir a las autoridades de Migración los informes que se les pidan;
- III. Identificarse por medio de los documentos conducentes, y en su caso, acreditar su calidad migratoria;
- IV. Llenar los requisitos que se fijen en sus permisos de internación.

Art. 60. La Secretaría de Gobernación podrá negar la entrada al país de los extranjeros, o el cambio de su calidad migratoria, aunque cumplan con todos los requisitos señalados por la Ley, cuando así lo juzgue conveniente.

Art. 61. Los mexicanos para ingresar al país, comprobarán su nacionalidad, satisfarán el examen médico y proporcionarán los informes estadísticos que se les pidan.

Cuando un mexicano, enfermo de un mal contagioso, desee internarse al país, las autoridades de Migración cooperarán con las de sanidad para su pronta internación en el lazareto, estación sanitaria u hospital más próximo que asignen las propias autoridades sanitarias.

Art. 62. En relación con las materias de que esta Ley se ocupa, los extranjeros pagarán los impuestos y derechos que determinen los ordenamientos o disposiciones legales correspondientes.

Art. 63. Nadie podrá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en el país y estar autorizados para trabajar por la Secretaría de Gobernación.

Art. 64. Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de radicación definitiva en el país.

Art. 65. Adquieren la calidad de inmigrados:

- I. Los inmigrantes que hayan residido legalmente en el país los cinco años próximos anteriores.

- II. Los extranjeros que hayan permanecido en territorio nacional, sin llenar los requisitos legales, si comprueban haber residido en el país durante los diez años próximos anteriores.

Art. 66. El inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, con las limitaciones que imponga la Secretaría de Gobernación de acuerdo con el Reglamento de esta Ley.

Art. 67. Para tener la calidad de inmigrado se necesita declaración expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 68. El inmigrado podrá salir del país y entrar al mismo libremente; pero si permaneciere en el extranjero dos años consecutivos perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de diez años estuviera ausente más de cinco.

Art. 69. Los diplomáticos y agentes consulares que radiquen en el país sin estar sujetos a la jurisdicción territorial, así como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar sus representaciones desean seguir radicados en la República, deberán llenar los requisitos ordinarios. Se exceptuarán los casos de arraigo de exrepresentantes oficiales que hayan vivido en México no menos de diez años, y aquellos que en razón de reciprocidad para determinados países ameriten procedimiento distinto.

Art. 70. Los oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto del estado civil en que intervenga algún extranjero sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país. Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

Art. 71. Las oficinas federales, las de los estados y municipios, así como los notarios públicos y corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país.

Art. 72. Todas las autoridades judiciales del país están obligadas a poner en conocimiento de la Secretaría de Gobernación, la filiación de los extranjeros que se encuentren sujetos a proceso, en el momento de abrirse éste, indicando además la falta o delito de que sean presuntos responsables, y la resolución definitiva que se dicte.

Los oficiales del Registro Civil y los jueces en materia civil, comunicarán a la Secretaría de Gobernación los cambios o modificaciones del estado civil de los extranjeros, dentro de los cinco días siguientes a la celebración del acto, sentencia o aprobación del convenio de que se trate.

Art. 73. La fuerza pública, federal y local, prestará su colaboración a los funcionarios de Migración, cuando soliciten su auxilio para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y los acuerdos que conforme a ellos se dicten.

Art. 74. Se autorizará el desembarco provisional por un término máximo de treinta días, a los extranjeros que lleguen por puerto de mar carentes de algún requisito

que no puedan satisfacer en el momento del examen, siempre que constituyan depósito o fianza suficiente para cubrir el pago de su viaje de regreso.

Esta franquicia no es extensiva a los que adolezcan de algún impedimento legal.

Se podrán establecer estaciones migratorias para la estancia provisional de estos extranjeros.

Art. 75. Las empresas de transportes están obligadas a cerciorarse de que la documentación de los extranjeros que transporten y pretendan internarse al país está en regla. Tendrán también la obligación de conducir por su cuenta fuera del territorio nacional a los extranjeros traídos por ellas y que sean rechazados por las autoridades de Migración, sin perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedoras de acuerdo con esta Ley.

Art. 76. Son responsables las propias empresas por sus tripulantes cuando queden éstos en territorio nacional sin la debida autorización.

Art. 77. Los pilotos de aerotransportes, capitanes de buques y conductores de autotransportes, deberán presentar a las autoridades de Migración correspondientes en el momento de practicar la visita de entrada o salida, lista de los pasajeros y tripulantes así como todos los datos necesarios para su identificación.

Art. 78. Las empresas de transportes responderán pecuniariamente de las infracciones que de la presente Ley, sus reglamentos y disposiciones relativas cometan sus empleados, agentes o representantes.

Art. 79. Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen en algún puerto nacional y permanezcan en tierra después de la salida del buque o aeroplano en que hacen la travesía, sin ocurrir dentro de las veinticuatro horas siguientes a justificarse en la oficina de Migración respectiva, serán conducidos al lugar que designe la Secretaría de Gobernación, para ser reembarcados en su oportunidad, sin perjuicio de aplicarles la sanción que fije la Ley.

Art. 80. Ningún pasajero o tripulante de transportes marítimos, podrá desembarcar antes de que las autoridades de Migración efectúen la visita correspondiente.

Art. 81. No se autorizará el desembarco de extranjeros que no reúnan los requisitos fijados por esta Ley y sus reglamentos, salvo lo dispuesto por el artículo 74.

Art. 82. Ningún buque podrá salir de puertos nacionales antes de que se practique la visita de salida por las autoridades de Migración y de haberse recibido de éstas la autorización para emprender el viaje, salvo casos de fuerza mayor, de acuerdo con las disposiciones de Marina.

Art. 83. No se permitirá la visita a un buque sin la autorización previa de las autoridades de Migración.

Art. 84. El Reglamento de la presente Ley determinará las normas a que quedará sujeta la vigilancia de tripulantes extranjeros en buques de cualquier nacionalidad surtos en puertos nacionales; igualmente fijará los requisitos para permitir la visita o internación al país de los mismos tripulantes.

Capítulo IV

Emigración

Art. 85. Son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del país con el propósito de radicarse fuera del mismo.

Art. 86. Las personas que pretendan emigrar del país están obligadas a satisfacer, además de los requisitos generales de migración, los siguientes:

- I. Identificarse y rendir a la autoridad de migración correspondiente las informaciones estadísticas o personales que les pida;
- II. Ser mayores de edad, o si no lo son, ir acompañados de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela en su caso, o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas;
- III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que pueden cumplir todos los requisitos que, para entrar al país a donde se dirijan, exijan las leyes del mismo, según el carácter con que pretendan hacerlo, y ser mayores de diez y ocho años, si su propósito es ir a trabajar;
- IV. Solicitar, de la oficina respectiva, la documentación correspondiente, y presentarla a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda salir, y no estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia ni estar arraigado, por cualquier causa, en virtud de resolución judicial.

Art. 87. Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades.

Art. 88. El traslado de los trabajadores mexicanos deberá ser vigilado por agentes de la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos.

Art. 89. Se consideran como repatriados los nacionales que vuelvan al país después de radicar por lo menos seis meses en el extranjero.

Capítulo V

Sanciones

Art. 90. Serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días y destitución, en caso de reincidencia, los empleados de la Secretaría de Gobernación que:

- I. Sin estar autorizados proporcionen informes a personas extrañas a la oficina;
- II. Dolosamente o por notoria negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;
- III. Por sí o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o aconsejen a los interesados;
- IV. No expidan la cédula de identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha cédula una vez expedida.

Art. 91. Las personas que auxilien o aconsejen a cualquier individuo para violar las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, en materia que no constituya delito, serán castigadas con multa hasta de \$1,000.00 o arresto hasta por quince días.

Art. 92. Las personas que estando obligadas a inscribirse en el Registro de Población no lo hagan, serán castigadas con multa de \$100.00 a \$1,000.00.

Art. 93. Se impondrá multa de \$500.00 a \$2,000.00 a los no inmigrantes que no cumplan con los requisitos fijados en su permiso de internación. Si la infracción es grave, serán deportados.

Art. 94. Los extranjeros que declaren falsamente ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación o sus auxiliares, serán deportados; sin perjuicio de aplicarles la pena que señale el Código Penal, según el caso.

Art. 95. Las infracciones de la presente Ley y sus reglamentos por parte de las autoridades locales o federales, que no constituyan delitos, se sancionarán con multa de \$500.00 a \$3,000.00 y destitución en caso de reincidencia.

Art. 96. Las empresas de transportes que internen al país a extranjeros sin documentación migratoria o con documentación defectuosa, serán sancionadas con multa de \$500.00 a \$3,000.00.

Art. 97. Se impondrá multa de \$100.00 a \$1,000.00 o arresto hasta por quince días a los extranjeros comprendidos en el artículo 79 de esta Ley.

Art. 98. La persona que visite un buque sin permiso de las autoridades de Migración, será castigada con multa de \$50.00 a \$200.00.

Art. 99. El desembarque o aterrizaje efectuado en sitios o a horas que no sean los señalados, se castigará con multa de \$1,000.00 a \$5,000.00 que se impondrá a la empresa responsable, a sus representantes o a los consignatarios.

Art. 100. Se impondrá multa de \$500.00 a \$3,000.00 a las empresas de transportes marítimos cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den la autorización correspondiente.

Art. 101. Las empresas navieras, sus representantes o consignatarios, cuando los capitanes de los buques desobedezcan una orden de conducción de pasajeros que hayan sido rechazados, serán castigados con multa de \$500.00 a \$1,000.00 y el transporte no será despachado hasta que se pague la multa y se cumpla la orden de conducción. A las empresas aeronáuticas se les impondrá la misma pena, pero el transporte no será detenido, limitándose a levantar un acta en la que se consignen todas las circunstancias del caso.

Art. 102. La infracción del artículo 82 de la Ley será castigada con multa de \$500.00 a \$1,000.00 y en caso de reincidencia se dará a conocer a los cónsules mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor a efecto de que no se le extiendan despachos para puertos mexicanos, por lo que se refiere a la conducción de personas.

Art. 103. Al que, en materia migratoria, suscriba cualquier documento o promoción con firma que no es la suya, se le impondrá una multa de \$100.00 a \$2,000.00 o arresto hasta por quince días, cuando no se trate de un acto delictuoso.

Art. 104. Al inmigrante o no inmigrante que se dedique a actividades ilícitas o deshonestas, le será cancelada su calidad migratoria y será deportado.

Art. 105. Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión, a los extranjeros que habiendo sido rechazados por los empleados o funcionarios de migración, o teniendo algún impedimento legal para internarse al país, lo hagan. Cumplida la pena serán deportados.

Art. 106. Se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y multa hasta de \$5,000.00 a los extranjeros que habiendo sido deportados o expulsados se internen nuevamente al territorio nacional sin tener para ello la autorización previa de la Secretaría de Gobernación, o no hagan constar a su reingreso que han sido deportados o expulsados. Una vez cumplida la pena serán deportados.

Art. 107. Se impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión a los extranjeros a quienes la Secretaría de Gobernación, por encontrarse ilegalmente en el país, ya sea que carezcan de documentación migratoria o la tengan irregular, haya ordenado expresamente la salida del país, y a pesar de ello permanezcan en territorio nacional. Una vez cumplida la pena serán deportados.

Art. 108. Se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y multa hasta de \$10,000.00 a los enganchadores, agentes, y en general, a todos los que por cuenta propia o ajena pretendan llevar o lleven trabajadores mexicanos al extranjero sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 109. Se impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de \$5,000.00, a las personas que auxilien, encubran, o en cualquier forma, directa o indirectamente ayuden a cometer los delitos previstos en los artículos anteriores. Si se trata de extranjeros, además, serán deportados.

Art. 110. Fuera de los casos señalados en este capítulo y de los que constituyen delitos de acuerdo con otras leyes, toda infracción a la presente Ley o a sus reglamentos, se castigará administrativamente con multa de \$200.00 a \$5,000.00, o arresto hasta por quince días.

Art. 111. La Secretaría de Gobernación impondrá las sanciones administrativas a que esta Ley se refiere, por acuerdo del Secretario o del Subsecretario. El Reglamento de esta Ley determinará qué otros funcionarios de la propia Secretaría estarán autorizados para imponer las sanciones que se estimen menos graves, y las cuales siempre serán revisables por la Secretaría a petición de la parte interesada.

Art. 112. Para que una sanción pecuniaria sea revisable es requisito previo que el interesado deposite su importe en el Banco de México, en la jefatura de Hacienda o Aduana respectiva, exhibiendo el certificado correspondiente con el escrito de revisión que serán presentados ante la

Secretaría dentro de los quince días de la fecha de la notificación de la sanción impuesta. De no cumplirse con este requisito en el plazo señalado, la resolución dictada quedará firme.

TRANSITORIOS

1. La presente Ley entrará en vigor tres días después de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

2. Se abroga la Ley General de Población de veinticuatro de agosto de mil novecientos treinta y seis.

3. Mientras el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de esta Ley, continuarán en vigor el Reglamento de la Ley de Migración de seis de junio de mil novecientos treinta y dos, y las disposiciones de las tablas diferenciales para mil novecientos cuarenta y siete, en todo aquello que no se oponga a la presente Ley.

4. Queda facultada la Secretaría de Gobernación para interpretar, por medio de disposiciones generales, los casos dudosos que se presenten en la aplicación de esta Ley y sus reglamentos.

5. La Secretaría de Gobernación señalará la fecha en que habrá de iniciarse el registro de identificación de la población mexicana.

6. La Secretaría de Gobernación queda autorizada para regularizar la situación migratoria de los extranjeros que, con motivo de la reciente guerra mundial o causa distinta de fuerza mayor se encuentren en el país, siempre que llenen los requisitos de esta Ley, sus reglamentos, y los que la propia Secretaría señale.

Dentro de un plazo que terminará el 30 de abril de mil novecientos cuarenta y ocho los extranjeros a que se refiere el presente artículo deberán promover su regularización. A los que no lo hicieren se les impondrá una multa de \$200.00 a \$5,000.00 y, en su caso, serán deportados.

Carlos I. Serrano, S.P. Luis Díaz Infante, D.P. Mauro Angulo, S.S. Jesús Aguirre Delgado, D.S. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido la presente Ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

Miguel Alemán. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Héctor Pérez Martínez. Rúbrica. El Secretario de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet. Rúbrica. El Secretario de Agricultura y Ganadería, Nazario S. Ortiz Garza. Rúbrica. El Secretario de Economía, Antonio Ruiz Galindo. Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal. Rúbrica. El Secretario de Salubridad y Asistencia, Rafael Pascasio Gamboa. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Andrés Serra Rojas. Rúbrica. El Jefe del Departamento Agrario, Mario Sousa. Rúbrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El desarrollo económico y social sirve al hombre, destinatario último y fundamental de la gran tarea de desenvolvimiento que se ha propuesto y lleva a cabo la

Nación. De ahí, entonces, que la población deba ser contemplada en todo caso como elemento integral del desarrollo.

La población presenta transformaciones sustantivas que es preciso conocer, interpretar e instrumentar, regulándolas jurídicamente. Esta regulación integra el fundamento normativo del constante cambio que se registra en la vida del país y orienta las transformaciones, con criterio humanista, en beneficio del individuo y de la comunidad de la que aquél forma parte.

Hoy día existe y se acentúa en casi todos los países del mundo, en mayor o menor grado, una justa preocupación por las cuestiones demográficas. Ha cobrado presencia, cada vez más intensa, la inquietud por los peligros que aparejan el rápido y excesivo crecimiento de la población y el indebido uso de los recursos naturales.

México posee un extraordinario incremento demográfico, acaso sin precedente histórico. En la actualidad, nuestro país cuenta con cincuenta y seis millones de habitantes, que se duplicarán en sólo veinte años. De persistir esta tendencia, México arribará al siglo XXI con ciento treinta y cinco millones de habitantes, que no sólo demandarán habitación, cultura, empleo y servicios de diversa índole, sino que impondrán una acelerada dinámica social. Los padres de esos millones de mexicanos del año dos mil nacieron ya o están por nacer, por lo que esa previsión demográfica no es un hecho incierto, sino que está extraído de nuestra más evidente realidad.

La marcada elevación del ritmo de crecimiento de nuestra población, uno de los más altos del mundo, ha traído consigo el rejuvenecimiento de aquélla, y este influjo posee, a su turno, inmediatas resonancias en todos los ámbitos.

La expansión demográfica intensa limita considerablemente la capacidad de ahorro, en la medida en que disminuye, por una parte, la proporción de la población económicamente activa, al paso que aumenta, por la otra, el grado de dependencia sobre un número cada vez menor de mexicanos, en números relativos.

El rejuvenecimiento de que se habla incide asimismo sobre la educación, cuyas renovadas exigencias gravitan sobre el gasto público, que sufre la presión de una creciente demanda para atender todos los niveles educativos, particularmente el primario.

El acelerado incremento de la población representa un también acelerado aumento en la demanda de empleo. La oferta de mano de obra, que sin cesar se multiplica, hace necesario aumentar en la misma proporción el número de fuentes de trabajo.

Igualmente se ha reflejado este fenómeno sobre el desenvolvimiento de los centros urbanos, que deben proveer, con gran diligencia, los servicios municipales, cada vez mayores y mejores, que requiere su creciente población.

No sólo repercute el incremento de la población sobre la capacidad de ahorro, la educación popular, la generación de empleos y la multiplicación de servicios municipales. Afecta también, en medida determinante, otros numerosos renglones. De todo ello resulta, pues, que la población deba ser considerada, a título de elemento fundamental, al formularse las políticas de empleo, de redistribución del ingreso, de

educación, de fomento al ahorro, de industrialización, de energéticos, de provisión de artículos de primera necesidad o de creación de polos de desarrollo.

México se encuentra empeñado en una magna tarea de desarrollo. Para conferir vigor al esfuerzo nacional y no diluirlo en el mar del crecimiento demográfico, es conveniente estabilizar racionalmente la población, a fin de que su dinámica no anule los éxitos que haya logrado la sociedad en su conjunto ni minimice las actividades que el Estado realiza falsa tesis de *cuerno de la abundancia*, exigía una política de crecimiento de la población. El justo anhelo de convertirnos en un país grande determinó el rumbo de expansionismo demográfico a partir de la primera generación revolucionaria.

Algunos de los triunfos más notables de la propia Revolución hicieron el resto: gracias a la expansión de los servicios de salud pública y de higiene se abatieron notablemente la tasa de mortalidad y las condiciones de morbilidad y aumentó en forma sustancial, por otra parte, la esperanza de vida al nacimiento.

El Gobierno de la República está plenamente consciente de la importancia y complejidad del problema demográfico. Su acción habrá de inscribirse, como invariablemente acontece, en el contexto jurídico político de la Constitución que nos rige, respetuosa de las libertades fundamentales del hombre y de la alta dignidad de la familia, en cuya preservación nos hallamos permanentemente comprometidos.

En nuestro pasado informe ante vuestra soberanía afirmamos ya la necesidad de considerar seriamente un problema al que, desde hace tiempo, han hecho frente muchas naciones de diversa estructura política y económica. Vastos sectores de nuestra población se plantean el problema del crecimiento de la familia.

Expresamos también la formal ratificación de nuestro humanismo nacionalista y revolucionario, sosteniendo que todo proceso social debe tener como centro al hombre concreto, y que mejorar su condición implica, siempre, preservar su dignidad y su libre albedrío. En el mismo informe afirmamos que los recursos humanos constituyen el núcleo dinámico de todo cambio trascendente y que el fundamento del progreso es el poder transformador de la voluntad comunitaria.

En ningún caso estableceríamos, por lo demás, soluciones informadas por la presión del exterior, que encubran una determinada postura ideológica. Las respuestas a los problemas de México deben inspirarse, única y exclusivamente, en las necesidades y realidades de nuestro país, apoyarse en su respeto por la libertad y dignidad de la persona humana y hacer posible la realización de sus anhelos y esperanzas.

Con fundamento en tales principios, es preciso rediseñar y acelerar la estrategia de nuestro desarrollo, incorporando a ella una auténtica política demográfica, que tome en cuenta el volumen, la estructura, la dinámica y la distribución de la población, que incluya la planeación familiar y que permita efectuar racionalmente, por limpias vías institucionales, los cambios y las transformaciones en los que estamos comprometidos.

Debemos advertir, y lo hemos hecho ya, que una política de población no es un sustituto para el desarrollo económico. Por ello, rechazamos la idea de que un puro

criterio demográfico orientado hacia la reducción de la natalidad, pueda sustituir a la compleja empresa del desarrollo. En cambio, ratificamos nuestra creencia en el valor de los recursos humanos de nuestro pueblo y en el poder transformador de nuestras instituciones, en la mejor explotación y preservación de nuestros recursos naturales, en los beneficios de la industrialización y en los avances que podemos lograr mediante la ciencia y la tecnología para hacer frente a los desafíos, a que arriba aludimos, que significan la alimentación, el empleo, la educación y la salud de los millones de mexicanos que nacerán en el futuro.

De todo lo anterior resulta, entonces, que la contemplación de los problemas demográficos deba plantearse en términos totalmente diferentes de aquellos que fundaron la legislación existente. Se precisa una política demográfica adecuada para la época y las necesidades actuales que se oriente a crear mejores condiciones de vida para nuestro pueblo, a lograr mayor productividad y nivel de empleo y a distribuir más justamente el ingreso. A estos propósitos corresponde la orientación del proyecto de Ley General de Población que ahora presentamos ante este H. Congreso de la Unión, cumpliendo así el ofrecimiento formulado en el mismo Informe de Gobierno al que arriba se hizo referencia.

Establecidos los propósitos y límites de la acción del Estado en este terreno, es preciso crear los órganos y mecanismos necesarios para su conveniente realización. Dado que los problemas de la población repercuten en todas las áreas de la tarea pública, las acciones que en torno a aquella se resuelvan tendrán consecuencias en el ámbito de competencia de numerosas secretarías y departamentos de Estado.

Dentro de estos objetivos, en el proyecto se conservan atribuciones de la Secretaría de Gobernación para ser el conducto del Ejecutivo Federal en la resolución de los problemas demográficos nacionales, se fijan las bases jurídicas y operativas de esa coordinación y se estructura al Consejo Nacional de Población como pieza maestra para una acción integral del Estado en este campo, razón por la cual dicho órgano está integrado tanto por las dependencias que intervienen en el manejo directo de cuestiones de población, como por las que realizan tareas relacionadas con la planeación y la aceleración del proceso del desarrollo.

Para nutrir su información con las aportaciones de las más diversas disciplinas, convergentes en la solución de los problemas que suscita el desarrollo, se dispone que este Consejo pueda hacerse auxiliar por consultores técnicos, que deberán ser del más alto nivel, e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes. De este modo, se asegura la mejor eficacia en el cumplimiento de las tareas encomendadas al Consejo.

La cada vez más amplia participación de México en la vida internacional determina que su política migratoria se constituya en un instrumento de desenvolvimiento autónomo y no en un esquema de dependencia. Por ello, la presente iniciativa contempla dicha política en los términos pertinentes a la debida satisfacción de los intereses nacionales: restrictiva, cuando sea necesario proteger, con particular énfasis, la

actividad económica, profesional o artística de los mexicanos; abierta, por el contrario, en la medida en que resulte conveniente alentar la internación de extranjeros cuyo desempeño traiga consigo beneficios culturales, sociales y económicos para la Nación. Se debe advertir que los amplios términos utilizados en la formulación de este ordenamiento permiten su eficaz coordinación con los sistemas que derivan de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y la Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.

La iniciativa se rige por la idea de que sólo serán admitidos a la vida nacional los extranjeros que deseen sumarse al esfuerzo por el desarrollo del país y compartir experiencias, instituciones y propósitos con los mexicanos.

Por ello, la materia migratoria se ha ordenado sistemáticamente, disponiendo en forma adecuada cada uno de los temas que la integran.

Se estimó conveniente suprimir la autorización para la inmigración colectiva, prevista por la ley en vigor, dado que carece de aplicación en las actuales circunstancias.

Los inmigrantes investigadores, científicos y técnicos son objeto de tratamiento especial, por cuanto su ingreso al país puede ser útil para el desenvolvimiento nacional.

La protección de las víctimas de persecución política se limita actualmente a los nacionales de países latinoamericanos. Con un designio más moderno y generoso, la iniciativa extiende los beneficios del asilo territorial a los perseguidos de cualquier nacionalidad. De esta suerte, nuestro país reafirma y enriquece su convicción humanista, sin distinción de nacionalidades.

Por lo que toca a las calidades migratorias de No Inmigrantes y de Inmigrantes, que el proyecto reproduce, cabe mencionar algunas innovaciones. Así, se modifica y amplía el régimen del rentista considerándolo dentro de la calidad de No Inmigrante. Dentro de la misma calidad migratoria se introduce la característica de consejero, en favor de quienes presten funciones de asesoramiento a empresas o asistan a sesiones de consejo de administración o asambleas de sociedades.

En cuanto los inmigrantes, se incorporan novedades, como la autorización otorgada a los rentistas para que presten servicios como científicos, investigadores científicos o técnicos y docentes, cuando estas actividades sean convenientes para el país. También se fija la característica de científico para que quien con tal carácter se interne en México con el propósito de dirigir o realizar investigaciones, preparar investigadores o difundir conocimientos especializados. Los inmigrantes inversionistas, por su parte, podrán internarse en México e invertir en un ramo de la industria, de conformidad con las leyes de la materia.

La adquisición por parte de extranjeros de bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos o acciones de empresas dedicadas al comercio de dichos bienes, se regula en forma más rigurosa, dado su interés nacional. Por ello, se ha sujetado este tipo de operaciones a previo permiso de la Secretaría de Gobernación, independientemente de que los interesados se encuentren dentro o fuera del territorio nacional y de que actúen, en consecuencia, por sí mismos o mediante apoderados.

Otras novedades de menor relieve han sido incorporadas en la parte sistemática del proyecto, orientadas a lograr el pleno cumplimiento de los fines a los que este documento pretende servir en los diversos ámbitos que contempla.

Por lo que toca a la aplicación de penas, se ha ampliado el margen de arbitrio judicial, a fin de que la sanción impuesta responda a las circunstancias del caso, y se apoye, para ello, tanto en la entidad objetiva del delito como en las circunstancias peculiares de la gente.

La práctica ha mostrado la conveniencia de distinguir entre el extranjero que se interna al país ilegalmente y el que lo hace con permiso de la autoridad, proporcionando datos falsos para obtener éste. Además de las sanciones correspondientes a las hipótesis anteriores, se establece una pena para quien, habiéndose internado legalmente, viola las disposiciones legales o administrativas a que está sujeta su estancia y se coloca, por lo tanto, en una situación irregular.

Se incorpora un tipo delictivo, para sancionar a quienes por sí mismos o por cuenta de otros introducen o pretenden introducir extranjeros a otro país, a través del territorio nacional, sin contar con la autorización que la ley reclama. Se trata aquí, como lo ha puesto de relieve la experiencia, de una actividad que frecuentemente se realiza y que es necesario combatir.

2.26. LEY GENERAL DE POBLACIÓN DE 1974

Capítulo I

Objeto y atribuciones

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

Art. 2. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

Art. 3. Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

- I. Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;
- II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;
- III. Disminuir la mortalidad;
- IV. Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a

- la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;
- V. Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional;
 - VI. Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio;
 - VII. Restringir la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija;
 - VIII. Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran;
 - IX. Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;
 - X. Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la
 - XI. República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población;
 - XII. Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados;
 - XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre; y
 - XIV. Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Art. 4. Para los efectos del artículo anterior, corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo, y a las demás entidades del sector público, según las atribuciones que les confieran las leyes, la aplicación y ejecución de los procedimientos necesarios para la realización de cada uno de los fines de la política demográfica nacional; pero la definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de programas de dichas dependencias en materia demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.

Art. 5. Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.

Art. 6. El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación que será el titular del ramo y que fungirá como presidente del mismo, y un representante de cada una de las secretarías de Educación Pública, Salubridad y Asistencia, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social y de la Presidencia, y uno del Departamento de Asuntos

Agrarios y Colonización, que serán los titulares de los mismos o los subsecretarios y secretario general que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior.

Cuando se trate de asuntos de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el presidente del Consejo podrá solicitar de sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o nombren un representante para desahogar aquellos.

El Consejo podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de desarrollo y demografía.

Capítulo II

Migración

Art. 7. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:

- I. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios;
- II. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismos;
- III. Aplicar esta Ley y su Reglamento; y
- IV. Las demás facultades que le confieran esta Ley y su Reglamento así como otras disposiciones legales o reglamentarias.

Art. 8. Los servicios de migración serán:

- I. Interior; y
- II. Exterior.

Art. 9. El servicio interior estará a cargo de las oficinas establecidas por la Secretaría de Gobernación en el país y el exterior por los delegados de la Secretaría, por los miembros del Servicio Exterior Mexicano y las demás instituciones que determine la Secretaría de Gobernación con carácter de auxiliares.

Art. 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salubridad y Asistencia, Relaciones Exteriores, Agricultura y Ganadería y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.

Las dependencias y organismos que se mencionan están obligados a proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios que sean de sus respectivas competencias.

Art. 11. El tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los lugares designados para ello y dentro del horario establecido, con la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 12. La Secretaría de Gobernación podrá cerrar temporalmente los puertos aéreos, marítimos y fronteras al tránsito internacional, por causas de interés público.

Art. 13. Los nacionales y extranjeros para entrar o salir del país, deberán llenar los requisitos exigidos por la presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.

Art. 14. La Secretaría de Gobernación vigilará en relación con el servicio migratorio, el cumplimiento de las disposiciones relativas a estadística nacional. Las personas a que se refieren los artículos 18 y 19 deberán proporcionar para este efecto, los datos necesarios al internarse al país.

Art. 15. Los mexicanos para ingresar al país comprobarán su nacionalidad, satisfarán el examen médico cuando se estime necesario y proporcionarán los informes estadísticos que se les requieran. En caso de tener un mal contagioso, las autoridades de Migración expedirán los trámites cuando dichos nacionales deban ser internados para ser atendidos en el lugar que las autoridades sanitarias determinen.

Art. 16. El Servicio de Migración tiene prioridad, con excepción del de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas de cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República.

Art. 17. Todo lo relativo a la vigilancia e inspección de personas en tránsito por aire, tierra y mar, cuando tenga carácter internacional queda a cargo del Servicio de Migración, con excepción de las funciones de sanidad.

Art. 18. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 16, los representantes de gobiernos extranjeros que se internen en el país en comisión oficial con sus familias y empleados, así como las personas que conforme a las leyes tratados o prácticas internacionales estén exentos de la jurisdicción territorial, siempre que exista reciprocidad.

Art. 19. A los funcionarios de gobiernos extranjeros que en comisión oficial se internen en el país se les darán las facilidades necesarias, de acuerdo con la costumbre internacional y las reglas de reciprocidad.

Art. 20. La Secretaría de Gobernación reglamentará de acuerdo con las particularidades de cada región, las visitas de extranjeros a poblaciones marítimas, fronterizas y aeropuertos con tránsito internacional. Lo mismo se observará respecto del tránsito diario entre las poblaciones fronterizas y las colindantes del extranjero, respetando en todo caso los tratados, o convenios internacionales sobre la materia.

Art. 21. Las empresas de transportes terrestres, marítimos o aéreos, tienen la obligación de cerciorarse por medio de sus funcionarios y empleados de que los extranjeros que transporten para internarse en el país se encuentren debidamente documentados.

Art. 22. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que las autoridades de Migración efectúen la inspección correspondiente.

Art. 23. Los tripulantes extranjeros de transportes aéreos, terrestres o marítimos, sólo podrán permanecer en territorio nacional el tiempo autorizado. Los gastos que

origine su expulsión o salida el país, serán cubiertos por los propietarios o representantes de dichos transportes, ya sean empresas, sociedades de cualquier índole o personas individuales.

Art. 24. Los pilotos de aerotransportes, capitanes de buques y conductores de autotransportes, deberán presentar a las autoridades de Migración, en el momento de efectuar la inspección de entrada o salida, lista de los pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación.

Art. 25. No se autorizará el desembarco de extranjeros que no reúnan los requisitos fijados por esta Ley y su Reglamento, salvo lo dispuesto por el artículo 42 fracción IX, de esta Ley.

Art. 26. Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización del Servicio de Migración en algún puerto nacional y permanezcan en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeronave en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de Migración correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes a su inmediata salida.

Art. 27. Los extranjeros cuya internación sea rechazada por el Servicio de Migración, por no poseer documentación migratoria o por no estar en regla, así como los polizones, deberán salir del país por cuenta de la empresa de transportes que propició su internación sin perjuicio de las sanciones que les correspondan de acuerdo con esta Ley.

Art. 28. Ningún transporte marítimo podrá salir de puertos nacionales antes de que se realice la inspección de salida por las autoridades de Migración y de haberse recibido de éstas la autorización para efectuar el viaje, salvo casos de fuerza mayor de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Marina y de las autoridades competentes.

Art. 29. El Reglamento respectivo determinará las normas a que quedará sujeta la vigilancia de tripulantes extranjeros en transportes marítimos de cualquier nacionalidad surtos en puertos nacionales; igualmente fijará los requisitos para permitir la visita o internación al país de los mismos tripulantes.

Art. 30. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional, sin la autorización previa de las autoridades de Migración y las Sanitarias.

Art. 31. Las empresas de transportes responderán pecuniariamente de las violaciones que a la presente Ley y su Reglamento, cometan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que incurran las personas mencionadas.

Capítulo III

Inmigración

Art. 32. La Secretaría de Gobernación fijará, previos los estudios demográficos correspondientes, el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país,

ya sea por actividades o por zonas de residencia y sujetará a las modalidades que juzgue pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus posibilidades de contribuir al progreso nacional.

Art. 33. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los permisos de internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos dedicados o que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas a que se refiere el artículo 48, fracción II, de esta Ley. A los turistas se les proporcionarán facilidades para internarse en el país.

Art. 34. La Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en el país las condiciones que estime convenientes respecto a las actividades a que habrán de dedicarse y al lugar o lugares de su residencia.

Cuidará asimismo de que los inmigrantes sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica.

Art. 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas serán admitidos provisionalmente por las autoridades de Migración con la obligación de permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso.

Art. 36. La Secretaría de Gobernación tomará medidas necesarias para ofrecer condiciones que faciliten el arraigo y la asimilación en México de investigadores, científicos y técnicos extranjeros.

Art. 37. La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria por cualesquiera de los siguientes motivos, cuando:

- I. No exista reciprocidad internacional;
- II. Lo exija el equilibrio demográfico nacional;
- III. No lo permitan las cuotas a que se refiere el artículo 32 de esta Ley;
- IV. Se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales;
- V. Hayan observado mala conducta durante su estancia en el país o tengan malos antecedentes en el extranjero;
- VI. Hayan infringido esta Ley o su Reglamento;
- VII. No se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria; o
- VIII. Lo prevean otras disposiciones legales.

Art. 38. Es facultad de la Secretaría de Gobernación suspender o prohibir la admisión de extranjeros, cuando así lo determine el interés nacional.

Art. 39. Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo.

Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, se perderá la calidad

migratoria que la Secretaría haya otorgado y se le señalará al interesado un plazo para que abandone el país, excepto si ha adquirido la calidad de inmigrado.

Art. 40. Los mexicanos que por cualquier causa hayan perdido su nacionalidad, para entrar al país o para seguir residiendo en él, deberán cumplir con lo que la Ley establece para los extranjeros.

Art. 41. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades:

- a) No Inmigrante.
- b) Inmigrante.

Art. 42. No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:

- I. **TURISTA.** Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.
- II. **TRANSMIGRANTE.** En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.
- III. **VISITANTE.** Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por seis meses, prorrogables por una vez por igual temporalidad, excepto si durante su estancia vive de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior, o para actividades científicas, técnicas, artísticas, deportivas o similares, en que podrán concederse dos prórrogas más.
- IV. **CONSEJERO.** Para asistir a asambleas o sesiones del Consejo de Administración de empresas o para prestarles asesoría y realizar temporalmente acciones propias de sus facultades. Esta autorización será hasta por seis meses, improrrogable, con permiso de entradas y salidas múltiples, y la estancia dentro del país en cada ocasión sólo podrá ser hasta de treinta días improrrogables.
- V. **ASILADO POLÍTICO.** Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país.

Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia dependencia.

- VI. ESTUDIANTE. Para iniciar, completar o perfeccionar estudios en planteles educativos o instituciones oficiales o particulares incorporados o con autorización oficial, con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total.
- VII. VISITANTE DISTINGUIDO. En casos especiales, de manera excepcional, podrán otorgarse permisos de cortesía para internarse y residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar estos permisos cuando lo estime pertinente.
- VIII. VISITANTES LOCALES. Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días.
- IX. VISITANTE PROVISIONAL. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 30 días, el desembarco provisional de extranjeros que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya documentación carezca de algún requisito secundario.

En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.

Art. 43. La admisión al país de un extranjero lo obliga a cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen en el permiso de internación y las disposiciones que establecen las leyes respectivas.

Art. 44. Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiera la calidad de Inmigrado.

Art. 45. Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años y tienen obligación de comprobar a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, que están cumpliendo con las condiciones que les fueron señaladas al autorizar su internación y con las demás disposiciones migratorias aplicables a fin de que sea refrendada anualmente, si procede, su documentación migratoria.

Art. 46. En caso de que durante la temporalidad concedida dejare de satisfacerse la condición a que está supeditada la estancia en el país de un Inmigrante, éste deberá comunicarlo a la Secretaría de Gobernación dentro de los quince días siguientes, a fin de que se proceda a la cancelación de su documentación migratoria y se le señale plazo para abandonar el país o se le conceda término para su regularización, a juicio de la propia Secretaría.

Art. 47. El Inmigrante que permanezca fuera del país dieciocho meses en forma continua, o con intermitencias, perderá tal calidad, en la inteligencia de que durante los dos primeros años de su internación no podrá ausentarse de la República por más

de treinta días cada año, salvo lo que determine en casos excepcionales la Secretaría de Gobernación.

La propia Secretaría podrá autorizar la salida del país por la temporalidad y veces que juzgue convenientes, sin la aplicación de lo dispuesto en este artículo y el 56, a los inmigrantes que hayan solicitado su calidad de Inmigrado, mientras ésta no se resuelva.

Art. 48. Las características de Inmigrante son:

- I. RENTISTA. Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones nacionales de crédito u otras que determine la Secretaría de Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como profesores, científicos, investigadores científicos o técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas para el país.
- II. INVERSIONISTAS. Para invertir su capital en la industria, de conformidad con las leyes nacionales y siempre que la inversión contribuya al desarrollo económico y social del país.
- III. PROFESIONAL. Para ejercer una profesión sólo en casos excepcionales y previo registro del título ante la Secretaría de Educación Pública.
- IV. CARGO DE CONFIANZA. Para asumir cargos de dirección u otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación.
- V. CIENTÍFICO. Para dirigir o realizar investigaciones científicas, para difundir sus conocimientos científicos, preparar investigadores o realizar trabajos docentes, cuando estas actividades sean realizadas en interés del desarrollo nacional a juicio de la Secretaría de Gobernación, tomando en consideración la información general que al respecto le proporcionen las instituciones que estime conveniente consultar.
- VI. TÉCNICO. Para realizar investigación aplicada dentro de la producción o desempeñar funciones técnicas o especializadas que no puedan ser prestadas, a juicio de la Secretaría de Gobernación, por residentes en el país.
- VII. FAMILIARES. Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo, inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo.
- VIII. Los hijos y hermanos de los solicitantes sólo podrán admitirse dentro de esta característica cuando sean menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable.

Art. 49. La internación y permanencia en el país de científicos o técnicos extranjeros, se condicionará a que cada uno de éstos instruya en su especialidad a un mínimo de tres mexicanos.

Art. 50. Todos los extranjeros que realicen en México investigaciones o estudios técnicos o científicos, entregarán a la Secretaría de Gobernación un ejemplar de dichos trabajos, aun cuando éstos se terminen, perfeccionen o impriman en el extranjero.

Art. 51. La Secretaría de Gobernación en condiciones excepcionales, podrá dictar medidas para otorgar máximas facilidades en la admisión temporal de extranjeros.

Art. 52. Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país.

Art. 53. Los Inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años, podrán adquirir la calidad migratoria de Inmigrados, siempre que hayan observado las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos y que sus actividades hayan sido honestas y positivas para la comunidad. En tanto no se resuelva la solicitud de la calidad de Inmigrado, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el interesado seguirá conservando la de Inmigrante.

Al Inmigrante que vencida su temporalidad de cinco años no solicite en los plazos que señale el Reglamento su calidad de Inmigrado o no se le conceda ésta, se le cancelará su documentación migratoria, debiendo salir del país en el plazo que le señale para el efecto la Secretaría de Gobernación. En estos casos el extranjero podrá solicitar nueva calidad migratoria de acuerdo con la Ley.

Art. 54. Para obtener la calidad de Inmigrado se requiere declaración expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 55. El Inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, con las limitaciones que imponga la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el Reglamento y con las demás disposiciones aplicables.

Art. 56. El Inmigrado podrá salir del país y entrar al mismo libremente; pero si permaneciera en el extranjero dos años consecutivos, perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de diez años estuviere ausente más de cinco. Los periodos de diez años se computarán a partir de la fecha de la declaratoria de Inmigrado, en la forma y términos que establezca el Reglamento.

Art. 57. Los diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados en el país, así como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar sus representaciones desean seguir radicando en la República deberán llenar los requisitos ordinarios, quedando facultada la Secretaría de Gobernación para dar a dichos extranjeros, por razones de reciprocidad, las facilidades que en los países extranjeros correspondientes se otorguen en esta materia a los que hubieren sido representantes mexicanos.

Art. 58. Ningún extranjero podrá tener dos calidades o características migratorias simultáneamente.

Art. 59. No se cambiará calidad ni característica migratoria en el caso comprendido en la fracción II, del artículo 42. En los demás, queda a juicio de la Secretaría de Gobernación hacerlo cuando se llenen los requisitos que esta Ley fija para la nueva calidad o característica migratoria que se pretenda adquirir y previo pago de los impuestos que determinen las leyes fiscales.

Art. 60. Para que un extranjero pueda ejercer otras actividades, además de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, requiere permiso de la Secretaría de Gobernación.

Art. 61. Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros, están obligados a informar a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días, sobre cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que éstos se encuentren sujetos. Además, quedarán obligadas a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero cuando la Secretaría de Gobernación la ordene.

Art. 62. Para internarse en la República los extranjeros deberán cumplir los requisitos siguientes:

- I. Presentar certificado oficial de buena salud física y mental, expedido por las autoridades del país de donde procedan, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación;
- II. Ser aprobados en el examen que efectúen las autoridades sanitarias;
- III. Proporcionar a las autoridades de Migración, bajo protesta de decir verdad, los informes que les sean solicitados;
- IV. Identificarse por medio de documentos idóneos y auténticos y, en su caso, acreditar su calidad migratoria;
- V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por la autoridad del lugar donde hayan residido habitualmente, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación; y
- VI. Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos de internación.

Art. 63. Los extranjeros que se internen al país en calidad de Inmigrantes y los No Inmigrantes a que se refieren las fracciones III –por lo que respecta a técnicos y científicos, V y VI del artículo 42 de esta Ley, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación.

Art. 64. Los extranjeros, en el momento de registrarse, comprobarán su legal internación y permanencia y las actividades a que se dediquen; y cumplirán los demás requisitos que señalen esta Ley y sus reglamentos.

Art. 65. Los extranjeros registrados, están obligados a informar al Registro Nacional de Extranjeros, de sus cambios de calidad o característica migratoria, nacionalidad, estado civil, domicilio y actividades a que se dediquen, dentro de los treinta días posteriores al cambio.

Art. 66. Los extranjeros, por sí o mediante apoderado, sólo podrán celebrar actos relativos a la adquisición de bienes inmuebles, derechos reales sobre los mismos, acciones o partes sociales de empresas dedicadas en cualquier forma al comercio o tenencia de dichos bienes, previo permiso de la Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las autorizaciones que deban recabar conforme a otras disposiciones legales.

Art. 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces, los contadores públicos y corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país y que sus condiciones y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación y asentar en el instrumento respectivo tal comprobación. Excepcionalmente, en caso de urgencia, no se exigirá la comprobación mencionada en el otorgamiento de poderes o testamentos. En todos los casos, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.

Art. 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto del estado civil en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país. Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darle aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado.

Art. 69. Ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, si no se acompaña la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto.

Art. 70. En relación con las materias que esta Ley se ocupa, los extranjeros pagarán los impuestos y derechos que determinen las disposiciones legales correspondientes.

Art. 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquellos que deben ser expulsados.

Art. 72. Las autoridades judiciales del país están obligadas a poner en conocimiento de la Secretaría de Gobernación la filiación de los extranjeros que se encuentren sujetos a proceso, en el momento de abrirse éste, indicando además el delito de que sean presuntos responsables y la sentencia que se dicte.

Los jueces u oficiales del Registro Civil y los jueces en materia civil o de lo familiar, comunicarán a la Secretaría de Gobernación, los cambios del estado civil de los extranjeros dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que quede firme el acto, sentencia o resolución de que se trate.

Art. 73. Las autoridades que por Ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de Migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.

Art. 74. Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en el país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese determinado servicio.

Art. 75. Cuando una empresa, un extranjero o los representantes legales de éstos no cumplan con los requisitos que fije la Secretaría de Gobernación en el plazo que la misma determine en cualquier trámite migratorio, se les tendrá por desistidos de la gestión.

Capítulo IV

Emigración

Art. 76. Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

- I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas para regularla; y
- II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos.

Art. 77. Son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero.

Art. 78. Las personas que pretendan emigrar del país, están obligadas a satisfacer, además de los requisitos generales de migración, los siguientes:

- I. Identificarse y presentar a la autoridad de Migración correspondiente, las informaciones personales o para fines estadísticos que les requieran;
- II. Ser mayores de edad, o si no lo son o están sujetos a interdicción, ir acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela en su caso, o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por autoridad competente;
- III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que pueden cumplir todos los requisitos que para entrar al país a donde se dirijan exijan las leyes del mismo, según el carácter con que pretendan hacerlo;
- IV. Solicitar de la oficina respectiva la documentación correspondiente y presentarla a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda salir y no estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia, ni estar arraigado por cualquier causa en virtud de resolución judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 109 de esta Ley; y
- V. Los que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia.

Art. 79. Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades.

El personal de Migración exigirá las condiciones de trabajo por escrito, aprobadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebraron y visadas por el Cónsul del país donde deban prestarse los servicios.

Art. 80. El traslado en forma colectiva de los trabajadores mexicanos, deberá ser vigilado por personal de la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos.

Capítulo V

Repatriación

Art. 81. Se consideran como repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir por lo menos dos años en el extranjero.

Art. 82. La Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos, y promoverá su radicación en los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus conocimientos y capacidad.

La misma categoría podrá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación a los nacionales que por virtud de situaciones excepcionales, requieran el auxilio de las autoridades de dicha dependencia, para ser reinternados al país.

Art. 83. La Secretaría de Gobernación cooperará con el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y con los demás organismos federales, locales y municipales que corresponda, para distribuir en los centros de población existentes y en los que se creen, a los contingentes de repatriados que en forma colectiva se internen al país.

Art. 84. La Secretaría de Gobernación propondrá a las dependencias oficiales y empresas particulares, las medidas que estime pertinentes a fin de que se proporcione a los repatriados el mayor número de facilidades para el buen éxito de las labores a que se dediquen.

Capítulo VI

Registro de población e identificación personal

Art. 85. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro e identificación personal de todos individuos residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Art. 86. El Registro de Población e Identificación Personal tiene como finalidad conocer los recursos humanos con que cuenta el país para elaborar los programas de la administración pública en materia demográfica.

Art. 87. El Registro de Población comprende:

- I. A los nacionales, y
- II. A los extranjeros.

Art. 88. La Secretaría de Gobernación establecerá los métodos y procedimientos técnicos del registro, y organizará las unidades administrativas del Registro de Población e Identificación Personal que sean necesarias en el país.

Art. 89. El Registro de Población e Identificación Personal, tiene por objeto:

- I. Recabar todos los datos relativos a la identificación de los habitantes de la República, mexicanos y extranjeros, para los efectos de la fracción V de este artículo;
- II. Clasificar los datos de los habitantes del país, de acuerdo con su nacionalidad, edad, sexo, ocupación, estado civil y lugar de residencia;
- III. Llevar el padrón de los mexicanos residentes en el extranjero;
- IV. Coordinar los métodos de identificación y registro actualmente en uso en las distintas dependencias de la administración pública, con el propósito de constituir un solo sistema elaborado científicamente; y
- V. Crear un documento que se denominará Cédula de Identificación Personal y que tendrá el carácter de instrumento público, probatorio de los datos que contenga en relación con el titular.

Art. 90. Las autoridades de la Federación, de los estados, de los territorios, de los municipios y de los funcionarios y empleados del Servicio Exterior Mexicano, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en el Registro de Población e Identificación Personal, lo mismo que en todas las demás materias reguladas por esta Ley y sus reglamentos.

Art. 91. Una vez hecho el registro dentro del plazo fijado por la Secretaría de Gobernación, el registro y la cédula de identidad que se expidan, tendrán la vigencia que señale el Reglamento de esta Ley.

Art. 92. El registro de los nacionales residentes dentro y fuera del país es gratuito y obligatorio; el de los extranjeros es también obligatorio en los casos que señale esta Ley y quedará sujeto al pago de la cuota correspondiente.

Capítulo VII

Sanciones

Art. 93. Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

- I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;
- II. Dolosamente o por grave negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;
- III. Por sí o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones y trámites migratorios a los interesados;
- IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y
- V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

Art. 94. Las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multas hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Art. 95. Al que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo para violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito, será castigado con multa hasta de un mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Art. 96. Al que en materia migratoria suscriba cualquier documento o promoción con firma que no sea la suya, se le impondrá multa hasta de dos mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas, sin perjuicio de las penas en que incurra cuando ello constituya un delito. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Art. 97. Se impondrá multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que no haya cumplido la orden de la Secretaría de Gobernación para salir del territorio nacional dentro del plazo que para el efecto se le fijó, por haber sido cancelada su calidad migratoria.

Art. 98. Se impondrá pena hasta de diez años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación.

Art. 99. Se impondrá pena hasta de seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo.

Art. 100. Se impondrá multa hasta de tres mil pesos y pena hasta de dieciocho meses de prisión, al extranjero que realice actividades para las cuales no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 101. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al extranjero que, por la realización de actividades ilícitas o deshonestas, viole los supuestos a que está condicionada su estancia en el país.

Art. 102. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 103. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país.

Art. 104. Al extranjero que para entrar al país o que ya internado, proporcione a las autoridades datos falsos con relación a su situación migratoria, se le impondrán

las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 105. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los artículos 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107 y 118 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.

Art. 106. El que haya sido expulsado, solamente podrá ser readmitido por acuerdo expreso del secretario, del subsecretario o del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación.

Art. 107. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogiéndose a los beneficios que la Ley establece para estos casos. Igual sanción se aplicará al extranjero contrayente.

Art. 108. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, cuando tengan por objeto su expulsión del país.

Art. 109. Los arraigos de extranjeros decretados por las autoridades judiciales o administrativas, no impedirán que se ejecuten las órdenes de expulsión que la Secretaría de Gobernación dicte contra los mismos.

Art. 110. Se impondrá multa hasta de tres mil pesos a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den el permiso correspondiente.

Art. 111. El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en sitios y horas que no sean los señalados, se castigará con multa hasta de diez mil pesos, que se impondrá a las personas responsables, a la empresa correspondiente, a sus representantes o a sus consignatarios, salvo casos de fuerza mayor.

Art. 112. Las empresas navieras o aéreas que transporten al país extranjero sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa hasta de cinco mil pesos sin perjuicio de que el extranjero de que se trate, sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia.

Art. 113. Cuando los capitanes de los transportes marítimos, o quienes hagan sus veces, desobedezcan una orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados, ellos, la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios, serán castigados con multa hasta de cinco mil pesos. A las empresas aeronáuticas se les impondrá la misma multa. En ambos casos se levantará un acta en la que se harán constar todas las circunstancias del caso.

Art. 114. Se impondrá multa hasta de mil pesos, al que sin el permiso de la autoridad migratoria, autorice u ordene la partida de un transporte que haya de salir del territorio nacional.

Art. 115. Se impondrá multa hasta de un mil pesos o arresto hasta por treinta y seis horas a los extranjeros que no cumplan con la obligación señalada por el artículo 26 de esta Ley. Si el infractor no pagare la multa impuesta, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Art. 116. La infracción al artículo 28 de esta Ley será castigada con multa hasta de cinco mil pesos y, en caso de reincidencia, se dará a conocer a los cónsules mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor, a efecto de que no se le extiendan nuevos despachos para puertos mexicanos.

Art. 117. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias, será castigada con multa hasta de quinientos pesos o arresto hasta por tres días.

La misma sanción se impondrá a la persona que autorice sin facultades para ello, la visita a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 118. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa de diez mil a cincuenta mil pesos a la persona que por cuenta propia o ajena pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos para trabajar en el extranjero, sin autorización previa de la Secretaría de Gobernación.

Igual pena se impondrá al que sin permiso legal de autoridad competente, por cuenta propia o ajena, pretenda introducir o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o a otro país.

Art. 119. Al funcionario judicial o administrativo que dé trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, sin que se acompañe la certificación expedida por la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto, o con aplicación de otras Leyes distintas de las señaladas en el artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, se le impondrá la destitución de empleo y prisión hasta de seis meses o multa hasta de diez mil pesos o ambas, a juicio del juez, quedando desde luego separado de sus funciones al dictarse el auto de sujeción a proceso.

Art. 120. Toda infracción a la presente Ley o a sus reglamentos en materia migratoria, fuera de los casos señalados en este capítulo y de los que constituyan delitos de acuerdo con otras leyes, se sancionarán administrativamente con multa hasta de diez mil pesos, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio de la Secretaría de Gobernación o con arresto hasta por quince días, si el infractor no pagare la multa.

Art. 121. Las sanciones administrativas a que esta Ley se refiere, se impondrán por acuerdo del secretario, subsecretario o del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, así como por los directores generales, subdirectores generales, jefes y subjefes de Departamento de la propia Secretaría, que tengan a su cargo o bajo sus órdenes servicios relacionados con las materias de la presente Ley.

Art. 122. Para que una sanción administrativa sea revisable deberá solicitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la multa impuesta.

Art. 123. El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta Ley se refiere, estará sujeto a la querrela que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación.

TRANSITORIOS

Art. 1. Se aboga la Ley General de Población de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y sus reformas de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, derogándose todas las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Art. 2. Esta Ley entrará en vigor a los treinta días naturales después de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Art. 3. Entretanto se expide el Reglamento de la presente Ley, continuarán vigentes los del Reglamento de la Ley General de Población de veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y dos, publicado en el *Diario Oficial* de tres de mayo de mil novecientos sesenta y dos y fe de erratas de ocho del mismo mes, en lo que no se opongan a esta Ley.

Art. 4. La Secretaría de Gobernación señalará la fecha en que habrá de iniciarse el registro de la población mexicana.

México, D.F., a 11 de diciembre de 1973. Rafael Hernández Ochoa, D.P. Vicente Juárez Carro, S.P. José Luis Escobar Herrera, D.S. Félix Vallejo Martínez, S.S. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres. Luis Echeverría Álvarez. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Rúbrica. El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa. Rúbrica. El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz. Rúbrica. El Secretario de la Marina, Luis M. Bravo Carrera. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo. Rúbrica. El Secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña.

Rúbrica. El Secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo. Rúbrica. El Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre. Rúbrica. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro. Rúbrica. El Secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes. Rúbrica. El Secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Roviroso Wade. Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja. Rúbrica. El Secretario de Salubridad y Asistencia, Jorge Jiménez Cantú. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo. Rúbrica. El Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río. Rúbrica. El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva. Rúbrica. El Jefe del Departamento de Turismo, Julio Hirschfeld Almada. Rúbrica. El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Senties Gómez. Rúbrica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la creciente importancia y complejidad de los flujos migratorios, el Poder Ejecutivo Federal se dio a la tarea de revisar el marco jurídico migratorio a efecto de proponer al Honorable Congreso de la Unión las reformas y adiciones a la Ley General de Población que exigen los tiempos actuales, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000.

El Ejecutivo Federal ha establecido tres grandes líneas de acción en materia migratoria:

- I. Contribuir de manera permanente en la definición y actualización de una política migratoria que responda a los objetivos nacionales y aliente los flujos migratorios que benefician al país.
- II. Ejercer las facultades de vigilancia migratoria en el territorio nacional, en un marco de respeto a la Ley y a los derechos humanos de los migrantes.
- III. Mejorar la calidad de los servicios, a través de la precisión en el ejercicio de la facultad discrecional, la simplificación de trámites, el desarrollo del personal, la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa, la colaboración interinstitucional y el fomento de una cultura de servicio y honestidad.

En la consecución de esos objetivos se ha encontrado que algunos aspectos de la norma son susceptibles de mejorarse en aras de lograr mayor efectividad en la actuación administrativa, con un apego más puntual a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y, desde luego, una más justa y equitativa apreciación de las circunstancias específicas en favor de los gobernados. La reforma propuesta busca dar mayor protección a los derechos humanos de aquellos extranjeros que han decidido radicar en nuestro país; dar mayor seguridad jurídica en los trámites y procedimientos migratorios; propiciar la integración familiar y combatir con mayor rigor los delitos vinculados con el tráfico de seres humanos.

En nuestro país la migración es un fenómeno que cobra cada día mayor importancia y se manifiesta de diferentes maneras. México reúne las tres características que integran a este fenómeno: origen, tránsito y destino de los migrantes. La situación geográfica de nuestra nación, en especial su cercanía con el país más desarrollado del mundo, así como las tendencias de internacionalización en que se encuentra inmersa, han motivado un aumento significativo de los flujos de migración, que incide de manera importante en el comercio exterior, el turismo, la política internacional, la captación de divisas, la seguridad nacional y en el desarrollo social y económico del país.

A partir de las consideraciones anteriores se ha estimado conveniente reformar y adicionar la Ley General de Población, de la siguiente manera:

Se ajusta el art. 25, ya que hace una referencia inexacta a la fracción IX que no alude al supuesto correcto.

Las reformas a las fracciones V y VI del art. 37 buscan hacer explícita la obligación que tienen los extranjeros de cumplir con las leyes del país para ingresar o permanecer

en el mismo; en el supuesto de que no cumplan con lo establecido serán sujetos de las medidas que la propia Ley dispone al efecto.

El contenido actual del art. 39 es muy severo, pues prevé la posibilidad de que aquel extranjero casado con mexicana que se haya divorciado o incumplido con sus obligaciones alimentarias sea sancionado con la pérdida de su calidad migratoria y la obligación de salir del país. Por lo tanto, la reforma propone diversificar sus consecuencias, sin desconocer que el propósito del legislador es evitar el fraude a la Ley mediante la simulación del matrimonio. Las relaciones humanas plantean una gran variedad de situaciones que incluso rebasan el interés de los cónyuges, recayendo sus efectos en los hijos o en terceros, por lo que se da la facultad a la autoridad migratoria de resolver con mayor justicia y equidad dichos casos.

La reforma al art. 42 persigue diversas finalidades modificando o creando nuevas características migratorias para poder responder más cabalmente a distintas hipótesis que la dinámica social impone. Tal es el caso de la ampliación del plazo de permanencia de los consejeros, al incluirlos dentro de la característica de visitantes, así como la creación de las características de ministro de culto o asociado religioso y de corresponsal.

Igualmente, se otorgan facilidades adicionales en la característica de estudiante para permitir que los habitantes de las zonas fronterizas puedan ingresar a estudiar y regresar a su país sin tener que cumplir con un límite de ausencias de nuestro territorio; de esta manera se responde a un requerimiento de los habitantes de dichas zonas para lograr la formación profesional que pretenden y eliminar trámites engorrosos.

Siendo la familia el núcleo fundamental de la organización social del Estado mexicano, mediante la incorporación de un párrafo final al art. 42, se otorgan una serie de facilidades a los familiares de los extranjeros que pretenden ingresar al país de tal manera que se pueda lograr su integración.

Consecuentemente, el art. 48 es adicionado en su fracción VII para permitir que los familiares de los inmigrantes puedan contribuir al sustento de la familia, permitiéndoles la realización de actividades lucrativas.

Asimismo, se le adiciona una última fracción al citado art. 48 que permitirá otorgar la calidad de inmigrantes a aquellos extranjeros que hayan acreditado procesos de asimilación al medio nacional o vínculos con nacionales, aunque su actividad no fuere de alta especialización.

La reforma al art. 49 abandona la obligación de capacitar a tres mexicanos —de lo que por cierto no se ha podido tener un pleno conocimiento de su realización— e incorpora otros medios para vincular con la comunidad académica, científica, cultural y de capacitación las aportaciones específicas que en sus distintas especialidades puedan ofrecer los extranjeros.

La adición al art. 63 prevé la obligación para los extranjeros admitidos con la característica propuesta en esta reforma de “ministro de culto o asociado religioso”, de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros.

A ese efecto, en concordancia, se incluye la fracción IV del art. 42.

Un avance significativo para consolidar el reconocimiento de los derechos humanos está consignado en la propuesta de reforma al art. 68 para permitir el registro, en tiempo, de los nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional, sin solicitar la comprobación previa de la legal estancia de los padres. Con lo anterior, se evita que dichos menores tengan obstáculos en el acceso a servicios públicos básicos, tales como la educación y salud, pudiendo ejercer a plenitud todos sus derechos constitucionales como mexicanos. Igual situación se aplicará en el caso de defunciones de extranjeros o en las que comparezcan éstos.

Asimismo, para dar continuidad al propósito original del legislador de evitar el fraude a la Ley y conocer los efectos que dichos actos generan, se establece la obligación de que los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscriban en el Registro Nacional de Extranjeros.

En el art. 70 se establece la obligación de la autoridad migratoria para otorgar certificaciones que acrediten la legal estancia de los extranjeros en el país, con el propósito de dar mayor concreción a la garantía de seguridad jurídica.

En virtud de que los arrestos administrativos no pueden exceder de treinta y seis horas conforme al texto del art. 21 constitucional, se modifican las partes relativas de los arts. 115, 116, 135 y 140 que establecen el arresto administrativo y que, aunque no se aplican, exceden el plazo establecido en el precepto citado.

La redacción actual de la Ley de la materia sólo contempla el supuesto de la expulsión definitiva. Con la iniciativa que se presenta, para modificar el art. 126, se busca que la autoridad migratoria pueda determinar la sanción de conformidad con la gravedad de la conducta que la motivó y así evitar el carácter definitivo que se le daba en todos los casos a la expulsión.

Existe un reclamo generalizado de la sociedad para que se castigue con mayor severidad a aquellas personas que cometen el delito de tráfico de indocumentados. Con ese propósito, se modifica el art. 138, y se adiciona un párrafo final para castigar con mayor rigor a aquéllos que pongan en riesgo la salud, integridad o vida de los migrantes, o trafiquen con menores de edad. Siendo intolerable que en estas conductas intervengan servidores públicos, también en el proyecto se incrementa la sanción en estos casos.

En el art. 139 bis se determina la sanción para aquellos que incumplan con las obligaciones que se derivan del otorgamiento de la custodia.

Hoy esta conducta no se encuentra sancionada.

El texto propuesto para el art. 140 pretende clarificar su contenido para facilitar el ejercicio de las atribuciones en materia de imposición de sanciones administrativas.

Se adiciona el capítulo IX que contiene las reglas específicas del procedimiento administrativo en materia migratoria. En él se establecen los principios procedimentales a seguir para la tramitación de la internación, permanencia y salida de los extranjeros del país.

Finalmente, en el capítulo X se regula el procedimiento en materia de vigilancia y verificación al establecer normas para la realización de estas funciones, con lo cual se amplía el margen de seguridad jurídica en beneficio de los particulares y se precisa el ejercicio de las funciones de la autoridad.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en el art. 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

2.27. LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo I

Objeto y atribuciones

Art. 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

Art. 2. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.

Art. 3. Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

- I. Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;
- II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;
- III. Disminuir la mortalidad;
- IV. Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a

la infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan;

- V. Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, social y cultural;
- VI. Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional;
- VII. Sujetar la inmigración de extranjeros a las modalidades que juzgue pertinentes, y procurar la mejor asimilación de éstos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio;
- VIII. Restringir la emigración de nacionales cuando el interés nacional así lo exija;
- IX. Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran;
- X. Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;
- XI. Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población;
- XII. Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los núcleos que viven geográficamente aislados;
- XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que prevea u ocurra algún desastre; y
- XIV. Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales determinen.

Art. 4. Para los efectos de artículo anterior, corresponde a las dependencias del Poder Ejecutivo, y las demás entidades del Sector Público, según las atribuciones que les confieran las leyes, la aplicación y ejecución de los procedimientos necesarios para la realización de cada uno de los fines de la política demográfica nacional; pero la definición de normas, las iniciativas de conjunto y la coordinación de programas de dichas dependencias en materia demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.

Art. 5. Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.

Art. 6. El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías de Relacio-

nes Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, del Departamento del Distrito Federal y de los Institutos Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior.

Cuando se trate de asuntos de la competencia de otras dependencias u organismos del sector público, el Presidente del Consejo podrá solicitar de sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o nombren un representante para desahogar aquellos.

El Consejo podrá contar con el auxilio de consultorias técnicas e integrar las unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con especialistas en problemas de desarrollo y demografía.

Capítulo II

Migración

Art. 7. Por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio a la Secretaría de Gobernación corresponde:

- I. Organizar y coordinar los distintos servicios migratorios;
- II. Vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros, y revisar la documentación de los mismo;
- III. Aplicar esta Ley y su Reglamento; y
- IV. Las demás facultades que le confieran esta Ley y su Reglamento así como otras disposiciones legales o reglamentarias.

En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta Ley.

Art. 8. Los servicios de migración serán:

Interior; y
Exterior.

Art. 9. El servicio interior estará a cargo de las oficinas establecidas por la Secretaría de Gobernación en el país y el exterior por los Delegados de la Secretaría, por los miembros del Servicio Exterior Mexicano y las demás instituciones que determine la Secretaría de Gobernación con carácter de auxiliares.

Art. 10. Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salubridad y Asistencia, Relaciones Exteriores, Agricultura y

Ganadería y en su caso la de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que juzgue conveniente.

Las dependencias y organismos que se mencionan, están obligados a proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios que sean de sus respectivas competencias.

Art. 11. El tránsito internacional de personas por puertos, aeropuertos y fronteras, sólo podrá efectuarse por los lugares designados para ello y dentro del horario establecido, con la intervención de las autoridades migratorias.

Art. 12. La Secretaría de Gobernación podrá cerrar temporalmente los puertos aéreos, marítimos y fronteras al tránsito internacional, por causas de interés público.

Art. 13. Los nacionales y extranjeros para entrar o salir del país, deberán llenar los requisitos exigidos por la presente Ley, sus reglamentos y otras disposiciones aplicables.

Art. 14. La Secretaría de Gobernación vigilará en relación con el servicio migratorio, el cumplimiento de las disposiciones relativas a estadística nacional. Las personas a que se refieren los artículos 18 y 19 deberán proporcionar para este efecto, los datos necesarios al internarse al país.

Art. 15. Los mexicanos para ingresar al país comprobarán su nacionalidad, satisfarán el examen médico cuando se estime necesario y proporcionarán los informes estadísticos que se les requieran. En caso de tener un mal contagioso, las autoridades de Migración expedirán los trámites cuando dichos nacionales deban ser internados para ser atendidos en el lugar que las autoridades sanitarias determinen.

Art. 16. El personal de los servicios de migración dependientes de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal Preventiva tienen prioridad, con excepción del de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas de cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República.

Art. 17. Con excepción de los servicios de sanidad, todo lo relativo a inspección dentro del territorio del país, de personas en tránsito por aire, tierra y mar, cuando tenga carácter internacional queda a cargo de la Policía Federal Preventiva.

Art. 18. Quedan exceptuados de la inspección de que trata el artículo 16, los representantes de gobiernos extranjeros que se internen en el país en comisión oficial con sus familias y empleados, así como las personas que conforme a las leyes, tratados o prácticas internacionales estén exentos de la jurisdicción territorial, siempre que exista reciprocidad.

Art. 19. A los funcionarios de gobiernos extranjeros que en comisión oficial se internen en el país se les darán las facilidades necesarias, de acuerdo con la costumbre internacional y las reglas de reciprocidad.

Art. 20. La Secretaría de Gobernación reglamentará de acuerdo con las particularidades de cada región, las visitas de extranjeros a poblaciones marítimas, fronterizas y aeropuertos con tránsito internacional. Lo mismo se observará respecto del tránsito

diario entre las poblaciones fronterizas y las colindantes del extranjero, respetando en todo caso los tratados o convenios internacionales sobre la materia.

Art. 21. Las empresas de transportes terrestres, marítimos o aéreos, tienen la obligación de cerciorarse por medio de sus funcionarios y empleados de que los extranjeros que transporten para internarse en el país se encuentren debidamente documentados.

Art. 22. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá desembarcar antes de que las autoridades de Migración efectúen la inspección correspondiente.

Art. 23. Los tripulantes extranjeros de transportes aéreos, terrestres o marítimos, sólo podrán permanecer en territorio nacional el tiempo autorizado. Los gastos que origine su expulsión o salida del país, serán cubiertos por los propietarios o representantes de dichos transportes, ya sean empresas, sociedades de cualquier índole o personas individuales.

Art. 24. Los pilotos de aerotransportes, capitanes de buques y conductores de autotransportes, deberán presentar a las autoridades de Migración, en el momento de efectuar la inspección de entrada o salida, lista de los pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios para su identificación.

Art. 25. No se autorizará el desembarco de extranjeros que no reúnan los requisitos fijados por esta Ley y su Reglamento, salvo lo dispuesto por el artículo 42 fracción X, de esta Ley.

Art. 26. Los extranjeros que encontrándose en tránsito desembarquen con autorización del Servicio de Migración en algún puerto nacional y permanezcan en tierra sin autorización legal por causas ajenas a su voluntad después de la salida del buque o aeronave en que hacen la travesía, deberán presentarse inmediatamente a la oficina de Migración correspondiente. En este caso dicha oficina tomará las medidas conducentes a su inmediata salida.

Art. 27. Los extranjeros cuya internación sea rechazada por el Servicio de Migración, por no poseer documentación migratoria o por no estar en regla, así como los polizones, deberán salir del país por cuenta de la empresa de transportes que propició su internación sin perjuicio de las sanciones que les correspondan de acuerdo con esta Ley.

Art. 28. Ningún transporte marítimo podrá salir de puertos nacionales antes de que se realice la inspección de salida por las autoridades de Migración y de haberse recibido de éstas la autorización para efectuar el viaje, salvo casos de fuerza mayor de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Marina y de las autoridades competentes.

Art. 29. El Reglamento respectivo determinará las normas a que quedará sujeta la vigilancia de tripulantes extranjeros en transportes marítimos de cualquier nacionalidad surtos en puertos nacionales; igualmente fijará los requisitos para permitir la visita o internación al país de los mismos tripulantes.

Art. 30. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito internacional, sin la autorización previa de las autoridades de Migración y las Sanitarias.

Art. 31. Las empresas de transportes responderán pecuniariamente de las violaciones que a la presente Ley y su Reglamento, comentan sus empleados, agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que incurran las personas mencionadas.

Capítulo III

Inmigración

Art. 32. La Secretaría de Gobernación fijará, previos los estudios demográficos correspondientes, el número de extranjeros cuya internación podrá permitirse al país, ya sea por actividades o por zonas de residencia y sujetará a las modalidades que juzgue pertinentes, la inmigración de extranjeros, según sean sus posibilidades de contribuir al progreso nacional.

Art. 33. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los permisos de internación se otorgarán preferentemente a los científicos y técnicos dedicados o que se hayan dedicado a la investigación o a la enseñanza en disciplinas no cubiertas o insuficientemente cubiertas por mexicanos, así como a los inversionistas a que se refiere el artículo 48, fracción II, de esta Ley. A los turistas se les proporcionarán facilidades para internarse en el país.

Art. 34. La Secretaría de Gobernación podrá fijar a los extranjeros que se internen en el país las condiciones que estime convenientes respecto a las actividades a que habrán de dedicarse y al lugar o lugares de su residencia.

Cuidará asimismo de que los inmigrantes sean elementos útiles para el país y de que cuenten con los ingresos necesarios para su subsistencia y en su caso, la de las personas que estén bajo su dependencia económica.

Art. 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su país de origen, en los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 42, serán admitidos provisionalmente por las autoridades de Migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito.

Art. 36. La Secretaría de Gobernación tomará medidas necesarias para ofrecer condiciones que faciliten el arraigo y asimilación en México de investigadores, científicos y técnicos extranjeros.

Art. 37. La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria por cualquiera de los siguientes motivos, cuando:

- I. No exista reciprocidad internacional;
- II. Lo exija el equilibrio demográfico nacional;
- III. No lo permitan las cuotas a que se refiere el artículo 32 de esta Ley;
- IV. Se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales;

- V. Hayan infringido las leyes nacionales o tengan malos antecedentes en el extranjero;
- VI. Hayan infringido esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones administrativas aplicables en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en los mismos;
- VII. No se encuentren física o mentalmente sanos a juicio de la autoridad sanitaria; o
- VIII. Lo prevean otras disposiciones legales.

Art. 38. Es facultad de la Secretaría de Gobernación, suspender o prohibir la admisión de extranjeros, cuando así lo determine el interés nacional.

Art. 39. Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos o tengan hijos nacidos en el país, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar su internación o permanencia legal en el mismo.

Si llegare a disolverse el vínculo matrimonial o dejare de cumplirse con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, por parte del cónyuge extranjero, podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el país –excepto si ha adquirido la calidad de inmigrado–, confirmar su permanencia, o bien autorizar una nueva calidad migratoria, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

Art. 40. Los mexicanos que por cualquier causa hayan perdido su nacionalidad, para entrar al país o para seguir residiendo en él, deberán cumplir con lo que la Ley establece para los extranjeros.

Art. 41. Los extranjeros podrán internarse legalmente en el país de acuerdo con las siguientes calidades:

- a) No Inmigrante.
- b) Inmigrante.

Art. 42. No Inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de las siguientes características:

- I. **TURISTA.** Con fines de recreo o salud, para actividades artísticas, culturales o deportivas, no remuneradas ni lucrativas, con temporalidad máxima de seis meses improrrogables.
- II. **TRANSMIGRANTE.** En tránsito hacia otro país y que podrá permanecer en territorio nacional hasta por treinta días.
- III. **VISITANTE.**– Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año.

Cuando el extranjero visitante: durante su estancia viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior; su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas; se dedique a acti-

vidades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares; se interne para ocupar cargos de confianza, o asistir a asambleas y sesiones de consejos de administración de empresas; podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

- IV. **MINISTRO DE CULTO O ASOCIADO RELIGIOSO.** Para ejercer el ministerio de cualquier culto, o para la realización de labores de asistencia social y filantrópicas, que coincidan con los fines de la asociación religiosa a la que pertenezca, siempre que ésta cuente con registro previo ante la Secretaría de Gobernación y que el extranjero posea, con antelación, el carácter de ministro de culto o de asociado en los términos de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. El permiso se otorgará hasta por un año y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.
- V. **ASILADO POLÍTICO.** Para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas en su país de origen, autorizado por el tiempo que la Secretaría de Gobernación juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurren. Si el asilado político viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria, y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal estancia en el país.

Asimismo, si el asilado político se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Dependencia.

- VI. **REFUGIADO.** Para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.

La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la institución del refugiado.

- VII. ESTUDIANTE.- Para iniciar, terminar o perfeccionar estudios en instituciones o planteles educativos oficiales, o incorporados con reconocimiento oficial de validez, o para realizar estudios que no lo requieran, con prórrogas anuales y con autorización para permanecer en el país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesario para obtener la documentación final escolar respectiva, pudiendo ausentarse del país, cada año, hasta por 120 días en total; si estudia en alguna ciudad fronteriza y es residente de localidad limítrofe, no se aplicará la limitación de ausencias señalada.
- VIII. VISITANTE DISTINGUIDO. En casos especiales, de manera excepcional, podrán otorgarse permisos de cortesía para internarse y residir en el país, hasta por seis meses, a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a otras personas prominentes. La Secretaría de Gobernación podrá renovar esos permisos cuando lo estime pertinente.
- IX. VISITANTES LOCALES.- Las autoridades de Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten puertos marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia exceda de tres días.
- X. VISITANTE PROVISIONAL. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar como excepción hasta por 30 días, el desembarco provisional de extranjeros que lleguen a puertos de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya documentación carezca de algún requisito secundario.

En estos casos deberán constituir depósito o fianza que garantice su regreso al país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no cumplen el requisito en el plazo concedido.
- XI. CORRESPONSAL. Para realizar actividades propias de la profesión de periodista, para cubrir un evento especial o para su ejercicio temporal, siempre que acredite debidamente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos que determine la Secretaría de Gobernación. El permiso se otorgará hasta por un año, y podrán concederse prórrogas por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.

Todo extranjero que se interne al país como No Inmigrante, podrá solicitar el ingreso de su cónyuge y familiares en primer grado, a los cuales podrá concedérseles, cuando no sean titulares de una característica migratoria propia, la misma característica migratoria y temporalidad que al No Inmigrante, bajo la modalidad de dependiente económico.

Art. 43. La admisión al país de un extranjero lo obliga a cumplir estrictamente con las condiciones que se le fijen en el permiso de internación y las disposiciones que establecen las leyes respectivas.

Art. 44. Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de radicarse en él, en tanto adquiriera la calidad de Inmigrado.

Art. 45. Los inmigrantes se aceptarán hasta por cinco años y tienen obligación de comprobar a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, que están cumpliendo con las condiciones que les fueron señaladas al autorizar su internación y con las demás disposiciones migratorias aplicables a fin de que sea refrendada anualmente, si procede, su documentación migratoria.

Art. 46. En caso de que durante la temporalidad concedida dejare de satisfacerse la condición a que está supeditada la estancia en el país de un Inmigrante, éste deberá comunicarlo a la Secretaría de Gobernación dentro de los quince días siguientes, a fin de que se proceda a la cancelación de su documentación migratoria y se le señale plazo para abandonar el país o se le conceda término para su regularización, a juicio de la propia Secretaría.

Art. 47. El Inmigrante que permanezca fuera del país más de dieciocho meses en forma continua o con intermitencias, no podrá solicitar el cambio de su calidad a Inmigrado, en tanto no transcurra de nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53. Cuando el Inmigrante permanezca más de dos años fuera del país, perderá su calidad migratoria, salvo en los casos excepcionales que determine la Secretaría de Gobernación.

Art. 48. Las características de Inmigrante son:

- I. RENTISTA. Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones nacionales de crédito u otras que determine la Secretaría de Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. El monto mínimo requerido será el que se fije en el Reglamento de esta Ley. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como profesores, científicos, investigadores científicos o técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas para el país.
- II. INVERSIONISTAS. Para invertir su capital en la industria, comercio y servicios, de conformidad con las leyes nacionales, siempre que contribuya al desarrollo económico y social del país y que se mantenga durante el tiempo de residencia del extranjero el monto mínimo que fije el Reglamento de esta Ley.

Para conservar esta característica el inversionista deberá acreditar que mantiene el monto mínimo de inversión a que se refiere el párrafo anterior.

- III. PROFESIONAL. Para ejercer una profesión. En el caso de que se trate de profesiones que requieran título para su ejercicio se deberá cumplir con lo ordenado por las disposiciones reglamentarias del artículo 5 Constitucional en materia de profesiones.
- IV. CARGO DE CONFIANZA. Para asumir cargos de dirección, de administrador único u otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación al país.
- V. CIENTÍFICO. Para dirigir o realizar investigaciones científicas, para difundir sus conocimientos científicos, preparar investigadores o realizar trabajos docentes, cuando estas actividades sean realizadas en interés del desarrollo nacional a juicio de la Secretaría de Gobernación, tomando en consideración la información general que al respecto le proporcionen las instituciones que estime conveniente consultar.
- VI. TÉCNICO. Para realizar investigación aplicada dentro de la producción o desempeñar funciones técnicas o especializadas que no puedan ser prestadas, a juicio de la Secretaría de Gobernación, por residentes en el país.
- VII. FAMILIARES. Para vivir bajo la dependencia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo, inmigrante, inmigrado o mexicano en línea recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo.

Los inmigrantes familiares podrán ser autorizados por la Secretaría de Gobernación para realizar las actividades que establezca el Reglamento.

Los hijos y hermanos extranjeros de los inmigrantes, inmigrados o mexicanos, sólo podrán admitirse dentro de esta característica cuando sean menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable.

- VIII. ARTISTAS Y DEPORTISTAS. Para realizar actividades artísticas, deportivas o análogas, siempre que a juicio de la Secretaría dichas actividades resulten benéficas para el país.
- IX. ASIMILADOS. Para realizar cualquier actividad lícita y honesta, en caso de extranjeros que hayan sido asimilados al medio nacional o hayan tenido o tengan cónyuge o hijo mexicano y que no se encuentren comprendidos en las fracciones anteriores, en los términos que establezca el Reglamento.

Art. 49. La internación y permanencia por más de seis meses en el país de científicos o técnicos extranjeros, se condicionará, a satisfacción de la Secretaría de Gobernación, a que cada uno de éstos sean solicitados por instituciones de su especialidad e instruyan en ella a mexicanos mediante conferencias, cursos y cátedras, entre otros medios.

Art. 50. Todos los extranjeros que realicen en México investigaciones o estudios técnicos o científicos, entregarán a la Secretaría de Gobernación un ejemplar de dichos trabajos, aun cuando éstos se terminen, perfeccionen o impriman en el extranjero.

Art. 51. La Secretaría de Gobernación en condiciones excepcionales, podrá dictar medidas para otorgar máximas facilidades en la admisión temporal de extranjeros.

Art. 52. Inmigrado es el extranjero que adquiere derechos de residencia definitiva en el país.

Art. 53. Los Inmigrantes con residencia legal en el país durante cinco años, podrán adquirir la calidad migratoria de Inmigrados, siempre que hayan observado las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos y que sus actividades hayan sido honestas y positivas para la comunidad. En tanto no se resuelva la solicitud de la calidad de Inmigrado, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el interesado seguirá conservando la de Inmigrante.

Al Inmigrante que vencida su temporalidad de cinco años no solicite en los plazos que señale el Reglamento su calidad de Inmigrado o no se le conceda ésta, se le cancelará su documentación migratoria, debiendo salir del país en el plazo que le señale para el efecto la Secretaría de Gobernación. En estos casos el extranjero podrá solicitar nueva calidad migratoria de acuerdo con la Ley.

Art. 54. Para obtener la calidad de Inmigrado se requiere declaración expresa de la Secretaría de Gobernación.

Art. 55. El Inmigrado podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, con las limitaciones que imponga la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con el Reglamento y con las demás disposiciones aplicables.

Art. 56. El Inmigrado podrá salir y entrar al país libremente, pero si permanece en el extranjero más de tres años consecutivos, perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de diez años estuviere ausente más de cinco. Los períodos de diez años se computarán a partir de la fecha de la declaratoria de Inmigrado en la forma y términos que establezca el Reglamento.

Art. 57. Los diplomáticos y agentes consulares extranjeros acreditados en el país, así como otros funcionarios que se encuentren en la República por razones de representación oficial de sus Gobiernos, no adquirirán derechos de residencia por mera razón de tiempo. Si al cesar su representación desean seguir radicando en la República deberán llenar los requisitos ordinarios, quedando facultada la Secretaría de Gobernación para dar a dichos extranjeros, por razones de reciprocidad, las facilidades que en los países extranjeros correspondientes se otorguen en esta materia a los que hubieren sido representantes mexicanos.

Art. 58. Ningún extranjero podrá tener dos calidades o características migratorias simultáneamente.

Art. 59. No se cambiará la calidad ni característica migratoria en el caso comprendido en la fracción II, del artículo 42. En los demás queda a juicio de la Secretaría

de Gobernación hacerlo cuando se llenen los requisitos que esta Ley fija para la nueva calidad o característica migratoria que se pretende adquirir.

Art. 60. Para que un extranjero pueda ejercer otras actividades, además de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, requiere permiso de la Secretaría de Gobernación.

Art. 61. Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros, están obligados a informar a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días, sobre cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que éstos se encuentren sujetos. Además, quedarán obligadas a sufragar los gastos que origine la expulsión del extranjero cuando la Secretaría de Gobernación la ordene.

Art. 62. Para internarse en la República los extranjeros deberán cumplir los requisitos siguientes:

- I. Presentar certificado oficial de buena salud física y mental, expedido por las autoridades del país de donde procedan, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación;
- II. Ser aprobados en el examen que efectúen las autoridades sanitarias;
- III. Proporcionar a las autoridades de Migración, bajo protesta de decir verdad, los informes que les sean solicitados;
- IV. Identificarse por medio de documentos idóneos y auténticos y, en su caso, acreditar su calidad migratoria;
- V. Presentar certificado oficial de sus antecedentes, expedido por la autoridad del lugar donde hayan residido habitualmente, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación; y
- VI. Llenar los requisitos que se señalen en sus permisos de internación.

Art. 63. Los extranjeros que se internen al país en calidad de Inmigrantes y los No Inmigrantes a que se refieren las fracciones III, por lo que respecta a científicos, IV, V, VI y VII, del artículo 42 de esta Ley, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación.

Art. 64. Los extranjeros, cuando sean requeridos por la Secretaría de Gobernación, deberán comprobar su legal internación y permanencia en el país; y cumplirán los demás requisitos que señalen esta Ley y sus Reglamentos.

Art. 65. Los extranjeros registrados, están obligados a informar al Registro Nacional de Extranjeros, de sus cambios de calidad o características migratorias, nacionalidad, estado civil, domicilio y actividades a que se dediquen, dentro de los treinta días posteriores al cambio.

Art. 66. Los extranjeros independientemente de su calidad migratoria, por sí o mediante apoderado podrán, sin que para ello requieran permiso de la Secretaría de Gobernación, adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con

las restricciones señaladas en el artículo 27 Constitucional, en la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y demás leyes aplicables.

El extranjero transmigrante, por su propia característica migratoria, en ningún caso estará facultado para adquirir los bienes a que se refiere este mismo precepto legal.

Art. 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corretores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.

Art. 68. Los jueces u oficiales del Registro Civil no celebrarán ningún acto en que intervenga algún extranjero, sin la comprobación previa, por parte de éste, de su legal estancia en el país, excepto los registros de nacimiento en tiempo, y de defunción, en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley. Tratándose de matrimonios de extranjeros con mexicanos, deberán exigir además la autorización de la Secretaría de Gobernación.

En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darle aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado.

Los matrimonios y divorcios entre mexicanos y extranjeros se inscribirán en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a su realización.

Art. 69. Ninguna autoridad judicial o administrativa dará trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros, si no se acompañan la certificación que expida la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permiten realizar tal acto.

Art. 70. En un plazo no mayor de treinta días hábiles, la autoridad migratoria, a solicitud de los interesados, expedirá certificados que acrediten que la estancia de los extranjeros está apegada a esta Ley.

Art. 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así como a aquellos que deban ser expulsados.

Art. 72. Las autoridades judiciales del país están obligadas a poner en conocimiento de la Secretaría de Gobernación la filiación de los extranjeros que se encuentran sujetos a proceso, en el momento de abrirse éste, indicando además el delito de que sean presuntos responsables y la sentencia que se dicte.

Los jueces u oficiales del Registro Civil y los jueces en materia civil o de lo familiar, comunicarán a la Secretaría de Gobernación los cambios de estado civil de los

extranjeros dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que quede firme el acto, sentencia o resolución de que se trate.

Art. 73. Las autoridades que por Ley tengan a su mando fuerzas públicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las autoridades de migración cuando éstas lo soliciten, para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley.

Art. 74. Nadie deberá dar ocupación a extranjeros que no comprueben previamente su legal estancia en el país y sin haber obtenido la autorización específica para prestar ese determinado servicio.

Art. 75. Cuando una empresa, un extranjero o los representantes legales de éstos no cumplan con los requisitos que fije la Secretaría de Gobernación en el plazo que la misma determine en cualquier trámite migratorio, se les tendrá por desistidos de la gestión.

Capítulo IV

Emigración

Art. 76. Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación corresponde:

- I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictar medidas para regularla; y
- II. Dictar medidas de colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos.

Art. 77. Son emigrantes los mexicanos y los extranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero.

Art. 78. Las personas que pretendan emigrar del país, están obligadas a satisfacer, además de los requisitos generales de migración los siguientes:

- I. Identificarse y presentar a la autoridad de Migración correspondiente, las informaciones personales o para fines estadísticos que les requieran;
- II. Ser mayores de edad, o si no lo son o están sujetos a interdicción, ir acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela en su caso, o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por autoridad competente;
- III. La comprobación, si se trata de mexicanos, de que pueden cumplir todos los requisitos que para entrar al país a donde se dirijan exijan las leyes del mismo, según el carácter con que pretendan hacerlo;
- IV. Solicitar de la oficina respectiva la documentación correspondiente y presentarla a las autoridades migratorias del lugar por donde se pretenda salir y no estar sujeto a proceso o ser prófugo de la justicia, ni estar arraigado por cualquier causa de virtud de resolución judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 109 de esta Ley;
- V. Los que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia.

Art. 79. Cuando se trate de trabajadores mexicanos, será necesario que comprueben ir contratados por temporalidades obligatorias para el patrón o contratista y con salarios suficientes para satisfacer sus necesidades.

El personal de Migración exigirá las condiciones de trabajo por escrito, aprobadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebraron y visadas por el Cónsul del país donde deban prestarse los servicios.

Art. 80. El traslado en forma colectiva de los trabajadores mexicanos, deberá ser vigilado por personal de la Secretaría de Gobernación, a efecto de hacer cumplir las leyes y reglamentos respectivos.

Capítulo V

Repatriación

Art. 81. Se consideran como repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir por lo menos dos años en el extranjero.

Art. 82. La Secretaría de Gobernación estimulará la repatriación de los mexicanos, y promoverá su radicación en los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus conocimientos y capacidad.

La misma categoría podrá ser otorgada por la Secretaría de Gobernación a los nacionales que por virtud de situaciones excepcionales, requieran el auxilio de las autoridades de dicha Dependencia, para ser reintegrados al país.

Art. 83. La Secretaría de Gobernación cooperará con la Secretaría de la Reforma Agraria y con los demás organismos federales, locales y municipales que correspondan, para distribuir en los centros de población existentes y en los que se creen, a los contingentes de repatriados que en forma colectiva se internen al país.

Art. 84. La Secretaría de Gobernación propondrá a las dependencias oficiales y empresas particulares las medidas que estime pertinentes a fin de que proporcione a los repatriados el mayor número de facilidades para el buen éxito de las labores a que se dediquen.

Capítulo VI

REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN

Art. 85. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Art. 86. El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.

Art. 87. En el Registro Nacional de Población se inscribirá:

- I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro de Menores de Edad; y

II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

Art. 88. El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en los términos establecidos por esta Ley y su Reglamento.

Art. 89. El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.

Art. 90. El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación.

Art. 91. Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población, se le asignará una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población. Ésta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.

Art. 92. La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo, coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la administración pública federal.

Art. 93. Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con ellas, convenios con los siguientes propósitos:

- I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;
- II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro Nacional de Población, y
- III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Única de Registro de Población al registrar el nacimiento de personas.

Art. 94. Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población.

Art. 95. Las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría de Gobernación sobre las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que impliquen modificar los datos del registro de la persona.

Art. 96. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de Población, en los términos establecidos por el Reglamento.

Capítulo VII

Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana

Art. 97. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación.

Art. 98. Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.

El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité Técnico Consultivo, en los términos que establezca el Reglamento.

Art. 99. Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:

- I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y
- II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.

Art. 100. En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos personales del interesado, conforme lo disponga el Reglamento de esta Ley.

Art. 101. La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación personal.

Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la Secretaría de Gobernación.

Art. 102. Cuando la Secretaría de Gobernación encuentre alguna irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no procede su trámite.

Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la Secretaría de Gobernación la aclaración respectiva, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.

Art. 103. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva Cédula de Identidad Ciudadana.

Art. 104. La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

Art. 105. La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Art. 106. Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la Cédula de Identidad Ciudadana.

Art. 107. La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los siguientes datos y elementos de identificación:

- I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s);
- II. Clave Única de Registro de Población;
- III. Fotografía del titular;
- IV. Lugar de nacimiento;
- V. Fecha de nacimiento; y
- VI. Firma y huella dactilar.

Art. 108. Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su custodia y conservación.

Art. 109. La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse:

- I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años;
- II. Cuando esté deteriorada por su uso; y
- III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.

Art. 110. Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de Identidad Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación dentro de los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.

Art. 111. La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos por el Reglamento de esta Ley.

Art. 112. La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos previstos por la Ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.

Capítulo VIII

Sanciones

Art. 113. Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en caso grave, cuando:

El artículo segundo del decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de julio de 1990, dispone lo siguiente:

“Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el capítulo VII de la Ley General de Población, los importes establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se cometa el delito o la infracción, a razón de un día por cada diez pesos, a excepción hecha de las sanciones previstas en el artículo 118, que serán las que han quedado señaladas en el presente Decreto.”

- I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;
- II. Dolosamente o por grave negligencia entorpezcan el trámite normal de los asuntos migratorios;
- III. Por sí o por intermediarios intervengan en la gestión de los asuntos a que se refiere esta Ley o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones y trámites migratorios a los interesados;
- IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez expedida; y
- V. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas documentación migratoria, sin autorización de la Secretaría de Gobernación.

Art. 114. Las autoridades federales, estatales o municipales que incurran en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que no constituyan delitos, serán sancionados con multas hasta de cinco mil pesos y destitución en caso de reincidencia.

Art. 115. El que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo violar las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya delito, será castigado con multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, o bien arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa.

Art. 116. Al que en materia migratoria presente o suscriba cualquier documento o promoción con firma falsa o distinta a la que usualmente utiliza, se le impondrá multa hasta de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, o bien arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa, sin perjuicio de las penas en que incurra cuando ello constituya un delito.

Art. 117. Se impondrá multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que no haya cumplido la orden de la Secretaría de Gobernación para salir del territorio nacional dentro del plazo que para el efecto se le fijó, por haber sido cancelada su calidad migratoria.

Art. 118. Se impondrá pena hasta de diez años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación.

Art. 119. Se impondrá pena hasta de seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que habiendo obtenido legalmente autorización para internarse al país, por incumplimiento o violación de las disposiciones administrativas o legales a que se condicionó su estancia, se encuentre ilegalmente en el mismo.

Art. 120. Se impondrá multa hasta de tres mil pesos y pena hasta de dieciocho meses de prisión, al extranjero que realice actividades para las cuáles no esté autorizado conforme a esta Ley o al permiso de internación que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 121. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa hasta de diez mil pesos, al extranjero que, por la realización de actividades ilícitas o deshonestas, viola los supuestos a que está condicionada su estancia en el país.

Art. 122. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta de la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado.

Art. 123. Se impondrá pena hasta de dos años de prisión y multa de trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país.

Art. 124. Al extranjero que para entrar al país o que ya internado, proporcione a las autoridades datos falsos con relación a su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 125. Al extranjero que incurra en las hipótesis previstas en los arts.

115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127 y 138 de esta Ley, se le cancelará la calidad migratoria y será expulsado del país sin perjuicio de que se le apliquen las penas establecidas en dichos preceptos.

Art. 126. En los casos en que se atente en contra de la soberanía o la seguridad nacional, la expulsión será definitiva. En todos los demás casos la Secretaría de Gobernación señalará el período durante el cual el extranjero no deberá reingresar al país. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso del Secretario de Gobernación o del Subsecretario respectivo.

Art. 127. Se impondrá pena hasta de cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al mexicano que contraiga matrimonio con extranjero sólo con el objeto de que éste pueda radicar en el país, acogándose a los beneficios que la Ley establece para estos casos. Igual sanción se aplicará al extranjero contrayente.

Art. 128. Son de orden público, para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para el asegu-

miento de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, cuando tengan por objeto su expulsión del país.

Art. 129. Los arraigos de extranjeros decretados por las autoridades judiciales o administrativas, no impedirán que se ejecuten las órdenes de expulsión que la Secretaría de Gobernación dicte contra los mismos.

Art. 130. Se impondrá multa hasta de tres mil pesos a las empresas de transportes marítimos, cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que las autoridades migratorias den el permiso correspondiente.

Art. 131. El desembarco de personas de transportes procedentes del extranjero, efectuado en sitios y horas que no sean los señalados, se castigará con multa hasta de diez mil pesos, que se impondrá a las personas responsables, a la empresa correspondiente, a sus representantes o a sus consignatarios, salvo casos de fuerza mayor.

Art. 132. Las empresas navieras o aéreas que transporten al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa hasta de cinco mil pesos sin perjuicio de que el extranjero de que se trate, sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia.

Art. 133. Cuando los capitanes de los transportes marítimos, o quienes hagan sus veces, desobedezcan una orden de conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados, ellos, la empresa propietaria, sus representantes o sus consignatarios, serán castigados con multa hasta de cinco mil pesos. A las empresas aeronáuticas se les impondrá la misma multa. En ambos casos se levantará un acta en la que se harán constar todas las circunstancias del caso.

Art. 134. Se impondrá multa hasta de mil pesos, al que sin el permiso de la autoridad migratoria, autorice u ordene la partida de un transporte que haya de salir del Territorio Nacional.

Art. 135. Al extranjero que no cumpla con la obligación señalada por el artículo 26 de esta Ley, se le impondrá multa hasta de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, o bien arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa.

Art. 136. La infracción al artículo 28 de esta Ley, será castigada con multa hasta de cinco mil pesos y, en caso de reincidencia, se dará a conocer a los Cónsules Mexicanos el nombre y la matrícula del barco infractor, a efecto de que no se le extiendan nuevos despachos para puertos mexicanos.

Art. 137. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin permiso de las autoridades migratorias, será castigada con multa hasta de quinientos pesos o arresto hasta por tres días.

La misma sanción se impondrá a la persona que autorice sin facultades para ello, la visita a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 138. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de

tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.

Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor público.

Art. 139. Al funcionario judicial o administrativo que dé trámite al divorcio o nulidad de matrimonio de los extranjeros sin que se acompañe la certificación expedida por la Secretaría de Gobernación de su legal residencia en el país y de que sus condiciones y calidad migratoria les permite realizar tal acto, o con aplicación de otras Leyes distintas de las señaladas en el artículo 50 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, se le impondrá la destitución de empleo y prisión hasta de seis meses o multa hasta de diez mil pesos o ambas, a juicio del juez, quedando desde luego separado de sus funciones al dictarse el auto de sujeción a proceso.

Art. 139. bis. Al que reciba en custodia a un extranjero, en los términos del artículo 153, y permita que se sustraiga del control de la autoridad migratoria se le sancionará con multa hasta de un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, sin perjuicio de las penas en que incurra cuando ello constituya un delito.

Art. 140. Toda infracción administrativa a la presente Ley o a sus reglamentos en materia migratoria, fuera de los casos previstos en este capítulo, se sancionará con multa hasta de un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumir la conducta, según la gravedad de las violaciones cometidas a juicio de la Secretaría de Gobernación, o bien con arresto hasta de treinta y seis horas si no pagare la multa.

Art. 141. Las sanciones administrativas a que esta Ley se refiere, se impondrán por las unidades administrativas que se señalan en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Art. 142. (Derogado).

Art. 143. El ejercicio de la acción penal por parte de Ministerio Público Federal, en los casos de delito a que esta Ley se refiere, estará sujeto a la querella que en cada caso formule la Secretaría de Gobernación

Art. 144. Los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracción a esta Ley, se destinarán a la formación de fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento del personal que realice las funciones de Servicios Migratorios.

Sólo ingresarán a los citados fondos el importe de las multas efectivamente pagadas y que hubieren quedado firmes, salvo que por Ley estén destinados a otros fines. La distribución de los fondos se hará en los términos que el Reglamento de esta Ley señale.

Capítulo IX

Del procedimiento migratorio

Art. 145. Los trámites de internación, estancia y salida de los extranjeros, así como de los permisos que se soliciten al Servicio de Migración, se registrarán por las disposiciones que a continuación se mencionan y, en forma supletoria, por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones y criterios que al efecto emita la Secretaría de Gobernación.

Art. 146. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las promociones y documentos que hayan presentado en el procedimiento administrativo migratorio y de las resoluciones que recaigan a éstos, las que le serán entregadas en un plazo no mayor de treinta días hábiles. La demás documentación es confidencial y únicamente se podrá expedir copia certificada si existe mandamiento judicial que así lo determine.

Art. 147. Los solicitantes que acrediten su interés jurídico en el trámite migratorio podrán comparecer en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, mediante poder notarial, carta poder ratificada ante fedatario público o, en su caso, mediante autorización en el propio escrito.

Art. 148. Las promociones ante la Secretaría de Gobernación serán suscritas por el interesado o representante legal y, en caso de que no sepa o no pueda firmar, se imprimirá la huella digital.

En su caso, deberán acompañarse las constancias relativas a los requisitos que señala esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables para el trámite respectivo.

Art. 149. La autoridad migratoria podrá allegarse los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.

Art. 150. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes y que la autoridad constate que no existe trámite pendiente u obligación que satisfacer, o bien impedimento legal alguno, dictará resolución sobre todas las cuestiones planteadas por el interesado y las que de oficio se deriven del mismo, debiendo fundar y motivar su determinación, sin que para ello se exija mayor formalidad.

La autoridad migratoria contará con un plazo de hasta noventa días naturales para dictar la resolución correspondiente, contados a partir de la fecha en que el solicitante cumpla todos los requisitos formales exigidos por esta Ley, su Reglamento

y demás disposiciones administrativas aplicables; transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en sentido negativo. Si el particular lo solicitare, la autoridad emitirá constancia de tal hecho.

Capítulo X

Del procedimiento de verificación y vigilancia

Art. 151. Fuera de los puntos fijos de revisión establecidos conforme a las disposiciones de esta Ley, la Secretaría de Gobernación, a través del personal de los servicios de migración y de la Policía Federal Preventiva, podrá llevar a cabo las siguientes diligencias:

- I. Visitas de verificación;
- II. Comparecencia del extranjero ante la autoridad migratoria;
- III. Recepción y desahogo de denuncias y testimonios;
- IV. Solicitud de informes;
- V. Revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos, y
- VI. Obtención de los demás elementos de convicción necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas procedentes.

Art. 152. Si con motivo de la verificación se desprende alguna infracción a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite la expulsión del extranjero, el personal autorizado podrá llevar a cabo su aseguramiento.

Art. 153. La Secretaría de Gobernación, considerando las circunstancias especiales que concurran en cada caso, podrá entregar al extranjero asegurado, en custodia provisional, a persona o institución de reconocida solvencia.

El extranjero entregado en custodia estará obligado a otorgar una garantía, comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera y firmar en el libro de control de extranjeros.

Art. 154. La Secretaría de Gobernación, al requerir la comparecencia del extranjero a que se refiere la fracción II del artículo 151 de esta Ley, deberá cumplir con las siguientes formalidades:

- I. Al citarlo, lo hará por escrito con acuse de recibo, haciéndole saber el motivo de la comparecencia; el lugar, hora, día, mes y año en que tendrá verificativo; en su caso, los hechos que se le imputen y su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, y
- II. Apercibirlo que de no concurrir a dicha comparecencia, salvo causa plenamente justificada, se tendrán presuntivamente por ciertos los hechos que se le imputen y se le aplicarán las sanciones previstas por la Ley.

Art. 155. De la comparecencia aludida en el artículo anterior, se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos presentados por el compareciente, en caso de no hacerlo, la Secretaría de Gobernación los nombrará. En el acta se hará constar:

- I. Lugar, hora, día, mes y año en la que se inicie y concluya la diligencia;
- II. Nombre y domicilio del compareciente;
- III. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
- IV. Relación sucinta de los hechos y circunstancias ocurridas durante la diligencia, dejando asentado el dicho del compareciente, y
- V. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. Si se negara a firmar el compareciente, ello no afectará la validez del acta, dejándose constancia de este hecho en la misma.

Art. 156. El oficio en el que se disponga la revisión a la que alude la fracción V del artículo 151, deberá señalar, como mínimo:

- I. Responsable de la revisión y personal asignado a la misma;
- II. Duración de la revisión, y
- III. Zona geográfica y lugar en la que se efectuará la revisión.

El responsable de la revisión rendirá un informe diario de actividades a su superior jerárquico.

Art. 157. Una vez cubiertos los requisitos previstos en este capítulo, la Secretaría de Gobernación resolverá lo conducente en un máximo de quince días hábiles, debiendo notificarlo al interesado, personalmente, a través de su representante legal, o por correo certificado con acuse de recibo.

TRANSITORIOS

Art. 1. Se abroga la Ley General de Población de veintitrés de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y sus reformas de veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, derogándose todas las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Art. 2. Esta Ley entrará en vigor a los treinta días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Art. 3. Entretanto se expide el Reglamento de la presente Ley, continuarán vigentes los artículos del Reglamento de la Ley General de Población de veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y dos, publicado en el Diario Oficial de tres de mayo de mil novecientos sesenta y dos y fe de erratas de ocho del mismo mes, en lo que no se opongan a esta Ley.

Art. 4. La Secretaría de Gobernación señalará la fecha en que habrá de iniciarse el registro de la población mexicana.

México, Distrito Federal, a 11 de diciembre de 1973. Rafael Hernández Ochoa, D.P. Vicente Juárez Carro, S.P. José Luis Escobar Herrera, D.S. Félix Vallejo Martínez, S.S. Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres. Luis Echeverría Álvarez. Rúbrica. El Secretario de Gober-

nación, Mario Moya Palencia. Rúbrica. El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa. Rúbrica. El Secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz. Rúbrica. El Secretario de la Marina, Luis M. Bravo Carrera. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José López Portillo. Rúbrica. El Secretario del Patrimonio Nacional, Horacio Flores de la Peña. Rúbrica. El Secretario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo. Rúbrica. El Secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre. Rúbrica. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro. Rúbrica. El Secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Bracamontes. Rúbrica. El Secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Roviroza Wade. Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja. Rúbrica. El Secretario de Salubridad y Asistencia, Jorge Jiménez Cantú. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo. Rúbrica. El Secretario de la Presidencia, Hugo Cervantes del Río. Rúbrica. El Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva. Rúbrica. El Jefe del Departamento de Turismo, Julio Hirschfeld Almada. Rúbrica. El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez. Rúbrica.

2.28. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

Capítulo primero

Disposiciones generales

Art. 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y tienen por objeto regular, de acuerdo con la Ley General de Población, la aplicación de la política nacional de población; la vinculación de ésta con la planeación del desarrollo nacional; la organización, atribuciones y funciones del Consejo Nacional de Población; la promoción de los principios de igualdad entre el hombre y la mujer; la coordinación con las entidades federativas y los municipios en las actividades en materia de población, la entrada y salida de personas al país; las actividades de los extranjeros durante su estancia en el territorio nacional, y la emigración y repatriación de los nacionales.

Art. 2. Corresponde a la Secretaría de Gobernación la aplicación de las disposiciones de la Ley General de Población y de este Reglamento. Son auxiliares de ella para los mismos fines, y en el marco de los instrumentos de coordinación y concertación previstos en la Ley de Planeación, en su caso:

- I. Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
- II. Los ejecutivos locales y sus respectivos consejos estatales de población o sus organismos equivalentes;
- III. Los ayuntamientos y sus respectivos consejos municipales de población o sus organismos equivalentes;
- IV. Las autoridades judiciales;
- V. Los notarios y corredores públicos, y
- VI. Las empresas, instituciones y organismos de los sectores público, social y privado en los casos y en la forma en que determine la Ley o este Reglamento.

Art. 3. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- I. Ley: la Ley General de Población;
- II. Reglamento: el Reglamento de la Ley General de Población;

- III. Secretaría: la Secretaría de Gobernación;
- IV. Consejo: el Consejo Nacional de Población;
- V. Instituto: el Instituto Nacional de Migración;
- VI. Secretario: el Secretario de Gobernación;
- VII. Subsecretario: el Subsecretario de Población y de Servicios Migratorios, y
- VIII. Comisionado: el Comisionado del Instituto Nacional de Migración.

Las citas de artículos y capítulos sin mención del ordenamiento al que pertenecen, corresponderán a los de este Reglamento.

Art. 4. La Secretaría queda facultada para dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias para la aplicación e interpretación de este Reglamento.

Capítulo segundo *Política de población*

Sección I. *Planeación demográfica*

Art. 5. La política nacional de población tiene por objeto incidir en el volumen, dinámica, estructura por edades y sexo y distribución de la población en el territorio nacional, a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y al logro de la participación justa y equitativa de hombres y mujeres en los beneficios del desarrollo económico y social.

El respeto a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los derechos humanos, a la equidad de género y a los valores culturales de la población mexicana, es el principio en el que se sustenta la política nacional de población y los programas en la materia, así como los programas migratorios y respecto de la mujer.

Art. 6. El Ejecutivo Federal, atendiendo a las necesidades del desarrollo nacional, formulará, por conducto del Consejo, los programas necesarios para aplicar la política de población; por conducto del Instituto, los relativos a migración de nacionales y extranjeros, y por conducto de la Comisión Nacional de la Mujer, los programas respecto de la mujer.

Art. 7. Para el debido cumplimiento de los fines de la política nacional de población, la Secretaría, según el caso, dictará, ejecutará o promoverá ante las otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de conformidad con las atribuciones y competencias de éstas y, en su caso, con la participación coordinada de las entidades federativas y de los municipios, las medidas que se requieran para desarrollar y cumplir los programas y acciones en materia de población, de migración y respecto de la mujer. Con este mismo propósito, la Secretaría celebrará bases de coordinación y convenios de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, acuerdos de coordinación con los ejecutivos locales y de concertación con los sectores social y privado.

Art. 8. Las dependencias incluirán en sus programas las actividades y los recursos necesarios para realizar los programas formulados en el seno del Consejo, del Instituto y de la Comisión Nacional de la Mujer. La Secretaría promoverá ante las entidades de la Administración Pública Federal su participación en los términos señalados anteriormente.

Art. 9. El Consejo, a través de sus programas, identificará y determinará las prioridades relacionadas con el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población, a efecto de atenderlas mediante las acciones correspondientes a los ámbitos de competencia de cada uno de sus miembros y de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuando sea necesario para el cabal cumplimiento de los fines de la política nacional de población y los establecidos en la Ley.

Para los efectos de lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento, el Consejo elaborará y proporcionará las previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales, así como las recomendaciones pertinentes que de ellos se deriven, para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal los incluyan en la formulación y ejecución de sus programas y acciones.

El Consejo promoverá, por conducto de los consejos de población u organismos equivalentes, que las entidades federativas y los municipios tomen en cuenta estas previsiones, consideraciones y criterios demográficos generales, dentro de sus planes estatales y municipales de desarrollo y en los programas respectivos.

Art. 10. El Consejo proporcionará los lineamientos para la elaboración de los programas de difusión, información y educación en población para contribuir a la formación de una cultura demográfica con miras al mejoramiento del bienestar individual y colectivo de los habitantes de la República. La Secretaría emitirá los lineamientos que promuevan la igualdad de la mujer, los cuales impulsarán su participación en todos los ámbitos de la vida social, cultural, política y económica en igualdad de condiciones con el varón. Asimismo, el Consejo, el Instituto y la Comisión Nacional de la Mujer determinarán y coordinarán estrategias, tareas y acciones que deban realizar sus miembros en las materias de su competencia.

Art. 11. Los recursos de toda índole que en materia de población provengan del extranjero, deberán ajustarse a los programas oficiales y a las prioridades e inversiones propuestas por el Consejo. El Instituto participará de igual manera en lo relativo a los recursos en materia de migración de nacionales y extranjeros. Los recursos en materia de promoción de la condición de la mujer, deberán ajustarse a los programas oficiales y a las prioridades e inversiones propuestas por la Comisión Nacional de la Mujer.

Art. 12. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y las dependencias competentes, incluirán en los cuestionarios de los censos y de las encuestas que realicen, así como en la generación de estadísticas continuas, los datos que en materia de población, migración y género solicite la Secretaría.

Sección II

Planificación familiar

Art. 13. Para efectos de este Reglamento, la planificación familiar, en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el ejercicio del derecho de toda persona a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos.

Art. 14. Los programas de planificación familiar son indicativos, por lo que deberán proporcionar información general e individualizada sobre sus objetivos, métodos y consecuencias, a efecto de que las personas estén en aptitud de ejercer con responsabilidad el derecho a determinar el número y espaciamiento de sus hijos. También se orientará sobre las causas de infertilidad y los medios para superarla.

En la información que se imparta no se identificará la planificación familiar con el control natal o cualesquiera otros sistemas que impliquen acciones apremiantes o coactivas para las personas que impidan el libre ejercicio del derecho a que se refiere el párrafo anterior.

Art. 15. Los servicios de planificación familiar deberán estar integrados y coordinados con los de salud, salud reproductiva, educación, seguridad social e información pública y otros destinados a lograr el bienestar de los individuos y de la familia, con un enfoque de género, y de conformidad con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

Art. 16. La información y los servicios de salud, educación y demás similares, que estén relacionados con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público.

Art. 17. Los programas de planificación familiar incorporarán el enfoque de género e informarán de manera clara y llana sobre fenómenos demográficos y de salud reproductiva, así como las vinculaciones de la familia con el proceso general de desarrollo, e instruirán sobre los medios permitidos por las leyes para regular la fecundidad.

La responsabilidad de las parejas e individuos en el ejercicio del derecho a planificar su familia, consiste en tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, vivos y futuros, y su solidaridad con los demás miembros de la comunidad, para dar lugar a un mayor bienestar individual y colectivo.

Art. 18. La educación e información sobre planificación familiar deberán dar a conocer los beneficios que genera decidir de manera libre y responsable sobre el número y espaciamiento de los hijos y la edad para concebirlos.

Asimismo, deberán incluir la orientación sobre los riesgos a la salud que causen infertilidad y las estrategias de prevención y control. El Consejo pondrá especial atención en proporcionar dicha información a los jóvenes y adolescentes.

Art. 19. Los servicios de información, salud, salud reproductiva y educación sobre planificación familiar a cargo de las instituciones públicas se realizarán a través

de programas permanentes. El Consejo establecerá los criterios y procedimientos de coordinación de las dependencias y entidades que tengan a su cargo esos servicios.

Art. 20. Los servicios de salud, salud reproductiva, educativos y de información sobre programas de planificación familiar, garantizarán a la persona la libre decisión sobre los métodos que para regular su fecundidad desee emplear.

Queda prohibido obligar a las personas a utilizar contra su voluntad métodos de regulación de la fecundidad. Cuando las personas opten por el empleo de algún método anticonceptivo permanente, las instituciones o dependencias que presten el servicio deberán responsabilizarse de que las y los usuarios reciban orientación adecuada para la adopción del método, así como de recabar su consentimiento a través de la firma o la impresión de la huella dactilar en los formatos institucionales correspondientes.

Art. 21. En los casos de personas sujetas a interdicción, que carezcan de representante legal, serán las autoridades de las instituciones y organismos de los sectores público, social y privado que las tengan a su cargo, las que resuelvan, previo el dictamen médico respectivo, sobre el ejercicio del derecho a que se refiere el tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cada caso se dará vista al Ministerio Público.

Art. 22. Las normas oficiales mexicanas de los servicios de planificación familiar, de salud y salud reproductiva, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y en lo conducente, por las leyes generales de Población y de Salud y con los acuerdos adoptados por el Consejo.

Art. 23. El Consejo proporcionará a los jueces u oficiales del Registro Civil, la información sobre planificación familiar, igualdad jurídica de la mujer y del varón, responsabilidades familiares compartidas y organización legal y desarrollo de la familia, para que se difunda entre los que intervengan en los actos del estado civil.

Sección III

Familia y grupos marginados

Art. 24. Los programas de población procurarán:

- I. Vincular a la familia con los objetivos nacionales de desarrollo;
- II. Fomentar el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre los integrantes de la familia;
- III. Reevaluar el papel de la mujer y del varón en el seno familiar;
- IV. Evitar toda forma de abuso, coerción, violencia o discriminación individual o colectiva, hacia las mujeres;
- V. Promover la igualdad de derechos y obligaciones para mujeres y hombres en el seno de la familia y la participación de sus integrantes en un marco de relaciones de corresponsabilidad, así como establecer medidas para impulsar la igualdad social y económica entre la mujer y el varón;
- VI. Fomentar la participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a planificación familiar;

- VII. Fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atención de los menores, ancianos y discapacitados, entre otros;
- VIII. Realizar y promover acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad responsable y refuercen el mejor desempeño de los padres en la formación de los hijos y en la transmisión de los valores familiares y cívicos;
- IX. Diseñar campañas y llevar a cabo acciones que sensibilicen a la población acerca de la violencia contra la mujer en todas sus formas, así como en cuanto a las repercusiones que este problema social ejerce sobre el desarrollo integral de la mujer y la familia, y que contribuyan a prevenir la violencia en el seno familiar y a fortalecer especialmente en los menores, adolescentes y jóvenes una cultura de respeto a los miembros de la familia y a la dignidad de la mujer, y
- X. Poner en marcha programas de información acerca de los derechos de las víctimas de violencia familiar y de los centros de servicio para la familia en materia de atención a las mismas, así como de aquellos dirigidos a rehabilitar agresores.

Art. 25. Los programas de población establecerán estrategias adecuadas a las características culturales, sociales, económicas y demográficas de los grupos indígenas vulnerables y de la población marginada, con el fin de impulsar sus condiciones de bienestar.

Sección IV

Mujer y equidad de género

Art. 26. En la formulación de la política, la elaboración de los instrumentos programáticos, la realización de las acciones y la promoción de iniciativas a favor de la mujer, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, observarán el principio de equidad de género.

Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por género, el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones de nuestra cultura tomando como base la diferencia sexual.

La equidad de género se traducirá en el establecimiento y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres; revaloración del papel de la mujer y del hombre en el seno familiar, así como la no discriminación individual y colectiva hacia la mujer.

Art. 27. Los programas del Ejecutivo Federal, en relación con la mujer, deberán considerar cuando menos las siguientes áreas:

- I. Educación;
- II. Cuidado de la salud;

- III. Combate a la pobreza;
- IV. Revaloración del trabajo remunerado y no remunerado;
- V. Mujer que vive en medios rurales;
- VI. Mujer indígena;
- VII. Fomento productivo;
- VIII. Mujer y familia;
- IX. Familia con hijo discapacitado;
- X. Derechos de la mujer;
- XI. Participación en la toma de decisiones, y
- XII. Combate a la violencia, abusos y prácticas discriminatorias hacia la mujer.

Art. 28. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones sectoriales, con base en lo dispuesto en el presente Reglamento y siguiendo los lineamientos que emita la Secretaría, y en cumplimiento de los convenios internacionales signados por el Gobierno Mexicano.

Art. 29. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal elaborarán y aplicarán un programa interno, a fin de promover la condición de equidad de las mujeres que laboren en cada una de ellas, tomando en cuenta para ese propósito las disposiciones de este Reglamento y los lineamientos que emita la Secretaría, así como la demás normatividad aplicable.

Art. 30. Los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal destinados a impulsar la condición de la mujer establecerán un conjunto de políticas, estrategias y acciones para garantizar la igualdad de oportunidades a la mujer, con independencia de su condición jurídica, socioeconómica, étnica, religiosa, física, política, y nivel educativo.

Sección V.

Distribución de la población

Art. 31. Los programas sobre distribución de la población establecerán las medidas necesarias para lograr una distribución más equilibrada de la población en el territorio nacional, con el fin de aprovechar óptimamente los recursos naturales del país, así como de procurar la preservación de los mismos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Para el logro de los fines establecidos en el párrafo anterior, el Consejo promoverá la coordinación de acciones entre las dependencias y entidades, conforme a su competencia y objeto, en materia de desarrollo regional y urbano, ecología y conservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Art. 32. De conformidad con las disposiciones legales aplicables, los programas de desarrollo regional y urbano deberán prever el impacto que generen sobre la distribución de la población, los cuales deberán ser congruentes con los lineamientos estable-

cidos por los programas en materia de población y con las previsiones, consideraciones y criterios demográficos determinados por el Consejo.

Art. 33. En el marco de las políticas de desarrollo nacional, el Consejo promoverá los programas y medidas que contribuyan a regular la migración interna, para lograr una mejor distribución demográfica, considerando las potencialidades y necesidades de la población que reside en las diversas comunidades y regiones del país, el acervo de recursos disponibles en cada región, y el potencial de desarrollo.

Capítulo Tercero

Consejo nacional de población

Art. 34. El Consejo tiene a su cargo la planeación demográfica nacional, y para el cumplimiento de sus fines contará con una Secretaría General y con una Comisión Consultiva de Enlace con Entidades Federativas.

Cada una de las dependencias y entidades que integran el Consejo, sin perjuicio de lo que disponga la demás normatividad aplicable, tendrá las siguientes funciones:

- I. Presentar propuestas para formular los programas en materia de población, identificando las metas y tareas que deban ser consideradas en los mismos;
- II. Incorporar, en los programas de su competencia, las previsiones, consideraciones y criterios demográficos establecidos en los programas de población;
- III. Aplicar y ejecutar las acciones, en el ámbito de su competencia, que establezcan los programas en materia de población, así como aquellas que el Consejo les encomiende;
- IV. Coordinar sus acciones con los demás integrantes del Consejo para el debido cumplimiento de los programas de población;
- V. Presentar informes al Consejo sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos en el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades antes señaladas, y
- VI. Las demás que establezca el presente Reglamento y otras disposiciones aplicables, así como aquellas que determine el Consejo.

Art. 35. El Consejo Nacional de Población tendrá las siguientes funciones:

- I. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas derivados de la planeación demográfica nacional;
- II. Establecer previsiones, consideraciones y criterios demográficos de orden general, para que sean incluidos en los programas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
- III. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e instituciones que participen en los programas de población;

- IV. Celebrar las bases y procedimientos de coordinación con el Ejecutivo de las entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios, para el desarrollo de los programas y acciones coordinadas en la materia;
- V. Promover que las entidades federativas formulen los respectivos programas de población en el marco de la política nacional de población, y
- VI. Las demás que señala la Ley, el presente Reglamento y las que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y funciones.

Art. 36. El Presidente del Consejo Nacional de Población tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Representar legalmente al Consejo;
- II. Proponer las comisiones internas de trabajo del Consejo;
- III. Convocar a la celebración de sesiones del Consejo;
- IV. Disponer lo necesario para que se cumplan los acuerdos tomados en el seno del Consejo;
- V. Requerir de la Secretaría General los informes que estime necesarios;
- VI. Hacerse representar por el Subsecretario cuando lo estime conveniente, y
- VII. Las demás que le confieran la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales.

Art. 37. El Consejo, por conducto de su Secretaría General, tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

- I. Proponer y ejecutar políticas, estrategias y medidas administrativas, operativas y financieras que apoyen la continuidad de los programas y proyectos institucionales para su modernización y desarrollo;
- II. Integrar las propuestas de los programas en materia de población;
- III. Analizar, evaluar, sistematizar y producir información sobre los fenómenos demográficos, así como elaborar proyecciones de población;
- IV. Coordinar los trabajos para la elaboración de los informes sobre los programas en materia de población y los que solicite el propio Consejo o su Presidente;
- V. Realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones en materia de población;
- VI. Elaborar y difundir programas de información, educación y comunicación en materia de población;
- VII. Asesorar y proporcionar asistencia, en materia de población, a toda clase de organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, locales o federales y promover los convenios y acuerdos que sean pertinentes;
- VIII. Coordinar las comisiones internas de trabajo, y
- IX. Las demás que le confieran la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales y reglamentarias, y las que le encomiende el Presidente del Consejo o el Consejo.

Art. 38. Las comisiones internas de trabajo que se designen estarán integradas por miembros permanentes del Consejo y los de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con el tema a tratar en la Comisión, teniendo como funciones:

- I. Instrumentar mecanismos de coordinación interinstitucional para la aplicación de la política nacional de población y el cumplimiento de los programas en la materia bajo las bases y procedimientos establecidos por el Consejo;
- II. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido cumplimiento de los programas en materia de población y de los acuerdos aprobados en el Consejo;
- III. Definir criterios, procedimientos e indicadores de seguimiento y evaluación sobre actividades y resultados de los programas en materia de población;
- IV. Presentar informes periódicos sobre sus actividades, avances y resultados de los programas en la materia, y
- V. Las demás que señale el Consejo o su Presidente.

Art. 39. La Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas tendrá las funciones siguientes:

- I. Identificar las necesidades de cada entidad federativa y de los municipios, y hacerlas del conocimiento del Consejo, para su consideración en la formulación y ejecución de los programas en la materia;
- II. Identificar los programas y acciones que puedan desarrollarse de manera coordinada con las entidades federativas y los consejos estatales de población o sus organismos equivalentes, en el ámbito de sus respectivas competencias;
- III. Coadyuvar con las labores del Consejo y de la Secretaría General del mismo;
- IV. Promover que en las previsiones, consideraciones y los criterios demográficos determinados por el Consejo se incorpore la diversidad y particularidad de cada entidad federativa y sus municipios;
- V. Presentar opiniones, sugerencias o recomendaciones al Consejo para el mejor cumplimiento de los programas en materia de población nacional y estatal;
- VI. Proponer al Consejo las acciones y mecanismos de coordinación para fortalecer la planeación demográfica;
- VII. Proponer a la Secretaría General la creación de grupos de trabajo para la atención de asuntos regionales específicos en materia de población;
- VIII. Promover el desarrollo técnico de los consejos estatales y municipales de población o sus organismos equivalentes;

IX. Proponer al Consejo y/o a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las medidas que estime convenientes para actualizar o mejorar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en los asuntos de población, y

X. Las demás que le confieran la Ley, este Reglamento y otras disposiciones legales, y las que le encomiende el Consejo.

Dicha Comisión estará presidida por el Secretario General del Consejo y se invitará a formar parte de la misma a los consejos estatales de población u organismos equivalentes representados por su Secretario Técnico o similar.

A las sesiones de la Comisión se podrá invitar a los consejos municipales de población u organismos equivalentes, para que asistan representados por su Secretario Técnico o similar, a una o varias sesiones, a fin de desahogar asuntos específicos de su competencia.

Las sesiones de la Comisión serán convocadas cuando menos una vez al año.

Art. 40. Las sesiones del Consejo serán presididas por el Secretario y en su ausencia por el Subsecretario.

El Consejo se reunirá, de manera ordinaria cuando menos una vez al año, y de manera extraordinaria, las veces que sea convocado por su Presidente.

Capítulo Cuarto

Registro nacional de población

Sección I

Disposiciones generales

Art. 41. Corresponde al Registro Nacional de Población la instrumentación, operación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley, este Reglamento y las demás que al respecto dicte la Secretaría en materia de registro de población.

Art. 42. El Registro Nacional de Población coordinará los métodos de identificación y registro de personas de la Administración Pública Federal y de las administraciones públicas estatales y municipales en los términos de los instrumentos que se celebren al respecto, con el propósito de constituir un sistema integrado de registro de población.

Art. 43. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que en virtud de sus atribuciones integren algún registro de personas, deberán adoptar el uso de la Clave Única de Registro de Población como elemento de aquél.

Art. 44. La Secretaría promoverá, ante los gobiernos de las entidades federativas, la celebración de acuerdos de coordinación para la adopción y uso de la Clave Única de Registro de Población en los registros de personas que competan a su ámbito.

Art. 45. Para que los mexicanos y mexicanas radicados en el extranjero que tengan inscrito su nacimiento en la oficina del Registro Civil de otro país puedan ser incorporados al Registro Nacional de Población, previamente deberán registrar su acta de nacimiento en el Registro Civil de la República Mexicana o de la sección

consular de la embajada o consulado mexicano que corresponda, para que le expidan el documento respectivo.

Art. 46. Los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero podrán solicitar su incorporación al Registro Nacional de Población en las secciones consulares de las embajadas o consulados del Gobierno Mexicano acreditados en el país donde residan, conforme al procedimiento que el Registro Nacional de Población establezca de común acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sección II.

Registro nacional de ciudadanos

Art. 47. El Registro Nacional de Ciudadanos se conforma con los datos de los mexicanos y mexicanas de dieciocho o más años, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes:

- a) Nombre completo;
- b) Sexo del ciudadano;
- c) Lugar y fecha de nacimiento;
- d) Lugar y fecha en que se llevó a cabo la inscripción de la persona al Registro Nacional de Ciudadanos;
- e) Nombre completo y nacionalidad del padre y la madre cuando se consignen en los documentos presentados;
- f) Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, o del certificado de nacionalidad, o de la carta de naturalización;
- g) Nacionalidad de origen cuando el ciudadano haya adquirido la nacionalidad por naturalización;
- h) Clave Única de Registro de Población, y
- i) Fotografía, huella digital y firma del ciudadano.

Art. 48. Los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años y que radiquen en territorio nacional, tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana, en el término de seis meses a partir de que hayan cumplido dicha edad; igual obligación tendrán los mexicanos y mexicanas por naturalización a partir de la obtención de su carta de naturalización.

Por lo que hace a los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero se estará a lo que acuerden el Registro Nacional de Población y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Art. 49. El Registro Nacional de Población determinará los datos y elementos que deberá contener la Cédula de Identidad Ciudadana, además de los señalados por el artículo 107 de la Ley.

Art. 50. La expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana será gratuita.

En los casos de renovación o reposición, se estará a lo que determine la Ley Federal de Derechos.

Art. 51. Cuando alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal requiera al ciudadano la exhibición de su Cédula de Identidad Ciudadana en los trámites de carácter personal que realice, éste deberá mostrarla sin que el hecho de no hacerlo implique sanción alguna.

Sección III.

Registro de menores de edad

Art. 52. El Registro de Menores de Edad se conforma con los datos de los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años que se recaben a través de los registros civiles, los cuales deberán ser, cuando menos, los siguientes:

- a) Nombre completo;
- b) Sexo del o la menor;
- c) Lugar y fecha de nacimiento;
- d) Lugar y fecha en donde se llevó a cabo el registro;
- e) Nombres, apellidos y nacionalidad del padre y la madre del menor;
- f) Datos de localización del acta de nacimiento en el Registro Civil, y
- g) Clave Única de Registro de Población.

Art. 53. Para efecto del documento de identificación para los mexicanos y mexicanas menores de dieciocho años, se expedirá la Cédula de Identidad Personal.

Art. 54. La Cédula de Identidad Personal deberá contener, cuando menos, los siguientes datos y elementos de identificación:

- a) Nombre completo;
- b) Sexo del o la menor;
- c) Lugar y fecha de nacimiento;
- d) Nombres completos del padre y la madre;
- e) Clave Única de Registro de Población;
- f) Fotografía del titular;
- g) Huella dactilar y de ser factible, firma del titular, y
- h) Lugar y fecha de expedición.

Art. 55. La Cédula de Identidad Personal podrá ser solicitada por los padres o tutores del menor. Cuando éste haya cumplido los catorce años podrá solicitarla personalmente.

Art. 56. El Registro Nacional de Población sólo podrá acreditar fehacientemente la identidad del o la menor una vez que se le haya expedido la Cédula de Identidad Personal.

Art. 57. La Cédula de Identidad Personal tendrá una vigencia de seis años, y podrá renovarse cuando a criterio de los padres o tutores los rasgos físicos del o la menor no correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.

Art. 58. Las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país, deberán darle plena validez a la Cédula de Identidad Personal como medio de identificación del o la menor.

Sección IV.
Del procedimiento

Art. 59. Para la inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años, así como los y las menores de edad que soliciten su Cédula de Identidad Personal, deberán presentar su solicitud en el formato que para el efecto expida el Registro Nacional de Población.

Art. 60. El Registro Nacional de Población, a fin de certificar plenamente la identidad de las personas, podrá exigir:

- I. Documentos que acrediten que la identidad de la persona es la misma a la que se refiere la copia certificada de su acta de nacimiento, los que podrán consistir en:
 - a) Cédula profesional;
 - b) Pasaporte;
 - c) Certificado o constancia de estudios;
 - d) Constancia de residencia emitida por la autoridad del lugar de residencia del interesado;
 - e) Cartilla del Servicio Militar Nacional, y
 - f) Credencial de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
- II. Testimonial de personas que hayan obtenido su Cédula de Identidad Ciudadana, la cual deberán exhibir al rendir su testimonio, y
- III. Testimonial de la autoridad tradicional indígena y de la autoridad municipal o de la delegación del lugar.

Los requisitos y documentos señalados no limitan la facultad del Registro Nacional de Población de solicitar al interesado cualquier otro medio de identificación. Los documentos a que se refiere la fracción I de este artículo deberán contener fotografía del interesado y al menos uno de ellos, haber sido expedido con una antigüedad mínima de un año al momento de la presentación de la solicitud.

Art. 61. Las solicitudes se presentarán en los formatos y con la documentación requerida, en caso contrario se desechará.

Art. 62. Al presentar su solicitud ante la oficina del Registro Nacional de Población para su inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos, el interesado o la interesada deberá estampar su firma y huellas dactilares, conforme a las técnicas que emita la Secretaría, así como manifestar su domicilio y presentar comprobante del mismo.

En el caso de los y las menores de edad, deberán, cuando menos, estampar sus huellas dactilares en la solicitud respectiva.

Art. 63. Las solicitudes deberán ser presentadas en las oficinas designadas para el efecto.

La Secretaría contará como mínimo con una oficina del Registro Nacional de Población en cada entidad federativa para recibir las solicitudes de inscripción; asimis-

mo, podrá auxiliarse de cualquier autoridad federal o local con la que se haya convenido al respecto.

Art. 64. El funcionamiento de las oficinas a que se refiere el artículo anterior deberá sujetarse a los lineamientos que para tal fin dicte el Registro Nacional de Población.

Art. 65. Cuando el Registro Nacional de Población cuente con la información certificada del Registro Civil, no será necesario que el interesado acompañe a su solicitud copia certificada de su acta de nacimiento.

Art. 66. Los mexicanos y mexicanas que hayan cumplido dieciocho años y que cuenten con su Cédula de Identidad Personal podrán presentar ante la oficina del Registro Nacional de Población la solicitud para su inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos acompañando dicha Cédula, sin que sea necesaria la copia certificada de su acta de nacimiento.

Art. 67. Cuando el interesado o la interesada no pueda entregar copia certificada del acta de nacimiento por no haber sido inscrito en el Registro Civil, el servidor público que haya recibido la solicitud de inscripción deberá orientarlo para que concurra ante la autoridad que corresponda para llevar a cabo su registro extemporáneo.

Art. 68. Si al dictaminar los documentos presentados por el interesado o la interesada, el Registro Nacional de Población encontrara alguna irregularidad o inconsistencia que afectara los datos esenciales consignados en el acta, en el certificado de nacionalidad o en la carta de naturalización, orientará a los interesados para que concurran ante la autoridad que corresponda y se lleve acabo la aclaración o rectificación del documento de que se trate, asentando en el formato de solicitud las causas por las cuales se rechazó la misma y archivará copia de ese formato.

Art. 69. Cuando la irregularidad recaiga en los demás documentos anexos a la solicitud, el Registro Nacional de Población lo notificará al interesado por escrito en un término no mayor de quince días hábiles, especificando en qué consiste la irregularidad y la forma de subsanarla.

Art. 70. El interesado o la interesada dispondrán de un término de treinta días hábiles a partir de la fecha en que recibió la notificación para hacer la aclaración respectiva de los documentos a que se refiere el artículo anterior.

Art. 71. Si en el término señalado el interesado o la interesada no se presenta ante la oficina del Registro Nacional de Población a realizar la aclaración correspondiente, deberán presentar una nueva solicitud para su inscripción en el Registro Nacional de Ciudadanos o para la expedición de su Cédula de Identidad Personal.

Art. 72. Una vez declarada la procedencia de la solicitud, el Registro Nacional de Población deberá notificar al interesado o la interesada en un término no mayor de treinta días, y lo o la citará a efecto de entregarle su Cédula de Identidad Ciudadana o su Cédula de Identidad Personal, según sea el caso.

Art. 73. Para los efectos de reposición o renovación de su Cédula de Identidad Ciudadana, o de su Cédula de Identidad Personal, el interesado o la interesada deberán

realizar el trámite correspondiente en las oficinas que al efecto determine el Registro Nacional de Población.

Art. 74. En los casos señalados por las fracciones II y III del artículo 109 de la Ley la renovación de la Cédula de Identidad Ciudadana se hará a criterio de su titular.

Art. 75. En caso de que el interesado o la interesada solicite la reposición de su Cédula de Identidad Ciudadana o de su Cédula de Identidad Personal, por la variación de alguno o algunos de los datos de su identidad, deberá anexar a su solicitud la certificación del Registro Civil en donde consten dichas modificaciones.

Art. 76. En caso de extravío de la Cédula de Identidad Ciudadana, el interesado o la interesada deberá dar aviso al Registro Nacional de Población dentro de los treinta días siguientes al hecho, y presentar el acta o comprobante de extravío levantado ante el Ministerio Público de la adscripción o de la autoridad administrativa competente, e iniciar el trámite para su reposición.

Art. 77. En el caso de extravío o destrucción de la Cédula de Identidad Personal, deberá darse aviso al Registro Nacional de Población dentro de los treinta días siguientes al hecho. El interesado o la interesada mayor de 14 años o los padres o tutores del menor podrán solicitar su reposición.

Sección V.

Catálogo de extranjeros residentes en la república mexicana

Art. 78. El Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana se organizará técnicamente conforme a las disposiciones generales internas que emita el Registro Nacional de Población para su instrumentación, operación y aplicación, de acuerdo con las necesidades que el servicio requiera.

Art. 79. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la Secretaría mensualmente y por escrito, los cambios de nacionalidad de los extranjeros y extranjeras radicados en la República Mexicana.

El Instituto informará mensualmente al Registro Nacional de Población sobre las altas y bajas del Registro Nacional de Extranjeros, así como de los cambios de domicilio, estado civil y actividades a que se dediquen los extranjeros y extranjeras radicados en el país.

Sección VI.

Actualización del registro nacional de población

Art. 80. El Registro Nacional de Población deberá mantener permanentemente actualizada su información e incorporar los avances tecnológicos disponibles para su mejor funcionamiento.

Art. 81. Las autoridades judiciales remitirán al Registro Nacional de Población la información de todas aquellas personas que estén sujetas a proceso por delito que merezca pena corporal, las resoluciones que emitan y afecten los derechos ciudadanos

y las que impliquen modificaciones a los datos del estado civil de las personas. De igual manera, lo harán en los casos de declaración de ausencia y de presunción de muerte.

Asimismo, deberán informar sobre los fallecimientos de que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones.

Dichas autoridades deberán remitir esta información tan pronto como se dicte la resolución respectiva o se tenga conocimiento del hecho.

Art. 82. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen la obligación de proporcionar al Registro Nacional de Población, cuando éste lo solicite, la información de las personas incorporadas en sus respectivos registros. La Secretaría deberá celebrar convenios con las administraciones públicas estatales y municipales, así como con instituciones privadas, para los efectos señalados en este artículo.

Para el caso de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, la Secretaría de Relaciones Exteriores proporcionará a la Secretaría, cuando ésta lo solicite, los listados de los individuos que hayan recibido la matrícula consular.

Sección VII

Información del registro nacional de población

Art. 83. La información contenida en el Registro Nacional de Población será confidencial, y sólo podrá proporcionarse mediante requerimiento expreso en los siguientes casos:

- I. Al Instituto Federal Electoral para que integre los instrumentos electorales, y
- II. A las dependencias y entidades públicas, respecto de los datos a que se refiere el artículo 107 de la Ley para el ejercicio de sus funciones.

Art. 84. El Registro Nacional de Población podrá generar y publicar información estadística, observando lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica.

Art. 85. El Registro Nacional de Población sólo podrá solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública los datos correspondientes a la identidad de las personas.

Sección VIII.

Comité técnico consultivo

Art. 86. El Comité Técnico Consultivo a que se refiere el artículo 98 de la Ley tiene como objetivo estudiar, analizar, asesorar y proponer opiniones técnicas sobre los programas y los métodos de identificación e inscripción del Registro Nacional de Ciudadanos.

Art. 87. El Comité estará integrado por un representante de la Secretaría, que será el Subsecretario, quien fungirá como Presidente del mismo; por un Secretario, que será el Director General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, y por representantes de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuyas

actividades se vinculen con el objeto de dicho Comité, de conformidad con las reglas que se establezcan para su funcionamiento interno, quienes deberán tener el nivel de Subsecretario o su equivalente.

El Presidente del Comité podrá invitar a participar en las sesiones a representantes de las entidades federativas y municipios, de las Cámaras de Diputados y Senadores y de otras organizaciones e instituciones, así como a distinguidos especialistas de la materia propia del Comité, quienes tendrán el carácter de invitados sin derecho a voto.

Art. 88. El Comité deberá celebrar cuando menos dos sesiones ordinarias al año, así como las extraordinarias a las que convoque el Presidente del mismo.

Capítulo Quinto

Migración

Sección I

Disposiciones generales

Art. 89. La Secretaría organizará y coordinará los servicios de población en materia migratoria.

Art. 90. Para la atención de los asuntos del orden migratorio, los servicios se dividirán en la forma siguiente:

- I. Interior, integrado por los servidores públicos del Instituto adscritos a oficinas centrales y a las delegaciones, puertos marítimos, fronterizos y aeropuertos con tránsito internacional, y
- II. Exterior, integrado por los servidores públicos del Gobierno Mexicano adscritos en el extranjero y facultados para ejercer funciones consulares.

Art. 91. Para la prestación de los servicios a que se refiere el artículo anterior, se atribuyen las siguientes facultades:

- I. Al Servicio Interior, que tendrá a su cargo:
 - A. El servicio central, al cual corresponde:
 - a) La regulación del flujo y la estancia migratoria de los extranjeros;
 - b) El establecimiento de los procedimientos operativos en materia migratoria;
 - c) La dirección, distribución y vigilancia del personal encargado del ejercicio de la función migratoria;
 - d) La imposición de las sanciones en los casos de violación a la Ley o al presente Reglamento;
 - e) El desahogo de las consultas formuladas;
 - f) El registro de extranjeros;
 - g) La compilación de la estadística de la materia, y
 - h) Las demás que fije la Secretaría.
 - B. Los servicios de delegaciones, puertos marítimos, fronterizos y aeropuertos con tránsito internacional, a los cuales corresponde:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley, este Reglamento y las que dicten las oficinas centrales del Instituto;

b) Verificar que la entrada y salida de personas al o del país se efectúe de acuerdo con los requisitos legales correspondientes;

c) Tramitar los asuntos en materia migratoria de acuerdo con las facultades delegadas expresamente por el Comisionado;

d) Expedir a los extranjeros y extranjeras la documentación migratoria de acuerdo con la normatividad aplicable y las disposiciones que emitan las oficinas centrales del Instituto;

e) Efectuar la inspección migratoria a los tripulantes y pasajeros de los transportes terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, ya sean nacionales o extranjeros que lleguen al país;

f) Llevar la estadística correspondiente, y

g) Cumplir los acuerdos y disposiciones que emanen del servicio central.

II. Al Servicio Exterior:

a) Aplicar, en auxilio de la autoridad migratoria, las disposiciones contenidas en la Ley, este Reglamento y las de orden administrativo dictadas por la Secretaría;

b) Expedir la documentación de los extranjeros y extranjeras que sean autorizados para internarse al país;

c) Auxiliar y apoyar a los migrantes mexicanos en el extranjero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 216, 217 y 218, y

d) Elaborar los informes estadísticos que se le requieran a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Art. 92. Para la atención de los servicios migratorios, se consideran auxiliares de la Secretaría:

I. A los servidores públicos del Gobierno Mexicano adscritos en el extranjero y facultados para ejercer funciones consulares, y

II. A los servidores públicos de la Secretaría de Salud, de las Aduanas y de las Capitanías de Puerto, si en el lugar no hubiere una autoridad de la Secretaría.

Los auxiliares del servicio tendrán la competencia y funciones que les asigne la Secretaría y las instrucciones respectivas se les enviarán por conducto de la dependencia a que pertenezcan.

Art. 93. Son obligaciones del personal que integra los servicios migratorios, ya sea en forma directa o auxiliar:

I. Cumplir con las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

II. Cumplir con las instrucciones y acuerdos de la Secretaría, los cuales serán transmitidos a través de la dependencia correspondiente;

III. Sugerir las medidas o disposiciones que tiendan al mejoramiento de los servicios o a la agilización y simplificación de los trámites migratorios;

IV. Cumplir con las disposiciones relativas a la estadística nacional;

- V. Proporcionar los informes o estados del movimiento migratorio en la forma y los términos que indique la Secretaría a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y
- VI. Auxiliar a las autoridades judiciales a requerimiento escrito de éstas en el cumplimiento de las órdenes de arraigo que dicten, salvo lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley.

Art. 94. La Secretaría podrá establecer o habilitar, en los lugares que considere adecuados, estaciones migratorias para la estancia provisional de los extranjeros y extranjeras carentes de algún requisito migratorio que no puedan satisfacer en el momento de la revisión de la documentación, o para alojar, como medida de aseguramiento, a los extranjeros y extranjeras que deban ser expulsados. En aquellos lugares en que la Secretaría no tenga establecidas estaciones migratorias, se considerarán habilitados locales de detención preventiva para el aseguramiento de los extranjeros que deban ser expulsados.

En ningún caso podrá habilitarse para este fin a los centros de reclusión para sentenciados.

Cuando las autoridades sanitarias determinen la internación de extranjeros o extranjeras en estaciones sanitarias, la Secretaría podrá establecer la vigilancia que juzgue adecuada, si los extranjeros de que se trate no tuvieren autorizada su internación al país.

Art. 95. La Secretaría queda facultada para establecer los formatos que se utilicen para acreditar las distintas calidades y características migratorias con que los extranjeros y extranjeras se internen y permanezcan en el país, así como los que se utilicen para la entrada y salida de mexicanos y mexicanas; dichos formatos serán de uso obligatorio según lo disponga su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Art. 96. Los menores de edad No Inmigrantes a que se refieren las fracciones V, VI y VII del artículo 42 de la Ley, Inmigrantes e Inmigrados, deberán renovar su documentación migratoria cada cinco años, contados a partir de la fecha de expedición del documento migratorio, en tanto no lleguen a la mayoría de edad. La solicitud de renovación será firmada por quien ejerza la patria potestad, o la persona autorizada bajo cuya vigilancia y cuidado vivan en el país.

Art. 97. Independientemente de la prioridad a que se refiere el artículo 16 de la Ley, las autoridades migratorias colaborarán con las demás autoridades, para el mejor y más fácil cumplimiento de sus respectivas funciones.

Art. 98. El requerimiento del auxilio de la fuerza pública por parte de los servicios de migración en los casos a que se refiere el artículo 73 de la Ley, podrá ser verbal cuando la urgencia del caso lo amerite, seguido de confirmación escrita.

Las autoridades deberán facilitar de inmediato la ayuda que se les solicite. Cuando se niegue este auxilio o no se cumplan las medidas de control y aseguramiento dictadas por los mismos servicios, éstos deberán comunicar inmediatamente los hechos a su superior jerárquico para que resuelva lo conducente.

Sección II.

Movimiento migratorio

Art. 99. Para los efectos de este capítulo se considera movimiento migratorio el tránsito internacional de extranjeros o nacionales, ya sea de entrada o de salida al o del país.

La Secretaría establecerá en los puntos que estime convenientes en el territorio nacional, especialmente en fronteras, puertos aéreos y marítimos, la vigilancia que sea necesaria, a través del personal del servicio migratorio y de la Policía Federal Preventiva.

Art. 100. Para establecer o suprimir un lugar destinado al tránsito internacional de personas de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley, se observará lo siguiente:

- I. La Secretaría solicitará la opinión de las Secretarías de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; de Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Social; Salud; de Turismo, y, en su caso, de Marina;
- II. El acuerdo que autorice o suprima el establecimiento de un lugar para el tránsito internacional de personas se dará a conocer por medio de publicaciones que haga la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación;
- III. En la apertura al tránsito internacional de un nuevo lugar, deberá considerarse el establecimiento de los servicios de migración, sanidad y aduanas, y, en su caso, los de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Marina, y
- IV. En los lugares no autorizados para el tránsito internacional, la Secretaría ejercerá la vigilancia que considere necesaria, a través del personal de servicios migratorios y de la Policía Federal Preventiva.

Art. 101. El cierre de puertos marítimos, aéreos y fronterizos y la prohibición del tránsito de nacionales y extranjeros, a que se refiere el artículo 12 de la Ley, podrá decretarse en cualquier tiempo y a partir del momento que determine la Secretaría. Si el cierre fuere por más de veinticuatro horas, la Secretaría dará a conocer su determinación al público por conducto del Diario Oficial de la Federación y por otros medios de difusión pertinentes.

Art. 102. Los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, expedidos por gobiernos extranjeros, para internarse al país en comisión oficial, deberán presentar la visa correspondiente, salvo que exista acuerdo de supresión de la misma. Para fines estadísticos, proporcionarán la información que se les solicite en la forma migratoria correspondiente.

Art. 103. A los mexicanos y mexicanas que se internen al país únicamente se les exigirá la comprobación de su nacionalidad, la que deberán acreditar con uno de los siguientes documentos:

- I. Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o

- II. Cédula de Identidad Ciudadana, o
- III. Copia certificada del acta de nacimiento, o
- IV. Certificado de matrícula consular, o
- V. Cualquier otro documento idóneo.

Cuando el interesado carezca de pruebas documentales bastará su declaración bajo protesta de decir verdad a fin de comprobar su nacionalidad.

En los casos en que se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de la declaración del interesado para acreditar su nacionalidad mexicana, la Oficina de Migración, después de completar la investigación respectiva, tomará las precauciones que considere necesarias para la identificación y en su caso, para la localización de la persona de quien se trate.

Los representantes diplomáticos y consulares o comisionados oficiales del Gobierno Mexicano sólo presentarán su pasaporte y llenarán los cuestionarios estadísticos correspondientes.

Los mexicanos y mexicanas pasarán examen médico cuando así se requiera y están obligados a proporcionar los informes estadísticos que se les pidan.

Art. 104. Los extranjeros y extranjeras que pretendan internarse al territorio nacional acreditarán su calidad migratoria con los documentos correspondientes y, en su caso, deberán llenar los requisitos que se fijan en sus permisos de internación y los que de acuerdo con la característica migratoria conferida conforme a la Ley deban ser previos a su admisión.

Art. 105. En los casos que determine la Secretaría, los extranjeros y extranjeras que pretendan salir de la República presentarán su documentación migratoria ante las autoridades migratorias del lugar de salida, quienes verificarán que se encuentre en vigor. En este caso, la propia autoridad registrará en la forma migratoria la fecha de salida, pero si ésta es definitiva, recogerá la documentación migratoria y la remitirá a las oficinas centrales para su cancelación.

En el caso de que un extranjero o extranjera pretenda salir del país sin documentación o con documentación falsa, con alteraciones, incompleta, o que no se encuentre en vigor, las autoridades de migración resolverán lo conducente una vez que se haya verificado que no existe impedimento legal para efectuar dicha salida. Tratándose de salidas definitivas, el servicio central podrá autorizar la salida de los extranjeros que carezcan de documentación migratoria o la tengan irregular.

En este caso, la documentación será recogida y se harán efectivas las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor el extranjero, por infracciones a la Ley o a este Reglamento. Se atenderán a este respecto las instrucciones y modalidades que dicte la Secretaría.

Art. 106. La autoridad migratoria podrá negar la entrada a los extranjeros y extranjeras, la permanencia, el regreso o el cambio de calidad o característica migratoria por cualesquiera de los siguientes motivos:

- I. Cuando no tengan documentación migratoria o tengan impedimento para ser admitidos;
- II. Cuando hayan infringido las leyes nacionales, observado mala conducta durante su estancia en el país, o tengan malos antecedentes en el extranjero;
- III. Cuando hayan infringido la Ley, este Reglamento u otras disposiciones administrativas aplicables en la materia, o no cumplan con los requisitos establecidos en las mismas;
- IV. Cuando hayan sido expulsados, y no haya fenecido el término impuesto por la Secretaría para poder reingresar o no hayan obtenido el acuerdo de readmisión;
- V. Cuando se hayan impuesto restricciones para reingresar al país;
- VI. Cuando contravengan lo previsto en el artículo 34 de la Ley;
- VII. Cuando se estime lesivo para los intereses económicos de los nacionales, y
- VIII. Cuando la autoridad sanitaria manifieste a la de migración que el extranjero o extranjera padece alguna enfermedad infectocontagiosa, que constituya un riesgo para la salud pública o que no se encuentre física o mentalmente sano, a juicio de la autoridad sanitaria.

Al extranjero o extranjera que se interne al país, conociendo que tiene impedimento legal para hacerlo, se le impondrán las sanciones que establece el artículo 125 de la Ley.

En cuanto a los extranjeros o extranjeras que pretendan internarse con documentación vencida o irregular, se estará a las instrucciones que dicte la Secretaría, salvo en los casos a que se refieren los artículos 173 y 178 de este Reglamento.

Art. 107. La Secretaría, podrá negar la permanencia o el regreso al país, así como el cambio de calidad o característica migratoria, a los extranjeros o extranjeras en los supuestos contenidos en las fracciones I, II y III del artículo 37 de la Ley.

Art. 108. Sólo por acuerdo del Secretario, del Subsecretario o del Comisionado, se autorizará la internación o el cambio de condición migratoria de un extranjero o extranjera que se encuentre comprendido en alguno de los casos establecidos en el artículo 37 de la Ley, o en los artículos 106, fracciones I, II, VI y VII, y 107 de este Reglamento.

Art. 109. Tienen impedimento para salir del país los mexicanos y los extranjeros en los siguientes casos:

- I. Quien tenga girado en su contra orden de presentación, de aprehensión o auto de formal prisión;
- II. Los que se encuentren sujetos a proceso penal, salvo el caso que tengan autorización del tribunal que conozca la causa;
- III. Los reos que estén gozando de libertad preparatoria o condicional, a menos que obtengan permiso de la autoridad judicial competente, y

- IV. Los que estén sujetos a arraigo judicial, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley.

En los casos en que sea decretado el levantamiento de un arraigo que hubiera sido notificado previamente a la Secretaría, la autoridad judicial que lo ordene deberá notificarlo a la misma en el término de tres días, para que las autoridades de migración tengan conocimiento de que ha desaparecido el impedimento.

Art. 110. Las solicitudes de internación, permanencia o cambio de calidad o característica migratoria deberán contener los datos y requisitos establecidos por la Secretaría, que correspondan a la condición migratoria que se pretenda obtener.

Art. 111. La Secretaría tendrá las más amplias facultades para requerir documentación relativa al trámite solicitado y exigir la comprobación de los datos y requisitos de la solicitud, para investigar la veracidad de los datos y documentos aportados, y si existe algún antecedente del extranjero o extranjera que impida su internación o permanencia en el país.

Art. 112. La Secretaría podrá modificar la calidad o la característica migratoria o bien las condiciones a que esté sujeta la estancia de un extranjero o extranjera en el país, previa audiencia al interesado, o a petición de éste, siempre que medien causas supervenientes que lo justifiquen.

Art. 113. La celebración de la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Deberá notificarse personalmente al interesado o a su representante, manifestando el motivo y fundamento del citatorio y fijando fecha para su celebración, la que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días hábiles, y
- II. De la fecha de notificación hasta el desahogo de la audiencia, el interesado o su representante podrán ofrecer pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga.

Art. 114. Cuando cesen, se dejen de satisfacer o de cumplir las condiciones a que está sujeta la estancia en el país de un extranjero o extranjera, éstos deberán comunicarlo a la Secretaría en el término de quince días, contados a partir del momento en que ocurra el hecho que lo origine. La Secretaría podrá, a su juicio, concederles un plazo para abandonar el país o para regularizarse. Igual obligación tendrán las personas de quienes dependa o a cuyo servicio se encuentre el extranjero.

Sección III

Transportes

Art. 115. Las empresas que presten servicio de transporte internacional tendrán las siguientes obligaciones:

- I. Se abstendrán de conducir a territorio nacional o de transportar desde éste, con destino a otro país, a extranjeros y extranjeras que carezcan de documentación migratoria o la tengan irregular;

- II. Cuidarán que los tripulantes extranjeros no permanezcan o transiten en territorio nacional sin la debida autorización de las autoridades migratorias;
- III. Serán responsables solidarios por la indebida o inexacta aplicación de la Ley y este Reglamento, por sus funcionarios y empleados;
- IV. Responderán de los gastos que se originen con motivo de la devolución de pasajeros que fueren rechazados por carecer de la documentación vigente que les corresponda. También responderán de los gastos y sanciones ocasionados por la situación ilegal de los extranjeros que formen parte de su tripulación, incluida su conducción por territorio nacional.

Los agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques de las empresas de transporte tendrán en lo conducente las mismas obligaciones y serán solidariamente responsables con las propias empresas;

- V. Facilitarán transporte a las autoridades migratorias, cuando así lo requiera el cumplimiento de sus funciones.

No se cubrirán los gastos de transporte a la empresa, cuando la prestación del servicio migratorio implique la necesidad de viajar, y

- VI. Otorgarán facilidades a las autoridades migratorias para la prestación del servicio.

Art. 116. Para la revisión de la documentación migratoria de personas a la llegada de transportes marítimos, se observará lo siguiente:

- I. Los agentes navieros generales y navieros consignatarios, de buques que hagan navegación de altura, deberán comunicar la llegada de las embarcaciones a su consignación, a la oficina de migración del puerto, especificando su procedencia, matrícula, número de pasajeros y tripulantes, y el tiempo aproximado de permanencia, con una anticipación de veinticuatro horas, salvo casos de fuerza mayor;
- II. El jefe de la oficina de migración, designará al personal que deba practicar la visita, así como el que hará el servicio de vigilancia en la embarcación mientras ésta permanezca en puerto;
- III. La revisión a la llegada de los transportes marítimos se hará a bordo de los mismos y sólo se autorizará el desembarco de pasajeros y tripulantes hasta que aquélla haya sido practicada;
- IV. En los casos en que las autoridades sanitarias no se presenten oportunamente a practicar la visita que les corresponde en las embarcaciones, las de migración están obligadas a aguardar la presencia de aquéllas; pero después de esperar un término razonable, pondrán el caso en conocimiento de la Secretaría por la vía más rápida, para que ésta requiera a la Secretaría de Salud a fin de que se practique dicha visita;
- V. El capitán de la embarcación, por sí o por conducto del agente naviero consignatario, está obligado a presentar a las autoridades migratorias, por

triplicado y con los datos necesarios para su identificación, una lista de los tripulantes y otra de los pasajeros cuando los haya, para que conforme a las mismas se haga la revisión correspondiente;

- VI. Las autoridades migratorias solicitarán la presencia de la tripulación a bordo de la embarcación, a fin de revisar su documentación, con excepción de los tripulantes que imprescindiblemente deban permanecer en sus puestos y a quienes la revisión será practicada con posterioridad;
- VII. La revisión de la documentación de pasajeros, deberá practicarse de manera individualizada haciéndose las anotaciones correspondientes;
- VIII. El resultado de la revisión se consignará en acta, en la que se harán constar todos los incidentes que hubieren ocurrido, haciendo especial referencia en los casos de extranjeros que llegaren sin documentación o la trajeren irregular o vencida, especificando la nacionalidad, calidad y característica migratorias de los pasajeros admitidos y de los rechazados. A la propia acta, que firmará el capitán o el agente naviero consignatario, se adjuntará un tanto de la lista de pasajeros y tripulantes;
- IX. Durante la revisión no se permitirá la entrada de personas a bordo de las embarcaciones, a excepción de los representantes de las autoridades que la practiquen, de los agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques y de sus empleados autorizados, de los representantes consulares del país a donde pertenezca la matrícula de la embarcación, y del personal que efectúe las maniobras de alijo y el movimiento de la correspondencia y el equipaje;
- X. El desembarco temporal o definitivo de pasajeros y tripulantes deberá realizarse con la documentación migratoria correspondiente, y
- XI. Cuando el servicio de sanidad rechace a algún extranjero, informará inmediatamente a las autoridades migratorias para los efectos de su vigilancia.

Art. 117. Los extranjeros y extranjeras que viajen en embarcaciones y arriben a puertos nacionales que no sean los de su destino, podrán bajar a tierra para visitar dichos puertos. La autoridad migratoria les recogerá sus documentos de identificación, debiendo los capitanes de las naves proveerlos de tarjetas que los acrediten como pasajeros. El jefe del servicio podrá concederles autorización para pernoctar en el puerto, atendiendo a las circunstancias del caso. Para trasladarse al interior de la República deberán documentarse conforme a las instrucciones que, en su caso, emita la Secretaría.

En el caso de que un extranjero o extranjera deba desembarcar y permanecer en el país a causa de un requerimiento judicial, o por razones de salud, la empresa marítima o los agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques quedan obligados a sufragar sus gastos de permanencia y de salida.

Art. 118. En la inspección de personas en la salida de embarcaciones, se observarán además de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley, las disposiciones siguientes:

- I. Los agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques o el capitán de la embarcación, deberán solicitar la revisión de salida con una anticipación no menor de doce horas, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados;
- II. La autoridad migratoria cotejará la lista proporcionada por el capitán, en la que consten los nombres de los pasajeros y tripulantes, cerciorándose de que se hayan satisfecho los requisitos de Ley para salir, así como de la presencia de los rechazados en su caso;
- III. Ningún capitán de embarcación podrá ordenar que ésta se haga a la mar sin antes haber recibido autorización de la autoridad migratoria, la cual debe autorizar la lista de pasajeros y tripulantes y realizar el despacho migratorio para la salida;
- IV. Si al efectuar la revisión de pasajeros y tripulantes extranjeros, faltara alguno que deba salir en la embarcación, se levantará un acta haciendo constar esta circunstancia. No se autorizará la salida de la embarcación mientras no se deposite por parte del agente naviero consignatorio o la empresa de transporte, ambos solidariamente responsables, el importe correspondiente a los gastos de repatriación de las personas de quienes se trate;
- V. Una vez que la autoridad migratoria haya autorizado la salida de la embarcación, se regresará al capitán la documentación recogida a su entrada, extendiendo y firmando el despacho migratorio en el documento en que se haya solicitado de la Capitanía del Puerto el permiso para salir, y
- VI. Ninguna empresa marítima, agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques o capitán de la embarcación, podrá autorizar que se reciban a bordo pasajeros que pretendan salir de puertos mexicanos rumbo al extranjero, sin contar con la documentación migratoria correspondiente.

Los capitanes o pilotos navales de las embarcaciones que hagan navegación de altura y arriben a puertos nacionales, están obligados por sí, o por conducto de sus agentes navieros consignatarios, a dar aviso en forma inmediata a la autoridad migratoria de toda deserción o ausencia que se registre en dichos puertos entre los tripulantes o pasajeros extranjeros, y la embarcación sólo podrá salir hasta que exhiba el depósito mencionado en la fracción IV de este artículo.

En el caso anterior, cuando se trate de tripulantes, éstos quedarán impedidos para internarse o visitar el país, y sólo podrán ser admitidos por acuerdo expreso del Secretario, del Subsecretario o del Comisionado.

Art. 119. Las embarcaciones nacionales que hagan navegación de altura serán siempre inspeccionadas y en cuanto a las de cabotaje, deberán serlo solamente en aquellas zonas del país en que, por circunstancias especiales, las autoridades migratorias lo consideren necesario.

La Secretaría girará las instrucciones correspondientes, con el fin de facilitar la revisión de la llegada o salida de pasajeros y tripulantes, en el tránsito de embarcaciones turísticas de cabotaje.

Para el caso del párrafo anterior y tratándose de embarcaciones de carácter privado, que no realicen transporte de pasajeros con fines comerciales o de lucro, la documentación de los tripulantes deberá quedar comprobada con el listado que el capitán de la embarcación presente a las autoridades migratorias en el momento de la revisión correspondiente.

Art. 120. Cuando la presencia en un puerto nacional de una embarcación en navegación de altura, sea por arribada forzosa o arribada imprevista, el personal del servicio de migración procederá a levantar el acta correspondiente, haciendo constar la causa que haya motivado el arribo y someterá el caso al dictamen de la Capitanía del Puerto. Las propias autoridades migratorias establecerán eventualmente las condiciones del desembarco, de acuerdo a lo establecido por la Ley y este Reglamento.

Art. 121. Los permisos para visitar las embarcaciones serán expedidos por los agentes navieros generales y navieros consignatarios de buques correspondientes y se presentarán para su autorización a las autoridades migratorias, las cuales podrán negarlos fundadamente.

Art. 122. Para la revisión del tránsito internacional de pasajeros de aeronaves, regirán las normas siguientes:

- I. El tránsito solamente se realizará en los aeropuertos destinados al servicio internacional;
- II. La Secretaría comisionará en cada aeropuerto autorizado al personal necesario para la prestación del servicio de migración, estableciendo áreas exclusivas de entrada y salida para la vigilancia del movimiento migratorio, debiéndose observar la siguiente regla:

Una vez que la aeronave aterrice y se detenga en el sitio que determinen las autoridades correspondientes, el personal del servicio de migración designado al efecto, deberá abordar la nave y requerir de su comandante o piloto la lista de pasajeros y tripulantes, y vigilar el traslado de pasajeros a las áreas asignadas para la revisión;

Cuando transporten pasajeros en tránsito inmediato, se les recogerá la documentación que posean para que les sea devuelta al hacer la conexión.

Estos pasajeros deberán continuar su viaje dentro de las veinticuatro horas siguientes a su arribo, bajo la responsabilidad de la empresa transportadora;

- III. Queda prohibido el acceso del público al local en donde se lleva a cabo la revisión migratoria, así como a las plataformas donde se estacionen las aeronaves del servicio internacional, mientras no se haya terminado el desembarque y la revisión. Los servidores públicos de todas las dependencias que participen en la actividad aeroportuaria prestarán su colaboración para dar cumplimiento a esta disposición. Se exceptúan de la prohibición

anterior a los empleados de las empresas cuya presencia sea indispensable para el despacho, y

- IV. Tratándose de aeronaves que a la vez hagan servicio local e internacional, tanto las autoridades migratorias como las empresas, tendrán obligación de ejercer un efectivo control migratorio sobre los pasajeros en el desembarque o en tránsito internacional y reportarán al servicio central cualquier irregularidad que ocurra.

Art. 123. La revisión de la documentación de personas a la salida de aeronaves de servicio internacional de pasajeros, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Se revisarán los documentos de los pasajeros en el orden de su llegada, cotejándose su nombre, nacionalidad y demás datos con los que aparezcan en las listas formuladas y entregadas por las empresas de aerotransportes a la autoridad migratoria;

Ninguna aeronave en viaje internacional podrá salir del aeropuerto sin haberse practicado la revisión migratoria correspondiente, y

- II. Cuando alguna aeronave que haya sido despachada cancele su salida por cualquier causa, la empresa transportadora presentará a la autoridad migratoria a todos los pasajeros para efectuar los trámites que correspondan.

Art. 124. La Secretaría podrá exigir a la empresa o línea aérea la presentación de listas de pasajeros y tripulantes en el momento de arribo del vuelo. Dichas listas deberán contener los datos que la Secretaría estime necesarios.

Art. 125. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo 123, las empresas de aerotransportes tendrán las siguientes:

- I. Transportar a los extranjeros expulsados por órdenes de la Secretaría;
- II. Cuidar que los tripulantes de nacionalidad extranjera de las aeronaves que prestan servicio internacional, obtengan y presenten, cuando sean requeridos para ello, su documentación migratoria, o en su caso, las identificaciones que los Tratados y Convenios Internacionales establecen;
- III. Aterrizar o acuatizar sus aeronaves en los puertos del país abiertos al tránsito aéreo internacional, salvo casos de fuerza mayor. Si fuere en lugar autorizado en que exista servicio migratorio, el comandante de la aeronave le dará aviso inmediato para la inspección y vigilancia de los pasajeros y tripulantes. Si no la hubiere, el aviso lo dará a las autoridades del lugar para que en auxilio de las migratorias lleven a cabo la misma inspección y vigilancia y, además, informen al servicio central para que determine lo que corresponda;
- IV. Hacerse cargo de los tripulantes de las aeronaves que permanezcan en territorio nacional y responder por su situación migratoria. Asimismo, tienen la obligación de transportarlos fuera del país, en el término que señale la Secretaría, cuando hayan dejado de pertenecer a la tripulación

correspondiente, por haber infringido las disposiciones migratorias o porque se hayan hecho acreedores a expulsión, y

- V. Conducir por su cuenta fuera del territorio nacional, a los extranjeros o extranjeras transportados por ellas que sean rechazados por las autoridades migratorias. Dicho transporte deberá efectuarse en aeronaves propias o de otra empresa y en el viaje próximo inmediato a la fecha en que les haya sido comunicado el acuerdo respectivo.

Art. 126. Los comandantes de aeropuertos deberán informar a las autoridades migratorias sobre la llegada y salida de toda aeronave, siempre que proceda del exterior o se dirija a otro país. No autorizarán la salida de naves con destino al extranjero, si sus comandantes o pilotos no les comprueban plenamente que la documentación migratoria de los pasajeros y la tripulación han sido debidamente revisados por las autoridades del servicio de migración; asimismo, en caso de cancelaciones de vuelos, éstas deberán ser notificadas inmediatamente a la autoridad migratoria.

Art. 127. Tratándose de transportes de carácter militar o naval que procedan o salgan al exterior, tanto nacionales como extranjeros, se cumplirán las medidas que dicte la Secretaría de acuerdo con las de la Defensa Nacional y de Marina, según el caso, para la revisión de la documentación migratoria de las personas que viajen a bordo de los mismos.

Art. 128. Cuando se compruebe la comisión de alguna infracción por la empresa de transportes o por la tripulación de embarcaciones o aeronaves de transporte público internacional, el hecho no impedirá que se autorice la salida de la aeronave o la embarcación; pero en todo caso se levantará el acta respectiva, se impondrá la sanción correspondiente y se informará a oficinas centrales. No será imputable a la autoridad migratoria la demora en la salida de la embarcación o aeronave producida por el levantamiento del acta en los casos a que se refiere este artículo.

En todo caso, deberá garantizarse legalmente el cumplimiento de la sanción económica correspondiente.

Art. 129. En el tránsito internacional de pasajeros por ferrocarril, la revisión migratoria podrá efectuarse a bordo del mismo y las empresas de ferrocarril deberán cooperar para que se lleve a cabo.

Art. 130. Las empresas de autotransporte que efectúen tránsito internacional de pasajeros tendrán las siguientes obligaciones:

- I. Detendrán los vehículos para la revisión de la documentación migratoria de los pasajeros, en los lugares destinados al efecto en las garitas internacionales y en los sitios que determine la autoridad migratoria;
- II. Cooperarán con las autoridades migratorias para que todos los pasajeros se sujeten a la revisión migratoria, y
- III. Si tuvieren tripulantes extranjeros, obtendrán para ellos, bajo la responsabilidad de las propias empresas, la documentación migratoria respectiva.

Art. 131. Se impedirá la internación al país de los polizones extranjeros que lleguen a bordo de una aeronave y permanecerán, en tanto sean repatriados, bajo custodia y responsabilidad de la empresa transportadora. Dichas personas quedarán sujetas a la vigilancia de la autoridad migratoria, para que se les regrese en el mismo medio de transporte que vinieron o, si ello no fuere posible, en otro por cuenta de la empresa que las condujo. A los que arriben en embarcación se les impedirá el desembarco y los que lleguen por otro medio de transporte, permanecerán asegurados en el lugar de arribo mientras son devueltos por la empresa responsable.

Las autoridades migratorias, tomarán las medidas necesarias para evitar la internación clandestina, ocultamiento o fuga de los polizones. Para este efecto, las empresas de transporte deberán proporcionar las facilidades necesarias para la actuación de las autoridades migratorias.

Art. 132. Las autoridades migratorias están facultadas para detener la salida del país de embarcaciones, aeronaves u otros medios de transporte, mientras no autoricen su despacho migratorio.

Capítulo Sexto

Instituto nacional de migración

Art. 133. El Instituto, en el ejercicio de sus funciones, procurará que los movimientos migratorios de nacionales y extranjeros favorezcan el desarrollo económico, social y cultural del país. En ello, se preservará la seguridad y soberanía del país, en pleno apego a la ley y con amplio respeto a los derechos de los migrantes.

Art. 134. El Instituto tendrá, entre otros, los objetivos siguientes:

- I. Alentar y promover los flujos humanos que benefician al país, con amplio sentido humanitario, y
- II. Ejercer las atribuciones de control y verificación migratoria en territorio nacional con apego a la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables, y con pleno respeto a los derechos humanos.

Art. 135. El Instituto proporcionará los lineamientos para la elaboración de los programas de difusión e información en materia de migración de nacionales y extranjeros.

Art. 136. El Instituto tendrá las funciones, facultades, atribuciones y la organización administrativa que el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones en la materia le señalen.

Art. 137. La Secretaría podrá crear grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y defensa de sus derechos humanos, así como de su integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados; dichos grupos se crearán en el marco de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren con los ejecutivos de las entidades federativas, considerando, en todo caso, la participación que corresponda a los municipios.

Art. 138. El Instituto coordinará la operación y funcionamiento de los grupos a que alude el artículo anterior, y en los mismos podrán participar, de manera conjunta, elementos de seguridad pública de los niveles federal, estatal y municipal.

Capítulo séptimo

Inmigración

Sección I.

Disposiciones comunes

Art. 139. Los extranjeros y extranjeras sólo podrán dedicarse a las actividades expresamente autorizadas por la Secretaría, y cuando así proceda o se estime necesario, se señalará en la autorización correspondiente el lugar de su residencia.

En los casos que lo requiera el interés público, la Secretaría por medio de disposiciones administrativas de carácter general, podrá establecer restricciones al lugar de residencia o tránsito de los extranjeros y extranjeras, o cualquier modalidad respecto de las actividades a que éstos se dediquen.

Art. 140. De conformidad con el artículo 60 de la Ley, para que un extranjero o extranjera pueda dedicarse a otras actividades además de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, deberá obtener el permiso correspondiente de la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos que la misma determine.

Art. 141. Para proporcionar trabajo a un extranjero o extranjera, los interesados deberán cerciorarse de que las condiciones de su calidad migratoria le permitan desarrollar las actividades de que se trate; en caso contrario, se abstendrán de contratar sus servicios. Dicha comprobación deberá hacerse por medio de la documentación migratoria en vigor. En caso de duda, deberán consultar con las autoridades migratorias.

Art. 142. Cuando el extranjero o extranjera no acredite los montos mínimos señalados en los artículos 163, fracciones I y III; 180 y 181 de este Reglamento, la Secretaría podrá, por excepción justificada, autorizar el otorgamiento de la característica migratoria correspondiente.

Art. 143. Para la obtención de la calidad migratoria de No Inmigrante o de Inmigrante, en los casos del artículo 39 de la Ley, se aplicarán las reglas siguientes:

- I. Al presentar la solicitud, el extranjero o extranjera demostrará el matrimonio con mexicano o mexicana o la paternidad de hijos nacidos en el país;
- II. En el caso de matrimonio con mexicano o mexicana, el extranjero o extranjera manifestará en su solicitud el lugar donde se establecerá el domicilio conyugal, y
- III. El extranjero o extranjera a que se refiere este artículo, al solicitar la prórroga o refrendo de su documentación migratoria, deberá demostrar que subsiste el vínculo señalado en la fracción I y las condiciones que le fueron señaladas en la autorización que le otorgó la Secretaría.

Art. 144. Al extranjero o extranjera que solicite su internación o permanencia en el país dentro de las calidades de No Inmigrante o Inmigrante en el caso de estar casado con mexicano o mexicana, de acuerdo con lo establecido por el artículo 39 de la Ley, la Secretaría podrá autorizarle que desarrolle libremente cualquier actividad siendo lícita y honesta, con la obligación por parte del extranjero de notificar a la misma la actividad que se encuentra desempeñando, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su iniciación.

Igualmente, tendrá obligación de notificar cualquier cambio de actividad dentro de los treinta días posteriores a que ocurra el mismo.

El extranjero o extranjera que haya sido autorizado de conformidad con lo señalado en este artículo, al solicitar la prórroga o refrendo de su documentación migratoria, únicamente deberá demostrar la subsistencia del vínculo matrimonial y manifestar las actividades que realiza.

Art. 145. Las empresas, instituciones o cualquier persona física o moral estarán obligadas a sufragar los gastos que origine, en su caso, la expulsión de extranjeros o extranjeras que se encuentren a su servicio o bajo su responsabilidad.

La autoridad migratoria integrará un padrón de personas físicas y morales que tengan bajo su responsabilidad o contraten personal extranjero, debiendo llevar un expediente básico para cada uno.

Dicho padrón contendrá, cuando menos, los siguientes elementos:

- I. Acta constitutiva de la empresa, en su caso;
- II. Última declaración de impuestos;
- III. Listado de personal que labora en la misma, señalando nombre y nacionalidad;
- IV. Listado de personas autorizadas para realizar trámites ante el Instituto, y
- V. Aquellos elementos inherentes a la actividad desarrollada.

Los requisitos previstos en las fracciones II y III se actualizarán periódicamente.

La periodicidad será determinada por el Instituto.

Art. 146. En los trámites migratorios relacionados con las personas de negocios e inversionistas, consejeros, técnicos, científicos, personas que ocupen cargo de confianza y profesionales, la autoridad migratoria deberá dictar resolución a las solicitudes realizadas por extranjeros o extranjeras en un plazo no mayor a treinta y cinco días naturales. Para dichos trámites, la Secretaría sólo podrá exigir que se proporcionen los datos y documentos que se precisen para cada caso en la Ley, el Reglamento, y en otras disposiciones de carácter administrativo que al efecto se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

La autoridad migratoria podrá exigir, en su caso, que los extranjeros y extranjeras comprueben la veracidad de la información de las solicitudes; para ello, la autoridad se sujetará a criterios y procedimientos establecidos por la Secretaría en disposiciones administrativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Sección II.

Actos y contratos

Art. 147. Los extranjeros y extranjeras, independientemente de su calidad migratoria, por sí o mediante apoderado podrán adquirir títulos y valores de renta fija o variable, acciones y partes sociales, activos para la realización de actividades empresariales y otras similares, realizar depósitos bancarios, adquirir bienes inmuebles urbanos y rústicos y derechos reales sobre los mismos, así como derechos de fideicomisario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera, y demás leyes y disposiciones aplicables, así como los tratados internacionales de los que México sea parte, sin que para ello requiera permiso de la Secretaría.

Todos los actos a que se refiere el párrafo anterior, podrán realizarse por el extranjero directamente o por su representante, independientemente de que aquél se encuentre o no en el país.

El transmigrante en ningún caso estará facultado para realizar los actos jurídicos a que se refiere este artículo.

Art. 148. Los extranjeros y extranjeras podrán realizar cualquier acto, aun de dominio, sobre los bienes que les sean propios, sin requerir permiso de la Secretaría.

Art. 149. Las autoridades y fedatarios a que se refieren los artículos 67 y 68 de la Ley, están obligados a exigir a los extranjeros y extranjeras que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, con excepción en los casos de:

- I. Registro de nacimientos en tiempo;
- II. Registro de defunciones, y
- III. Otorgamiento de testamentos, poderes, cotejos, certificación de copias y de hechos.

En los casos de registro de nacimientos en tiempo, en los cuales los extranjeros no acrediten su legal estancia en el país, las autoridades deberán notificarlo a la Secretaría en un término no mayor a quince días.

Art. 150. Las autoridades y fedatarios a que se refiere el artículo anterior, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que además de acreditar su legal estancia en el país, exhiban la autorización o el permiso previo o la certificación de la Secretaría, sólo en los siguientes casos:

- I. Cuando se trate de realizar trámites de adopción;
- II. Cuando se trate de la celebración de matrimonio de extranjero y mexicano, y
- III. Cuando se trate de divorcio o nulidad de matrimonio de acuerdo a lo establecido en el artículo 156.

Art. 151. Las autoridades y fedatarios a que se refieren los artículos 67 y 68 de la Ley, están obligados a solicitar a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que además de acreditar su legal estancia en el país, comprueben que su

calidad y característica migratoria les permite realizar el acto o contrato que se pretenda llevar a cabo, sólo en los siguientes casos:

- I. En los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, deberán acreditar no tener la característica de transmigrante, y
- II. Cuando se trate de trámites de divorcio o nulidad de matrimonio, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 156 de este Reglamento.

Art. 152. Cuando de la celebración o formalización de un acto o contrato, se origine la posibilidad de realización de una actividad por parte de un extranjero, para la cual no esté previamente autorizado por la Secretaría, el acto podrá celebrarse y formalizarse, siempre que en el instrumento respectivo se asiente la prevención de que el desempeño de la actividad estará sujeta a la autorización que, a su juicio, expida la Secretaría.

Art. 153. Sólo a petición expresa de la Secretaría, las autoridades y fedatarios a que se refieren los artículos 67 y 69 de la Ley, informarán de cualquier acto o contrato en el que hayan intervenido extranjeros, mencionando los documentos con los que acreditaron su legal estancia en el país, y en su caso, el permiso respectivo de la Secretaría.

Las autoridades y fedatarios mencionados se abstendrán de dar su autorización si advierten irregularidades en la documentación migratoria de los extranjeros, si no se presenta el permiso respectivo cuando éste sea necesario, o si sus condiciones y calidad migratoria no les permite realizar el acto o contrato de que se trate, lo que comunicarán inmediatamente a la Secretaría.

Art. 154. La Secretaría, cuando lo estime necesario, podrá instruir a las autoridades a que aluden los artículos 67, 68 y 69 de la Ley, respecto a la forma en que deben cumplir con las obligaciones que les impongan la Ley y este Reglamento.

Art. 155. Los actos que se efectúen en contravención a los artículos 66 y 69 de la Ley y las disposiciones de este ordenamiento que los reglamentan, estarán sujetos a las sanciones previstas en las leyes aplicables.

La declaración de nulidad, en su caso, será hecha por los Tribunales Federales a solicitud del Ministerio Público Federal, previa petición de la Secretaría.

Art. 156. La certificación para tramitar ante una autoridad judicial o administrativa el divorcio o nulidad de matrimonio a que alude el artículo 69 de la Ley, estará sujeta a las siguientes prevenciones:

- I. Deberán solicitarla a las autoridades migratorias por escrito.

El cónyuge extranjero cuando sea el actor en caso de juicio de divorcio necesario o de nulidad de matrimonio o, los cónyuges que sean extranjeros en juicios de divorcio voluntario o administrativo;

- II. Sólo se expedirá a los extranjeros cuando el domicilio conyugal se hubiere constituido en el territorio nacional y posean la calidad y características migratorias siguientes:

1. No Inmigrantes:

- a) Visitante;
 - b) Asilado Político;
 - c) Refugiado;
 - d) Estudiante;
 - e) Ministro de Culto o Asociado Religioso;
 - f) Visitante Distinguido, y
 - g) Corresponsal.
2. Inmigrante; e
3. Inmigrado.

III. La certificación se otorgará con validez de noventa días a partir de su fecha de expedición, y

IV. No se requerirá la certificación a que se refiere este artículo en los casos en que el mexicano o mexicana sea el actor, tratándose de juicios de divorcio necesario o de nulidad de matrimonio.

Art. 157. La autorización para que los extranjeros y extranjeras puedan contraer matrimonio con mexicana o mexicano, a que se refiere el artículo 68 de la Ley, quedará sujeta a las siguientes disposiciones:

- I. Deberán solicitarla a las autoridades migratorias por escrito, el extranjero o su representante, debiendo presentar la documentación migratoria para acreditar su legal estancia en el país. Los matrimonios que se realicen por poder, estarán sujetos a la expedición del permiso previo de la Secretaría;
- II. La petición deberá ser apoyada por el presunto contrayente mexicano o mexicana, quien deberá acreditar su nacionalidad, y
- III. La autorización se otorgará por una validez hasta de treinta días a partir de su expedición, pero no podrá rebasar la temporalidad indicada en el documento migratorio, para permanecer en el país.

Art. 158. El permiso especial para realizar trámites de adopción a que se refiere la fracción I del artículo 150 de este Reglamento, estará sujeto a las siguientes condiciones:

- I. Deberán solicitarlo a las autoridades migratorias por escrito, de acuerdo a lo siguiente:
 - a) La solicitud será formulada por el extranjero o extranjera o su representante, mediante la presentación de la documentación migratoria vigente que acredite su legal estancia en el país, y
 - b) No se expedirá a los extranjeros o extranjeras que posean la característica migratoria de transmigrante o visitante provisional.
- II. La autorización se otorgará por una validez de noventa días a partir de su expedición y no excederá la temporalidad indicada en el documento migratorio.

Sección III.

No inmigrantes

Art. 159. Toda autorización para que un extranjero o extranjera sea admitido en el país como No Inmigrante debe ser concedida por acuerdo del Secretario, Subsecretario o Comisionado. Esta facultad puede ser delegada a las autoridades que determinen el Secretario, Subsecretario, o Comisionado.

Art. 160. TURISTAS. La internación de turistas quedará sujeta a las siguientes disposiciones:

- I. La autorización para permanecer en el país se concederá hasta por seis meses a partir de su expedición y no será susceptible de prórroga. Sólo por enfermedad que impida viajar, o por otra causa de fuerza mayor debidamente comprobada, se podrá conceder un plazo adicional para la salida del extranjero o extranjera.

En los casos de turistas que hayan sido documentados originalmente por una temporalidad menor a los seis meses, la Secretaría podrá, cuando lo estime conveniente, ampliar la temporalidad hasta completarlos, y

- II. Cuando la Secretaría lo juzgue conveniente, podrá autorizar la prerrogativa de entradas y salidas múltiples al país en esta característica migratoria.

Art. 161. TRANSMIGRANTES. La internación de extranjeros y extranjeras en tránsito hacia otro país, se regirá por las disposiciones siguientes:

- I. La autorización de internación se concederá hasta por treinta días improporables contados a partir de su expedición;
- II. No podrán cambiar de calidad o característica migratoria, y
- III. En ningún caso se autorizará la internación como transmigrante al extranjero que carezca de permiso de admisión al país hacia donde se dirige y del permiso de tránsito en los países limítrofes de la República Mexicana comprendidos en su ruta.

Art. 162. VISITANTES. A las personas a que se refiere la fracción III del artículo 42 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:

- I. Se les concederá el permiso para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, de acuerdo a los siguientes supuestos:
 - a) Cuando el extranjero visitante viva durante su estancia de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan, de cualquier ingreso proveniente del exterior o de sus inversiones en el país;
 - b) Cuando su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas;
 - c) Cuando se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares o de observación de derechos humanos, incluyendo la de los procesos electorales;
 - d) Cuando pretenda ocupar cargos de confianza, y

e) Cuando pretenda asistir a asambleas y sesiones del consejo de administración de empresas.

Salvo lo dispuesto en el artículo 163, la Secretaría establecerá los requisitos que deberán acreditarse en cada uno de los supuestos mencionados, así como las modalidades en que se clasificarán las actividades que pretenda desarrollar el extranjero o extranjera;

II. El permiso se autorizará hasta por un año, y podrán concederse cuatro prórrogas, por igual temporalidad cada una.

Tratándose de los inversionistas a que se refiere la fracción I del artículo 163 de este Reglamento, el permiso se otorgará por un año, más las prórrogas que, en su caso, se concedan.

En todos los casos la temporalidad concedida permitirá entradas y salidas múltiples;

III. La Secretaría fijará a los extranjeros y extranjeras a quienes se conceda esta característica migratoria, las actividades a que podrán dedicarse, y, cuando lo estime necesario, el lugar de su residencia. Los extranjeros y extranjeras deberán acreditar la capacidad económica que les permita permanecer en el país;

IV. Los extranjeros y extranjeras podrán ser admitidos para ejercer una actividad remunerada o lucrativa, siempre que la solicitud de admisión se formule por la empresa, institución o persona que pretenda utilizar sus servicios, o por el mismo extranjero o extranjera cuando pretenda trabajar en forma independiente;

V. La empresa, institución o persona que haya hecho la solicitud, será responsable solidariamente con el extranjero o extranjera por el monto de las sanciones a que se haga acreedor y, en su caso, costeará los gastos de su repatriación. Cuando trabaje en forma independiente, los gastos correrán por su cuenta, y

VI. Las prórrogas podrán concederse siempre y cuando el extranjero o extranjera demuestre que subsisten las condiciones bajo las cuales se concedió la característica migratoria.

La Secretaría tendrá facultad discrecional para juzgar sobre el otorgamiento de las prórrogas, en el caso de que hubieren cambiado las condiciones señaladas en la autorización.

Art. 163. El extranjero o extranjera que solicite autorización, dentro de la característica de Visitante a que se refiere el artículo anterior, en las modalidades que específicamente se señalan, se sujetará a las siguientes reglas:

I. **VISITANTE DE NEGOCIOS E INVERSIONISTA.** Al extranjero o extranjera que pretenda internarse en el territorio nacional con el objeto de conocer diferentes alternativas de inversión, realizar una inversión di-

recta o supervisarla, representar a una empresa extranjera, o realizar transacciones comerciales, se aplicará lo siguiente:

1. Para personas de negocios:

a) Será necesario presentar la carta de invitación de las cámaras de comercio o industria, asociaciones empresariales, organismos públicos o privados, o de empresas industriales, comerciales o instituciones financieras; o

b) Acreditar mediante carta bancaria que contará mensualmente durante un año con el equivalente a quinientos días el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o carta de solvencia económica de la empresa que representa durante el tiempo de su estancia en el país;

2. Para inversionistas:

a) Será necesario presentar una constancia expedida por el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o la documentación que acredite la inversión mínima del equivalente a veintiséis mil días el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; o

b) Cuando la inversión consista en la adquisición de bienes inmuebles, se deberá presentar la escritura pública en que conste la compra venta o el contrato de fideicomiso por el que adquiera derechos de fideicomisario, por un monto mínimo equivalente a cuarenta mil días el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

3. Los representantes comerciales podrán presentar la carta de la empresa extranjera que otorgue el nombramiento correspondiente y acreditarán la solvencia económica en los términos del inciso b) del numeral 1, y

4. Los extranjeros y extranjeras que realicen transacciones comerciales, podrán presentar copia del contrato o contratos de compra venta por un monto equivalente a veintiséis mil días el salario mínimo vigente en el Distrito Federal y acreditarán solvencia económica en los términos del inciso b) del numeral 1.

II. VISITANTE TÉCNICO O CIENTÍFICO. El extranjero o extranjera cuya internación tenga como propósito la iniciación o ejecución de un proyecto de inversión específico, dar asesoría a instituciones públicas o privadas, realizar, preparar o dirigir investigaciones científicas, dar conferencias, cursos o divulgar algún tipo de conocimiento, realizar actividades técnicas en la elaboración de un proyecto de inversión, diseñar o iniciar la operación o construcción de una planta, capacitar a otros técnicos bajo contratos de prestación de servicios previamente pactados o prestar servicios contemplados en un contrato de transferencia de tecnología, patentes o marcas, deberán acreditar:

a) Solicitud formulada por institución pública o privada que pretenda utilizar los servicios manifestando la naturaleza del proyecto o actividad en que intervendrán y el tiempo estimado de su estancia, y

b) Copia de la carta invitación de la institución pública o privada de que se trate o copia del contrato de prestación de servicios profesionales o de transferencia tecnológica de patentes o marcas.

III. VISITANTE RENTISTA. El extranjero o extranjera que durante su estancia en el país viva de sus depósitos traídos del exterior, de las rentas que éstos produzcan, de cualquier ingreso también proveniente del exterior o de sus inversiones en el país, para obtener su característica migratoria, deberá:

a) Comprobar un ingreso mínimo mensual equivalente a doscientos cincuenta veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

b) Si solicita la autorización para dependientes familiares, el monto mensual señalado aumentará en ciento veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por cada persona que dependa económicamente de él, y

c) Los montos antes señalados se comprobarán con carta de la institución financiera, banco mexicano o extranjero, o de la institución fiduciaria, en donde se acredite que la persona cuenta por lo menos con el ingreso mínimo mensual señalado.

La Secretaría podrá autorizar que el extranjero o extranjera acredite hasta el equivalente al cincuenta por ciento del monto señalado en el inciso a), cuando demuestre la adquisición de un bien inmueble destinado para uso propio como casa habitación.

Para que los extranjeros o extranjeras a que se refiere esta fracción puedan realizar actividades remuneradas o lucrativas, necesitarán autorización de la Secretaría, que la otorgará cuando a su juicio lo estime conveniente.

IV. VISITANTE PROFESIONAL. El extranjero o extranjera cuya internación tenga como propósito el ejercicio de una profesión en forma independiente o mediante la prestación de servicios a empresas o instituciones públicas o privadas, deberá presentar:

a) Carta oferta de trabajo de la institución oficial o privada que requiera de los servicios o asesoría del profesionista, manifestando el domicilio donde laborará;

b) Exhibir copia del título profesional y, en su caso, de la cédula profesional respectiva, y

c) En el caso de que el extranjero o extranjera profesionista pretenda ejercer en forma independiente, deberá cumplir con lo establecido

en el inciso anterior e indicar la actividad y el lugar donde pretende desempeñarla.

V. VISITANTE CARGO DE CONFIANZA. El extranjero o extranjera que pretendan internarse al país para asumir cargos de dirección, de administrador único u otros de absoluta confianza en empresas, instituciones o negociaciones establecidas en la República Mexicana, deberá presentar:

a) Carta oferta de trabajo precisando el cargo que el extranjero o extranjera vayan a desempeñar en la empresa, institución o negociación que pretenda utilizar sus servicios o el contrato de prestación de servicios manifestando el domicilio donde laborará.

En ambos documentos deberá indicarse que su vigencia se sujeta a la autorización correspondiente de la Secretaría;

b) Última declaración del pago de impuestos de la empresa, institución o negociación, según sea el caso, y

c) Atendiendo a las circunstancias del caso concreto, la Secretaría podrá solicitar al interesado que acredite su capacidad para el cargo que pretende ocupar, siempre y cuando ello se haga sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte.

En los casos de las fracciones I, II, IV y V de este artículo el solicitante deberá presentar el acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público en que conste la denominación, objeto social y domicilio de la empresa o copia de la última declaración del pago de impuestos o constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras o de inscripción de la cámara, asociación u organismo correspondiente.

VI. VISITANTE OBSERVADOR DE DERECHOS HUMANOS. Tratándose de visitantes observadores de derechos humanos, la solicitud y el permiso respectivo se otorgarán de conformidad con las siguientes reglas:

a) El permiso de internación se autorizará exclusivamente por las oficinas centrales del Instituto;

b) Los sujetos que podrán ingresar al amparo de la presente fracción serán aquellos extranjeros y extranjeras que pretendan internarse a México para conocer la situación de los derechos humanos in situ, independientemente de que pertenezcan o no a un Organismo No Gubernamental. La solicitud de internación deberá ser presentada cuando menos con quince días de anticipación a la fecha en que pretendan internarse a territorio nacional, el Comisionado podrá autorizar la disminución de este plazo;

c) Tratándose de grupos, la autorización se realizará de manera individual en un máximo de diez individuos por organización o grupo de organizaciones. El Comisionado podrá autorizar la ampliación de ese límite;

d) La temporalidad autorizada será de diez días contados a partir de la fecha de ingreso a territorio nacional, el Comisionado podrá autorizar la ampliación de la temporalidad concedida y, en su caso, la prerrogativa de entradas y salidas múltiples;

e) El Comisionado, podrá autorizar al Directivo de mayor rango de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales con estatus del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, estancias en nuestro país, por una temporalidad hasta de un año, mismas que pueden ser prorrogadas a su vencimiento, a solicitud del interesado;

f) Para los casos en que un observador de derechos humanos se encuentre documentado en México y pretenda visitar otra entidad federativa distinta a la autorizada, deberá solicitarlo a las oficinas centrales del Instituto o a la Delegación que corresponda, anexando el nuevo programa de trabajo a desarrollar, y

g) La solicitud de internación deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Anexar, en su caso, copia certificada de la escritura constitutiva o del instrumento que acredite la legal existencia de la Organización No Gubernamental, con su respectiva traducción al español; se debe acreditar que la citada organización cuenta con una antigüedad mínima de cinco años al momento de presentar la solicitud; o acreditar que cuenta con el estatus consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas;

2. Documento por medio del cual se acredite plenamente ser miembro de la Organización No Gubernamental;

3. Programa de trabajo en el que se señale: actividades, instituciones a visitar o entrevistar, así como las entidades federativas y localidades que pretenda visitar;

4. Documentos, registros o certificaciones que acrediten la experiencia previa del extranjero en relación con las actividades que pretende realizar;

5. Cuando la visita sea consecuencia de invitación de una Organización No Gubernamental o institución mexicana, se deberá presentar la carta invitación y la carta responsiva emitida por persona legalmente facultada para ello; en todo caso, la institución mexicana deberá acreditar los requisitos previstos en el numeral uno;

6. Cuando se trate de un observador de derechos humanos que no pertenezca a una Organización No Gubernamental deberá acreditar tener experiencia en las actividades que pretenda desarrollar, y

7. Tratándose de visitas que tengan dentro de su finalidad la de otorgar donaciones, deberá, adicionalmente, cumplir con la normatividad aplicable.

Una vez autorizada la internación del extranjero o extranjera al país, en el documento migratorio respectivo se anotará el contenido de los artículos 9, 11 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 34 y 43 de la Ley General de Población.

VII. VISITANTE PARA CONOCER PROCESOS ELECTORALES. El extranjero o extranjera que pretenda internarse a territorio nacional para conocer las modalidades del desarrollo de procesos electorales federales o estatales en su caso, se ajustará a las siguientes reglas:

a) Toda solicitud deberá estar avalada por el organismo electoral federal o local de que se trate, según sea el proceso electoral que se pretenda cubrir;

b) El interesado deberá acreditar de manera fehaciente que pertenece a una organización, institución o asociación que tenga objetivos congruentes con las actividades que pretenda realizar, misma que deberá respaldar su solicitud y acreditar plenamente que se responsabiliza de cubrir los gastos que origine la estancia del extranjero en el país, y

c) Una vez autorizada la internación del extranjero o extranjera al país, en el documento migratorio respectivo se anotará el contenido de los artículos 9, 11 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 34 y 43 de la Ley.

VIII. VISITANTE CONSEJERO. El extranjero o extranjera que pretenda internarse al país para asistir a asambleas o sesiones del consejo de administración de empresas, se sujetará a las siguientes reglas:

a) El permiso se autorizará por la temporalidad de un año prorrogable hasta por cuatro veces más por igual temporalidad cada una;

b) Para la autorización de esta característica migratoria solamente se requerirá la presentación de la constancia de su nombramiento por la asamblea de accionistas;

c) Dentro de la temporalidad concedida, el permiso de estancia podrá ser utilizado en entradas y salidas múltiples, y

d) Sólo en casos de enfermedad o por causa de fuerza mayor debidamente comprobada, se le otorgará un plazo especial para salir del país.

Art. 164. MINISTRO DE CULTO O ASOCIADO RELIGIOSO. Para los efectos de la fracción IV del artículo 42 de la Ley, las Asociaciones Religiosas, deberán acreditar su registro con la constancia correspondiente que expida la Secretaría o cualquier otro documento fehaciente que acredite tal registro.

Igualmente, se entenderá que el extranjero o extranjera de cuyo trámite migratorio se trate, es Ministro de Culto o Asociado Religioso, con antelación a la solicitud de dicho trámite, siempre que la Secretaría lo informe por escrito.

Asimismo, se les requerirá cumplir con lo siguiente:

- I. Comprobar a satisfacción de la Secretaría la percepción periódica e ininterrumpida de medios económicos para su sostenimiento;
- II. Manifestar en su solicitud el tipo de actividades que desarrollará, así como el ámbito territorial en el que se desempeñarán sus funciones;
- III. Al solicitar su prórroga anual, deberá comprobar que subsisten las condiciones bajo las cuales le fue otorgada esta característica, y
- IV. Dada la naturaleza de esta característica migratoria, de asistencia social y filantrópica, no podrá realizar otra actividad, independientemente de que sea remunerada o no, sin la autorización previa de la Secretaría.

Art. 165. ASILADOS POLÍTICOS. La admisión de los No Inmigrantes a los que se refieren los artículos 35 y 42 fracción V de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Los extranjeros y extranjeras que lleguen a territorio nacional huyendo de persecuciones políticas, serán admitidos provisionalmente por las oficinas de migración, debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría resuelve cada caso en particular. La oficina de migración correspondiente, informará del arribo a oficinas centrales, por la vía más rápida;
- II. El interesado, al solicitar asilo, deberá expresar los motivos de persecución, sus antecedentes personales, los datos necesarios para su identificación y el medio de transporte que utilizó;
- III. La oficina de migración, obtenida la autorización de oficinas centrales para conceder asilo político territorial, levantará un acta asentando en ella los datos señalados en la fracción anterior, concederá el asilo a nombre de la Secretaría, formulará la media filiación del extranjero o extranjera, tomará las medidas necesarias para la seguridad de éste y lo enviará al servicio central;
- IV. No se admitirá como asilado al extranjero o extranjera que proceda de país distinto de aquél en el que se haya ejercido la persecución política, salvo el caso de que en el último sólo haya tenido el carácter de transmigrante, debidamente comprobado;
- V. Las Embajadas Mexicanas aceptarán en sus residencias a los extranjeros y extranjeras que soliciten asilo, siempre que sean originarios del país en donde aquéllas se encuentren; investigarán el motivo de la persecución, y si éste a su juicio es un delito que sea de carácter político, concederán el Asilo Diplomático a nombre de México, asilo que, en su caso, será ratificado posteriormente por la Secretaría;

- VI. Concedido el Asilo Diplomático, la Embajada informará por la vía más rápida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ésta a su vez a la Secretaría, y se encargará además de la seguridad y del traslado a México del asilado, y
- VII. Todos los extranjeros y extranjeras admitidos en el país como asilados, quedarán sujetos a las siguientes condiciones:
- a) La Secretaría determinará el sitio en el que el asilado debe residir y las actividades a las que pueda dedicarse y podrá establecer otras modalidades cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten;
 - b) El asilado político podrá traer a México a su cónyuge e hijos para vivir bajo su dependencia económica, quienes tendrán la misma calidad y característica migratoria, bajo la modalidad de dependiente económico.
Los padres serán admitidos con la misma calidad, característica y modalidad migratoria si la Secretaría lo estima pertinente;
 - c) Los extranjeros y extranjeras que hayan sido admitidos como asilados sólo podrán ausentarse del país previo permiso de oficinas centrales y si lo hicieren sin éste se cancelará definitivamente su documentación migratoria; también perderán sus derechos migratorios si permanecen fuera del país más tiempo del que se les haya autorizado. En ambos casos la Secretaría podrá otorgarles otra característica migratoria que juzgue conveniente;
 - d) Las internaciones a que se refiere este artículo se concederán por el tiempo que la Secretaría lo estime conveniente. Los permisos de estancia se otorgarán por un año y si tuviesen que exceder de éste, podrán prorrogarse por uno más y así de manera indefinida. Los interesados deberán solicitar la revalidación de su permiso dentro de los treinta días anteriores al vencimiento de éste. Esta revalidación se les concederá si subsisten las circunstancias que determinaron el asilo y siempre que hayan cumplido con los requisitos y modalidades señaladas por la Secretaría. En la misma forma se procederá con sus familiares;
 - e) Deberán solicitar a oficinas centrales, por escrito, el permiso para el cambio de actividad, presentando los requisitos que la normatividad aplicable señale;
 - f) Al momento que hayan desaparecido las circunstancias que motivaron el asilo político, el asilado, dentro de los treinta días siguientes, abandonará el país con sus familiares que tengan la misma característica migratoria, o bien, podrá acogerse a lo establecido por el artículo 59 de la Ley, previa renuncia expresa a su condición de asilado;
 - g) La Secretaría cuando lo estime conveniente y a solicitud del interesado, podrá autorizar el cambio de calidad o característica migratoria, aun cuando se mantengan las causas que motivaron el otorgamiento del asilo, previa renuncia expresa a su condición de asilado;
 - h) El asilado deberá manifestar por escrito sus cambios de domicilio y de estado civil en un periodo máximo de treinta días a partir del cambio o celebración del acto,
- y

i) El asilado observará todas las obligaciones que la Ley y este Reglamento imponen a los extranjeros.

Art. 166. REFUGIADO. La admisión de los No Inmigrantes a los que se refieren los artículos 35 y 42 fracción VI de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Los extranjeros y extranjeras que huyendo de su país de origen, para proteger su vida, seguridad o libertad, cuando hayan sido amenazados por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público, y que ingresen a territorio nacional, deberán solicitar a la oficina de migración más cercana al lugar donde se encuentra el interesado, la calidad y característica migratorias de No Inmigrante Refugiado. La solicitud deberá formularse al ingreso al territorio nacional o dentro de los quince días naturales siguientes;
- II. La autoridad migratoria correspondiente, tomará las medidas necesarias para que el solicitante permanezca a su disposición, hasta en tanto se resuelve su solicitud, debiendo enviar ésta a oficinas centrales por la vía más expedita en un plazo no mayor de veinticuatro horas;
- III. El interesado, al solicitar el refugio, deberá expresar los motivos por los que huyó de su país de origen, si viene o no de un tercer país, sus antecedentes personales, las pruebas que a su derecho convenga, los datos necesarios para su identificación y el medio de transporte que utilizó;
- IV. La autoridad migratoria competente admitirá a trámite la solicitud de refugio y desahogará las pruebas ofrecidas en un plazo no mayor de diez días.

Dentro de ese plazo la autoridad migratoria podría allegarse los demás medios de convicción que considere convenientes;

- V. La autoridad migratoria competente resolverá lo conducente en cada caso en particular, atendiendo a las manifestaciones vertidas por el interesado, las pruebas que acopie y en su caso, las recomendaciones del Comité de Elegibilidad al que alude el artículo siguiente, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la presentación de la solicitud;

Las oficinas centrales del Instituto al recibir la solicitud de refugio deberán enviar copia al Comité de elegibilidad, quien emitirá con toda oportunidad su recomendación; en caso de no hacerlo, se entenderá que no tiene objeción para el otorgamiento de la característica solicitada.

- VI. Reconocido el carácter de refugiado por la autoridad migratoria competente, se tomarán las medidas necesarias para la seguridad del refugiado y se vigilará su traslado al lugar donde deberá residir, el cual estará definido en la misma resolución;
- VII. No se admitirá como refugiado al extranjero o extranjera que incurra en cualquiera de las siguientes hipótesis:

a) Que se trate de un migrante por motivos económicos o distintos a los previstos en la fracción I;

b) Que el solicitante sea perseguido con motivo de delitos comunes;

c) Que se encuentre sujeto a un procedimiento de extradición, en cuyo caso la autoridad migratoria podrá diferir la resolución, hasta en tanto se resuelva definitivamente dicho procedimiento de extradición;

d) Que provenga de un país en el cual se le haya negado la calidad de asilado o refugiado;

e) Que no haya presentado su solicitud en tiempo, excepto que los motivos que dan origen a dicha solicitud, sean supervenientes a su ingreso al país, y

f) Que haya adquirido durante su estancia en el país distinta calidad y característica migratorias.

VIII. Todos los extranjeros y extranjeras admitidos en el país como refugiados, quedarán sujetos a las siguientes condiciones:

a) La Secretaría determinará el sitio en el que el refugiado deba residir y las actividades a las que pueda dedicarse, y podrá establecer otras modalidades regulatorias de su estancia, cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten;

b) Los refugiados podrán solicitar la internación a territorio nacional de su cónyuge e hijos o padres que sean sus dependientes económicos;

c) Los extranjeros y extranjeras que hayan sido admitidos como refugiados, sólo podrán ausentarse del país previo permiso de oficinas centrales, y si lo hicieran sin éste o permanecieran fuera del país por más del tiempo autorizado, perderán sus derechos migratorios;

d) El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a ningún otro en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas;

e) La Secretaría podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria;

f) Las autorizaciones a que se refiere este artículo, se concederán por el tiempo que la Secretaría lo estime conveniente. Los permisos de estancia se otorgarán por un año y si tuviesen que exceder de éste, podrán prorrogarse por uno más y así sucesivamente. Al efecto, los interesados deberán solicitar la renovación de su permiso dentro de los treinta días anteriores al vencimiento del mismo. Esta prórroga será concedida si subsisten las circunstancias que determinaron el refugio y siempre que se haya cumplido con los requisitos y modalidades señalados por la Secretaría. En la misma forma se procederá con los familiares;

g) El cambio de lugar de residencia o ampliación o cambio de actividades, estará sujeto a un permiso, debiendo cubrirse los requisitos que señale la Secretaría;

h) Cuando a juicio de la Secretaría desaparezcan las circunstancias que motivaron el refugio, el interesado deberá abandonar el país con sus familiares que tengan

la misma característica migratoria dentro de los treinta días siguientes al aviso de la autoridad, o bien podrá acogerse a lo establecido por el artículo 59 de la Ley, y

i) Los refugiados están obligados a manifestar sus cambios de estado civil, así como el nacimiento de hijos en territorio nacional en un periodo máximo de treinta días contados a partir del cambio, celebración del acto o del nacimiento.

Contra la negativa de autorización al refugio procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que será resuelto en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se interpuso dicho recurso.

Art. 167. El Comité de Elegibilidad tendrá por objeto estudiar, analizar y emitir recomendaciones respecto de las solicitudes de refugio, y se integrará por los siguientes servidores públicos, quienes tendrán derecho a voz y voto:

- I. El Subsecretario, quien fungirá como Presidente,
- II. Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
- III. Un representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
- IV. Un representante del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico, y
- V. Un representante de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quien fungirá como Secretario Ejecutivo.

Por cada representante propietario habrá un suplente. Los representantes propietarios tendrán como mínimo el nivel de Director General o su equivalente y los suplentes el inmediato inferior al de aquéllos y serán designados por los propietarios.

Los acuerdos del Comité se tomarán por consenso.

Se podrá invitar a las sesiones del Comité a un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como a representantes de otras organizaciones o instituciones quienes tendrán derecho a voz pero sin derecho a voto.

Art. 168. ESTUDIANTES. La admisión de los No Inmigrantes a que se refiere la fracción VII del artículo 42 de la Ley, quedará sujeta a las siguientes reglas:

- I. Los estudiantes serán autorizados hasta por un año prorrogable por igual temporalidad, y en ningún caso podrán permanecer fuera del país más de ciento veinte días cada año, en forma continua o con intermitencias. La anterior restricción no es aplicable a los extranjeros autorizados para realizar sus estudios en ciudades fronterizas, si residen en una localidad limítrofe.

Para los efectos conducentes, se entenderán ciudades fronterizas y localidades limítrofes, las que señale la Secretaría mediante disposiciones administrativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

- II. El interesado deberá probar a satisfacción de la Secretaría, la percepción periódica e ininterrumpida de medios económicos para su sostenimiento;
- III. Si se trata de un menor, la solicitud será firmada por quien ejerza sobre él la patria potestad, por su tutor o por la persona bajo cuya vigilancia y cuidado vivirá en el país;

- IV. En la solicitud deberá manifestarse el nivel y la clase de estudios que se proponga realizar y la institución educativa o plantel de que se trate;
- V. El solicitante podrá presentar examen de admisión u obtener carta de aceptación de la institución o plantel educativo de que se trate, pero sólo podrá inscribirse de manera condicionada por un término de ciento veinte días, si no ha obtenido el permiso de la Secretaría, solamente cuando se trate de instituciones o planteles educativos oficiales o incorporados con reconocimiento de validez oficial. Transcurrido el plazo de la inscripción condicionada, sin contar con el permiso respectivo, la institución educativa deberá cancelar dicha inscripción. Esta obligación concierne al interesado y a la institución o plantel correspondiente.

Tratándose de instituciones o planteles no oficiales ni incorporados o sin reconocimiento de validez oficial, no podrá efectuarse la inscripción condicionada;

- VI. Se cancelará el permiso de los estudiantes si interrumpen sus estudios, son expulsados de la institución o plantel o bien, si a juicio de la Secretaría, su desenvolvimiento como estudiante, no es el adecuado para continuar su estancia en el país, salvo cuando el interesado demuestre a satisfacción de dicha dependencia que en el caso concurren causas de fuerza mayor;
- VII. Al solicitar la revalidación correspondiente, deberán comprobar que continúan inscritos en la institución o plantel para el que han sido autorizados y que el resultado de sus exámenes les da derecho a pasar al grado, ciclo o nivel siguiente, así como presentar constancia de que subsisten las percepciones periódicas y regulares de medios económicos para su sostenimiento.

La Secretaría podrá autorizar por causas debidamente justificadas por el estudiante, cambios de institución o plantel, niveles, grados, ciclos o áreas de estudios;

- VIII. Las instituciones y planteles oficiales o incorporados con reconocimiento de validez oficial tendrán la obligación de informar a la Secretaría en un plazo máximo de treinta días, respecto de la inscripción o baja de extranjeros en su matrícula.

Las instituciones y planteles no oficiales, ni incorporados sin reconocimiento de validez oficial, informarán dichas circunstancias en un plazo de quince días.

En caso de que el aviso no se efectúe en los plazos señalados en este artículo, la institución o plantel responsable se hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley;

- IX. Las ausencias serán computables contando cada anualidad a partir de la fecha de su internación como estudiante, o de la adquisición de dicha característica migratoria.

Si el estudiante se encuentra fuera del país al vencimiento de su documentación migratoria y no se ha excedido del límite de ausencias que se ha señalado, podrá reinternarse al país y deberá solicitar la revalidación correspondiente de su permiso, en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la fecha de su reinternación;

- X. Los estudiantes no podrán realizar actividades remuneradas o lucrativas salvo las de práctica profesional y servicio social que corresponda a sus estudios y previa autorización de la Secretaría. Deberán comprobar que dichas actividades son parte del plan de estudios mediante constancia expedida por la institución o plantel en el que se encuentren cursando sus estudios;
- XI. El cónyuge y los familiares de los estudiantes tendrán la misma calidad y característica migratoria de éstos. En este caso, sólo se podrá autorizar su internación dentro del primer grado de parentesco previa comprobación del mismo y bajo la modalidad de dependiente económico, y
- XII. El estudiante, al término de sus estudios deberá abandonar el país. Cuando requiera de un plazo adicional para tramitar y obtener la documentación final respectiva, la elaboración de tesis y para sustentar examen profesional, la Secretaría a su juicio, lo concederá y fijará la temporalidad.

El tiempo correspondiente para la elaboración de la tesis o su equivalente, o para sustentar examen profesional, deberá comprenderse dentro de esta característica migratoria.

Art. 169. VISITANTES DISTINGUIDOS. La Secretaría en los términos del artículo 42 fracción VIII de la Ley, podrá otorgar discrecionalmente permisos de cortesía para internarse y permanecer en el país a investigadores, científicos o humanistas de prestigio internacional, periodistas o a otras personas prominentes.

La propia Secretaría determinará en qué casos y con qué limitaciones se delegará esta facultad en los servidores públicos a que se refiere el artículo 90 de este Reglamento.

Los permisos se otorgarán por periodos semestrales, prorrogables a juicio de la Secretaría.

Art. 170. VISITANTES LOCALES. Las visitas de extranjeros y extranjeras a las poblaciones fronterizas y marítimas y el tránsito diario entre aquéllas y las del extranjero, se sujetarán a las siguientes reglas:

- I. Se estará en todo caso a los tratados y convenios internacionales sobre la materia;
- II. El ingreso de los nacionales de los países vecinos que deseen visitar nuestras poblaciones fronterizas, podrá ser autorizado por las autoridades migratorias por un plazo que no exceda de tres días, siempre que cumplan con los requisitos que fije la Secretaría;
- III. Los residentes de las poblaciones extranjeras colindantes con las fronteras de la República podrán obtener para el tránsito diario el permiso de visitante local, el que se otorgará de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Todo extranjero que solicite permiso de visitante local, deberá comprobar su nacionalidad y su residencia en la población colindante;

b) La temporalidad de estos permisos será establecida discrecionalmente por la Secretaría y limitada a las poblaciones fronterizas;

c) El permiso de visitante local, será individual para las personas mayores de quince años. Las personas menores de esta edad quedarán amparadas por el permiso de visitante local que se expida a los padres, familiares o tutores que los acompañen;

d) Las autoridades migratorias expedirán el permiso de visitante local a los nacionales o naturalizados de los países vecinos. A los de otra nacionalidad pero que tengan legal residencia permanente en el país vecino, se les podrá expedir el permiso, sólo mediante acuerdo expreso de oficinas centrales.

Los menores de edad, pero mayores de quince años deberán presentar al obtener el permiso de visitante local, la autorización de quien ejerce la patria potestad o la tutela. Tratándose de estudiantes menores de quince años podrá otorgárseles permiso individual, si hacen el tránsito diario para concurrir a un plantel educativo;

e) A los estudiantes mayores de quince años, se les otorgará permiso individual si hacen el tránsito diario para concurrir a un plantel educativo. Al finalizar sus estudios, se les otorgará un permiso especial para obtener certificado, título o cédula profesional, según corresponda, y

f) Los titulares del permiso de visitante local tienen derecho a entrar en las poblaciones fronterizas mexicanas y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, únicamente por los lugares y en las horas autorizadas.

IV. En caso de reciprocidad, las autoridades migratorias en las fronteras quedan facultadas para extender permisos de visitante local de cortesía a las autoridades federales, estatales y municipales de las poblaciones extranjeras vecinas.

Art. 171. VISITANTES PROVISIONALES. Para el otorgamiento de esta característica migratoria se estará a lo dispuesto en la fracción X del artículo 42 de la Ley.

Art. 172. CORRESPONSAL. Para los efectos de la fracción XI del artículo 42 de la Ley, quedan comprendidos en la característica migratoria de corresponsal los extranjeros que desarrollen actividades como periodistas, reporteros, cronistas, informadores, fotógrafos y otras similares, a juicio de la Secretaría, para medios impresos, radiofónicos, televisivos y cualquier otro de comunicación.

Los corresponsales mencionados deberán acreditar o demostrar su nombramiento o ejercicio de la actividad, mediante documento fehaciente del medio de comunicación extranjero para el que prestan sus servicios, así como anuencia escrita emitida por la Secretaría en la que conste que dicho medio de comunicación extranjero y el corresponsal se encuentran registrados; tratándose de corresponsales que realizan actividades por cuenta propia, deberán presentar carta de apoyo de algún medio de comunicación extranjera. En el caso de medios de comunicación nacionales, deberá presentarse el documento respectivo suscrito por el funcionario autorizado por la empresa.

Además:

- I. Si la internación del extranjero o extranjera tiene como propósito cubrir un evento determinado, se requerirá la presentación de documento fehaciente del medio de comunicación extranjero correspondiente, en los términos señalados en el párrafo anterior; precisando además los datos, fechas y lugares del evento en cuestión. La autorización podrá otorgarse por una temporalidad de hasta noventa días, a juicio de la Secretaría, tomando en cuenta la duración real de la actividad, con entradas y salidas múltiples, prorrogable a juicio de la Secretaría;
- II. En el caso de que el extranjero o extranjera pretenda desarrollar su actividad de manera permanente para un medio de comunicación nacional o extranjero, acreditará con documentación fehaciente su capacidad y experiencia en la materia, así como anuencia escrita emitida por la Secretaría en la que conste que el corresponsal se encuentra registrado. Se podrá autorizar la internación hasta por un año y podrán concederse hasta cuatro prórrogas por igual temporalidad, con entradas y salidas, y
- III. En todo caso, deberán presentarse las pruebas que demuestre que el corresponsal es empleado con relación laboral o de prestación de servicios por honorarios, para medios de comunicación del extranjero, respecto de un evento específico, o que trabaja por su cuenta, para medios extranjeros o nacionales, en forma habitual y permanente o para un evento específico.

Los corresponsales permanentes deberán estar acreditados como tales ante la Secretaría, previamente a la solicitud de cualquier trámite migratorio; tratándose de eventos específicos, deberán señalar en su solicitud el evento de que se trate y el lugar en que se llevará a cabo, así como la temporalidad solicitada.

Art. 173. Cuando conforme al artículo 42 de la Ley y las demás disposiciones aplicables proceda el otorgamiento de prórrogas, éstas deberán solicitarse dentro de los treinta días anteriores al vencimiento de los plazos concedidos. Dichas prórrogas empezarán a contarse a partir de la fecha en que termine la autorización que el extranjero haya obtenido.

El No Inmigrante que se encuentre ausente del país al vencimiento de su documentación migratoria podrá, a su regreso, solicitar la prórroga o revalidación que corresponda, para lo cual tendrá un plazo de treinta días a partir de su reinternación, siempre y cuando no se exceda en los plazos de ausencia que señala su propia característica migratoria, o de, sesenta días contados a partir de su vencimiento cuando no tenga señalado plazo de ausencia.

Sección IV

Inmigrantes

Art. 174. Toda autorización para que un extranjero o extranjera sea admitido en el país como inmigrante, debe ser concedida por acuerdo del Secretario, del Subsecretario o del Comisionado. Mediante acuerdo expreso del Secretario, del Subsecretario

o del Comisionado, la facultad podrá ser delegada a otras autoridades migratorias o consulares. Estos acuerdos especificarán las características migratorias que comprendan y, en su caso, establecerán las modalidades que deben observarse.

Art. 175. Los inmigrantes deberán internarse en el país precisamente dentro del plazo que se fije, contado a partir de la fecha de despacho del permiso respectivo.

Las autoridades migratorias podrán, cuando así se justifique, ampliar discrecionalmente el plazo.

Art. 176. Para el cómputo de ausencias que el artículo 47 de la Ley autoriza a los inmigrantes, se aplicarán las reglas siguientes:

- I. Podrán ausentarse del país hasta dieciocho meses en forma continua o con intermitencias dentro de sus cinco años de estancia;
- II. El Inmigrante que permanezca fuera del país más de dieciocho meses, no podrá solicitar su calidad de Inmigrado, hasta en tanto no transcurra de nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53 de la Ley;
- III. El inmigrante que dentro de los cinco años de residencia en el país permanezca más de dos años fuera del mismo, perderá su calidad migratoria;
- IV. Lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley se entenderá sin perjuicio de que el inmigrante demuestre, al ser requerido para ello, que subsisten las causas que motivaron su admisión;
- V. La propia Secretaría podrá autorizar la salida del país por la temporalidad y veces que juzgue convenientes, sin que en tal caso sea aplicable lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley, a los Inmigrantes que hayan solicitado su cambio a Inmigrado, mientras éste no se resuelva, y
- VI. No se computará como ausencia el tiempo que el Inmigrante se encuentre fuera del país, cuando demuestre que realiza estudios de postgrado en alguna institución extranjera respaldado por una institución mexicana de educación superior o cuando trabaje para una subsidiaria en el extranjero de una empresa mexicana, o cuando a juicio de la Secretaría exista causa justificada.

Art. 177. En caso justificado, la Secretaría por acuerdo del Secretario, del Subsecretario o del Comisionado podrá autorizar que el extranjero o extranjera puedan permanecer fuera del país por temporalidades mayores a las señaladas en el artículo 47 de la Ley.

Art. 178. Cuando un Inmigrante pretenda reinternarse al país, las autoridades migratorias deberán cerciorarse de que su documentación migratoria se encuentre vigente.

Si la documentación del extranjero o extranjera no se encontrara vigente, se le permitirá a éste su ingreso al país, para tramitar su refrendo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 179 de este Reglamento o, en su caso, solicitar, en un plazo no mayor de treinta días, su regularización migratoria, la que podrá autorizarse como corresponda, a juicio de la Secretaría.

Art. 179. Para los efectos del artículo 45 de la Ley, los inmigrantes tienen obligación de solicitar anualmente el refrendo de su documentación migratoria.

El refrendo se tramitará de conformidad con los siguientes requisitos:

- I. La solicitud deberá presentarse dentro de los treinta días anteriores a la fecha de vencimiento del permiso respectivo.

Las anualidades se contarán a partir de la fecha de internación del extranjero, si fue documentado fuera del país, o de la de despacho del oficio en que se otorgue la calidad de Inmigrante.

El inmigrante que se encuentre ausente del país, aun vencida la documentación, podrá solicitar el refrendo a su regreso, para lo cual tendrá un plazo de treinta días a partir de su reinternación; en todo caso deberá comprobar que se cumplió con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley;

- II. Tratándose de menores de edad, los refrendos deberán solicitarlos las personas bajo cuya dependencia se encuentren, llenando las condiciones señaladas en este artículo;
- III. Para la autorización del refrendo, el extranjero o extranjera deberá probar que subsisten las condiciones que fundamentaron el otorgamiento de la calidad de inmigrante, y
- IV. La Secretaría tendrá facultad discrecional para juzgar sobre el otorgamiento del refrendo, en el caso de que hubieren cambiado las condiciones señaladas en la autorización.

Art. 180. RENTISTA. Cuando se trate de los inmigrantes a que se refiere la fracción I del artículo 48 de la Ley, tendrán aplicación, para que se conceda el permiso, las siguientes reglas:

- I. El extranjero o extranjera deberá acreditar ante la Secretaría que cuenta con depósitos provenientes del exterior y que de éstos, de los rendimientos que produzcan o de sus inversiones en el país obtiene ingresos mensuales por una cantidad no menor del equivalente a cuatrocientos días el salario mínimo vigente para el Distrito Federal;
- II. Para el caso de familiares, el monto de los mínimos mensuales señalados en la fracción anterior, deberá aumentarse por la cantidad equivalente a doscientos días el salario mínimo vigente para el Distrito Federal por cada persona que integre la familia;
- III. Los montos antes señalados se comprobarán con carta de institución de crédito mexicana o extranjera o institución financiera similar o fideicomiso, en donde se demuestre que la persona cuenta con ingresos suficientes para cubrir las cantidades señaladas en las fracciones I y II durante un año;
- IV. La Secretaría podrá autorizar que el extranjero o extranjera acredite hasta el equivalente al cincuenta por ciento del monto señalado en la fracción

- I, cuando demuestre la adquisición de un bien inmueble destinado para uso propio como casa habitación;
- V. La Secretaría podrá autorizar que el extranjero realice otro tipo de actividades cuando lo considere conveniente para el beneficio del país, y
- VI. Para que se conceda el refrendo anual de la documentación de los Inmigrantes Rentistas, deberán justificar que subsisten las fuentes de ingresos mencionadas.

Art. 181. INVERSIONISTA. Tratándose de los inmigrantes a que se refiere la fracción II del artículo 48 de la Ley, se observarán las siguientes reglas:

- I. El permiso se concederá a los extranjeros y extranjeras para invertir su capital en la industria, comercio y servicios o en otras actividades económicas, de conformidad con las leyes nacionales. Asimismo, se concederá a los extranjeros o extranjeras que en cualquier otra forma contribuyan, a juicio de la Secretaría, al desarrollo económico y social del país;
- II. La inversión mínima será del equivalente a cuarenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En la solicitud el interesado expresará la industria, comercio o servicio en el que pretenda invertir, así como el lugar en que desea establecerla.

La inversión podrá consistir en acciones, partes sociales o certificados de participación, activos fijos o derechos de fideicomisario;

- III. El extranjero deberá acreditar la inversión a que se obligó, en un término de seis meses posteriores a la autorización. Este plazo podrá prorrogarse a juicio de la Secretaría.

El extranjero podrá acreditar la inversión con la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o en su caso, con la documentación que determine la Secretaría;

- IV. Cuando desaparezcan las condiciones a que se sujetó la estancia del extranjero en el país bajo esta característica migratoria, o transmita los derechos sobre su inversión, deberá dar aviso a la Secretaría dentro de los quince días siguientes a partir de la fecha en que ocurra dicha situación, en cuyo caso, se le señalará plazo que no excederá de treinta días, para salir del país o para que a juicio de la Secretaría, regularice su situación migratoria, y

V. El extranjero, al solicitar su refrendo anual deberá acreditar ante la Secretaría que subsisten las condiciones que dieron lugar a la autorización de su estancia.

El interesado podrá demostrar que subsiste el monto de la inversión mediante constancia del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Art. 182. PROFESIONAL. En el caso de los inmigrantes a que se refiere la fracción III del artículo 48 de la Ley, registrarán las normas siguientes:

- I. Esta característica podrá otorgarse cuando el extranjero o extranjera haya registrado ante las autoridades correspondientes el título profesional y obtenido, en su caso, la cédula respectiva para ejercer la profesión;
- II. Se dará preferencia a quienes sean profesores o investigadores destacados en alguna rama de la ciencia o de la técnica, o cuando se trate de disciplinas que estén insuficientemente cubiertas por mexicanos, y
- III. Para otorgar el refrendo anual de la documentación, deberá exhibirse constancia ante la Secretaría de que subsisten las condiciones bajo las cuales se autorizó dicha característica migratoria.

Art. 183. CARGO DE CONFIANZA. Para los inmigrantes comprendidos en la fracción IV del artículo 48 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:

- I. La autorización deberá ser solicitada por alguna empresa o institución establecida en la República;
- II. El cargo que desempeñe el extranjero o extranjera, para los efectos migratorios, deberá ser de dirección u otros de absoluta confianza a juicio de la Secretaría;
- III. Las empresas o instituciones que hubieren solicitado la autorización para la incorporación de un extranjero o extranjera, tendrán obligación de informar a la Secretaría cualquier circunstancia que modifique o altere las condiciones establecidas en la autorización. Esta obligación deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días;
- IV. Para solicitar esta característica migratoria, el extranjero deberá presentar:
 - a) Carta oferta de trabajo de la empresa o institución o el contrato de prestación de servicios. En ambos documentos deberá indicarse que su vigencia se sujeta a la autorización correspondiente de la Secretaría;
 - b) Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario público en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa, o la constancia del Registro Nacional de Inversiones

Extranjeras, y

- c) Última declaración del pago de impuestos de la empresa.

- V. Para conceder el refrendo anual, deberá exhibirse una constancia de la empresa, institución o persona para quien el extranjero preste su servicio, en la que se acredite ante la Secretaría que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de su característica migratoria.

Art. 184. CIENTÍFICO. Para los inmigrantes a que se refiere la fracción V del artículo 48 de la Ley, se observará lo siguiente:

- I. Deberán comprobar capacidad suficiente en la actividad científica que pretenden desempeñar;
- II. Cuando la Secretaría lo juzgue conveniente, el científico comprobará el cumplimiento de la obligación de instruir en su especialidad, cuando menos a tres mexicanos, y

- III. Para conceder el refrendo anual, deberá exhibirse una constancia de la empresa o institución pública o privada para quien el extranjero preste su servicio, en la que se acredite ante la Secretaría que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de su característica migratoria.

Art. 185. TÉCNICO. En el caso de los inmigrantes a que se refiere la fracción VI del artículo 48 de la Ley, se aplicarán las siguientes reglas:

- I. La autorización podrá ser solicitada por el extranjero o su representante, o bien, por una persona domiciliada en el país cuando el propósito sea que el extranjero vaya a trabajar a una empresa o institución de la que esta última sea propietaria o su representante, o por el propio interesado cuando pretenda trabajar en forma independiente;
- II. Quien solicite la autorización deberá justificar, ante la Secretaría, la necesidad de utilizar los servicios del técnico o especialista;
- III. Para solicitar esta característica migratoria, el extranjero o extranjera deberá presentar:
 - a) Contrato de prestación de servicio o de traspaso tecnológico o carta de petición de apoyo técnico a una empresa extranjera;
 - b) Acta constitutiva de la empresa o constancia expedida por notario o corredor público, en que conste la denominación, objeto social y el domicilio de la empresa, o en su caso, constancia de inscripción del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y
 - c) Última declaración del pago de impuestos de la empresa.
- IV. No será indispensable que el técnico o especialista exhiba título profesional, cuando por la naturaleza del trabajo ello no se requiera ni las leyes lo exijan, pero cuando la Secretaría estime necesario, se justificará que el extranjero posee la capacidad y conocimientos en la materia o especialidad a que se dedique;
- V. Cuando la Secretaría lo juzgue necesario, el técnico comprobará el cumplimiento de la obligación de instruir en su especialidad, cuando menos a tres mexicanos, y
- VI. Para conceder el refrendo anual, deberá acreditarse ante la Secretaría, que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de la característica migratoria.

El técnico podrá demostrar que continúa desempeñando sus servicios, con constancia de la empresa o, en su caso, con la documentación que determine la Secretaría.

Art. 186. FAMILIARES. La admisión de los inmigrantes a que se refiere la fracción VII del artículo 48 de la Ley, se someterá a las siguientes condiciones:

- I. La solicitud deberá hacerla la persona bajo cuya dependencia económica vaya a vivir el interesado, quien deberá acreditar su calidad de Inmigrante, Inmigrado o comprobar su nacionalidad mexicana;

- II. El solicitante deberá probar el vínculo que requiere la Ley. Cuando se trate del cónyuge deberá manifestarse el domicilio conyugal;
- III. Los hijos y hermanos del solicitante sólo podrán ser admitidos dentro de esta característica, cuando sean menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente comprobado para trabajar o estén estudiando en forma estable;

Las personas mencionadas en el párrafo anterior, cuando sean mayores de edad y no realicen alguna actividad, aunque no tengan impedimento para trabajar, podrán continuar bajo esta característica migratoria, cuando a su juicio la Secretaría lo considere conveniente y siempre que el solicitante manifieste que seguirán bajo su dependencia económica;

- IV. El solicitante acreditará su solvencia económica, la cual deberá ser suficiente, a juicio de la Secretaría, para atender las necesidades de sus familiares;
- V. Los Inmigrantes familiares podrán realizar actividades económicas, remuneradas o lucrativas, cuando a juicio de la Secretaría existan circunstancias que lo justifiquen.

Atendiendo a las circunstancias de cada caso, la Secretaría podrá otorgar autorizaciones para realizar las actividades a que se refiere el párrafo precedente a los familiares de los representantes diplomáticos o consulares de otro país acreditados en México, y

- VI. Al solicitar el refrendo anual se deberá justificar que la persona bajo cuya dependencia económica vive el inmigrante familiar cuenta con los recursos suficientes para su sostenimiento. En su caso, deberá presentarse constancia de que subsiste el vínculo matrimonial.

Art. 187. ARTISTAS Y DEPORTISTAS. Para los inmigrantes a que se refiere la fracción VIII del artículo 48 de la Ley, se aplicarán las siguientes normas:

- I. La Secretaría autorizará bajo esta característica migratoria a los extranjeros y extranjeras cuando a su juicio considere que sus actividades contribuyen a la creatividad y difusión artística y deportiva del país;
- II. El otorgamiento de esta característica migratoria, podrá ser solicitada por alguna empresa, institución o asociación, o bien, por el extranjero o su representante cuando pretenda realizar actividades en forma independiente, y
- III. Para el refrendo anual deberá acreditarse de conformidad con los requisitos establecidos por la Secretaría, que subsisten las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización de esta característica migratoria.

Art. 188. ASIMILADO. Para los inmigrantes a que se refiere la fracción IX del artículo 48 de la Ley se aplicarán las siguientes reglas:

La característica se podrá conceder, por la Secretaría, al extranjero o extranjera que manifieste su interés en continuar residiendo en el país, a efecto de llegar a obtener

la calidad de inmigrado y que no encuadre en ninguna de las otras características a las que alude dicho artículo; siempre y cuando acredite que ha realizado alguno de los supuestos de asimilación que se detallan a continuación:

- I. Si tiene o tuvo vínculo matrimonial con mexicana o mexicano y cuente con una estancia legal en el país de tres años anteriores a la fecha de la solicitud;
- II. Si vive en unión libre con mexicana o mexicano y cuenta con una estancia legal en el país de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud;
- III. Si tiene o tuvo hijo mexicano, consanguíneo o por adopción y cuente con una estancia legal en el país de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud; para la acreditación del presente supuesto el interesado podrá presentar las pruebas documentales que en derecho proceda.

Adicionalmente, deberá acreditar que cumple con las obligaciones que en materia de alimentos le impongan las disposiciones respectivas;

- IV. Si es designado tutor o curador de un mexicano o mexicana menor de edad o mayor de edad incapacitado, debe acreditarlo conforme a las disposiciones legales aplicables. Adicionalmente, deberá acreditar que cumple con las obligaciones que en materia de alimentos le impongan las disposiciones respectivas y cuente con estancia legal en el país de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud, y
- V. Si cuenta con una estancia como No Inmigrante Visitante mayor de cinco años a la fecha de la presentación de la solicitud respectiva.

En casos excepcionales, el Secretario, el Subsecretario o el Comisionado podrán autorizar el otorgamiento de esta característica a aquellos extranjeros que no cumplan con los requisitos previstos en el presente artículo.

En todos los casos los interesados deberán señalar las actividades que pretendan realizar, acreditar solvencia económica, demostrar su residencia legal en el país al momento de la presentación de la solicitud y acreditar el cabal cumplimiento de las disposiciones legales en materia migratoria.

Art. 189. Para los efectos del artículo 48 fracción VIII de la Ley, se consideran actividades análogas, las de promoción artística, deportiva y cultural, y las demás que a su juicio determine la Secretaría.

Sección V.

Inmigrados

Art. 190. Para obtener la calidad de Inmigrado, el Inmigrante requiere:

- I. Presentar solicitud dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que venza el cuarto refrendo de su calidad de Inmigrante. Si no lo hiciere así, el extranjero o extranjera deberán solicitar su regularización si es su interés permanecer en el país;

- II. Comprobar que la actividad a que se dedica el interesado o su condición migratoria son las mismas para las cuales está autorizado, y manifestará a las que pretenda dedicarse;
- III. Tratándose de menores, la solicitud para obtener la calidad de Inmigrado deberá ser formulada por quien ejerza la patria potestad o la tutela, y en su defecto por aquellas personas con quienes el menor o la menor viva o de quienes dependan económicamente, y
- IV. La solicitud de Inmigrado podrá presentarse aunque el interesado se encuentre fuera del país, dentro del plazo que señala la fracción I de este artículo y siempre que su ausencia no exceda de los términos a que se refieren los artículos 47 de la Ley y 176 de este Reglamento; pero no se hará la declaración respectiva hasta que el extranjero o extranjera regrese al país. El interesado deberá presentarse a ratificar su solicitud, dentro de los quince días siguientes a su regreso al país.

Art. 191. Para negar el reconocimiento de la calidad de Inmigrado, no será aplicable lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 37 de la Ley.

Art. 192. Sólo por circunstancias excepcionales y por acuerdo expreso del Secretario, Subsecretario o Comisionado, se podrá ampliar el plazo señalado en la fracción I del artículo 190 de este Reglamento, siempre y cuando las ausencias del país no excedan los términos a que se refieren los artículos 47 de la Ley y el 176 de este Reglamento.

Art. 193. La tramitación de solicitudes para obtener la calidad de Inmigrado se regirá por las reglas siguientes:

- I. El tiempo que un extranjero o extranjera haya permanecido en el país al amparo de situaciones migratorias que hayan sido canceladas o de calidad distinta a la de Inmigrante, no se computará para el efecto de hacer la declaración de Inmigrado;
 - II. Las oficinas centrales estudiarán los antecedentes del interesado; verificarán que se haya cumplido con las condiciones que se le señalaron; se cerciorarán de que su estancia y entrada en el país hayan sido legales y harán el cómputo de su residencia en los términos y para los efectos del artículo 47 de la Ley, y
 - III. El reconocimiento de la calidad de Inmigrado es estrictamente personal.
- Art. 194.* El Inmigrado quedará sujeto a las condiciones siguientes:

- I. Las limitaciones a sus actividades, las fijará la Secretaría en el oficio y en el documento que acrediten su calidad migratoria o en cualquier tiempo mediante acuerdos de carácter general;
- II. El Inmigrado no tendrá restricción alguna para realizar inversiones, salvo lo dispuesto por otros ordenamientos legales;

- III. En caso de perder la calidad de Inmigrado en los supuestos señalados en el artículo 56 de la Ley, el extranjero deberá regularizar su situación migratoria si desea permanecer en el país, y
- IV. No se computará como ausencia para los efectos del artículo 56 de la Ley, el tiempo que se encuentre fuera del país al Inmigrado que demuestre que realiza estudios de postgrado en el extranjero, respaldado por una institución mexicana de educación superior o cuando trabaje para una subsidiaria de una empresa mexicana en el exterior, o cuando, a juicio de la Secretaría exista causa justificada.

Capítulo Octavo

Verificación y vigilancia

Art. 195. De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 151 de la Ley, la Secretaría, a través del personal de los servicios migratorios y de la Policía Federal Preventiva, tendrá facultad para ejercer sobre los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el país, las funciones de verificación y vigilancia que correspondan.

Las autoridades migratorias substanciarán los procedimientos correspondientes y aplicarán las sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales, observando en todo caso, el respeto a los derechos humanos, y con apego a los procedimientos legales correspondientes.

Para el procedimiento de verificación y vigilancia será aplicable supletoriamente lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Art. 196. El procedimiento de verificación migratoria se sujetará a lo siguiente:

- I. El servidor público que realice la verificación que corresponda, deberá contar con un oficio de comisión, el cual hará constar el objeto del acto de verificación, el lugar donde éste va a efectuarse y el nombre de la persona a la que va dirigido, en el caso de que se disponga de éste, fecha, fundamento legal, así como el nombre, firma y cargo del servidor público que lo expide y del que la realizará.

A petición expresa del Instituto, la Policía Federal Preventiva realizará labores de vigilancia en lugares específicos;

- II. El personal comisionado deberá identificarse ante el extranjero o extranjera, o la persona ante quien se realice la verificación, con la credencial que lo acredite como servidor público del Instituto y, en su caso, de la Policía Federal Preventiva, ambas de la Secretaría, y
- III. De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos; de la misma se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afec-

tará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en el acta.

Art. 197. Del resultado del acto de verificación, la autoridad determinará si es necesaria la comparecencia del extranjero o extranjera. En tal caso, le será enviado el citatorio correspondiente, a fin de que se presente, dentro del término que se le fije, ante la autoridad que corresponda, la cual levantará el acta administrativa conducente en presencia de dos testigos, y procederá a entregar copia autógrafa de la misma al interesado.

Art. 198. Cuando la persona encargada de realizar funciones de verificación o vigilancia sorprenda o encuentre a cualquier persona incurriendo en alguno de los supuestos que ameriten expulsión, en los términos del artículo 125 de la Ley, deberá ponerla de inmediato a disposición de la autoridad competente, para que ésta proceda en los términos previstos por la Ley.

Art. 199. Cuando del resultado del acto de verificación migratoria se sorprenda o encuentre a cualquier persona extranjera incurriendo en alguna infracción a lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión, el servidor público respectivo deberá llevar a cabo su aseguramiento, poniéndola de inmediato a disposición de la autoridad competente, para que ésta proceda en los términos previstos por la Ley e informe a sus superiores.

Art. 200. En caso de comisión de un delito que se persiga de oficio, se procederá a poner a la persona, objetos y valores que tengan relación con el ilícito a disposición de la autoridad ministerial competente.

Art. 201. Las autoridades de la República a que se refiere el artículo 67 de la Ley, están obligadas a poner de inmediato a disposición de la Secretaría, a los extranjeros que no acrediten su legal estancia en el país. En caso de incumplimiento se aplicará la sanción prevista por el artículo 114 de la Ley.

Art. 202. Las autoridades judiciales y administrativas a que se refieren los artículos 72 y 73 de la Ley, están obligadas a poner en conocimiento de la Secretaría, la filiación de los extranjeros que se encuentren sujetos a proceso, en el momento en que éste se inicie, indicando, además, el delito del que sean probables responsables.

Deberán comunicar a la Secretaría, la sentencia dictada dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ésta se haya emitido.

Una vez que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, la autoridad que corresponda deberá comunicarlo de inmediato a la Secretaría y poner al extranjero o extranjera a disposición de las autoridades migratorias para que resuelvan lo conducente, respecto de su situación migratoria.

En caso de incumplimiento a lo establecido en este precepto, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 114 de la Ley; pero si la falta constituye delito, la Secretaría formulará la querrela correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 143 del mismo ordenamiento legal.

Art. 203. Cuando la autoridad migratoria lo considere conveniente, podrá citar al extranjero o extranjera a comparecer ante la misma para el desahogo de una diligencia de carácter migratorio.

En todo caso, se observarán las disposiciones señaladas en los artículos 154 y 155 de la Ley.

Art. 204. La autoridad migratoria recibirá las denuncias que se le presenten en forma verbal o por escrito, mismas que deberán contener el nombre del denunciante, nacionalidad, domicilio y una relación sucinta de los hechos; debiendo acompañar las pruebas con que se cuenta.

Art. 205. Cuando el procedimiento de verificación se derive de la presentación de una denuncia, la autoridad migratoria tendrá la obligación de informar al denunciante el resultado de la investigación correspondiente.

Art. 206. Las autoridades administrativas y judiciales, personas físicas o morales estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría los informes que sobre esta materia les solicite.

Art. 207. Cuando, en términos del artículo 152 de la Ley, se asegure a un extranjero o extranjera, el asegurado será puesto de inmediato a disposición del responsable de la estación migratoria, quien lo comunicará por escrito a sus superiores jerárquicos.

Art. 208. Las estaciones migratorias son las instalaciones físicas a cargo del Instituto, para el aseguramiento de extranjeros en los términos que señala la Ley. El Secretario expedirá las disposiciones administrativas que regirán las mismas, las cuales preverán, cuando menos, lo relativo a los siguientes aspectos:

- I. Objeto del aseguramiento;
- II. Duración máxima de la estancia de los extranjeros o extranjeras asegurados, y
- III. Respeto a los derechos humanos de los asegurados.

Art. 209. Cuando se asegure al extranjero o extranjera en la estación migratoria en virtud de haber violado la Ley, este Reglamento o demás disposiciones aplicables que amerite su expulsión, se procederá de la siguiente forma:

- I. Se le practicará examen médico, mediante el cual se certificarán las condiciones psicofísicas del mismo;
- II. Se le permitirá comunicarse con la persona que solicite, vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga;
- III. Se notificará de inmediato a su representante consular acreditado en México, y en caso de no contar con pasaporte se solicitará la expedición de éste o del documento de identidad y viaje;
- IV. Se levantará inventario de las pertenencias que traiga consigo, mismas que se depositarán en el área establecida para ello;
- V. Se procederá a su declaración mediante acta administrativa y en presencia de dos testigos, haciéndole saber los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; ello siempre y

cuando la autoridad migratoria no lo hubiere declarado al momento de ser asegurado. En caso de ser necesario, se habilitará traductor para el desahogo de la diligencia.

Al momento de ser levantada el acta, se notificará al extranjero o extranjera el derecho que tiene a nombrar representante o persona de su confianza que lo asista durante la misma; el extranjero o extranjera tendrá acceso al expediente que sobre el particular se integre;

- VI. Se le proporcionará durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;
- VII. Tendrá derecho a ser visitado durante su estancia por sus familiares, su representante o persona de su confianza;
- VIII. Cuando se trate de aseguramiento de familias, se alojarán en la misma instalación y la autoridad permitirá la convivencia diaria, de conformidad con las disposiciones administrativas aplicables, y
- IX. Al momento de ser autorizada la salida del extranjero o extranjera de la estación migratoria, se le devolverán todas las pertenencias que le hayan sido recogidas en su ingreso, excepto la documentación falsa que haya presentado.

De todo lo anterior, se asentará constancia en el expediente correspondiente.

Art. 210. La Secretaría, una vez cubiertos los requisitos de este Capítulo, resolverá lo conducente en un máximo de quince días hábiles, debiendo notificarlo al interesado, personalmente, a través de su representante legal, o por correo certificado con acuse de recibo; en este caso, se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción para determinar la sanción a que la persona se haya hecho acreedora, debiendo siempre tomar en cuenta las circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas que aporte el infractor y lo que manifieste al respecto.

Art. 211. Cuando en términos del artículo 125 de la Ley se decrete la expulsión de un extranjero o extranjera del territorio nacional, se observará lo siguiente:

- I. La orden de expulsión se ejecutará de inmediato previa notificación personal; cuando por circunstancias ajenas a la autoridad migratoria no se pueda ejecutar la orden de expulsión, ésta podrá ampliar la temporalidad señalada, debiéndose fundar y motivar el acuerdo correspondiente, y
- II. Cuando un representante consular acreditado, un extranjero o extranjera con residencia legal, o un mexicano o mexicana lo solicite, el extranjero o extranjera podrá ser puesto bajo su custodia, siempre y cuando acredite los supuestos previstos en el artículo 153 de la Ley; la custodia tendrá vigencia en tanto no se ejecute la orden de expulsión correspondiente.

Art. 212. De conformidad con las circunstancias de cada caso, la autoridad podrá sustituir la orden de expulsión por un oficio de salida, siempre y cuando se acredite alguno de los siguientes supuestos:

- I. Que no se trate de un extranjero o extranjera que viole en forma reiterada la Ley;
- II. Que el extranjero o extranjera lo solicite de manera voluntaria, o
- III. Como consecuencia de un trámite migratorio.

Una vez cumplimentado el oficio de salida voluntaria, el extranjero podrá re-ingresar al país, previo cumplimiento de los requisitos que la autoridad migratoria determine.

Capítulo noveno

Emigración

Art. 213. En los casos de emigración de trabajadores mexicanos, la Secretaría podrá proceder en la siguiente forma:

- I. Conducir hacia la autoridad competente a los presuntos emigrantes, a fin de que puedan obtener la información necesaria sobre oferta de trabajo en el extranjero, y
- II. Velar porque los procesos de contratación de la mano de obra mexicana se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos de los trabajadores.

Art. 214. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley, las agencias de contratación colectiva para la migración de trabajadores mexicanos sólo podrán establecerse en el país previa autorización de la Secretaría, sin perjuicio de que se cumpla con lo dispuesto por otros ordenamientos legales aplicables.

Art. 215. La salida del país de menores mexicanos o extranjeros, se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Deberán ir acompañados de las personas que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la tutela, en su caso, o acreditar el permiso concedido al efecto por dichas personas o por las autoridades que tengan facultad para otorgarlo. Si se trata de menores extranjeros que entraron al país solos, podrá omitirse este requisito, y
- II. Cuando se trate de menores de nacionalidad mexicana que salgan del país sin ser acompañados de sus padres o tutores, la presentación del pasaporte vigente se tendrá como prueba de consentimiento.

Capítulo Décimo

Repatriación

Art. 216. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promoverán acuerdos en materia de Repatriación Segura y Ordenada.

Las oficinas de migración en los puertos de entrada tomarán las medidas necesarias para la recepción, en los lugares y horarios establecidos, de los mexicanos regresados a territorio nacional.

Art. 217. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, auspiciará convenios con

los Gobiernos Estatales y con los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, en los que establezcan mecanismos de colaboración y coordinación para llevar a cabo acciones en beneficio de los menores migrantes repatriados, a fin de garantizar los derechos que les confieren las leyes.

Art. 218. La Secretaría, en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, así como con organismos, instituciones y empresas de los sectores público, social y privado, procurará brindar apoyo para el traslado a los lugares de origen, o cercanos a éstos, de mexicanos repatriados a territorio nacional.

Capítulo Décimo Primero

Sanciones

Art. 219. La facultad de imponer las sanciones establecidas en la Ley, compete al Secretario, al Subsecretario y al Comisionado.

El Secretario, el Subsecretario o el Comisionado podrán delegar la facultad de imponer las sanciones administrativas señaladas en los artículos 113, 114, 115, 116, 124, 125, 128 y 135 de la Ley.

Art. 220. Fuera de los casos señalados en el artículo anterior, tienen facultad delegada para imponer directamente sanciones:

- I. Los Directores y Subdirectores de Área, Jefes de Departamento, Delegados y Subdelegados Regionales y Locales de servicios migratorios que tengan a su cargo servicios relativos a las materias de la Ley, cuando se trate de las sanciones pecuniarias que establece la misma;
- II. El Director de Área correspondiente, cuando se trate de cancelar la documentación migratoria de un extranjero o extranjera por violaciones al artículo 58 de la Ley y 168 fracción VI de este Reglamento;
- III. El Director de Área correspondiente, en los casos previstos en los artículos 43, 46, 47 y 56 de la Ley y en el 139 y 141 de este Reglamento;
- IV. En todos los demás casos de infracción a la Ley o a este Reglamento en materia migratoria que no se encuentren específicamente previstos, las sanciones serán impuestas por acuerdo expreso del Comisionado, y
- V. Las demás autoridades migratorias sin facultad para imponer alguna sanción, tendrán la obligación de consignar en un acta las infracciones a la Ley que sean de su conocimiento, enviando el original de la misma a su superior jerárquico y, en su caso, al servicio central para que resuelva lo que proceda.

Art. 221. Tratándose de las sanciones administrativas previstas en la Ley, la autoridad administrativa fundará y motivará su resolución, considerando:

- I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;
- II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

- III. La naturaleza y gravedad de los hechos;
- IV. La conducta reiterada del infractor, y
- V. La situación económica del infractor.

Art. 222. Cuando la infracción implique la comisión de un delito se procederá por las autoridades migratorias a levantar una acta administrativa en la que se consignen con toda claridad los hechos y los documentos y, en general, las pruebas respectivas. El original del acta así levantada, con sus anexos, se enviará al agente del Ministerio Público Federal que corresponda, para los efectos a que hubiere lugar, y una copia a las Coordinaciones correspondientes del Instituto.

Art. 223. La Secretaría pondrá a disposición de la autoridad competente los vehículos y demás bienes que tengan relación con los delitos previstos en la Ley de la materia.

Art. 224. Cuando la infracción se sancione con arresto, el detenido quedará a disposición de las autoridades correspondientes, las cuales serán responsables de su cumplimiento.

Art. 225. Para la ejecución de las órdenes de expulsión que la Secretaría determine, se tomarán las medidas adecuadas, entre ellas el separo o aseguramiento de los extranjeros en estaciones migratorias, vigilándose el respeto de los derechos humanos.

Las autoridades federales y locales, así como las empresas de transporte, darán toda clase de facilidades a las autoridades migratorias para que se cumpla con las órdenes de expulsión que al respecto dicte la Secretaría.

Art. 226. Los servidores públicos y empleados de los servicios migratorios serán responsables de su actuación, en los términos establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Capítulo Décimo Segundo

Recurso de revisión

Art. 227. El Recurso de revisión promovido en contra de las resoluciones que dicte la autoridad migratoria, se regirá por lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Art. 228. Cuando se trate del recurso interpuesto contra las resoluciones a que se refiere el artículo 37 de la Ley, el Secretario o el Subsecretario, una vez dictada la resolución definitiva, podrán ordenar discrecionalmente la reposición del procedimiento, o en su caso, la emisión de una nueva resolución.

En el desahogo de la presente facultad discrecional la autoridad está obligada a preservar las garantías de legalidad y debido proceso.

Art. 229. Los casos de solicitud de acuerdo de readmisión a la que alude el artículo 126 de la Ley, se sujetarán a los siguientes principios:

- I. La solicitud deberá ser presentada por el interesado o su representante legal, señalando el motivo de la misma y bajo qué característica migratoria desea reinternarse al país;

- II. Deberá acompañar todas las pruebas que considere pertinente;
- III. La autoridad migratoria podrá allegarse de todos los medios de convicción que considere pertinentes para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley, y
- IV. La resolución correspondiente deberá ser emitida en un plazo no mayor de noventa días naturales; transcurrido dicho plazo sin que la misma se dicte, se entenderá que es en sentido negativo.

Capítulo Décimo Tercero

Distribución de fondos de estímulos y recompensas

Art. 230. De acuerdo con lo previsto por el artículo 144 de la Ley, los fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento del personal que realice funciones de servicios migratorios, se formarán del importe de las multas efectivamente pagadas y que hubieren quedado firmes, salvo que por Ley estén destinadas a otros fines.

Art. 231. Para los efectos de este Capítulo, los servidores públicos del Instituto se agruparán en las categorías necesarias de acuerdo a las funciones que tengan asignadas en la dependencia o en la unidad administrativa en la que prestan sus servicios.

Art. 232. Del total de los ingresos de los fondos se asignará un monto distribuible por cada categoría establecida.

Art. 233. La asignación de los fondos se hará por cada categoría, tomando en consideración los siguientes aspectos: número de servidores que la integra, niveles de responsabilidad que comprende, percepciones promedio mensuales, así como los propios derivados del tipo de función asignada.

Art. 234. Para la distribución individual del monto asignado a cada categoría, se realizará una evaluación personal del desempeño de cada uno de los servidores públicos que integran dicha categoría.

La evaluación se formulará atendiendo a criterios objetivos que permitan calificar integralmente el desempeño de la función asignada a cada servidor público. La evaluación estará a cargo de los responsables de cada unidad administrativa respecto del personal adscrito a la misma y validada por el superior jerárquico inmediato del responsable de la unidad.

Art. 235. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por unidad administrativa, las establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría y en el Manual de Organización del Instituto.

Art. 236. Del resultado de la evaluación individual en cada categoría, se establecerá un sistema de puntuación que, en relación al monto económico asignado a la categoría, permita distribuir de manera individual el importe total de la categoría respectiva.

Art. 237. La asignación individual de estímulos y recompensas se cubrirá por cada categoría, en forma mensual o trimestral.

Art. 238. La Secretaría y las dependencias federales competentes, establecerán los mecanismos de coordinación necesarios a fin de que la constitución de los fondos y la liberación de los recursos para el pago a los servidores públicos sean expeditos.

Art. 239. La Secretaría emitirá el manual correspondiente que norme el procedimiento administrativo detallado para el control, distribución y pago de los fondos señalados en este capítulo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento de la Ley General de Población publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1992, así como la Circular número INM/001/98 en la que se detallan las reglas a las que se sujetará el permiso de internación para visitantes miembros de organizaciones no gubernamentales interesados en conocer in situ la vigencia de los derechos humanos en México, publicada en dicho órgano informativo el 14 de octubre de 1998.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Para los asuntos que se encuentren en trámite, se seguirán aplicando las reglas generales expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, excepto cuando las disposiciones contenidas en éste benefician a los interesados.

CUARTO. Las disposiciones relativas al Registro Nacional de Población se irán aplicando conforme se vayan instrumentando las acciones previstas en el Programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos a que se refiere el artículo tercero transitorio del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de julio de 1992.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de abril de dos mil. Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica. El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano. Rúbrica. La Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green Macías. Rúbrica. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Ángel Gurría. Rúbrica. El Secretario de Desarrollo Social, Carlos Jarque Uribe. Rúbrica. El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza. Rúbrica. El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán. Rúbrica. El Secretario de Salud, José Antonio González Fernández. Rúbrica. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Mariano Palacios Alcocer. Rúbrica. El Secretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal. Rúbrica.

TERCERA PARTE

ANÁLISIS POLÍTICO Y
SOCIAL DE LA CUESTIÓN
MIGRATORIA MÉXICO-
EUA, SIGLOS XVIII-XXI

1. TIPOS DE INMIGRANTES

Las leyes norteamericanas contemplan varios tipos de extranjeros que, por varias razones, han sido admitidos legalmente en Estados Unidos. En la Unión Americana se define a un extranjero como cualquier persona que no es un nacional norteamericano. La nacionalidad estadounidense se puede adquirir mediante el nacimiento en territorio norteamericano, independientemente de la nacionalidad de los padres, por naturalización o por sanguinidad.

1.1 Extranjeros Admitidos Legalmente

La Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense consigna dos tipos de extranjeros legalmente admitidos: los no inmigrantes y los inmigrantes.

1.1.1 *No inmigrantes.* Un no inmigrante es aquella persona que fue admitida en territorio norteamericano por un tiempo o propósito definido. En esta situación se encuentran turistas, estudiantes, ciertos profesionistas y trabajadores migratorios, también conocidos como trabajadores temporales. Estos últimos son admitidos bajo la fracción 101 (15) (H) (ii) de la Ley de Inmigración; los trabajadores agrícolas dentro de esta categoría son admitidos bajo el subinciso A, y por esa razón. Son conocidos como trabajadores H-2A. La ley que permite el ingreso de trabajadores temporales fue enmendada por la Ley de Control y Reforma Migratoria de 1986, conocida como Ley Simpson-Rodino. Ésta señala explícitamente que éstos deben llevar a cabo un trabajo no calificado, siempre y cuando no exista disponibilidad de nacionales para realizarlo, y deben recibir un sueldo que no sea inferior al percibido por estadounidenses en la misma zona y ocupación.

1.1.2 *Inmigrantes.* Esta categoría la obtienen los extranjeros que han sido admitidos por las autoridades estadounidenses para residir en forma definitiva en Estados Unidos. En general, según la práctica y leyes norteamericanas, los inmigrantes tienen casi todos los derechos que los norteamericanos, con las siguientes excepciones: no pueden votar ni ocupar puestos de elección, y algunos empleos les son prohibidos. Estos extranjeros tienen la opción, si así lo desean, de obtener la nacionalidad norteamericana por naturalización, generalmente después de haber permanecido cinco años

en el país. Cabe señalar que la enmienda Simpson-Rodino no modificó los estatutos vigentes sobre la forma y el número de inmigrantes admitidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad divide a los solicitantes de una visa de inmigrantes en dos categorías: los que están sujetos a una limitación numérica anual llamada “cuota” y aquéllos que no están sujetos a ella. La Ley actual exime de esa limitación a parientes “inmediatos” de un ciudadano estadounidense (cónyuge, padre o hijo menor). Todos los demás extranjeros, con excepción de los refugiados, son admitidos de acuerdo con el límite numérico establecido, el cual es de 20 mil visas anuales por país y 270 mil visas “cuotas” para todos los extranjeros cada año. Durante los últimos años, se han otorgado todas las visas “cuotas” a solicitantes mexicanos y, además, alrededor de 40 mil visas anuales a solicitantes de parientes inmediatos. Debido a que se han acumulado muchas más de 20 mil solicitudes tipo “cuota” de mexicanos, estos solicitantes, dependiendo de la categoría dentro de las que hayan presentado su solicitud, se enfrentaron a una demora de varios años para conseguir la visa. En 43 años, de 1924 a 1967, se admitieron 1 045 631 inmigrantes mexicanos, y en los 17 siguientes, de 1968 a 1985, 1 088 902. Durante el segundo periodo, los mexicanos han constituido la nacionalidad numérica superior entre los inmigrantes a Estados Unidos y su proporción en el año fiscal 1985 es típico de los años pasados: 61 290 mexicanos admitidos de un total de 570 009 inmigrantes.¹

1 35 Articles were approved.

2. DISCURSO GEORGE WASHINGTON 1789-1797

2.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(18 de septiembre de 1789)*

Establecer y mantener la paz y la tranquilidad de la frontera por medio de guarniciones militares es, asimismo, un asunto que merece vuestra seria consideración.

2.2 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1796)*

El tratado celebrado con España estipula que los comisionados encargados de trazar la frontera entre el territorio de los Estados Unidos y las provincias de la Florida Oriental y Occidental de Su Majestad Católica deberán reunirse en Natchez a más tardar en los seis meses siguientes al canje de ratificaciones, que se efectuó en Aranjuez el 25 de abril; asimismo, las tropas de Su Majestad Católica que ocupan puestos dentro de los límites de los Estados Unidos deberán retirarse en este lapso.

2.3 MENSAJE DE DESPEDIDA *(17 de septiembre de 1797)*

Observad buena fe y justicia con todas las naciones. Cultivad la paz y la armonía con todas.

Europa tiene una serie de intereses primarios que no tienen relación alguna con nosotros, o si la tienen es muy remota.

¿Por qué hemos, de enredar nuestra paz y prosperidad en las redes de la ambición, la rivalidad, el interés o el capricho europeo, entreverando nuestros destinos con los de cualquier parte de Europa?

Nuestra política es apartarnos de alianzas permanentes con cualquier parte del mundo extranjero; quiero decir, en lo que nos sea dado hacerlo actualmente, pues no se interprete como capaz de preconizar la deslealtad a los compromisos existentes.¹

1 ÁLVAREZ, José Rogelio (Director): Enciclopedia de México, Tomo V, Secretaría de Educación Pública, Edición Especial, México, 1997, pp. 2573 y 2574.

3. DISCURSO JOHN ADAMS 1797-1801

3.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*8 de diciembre de 1797*)

Había abrigado la esperanza de que pudiera comunicarles, al inicio de esta sesión, la agradable noticia de la cabal ejecución de nuestro tratado con Su Majestad Católica (Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre España y los Estados Unidos firmado el 27 de octubre de 1795 y ratificado el 25 de abril de 1796) en lo referente al retiro de sus tropas de nuestro territorio y a la demarcación de los límites. Sin embargo, de acuerdo con los últimos informes, las guarniciones españolas siguen destacadas en nuestro país y no se ha procedido al trazado de la línea divisoria.

3.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*8 de diciembre de 1798*)

Una vez que las tropas españolas evacuaron los puestos que ocupaban en Natchez y en Walnut Hills, el comisionado de los Estados Unidos procedió a realizar sus tareas con el fin de determinar el punto límite, cerca del Mississippi, correspondiente a la parte más septentrional del grado treinta y uno, latitud norte. Con base en esto, el mismo comisionado trazó la línea de demarcación entre los Estados Unidos y España. Acto seguido, se unió a él el comisionado español y al confirmarse los trabajos realizados, juntos procedieron a delimitar la frontera.¹

1 AMPUDIA, Ricardo: México en los informes presidenciales de los Estados Unidos de América, Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1996, pp. 37.

4. LEY DE EXTRANJEROS Y SEDICIÓN

En 1797, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Extranjeros y Sedición, que autorizaba la expulsión de inmigrantes considerados peligrosos o subversivos. Respuestas del gobierno a las ideas de la Revolución Francesa, que aparentemente introducían algunos extranjeros, sólo estuvo en vigor tres años. Después se adoptó una política llamada de “puerta abierta” porque no se dictaron medidas federales para controlar la inmigración. Durante la primera mitad del siglo XIX, la inmigración provenía principalmente de los países noroccidentales de Europa. Se reconocía que la mano de obra inmigrante era indispensable para el crecimiento de la economía y ello permitió la consolidación del territorio anexado por Estados Unidos en el oeste y el sur. Sin embargo, algunos sectores expresaron que los extranjeros quitaban el empleo a los nacionales, eran portadores de enfermedades o ideas peligrosas, y no se integraban o no tenían la capacidad para incorporarse a la sociedad norteamericana. En términos generales, desde principios del siglo XIX las leyes estimularon la inmigración, debido a que muchas de ellas se propusieron mejorar el transporte marítimo utilizado para transportar extranjeros a ese país.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 38.

5. DISCURSO THOMAS JEFFERSON 1801-1809

5.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1801)*

Las declaraciones de disposición amistosa, recibidas de todos los poderes con los cuales tenemos relaciones, han inspirado la confianza de que nuestra paz con ellos no se verá perturbada.

También prevalece entre nuestros vecinos un espíritu de paz y amistad.

5.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(15 de diciembre de 1802)*

La cesión de la provincia española de la Luisiana a Francia, que tuvo lugar en el curso de la última guerra entre los dos poderes, tendrá sin duda un importante impacto en las deliberaciones de nuestra política exterior.

5.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(17 de octubre de 1803)*

El ilustrado gobierno de Francia vio, con justo discernimiento, la importancia para ambas naciones de arreglos generosos adaptados óptimamente a promover de modo permanente la paz, la amistad y los intereses de ambos; y la propiedad y soberanía de toda la Luisiana, que había sido devuelta a los franceses, ha sido transferida bajo ciertas condiciones a los Estados Unidos, por instrumentos fechados el pasado 30 de abril.

Si la adquisición de la Luisiana fuese constitucionalmente confirmada y llevada a efecto, una suma de casi trece millones de dólares será añadida a nuestra deuda pública.

5.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de noviembre de 1804)*

Sé que la adquisición de la Luisiana ha sido desaprobada por algunos, partiendo del sincero temor de que el aumento de nuestro territorio ponga en peligro la Unión. Sin embargo, ¿quién puede limitar la extensión dentro de la que opera con eficacia el principio federativo? Cuanto más extensa sea nuestra asociación, menos trastornada se verá por pasiones locales; y en cualquier caso, ¿no será mejor que la otra orilla del

Mississippi sea colonizada por nuestra propia estirpe y por sus hijos, en vez de por extraños de otra familia? ¿Con quién tenderemos más a vivir en armonía y amistoso intercambio?

5.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1805*)

En lo que respecta a España, las negociaciones encaminadas a una solución de nuestras diferencias con ella y sus provincias no han tenido un resultado satisfactorio. Las propuestas para llegar a un acuerdo favorable sobre las fronteras del territorio de la Luisiana no han sido aceptadas. Mientras la situación no se defina, nosotros hemos evitado, por lo pronto, tomar nuevos puestos o fortalecer nuestras posesiones en los territorios disputados.

5.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (*2 de diciembre de 1806*)

Habiendo recibido información de que, en algunas partes de los Estados Unidos, grupos de individuos se estaban organizando para llevar a cabo acciones armadas fuera de la ley contra territorios españoles, consideré necesario tomar medidas para evitarlas, ordenando el arresto y el castigo tanto para los líderes como para todos los infractores.

La necesidad o no de aumentar nuestras fuerzas regulares dependerá del resultado de las negociaciones con España.¹

1 Cfr. ÁLVARES, op. cit., pp. 2576.

6. DISCURSO JAMES MADISON 1809-1817

6.1 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*5 de diciembre de 1810*)

Entre los acontecimientos, fuera del ámbito interno, que llamaron poderosamente nuestra atención, se encuentra el ocurrido en una porción de la Florida Occidental. Dicha región de derecho pertenece a los Estados Unidos; sin embargo, ha estado bajo jurisdicción de España en espera del resultado de las negociaciones que conduzcan a su entrega formal a los Estados Unidos. En ese lugar, la autoridad española fue desafiada de tal manera que puso en peligro los derechos y el bienestar de la Unión. En tal situación, ordené la ocupación del territorio ubicado al oeste del Río Perdido, territorio que en virtud del Tratado de Orleáns pertenece a los Estados Unidos. La legalidad y la necesidad de esta acción están justificadas por los derechos e intereses de la nación americana.

6.2 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*10 de diciembre de 1811*)

Vemos con vivo interés el establecimiento de soberanías independientes en las provincias hispanas de América. Como vecinos y habitantes del mismo hemisferio, los Estados Unidos estamos profundamente preocupados por su bienestar. Pero sólo cuando esas provincias hayan logrado la condición de naciones, por el justo ejercicio de sus derechos, el Senado y la Cámara de Representantes se unirán al Ejecutivo para establecer con ellas, como Estados soberanos e independientes, las debidas relaciones amistosas y comerciales.

6.3 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1816*)

Ciertamente ocurrió un incidente en el Golfo de México, que en caso de ser sancionado por el gobierno español pudiera representar una excepción a dicho poder. De acuerdo con nuestro comandante naval en el referido puesto de servicio, una de nuestras naves oficiales fue atacada por una abrumadora fuerza a cargo de un comandante

español, y la bandera estadounidense, al igual que los oficiales y la tripulación, fueron insultados, de tal manera que es necesaria una pronta reparación, lo cual ya ha sido exigido. Mientras tanto, se ha despachado al Golfo una fragata y un pequeño barco de guerra para la protección de nuestro comercio.

Sería injusto omitir que el representante de Su Majestad Católica en los Estados Unidos no tardó en asegurar, de la manera más enérgica, que ninguna orden hostil pudo haber emanado de su gobierno o de sus provincias.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 39-40.

7. DISCURSO JAMES MONROE 1817-1825

7.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*4 de marzo de 1817*)

Las negociaciones con España, tanto en lo que se refiere al saqueo de nuestro comercio, como en lo relativo al establecimiento de los límites fronterizos, siguen en el mismo estadio señalado por mi antecesor en su último mensaje. Evidentemente, la política del gobierno español ha sido la de mantener suspendidas las negociaciones, y en esto han estado de acuerdo, en parte, los Estados Unidos. Ello, con base en una disposición amistosa hacia España y con la esperanza de que su gobierno, haciendo acopio de su sentido de justicia, acceda finalmente a dicho arreglo en forma equitativa para ambas partes. Últimamente el gobierno español ha mostrado disposición de llevar a cabo la negociación, lo cual ha sido bien acogido por este gobierno, y en caso de que sea recíproca la política conciliatoria y amistosa que invariablemente orienta nuestras acciones, pudiera esperarse un arreglo justo y satisfactorio. Es apropiado, sin embargo, señalar que hasta el momento no ha surgido propuesta alguna que pueda suponer tal resultado.

Desde un primer momento, el conflicto entre España y sus colonias nos mereció especial interés. Es natural que veamos con aprensión lo que les sucede a nuestros vecinos. Es muy probable que, de continuar la lucha, nuestro comercio se altere y afecte a nuestros ciudadanos y a sus propiedades. Ello ya se anticipó y se tomaron las medidas pertinentes.

A lo largo de todo el conflicto, los Estados Unidos han mantenido una estricta neutralidad, no otorgando ayuda en armas, hombres o municiones a ninguna de las dos partes en pugna. Hemos visto la cuestión, no a la luz de una insurrección ordinaria o de una simple rebelión, sino desde la perspectiva de una guerra civil entre dos partidos que tienen como neutrales los mismos derechos. Nuestros puertos han estado abiertos para ambos, lo mismo que nuestros productos al alcance de los dos. Cuando las colonias logren su independencia, los Estados Unidos no buscarán privilegios comerciales

especiales ni pedirán nada extraordinario fuera del trato que tienen con otras naciones. Sólo así, las colonias serán libres de cualquier obligación que no sea su propio interés, y estarán dadas las bases de una justa reciprocidad entre los Estados Unidos y aquéllas.

7.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(16 de noviembre de 1818)*

Nuestras relaciones con España continúan en la misma situación que prevalecía al final de la última sesión. La Convención de 1802 ha sido ratificada en lo relativo a las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos por daños sufridos a causa del gobierno español, aunque los pagos por ese concepto aún no se han realizado. Tampoco se han hecho arreglos para la delimitación de fronteras. Ambos asuntos están en la mesa de discusión de los dos gobiernos, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

Entretanto, han sucedido otros acontecimientos que han puesto a prueba la armonía entre las relaciones de los dos gobiernos. En todo, lo largo del territorio de las Floridas sobre las cuales España tiene jurisdicción, apenas se ha sentido su autoridad. Aventureros de los dos países, fugitivos de la ley, esclavos prófugos, han encontrado asilo en esos lugares. Numerosas tribus de indios, fuertes en cuanto al número de guerreros, notables por su ferocidad, habitan esas provincias. Estos grupos de personas han ocasionado cualquier cantidad de daños a los Estados Unidos, que España, en virtud del Tratado de 1795, está en obligación de reparar, puesto que a ella corresponde la seguridad de sus fronteras. Sin embargo, los Estados Unidos han sido pacientes y repetidamente han sugerido la cesión de esas tierras, de tan poco valor para España, como un medio de evitarles problemas. Es bien conocido que otros poderes han dado a los Estados Unidos este tipo de indemnización territorial como pago de reclamaciones de sus nacionales.

Este año ha sido necesario mantener una importante fuerza naval en el Mediterráneo y en el Golfo de México, así como despachar algunos barcos a la costa meridional y al Océano Pacífico sur.

La guerra civil entre España y sus colonias continúa y no hay ninguna disposición para una conclusión rápida.

7.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1819)*

Habiendo informado al Congreso, el pasado 27 de febrero, de la firma en esta ciudad de un Tratado de Límites y Amistad entre España y los Estados Unidos, se espera finiquiten las dificultades entre los dos gobiernos. Por medio de este acuerdo, España cedió a los Estados Unidos territorios de no mucho valor para ella, pero, sin embargo, de mucho significado respecto a reclamaciones pendientes que no estaba en condiciones de satisfacer. Asimismo, se establecieron las bases para fijar una frontera definitiva entre los dos países. Se espera que en breve Su Majestad Católica ratifique tan importante acuerdo.

En la guerra civil entre España y sus colonias se ha tenido mucho cuidado de cumplir estrictamente con las leyes de neutralidad. Nuestros puertos continúan abier-

tos para ambos partidos por igual y nuestros nacionales han sido advertidos de no intervenir a favor o en perjuicio de alguno de los bandos. Sin embargo, la tendencia se inclina a favor de la causa de las colonias.

La distancia entre las colonias y la madre patria da ventaja a las primeras y hace imposible para España suprimir la insurrección. Es muy probable que el gobierno de España ceda. Por tanto, los Estados Unidos seguirán manteniendo estrictamente su neutralidad y no van a tomar ventaja de la situación ni a comprometer su interés o su honor como nación.

7.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (14 de noviembre de 1820)

En la lucha entre España y sus colonias, estas últimas han ganado fuerza y reputación. El último suceso en España, con el restablecimiento de la Constitución de 1812, promete un giro favorable para los revolucionarios. Bajo la autoridad de las Cortes del Congreso de Angostura se ha invitado a las dos partes para llegar a un acuerdo y fijar los términos de la independencia de las colonias, sin participación o interferencia de ningún poder externo.

7.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (3 de diciembre de 1821)

Se espera vivamente que el gobierno de España encontrará que conviene a sus intereses que se ponga término a esa contienda agotadora.

7.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (3 de diciembre de 1822)

Se confía que una paz perdurable se imponga entre España y sus colonias recién emancipadas. Las consideraciones que los Estados Unidos tomaron en cuenta para reconocer a los nuevos Estados pesarán de igual manera, tanto para España como para los demás poderes, en el sentido de obrar en la misma dirección.

7.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL (2 de diciembre de 1823)

Recientemente se nombró a un ministro de los Estados Unidos ante Colombia y Buenos Aires. Previamente se designó a otro ministro en México.

El continente americano por la condición libre e independiente ha asumido y sostiene de hoy en adelante que no se considerarán como objetivos de futura colonización por ninguna potencia europea.

En las guerras de las potencias europeas, en asuntos relacionados con ellas mismas, nunca hemos tomado parte, ni concurda con nuestra política hacerlo. Solamente cuándo se invaden o se amenazan seriamente nuestros derechos resentimos los daños o hacemos preparativos para nuestra defensa. Nos hallamos necesariamente más íntimamente vinculados con los acontecimientos de este hemisferio, por razones que deben ser evidentes para todo observador ilustrado e imparcial. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente en este aspecto del de América.

Por tanto, debemos, en honor de la sinceridad y a las relaciones amistosas existentes entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraríamos cualquier intento de su parte para extender sus sistemas a cualquier porción de este hemisferio, como un peligro para nuestra paz y nuestra seguridad. En las colonias o dependencias de cualquier potencia europea, ahora existentes, no hemos intervenido ni lo haremos. Pero tratándose de gobiernos que han declarado su independencia y la han conservado, y cuya independencia nosotros, con cuidadosa consideración y basándonos en justos principios, hemos reconocido, ninguna intervención de cualquier potencia europea con el propósito de oprimirlos o de controlar su destino en otra forma podría ser interpretada por nosotros más que como la manifestación de una actitud hostil hacia los Estados Unidos.

En la guerra entre esos nuevos gobiernos y España, declaramos nuestra neutralidad cuando hubimos de reconocerlos como tales; y a ella nos hemos adherido, y continuaremos adhiriéndonos, siempre y cuando no ocurra cambio alguno que, a juicio de las autoridades competentes de este gobierno, imponga como indispensable a su seguridad, el cambio correspondiente de parte de los Estados Unidos.

7.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1824)*

Tenemos ministros plenipotenciarios residiendo en Colombia y Chile y hemos recibido ministros de igual rango en nuestro país por parte de Colombia, Buenos Aires y México.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 41-42.

8. DISCURSO JOHN ADAMS 1825-1829

8.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1825)*

En breve se reunirá un Congreso en Panamá en el que participarán las naciones del hemisferio occidental. Las repúblicas de Colombia, México y Centroamérica ya han enviado sus representantes y han extendido una cordial invitación a los Estados Unidos para que asistan al evento.

8.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(5 de diciembre de 1826)*

El Congreso de ministros convocado en Panamá acordó reunirse de nueva cuenta en México. Desafortunadamente, la muerte de uno de nuestros representantes, en camino al Congreso, y la imposibilidad del otro para llegar por cuestiones del mal tiempo y las distancias, nos privó de estar representados en la reunión. Sin embargo, ninguno de los acuerdos adoptados afecta los intereses de los Estados Unidos.

Se concluyó finalmente un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con México, y se espera que pronto sea presentado ante el Senado para su ratificación.

8.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(4 de diciembre de 1827)*

Vemos con preocupación la división de algunas repúblicas del sur del continente. Asimismo, la falta de unión entre ellas se hace cada vez más patente. De esta manera, los acuerdos alcanzados en el Congreso de Panamá no se han ratificado y la reunión en Tacubaya (México) se ha pospuesto por tiempo indefinido. De cualquier manera, los Estados Unidos están pendientes y su ministro encargado de la misión ordinaria en México está al tanto y tiene facultades para asistir en el momento en que se reanuden las conferencias.

8.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (2 de diciembre de 1828)

Las relaciones con las naciones vecinas del sur continúan en términos de amistad y buena voluntad. Dos tratados, uno de los límites y otro de comercio, se han negociado con el gobierno de México. Sin embargo, debido a numerosos obstáculos no han llegado a su conclusión final.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 43-49.

9. DISCURSO ANDREW JACKSON 1829-1837

9.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1829*)

Las repúblicas hacia el sur de nuestro propio hemisferio todavía no han alcanzado las metas por las que tanto lucharon. Sin embargo, los Estados Unidos confían en que no esté distante el día cuando la restauración de la paz y la tranquilidad interna, bajo un permanente sistema de gobierno, asegure la felicidad de todos los ciudadanos.

La reciente invasión de España a México, y sus efectos sobre la política interna, pusieron en entredicho la viabilidad de la independencia en Sudamérica. Sin embargo, vimos que el amor de esa república (México) por la libertad se sobrepuso a los enconos internos, y el espíritu de la independencia, que es el espíritu superior, fue lo que prevaleció. Este sentimiento es igual para los demás Estados, y se espera que España, en vista de lo anterior, adopte una política más razonable y amistosa hacia sus antiguas colonias.

Tan profundamente interesados por la prosperidad de nuestras hermanas repúblicas, y en particular por la de nuestro vecino inmediato, permítanme manifestarles que su trato hacia nosotros ha sido tan amistoso como el que esperábamos y como aquel por el que hicimos votos desde un principio.

Sin embargo, es mi deber informarles que los prejuicios en contra de nuestro enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, por parte de un buen número de ciudadanos mexicanos, han tenido un efecto desafortunado en los negocios entre los dos países y han impedido que nuestro representante lleve a cabo sus tareas con todo el celo y el talento de que es capaz. Ello ha incidido en asuntos que competen a ambas naciones y en particular a México, como la ratificación del Tratado de Límites y Comercio, que no fue posible, a pesar de que el mismo se había negociado en su capital y bajo su propia supervisión.

En estas circunstancias, consideramos apropiado dar la opción al señor Poinsett de regresar a los Estados Unidos, o de quedarse en México, de acuerdo con su criterio

y tomando en cuenta los intereses del país. Sin embargo, antes de expedir las instrucciones referidas, recibimos una comunicación por parte del gobierno de México, solicitando el retiro de nuestro embajador. Se dio pronta satisfacción a esa petición y se nombró a un nuevo representante de igual rango ante el gobierno de México. Podemos afirmar que nuestra conducta respecto a México ha sido coherente con el espíritu de armonía que profesamos. Confiamos en que eliminado el obstáculo que se interponía en el buen curso de las relaciones, se dé un giro positivo en nuestro trato. Para hacer justicia al señor Poinsett, debo aclarar que su retiro de la misión diplomática en México no se debió a las imputaciones que le hicieron de interferir en la política interna ni a una falta de confianza en su talento e integridad. Está por demás decir que el gobierno mexicano nunca confirmó en sus comunicaciones estos cargos.

9.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1830)*

Entre las cuestiones más importantes en materia de política exterior se cuenta la negociación de un Tratado de Comercio y Navegación con México, así como otro que fija las fronteras entre nuestro país y esa república.

En otros asuntos, me complace informarles que en las relaciones con nuestra vecina República de México ha ocurrido un cambio favorable. La desafortunada e infundada sospecha respecto a nuestra disposición hacia ese país, de la cual di cuenta en mi informe pasado, ha sido eliminada, y el gobierno de México ha podido entender la verdadera naturaleza de nuestros propósitos. La consecuencia ha sido el establecimiento de una amistad única y de una confianza mutua.

Tenía razones para esperar que en esta sesión pudiera comunicarles la conclusión final del acuerdo comercial con México. Sin embargo, debido a circunstancias que no me puedo explicar, pero que estoy convencido de que no obedecen a una intención de no suscribirlo, no me es posible hacerlo.

También en el verano pasado hubo motivos para temer que la armonía de nuestras relaciones con México se viera perturbada por los actos de algunas personas que, actuando con anuencia de México, reclamaran territorio que hasta la fecha había estado bajo jurisdicción de los Estados Unidos. Se solicitó la cooperación del representante de México, la cual fue proporcionada con prontitud. Se giraron, entonces, instrucciones y asesoría al gobernador de Arkansas y a los oficiales en mando del Estado mexicano confinante, con lo cual se espera que mantendrá la tranquilidad en dicha frontera, hasta que un arreglo definitivo elimine cualquier motivo de controversia respecto a la línea divisoria.

9.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1831)*

Pocos cambios han tenido lugar en relación con las naciones independientes de América desde mi último mensaje. La ratificación del Tratado de Comercio con México se ha estado discutiendo en el Congreso de ese país, pero a la fecha no se ha llegado a ninguna conclusión. Las causas del retraso del mismo obedecen seguramente a las

conmociones internas. Pero ahora que el gobierno está más tranquilo podemos confiar en una pronta ratificación del Tratado de Comercio y en alcanzar un acuerdo en la demarcación de fronteras entre los dos países. Mientras tanto, se ha abierto una nueva ruta comercial, que parte desde San Luis, en el estado de Missouri, hasta el interior de las provincias mexicanas. Las caravanas comerciales a lo largo de sus rutas, en su paso por linderos de indios, van protegidas por tropas de los Estados Unidos. El gobierno de México ha dado su autorización para que los regimientos militares escolten a los viajeros allende los límites de los Estados Unidos.

9.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (4 de diciembre de 1832)

Confiaba en anunciarles en esta sesión que el mantenimiento de las relaciones amistosas con México y el incremento del intercambio comercial entre las dos naciones se sostenía por una paz interna, en virtud de su heroica devoción a la causa de la libertad. Sin embargo, no ha sido así; en México, la lucha sangüinaria que está teniendo lugar actualmente ha perjudicado el comercio. Ello a pesar de que ambas partes en pugna han demostrado una actitud amistosa hacia nosotros. Esperamos que, una vez concluido el conflicto, se asegure ese intercambio comercial para dos naciones que comparten una frontera. Esto es tan fundamental que aun en medio de este desfavorable estado de cosas ha aumentado nuestro comercio marítimo y se está llevando a cabo mi intercambio comercial interno, con grandes beneficios y cada día mayor, con las caravanas que parten de San Luis y llegan hasta Santa Fe, bajo la protección de escoltas proporcionadas por el gobierno.

9.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (3 de diciembre de 1833)

Es muy lamentable que, debido probablemente a las luchas internas que acapararon la atención del gobierno mexicano, se haya vencido el Tratado de Límites celebrado con los Estados Unidos para la reunión que debían realizar los comisionados, con objeto de definir la frontera entre las dos naciones sin que ese gobierno haya nombrado a los suyos. Mientras se abriguen dudas respectó a la verdadera frontera no se puede brindar la necesaria protección que requieren los residentes que habitan esos linderos. El tema es de gran interés para los Estados Unidos y no dejará de ser objeto de mi más viva atención.

9.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (1º de diciembre de 1834)

En diciembre último, el gobierno de México notificó el nombramiento de un comisionado y de un topógrafo para trazar, conjuntamente con los nuestros, la línea divisoria entre su territorio y el de los Estados Unidos; asimismo se disculpó por el retrasó, atribuyéndolo a la razón ya prevista: la concurrencia de una guerra civil. En virtud de que los comisionados y los topógrafos no se reunieron dentro de la fecha estipulada, por el Tratado, fue necesario llegar a un nuevo acuerdo y, en enero pasado, se giraron instrucciones a nuestro encargado de negocios, para tratar con México un

artículo adicional que debía incorporarse al tratado vigente. Se recibieron las referidas instrucciones y no se encontró dificultad alguna para el cumplimiento de dicho cometido. Acabamos de recibir información de que se obtendrá el artículo adicional al Tratado y el mismo será sometido a nuestra consideración tan pronto como reciba la ratificación del Congreso mexicano.

9.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1835)*

Se celebró una convención con México, que será presentada al Senado y que tiene por objeto ampliar el plazo para el nombramiento de los comisionados encargados de trazar la línea divisoria; pronto será presentada al Senado para su ratificación.

Sucesos recientes en ese país han despertado el mayor interés en los Estados Unidos. Conocedor de las fuertes tentaciones y poderosos atractivos que inducen a los ciudadanos de los Estados Unidos a mezclarse en las disensiones de nuestros vecinos inmediatos, se han dado instrucciones a los fiscales de distrito de los Estados Unidos para que persigan cuando haya ocasión de ello, y sin respeto a personas, a cuantas intenten violar las obligaciones de nuestra neutralidad; al mismo tiempo, ha sido necesario prevenir al gobierno de México de que exigiremos escrupulosamente que sea respetada la integridad de nuestro territorio por ambas partes.

9.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(5 de diciembre de 1836)*

En la contienda entre el gobierno de México y la provincia de Texas, los Estados Unidos están siguiendo la misma norma de conducta que habían seguido antes de reconocer como independientes de España a las repúblicas latinoamericanas. No debe de sorprendernos que los habitantes de los Estados Unidos puedan sentir una fuerte predisposición hacia una de las partes en conflicto. Sin embargo, este hecho nos obliga a conducimos con mayor cautela y a no caer en el error de que la política pública sea regulada con parcialidad y perjuicio. También, dado que el resultado de la contienda tendrá un importante impacto entre nosotros, nos debemos cuidar de anticipar lo que pasará y oportuno es que, en lo que a nosotros respecta, estemos preparados en forma anticipada y en todo momento para cumplir con nuestras obligaciones, sin importar la condición de aquellos con los que las hemos contraído.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 48-49.

10. DISCURSO MARTIN VAN BUREN 1837-1841

10.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (5 de diciembre de 1837)

Las circunstancias agravantes relacionadas con las reclamaciones que hemos presentado a México, así como una serie de acontecimientos tocantes al honor e integridad de nuestro gobierno, llevaron a mi antecesor, en la segunda sesión del último Congreso, a hacer una recomendación especial sobre el curso de acción que deberá tomarse para obtener una satisfacción rápida y definitiva de los agravios de que se han quejado este gobierno y nuestros ciudadanos. Se recomendó una demanda de reparación definitiva, con una facultad contingente otorgada al Ejecutivo para tomar represalias en caso de que la misma fuera infructuosa. De las actas de las sesiones del Congreso relativas a dicha recomendación se infiere que la opinión de ambas cámaras coincidió con la del Ejecutivo, a saber, que no podía hacerse uso justificadamente de ninguna forma de reparación con antecedentes en el derecho de gentes. Era evidente, asimismo, que el Congreso opinaba, con el Presidente, que debería presentarse otra demanda, a efectos de dar pruebas innegables y satisfactorias de nuestro deseo de evitar llegar a extremos con una potencia extranjera, pero estaban dispuestos a otorgar facultades discrecionales al Ejecutivo para tomar represalias en caso de que nuestra demanda fuera infortunadamente denegada o postergada en forma irrazonable por el gobierno mexicano.

Tan pronto se prepararon los documentos necesarios, una vez que tomé posesión de mi cargo, se envió a México a un emisario especial para presentar una demanda de reparación definitiva que iba acompañada de los documentos que se señalan en nuestro tratado. La demanda se presentó el 20 de julio último. En la contestación, fechada el 29 del mismo mes, se dan seguridades del deseo de dicho gobierno de dar una respuesta pronta y explícita respecto a cada una de las quejas, con las reservas de que su examen necesariamente deberá ser deliberado; que éste estará orientado por los principios de la ley pública y las obligaciones de los tratados; que no se omitirá acción alguna que pudiera conducir a la más rápida y justa resolución de nuestras demandas;

y que la decisión de ese gobierno respecto a cada uno de los casos se daría a conocer por conducto del ministro mexicano acreditado en nuestro país.

Desde esas fechas, la República mexicana acreditó un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante este gobierno. Fue portador de las seguridades de un sincero deseo de que las diferencias pendientes entre los dos gobiernos llegaran a término en forma satisfactoria para ambos. Fue recibido con seguridades recíprocas, y se abrigó la esperanza de que su misión condujera a una solución rápida, satisfactoria y definitiva de todos los asuntos objeto de quejas. Creyente en la bondad de la política pacífica por la que siempre se han regido los Estados Unidos en sus tratos con naciones extranjeras, deseé de manera particular, en virtud de la cercanía con la República mexicana y de los sucesos bien conocidos acaecidos en nuestra frontera, ser coadyuvante en obviar todas las dificultades existentes con dicho gobierno y en restablecer, en las relaciones entre las dos repúblicas, la actitud generosa y amable que deberá reinar en todo momento. En consecuencia, me apena profundamente haber encontrado, en las recientes comunicaciones de dicho gobierno, tan pocos motivos para esperar el éxito de cualquier esfuerzo futuro de mi parte encaminado al logro de aquellos deseables cometidos.

A pesar del gran número de casos —muchos de ellos serios agravios a personas— que han estado durante años ante el gobierno mexicano, y de que algunas de las causas de queja de nuestro país, entre las que se cuentan las de carácter más ofensivo, permitían respuestas inmediatas, sencillas y satisfactorias, no ha sido sino hasta hace algunos días cuando se recibió de parte del ministro mexicano una comunicación específica en respuesta a nuestra última demanda presentada hace cinco meses. En el informe adjunto del secretario de Estado y en los documentos que se acompañan, se verá que a ninguna de nuestras quejas públicas se ha dado u ofrecido satisfacción, que sólo uno de los casos de agravios a personas ha sido considerado en forma favorable y que, hasta la fecha, sólo han sido decididos por el gobierno mexicano cuatro casos de ambas categorías, de entre todos los que se han presentado formalmente y sobre los que se ha insistido con especial empeño.

Al no percibir de qué manera cualesquiera de las facultades otorgadas al Ejecutivo pudieran emplearse en forma útil para llevar esta infortunada controversia a un término satisfactorio, mi antecesor remitió el asunto al Congreso, al considerar que era necesaria la interposición de este último. De conformidad con los deseos del Poder Legislativo, los cuales han sido cabalmente entendidos, se presentó otra demanda formal al gobierno mexicano, de cuyo éxito dan muestras los documentos que se adjuntan. Tras cuidadoso y deliberado examen de su contenido, y en atención a la actitud manifestada por el gobierno mexicano, tengo el doloroso deber de remitir el asunto, en la situación en que se encuentra, al Congreso, al que competirá decidir, llegado el momento, acerca del modo y la medida que se adoptarán para obtener reparación. Cualquiera que sea su decisión, ésta será fielmente ejecutada, confiando en

que se caracterizará por la moderación y la justicia que, como anhelo, regirán en toda circunstancia las asambleas de nuestro país.

10.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1838*)

Lamento informarles que sigue aplicándose el bloqueo de los puertos principales de la costa oriental de México, que se declaró el pasado mayo a resultas de diferencias entre dicha república y Francia y que está siendo ejecutado por una fuerza naval francesa competente. Este bloqueo es necesariamente perturbador para nuestro comercio en el Golfo, así como para el de otras naciones. Sin embargo, se cree que existe una buena disposición por parte del gobierno francés para hacer que esta medida sea lo menos onerosa posible para los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos y para los del comercio neutral, y se espera un pronto arreglo de las dificultades entre Francia y México, a fin de que se restablezcan las relaciones armoniosas que existían entre ellos y se vuelvan a abrir los puertos de esta última república a los buques de todas las naciones amigas.

10.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*2 de diciembre de 1839*)

Lamento verme obligado a informarles que el gobierno de México aún no ha ratificado convención alguna para el arreglo de las reclamaciones de nuestros ciudadanos contra ese país. La primera convención preparada para ese fin no fue presentada por el presidente de México para su aprobación en el Congreso, en virtud de la creencia de que el rey de Prusia, árbitro en caso de disidencia de la comisión mixta que sería nombrada por los Estados Unidos y México, no aceptaría asumir ese amistoso encargo. Si bien no estoy del todo conforme con el curso de acción seguido por México, no he dudado en recibir con ánimo conciliador la explicación ofrecida y, de buen grado, he otorgado mi acuerdo para que se celebre una nueva convención con el fin de concertar los pagos propuestos en favor de nuestros ciudadanos de forma tal que, siendo justos para ellos, se consideren menos onerosos e inconvenientes para el gobierno mexicano. Confiando en las intenciones de dicho gobierno, se giraron instrucciones al señor Ellis para exigir la reparación correspondiente a México, y se han reanudado los vínculos diplomáticos entre los dos países. El señor Ellis nos ha informado que, en fecha reciente, el presidente de esa república ha presentado a su Congreso la nueva convención en circunstancias que prometen una rápida ratificación, resultado que no me puedo permitir poner en duda.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 50-55.

11. DISCURSO JOHN TYLER, 1841-1845

11.1 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (6 DE DICIEMBRE DE 1842)

El 23 de abril último los comisionados nombrados por los Estados Unidos, de conformidad con la convención del 11 de abril de 1839, presentaron al departamento correspondiente un informe definitivo referente a los procedimientos de la comisión. De ello se desprende que el monto total otorgado a los reclamantes por los comisionados y el árbitro que se nombró con arreglo a dicha convención fue de 2 026 079.68 dólares. Habiendo considerado el árbitro que, conforme a la convención, sus funciones debían concluir al mismo tiempo que las de los comisionados, regresó a la junta, sin que se hubieran fallado, por falta de tiempo, reclamaciones que habían sido valuadas por los comisionados estadounidenses por un monto de 928 620.88 dólares. Otras reclamaciones, respecto a las cuales el monto que se buscaba recuperar era de 3 336 837.05 dólares, se sometieron demasiado tarde a la consideración de la junta. El ministro de los Estados Unidos de México ha sido debidamente autorizado para interponer demanda por el pago de las reclamaciones dirimidas, de acuerdo con los términos y condiciones de la convención y de las disposiciones de la ley del Congreso, de fecha 12 de junio de 1840. Asimismo, recibió instrucciones de comunicar a ese gobierno las expectativas del gobierno de los Estados Unidos respecto a las reclamaciones que fueron decididas de acuerdo con las disposiciones de la convención, al igual que en relación con todas las demás reclamaciones presentadas por ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno mexicano. Se le dieron también otras instrucciones, que deberían cumplir en caso de que el gobierno de México no estuviera en condiciones en el presente de realizar el pago de las reclamaciones dirimidas en especie o en su equivalente.

Han sido liberados todos los ciudadanos de los Estados Unidos que acompañaron la última expedición texana a Santa Fe, y que fueron indebidamente apresados y encarcelados como prisioneros de guerra en México.

Ha habido un intercambio de notas entre el Departamento de Estado y el ministro de Asuntos Exteriores de México relativas a la queja de México, según la cual se permitió a ciudadanos de los Estados Unidos ofrecer ayuda a los habitantes de Texas en la guerra actual entre ella y esa república. Se acompañan copias de las referidas notas para conocimiento del Congreso, junto con copias de otras notas relacionadas con el mismo asunto que han sido dirigidas al cuerpo diplomático acreditado en México por el ministro estadounidense y por el secretario de Estado mexicano.

México ha considerado adecuado reciprocitar la misión enviada por los Estados Unidos ante ese gobierno, mediante la acreditación, ante éste, de un ministro de igual categoría que la del representante de los Estados Unidos en dicho país. De las circunstancias relacionadas con esta misión se prevén resultados favorables. Evidentemente, es del interés de ambas naciones, como vecinas y amigas, cancelar todas las causas justas de insatisfacción mutua y se espera que ninguna de ellas omitirá o postergará hacer uso de cualquier medio factible y honorable para el logro de dicho cometido.

11.2 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (6 de diciembre de 1843)

Tengo a bien hacer alusión a determinados oficios enviados por nuestro ministro acreditado en México, así como a notas intercambiadas entre el enviado de esa república y el secretario de Estado. No debe considerarse extraordinario que el gobierno de México, en previsión de un debate público (que, según infirió de publicaciones periodísticas, sería probable que se llevara a cabo en el Congreso respecto a la anexión de Texas a los Estados Unidos), haya anticipado ya el resultado de dicho debate hasta el punto de anunciar que está determinado a vincular dicha decisión con una declaración formal de guerra contra los Estados Unidos. Si con ello se tiene la intención de evitar que el Congreso presente el referido asunto como tema adecuado para deliberar serenamente y tomar una decisión final, el Ejecutivo no tiene motivos para poner en duda que la misma no tendrá en absoluto el fin que se propone. Los representantes de un pueblo valiente y patriótico no tendrán aprensión alguna respecto a consecuencias eventuales para turbarlos en el curso de las deliberaciones que se han propuesto, como tampoco el Poder Ejecutivo dejará, por la causa que fuera, de cumplir con todos sus deberes para con el país. Desde la batalla de San Jacinto, la guerra que durante tanto tiempo han librado México y Texas ha consistido, en su mayor parte, en incursiones predatorias que, si bien han causado mucho sufrimiento a la población y han mantenido la frontera de los dos países en un estado de alarma permanente, no han llevado a ningún resultado definitivo. México no ha pertrechado ningún armamento imponente por tierra ó por mar para el sometimiento de Texas. Han transcurrido ocho años desde que Texas declaró su independencia de México y, durante ese lapso, ha sido reconocida como potencia soberana por muchos de los principales estados civilizados. Sin embargo, México insiste en sus planes de reconquista y se niega a reconocer su independencia. En una ocasión, las incursiones predatorias a las que he hecho alusión se tradujeron en la irrupción en un tribunal de justicia en donde fueron secuestrados

los jueces, el jurado y los funcionarios del tribunal; todos fueron arrastrados a la fuerza, como ciudadanos no armados y, por ende, no combatientes, a un cruel y opresivo cautiverio, y el crimen quedó impune e irreprochada la inmoralidad. Un estado de guerra en una frontera debe ser siempre depreciado, y respecto a la guerra que han librado durante tantos años estos dos estados, la humanidad ha tenido gran causa para lamentarse. Tampoco debe deplorarse tal estado de cosas simplemente por el sufrimiento de las personas afectadas. Los efectos son mucho más amplios. El Creador del Universo ha dado al hombre la tierra para habitarla y sus frutos para su subsistencia. Por tanto, quienquiera que haga de ella, o de cualquier parte de la misma, un escenario de desolación, afecta injuriosamente su heredad y puede considerarse como una calamidad general. Las guerras son necesarias en determinadas ocasiones, pero el interés común de todas las naciones es llevarlas prontamente a una conclusión. Los Estados Unidos tienen un interés inmediato en que se ponga fin al estado de hostilidades que existe entre México y Texas. Son nuestros vecinos del mismo continente, con los que no sólo deseamos cultivar relaciones de amistad, sino también el más amplio intercambio comercial, y poner en práctica todos los ritos de una buena y hospitalaria vecindad. En esta cuestión están implicados nuestros intereses, habida cuenta de que, por neutral que sea nuestra política, no podemos esperar librarnos de los efectos de un ánimo receloso por parte de ambas potencias. Tampoco puede permanecer este gobierno indiferente al hecho de que, como es de suponer, una guerra como la que libran estas dos naciones debilitará a ambas potencias y, al final, las sujetará —sobre todo a la más débil— a la interferencia de naciones más fuertes y poderosas, las cuales, con la única intención de hacer prevalecer sus propios y peculiares propósitos, tarde o temprano intentarán obligarlas al acatamiento de sus términos, con la condición de que su interposición vaya igualmente en perjuicio de la nación que los acata y sean lesivos para los intereses de los Estados Unidos. No debe esperarse que nosotros permitamos dicha interferencia en perjuicio nuestro. Considerando que Texas está separada de los Estados Unidos por un mero lindero geográfico; que, a juicio de la mayoría, hasta un periodo reciente su territorio constituía una porción del territorio de los Estados Unidos; que es homogénea en su población y metas con los estados adyacentes; que hace contribuciones al comercio del mundo con los mismos artículos que éstos, y que la mayoría de sus habitantes han sido ciudadanos de los Estados Unidos, hablan el mismo idioma y viven conforme a instituciones políticas similares a las nuestras, este gobierno está obligado, en atención a nuestros intereses así como a sentimientos de simpatía, a velar por que sea dejada en libertad para actuar, especialmente respecto a sus asuntos internos, sin verse sometida por la fuerza ni limitada por la política u opiniones de otros países. Teniendo plenamente en cuenta todas estas consideraciones, el Ejecutivo no ha dudado en expresar al gobierno de México de qué manera tan profunda desapruueba la continuación de la guerra y cuán ansiosamente desea ser testigo de su conclusión. No me es difícil considerar que compete a los Estados Unidos, como la más antigua de las repúblicas americanas, dirigirse a México en términos nada ambiguos respecto a este

tema. Ya es tiempo de que cese esta guerra. Debe haber un límite para todas las guerras, y si el estado matriz, tras ocho años de lucha, no ha podido someter a una parte de sus súbditos que se mantienen firmes en su rebelión contra él, y que no sólo se han proclamado independientes sino que han sido reconocidos como tales por otras potencias, no deberá esperarse que otras naciones contemplen como si nada ocurriera, en patente perjuicio de ellas, la prolongación de las hostilidades. Nuestros Estados Unidos se desprendieron de su dependencia colonial y establecieron gobiernos independientes, y la Gran Bretaña, después de consumir sus energías en un intento por someterlos durante un lapso menor que aquel en el que México ha intentado subyugar a Texas, tuvo la sabiduría y la justicia de aceptar su independencia, reconociendo con ello las obligaciones que le competían como parte de la familia de las naciones. De ninguna manera perjudicará a México imitar un ejemplo establecido por una de las naciones más altivas y poderosas de la tierra. En consecuencia, si bien el Ejecutivo deploraría cualquier enfrentamiento con México o cualquier alteración de las relaciones de amistad que existen entre nuestros dos países, no puede permitir que ese gobierno controle su política hacia Texas, cualquiera que ésta sea, sino que tratarán a esta última —como al reconocer su independencia los Estados Unidos hace ya tiempo declararon que lo harían— como totalmente independiente de México. Las elevadas obligaciones del deber público pueden imponer a las autoridades constituidas de los Estados Unidos una política que el curso en el que insiste México habrá contribuido principalmente a producir y, en tal contingencia, el Ejecutivo pondrá toda su confianza en el patriotismo del pueblo para apoyar al gobierno en su curso de acción.

En fecha reciente, el gobierno mexicano ha adoptado medidas de naturaleza inusual, destinadas en gran parte a afectar el comercio de otras naciones con México y a aplicarse en forma lesiva para los Estados Unidos. Mediante decreto del 23 de septiembre, contando a partir de los seis meses siguientes a su fecha de promulgación, ningún extranjero podrá llevar a cabo actividades de venta al menudeo de bien alguno dentro de los límites de México. Nuestro ministro ha elevado la debida protesta al respecto.

El comercio llevado a cabo por nuestros ciudadanos hasta el presente con Santa Fe, en el que ya se ha invertido mucho capital y que cada día va cobrando mayor importancia, ha sido intempestivamente detenido por un decreto de virtual prohibición promulgado por el gobierno mexicano. Cualquiera que haya sido el derecho que asista a México para prohibir toda actividad comercial a ciudadanos o sujetos de potencias extranjeras, este último procedimiento, para decir lo menos, reviste un aspecto de rudeza y enemistad.

11.3 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1844)*

En mi último informe presidencial consideré que era mi deber dar a conocer al Congreso, en términos llanos y a la vez enfáticos, mi opinión respecto a la guerra que durante tanto tiempo han librado México y Texas, y que desde la batalla de San Jacinto

ha consistido enteramente en incursiones predatorias acompañadas de circunstancias que repugnan a la humanidad. Repito ahora lo que dije entonces: que después de ocho años de esfuerzos débiles e ineficaces por reconquistar a Texas ya es tiempo de que haya cesado esta guerra. Los Estados Unidos tienen intereses directos en la cuestión. La contigüidad de las dos naciones a nuestro territorio afecta necesariamente la paz de nuestro país. En las mentes de uno u otro beligerante se han engendrado sospechas injustas en contra nuestra y, como consecuencia necesaria, los intereses de los estadounidenses se han visto afectados y nuestra paz ha estado día con día en peligro; además, debe ser evidente para todos que el agotamiento producido por la guerra ha sujetado tanto a México como a Texas a la interferencia de otras potencias que, sin la interposición de este gobierno; pudieran resultar en los perjuicios más graves para los Estados Unidos. De tiempo en tiempo, este gobierno ha ejercido sus amistosos oficios para promover la conclusión de las hostilidades en términos honorables para ambos beligerantes. Sus esfuerzos en tal sentido han resultado infructuosos. México parece no tener objeto para persistir en esta guerra, y al Ejecutivo no le ha quedado otra opción que aprovechar la conocida disposición de Texas e invitarla a celebrar un tratado para la anexión de su territorio al de los Estados Unidos.

Desde la última sesión del Congreso, México ha amenazado con reanudar la guerra, y ha hecho, o se propone hacer, importantes preparativos para invadir Texas. Ha emitido decretos y proclamas previos al inicio de las hostilidades pletóricos de amenazas hacia la humanidad, que si se pusieran en práctica, llamarían la atención de toda la Cristiandad. Esta nueva demostración de sentimientos —hay demasiados motivos para creerlo— se ha suscitado a raíz de las negociaciones relativas al reciente tratado de anexión con Texas. Por consiguiente, el Ejecutivo no podría ser indiferente a dichos procedimientos, y ha considerado su deber, tanto para consigo como para con el honor del país, hacer una enérgica declaración al gobierno mexicano sobre esta cuestión. Se ha procedido al respecto en la debida forma, como se verá por la copia adjunta del oficio del secretario de Estado dirigido al enviado de los Estados Unidos en México. Este país no tiene derecho a poner en peligro la paz del mundo al seguir insistiendo en un conflicto inútil e infructuoso. Tal estado de cosas no sería tolerado en el continente europeo. ¿Por qué habría de serlo en éste? Una guerra de desolación, tal como la que está amenazando llevar a cabo México, no puede ser librada sin que se vean implicadas nuestra paz y tranquilidad. Es inútil pensar que nuestros ciudadanos que habitan estados confinantes considerarían con indiferencia dicha guerra; por otra parte, nuestra neutralidad se vería violada pese a todos los esfuerzos del gobierno para evitarlo. El país ha sido colonizado por emigrantes de los Estados Unidos a invitación de España y México. Dichos emigrantes han dejado tras sí amigos y parientes que van a continuar simpatizando con ellos en sus dificultades y que, en virtud de dichas simpatías, se verían conducidos a participar en sus luchas, sin importar lo enérgica que sea la acción del gobierno para evitarlo.

Tampoco es probable que permanezcan pasivas las numerosas y terribles tribus de indios, las más aguerridas de que se tengan noticias en cualquier tierra, que ocupan extensas regiones contiguas a los estados de Arkansas y Missouri, y que están en poder de grandes franjas de terreno en los límites de Texas. Las inclinaciones de esas numerosas tribus las conducen invariablemente a la guerra cada vez que existen pretextos.

México no tenía justificación para incomodarse con este gobierno, o con su pueblo, por negociar el tratado. ¿Cuál de sus intereses se ha visto afectado por el tratado? No ha sido despojado de nada, puesto que pendió a Texas para siempre. La independencia de Texas fue reconocida por varias de las principales potencias de la tierra. Tenía la libertad de celebrar tratados, de adoptar su propia línea política, de seguir el curso de acción que estimara más conveniente para garantizar su felicidad.

Su gobierno y su pueblo se decidieron por la anexión a los Estados Unidos y el Ejecutivo advirtió en la adquisición de dicho territorio un medio para perfeccionar su felicidad y gloria permanentes. ¿Qué principio de buena fe fue violado? ¿Qué regla de moral política fue pisoteada? En cuanto a México, debió haber considerado la medida como en sumo beneficencia. Su incapacidad para reconquistar a Texas había sido exhibida, repito, por ocho años (nueve ya) de conflicto infructuoso y destructivo. Mientras tanto, la población y los recursos de Texas han seguido creciendo. La emigración ha fluido a su territorio de todas las partes del mundo en una corriente que sigue fortaleciéndose. México requiere una frontera permanente entre ella y la joven república. En un día no lejano, si Texas sigue siendo independiente de México, inevitablemente tratará de consolidar su fortaleza, agregando a sus dominios las provincias mexicanas confinantes. El espectro de la rebelión ante el control del gobierno central se ha manifestado ya en algunas de esas provincias, y es justo inferir que se inclinará por aprovechar la primera oportunidad favorable para proclamar su independencia y establecer alianzas con Texas. La guerra no tendría fin entonces, o, si ocurriera el cese de hostilidades, no sería duradero. En consecuencia, los intereses de México no se verían más favorecidos sino en un estado de paz con sus vecinos que diera por resultado el establecimiento de una frontera permanente. Una vez ratificado el tratado, el Ejecutivo estaría en la mejor disposición de tratar a México en la forma más generosa posible. Por ello, las fronteras de Texas no fueron definidas en el tratado. El Ejecutivo se propuso llegar a acuerdos respecto a las mismas en condiciones que todo el mundo considerase justas y razonables. No hubiera podido procederse a negociación alguna respecto a ese punto, entre los Estados Unidos y México, con anterioridad a la ratificación del tratado. No hubiéramos tenido derecho, poder o autoridad para llevar a cabo tales negociaciones, y, de haberlas emprendido, hubiese sido una arrogación igualmente ofensiva para el orgullo de México y de Texas y nos hubieran tachado de arrogantes, mientras que de haber propuesto satisfacer a México, con anterioridad a la anexión, por cualesquiera intereses contingentes que pudieran tener en éste, hubiera significado tratar a Texas no como potencia independiente sino como una mera dependencia de México. El Ejecutivo no hubiese podido tomarse esta arrogación sin

desafiar la declaración solemne de ustedes según la cual dicha república constituía un estado independiente. México había amenazado —es cierto— con declarar la guerra contra los Estados Unidos en caso de ratificación del tratado de anexión. El Ejecutivo no podía dejarse influir por esta amenaza. En ello está implicado el espíritu de nuestro pueblo, listo para sacrificar mucho por la paz, pero nada por la intimidación. Una guerra en esas circunstancias debe ser enérgicamente deplorada, y los Estados Unidos son la última nación que desearía que se librara; pero si como condición para la paz nos hubiera sido necesario anteponer nuestro derecho inalienable de tratar con una potencia independiente de nuestro propio continente respecto a asuntos que nos interesan sobremanera a ambos, y que ante una patente e insostenible pretensión de una tercera potencia que reclama el control de la libre voluntad del país con que celebramos un tratado, dedicados como estamos a la paz y deseosos de cultivar relaciones amistosas con todo el mundo, el Ejecutivo debe decir, sin ningún titubeo, que el pueblo de los Estados Unidos estaría listo para enfrentar todas las consecuencias, antes que someterse a dicha condición. Pero el Ejecutivo no abrigó aprensión de que fuera a declararse una guerra. Asimismo, debo expresar con toda franqueza la opinión de que si el tratado hubiera sido ratificado por el Senado, habría sido seguido por un pronto arreglo, a satisfacción plena de México, respecto a las diferencias entre los dos países. Viendo, pues, que México estaba a punto de proceder a nuevos preparativos para realizar una invasión hostil a Texas que obedecía al hecho de que Texas había adoptado las sugerencias del Ejecutivo respecto al tema de la anexión, no podíamos cruzarnos pasivamente de brazos y permitir que se librara una guerra contra ella, que amenazaba con ir acompañada de todo tipo de actos que nos hundirían en una época de barbarie, por el hecho de que se hubiera procedido a ello.

Influyeron también en el Ejecutivo otras consideraciones decisivas. El tratado negociado no ha sido ratificado por el Senado. Una de las objeciones principales que se elevaron en su contra consistía en que el tema de la anexión no había sido sometido al dictamen de la opinión pública de los Estados Unidos. Por más insostenible que fuese dicha objeción, en virtud de la facultad incuestionable del Ejecutivo para negociar el tratado y de los importantes y permanentes intereses implicados en la cuestión, consideré mi deber someter todo este asunto al Congreso, como el mejor intérprete del sentimiento popular. Al no haber adoptado el Congreso una decisión definitiva al respecto, la cuestión debió ser referida directamente a la decisión de estados y del pueblo. La gran consulta popular que acaba de concluir nos ofreció la mejor oportunidad para determinar la voluntad de los estados y del pueblo sobre el tema. Estando pendiente dicha cuestión, el Ejecutivo consideró su deber imperioso informar a México que el tema de la anexión estaba aún en manos del pueblo estadounidense y, que hasta que éste se pronunciara sobre ello, cualquier invasión grave a Texas sería considerada como un intento de impedir su dictamen y que la misma no podía verse con indiferencia. Me complace informarles que tal invasión no tuvo lugar; y que confío en que, cualquiera que sea la decisión de ustedes al respecto, México reconocerá la importancia

de resolver el asunto recurriendo a medios pacíficos con preferencia a los de las armas. El pueblo y los estados han manifestado, en forma terminante, su decisión sobre este grande e interesante tema. El asunto de la anexión fue sometido a su consideración en forma clara. Se evitaron cuidadosamente, conforme al propio tratado, todos los asuntos colaterales y accesorios que se pensaba pudieran dividir y distraer a las asambleas públicas. Se dejó que el futuro se hiciera cargo de determinar sabiamente estos asuntos. Se presentó, repito, el tema de la anexión en forma aislada, y así fue sometido al juicio del sentimiento del público. La mayoría del pueblo y una gran parte de los estados se han declarado en favor de la anexión inmediata. Así pues, se han dado instrucciones a ambas cámaras del Congreso, por parte de sus respectivos representados, en los términos más enfáticos. Es voluntad del pueblo y de los estados que Texas sea anexada a la Unión a la mayor brevedad. Puede esperarse que, al poner en ejecución la voluntad popular declarada de la manera expresada, se evitarán todos los temas colaterales. Los cuerpos legislativos que remplazarán a los actuales podrán decidir de mejor manera lo relativo al número de estados que deberán establecerse en el territorio en cuestión, llegado el momento para tomar una decisión al respecto. Así será con todos los demás temas. Conforme al tratado, los Estados Unidos asumieron el pago de todas las deudas de Texas por un monto máximo de 10 millones de dólares, que serán pagados, con excepción de una suma inferior a los 400 000 dólares, exclusivamente a partir del producto de la venta de sus predios públicos. No podríamos, sin faltar a nuestro honor, tomar las tierras sin asumir el pago total de todos sus gravámenes.

Desde la última sesión, nada ha ocurrido que nos induzca a poner en duda que la disposición de Texas no siga siendo la misma. El Ejecutivo no tiene ningún indicio de que haya surgido alteración alguna en la decisión de su gobierno y de su pueblo. Aun desea ponerse al amparo de nuestras leyes y participar de las ventajas de nuestro sistema federativo, al tiempo que todos los intereses estadounidenses parecieran requerirlo. La extensión de nuestro comercio a lo largo de la costa y con el extranjero hasta una magnitud incalculable, la ampliación del mercado para nuestras manufacturas, un mercado cada día mayor para nuestros productos agrícolas, seguridad para nuestras fronteras, y mayor fortaleza y estabilidad en la Unión son los resultados que rápidamente se verán al consumarse la medida de la anexión.

En tal caso, no pongo en duda que México encuentre que su verdadero interés consista en responder a los avances de este gobierno con un espíritu de amistad. Tampoco tengo aprensiones acerca de ninguna queja grave proveniente de cualquier otro lugar; no existe fundamento suficiente para tal queja. No debemos interferir, en aspecto alguno, en los derechos de ninguna otra nación. No es posible deducir de este acto deseo alguno, de nuestra parte, de proceder a ello respecto a sus posesiones en este continente. No hemos puesto impedimentos en la forma en que se llevan a cabo las adquisiciones de territorios, grandes y extensos en muchos de los casos, que las principales potencias de Europa han realizado de tiempo en tiempo en todos los confines del mundo. No buscamos conquistar por medio de la guerra. No se ha recurrido a

intriga alguna ni a ningún acto de diplomacia para lograr la anexión de Texas. Libre e independiente, pide ser recibida en la Unión. Sólo a nosotros compete decidir si lo será o no.

Para presentar el tema en toda su amplitud y todos sus ángulos, adjunto las notas que se han intercambiado respecto al mismo entre los Estados Unidos, Texas y México, desde la última sesión del Congreso.

Las reformas propuestas por el Senado a la convención celebrada entre los Estados Unidos y México, el 20 de noviembre de 1843, han sido transmitidas para conocimiento del gobierno mexicano por conducto de nuestro ministro; sin embargo, pese a que se le ha exhortado a ello, dicho gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto, ni tampoco ha dado respuesta alguna que permita una conclusión favorable en el futuro.

El decreto de septiembre de 1843, relativo al comercio de menudeo, la orden de expulsión de extranjeros y otra, de fecha más reciente, relativa a los pasaportes –todas las cuales se consideran violatorias del tratado de amistad y comercio entre los dos países– han dado lugar a un extenso intercambio de notas entre el ministro de Relaciones Exteriores y nuestros representantes en México, pero sin que se hayan obtenido resultados satisfactorios, y siguen sin solución. Muchos y graves inconvenientes han sufrido nuestros ciudadanos como consecuencia de ello.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit. 56-59.

12. DISCURSO JAMES K. POLK 1845-1849

12.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*2 de diciembre de 1845*)

Lamento informarles que, desde la última sesión del Congreso, nuestras relaciones con México no han revestido el carácter de amistad que deseamos cultivar con todas las naciones extranjeras. El 6 de marzo último, el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario mexicano en los Estados Unidos elevó una protesta formal en nombre de su gobierno en contra de la resolución conjunta adoptada por el Congreso “por la anexión de Texas a los Estados Unidos”, que él decidió considerar como una violación de los derechos de México y, como consecuencia de ello, exigió sus pasaportes. Se le informó que el gobierno de los Estados Unidos no consideraba dicha resolución conjunta como una violación a derecho alguno de México, o que la misma representara algún motivo justo de ofensa a su gobierno; que la república de Texas era una potencia independiente, que no le debía lealtad a México y no constituía parte de su territorio o de su legítima soberanía o jurisdicción. Se le aseguró asimismo que el sincero deseo de este gobierno era mantener con el de México relaciones de paz y buen entendimiento. No obstante, el referido funcionario, pese a dichas declaraciones y seguridades, repentinamente puso fin a su misión y, poco tiempo después, abandonó el país. A nuestro enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en México se le negó toda relación oficial con dicho gobierno, y después de permanecer allí durante varios meses, previa autorización de su propio gobierno, regresó a los Estados Unidos. Así, a instancias de México, se suspendió todo intercambio diplomático entre los dos países.

Desde entonces, México ha mostrado hasta el día de hoy una actitud de hostilidad hacia los Estados Unidos: ha estado reclutando soldados y organizando ejércitos, emitiendo proclamas y manifestando su intención de hacer la guerra a los Estados Unidos, ya sea mediante la declaración abierta o invadiendo Texas. Tanto el Congreso como la convención del pueblo de Texas instaron a este gobierno a despachar un ejército a dicho territorio para protegerlos y defenderlos de la amenaza de ataque. A

partir del momento en que Texas aceptó los términos y condiciones de la anexión ofrecida por los Estados Unidos, a tal punto forma parte de nuestro propio país, que es deber nuestro proporcionar dicha protección y defensa. En consecuencia, considero oportuno despachar, como medida de precaución, una fuerte escuadra a las costas de México y concentrar una eficiente fuerza militar en la frontera occidental de Texas. Se ordenó a nuestro ejército tomar posiciones en la región comprendida entre el Nueces y el Río del Norte, así como repeler cualquier invasión al territorio texano que llegasen a intentar las fuerzas mexicanas. Se ordenó a nuestra escuadra destacada en el Golfo cooperar con el ejército. Pero si bien nuestro ejército y marina fueron colocados en posición de defender nuestros derechos y los de Texas, se les ordenó no cometer ningún acto de hostilidad contra México a menos que este país declarara la guerra o se convirtiera en agresor dando el primer golpe. El resultado ha sido que México no ha realizado ningún movimiento agresivo y que nuestros comandantes militares y navales han ejecutado las órdenes con tanta discreción que la paz de las dos repúblicas no se ha visto perturbada. Texas ha declarado su independencia y la ha defendido con sus armas durante más de nueve años. Cuenta con un gobierno organizado que ha venido funcionando en forma exitosa durante ese lapso. Su existencia separada como estado independiente ha sido reconocida por los Estados Unidos y por las principales potencias de Europa. Diferentes naciones han celebrado con Texas tratados de comercio y navegación, y es ya evidente para el mundo entero que cualquier otro intento por parte de México para conquistarla o derrocar su gobierno sería vano. Aun el propio México ha aceptado este hecho, y mientras el tema de la anexión fue sometido a la consideración del pueblo de Texas el verano pasado, el gobierno de México, mediante acto formal, convino en reconocer la independencia de Texas a condición de que no se anexara a ninguna otra potencia. La anuencia a reconocer la independencia de Texas, acompañada o no de esta condición, es concluye contra México. La independencia de Texas es un hecho que el propio México ha concedido, y éste no tiene derecho o autoridad para establecer limitaciones en cuanto a la forma de gobierno que posteriormente decida adoptar Texas. Pero, pese a que México no puede quejarse de los Estados Unidos por causa de la anexión de Texas, es lamentable que sigan existiendo graves motivos de desavenencia, que tienen su origen en perjuicios no reparados, infligidos durante largos años por las autoridades y el pueblo mexicanos contra las personas y bienes de ciudadanos de los Estados Unidos. México ha aceptado estos perjuicios, pero ha descuidado repararlos o se ha rehusado a ello. Tal es la naturaleza de los agravios y tales son los insultos dirigidos por México, en repetidas ocasiones, a ciudadanos estadounidenses y a la bandera de nuestro país, en violación palpable del derecho de gentes y del tratado celebrado por los dos países el 5 de abril de 1831, que repetidamente mis antecesores han expuesto ante este Congreso. Ya desde el 6 de febrero de 1837, el presidente de los Estados Unidos declaró en un informe al Congreso que

el largo tiempo transcurrido desde que se cometieron algunos de los agravios, las repetidas e infructuosas solicitudes de reparación, el carácter injustificado de algunas

de las afrentas a bienes y a nuestros ciudadanos, a funcionarios y a la bandera de los Estados Unidos, sin contar los últimos insultos dirigidos a este gobierno y al pueblo por el anterior ministro extraordinario mexicano, justificarían a los ojos de todas las naciones la guerra inmediata.

Sin embargo, no recomendó recurrir de inmediato a esta medida extrema que, según declaró, “no debe ser adoptada por naciones justas y generosas, confiadas en su fortaleza, por perjuicios cometidos, si es posible evitarla con honor”, sino que, dando muestras de una actitud indulgente, propuso que se presentara otra demanda a México por la reparación que había sido negada durante largo tiempo y en forma por demás injustificada. Comités de ambas Cámaras del Congreso convinieron en este punto de vista, como puede verse en los informes dirigidos a sus respectivos cuerpos legislativos. Han transcurrido más de ocho años desde que se llevaron a cabo esas sesiones, durante los cuales, además de los agravios que a la sazón fueron objeto de quejas, se han cometido otros de naturaleza aún más grave en contra de las personas y bienes de nuestros ciudadanos. En el verano de 1838, se envió a México un agente especial con plenas facultades para presentar otra demanda terminante con el fin de obtener reparación. Se presentó la demanda; el gobierno mexicano prometió reparar los agravios de los que nos quejábamos y después de mucho retraso, el 11 de abril de 1839, se celebró un tratado, entre las dos potencias con ese fin, que fue debidamente ratificado por ambos gobiernos. Conforme a dicho tratado, se creó una comisión mixta para que diera su fallo con respecto a las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno de México. La comisión se formó en Washington el 25 de agosto de 1840. Su vigencia se limitó a dieciocho meses, y, al vencer dicho plazo, pronunciaron su fallo y adjudicaron reclamaciones que ascendían a los 2 026 139.68 dólares en favor de ciudadanos de los Estados Unidos contra el gobierno mexicano, quedando sin solución una gran cantidad de ellas. De estas últimas, los comisionados estadounidenses fallaron en favor de nuestros ciudadanos reclamaciones por un monto de 928 627.88 dólares, que no fueron afirmadas por el árbitro facultado por el tratado. Posteriormente se sometieron a la comisión, demasiado tarde para ser consideradas, otras reclamaciones, que ascendían a entre tres y cuatro millones de dólares y que quedaron sin resolverse. La suma de 2 026 139.68 dólares, determinada por la comisión, representa una deuda cierta de México con los demandantes, y no existen motivos justificados para retardar su pago de conformidad con las condiciones del tratado. Sin embargo, dicha deuda no fue saldada. México nos solicitó más muestras de indulgencia y, con el espíritu de generosidad y refrenamiento que siempre ha caracterizado la política de los Estados Unidos hacia esa república, se otorgó la petición y, el 30 de enero de 1843, se celebró un nuevo tratado. Conforme a este último se convino en que los intereses pendientes sobre los montos fallados en favor de los demandantes, con arreglo a la convención del 11 de abril de 1839, deberían pagarse el 30 de abril de 1843 y, por otra parte, que la suerte principal de los montos de dichos fallos y los intereses acumulados sobre ellos deberán pagarse

en cinco años, en pagos parciales iguales cada tres meses, principiando dicho plazo de cinco años en la referida fecha del 30 de abril de 1843.

Ya han sido pagados los intereses que vencieron el 30 de abril de 1843, así como los tres primeros de un total de veinte pagos parciales. Restan por saldarse diecisiete de dichos pagos parciales, siete de los cuales ya están vencidos.

Las reclamaciones que la comisión mixta dejó sin resolver y que ascienden a más de tres millones de dólares, junto a otras reclamaciones por saqueos de bienes de nuestros ciudadanos, fueron presentadas posteriormente al gobierno mexicano y ya han sido reconocidas por un tratado, celebrado y firmado en México el 20 de noviembre de 1843, de acuerdo con el cual se disponía que una comisión mixta las examinase y resolviese. Dicho tratado fue ratificado por los Estados Unidos con ciertas modificaciones que no pueden ser objeto de justos reparos, pero aún no ha sido ratificado por el gobierno de México. Mientras tanto, nuestros ciudadanos, que han sufrido grandes pérdidas —algunos de los cuales han sido reducidos de la bonanza a la quiebra—, no han visto reparadas sus reclamaciones, a menos que su gobierno haga valer sus derechos. Tal serie de constantes e inmotivados agravios nunca habría sido tolerada por los Estados Unidos si hubiese sido cometida por una de las principales naciones de Europa. Sin embargo, México es una república hermana y vecina que, siguiendo nuestro ejemplo, logró su independencia, y por la que profesamos, en su momento, toda nuestra simpatía y buenos deseos de éxito y prosperidad. Los Estados Unidos fueron el primer país en reconocer su independencia y en recibirla en la familia de las naciones, y siempre han deseado cultivar una relación de entendimiento mutuo. En consecuencia, hemos soportado con gran paciencia los repetidos agravios cometidos por ella, con la esperanza de que, en última instancia, el sentido de la justicia guíe sus asambleas y para, en lo posible, evitar con honor cualquier enfrentamiento hostil con dicho país. No contando con la previa autorización del Congreso, el Ejecutivo no tenía facultades para adoptar o poner en ejecución los recursos correspondientes ante los perjuicios que habíamos sufrido, y sólo le quedaba el de prepararse para repeler la agresión que México había amenazado con cometer. Luego de muchas semanas en que nuestro ejército y nuestra marina han permanecido en la frontera y costas de México, sin que este país haya incurrido en ningún movimiento hostil, y pese a que han continuado sus amenazas, considero importante poner fin, en la medida de lo posible, a este estado de cosas. En el mes de septiembre último, giré instrucciones para que se adoptaran medidas con el fin de determinar en forma clara y fidedigna las intenciones de México: si su intención era declarar la guerra o invadir Texas, o si estaban dispuestos a resolver y dirimir las diferencias pendientes entre los dos países en forma amistosa. El 9 de noviembre se recibió una respuesta oficial del gobierno mexicano en la que éste señalaba que estaba anuente a reanudar las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas el pasado marzo y que, para tal fin, estaban en la mejor disposición de acreditar a un ministro de los Estados Unidos. Con el sincero deseo de preservar la paz y reanudar relaciones de buen entendimiento entre las dos repúblicas, renuncié a toda ceremonia

en lo tocante a la manera de renovar el intercambio diplomático entre nuestras naciones y, tomando la iniciativa, nombré, el 10 de noviembre, a un distinguido ciudadano de la Luisiana como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en México, revestido de todas las facultades para resolver y dirimir, en forma terminante, todas las diferencias pendientes entre ambos países, incluidas las relativas a la frontera entre México y el estado de Texas. El ministro nombrado se ha hecho cargo de su misión y es probable que en este momento se encuentre en la capital mexicana. Ha recibido instrucciones para llevar a término la negociación de la que ha sido encargado en el lapso más breve posible, con la esperanza de que sea a tiempo para permitirme comunicar el resultado al Congreso durante la presente sesión. En tanto no se conozca dicho resultado, desisto de recomendar al Congreso medidas ulteriores para lograr la reparación de los agravios y perjuicios que hemos soportado durante tanto tiempo y que hubiese sido oportuno recomendar de no haberse procedido a dicha negociación.

En la última sesión, el Congreso asignó 275 000 dólares para el pago de los abonos de abril y julio correspondientes a la indemnización que México debía pagar en el año 1844.

Siempre y cuando se determine, a satisfacción del gobierno estadounidense, que dichos abonos han sido pagados por el gobierno mexicano al agente nombrado por los Estados Unidos con el fin de recibir los mismos, de tal forma que quede cancelada la reclamación contra el gobierno mexicano, y que dicho agente se retrase al remitir el dinero a los Estados Unidos.

El incierto estado de nuestras relaciones con México ha dado origen a que este tema se haya visto envuelto en un gran misterio. La primera información fidedigna que se tiene del agente de los Estados Unidos, nombrado durante la administración de mi antecesor, fue recibida por el Departamento de Estado el 9 de noviembre último. La misma está contenida en una carta, fechada el 17 de octubre, dirigida por él a uno de nuestros ciudadanos que a la sazón se encontraba en México, con objeto de que la hiciera llegar al referido Departamento. De ello se desprende que, el 20 de septiembre de 1844, dicho agente extendió un recibo a la tesorería de México por el monto correspondiente a los pagos parciales de la indemnización de abril y julio. En dicha comunicación, empero, él sostiene que no había recibido un solo dólar en efectivo, pero que estaban en su poder documentos mediante los cuales se garantizaba dicho pago cuando extendió el recibo y que él no tiene dudas de que, en un momento dado, obtendrá el dinero. En virtud de que, como todo parece indicar, dichos pagos parciales nunca fueron efectivamente entregados al agente por el gobierno de México y, por tanto, dado que dicho gobierno no ha sido descargado de la referida obligación, no me siento por mi parte autorizado a girar instrucciones para que se pague a los demandantes con dineros del Tesoro sin que se legisle al respecto. El caso de los demandantes es sin duda harto difícil, y compete al Congreso decidir si procede otorgarles la reparación y por qué monto. Se han girado instrucciones a nuestro ministro acreditado en México para que determine,

con el gobierno mexicano, los hechos relativos a este caso en forma fidedigna y oficial y, por otra parte, para que informe sobre el resultado a la mayor brevedad.

Tengo a bien remitir a ustedes el informe anexo del secretario de Guerra que contiene información respecto a la situación actual del ejército y de sus operaciones durante el pasado año, a saber, el estado de nuestras defensas, la condición de las obras públicas y nuestras relaciones con las diversas tribus indias dentro de nuestros límites y en las cercanías de nuestras fronteras. Reclamo su atención a las sugerencias contenidas en dicho informe relacionadas con estos importantes temas de interés nacional. Cuando el verano pasado se dio la orden de concentrar fuerzas militares en la frontera occidental de Texas, nuestras tropas estaban muy dispersas, en pequeños destacamentos, y ocupando puestos distantes unos de otros. La manera tan expedita en que se reunió, en una emergencia, a un ejército que abarcaba más de la mitad de nuestros establecimientos en tiempo de paz, les representa un gran crédito a los oficiales a quienes fue confiada la ejecución de estas órdenes, al igual que al propio ejército por su disciplina. Para contar con mayor fuerza con el fin de proteger y defender al pueblo y territorio de Texas, en caso de que México iniciase hostilidades o invadiese su territorio con un gran ejército, tal como ha amenazado hacer, autorizo al general asignado al mando del ejército de ocupación para que proceda a reclutar fuerzas adicionales en varios de los estados próximos al territorio texano, así como en aquellos que pudieran proporcionarlas con la mayor celeridad, en caso de que, a su juicio, se requiriera una fuerza mayor que la que está bajo su mando, además de las fuerzas de apoyo que, en circunstancias militares, está autorizado a recibir desde Texas. La contingencia de la que se dependía para el ejercicio de esta facultad no ha ocurrido. En el informe del secretario de Guerra se señalan en forma pormenorizada las circunstancias en las que fueron enviadas a Texas dos compañías de artillería estatal de la ciudad de Nueva Orleans, que fueron alistadas para el servicio de los Estados Unidos. Encomiendo al Congreso tomar las providencias correspondientes para disponer el pago de estas tropas, así como el de un pequeño número de voluntarios texanos que el general en jefe consideró necesario acoger o alistar en nuestro servicio.

12.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1846)*

En lugar de reparar los desagrazos por nuestras propias manos y, tras recibir justas promesas de México, nos abocamos a una nueva negociación, pero los hechos demostraron que su verdadero propósito era postergar la reparación que exigimos y que en justicia se nos debía. Dicha negociación, después de más de un año de retraso, resultó en la Convención del 2 de abril de 1839, “para la solución de reclamaciones de ciudadanos de los Estados Unidos de América contra el gobierno de la República mexicana”.

La comisión mixta creada por esta convención para que examinase y resolviese las reclamaciones no fue organizada sino hasta el mes de agosto de 1840, y conforme a los términos de la convención, debía dar por terminadas sus obligaciones a los 18

meses contados a partir de esa fecha. Cuatro de esos 18 meses fueron consumidos en pláticas preliminares sobre puntos frívolos y dilatorios planteados por los comisionados mexicanos, y no fue sino hasta el mes de diciembre de 1840 cuando se inició el estudio de las reclamaciones de nuestros ciudadanos contra México. Restaban sólo 14 meses para examinar y resolver estos numerosos y complicados casos. En el mes de febrero de 1842 venció el plazo de la comisión, y muchas reclamaciones quedaron sin solución por falta de tiempo. Las reclamaciones que fueron falladas por la comisión, y por el árbitro autorizado de conformidad con la convención para decidir en caso de desacuerdo entre los comisionados mexicanos y estadounidenses, ascendieron a 2 026 139.68 dólares. Cuando venció el plazo de la comisión, estaban pendientes, para la consideración del árbitro, otras reclamaciones que habían sido examinadas y resueltas por los comisionados estadounidenses, pero que no lo habían sido por los comisionados mexicanos, por un monto de 928 627.88 dólares, respecto a las cuales el árbitro no pronunció fallo alguno, alegando que sus facultades habían terminado con la disolución de la comisión mixta. Además de estas reclamaciones, había otras presentadas por ciudadanos estadounidenses que ascendían a 3 336 837.05 dólares, que habían sido sometidas a la comisión y respecto a las cuales ésta no había tenido el tiempo de decidir antes de la clausura definitiva.

La suma de 2 026 139.68 dólares, que había sido fallada en favor de los demandantes, constituye una deuda cierta de México, respecto a la cual no podía haber desacuerdo alguno, y que ella se obligaba a pagar conforme a los términos y condiciones de la convención. Poco tiempo después de que se hubo fallado este monto, el gobierno mexicano solicitó el aplazamiento de la fecha de pago, alegando que no le convenía efectuar el pago en la fecha estipulada. Con una actitud de amable indulgencia hacia una república hermana, de la que México había abusado durante tanto tiempo, los Estados Unidos accedieron a su petición. El 30 de enero de 1843 se celebró una segunda convención entre los dos gobiernos en la que se declaraba, en su primera página, que “este nuevo acuerdo se celebra por convenir a México”. De conformidad con los términos y condiciones de la convención, todos los intereses pendientes de pago sobre los montos de los fallos que habían sido pronunciados en favor de los demandantes, con arreglo a la Convención del 11 de abril de 1839, debían pagarse a ellos el 30 de abril de 1843; se estipuló asimismo que “la suerte principal de dichas deudas más los intereses acumulados debían saldarse en cinco años, en pagos parciales iguales cada tres meses”. No obstante haberse celebrado esta convención a petición de México, y con el propósito de aligerarle el peso, los demandantes sólo han recibido los intereses que vencieron el 30 de abril de 1843, así como tres de los veinte pagos parciales. Si bien el pago de la suma acordada a nuestros ciudadanos, por declaración del propio México, como indemnización por actos de desafueros y agravios reconocidos estaba garantizado en un tratado cuyas obligaciones deben considerar sagradas todas las naciones justas, México ha violado este compromiso solemne negándose a efectuar dicho pago. Los dos pagos parciales que vencieron en abril y julio de 1844, en las circunstancias pe-

culiars relacionadas con ellos, han sido asumidos por los Estados Unidos y pagados a los demandantes, pero México aún los debe. Sin embargo, éstas no son todas las causas justas de queja que tenemos. Para que se previera una reparación a los demandantes cuyos casos no fueron fallados por la comisión mixta, de conformidad con la Convención del 11 de abril de 1839, se estipuló, en forma expresa, con fundamento en el artículo 6° de la Convención del 30 de enero de 1843 lo siguiente:

Se celebrará una nueva convención para la resolución de todas las reclamaciones del gobierno y de ciudadanos de los Estados Unidos contra la República de México que al final no fueron falladas por la comisión anterior, reunida en la ciudad de Washington, así como para que se dé solución a todas las reclamaciones del gobierno y de ciudadanos de México contra los Estados Unidos.

De acuerdo con esta disposición, el 20 de noviembre de 1843 los plenipotenciarios de ambos gobiernos celebraron y firmaron una tercera convención en la ciudad de México. En enero de 1844, esta convención fue ratificada por el Senado de los Estados Unidos con dos reformas que, en dicho carácter, eran manifiestamente razonables. Al hacer una referencia a las reformas propuestas por el gobierno de México se interpusieron las mismas evasiones, dificultades y retrasos que han caracterizado, desde hace tanto tiempo, la política de ese gobierno hacia los Estados Unidos. México no ha decidido aún si accederá o no a ellas, pese a que el tema ha sido repetidamente puesto a su consideración. En consecuencia, México ha violado, por segunda vez, la fe de los tratados al no poner en ejecución el artículo 6° de la Convención de enero de 1843, o al negarse a ello.

Tal es la historia de los agravios que hemos sufrido y soportado pacientemente, a lo largo de muchos años, por causa de México. Lejos de que los perjuicios e insultos que hemos sufrido se resuelvan en forma razonablemente satisfactoria, se han agravado, ya que mientras los Estados Unidos, deseosos de preservar relaciones de buen entendimiento con México, se han consagrado, aunque en vano, a buscar reparación por agravios pasados, siguen ocurriendo constantemente nuevos desafueros, que hacen que sigan aumentando nuestros motivos de queja así como el número de demandas. Mientras que los ciudadanos de los Estados Unidos se dedicaban a un legítimo comercio con México, al amparo de un tratado de “amistad, comercio y navegación”, muchos de ellos eran víctimas de perjuicios similares a los que ocurren en tiempos de guerra. En lugar de ofrecer protección a nuestros ciudadanos, dicho tratado ha sido el medio de invitarlos a los puertos de México para ser despojados de sus bienes y de su libertad personal, como en efecto lo han sido en numerosas ocasiones, al atreverse a insistir en sus derechos. Si los decomisos ilegales de bienes estadounidenses y la violación de la libertad personal de nuestros ciudadanos, por no decir nada acerca de los insultos a nuestra bandera que han tenido lugar en los puertos de México, hubieran ocurrido en alta mar, desde hace tiempo hubiesen constituido de suyo un manifiesto estado de guerra entre ambos países. Tras haber soportado que México violara sus más solemnes obligaciones conforme al tratado, despojara a nuestros ciudadanos de sus bienes y los

encarcelara sin proporcionarles reparación alguna, no hemos cumplido con uno de los primeros y más altos deberes de cualquier gobierno para con sus ciudadanos, con la natural consecuencia de que muchos de ellos han sido reducidos de un estado de bonanza a otro de quiebra. La altiva ciudadanía estadounidense, que debiera proteger a todos los que la ostentan, no ha otorgado protección a nuestros ciudadanos en México.

Tuvimos amplios motivos para la guerra mucho antes del inicio de las hostilidades; pero aun entonces nos abstuvimos de reparar los agravios por nuestras propias manos, hasta que México se convirtió en agresor al invadir nuestro territorio en hostil formación y hacer correr la sangre de nuestros ciudadanos.

Tales son los graves motivos de queja de los Estados Unidos contra México, motivos éstos que han existido mucho antes de la anexión de Texas a la Unión; y, sin embargo, animados como estamos por el amor a la paz y por una magnánima moderación, no adoptamos las medidas de reparación que, en tales circunstancias, constituyen el recurso justificado de las naciones lesionadas.

La anexión de Texas a los Estados Unidos no constituyó motivo de ofensa justificada para México. El pretexto de serlo es en absoluto congruente y reconciliable con los hechos fidedignos relacionados con la revolución, por medio de la cual Texas se volvió independiente de México. Pese a que lo anterior es por demás manifiesto, sería oportuno referirnos a las causas y a la historia de los principales acontecimientos de dicha revolución.

Texas constituía una porción de la antigua provincia de la Luisiana, cedida por Francia a los Estados Unidos en 1803. En el año de 1819, los Estados Unidos, por el Tratado de la Florida, cedieron a España toda la parte de la Luisiana que está dentro de los límites actuales de Texas, y México, en virtud de la revolución que la separó de España y la convirtió en nación independiente, heredó los derechos de la madre patria sobre ese territorio. En el año de 1824, México promulgó una Constitución federal, con arreglo a la cual la República mexicana está conformada por un número de estados soberanos, agrupados en una unión federal similar a la nuestra. Cada uno de estos estados tenía sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y para todos los efectos, salvo para los federales, era independiente del gobierno general y de los demás estados, como lo son Pensilvania o Virginia conforme a nuestra Constitución. Texas y Coahuila se unieron y formaron uno de estos estados mexicanos. La Constitución estatal que adoptaron, y que fuera aprobada por la Confederación mexicana, señalaba que eran libres e independientes respecto de los demás Estados Unidos Mexicanos y de cualquier otra potencia o dominio”, y proclamaba el gran principio de libertad humana según el cual la “soberanía del Estado reside original y esencialmente en la masa de individuos que lo conforman”. Al gobierno emanado de conformidad con dicha Constitución, el pueblo de Texas debe lealtad.

De conformidad con leyes de colonización promulgadas por ese estado y el gobierno federal, se invitó a emigrantes de países extranjeros, incluidos los de los Estados Unidos, para que se establecieran en Texas. Se les ofrecieron condiciones ventajosas

para inducirlos a abandonar su propio país y convertirse en ciudadanos mexicanos. Dicha invitación fue aceptada por muchos de nuestros ciudadanos, plenamente confiados en que, en su nuevo hogar, se regirían por leyes promulgadas por representantes elegidos por ellos mismos y que sus vidas, libertad y bienes serían protegidos por garantías constitucionales similares a las que existían en la república que habían dejado. Y así continuaron, al amparo de un gobierno organizado de esa suerte, hasta el año de 1835, cuando se declaró una revolución militar en la ciudad de México que produjo un cambio total, de estados a meros departamentos del gobierno central de México a partir del momento en que dicho gobierno abolió la Constitución estatal y en su lugar colocó a un gobierno central arbitrario y despótico. Ésas fueron las causas de la revolución texana. De inmediato, el pueblo de Texas decidió resistir y tomó las armas. Sin embargo, en medio de estos importantes y encendidos sucesos, no dejaron de fundar sus libertades sobre bases seguras y permanentes. Se eligieron miembros para integrar una convención que, en el mes de marzo de 1839, emitió una declaración formal en la cual se señalaba que

su relación política con la nación mexicana había por siempre concluido y que el pueblo constituye ahora una *República libre, soberana e independiente*, plenamente revestida de todos los derechos y atributos de que con propiedad gozan las naciones independientes.

Adoptaron asimismo para su gobierno una Constitución republicana liberal. Alrededor de la misma época, Santa Anna, a la sazón dictador de México, invadió Texas con un numeroso ejército con objeto de someter a su pueblo y obligarlo a rendir obediencia a su arbitrario y despótico gobierno. El 21 de abril de 1836 fue enfrentado por soldados texanos y, ese día, éstos resultaron victoriosos en la memorable batalla de San Jacinto, a raíz de la cual conquistaron su independencia. Considerando el número de soldados de ambos lados, la historia no registra un triunfo más brillante. El propio Santa Anna se contaba entre los prisioneros.

En mayo de 1836, Santa Anna reconoció, mediante tratado solemne que celebró con las autoridades texanas, “la plena, total y perfecta independencia de la República de Texas”. Es cierto que en ese momento era un prisionero de guerra, pero es igualmente cierto que no pudo reconquistar Texas y que se enfrentó a una señalada derrota; que su autoridad no había sido revocada y que, en virtud de dicho tratado, obtuvo su liberación personal. De conformidad con aquél, se suspendieron las hostilidades y el ejército que había invadido a Texas bajo su mando pudo regresar a México sin ser molestado.

Desde el día en que se libró la batalla de San Jacinto hasta el de hoy, México jamás ha tenido fuerza para reconquistar Texas, según términos del secretario de Estado de los Estados Unidos, vertidos en una nota a nuestro ministro en México el 8 de julio de 1842:

Desde 1835 México siempre ha considerado a Texas, y puede que todavía lo haga, como una provincia rebelde, pero el mundo se ha visto obligado a tener una opinión completamente diferente sobre este asunto.

Desde la época de la batalla de San Jacinto, en abril de 1836, a la actualidad, Texas ha mostrado los mismos signos externos de independencia nacional que el propio México y con mucho mayor estabilidad en su gobierno. Siendo prácticamente libre e independiente, habiendo sido reconocida como una entidad política soberana por las principales potencias del mundo, no habiendo sido pisado su territorio por ninguna bota hostil durante seis o siete años, y el propio México habiéndose refrenado, durante todo ese tiempo, de cualquier otro intento de restablecer su autoridad en dicho territorio, no es sorprendente ver al señor De Bocanegra [secretario de Asuntos Exteriores de México] quejarse de que durante ese lapso los ciudadanos de los Estados Unidos, o su gobierno, hayan estado favoreciendo a los rebeldes al abastecerlos de barcos, municiones y dinero, como si México hubiera proseguido sin cesar con la guerra para reducir a la provincia de Texas, y su éxito evitado por estas influencias del extranjero.

En la misma nota, el secretario de Estado afirma que:

Desde 1837 los Estados Unidos han considerado a Texas como un estado soberano, en igual medida que México, y el comercio con ciudadanos de un gobierno en guerra con ese país no puede considerarse por ello como un intercambio por medio del cual se esté proporcionando ayuda y socorro a rebeldes mexicanos. Toda serie de observaciones del señor De Bocanegra va en la misma dirección, como si la independencia de Texas no hubiese sido reconocida. Si ha sido reconocida; lo fue en 1837, pese a las reconvenções y protestas de México, y la mayoría de los actos de alguna importancia de los que se queja el señor De Bocanegra emanan necesariamente de dicho reconocimiento. Él se refiere a Texas como si todavía fuese parte integrante del territorio de la República mexicana, pero no puede entender que los Estados Unidos no la consideren así. Por tanto, la verdadera queja de México es, en esencia, ni más ni menos, que una queja contra el reconocimiento de la independencia texana. Pudiera pensarse que es un poco tarde para repetir esa queja, e injusto limitarla a los Estados Unidos, habiendo sido los primeros en reconocer la propia independencia de México, de poner el ejemplo al reconocer la de Texas.

Y agregó que

la Constitución, los tratados públicos y las leyes obligan al presidente a considerar a Texas como un estado independiente y, por otro lado, que su territorio no forma parte del territorio de México.

Texas ha sido un estado independiente, con un gobierno organizado, que ha desafiado, durante más de diez años, el poderío de México por derrotarlo o reconquistarlo, desde antes de que éste iniciara la actual guerra contra los Estados Unidos. Texas ha dado tantas pruebas de ser una nación independiente, que ha sido reconocida formalmente como tal, no sólo por los Estados Unidos, sino también por varias de las principales potencias de Europa. Estas potencias han celebrado tratados de amistad, co-

mercio y navegación con ella. Han acogido y acreditado en sus respectivas cortes a los ministros y agentes diplomáticos texanos y, por su parte, dichas potencias han nombrado ministros y agentes diplomáticos ante el gobierno de Texas. Si independientemente de todo lo anterior y de su incapacidad para someter y reconquistar a Texas, México aún se niega obstinadamente a reconocerla como nación independiente, no por ello deja de serlo. El propio México había sido reconocido como nación independiente por los Estados Unidos, y por otras potencias, mucho antes de que España, de la que era colonia antes de su revolución, pudiera convenir en reconocerla como tal; y no obstante ello, México gozaba en esa época de la estima del mundo civilizado y, de hecho, no se consideraba menos que una potencia independiente aunque España aún la reclamara como colonia. Si España hubiera persistido, hasta el día de hoy, en aseverar que México era una de sus colonias en rebelión contra ella, esto no la hubiera convertido en tal o mudado el hecho de su existencia independiente. En el momento de su anexión a los Estados Unidos, Texas guardaba la misma relación con México que la que México guardaba con España muchos años antes de que ésta reconociera su independencia, con una diferencia importante: que antes de que se consumara la anexión de Texas a los Estados Unidos, el propio México, mediante un acto formal de su gobierno, había reconocido la independencia de la primera como nación. Es verdad que, en ese acto de reconocimiento, prescribió una condición que no tenía poder ni autoridad para imponer, a saber, que Texas no debería anexarse a ninguna otra potencia, pero esto no podía restar mérito, en ninguna medida, al reconocimiento que en ese entonces México hizo respecto a su independencia real. En virtud de estos hechos, es absurdo que, como pretexto para iniciar hostilidades contra los Estados Unidos, México alegue que Texas aún forma parte de su territorio.

Pero, aceptando que todo esto sea cierto, hay los que suponen que la verdadera frontera occidental de Texas es el Nueces en lugar del Río Grande y que, por consiguiente, al avanzar con nuestro ejército a la ribera oriental, pasamos la línea que divide a Texas e invadimos territorio mexicano. Con una simple declaración de hechos se refutará dicha suposición. Como declaró Francia a los Estados Unidos en 1803, Texas fue reclamada con base en que se extendía al oeste del Río Grande o Río Bravo. Este hecho ha sido establecido por la autoridad de nuestros estadistas más eminentes en un momento en que la cuestión se conocía mejor que en el presente. Durante la administración del señor Jefferson, los señores Monroe y Pinckney, que habían sido enviados en misión especial a Madrid encargados, entre otras cosas, de la delimitación de la frontera entre ambos países, afirmaron, en una nota dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de España, fechada el 28 de enero de 1805, que las fronteras de la Luisiana tal como ésta fue cedida por Francia a los Estados Unidos, “son el Río Perdido al este y el Río Bravo al oeste” y agregaron que “los hechos y principios que justifican esta conclusión son tan satisfactorios para nuestro gobierno que lo convencen de que los Estados Unidos no tienen mayor derecho sobre la isla de Nueva Orleans, de conformidad con la cesión aludida, que el que tienen respecto a toda la franja de territorio

descrita arriba”. Hasta la celebración del Tratado de la Florida, en febrero de 1819, mediante el cual dicho territorio fue cedido a España, los Estados Unidos afirmaron y mantuvieron sus derechos territoriales en esta medida. En el mes de julio de 1818, durante la administración del señor Monroe, al haberse recibido información en el sentido de que un número de aventureros extranjeros había desembarcado en Galveston con el manifiesto propósito de establecerse en esa vecindad, el gobierno de los Estados Unidos nombró al secretario de Estado como enviado especial, para advertirles que desistieran, si se encontraran allí “o en cualquier otro lugar al norte del Río Bravo y dentro del territorio reclamado por los Estados Unidos”. Se le dieron instrucciones para que, en caso de que esa gente se encontrara en la región que queda al norte de dicho río, les hiciera saber “la sorpresa con la que ha visto el presidente tomar un lugar, sin autorización de los Estados Unidos, dentro de sus límites territoriales y en donde no pueden establecerse sin ser sancionados por él”. Se le dieron asimismo instrucciones de hacerles “confesar bajo la autoridad de qué nación declaran actuar” y advertirles debidamente “que dicho lugar está dentro de los Estados Unidos, que no tolerarán que se cree un establecimiento permanente bajo ninguna autoridad que no sea la de ellos”. Aún el 8 de julio de 1842, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en nota dirigida a nuestro ministro en México, sostiene que, por el Tratado de la Florida de 1819, el territorio al oeste del Río Grande fue confirmado a España. En dicha nota señala que, por el tratado del 22 de febrero de 1819, celebrado entre los Estados Unidos y España, se adoptó el Sabine como la línea divisoria entre las dos potencias. Hasta ese periodo no se había efectuado colonización importante en Texas; pero habiendo España confirmado el territorio entre el Sabine y el Río Grande en el tratado, se hicieron peticiones a esa potencia para que otorgara concesiones de tierra. Dichas concesiones o permisos para establecerse fueron de hecho otorgados por las autoridades españolas en favor de ciudadanos de los Estados Unidos que se propusieron emigrar a Texas en numerosas familias antes de la declaración de independencia respecto a México.

La Texas que se cedió a España por el Tratado de la Florida abarcaba todo el territorio hoy reclamado por el estado de Texas entre el Nueces y el Río Grande. La República de Texas siempre ha considerado a este río como su frontera occidental y, en el tratado celebrado con Santa Anna, en mayo de 1836, éste así lo reconoció. Con base en la Constitución adoptada en Texas, en marzo de 1836, se organizaron distritos senatoriales y de representantes al oeste del Nueces. El 19 de diciembre de 1836, el Congreso de esa república promulgó “una ley para definir las fronteras de la República de Texas”, en la que se declaraba que el Río Grande, “desde su desembocadura hasta su fuente, era su frontera y, de conformidad con dicha ley, extendieron jurisdicción civil y política” sobre el país que llegaba hasta dicha frontera. Durante el periodo de más de nueve años que transcurrió entre la adopción de su constitución y su anexión como uno de los estados de la Unión, Texas afirmó y ejerció muchos actos de soberanía y de jurisdicción sobre el territorio y los habitantes al oeste del Nueces. Organizó y definió los límites de las regiones que se extendían hasta el Río Grande; estableció

tribunales de justicia y extendió su sistema judicial sobre el territorio; estableció una aduana y cobró aranceles, así como correos y caminos de correo; estableció una oficina de tierras y emitió numerosos otorgamientos de tierra dentro de sus límites; eligió a senadores y representantes al Congreso de la República que residían en cada una de estas vecindades y quienes sirvieron en esa calidad hasta que entró en vigor la ley de anexión, tanto en el Congreso como en la Convención de Texas, y quienes otorgaron su consentimiento a los términos y condiciones de la propia anexión. Ésta era la Texas que, mediante ley de nuestro Congreso del 29 de diciembre de 1845, fue admitida como uno de los estados de nuestra Unión. Que el Congreso de los Estados Unidos entendiera que el estado de Texas que admitieron en la Unión se extendía más allá del Nueces es evidente por el hecho de que, el 31 de diciembre de 1845, sólo dos días después de la ley de admisión, promulgó una ley “para establecer un distrito de recaudación en el estado de Texas”, mediante la cual se creó un puerto de recaudación en Corpus Christi, situado al oeste del Nueces, y habida cuenta de que era el mismo punto en el que estaba ubicada la aduana, que había sido establecida de conformidad con las leyes de dicha república; asimismo, recomendó al presidente nombrar un vista en ese puerto con el encargo de recabar los ingresos, previa consulta y consentimiento del Senado. Efectivamente, se nombró un vista confirmado por el Senado, y desde entonces se ha venido desempeñando en su cargo. Todos estos actos de la república de Texas y de nuestro propio Congreso fueron anteriores a las órdenes dadas a nuestro ejército para que avanzara a la ribera oriental del Río Grande. Posteriormente, el Congreso promulgó una ley para “establecer determinados caminos de correos” que se extendían al oeste del Nueces. El país situado al oeste de ese río constituye ahora parte de uno de los distritos del Congreso de Texas y está representado en la Cámara de Representantes. Los senadores del estado fueron elegidos por un cuerpo legislativo en el que estaba representado el país situado al oeste de dicho río. En virtud de estos hechos, es difícil concebir con qué bases es posible sostener que, al ocupar con nuestro ejército el país situado al oeste del Nueces con el solo objeto de garantizar su seguridad y defensa, invadimos territorio de México. Pero más difícil aún habría sido justificar al Ejecutivo, cuyo deber es velar por que se ejecuten fielmente las leyes, si a la luz de todos los mencionados actos, tanto del Congreso de Texas como del de los Estados Unidos, hubiera asumido la responsabilidad de ceder a México el territorio al oeste del Nueces o de rehusarse a proteger y defender ese territorio y a sus habitantes, incluidos Corpus Christi y el resto de Texas, contra la amenaza de invasión de México.

Sin embargo, el propio México nunca se ha basado, para emprender esta guerra, en el hecho de que nuestro ejército haya ocupado el territorio comprendido entre el Nueces y el Río Grande. Perseveró obstinadamente en su refutada pretensión de que Texas no era en realidad un estado independiente, sino una provincia rebelde, y su propósito manifiesto de iniciar una guerra con los Estados Unidos era reconquistar Texas y restaurar la autoridad de México en todo el territorio, no sólo hasta el Nueces, sino hasta el Sabine. En virtud de las proclamadas amenazas de México con ese fin,

consideré mi deber, como medida de precaución y defensa, ordenar a nuestro ejército ocupar posición en nuestra frontera como puesto militar, desde el que nuestras tropas pudieran resistir y repeler mejor cualquier intento de invasión que México pudiera intentar. Nuestro ejército ocupó posición en Corpus Christi, al oeste del Nueces, desde agosto de 1845, sin queja alguna de ningún lugar. Si el Nueces hubiera sido considerado como la verdadera frontera de Texas, nuestro ejército habría pasado por dicha frontera muchos meses antes de que avanzara a la ribera oriental del Río Grande. En mi mensaje anual de diciembre último, informé al Congreso que, a invitación de éste y de la Convención de Texas, había considerado oportuno ordenar que se despachara una fuerte escuadra a las costas de México y concentrar una eficiente fuerza militar en la frontera occidental de Texas para proteger y defender a sus habitantes contra la amenaza de invasión de México. En dicho mensaje informé al Congreso que, desde el momento en que Texas aceptó los términos y condiciones de la anexión ofrecida por los Estados Unidos, Texas se convirtió a tal punto en parte de nuestro propio país que era deber nuestro proporcionar dicha protección y defensa y que, para tal fin, se ordenó a nuestra escuadra dirigirse al Golfo y a nuestro ejército tomar “posiciones entre el Nueces y el Río del Norte” o Río Grande y “repeler cualquier invasión al territorio texano que llegasen a intentar las fuerzas mexicanas”.

Se consideró oportuno expedir esta orden, en virtud de que el gobierno de México manifestó graves amenazas de invadir el territorio texano poco después de que, en abril de 1845, el presidente de Texas había emitido una proclama para convocar al Congreso de esa república, a efectos de someter a la consideración de dicho cuerpo legislativo los términos y condiciones de la anexión propuesta por los Estados Unidos. Estas amenazas se volvieron más alarmantes conforme se hacía más evidente, durante el proceso de consulta de la cuestión, que el pueblo de Texas se decidiría en favor de aceptar los términos y condiciones de la anexión; finalmente, dichas amenazas asumieron ese temible carácter, lo cual indujo tanto al Congreso como a la Convención de Texas a pedir que los Estados Unidos despacharan una fuerza militar a su territorio para protegerla y defenderla contra la amenaza de invasión. Hubiera sido una violación de la buena fe hacia el pueblo de Texas el haberse rehusado a proporcionarle el auxilio que deseaba, contra la amenaza de invasión a la que había estado expuesto a resultas de su libre determinación de anexarse a nuestra Unión, de acuerdo con la posibilidad que le ofreció la resolución conjunta de nuestro Congreso. En consecuencia, se ordenó a una parte del ejército que avanzara a Texas. La posición escogida por el general Taylor fue Corpus Christi. Acampó en dicha posición en agosto de 1845 y el ejército permaneció en ella hasta el 11 de marzo de 1846, cuando se desplazó en dirección al oeste, y el 28 del mismo mes alcanzó la ribera oriental del Río Grande, frente a Matamoros. Este desplazamiento se efectuó de conformidad con órdenes del Departamento de Guerra, expedidas el 13 de enero de 1846. Antes de que se emitieran dichas órdenes, el Departamento de Estado recibió un oficio de nuestro ministro en México, fechado el 17 de diciembre de 1845, en el que éste transmitía la decisión del consejo de gobierno

de México de negarse a recibirlo, así como un oficio de nuestro cónsul en la ciudad de México, del 18 del mismo mes, de los cuales se adjuntaron copias a mi mensaje al Congreso del 2 de mayo último. Estas comunicaciones nos indicaban que era muy probable, si no absolutamente seguro, que nuestro ministro no fuera recibido por el gobierno del general Herrera.

Era bien sabido también que se tenían pocas esperanzas de un resultado diferente con el general Paredes, en caso de que tuvieran éxito el movimiento revolucionario que éste dirigía, como también era muy probable. Los partidarios de Paredes, quienes, como señalaba nuestro ministro en el referido oficio, mostraban una feroz hostilidad hacia los Estados Unidos, declararon que las negociaciones propuestas constituían un acto de traición y llamaron abiertamente a las tropas y al pueblo a derrocar por la fuerza al gobierno de Herrera. Se amenazó abiertamente con la reconquista de Texas y la guerra con los Estados Unidos. Éstas eran las circunstancias imperantes cuando se consideró oportuno ordenar al ejército bajo el mando del general Taylor que avanzara a la frontera occidental de Texas y ocupara una posición en el Río Grande o cerca de éste.

Los acontecimientos justifican plenamente las aprensiones de que México llevara a cabo su contemplada invasión. La decisión de México de apresurar las hostilidades contra los Estados Unidos se manifestó posteriormente en el tenor de la nota del ministro de Asuntos Extranjeros mexicano dirigida a nuestro ministro, de fecha 12 de marzo de 1846. Paredes había revolucionado el gobierno para ese entonces, y su ministro, tras referirse a la resolución de anexión de Texas que había adoptado nuestro Congreso en marzo de 1845, pasó a declarar que:

Un hecho como éste o, para decirlo con mayor exactitud, un acto de notoria usurpación, creó la imperiosa necesidad de que México, por su propio honor, lo repeliara con la apropiada firmeza y dignidad. El supremo gobierno había declarado con anterioridad que consideraría dicho acto como *casus belli*, que, como consecuencia de esta declaración, la negociación por su propia naturaleza llegaba a su fin, y que la guerra era el único recurso que le quedaba al gobierno mexicano.

Se desprende también que, el 4 de abril siguiente, el general Paredes, por conducto de su ministro de Guerra, expidió órdenes al general mexicano al mando de la frontera con Texas de “atacar” a nuestro ejército “con todos los medios permitidos por la guerra”. El general Paredes se comprometió a esto con el ejército y pueblo de México durante la revolución militar que lo llevó al poder. El 18 de abril de 1846, el general Paredes dirigió una carta al comandante de dicha frontera en la que le señalaba:

En esta fecha, supongo que usted, a la cabeza de ese valiente ejército, ya estará combatiendo o preparándose para las operaciones, y, con todas las fuerzas reunidas, es indispensable que comiencen las hostilidades, tomando usted la iniciativa en contra del enemigo.

El general en jefe efectuó el desplazamiento de nuestro ejército al Río Grande bajo las órdenes de abstenerse de todo acto de agresión contra México o ciudadanos mexicanos, así como de considerar pacíficas las relaciones entre ambos países a menos

que México declarase la guerra o cometiese actos de hostilidad que indicasen la existencia de un estado de guerra. Dichas órdenes han sido fielmente ejecutadas. Mientras ocupaba su posición en la ribera oriental del Río Grande dentro de los límites de Texas, que para ese entonces ya había sido admitido como uno de los estados de la Unión, el comandante general de las fuerzas mexicanas quien, de conformidad con las órdenes de su gobierno, había reunido un gran ejército en la ribera opuesta del Río Grande, cruzó dicho río, invadió nuestro territorio y, al atacar a nuestras fuerzas, inició hostilidades. Así, después de todos los agravios que habíamos recibido y soportado y después de que en forma insultante rechazara a un ministro enviado allí en misión de paz y a quien se comprometió solemnemente a recibir, México consumó su larga serie de ultrajes contra nuestro país, al iniciar una guerra ofensiva y al hacer que cayera la sangre de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo.

Los Estados Unidos nunca intentaron adquirir Texas por medio de una conquista. Por el contrario, poco después de que el pueblo de Texas logró su independencia, éste buscó la anexión a los Estados Unidos. En una elección general en septiembre de 1836, se decidieron casi unánimemente en favor de la “anexión” y, en noviembre siguiente, el Congreso de la República autorizó el nombramiento de un ministro para que fuese portador de su petición a este gobierno. Sin embargo, nuestro gobierno, habiendo permanecido neutral respecto a Texas y a México durante la guerra librada entre ellos, y considerando que el honor del país y nuestro bien ganado prestigio entre las naciones del mundo no nos permitía aprobar la anexión tan prontamente, no hasta que fuese evidente para todo el mundo que la reconquista de Texas por México era imposible, se rehusó a acceder a la proposición de Texas. El 12 de abril de 1844, tras haber transcurrido más de siete años desde que Texas lograra su independencia, se firmó un tratado para la anexión de esa república a los Estados Unidos, que el Senado rechazó. Finalmente, el 1º de marzo de 1845, el Congreso adoptó una resolución conjunta con miras a anexar Texas a los Estados Unidos, mediando determinadas condiciones preliminares para las cuales se requería el acuerdo de aquélla. El mundo es testigo de la solemnidad que caracterizó las deliberaciones y conducta del gobierno y pueblo de Texas en las cuestiones de tan profundo interés que se presentaron en dicha resolución. En una convención elegida para esos fines, el Congreso, el Ejecutivo y el pueblo de Texas aceptaron, en forma casi unánime, los términos y condiciones propuestos para la anexión, y así consumaron, por su parte, el gran acto de restaurar a nuestra Unión Federal un vasto territorio que había sido cedido a España por el Tratado de la Florida hacía más de un cuarto de siglo.

Luego de que nuestro Congreso adoptó la resolución conjunta para la anexión de Texas a los Estados Unidos, el ministro mexicano en Washington dirigió una nota al secretario de Estado, con fecha del 6 de marzo de 1845, en la que protestaba por dicha anexión al considerarla como “uno de los actos de agresión más injustos que hayan registrado los anales de la historia moderna, a saber, el de despojar a una nación amiga cómo México de una considerable porción de su territorio”, y en la que tam-

bién protestaba por la resolución de anexión tildándola de acto “mediante el cual la provincia de Texas, parte integrante del territorio mexicano, es admitida en la Unión americana”; asimismo anunció que, como consecuencia de ello, había concluido su misión en los Estados Unidos y exigió sus pasaportes, que le fueron entregados. El ministro mexicano adoptó esta medida, que fue tomada con el absurdo pretexto de que la república de Texas seguía siendo, pese a todo lo ocurrido, una provincia de México (país que debió al éxito de una revolución su propia independencia).

He hecho todos los esfuerzos que el honor me permite para evitar la guerra que sobrevino después, pero todos probaron ser vanos. Todos nuestros intentos para preservar la paz se han enfrentado al insulto y a la resistencia de México. Mis esfuerzos en tal sentido principiaron con la nota del secretario de Estado, del 10 de marzo de 1845, para dar respuesta a la del ministro mexicano. Al tiempo que declinaba reanudar la deliberación ya agotada y volviendo a dar pruebas de lo que ya todo el mundo conocía, a saber, que Texas había logrado su independencia desde hacía ya mucho tiempo, el secretario de Estado expresó el pesar de este gobierno de que México se hubiera sentido ofendido por la resolución de anexión adoptada por el Congreso y manifestó las seguridades de que “dedicaremos nuestros más arduos esfuerzos a la resolución amistosa de todo motivo de queja entre los dos gobiernos y al cultivo de las relaciones más corteses y amistosas entre las hermanas repúblicas”. La prueba de que actué conforme a estas seguridades la constituyen los acontecimientos que ocurrieron posteriormente. No obstante ello, México terminó abruptamente todo trato diplomático con los Estados Unidos y debería, por consiguiente, ser el primero en solicitar su reanudación; sin embargo, renunciando a toda ceremonia, aproveché la primera oportunidad favorable para indagar si el gobierno mexicano estaba dispuesto a recibir a un enviado de los Estados Unidos, revestido de plenas facultades para resolver todas las cuestiones en disputa entre ambos gobiernos. En septiembre de 1845 consideré que había llegado el momento propicio para dicha apertura. Con la entusiasta y casi unánime voluntad de su pueblo, Texas se pronunció en favor de la anexión. El propio México había convenido en reconocer la independencia de Texas, con una condición, es cierto, que no tenía el derecho de imponer ni la capacidad de hacer valer.

México debió abandonar su última y prolongada esperanza, si es que aún podía tener alguna, de que Texas se convirtiera nuevamente en una de sus provincias.

Habida cuenta de lo anterior, el 15 de septiembre de 1845 el secretario de Estado giró instrucciones al cónsul de los Estados Unidos en la Ciudad de México para que procediera a la referida indagación ante el gobierno mexicano. Ésta se realizó y, el 15 de octubre de 1845, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno mexicano, en nota dirigida a nuestro cónsul, dio una respuesta favorable, requiriendo al mismo tiempo que nuestra fuerza naval fuese retirada de Veracruz mientras se llevaran a cabo las negociaciones. Al recibir dicha nota, nuestra fuerza naval fue prontamente retirada de Veracruz. Se nombró de inmediato a un ministro que partió a México. Todo tenía un aspecto prometedor para una solución rápida y pacífica de todas nuestras difícil-

tades. En la fecha de mi informe presidencial al Congreso, en diciembre último, no se tenían dudas de que el ministro sería recibido por el gobierno mexicano y se abrigaron esperanzas de que se cancelaría todo motivo de malentendido entre los dos países. Confiando en que ése iba a ser el resultado de su misión, informé al Congreso de que desistí de “recomendar medidas ulteriores para lograr la reparación de los agravios y perjuicios que hemos soportado durante tanto tiempo y que hubiese sido oportuno recomendar de no haberse procedido a dicha negociación”. Para mi sorpresa y pesar, al arribo de nuestro ministro a México y pese a que se comprometió con toda solemnidad a recibirlo y acreditarlo, el gobierno mexicano se negó a ello. Cuando llegó a Veracruz, el 30 de noviembre de 1845, encontró que el aspecto de los asuntos había sufrido un infortunado cambio. El gobierno del general Herrera, que a la sazón era presidente de dicha república, estaba a punto de derrumbarse. El general Paredes, líder militar, quien había manifestado su decisión de derrocar al gobierno de Herrera por medio de una revolución militar, empleó como uno de los medios principales para llevar a cabo su propósito, y hacer que el gobierno de Herrera apareciera odioso a los ojos del ejército y del pueblo de México, el condenar abiertamente la decisión de éste de recibir a un ministro de los Estados Unidos en misión de paz, alegando que lo que intentaba, tras firmar un tratado con los Estados Unidos, era desmembrar el territorio de México, cediendo el departamento de Texas. Se cree que el gobierno de Herrera estaba dispuesto al arreglo pacífico de las dificultades existentes, pero probablemente temiendo por su propia seguridad y para alejar el peligro de la revolución dirigida por Paredes, infringió su solemne acuerdo y se rehusó a recibir o acreditar a nuestro ministro; y ello pese a que se le informó que estaba revestido de plenas facultades para resolver todas las cuestiones en disputa entre los dos gobiernos. Entre los frívolos pretextos para su negación, el principal era que nuestro ministro no había sido nombrado como ministro *ad hoc* para tratar el asunto texano, quedando sin reparación todos los ultrajes a nuestra bandera y a nuestros ciudadanos. Bien sabía el gobierno mexicano que tanto nuestro honor nacional como la protección a que estamos obligados para con nuestros ciudadanos exigía imperiosamente que se trataran juntas las cuestiones de la frontera y de la indemnización, mezcladas en forma natural e inseparable, y debieron haberse percatado de que este curso de acción se previó así para permitir a los Estados Unidos otorgarles la justicia más generosa. El 30 de diciembre de 1845, el general Herrera renunció a la presidencia y entregó el gobierno al general Paredes, sin que mediara resistencia alguna. Así, se llevó a cabo una revolución en la que sólo participó el ejército comandado por Paredes, y el poder supremo de México pasó a manos de un usurpador militar conocido por su enconada hostilidad hacia los Estados Unidos.

Pese a que no eran prometedoras las perspectivas de un arreglo pacífico con el nuevo gobierno, dada la conocida hostilidad de su jefe hacia los Estados Unidos, y decididos a no escatimar esfuerzo alguno para restaurar las relaciones amistosas entre los dos países, se dieron instrucciones a nuestro ministro para que presentara sus credenciales al nuevo gobierno y solicitara su acreditación, con la calidad diplomática que

se le había nombrado. El ministro ejecutó dichas instrucciones mediante su nota del 1° de marzo de 1846, dirigida al ministro de Asuntos Exteriores mexicano, pero éste rechazó su petición en forma insultante en su respuesta del 12 del mismo mes. No quedó, pues, a nuestro ministro otra opción que exigir sus pasaportes y regresar a los Estados Unidos.

Ése fue el extraordinario espectáculo presentado al mundo civilizado por un gobierno, en violación de su propio y expreso acuerdo, al haber rechazado en dos ocasiones a un ministro en misión de paz, revestido de plenas facultades para llegar a un arreglo respecto a todas las diferencias que existían entre los dos países en forma justa y honorable para ambos. No tengo noticias de que la historia moderna presente un caso paralelo, un caso en el que, en tiempos de paz, una nación se haya negado inclusive a escuchar las proposiciones de la otra para poner fin a las dificultades existentes entre ellas. No podía abrigarse ninguna esperanza de solucionar nuestras dificultades, aun en fecha lejana, o de preservar la paz con México, mientras Paredes permaneciera a la cabeza del gobierno. Había adquirido el poder supremo por medio de una revolución militar y con la promesa solemne de librar una guerra en contra de los Estados Unidos y de reconquistar Texas, que él reclamaba como una provincia rebelada de México. Denunció como culpables de traición a todos aquellos mexicanos que consideraban a Texas como un territorio que había dejado de formar parte de México y que eran partidarios de la causa de la paz. La duración de la guerra que él libraba contra los Estados Unidos era indefinida, ya que el fin que se propuso la reconquista de Texas era un caso perdido. Por otra parte, había buenos motivos para creer, por toda su conducta, que su intención era convertir a la República de México en una monarquía y colocar en el trono a un príncipe europeo. Preparándose para este fin, durante su corto gobierno había cercenado la libertad de prensa, tolerando sólo aquella que pugnaba abiertamente por el establecimiento de la monarquía. Para asegurar mejor el éxito de sus últimas intenciones, convocó un Congreso por un decreto arbitrario, no por la libre elección del pueblo, sino escogido en forma tal que fuera servil a su voluntad, permitiéndole tener el control absoluto de sus deliberaciones.

En, estas circunstancias, se pensó que una revolución en México, fincada en una oposición a los ambiciosos proyectos de Paredes, promovería la causa de la paz y evitaría cualquier intento de interferencia europea en los asuntos del continente norteamericano, fines de enorme interés para los Estados Unidos. En mi último informe presidencial comuniqué al Congreso mi opinión sobre este asunto. En cualquier caso, era seguro que ningún cambio en el gobierno de México que quitara a Paredes del poder sería para lo peor en lo que a los Estados Unidos se refiere. Por el contrario, era muy probable que cualquier cambio fuera para lo mejor. Éste era el estado de cosas cuando el Congreso, el 13 de mayo último, reconoció la existencia de la guerra que había iniciado el gobierno de Paredes; y se convirtió en un objeto de gran importancia, con miras a un pronto arreglo de nuestras dificultades y a la restauración de una paz honorable, que Paredes no retuviera el poder en México.

Antes de esa época se habían percibido en México síntomas de revolución, favorecidos, a nuestro juicio, por el partido más liberal y especialmente por los que se oponían a la interferencia extranjera y a la forma monárquica de gobierno. En ese entonces, Santa Anna se encontraba en exilio en La Habana, tras haber sido derrocado y desterrado de su país por una revolución ocurrida en diciembre de 1844; pero era sabido que una facción considerable aún estaba a favor de él en México. Era igualmente bien sabido que, con toda probabilidad, ninguna vigilancia ejercida por nuestra escuadra evitaría que él realizara un desembarco en algún lugar de la extensa costa del Golfo mexicano, en caso de que su deseo fuese regresar a su país. Él había manifestado abiertamente un cambio completo en sus opiniones políticas; había expresado su pesar por haber alterado la Constitución de 1824 y había admitido que actualmente estaba en favor de su restauración. Enérgicamente había declarado su oposición al establecimiento de una monarquía y a la interferencia europea en los asuntos de su país. Ésa era la información que habíamos recibido de fuentes consideradas confiables, en la fecha en que el Congreso reconoció la existencia de la guerra, y que pudimos confirmar más tarde por una misiva de nuestro cónsul acreditado en la ciudad de México, con los documentos que se acompañan al presente informe. Por otra parte, era razonable suponer que Santa Anna se había percatado de las ruinosas consecuencias de una guerra de México contra los Estados Unidos y de que el interés de ese país era favorecer la paz.

En estas circunstancias, y teniendo en cuenta estas reflexiones, se consideró oportuno no obstaculizar su regreso a México en caso de que intentara hacerlo. Nuestro objetivo era la restauración de la paz y, en virtud de ello, no se percibían motivos para que hubiésemos tomado partido en favor de Paredes y lo hubiésemos ayudado a evitar el regreso de su rival a México por medio de nuestro bloqueo. Por el contrario, se pensaba que las divisiones intestinas, que la sagacidad común no podía sino interpretar como frutos del regreso de Santa Anna a México y de su rivalidad con Paredes, pudieran tender a generar una fuerte disposición en ambos partidos para restaurar y preservar la paz con los Estados Unidos. Paredes era soldado de profesión y monarquista de principios. Hacía poco, había tenido éxito en una revolución militar que lo llevó al poder. Era enemigo declarado de los Estados Unidos, país con el que había implicado al suyo en la actual guerra. Santa Anna había sido derrocado por el ejército; su abierta hostilidad hacia Paredes se conocía, y él se declaró públicamente en contra de la intervención extranjera y la restauración de la monarquía en México. En vista de estos hechos y circunstancias fue cuando, el 13 de mayo —día en que el Congreso reconoció la existencia de la guerra—, se dieron órdenes al comandante de nuestras fuerzas navales en el Golfo, encargadas del bloqueo de las costas de México, de no obstruir el paso de Santa Anna, en caso de que intentara regresar a ese país.

A principios del mes de agosto siguiente tuvo lugar en México una revolución que echó a Paredes del poder y, desde entonces, éste se encuentra en el exilio. Poco tiempo después, Santa Anna regresó a México. Queda por verse si su regreso pueda aún resultar favorable a un arreglo pacífico de las dificultades existentes, habiendo él

manifestado su interés de no perseverar en la prosecución de una guerra comenzada por Paredes para lograr el absurdo objetivo de reconquistar a Texas hasta el Sabine. Si Paredes hubiera permanecido en el poder, podemos afirmar que es virtualmente seguro que no hubiera habido esperanzas de llegar a un arreglo pacífico.

Al iniciar México hostilidades contra los Estados Unidos, se levantó una vez más el indignado espíritu de la nación. El Congreso respondió con celeridad a las expectativas del país y, mediante decreto del 13 de mayo último, reconoció la existencia de una guerra de hecho, iniciada por México, entre los Estados Unidos y esa república; asimismo, otorgó los medios necesarios para su enérgico proseguimiento. Implicados como estamos en una guerra comenzada por México, y por cuya justicia, en lo que a nosotros concierne, podemos con confianza apelar al mundo entero, decidí llevarla adelante con la mayor energía. En consecuencia, han sido bloqueados los puertos de México en el Golfo y en el Pacífico y hemos invadido su territorio en varios puntos importantes. En los informes del Departamento de Guerra y de Marina encontrarán más datos acerca de las medidas adoptadas en el estado de emergencia en que se sumió a nuestro país y acerca de los resultados gratificadores que se han alcanzado.

Las diferentes columnas del ejército han cumplido con su deber con grandes desventajas y con la habilidad y valentía más señaladas. Las victorias de Palo Alto, Resaca de la Palma y Monterrey, ganadas contra un enemigo muy superior en número y que cuenta con ventajas más decisivas en otros aspectos, fueron brillantes en su ejecución e hicieron acreedores a nuestros valientes oficiales y soldados del sentido agradecimiento de su país. La nación deplora la pérdida de los gallardos oficiales y hombres que cayeron valerosamente cuando reivindicaban y defendían los derechos y el honor de su país.

Es motivo de orgullo y satisfacción que nuestros soldados voluntarios, que tan prontamente respondieron al llamado de su país, con una experiencia de la disciplina de la vida militar de sólo unas pocas semanas, participaran en la cruenta batalla de Monterrey con una constancia y valentía equiparables a las de las tropas veteranas y dignas de la más alta admiración. Las privaciones que caracterizaron las largas marchas a través del país del enemigo y de agrestes montes fueron soportadas sin un murmullo. Mediante rápidos desplazamientos y sin derramamiento de sangre, se capturó la provincia de Nuevo México, con su capital Santa Fe. La marina cooperó con el ejército y prestó importantes servicios; si no fue tan brillante, ello obedeció a que el enemigo no contaba con fuerzas para enfrentarla en su propio elemento, así como a las defensas que la naturaleza interpuso en las dificultades de la navegación en las costas mexicanas. Nuestra escuadra destacada en el Pacífico, con la cooperación de un gallardo oficial del ejército y de una pequeña fuerza congregada con la mayor premura en ese lejano país, tomó posesión de las Californias sin derramamiento de sangre, y la bandera estadounidense fue izada en cada punto importante de esa provincia.

Los felicito por el éxito que ha acompañado a nuestras operaciones militares y navales. En menos de siete meses, luego de que México iniciara hostilidades en un

momento que ese mismo país escogió, hemos tomado posesión de muchos de sus principales puertos; hemos hecho retroceder y perseguido a su ejército invasor y hemos adquirido posesión de las provincias mexicanas de Nuevo México, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y las Californias, un territorio más extenso que el que abarcaban los 13 estados de la Unión originales, habitado por una población considerable y, en su mayor parte, a más de 1 500 kilómetros de los puntos en los que tuvimos que reunir nuestras fuerzas e iniciar nuestros desplazamientos. Mediante el bloqueo, interceptamos el comercio de importación y exportación del enemigo. Bien puede estar orgulloso el pueblo estadounidense de la energía y bravura de nuestros oficiales y soldados regulares y voluntarios. Los acontecimientos de los últimos meses aportan una prueba gratificante de que nuestro país puede confiar, en cualquier emergencia, para el mantenimiento de su honor y la defensa de sus derechos, en una fuerza eficaz, voluntariamente lista en todo momento a abandonar las comodidades del hogar por los peligros y privaciones de la milicia. Y pese a que dicha fuerza puede resultar cara en este momento, en última instancia es económica, ya que la capacidad para disponer de ella elimina la necesidad de emplear un gran ejército permanente en tiempos de paz, y comprueba que nuestro pueblo ama a sus instituciones y está siempre listo a defenderlas y protegerlas.

Mientras la guerra proseguía su curso enérgico y exitoso, deseosos aún de detener sus efectos nocivos y considerando que después de las brillantes victorias de nuestras armas, el 8 y 9 de mayo últimos, el honor nacional no podía verse comprometido por ella, el 27 de julio se hizo, a instancias mías, otra proposición a México para que se pusiera fin a las hostilidades mediante una paz justa y honorable para ambos países. El 31 de agosto siguiente, el gobierno mexicano declinó aceptar esta propuesta amistosa y la remitió a la consideración del Congreso mexicano, que debía reunirse a principios del presente mes. Les adjunto copias tanto de la nota del secretario de Estado, en la que propone reanudar negociaciones, como de la respuesta del gobierno mexicano y de la contestación a ésta por el propio secretario de Estado.

La guerra se seguirá librando con vigor como el mejor medio para garantizar la paz. Se espera que la decisión del Congreso mexicano, a quien se envió nuestra última propuesta, tenga como consecuencia una paz pronta y honorable. Sin embargo, con nuestra experiencia del curso de acción irrazonable que suelen adoptar las autoridades mexicanas, lo sensato es no relajar la energía de nuestras operaciones militares en tanto no se dé a conocer el resultado. En virtud de lo anterior, consideramos importante seguir en posesión de todas las provincias tomadas hasta que se celebre un tratado de paz definitivo y éste sea ratificado por los dos países.

No hemos librado la guerra con fines de conquista, pero, habiendo sido iniciada por México, ha sido llevada al país del enemigo y allí se continuará librando en forma enérgica, con miras a obtener una paz honorable y garantizar con ello una amplia indemnización por los gastos erogados en ella, así como en forma de nuestros muy

perjudicados ciudadanos, que mantienen importantes demandas pecuniarias contra México.

Conforme al derecho de gentes, un país conquistado se sujeta a ser gobernado durante su ocupación militar por el conquistador hasta que se haya celebrado un tratado de paz o hasta que éste se retire voluntariamente del mismo. El antiguo gobierno civil ha sido necesariamente suplantado y es deber y derecho del conquistador asegurar su conquista y tomar medidas para el mantenimiento del orden y los derechos de sus habitantes. Nuestros comandantes militares y navales han ejercido este derecho y cumplido con este deber mediante el establecimiento de gobiernos provisionales en algunas de las provincias conquistadas, asimilándolas, en la medida de lo posible, a las libres instituciones de nuestro propio país. Se teme poca resistencia, si es que alguna, de parte de los habitantes de las provincias de Nuevo México y las Californias contra los gobiernos provisionales que se han establecido allí, en virtud de que las circunstancias lo ameritan y de conformidad con las leyes de la guerra quizá conveniente garantizar la seguridad de estas importantes conquistas mediante una adecuada asignación con objeto de construir fortificaciones y costear los gastos inherentes al mantenimiento de nuestra posesión y autoridad sobre ella.

Casi al final de su última sesión, por motivos comunicados al ingreso, consideré importante, como medida para asegurar la pronta paz con México, que se asignara una suma de dinero a disposición del Ejecutivo, en forma similar a como se había hecho en dos ocasiones anteriores durante la administración del presidente Jefferson.

El 26 de febrero de 1803 se hizo una asignación por un monto de dos millones de dólares que se pusieron a disposición del presidente. Su objeto es bien conocido. En esa época se contemplaba comprar la Luisiana a Francia, y la intención era aplicarla como parte de la contrapreparación que hubiera debido pagarse por ese territorio. El 13 de febrero de 1806 se asignó en forma similar un monto por la misma cantidad, con miras a comprar las Floridas a España. Esas asignaciones se hicieron para facilitar las negociaciones y como medio para permitir al presidente lograr los importantes objetivos propuestos. Pese a que no fue necesario que el presidente hiciera uso de tales asignaciones, pudo haber surgido un estado de cosas en que hubiese sido sumamente importante para él proceder a ello, y su sabiduría no puede ponerse en duda. Se cree que la medida comendada en su última sesión recibió la aprobación de las mayorías en ambas Cámaras del Congreso. En realidad, en cada Cámara se adoptaron, de diferentes maneras, sendos proyectos de ley para realizar una asignación de dos millones de dólares, y es muy lamentable que no se hayan convertido en ley. Los motivos que me indujeron a recomendar la medida siguen vigentes y, una vez más, someto el asunto a su consideración, señalando la importancia de que se actúe al respecto a la mayor brevedad. En caso de que se haga la asignación y de que ésta no llegara a necesitarse, permanecerá en las arcas del Tesoro; y en caso de que se considere adecuado aplicarla en forma parcial o total, se contabilizará como gastos públicos varios.

Inmediatamente después de que el Congreso reconoció la existencia de la guerra con México, mi atención se centró en el peligro de que se pertrecharan corsarios en los puertos de Cuba y Puerto Rico con objeto de saquear el comercio de los Estados Unidos, y requerí la atención especial del gobierno español al artículo 14 de nuestro tratado con esa potencia, celebrado el 27 de octubre de 1795, conforme al cual los ciudadanos y súbditos de cualquiera de las dos naciones que tomen comisiones o patentes de corso para actuar en contra de la otra “se castigarán como piratas”.

Me complace informarles que he recibido seguridades del gobierno español de que el referido artículo del tratado será fielmente observado. Ese gobierno de inmediato transmitió órdenes a las autoridades de Cuba y Puerto Rico para que ejercieran la mayor vigilancia con el fin de evitar cualquier intento de que se organizaran corsarios en dichas islas en contra de los Estados Unidos. La buena fe de España me permite confiar en que el referido tratado se ejecutará en su letra y en su espíritu, al tiempo que los Estados Unidos cumplirán fielmente con todas las obligaciones que respecto a ellos se estipulan en el mismo.

En fecha reciente el Departamento de Estado ha recibido información de que el gobierno mexicano ha enviado a determinados corsarios de La Habana comisiones en blanco y certificados de naturalización también en blanco, firmados por el general Salas, actual jefe de dicho gobierno. Hay motivos para temer que se han transmitido documentos similares a otras partes del mundo. Se acompañan copias de traducciones de los referidos documentos.

En virtud de que parecen no haberse observado las normas que exige la práctica entre las naciones civilizadas, para comisionar corsarios y regular su conducta, y como las mencionadas comisiones están en blanco, para ser llenadas con nombres de ciudadanos y súbditos de todas las naciones que estén dispuestos a adquirirlas, todo este procedimiento sólo puede interpretarse como una invitación a todos los filibusteros de la tierra dispuestos a pagar por el privilegio de hacerse a la mar en contra del comercio estadounidense. Competerá a nuestros tribunales de justicia decidir si, en estas circunstancias, las referidas cartas de patente y represalia de México podrán proteger a aquellos que las aceptan, y que cometen robos en alta mar bajo su autoridad, de la acusación de piratería y de sus penas y sanciones.

Si con los certificados de naturalización otorgados de la manera descrita se intenta proteger a súbditos españoles de la culpa y el castigo aplicables a los piratas conforme a nuestro tratado con España, indudablemente que resultarán inútiles. Tal subterfugio no es sino un endeble dispositivo incapaz de vencer las disposiciones de un tratado solemne.

Recomiendo al Congreso que de inmediato disponga por ley el juicio y castigo, en calidad de piratas, de súbditos españoles que, escapando a la vigilancia de su gobierno, se encuentren culpables de piratear contra los Estados Unidos. No abrigo temores de que estos corsarios vayan a representar un grave peligro. Nuestra marina estará en alerta constante con el objeto de proteger nuestro comercio. Por otra parte, en caso de

que se apresen barcos estadounidenses, nuestra escuadra encargada del bloqueo ejercerá la vigilancia más estricta para evitar que los captores los lleven a puertos mexicanos; tampoco tengo aprehensiones de que alguna nación viole su neutralidad al tolerar que dichos buques sean condenados y vendidos en su jurisdicción.

Recomiendo al Congreso que de inmediato disponga por ley el otorgamiento de patentes de corso y represalia contra barcos que ostenten bandera mexicana. Es verdad que hay algunos, si acaso los hay, barcos comerciales de México en alta mar y, por tanto, es poco probable que se pertrechen muchos corsarios estadounidenses en caso de que se promulgue una ley que autorice esta forma de guerra. Sin embargo, lo que sí es seguro es que dichos corsarios prestarían un buen servicio a los intereses comerciales del país al recapturar nuestros barcos mercantes en caso de ser tomados por barcos armados con bandera mexicana, así como al capturar estos últimos. Deberá disponerse de cualquier medio en nuestro poder para la protección de nuestro comercio.

A efecto de llevar adelante la guerra contra México con vigor y energía, como el mejor medio para ponerle fin en forma rápida y honorable, será necesario un nuevo préstamo para sufragar los gastos del año fiscal presente y del venidero. Si es necesario continuar la guerra hasta el 30 de junio de 1848, correspondiendo esta fecha con el final del próximo año fiscal, se estima que se requerirá un préstamo adicional de 23 millones de dólares. Esta estimación se ha hecho bajo el supuesto de que será necesario retener permanentemente en el Tesoro cuatro millones de dólares para hacer frente a contingencias que pudieran presentarse. En caso de que no se requiera mantener dicho superávit, entonces será suficiente un préstamo de 19 millones de dólares. Sin embargo, si el Congreso dispone en la presente sesión un derecho sobre los ingresos correspondientes a los principales artículos que figuran actualmente en la lista de exención, se estima que se derivará de esa fuente un ingreso anual adicional de aproximadamente dos millones y medio que, al 30 de junio de 1848, ascenderá, según se estima, a los cuatro millones de dólares, y el préstamo requerido se verá reducido por dicho monto. Se estima, asimismo, que si el Congreso gradúa y reduce el precio de los predios públicos que han estado durante mucho tiempo en el mercado, el ingreso adicional proveniente de esa fuente sería anualmente, y durante varios más, entre medio millón y un millón de dólares, y el préstamo requerido podría también verse reducido por ese monto. En caso de que se llegaran a adoptar estas medidas, el préstamo probablemente no deberá ser superior a los 18 millones o 19 millones de dólares, quedando en el Tesoro un superávit constante de cuatro millones de dólares. Se considera que el préstamo propuesto será suficiente para cubrir los gastos necesarios, tanto por concepto de la guerra como para todos los demás fines, hasta el 20 de junio de 1848, y es posible que se requiera una parte no mayor al medio millón de ese préstamo durante el año fiscal actual, y la mayor parte del monto restante durante el primer semestre del próximo año fiscal.

Con el fin de que se dé el aviso oportuno y se adopten las medidas correspondientes para pactar el préstamo, o la parte del mismo que se requiera, es importante

que la aprobación del Congreso en tal sentido se otorgue en las primeras fechas de su Presente sesión. Se sugiere que el préstamo se contrate por un plazo de veinte años, con la posibilidad de adquirir las acciones consolidadas y pagarlo en un plazo menor, a precio de mercado, a partir de cualquier superávit que pudiera existir en el Tesoro aplicable para tal efecto. Después de que se establezca la paz con México, se supone que existirá un superávit considerable, y que la deuda podrá liquidarse en un plazo mucho más corto que el pactado. Se sugiere el plazo de veinte años para contratar el préstamo propuesto, con preferencia a un plazo más corto, en virtud de que la experiencia, tanto en casa como en el extranjero, muestra que los préstamos se realizan en condiciones mucho mejores a largo plazo que cuando son pagaderos en fechas cercanas.

Habida cuenta de lo necesaria que es esta medida para salvaguardar el honor y los intereses de un país enfrascado en una guerra extranjera, no me caben dudas de que el Congreso dará su autorización a la mayor brevedad.

El saldo del Tesoro el 1° de julio era superior a los nueve millones de dólares, a pesar de las erogaciones considerables que se efectuaron para sufragar la guerra durante los meses de mayo y junio últimos. Si no hubiera sido por la guerra, toda la deuda pública habría podido liquidarse en poco tiempo; parte de mi política declarada era actuar en tal sentido, y liberar al pueblo de su carga, colocando al gobierno en la situación económica más congruente con el bienestar general y con el más recto y pleno progreso de nuestras instituciones.

Entre nuestros justos motivos de queja contra México, derivados de su renuencia a negociar la paz, tanto antes como desde el momento en que ese país tan injustamente inició la guerra, son los extraordinarios gastos que la misma nos ha representado. La justicia hacia nuestro propio pueblo hará que México sea declarado responsable por estas erogaciones.

La economía en el gasto público es, en todo momento, un alto deber que los funcionarios públicos del gobierno han contraído con el pueblo. Este deber se vuelve más imperioso en tiempos de guerra, cuando resultan inevitables los grandes gastos extraordinarios. Durante la guerra contra México, todos nuestros recursos deben administrarse con economía y no deben hacerse asignaciones con excepción de las absolutamente necesarias para la enérgica consecución de la misma y para la debida administración del gobierno. Los objetos de asignación que en tiempos de paz pueden considerarse útiles o adecuados, pero que no son indispensables para el servicio público, bien pueden postergarse para el futuro, teniendo en cuenta que el país está enfrascado en una guerra extranjera. Mediante la observancia de esta política en su presente sesión se podrán ahorrar al Tesoro grandes cantidades que serían aplicadas a fines necesarios con carácter urgente y apremiante, y evitarse de esta manera la contratación de un monto de deuda pública equivalente.

La intención no es recomendar que deberán denegarse las asignaciones ordinarias y requeridas para sostener el gobierno; pero es bien sabido que en cada sesión del Congreso se proponen asignaciones para numerosos fines que pueden realizarse o no

sin afectar sustancialmente el interés público, y la recomendación es no otorgar estas últimas.

El informe de la Secretaría de Guerra contiene información detallada sobre las diversas dependencias de servicio público relacionadas con ese Departamento. Las operaciones del ejército han resultado en extremo gratificantes. Recomendando a ustedes consideren pronta y favorablemente las medidas propuestas por la Secretaría de Guerra para reunir con rapidez la mayor cantidad posible de tropas del ejército regular, aumentar su eficiencia en el campo y alistar fuerzas adicionales para la guerra contra México.

Les sugiero remitirse al informe del secretario de Marina si desean tener un panorama satisfactorio de las operaciones que realizó el año pasado el departamento a su cargo. Es grato darse cuenta de que si bien la guerra contra México nos ha obligado a emplear en sus costas una cantidad inusual de embarcaciones armadas, no se ha descuidado la protección de nuestro comercio en otros lugares del mundo. No escatimaremos ningún recurso para dar eficiencia al servicio naval a fin de que prosiga con la guerra; y me da gusto saber que los oficiales y sus hombres desean ansiosamente servir a su país en cualquier empresa, sin importar cuán difícil sea llevarla a cabo.

Les recomiendo consideren con buenos ojos la propuesta de agregar a cada uno de nuestros escuadrones en el extranjero un buque de vapor y -asunto que requiere atención especial- proveer a Panzacola de los medios necesarios para reparar y rehabilitar las embarcaciones de la marina empleadas en el Golfo de México.

12.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (7 de diciembre de 1847)

La Providencia nos ha agraciado como a pocos pueblos en el mundo, y es motivo de congratulación que nuestras relaciones con todas las potencias de la tierra, excepto México, continúen siendo de carácter amistoso.

Siempre hemos valorado en mucho la política de cultivar la paz y la buena voluntad con todas las naciones, y yo en lo personal he aplicado regularmente esta política.

Desde el aplazamiento del último Congreso, no ha habido ningún cambio en nuestras relaciones con México. Continúa la guerra con el gobierno de ese país en la que los Estados Unidos fueron forzados a participar.

Considero necesario reiterar, después de haberlas expuesto todas en mi mensaje del 11 de mayo de 1846 y en mi mensaje anual al principio de la sesión del Congreso en diciembre pasado, las graves causas de las reclamaciones que teníamos contra México antes de que éste iniciara las hostilidades.

En esta ocasión basta decir que la abierta violación por parte de México de los derechos individuales y de propiedad de nuestros ciudadanos, los repetidos actos de mala fe de ese país durante muchos años consecutivos y su desatención a los solemnes tratados en lo que se estipula la indemnización a nuestros ciudadanos lesionados, no sólo constituyeron un grave motivo de guerra para nosotros, sino que también fueron

de un carácter tan serio que justificaron ante el resto del mundo el que hayamos echado mano de este recurso extremo. Con un ansioso deseo de evitar una ruptura entre los dos países, durante años nos abstuvimos de afirmar por la fuerza nuestros claros derechos, y continuamos intentando que se repararan mediante negociaciones amistosas los perjuicios que habíamos sufrido, con la esperanza de que México cediera a los consejos pacíficos y las demandas de justicia. Pero esta esperanza fue vana. El ministro de paz que enviamos a México fue rechazado de manera insultante. El gobierno de México se rehusó incluso a escuchar las condiciones de arreglo que nuestro enviado estaba autorizado a proponer y, finalmente, con pretextos totalmente injustificables, arrastró a los dos países a la guerra invadiendo el territorio del estado de Texas, disparando el primer tiro, y derramando la sangre de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo.

Pese a que la nación que había sido dañada era la estadounidense, México inició la guerra, y en defensa propia nos vimos obligados a repeler al invasor y reivindicar el honor y los intereses nacionales continuando la guerra hasta lograr una paz justa y honorable.

Cuando supe que México había iniciado las hostilidades, de inmediato lo comuniqué al Congreso, y le expuse sucintamente las demás causas de reclamaciones contra México; ese organismo, mediante la ley del 13 de mayo de 1846, declaró; “por el acto de la República mexicana, existe un estado de guerra entre ese gobierno y los Estados Unidos”. Dicha ley, que declaraba “el estado de guerra por el acto de la República mexicana” y estipulaba su continuación para “terminarla con rapidez y eficacia”, fue aprobada casi por unanimidad en el Congreso —sólo se pronunciaron dos votos en contra en el Senado y catorce en la Cámara de Representantes—.

Una vez que el Congreso declaró el estado de guerra, era mi deber, conforme a la Constitución y a las leyes, dirigirla y proseguirla. He cumplido con mi deber y, aunque en cada fase de la guerra he manifestado la voluntad de terminarla mediante una paz justa, México se ha negado a acceder a cualquier término aceptable para los Estados Unidos desde el punto de vista del honor y los intereses de la nación.

Este organismo tiene pleno conocimiento de los rápidos y brillantes éxitos de nuestras fuerzas armadas y de la vasta extensión del territorio enemigo que fue invadido y conquistado antes del cierre de la última sesión del Congreso. Desde entonces se ha proseguido la guerra con mayor energía y, me es grato aclarar, con un éxito que merece admiración universal. Nunca antes ninguna otra nación había obtenido tantas victorias gloriosas en un periodo tan breve. Nuestro ejército, tanto el regular como el voluntario, se ha cubierto de honores eternos. Siempre que nuestras fuerzas se han enfrentado al enemigo lo han derrotado, pese a que éste las superaba con mucho en número y a menudo se atrincheraba en posiciones de su elección muy fortificadas. No hay alabanzas suficientes para nuestros oficiales y soldados, regulares y voluntarios, por su gallardía, disciplina, indomable valentía y perseverancia; todos ellos han buscado un puesto peligroso y rivalizado entre sí en cuanto a hechos de noble bravura.

Si bien el corazón de cada patriota tiene motivos de regocijo y todos los pechos deben henchirse con un justo orgullo nacional al contemplar las altas demostraciones de valor, destreza militar consumada, disciplina constante y humanidad que nuestro gallardo ejército ha hecho ante el enemigo vencido, nuestra nación deplora la pérdida de muchos valientes oficiales y soldados caídos en defensa del honor y los intereses nacionales. Los valientes caídos encontraron su lúgubre suerte en una tierra extranjera, cumpliendo noblemente su deber y con la bandera de su país ondeando triunfalmente frente al enemigo. Sus patrióticas hazañas son apreciadas en todo lo que valen y sus compatriotas, agradecidos, las recordaremos durante mucho tiempo. El gobierno al que amaron y sirvieron debe extender su cuidado paternal a sus familiares sobrevivientes.

Poco después del aplazamiento de la última sesión del Congreso se recibió la grata noticia de la insigne victoria de Buena Vista y la caída de la ciudad de Veracruz —y, junto con ella, el fuerte de San Juan de Ulúa, que era su defensa—. Con la creencia de que, después de ésta y otras victorias tan honorables para nuestras fuerzas armadas y tan desastrosas para México, era el momento propicio para dar a ese país otra oportunidad, si tenía a bien aprovecharla, de negociar la paz, se envió a un comisionado al cuartel general de nuestro ejército, con plenas facultades para iniciar las negociaciones y celebrar un tratado de paz justo y honorable. No se le dieron instrucciones de ofrecer ninguna otra propuesta para la paz, pero si se le dio un despacho del secretario de Estado estadounidense dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de México, en respuesta a otro despacho que el segundo envió el 22 de febrero de 1847, en el que se informaba al gobierno de México del nombramiento de dicho comisionado, de la presencia de éste en el cuartel general de nuestro ejército y de que estaba investido con plenas facultades para celebrar un tratado de paz definitivo si el gobierno mexicano estaba dispuesto a ello. Pese a mi renuencia de exponer a los Estados Unidos a otro rechazo indignante, decidí que no debíamos prolongar los males de la guerra ni un día más, salvo que el gobierno mexicano nos obligara a hacerlo.

Se tuvo cuidado de no dar al comisionado instrucciones que pudieran interferir en alguna forma con nuestras operaciones militares o mermar nuestras energías para proseguir con la guerra. No se le concedió ninguna autoridad para controlar esas operaciones. Se le autorizó para mostrar sus instrucciones al general al mando del ejército y, en caso de que se pudiera lograr la celebración y ratificación de un tratado de paz con México, que se lo notificara al general. Éste, a su vez, recibió instrucciones de la Secretaría de Guerra de que, si eso sucedía, suspendiera las operaciones militares hasta recibir nuevas órdenes. Tales instrucciones tenían la intención de interrumpir las hostilidades hasta que el tratado, una vez ratificado por México, pudiera transmitirse a Washington para que el gobierno de los Estados Unidos tomara las medidas necesarias. También se le indicó al comisionado que, al reunirse con el ejército, le entregara al general al mando el despacho enviado por el secretario de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México; y la Secretaría de Guerra le dio al general la instrucción

de que hiciera llegar el despacho al comandante de las fuerzas mexicanas, junto con la petición de que se lo comunicara a su gobierno.

El comisionado llegó al cuartel general del ejército después de otra brillante victoria que coronó a nuestras fuerzas en Cerro Gordo.

El despacho que llevaba del secretario de Guerra al general al mando del ejército fue recibido por este oficial después, en Jalapa, el 7 de mayo de 1847, junto con el despacho de la Secretaría de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México, a quien se le transmitió desde Veracruz. Pocos días después, el comisionado llegó al cuartel general del ejército. El 12 de junio de 1847, desde Puebla, se informó al gobierno mexicano de la presencia y del carácter diplomático del comisionado, mediante la transmisión del despacho de la Secretaría de Estado al secretario de Relaciones Exteriores de México.

Después de eso transcurrieron muchas semanas, y no hubo ninguna apertura ni el gobierno mexicano expresó ningún deseo de negociar la paz.

Nuestro ejército continuó su marcha hacia la capital, y cerca de ella se encontró con una resistencia formidable. Nuestras fuerzas se lanzaron al encuentro del enemigo y obtuvieron insignes victorias en las cruentas batallas de Contreras y Churubusco. No fue sino hasta que estas acciones dieron como resultado victorias decisivas y la capital del enemigo cayó en nuestras manos cuando el gobierno mexicano manifestó cierta disposición a negociar la paz; e incluso entonces, como lo han demostrado los hechos, hay muchas razones para creer que era insincero y que el único motivo que tenía para aceptar las negociaciones era ganar tiempo para fortalecer las defensas de su capital y prepararse para renovar la resistencia.

El general al mando del ejército consideró oportuno suspender temporalmente las hostilidades, celebrando un armisticio con objeto de iniciar las negociaciones. México nombró comisionados para que se reunieran con el comisionado de los Estados Unidos. Las conferencias que sostuvieron estos funcionarios de ambos países no culminaron en un tratado de paz.

El comisionado estadounidense llevaba consigo un proyecto de tratado en el que los Estados Unidos requerían que México los indemnizara cediéndoles territorio.

Como bien se sabe, la cesión de parte de su territorio es la única indemnización que México puede dar a nuestros ciudadanos por las reclamaciones, justas y largo tiempo pospuestas, que tienen contra ese país, y a los Estados Unidos por los gastos que le ha causado la guerra. México no tiene ni dinero ni ningún otro medio para cubrir la indemnización requerida. Si rechazamos esto, no podremos obtener nada más. Rechazar la indemnización negándonos a aceptar una cesión de territorio equivaldría a abandonar nuestras justas demandas y a librar una guerra, solventando todos sus gastos, sin ningún propósito definido.

El estado de guerra aboga los tratados previos entre las partes beligerantes, y un tratado de paz cancela todas las reclamaciones de indemnización por actos injuriosos cometidos bajo la autoridad de un gobierno contra los ciudadanos o súbditos de otro

gobierno, a menos que estipule lo contrario. Un tratado de paz que pusiera fin a la guerra sin estipular una indemnización liberaría de sus obligaciones a México, a todas luces el país deudor y agresor en esta guerra. Un tratado de esa naturaleza privaría a nuestros ciudadanos que tienen reclamaciones justas de cualquier recurso contra México o contra su propio gobierno. Nuestro deber con esos ciudadanos tiene que impedirnos concertar una paz de tal naturaleza, y no podrá recibir mi aprobación ningún tratado que no proporcione medios amplios para satisfacer dichas reclamaciones.

Un tratado de paz debe conciliar todas las diferencias entre los dos países. Si se firma un tratado que estipule una cesión adecuada de territorio, los Estados Unidos deben liberar a México de todas sus obligaciones y asumir el pago a nuestros ciudadanos. Si, en cambio, los Estados Unidos consienten en firmar un tratado en el que México se comprometa a pagar la fuerte cantidad que implica una indemnización justa a nuestro gobierno y a nuestros ciudadanos, es obvio que ese país no posee los medios para cumplir con sus obligaciones. Los únicos resultados predecibles de un tratado de tal naturaleza serían las mismas decepciones irritantes que hasta ahora han acompañado las violaciones por parte de México de las estipulaciones de tratados similares. Un tratado de tal naturaleza implicaría el cese temporal de las hostilidades, pero no la restauración de la amistad y el entendimiento que deben caracterizar las relaciones futuras de estos países.

Es obvio que el Congreso consideró la indemnización mediante la cesión de territorio cuando aprobó que la guerra siguiera adelante. El Congreso no pudo aceptar que no se recibiera ninguna indemnización de México al terminar la guerra cuando, en mayo de 1846, asignó diez millones de dólares y autorizó al presidente a emplear las fuerzas de la milicia, la marina y el ejército de los Estados Unidos y a aceptar los servicios de 50 000 voluntarios para continuar con la guerra, y cuando, en su última sesión y después de que nuestro ejército invadió México, hizo asignaciones adicionales y autorizó la formación de tropas adicionales para el mismo fin; y, sin embargo, estaba seguro de que si no adquiríamos nada del territorio mexicano no podríamos obtener ninguna otra indemnización. Es obvio que el Congreso consideró la indemnización mediante cesión territorial porque, además, en su última sesión aprobó una ley, por recomendación del Ejecutivo, en virtud de la cual se asignaron tres millones de dólares expresamente para dicho fin. Tal asignación se hizo para permitir al presidente celebrar un tratado de paz, límites y fronteras con la República mexicana, para que la use en caso de que dicho tratado, una vez que lo firmen los representantes autorizados de ambos gobiernos y lo ratifique México, exija que se gaste en su totalidad o en parte.

El objeto de pedir esta asignación se expresó claramente en los diversos mensajes que comuniqué al respecto al Congreso. En 1803 y 1806 se autorizaron asignaciones similares, a las cuales me referí, como contraprestación parcial por la cesión de la Luisiana y las Floridas. De manera similar, se previó que al establecer las condiciones de un tratado de “límites y fronteras” con México se podría obtener una cesión de territorio con un valor estimado mayor que el monto de nuestras reclamaciones contra ese país,

y que el pronto pago de esta suma como contraprestación parcial por el territorio cedido, una vez que se celebrara el tratado y fuera ratificado por México, podría inducir a éste a hacer una cesión territorial satisfactoria para los Estados Unidos; y aunque, debido a que no se ha celebrado dicho tratado, no ha sido necesario usar ninguna parte de la asignación de tres millones de dólares estipulada en esa ley, y toda la suma permanece en la Tesorería, todavía podría aplicarse a ese objeto en caso de que se presentara la contingencia para la cual fue destinada.

La doctrina de no exigir ninguna cesión de territorio es la doctrina de no exigir ninguna indemnización y, si se aprobara, sería un reconocimiento público de que nuestro país cometió un error y de que la guerra declarada casi por unanimidad por el Congreso fue injusta y debería haber sido abandonada, admisión sin fundamentos reales y degradante para el carácter nacional.

Las condiciones del tratado propuesto por los Estados Unidos no sólo son justas para México, sino también sumamente generosas, considerando el carácter y el monto de nuestras reclamaciones, la iniciación injustificable de las hostilidades por parte de ese país, los gastos en que hemos incurrido por la guerra y el éxito de nuestras fuerzas armadas.

Al comisionado estadounidense se le autorizó para convenir en que se señalara el Río Grande como frontera, desde su desembocadura en el Golfo hasta su intersección con la frontera norte de Nuevo México, a los 32° de latitud norte aproximadamente, y obtener una cesión de las provincias de Nuevo México y las Californias a favor de los Estados Unidos, así como el privilegio del derecho de paso por el Istmo de Tehuantepec. Las condiciones de establecer como frontera el Río Grande y ceder Nuevo México y la Alta California a los Estados Unidos constituían un *ultimatum*, y nuestro comisionado tenía instrucciones de no ceder al respecto en ninguna circunstancia.

Que era evidente, no sólo para México, sino también para todas las demás naciones, que los Estados Unidos no estaban dispuestos a aprovecharse de un país débil insistiendo en arrebatarle todas sus demás provincias, incluyendo muchas de sus poblaciones y ciudades principales, que había conquistado y ocupado con ejército y, al contrario, estaban dispuestos a celebrar con él un tratado con ánimo generoso, lo demuestra el hecho de que se autorizara a nuestro comisionado a devolver a México, en su totalidad, el resto del territorio conquistado por nosotros.

Puesto que el territorio adquirido mediante el establecimiento de la frontera propuesta podría ser considerado de mayor valor que un equivalente justo por nuestras reclamaciones justas, se autorizó al comisionado a que estipulara el pago de la contraprestación pecuniaria adicional que se considerara razonable.

Las condiciones propuestas por los comisionados mexicanos resultaron totalmente inadmisibles. Negociaron como si México fuera la parte victoriosa, y no la vencida. Tenían que haber sabido que su *ultimatum* nunca sería aceptado. Éste exigía a los Estados Unidos desmembrar Texas, entregando a México el área territorial comprendida entre el Nueces y el Río Grande, incluida dentro de sus límites por sus

leyes cuando era una república independiente y cuando fue anexada a los Estados Unidos y admitida por el Congreso como uno de los estados de nuestra Unión. No estipulaba en ninguna parte que México debía indemnizar a nuestros ciudadanos por sus reclamaciones justas. En cambio, sí requería que se indemnizara a los ciudadanos mexicanos por las lesiones que nuestras tropas les habían causado durante la guerra. Exigían el derecho de México a imponer y cobrar los aranceles mexicanos sobre los bienes importados a sus puertos bajo la ocupación militar estadounidense durante la guerra, considerando que los propietarios de esos bienes habían pagado a oficiales de los Estados Unidos las contribuciones militares que se les habían impuesto; y ofrecían ceder a los Estados Unidos, por una contrapresión pecuniaria, la parte de la Alta California situada al norte de los 37° de latitud. Éstas fueron las irrazonables condiciones propuestas por los comisionados mexicanos.

Consideramos que la cesión de las provincias de Nuevo México y las Californias a los Estados Unidos, propuesta por el comisionado de los Estados Unidos, estaba más acorde con la conveniencia y los intereses de ambas, naciones que cualquier otra cesión de territorio a la que pudiéramos inducir a México.

Es obvio para todos aquellos que han observado las condiciones reales del gobierno mexicano durante años pasados, y en el presente, que si México retiene dichas provincias no podrá conservarlas ni gobernarlas por mucho tiempo. Es un país demasiado débil para gobernar estas provincias, ya que están situadas a una distancia de más de 1600 kilómetros de su capital; y si intentara retenerlas, incluso nominalmente, constituirían sólo por un corto tiempo parte de sus dominios, en especial la Alta California.

Desde hace mucho tiempo, la sagacidad de las naciones europeas poderosas ha dirigido su atención a la importancia comercial de esa provincia, y casi estamos seguros de que en el momento en que los Estados Unidos retiraran sus tropas de ahí y dejaran de reclamarla como indemnización, otra potencia se esforzaría por poseerla, ya sea mediante la conquista o la compra. Si ningún gobierno extranjero la adquiere por uno de estos medios, probablemente los habitantes y los extranjeros que se quedaran o que se instalaran ahí establecerían un gobierno revolucionario en el momento en que se supiera que los Estados Unidos habían abandonado el lugar. Tal gobierno sería demasiado débil durante mucho tiempo para mantener su autonomía y, finalmente, sería anexado o se convertiría en una colonia dependiente de un estado más poderoso.

En caso de que cualquier gobierno extranjero intentara poseer ese territorio como colonia o incorporarlo de otra manera a su propio territorio, tendría que mantenerse el principio declarado por el presidente Monroe en 1823, y reafirmado por mí en mi primer informe presidencial, de que no se permitirá sin nuestro consentimiento que ninguna potencia extranjera establezca una nueva colonia o dominio en ninguna parte del continente norteamericano. Para defender este principio y oponer resistencia a la invasión de una potencia extranjera, podríamos vernos envueltos en otras guerras más costosas y más difíciles que la que estamos librando ahora.

Las provincias de Nuevo México y las Californias están contiguas a los territorios de los Estados Unidos, y si pasaran a regirse por nuestras leyes pronto se explotarían sus recursos —minerales, agrícolas, industriales y comerciales—.

La Alta California limita al norte con nuestras posesiones de Oregon y, si se incorporara a los Estados Unidos, pronto sería colonizada por un sector fuerte, emprendedor e inteligente de nuestra población. La bahía de San Francisco y otros puertos de la costa de California proporcionarían refugio a nuestra armada, a nuestros numerosos barcos balleneros y otros navíos mercantes empleados en el Océano Pacífico, y en poco tiempo se convertirían en los emporios de un comercio extenso y productivo con China y otros países de Oriente.

La cesión de dicho territorio aseguraría de inmediato a los Estados Unidos esas ventajas, de las cuales también gozaría todo el mundo comercial; pero mientras sigan formando parte de los dominios mexicanos seguramente no podrán ser disfrutadas ni por México ni por ninguna otra nación.

Nuevo México es una provincia fronteriza y nunca ha tenido un valor considerable para México. Por su ubicación, está vinculado naturalmente con nuestras colonias occidentales. Por otra parte, los límites territoriales del estado de Texas, según estaban definidos en sus leyes antes de ser admitido en nuestra Unión, abarcan toda la parte de Nuevo México que se encuentra al este del Río Grande, si bien México sigue reclamando este territorio como parte de sus dominios. Es importante arreglar este asunto de los límites.

Existe otra consideración que indujo a creer que el gobierno mexicano incluso podría desear poner dicha provincia bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos. Numerosas bandas de salvajes fieros y belicosos vagabundean por la provincia y sus territorios. México ha sido, y seguramente continuará siendo, demasiado débil para impedirles que cometan saqueos, robos y asesinatos, no sólo contra los habitantes de Nuevo México, sino también contra los de los demás estados del norte de México. Para estos estados sería una bendición que sus ciudadanos contaran con la protección del poder de los Estados Unidos. En estos momentos, esos salvajes tienen cautivos a muchos mexicanos, principalmente mujeres y niños. Si los Estados Unidos poseyeran y gobernaran Nuevo México, podríamos impedir eficazmente que esas tribus cometieran tales ultrajes, las obligaríamos a liberar a los cautivos y los devolveríamos a sus familiares y amigos.

Al proponer la adquisición de Nuevo México y las Californias, se sabía que el territorio que ocupaban estas provincias se encontraba deshabitado en su mayor parte, salvo por una cantidad insignificante de población mexicana que sería transferida junto con él.

Éstas fueron las principales consideraciones que me indujeron a autorizar las condiciones de paz que se le propusieron a México. Pero fueron rechazadas y, como se puso fin a las negociaciones, se reiniciaron las hostilidades. Nuestro valiente ejército atacó tanto los puntos muy fortificados cercanos a las entradas de la ciudad de México

como esta misma ciudad, y después de varios días de enconado conflicto las fuerzas mexicanas, muy superiores en número a las nuestras, fueron sacadas de la ciudad, que nuestras tropas ocuparon.

Inmediatamente después de que se recibió la noticia de los desfavorables resultados de las negociaciones, convencido de que su presencia en el ejército no tenía ningún caso, decidí llamar a nuestro comisionado. Con este objeto, el 6 de octubre pasado se le transmitió un despacho. Se informará al gobierno mexicano este hecho y que en la situación actual considero inconveniente hacer nuevas tentativas de paz, pero que en todo momento estoy dispuesto a recibir y considerar cualquier propuesta de México.

Desde que se autorizó la propuesta generosa de los Estados Unidos, en abril pasado, por causa de la guerra hemos incurrido en cuantiosos gastos y se ha derramado la preciosa sangre de muchos de nuestros patriotas ciudadanos. Esta consideración y la insistencia de México en prolongar la guerra tienen que influir en las condiciones de paz que se estimen adecuadas en lo sucesivo.

Puesto que nuestras fuerzas armadas han resultado victoriosas en todas partes y sometido a nuestra ocupación militar gran parte del territorio del enemigo, incluso su capital, y que las negociaciones de paz han fracasado, surge la importante pregunta de cómo debe proseguir la guerra y cuál debe ser nuestra política en el futuro. No me cabe la menor duda de que deberíamos asegurar y aprovechar las conquistas que hemos logrado y de que, con estos fines, nuestras fuerzas navales y militares deberían apoderarse de todos los puertos, poblados, ciudades y provincias que ya están bajo nuestra ocupación o que podamos tomar en adelante.

Si el gobierno de México hubiera aceptado las condiciones propuestas, equitativas y generosas, habría sido preferible ese modo de arreglo. Puesto que México las declinó y no propuso a cambio otras que pudieran ser aceptables para los Estados Unidos, el honor nacional, no menos que los intereses públicos, requiere que se prosiga la guerra con mayor energía y fuerza hasta que se logre una paz justa y satisfactoria. Mientras tanto, como México se niega a pagar cualquier indemnización, deberíamos adoptar medidas para indemnizarnos nosotros mismos apropiándonos permanentemente de una parte de su territorio. Poco antes de que se iniciara la guerra, nuestras fuerzas tomaron posesión de Nuevo México y las Californias. Se ordenó a nuestros comandantes militares y navales que las conquistaran y conservaran en sus manos, sujetándose a las disposiciones de un tratado de paz.

Estas provincias se encuentran indiscutiblemente en nuestro poder desde hace muchos meses y México ha dejado de oponer resistencia dentro de los límites de las mismas. Me agradaría que nunca se le devolvieran a México. Si el Congreso concuerda con mi opinión de que los Estados Unidos deben retenerlas a manera de indemnización, no veo ninguna buena razón para que no se las someta de inmediato a la jurisdicción civil y las leyes estadounidenses. Esperar que se firme un tratado de paz como el que estamos dispuestos a celebrar, que no cambiaría nuestra actitud respecto a ellas, no puede ser una buena política; nuestros propios intereses y los de los habitantes de

esas provincias requieren que se instituya de inmediato en ellas un gobierno estable, responsable y libre. Por tanto, en caso de que el Congreso decida que retengamos permanentemente dichas provincias y que en lo sucesivo se consideren como parte integral de nuestro país, será importante que de inmediato se establezcan ahí gobiernos territoriales, con objeto de proteger mejor a las personas y los bienes. Recomiendo el establecimiento de tales gobiernos territoriales. Esto promoverá la paz y la tranquilidad entre sus habitantes, pues eliminará la duda de si todavía pueden volver a ser sometidos a la jurisdicción de México. Invito al Congreso a que considere, a la brevedad, este importante asunto y tome una decisión al respecto.

Aparte de Nuevo México y las Californias, hemos conquistado y ocupado otras provincias mexicanas. Ahora, éstas son gobernadas por nuestros comandantes militares y navales de conformidad con la autoridad general que confiere al conquistador la legislación en materia de conflictos bélicos. Debemos conservarlas para coaccionar a México a que acceda a condiciones justas de paz. Es necesario que dicho gobierno sea dirigido por funcionarios civiles y militares, quienes deberán fijar la compensación legal adecuada que se obtendrá de las contribuciones impuestas al enemigo. Qué otras medidas serán necesarias y cómo deberán aplicarse finalmente, dependerá de cómo se desarrolle la guerra y del rumbo que México considere conveniente tomar en lo sucesivo.

Por la forma en que opino, no puedo favorecer la política que se ha sugerido de retirar totalmente nuestro ejército o replegarnos a determinada línea y simplemente defenderla. Retirar todo nuestro ejército de los territorios que han conquistado mediante hazañas de valentía sin paralelo y a costa de tanta sangre y recursos materiales, en una guerra justa por nuestra parte y que, por la actitud del enemigo no podríamos haber evitado honorablemente, equivaldría a degradar a la nación ante nuestros propios ojos y ante el mundo. Retirarnos a una línea y simplemente defenderla no terminaría con la guerra. Por el contrario, alentaría a México a perseverar y continuarla indefinidamente.

No es lógico esperar que México, después de negarse a establecer esa línea como una frontera permanente cuando nuestro victorioso ejército tiene en sus manos la capital y el centro del país, nos permita conservar esa línea sin oponer resistencia alguna.

No hay duda de que México continuaría la guerra en las formas más hostigantes y molestas. Se libraría sin descanso una guerra fronteriza con las características más violentas, que abarcaría una extensa línea. Se necesitaría mantener constantemente en el campo un enorme ejército, destacado en puestos y cuarteles a lo largo de dicha línea, a fin de protegerla y defenderla. El enemigo, liberado de la presión de nuestras armas en sus costas y en las pobladas regiones del interior, dirigiría su atención a esta línea, y tras seleccionar un puesto aislado para atacarlo, concentraría sus fuerzas en él. Ésta sería la situación que probablemente preferirían los mexicanos, siguiendo su sistema favorito de guerra de guerrillas. Si asumiéramos una actitud defensiva en dicha línea, todas las ventajas del estado de guerra serían para el enemigo. No podríamos exigirle

contribuciones y en ninguna forma podríamos hacerle sentir la presión de la guerra; tendríamos que permanecer inactivos y esperar su acercamiento, con la constante incertidumbre de qué punto de la línea atacaría o en qué momento. El enemigo podría reunir y organizar una fuerza gigantesca en su lado de la línea y, ocultando sus intenciones, atacar por sorpresa alguno de nuestros puestos, que por estar tan alejados entre sí no podrían recibir a tiempo refuerzos o ayuda; así, nuestro valiente ejército quedaría expuesto al peligro de verse desprovisto de destacamentos. Y aunque por su valentía sin igual o por el valor mostrado durante esta guerra nuestro ejército rechazara al enemigo, la cantidad de hombres estacionados en cada puesto sería demasiado pequeña para salir en su persecución. Si el enemigo fuera rechazado en un ataque, su única opción sería retirarse a su propio lado de la línea y, sin el miedo de ser perseguido por un ejército, podría fortalecerse para emprender un ataque contra ese u otro puesto. Por otra parte, el enemigo también podría cruzar la línea entre nuestros puestos, hacer incursiones rápidas en nuestro país, asesinar a sus habitantes, causar estragos y después retirarse al interior antes de que pudiéramos concentrar fuerzas para ir en su persecución. Una guerra meramente defensiva de nuestra parte podría tener este carácter hostigante. Si al ser atacadas nuestras fuerzas o encontrándose bajo amenaza de serlo, pudieran rechazar al enemigo y conquistarlo, esto equivaldría a invadir al país enemigo después de haber perdido todas las ventajas de las conquistas alcanzadas, por haberlas abandonado. No sabemos si para ocupar eficazmente y con seguridad esa línea necesitaríamos un ejército tan numeroso como el que se requeriría para proteger nuestras conquistas ya logradas y proseguir la guerra en el centro del país enemigo. Y tampoco tenemos ninguna certeza de que con esa política disminuirían nuestros gastos de guerra. Estoy convencido de que el mejor medio para reivindicar el honor y los intereses nacionales, así como para terminar la guerra en forma honorable, es continuarla con mayor energía y fuerza en las regiones vitales del país enemigo,

En mi mensaje anual de diciembre al Congreso, declaré:

La guerra no se ha librado con fines de conquista, pero, como fue iniciada por México, se ha llevado a cabo en el país enemigo y será continuada con fuerza para obtener una paz honorable, asegurando así una amplia indemnización por sus gastos y para nuestros ciudadanos afectados, quienes han presentado numerosas demandas pecuniarias contra México.

Ésta, a mi juicio, continúa siendo nuestra verdadera política, la única que probablemente asegurará una paz permanente.

Nunca he considerado que el objetivo de la guerra sea conquistar permanentemente la República mexicana ni aniquilar su existencia como nación independiente. Por el contrario, ha sido mi deseo que dicha república conserve su nacionalidad y que con un buen gobierno adaptado a su condición sea una república libre, independiente y próspera. Los Estados Unidos fueron una de las primeras naciones en reconocer la independencia de México y siempre han deseado tener con ella relaciones cordiales y de buena vecindad. Debido a la propia conducta de la República mexicana, nos he-

mos visto obligados a participar en esta guerra. Al continuarla no buscamos derrocar a México como nación; más bien, al reivindicar nuestro honor nacional buscamos resarcimiento por los daños que nos ha infligido e indemnización por nuestras justas demandas en su contra. Exigimos una paz honorable, y esa paz deberá traer consigo indemnización por el pasado y seguridad para el futuro. Hasta ahora, México ha rechazado todos los acuerdos que permitirían alcanzar dicha paz.

Aunque nuestros ejércitos han avanzado de victoria en victoria desde el inicio de la guerra, siempre lo han hecho con la rama de olivo de la paz en su mano, y México siempre ha tenido la posibilidad de detener las hostilidades con el simple hecho de aceptarla.

Sin duda, un gran obstáculo para la paz se deriva del hecho de que, por mucho tiempo, México ha estado dominado por facciones o usurpadores militares, y ha sido tal la condición de inseguridad causada por sus gobiernos sucesivos que cada uno ha sido disuadido de concertar la paz, porque ello implicaría ser expulsado del poder por una facción rival. Tal fue el destino del gobierno del presidente Herrera en 1845, tan sólo por estar dispuesto a escuchar las propuestas de los Estados Unidos para impedir la guerra, según se confirma por la correspondencia oficial efectuada en agosto pasado entre él y su gobierno, de la cual se transcribe aquí una copia. “Por esta única razón, la revolución que lo expulsó del poder” fue iniciada por el general Paredes. Puede ser que el gobierno actual se sienta inseguro por la misma razón.

No cabe duda de que los habitantes de México, pacíficos y bienintencionados, están convencidos de que el verdadero interés de su país es celebrar una paz honorable con los Estados Unidos, pero puede ser que la aprensión de convertirse en víctimas de una facción militar o de un usurpador les haya impedido manifestar sus opiniones con cualquier acción pública. La eliminación de dicha aprensión probablemente les permitiría expresar con absoluta libertad sus opiniones y tomar las medidas necesarias para la restauración de la paz. Es probable que los éxitos continuos de nuestras fuerzas amadas no logren asegurar una paz satisfactoria con un pueblo, confundido y dividido por facciones contendientes, ni con un gobierno sujeto a cambios constantes provocados por revoluciones sucesivas. Ante esta situación, sería conveniente que nuestros generales en campaña alentaran a los amigos de la paz en México y les aseguraran protección mediante el establecimiento y mantenimiento de un gobierno republicano libre y de su elección, que pueda y quiera llegar a una paz justa para ellos y compensatoria para nosotros. Quizá ésta sería la única forma de obtener dicha paz. En tal caso, la guerra que México nos ha hecho librar se convertiría en una bendición duradera para ese país. Después de encontrarlo dividido y confundido por facciones, y gobernado por usurpadores militares, deberíamos dejar a México con un gobierno republicano que disfrutara de verdadera independencia, paz y prosperidad, para que cumpliera con su deber en la gran familia de naciones y para que promoviera su propia felicidad mediante la instrumentación y cumplimiento de leyes sensatas.

Si después de alentarlo y protegerlo y de los esfuerzos perseverantes y sinceros que realizamos desde el momento en que México inició la guerra —e incluso antes— por arreglar nuestras diferencias con ese país, no tenemos éxito en nuestra empresa, habremos agotado todos los medios honorables de buscar la paz y tendremos que continuar ocupando México con nuestros soldados, buscando la indemnización con nuestras propias manos, y cumpliendo las condiciones que demanda nuestro honor.

Actuar de otra forma en las condiciones actuales en México, y retirar nuestro ejército sin haber alcanzado la paz, no sólo dejaría sin resarcir nuestros males, sino que sería también una señal de nuevas y encarnizadas discordias civiles y de nuevas revoluciones, que irían en contra de las relaciones pacíficas con los Estados Unidos. Además, si nuestros soldados se retiraran antes de alcanzar la paz, existiría el peligro de que el pueblo mexicano, cansado de las revoluciones sucesivas y privado de protección hacia sus personas y propiedades, tendiera a ceder ante influencias extranjeras y se arrojará a los brazos de algún monarca extranjero para así protegerse de la anarquía y del sufrimiento. Nos deberíamos oponer a esto, por nuestra propia seguridad y conforme a nuestra política establecida. Nunca podríamos consentir que México se convirtiera en una monarquía gobernada por un príncipe extranjero.

México es nuestro vecino, su frontera limita con la nuestra y abarca toda la extensión del continente norteamericano, de océano a océano. Por ello, y por nuestra propia seguridad, no puede sernos indiferente el destino de este país.

Tal vez el gobierno mexicano y su pueblo han malinterpretado nuestra indulgencia y nuestros objetivos al desear llegar a un arreglo amistoso de las diferencias existentes entre ambos países. Quizá supusieron que accederíamos a términos degradantes para nuestra nación; puede ser que hayan sacado conclusiones equivocadas de la supuesta división de opiniones en los Estados Unidos respecto a la guerra y calculado que ganarían mucho prolongándola y que, en última instancia, renunciaríamos a ella y dejaríamos de insistir en cualquier indemnización o cesión de territorio. Sin importar cuál fue la impresión equivocada que determinó su comportamiento, pronto los desengañará la aprobación y el cumplimiento de la enérgica política que hemos propuesto.

En el futuro, debemos hacer sentir al enemigo la presión de la guerra con más fuerza que nunca. En sus inicios, se consideró adecuado llevarla a cabo con un espíritu de indulgencia y generosidad. Así se dieron los primeros pasos, hasta donde lo permitió la guerra, para convencer a la mayoría de los mexicanos de que la guerra no se libraba en contra de los habitantes pacíficos de México, sino contra su desleal gobierno, que había comenzado las hostilidades; para sacar de su mente la falsa impresión creada por sus gobernantes interesados e intrigantes, de que, por nuestra parte, se trataba de una guerra contra su religión y para profanar y derrocar sus iglesias, una guerra en la que se violarían sus derechos individuales y sus propiedades. Para eliminar esta falsa impresión, se dio la orden a nuestros comandantes en campaña de que respetaran escrupulosamente la religión y las iglesias de los mexicanos, y de que no se violaran

de ninguna forma las propiedades eclesiásticas; también se les dieron instrucciones de que respetaran los derechos individuales, así como las propiedades de quienes no sé levantarán en armas contra nosotros.

Con este fin, el general de división Taylor dio garantías al pueblo mexicano en una proclamación emitida según las instrucciones dadas por el secretario de Guerra en junio de 1846; lo mismo hizo el general de división Scott, quien actuó de acuerdo con sus propias convicciones sobre la conveniencia de seguir dichas órdenes, en una proclama del 11 de mayo de 1847. Con este espíritu de generosidad y conciliación, y con el objetivo de impedir que el grueso de la población mexicana se levantara en armas contra nosotros, emprendimos la guerra. Las provisiones y otros pertrechos proporcionados a nuestro ejército por ciudadanos mexicanos fueron pagados a precios justos y generosos, y acordados por ambas partes. Después de unos cuantos meses, fue evidente que tales garantías y buen trato no habían logrado tener el efecto deseado en la población mexicana. Aunque nosotros participamos en la guerra de acuerdo con los principios más humanos y generosos observados por las naciones civilizadas, los mexicanos combatieron con un espíritu muy diferente. El pueblo mexicano no apreció nuestra indulgencia; en general, se volvió, hostil hacia los Estados Unidos y aprovechó la menor oportunidad para cometer los excesos más salvajes contra nuestros soldados. Un gran número de mexicanos se levantó en armas y, mediante una guerra de guerrillas, robó y asesinó de la forma más cruel a soldados o tropas que por accidente u otras causas se habían separado del cuerpo principal de nuestro ejército; bandas de guerrilleros y asaltantes infestaron los caminos, atacaron nuestros trenes y nos privaron de provisiones siempre que estuvo en sus manos hacerlo.

Puesto que los mexicanos mostraron ser totalmente incapaces de apreciar nuestra indulgencia y generosidad, se consideró necesario cambiar la forma de conducir la guerra, haciéndoles sentir la presión de ésta de acuerdo con los procedimientos observados en circunstancias similares por todas las demás naciones civilizadas.

Así, el 22 de septiembre de 1846, el secretario de Guerra dio instrucciones al general de división Taylor de “obtener provisiones” para nuestro ejército “del enemigo, sin pagar por ello, y exigir contribuciones para su sustento, si de esta forma Taylor pensaba que podría conseguir suministros abundantes para sus fuerzas”. La ejecución de estas instrucciones quedaba, necesariamente, a discreción del oficial al mando, pues estaba más al tanto de las circunstancias, las necesidades del ejército y la viabilidad de aplicar la medida. El 26 de octubre de 1846 el general Taylor contestó desde Monterey que “entonces, como ahora, habría sido imposible sostener al ejército mediante contribuciones forzadas en dinero o en suministros”. Por razones que él mismo señaló, Taylor no adoptó la política de sus instrucciones, pero declaró su disposición de hacerlo “si el ejército, en operaciones futuras, llegara a una parte del país a la que pudiera obligar a abastecer a los soldados”. Taylor continuó pagando por las provisiones recibidas en el país enemigo.

El 3 de abril de 1847 se dieron instrucciones similares al general de división Scott. Éste respondió desde Jalapa el 20 de mayo de 1847, que si se esperaba “que el ejército se sustentase con contribuciones obligadas del país, podemos arruinar y exasperar a los habitantes y nosotros morir de hambre”. En este sentido, se respetó su juicio, al igual que fue respetado el del general de división Taylor. El general Scott, por sus propias razones, también continuó pagando las provisiones proporcionadas por el enemigo.

Después de que el ejército había llegado al corazón de una de las regiones más ricas de México, se suponía que habían desaparecido los obstáculos que anteriormente impidieron que el ejército obtuviera contribuciones forzadas para su sustento; por tanto, el 1º de septiembre y el 6 de octubre de 1847 el secretario de Guerra repitió la orden en despachos enviados al general Scott. Nuevamente le recalcó la importancia de que el enemigo llevara la carga de la guerra proveyendo los medios de sustento de nuestro ejército, y se le indicó que siguiera esta política a menos que hacerlo implicara privar al ejército de las provisiones necesarias. Se enviaron copias de estos despachos al general Taylor para su gobierno.

El 31 de marzo pasado hice que nuestros comandantes militares y navales recibieran la orden de exigir una contribución militar sobre todas las embarcaciones y mercancía que entraran en cualquiera de los puertos mexicanos ocupados por nuestro ejército, y utilizar dichas contribuciones para sufragar los gastos de la guerra. En virtud del derecho de conquista y las leyes de guerra, el conquistador, por su propia seguridad, o conveniencia, puede prohibir el comercio exterior en todos los puertos bajo su ocupación o permitirlo en las condiciones que desee. Antes de que los principales puertos mexicanos fueran bloqueados por nuestra armada, los ingresos derivados de los derechos de importación, conforme a las leyes de México, se pagaban a la Tesorería mexicana. Después de que esos puertos pasaron a ser parte de nuestras posesiones militares, se levantó el bloqueo, y el comercio con ellos se permitió conforme a términos y condiciones prescritos. Los puertos fueron abiertos al comercio con todas las naciones mediante el pago de derechos más moderados que los que cobraba anteriormente México, y los ingresos que antes recibía la Tesorería mexicana fueron recaudados por nuestros oficiales militares y navales para que los utilizaran nuestras fuerzas armadas. Se tuvo cuidado de que nuestros oficiales, soldados y marinos no se ocuparan del manejo de pedidos, y dado que, según lo dispuesto en éstos, la mercancía importada debía ser consumida por ciudadanos mexicanos, las contribuciones exigidas fueron en efecto la incautación de los ingresos públicos de México y la aplicación de los mismos para nuestros propios fines. El objeto de esta medida fue obligar al enemigo a contribuir lo más posible con los gastos de guerra.

Si desean conocer el monto de las contribuciones recaudadas de esta forma, remítanse a los informes anexos de la Secretaría de Guerra y de la de Marina, según los cuales se ha recaudado una cifra superior a medio millón de dólares. Esta cifra, sin duda alguna, habría sido mucho mayor de no ser por las dificultades para mantener abiertas las comunicaciones entre la costa y el interior, con objeto de que los propietarios de

la mercancía importada la transportaran y vendieran a los habitantes del país. Se tiene confianza en que esta dificultad se solucionará pronto gracias a que hemos enviado más fuerzas al frente de batalla.

Recientemente se han tomado medidas para que los ingresos internos y externos de México en los lugares ocupados por nuestro ejército sean confiscados y recaudados en beneficio de nuestro ejército y nuestra marina.

En mi opinión, la política de imponer contribuciones al enemigo —política que va de acuerdo con el derecho de gentes y que convendría que adoptaran nuestros comandantes militares— debería aplicarse con rigor, ya que se han girado órdenes con este propósito. Mediante esta política, a la vez que nuestra Tesorería sería liberada de fuga de dinero, se obligaría al pueblo mexicano a sentir la carga de la guerra y, dependiendo de sus intereses, podría inducirse a que exigiera una paz justa a sus gobernantes.

Después del aplazamiento de la última sesión del Congreso, en la guerra se presentaron contingencias que, en mi opinión, requerirían que enviáramos al frente una cantidad de soldados mayor que la prevista. Por consiguiente, se reforzó al ejército, “aceptando” los servicios de todas las fuerzas voluntarias autorizadas por el decreto del 13 de mayo de 1846, a pesar de que se cuestionó seriamente la precisión de ese decreto. Con las fuerzas voluntarias que se encuentran actualmente en campaña, más las que habían sido “aceptadas” para “estar en servicio durante doce meses” y liberadas después de ese periodo, se cubrió el total de 50 000 hombres autorizados por el decreto. Se considera importante que al principio de su periodo de sesiones el Congreso confiera la autoridad necesaria para reunir una fuerza regular adicional que preste sus servicios durante la guerra contra México y sea liberada una vez que se celebre y ratifique un acuerdo de paz. Invito al Congreso tomar en consideración las opiniones que el secretario de Guerra expresa en su informe sobre el particular.

También recomiendo que se otorgue autoridad legal para solicitar y aceptar los servicios de un número adicional de voluntarios, autoridad que sólo será ejercida en el momento y grado que requieran las necesidades del servicio.

En la guerra contra México, aunque se ha tenido el mayor cuidado de evitar el menor motivo de queja por parte de las naciones neutrales —y no lo ha habido—, durante nuestra ocupación militar se han garantizado privilegios generosos al comercio en los puertos del enemigo.

De continuar la guerra contra México hasta el 30 de junio de 1849, sería necesario un préstamo más por 20.5 millones de dólares para el año fiscal que concluye ese día, si no se impone ningún arancel sobre el té y el café, si los predios públicos no se reducen y clasifican por precio, y si no se recauda ninguna contribución en México. Si según lo propuesto se impone un arancel sobre el té y el café y los predios públicos se reducen y clasifican por precio, el préstamo podría reducirse a 17 millones de dólares, y aún más, gracias a las contribuciones militares que podrían recaudarse en México. Por *el* momento, sin embargo, no se propone solicitar al Congreso la autoridad para negociar este préstamo para el siguiente año fiscal, ya que se espera sea suficiente el so-

licitado para el resto del presente año fiscal y las contribuciones militares que pudieran recabarse en México. Si, contrariamente a mis expectativas, se necesitara el préstamo, este hecho sería comunicado al Congreso oportunamente para que tomara las medidas pertinentes durante la presente sesión. Bajo ninguna circunstancia se necesitará tomar más de seis millones de dólares de esa suma antes de la sesión del Congreso en diciembre de 1848.

Se calcula que mediante un arancel moderado sobre estos artículos podrían obtenerse tres millones de dólares al año.

Si el Congreso se procurara esta fuente adicional de ingresos, no sólo disminuiría proporcionalmente el monto del préstamo público utilizado para la guerra contra México, sino que también se fortalecería la confianza del pueblo en la habilidad y determinación del gobierno para cumplir oportunamente todos sus compromisos, y quizá se obtendría a tasas más bajas el préstamo que podría ser necesario negociar.

En el Golfo de México y en el Pacífico, los oficiales de nuestros escuadrones y sus hombres han mostrado gran valentía y prestado servicios inapreciables. En las primeras etapas de la guerra contra México bloqueamos sus puertos en ambas costas y, en últimas fechas, nuestra marina tomó muchos de ellos. Al actuar en cooperación con las fuerzas de tierra, los oficiales de la marina y sus hombres han prestado valientes y distinguidos servicios en tierra así como en el mar, y merecen los más altos elogios de la nación.

12.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (5 de diciembre de 1848)

Desde la ratificación, por ambas partes, del tratado de paz con México, nuestras relaciones con el gobierno de esa república han sido sumamente amistosas. El enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ha sido recibido y acreditado en México, y, a su vez, un representante diplomático de México, de rango similar, ha sido recibido y acreditado por nuestro gobierno. Las relaciones de amistad entre ambos países, que habían sido suspendidas, felizmente se han restaurado y creo que durarán largo tiempo. Las dos repúblicas, por estar situadas en el mismo continente y compartir fronteras, tienen motivo de amistad e interés suficientes para mantenerse unidas en una concordia perpetua.

Esta grata condición de nuestras relaciones exteriores hace innecesario llamar, particularmente la atención sobre ellas.

Mi objetivo y aspiración constantes han sido cultivar la paz y el comercio con todas las naciones. La tranquilidad interna y las relaciones exteriores amistosas constituyen la política verdadera y permanente de nuestro país. La guerra, tormento de todos los países, a veces se vuelve inevitable, pero siempre puede prevenirse si se respetan con firmeza los derechos y el honor de una nación.

Uno de los resultados más importantes de la guerra que nos vimos obligados a iniciar contra un país vecino es la demostración de la fuerza militar de nuestro país. Antes de la última guerra contra México, Europa y otras potencias extranjeras tenían

puntos de vista imperfectos y erróneos de nuestra fuerza física como nación y de nuestra habilidad para continuar con una guerra y, en especial, una guerra emprendida por nuestra nación. Estas potencias observaron que nuestro ejército organizado en épocas de paz no excedía de los 10 000 hombres. Acostumbradas a mantener durante largos periodos de paz ejércitos organizados para la protección de la Corona contra sus propios súbditos y contra enemigos extranjeros, no concebían la posibilidad de que una nación sin un ejército bien disciplinado y con antigüedad en el servicio emprendiera una guerra. Tenían una mala impresión de nuestro ejército y no lo consideraban como una fuerza efectiva, salvo que fuera utilizado para estrategias defensivas temporales contra invasiones a nuestro propio territorio. Los sucesos de la última guerra contra México no sólo los desengañaron, sino que también eliminaron las impresiones equivocadas que habían prevalecido aun entre algunos de nuestros propios compatriotas. Esa guerra ha demostrado que si estallan hostilidades imprevistas para las cuales no ha habido un entrenamiento previo, un ejército de soldados voluntarios equivale a uno de veteranos que puede llevarse en corto tiempo al campo de batalla. A diferencia de lo que habría ocurrido en cualquier otro país, no tuvimos necesidad del reclutamiento. Por el contrario, fue tal el número de voluntarios que patrióticamente ofrecieron sus servicios, que la principal dificultad radicó en hacer la selección y determinar quién no sería aceptado. Nuestros soldados voluntarios son diferentes de aquellos escogidos entre la población de cualquier otro país. En esos países se les elige indiscriminadamente sin importar su profesión u oficio —campesinos, abogados, médicos, comerciantes, fabricantes, mecánicos y obreros— y esto no sólo sucede en la selección de oficiales, también en la de soldados de cualquier rango. Por otra parte, nuestros soldados son diferentes a los de otros países. Portan armas de fuego y han sido acostumbrados desde su juventud a utilizarlas; además, gran parte de ellos, en especial los del oeste y los que provienen de los estados poblados recientemente, son expertos tiradores. Son hombres que tienen que mantener en casa una reputación de buena conducta en campaña. Son inteligentes, y existe una individualidad de carácter que difícilmente, encontraríamos en las filas de cualquier otro ejército. En el campo de batalla, cada soldado raso, así como cada oficial, no sólo lucha por su país sino también por la gloria y para destacar entre sus conciudadanos cuando regrese a la vida de civil.

La guerra contra México no sólo ha demostrado la habilidad del gobierno para organizar repentinamente un numeroso ejército, sino también para proporcionarle todas las municiones y provisiones necesarias con prontitud, facilidad y utilidad, y para dirigir sus operaciones con eficiencia. La fortaleza de nuestras instituciones no sólo ha sobresalido por el valor y la habilidad de las tropas en servicio activo en el campo de batalla, sino por la organización de las ramas ejecutivas a cargo de la dirección general de la guerra. Aunque se pueden hacer grandes elogios a los oficiales y hombres que libraron nuestras batallas, sería injusto no elogiar a los oficiales destacados forzosamente en casa que tienen el deber de abastecer al ejército a tiempo y en el sitio apropiado con municiones y otras provisiones indispensables para hacerlo más eficiente. El cré-

dito que merece esta clase de oficiales es aún mayor cuando se considera que ningún ejército de la historia antigua o moderna estuvo mejor abastecido que nuestro ejército en México. Al operar en territorio enemigo a más de 3 000 kilómetros de la sede del gobierno federal y al tener sus diferentes cuerpos distribuidos en un vasto territorio, y separados por miles de kilómetros, sólo la inagotable vigilancia y la energía extraordinaria de estos oficiales permitió proporcionar al ejército todo lo necesario para un servicio eficiente, en todo momento y lugar.

Es un acto de justicia declarar que los oficiales encargados de varias dependencias ejecutivas —todas ellas bajo la supervisión y observación de la Secretaría de Guerra— desempeñaron sus respectivas tareas con habilidad, energía y eficiencia. Estos oficiales han cosechado menos gloria en la guerra por no haber expuesto su persona a los peligros de las batallas como sus compañeros en combate; sin embargo, sin su planeación, su eficiente ayuda y cooperación, aquellos en combate no habrían recibido todos los medios utilizados en el logro de honores para ellos y para su país.

Cuando se tienen en consideración todos estos hechos, terceros países dejan de sorprenderse de cómo fue que nuestro noble ejército, de veteranos y voluntarios, encontró la victoria en cada campo de batalla en México, a pesar de lo temible de las probabilidades en su contra.

De esta manera, la guerra contra México ha revelado totalmente la capacidad de los gobiernos republicanos para continuar con éxito una guerra justa y necesaria con todo el vigor generalmente atribuible a formas de gobierno más arbitrarias. Los escritores de derecho civil por lo general han atribuido a los republicanos el deseo de unidad y la concentración de objetivos y del vigor de ejecución que por lo común se piensa pertenecen a formas monárquicas y aristocráticas; y esta característica de gobierno popular supuestamente se presenta en la dirección de una guerra en territorio enemigo.

La guerra contra la Gran Bretaña en 1812 se localizó en gran medida dentro de nuestros propios límites y arrojó poca luz sobre este tema; sin embargo, la guerra que acabamos de terminar con una paz honorable muestra que un gobierno representativo popular está a la altura de cualquier emergencia que pudiera surgir en los asuntos de una nación. La guerra contra México ha revelado otra característica sobresaliente e impresionante en nuestras instituciones: que sin costo para el gobierno y sin peligro para nuestras libertades, tenemos en el seno de nuestra sociedad de hombres libres y disponibles en caso de una guerra necesaria y justa, un ejército organizado de dos millones de soldados ciudadanos armados, como los que combatieron en México. Pero nuestra fuerza militar no sólo consiste en la capacidad para realizar maniobras exitosas en tierra. La armada es un brazo importante de la defensa nacional. Si los servicios de la armada no fueron tan brillantes como los del ejército en la última guerra contra México, se debió a que no había enemigo que combatir en el mar. Mientras que el ejército tuvo la posibilidad de realizar servicios más conspicuos, la armada participó principalmente en la dirección de la guerra. Ambos brazos militares cumplieron con

su deber. Se deben elogiar los servicios competentes y valientes de los oficiales y hombres de la armada, por actuar, tanto independientemente como en cooperación con nuestras tropas en la conquista de las Californias, en la toma de Veracruz, y en el sitio y ocupación de otras posiciones importantes en las costas del Golfo y del Pacífico. Su vigilancia, energía y habilidad prestaron el mejor y más eficaz servicio al privar de municiones y otras provisiones al ejército enemigo, mientras garantizaban la entrada segura de suficientes provisiones para nuestro ejército. Nuestro amplio comercio en ningún lugar fue interrumpido, y por esta inmunidad a los males de la guerra, el país está en deuda con la marina.

Grandes elogios merecen nuestros oficiales de tantas dependencias ejecutivas, astilleros navales y estaciones relacionadas con el servicio, todas bajo la dirección inmediata de la Secretaría de Marina, por el empeño, previsión y energía con que todo estuvo dirigido y abastecido para brindar eficiencia a esa rama del servicio. La misma vigilancia hubo en la dirección de operaciones tanto de la armada como del ejército. Existió una coordinación de acciones y objetivos entre los dirigentes de ambos brazos del servicio. Por medio de las órdenes que de tiempo en tiempo fueron emitidas, nuestros buques de guerra en el Pacífico y en el Golfo estuvieron emplazados en el momento apropiado y en la posición adecuada para cooperar eficientemente con el ejército. Así, su fuerza combinada abatió al enemigo.

Los grandes resultados que se han ido obteniendo y derivando de esta guerra serán de enorme importancia para el progreso futuro de nuestro país, ya que nos protegerán de fricciones con el exterior y nos permitirán continuar nuestra anhelada política de “paz con todas las naciones, sin entablar alianzas con ninguna”.

Al ocupar más que nunca antes una posición de predominio entre las naciones, están aumentando nuestros deberes y nuestras responsabilidades con nosotros mismos y con la posteridad. Esto será más obvio cuando consideremos los territorios recientemente añadidos a nuestras posesiones, así como su gran valor e importancia.

Nuestras bizarras fuerzas que participaron en la guerra mexicana, gracias a cuyo patriotismo y acciones bélicas sin paralelo obtuvimos estas posesiones como indemnización por nuestras justas demandas contra México, estaban conformadas por ciudadanos que no pertenecían a un estado o sección particular de nuestra Unión. Eran hombres provenientes de los estados esclavistas y no esclavistas, del norte y el sur, del este y el oeste. Eran todos compañeros de armas y conciudadanos del mismo país, comprometidos con una causa común. Cuando libraban la guerra eran hermanos y amigos y compartían peligros, fatigas y sufrimientos comunes. Ahora que, una vez terminado el trabajo y restaurada la paz, regresan a sus hogares, se quitan los atuendos de guerra, toman sus lugares en la sociedad y reanudan sus actividades en la vida civil, deberá indudablemente prevalecer un espíritu de armonía, concesión y consideración equitativa por los derechos de todos y de todas las secciones de la Unión en el momento de proveer a los gobiernos los territorios adquiridos, que son fruto de su servicio común. Todo el pueblo de los Estados Unidos, y de cada uno de sus estados,

contribuyó a sufragar los gastos de esa guerra, y no sería justo para ninguna sección excluir a la otra de toda participación en el territorio adquirido. Esto no estaría en consonancia con el justo sistema de gobierno que adoptaron los que forjaron nuestra Constitución.

De conformidad con las disposiciones del decimotercer artículo del Tratado de Paz, Amistad y Límites con la República de México, y con fundamento en la Ley del 29 de julio de 1848, las reclamaciones de nuestros ciudadanos que ya habían sido “liquidadas y falladas en contra de la República mexicana” y que ascendían con sus intereses a 2 023 832.51 dólares han sido liquidadas y pagadas. Quedan por pagar, de estas reclamaciones, 74 192.26 dólares.

En su última sesión, al no haber dispuesto el Congreso la ejecución del artículo 15 del tratado, según el cual los Estados Unidos asumen dar satisfacción a las “reclamaciones no liquidadas” de nuestros ciudadanos contra México hasta “un monto que no sea superior a los 3 250 000 dólares”, una vez más se recomienda que se delibere este asunto para su favorable consideración.

El canje de ratificaciones del tratado con México tuvo lugar el 30 de mayo de 1848. Al cabo de un año, contado a partir de dicha fecha, el comisionado y el topógrafo, que cada gobierno tiene estipulado nombrar, deberán reunirse “en el puerto de San Diego y proceder a trazar y demarcar dicha frontera en todo su curso hasta la desembocadura del Río Bravo del Norte”. Se verá por esta disposición que el plazo en que el comisionado y el topógrafo de los respectivos gobiernos deberán reunirse en San Diego vencerá el 30 de mayo de 1849. Al cierre de su última sesión, el Congreso determinó una asignación para “los gastos en que se incurra durante el trazado y demarcación de la línea divisoria” entre los dos países, pero no fijó el monto de los salarios que deberán pagarse al comisionado y al topógrafo que nombrarán los Estados Unidos. Es conveniente que el monto de la compensación que ellos reciban sea prescrito por ley y que no se deje, como en el presente, a la discreción del Ejecutivo.

Se estima que los ingresos del Tesoro para el año fiscal que concluye el 30 de junio de 1849, incluido el saldo del Tesoro el 1º de julio último, ascenderán a 57 048 969.90 dólares, de los cuales 32 millones de dólares, según se estima, se derivarán de aranceles aduaneros, tres millones de dólares de las ventas de las tierras públicas y 12 millones de dólares de fuentes varias e imprevistas, incluido el sobreprecio del préstamo y el monto pagado y por pagarse al Tesoro, por concepto de asignaciones militares cobradas en México y de la venta de armas y barcos, así como de otros bienes públicos actualmente innecesarios para uso del gobierno, en virtud de la conclusión de la guerra y, por último, 20695435.30 dólares provendrán de préstamos negociados, incluidos los pagarés del Tesoro consolidados, que, junto con el saldo en el Tesoro el 19 de julio último, constituyen el importe estimado.

Los gastos para el mismo periodo, incluido el pago requerido por concepto de la suerte principal y los intereses de la deuda pública, así como la suerte principal y los intereses de los primeros pagos parciales pagaderos a México el 30 de mayo próximo,

y otros gastos derivados de la guerra que deberán saldarse durante el presente año, ascenderán, incluido el reembolso de los pagarés del Tesoro, a 54 195 275.06 dólares, quedando un saldo estimado en el Tesoro, el 19 de julio de 1849, de 2 853 694.84 dólares.

El secretario del Tesoro presentará, tal como dispone la ley, la estimación de los ingresos y gastos para el próximo año fiscal. Los gastos estimados para ese año ascienden a 33 214 152.73 dólares, incluidos 3 799 102.18 dólares para el pago de intereses de la deuda pública y 3 540 000 dólares para la suerte principal y los intereses pagaderos a México el 30 de mayo de 1850, quedando un monto de 25 874 050.35 dólares, el cual se considera amplio para los gastos ordinarios en tiempo de paz.

En la administración del erario público no se ha perdido ni un solo dólar por la devaluación de la moneda. Los préstamos requeridos para librar la guerra contra México fueron negociados por el secretario del Tesoro por encima de su valor nominal, con lo que se obtuvo un sobreprecio importante para el gobierno. El efecto de la restricción del sistema respecto a las tendencias de los bancos a emitir cantidades excesivas de billetes ha salvado al gobierno de grandes pérdidas y a miles de empresarios de la bancarrota y la ruina. La bondad del sistema ha sido puesta a prueba por la experiencia de los últimos dos años, y la aplicación de una política sana nos permite afirmar que permanecerá sin cambios. Se presentan nuevamente para su favorable consideración las modificaciones a algunos de los pormenores de esta medida, sin que intervenga ninguno de sus principios esenciales recomendados hasta el presente.

En mi informe del 6 de julio último, en el que transmití al Congreso al tratado de paz con México ya ratificado, recomendé la adopción de determinadas medidas para el pronto pago de la deuda pública. Al reiterar dicha recomendación hago referencia a las consideraciones presentadas en dicho informe en su favor. La deuda pública, incluida la autorizada para negociarse de conformidad con las leyes vigentes e incluidos también los pagarés del Tesoro, ascendía en ese momento a 65 778 450.41 dólares.

Desde ese periodo, se han adquirido acciones consolidadas de los Estados Unidos por un monto de medio millón de dólares, en la forma autorizada por la ley y, como consecuencia de ello, se ha reducido la deuda pública. En su informe anual, el secretario del Tesoro presentará los detalles relacionados con lo anterior.

Se cree que las estimaciones correspondientes a los gastos del próximo año fiscal, presentadas por el secretario del Tesoro, serán lo suficientemente amplias para todos los fines que se requieran. Si las asignaciones realizadas por el Congreso no exceden el monto estimado, los medios de que dispone el Tesoro serán suficientes para sufragar todos los gastos del gobierno y para liquidar el próximo pago parcial de tres millones de dólares a México, que vencerá el próximo 30 de mayo, y quedará aún un superávit considerable, que deberá aplicarse a la compra de más acciones públicas consolidadas y a la reducción de la deuda. En caso de que se realicen mayores asignaciones, la consecuencia necesaria será la postergación del pago de la deuda. Si bien nuestra deuda es pequeña, a diferencia de la mayoría de las demás naciones, nuestra verdadera política, consocia con el genio de nuestras instituciones, es que debemos presentar al mundo el

raro espectáculo de una gran república, poseedora de vastos recursos y riquezas, totalmente exenta de endeudamiento público. Esto nos conferiría aún más fortaleza y nos procuraría una posición de mayor liderazgo entre las naciones del mundo.

Los gastos públicos deben ser módicos y estar limitados a los fines que estén claramente al alcance de las facultades del Congreso. Todos los que no sean absolutamente necesarios deberán postergarse, y el pago de la deuda pública al plazo más corto posible deberá ser el principio cardinal de nuestra política pública.

Por los motivos señalados en mi último informe anual, reitero la recomendación de que se establezca una sucursal de la Casa de Moneda de los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. La importancia de esta medida es todavía mayor ahora en virtud de la adquisición de las ricas minas de metales preciosos de Nuevo México y California, especialmente de esta última.

La condición y operaciones del ejército, así como el estado de otras dependencias del servicio público bajo la supervisión del Departamento de Guerra, se presentan como corresponde en el informe adjunto del secretario de Guerra.

Al regresar la paz, nuestras fuerzas se retiraron de México y se licenció a los voluntarios y a los integrantes del ejército regular que fueron alistados para la guerra. Se han expedido órdenes para destacar las fuerzas de nuestro ejército permanente en las diversas posiciones de nuestro extenso país donde puedan requerirse tropas. En virtud de la lejanía de algunas de estas posiciones, los destacamentos no han arribado aún a su destino. Pese a la extensión de los límites de nuestro país y al número de las fuerzas requeridas en los nuevos territorios, confiamos en que nuestro ejército permanente actual sea suficientemente grande para todas las exigencias, siempre y cuando nuestras relaciones pacíficas permanezcan sin cambios.

Del monto de las asignaciones militares cobradas en México, se aplicaron 769.650 dólares al pago de la primera parcialidad de la deuda con ése país, de conformidad con el tratado celebrado con él. El otro importe, de 346 369.30 dólares, ha sido entregado al Tesoro y los saldos no aplicados permanecen aún en manos de oficiales pagadores y de aquellas personas que se contrataron para el cobro de nuestros dineros. Tras la proclamación de la paz, no se han hecho más desembolsos de dineros no aplicados derivados de esta fuente. Se dieron instrucciones para que los saldos en nuestro poder se entreguen al Tesoro, y las diferentes reclamaciones sobre el fondo seguirán sin resolverse hasta que el Congreso autorice su arreglo y posterior pago. Estas reclamaciones no son considerables ni en su número y ni en su monto.

Recomiendo a su favorable consideración las sugerencias del secretario de Guerra y del secretario de la Marina respecto a la legislación susceptible de promulgarse sobre este asunto.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 60-71.

13. DISCURSO ZACHARY TAYLOR

1849-1850

13.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (4 de diciembre de 1849)

Respecto a la República mexicana, nuestra política es cultivar relaciones amistosas. Desde la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, nada serio ha ocurrido que las perturbe. La fiel observancia de dicho tratado y un sincero respeto por sus derechos no pueden dejar de garantizar la confianza y amistad duraderas de dicho país. Dado que el 8 de febrero pasado, en el mensaje de mi antecesor ante la Cámara de Representantes, se hizo mención, de conformidad con una resolución de dicho organismo, de un documento denominado protocolo, firmado en Querétaro el 30 de mayo de 1848 por los comisionados de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, que fue tema de correspondencia entre el Departamento de Estado y el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de dicha república acreditado ante este gobierno, se incluye una transcripción de dicha correspondencia.

Si bien el comisionado de los Estados Unidos para determinar los límites entre los dos países se demoró en llegar a San Diego debido a obstáculos imprevisibles, llegó a dicha ciudad poco tiempo después del exigido por el tratado, y ahí se le unió el comisionado mexicano. Iniciaron sus tareas, y a la fecha del último informe de dicha fuente, se habían hecho progresos en el levantamiento. Los gastos inherentes a la organización de la comisión y su puesta en marcha hasta el momento de iniciar sus operaciones han mermado en tal medida los fondos asignados por el Congreso, que será necesaria una nueva cantidad para cubrir aquellos en que se incurra durante el presente año fiscal. La longitud de la frontera a lo largo de la cual se encuentran los límites, la naturaleza de los territorios adyacentes y las dificultades para obtener provisiones, salvo en los extremos de la línea divisoria o cerca de éstos, también hacen indispensable que la suma otorgada sea generosa para cubrir los gastos necesarios durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 1851. Por tanto, someto este asunto a su atención.

En cuanto a la solución de las demandas de los ciudadanos estadounidenses en México, tomadas en consideración en el último tratado, podría ser importante que el gobierno contara con un asesor legal para colaborar con los comisionados y proteger los intereses de los Estados Unidos. Recomendando que el Congreso acoja pronta y favorablemente este asunto.

El negociador del Tratado de Guadalupe Hidalgo recibió instrucciones de ofrecer una cuantiosa suma por el derecho de tránsito a través del Istmo de Tehuantepec. El gobierno mexicano no aceptó la propuesta de adquisición del derecho de vía, quizá porque ya había contratado con particulares la construcción de un paso del río Guasacualco a Tehuantepec. No repetiré mi propuesta de adquirir con dinero un derecho que debería ser igual para todos los países mediante el pago de una cuota razonable para los propietarios de la mejora, que sin duda deberían sentirse satisfechos con el pago y las garantías de los estados marítimos del mundo mediante tratados individuales negociados con México, que obligarían a ambos a proteger a quienes deban llevar a cabo la obra. Esas garantías harían más por establecer dicha comunicación a través de territorio mexicano que cualquier otra oferta que pudiera hacerse; y como el mismo México sería favorecido con la comunicación entre el Golfo y el Océano Pacífico, suponemos que no dudaría en colaborar de la manera propuesta con el fin de lograr una mejoría tan importante para sus propios intereses.

La cesión de territorio producto del último tratado con México incrementó en gran medida nuestra frontera expuesta e hizo aún más difícil su defensa. Dicho tratado también nos impuso ciertas obligaciones respecto a México, para las cuales se requiere de una fuerza militar. Pero nuestros efectivos militares no han cambiado de manera significativa en cuanto a su eficacia respecto al estado en que se encontraban antes de que se iniciara la guerra en México. Por tanto, serán necesarias ciertas adiciones, y recomiendo al Congreso que considere favorablemente un incremento en los diferentes cuerpos del ejército estacionados en las guarniciones del oeste más lejanas, como se propone en informe anexo del secretario de Guerra.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 72-142.

14. DISCURSO MILLARD FILLMORE 1850-1853

14.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*2 de diciembre de 1850*)

Los ciudadanos de los Estados Unidos han emprendido la comunicación de los dos océanos mediante un ferrocarril que atraviesa el Istmo de Tehuantepec, merced a una concesión otorgada por el gobierno mexicano a un ciudadano de dicho país. Es de suponer que se está preparando un estudio completo de la ruta de dicho medio de comunicación, y no hay duda de que serán llevadas a cabo, con particular empeño, estipulaciones del gobierno de los Estados Unidos para infundir seguridad a quienes empeñarán sus bienes en la empresa. Están pendientes las negociaciones tendientes a dicho objetivo y confiarnos en que cuando el gobierno de México se sensibilice respecto a las ventajas que sin duda obtendrá dicho país por las obras y se entere de que el gobierno de los Estados Unidos desea que la soberanía de México no sufra menoscabo en los istmos, las estipulaciones a que se hace referencia serán aceptadas de inmediato.

No obstante, según los últimos informes recibidos de *México*, aparentemente dicho gobierno abriga fuertes reservas relacionadas con ciertas condiciones que las partes implicadas en el proyecto del ferrocarril consideran necesarias para su protección y seguridad. Esperamos que un análisis más detallado o la modificación de las condiciones podrían conciliar dichas diferencias entre los dos gobiernos.

El enviado de los Estados Unidos, que se ocupa con diligencia del asunto, recibió recientemente nuevas instrucciones.

La incertidumbre respecto a la validez de los títulos de propiedad de tierras en California es un tema que exige pronta atención. En dicho estado se han reclamado grandes extensiones de tierra otorgadas en concesión por autoridades españolas o mexicanas. Algunas no fueron concluidas; otras fueron revocadas, y se supone que algunas fueron fraudulentas. Pero mientras no se investigue por la vía judicial, seguirán retrasando la colonización y el progreso del país. Así pues, recomiendo respe-

tuosamente que se tomen las medidas legales pertinentes para nombrar comisionados que analicen dichas reclamaciones y las resuelvan.

La frontera mexicana, la cual debemos proteger de los indios que habitan dentro de nuestra frontera en virtud del undécimo artículo del Tratado de Guadalupe Hidalgo, está también expuesta a dichas incursiones. Aunque las fuerzas militares destacadas en ese país constituyen una gran proporción del ejército, son totalmente inadecuadas tanto para nuestra protección como para cumplir con las estipulaciones de nuestro tratado con México. La deficiencia principal la encontramos en la caballería, por lo que recomiendo que, lo antes posible, el Congreso se ocupe de la formación de uno o más regimientos de esta clase.

14.2 SEGUNDO INFORINE PRESIDENCIAL (*2 de diciembre de 1851*)

Es muy deplorable que la paz interna de la República mexicana se vea seriamente amenazada de nuevo, pues desde la paz entre dicho país y los Estados Unidos ha gozado de una relativa tranquilidad, y confiábamos en que se podrían prever condiciones favorables para el futuro. No obstante, éstas se han visto amenazadas por el reciente brote de hostilidades en el estado de Tamaulipas, en la ribera derecha del Río Bravo. Habiendo recibido información de que personas de los Estados Unidos tomaron parte en la insurrección y consciente de que su ejemplo podría ser seguido por otros, di órdenes de que impidieran cualquier expedición hostil en contra de México, pues violarían las leyes de los Estados Unidos. Además emití un decreto al respecto, del cual pongo copia ante ustedes. Esta medida era imperativa por obligaciones impuestas por tratados y en virtud de las reglas generales de la buena vecindad.

En mi último mensaje anual informé al Congreso que ciudadanos de los Estados Unidos habían emprendido la comunicación de los dos océanos mediante un ferrocarril que cruzará el Istmo de Tehuantepec, merced a una concesión del gobierno mexicano a un ciudadano de dicho país, y que esta empresa sería llevada a cabo con energía siempre que México aceptara las condiciones del gobierno de los Estados Unidos para dar seguridad a quienes empeñaran sus bienes en dicha empresa.

Este gobierno ha ratificado un convenio entre ambos países para la consecución de tal fin, y sólo se espera la decisión del Congreso y del Ejecutivo de dicho país.

Han surgido ciertas dificultades y demoras inesperadas para la rectificación del convenio por México, pero se supone que se regirá por la justicia y el buen juicio para tomar una decisión, así como por la importancia del objetivo y por sus propios intereses y obligaciones. Para la negociación de asunto tan importante, este gobierno ha tenido en mente un único objetivo. Este objetivo ha sido, y es, la construcción o logro de un paso de océano a océano, el más corto y conveniente para viajeros y mercancías, e igualmente accesible para todo el mundo. No pretende obtener territorios ni ventajas especiales; además, lamentaría mucho que México pusiera obstáculos para el logro de una empresa tan prometedora para todo el mundo comercial y que presenta ventajas tan importantes para México mismo. Imbuido de estos sentimientos y con-

vicciones, el gobierno seguirá haciendo su mejor esfuerzo para lograr el acuerdo con la República mexicana y llevar a buen fin los trabajos.

La comisión mixta derivada del trabajo de Guadalupe Hidalgo ha estado muy activa en el trazado y demarcación de la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México. En el último informe presidencial del secretario del Interior se hacía saber que el punto inicial del Pacífico y el punto de confluencia del Gila y el Colorado ya habían sido determinados, y que la línea intermedia, de unos 240 kilómetros de largo, había sido trazada y demarcada mediante mojones temporales. Desde entonces, se ha marcado el punto inicial con un mojón de mármol y a lo largo de la línea se han colocado hitos permanentes de hierro separados adecuadamente uno de otro.

La protección de nuestra frontera suroeste y de estados mexicanos adyacentes contra las tribus indias que habitan dentro de nuestras fronteras ha reclamado intensa y constantemente mi atención. Una vez que el Congreso decidió en su última sesión tener en cuenta mi recomendación de que se formara un regimiento adicional de hombres de caballería, especialmente preparados para dicho fin, lo que faltaba era aprovechar lo mejor posible los medios a mi disposición. Así pues, todas las tropas preparadas para dicho fin, que no eran indispensables en otros cuarteles, y comandadas por oficiales de excelente reputación, han sido dispuestas de diferente manera, para que las tropas estén más cerca de la frontera mexicana y de las tribus que vigilarán.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo nos obliga a proteger el territorio mexicano de las incursiones de las tribus salvajes que habitan dentro de nuestras fronteras “con la misma diligencia y energía” que lo hacemos con nuestro territorio y nuestros ciudadanos. Me he propuesto apegarme lo más posible a esta disposición del tratado. Los oficiales que comandan en dichas fronteras han recibido órdenes de tratar el territorio mexicano y a sus habitantes cómo si fueran los propios, y de hacer los planes y arreglos necesarios para cumplir con dicho objetivo. Los comisionados y agentes para asuntos de los indios también han recibido instrucciones para que en los tratados tendientes a la protección de nuestros propios ciudadanos se incluya también a los mexicanos. No hay razón para pensar que estas instrucciones no se hayan cumplido; no obstante, es probable que a pesar de nuestros esfuerzos, algunos de los estados vecinos hayan sido depredados por los indios, al igual que los nuestros.

14.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1852*)

El rechazo del Congreso mexicano al convenio entre México y los Estados Unidos para la protección de una vía de tránsito a través del Istmo de Tehuantepec y de los intereses de los ciudadanos estadounidenses que habían adquirido los derechos conferidos por dicho país a uno de sus ciudadanos respecto a dicha vía, ha impuesto un obstáculo importante para el logro de tan deseable objetivo. Aún estoy dispuesto a esperar que, a este respecto, las diferencias existentes entre los gobiernos, o que puedan surgir, se arreglarán amistosamente. No obstante, este asunto ya ha atraído la atención del Senado de los Estados Unidos y no será comentado nuevamente en este informe.

Según los últimos informes de la comisión mexicana de límites, parece ser que el estudio del río Gula, desde su confluencia con el Colorado hasta su supuesta intersección con el límite occidental de Nuevo México, ha sido concluido. También se ha determinado el estudio del Río Grande, desde el punto acordado por los comisionados como “punto en que toca el límite sur de Nuevo México” hasta un punto a unos 220 kilómetros abajo de Eagle Pass, que corresponde más o menos a dos terceras partes de la distancia a la desembocadura del río.

Con el objeto de establecer una tarifa uniforme, prescribí una compensación por los servicios de secretarios, abogados de distrito y alguaciles y autoricé la formación de un regimiento adicional de hombres de caballería para la defensa de nuestras fronteras, que son amenazadas por los indios, y así cumplir con las condiciones de nuestro tratado con México.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 143-144.

15. DISCURSO FRANKLIN PIERCE

1853-1857

15.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(5 de diciembre de 1853)*

Mi más ferviente deseo ha sido mantener una relación amistosa con los gobiernos de este continente y ayudarlos a conservar buenas relaciones entre sí. Con México ha surgido una disputa respecto a los verdaderos límites entre nuestro territorio de Nuevo México y el estado mexicano de Chihuahua. Un amigo comisionado de los Estados Unidos, contratado para recorrer dicha línea de conformidad con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cometió un error importante al determinar el punto inicial en el Río Grande; pero visto que su decisión se apartaba claramente de las instrucciones contenidas en el trabajo en relación con el trazo de la frontera y que la opinión del topógrafo nombrado por los Estados Unidos no coincidía con aquél y era necesaria para validarla, este gobierno aún no toma una decisión al respecto, pero el de México ha tomado una posición diferente.

También hay otros asuntos pendientes de considerable importancia. Nuestro representante en México ha recibido instrucciones detalladas en ese sentido. Ya se iniciaron las negociaciones, pero no se ha avanzado lo suficiente para poder hablar del probable resultado. Firme en la idea de la importancia de mantener relaciones amistosas con dicho país y de responder con amplitud de criterio sus demandas justas, es razonable esperar que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para ambos países y que se consolide y perpetúe una amistad duradera.

15.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de diciembre de 1854)*

El tratado celebrado recientemente entre los Estados Unidos y México resolvió algunos de nuestros problemas más difíciles con dicho país, aunque siguen sin solución numerosas reclamaciones por daños y perjuicios contra nuestros ciudadanos; además de que también en fecha reciente se emprendieron esfuerzos para obtener una respuesta favorable del gobierno mexicano en este asunto, sin que hasta ahora haya éxito.

En cierta forma, este fracaso podría ser resultado de los desequilibrios en dicho país. He deseado vehementemente mantener relaciones amistosas con la República mexicana y hacer respetar sus derechos y territorios, no sólo por nuestros ciudadanos, sino también por los extranjeros que se han valido de los Estados Unidos para organizar expediciones hostiles contra algunos de los estados de dicha república. Las condiciones de indefensión en que se encuentran sus fronteras han incitado a aventureros ilegales a embarcarse en dichas empresas e incrementado grandemente los problemas para hacer cumplir nuestra obligación de permanecer neutrales. Considerando que es mi deber cumplir con eficiencia dichas obligaciones, no sólo con México, sino con cualquier país extranjero, he ejercido todo el poder de que estoy investido para abolir dichos procedimientos y castigar a quienes participan, y, por ello, violen nuestras leyes. La energía y actividad de nuestras autoridades civiles y militares han frustrado los propósitos de quienes preparaban expediciones de ese tipo, excepto en dos casos. Uno de los *complots*, formado por extranjeros, en un principio fue tolerado y ayudado por *el* mismo gobierno mexicano, engañado respecto a su objetivo verdadero. El otro, reducido en su número, eludió la vigilancia de los magistrados de San Francisco y logró llegar a territorio mexicano, pero las efectivas medidas tomadas por este gobierno lo obligaron a abandonar su empresa.

De conformidad con el tratado del 30 de diciembre pasado, ha sido creada la comisión para establecer la nueva línea divisoria entre los Estados Unidos y México, y ya empezó a trabajar.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 145-149.

16. DISCURSO JAMES BUCHANAN 1857-1861

16.1 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1858)*

Nuestra posición con relación a los estados independientes del sur, especialmente aquellos que tienen límite con Norteamérica, es de particular importancia. La frontera con México es coincidente de océano a océano y necesariamente tendremos un profundo interés en todo lo que conviene al bienestar de tan cercano vecino. Siempre hemos visto con gusto y tenido buenos deseos hacia el éxito de esa república, la que finalmente goza de paz y prosperidad bajo un gobierno estable y libre. Nunca hemos tenido injerencia directa o indirecta en sus asuntos internos, y es una obligación que nos debemos a nosotros mismos la protección de la integridad de su territorio contra interferencias hostiles de alguna otra potencia. Nuestra posición geográfica y nuestro interés en todo lo que pasa en México, así como nuestra bien fincada política en relación con el continente norteamericano, es un deber indispensable.

México ha permanecido en un estado de revolución constante casi desde que logró su independencia. Un líder militar tras otro han usurpado el gobierno, y varias constituciones adoptadas temporalmente han sido modificadas casi en el momento de ser proclamadas. Los gobiernos sucesivos no han dado protección ni a ciudadanos mexicanos ni a residentes extranjeros, en contra de la impunidad. A la confiscación de capital por líderes militares generalmente ha seguido una sumisión total bajo su mando por periodos cortos, pero no en la presente crisis de los asuntos mexicanos. Una guerra civil ha surgido en toda la república entre el gobierno central en la ciudad de México, que ha sostenido la constitución del poder militar, y todos aquellos que han mantenido la autoridad de esa Constitución. Los partidos antagónicos tienen influencia en diferentes estados de la república y los destinos de la guerra están cambiando continuamente. La verdad es que este buen país, bendecido por una tierra productiva y un clima benigno, ha sido reducido por la guerra civil a una condición de casi anarquía sin anhelos y de imbecilidad. Sería en vano que este gobierno exigiera el pago de

los reclamos de los ciudadanos americanos en dinero, cuya cifra alcanza más de diez millones de dólares contra México, ya que carece de todos los medios para satisfacer estas demandas.

Nuestro último ministro fue instruido con amplios poderes y recibió instrucciones para el ajuste de todas las cuestiones pendientes con el gobierno central de México, las que desarrolló con gran habilidad. Los reclamos de nuestros ciudadanos, resultantes de la violación del Tratado de Guadalupe Hidalgo así como de otros relativos a los daños de las propiedades y de las personas, han permanecido sin solución alguna. Reclamaciones en contra de esta situación han sido enviadas sin tener efecto en ese gobierno. Mientras tanto en diversas partes de la república se han registrado numerosos asesinatos, encarcelamientos e injurias a nuestros conciudadanos por diferentes partes que reclamaban el ejercicio de su jurisdicción local; pero el gobierno central, a pesar de haber sido urgido, no ha hecho ningún esfuerzo para castigar a los autores de estos ultrajes o para prevenir la reincidencia. Ningún ciudadano estadounidense puede ahora visitar México en su derecho de hacer negocios sin exponer su persona o sus propiedades a un peligro inminente. No hay una protección adecuada, y en lo que concierne a este asunto nuestro tratado con esa república es casi letra muerta.

Debido a las acciones que ha emprendido el gobierno de México en relación con el caso de Forsyth, he decidido recomendar al Congreso que otorgue el poder necesario al presidente para que torne posesión de una porción considerable y remota del territorio mexicano que ha sido habitado, la que tomará en garantía hasta que nuestros perjuicios y reclamos hayan sido satisfechos. Hemos agotado cada uno de los mecanismos para obtener justicia. En ese caso, el remedio que usaremos es reconocido por la ley de las naciones, como un medio para prevenir una guerra.

Pero existe otro punto de vista de nuestras relaciones con México, que surge de la condición infeliz de los asuntos de nuestra frontera del sudeste, que demanda acción inmediata.

En esa remota región, donde hay muy pocos habitantes blancos, grandes tribus de hostiles y predatorios indios rondan promiscuamente sobre los estados mexicanos de Chihuahua, Sonora y territorios vecinos. Los gobiernos locales carecen de poder, pero tienen el deseo de impedir a los mexicanos que pasen la frontera y cometan depredaciones contra nuestros habitantes de las zonas remotas de esos estados, los cuales son incapaces de defenderse y están sometidos a un estado de alarma constante por los indios. Un estado de anarquía y violencia prevalece en toda esa frontera distante. Las leyes son letra muerta y la vida y la propiedad permanecen inseguras. Por esta razón la fundación de Arizona es de gran importancia para que se establezca una cadena de habitantes que se extienda a lo largo de la frontera sur, autosuficiente tanto en lo que concierne a su propia protección como a la del correo de los Estados Unidos que pasa desde y hasta California. No puedo imaginar otro remedio para estos malvivientes y ningún otro modo de restituir la ley y el orden en esa remota e inhabitada frontera sino que el gobierno de los Estados Unidos cree un protectorado temporal en la porción

norte de Chihuahua y Sonora y construya puestos militares; recomendando lo anterior al Congreso. Esta protección será retirada tan pronto como los gobiernos locales de esos estados adquieran la capacidad de cumplir con sus deberes con los Estados Unidos al restablecer la ley y preservar la paz a lo largo de la frontera.

No me queda la menor duda de que esta medida será vista con espíritu amigable por los pueblos de Chihuahua y Sonora, y probará ser igualmente efectiva para la protección de sus ciudadanos en esa lejana frontera, así como para los ciudadanos de los Estados Unidos.

En relación con la ruta de Tehuantepec, que ha quedado abierta en condiciones favorables, nuestro tratado con México, del 30 de diciembre de 1853, asegura a los ciudadanos de los Estados Unidos el derecho de tránsito, tanto para sus nacionales como para sus mercancías, y estipula que ningún gobierno deberá “interponer ningún obstáculo”. Asimismo, concede a los Estados Unidos “el derecho de transporte a lo largo del istmo”, es decir, del correo de los Estados Unidos, en bolsas cerradas, no destinado a distribución a lo largo de la línea de comunicación, así como de las pertenencias del gobierno de los Estados Unidos y de sus ciudadanos, sin pago de aduanas ni de otros cargos del gobierno de México.

16.2 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (19 de diciembre de 1859)

Lamento informarles que desde mi último informe presidencial no ha habido mejoría en los asuntos de México, y nuevamente me veo obligado a pedir la atenta consideración del Congreso respecto a la infeliz situación de esa república.

El Congreso Constituyente de México, que clausuró sus sesiones el 17 de febrero de 1857, adoptó una Constitución y se preparó para elecciones populares. Éstas tuvieron lugar en el siguiente julio (1857); el general Comonfort resultó electo presidente, casi sin oposición. En esas mismas elecciones se eligió un nuevo Congreso, cuyas primeras sesiones se iniciaron el 16 de septiembre de 1857. De acuerdo con la Constitución de 1857, el periodo presidencial se iniciaría el 1º de diciembre (1857) y duraría cuatro años. Ese día, el general Comonfort compareció ante el Congreso en la ciudad de México, juró hacer respetar la nueva Constitución y fue debidamente investido como presidente. Un mes después, había sido expulsado de la capital, y la rebelión militar otorgó el poder supremo al general Zuloaga. La Constitución prevé (que, en ausencia del presidente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe asumir el poder, y como el general Comonfort había salido del país, el general Juárez procedió en Guanajuato a formar un gobierno constitucional. No obstante, antes de que esto se supiera oficialmente, en la capital el gobierno de Zuloaga había sido aceptado por todo el cuerpo diplomático, incluido el representante de los Estados Unidos, como gobierno *de facto*. Empero, el presidente constitucional mantuvo con firmeza su posición, y pronto se estableció en Veracruz con su gabinete. Mientras tanto, había fuerte oposición al gobierno de Zuloaga en muchas regiones del país, incluso en la capital, donde una parte de la armada se había pronunciado en su contra y había dado por

terminadas sus funciones; una asamblea de ciudadanos fue invitada a elegir un nuevo presidente. Esta asamblea eligió al general Miramón, pero éste oficial repudió el plan por el que había sido nombrado, y Zuloaga fue reinstalado en su antiguo puesto. No obstante, asumió el poder sólo para retractarse, y Miramón, convertido en “presidente sustituto” debido a su nombramiento, sigue, con ese título, a la cabeza del partido insurgente.

En mi informe presidencial anterior comuniqué al Congreso las circunstancias en que el último representante de los Estados Unidos interrumpió sus relaciones oficiales con el gobierno central y se retiró del país. Era imposible mantener relaciones amistosas con un gobierno como el que se encontraba en la capital, bajo cuya autoridad usurpadora constantemente se cometían errores que nunca se enmendaban. Si se hubiera tratado de un gobierno establecido cuyo poder emanado del pueblo se extendiera a todo México, habría sido justificable, y de hecho necesario, recurrir a las hostilidades en contra de él. Pero el país era presa de la guerra civil, y se esperaba que el éxito del presidente constitucional condujera a una situación menos injuriosa para los Estados Unidos. Este resultado parecía tan probable, que en enero pasado un agente de mi confianza visitó México y me dio un informe sobre las condiciones actuales y de las expectativas de los partidos contendientes. A resultas de su comunicado y de la información que recibí de otras fuentes favorables a la causa constitucional, creí justificado nombrar un representante para México, que aprovechara la primera oportunidad que se presenta para, restablecer nuestras relaciones diplomáticas con esa república. Para ello se seleccionó un distinguido ciudadano de Maryland, que el pasado 8 de julio emprendió su misión. Él cuenta con facultades discrecionales para reconocer el gobierno del presidente Juárez si a su llegada a México se sintiera con derecho a dicho reconocimiento, de conformidad con las prácticas establecidas en los Estados Unidos.

El 7 de abril siguiente, el señor MacLane presentó sus cartas credenciales al presidente Juárez, dado que no había duda en “pronunciarse respecto a que el gobierno de Juárez era el único existente en la república”. Fue cordialmente recibido en Veracruz por las autoridades y, desde entonces, éstas han manifestado su amistad con los Estados Unidos.

Pero, desafortunadamente, el gobierno constitucional no ha logrado imponerse en toda la república. Tiene el apoyo de la mayor parte del pueblo y de los estados, aunque haya partes importantes del país en que no puede hacerse obedecer.

El general Miramón se mantiene en la capital; en algunas de las provincias más alejadas hay gobernadores militares que no respetan los decretos de ninguno de los dos gobiernos. Entre tanto, los excesos que siempre se presentan en una guerra civil, especialmente en México, se repiten constantemente. En los últimos años, es raro el daño que no hayan sufrido nuestros ciudadanos. Nominalmente ha habido paz entre nosotros y esa república, pero “en cuanto a los intereses de nuestro comercio o de nuestros ciudadanos que han visitado el país como comerciantes, capitanes de barco o en alguna otra calidad, podríamos haber estado en guerra”. No hay seguridad, las

propiedades no están protegidas y el comercio es imposible salvo que se corran riesgos de pérdida que un hombre prudente no puede correr. Los gobiernos locales han desafiado importantes obras emprendidas por el gobierno central y que implican cuantiosos gastos. En abierto desafío a los tratados y sin invocar más que el poder arbitrario, residentes estadounidenses pacíficos que ocupaban sus legítimas propiedades han sido expulsados del país repentinamente. Ni siquiera el curso de la justicia escapa al control, y un decreto reciente de Miramón permite la intervención del gobierno en los litigios en que una de las partes sea un extranjero. Navíos estadounidenses han sido confiscados ilegalmente, y un funcionario consular que protestó por esas confiscaciones fue multado y encarcelado por desacato a la autoridad. Violando todo derecho, se han cobrado contribuciones a los militares; un estadounidense que se resistió a la ilegal demanda fue despojado de sus bienes y expulsado.

Debido a los conflictos de autoridad en diferentes partes del país, los impuestos que se pagan en un lugar deben pagarse nuevamente en otro. Muchos de nuestros ciudadanos han sido arrestados y encarcelados sin ninguna investigación ni oportunidad de juicio, y aun habiendo sido liberados recuperaron su libertad merced a grandes sufrimientos y daños, y sin esperanza de reparación. En su última sesión se informó al Congreso de la masacre, sin juicio, de Crabbe y sus asociados en Sonora; aquél se hallaba refugiado en la casa de otro estadounidense en suelo de los Estados Unidos bajo la autoridad de Miramón. Este año se han cometido crímenes aún más atroces en el centro mismo de México. Algunos fueron dignos de bárbaros, y de no haber sido debidamente comprobados, habrían parecido imposibles en un país que se dice civilizado. De este tipo fue la brutal masacre ocurrida en abril pasado, cuando por órdenes del general Márquez tres médicos estadounidenses que atendían a enfermos y moribundos de ambas partes fueron ejecutados apresuradamente, sin juicio y sin delito.

Poco menos impactante fue la muerte de Ormond Chase, asesinado en Tepic el 7 de agosto por órdenes del mismo general mexicano, no sólo sin juicio, sino sin que ninguno de sus amigos conociera la causa de su arresto. Chase ha sido descrito como un joven de buen carácter, inteligente, que había hecho muchos amigos en Tepic por el valor y humanidad que había demostrado en varias circunstancias peligrosas. Su muerte fue tan inesperada como impactante en la comunidad. Podríamos nombrar otras atrocidades, pero con éstas basta para ilustrar el lastimoso estado del país y las condiciones de indefensión en que se encuentran nuestros ciudadanos.

En todos estos casos, nuestros representantes han demostrado constancia y fidelidad en sus demandas de desagravio, pero ni ellos ni este gobierno, al cual representaron sucesivamente, han podido hacerlas valer. Su testimonio a este respecto y en relación con el único remedio que a su juicio estaría a la altura, ha sido enfáticamente el mismo. “Solo valdrá una manifestación de la potencia de los Estados Unidos”, escribió en 1856 nuestro último representante, “y de su intención de castigar esas injusticias”. Le aseguro que en este caso la creencia generalizada es, que no hay nada que temer del gobierno de los Estados Unidos, y que los funcionarios mexicanos locales pue-

den cometer estos agravios contra ciudadanos estadounidenses con absoluta impunidad. “Espero que el presidente”, escribió nuestro actual representante en agosto pasado,

se sienta con autoridad para pedir al Congreso autorización a fin de que envíe fuerzas militares de los Estados Unidos a México, si lo solicitan las autoridades constitucionales, para proteger a los ciudadanos y los derechos de los Estados Unidos derivados del tratado. A menos que se le confiera dicho poder, ni unos ni otros serán respetados en el estado actual de anarquía y desorden, y los agravios ya cometidos nunca serán castigados; como lo aseguré en mi núm. 23, todos estos males se incrementarán hasta que no desaparezca del país todo vestigio de orden y gobierno.

Con renuencia llegué a la misma conclusión, y para hacer justicia a mis conciudadanos ultrajados en México y que podrían estar sufriendo todavía, me siento obligado a anunciar estas conclusiones al Congreso.

No obstante, el caso presentado no contiene sólo reclamaciones individuales, aunque nuestras justas reclamaciones contra México ya son muchas; tampoco se trata únicamente de la protección de las vidas y propiedades de unos cuantos estadounidenses que todavía están en México, aunque la vida y las propiedades de cualquier ciudadano estadounidense son sagradas y deben ser protegidas en cualquier rincón del mundo. Se trata de una cuestión que tiene que ver con el futuro, tanto como con el presente y el pasado, y que implica, cuando menos indirectamente, todos los deberes relacionados con nuestra vecindad con México.

El ejercicio del poder de los Estados Unidos en ese país para reparar los agravios y proteger los derechos de nuestros ciudadanos es deseable también para restablecer la paz y el orden en México. Para lograr esto, el pueblo de los Estados Unidos debe sentir necesariamente un profundo interés por México. México debe ser un país rico, próspero y poderoso. Cuenta con un extenso territorio, tierras fértiles y una incalculable riqueza mineral. Ocupa una posición importante entre el golfo y el océano para establecer rutas de tránsito y comerciales. ¿Es posible que un país así caiga en manos de la anarquía y se arruine sin que nadie se esfuere por rescatarlo y salvarlo? ¿Los países comercializadores, que tantos intereses tienen en relación con él, permanecerán indiferentes ante dicho resultado? ¿Pueden especialmente los Estados Unidos, que comparten sus intereses comerciales, permitir que su vecino más cercano se destruya a sí mismo y los dañe a ellos? No obstante, sin ningún apoyo es imposible que México recupere su posición entre los países e inicie una carrera prometedora. La ayuda que necesita, y que los intereses de todos los países comerciales requieren que reciba, debe darla este gobierno, no sólo por su cercanía con México, nación con la cual tenemos una frontera continua de casi 1 600 kilómetros, sino en virtud de nuestra política establecida, que no concuerda con las políticas de intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de esa república.

México nos ha agraviado a los ojos del mundo y ha impresionado profundamente a todos los ciudadanos estadounidenses. Un gobierno que no puede o no quiere rectificar no cumple con sus deberes más sagrados. El problema estriba en determinar la

solución y llevarla a cabo. En vano recurriríamos al gobierno constitucional con sede en Veracruz, aunque esté bien dispuesto a hacernos justicia, a desagraviarnos. Si bien su autoridad es acatada en todos los puertos importantes y a lo largo de las costas del país, su poder no se extiende a la ciudad de México ni a los estados circunvecinos, donde recientemente fueron agraviados casi todos los ciudadanos estadounidenses. Debemos penetrar en el interior del país para llegar a los ofensores, y esto sólo es posible atravesando el territorio ocupado por el gobierno constitucional. La manera más aceptable y menos difícil de lograrlo es poniéndose de acuerdo con dicho gobierno. Creo que podríamos lograr su convencimiento y ayuda; pero de no ser así, nuestra obligación de proteger los derechos justos de nuestros ciudadanos, garantizados por un tratado, sería imperiosa. Por ello, recomiendo al Congreso que apruebe una ley que autorice al presidente a que, en las condiciones en que él lo considere conveniente, se sirva de una fuerza militar a México y logre un resarcimiento por el pasado y seguridad para el futuro. Me abstengo deliberadamente de cualquier sugerencia, sobre la forma de constituir dicha fuerza, si con tropas regulares o con voluntarios, o con ambos. Este asunto debe ser decisión del Congreso. Simplemente comentaré que si se eligen voluntarios, sería muy fácil constituir esa fuerza en este país, entre aquellos que simpatizan con el sufrimiento de nuestros desafortunados conciudadanos y con el infeliz estado en que se encuentra México. La unión de estas fuerzas al gobierno constitucional permitiría llegar en breve tiempo a la ciudad de México y extender el poder de éste a todo el país, en cuyo caso, no hay duda de que las justas demandas de nuestros ciudadanos serían satisfechas y se resarcirían los daños que les fueron infligidos. El gobierno constitucional siempre ha demostrado su deseo de hacer justicia, y esto debe garantizarse de antemano mediante un tratado preliminar.

16.3 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1860*)

Nuestras relaciones con México siguen siendo insatisfactorias. En mis dos informes anuales anteriores describí extensamente el estado de dichas relaciones, y no pretendo repetir ahora los hechos y argumentos presentados entonces. Éstos probaban concluyentemente que nuestros ciudadanos residentes en México y nuestros comerciantes que venden allá han sufrido una serie de daños y perjuicios que no han sido pacientemente tolerados en otras naciones. Invocando su confianza en los tratados, nuestros sucesivos representantes han persistido en exigir la reparación de los daños y una indemnización por los mismos, pero no han conseguido nada. De hecho, tan confiadas están las autoridades mexicanas en nuestra paciente resistencia, que están totalmente seguras de que pueden cometer esas injusticias con ciudadanos estadounidenses con absoluta impunidad. Por eso, en 1856 nuestro representante expresó por escrito su opinión de que “sólo servirá una manifestación del poderío del gobierno y su decisión de castigar esas injurias”.

Posteriormente, en 1857, en México se adoptó una nueva Constitución; de acuerdo con ésta se eligió un presidente y se estableció un Congreso que se encargó

de investir al presidente. No obstante, apenas un mes después, este presidente fue expulsado de la capital por una rebelión en el ejército, y el poder supremo de la república fue asignado al general Zuloaga. Muy pronto, el usurpador fue a su vez obligado a retirarse y dejar el puesto al general Miramón.

De conformidad con dicha Constitución, el señor Juárez, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, se convirtió en presidente legal de la república. El objeto de la guerra civil que entonces se inició, y aún continúa, fue conservar la Constitución y su autoridad, emanada de ésta.

Durante el año de 1857, el partido constitucional adquirió cada vez más fuerza. En ocasiones anteriores, una revolución militar que tuviera éxito en la capital era signo casi inconfundible de sumisión en toda la república, pero no en esta ocasión. La mayor parte de los ciudadanos apoyaba al gobierno constitucional. Cuando éste fue reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, en abril de 1859, su autoridad se extendía a una gran mayoría de estados y del pueblo, incluido Veracruz y los demás puertos de mar importantes del país. A partir de ese momento revivió nuestro comercio con México y el gobierno constitucional le ha concedido toda la protección que está a su alcance.

Mientras tanto, el gobierno de Miramón seguía rigiendo en la capital y sus alrededores; también seguían los ultrajes a los pocos ciudadanos estadounidenses que aún tenían el valor de permanecer bajo su poder. Y el colmo, después de la batalla de Tacubaya, en abril de 1859, el general Márquez ordenó que tres ciudadanos de los Estados Unidos, dos de ellos médicos, fueran capturados en el hospital de ese lugar, apartados de ahí y asesinados, sin delito ni juicio. Así se hizo, a pesar de que nuestros desafortunados conciudadanos se ocupaban en ese momento de la sagrada tarea de proporcionar alivio a los soldados de ambas partes heridos en las batallas, sin hacer distinciones entre ellos.

Desde mi punto de vista, había llegado el momento de que este gobierno ejerciera su poder para vengar y corregir los atropellos cometidos contra nuestros ciudadanos y proporcionarles protección en México. El problema era que para llegar a la parte del país regida por Miramón era necesario pasar por el territorio que estaba bajo la jurisdicción del gobierno constitucional. Dadas las circunstancias, en mi último informe presidencial consideré mi deber recomendar al Congreso la utilización de fuerzas militares suficientes para penetrar hacia el interior, donde se encontraba el gobierno de Miramón, con el consentimiento del gobierno de Juárez, o sin él si era necesario, aunque no me cabía duda de que lo obtendríamos. Nunca estuve más convencido de algo, como de la justicia y sabiduría de dicha política. No quedaba alternativa, salvo abandonar totalmente a nuestros ciudadanos, que estaban en México por su confianza en los tratados, a la injusticia sistemática, la crueldad y la opresión del gobierno de Miramón. Por otra parte, es casi seguro que la simple autorización para utilizar esa fuerza habría bastado para lograr nuestro objetivo sin dar un solo golpe. Para entonces, quizá

el gobierno constitucional se encontrara ya en la ciudad de México y, en la medida de sus posibilidades, habría estado dispuesto a hacernos justicia.

Por otra parte —y considero esto de la mayor importancia— los gobiernos europeos ya no habrían tenido pretexto para intervenir en el territorio ni en los asuntos internos de México. Así, nos habríamos visto relevados de la obligación de enfrentar, de ser necesario incluso con la fuerza, cualquier intento de dichos gobiernos de privar a nuestro vecino de partes de su territorio, deber que no podíamos evadir sin faltar a la política tradicional y establecida por el pueblo estadounidense. Me complace observar que, sobre la base de la justicia y la buena fe de dichos gobiernos, no hay peligro de que se presente tal contingencia.

Dándome cuenta de que mi recomendación no hubiera sido apoyada por el Congreso, la siguiente alternativa era, en la medida de lo posible, alcanzar los mismos objetivos mediante un tratado con el gobierno constitucional. Dichos tratados fueron llevados a buen fin por nuestro anterior representante en México, de excelente desempeño, y presentados al Senado el 4 de enero para su ratificación.

Dado que dicho organismo aún no se ha pronunciado al respecto, no me es posible presentar en detalle las medidas que incluye. No obstante, me permito adelantar mi opinión de que su fin es promover los intereses agrícolas, manufactureros y comerciales del país y garantizar nuestra justa influencia con un vecino cuya suerte y destino nunca podrá sernos indiferente, en tanto que se toman las medidas pertinentes para el pago de una suma considerable para satisfacer las demandas de nuestros conciudadanos ofendidos.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 150-151.

17. DISCURSO ABRAHAM LINCOLN 1861-1865

17.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*1° de diciembre de 1862*)

Durante el último año no ha existido cambio alguno en nuestras relaciones con los estados independientes de nuestro continente; sin embargo, sentimientos más amistosos abrigan a nuestros vecinos, cuya seguridad y progreso están íntimamente ligados al nuestro. Este argumento se aplica especialmente á México, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Perú y Chile.

Recomiendo su favorable consideración a efecto de establecer una red telegráfica internacional que cruce el Océano Atlántico, y también un telégrafo entre esta capital y los fuertes nacionales a lo largo de la costa del Atlántico y del Golfo de México. Estas comunicaciones, establecidas de manera razonable, resultarían económicas, al mismo tiempo que suministrarían apoyos efectivos a los servicios diplomáticos, militares y navales de los Estados Unidos.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 152-163.

18. DISCURSO ANDREW JOHNSON 1865-1869

18.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(3 de diciembre de 1866)*

El pasado mes de abril, tal como lo conoce el Congreso, fue establecido un acuerdo amistoso entre el emperador de Francia y el presidente de los Estados Unidos, relativo al retiro de fuerzas militares francesas de México. El retiro debió de haberse llevado a cabo en tres fases, siendo la primera la que desocuparía México en noviembre pasado, la segunda en marzo, y la tercera, y última, en noviembre de 1867. Inmediatamente después de la completa evacuación, el gobierno de Francia debería asumir la misma actitud de no intervención hacia México, tal como la que tiene hacia el gobierno de los Estados Unidos. En repetidas ocasiones, el emperador francés reiteró que el acuerdo sería respetado y que se completaría la evacuación en el periodo mencionado, posiblemente antes.

Se espera que dichos procedimientos contemplados provocarán una crisis de gran interés político en la República mexicana. El nuevo ministro de los Estados Unidos, señor Campbell, fue expresamente enviado a asumir las funciones propias de ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante esa república. Asimismo, se pensó pertinente que debido a la vecindad con México el general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos asista al señor Campbell en su misión, ya que es importante determinar el curso que deberán seguir los Estados Unidos en el restablecimiento y mantenimiento propio del poder en la República mexicana. Profundamente interesados en las causas de libertad y humanidad, nos parece un deber obvio de nuestra parte ejercer cualquier influencia que tengamos para el restablecimiento de una forma permanente republicana de gobierno en ese país.

En ese sentido, en relación con nuestros asuntos en México, el 22 de noviembre pasado recibimos información oficial desde París, la cual decía que el emperador de Francia había decidido no retirar sus fuerzas en el mes de noviembre, de acuerdo con lo estipulado en el convenio, y que esta decisión había sido tomada con el propósito

de no retirar las fuerzas restantes hasta la primavera. Los Estados Unidos no han recibido noticia oficial alguna sobre la determinación anterior, y tan pronto como nuestro gobierno recibió la noticia puso en conocimiento del emperador de Francia nuestra disensión.

No puedo sino esperar que Francia reconsidere este asunto y adopte una resolución relativa a la evacuación de México, que esté en conformidad con el arreglo existente y vaya de acuerdo con las expectativas de los Estados Unidos. Se cree que con la evacuación de las fuerzas expedicionarias francesas de México no habrá diferencias serias entre Francia y los Estados Unidos.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 164.

19. DISCURSO ULYSSES S. GRANT 1869-1877

19.1 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(5 de diciembre de 1870)*

Los aliados y otras repúblicas de origen español en el continente pueden observar, como muestra de nuestro sincero interés en su bienestar, el deseo que tenemos de verlos bendecidos con buenos gobiernos, capaces de mantener el orden y de preservar su respectiva integridad territorial, así como el sincero anhelo de estrechar las relaciones comerciales y sociales con ellos. El tiempo en que el curso natural de los sucesos, quizá no tan distante, en que los vínculos políticos con Europa en este continente cesarán. Teniendo en cuenta esta probabilidad, nuestra política deberá estar fundada en el establecimiento de aliados comerciales en los estados de origen hispanoamericano más cercanos al nuestro, dando a los Estados Unidos toda la preeminencia y toda la ventaja que los señores Monroe, Adams y Clay contemplaron cuando, conjuntamente, plantearon al Congreso la situación de Panamá.

19.2 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(4 de diciembre de 1871)*

La República mexicana todavía no ha resuelto problema alguno respecto a las ilegalidades ocurridas en lo que se conoce como la “zona libre” de la frontera con los Estados Unidos. Se espera que pronto sean resueltas dichas situaciones y que sean tornadas medidas más drásticas para evitar el paso a personas ilegales por sus fronteras. Espero que pronto México por su propia acción libere a este gobierno de las dificultades ocasionadas por esta situación.

19.3 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(2 de diciembre de 1872)*

Desde nuestra última sesión, el presidente de la República mexicana, quien siempre se distinguió por su amplia trayectoria y por sus servicios hacia su país, ha muerto. El sucesor temporal ha sido electo por unanimidad por el pueblo de México, lo que constituye una prueba de confianza en su patriotismo y sabiduría, cualidades que han sido

confirmadas por los resultados satisfactorios de su administración. Es particularmente deseable que nada se deje de hacer por este gobierno a fin de estrechar las relaciones como vecinos y amigos.

Sin embargo, se deben rechazar los muchos actos ilegales que continúan favoreciendo el disturbio de los tranquilos asentamientos en la frontera de nuestro territorio con el de México. Las quejas de ciudadanos estadounidenses no dejan de hacerse en varias partes del país. La situación revolucionaria en que nuestra vecina república se ha visto envuelta ha contribuido en cierto grado a ese estado de disturbio. Se espera que, en el presente gobierno, en la medida que se establezca un orden en esa república, concluirán los actos que originan esas quejas.

Los procedimientos de la Comisión, bajo la convención firmada con México el 4 de julio de 1872, en relación con las quejas de ciudadanos estadounidenses, han sido desafortunadamente obstaculizados, debido a la eliminación de las medidas tomadas por los dos gobiernos, las que se esperaba fueran exitosas.

Los comisionados designados, de acuerdo con la resolución conjunta del Congreso del 7 de mayo pasado, que preguntaban sobre depredaciones en la frontera con Texas, han realizado diligentemente las investigaciones correspondientes. El reporte relativo a ese asunto pronto será comunicado a ustedes. El gobierno de México ha designado comisionados similares para investigar esos ultrajes. No se ha anunciado oficialmente, pero la prensa de ese país señala que se requiere una amplia investigación y que con vistas a lograr ese fin se invita a las partes involucradas a cooperar. En este sentido, recomiendo que los comisionados por parte de los Estados Unidos regresen a sus labores de investigación sin demora.

19.4 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (*1º de diciembre de 1873*)

Desde la última sesión del Congreso se han concertado los siguientes tratados con potencias extranjeras: una convención sobre naturalización con Dinamarca; una convención con México para reabrir la Comisión de Quejas; una convención sobre amistad, comercio y extradición con el Estado Libre de Orange, y una convención sobre naturalización con Ecuador.

19.5 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (*7 de diciembre de 1874*)

Materialmente no ha habido ningún cambio en nuestras relaciones con los estados independientes del hemisferio que antes estaban bajo el dominio de España.

Continúan los despojos en la frontera de México y Texas de manera frecuente, a pesar de la estrecha vigilancia de autoridades militares y civiles. Existe gran dificultad para controlar los cruces a lo largo del Río Grande. Se espera que los esfuerzos de este gobierno sean secundados por México para evitar, de una vez por todas, este tipo de atropellos.

De un reporte sobre el estado que guarda la Comisión Conjunta de Quejas entre los Estados Unidos y México, de fecha 28 de octubre de 1874, aparece que de 1 017

quejas sometidas por ciudadanos de los Estados Unidos, 483 se han resuelto y 75 están en manos del árbitro, dejando 462 a disposición; y de las 998 quejas sometidas contra los Estados Unidos, 726 se han resuelto, una está con el árbitro y 271 permanecen a disposición. Desde la fecha de ese reporte, otras quejas han sido solventadas, y otras jamás han sido sometidas a arbitraje, lo que ha reducido de manera considerable el número de quejas pendientes. Se ha hecho evidente, en virtud de estas figuras y de lo laborioso del trabajo del árbitro, que la Comisión no podrá resolver el total de las quejas pendientes antes del 1º de febrero de 1875, fecha en que se acordó su vencimiento.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 165-166.

20 DISCURSO RUTHERFORD B. HAYES 1877-1881

20.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1878*)

Deploro tener que decir que en nuestro tiempo las incursiones ilegales de bandas armadas provenientes del lado mexicano con el propósito de saquear han sido con frecuencia exitosas, a pesar de los esfuerzos de vigilancia por parte de nuestro comando, y que no se ha podido castigar a los bandoleros porque se han escapado hacia México con su botín. El pasado mayo di órdenes expresas para el ejercicio de la más estricta vigilancia por parte de nuestras tropas con el fin de evitar este tipo de acciones y castigar a las partes culpables, así como recapturar los bienes robados. El general Ord, comandante en Texas, fue enviado para solicitar la cooperación de nuestro vecino en estos esfuerzos y llevarlos a buen fin. Les aseguro que evitaré la más mínima ofensa hacia México. Al mismo tiempo, se le dieron instrucciones de que notificara mi determinación, de poner fin a la invasión en nuestro territorio de bandas ilegales, cuyo objetivo es saquear a nuestros pacíficos ciudadanos. Se ha pensado en férreos castigos para los bandidos por parte de nuestras tropas en caso de que fuera necesario, con el objeto de hacerles más difícil el cruce por las fronteras. Se cree que esta política ha tenido el efecto de detener, de alguna manera, estas depredaciones, y que un aumento considerable de nuestra fuerza y control hacia esa frontera, por medio del establecimiento de puestos militares adicionales a lo largo del Río Grande, hará más efectivo el cuidado de esa extensa zona donde, ante todo, la paz deberá ser preservada y las vidas y propiedades de nuestros ciudadanos de Texas deberán ser ampliamente protegidas.

Antes del pasado 1º de julio y de acuerdo con la ley, nuestro ejército fue reducido a un máximo de 25 mil hombres enlistados, lo que resultó en una reducción de 2 500 por debajo de la fuerza anteriormente autorizada. Esta reducción fue hecha con base en la ley de las ramas de infantería y artillería, sin haberse efectuado ninguna reducción de la caballería. Con base en esta ley, es necesario que en los regimientos de caballería

sean reclutados 100 hombres para uso exclusivo del servicio, a fin de proteger el lado de las fronteras mexicana e india.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 167-169.

21. DISCURSO JAMES GARFIELD 1881

(Asesinado antes de pronunciar su informe presidencial.)¹

¹ Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 170-171.

22. DISCURSO ARTHUR A. CHESTER 1881-1885

22.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1881*)

Como es natural entre estados contiguos que tienen instituciones semejantes y los mismos propósitos de progreso y desarrollo, la amistad entre los Estados Unidos y México se ha mantenido constantemente. Este gobierno no ha perdido ninguna ocasión para fomentar en el gobierno mexicano la provechosa comprensión de las ventajas mutuas que resultarían de un intercambio comercial más estrecho y de la apertura del rico interior de México a las empresas ferrocarrileras. Considero importante que se proporcionen medios para reprimir la ilegalidad que, por desgracia, es tan común en la frontera y para suprimir los pillajes de los indios de las reservas en ambos lados del Río Grande. Los países vecinos de América Central han conservado la paz interna y sus relaciones exteriores con nosotros han sido de estrecha amistad. Hay signos alentadores de que tienen una disposición cada vez mayor de subordinar sus intereses locales a aquellos que les son comunes por sus relaciones geográficas. La disputa por los límites entre Guatemala y México ha dado a este gobierno una oportunidad de ejercer sus buenos oficios para evitar una ruptura entre esos dos países y conseguir una solución pacífica de esa cuestión. Albergo grandes esperanzas de que, dadas nuestras relaciones de amistad con ambos países, nuestros consejos amistosos puedan prevalecer.

22.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*4 de diciembre de 1882*)

Un acuerdo celebrado recientemente con México estipula que las fuerzas armadas de cualquiera de los dos países pueden cruzar la frontera en persecución de indios hostiles. En mi mensaje del año pasado señalé la ilegalidad que prevalece en las fronteras y la necesidad de legislar para que desaparezca. Nuevamente llamo la atención del Congreso sobre este particular. Un alivio parcial de estos males se ha buscado en un convenio que ahora espera la aprobación del Senado, al igual que en otro relativo al establecimiento de la frontera internacional entre los Estados Unidos y México. Si este último se ratificara, se requerirá que el Congreso tomara medidas para establecer

comisiones de deslinde adecuadas. La disputa de límites entre México y Guatemala, que indujo a este gobierno a dar consejos amistosos a ambas partes, ha sido zanjada amigablemente.

22.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*4 de diciembre de 1883*)

En ningún momento de nuestra historia hubo una necesidad más manifiesta de relaciones estrechas y duraderas con un país vecino que la que hay ahora respecto a México. La rápida entrada de capitales y empresas nuestras en ese país muestra, por lo que ya se ha realizado, las vastas ventajas recíprocas que resultarán del progreso de su desarrollo interno. El Tratado de Comercio y de Navegación de 1848 ha sido terminado por el gobierno mexicano y, a falta de compromisos institucionales, los derechos de nuestros ciudadanos en México dependen ahora de las leyes nacionales de esa república. Ha habido casos de fíguoso cumplimiento de las leyes contra nuestros barcos y ciudadanos en México y de rechazo del recurso diplomático para su protección. El primer paso hacia un mejor entendimiento ha sido dado en la negociación, efectuada por la comisión autorizada por el Congreso, de un tratado que todavía se encuentra ante el Senado en espera de su aprobación. Las disposiciones para el cruce recíproco de la frontera por soldados en persecución de indios hostiles se prolongaron por un año más. Las operaciones de las fuerzas de ambos gobiernos contra estos salvajes han tenido éxito, y algunas de sus bandas más peligrosas fueron capturadas o dispersadas gracias a la pericia y el valor de los soldados de los Estados Unidos y de México que han luchado por una causa común. Después de que el convenio para el nuevo deslinde de límites desde el Río Grande hasta el Pacífico fue ratificado e intercambiado, se efectuó el reconocimiento preliminar que en él se estipula. Ahora toca al Congreso disponer lo necesario para completar el deslinde y reubicar los mojones. El 13 de julio de 1882 se firmó un convenio con México que dispone la revisión de los casos de Benjamin Weil y de la Abra Silver Mining Company a cuyo favor falló la última Comisión de Reclamaciones Estadunidense y Mexicana. Dicho convenio aún espera el consentimiento del Senado. Mientras tanto, debido a esas acusaciones de indemnizaciones fraudulentas que han hecho necesaria una nueva comisión, el Ejecutivo ha ordenado la suspensión de pagos de la cuota distributiva procedente de México.

22.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (*1 de diciembre de 1884*)

Durante el año anterior, la creciente buena voluntad entre nuestro propio gobierno y el de México se manifestó de varias maneras. El tratado de reciprocidad comercial, que se celebró el 20 de enero de 1883, fue ratificado y espera la necesaria legislación arancelaria del Congreso para entrar en vigor. No hay duda de que esta legislación figurará entre las primeras medidas que reclamarán su atención. La celebración de un tratado cabal de comercio, navegación y derechos consulares es muy deseable, y tengo razones para creer que el gobierno mexicano está dispuesto a celebrarlo. Ha causado algún desconcierto el hecho de que el Congreso, en su último periodo de sesiones, no

haya podido proporcionar los medios para el debido cumplimiento del tratado del 29 de julio de 1882, para el nuevo deslinde de la frontera con México y la reubicación de los mojones.

La Comisión Centro y Sudamericana nombrada por mandato de la Ley del 7 de julio de 1884 no tardará en ir a México. Se le han dado instrucciones que serán expuestas a ustedes y que incluyen una declaración de la política general del gobierno para ampliar su intercambio comercial con los Estados americanos.

En 1882, el Congreso aprobó la Ley de Exclusión China, que prohibió unos años la admisión de inmigrantes de esa nacionalidad. Esa disposición se refrendó varias veces hasta volverse permanente, y se derogó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y China fueron aliados en la lucha contra Japón. Entre 1882 y 1917 se fijaron impuestos a los inmigrantes, que se aplicaban en el momento de arribar, y se amplió la lista de categorías de extranjeros no deseables: “convictos”, “lunáticos”, “débiles mentales”, “epilépticos”, “limosneros”, “anarquistas”, “prostitutas”, “alcahuetes”, “analfabetas”, personas “susceptibles de convertirse en carga pública”, y enfermos de varias clases. Buena parte de estas categorías todavía existen y se aplican por las autoridades migratorias.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 172.

23. DISCURSO GROVER CLEVELAND

1885-1889

23.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1885)*

Las leyes del progreso son vitales y orgánicas y debemos estar conscientes de esa corriente irresistible de expansión comercial que, como circunstancia concomitante de nuestra civilización activa, impone e impulsa día tras día esos medios cada vez mayores de producción, transportación y comunicación nacidos del vapor y la electricidad. Nuestro deber ahora nos dicta que atendamos principalmente al desarrollo de los vastos recursos de la gran área encomendada a nuestro cuidado y al cultivo de las artes de la paz dentro de nuestras propias fronteras, aunque estemos celosamente alertas para impedir que el hemisferio americano se vea envuelto en los problemas políticos y las complicaciones de gobiernos lejanos. Por consiguiente, no puedo recomendar propuestas que entrañen privilegios supremos de propiedad o de derecho fuera de nuestro propio territorio, cuando van aunados a compromisos absolutos e ilimitados de defender la integridad territorial del estado en donde tales intereses radican. Si bien el proyecto general de comunicar los dos océanos mediante un canal debe ser considerado favorablemente, deberá estar libre de los factores mencionados.

Tanto ingenieros de la más alta reputación como científicos competentes han declarado que la ruta de Tehuantepec ofrece un tránsito totalmente practicable a los navíos y barcos de carga por medio de un canal desde el Atlántico hasta el Pacífico. Las ventajas manifiestas que, de ser factible, tendría esta ruta sobre otras más alejadas de las líneas axiales del tráfico entre Europa y el Pacífico, y particularmente entre el Valle del Mississippi y la costa occidental de Norteamérica y Sudamérica, merecen ser consideradas.

Cualquier vía que se construya sobre la barrera que divide las dos áreas marítimas más grandes del planeta deberá ser para el beneficio del mundo: un fideicomiso para la humanidad que habrá de estar al margen de la posibilidad de ser presa de ambiciones bélicas. Un compromiso que combine la construcción, la propiedad y la operación por este gobierno de una obra así, con una alianza ofensiva y defensiva para su protección

con el Estado extranjero cuyas responsabilidades y derechos compartamos no se corresponde, a mi juicio, con tal dedicación a lo universal y neutral y, además, conllevaría medirlas para realizarlo que irían más allá de nuestra organización política nacional o de nuestros medios actuales.

El paso de los años ha confirmado, con creces, el buen juicio y la clarividencia de esos gobiernos anteriores que, mucho antes de que las condiciones de la comunicación marítima fueran cambiadas y ampliadas por el progreso de la época, proclamaron la necesidad vital del tránsito interoceánico a través del istmo americano y lo consagraron por anticipado al uso común de la humanidad mediante sus declaraciones positivas y la obligación formal de los tratados. Los esfuerzos de mi gobierno se aplicarán a ese logro teniendo siempre presentes los principios en los que descansa y que fueron declarados inequívocamente por el señor Cass quien, cuando era secretario de Estado, en 1858, dijo que “lo que los Estados Unidos desean en América Central, junto con la felicidad de sus pueblos, es la seguridad y neutralidad de las rutas interoceánicas que pasan por ella”.

Nuestras relaciones con México siguen siendo muy cordiales, como es propio de vecinos entre los cuales hay los más estrechos lazos de amistad y de relaciones comerciales, como consecuencia natural y cada vez más fuerte de la semejanza de nuestras instituciones y de nuestra proximidad geográfica. La reubicación de la línea fronteriza entre los Estados Unidos y México al oeste del Río Grande, de conformidad con el Convenio celebrado el 29 de julio de 1882, ha sido demorada inevitablemente, sin embargo no creo que haya ninguna dificultad en obtener una prolongación del periodo establecido para realizarla.

El tratado comercial recientemente celebrado con México todavía espera la legislación estipulada para poner en vigor sus disposiciones, para lo cual un periodo adicional de un año ha sido constitucionalmente confirmado por el tratado que proporcionará un bienestar material a la hermana república Líneas férreas que llegarán hasta el centro y la capital del país comunicarán a los dos pueblos para su mutuo beneficio, crearán nuevos mercados y proporcionarán recursos a otras poblaciones.

Ya me he referido a la propuesta de construir un canal a través de la estrecha área de territorio de México en Tehuantepec.

23.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (6 de diciembre de 1886)

El alentador desarrollo de relaciones beneficiosas y estrechas entre los Estados Unidos y México, que han sido tan marcadas en los últimos años, es a la vez una ocasión de congratulación y de amistosa solicitud. Reitero con apremio mi anterior exposición de la necesidad de que el Congreso elabore una legislación apropiada para poner en vigor el convenio de reciprocidad comercial del 20 de enero de 1883.

Nuestro tratado comercial de 1831 con México terminó en 1881, de acuerdo con sus disposiciones, previa notificación dada por México y de conformidad con su anunciada política de reformar todos sus tratados comerciales. Desde entonces, Mé-

xico ha celebrado con algunos gobiernos extranjeros nuevos tratados de comercio y de navegación en los que se definen los derechos extranjeros de comercio, propiedad y residencia, el tratamiento de los embarques, los privilegios consulares y cosas por el estilo. Nuestro convenio —no ejecutado— de reciprocidad de 1883, que aún no ha sido firmado, no abarca ninguno de estos puntos cuya determinación es tan necesaria para una buena relación. Yo propongo entablar negociaciones con México para un nuevo y más amplio tratado de comercio y de navegación. De conformidad con una resolución del Senado, el 2 de agosto pasado comuniqué a esa entidad, así como a la Cámara de Representantes, la correspondencia en el caso de A. K. Cutting, ciudadano estadounidense que entonces estaba preso en México, acusado de haber cometido un delito penal en Texas contra un ciudadano mexicano. Después de haber solicitado su liberación, la acusación que pesaba contra él fue modificada para incluir una violación de la ley de México dentro del territorio mexicano.

Esta unión de supuestos delitos, uno de ellos cometido dentro y el otro fuera de México, me indujo a ordenar una investigación especial del caso durante la cual el señor Cutting fue puesto en libertad.

No obstante, este incidente dio lugar a un reclamo de jurisdicción, nuevo en nuestra historia por parte de México, consistente en que, en cualquier delito penal cometido por un extranjero, y por el cual un mexicano sea encontrado culpable, éste se sujetará a las leyes mexicanas. Esta jurisdicción fue mantenida por las cortes de México en el caso Cutting, y aprobada por el Poder Ejecutivo de ese gobierno, basándose en la autoridad de una ley mexicana. El tribunal de apelación que vio el caso Cutting falló en el sentido de que el abandono de la queja por el ciudadano mexicano perjudicado por el supuesto delito (una publicación difamatoria) eliminó la base para una acción judicial adicional y declaró que la justicia había sido satisfecha con el cumplimiento de una pequeña parte de la sentencia original. La admisión de tal pretensión habría acarreado graves resultados, invasores de la jurisdicción de este gobierno y muy peligrosos para nuestros ciudadanos en el extranjero. Por consiguiente, la he rechazado y he protestado contra su pretendido ejercicio considerándolo injustificado conforme a los principios de derecho y los usos internacionales. Un país soberano tiene jurisdicción sobre los delitos que se cometen dentro de su territorio, aunque hayan sido planeados o iniciados fuera del mismo; pero se niega el derecho de cualquier Estado soberano a castigar a un ciudadano de los Estados Unidos por un delito consumado en nuestro suelo en violación de nuestras leyes, aunque el delito haya sido contra un súbdito o ciudadano de tal Estado soberano. La ley mexicana en cuestión reclama ese derecho en general, y el principio, si se concediese, crearía una doble responsabilidad en el ciudadano y llevaría a una confusión inextricable que destruiría esa certidumbre en la ley que es un elemento esencial de la libertad. Cuando los ciudadanos de los Estados Unidos van voluntariamente a un país extranjero, deben respetar las leyes vigentes en él y no son protegidos por su propio gobierno de las consecuencias de un delito cometido contra esas leyes en ese país extranjero; pero este gobierno no renuncia al

cuidado y el interés atento sobre sus ciudadanos porque hayan ido al extranjero, y si son acusados de un crimen cometido en un país extranjero exigirá para ellos un juicio justo y público, realizado con la debida consideración de la justicia y la humanidad. Este gobierno no se contentará con menos que eso cuando la vida o la libertad de sus ciudadanos esté en juego.

Sea cual fuere el grado de jurisdicción penal extraterritorial que pudiera haber sido permitido anteriormente por consentimiento y acuerdo recíprocos entre algunos estados europeos, ninguna doctrina o práctica de este tipo ha sido reconocida por las leyes de este país o del país del que nuestras instituciones se han derivado principalmente.

En el caso de México hay razones especialmente poderosas para que haya una armonía perfecta en el mutuo ejercicio de la jurisdicción. La Naturaleza nos hizo vecinos irrevocablemente, y el buen juicio así como los buenos sentimientos deben hacernos amigos. El derrame de capital y de empresas de los Estados Unidos es un factor poderoso para contribuir a desarrollar los recursos de México y acrecentar la prosperidad de ambos países. Para ayudar a esta buena obra, todos los motivos de aprensión sobre la seguridad de las personas y de sus propiedades deberán ser eliminados; y yo confío en que, en pro de nuestra relación de buenos vecinos, la ley a la cual hicimos referencia sea modificada de tal suerte que se eliminen las actuales posibilidades de peligro para la paz de ambos países.

23.3 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1888*)

La sabiduría al concluir un tratado de reciprocidad comercial con México ha sido señalada con anterioridad en mis mensajes al Congreso, y el tiempo transcurrido así como el crecimiento del comercio con esa república hermana y vecina inmediata confirman el juicio expresado. La precisa reubicación de nuestra frontera es necesaria y ahora recomendamos una asignación de dinero suficiente para tal efecto. Con una profunda satisfacción puedo advertir que el espíritu de buen vecino y de amigable cooperación y conciliación han caracterizado la correspondencia y las acciones de las autoridades mexicanas al cumplir su parte en la tarea de mantener la ley y el orden en nuestra frontera común.

En 1885, el Congreso aprobó la primera ley sobre contratación de trabajo, orientada a impedir la admisión de mano de obra barata reclutada por empleadores norteamericanos. De ese modo se atendieron las instancias de las organizaciones laborales estadounidenses, deseosas de evitar un descenso en los salarios y en las condiciones laborales. Pese a estas restricciones, la corriente migratoria fue creciendo paulatinamente. Entre 1861 y 1900 fueron admitidos 14.3 millones de individuos. De acuerdo con las estadísticas oficiales norteamericanas, entre 1899 y 1921 fueron admitidos 278 038 inmigrantes mexicanos. Las primeras dos décadas del siglo XX corresponden a

un periodo de gran preocupación, debido en parte a la creciente ola de extranjeros de algunos países asiáticas.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 173-175.

24. DISCURSO BENJAMIN HARRISON 1889-1893

24.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1889*)

Tiene gran significado para nosotros el hecho de que, durante el primer año de nuestro segundo siglo de existencia constitucional, se haya realizado dentro de nuestras fronteras una conferencia que congrega a todos los Estados libres del norte y del sur del continente, en busca de los mejores métodos para perpetuar y ampliar los lazos de amistad que nos unen.

24.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*1º de diciembre de 1890*)

He propuesto tanto al gobierno de México como al de Gran Bretaña que consideren la firma de un tratado que regule el paso de trabajadores chinos por nuestras fronteras sur y norte. La amistad entre nuestro país y México, resultado de la vecindad y de la importancia que da una íntima relación e interés mutuo, nunca como hasta ahora ha sido tan notable y tan promisorio de mutuo beneficio para ambas naciones. La comunicación entre ambas naciones por las vías férreas, de por si importante, está creciendo constantemente. El significado del sistema ferroviario mexicano aumentará a un grado inimaginable, si se conecta al proyecto de la línea ferroviaria internacional. Yo recomiendo que nuestra representación en México sea elevada a primer rango.

24.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1891*)

Los estudios topográficos de la proyectada línea ferroviaria intercontinental continúan, no sólo en México, sino en los demás países por donde pasará.

El 12 de noviembre de 1884 se firmó un tratado con México, el Tratado de Fronteras, quedando la misma línea divisoria que contemplan los Tratados del 2 de febrero de 1848 y el del 30 de diciembre de 1853, respectivamente. El 1º de marzo de 1889 se negoció otro tratado para facilitar la puesta en vigor de los principios contenidos en el Tratado de 1884 y evitar futuras diferencias ocasionadas por los cambios y alteraciones

que tienen lugar, por causas naturales, en los ríos Grande y Colorado, en las porciones que constituyen la línea fronteriza entre las dos repúblicas. La Comisión Internacional de Límites, prevista por el Tratado de 1889, para tener jurisdicción exclusiva sobre cualquier asunto que pueda presentarse, ha sido designada por el gobierno mexicano. Es necesaria la asignación de una suma de dinero para que los Estados Unidos puedan cumplir con las obligaciones señaladas por dicho Tratado en este aspecto.

24.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1892)*

Las recientes alteraciones del orden público provocadas por forajidos extranjeros en la frontera mexicana han permitido a este gobierno testimoniar su buena voluntad hacia el de México, en cumplimiento con las obligaciones que le impone la amistad internacional, persiguiendo y dispersando a los malhechores. Continúan los trabajos para restablecer la frontera señalada en el Tratado Guadalupe Hidalgo al oeste de El Paso.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 176-180.

25. POBLACIÓN TOTAL POR GRANDES GRUPOS DE EDAD Y RELACIÓN DE DEPENDENCIAS 1895-2005¹

Años seleccionados de 1895 a 2005

Población Año	De 0 a 14 total	De 15 a 64 años	De 65 años y más años	Relación de dependencia	
1895 a/	12632428	5239399	7114499	278530	77.56
1910 a/	15160369	6375530	8422962	361877	79.99
1921	14334780	5505503	8314552	514725	72.41
1930	16552722	6489850	9571034	491838	72.95
1940	19653552	8096145	10966375	591032	79.22
1950	25791017	10754468	14123595	912954	82.61
1960	34923129	15452107	18162444	1308578	92.28
1970	48225238	22286680	24147173	1791385	99.71
1980	66846833	28726174	35366290	2754369	89.01
1990	81249645	31146504	46234035	3869106	75.74
1995	91158290	32261711	54654036	4242543	66.79
2000	97483412	32586973	58092327	6804112	67.81
2005	103263388	31650104	63086205	8527079	63.69

(A) (B) (C) (A+C)/(B)*100

a) Para estos años, los grupos de edad comprenden: de 0 a 15, de 16 a 65 y de 66 y más años, respectivamente.

Fuente: Para 1895 a 1910: *Estadísticas del Porfiriato. Fuerza de Trabajo y Actividad Económica por Sectores*. El Colegio de México. Para 1921 a 1990: INEGI. *Censos Generales de Población y Vivienda* (varios años).

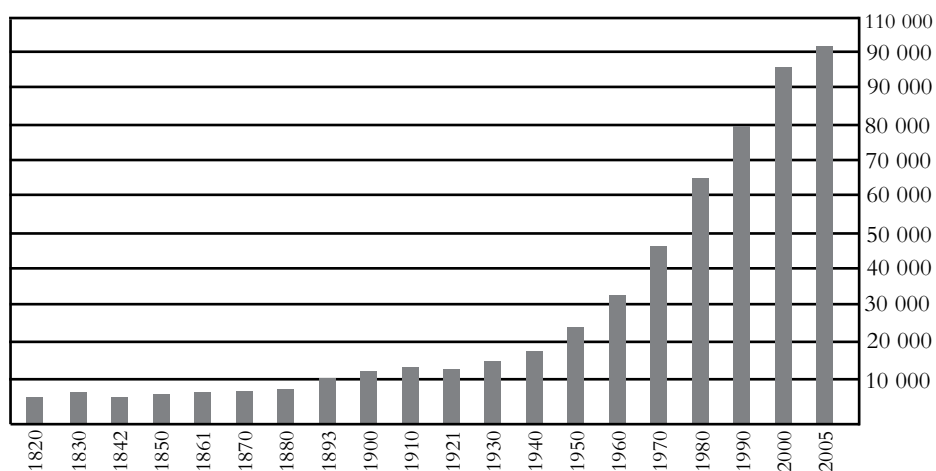
¹ Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 181-182.

Para 1995: INEGI. *Conteo de Población y Vivienda, 1995*.

Para 2000: INEGI. *XII Censo General de Población y Vivienda, 2000*. Tabulados Básicos. Tomo I. Aguascalientes, Ags., México, 2001.

Para 2005: INEGI. *II Conteo de Población y Vivienda, 2005*. Tabulados Básicos. Tomo I. Aguascalientes, Ags., México, 2006.

Población total de los Estados Unidos Mexicanos
Años seleccionados de 1820 a 2005 (Miles de personas)



Fuente: Cuadro 1.1 y 1.2

26. DISCURSO GROVER CLEVELAND 1893-1897

26.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*4 de diciembre de 1893*)

Nuestras relaciones con México continúan tan amistosas y cercanas, como las que deben caracterizar la comunicación entre dos repúblicas vecinas.

La tarea de restablecer los monumentos que, deben marcar la frontera entre las dos naciones, desde El Paso hasta el Pacífico, está casi concluida.

La Comisión Internacional de Aguas, recientemente organizada bajo las Convenciones de 1884 y 1889, respectivamente, se espera que pronto dirima las disputas ocasionadas por el cambio de curso de las corrientes del Río Grande al este de El Paso.

26.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1894*)

La buena voluntad, fomentada por tantos intereses en común, ha marcado nuestra relación con nuestro vecino más cercano del sur. Habiéndose restablecido la paz al norte de su frontera, México ha pedido el castigo de aquellos que alteraron el orden público. Debemos gestionar un nuevo tratado de comercio con México, que sustituya al que concluyó hace trece años. La amistad en la relación entre los dos países queda demostrada por el hecho de que, durante un largo periodo, el comercio de cada uno se ha incrementado bajo reglas de mutua consideración y ha sido estimulado por convenciones, más allá de celosas rivalidades y de desconfianzas egoístas.

Una indemnización otorgada por el gobierno mexicano por el asesinato del ciudadano norteamericano Lean Baldwin, a manos de unos forajidos en Durango, fue aceptada y está siendo pagada a plazos.

El problema que implica el almacenaje y la utilización de las aguas del Río Colorado debe ser resuelto por las dos naciones en común. Los frecuentes cambios en el curso de sus fluviales han ocasionado penosos problemas de jurisdicción.

26.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(2 de diciembre de 1895)*

La disputa fronteriza que recientemente involucró a México y a Guatemala ha tomado un nuevo sesgo, gracias a la determinación de las dos partes en conflicto de someter la cuestión al arbitraje del ministro de los Estados Unidos en México.

La Comisión nombrada bajo la Convención del 18 de febrero de 1889, encargada de colocar y restaurar los monumentos a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos, ha terminado su labor.¹

1 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA: Estadística Histórica de México 2009, Tomo I, Instituto Nacional de estadística y geografía, México, 2009, pp. 10.

27. DISCURSO WILLIAM MCKINLEY, 1897-1901

27.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1897*)

En relación con el hemisferio occidental, el problema más grave que enfrenta este gobierno es el relativo a la cuestión cubana. La guerra entre España y su colonia se ha extendido por más de diez años con un alto costo de recursos materiales y de sufrimiento humano. No obstante haber ofrecido los Estados Unidos sus mejores oficios para mediar en el conflicto, éste continúa. Sólo nos resta adoptar las siguientes medidas: reconocer la beligerancia de los insurgentes; reconocer la independencia de Cuba, o intervenir para terminar la guerra y lograr un acuerdo racional entre las dos partes del conflicto. Por el momento no se contempla recurrir a las medidas enunciadas, porque el gobierno de España se ha comprometido a realizar cambios en su política hacia Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos se reservan el derecho de intervenir haciendo uso de la fuerza, en virtud de sus obligaciones con la civilización y la humanidad, si las circunstancias así lo ameritan.

27.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*5 de diciembre de 1898*)

En mi último mensaje manifesté mi preocupación por el conflicto originado por los intentos de Cuba de independizarse de España. Desafortunadamente, la situación empeoró con el hundimiento del barco de la armada norteamericana *Maine* las costas de Cuba, el cual estaba de visita de buena voluntad en la isla. Así, en “nombre de la humanidad y en nombre de la civilización” pedí al Congreso tomar las medidas pertinentes para detener el curso de esa acción. La respuesta fue la Declaración de Guerra, el 15 de abril siguiente, acompañada de la solicitud a todos los gobiernos extranjeros de mantener su neutralidad en el conflicto. La guerra entre los Estados Unidos y España duró aproximadamente tres meses, y las hostilidades terminaron el 12 de agosto con la firma de un protocolo, mediante el cual España renuncia a su soberanía sobre Cuba, Puerto Rico y sus otras posesiones de las islas de las Indias Occidentales.

En otros asuntos, la interpretación de ciertas cláusulas del Tratado de Extradición, firmado el 11 de diciembre de 1861, nos ha llevado a algunas controversias con México. La más grave ocurrió con el caso de la demanda de extradición de Jesús Guerra, quien después de organizar una insurrección contra el presidente Díaz, cerca de la frontera, escapó a Texas. La extradición se negó con base en que el delito era de carácter político y por tanto, de acuerdo con dicho tratado, no procedía. México manifestó su desacuerdo alegando que los actos de guerra eran de naturaleza criminal, y, por tanto, no admitía el punto de vista de los Estados Unidos al respecto. En virtud de lo anterior, el 24 de enero de 1898 México dio por terminada la Convención e invitó al gobierno de los Estados Unidos a iniciar negociaciones para la firma de un nuevo Tratado de Extradición.

27.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*5 de diciembre de 1899*)

Este año se ha caracterizado por un constante incremento en la estrecha relación con México y por un aumento en la magnitud de intercambios ventajosos para ambos países. Este gobierno no ha desaprovechado ninguna oportunidad para manifestar sus deseos de desarrollar y perpetuar los lazos de cordialidad, por ahora tan felizmente inquebrantables.

Después de la conclusión, el 20 de enero de 1899, por México, de la Convención de Extradición del 11 de diciembre de 1861, se firmó, el 22 de febrero de 1899, un nuevo tratado más acorde con las necesidades de ambos países. El intercambio de ratificaciones tuvo lugar en la ciudad de México, el pasado 22 de abril. Su funcionamiento ha sido efectivo y satisfactorio. Un caso reciente sirve para ilustrar la aplicación del artículo 4º, que prevé que ninguna de las dos partes contratantes está en la obligación de entregar a sus conciudadanos, pero las autoridades ejecutivas de ambos países pueden hacerlo si, a su discreción, así lo juzgan conveniente.

La extradición de la señora Mattie Rich, ciudadana de los Estados Unidos, acusada de un homicidio cometido en México, fue autorizada por mí, después de una profunda consideración, en la creencia de que esto ayudaría a los fines de la justicia. Una acción similar, en una ocasión apropiada, por el Ejecutivo mexicano, tenderá a reforzar el deseo de ambos gobiernos de que los crímenes graves no se queden sin castigo y de reprimir la ilegalidad en la frontera.

El nuevo Tratado estipula que ninguno de los gobiernos asumirá jurisdicción para castigar delitos cometidos exclusivamente en el territorio del otro país. Esto evitará en el futuro las penosas controversias que han surgido hasta ahora a causa de que México ha afirmado su derecho de juzgar y castigar a un ciudadano estadounidense por un delito cometido dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos.

La Comisión Internacional de Aguas Fronterizas, organizada por el convenio del 1º de marzo de 1889 para el ajuste de las cuestiones que afectan la frontera del Río Grande, aún no ha concluido sus labores. Un convenio firmado el 2 de diciembre de

1898, ratificado e intercambiado el pasado mes de febrero, dispuso una extensión de su mandato por un año, hasta el 24 de diciembre de 1899.

La invitación hecha al presidente de México para visitar la ciudad de Chicago en el mes de octubre, con el fin de colocar la primera piedra del edificio de gobierno de los Estados Unidos en esa ciudad, fue cordialmente aceptada con el debido consentimiento por parte del Congreso mexicano. Sin embargo, la enfermedad de un miembro de su familia le impidió estar presente. El ministro de Relaciones Exteriores asistió en representación del presidente Díaz y, en esa calidad, fue recibido con los debidos honores.

27.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1900*)

La exposición sobre recursos y productos del hemisferio occidental, que ha de realizarse en la ciudad de Búfalo el año que entra, promete importantes resultados no sólo para los Estados Unidos, sino también para todos los países participantes. Gratifica mucho el interés mostrado por las naciones de América Latina, en el Congreso preparatorio de la exposición de Búfalo, que tiene lugar en estos momentos en la ciudad de México.

En 1908 el gobierno de Estados Unidos empezó a contar los inmigrantes admitidos por los puertos de entrada terrestres; los que ingresaban por los puertos marítimos se venían registrando desde 1820. El crecimiento de la población de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se conoce por los censos estadounidenses: en 1900, 103 293 personas declararon haber nacido en México; en 1910, 221 915; en 1920, 486 418; en 1930, 616 998. Otras fuentes estiman un millón para este año. Durante la década siguiente regresaron muchos mexicanos a causa de la crisis económica más severa que ha experimentado Estados Unidos.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 183-184.

28. DISCURSO THEODORE ROOSEVELT 1901-1909

28.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de diciembre de 1901*)

El 6 de septiembre, el presidente McKinley fue asesinado por un anarquista mientras asistía a la Exposición Panamericana de Búfalo. Esta terrible tragedia impidió que la exposición fuese un éxito financiero. Sin embargo, representó el esfuerzo de reunir a todos los pueblos del hemisferio occidental en un espíritu de hermandad.

Vemos con profundo interés y genuina esperanza los resultados positivos que se deriven del Congreso Panamericano, convocado por México y ahora reunido en la capital de ese país. Los delegados de los Estados Unidos tienen amplias instrucciones para cooperar con sus colegas en todos los asuntos que puedan ser ventajosos para la gran familia que conforman las repúblicas americanas, tanto en sus relaciones mutuas como en su desarrollo interno y en sus relaciones con el mundo en general.

Mi antecesor comunicó al Congreso que en el caso de la resolución de tribunales de Weil y de La Abra contra México, las más altas autoridades de nuestro país fallaron que había habido fraude y perjurio por parte de los demandantes, disponiendo, en conformidad con los actos del Congreso, que el dinero de tales indemnizaciones en manos del secretario de Estado fuese devuelto a México.

Una porción considerable del dinero recibido por México para tales indemnizaciones fue pagado por este gobierno a los demandantes, antes de que los tribunales dictaran su fallo. Creo que el Congreso debe devolver a México una cantidad igual a la suma ya pagada por los demandantes.

La Doctrina Monroe debe ser el rasgo fundamental de la política exterior de todas las naciones de las dos Américas, como lo es de los Estados Unidos. Han pasado setenta y ocho años desde que el presidente Monroe la proclamara en su mensaje anual, estipulando que “el continente americano no está sujeto a futuras colonizaciones por parte de ningún poder europeo...”. En *otras palabras, es una declaración de que no*

debe haber ninguna apropiación territorial por parte de una potencia no americana a expensas de territorio americano.

Esta doctrina garantiza la independencia comercial de las Américas. Nosotros no demandamos bajo esta doctrina trato comercial exclusivo con ninguna nación americana. Tampoco garantizamos el castigo por parte de otro Estado por mala administración, siempre que dicho Estado no asuma la forma de una adquisición territorial por parte de una potencia extracontinental.

28.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (2 de diciembre de 1902)

Ha sido motivo de satisfacción para nuestro país que los Estados Unidos y México hayan sido los primeros en utilizar los buenos oficios en el Tribunal de La Haya. Esto se llevó a cabo el pasado verano con resultados sumamente satisfactorios en el caso de una reclamación de los Estados Unidos a nuestra hermana República de México. Es de esperar que este primer caso sirva como precedente para otros, en los que no sólo los Estados Unidos sino también otras naciones aprovechen los instrumentos existentes en La Haya.

28.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (7 de diciembre de 1903)

Nuestra moneda está más allá de cualquier duda; y en las presentes condiciones sería incorrecto e innecesario reconstruir nuestro sistema monetario. Sin embargo, en mi mensaje anual del 2 de diciembre pasado llamé la atención sobre ciertas necesidades que requería nuestra situación financiera.

Durante el último periodo de sesiones del Congreso, por sugerencia de una nota conjunta de la República de México y el gobierno Imperial de China, y de conformidad con un acto del Congreso por el que se asignaba la cantidad de 25 000 dólares destinados a pagar los gastos correspondientes, se designó una comisión para tratar con los principales países europeos en espera de establecer un plan con el fin de asegurar un tipo de cambio fijo entre los países que tienen el patrón oro y los que tienen el patrón plata. Esta comisión ha elaborado su informe preliminar que se ha hecho del conocimiento público. Considero que es importante que la comisión continúe y que se asigne una cantidad suficiente de dinero para pagar los gastos de sus trabajos ulteriores.

El Departamento de Estado ha tomado medidas para considerar, en unión de otras potencias extranjeras, el soborno como un delito sujeto de extradición de quien lo comete. La necesidad de tratados más eficaces que incluyan este delito es más que manifiesta. Los actos de corrupción de los funcionarios en Saint Louis, Missouri, y de otras ciudades y estados han provocado que un buen número de sobornadores y de sobornados haya huido a países extranjeros. Por consiguiente, el soborno no ha sido incluido en los tratados de extradición ya que no había necesidad de ello, aunque es posible que en el pasado inmediato se hayan cometido y manifestado tantos sobornos como en el siglo actual de la historia de nuestra nación. Los Estados Unidos deben seguir la política de no dejar que haya un lugar en la tierra donde un hombre corrupto

que haya huido de su país pueda vivir en paz. No hay razón para que el soborno no sea incluido en todos los tratados como delito sujeto a la extradición de quien lo comete. El tratado con México, que fue enmendado recientemente y que incluye este delito en la lista de crímenes sujetos a la extradición del delincuente, ha sentado un saludable precedente sobre este particular.

28.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (6 de diciembre de 1904)

No es verdad que los Estados Unidos tengan apetitos territoriales o contemplen algún proyecto imperial respecto a las demás naciones del hemisferio occidental, salvo el de su propio bienestar. Todo lo que este país desea es ver estables, ordenados y prósperos a sus vecinos. Todo país cuya población se conduzca correctamente podrá contar con nuestra cordial amistad. Cuando una nación haya dado pruebas de razonables capacidades y de cierta decencia en el manejo de sus negocios públicos, políticos y sociales, no tendrá que temer injerencias de parte de los Estados Unidos. Pero un desorden crónico, una impotencia constante para mantener los vínculos que unen a las naciones civilizadas en América como en todas partes, podrá requerir una intervención de alguna nación civilizada y en este hemisferio la fidelidad de los Estados Unidos a la Doctrina Monroe podrá obligarnos, aunque nos repugne, a ejercer un poder de policía internacional en caso flagrante de tales desórdenes o de semejantes impotencias.

28.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (5 de diciembre de 1905)

Uno de los instrumentos más efectivos de paz ha sido la Doctrina Monroe tal como la ha ido desarrollando esta nación y ha sido aceptada por los demás países. Ninguna otra doctrina ha sido tan eficiente para promover la paz en el hemisferio occidental y permitir que cada nación se desarrolle de acuerdo con sus necesidades. Pero no solamente nosotros, sino también todas las repúblicas americanas tienen tanto derechos como obligaciones.

Como dije en mi último mensaje, no podemos tener demasiada inmigración de la adecuada y ninguna de la inadecuada. Huelga decir que es de desear que incluso la inmigración adecuada se distribuya apropiadamente en este país. Necesitamos más inmigración de esta clase procedente del sur, y deberíamos hacer algún esfuerzo para garantizarla. Tal vez sería posible limitar el número anual de inmigrantes autorizados a llegar a Nueva York y a otras ciudades del norte del país, permitiendo que un número ilimitado de inmigrantes llegasen del sur, siempre y cuando se cuide que sólo los inmigrantes del tipo conveniente lleguen a cualquier parte de nuestro país. En la práctica ha sido tan difícil hacer cumplir las leyes de inmigración allí donde grandes tramos de la frontera, marcados por una línea imaginaria, nos separan de nuestros vecinos, que yo he recomendado que no se permita la entrada de inmigrantes procedentes de Canadá y de México si no son originarios de esos países.

28.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL *(3 de diciembre de 1906)*

La Segunda Conferencia Internacional de Repúblicas Americanas, llevada a cabo en México en los años 1901 y 1902, sentó las bases de la tercera conferencia, que tuvo lugar en Río de Janeiro, del 23 de julio al 29 de agosto pasado. Esta conferencia, a diferencia de las demás —la de Washington en 1889 y las de México en 1901 y 1902—, estableció órganos deliberativos permanentes de valor incalculable para promover la paz y el progreso en todas las Américas. El pasado mes de junio, un problema que existía desde hacía tiempo entre las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras culminó en una guerra que amenazaba con ser ruinosa no sólo para los países involucrados, sino también destructiva para los intereses comerciales de los estadounidenses, de los mexicanos y de otros extranjeros que tienen una parte activa en el desarrollo de estas naciones. El buen entendimiento que existe entre los Estados Unidos y México permitió a sus gobiernos unirse en una mediación entre las repúblicas beligerantes; dicha mediación tuvo como resultado, tras un largo y paciente esfuerzo, que los representantes de las potencias hostiles se reunieran a bordo de un barco de guerra de los Estados Unidos como territorio neutral, y allí se concluyó la paz; una paz que salvó miles de vidas y evitó sufrimientos incalculables y la destrucción de bienes y medios de vida. A este respecto, la Conferencia de Río aprobó la siguiente resolución sobre este acto:

Que la Tercera Conferencia Internacional Americana envíe una nota a los presidentes de los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos de México, en la cual la conferencia que se está celebrando en Río exprese su satisfacción por el feliz resultado de su mediación para el establecimiento de la paz entre las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Este trabajo es un excelente esfuerzo de cómo la influencia de los Estados Unidos puede ser ejercitada en beneficio de los pueblos del hemisferio occidental; una acción tornada en conjunto con otras naciones americanas y, por tanto, libre de sospechas y perjuicios propios de una acción tomada unilateralmente.

28.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1907)*

Como respuesta a la cortés invitación que el presidente de México hizo al secretario de Estado, éste visitó dicho país durante los meses de septiembre y octubre, y fue recibido con la mayor gentileza y hospitalidad.

Él llevaba a nuestros vecinos del sur, de parte del gobierno de los Estados Unidos, un mensaje de respeto y de buena voluntad, así como un deseo expreso de lograr mejor conocimiento y amistad entre ambos países. La respuesta del gobierno y del pueblo de México fue de todo corazón y sincera.

En vista de la estrecha vecindad de los dos países, las relaciones entre México y los Estados Unidos son justo motivo de satisfacción. Tenemos una frontera común de más de 1 500 millas, que se extiende desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. Gran parte de esa frontera está marcada solamente por las aguas cambiantes

del Río Grande. Miles de mexicanos residen en la zona fronteriza estadounidense y se calcula que más de 40 000 norteamericanos residen en territorio mexicano, y que las inversiones estadounidenses en México suman más de 700 millones de dólares. La extraordinaria prosperidad industrial y comercial de México ha sido en gran parte promovida por empresas norteamericanas, y muchos estadounidenses comparten sus beneficios. El comercio exterior de la república excede los 240 millones de dólares anuales, y las dos terceras partes de sus importaciones son de los Estados Unidos. En tales circunstancias, numerosos cuestionamientos surgen entre los dos países. Sin embargo, estas discusiones se tratan con suma cortesía y justicia. Los norteamericanos que tienen negocios en México dan fe de la bondad y de la consideración con las que se les trata y de la seguridad que tienen sus empresas y propiedades bajo la administración de ese gran estadista que por tanto tiempo ha sido el titular del Ejecutivo de esa república.

Los dos gobiernos han unido sus esfuerzos para ayudar a la América Central a alcanzar el grado de paz y orden que le permita lograr la prosperidad de los países del norte del continente. Después de la paz entre Guatemala, Honduras y El Salvador, celebrada bajo las circunstancias descritas en mi último informe, una nueva guerra irrumpió entre las repúblicas de Nicaragua, Honduras y El Salvador. El esfuerzo para resolver este nuevo problema ha dado como resultado la aceptación de la sugerencia conjunta de los presidentes de México y de los Estados Unidos para que se celebre una conferencia de paz general entre todos los países de América Central. El 17 de septiembre pasado se firmó un protocolo entre los cinco países centroamericanos, en el cual se convino celebrar una conferencia en la ciudad de Washington “con el fin de encontrar medios para preservar las buenas relaciones entre dichas repúblicas y de establecer una paz permanente en esos países”. El protocolo incluye el deseo de que los presidentes de los Estados Unidos y de México designen “representantes para que presten sus buenos e imparciales oficios de una manera auténticamente desinteresada para alcanzar los objetivos de la conferencia”. La conferencia que se está celebrando contará con nuestros mejores votos y, cuando sea posible, con nuestra ayuda amistosa deseándole lo mejor.

28.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1908)*

El progreso material y comercial de las veinte repúblicas americanas es objeto de cuidadosa atención por parte del Congreso. Ninguna otra región en el mundo ha mostrado un desarrollo tan extraordinario en los últimos diez años y ninguna más que ellas tiene derecho a un interés particular por parte de los Estados Unidos. Ofrece, actualmente, grandes oportunidades de una legítima expansión de nuestro comercio. Estos países requerirán de nuestros productos en la medida en qué correspondamos a sus necesidades. El Buró Internacional de Repúblicas Americanas está realizando una labor útil, al darnos a conocer, con amplitud, lo que esas naciones son y con qué recursos cuentan. Ésta es una institución internacional conformada por los gobiernos de las dos Américas.

En 1908, el presidente estadounidense acordó con Japón detener los proyectos de ley que proponían impedir la inmigración japonesa, a cambio de que en el país de origen se limitara la expedición de pasaportes a quienes deseaban emigrar a Estados Unidos. Desde 1907 una comisión del Congreso estudiaba la manera de reducir la inmigración de europeos del sur y del oriente, especialmente judíos, italianos y eslavos. Una de sus proposiciones –prohibir la entrada a los analfabetas– se plasmó en la ley de 1917; y otra –establecer cuotas según el país de origen– se aprobó en 1921 y se adoptó en forma permanente en 1924.¹

1 Cfr. AMPUDIA, *op. cit.*, pp. 185-188.

29. DISCURSO WILLIAM H. TAFT 1909-1913

29.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*7 de diciembre de 1909*)

El próximo 9 de julio del año en curso tendrá lugar en Buenos Aires la Cuarta Conferencia Panamericana. Los Estados Unidos han nombrado una representación de alta jerarquía, para tratar asuntos de importancia fundamental para todo el continente. Esta conferencia tendrá un significado especial para todos los americanos, ya que alrededor de esa fecha se celebra la independencia de muchas de las repúblicas americanas.

No es necesario recordar al Congreso la importancia política, social y comercial de estas reuniones. Ahora más que nunca, el capital norteamericano está buscando dónde invertir y los productos norteamericanos buscan mercados. Como consecuencia de esta tendencia se encuentran ciudadanos norteamericanos cuyas vidas y propiedades deben ser protegidas por el gobierno de los Estados Unidos.

Mi entrevista con el presidente Díaz y los encuentros en suelo estadounidense y mexicano han servido para puntualizar la cercana y cordial relación que hay entre nuestra república y la gran república inmediata al sur, con la cual existe una vasta red de intereses.

29.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1910*)

Durante el año pasado, algunas de nuestras hermanas repúblicas sureñas celebraron el centenario de sus respectivas independencias. En honor de estos acontecimientos se enviaron embajadas especiales de los Estados Unidos a la Argentina, Chile y México, en donde la gentil acogida y la espléndida hospitalidad que se les brindó pusieron de manifiesto las relaciones cordiales y la amistad que hay entre esos países y el nuestro; relaciones que, creo con satisfacción, nunca antes alcanzaron un plano tan elevado y una base tan firme como en la actualidad.

La Comisión del Congreso, designada para asistir a los festejos del Centenario de la Independencia de México, junto con un enviado especial, fue recibida con los

más grandes honores y la mayor cordialidad; y a su regreso informaron de la generosa hospitalidad y de la cálida recepción que les brindaron tanto el presidente Díaz como el pueblo mexicano, las cuales no dejaron la menor duda del deseo de esta república vecina de continuar las relaciones estrechas y mutuamente favorables que, con toda seguridad, ambos gobiernos apreciarán siempre.

Representantes de los Estados Unidos y de México han firmado un protocolo sometido a la Comisión Fronteriza Estados Unidos-México (cuya membresía para este caso se incrementaría con un ciudadano del Canadá), sobre el conflicto relativo al Chamizal, que se ubica en la frontera con la ciudad de El Paso, Texas.

Nuestro arbitraje con México en la cuestión fronteriza del Chamizal desafortunadamente fue infructuoso, pero mediante grandes esfuerzos por parte de ambos gobiernos, debido a la importancia de esta cuestión, creemos que pronto será posible llegar a un arreglo práctico.

Los recientes acontecimientos políticos en México fueron objeto de la atención de este gobierno, debido a la situación, en extremo delicada y difícil, creada a lo largo de nuestra frontera meridional y a la necesidad de tomar medidas apropiadas para salvaguardar los intereses estadounidenses. El gobierno de los Estados Unidos, en su deseo de asegurar la debida observancia y cumplimiento de los llamados estatutos de neutralidad del gobierno federal, dio instrucciones a los funcionarios apropiados para que ejercieran una atención diligente y vigilante a los requerimientos de las mismas. Aunque había un estado de conflicto aunado real, no había un reconocimiento oficial de beligerancia que implicara las obligaciones de neutralidad técnica que dispone el derecho internacional.

El 6 de marzo del año en curso, al estar ausente el secretario de Estado, tuve una entrevista personal con el señor Wilson, embajador de los Estados Unidos en México, en la cual me informó que las condiciones en ese país eran mucho más críticas de lo que los comunicados de prensa revelaban; que el presidente Díaz se encontraba sobre un volcán de levantamiento popular; que los pequeños estallidos que habían ocurrido eran solamente sintomáticos del estado general; que un porcentaje muy alto de la gente simpatizaba con la insurrección; que un estallido general era probable en cualquier momento, en cuyo caso temía que los 40 000 o más residentes estadounidenses en México pudieran ser atacados, y que las inversiones norteamericanas, muy cuantiosas, fueran dañadas o destruidas. Después de haber conferenciado con el secretario de Guerra y el secretario de Marina, creí oportuno reunir una división del ejército de fuerza completa en San Antonio, Texas; una brigada de tres regimientos en Galveston; una brigada de infantería en el distrito de Los Ángeles, en el sur de California, junto con una escuadra de acorazados cruceros y buques de transporte de tropas en Galveston, y una pequeña escuadra de buques en San Diego. Al mismo tiempo, a través de nuestro representante en la ciudad de México, expresé al presidente Díaz la esperanza de que no hubiera recelos como resultado de conjeturas infundadas en relación con

estos movimientos militares, y le aseguré que no tenían ningún significado que pudiera causar preocupación a su gobierno.

La movilización se realizó con gran presteza; y el 15 de marzo, en una carta que dirigí al jefe del Estado Mayor, por mediación del secretario de Guerra y el secretario de Marina, giré las siguientes instrucciones:

Considero que es mi deber, como comandante en jefe, apostar tropas en número suficiente donde, si el Congreso ordenara que entraran en México para salvar vidas y bienes de ciudadanos estadounidenses, pudieran movilizarse con rapidez. Mientras tanto, el movimiento de tropas en Texas y en otras partes cerca de la frontera, acompañado con las seguridades sinceras de la mayor buena voluntad hacia el actual gobierno mexicano y con patrullas más grandes y más frecuentes a lo largo de la frontera para impedir expediciones insurgentes desde los Estados Unidos, ayudarán al gobierno actual y tendrán un efecto moral saludable para impedir ataques a ciudadanos estadounidenses o a sus propiedades en cualquier contienda general mortífera ulterior. Una vez más, la súbita movilización de una división de soldados ha sido una gran prueba para nuestro ejército y ha brindado enseñanzas útiles mientras que las maniobras que son posibles así pueden ocupar de manera muy provechosa a los soldados y a sus oficiales. La suposición expresada por la prensa de que yo contemplo una intervención en territorio mexicano para proteger vidas o propiedades estadounidenses es, por supuesto, gratuita, porque yo abrigo grandes dudas sobre si tengo tal autoridad en cualquier circunstancia ya si la tuviese, no la ejercería sin la aprobación expresa del Congreso. En realidad, como ustedes saben, ya me he negado a enviar, sin el consentimiento mexicano, soldados de caballería para proteger el malecón que estamos construyendo a través de la frontera, en México, en la desembocadura del Río Colorado, para resguardar el Valle Imperial, aunque los insurrectos habían dispersado a las tropas mexicanas y se estaban apoderando de nuestros caballos y bastimentos, atemorizando a nuestros trabajadores, que huían de allí. Sin embargo, tengo el decidido propósito de estar en una posición tal que cuando las vidas y propiedades estadounidenses en México corran peligro y la insurrección haya dejado impotente al gobierno actual, pueda ejecutar con presteza y eficacia las órdenes del Congreso para protegerlas. Mientras tanto le envío esta carta, por medio del secretario, para llamar su atención sobre algunas cosas relacionadas con la presencia de la división en el suroeste que, sin duda, usted ya ha considerado, pero que deseo recalcar. En primer lugar, deseo que la movilización sea un entrenamiento de primer orden para el ejército, y quisiera que usted dedicara su tiempo, y el tiempo del War College, a asesorar y realizar maniobras de carácter útil, y que se planee seguir haciendo esto durante los tres próximos meses.

Transcurrido ese tiempo, cabe esperar que o bien los temores del embajador Wilson se habrán cumplido y reinará el caos con sus consecuencias, o bien el gobierno actual de México habrá reajustado las cosas de tal manera que la tranquilidad esté asegurada; resultado que esperamos sea el deseado y entonces las tropas retornen a sus puestos. Entiendo que en Washington el general Aleshire dijo que probablemente us-

ted podría sufragar todos los gastos adicionales de este movimiento, con las asignaciones actuales, si las tropas continúan en Texas durante tres meses. Sinceramente, espero que así sea. He leído en los periódicos que usted cuenta con cartuchos sin balas, pero supongo que esto sea un error o que será fácil obtener los que vayan a usar tan pronto como comiencen las maniobras.

En segundo lugar, Texas es un estado habitualmente pacífico, pero no es posible llevar 20 000 soldados allí sin correr cierto peligro de enfrentamiento con la gente de ese estado, y especialmente con los mexicanos que viven allí, cerca de la frontera, y que simpatizan con los insurrectos y los soldados federales. Por esa razón, le ruego ser lo más cuidadoso posible para evitar fricciones de cualquier clase. En Cuba pudimos mantener durante un año, sin ningún problema, un ejército de pacificación de algo más de 5000 soldados, y espero que usted podrá hacer lo mismo en Texas.

Le ruego encarecidamente que atienda esto y que advierta a todos los oficiales al mando de la necesidad de una gran circunspección a este respecto. En tercer lugar, uno de los grandes problemas de la concentración de soldados es el peligro de enfermedades, y yo supongo que usted ha empleado los métodos más modernos para prevenir y, en caso necesario; erradicar las epidemias. Esto es parte tan integral de la vida militar que no es realmente necesario que yo llame la atención al respecto.

Por último, le ruego que examine la cuestión de la patrulla de la frontera y dedique a esa labor tantos soldados como sea posible y más de los que hay ahora, con el fin de impedir que nuestra zona fronteriza sea usada para la insurrección. He dado seguridades al embajador de México sobre este punto. Espero, sinceramente, que tanto el ejército como la marina recordarán siempre esta experiencia como un medio de enseñanza útil, y me sentiría muy decepcionado si redundara por cualquier causa en un daño o un desastre para nuestras fuerzas. He asumido una gran medida de responsabilidad al ordenar esta movilización, pero estoy dispuesto a responder por ella si usted puede hacer que aquellos que están bajo su mando tengan el mayor cuidado en evitar los problemas que he señalado.

Usted puede sacar copia de esta carta para el general Carter y para aquellos otros generales que considere conveniente y necesario a fin de guiarlos en su proceder, pero deberá ser considerada como confidencial. Estoy más que satisfecho de dejar constancia aquí de que todos los celos concernientes al efecto de la presencia de una fuerza militar tan grande en Texas hayan resultado infundados; no ocurrieron disturbios; el comportamiento de los soldados fue ejemplar y la acogida y el trato que recibieron por el público fueron tan buenos como podía desearse, y ello a pesar de la presencia de gran número de refugiados mexicanos en el territorio fronterizo.

De vez en cuando se recibieron comunicaciones del embajador Wilson, quien había regresado a México, en las cuales confirmaba la opinión de que la concentración de soldados estadounidenses en las cercanías causaba buenos efectos. En un despacho, fechado el 3 de abril de 1911, el embajador señaló:

La gravedad de la situación que continúa aquí y el caos que se produciría si las autoridades constitucionales fueran derrocadas finalmente, lo cual aumentaría en gran medida el peligro que ya corren las vidas y las propiedades estadounidenses, confirman la cordura del presidente al haber tomado esas precauciones militares que, teniendo en cuenta la dignidad y la soberanía de un Estado amigo, merecen nuestros ciudadanos en el extranjero. Teniendo, como tengo, la responsabilidad de salvaguardar esas vidas y esas propiedades, debo decir a nuestro Departamento que nuestros dispositivos militares en la frontera han producido una impresión efectiva en la mentalidad mexicana y pueden ser, en cualquier momento, las únicas garantías para la seguridad de nuestros nacionales y de sus bienes. Si sucediera que las condiciones aquí requiriesen medidas más enérgicas del presidente y del Congreso, es posible que las vidas y las propiedades de nuestros nacionales fueran objeto de ataques esporádicos, pero el resultado final sería el orden y una protección adecuada.

La insurrección continuó y ha tenido como consecuencia enfrentamientos entre las tropas mexicanas y los insurgentes a lo largo de la frontera, de suerte que, en algunas ocasiones, las balas de las fuerzas contendientes hirieron a ciudadanos estadounidenses dedicados a sus ocupaciones lícitas en territorio de los Estados Unidos. Se protestó debidamente ante las autoridades mexicanas por estas violaciones de los derechos de los estadounidenses. El 17 de abril de 1911 recibí el siguiente telegrama del gobernador de Arizona:

A consecuencia de los combates que ahora se libran en la frontera internacional, pero a tiro de fusil del centro de Douglas, cinco estadounidenses fueron heridos en este lado de la frontera. Todo indica que las víctimas se repetirán en el futuro y si bien los federales parecen estar dispuestos a mantener su acuerdo de no disparar hacia Douglas, la posición de los insurrectos es diferente y la vida de los habitantes de Douglas se halla en peligro. A mi juicio, se necesitan medidas radicales para proteger a nuestra gente inocente, y si es posible hacer algo para detener la lucha en Agua Prieta, la situación exige que se haga. Es imposible salvaguardar a la población de Douglas, a menos que la ciudad sea evacuada. ¿Es posible hacer algo para aliviar una situación que ahora es crítica?

Después de una conferencia con el secretario de Estado, el 18 de abril de 1911 se envió al gobernador Sloan el siguiente telegrama, que se hizo del conocimiento público:

Recibido su despacho. Instado urgentemente gobierno mexicano gire instrucciones impedir tropas federales mexicanas disparen sobre frontera. Espero respuesta. Mientras he enviado advertencia directa a fuerzas mexicanas e insurgentes cercanas a Douglas. Deduzco de su despacho, ambas partes intentan atender esta advertencia pero en la tensión y urgencia de la lucha, balas perdidas aún llegan a Douglas. La situación podría justificar que yo ordenara a nuestras tropas cruzar la frontera e intentar detener la lucha, o disparar contra ambos contendientes desde lado estadounidense. Pero si doy ese paso debo considerar posibilidad de resistencia y mayor derramamiento de sangre,

y también peligro de que nuestros motivos se malinterpreten y tergiversen, lo cual encendería indignación popular mexicana contra muchos miles de estadounidenses que ahora viven en México, y pondría en peligro sus vidas y bienes. En esas condiciones es posible no se pudiera resistir la presión para intervención general. No se puede prever o imaginar consecuencias de tal medida y debemos usar extrema moderación para evitarla. Por consiguiente, en espera de respuesta a mi protesta urgente al gobierno mexicano, no puedo ordenar a tropas cercanas a Douglas cruzar la frontera, pero debo pedir a usted y a autoridades locales que, en caso de que el mismo peligro se presente, instruyan a habitantes de Douglas para que se coloquen donde balas no puedan alcanzarlos y de este modo se eviten víctimas. No estoy dispuesto a poner en peligro a estadounidenses que radican en México, donde están forzosamente expuestos, tomando una medida radical para impedir daños a estadounidenses que radican en nuestro lado de la frontera, quienes pueden evitarlos mediante molestias temporales. Me satisface decir que no han ocurrido más violaciones considerables a derechos de ciudadanos estadounidenses.

La presencia cerca de la frontera mexicana de una gran fuerza militar y naval dispuesta a entrar en acción con rapidez ha demostrado ser muy conveniente en las condiciones un tanto difíciles que ha suscitado esta violación a los derechos estadounidenses. Por otra parte, la presencia de las tropas, antes y cuando ocurrieron las infortunadas muertes y heridas de ciudadanos estadounidenses en Douglas, puso de manifiesto que la moderación de nuestro gobierno en relación con estos hechos no se debía a falta de poderío para responder a ellos con rapidez y energía, sino a un deseo real de usar todos los medios posibles para evitar una intervención directa en los asuntos de nuestro vecino, cuya amistad teníamos en alta estima y deseábamos vehementemente conservar. La política y las medidas adoptadas por este gobierno se basaron en una real amistad con el pueblo mexicano en conjunto, y es satisfactorio observar que esta actitud de estricta imparcialidad hacia todas las facciones en México y de sincera amistad por la nación vecina, sin tomar en consideración lealtades de partido, ha sido reconocida en general y ha redundado en un entendimiento aún más estrecho y más simpatizante entre las dos repúblicas y en un mutuo respeto más cordial entre ellas. Las medidas para suprimir la violencia y restablecer la tranquilidad en toda la República mexicana fueron de particular interés para este gobierno, en lo que respecta a la salvaguarda de vidas y bienes estadounidenses en ese país. El gobierno de los Estados Unidos tuvo ocasión de autorizar el paso de un contingente rural mexicano a través de Douglas, Arizona, hasta Tijuana, México, con el fin de suprimir el desorden general que desde hacía algún tiempo había reinado en la región norte de Baja California. El 25 de mayo de 1911 el presidente Díaz renunció; el señor De la Barra fue elegido presidente provisional.

Después se celebraron elecciones para los cargos de presidente y vicepresidente en toda la república y, el 15 de octubre, el señor Francisco I. Madero fue declarado formalmente electo a la primera magistratura. El 6 de noviembre el presidente Ma-

dero inició su mandato. Después de que tomó posesión de su cargo, se descubrió un *complot* contra el gobierno actual, mediante el cual se iniciaría una insurrección. Se ordenó una investigación de la presunta conspiración, la cual ha dado como resultado la acusación del general Bernardo Reyes y otras personas, y la detención de algunos oficiales y hombres, así como la incautación de caballos y pertrechos reunidos en suelo tejano con el fin de invadir a México. El mismo procedimiento se siguió durante la insurrección contra el gobierno del presidente Díaz, resultando en la acusación y el enjuiciamiento de personas que violaban las leyes de neutralidad de los Estados Unidos para ayudar a ese levantamiento.

Por tanto, los antecedentes de este gobierno en lo que respecta al reconocimiento de la autoridad constituida en México son claros.

29.3 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (3 de diciembre de 1912)

Durante dos años la Revolución y la contrarrevolución han perturbado a la vecina República mexicana. El bandolerismo ha significado un gran pillaje en perjuicio de los intereses extranjeros. Constantemente se han presentado asuntos en extremo delicados. En varias ocasiones han surgido situaciones muy difíciles en nuestra frontera. Durante este periodo de prueba, la política de los Estados Unidos ha sido de paciente no intervención, rápido reconocimiento de la autoridad constituida en la nación vecina y de un extremado cuidado de los intereses estadounidenses. Yo espero sinceramente que la nación mexicana pueda muy pronto reanudar el camino del orden, la prosperidad y el progreso. En estas dolorosas circunstancias, los Estados Unidos han demostrado en alto grado una cordial amistad a esa nación. Cuando la Revolución comenzó, había en México entre 30 000 y 40 000 ciudadanos estadounidenses dedicados a empresas que contribuían en gran medida a la prosperidad de esa república y que también beneficiaban al comercio importante entre los dos países. Las inversiones de capital estadounidense en México han sido calculadas en 1 000 millones de dólares. La responsabilidad de tratar de salvaguardar esos intereses y los peligros inseparables de la proximidad de una situación tan turbulenta han sido grandes, pero me complace haber podido seguir pronto por el completo éxito del pueblo mexicano al recobrar las bondades de la paz y del buen orden. Con el propósito de desempeñar más cabalmente la labor necesaria para el confinamiento de las aguas del Río Colorado bajo en su cauce actual y proteger así el Valle Imperial, y para llegar a un entendimiento con el gobierno de México sobre la distribución de las aguas del Río Colorado, cuestión en la que ambos gobiernos tienen gran interés, las negociaciones prosiguen con miras a establecer una comisión preliminar del Río Colorado, la cual estará debidamente facultada para realizar el trabajo necesario y tendrá autoridad para estudiar lo relativo a la distribución equitativa de las aguas. Todo hace pensar que se llegará a un acuerdo sobre este punto, y que se firmará un tratado en un futuro cercano.

Por interés de la ciudad de El Paso, este gobierno no ha cesado en sus esfuerzos para llegar a un pronto arreglo en la vieja controversia acerca de los derechos de

México sobre el Chamizal. Es mucho lo que se ha logrado, y aunque la solución a este problema no será inmediata la actitud favorable que últimamente ha mostrado el gobierno mexicano nos hace esperar que este difícil asunto será zanjado de manera satisfactoria y definitiva en una fecha no lejana.¹

La primera ley orgánica de inmigración se expidió en 1917; incorporó las disposiciones ya existentes y agregó nuevas restricciones. Además de prohibir la admisión de analfabetas, psicópatas, alcohólicos y vagos, se definió una gran zona de Asia vedada a la inmigración, que comprendía regiones de China, India, Persia, Birmania, Siam y los Estados Malayos, parte de Rusia, Arabia y Afganistán, y la mayor parte de la Polinesia y las islas de la India Oriental. Poco después de aprobada esa ley, el Departamento de Trabajo —encargado de su administración en esos años— se valió de una excepción que ésta permitía para admitir temporalmente como trabajadores no inmigrantes, a decenas de miles de mexicanos y canadienses. Esta acción ha sido denominada el “primer programa bracero”. A diferencia del segundo programa (1924–1964), en éste no participó el gobierno mexicano, que más bien se opuso, y las visas se otorgaban no sólo a los trabajadores, sino también a sus familias acompañantes.

En 1921 se aprobó la Ley de Cuotas, que limitó cuantitativamente la inmigración al restringir el número de visas otorgables a los nacionales de cada país, según la proporción de personas de ese origen que se hubieran empadronado en el censo de población de Estados Unidos de 1910. Esta fórmula se tradujo en un total de 357 803 inmigrantes anuales de los países sujetos a cuota; pero de éstos se reservan 193 630 para los europeos del norte y del occidente y casi todo el resto para los del sur y el oriente. La Ley de Cuotas de 1924 redujo el número de visas disponibles para los europeos meridionales y orientales. Nuevamente, los mexicanos, canadienses y latinoamericanos quedaron eximidos de estas restricciones numéricas.

En el mismo año se creó la Patrulla Fronteriza, que otorgaba a los policías de la Oficina de Inmigración —después llamada Servicio de Inmigración y Naturalización y trasladada del Departamento de Trabajo al de Justicia—, la facultad de vigilar las fronteras y costas para impedir la entrada ilegal de extranjeros. El número de deportados creció notablemente durante los años veintes.²

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 189–195.

2 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 196–205.

30. DISCURSO WOODROW WILSON 1913-1921

30.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(2 de diciembre de 1913)*

Sólo hay un nubarrón en nuestro horizonte. Esa nube apareció al sur de nuestro país y se cierne sobre México. No puede haber una perspectiva segura de paz en América mientras el general Huerta no renuncie a su gobierno espurio en México y no se entienda, cabalmente, que el gobierno de los Estados Unidos no apoyará ni tratará con tales gobiernos. Somos amigos de los gobiernos constitucionales en América; somos más que sus amigos: somos sus campeones; porque de ninguna otra manera pueden nuestros vecinos, a quienes quisiéramos demostrar nuestra amistad en todos los sentidos, lograr su propio desarrollo en paz y libertad. México no tiene gobierno. El intento de mantener uno en la ciudad de México ha fracasado, y un mero despotismo militar se ha instalado con apenas una apariencia de autoridad nacional.

Esto tuvo su origen en la usurpación de Victoriano Huerta, quien, tras un breve intento de desempeñar el papel de un presidente constitucional, ha desechado finalmente hasta la pretensión de un derecho legal y se ha declarado dictador. Como consecuencia de esto, hay una situación en México que no permite dudar de que incluso los derechos más elementales, tanto de sus nacionales como de los ciudadanos de otros países que residen en su territorio, puedan ser satisfactoriamente garantizados. Si esto continúa por mucho tiempo, pondría en peligro los intereses de la paz, el orden y una vida viable en las tierras situadas inmediatamente al sur de nosotros. Aunque el usurpador hubiese tenido éxito, pasando sobre la Constitución y los derechos de su pueblo, no habría establecido más que un poder precario y odioso, que no habría podido durar mucho, y cuya eventual caída habría dejado al país en una condición más deplorable que nunca. Pero no ha tenido éxito. Ha perdido el respeto y el apoyo moral aun de quienes alguna vez desearon que triunfara. Poco a poco ha quedado completamente aislado. Cada día se desmorona algo de su poder y su prestigio, y no está lejos del colapso.

Creo que no estamos obligados a modificar nuestra política de vigilante espera. Y, cuando llegue el fin, confiamos en ver que el orden constitucional sea restaurado en México por acuerdo y energía de sus líderes, quienes prefieren la libertad de su pueblo por encima de sus propias ambiciones.

30.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1914)*

Somos campeones de la paz y de la armonía. Ello nos ha dado la oportunidad, rara vez concedida a otra nación, de lograr la paz en el mundo y de arreglar varias de las cuestiones que distanciaron o interrumpieron la amistad entre las naciones.

30.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1915)*

Hemos sido puestos a prueba en el caso de México y hemos salido airosos de la prueba. Queda por ver si hemos beneficiado a México con el curso que hemos seguido. Hoy, el destino de esa nación está en sus manos. Pero hemos probado que por lo menos no tomamos ventaja de su infortunio, ni le hemos impuesto un orden y un gobierno de nuestra elección. La libertad es a veces una cosa violenta e ingobernable a la que no es posible circunscribir y a la que jamás se deberían imponer límites fijados por unos cuantos hombres. Todo norteamericano que haya bebido la verdadera fuente del derecho y la moral debe suscribir, sin reserva alguna, la Declaración de Derechos de Virginia, que en los tiempos grandiosos en que el gobierno se estableció fue aceptada por nosotros como el credo de los hombres libres. Esa doctrina dice “que el gobierno es instituido, o debería serlo, para el común beneficio, protección y seguridad del pueblo, nación o comunidad”; que de todas las formas y modos de gobierno, es la mejor, la más capaz de producir el mayor grado de felicidad y seguridad, y la que está más eficazmente asegurada contra el peligro de un mal gobierno; y que, cuando un gobierno resulte inadecuado o sea contrario a estos fines, una mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que juzgue más conveniente al bien público.

Sin titubear hemos aplicado este principio básico en el caso de México y ahora esperamos confiadamente el resurgir de esa turbada república, que tiene tanto de qué purgarse y que cuenta con tan poca simpatía, por parte del exterior, en este proceso tan radical como necesario. Nosotros ayudaremos y veremos con simpatía a México, pero no ejerceremos ninguna presión sobre dicho país. Nuestro proceder respecto a México será prueba suficiente de que los Estados Unidos no buscan ni la soberanía política ni ningún control egoísta sobre la región.

La moraleja es que los países del hemisferio no son rivales hostiles, sino amigos con un creciente sentido de comunidad de intereses, tanto en cuestiones políticas como económicas. Ello les ha dado una nueva función como factores reales en los asuntos internacionales y en la conformación de la historia política del mundo. Los presenta con un verdadero y profundo sentido de unidad ante los asuntos mundiales. Socios espirituales que están juntos porque comparten ideales comunes y los une una

simpatía mutua. Separados están a merced de los vaivenes de la confusa política mundial de rivalidades hostiles; unidos en espíritu y propósito no pueden fallar a su destino, que es la paz. Esto es el panamericanismo.

30.4 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de diciembre de 1917)*

Nuestra tarea esencial es ganar la guerra y nada nos apartará de ello. Apoyamos y sostenemos la democracia tanto para nosotros como para nuestros vecinos y para el mundo entero.

30.5 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de diciembre de 1918)*

En este momento, en que estamos ajustando nuestras relaciones con el resto del mundo, es de capital importancia que primero eliminemos nuestros malentendidos con nuestros vecinos, como una prueba de la amistad que realmente les profesamos.

30.6 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(2 de diciembre de 1919)*

En lo referente a las disputas internacionales que han conducido a la guerra, proponemos el arbitraje como medio idóneo para evitarlas.

30.7 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1920)*

El sustento de América en el mundo es la democracia. Ésta es el derecho del individuo a vivir en libertad y a ser protegido contra aquellos individuos o grupos que busquen socavar ese derecho.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, José Rogelio, op. cit., pp. 2577.

31. TÉRMINOS UTILIZADOS PARA MIGRANTES INDOCUMENTADOS

El término “indocumentado” se utiliza para referirse a cualquier extranjero en Estados Unidos que, en un momento dado, esté sujeto a deportación por violar el derecho migratorio de ese país. En el pasado lejano a tales personas se les llamó “espaldas mojadas”, porque cruzaban el río Bravo sin permiso de las autoridades migratorias estadounidenses; el término “alambrista” se acuñó, también, para tomar en cuenta aquellas personas que cruzaban por el lado occidental de la frontera mexicano-norteamericana, donde en ciertas partes la línea divisoria está marcada por una cerca de alambre. El término indocumentado también abarca a persona que, estrictamente hablando, tienen documentos; es decir, los que ingresaron con visa de no inmigrantes y se quedaron después de que caducara, los que trabajaron sin permiso y los que presentaron documentos fraudulentos. El término *espalda mojada* se aplicó comúnmente a los indocumentados mexicanos a partir de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. En esos años (1917-1918) hubo una aguda escasez de mano de obra para faena agrícola y el mantenimiento del ferrocarril, y ello atrajo gran número de mexicanos que ingresaron a Estados Unidos cruzando a nado el río Bravo. El cruzar la frontera sin presentar documentos siempre ocasionó la deportación, pero no fue considerado delito, castigado con una pena menor, hasta 1929.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 206-209.

32. DISCURSO WARREN G. HARDING 1921-1923

32.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1921)*

Actualmente tiene lugar una conferencia internacional en Washington que está trabajando, entre otras cosas, en un arreglo de los problemas que puedan desembocar en conflictos internacionales. La esperanza mundial está centrada en esta ciudad capital.

32.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1922)*

Ha sido una fortuna para nosotros predicar y promover el entendimiento internacional. La influencia de los Estados Unidos en conseguir prácticamente el arreglo de una vieja disputa entre las naciones latinoamericanas es una prueba de ello. Hoy, en Washington, se encuentran reunidos los delegados de las naciones centroamericanas en una mesa de discusión, para dar mayor estabilidad a sus repúblicas y remover todo vestigio de desacuerdo. Están aquí por invitación nuestra.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2574.

33. POSICIÓN Y PROPOSICIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO EN 1917 Y AÑOS SIGUIENTES

Los gobiernos de la Revolución Mexicana generalmente han adoptado dos actitudes respecto a la emigración a Estados Unidos. Por una parte, han expresado su inconformidad con la persistencia del fenómeno, han tratado de disuadir a los nacionales de que emigren, sobre todo sin documentos, y han promovido la repatriación de quienes se encuentran en el exterior. Ejemplo de lo último es el gran esfuerzo de repatriación organizado por el gobierno del general Álvaro Obregón durante la crisis norteamericana de 1921-1922, cuando muchos mexicanos perdieron su empleo en aquel país. Por otra parte, desde los años veinte han advertido que las posibilidades de evitar esa emigración son pocas, y han buscado fórmulas para mitigar los males que acarrea. En este sentido, el servicio consular se ha preocupado, no siempre con la mayor atención, por el trato que reciben los mexicanos en el exterior. Especialmente entre 1917 y 1929, México intentó con energía, pero sin éxito, disminuir la corriente migratoria hacia el vecino país del norte. En ocasión de la crisis de 1929, nuevamente los mexicanos en Estados Unidos buscaron —algunos fueron forzados a hacerlo— su regreso a México. Los cónsules mexicanos promovieron entonces la repatriación voluntaria, que fue apoyada por los gobiernos locales y los funcionarios de migración norteamericanos, preocupados por el gasto que significaba mantener a tantos desempleados, entre ellos los mexicanos. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas intensificó los esfuerzos para dotar de tierra y trabajo a los repatriados, a tiempo que censuraba la política interesada de Estados Unidos: alentar la inmigración de mexicanos en épocas de auge económico, y deshacerse de ellos en épocas de crisis. Gracias a la Segunda Guerra Mundial se recuperó la economía norteamericana, hubo gran escasez de mano de obra y nuevamente le dio la bienvenida a la mano de obra mexicana.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 210.

34. MIGRACIÓN MEXICANA A LOS ESTADOS UNIDOS DE 1924 A 1985¹

MIGRACIÓN MEXICANA A LOS ESTADOS UNIDOS

Año fiscal	Inmigrantes mexicanos admitidos legalmente	Año fiscal	Inmigrantes mexicanos admitidos legalmente	Braceros	Año fiscal	Inmigrantes mexicanos admitidos legalmente	Braceros	Trabajadores mexicanos A-II
1924	87 648	1942	2 182	4 203	1965	37 969	20 236	2 820
1925	32 378	1943	3 985	52 098	1966	45 163	8 647	1 062
1926	42 638	1944	6 399	62 170	1967	42 371	7 703	7 881
1927	66 766	1945	6 455	49 454	1968	43 563		176
1928	57 765	1946	6 805	32 043	1969	44 623		233
1929	38 980	1947	7 775	19 632	1970	44 469		266
1930	11 915	1948	8 730	35 345	1971	50 103		295
1931	2 627	1949	7 977	107 000	1972	64 040		854
1932	1 674	1950	6 841	67 500	1973	70 141		1 182
1933	1 514	1951	6 372	192 200	1974	71 586		1 343
1934	1 470	1952	9 600	197 100	1975	62 205		1 328
1935	1 232	1953	18 454	201 380	1976	57 863		751
1936	1 308	1954	37 456	309 033	1977	44 079		955
1937	1 918	1955	50 772	398 650	1978	92 367		1 174
1938	2 014	1956	65 047	445 167	1979	52 096		934
1939	2 265	1957	49 154	436 049	1980	56 680		
1940	1 914	1958	26 712	432 857	1981	101 268		
1941	2 068	1959	23 061	437 643	1982	56 106		
		1960	32 084	315 846	1983	59 079		3 305
		1961	41 632	291 420	1984	57 557		2 412
		1962	55 921	194 978	1985	61 077		2 212
		1963	55 253	186 865				
		1964	32 967	177 736				

Fuente: Mónica Vereá Campos: *Entre México y Estados Unidos: Los indocumentados* (1982); Manuel García y Griego y Bárbara K. Strickland: "El surgimiento en Estados Unidos del problema de los indocumentados mexicanos. Antecedentes históricos", trabajo presentado para el seminario Migración México-Estados Unidos y Trabajadores Indocumentados, maestría en Estudios México-Estados Unidos (UNAM, EN EP-Acatlán; noviembre, 1985).

¹ Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2586-2587.

35. DISCURSO CALVIN COOLIDGE 1923-1929

35.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(6 de diciembre de 1923)*

Nuestro país tiene mi principio cardinal de política exterior. Es un principio estadounidense: atender nuestros propios asuntos, conservar nuestra fuerza y proteger los intereses de nuestros ciudadanos en el exterior.

35.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(3 de diciembre de 1924)*

Aunque estamos deseosos de promover la paz en cada rincón del mundo, tenemos especial interés en la paz del hemisferio. Es nuestro deseo que todas las disputas en esta área se solucionen satisfactoriamente. Junto con nuestro deseo de paz está nuestra esperanza de aumentar la prosperidad de nuestras hermanas repúblicas de América Latina, y nuestro interés por promover la cooperación con ellas, siempre inspirado en la más cordial amistad.

35.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1925)*

Es política de nuestras relaciones externas, rechazar cualquier sugerencia de uso de la fuerza y apoyar los procedimientos de tipo pacífico. Hemos buscado en el trato con las demás naciones un mejor entendimiento, fundamental en el intercambio de puntos de vista, avalados siempre con razones. El resultado ha sido una eliminación gradual de disputas, un ajuste de controversias y el establecimiento de una amistad firme entre los Estados Unidos y el resto del mundo, que nunca se dio en épocas anteriores.

35.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de diciembre de 1926)*

Los Estados Unidos son una nación entre naciones que, al tiempo que protegen los derechos internacionales de su gobierno y sus ciudadanos, respetan y reconocen los derechos ajenos.

35.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (*6 de diciembre de 1927*)

Es política de los Estados Unidos promover la paz. Somos un pueblo pacífico, comprometido a resolver nuestras disputas por medios pacíficos y no mediante el uso de la fuerza. Recientemente hemos tenido dificultades con México, provocadas por los daños infligidos a nuestros nacionales y a sus propiedades en ese país. Una firme adhesión a nuestros derechos y un escrupuloso respeto por la soberanía de México nos permitirán resolver nuestras diferencias con paciencia y tolerancia, sin alterar la relación de amistad que existe entre los dos gobiernos. En otro asunto, compañías privadas están interesadas en abrir rutas aéreas a México, Centro y Sudamérica. Damos por hecho que los gobiernos de nuestras hermanas repúblicas cooperarán gustosos en esta empresa.

35.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (*4 de diciembre de 1928*)

Nuestras relaciones con México se encuentran en su mejor momento desde la Revolución. Muchos de los malentendidos se han resuelto y una negociación respetuosa promete un arreglo final de todas las cuestiones pendientes. Es muy gratificante para nosotros que nuestro embajador Morrow haya logrado unir a las dos naciones vecinas —que tienen tantos intereses en común— en una situación de confianza mutua y de respeto por sus respectivos derechos soberanos.

En cuanto a nuestra política hemisférica, tuvo lugar en La Habana, Cuba, la Sexta Conferencia Internacional de los Estados Americanos; esta reunión contribuyó a un mejor entendimiento y cooperación entre las naciones. Por su parte, este gobierno invitó a las 20 repúblicas latinoamericanas a reunirse en una conferencia hemisférica de conciliación y arbitraje, el próximo 10 de diciembre, en la ciudad de Washington. Todas ellas aceptaron.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. Cit., pp. 2573.

36. LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DEPORTADAS 1924-1985¹

LOCALIZACIONES DE PERSONAS DEPORTABLES POR EL SIN 1924-1985

Año fiscal	Total de localizaciones	Aumento porcentual del año anterior	Localizaciones de mexicanos	Aumento porcentual del año anterior	Porcentaje de mexicanos en el total	Año fiscal	Total de localizaciones	Aumento porcentual del año anterior	Localizaciones de mexicanos	Aumento porcentual del año anterior	Porcentaje de mexicanos en el total
1924			4 614			1956	87 696	-65.5	72 442	-70.1	82.6
1925			2 961	-35.8		1957	59 918	-31.7	44 451	-38.6	74.2
1926			4 047	36.7		1958	53 474	-10.7	37 422	-15.8	70
1927			4 495	11.1		1959	45 336	-17.9	30 196	-19.3	66.3
1928			5 529	23		1960	70 684	55.9	29 651	-1.8	41.9
1929			8 538	54.4		1961	88 823	25.7	29 817	0.6	33.6
1930			18 319	114.5		1962	92 758	4.4	30 272	1.5	32.6
1931	22 276		8 409	-54.1	37.7	1963	88 712	-4.4	39 124	29.2	44.1
1932	22 735	2.1	7 116	-15.4	31.3	1964	86 597	-2.4	43 844	12	50.6
1933	20 949	-7.9	15 875	122.3	75.8	1965	110 371	27.5	55 340	26.2	50.1
1934	10 319	-50.7	8 910	-43.9	86.3	1966	138 520	25.5	89 751	62.2	64.8
1935	11 016	6.7	9 139	2.5	83	1967	161 608	16.7	108 327	20.7	67
1936	11 728	6.5	9 534	-4.3	81.3	1968	212 057	31.2	151 705	40	71.5
1937	13 054	11.3	9 534		73	1969	283 557	33.7	201 636	32.9	71.1
1938	12 851	-1.6	8 648	-9.3	67.3	1970	345 353	21.8	277 377	37.6	80.3
1939	12 037	-6.4	9 376	8.4	77.9	1971	420 126	21.7	348 178	25.5	82.9
1940	10 492	-12.8	8 051	-14.1	76.7	1972	505 949	20.4	430 213	23.6	85
1941	11 294	7.6	6 082	-24.5	53.9	1973	655 968	29.7	576 823	34.1	87.9
1942	11 784	4.3				1974	788 145	20.1	709 959	23.1	90.1
1943	11 175	-5.2	8 189		73.3	1975	766 600	-2.7	680 392	-4.2	88.8
1944	31 174	179	26 689	225.9	84.3	1976	875 915	14.3	785 000	15.4	89.7
1945	69 164	121.9	63 602	138.3	92	1976	221 824				
1946	99 591	44	91 456	43.8	91.8	1977	1 042 215	19	954 763	21.6	91.6
1947	193 657	94.4	182 986	100.1	94.5	1978	1 057 977	1.5	976 641	2.3	92.3
1948	492 779	-0.5	179 385	-2	93.1	1979	1 076 418	1.7	998 830	2.3	92.8
1949	288 253	49.5	278 538	55.2	96.6	1980	910 361	-15.4	817 479	-18.2	89.8
1950	468 339	62.5	485 215	74.2	103.6	1981	975 780	7.2	874 433	7	89.6
1951	509 040	8.7	500 000	3	98.2	1982	970 246	-0.6	887 481	1.5	91.5
1952	528 815	3.9	543 538	8.7	102.8	1983	1 251 357	29	1 172 306	32.1	93.7
1953	885 587	67.5	865 318	59.2	97.7	1984	1 246 977		1 170 769		93.9
1954	1 089 583	23	1 075 168	24.3	98.7	1985	1 348 749	8.2	1 266 999	8.2	93.9
1955	254 096	-76.7	242 608	-77.4	95.5	1986	1 767 400	31	1 671 458	31.9	94.6

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 211-213.

37. DISCURSO HERBERT HOOVER

1929-1933

37.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(3 de diciembre de 1929)*

A principios del actual gobierno, nuestro país vecino, México, fue escenario de una insurrección interna. Nosotros mantuvimos el embargo del envío de armas a ese país, pero permitimos que el gobierno, debidamente constituido, pudiera comprar pertrechos de nuestros excedentes del ejército. Por fortuna, el gobierno mexicano pudo sofocar la revuelta con sus propios medios y con pocos daños materiales. Ahora, este país tiene la oportunidad de lograr un desarrollo pacífico. A instancias del gobierno mexicano, hemos suprimido el embargo sobre el envío de armas. Los dos gobiernos han tomado otras medidas encaminadas a promover una relación amistosa y a resolver nuestras diferencias. Se han firmado las convenciones para extender los trabajos de las Comisiones General y Especial de Reclamaciones.

37.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(2 de diciembre de 1930)*

En los pasados doce meses hemos sufrido junto con las demás naciones la depresión económica. Estoy solicitando el fortalecimiento de nuestras leyes de deportación para poder expulsar a los extranjeros indeseables. Miles de personas han entrado a los Estados Unidos violando las leyes de inmigración; la misma manera en que ingresaron es objetable, además de que los nacionales nacidos en los Estados Unidos sufren las consecuencias de ello. Pido al Congreso me proporcione las atribuciones necesarias para corregir ese abuso.

37.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(8 de diciembre de 1931)*

La depresión económica no sólo ha continuado sino que se ha profundizado. Recomendando que las restricciones a la inmigración, ahora en efecto bajo acciones administrativas, tomen carácter de ley. Las leyes de deportación se deben reforzar. Los

extranjeros que entran legalmente a los Estados Unidos deben ser protegidos con un certificado de residencia.

37.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (6 de diciembre de 1932)
La crisis económica de alcance mundial ha persistido durante todo el año.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2575.

38. SALDO NETO MIGRATORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LOS AÑOS 1930-1970¹

SALDO NETO MIGRATORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN SEXO
AÑOS CENSALES DE 1930 A 1970

Entidad federativa	1950-1960			1960-1970		
	Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres
Aguascalientes	-9 063	-4 754	-4 309	-14 600	-6 600	-8 000
Baja California	122 796	63 480	59 316	118 800	61 300	57 500
Baja California Sur	-2 052	-1 389	-663	15 900	7 400	8 500
Campeche	1 307	796	511	13 400	6 500	6 900
Coahuila	-49 914	-26 284	-23 630	-142 400	-75 100	-67 300
Colima	6 435	2 799	3 636	7 700	3 200	4 500
Chiapas	-20 124	-8 357	-11 767	-40 700	-16 700	-24 000
Chihuahua	34 118	14 885	19 233	-56 000	-30 400	-25 600
Distrito Federal	558 597	313 446	245 151	317 000	176 200	140 800
Durango	-78 121	-40 306	-37 815	-116 300	-61 100	-55 200
Guanajuato	-59 205	-30 070	-29 135	-156 600	-83 700	-72 900
Guerrero	-25 235	-14 055	-11 180	-77 900	-32 700	-45 200
Hidalgo	-89 828	-45 122	-44 706	-165 300	-81 900	-83 400
Jalisco	60 093	29 905	30 188	-73 600	-38 800	-34 800
México	-24 627	-6 887	-17 740	1 125 100	559 100	566 000
Michoacán	-71 669	-39 244	-32 425	-270 900	-138 900	-132 000
Morelos	12 194	6 246	5 948	62 900	31 900	31 000
Nayarit	-5 296	-3 453	-1 843	-20 400	-11 300	-9 100
Nuevo León	64 376	30 183	34 193	150 600	72 400	78 200
Oaxaca	-84 291	-41 941	-42 350	-289 900	-144 700	-145 200
Puebla	-105 227	-51 125	-54 102	-190 800	-96 200	-94 600
Querétaro	-25 024	-12 927	-12 097	-28 600	-13 400	-15 200
Quintana Roo	7 342	2 957	4 385	20 700	9 900	10 800
San Luis Potosí	-82 400	-43 055	-39 345	-192 100	-97 900	-94 200
Sinaloa	-34 737	-21 673	-13 064	71 200	28 500	42 700
Sonora	51 389	25 099	26 290	-12 700	-6 100	-6 600
Tabasco	-15 307	-8 872	-6 435	55 600	31 500	24 100
Tamaulipas	31 540	18 730	12 810	48 000	24 900	23 100
Tlaxcala	-20 792	-10 600	-10 192	-67 100	-35 200	-31 900
Veracruz	-22 225	-11 518	-10 707	195 900	102 100	93 800
Yucatán	-39 414	-19 906	-19 508	-71 700	-34 700	-37 000

Nota: Estimación elaborada a través del método de índices de sobrevivencia censal.

Fuente: Para 1930 a 1960: *Dinámica de la Población de México*. El Colegio de México. México, 1981.

Para 1960 a 1970: INEGI. *Censos Generales de Población y Vivienda* (varios años). Ordorica, M., *Migración Interna en México*. México, 1976.

¹ Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 214-215.

39. PRIMERAS DÉCADAS DEL PROGRAMA BRACERO

Durante la primera década del programa bracero, algunas condiciones permanecieron constantes o fueron similares. Los contratos de trabajo garantizaban que el pago del transporte de los centros de reclutamiento en México al sitio de destino y los viáticos, correrían por cuenta del empleador o del gobierno de Estados Unidos; que las habitaciones e instalaciones sanitarias en los lugares de trabajo fueran adecuadas; que el salario sería el “prevaleciente” en la zona para los obreros norteamericanos, pero en ningún caso menos de Dls. 0.30 por hora; que los braceros no deberían ser utilizados para desplazar a trabajadores estadounidenses ni para mermar los salarios existentes; que los contratos serían por un tiempo mínimo que variaba entre 45 y 90 días y por un máximo de un año; que se les garantizaba ocupación por cuando menos tres cuartas partes del tiempo del contrato, y que se prohibía el envío de trabajadores mexicanos a zonas donde México consideraba que se les discriminaba por su origen o nacionalidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo el estado de Texas fue considerado zona de prohibición por este motivo. En los años de la guerra, se prohibió el reclutamiento de braceros por el servicio militar estadounidense.

Durante un periodo breve, los trabajadores contratados bilateralmente se destinaron a la agricultura y también al mantenimiento de las vías ferroviarias. En algunos momentos de esa década, especialmente a partir de 1954, hubo contrataciones no solamente en las estaciones de migración en el interior de la República Mexicana, sino también en la frontera, especialmente en la ciudad de modo acelerado la corriente de indocumentados —llamados entonces “espaldas mojadas”— y el número de mexicanos que eran detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. En 1950 el número de mexicanos que eran detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. En 1950 el número de mexicanos expulsados fue de 500 mil, y llegó a más de un millón en 1954. Ambos gobiernos querían evitar ese flujo. Sin embargo, cuando México se negó a enviar braceros por no estar satisfecho con los términos de

los contratos laborales, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos dejó de hacer cumplir sus leyes para permitirle mano de obra a granjeros texanos. Fue entonces, a principios de los años cincuenta, que el gobierno mexicano situó unos cuantos policías en la zona fronteriza para impedir la salida de indocumentados, y permitió que Estados Unidos los devolviera por avión al interior de la República para dificultarles su regreso.¹

1 Cfr. INEGI, *op. cit.*, pp. 78.

40. DISCURSO FRANKLIN D. ROOSEVELT 1933-1945

40.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de enero de 1934*)

La delegación de los Estados Unidos que trabajó en estrecha colaboración con las otras repúblicas americanas es relevante. Nosotros nos hemos comprometido con nuestros vecinos a evitar en el futuro expansiones territoriales y la interferencia de una nación en los asuntos internos de otra.

40.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*4 de enero de 1935*)

Nuestra política de buena vecindad está siendo entendida y apreciada por la comunidad internacional.

40.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*3 de enero de 1936*)

El 4 de marzo de 1933, en ocasión de mi juramento como presidente de los Estados Unidos, me dirigí al pueblo con el siguiente mensaje:

En el campo de la política mundial, yo quisiera dedicar esta nación a la política de la buena vecindad, la política del vecino que resueltamente se respeta a sí mismo, y porque respeta los derechos de los demás, esta política del buen vecino respeta sus obligaciones y la santidad de los convenios en un mundo en que todos somos vecinos.

Entre las naciones de este gran hemisferio occidental, la política de la buena vecindad ha prevalecido afortunadamente. Nunca, a lo largo de los cuatro siglos y medio de civilización moderna en las Américas, ha existido —en ningún año, década o generación— un espíritu mayor de entendimiento mutuo, de ayuda común y de celo por los ideales de la independencia que el que existe entre las 21 repúblicas americanas y su vecino, los Estados Unidos. La política del buen vecino entre los americanos ha estado presente, y ha sido oportuna y efectiva. En este logro, cada una de las naciones americanas ha tenido una parte significativa. No hay guerra, ni rumores de guerra, ni deseos de guerra. Los 250 millones de habitantes de esta vasta área geográfica que se

extiende a más de 8 000 millas desde el Ártico hasta el Antártico, creen y se proponen seguir la política de la buena vecindad.

40.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de enero de 1937)*

Recientemente visité tres hermanas repúblicas de la América Latina. La recepción de la que fui objeto constituyó un tributo a la democracia. Los pueblos de las naciones americanas están convencidos de la forma democrática de gobierno y no están dispuestos a cambiarla por ninguna otra. La Conferencia Interamericana trabajó bajo estos supuestos democráticos y se establecieron nuevos mecanismos para mantener la paz y eliminar las causas de guerra en el continente. También se diseñó una protección más amplia a los intereses de las naciones americanas en caso de agresión externa y se reafirmó el respeto y el cumplimiento de los tratados y del derecho internacional.

40.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL *(3 de enero de 1938)*

Estamos resueltos a respetar el derecho de los demás y a exigir, asimismo, el respeto de nuestros derechos.

40.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de enero de 1939)*

En el hemisferio occidental tenemos, bajo el ideal común del gobierno democrático, una rica diversidad de recursos y de gente trabajando conjuntamente en paz y respeto mutuo.

40.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(3 de enero de 1940)*

Las 21 repúblicas americanas, expresando la voluntad de 250 millones de personas que desean mantener la paz y la libertad en el continente, han dado muestras de unanimidad en sus ideales. Nosotras, las naciones del continente americano, hemos logrado mantener nuestras respectivas nacionalidades, sin amenazar al mismo tiempo la existencia nacional de nuestros vecinos,

40.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de enero de 1941)*

Desde 1815 a 1914 —99 años— ninguna guerra en Europa o en Asia representó un peligro real para nuestro futuro o para el futuro de las otras naciones americanas. Con excepción del interludio de Maximiliano en México, ninguna nación extranjera ha pretendido establecer su poder en el hemisferio.

40.9 NOVENO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de enero de 1942)*

Las fuerzas norteamericanas se comprometen a proteger el hemisferio.

40.10 DÉCIMO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de enero de 1943)*

Ganar la guerra es nuestro principal objetivo. Mantener la paz es nuestro siguiente objetivo.

40.11 UNDÉCIMO INFORME PRESIDENCIAL (*11 de enero de 1944*)

En los últimos dos años, los Estados Unidos, junto con las naciones del continente americano, se han convertido en un socio activo de la lucha contra la esclavitud humana. Nuestra política exterior se guía por un sentido estricto de justicia.

40.12 DUODÉCIMO INFORME PRESIDENCIAL (*6 de enero de 1945*)

Nosotros y nuestros aliados continuaremos luchando hasta obtener la victoria final.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2579 y 2580.

41. REPATRIACIÓN DE INDOCUMENTADOS EN LOS AÑOS 40'S Y SUCESIVOS

En 1940 el número de mexicanos inmigrantes fue de 377 mil, menos que en 1920. En esa época el gobierno de México se quejó por las acciones que se tomaron para devolver a muchos por la fuerza, y los cónsules mexicanos facilitaron el regreso voluntario de otros.¹

A solicitud de Estados Unidos, en 1942 el presidente Ávila, Camacho aceptó la firma de un convenio que regulaba por primera vez, en forma bilateral, el movimiento migratorio. Se consideró que este primer convenio de braceros garantizaba los derechos y las condiciones de trabajo, evitaba los abusos tan frecuentes en años anteriores, permitía obtener experiencia en el uso de técnicas agrícolas avanzadas, y generaría un ingreso adicional de divisas. Para Estados Unidos, la colaboración de México en materia de trabajadores agrícolas fue importante en el esfuerzo nacional de guerra.

Después que se inició el programa de braceros, especialmente a partir de 1944, creció en forma progresiva el número de indocumentados detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN). Desde entonces, el aumento en estas aprehensiones ha sido tomado como indicador aproximado del crecimiento del número de personas que cruzan ilegalmente la frontera. El número de aprehensiones, sin embargo, no ofrece una referencia del todo confiable, pues no sólo depende de la magnitud de la corriente migratoria, sino también el número de policías que destine el SIN a la aprehensión de indocumentados y la eficacia para detenerlos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el número de indocumentados mexicanos detenidos aumentó hasta llegar al máximo de 1 075 168 en el año fiscal 1954 (1° de julio de 1953 a 30 de junio de 1954). En junio de 1954, se inició una campaña coordinada por Joseph Swing, ex general del ejército recién nombrado comisionado de inmigración, para expulsar en masa a los indocumentados. La campaña, conocida como “operación espada mojada”,

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 216-218.

logró devolver a muchas personas a México, por cuya razón disminuyó abruptamente el número de detenidos por el SIN en 1955 y en los años siguientes. Paralelamente se facilitó la legalización de indocumentados, y aumentó el número de braceros contratados después de 1954. En 1960 empezó un nuevo periodo de crecimiento en el número de indocumentados mexicanos detenidos por las autoridades migratorias estadounidenses. En el año fiscal 1960, el SIN detuvo 70 684 extranjeros indocumentados, de los cuales 29 817 fueron mexicanos; en 1985, las cifras llegaron a 1 348 749 y 1 266 999 respectivamente.¹

En 1944, poco después de haberse iniciado el envío de trabajadores contratados, aumentó sensiblemente la afluencia de mexicanos sin documentos a Estados Unidos. Esta migración creció de tal manera que a principio de los años cincuenta era más grande que la de contratados. A partir de 1946, el gobierno mexicano, deseoso de obtener mayor volumen de divisas para impulsar un ambicioso programa de desarrollo económico, favoreció la emigración de braceros. La fuga de indocumentados (“espaldas mojadas”) fue interpretada como prueba de la indiferencia del gobierno a los problemas de los campesinos y de la injusticia social de su política económica. En parte por esta razón, se buscó fortalecer las garantías contractuales de los braceros en la mesa de negociaciones, mientras el gobierno de Estados Unidos se mostraba dispuesto a relajar la vigilancia fronteriza para permitir el ingreso ilegal de mexicanos. En 1954 se presentó un conflicto. Estados Unidos no quiso mantener las garantías a los braceros y, contra la voluntad del gobierno de México, dejó caducar el convenio y empezó a contratar trabajadores unilateralmente. El gobierno de México trató de impedir por la fuerza la salida de braceros, pero no logró conseguirlo; poco después solicitó la reanudación de las pláticas con Estados Unidos, a fin de llegar a otro arreglo, y colaboró en la expulsión de indocumentados proporcionando el transporte desde la frontera hasta sus comunidades de origen. A juicio de algunos observadores, la emigración era una “válvula de escape”: amortiguaba la falta de empleo y las tensiones sociales en México y se le consideraba un mal necesario. Después de 1954 el servicio consular mexicano mostró menos interés en vigilar el cumplimiento de los contratos de braceros, y el gobierno una grave indiferencia respecto de la situación de sus connacionales en Estados Unidos. El convenio de braceros terminó en 1964, muy a pesar de las protestas del gobierno de México, para quien esa medida no frenaría la migración y sí aumentaría la corriente ilegal de trabajadores. La conclusión de ese convenio fue el motivo principal de que se estableciera, en 1965, el programa de industrialización de la frontera del norte, manifiesto en la implantación de la industria maquiladora. México buscaba así crear empleos en su territorio para emplear a los braceros que regresaban de Estados Unidos. Sin embargo, desde un principio se contrató a residentes de ciudades fronterizas, muchos de ellos mujeres jóvenes y solteras, y no a trabajadores migratorios repatriados.²

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2579.

2 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2574 y 2575.

42. DISCURSO HARRY S. TRUMAN 1945-1953

42.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(14 de enero de 1946)*

El año de 1945 implicó la derrota final de nuestros enemigos. Ahora tenemos ante nosotros la tarea de construir una paz justa y duradera.

En los meses de febrero y marzo, en la ciudad de México tuvo lugar la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Paz y de la Guerra. Entre los acuerdos tomados está la consideración de que un ataque externo contra una república americana constituía un ataque contra todas. En tal circunstancia, las repúblicas americanas adoptarían, conjuntamente, las medidas necesarias para su mutua protección. Este acuerdo estipula la perfecta concordancia con el espíritu de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

42.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de enero de 1947)*

Continuaremos trabajando con nuestros vecinos para lograr una paz permanente.

42.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(7 de enero de 1948)*

Estamos determinados a conseguir la paz. Luchamos contra la pobreza, el hambre y el sufrimiento. Esto conduce a la paz, no a la guerra. Estamos construyendo un mundo donde todas las naciones, Pequeñas o grandes, puedan vivir en libertad, lejos de la amenaza de la agresión. Esto conduce a la paz, no a la guerra. Sin embargo, sobre todo, estamos luchando por lograr un entendimiento real con nuestros vecinos, con todos los pueblos del mundo, basado en la dignidad de los individuos y en la hermandad de los hombres. Esto conduce a la paz, no a la guerra.

42.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(5 de enero de 1949)*

El corazón de nuestra política exterior es la paz. Por tanto, apoyamos la organización mundial para mantener la paz y una política económica mundial orientada a crear

prosperidad para la humanidad. Nuestro principio es la cooperación internacional que empieza con nuestros vecinos.

42.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de enero de 1950)*

Nos hemos movido de la orilla al centro del acontecer mundial. Las naciones miran hacia nosotros en busca de una utilización sabia de nuestro poder económico y militar y de un apoyo vigoroso de gobierno representativo y sociedad libre. No les vamos a fallar.

42.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL *(8 de enero de 1951)*

El imperialismo soviético tiene dos maneras de lograr su trabajo de destrucción. Pueden usar el método de subversión y de revolución interna, o usar el método de agresión externa. Nosotros estamos atentos para detenerlos, con la colaboración de nuestros vecinos del hemisferio occidental y de las naciones libres del mundo entero.

42.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(9 de enero de 1952)*

La paz depende de que las naciones libres permanezcan juntas. A ese respecto, 1951 fue un año de éxito.

42.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de enero de 1953)*

Los principios de seguridad colectiva para repeler la agresión han encontrado amplia expresión en el Tratado de Rio de Janeiro, firmado por todas las repúblicas americanas.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2587.

43. UMBRALES DE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN

En 1950 se promulgó la Ley de Seguridad Interna, que estipuló la exclusión y la deportación de inmigrantes potencialmente peligrosos para la seguridad nacional; en 1951, la Ley Pública 78, que institucionalizó el ingreso de braceros mexicanos para trabajar en empleos agrícolas; y en 1952, la segunda ley orgánica de inmigración, que con algunas enmiendas se mantiene vigente. La Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como McCarren-Walter Act, mantuvo la estructura esencial de la ley de 1917, aun cuando modificó la distribución de visas para impulsar un mayor número de inmigrantes que tuvieran cierta preparación o calificación. El sistema de cuotas de visas para los países fuera del continente americano permaneció igual que bajo la ley de 1924. En la nueva ley también se intentó, hasta cierto punto, combatir el fenómeno de la inmigración de indocumentados, especialmente mexicanos, pues se incorporó la cláusula que se conoce como “albergar indocumentado”, la cual castiga penalmente a quien lo introduzca, transporte u hospede, pero no a quien le dé empleo. El gobierno mexicano presentó proposiciones para corregir esa irregularidad, pero después de un año de debates el Congreso de Estados Unidos decidió que darle empleo a un indocumentado no se considera “albergarlo” y en consecuencia no es sancionable. Esta cláusula es conocida como la *Texas Proviso* porque fueron los legisladores texanos quienes la promovieron. La cláusula facilitó la práctica de que el patrón decida, con impunidad, cuándo considerar al indocumentado como trabajador, contratándolo, y cuándo tratarlo como criminal, denunciándolo a las autoridades migratorias. Esta disposición, paradójicamente, alentó la migración y, a la vez, permitió reprimir al indocumentado: legitimó la contratación del trabajador —mas no el ingreso y la permanencia— y lo mantuvo bajo amenaza.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 219-220.

44. DISCURSO DWIGHT D. EISENHOWER 1953-1961

44.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(2 de febrero de 1953)*

Nuestro país ha salido de un periodo muy doloroso de ensayo y desilusión desde la victoria de 1945. Habíamos anticipado un mundo de cooperación y paz. Sin embargo, las presiones del comunismo internacional nos han llevado a vivir en un mundo en constante terremoto. Reconocemos que ninguna nación por sí sola, aun tan poderosa como la nuestra, puede defender la libertad de todas las naciones amenazadas por una agresión comunista o por una subversión interna. Se hace necesario establecer pactos de asistencia recíproca en el hemisferio occidental.

44.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(7 de enero de 1954)*

La libertad de los americanos estará amenazada mientras exista el peligro comunista. En la unidad del mundo libre está nuestra mejor oportunidad para reducir el peligro comunista, sin recurrir a la guerra. En este sentido, en el hemisferio occidental seguiremos desarrollando una cooperación armoniosa y mutuamente benéfica con nuestros vecinos.

44.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(6 de enero de 1955)*

Es necesario atender la naturaleza de la guerra que el mundo de hoy enfrenta. No se trata meramente de una lucha de teorías económicas, de formas de gobierno o de fuerza militar. Es algo mucho más profundo que tiene que ver con la naturaleza misma del hombre. El año pasado se registró un avance considerable en la lucha por la libertad y justicia en el mundo, gracias a que varias naciones se congregaron para actuar colectivamente; naciones tales como las de este continente que, en las históricas reuniones de Bogotá y Caracas, cenaron filas contra el comunismo y fortalecieron sus lazos económicos con los Estados Unidos.

44.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (5 de enero de 1956)

Ante el poder militar comunista, debemos continuar los esfuerzos por un sistema efectivo de seguridad colectiva. Esto implica dos cosas: un sistema que dé una clara advertencia de que cualquier agresión armada será repelida por la acción conjunta de naciones libres, y un efectivo poder militar que respalde esta advertencia.

En el último año hemos obtenido importantes logros en los sistemas de seguridad colectiva. En nuestro hemisferio, el sistema interamericano ha dado muestras de su vitalidad para mantener la paz.

44.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL (10 de enero de 1957)

Ningún hombre en el pleno uso de su razón puede cuestionar la necesidad que tienen nuestros vecinos de ser más prósperos y estar más seguros. Su seguridad y prosperidad está ligada a la nuestra, por lo que nos hemos unido con ellos en este histórico empeño.

44.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL (9 de enero de 1958)

La amenaza para nuestra seguridad sigue siendo el imperialismo comunista; debemos, por tanto, continuar nuestros esfuerzos para fortalecer los sistemas de seguridad colectiva, particularmente con nuestros vecinos del hemisferio occidental.

44.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL (9 de enero de 1959)

Necesitamos seguir construyendo una base económica que garantice la estabilidad y fuerza del mundo libre. Ahora estamos negociando con los delegados de las veinte repúblicas latinoamericanas la creación de una institución financiera interamericana. El propósito de la misma sería reunir a todas las repúblicas americanas en una institución común para fomentar y financiar el desarrollo de América Latina. Un resultado importante de esto sería hacer un uso más eficaz del capital procedente del Banco Mundial, el Banco de Exportación-Importación y de fuentes privadas.

44.8 OCTAVO INFORME PRESIDENCIAL (7 de enero de 1960)

En mi reciente visita a diversos países del hemisferio encontré que muchos de ellos han tomado para su gobierno elementos de la Constitución de los Estados Unidos y que comparten nuestros ideales en el mundo. A pesar de que desafortunadamente la penetración comunista es real en Cuba, un régimen dominado por los comunistas ha sido derrocado en Guatemala.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2577.

45. GARANTÍAS LABORALES Y REPATRIACIÓN EN LOS AÑOS 50'S

A fines de 1953, el gobierno estadounidense presionó exitosamente al mexicano para que éste permitiera la reducción de ciertas garantías laborales en el convenio de braceros; su propósito, que se logró en dos años, fue la sustitución en masa de indocumentados por trabajadores contratados legalmente. En junio de 1954, con la colaboración del gobierno mexicano, Estados Unidos emprendió una campaña de deportación llamada “Operación espalda mojada”, mediante la cual se expulsó a cientos de miles de indocumentados y se obligó a empleadores a contratar braceros bajo términos más favorables que antes. Según Ernesto Galarza, que levantó una encuesta en 1955 en los campos agrícolas de California, las condiciones formales de contratación de los braceros no se respetaron, las autoridades mexicanas y norteamericanas no se dieron por enteradas, y los trabajadores legales no se distinguían de los indocumentados, algunos de los cuales trabajaban para los mismos patrones en las mismas fincas, bajo las mismas condiciones. En el cuadro 1 se observa que entre 1954 y 1959 fueron contratados 2 459 429 braceros y expulsados 1 502 107 indocumentados; de éstos, 1 075 168 en 1954. Esto revela el éxito de la política de Estados Unidos de sustituir la corriente migratoria de indocumentados por otra de braceros, aunque con garantías laborales mínimas. En esos años, las divisas que entraron a México por este concepto parecen haber ascendido a Dls. 200 millones. A partir de 1959, fue ostensible la oposición norteamericana al programa de braceros. Este se suspendió en 1963, aunque las protestas mexicanas en el sentido de que el país necesitaba tiempo para absorber el regreso definitivo de esos trabajadores, prolongó su vigencia hasta el último día de 1964. La embajada, mexicana en Washington advirtió que con ello no terminaría la migración, sino que aumentaría la de indocumentados. Esto parece comprobarse en las estadísticas de expulsados después de la conclusión del programa bracero.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 221-223.

46. DISCURSO JOHN E KENNEDY 1961-1963

46.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(30 de enero de 1961)*

En América Latina, los agentes comunistas están tratando de aprovechar en su favor a la Revolución cubana, para establecer ahí una base militar, a sólo noventa millas de nuestras costas. No cuestionamos el derecho de los cubanos a una vida mejor. Cuestionamos el dominio externo y la tiranía local. El progreso económico y la política comercial se pueden negociar; lo que no se puede negociar es el dominio comunista del hemisferio.

Pedimos a nuestras hermanas repúblicas trabajar juntas con el fin de liberar al continente del dominio externo y de las tiranías locales.

Estamos conscientes de que nuestro papel en el mundo es la construcción y expansión de la economía en los países no comunistas, ayudándolos a resolver sus problemas, a satisfacer sus necesidades y a enfrentar los peligros que los amenazan. Por tanto, pido al Congreso la autorización de un programa más efectivo de asistencia económica, educacional y de desarrollo social en estos países. Para nuestras hermanas repúblicas del sur contemplamos una nueva alianza, la Alianza para el Progreso. Nuestro objetivo es una América Latina más libre y próspera.

46.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(11 de enero de 1962)*

La Alianza para el Progreso se ha transformado rápidamente de una propuesta en un programa. El mes pasado, en América Latina, pude constatar con mis propios ojos el restablecimiento de su seguridad y de la confianza en nuestro país, tanto entre campesinos y obreros como entre diplomáticos. Hemos comprometido nuestra ayuda en favor de su desarrollo económico, educacional y social. A su vez, las repúblicas latinoamericanas han comprometido su esfuerzo para ayudarse a sí mismas y realizar sus reformas.

Para apoyar esta empresa, la Alianza para el Progreso solicitó al Congreso un fondo de tres billones de dólares adicionales.

46.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*14 de enero de 1963*)

En relación con el mundo allende nuestras fronteras, un progreso constante está llevando a la construcción de un nuevo orden mundial. En Cuba, a pesar de que la amenaza todavía persiste, logramos desterrar un peligro mortal. El trauma que implicó convertir a Cuba en una base nuclear soviética aún está en el aire. Es muy difícil para cualquier nación enfrentar un peligro externo cuando todas sus energías están puestas en combatir la pobreza y la desesperación. Por eso, estoy orgulloso del vasto programa de cooperación para lograr mayor crecimiento económico y progreso social que, bajo el nombre de Alianza para el Progreso, se inició en los años sesenta. No subestimo las dificultades que enfrenta el programa con nuestros vecinos más cercanos, pero los Estados libres del hemisferio, trabajando en estrecha colaboración, han empezado a hacer de esta Alianza una realidad.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2580.

47. ENMIENDAS A LA LEY DE INMIGRACIÓN

Desde 1952, se han hecho a la ley de inmigración cuatro enmiendas principales. La primera, en 1965, abolió el sistema de cuotas sobre origen nacional y fijó en 120 mil el número global de visas otorgables a los países del hemisferio occidental, y en 20 mil el límite para cada uno de los demás países. Dentro de estos márgenes, se establecieron categorías y porcentajes según la calificación en el trabajo del solicitante o su parentesco con nacionales norteamericanos o inmigrantes residentes en Estados Unidos. Se eximió de estas restricciones (las 20 mil visas anuales por país y el límite global para inmigrantes “cuotas”) a los “parientes inmediatos” —padres, hijos y hermanos— de ciudadanos norteamericanos. Estos criterios propenden a la “reunificación familiar”. La segunda enmienda, en 1976, hizo extensiva la limitación numérica de 20 mil visas anuales por país a los solicitantes de naciones americanas. El número de mexicanos admitidos como inmigrantes en los años anteriores a 1976 había variado entre 60 mil y 70 mil, a partir de 1977 descendió a 44 mil. Posteriormente aumentó el número de visas debido al fallo de un tribunal, el cual señaló que el Servicio de Inmigración y Naturalización había reducido indebidamente las visas disponibles por haber incluido a los refugiados disponibles por haber incluido a los refugiados cubanos de los años sesentas dentro de la cuota de inmigrantes. Durante los últimos años, el número de visas ha oscilado entre 50 mil y 60 mil, a causa de que muchos miles de mexicanos se han naturalizado norteamericanos para facilitar la obtención de visas a sus parientes, fuera de la restricción numérica anual de las 20 mil. La tercera enmienda fue la Ley de Refugiados de 1980, que incorporó la definición de refugiado político adoptada por la Organización de Naciones Unidas y estimó en 50 mil —aunque sin fijarlo rígidamente— el número de visas para atender esos casos. Y la cuarta enmienda fue la Ley de Control y Reformas Migratorias, conocida como ley Simpson-Rodino por sus autores principales: el senador Alan K. Simpson y el diputado Peter Rodino. Así

culminó el debate que inició Rodino en 1971, sobre qué medidas adoptar para reducir la inmigración de indocumentados.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 224-225.

48. DISCURSO LYNDON B. JOHNSON 1963-1969

48.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(30 de enero de 1964)*

En 1964 estaremos más preparados que nunca para defender la causa de la libertad, dondequiera que sea amenazada. Hanoi y Cuba han estado enviando hombres y armas a través de las fronteras internacionales, para fomentar la insurrección.

Debemos ser mejores vecinos de los Estados libres de las Américas, trabajando, dentro de la Organización de los Estados Americanos, por una Alianza para el Progreso más fuerte y con los hombres y mujeres de este continente que creen en la libertad y en la justicia para todos.

48.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de enero de 1965)*

Con las repúblicas libres de América Latina, yo siempre he sentido —mi país siempre ha sentido— lazos especiales de interés y afecto. Será el propósito de esta administración estrechar estos lazos. Juntos compartiremos y forjaremos el destino del nuevo mundo. El año que entra, tengo planeado realizar una visita a América Latina. Por lo pronto mantengo mi compromiso de la Alianza para el Progreso como un instrumento de guerra contra la pobreza y la injusticia en el hemisferio.

48.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(12 de enero de 1966)*

Tomaremos nuevas medidas este año para fortalecer la Alianza para el Progreso.

48.4 CUARTO FORME PRESIDENCIAL *(1° de enero de 1967)*

En relación con la América Latina, los jefes de gobierno se reunirán en breve para dar a la política hemisférica una nueva dirección.

Hemos recorrido un largo trecho desde 1960 en Bogotá, cuando, bajo el liderazgo del presidente Eisenhower, se dio inicio al esfuerzo del desarrollo económico y social de la región. La Alianza para el Progreso avanzó espectacularmente con el presi-

dente Kennedy. Hoy en día es posible que la voz del pueblo sea oída; que la dignidad del individuo sea más fuerte que nunca en este hemisferio, y que podamos enfrentar y resolver conjuntamente los problemas. En este hemisferio se puede lograr la reforma bajo la democracia, simplemente porque ya ha ocurrido. Creo que podemos derribar las barreras que impiden una cooperación plena entre las naciones americanas y liberar energías y recursos de este gran continente en beneficio de todos.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, *op. cit.*, pp. 2577-2578.

49. INTENSIFICACIÓN DEL DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE MIGRACIÓN

Desde principios de los años setentas, se ha ido intensificando el debate sobre la migración de indocumentados mexicanos. En Estados Unidos, la discusión ha girado principalmente en torno a una serie de iniciativas de ley, algunas presentadas por congresistas y otras por el ejecutivo; y en México se ha tratado de prever cuáles serían los posibles efectos de esas iniciativas, en caso de aprobarse, y de formular las medidas que el gobierno debería adoptar para atender este problema.

Las propuestas de legislación y la Ley Simpson-Rodino. 1. *Proposiciones del presidente Carter*. Aunque los presidentes Richard Nixon y Gerald Ford presentaron propuestas para afrontar el creciente problema político de los indocumentados, James Carter fue más explícito. En agosto de 1977 una iniciativa que fue conocida como el *Alien Adjustment and Employment Act of 1977*; aunque no prosperó, su contenido fue un modelo para iniciativas posteriores. Este proyecto de ley proponía: a. aplicar multas hasta de Dls. 1 000 a los empleadores que contratasen un trabajador indocumentado a sabiendas; b. redoblar la aplicación de las leyes laborales, especialmente en zonas y sectores de actividad donde hubiera una concentración de trabajadores indocumentados; c. regularizar el estatus de extranjeros sujetos a deportación: como inmigrantes, a los indocumentados que hubieran permanecido en forma continua desde 1970, y como no inmigrantes a quienes hubieran ingresado entre el 1º de enero de 1970 y el 1º de enero de 1977; d. reforzar la vigilancia por parte de la Patrulla Fronteriza; y e. buscar formas de cooperación con los países de origen de los indocumentados con el fin de impulsar sus economías y controlar mejor las actividades de los enganchadores. El plan Carter rechazaba explícitamente la ampliación del número de visas H-2. No obstante, el Presidente recomendó una revisión de ese mecanismo de admisión de trabajadores, y el examen de la política de inmigración en su totalidad. El plan Carter fue objetado y el Congreso no aprobó las propuestas, salvo la última.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 226-227.

50. DISCURSO RICHARD M. NIXON 1969-1974

50.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(22 de enero de 1970)*

Hemos basado nuestra política en una visión del mundo tal como es hoy, y no como fue hace 25 años, al término de la segunda Guerra Mundial. Muchas de nuestras políticas que eran necesarias y correctas entonces, hoy son obsoletas.

Ni la defensa ni el desarrollo económico de las demás naciones debe ser una tarea exclusiva de los Estados Unidos. Cada nación debe ser responsable de su propio bienestar y sólo ellas pueden determinar el sentido de, ese bienestar. Eso no quiere decir que renegamos de nuestra responsabilidad. Al contrario, se ha iniciado un nuevo acercamiento con la América Latina en el que el trato es de socio más que de patrón.

50.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(22 de enero de 1971)*

Cuando las trece colonias declararon su independencia hace más de dos siglos, abrieron las puertas de los Estados Unidos a una nueva visión de libertad y de desarrollo humano, no sólo para una élite, sino para todos. Sin embargo, para el negro estadounidense, para el indio y para el mexicano estadounidense no ha sido así. La nación necesita abrir sus puertas para proporcionar iguales oportunidades y dignidad humana a todos.

50.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(20 de enero de 1972)*

Los Estados Unidos no son la policía del mundo, ni los encargados de resguardar su moralidad. Sin embargo —nos guste o no— representan una fuerza de estabilidad en un mundo en continua ebullición; una fuerza de justicia en un mundo injusto; una fuerza de progreso en un mundo urgentemente necesitado de progreso. Por tanto, los Estados Unidos están obligados con el mundo, y deben redefinir sus relaciones externas, así como determinar su capacidad defensiva y elaborar un programa de asistencia externa más realista. Uno de los frentes en donde los Estados Unidos pugnan por una acción colectiva es el referente al esfuerzo por combatir las drogas, eliminando sus

fuentes de abastecimiento e intensificando la lucha contra los narcotraficantes y de aquellos que los protegen.

50.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(20 de enero de 1973)*

Los Estados Unidos harán honor a sus tratados y a sus obligaciones internacionales, harán su parte en la defensa de la libertad; sin embargo, las demás naciones tienen que poner de su parte lo que les corresponde.

50.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL *(30 de enero de 1974)*

Continuaremos nuestros esfuerzos para lograr un desarrollo económico pacífico en la América Latina.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2584.

51. INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERSECRETARIAL (1973)

En 1973 se integró la Comisión Intersecretarial (mexicana) para el Estudio de los Problemas Derivados de la Emigración de Indocumentados. El tema de los migrantes surgió en las pláticas que el presidente Echeverría sostuvo con el presidente Richard Nixon, cuando aquél visitó la Unión Americana. La Comisión Intersecretarial propuso: a. colocar personal consular mexicano en los centros de detención en Estados Unidos; b. tomar medidas para evitar el uso ilegal de credenciales gubernamentales; c. impedir la acción, de modo bilateral, de los enganchadores y falsificadores de documentos; y d. analizar la posibilidad de una contratación directa de trabajadores mexicanos por parte de los empleadores norteamericanos. Sin embargo, a fines de 1974 el gobierno de México modificó su posición, persuadido de que un nuevo programa de braceros no necesariamente resultaría en una sustitución de indocumentados por trabajadores legales, sino que cabría esperar que se fomentara aún más la emigración de indocumentados. La nueva política consistió en tratar de solucionar el problema internamente, mediante el mejoramiento de calidad de vida y de trabajo de los campesinos mexicanos. Esta nueva orientación se expresó en los dos últimos informes del presidente Echeverría.¹

52. INCREMENTO DE LA MAGNITUD E INTENSIDAD DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS²

Una primera expresión de los nuevos patrones migratorios consiste en el extraordinario incremento en la magnitud e intensidad del fenómeno a partir de la década de los setenta. Fuertemente condicionado por importantes factores de corte económico (demanda y oferta), social (redes) y político, el flujo neto anual de migrantes mexicanos registra un notable incremento. Mientras la pérdida neta anual era de alrededor de 235 mil personas en la década de los ochenta, estimaciones recientes del CONAPO

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 228-229.

2 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2587-2588.

señalan que la cifra ascendió a alrededor de 460 mil personas (documentadas e indocumentadas) en el periodo 2000-2006 (Galindo y Ramos, 2009). Las encuestas más recientes sugieren una tendencia declinante, de magnitud aún imprecisa, en los flujos mexicanos hacia Estados Unidos desde 2006, la cual guarda relación con un contexto político y social más adverso a la inmigración procedente de México y, sobre todo, con la recesión de la economía norteamericana que ha incidido negativamente en las oportunidades laborales de la población mexicana.

Como resultado del intenso dinamismo migratorio a lo largo de las últimas décadas, se ha asistido a un abrumador aumento del número de mexicanos residentes en el vecino país del norte. La información de los censos norteamericanos muestra que en 1970 residían en Estados Unidos cerca de 865 mil mexicanos, en 1980 la cifra ascendió a 2.2 millones (véase gráfica 1). La población mexicana siguió creciendo y consolidándose en las décadas siguientes, coadyuvada por los procesos de inmigración laboral y de reunificación familiar (formales e informales). Así en 1990 el volumen de mexicanos en Estados Unidos se duplicó, al sumar 4.4 millones y en el año 2000 ascendió a 9.3 millones. En el 2007, su monto ascendió a alrededor de 11.9 millones de personas, de las cuales 44% eran mujeres. Cabe destacar que si bien el incremento observado entre 2000 y 2007 representó un crecimiento absoluto de alrededor de 2.6 millones de personas, ello refleja un ablandamiento significativo reducción del ritmo de crecimiento respecto al observado en décadas anteriores. Es importante subrayar que, desde la perspectiva del país de origen, el impacto demográfico de la migración mexicana ha crecido de manera muy significativa. Basta decir que, en la actualidad, alrededor de 11% de la población nativa de México vive en Estados Unidos, y que en 1970 ese valor ascendía a 1.8%.

53. DISCURSO GERALD R. FORD

1974-1977

53.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (*15 de enero de 1975*)

En un mundo conformado por 150 naciones, donde la tecnología nuclear está proliferando y los conflictos regionales continúan, la seguridad internacional no se puede dar por sentada. Los países en desarrollo ven sus esperanzas para satisfacer su hambre y para crecer, truncadas por la crisis económica. El mundo que nosotros deseamos dependerá de una amplia política que contemple incentivos mutuos de cooperación.

53.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL (*19 de enero de 1976*)

La venta de drogas *duras* se ha incrementado en los Estados Unidos de manera dramática. He dado instrucciones a todas las agencias del gobierno federal para que tomen las medidas necesarias contra aquellos que trafican con drogas.

Como presidente sostuve pláticas personales con los mandatarios de México, Colombia y Turquía para conjugar esfuerzos en un control efectivo de la producción y tráfico de las drogas *duras*.

53.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL (*12 de enero de 1977*)

Un diálogo histórico se ha iniciado entre las naciones industrializadas y las que están en proceso de desarrollo. La mayor parte de las iniciativas provienen de los Estados Unidos, en particular las referentes a alimentación, energía, tecnología, comercio e inversión. Con América Latina nuestras relaciones han adquirido mayor madurez y un sentido de empresa común.¹

1 LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio: Emigración mexicana a Estados Unidos: Balance de las últimas décadas, 2009, pp. 106-107, http://www.paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf

54. DISCURSO JAMES E. CARTER 1977-1981

54.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(19 de enero de 1978)*

Son cinco los objetivos que persigue la política exterior de los Estados Unidos: asegurar su liderazgo moral, estrechar lazos tradicionales con amigos y aliados, trabajar por un orden moral más justo, promover la reconciliación regional y preservar la paz mediante el control del armamentismo. Nos interesa construir una nueva relación con las naciones en proceso de desarrollo, y tenemos un firme compromiso con los derechos humanos en todo el mundo. En relación con América Latina y el Caribe, este gobierno reconoce la diversidad de la región. Otorgamos, asimismo, suma importancia a la protección y defensa de los derechos humanos, a la reducción de la proliferación de las armas nucleares, a la restricción de la venta de armas convencionales, a la solución pacífica de controversias y a la ampliación de la participación de los gobiernos de la América Latina en las negociaciones económicas de carácter global. Por tanto, estamos buscando la ratificación, por nuestro Senado, del Protocolo del Tratado de Tlatelolco y de la Convención Americana de Derechos Humanos. A través del Grupo del Caribe intentamos promover el desarrollo regional y nos proponemos ayudar a varias naciones a buscar fuentes alternativas de energía.

54.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(23 de enero de 1979)*

Uno de los problemas más difíciles y delicados que enfrenta actualmente la nación es el relativo a los indocumentados. Creo que es una cuestión que debe ser tratada a la luz de sus causas y sus efectos. En mi próxima visita a México lo discutiré con el gobierno de aquel país y me comprometo a no tomar ninguna decisión final, sino hasta después de realizadas las debidas consultas. Entre las metas fijadas por la actual administración en lo referente a la política exterior, se encuentra la promoción y la defensa de los derechos humanos y el establecimiento de nuevas bases que conduzcan a la creación de una verdadera comunidad internacional.

Mi viaje a México se sitúa en este contexto. México es importante para nosotros no sólo porque es nuestro vecino, sino también porque es una de las democracias más vigorosas del hemisferio y el líder de las naciones en desarrollo. Como vecinos, compartimos una serie de intereses comunes —comercio, migración, crecimiento económico y desarrollo social— que ofrecen una oportunidad para establecer una relación singularmente productiva y cooperativa.

54.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(23 de enero de 1980)*

Desde el principio de mi administración me he esforzado mucho por forjar una nueva relación, de mayor colaboración, con las naciones de América Latina y del Caribe. Un nuevo trato basado en un firme compromiso con los derechos humanos, la democracia, el desarrollo económico y con el respeto a la no intervención. Los sucesos de 1979 —a pesar de las turbulencias en América Central— nos dieron la oportunidad de movernos en esa dirección.

Durante 1979 me reuní en dos ocasiones con el presidente de México para discutir sobre las oportunidades y los problemas que presenta la relación entre los dos países. Al respecto, hemos tomado medidas importantes entre las que figura un acuerdo sobre el gas natural y el comercio.

54.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(16 de enero de 1981)*

Los principios que regulan nuestra política exterior en el hemisferio han sido claros y constantes en los cuatro últimos años. Apoyamos la democracia y el respeto a los derechos humanos. Hemos luchado, al lado de muchos más, para liberar a la región de la represión y del terrorismo. Hemos respetado la diversidad ideológica y nos hemos opuesto a la intervención extranjera en los asuntos de carácter estrictamente interno. Sin embargo, en respuesta a una petición de asistencia, por parte de una nación amenazada por una potencia externa, actuaremos en favor de la primera. Apoyamos el desarrollo social y económico dentro de un marco democrático. Apoyamos la solución pacífica de controversias y alentamos firmemente la cooperación regional y la responsabilidad compartida de todo el hemisferio para los fines mencionados. También buscamos afanosamente de los líderes de la región para la extensa variedad de asuntos. Así, una de las contribuciones más importantes para la paz en el hemisferio la constituye el Tratado de América Latina para la Prohibición de las Armas Nucleares, cuyo Protocolo I firmé, a nombre de los Estados Unidos, el pasado 17 de mayo de 1977, y lo envié al Senado para su ratificación. Insto al Senado a que lo ratifique sin tardanza, a fin de que pueda entrar en vigor en el más amplio ámbito posible, en la región latinoamericana. En 1980 las relaciones con México continuaron mejorando debido, en gran medida, a la eficiencia del coordinador para asuntos mexicanos y al uso ampliado del Mecanismo de Consulta México-Estados Unidos. Al celebrar reuniones periódicas con los diversos grupos de trabajo, hemos logrado impedir que asuntos de interés común se conviertan en problemas políticos. El secretario de Estado realizó una visita a México en el mes

de noviembre y, junto con el secretario de Relaciones Exteriores de dicho país, revisó el funcionamiento del Mecanismo de Consulta. La oficina del coordinador aseguró el cumplimiento de la instrucción impartida a todos los organismos, consistente en conceder la más alta prioridad a los asuntos de México. El comercio con México aumentó casi en 60% hasta alcanzar los 30 000 millones de dólares, lo cual convierte a este país en nuestro tercer socio comercial.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 230.

55. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DE INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS (1980)

El número de estas personas no se puede obtener de manera directa, pero existen métodos para estimarlo de manera indirecta y aproximada. En el invierno de 1978-1979, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una encuesta sobre los familiares de mexicanos que trabajaban en Estados Unidos, y sobre el trabajo en ese país de quienes habían regresado. Así se obtuvo la cifra de 519 mil trabajadores ausentes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados; y la de 472 mil como el número máximo de mexicanos trabajando en Estados Unidos en algún momento durante los cinco años anteriores a la encuesta y que ya se encontraban en México. En ambos casos, el 91% de los trabajadores habían ingresado a Estados Unidos sin documentos; el resto disponían de visa para vivir y trabajar en el país vecino del norte, casi todos migrantes cotidianos (*commuters*). La estimación más confiable sobre la población de indocumentados que reside habitualmente en Estados Unidos se obtuvo como resultado de un método residual aplicado primero por Robert Warren y luego desarrollado por Jeffrey. S. Passel y Karen Woodrow, todos de la oficina de censos de Estados Unidos. La diferencia entre el número de extranjeros registrados en el censo estadounidense de 1980 y el de extranjeros admitidos como inmigrantes (presentes en Estados Unidos en el mismo momento) reveló la existencia de 2.060 millones de indocumentados, 1.131 millones de ellos mexicanos. No todas estas personas eran trabajadores, pero sí estaban en Estados Unidos en forma más o menos permanente. El número total de los indocumentados mexicanos –trabajadores migratorios y residentes habituales– sería aproximadamente, en 1980, la suma de los dos sectores, aunque las estimaciones del primero no correspondan al año en que se levantó el censo. Una proyección del crecimiento de estos sectores, ajustada para 1984 y referida únicamente a trabajadores, consta en un trabajo de García y Griego y Giner de los Ríos. Ellos calculan un total de

1.4 millones de trabajadores mexicanos indocumentados presentes en Estados Unidos en ese año: 379 mil migratorios y 1.027 millones residentes habituales.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 231-233.

56. EMPLEO Y SALARIO EN MÉXICO (1970- 1980)

La gran mayoría de los emigrantes indocumentados tienen empleo antes de partir a Estados Unidos. La encuesta de la Secretaría de Trabajo reveló que el 80% de quienes se fueron a trabajar a Estados Unidos en 1978 o en años anteriores, había tenido ocupación durante el mes anterior a su salida, y solamente el 3% había estado desempleado. Otra encuesta realizada en 1984 por el Consejo Nacional de Población (Conapo), encontró que el 28% de los devueltos entrevistados se encontraba sin trabajo en México. Se puede afirmar entonces, que la mayoría de los emigrantes tienen trabajo en su lugar de origen, incluso en épocas de crisis económica. Este hecho subraya que la emigración a Estados Unidos no es resultado directo del desempleo; más bien se explica por la diferencia de ingresos que un mismo trabajador puede percibir en México y en Estados Unidos, la cual, desde hace años, es de aproximadamente uno a 10. El 77% de los migrantes de los Altos de Jalisco, entrevistados por Wayne Cornelius en agosto de 1976, señaló que el factor principal que los motivó a emigrar fue la necesidad de aumentar sus ingresos; sólo el 9% mencionó la falta de empleo. Entre los trabajadores migratorios que tenían empleo antes de emigrar, la Secretaría del Trabajo encontró que el 58.5% estaban ocupados en el sector primario (principalmente agricultura, ganadería y pesca), el 15.1% en la industria de transformación, y el 23.5% en el sector de servicios. (Las proporciones de la población económicamente activa —PEA— nacional en 1978 fueron: 39.3% en el sector primario, 21.4% en la industria de transformación, y 38.7% en los servicios). Según la encuesta del Conapo, los emigrantes que habían tenido empleo antes de salir a Estados Unidos se encontraban: 28.7% en el sector agropecuario, 28.2% en actividades industriales, y 12.3% en el sector servicios.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2580-2581.

57. PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN SELECTA DE INMIGRACIÓN Y REFUGIADOS (1980)

Del fallido plan Carter surgió la “Comisión Selecta de Políticas de Inmigración y Refugiados”, formada por diputados y senadores, y tres personas del público, nombradas por el presidente. El informe de la comisión, llamado *U.S. Immigration Policy and the National Interest*, se terminó en marzo de 1981, y le tocó al presidente Ronald Reagan recibirlo. Las propuestas centrales fueron: a. aumentar el personal y los recursos materiales de la Patrulla Fronteriza; b. Sancionar al empleador que, a sabiendas, contrate indocumentados, aunque no llegó a precisarse cómo comprobar que un nuevo empleado está autorizado para trabajar; c. redoblar esfuerzos para hacer cumplir las leyes laborales; d. regularizar el estatus de los extranjeros deportables que hubieran ingresado desde el 1º de enero de 1980 y permanecido cierto número de años que fijaría el Congreso; e. no ampliar en gran escala el número de visas otorgadas a trabajadores migratorios H-2; y f. reafirmar, como principio rector del otorgamiento de las visas, la reunificación familiar. Estas propuestas recibieron cierto apoyo del público, pero no la aceptación explícita del presidente.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2581 y 2582.

58. PROPOSICIONES DEL PRESIDENTE REAGAN

El plan Reagan, presentado en 1981, tuvo algunos elementos en común con las propuestas anteriores, pero también diferencias de fondo. Se refirió exclusivamente al problema de los indocumentados, y pasó por alto otros aspectos del derecho migratorio. Los principales elementos de la propuesta fueron los siguientes: a. imponer sanciones a patrones de cuatro o más empleados, que a sabiendas contraten indocumentados (Dls. 500 a mil por cada uno); b. otorgar estatus legal por tres años, renovable, a los indocumentados que se encontrasen en Estados Unidos después del 1° de enero de 1980 (las fechas variaban para cubanos y haitianos), quienes podrían obtener visa de inmigrantes después de 10 años y de demostrar su conocimiento del inglés; c. aumentar los recursos para hacer cumplir las leyes laborales; y d. iniciar un programa piloto de dos años consistente en expedir 50 mil visas anuales a trabajadores mexicanos, y autorizar, por un lapso de nueve a 12 meses, ciertos empleos donde faltase mano de obra. Esta última fue la primera propuesta hecha por un presidente norteamericano desde 1964, para ampliar el número de visas a trabajadores temporales. El plan Reagan, sin embargo, no fue aprobado por el Congreso.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2584.

59. SALDO NETO MIGRATORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA (1980-1995)¹

RESIDENTES, INMIGRANTES, EMIGRANTES Y SALDO NETO MIGRATORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA

1A. PARTE

Años censales de 1980 a 1995								
1980					1990			
Entidad federativa	Residentes en la entidad a	Inmigrantes	Emigrantes	Saldo neto	Residentes en la entidad b/	Inmigrantes	Emigrantes	Saldo neto
Estados Unidos Mexicanos	65 458 632	11 245 100	11 245 100		80 197 478	13963.020	13 963 020	
Aguascalientes	513 068	86 792	104 348	-17 556	713 730	138 301	109 121	29 180
Baja California	1 114 809	512 284	85 212	427 072	1 590 199	747 306	97 184	650 122
Baja California Sur	212 374	59 399	21 048	38 351	311 205	96 778	25 099	71 679
Campeche	413 306	75 884	49 885	25 999	518 258	115 421	66 603	48 818
Coahuila de Zaragoza	1 535 873	233 773	316 177	-82 404	1 948 858	284 220	369 688	85 468
Colima	343 034	82 703	54 198	28 505	421 343	115 065	62 177	52 888
Chiapas	1 990 270	70 760	165 591	-94 831	3 157 856	104 997	229 372	-124 375
Chihuahua	1 955 894	235 653	182 159	53 494	2 380 682	348 185	189 204	158 981
Distrito Federal	8 589 309	2 423 426	1 782 117	641 309	8 132 733	1988 841	3 148 776	-1 159 935
Durango	1 160 218	109 981	333 241	-223 260	1 337 939	146 421	398 027	-251 606
Guanajuato	2 948 354	215 785	702 272	-486 487	3 917 974	301 308	702 486	-401 178
Guerrero	2 060 160	99 711	406 898	-307 187	2 580 357	128 000	520 755	-392 755
Hidalgo	1 520 982	115 175	463 397	-348 222	1 868 617	184 386	520 671	-336 285
Jalisco	4 275 477	560 278	645 683	-85 405	5 214 019	708 624	679 772	28 852
México	7 434 628	2 875 372	646 394	2 228 978	9 738 448	3883 387	574 694	3 308 693
Michoacán de Ocampo	2 828 332	169 860	2 228 978	-582 068	3 482 936	268 627	866 331	-597 704
Morelos	930 211	253 239	194 177	59 062	1 185 313	339 152	123 695	215 457
Nayarit	721 321	92 982	131 511	-38 529	810 300	122 225	164 097	-41 872
Nuevo León	2 481 172	616 886	184 821	432 065	3 061 398	707 076	212 403	494 673
Oaxaca	2 309 426	100 305	551 146	-450 841	3 002 660	167 865	696 724	-528 85
Puebla	3 283 089	253 368	630 329	-376 961	4 098 079	349 927	734 739	-384 812
Querétaro	2 481 172	88 444	151 134	-62 690	1 039 092	179 031	163 411	15 620
Quintana Roo	221 415	120 714	10 209	110 505	474 888	273 546	17 690	255 856
San Luis Potosí	1 648 237	133 829	486 518	-352 689	1 984 973	185 999	539 674	-353 675
Sinaloa	1 824 114	219 543	231 573	-12 030	2 182 663	266 850	327 042	-60 192
Sonora	1 491 225	243 572	146 962	96 610	1 793 348	296 338	169 103	127 235
Tabasco	1 047 900	90 038	116 852	-26 814	1 491 389	142 888	163 209	163 209
Tamaulipas	1 872 405	447 836	276 551	171 285	2 201 655	521 122	321 740	199 382
Tlaxcala	548 131	50 280	152 924	-102 644	757 995	93 505	162 477	-68 972
Veracruz de Ignacio de la Llave	5 289 586	499 425	628 240	-128 815	6 180 801	583 196	873 351	-290 155
Yucatán	1 037 937	42 191	150 122	-107 931	1 354 233	74 572	207 325	-132 753
Zacatecas	1 123 079	65 612	491 483	-425 871	1 263 537	99 861	526 380	-426 519

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2584-2585.

Nota: Se refiere a la población total por lugar de residencia anterior.

a/ Se excluye a la población que no especificó la entidad de nacimiento, los nacidos en otro país y aquella con lugar de nacimiento insuficientemente especificado.

b/ Se excluye a la población nativa en el extranjero y aquella con lugar de nacimiento no especificado.

c/ Cifras estimadas según distribución porcentual calculada respecto de la población residente en la entidad y nacida en el país. Fuente: Para 1980 y 1990: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda (varios años).

Para 1995: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 1995.

RESIDENTES, INMIGRANTES, EMIGRANTES Y SALDO NETO MIGRATORIO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2A. PARTE Y ÚLTIMA

Años censales de 1980 a 1995				
1995 c/				
Entidad federativa	Residentes en la entidad a	Inmigrantes	Emigrantes	Saldo neto
Estados Unidos Mexicanos	91 158 290	17 347 422	17 347 422	
Aguascalientes	862 720	190 66	117 330	73 331
Baja California	2 112 140	970 740	140 035	830 705
Baja California Sur	375 494	109 832	38 375	71 457
Campeche	642 516	160 565	82 885	77 680
Coahuila de Zaragoza	2 173 775	321 501	440 189	-118 688
Colima	488 028	130 401	83 697	46 704
Chiapas	3 584 786	70 262	274 595	-204 333
Chihuahua	2 793 537	443 893	221 248	222 645
Distrito Federal	8 489 007	2 035 664	4 605 286	-2 569 622
Durango	1 431 748	166 369	451 001	-284 632
Guanajuato	1 431 748	361 779	727 524	-365 745
Guerrero	4 406 568	200 951	646 895	-445 944
Hidalgo	2 112 473	246 314	596 351	-350 037
Jalisco	2 112 473	833 972	700 968	133 004
México	11 707 964	5 422 508	838 632	4 583 876
Michoacán de Ocampo	3 870 604	364 224	1 005 583	-641 359
Morelos	3 870 604	448 812	145 565	303 247
Nayarit	896 702	154 322	225 610	-71 288
Nuevo León	3 550 114	809 071	230 757	578 314
Oaxaca	3 550 114	228 929	844 356	-615 427
Puebla	4 624 365	446 714	867 993	-421 279
Querétaro	1 250 476	242 092	154 934	87 158
Quintana Roo	703 536	382 935	36 302	346 633
San Luis Potosí	2 200 763	194 988	608 951	-413 963
Sinaloa	2 425 675	289 626	475 190	-185 564
Sonora	2 085 536	345 782	195 623	150 159
Tabasco	1 748 769	200 759	185 894	14 865
Tamaulipas	2 527 328	551 463	385 670	165 793
Tlaxcala	883 924	132 500	136 831	-4 331
Veracruz de Ignacio de la Llave	6 737 324	654 194	1 100 205	-446 01
Yucatán	1 556 622	94 331	221 351	-127 020
Zacatecas	1 336 496	141 268	561 596	-420 328

Nota: Se refiere a la población total por lugar de residencia anterior.

a/ Se excluye a la población que no especificó la entidad de nacimiento, los nacidos en otro país y aquella con lugar de nacimiento insuficientemente especificado.

b/ Se excluye a la población nativa en el extranjero y aquella con lugar de nacimiento no especificado.

c/ Cifras estimadas según distribución porcentual calculada respecto de la población residente en la entidad y nacida en el país. Fuente: Para 1980 y 1990: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda (varios años).

Para 1995: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 1995.

60. DISCURSO RONALD W. REAGAN 1981-1989

60.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(26 de enero de 1982)*

En política exterior, nuestra tarea es restablecer el respeto por nuestro país ante el mundo entero. Tanto en Ottawa como en Cancún sostuvimos reuniones con los líderes de las naciones más industrializadas y con los de los países en vías, de desarrollo.

Con nuestros vecinos del sur estamos desarrollando un programa de ayuda, comercio e inversión para lograr una vida mejor y más segura, en particular con la región de la cuenca del Caribe, de tan vital importancia para nosotros.

Con todos aquellos que exporten terrorismo y subversión en el Caribe o dondequiera que sea, actuaremos con firmeza. Nuestra política exterior es una política de fuerza, equidad y balance. Queremos fortalecer la posición de nuestro país como vehículo de paz y de progreso en el mundo.

60.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(25 de enero de 1983)*

La política de ayuda económica y de asistencia militar a América Latina está basada en un reconocimiento auténtico de la realidad y constituye una inversión fundamental para el futuro de la raza humana.

60.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(25 de enero de 1984)*

Una paz duradera y significativa es nuestro objetivo. Los Estados Unidos recurren a la fuerza sólo cuando tienen que hacerlo. Nosotros nunca hemos sido agresores. Por el contrario, siempre hemos luchado por defender la libertad y la democracia. El futuro se debe decidir por votos y no por armas. Por ello, continuamos nuestra agenda de paz, fortaleciendo nuestras relaciones a través de la frontera, fortaleciendo nuestras meditaciones de paz con América Central y ayudando a nuestros vecinos del hemisferio occidental a desarrollar sus instituciones democráticas.

60.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL *(6 de febrero de 1985)*

Apoyamos a nuestros aliados democráticos. Por tanto, no perderemos la fe en aquellos que arriesgan su vida, desde Afganistán hasta Nicaragua, para desafiar la agresión soviética. La dictadura sandinista en Nicaragua con el total apoyo cubano, no sólo acosa a su pueblo, a la iglesia y a la libertad de prensa, sino que arma y provee bases para ataques comunistas hacia sus Estados vecinos. Debemos continuar apoyando a las fuerzas democráticas cuya lucha está ligada a nuestra seguridad nacional.

60.5 QUINTO INFORME PRESIDENCIAL *(4 de febrero de 1986)*

El asunto más importante de nuestro hemisferio, fundamental para la paz, para la seguridad de las fronteras, para la protección de nuestros intereses vitales, es lograr la democracia en Nicaragua y proteger de esta manera a sus vecinos que ya gozan de regímenes democráticos.

60.6 SEXTO INFORME PRESIDENCIAL *(27 de febrero de 1987)*

En América Central causa de la libertad está siendo puesta a prueba. En Nicaragua apoyamos los esfuerzos diplomáticos de paz (Contadora); pero esto no puede tener éxito si los sandinistas ganan la guerra contra el pueblo nicaragüense.

Nuestro compromiso con el hemisferio occidental para salvaguardarlo de la agresión no surgió por generación espontánea el día en que asumí el cargo. Comenzó con la Doctrina Monroe en 1823 y continuó la política estadounidense histórica de dos partidos. Franklin Roosevelt afirmó: “Estamos determinados a hacer todo lo posible por mantener la paz en este hemisferio”. El presidente Truman fue más tajante: “El comunismo internacional busca aplastar, socavar y destruir la independencia de los americanos. Nosotros no podemos permitir que esto ocurra aquí”. John E Kennedy dijo claramente: “El dominio comunista en este hemisferio nunca podrá ser negociado”. Algunos miembros de este Congreso a lo mejor deciden apartarse de este histórico compromiso. ¡Yo no lo haré!

No debe haber una cabeza de playa soviética en Nicaragua.

60.7 SÉPTIMO INFORME PRESIDENCIAL *(25 de enero de 1988)*

Hoy en día los Estados Unidos son más fuertes, y la democracia se está expandiendo. Desde América Central hasta el este de Asia, las ideas del libre mercado, reformas democráticas y derechos humanos están ganando espacios. La frase “Culpen a los Estados Unidos” ha sido substituida por “Miren hacia los Estados Unidos”. La gran contribución que los Estados Unidos pueden hacer al mundo es promover la libertad como llave del crecimiento económico. Estos años hemos dado un paso en esa dirección, con la negociación del Acuerdo de Libre Comercio efectuado con Canadá, el que estamos determinados a expandir no sólo al norte sino también al sur. El mes que entra viajaré a México, donde las cuestiones comerciales serán sin duda las más importantes.

Nuestra meta es que algún día el flujo del libre comercio —desde la Tierra del Fuego hasta el Círculo Ártico— unifique a todos los pueblos del hemisferio occidental con lazos de beneficio mutuo del intercambio; que algún día todas las fronteras sean como la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, un lugar de reunión más que una línea divisoria.¹

1 Cfr. INEGI, *op. cit.*, pp. 80-81.

61. PROPOSICIONES DE SIMPSON Y DE MAZZOLI

En 1971, el diputado Peter W. Rodino presentó por primera vez un proyecto de ley cuyo objetivo era imponer sanciones a los empleadores de indocumentados. Versiones revisadas de esa iniciativa fueron formuladas por el diputado Eilberg, el senador Kennedy y otros legisladores, pero no tuvieron éxito. Después del otoño de 1981, el Congreso retomó el problema y recogió las recomendaciones de la Comisión Selecta. En marzo de 1982, el senador Alan, K. Simpson (republicano de Wyoming) y el diputado Romano L. Mazzoli (demócrata de Kentuck y) propusieron el proyecto de una ley de inmigración. El Senado aprobó la iniciativa, con enmiendas, en mayo de 1982, pero la Cámara de Representantes no la sometió a discusión y en diciembre siguiente caducó la iniciativa. Reiniciado el proceso, en 1983 el Senado aprobó la versión de Simpson y, en junio de 1984, la Cámara aceptó, con enmiendas, la propuesta de Mazzoli. En el resto del periodo legislativo, una comisión bicameral (*conference committee*) intentó sin éxito negociar las diferencias entre las dos versiones, y en octubre de ese año se archivaron de nuevo.¹

1 Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 234-236.

62. LA LEY SIMPSON-RODINO DE 1986

En 1985 asumió el liderazgo del proyecto el diputado Peer Rodino. Esta vez la Cámara de Representantes aprobó la enmienda a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, *Immigration Reform and Control Act*, también conocida como Ley Simpson-Rodino, cuyos propósitos son sancionar a los empleadores y reducir la corriente migratoria de indocumentados. Se impusieron sanciones (multas de 250 a 10 mil dólares por trabajador contratado) a los empleadores, a sabiendas, de indocumentados; se estableció un procedimiento para exigir al aspirante a un empleo, los documentos que acrediten su autorización para trabajar; si el empleado no lo hace, se le sanciona con multas entre 100 y mil dólares; y se declaró delito penal la contratación sistemática y recurrente de indocumentados. La presentación de documentos fraudulentos por parte de los trabajadores también fue sancionada. Además, el Congreso autorizó un aumento de hasta el 50% en el número de elementos de la Patrulla Fronteriza. Este aumento, adicional al de 35% en 1985, incrementó el número de localizaciones (de todas las nacionalidades) de aproximadamente 1.250 millones en el año fiscal 1984, a 1.770 millones en 1986. Otra medida adoptada en la enmienda es la legalización de indocumentados que residen en Estados Unidos desde el 1° de enero de 1982; para ello, los interesados deben solicitar, entre mayo de 1987 e igual mes de 1988, la calidad migratoria de “residente legal temporal”, y después de tenerla por lo menos 18 meses, la de inmigrante. Los indocumentados así legalizados no pueden recibir ningún servicio pagado por el erario, salvo pocas excepciones, por un periodo de cinco años. La enmienda Simpson-Rodino también dividió en dos partes la anterior cláusula H-2, una para operarios no agrícolas y otra para trabajadores del campo (H-2A); introdujo disposiciones administrativas para proteger los derechos de los trabajadores norteamericanos que pudieran competir con los H-2A y los de quienes son admitidos bajo esa cláusula; agiliza los trámites para que el empleador obtenga más fácilmente trabajadores H-2 A. (en el pasado, menos de 40 mil visas H-2 fueron otorgadas anualmente para empleados agrícolas y otras labores (v. cuadro 1), y en el futuro podría ocurrir un aumento progresivo de ellas); legaliza la estancia de trabajadores que hayan laborado, por un lapso de cuando menos 90 días,

durante los 12 meses comprendidos entre mayo de 1985 y abril de 1986 (hay un límite de 300 mil visas de inmigrante que se pueden otorgar durante el primer año a trabajadores agrícolas que pasen de la primera a la segunda calidad migratoria); contempla la posibilidad de que se recluten trabajadores agrícolas adicionales a partir de 1990, en caso de que los secretarios de Trabajo y de Agricultura determinen que existe escasez de mano de obra; y prevé la creación de varias comisiones para estudiar la ejecución de la ley y para consultar con el gobierno mexicano.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, *op. cit.*, pp. 2585

63. FRECUENCIA DE APREHENCIONES DE INDOCUMENTADOS EN 1985

Durante los últimos años, la proporción de indocumentados mexicanos localizados por el SIN cerca de la frontera ha ido creciendo, principalmente debido a los aumentos de personal de la Patrulla Fronteriza. En el año fiscal 1985, de un total de 1 266 999 localizaciones de indocumentados mexicanos efectuadas por la policía del SIN, 1 218 695 fueron realizadas por la Patrulla Fronteriza; y solamente 48 304 localizaciones se efectuaron por la policía del SIN que opera en el interior, principalmente en las ciudades. Según datos de ambas policías (fronteriza e interior) para el mismo año fiscal, de un total de 1 346 209 indocumentados de todas las nacionalidades localizados, 1 066 080 fueron detenidos antes de cumplir 72 horas en territorio estadounidense, o sea poco después de cruzar la frontera. Voceros del SIN han mencionado que solamente detienen a uno de cada tres o cuatro de quienes cruzan ilegalmente, pero los estudios disponibles sugieren que la proporción es más alta, aunque se reconoce que los migrantes insisten en penetrar varias veces, hasta lograr su objetivo, de donde resulta que el número de aprehensiones es mayor que el número de personas que pasan en esas condiciones la frontera. Las posibilidades de que el SIN localice indocumentados en el interior del país no son muy amplias; varían entre el 5 y el 25%, dependiendo del tipo de trabajo y de los lugares donde se encuentren.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2585.

64. DISCURSO GEORGE H. W. BUSH 1989-1993

64.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL *(31 de enero de 1990)*

El mundo ha cambiado mucho en el último año, y nos presenta por ello nuevos retos y oportunidades. Hay una gran necesidad de liderazgo, que sólo los Estados Unidos pueden asumir. En nuestro continente ha llegado el momento para que los pueblos del norte y del sur vivan esa libertad. Ha llegado el momento de construir, por la vía pacífica, hacia la democracia y hacia nuevas oportunidades económicas.

64.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(29 de enero de 1991)*

Nuestra fuerza económica depende de nuestra competitividad en el mercado mundial. Debemos expandir nuestras exportaciones. Una exitosa negociación en la Ronda Uruguay creará más empleos y crecimiento real para todas las naciones. Asimismo, el Libre Comercio con México y la Iniciativa de la Empresa para las Américas puede ayudar a nuestros socios a fortalecer sus economías y a la creación de una zona de libre comercio en todo el hemisferio.

64.3 TERCER INFORME PRESIDENCIAL *(28 de enero de 1992)*

En los últimos 12 meses el mundo experimentó cambios de una proporción casi bíblica: el comunismo ha muerto y, por la gracia de Dios, América ganó la Guerra Fría. Nosotros los Estados Unidos, líderes del occidente, nos hemos convertido en líderes del mundo. Nuestro futuro económico depende de que continuemos siendo líderes y en nuestras manos está lograrlo. Para ello, debemos derribar las paredes que estorban el mercado mundial: abriendo mercados por doquier y negociando acuerdos que eliminen tarifas y subsidios lesivos a los trabajadores y agricultores estadounidenses. También procuraremos conseguir más empleos para nuestros trabajadores a través del Tratado de Libre Comercio y de la Iniciativa para las Américas.

Debemos reconocer que nuestra fuerza económica depende de que seamos competitivos en los mercados mundiales. Tenemos que seguir expandiendo nuestras exportaciones. Una exitosa Ronda Uruguay de negociaciones sobre el comercio mundial crearía más empleos y más crecimiento reales para todas las naciones. Ustedes y yo sabemos que, en igualdad de condiciones, los obreros y agricultores estadounidenses pueden trabajar más y producir más que nadie, en cualquier momento y en cualquier lado.

Con el Tratado de Libre Comercio con México y nuestra Iniciativa para las Américas, podemos ayudar a nuestros socios a fortalecer sus economías y a avanzar hacia una zona de libre comercio en todo este hemisferio.

64.4 CUARTO INFORME PRESIDENCIAL (*17 de febrero de 1993*)

En el umbral del nuevo siglo, nuestro crecimiento económico depende más que nunca de la apertura de nuevos mercados en el exterior y en el aumento en el volumen del mercado mundial. Por ello, insistiremos en normas justas que regulen el mercado internacional, como parte de nuestra estrategia para expandir nuestro comercio. Dentro de esto se contempla una conclusión exitosa de las pláticas de la Ronda Uruguay y de las relativas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con las salvaguardas apropiadas para nuestros trabajadores y el medio ambiente.¹

1 Cfr. ÁLVAREZ, op. cit., pp. 2582.

65. POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA¹

POBLACIÓN TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA DE RESIDENCIA ACTUAL SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. AÑO CENSAL 2000

Entidad federativa	Total	Nacidos en la entidad	Nacidos en otra entidad	Nacidos en otro país	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	97 483 412	77 705 198	17 220 424	492 617	2 065 173
Aguascalientes	944 285	742 747	187 768	6 809	6 961
Baja California	2 487 367	1 188 787	1 025 754	59 716	213 110
Baja California Sur	424 041	278 675	137 928	3 113	4 325
Campeche	690 689	524 000	156 158	4 678	5 853
Coahuila de Zaragoza	2 298 070	1 941 837	317 792	11 010	27 431
Colima	542 627	367 952	139 290	3 900	31 485
Chiapas	3 920 892	3 627 113	122 451	17 416	153 912
Chihuahua	3 052 907	2 385 168	524 897	44 436	98 406
Distrito Federal	8 605 239	6 578 928	1 827 644	56 187	142 480
Durango	1 448 661	1 261 503	163 607	7 703	15 848
Guanajuato	4 663 032	4 214 646	389 975	18 359	40 052
Guerrero	3 079 649	2 867 787	167 115	8 196	36 551
Hidalgo	2 235 591	1 939 694	276 143	3 318	16 436
Jalisco	6 322 002	5 364 094	835 121	48 989	73 798
México	13 096 686	7 364 144	5 059 089	25 975	647 478
Michoacán de Ocampo	3 985 667	3 583 452	332 805	23 248	46 162
Morelos	1 555 296	1 057 255	431 003	8 852	58 186
Nayarit	920 185	756 625	152 540	6 236	4 784
Nuevo León	3 834 141	2 936 602	827 453	18 883	51 203
Oaxaca	3 438 765	3 209 597	201 099	4 591	23 478
Puebla	5 076 686	4 467 419	436 024	11 527	161 716
Querétaro	1 404 306	1 098 154	284 890	4 516	16 746
Quintana Roo	874 963	367 591	485 255	8 091	14 026
San Luis Potosí	2 299 360	2 058 122	217 042	6 871	17 325
Sinaloa	2 536 844	2 210 353	303 514	6 571	16 406
Sonora	2 216 969	1 827 379	356 489	16 353	16 748
Tabasco	1 891 829	1 697 534	178 683	1 179	14 433
Tamaulipas	2 753 222	2 008 854	678 752	36 177	29 439
Tlaxcala	962 646	817 464	136 504	749	7 929
Veracruz de Ignacio de la Llave	6 908 975	6 221 567	629 180	6 082	52 146
Yucatán	1 658 210	1 529 399	113 140	3 489	12 182
Zacatecas	1 353 610	1 210 756	125 319	9 397	8 138

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados Básicos. Tomo I. Aguascalientes, Ags., México, 2001.

¹ Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 237-238.

66. EL AUGE DE LA MIGRACIÓN INDOCUMENTADA

Como ya fue acusado anteriormente, la intensa dinámica migratoria se ha procesado mayoritariamente bajo la modalidad indocumentada. Paradójicamente, el auge de la indocumentación ocurre en el contexto de una política que busca disuadir por la ley y por la fuerza los flujos no autorizados originarios de México. El limitado alcance de la estrategia denominada “prevención por medio de la disuasión”, implementada a partir de 1993-1994, que buscó cerrar el paso a los migrantes indocumentados a través de un espectacular refuerzo de la custodia fronteriza, es evidenciado por la contundencia de las cifras proporcionadas por las fuentes estadounidenses y mexicanas.

De acuerdo con estimaciones del *Pew Hispanic Center* (Passel y Cohn, 2008), el número de mexicanos indocumentados en Estados Unidos se incrementó notablemente a partir del año 2000. En este año, se estimaba que residía en dicho país un total de 4.8 millones de mexicanos en condición indocumentada y, pese al endurecimiento de la custodia fronteriza en los años subsiguientes, su volumen siguió incrementándose ostensiblemente para alcanzar una cifra de siete millones en 2008. En términos relativos, éstos representan a 59% del total de población indocumentada y a 56% del total de mexicanos en el país.¹

1 Cfr. INEGI, op. cit., pp. 82.

67. RANKING DE ESTADOS SEGÚN VOLUMEN E INCREMENTO DE POBLACIÓN MEXICANA 1990-2007¹

RANKING DE ESTADOS DE LA UNIÓN AMERICANA SEGÚN SU VOLUMEN E INCREMENTO DE POBLACIÓN MEXICANA, 1990-2007

Estados de residencia de inmigrantes mexicanos en la Unión americana con mayor volumen y mayor porcentaje respecto de la población inmigrante y la población total, 1990, 2000 y 2007

Estado de residencia	1990	Estado de residencia	2000	Estado de residencia	2007
Número absoluto de mexicanos					
California	2 506 509	California	3 975 715	California	4 484 507
Texas	949 618	Texas	1 912 047	Texas	2 463 931
Illinois	284 460	Illinois	622 932	Illinois	710 237
Arizona	159 945	Arizona	444 812	Arizona	665 875
Florida	58 593	Georgia	194 527	Florida	319 665
Porcentaje de mexicanos respecto del total de migrantes					
Texas	56.1	Nuevo México	65.6	Nuevo México	68.4
Nuevo México	54.7	Arizona	62.8	Arizona	63.4
Arizona	50.5	Texas	62.1	Texas	61.1
California	37.1	Idaho	47.9	Idaho	53.5
Idaho	34.6	Nevada	46.1	Arkansas	45.9
Porcentaje de mexicanos respecto de la población total					
California	8.4	California	11.7	California	12.3
Texas	5.6	Texas	9.2	Arizona	10.5
Arizona	4.4	Arizona	8.7	Texas	10.3
Nuevo México	3.4	Nevada	7.8	Nevada	9.3
Nevada	2.7	Nuevo México	6.0	Nuevo México	7.1

1 LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 109.

Estados de residencia de la población inmigrante mexicana con mayores incrementos absolutos y relativos para los periodos 1990-2000 y 2000-2007

	1990-2000		2000-2007
Incremento absoluto			
California	1 469 207	Texas	351 884
Texas	962 429	California	508 792
Illinois	338 472	Arizona	221 063
Arizona	284 867	Florida	125 600
Georgia	174 036	Illinois	87 305
Número de veces que aumentó la población mexicana en el estado			
Alabama	18.6	Dakota del Norte	648.4
Tennessee	18.2	Nueva Hampshire	182.0
Carolina del Norte	17.7	Dakota del Sur	149.7
Carolina del Sur	17.2	Virginia Occidental	137.5
Kentucky	14.8	Maine	124.3

68. DISCURSO WILLIAM J. CLINTON, 1993-2001

68.1 PRIMER INFORME PRESIDENCIAL (25 de enero de 1994)

En 1992 el pueblo estadounidense demandó cambios importantes. Hace un año solicité que me apoyaran en tomar la responsabilidad del futuro de nuestro país; así lo hicimos. Remplazamos la violencia y los callejones sin salida por reformas y renovaciones. Quiero dar las gracias a cada uno de los que escucharon al pueblo estadounidense, y que lograron el más exitoso equipo de trabajo que ha existido entre un presidente y un Congreso en más de treinta años.

Este Congreso aprobó un presupuesto para recortar el déficit a la mitad en 3 000 millones de dólares, y también recortó el gasto e incrementó los impuestos a los estadounidenses de altos ingresos. Este Congreso permitió que millones de trabajadores estadounidenses de bajos ingresos pudieran pagar impuestos de acuerdo con sus posibilidades y obtener mayores beneficios del Estado. Asimismo, aprobó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA) y autorizó el *Brady Bill*, ahora la Ley Brady.

Nuestro plan económico hizo posible mantener nuestra fortaleza y credibilidad en el mundo. Ahora reducimos nuestro déficit y regresamos a la competitividad mundial, haciéndonos eco del derrumbé de las barreras comerciales. En un año, con el NAFTA y con el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles (GATT) y con nuestros esfuerzos en Asia, así como con la Estrategia Nacional de Exportación, establecimos mecanismos para abrir nuevos mercados mundiales a los productos estadounidenses, más que en lo registrado en las últimas dos generaciones.

Esto significa más empleos y mejores niveles de vida para el pueblo norteamericano, bajos déficit, baja inflación, bajos intereses, bajos aranceles y mucha inversión. Estos son los cimientos de nuestra recuperación económica. Pero si deseamos tomar amplia ventaja de las oportunidades que existen ante la globalidad económica, debemos entender que todavía hay mucho que hacer.

Este año tenemos que continuar nuestros esfuerzos para apoyar la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible en todo el mundo. Solicitaremos al Congreso que ratifique el nuevo acuerdo del GATT.

De la misma forma, debido a nuestro trabajo conjunto para implementar el NAFTA y apoyando la democracia en el exterior, hemos reafirmado el liderazgo y compromiso norteamericano, por lo que ahora el pueblo estadounidense se encuentra seguro y firme en sus convicciones.

68.2 SEGUNDO INFORME PRESIDENCIAL *(15 de febrero de 1995)*

La crisis financiera de México es un caso que hay que tratar. Reconozco que esta noche no es la ocasión para hacerlo, pero tenemos que actuar, no por el pueblo mexicano sino por consideración a los millones de estadounidenses cuyas expectativas están ligadas al bienestar de México. Si queremos asegurar el trabajo de los estadounidenses, preservar las exportaciones y salvaguardar nuestra frontera, entonces debemos aprobar su programa de estabilización y contribuir a que México recupere su estabilidad.

Ahora permítanme reiterarles: no es un préstamo, no es una asistencia internacional, no es ayudarlos a salir del apuro. Estaremos dando una garantía como cosignatarios de una nota con beneficios colaterales que cubrirán nuestro riesgo.

Esta legislación actúa con derecho para América. Es por ello que los líderes de los dos partidos representados la han apoyado. Yo espero que el Congreso apruebe rápidamente esta asistencia. Está dentro de nuestro interés y se lo podemos explicar al pueblo estadounidense, porque lo vamos a hacer de manera correcta.¹

1 LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 111.

69. POBLACIÓN INDÍGENA DE MEXICANOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS¹

POBLACIÓN TOTAL DE INDÍGENAS HISPANOAMERICANOS POR ESTADOS Y REGIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

	Estados y regiones	Población total	Población total de indígenas hispanoamericanos
Todas las regiones	Región Oeste	63' 197,932	232,110
	Región Sur	100' 236,820	88,382
	Región Noreste	53' 594,378	49,171
	Región Oeste Central	64' 392,776	37,410
	Pob. total EE.UU	281' 421,906	407,073
Región Oeste	California	33' 871,648	154,362
	Arizona	5' 130,632	22,509
	Colorado	4' 301,261	15,259
	Nuevo México	1' 819,046	12,023
	Washington	5' 894,121	7,905
	Oregon	3' 421,399	5,081
	Nevada	1' 998,257	5,023
	Utah	2' 233,169	3,021
	Idaho	1' 293,953	1,856
	Montana	902,195	1,642
	Alaska	626,932	1,538
	Hawai	1' 211,537	996
	Wyoming	493,782	895
	Pob. total Oeste	63' 197,932	232,110
Región Oeste Central	Illinois	12' 419,293	12,774
	Michigan	9' 938,444	5,058
	Wisconsin	5' 363,675	3,248
	Minnesota	4' 919,479	2,958
	Kansas	2' 688,418	2,614
	Ohio	11' 353,140	2,501
	Indiana	6' 080,485	2,161
	Missouri	5' 595,211	1,774
	Nebraska	1' 711,263	1,436
	Dakota del Sur	754,844	1,295
	Iowa	2' 926,324	1,034
	Dakota del Norte	642,200	557
	Pob. total Oeste Central	64' 392,776	37,410
Región Sur	Texas	20' 851,820	49,503
	Florida	15' 982,378	11,183
	Oklahoma	3' 450,654	7,072
	Carolina del Norte	8' 049,313	4,218
	Georgia	8' 186,453	4,067
	Virginia	7' 078,515	2,576
	Maryland	5' 296,486	2,111
	Louisiana	4' 468,976	1,348
	Tennessee	5' 689,283	1,332

¹ Cfr. AMPUDIA, op. cit., pp. 239-240.

	Estados y regiones	Población total	Población total de indígenas hispanoamericanos
Región Noreste	Arkansas	2,673,400	1,106
	Carolina del Sur	4,012,012	953
	Alabama	4,447,100	812
	Kentucky	4,041,769	677
	Mississippi	2,844,658	428
	Delaware	783,600	407
	Virginia del Oeste	1,808,344	150
	Pob. total Sur	100,236,820	88,382
	Nueva York	18,976,457	29,962
	Nueva Jersey	8,414,350	8,154
	Massachusetts	6,349,097	3,751
	Pensilvania	12,281,054	3,444
	Connecticut	3,405,565	2,372
	Rhode Island	1,048,319	940
	New Hampshire	1,235,786	266
	Maine	1,274,923	187
	Vermont	608,827	95
	Pob. total Noreste	53,594,378	49,171

Fuente: Censo de Estados Unidos, 2000.

Nota: Puerto Rico y Washington, D.C., no están incluidos en las regiones. Puerto Rico: pob. total: 3'808,610, pob. total de indígenas hispanos: 12,773; Washington, D.C.: pob. total: 572,059, pob. total indígenas hispanos: 439.

154,362. Esta es la mayor concentración de dicha población en todos los estados de la Unión Americana, seguido por Texas con 49,503 (una tercera parte del total de California). En nuestro análisis del censo, también hemos organizado los datos por regiones dentro de California (San Francisco –la región de nueve condados–, valle de San Joaquín, Costa Central, norte de California y sur de California (véase cuadro 2). El mapa 2 muestra todos los condados del estado y la población total de indios hispanoamericanos por cada uno de ellos.

La información muestra que la región sur de California tiene la mayor concentración de indios hispanoamericanos, con una población total de 94,958, incluyendo los cinco condados con el mayor número registrado. El condado de Los Ángeles ocupa el primer lugar, con un total de 51,379. Aunque las cifras de Los Ángeles incluyen a un número significativo de mayas de origen guatemalteco, la gran mayoría de los indios hispanoamericanos en otras partes de California son de origen mexicano.

Con el uso de los Sistemas de Información Geográfica (GIS) logramos generar una serie de mapas que muestran la distribución de indios hispanoamericanos por condados, y posteriormente, a nivel micro, por distritos locales del censo, en el estado de California. Esto permite que los mapas ilustren altas y bajas concentraciones de dicha población.

En el contexto de los resultados preliminares sobre las industrias que se abastecen de la mano de obra indiohispanoamericana, los datos del censo abren una vertiente para el registro, estudio y análisis sobre cómo y dónde este grupo de migrantes se incorpora a la sociedad estadounidense.

**POBLACIÓN TOTAL DE INDÍGENAS HISPANOAMERICANOS
POR ESTADO, CONDADO Y REGIONES (California, 2000)**

Condados y regiones de California	Población total de la región	Población total de indígenas hispanoamericanos
El sur de California	19'329,839	94,958
Área de la bahía		
Región de nueve condados	6'783,760	18,796
Valle Central	2'380,506	17,727
Norte de California	2'933,401	10,333
Costa Central	1'303,392	7,195
Pob. total, California	33'871,648	154,362
Santa Clara	1'682,585	6,080
Alameda	1'443,741	3,840
Contra Costa	948,816	2,182
Sonoma	458,614	1,912
San Mateo	707,161	1,594
San Francisco	776,733	1,438
Solano	394,542	916
Marin	247,289	431
Napa	124,279	403
Área Metropolitana de San Francisco	7'039,362	20,077
Fresno	799,407	6,567
Kern	661,645	4,114
Tulare	368,021	2,726
Madera	123,109	1,518
Merced	210,554	1,395
Kings	129,461	874
San Benito	53,234	337
Inyo	17,945	124
Mariposa	17,130	72
Pob. total de la región aprox.*	2'380,506	17,727
Santa Bárbara	399,347	2,649
Monterey	401,762	2,420
Santa Cruz	255,602	1,281
San Luis Obispo	246,681	845
Pob. total de la región aprox.*	1'303,392	7,195
Sacramento	1'223,499	4,289
Yolo	168,660	788
Mendocino	86,265	665
Butte	203,171	571
Humboldt	126,518	519
Placer	248,399	512
Shasta	163,256	503
Lake	58,309	359

Fuente: Censo de Estados Unidos, 2000.

*Esta es una aproximación del total de la región. El censo usa una manera diferente de agregar la población de cada condado para una región o estado.

Asimismo, es importante tomar en cuenta el papel fundamental que juega la información del censo en el establecimiento de los patrones de asignación y distribución de los recursos y servicios públicos para comunidades pobres. Para que los indios hispanoamericanos hagan pleno uso de sus derechos básicos, los servidores públicos locales, estatales y federales deben hacerse responsables de utilizar técnicas precisas y eficientes que permitan un registro adecuado de esta población, y al mismo tiempo deben reconocer la diversidad de ésta para facilitar su autoidentificación. Además, el registro sistemático es importante para que grupos subrepresentados puedan hacer uso de datos e información del censo, y así poder elaborar análisis estadísticos que articulen y legitimen sus metas cívicas, sociales y políticas.

El Censo del 2000 logró obtener algunos avances en el mejoramiento del registro de datos en tres aspectos muy concretos: al permitir la autoidentificación multirracial, al aclarar la confusión generada en torno a la pregunta sobre la categoría de “origen hispano” y al posibilitar la construcción de la categoría “indio hispanoamericano”. Aunque es demasiado pronto para evaluar con precisión el alcance e impacto de estos cambios, algo que queda claro es que la categoría “indio hispanoamericano” ayuda a hacer visible y a presentar en el plano formal a un grupo antes excluido de un sistema de registro poblacional fundamentalmente como lo es el censo.

70. IMPACTO DE LA MIGRACIÓN MEXICANA EN EL CRECIMIENTO Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ESTADOUNIDENSE

En Estados Unidos el abrumador crecimiento de la migración mexicana ha contribuido a dinamizar la demografía del país, la cual se encuentra en franco proceso de envejecimiento. La CPS permite acercarnos a la contribución de las diferentes generaciones de mexicanos en Estados Unidos al crecimiento de la población total del país según grandes grupos etáreos.¹ Los inmigrantes mexicanos, fuertemente concentrados en las edades laborales, han contribuido notablemente al incremento de personas del grupo de edades de 18-64 años, a la vez que su descendencia, en su mayoría nacida en territorio estadounidense, ha contribuido de manera determinante al aumento del número absoluto de personas en las edades 0-17.

De acuerdo con la CPS, tan sólo entre 2002 y 2008 los nativos mexicanos aportaron alrededor de 3.4 millones de personas al grupo poblacional de 18 a 64 años, contribuyendo de esa manera con casi una quinta parte del crecimiento registrado en ese grupo de edad. De igual modo, el incremento registrado en la segunda y tercera o más generaciones de mexicanos con edad entre 0 y 17 años (cerca de 2.8 millones de personas) evitó que, a nivel nacional, la población de ese grupo de edad disminuyera de tamaño. Cabe subrayar que, en este grupo etáreo, el conjunto poblacional conformado por los nativos sin ascendencia mexicana y las demás poblaciones inmigrantes registró, en ese lapso, una disminución de alrededor de 780 mil personas.

En este contexto, México ha mantenido, por mucho, su primacía como principal país emisor de migrantes a Estados Unidos: ya el censo de 1980 daba cuenta de que los mexicanos eran la primera minoría extranjera en el país, al representar 16% del total de inmigrantes. Su importancia relativa ha aumentado paulatinamente a lo largo de las

1 FOX, Jonathan, RIVERA-SALGADO, Gaspar (Coordinadores): *Indígenas Mexicanos Migrantes en los Estados Unidos*, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2004, pp. 316-320.

últimas décadas, al punto que en 2007 concentran a 30% del total de inmigrantes; una cifra extraordinaria, toda vez que estamos comparando el peso relativo de los nacionales de un solo país contra todos los demás. Con respecto al total de población del país, los mexicanos pasaron de representar 0.4% en 1970 a 3.9% en 2007.¹

1

71. DISCURSO GEORGE W. BUSH 2001-2009

71.1 DISCURSO MEDIANTE EL CUAL EL PRESIDENTE DESCRIBE EL PROYECTO DE LEY PRESENTADO AL SENADO (23 de junio DE 2007)¹

Buenos Días. Esta semana, líderes del Senado presentaron legislación revisada sobre la reforma migratoria integral. Agradezco a los líderes de ambos partidos por su esfuerzo bipartito para reparar nuestro sistema migratorio a fin de que pueda satisfacer las necesidades de nuestra Nación en el siglo 21.

Al considerar el Senado este proyecto de ley crítico, yo comprendo que muchos estadounidenses están preocupados en cuanto a la reforma migratoria – sobre todo la capacidad del gobierno Federal de asegurar la frontera. Por lo tanto este proyecto de ley pone en primer lugar las herramientas para el cumplimiento. Eso significa más agentes de la Patrulla Fronteriza, más cercas, más cámaras infrarrojas y otras tecnologías en la frontera. También exige un sistema de verificación de empleados basado en tarjetas de identidad emitidas por el gobierno, que no se puedan alterar, que ayudará a los empleadores a estar seguros que los trabajadores que contraten sean legales. Sólo después de estar establecidas estas herramientas de cumplimiento podrán entrar en vigor otros elementos del proyecto de ley. Para garantizar que el gobierno respete su compromiso de cumplimiento, el proyecto de ley incluye 4.4 mil millones de dólares en fondos adicionales inmediatos para estos esfuerzos de seguridad fronteriza y cumplimiento en el lugar de trabajo.

El proyecto de ley también enfoca otros problemas relacionados al cumplimiento de leyes migratorias. En la actualidad nuestras leyes son ineficaces – e insuficientes. Por ejemplo, cruzar la frontera ilegalmente comporta multas muy ligeras. Además, la participación en pandillas ilegales no es suficiente para prohibir la entrada a nuestro país. Y cuando no podemos lograr que otros países acepten el regreso de sus ciudadanos

1 LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 107.

que son criminales peligrosos, en la mayoría de los casos nuestro gobierno sólo puede detener a estos extranjeros por seis meses antes de liberarlos a la sociedad.

Esto es inaceptable. El proyecto de ley ante el Senado enfoca estos problemas. Bajo este proyecto, cualquier persona capturada cruzando ilegalmente la frontera será prohibida permanentemente de volver a Estados Unidos bajo una visa de trabajo o de turista. Bajo este proyecto, cualquier persona que se sepa haya tomado parte en actividades ilegales de pandilla podrá ser negada la entrada a nuestro país. Y bajo este proyecto de ley, podremos detener a extranjeros que sean criminales peligrosos hasta que otro país acepte su devolución.

Estas medidas de cumplimiento son un buen comienzo. Pero aún con todos estos pasos, no podemos asegurar completamente la frontera a menos que aliviemos la presión en la frontera. Cientos de miles de personas vienen aquí ilegalmente porque nuestro programa actual de visas de trabajo no satisface las necesidades de una economía creciente y dinámica. Para desalentar a las personas de cruzar la frontera ilegalmente, este proyecto crea un camino ordenado para que los trabajadores extranjeros ingresen a nuestro país legalmente para trabajar sobre una base temporal. Con este programa en vigor, los empleadores tendrán un sistema práctico con el cual llenar empleos que estadounidenses no estén haciendo – y los trabajadores extranjeros tendrán una forma legal para solicitarlos. Como resultado, no tendrán que tratar de entrar a hurtadillas. Y eso dejará en libertad a los Agentes Fronterizos para perseguir a narcotraficantes, traficantes humanos y terroristas.

Una vez que se cumpla con las metas en cuanto a la seguridad fronteriza y el cumplimiento en el lugar de trabajo, el proyecto de ley resolverá la situación de 12 millones de personas que actualmente viven en nuestro país ilegalmente. Bajo este proyecto de ley, estos trabajadores tendrán la oportunidad de estar bien ante la ley. Esto no es amnistía. Habrá multas para quienes salgan de las sombras. Si pasan por un control estricto de antecedentes, pagan una multa, mantienen un empleo, evitan tener antecedentes penales, y eventualmente aprenden inglés, serán elegibles a y mantendrán una visa Z. Si desean obtener una tarjeta de residente, tienen que hacer todas estas cosas – y además pagar una multa adicional volver al final de la fila. y regresar a su país para solicitar la visa desde allí.

Este proyecto de ley ofrece una oportunidad histórica para sostener la tradición estadounidense de acoger y asimilar inmigrantes y rendir honor a nuestra herencia de ser una nación fundada en el imperio de la ley. Tenemos la obligación de resolver problemas que se han estado acumulando durante décadas. El statu quo es inaceptable. Debemos armarnos del coraje político para seguir adelante con un proyecto de ley de reforma integral. Si actuamos ahora, podemos asegurar que se respeten nuestras leyes que las necesidades de nuestra economía sean satisfechas y que nuestra Nación trate a los recién llegados con dignidad y los ayude a asimilarse.

Les pido a los miembros de ambos partidos que apoyen la reforma migratoria integral. Trabajando juntos podemos aprobar este buen proyecto de ley – y establecer un sistema migratorio digno de nuestra gran Nación. Gracias por escuchar.

72. FLUJO DE MIGRANTES 1993-2008¹

MIGRANTES POR DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, SEGÚN TIPO DE FLUJO Y PERIODO DE LEVANTAMIENTO

Características	Periodo		
	1993-2001	2002-20052	2006-20083
Flujo procedentes de Estados Unidos residentes en México			
Flujo total (promedio anual)	470 155	366 598	402 447
Documentos para cruzar a Estados Unidos	100.0	100.0	100.0
Con documentos	48.4	31.6	34.5
Sin documentos	51.6	68.4	65.5
Tenencia de documentos de trabajo de la población que trabajó en Estados Unidos	100.0	100.0	100.0
Con documentos	41.9	16.8	15.1
Sin documentos	58.1	83.2	84.9
Razón de retorno a México	100.0	100.0	100.0
No voluntario4	13.2	9.8	23.1
Voluntario	86.8	90.2	76.9
Ciudad de cruce	100.0	100.0	100.0
Tijuana	23.4	20.6	17.7
Mexicali	4.5	3.3	2.2
Nogales	8.2	10.4	11.6
Otras ciudades de Sonora	4.5	30.6	32.0
Cd. Juárez	7.3	4.9	2.7
Piedras Negras	3.9	0.7	1.8
Nuevo Laredo	16.1	5.7	6.5
Reynosa	10.9	4.4	10.1
Matamoros	14.7	11.2	10.3
Otras ciudades	6.5	8.1	5.0
Zona de cruce	100.0	100.0	100.0
Desierto de Sonora5	12.7	41.0	43.6
Otras ciudades	87.3	59.0	56.4

1 <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2007/06/20070625113044pii0.5691645.html#ixzz2IAGVkpRP>

MIGRANTES POR DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, SEGÚN TIPO DE FLUJO Y PERIODO DE LEVANTAMIENTO

Características	Periodo		
	1993-2001	2002-20052	2006-20083
Flujo procedentes del sur con destino a Estados Unidos			
Flujo total (promedio anual)	465 404	651 943	943 274
Tiempo que piensa permanecer en Estados Unidos	100.0	100.0	100.0
Menos de 6 meses	40.1	22.3	12.7
De 6 meses a menos de 1 año	8.6	7.4	4.7
Más de 1 año	5.4	12.6	15.4
Lo que se pueda	34.1	49.4	63.4
No especificado	11.8	8.3	3.7

- 1/ Comprende la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27 de marzo de 1994, la fase II entre el 14 de diciembre de 1994 y el 13 de diciembre de 1995, la III entre el 11 de julio de 1996 y el 10 de julio de 1997, la fase IV entre el 11 de julio de 1998 y el 10 de julio de 1999, la fase V entre el 11 de julio de 1999 y el 10 de abril de 2000, la fase VI entre el 11 de abril de 2000 y el 10 de abril de 2001 y la VII entre el 11 de abril de 2001 y el 10 de enero de 2002. 2/ Comprende la fase VII entre el 11 de enero de 2002 y el 10 de abril de 2002, la fase VIII entre el 11 de abril de 2002 y el 10 de julio de 2003, la IX entre el 11 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, la fase X entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 y la fase XI entre el 1 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.
- 3/ Comprende la fase XI entre el 1 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2006, la fase XII entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007, la fase XIII del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008 y la fase XIV del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008.
- 4/ Comprende a quienes fueron devueltos por la “migra”.
- 5/ Incluye a Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoyta, El Sásabe, Saric, Naco y Agua Prieta
- Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE), 1993-2008

Tan sólo en el periodo 2005-2008 fueron promulgadas, a nivel estatal, 365 leyes orientadas a criminalizar a los migrantes indocumentados y restringir sus derechos. Estados como Colorado, Arizona, Florida, Texas, California, Illinois y Georgia, con una importante presencia mexicana, figuran entre los que más leyes han promulgado para dificultar la permanencia de indocumentados (CONAPO, 2009).

Resulta factible suponer que la actual recesión económica contribuya a agudizar dicha intolerancia, la cual se vería reflejada en un mayor número de devoluciones de trabajadores mexicanos. Sin embargo, no podemos olvidarnos que existen sectores específicos de la economía norteamericana que dependen enormemente de trabajadores mexicanos, en su mayoría, en condición indocumentada. Lo anterior permite plantear que, mientras no se concrete en el vecino país una reforma migratoria que responda de manera realista a dicha demanda, seguirá persistiendo un cierto grado de “tolerancia” hacia la presencia de migrantes indocumentados.

73. HISPANOS DE ORIGEN MEXICANO EN ESTADOS UNIDOS, 2008¹

Los mexicanos son la población más grande de origen hispano en los Estados Unidos, conformando cerca de los tercios de la población hispana viviendo en Estados Unidos en el 2008.

·*Estatus Migratorio*. Casi cuatro de cada diez (37.0%) mexicanos en los Estados Unidos son personas nacidas en el extranjero, en contraste con un 38.1% del total de hispanos y 12.5% de la población estadounidense en general. La mayoría de inmigrantes mexicanos (63.4%) llegó a los Estados Unidos en 1990 o después. Dos de cada diez inmigrantes mexicanos (22.0%) son ciudadanos estadounidenses.

·*Lenguaje*. La mayoría de mexicanos (61.6%) habla inglés proficientemente. El 38.4% de mexicanos que tienen 5 o más años de edad reportan hablar inglés menos que muy bien, en comparación con 37.3% de todos los Hispanos de EE.UU.

·*Edad*. Los mexicanos son más jóvenes que la población hispana y estadounidense en general. La edad mediana de los mexicanos es de 25 años. Las edades medianas de toda la población estadounidense y de los hispanos en general son 36 y 27 años respectivamente.

·*Fertilidad*. El 38% de mujeres de origen mexicano entre los 15 y 44 años que dieron a luz 12 meses antes de la encuesta, no estaban casadas. Esto fue menor que el porcentaje de todas las mujeres hispanas en los Estados Unidos -38.8%- y que el porcentaje para el total de mujeres estadounidenses- 34.5%.

·*Dispersión Regional*. Casi cuatro de cada diez mexicanos (36.7%) vive en California, y uno de cada cuatro (25.2%) vive en Texas.

·*Nivel Educativo*. Las personas de origen mexicano tiene más bajos niveles educativos que la población hispana en general. El 9% de mexicanos de 25 años a más- comparados con el 12.9% de todos los hispanos en los Estados Unidos- ha obtenido por lo menos el grado de bachillerato universitario.

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. Cit., pp. 112.

·*Ingreso*. La mediana anual de ingreso personal para los mexicanos de 16 años a más fue de \$20,368 en el 2008. La mediana de ingresos para toda la población hispana en los Estados Unidos fue de \$21,488.

·*Pobreza*. La proporción de personas de origen mexicano que vive en condiciones de pobreza (22.3%) es mayor que en la población estadounidense (12.7%) y similar que el 20.7% de los hispanos en general.

·*Seguro de Salud*. Un tercio de mexicanos en los estados unidos (34.8%) no cuenta con seguro de salud, en contraste con el 31.7% de todos los hispanos y 15.4% para la población estadounidense en general. Además, el 20.4% de los mexicanos menores de 18 no tiene seguro médico.

·*Propiedad en viviendas*. El porcentaje de propietarios de viviendas entre los mexicanos (50.5%) es similar que este porcentaje para todos los hispanos (49.1%) y al 66.6% de toda la población estadounidense.

74. INCREMENTO DE LOS RIESGOS Y COSTOS DE LA MIGRACIÓN Y DESGASTE DE LA CIRCULARIDAD MIGRATORIA

El refuerzo de las estrategias de control en los puntos tradicionales de internación de los migrantes a Estados Unidos, como Tijuana y Nuevo Laredo, ha tenido el efecto perverso de desviar a los migrantes indocumentados hacia puntos de cruce de mayor costo y riesgo, donde las probabilidades de detección por parte de la Patrulla Fronteriza estadounidense resultan menores. En este contexto, las inhóspitas localidades del desierto de Sonora, como Agua Prieta, El Sásabe y Sonoyta, han ganado relevancia en las elecciones de los migrantes como puntos de cruce fronterizo: en el periodo más reciente, el conjunto de las localidades de Sonora son los puntos de internación a territorio estadounidense de cuatro de cada nueve migrantes (véase cuadro 2). Una de las consecuencias más dramáticas del cambio en las rutas de la migración indocumentada alude precisamente al elevadísimo número de muertes de connacionales en sus intentos de cruzar la frontera: las cifras hablan de un promedio anual superior a 400 fallecimientos a partir del año 2000.

Sin embargo, no sólo los costos en vidas humanas se han incrementado. También han proliferado las redes y mafias asociadas al tráfico de migrantes, que atentan en contra de su patrimonio y seguridad e integridad física. La mayor dificultad para cruzar la frontera ha implicado una creciente demanda del *pollero*, el cual ha pasado de ser contratado por 28% de los indocumentados en el periodo 1993-2001 a 38% en el periodo 2002-2005 y a 48% en 2006-2008 (véase gráfica 4).

Otra consecuencia negativa y no anticipada de las crecientes dificultades para ingresar a Estados Unidos guarda relación con el paulatino desgaste de los mecanismos de circularidad migratoria y la mayor propensión para una migración más definitiva, ya que los migrantes indocumentados tienden a extender la permanencia en la Unión Americana hasta un punto en que muchos de ellos establecen allí su residencia.

Mientras que en 1980 42% de los mexicanos reportaron una estancia en el vecino país superior a 10 años, en 2007 esa cifra ascendió a 58%.¹

1 <http://pewhispanic.org/files/factsheets/59espanol.pdf>

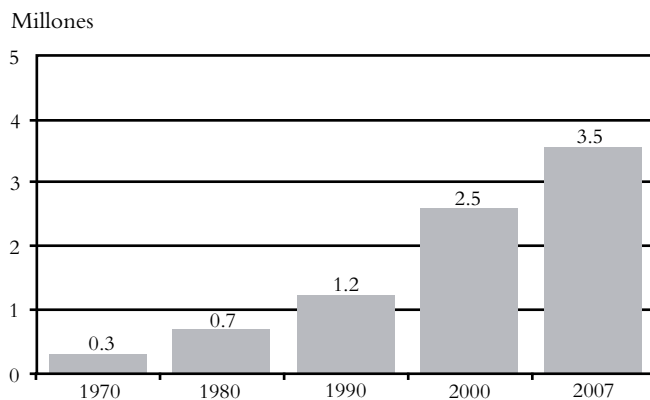
75. CARÁCTER MÁS FAMILIAR DE LA MIGRACIÓN

Basta decir que el número de hogares familiares encabezados por mexicanos ha pasado de alrededor de 290 mil en 1970 a 3.6 millones en 2007 y que la proporción de estos hogares que contaba con la presencia de hijos menores de edad registró un incremento significativo al pasar de 52 a 61% en el periodo señalado (véase gráfica 5).⁴ En ello, la importante participación de la migración femenina (en 2007, las mujeres representan 44% de los inmigrantes mexicanos) ha jugado un papel crucial, toda vez que ha contribuido de manera decisiva a la fijación de la migración masculina y favorecido la constitución de familias mexicanas y su reproducción natural en aquel país. Al respecto, resulta de gran relevancia la creciente importancia y el peso mayoritario de los hijos de mexicanos nacidos en el territorio de Estados Unidos y que cuentan con la nacionalidad (y ciudadanía) de ese país: en 2007, 84% de los hijos menores de edad de dirigentes de hogar mexicanos nació en Estados Unidos.¹

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 114.

76. HOGARES FAMILIARES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS, 1970-2007¹

Gráfica 5. Hogares familiares¹ mexicanos en Estados Unidos, 1970-2007



Nota: ¹/ Los hogares familiares están conformados por hogares nucleares, ampliados y compuestos.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en Buró de Censos, 1970,1980,1990,20000; y *American Community Survey*, 2007.

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 114-115.

77. MAYOR DIVERSIDAD DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO Y OCUPACIONAL DE LOS MIGRANTES

En las últimas décadas se asiste a una creciente heterogeneidad y complejidad de los perfiles sociodemográficos y ocupacionales de los migrantes en Estados Unidos, aun cuando asientan en un marco de continuidades (“cambios dentro de la continuidad”).

De hecho, la edad mediana de los migrantes residentes en dicho país pasó de 28 a 35 años entre 1980 y 2007.

Uno de los rasgos que tradicionalmente ha caracterizado la población inmigrante mexicana en Estados Unidos es su bajo nivel educativo. Si bien se observa una importante mejoría en el tiempo, lo cierto es que en la actualidad 60% de los inmigrantes mexicanos mayores de 24 años tiene menos de nueve años de escolaridad y 85% no supera el nivel medio superior.¹

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 115.

78. POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS DE 25 AÑOS Y MÁS CON ESTUDIOS SUPERIORES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN, 1980, 1990, 2000 Y 2007¹

POBLACIÓN INMIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS DE 25 AÑOS Y MÁS
CON ESTUDIOS SUPERIORES SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES DE
ORIGEN, 1980, 1990, 2000 Y 2007

1980	Total		1990	Total	
1. Filipinas	163	300	1. Filipinas	330	446
2. China	127	300	2. China	314	730
3. India	126	840	3. India	290	430
4. Alemania	120	940	4. Alemania	185	187
5. Canada	113	840	5. Canada	167	595
13. México	43	780	10. México	104	238
2000	Total		2007	Total	
1. India	772	059	1. India	258	775
2. China	692	724	2. China	940	778
3. Filipinas	643	706	3. Filipinas	916	632
4. México	402	497	4. México	715	635
5. Antillas y Bahamas	360	486	5. Antillas y Bahamas	558	667

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en Buró de Censos, 1980, 1990, 2000 y American Community Survey, 2007.

¹ Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 115.

Datos de la ACS de 2008 señalan que 37% de los migrantes que ingresaron al país después del año 2000 tenía estudios superiores.

Mientras en 1980 los nativos de México eran el decimotercer grupo de inmigrantes calificados más numeroso, en 1990 ya eran el décimo y en los años 2000 y 2007 el cuarto.

No obstante, los mexicanos con escolaridad profesional y postgrado en Estados Unidos representan menos de 8% del total de mexicanos en el país y poco más de 6% de la población inmigrante calificada.

79. POBLACIÓN RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS Y CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS DE LA POBLACIÓN MEXICANA EN ESE PAÍS 1970-2007¹

Cuadro 4. Población residente en Estados Unidos y características seleccionadas de la población mexicana

	1970			1980			Año 1990			2000		2007	
Total	202	966	600	226	862	400	248	107 628	281	421 906	301	621 159	
Mexicanos		864	600	2	242	100	4	409 033	9	325 452	11	895 675	
Resto de Inmigrantes	10	132	000	12	900	600	17	129 263	23	730 010	28	270 232	
Nativos	191	970	000	211	719	700	226	569 332	248	366 444	261	455 252	
Porcentaje de los mexicanos respecto de la población inmigrante			7.9			14.8		20.5		28.2		29.6	
Porcentaje de los mexicanos respecto de la población total			0.4			1.0		1.8		3.3		3.9	
Características seleccionadas de la población mexicana													
Sexo													
Hombres			49.6			52.4		55.0		55.4		56.1	
Mujeres			50.4			47.6		45.0		44.6		43.9	
Edad mediana (años)			35.0			28.0		29.0		31.0		35.0	
Escolaridad de la población de 25 años y más													
Menos de High School			75.2			78.1		69.5		70.0		59.6	
High School			18.9			12.5		17.3		15.7		24.9	
Licenciatura incompleta			3.6			6.2		9.6		8.0		7.8	
Licenciatura y más			2.3			3.2		3.7		6.3		7.7	
Tiempo de residencia en Estados Unidos													
Más de 10 años			n.d			42.1		50.2		51.3		58.1	
De 5 a 10 años			n.d			24.6		20.3		20.0		22.0	
Hasta 5 años			n.d			33.3		29.6		28.8		19.9	
Ciudadanía estadounidense													
Ciudadano estadounidense			n.d			25.4		25.1		23.7		23.1	
No ciudadano estadounidense			n.d			74.6		74.9		76.3		76.9	
Condición de pobreza													
Pobres			n.d			27.4		30.9		26.7		23.9	
No pobres			n.d			72.6		69.1		73.3		76.1	
Ocupación													
Ejecutivos, Profesionistas y Técnicos			7.3			6.5		7.0		7.7		7.7	
Trabajadores de servicios semicalificados ¹			0.9			1.1		1.1		1.6		1.6	
Ventas y apoyo administrativo y de oficinas			10.9			10.6		12.1		12.6		11.6	
Trabajadores de servicios de baja calificación ²			13.7			15.3		19.3		19.0		26.8	
Obreros y trabajadores especializados			48.4			49.2		41.3		38.0		26.9	
Trabajadores de la construcción			4.1			5.4		6.9		9.7		20.0	
Agricultores y trabajadores agrícolas			14.7			11.9		12.3		11.4		5.4	

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 116.

- Notas: 1/ Incluye a las ocupaciones relacionadas con el cuidado de la salud, como ayudantes de terapeutas, masajes, ayudantes dentales y auxiliares médicos, servicios de protección y seguridad, etc.
- 2/ Incluye a las ocupaciones relacionadas con la preparación de comida, mantenimiento y limpieza de inmuebles, servicios domésticos y personales, etc. Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en Buró de Censos, 1970, 1980, 1990, 2000; American Community Survey, 2007.

80. LOS DIFÍCILES CAMINOS DE LA INTEGRACIÓN

Basta decir que las ocupaciones de servicios de baja calificación, manufactura y construcción concentran a cerca de 81% de los trabajadores mexicanos de ingreso reciente al país y a 72% de los de largo arribo. Estos indicadores contrastan con los que presentan tanto los inmigrantes de otras regiones como la población nativa, quienes revelan un mayor acceso a puestos de trabajo de ejecutivos, profesionistas y técnicos (38%, en ambos casos).

De hecho, entre 2007 y 2008 la fuerza laboral mexicana ocupada en el vecino país registró una disminución de 3.2%, a la vez que la tasa de desempleo aumentó 47%, al pasar de 5.5 a 8.2%. Asimismo, el ingreso promedio anual de los trabajadores mexicanos disminuyó 7.3% en los últimos dos años, lo que significó contar con 1 800 dólares menos al año.

Los mexicanos que se desempeñan en la construcción han sido los más afectados por la pérdida de empleo. Entre 2007 y 2008 se observa una disminución de 13% en el número de mexicanos ocupados en la construcción.

Al respecto, el grupo más afectado por la condición de pobreza es precisamente el de los hijos de menor edad de los mexicanos: 40% de los hijos nacidos en México y 33% de los nacidos en Estados Unidos viven en condición de pobreza, una incidencia muy superior a la que presentan los hijos con menos de 18 años de inmigrantes de otras naciones.¹

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 117.

81. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO, 2008¹

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO, 2008

País de nacimiento						
	México			Otras naciones	Estados Unidos	Total
	Total	Reciente arribo ³	Largo arribo ⁴			
Total	11 845 295	4 584 126	7 254 761	27 778 924	259 481 502	299 099 313
Sexo						
Hombres	55.5	57.6	54.1	47.8	48.9	49.1
Mujeres	44.5	42.4	45.9	52.2	51.1	50.9
Edad						
0-17 años	9.3	19.2	3.1	8.0	27.4	24.9
18-64 años	85.1	78.9	89.1	77.7	60.2	62.8
65 años y más	5.5	2.0	7.8	14.2	12.4	12.3
Escolaridad (25 años y más)						
Menos de High School	61.0	63.2	60.1	17.2	10.2	13.4
High School	24.0	22.3	24.8	26.0	32.3	31.2
Licenciatura incompleta	7.9	6.7	8.4	14.7	23.3	21.5
Licenciatura o más	7.1	7.8	6.8	42.1	34.3	33.9
Ciudadanía % Ciudadano	22.7	5.6	33.4	53.0	100.0	92.6
Fuerza de trabajo % en la fuerza de trabajo total	4.8	1.6	3.2	11.5	83.7	100.0
Ocupación						
Ejecutivos, Profesionistas y Técnicos	8.1	4.8	9.7	37.5	37.7	36.3
Trabajadores de servicios semicalificados ¹	1.5	0.8	1.8	4.2	4.4	4.2
Ventas y apoyo administrativo y de oficinas	11.1	6.5	13.5	20.8	26.0	24.7
Trabajadores de servicios de baja calificación ²	26.0	27.7	25.3	15.6	10.9	12.1
Obreros y trabajadores especializados	26.8	23.1	28.6	15.8	15.7	16.2
Trabajadores de la construcción	21.8	30.1	17.6	5.9	4.9	5.8
Agricultores y trabajadores agrícolas	4.6	7.1	3.4	0.3	0.5	0.7
Ingreso promedio anual (en dólares)						
Trabajadores de 16 años y más	23 056	18 657	25 356	42 466	40 796	40 129
Cobertura de salud						
Con cobertura	45.9	32.9	54.1	77.2	87.3	84.7
Sin cobertura	54.1	67.1	45.9	22.8	12.7	15.3

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 118.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO, 2008

País de nacimiento						
	México			Otras naciones	Estados Unidos	Total
	Total	Reciente arribo ³	Largo arribo ⁴			
Plan de pensión o retiro ofrecido por el empleador (trabajadores ocupados)						
Con pensión	22.6	14.3	28.4	42.4	54.9	52.0
Sin pensión	77.4	85.7	71.6	57.6	45.1	48.0
Número de personas en pobreza						
0-17 años	437 912	362 763	73 747	471 542	12 821 264	13 730 718
18-64 años	2 376 090	1 067 745	1 306 788	2 419 533	15 600 426	20 396 049
65 años y más	125 823	25 253	100 570	523 662	2 906 053	3 555 538
Número relativo de personas en pobreza						
0-17 años	39.6	41.3	32.6	21.1	18.0	18.5
18-64 años	23.6	29.5	20.2	11.2	10.0	10.9
65 años y más	19.2	28.0	17.8	13.3	9.0	9.7

Notas: 1/ Incluye a las ocupaciones relacionadas con el cuidado de la salud, como ayudantes de terapeutas, masajes, ayudantes dentales y auxiliares médicos, servicios de protección y seguridad, etc.

2/ Incluye a las ocupaciones relacionadas con la preparación de comida, mantenimiento y limpieza de inmuebles, servicios domésticos y personales, etc. Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en Bureau of Census, Current Population Survey, marzo de 2008.

82. DISCURSO BARACK OBAMA (2009)

82.1 DISCURSO SOBRE INMIGRACIÓN Y SEGURIDAD FRONTERIZA (10 de mayo 2011) El Paso, Texas¹

Hola, El Paso! Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y volver a estar en el Estado de la Estrella Solitaria. Me encanta venir a Texas. Incluso las bienvenidas son grandiosas aquí. Entonces para mostrarles mi agradecimiento, quise pronunciar un discurso importante sobre política... al aire libre... al mediodía, en un día soleado y caluroso.

Espero que todos se hayan echado protector solar.

Ahora bien, hace aproximadamente una semana, pronuncié el discurso de graduación en Miami Dade Community College, una de las instituciones superiores de mayor diversidad en el país. Los egresados se sentían orgullosos de que su promoción tenía raíces en 181 países del mundo. Muchos de los estudiantes mismos son inmigrantes que vinieron a Estados Unidos con poco más que los sueños de sus padres y la ropa que llevaban puesta. Algunos solo se enteraron de adolescentes o adultos de que eran indocumentados. Pero trabajaron duro y se esforzaron al máximo, y se hicieron merecedores de esos diplomas.

Durante la ceremonia, desfilaron por el estado 181 banderas, una por cada país representado. Los egresados y familiares con raíces en esos países aplaudieron cada una de ellas. Pero luego quedó a la vista la última bandera, la bandera estadounidense. Y la sala estalló en aplausos. Toda persona en el auditorio vitoreó. En efecto, los padres, abuelos —o los mismos egresados— provenían de todos los rincones del mundo. Pero fue aquí que encontraron oportunidades y tuvieron la posibilidad de hacer un aporte al país donde viven.

Fue un recordatorio de una idea simple, tan antigua como el propio Estados Unidos. E pluribus, unum. De muchos, uno. Nos definimos como una nación de inmigrantes, una nación que acoge a quienes están dispuestos a adoptar los preceptos de

1 Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 119-120.

Estados Unidos. Por eso, millones de personas, los antepasados de muchos de nosotros, enfrentaron dificultades y grandes peligros para venir aquí, para poder tener la libertad de trabajar y practicar su religión y llevar su vida en paz. Los inmigrantes asiáticos que llegaron a la isla Ángel de California. Los alemanes y escandinavos que se establecieron en toda la región del medio oeste. Las olas de inmigrantes irlandeses, italianos, polacos, rusos y judíos que se inclinaron sobre la barandilla para poder ver por primera vez la Estatua de la Libertad.

Este flujo de inmigrantes ha ayudado a hacer que este país sea más sólido y más próspero. Podemos señalar el genio de Einstein y los diseños de I. M. Pei, los relatos de Isaac Asimov y los sectores industriales enteramente desarrollados por Andrew Carnegie.

Y también me vienen a la mente las ceremonias de naturalización que hemos tenido en la Casa Blanca para miembros de las Fuerzas Armadas, las cuales han sido muy inspiradoras.

Aunque todavía no eran ciudadanos, estos hombres y mujeres se alistaron para servir. Uno de ellos era un joven llamado Granger Michael de Papúa Nueva Guinea, un infante de Marina que ha sido enviado tres veces al frente en Irak. Dijo lo siguiente sobre hacerse ciudadano estadounidense. “Tiene sentido. Amo a este país”. A los infantes de Marina no les gusta hablar mucho. Otro fue una muchacha llamada Perla Ramos. Nació y se crió en México, vino a Estados Unidos poco después del 11 de septiembre y se incorporó a la Marina. Afirmó, “siento orgullo por nuestra bandera... y la historia que redactamos día tras día”.

Esa es la promesa de este país: que cualquiera puede escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. No importa de dónde vienes; lo que importa es que creas en los ideales de nuestra fundación; que creas que todos nosotros somos iguales y merecemos la libertad de ir en pos de la felicidad. Que al adoptar a Estados Unidos, puedes ser estadounidense. Y eso nos enriquece a todos.

Al mismo tiempo, sin embargo, nos encontramos en la frontera hoy porque también reconocemos que ser una nación de inmigrantes conlleva ser un estado de derecho. Ese también es nuestro patrimonio. Esto también es importante. Y el hecho es que a menudo hemos tenido dificultad para dictar medidas sobre a quiénes se permite y a quiénes no se permite ingresar a este país. A veces ha habido temor y resentimiento hacia los recién llegados, particularmente durante períodos de dificultad económica. Y ya que estos asuntos están relacionados con convicciones muy arraigadas —sobre quiénes somos como pueblo, sobre lo que significa ser estadounidense— estos debates a menudo suscitan emociones fuertes.

Es por eso que se nos ha hecho difícil reformar nuestro ineficaz sistema de inmigración. Cuando un asunto es tan complejo y suscita emociones tan fuertes, es más fácil para los políticos posponer el problema hasta las próximas elecciones. Y siempre hay más elecciones. Por eso hemos visto muchas acusaciones y politiquería y retórica mordaz. Hemos visto que esfuerzos de buena fe de parte de líderes han sucumbido

a las acostumbradas manipulaciones de Washington. Y mientras tanto, hemos visto las consecuencias cada vez mayores de décadas de inacción.

Hoy en día, hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Algunos cruzaron la frontera ilegalmente. Otros evitaron las leyes de inmigración al permanecer aquí después del vencimiento de su visa. Independientemente de cómo vinieron, la gran mayoría de estas personas simplemente está tratando de ganarse la vida y mantener a su familia. Pero han trasgredido las normas y se han colado en la fila. Y lo cierto es que la presencia de tantos inmigrantes ilegales es una burla para todos aquellos que están tratando de inmigrar legalmente.

Además, debido a que los inmigrantes indocumentados viven en la clandestinidad, son vulnerables a empresas inescrupulosas que evaden impuestos, les pagan a los trabajadores menos del sueldo mínimo o velan a medias por su salud y seguridad. Esto pone en injusta desventaja a las empresas que cumplen con las normas y a los estadounidenses que exigen con razón el sueldo mínimo, pago por horas extraordinarias o un lugar seguro para trabajar.

Pónganse a pensar. En la última década, incluso antes de la recesión, las familias de clase media pasaban apuros para mantenerse, ya que los precios aumentaban pero los salarios no. Lo estamos volviendo a ver con el precio de la gasolina. Pues, una manera de darle solidez a la clase media es reformar nuestro sistema de inmigración, de manera que deje de haber una enorme economía clandestina que explota una fuente barata de mano de obra y a la vez hace que los salarios de todos los demás bajen. Quiero que los ingresos de las familias de clase media vuelvan a subir. Quiero que la prosperidad en este país sea generalizada. Por eso, la reforma de la inmigración es un imperativo económico.

Además, la reforma también ayudará a hacer que Estados Unidos sea más competitivo en la economía mundial. Hoy en día, les otorgamos visas a estudiantes de todo el mundo para que obtengan grados de ingeniería y computación en nuestras principales universidades. Pero nuestras leyes los desalientan de usar esas destrezas para iniciar una empresa o aportar a un nuevo sector aquí en Estados Unidos. Entonces, en vez de capacitar a empresarios para generar empleos en nuestro país, los capacitamos para generar empleo para nuestra competencia. Eso no tiene sentido. En un mercado mundial, necesitamos todo el talento que podamos conseguir, no solo para beneficiar a esas personas, sino porque sus contribuciones beneficiarán a todos los estadounidenses.

Consideren los casos de Intel y Google y Yahoo e eBay: grandes empresas estadounidenses que han generado innumerables empleos y nos han ayudado a ser líderes del mundo en sectores de alta tecnología. Cada una de ellas fue fundada por un inmigrante. Pues, no queremos que el próximo Intel o Google se origine en China o India. Queremos que tales empresas y empleos se forjen en Estados Unidos. Bill Gates lo entiende. “Estados Unidos descubrirá que es mucho más difícil mantener su ventaja competitiva”, afirmó, “si excluye a quienes pueden y están dispuestos a ayudarnos a competir”.

Es por este motivo que empresas en todo Estados Unidos están exigiendo que Washington finalmente cumpla con su responsabilidad de resolver el problema de inmigración. Todos reconocen que el sistema no está funcionando bien. La cuestión es, ¿contamos con la voluntad política para hacer algo al respecto? Y es por eso que hoy estamos aquí en la frontera.

En años recientes, entre los mayores impedimentos para la reforma estaban cuestiones de seguridad fronteriza. Son inquietudes legítimas; es cierto que una falta de personal y recursos en la frontera, combinada con el atractivo de empleos y la aplicación poco pensada de la ley una vez que las personas estaban dentro del país, contribuyeron a que un número cada vez mayor de personas indocumentadas vivan en Estados Unidos. Y estas inquietudes contribuyeron a que se disolviera una coalición bipartidista que constituimos cuando era senador federal. En años posteriores, el estribillo común ha sido “primero la frontera” incluso entre quienes anteriormente respaldaban la reforma integral de la inmigración.

Pues bien, en los últimos dos años hemos respondido a sus inquietudes. Con el liderazgo de la secretaria Napolitano, hemos aumentado la seguridad fronteriza más de lo que se creía posible. Querían más agentes en la frontera. Pues ahora tenemos más efectivos en el terreno en la región sudoeste que en ningún otro momento de nuestra historia. La Patrulla Fronteriza cuenta con 20,000 agentes, más del doble de los que había en el 2004, un incremento que se inició bajo el Presidente Bush y que hemos continuado. Querían vallas. Pues prácticamente todas las vallas están en su sitio.

Y hemos hecho mucho más que eso. Hemos aumentado al triple el número de analistas de inteligencia que trabajan en la frontera. He puesto en uso aeronaves no tripuladas para patrullar el espacio aéreo desde Texas a California. Hemos forjado una alianza con México para combatir las organizaciones criminales transnacionales que afectan a ambos países. Y por primera vez estamos inspeccionando 100 por ciento de la carga ferroviaria camino al sur, para confiscar armas y dinero en esa dirección, a la vez que combatimos las drogas camino al norte.

Entonces, hemos hecho mucho más de lo solicitado por los mismos republicanos que dijeron que respaldaban una reforma más extensa siempre que realmente se velara por el cumplimiento de la ley. Sin embargo, a pesar de que hemos respondido a estas inquietudes, sospecho que habrá quienes traten de imponer nuevas condiciones, una vez más. Dirán que necesitamos tres o cuatro veces más personal de la patrulla fronteriza. Dirán que necesitamos una valla más alta para respaldar la reforma.

¿Tal vez dirán que necesitamos un foso circundante? ¿O caimanes?

Nunca estarán satisfechos. Y lo comprendo. Así es la política.

Pero el hecho es que las medidas que hemos implementado están produciendo resultados. En los últimos dos años y medio, hemos confiscado 31 por ciento más drogas, 75 por ciento más dinero en efectivo y 64 por ciento más armas que antes. Al intensificar las patrullas, se han reducido las capturas a lo largo de la frontera en casi

40 por ciento con relación a hace dos años. Eso significa que menos personas están tratando de cruzar la frontera ilegalmente.

Además, a pesar de muchos reportajes con tono urgente que han calificado de peligrosos a lugares como El Paso, el número de crímenes en los condados de la frontera sudoeste se ha reducido en un tercio. Una y otra vez, El Paso y otras ciudades y pueblos a lo largo de la frontera reciben altos puntajes en las listas de los lugares más seguros del país. Por supuesto que no deberíamos aceptar violencia o crimen alguno, y nos queda trabajo por hacer. Pero este progreso es importante.

Además de la frontera, también estamos tomando medidas contra empleadores que explotan adrede a las personas y trasgreden la ley. Además estamos deportando a quienes están aquí ilegalmente. Ahora bien, sé que el incremento en deportaciones ha sido fuente de controversia. Pero quiero destacar lo siguiente: no estamos haciendo esto desordenadamente; estamos usando nuestros limitados recursos para ir en pos de criminales violentos y personas declaradas culpables de crímenes; no familias ni personas que simplemente tratan de ganarse la vida de alguna manera. Como resultado, logramos un incremento de 70 por ciento en las deportaciones de criminales.

Y estamos conscientes del impacto que esto tiene en las personas. Incluso mientras reconocemos que es necesario velar por el cumplimiento de la ley, no nos deleitamos en el sufrimiento que causa en las personas que simplemente tratan de sobrevivir. Y mientras las leyes actuales existan, no solo los rudos criminales están sujetos a deportación, sino también las familias que simplemente tratan de ganarse la vida, estudiantes brillantes y esmerados, gente decente con las mejores intenciones. Sé que hay algunas personas aquí que quisieran que simplemente pasara por alto al Congreso y cambiara las leyes solo. Pero así no funciona la democracia. Lo que realmente necesitamos hacer es continuar luchando para que se apruebe la reforma. Esa es la solución definitiva a este problema.

Y me gustaría señalar que la medida más significativa que podemos tomar ahora para resguardar las fronteras es reestructurar todo el sistema, para que menos personas tengan el incentivo de ingresar ilegalmente en busca de trabajo, para comenzar. Esto permitiría que los agentes se dediquen a combatir las peores amenazas en nuestras dos fronteras, desde narcotraficantes hasta quienes vienen para cometer actos de violencia o terrorismo.

Así que el asunto es si los miembros del Congreso que anteriormente se rehusaron a tratar este tema por exigir más vigilancia policial ahora están dispuestos a volver a negociar y concluir la labor que comenzamos.

Es necesario que pongamos la política de lado. Y si lo hacemos, estoy seguro de que podemos encontrar terreno común. En esto, Washington respalda la opinión mayoritaria en el país. Ya existe una coalición cada vez más numerosa de líderes en todo Estados Unidos que no siempre concuerda, pero que está llegando a un consenso con respecto a este tema. Ven las nocivas consecuencias de las fallas del sistema para

sus empresas y comunidades. Comprenden los motivos por lo que es necesario hacer algo al respecto.

Son demócratas y republicanos, entre ellos el ex senador republicano Mel Martínez y Michael Chertoff, ex secretario de Seguridad Nacional del gobierno del Presidente Bush; líderes como el alcalde Michael Bloomberg; pastores evangélicos como Leith Anderson y Bill Hybels; jefes de policía de todo el país; educadores y portavoces comunitarios; sindicatos laborales y cámaras de comercio; dueños de pequeñas empresas y ejecutivos de empresas de Fortune 500. Un alto ejecutivo dijo esto sobre la reforma. “El ingenio estadounidense es producto de la apertura y diversidad de esta sociedad... los inmigrantes han hecho de Estados Unidos un gran país, un líder mundial en negocios, ciencias, educación superior e innovación”. Son las palabras de Rupert Murdoch, dueño de Fox News e inmigrante. No sé si conocen sus opiniones, pero digamos simplemente que no tiene en su auto una calcomanía de Obama.

Entonces, existe un consenso en torno a solucionar las fallas. Ahora necesitamos que el Congreso también se ponga en marcha. Ahora necesitamos unirnos en torno a una reforma que refleje nuestros valores como estado de derecho y nación de inmigrantes; que exija que todos asuman responsabilidades.

Entonces, ¿qué forma cobraría la reforma integral?

En primer lugar, sabemos que el gobierno tiene la responsabilidad mínima de resguardar las fronteras y velar por el cumplimiento de la ley. En segundo lugar, se debe hacer que las empresas que explotan a trabajadores indocumentados rindan cuentas por sus actos. En tercer lugar, quienes están aquí ilegalmente también tienen una responsabilidad. Deben admitir que trasgredieron las leyes y además deben pagar impuestos y una multa, y aprender inglés. Y deben someterse a una investigación de antecedentes penales y un largo proceso antes de poder ponerse en fila para la legalización.

Y en cuarto lugar, poner fin a la inmigración ilegal también requiere reformar nuestra anacrónica ley de inmigración legal.

Debemos facilitar que las mejores personas y las más brillantes no solo estudien aquí, sino que también abran negocios y generen empleos aquí. En años recientes, 25 por ciento de las nuevas empresas de alta tecnología en Estados Unidos fueron fundadas por inmigrantes, lo que resultó en más de 200,000 empleos en Estados Unidos. Me complace que estos empleos estén aquí. Y quiero ver que se generen más de ellos en este país.

Es necesario que les otorguemos a los agricultores una manera legal de contratar a los trabajadores de los que dependen y ofrezcamos una vía para que dichos trabajadores puedan obtener estatus legal.

Nuestras leyes deben respetar a las familias que cumplen con las normas al reunificarlas más rápidamente en vez de dividir las. Hoy en día el sistema de inmigración no solo tolera a quienes incumplen las normas sino también castiga a las personas que sí cumplen con ellas. Por ejemplo, se prohíbe que vengan a Estados Unidos los solicitantes mientras esperan aprobación. Es posible que incluso marido y mujer pasen años

separados. Los padres no pueden ver a sus hijos. Pienso que Estados Unidos no debe dedicarse a separar familias. No es correcto. No somos así.

Y debemos dejar de castigar a jóvenes inocentes por los actos de sus padres al negarles la oportunidad de obtener una educación o prestar servicio militar. Por eso es necesario que aprobemos la ley Dream. Logramos que la Cámara de Representantes aprobara la ley Dream el año pasado. A pesar de que recibió una mayoría de los votos en el Senado, fue bloqueada cuando varios republicanos que previamente habían respaldado la ley Dream votaron en su contra.

Fue una gran decepción llegar tan cerca, para luego ver que la política se interponía. Y cuando pronuncié el discurso de graduación en Miami Dade, me partió el alma saber que varios de esos estudiantes brillantes con un futuro prometedor –jóvenes que se esforzaron tanto y que son prueba de lo mejor de Estados Unidos– están en peligro de enfrentar la agonía de la deportación. Se trata de muchachos que se criaron en este país, aman a este país y no tienen otra patria. La posibilidad de que se les castigue es cruel y no tiene sentido. Esta nación está por encima de eso.

Entonces vamos a continuar la lucha por la ley Dream. Vamos a continuar la lucha por la reforma. Y es aquí que ustedes deben poner de su parte. Yo pondré de mi parte para propiciar un debate constructivo y cortés sobre estos temas. Ya tuvimos una serie de reuniones sobre esto en semanas recientes en la Casa Blanca. Y tenemos a líderes aquí y en el resto del país ayudándonos a hacer que el debate avance. Pero este cambio debe ser impulsado por ustedes, para ayudarnos a exigir una reforma integral y a identificar los pasos que podemos dar ahora mismo, como la ley Dream y la reforma de visas, asuntos sobre los que podemos encontrar terreno común entre demócratas y republicanos para comenzar a solucionar problemas.

Les pido que sumen sus voces a este debate, y pueden escribirse para ayudar en whitehouse.gov. Necesitamos que Washington sepa que existe un movimiento a favor de la reforma que cobra fuerza de costa a costa. Es así que lograremos hacer esto. Es así que podemos asegurar que en los próximos años recibamos con los brazos abiertos el talento de todos aquellos que pueden contribuir a este país y estar a la altura de esa idea tan estadounidense: si lo intentas, lo puedes lograr.

Esta idea fue la que le dio esperanza a José Hernández, aquí presente. Los padres de José eran trabajadores agrícolas migrantes. Por lo tanto, él también lo fue de niño. Nació en California, a pesar de que fácilmente podría haber nacido al otro lado de la frontera, si hubiese sido otra época del año, pues su familia se mudaba con las temporadas. En efecto, dos de sus hermanos nacieron en México.

Viajaban mucho, y José cosechaba pepinos y fresas con sus padres. Por eso perdía parte del año escolar cuando regresaban a México todos los inviernos. No aprendió inglés hasta los 12 años. Pero José era bueno para la matemática y le gustaba. Lo fascinante sobre la matemática es que es igual en todas las escuelas y es igual en español.

Entonces, estudió mucho. Y un día, parado en el campo recolectando remolacha, escuchó en un radio portátil que una persona llamada Franklin Chang-Díaz —una persona con un nombre parecido al suyo— iba a ser astronauta de la NASA.

José decidió que él también sería astronauta.

Entonces, siguió estudiando y se graduó de la secundaria. Siguió estudiando y se graduó de ingeniero y realizó un posgrado. Siguió esforzándose mucho y fue a parar a un laboratorio nacional, ayudando a desarrollar un nuevo sistema digital de imágenes médicas.

Y a los pocos años, se encontró a más de 100 millas sobre la superficie de la Tierra, desde donde miró por la ventana del trasbordador espacial Discovery y recordó al niño en el campo en California con un sueño imposible y una fe inquebrantable en que todo se puede lograr en Estados Unidos.

Es por eso que luchamos. Luchamos por cada niño y niña con un sueño y potencial a punto de ser aprovechado, como José. Luchamos para dar rienda suelta a esa promesa y todo lo que ofrece, no solo para su futuro sino para el futuro de este gran país.

Gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a Estados Unidos de Norteamérica.

82.2 PROCLAMA DEL PRESIDENTE OBAMA CON MOTIVO DEL MES NACIONAL DE LA HERENCIA HISPANA (18 septiembre 2012)¹

La historia de nuestra nación no sería posible sin generaciones de hispanos que han moldeado y fortalecido la fibra de nuestra Unión. Ellos han enriquecido todos los aspectos de nuestra identidad nacional con tradiciones que abarcan siglos y reflejan los muchos ancestros que constituyen la comunidad hispana. Este mes, celebramos esta rica herencia y reflexionamos sobre las contribuciones tan invaluable que han hecho los hispanos a los Estados Unidos.

Los hispanos han contribuido a moldear nuestras comunidades y a expandir nuestro país, desde los laboratorios y la industria hasta las salas de dirección ejecutiva y las aulas escolares. Ellos han liderado movimientos que impulsaron a nuestro país a llegar más cerca de hacer realidad los ideales democráticos de los documentos de constitución de los Estados Unidos, y ellos han servido valientemente como miembros de nuestras Fuerzas Armadas para defender esos ideales aquí en casa y en el extranjero. Los hispanos también sirven como líderes a través de todo el sector público, ocupando puestos en los más altos niveles de nuestro gobierno y en nuestras cortes más elevadas.

Según celebramos estos logros ganados con tanto esfuerzo, también tenemos que tener presente que hay más trabajo por hacer para ampliar el círculo de oportunidad para la comunidad hispana y mantener el sueño americano al alcance de todos los que aspiren a lograrlo. Desde promover la creación de empleos y garantizar que los hispanos estén representados en la fuerza laboral federal hasta renovar nuestro sistema

1 <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/05/20110510164142x0.2289501.html#ixzz2IA7GdvRL> , consulta realizada el 6 de febrero de 2013.

educacional para satisfacer las demandas del siglo XXI, mi Administración ha creado escaleras de oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional les ha despejado la sombra de la deportación a los jóvenes con talento y patriotismo que fueron traídos a este país siendo niños, dándoles cierto grado de alivio de manera que estos puedan continuar contribuyendo a nuestra sociedad, y permanecemos firmes en nuestro esfuerzo por conseguir una reforma migratoria legislativa que sea significativa.

Independientemente de si podemos rastrear nuestras raíces a los que llegaron aquí en el Mayflower, a los que se establecieron en el suroeste del país hace algunos siglos, o a los que se unieron a la familia americana más recientemente, todos compartimos una creencia común en la promesa perdurable de los Estados Unidos, que es la promesa de que, independientemente de donde uno provenga o de la fisonomía que uno tenga, cada uno de nosotros puede tener éxito si lo intentamos. Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, a medida que celebramos los éxitos de la comunidad hispana, reafirmemos nuestro compromiso a extenderles esa promesa a todos los estadounidenses.

Para honrar los logros de los hispanos en los Estados Unidos, el Congreso, mediante el Derecho Público 100-402, según ha sido enmendado, ha autorizado y solicitado al Presidente que emita anualmente una proclamación que designe el período del 15 de septiembre al 15 de octubre como “Mes Nacional de la Herencia Hispana”.

AHORA, POR LO TANTO, YO, BARACK OBAMA, Presidente de los Estados Unidos de América, proclamo por la presente el período del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2012, como el Mes Nacional de la Herencia Hispana. Exhorto a los funcionarios públicos, los educadores, los bibliotecarios, y a todos los estadounidenses a observar este mes con las ceremonias, actividades y programas adecuados.

EN FE DE LO CUAL, he estampado aquí mi firma en este día catorce de septiembre, en el año del Señor dos mil doce, y de la independencia de los Estados Unidos de América el doscientos treinta y siete.

82.3 DISCURSO DEL PRESIDENTE OBAMA SOBRE LA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL

(30 enero 2013)¹

EL PRESIDENTE: ¡Gracias! (Aplausos.) ¡Gracias! Muchísimas gracias. (Aplausos.) ¡Que contento estoy de estar nuevamente en Las Vegas! (Aplausos.) Y que contento estoy de encontrarme entre tantos buenos amigos.

Quiero comenzar agradeciéndoles a todos aquí en Del Sol High School por recibirnos hoy. (Aplausos.) ¡Arriba, Dragons! Quiero agradecerle especialmente a su extraordinaria directora, Lisa Primas. (Aplausos.)

Aquí tenemos a todo tipo de invitados admirables, pero quiero mencionar a unos cuantos. Primero que todo, aquí está nuestra extraordinaria Secretaria del De-

1 <http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/09/20120918136165.html#ixzz2IABYEz1J> , consultada el 6 de febrero de 2013.

partamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. (Aplausos.) Nuestro magnífico Secretario del Interior, Ken Salazar. (Aplausos.) La antigua Secretaria del Trabajo, Hilda Solís. (Aplausos.) Dos de los distinguidos miembros de la delegación del Congreso de Nevada, Steve Horsford y Dina Titus. (Aplausos.) Su propia alcaldesa, Carolyn Goodman. (Aplausos.)

Pero también tenemos a algunos alcaldes que volaron hasta aquí porque saben lo importante que es el asunto del que vamos a hablar en el día de hoy. Marie López Rogers de Avondale, Arizona. (Aplausos.) Kasim Reed de Atlanta, Georgia. (Aplausos.) Greg Stanton de Phoenix, Arizona. (Aplausos.) Y Ashley Swearengen de Fresno, California. (Aplausos.)

Y todos ustedes están aquí, así como algunos de los principales líderes laborales del país. Y estamos tan sumamente agradecidos. Y, desde luego, tenemos aquí a unos magníficos estudiantes, así es que no me podría sentir más orgulloso de nuestros estudiantes. (Aplausos.)

Ahora bien, aquellos de ustedes que tengan asiento, siéntanse en libertad de tomar asiento. No me importa.

MIEMBRO DEL PÚBLICO: ¡Lo quiero, Sr. Presidente!

EL PRESIDENTE: Yo también te quiero a ti. (Aplausos.)

Ahora bien, la semana pasada tuve el honor de ser juramentado para un segundo mandato como Presidente de los Estados Unidos. (Aplausos.) Y, durante mi discurso de toma de posesión, hablé sobre cómo lograr progreso en los retos concretos de nuestra época no requiere que lleguemos a un acuerdo en cada debate ni tampoco que pasemos por alto todas las diferencias que tengamos, pero sí requiere que encontremos puntos de afinidad y que vayamos adelante con un propósito en común. Nos requiere que tomemos acción.

Yo sé que algunos asuntos requerirán un esfuerzo mayor que otros. Algunos debates resultarán más contenciosos. Y eso no debe sorprendernos. Pero el motivo por el que estoy aquí hoy es debido a un reto en el que las diferencias están desapareciendo; donde está surgiendo un consenso generalizado; y donde ahora puede escucharse un llamado a tomar acción de todas partes de los Estados Unidos. Estoy aquí hoy porque ha llegado el momento de una reforma migratoria integral y de sentido común. (Aplausos.) Ha llegado el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento.

PÚBLICO: ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!

EL PRESIDENTE: Ahora es el momento.

Estoy aquí hoy porque la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que es hora de componer un sistema que ha estado descompuesto durante demasiado tiempo. Estoy aquí porque los líderes empresariales, los líderes religiosos, los líderes laborales, los encargados del cumplimiento del orden, y los líderes de ambos partidos están uniendo fuerzas para decir que ha llegado el momento de encontrar una manera mejor de acoger a los inmigrantes esperanzados y que se esfuerzan para quienes los

Estados Unidos sigue siendo la tierra de la oportunidad. Ha llegado el momento de hacerlo de manera que podamos fortalecer nuestra economía y fortalecer el futuro de nuestro país.

Consideren esto; nos definimos como una nación de inmigrantes. Eso es lo que somos, en nuestros huesos. La promesa que vemos en los que llegan aquí desde todos los rincones del mundo, esa siempre ha sido una de nuestras mayores fortalezas. Mantiene joven a nuestra fuerza laboral. Mantiene a nuestro país a la vanguardia. Y ha contribuido a crear el mejor motor económico que el mundo haya conocido hasta ahora.

Después de todo, ¡los inmigrantes contribuyeron a abrir negocios tales como Google y Yahoo!. Ellos crearon industrias totalmente nuevas que, a su vez, crearon nuevos empleos y nueva prosperidad para nuestros habitantes. En años recientes, uno de cada cuatro negocios de alta tecnología en fase de desarrollo en los Estados Unidos fue fundado por inmigrantes. Uno de cada cuatro dueños de pequeñas empresas era un inmigrante, incluyendo aquí mismo en Nevada, gente que vino aquí en busca de oportunidad y ahora quiere compartir esa oportunidad con otros estadounidenses.

Sin embargo, todos sabemos que actualmente tenemos un sistema de inmigración que está obsoleto y totalmente descompuesto; un sistema que nos impide el progreso en lugar de ayudarnos a fomentar nuestra economía y fortalecer nuestra clase media.

Ahora mismo, tenemos 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos; 11 millones de hombres y mujeres, de todas partes del mundo, que viven sus vidas en las sombras. Efectivamente, ellos incumplieron las reglas. Cruzaron ilegalmente la frontera. Tal vez permanecieron aquí más tiempo del permitido por sus visas. Esos son los hechos. No hay duda de ello. Pero esos 11 millones de hombres y mujeres ahora están aquí. Muchos de ellos han estado aquí durante años. Y la inmensa mayoría de esas personas no está metida en problemas. Son miembros de la comunidad que contribuyen. Ellos velan por sus familias. Ellos velan por sus vecinos. Están entretejidos en la fibra de nuestras vidas.

Todos los días de su vida, al igual que el resto de nosotros, ellos salen a la calle a ganarse el sustento. Con frecuencia lo hacen en una economía en las sombras; un lugar en el que los empleadores pueden ofrecerles menos que el salario mínimo o hacerlos trabajar horas extra sin que reciban paga extra. Y cuando eso sucede, no solo es malo para ellos, es malo para toda la economía. Pues todos los negocios que están tratando de hacer lo correcto, los que contratan gente legalmente, le pagan un salario decente, siguen las reglas, esos son los que sufren. Ellos tienen que competir contra las compañías que están quebrando las reglas. Y también están en peligro los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores americanos.

De manera que, si estamos realmente comprometidos a fortalecer nuestra clase media y proveerles más escalones de oportunidad a aquellos que están dispuestos a trabajar duro para llegar a la clase media, tenemos que componer este sistema.

Tenemos que cerciorarnos de que todo negocio y todo trabajador en los Estados Unidos se rija por el mismo conjunto de reglas. Tenemos que sacar a la luz a esa economía en las sombras de manera que todo el mundo rinda cuentas: los negocios sobre a quiénes contratan, y los inmigrantes sobre si están en cumplimiento con las leyes. Esto es algo de sentido común. Y por eso es que necesitamos una reforma migratoria integral. (Aplausos.)

Hay otro motivo económico por el que necesitamos la reforma. No se trata solo de la gente que viene aquí ilegalmente y el efecto que ellos tienen en nuestra economía. También se trata de la gente que intenta venir aquí legalmente, pero se le dificulta mucho hacerlo, y el efecto que eso tiene en nuestra economía.

Ahora mismo, hay estudiantes brillantes de todas partes del mundo tomando clases en nuestras mejores universidades. Ellos obtienen títulos en los campos del futuro, tales como ingeniería y ciencias de computación. Sin embargo, una vez que se gradúan, una vez que obtienen su título, hay una gran probabilidad de que tengan que marcharse de nuestro país. Consideren eso.

Intel se inició con la ayuda de un inmigrante que estudió aquí y entonces se quedó aquí. Instagram se inició con la ayuda de un inmigrante que estudió aquí y entonces se quedó aquí. Ahora mismo, en alguna de esas clases hay un estudiante maquinando sobre la manera de convertir esa gran idea, su Intel o Instagram, en un negocio grande. Les proveemos todas las habilidades que necesitan para hacer su idea realidad, pero entonces ¿por qué les decimos que abran ese negocio y creen esos empleos en China o en India o en México o en alguna otra parte? Así no es como se fomentan nuevas industrias en los Estados Unidos. Así es como les regalamos nuevas industrias a nuestros competidores. Por eso es que necesitamos una reforma migratoria integral. (Aplausos.)

Ahora bien, durante mi primer mandato, tomamos medidas para intentar de remediar algunas de las peores fisuras del sistema.

Primero, fortalecimos la seguridad en las fronteras de manera que pudimos finalmente detener el flujo de inmigrantes ilegales. Colocamos más guardias en la tierra en la frontera sur que en ningún momento en nuestra historia. Y, actualmente, los cruces ilegales han disminuido en casi un 80 por ciento desde su momento de más intensidad en 2000. (Aplausos.)

Segundo, concentramos nuestros esfuerzos de cumplimiento en los delincuentes que están aquí ilegalmente y que ponen en peligro a nuestras comunidades. Y, actualmente, la deportación de delincuentes está en su nivel más alto de la historia. (Aplausos.)

Y tercero, promovimos la causa de los DREAMers (aplausos), los jóvenes que fueron traídos a este país siendo niños, jóvenes que se han criado aquí, que han hecho sus vidas aquí, y que tienen sus futuros aquí. Dijimos que, a todo el que pueda satisfacer ciertos criterios básicos, tales como cursar estudios superiores, entonces consideraremos ofrecerle la oportunidad de salir de las sombras para poder vivir aquí y trabajar

aquí legalmente, de manera que pueda finalmente tener la dignidad de saber que pertenece a este país.

Sin embargo, debido a que ese cambio no es permanente, necesitamos que el Congreso tome acción; y no solo sobre la Ley DREAM. Necesitamos que el Congreso tome acción sobre un enfoque general que finalmente abarque a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que están en el país ahora mismo. Eso es lo que necesitamos. (Aplausos.)

Ahora bien, la buena noticia es que, por primera vez en muchos años, los Republicanos y los Demócratas parecen estar listos para hacerle frente al problema juntos. (Aplausos.) Los miembros de ambos partidos, en ambas cámaras, están esforzándose activamente para encontrar una solución. Ayer, un grupo bipartidista de senadores dio a conocer sus principios para una reforma migratoria integral, que coinciden mayormente con los principios que yo he propuesto y he defendido durante los últimos años. Así es que en este momento, parece haber un verdadero interés en lograr esto muy pronto, y eso es algo muy alentador.

Pero esta vez, se requiere que haya acción. (Aplausos.) No podemos permitir que la reforma migratoria se estanque en un debate infinito. Llevamos mucho tiempo en este debate. Así que no es que no sepamos técnicamente lo que hay que hacer. Como consecuencia, para agilizar el proceso, hoy estoy exponiendo mis ideas para la reforma migratoria. Y mi esperanza es que esto les provea ciertos indicadores clave a los miembros del Congreso a redactar un proyecto de ley, puesto que las ideas que estoy proponiendo han sido tradicionalmente apoyadas tanto por Demócratas como Ted Kennedy como por Republicanos como el Presidente George W. Bush. Esa coincidencia no se da con mucha frecuencia. (Risas.) Así es que sabemos dónde debe estar el consenso.

Ahora bien, desde luego, habrá un debate riguroso sobre muchos de esos detalles, y todo interesado debe participar en un verdadero intercambio de concesiones en el proceso. Pero es importante que reconozcamos que ya se ha establecido la base para una acción bipartidista. Y, si el Congreso no puede ir adelante de manera oportuna, yo enviaré un proyecto de ley basado en mi propuesta e insistiré que voten sobre este de inmediato. (Aplausos.)

Así es que los principios son bastante poco complicados. Hay muchos detalles que se derivan de estos. Vamos a repartir muchos papeles de manera que todo el mundo sepa exactamente de lo que estamos hablando. Pero los principios son bastante poco complicados.

Primero, creo que necesitamos mantenernos concentrados en el cumplimiento. Eso significa continuar reforzando la seguridad de nuestras fronteras. Significa perseguir más enérgicamente los negocios que a sabiendas contratan trabajadores indocumentados. Para ser justos, la mayoría de los negocios quiere hacer lo correcto, pero a muchos de ellos se les dificulta determinar quiénes están aquí legalmente y quiénes no. Así es que tenemos que implementar un sistema nacional que les permita a los negocios verificar de manera rápida y correcta la situación de empleo de las personas. Y,

si aun así, ellos contratan trabajadores indocumentados a sabiendas, entonces tenemos que incrementar las multas.

Segundo, tenemos que hacerles frente a los 11 millones de personas que están aquí ilegalmente. Todos estamos de acuerdo en que estos hombres y mujeres deben tener que ganarse el camino a la ciudadanía. Pero, para que la reforma migratoria integral funcione, tiene que quedar claro desde el principio que existe un camino a la ciudadanía. (Aplausos.)

Tenemos que trazar un camino: un proceso que incluya someterse a una verificación de antecedentes, pagar impuestos, pagar una multa, aprender inglés, y entonces irse al final de la fila, detrás de todos aquellos que están intentando venir aquí legalmente. Eso es lo que resulta justo, ¿no es cierto? (Aplausos.)

Así es que eso significa que no va a ser un proceso rápido pero será un proceso justo. Y sacará a estas personas de las sombras y les dará una oportunidad de ganarse el camino a una tarjeta verde y eventualmente la ciudadanía. (Aplausos.)

Y el tercer principio es que tenemos que actualizar nuestro sistema de inmigración legal al siglo XXI ya que este ya no refleja las realidades de nuestra época. (Aplausos.) Por ejemplo, si uno es ciudadano, no debe tener que esperar años para que su familia pueda reunirse con uno en los Estados Unidos. Uno no debe tener que esperar años. (Aplausos.)

Si uno es un estudiante extranjero que quiere estudiar una carrera de ciencias o tecnología, o un empresario extranjero que quiere abrir un negocio con el apoyo de inversionistas americanos, debemos ayudarlo a que lo pueda hacer aquí. Porque, si tiene éxito, este creará negocios americanos y empleos americanos. Nos ayudará a fomentar nuestra economía. Nos ayudará a fortalecer nuestra clase media.

Así es como sería la reforma migratoria integral: un cumplimiento más sensato; un camino para conseguir la ciudadanía; mejoras al sistema de inmigración legal para que podamos continuar siendo un imán para los mejores y los más brillantes alrededor del mundo. Esto es bastante poco complicado.

Ahora la pregunta es muy sencilla: ¿tenemos la determinación como gente, como país, como gobierno, de finalmente dejar atrás este dilema? Yo creo que sí. Yo creo que sí. (Aplausos.) Creo que finalmente estamos en un momento en que la reforma migratoria integral está a nuestro alcance.

Sin embargo, les garantizo lo siguiente: mientras más cerca estemos, más emocionante será este debate. La inmigración siempre ha sido un asunto que enciende las pasiones. Lo que no es sorprendente. Hay pocas cosas que son más importantes para nosotros como sociedad que a quiénes se permite venir aquí y quedarse aquí para siempre; a quiénes les concedemos el privilegio de hacerse ciudadanos de los Estados Unidos de América. Eso es algo que tiene mucha importancia.

Cuando hablamos de esto de manera abstracta, a veces es fácil que la discusión se convierta en un debate de “nosotros” contra “ellos”. Y, cuando eso sucede, a mu-

cha gente se le olvida que la mayoría de “nosotros” fuimos “ellos”. Eso se nos olvida. (Aplausos.)

Es sumamente importante que tengamos presente nuestra historia. Salvo que uno sea uno de los primeros americanos, un americano nativo, uno vino de alguna otra parte. Alguien lo trajo a uno. (Aplausos.)

Ken Salazar, su origen es mexicano americano, pero él nos indica que su familia lleva 400 años viviendo donde mismo él vive, así es que él no inmigró a ninguna parte. (Risas.)

Los irlandeses, que dejaron atrás una tierra de hambre. Los alemanes que huyeron de la persecución. Los escandinavos que llegaron ansiosos de incursionar como pioneros del oeste. Los polacos. Los rusos. Los italianos. Los chinos. Los japoneses. Los antillanos. Las masas abigarradas que llegaron a través de Ellis Island en una costa y de Angel Island en la otra. (Aplausos.) Todos ellos, antes de que fueran “nosotros”, fueron “ellos”.

Y, cada vez que llegó una nueva ola de inmigrantes, estos tuvieron que encarar la resistencia de los que ya estaban aquí. Encararon dificultades. Encararon racismo. Encararon burla. Sin embargo, a través del tiempo, a medida que retomaron sus vidas cotidianas, a medida que pudieron ganarse un sustento, a medida que criaron a su familia, a medida que construyeron una comunidad, a medida que sus hijos fueron a la escuela aquí, ellos hicieron su parte para construir una nación.

Ellos fueron los Einstein y los Carnegie. Pero también hubo los millones de mujeres y hombres cuyos nombres es posible que la historia no recuerde pero cuyas acciones contribuyeron a hacernos quienes somos; que construyeron este país mano sobre mano, ladrillo sobre ladrillo. (Aplausos.) Todos llegaron aquí sabiendo que lo que hace americano a alguien no solo es la sangre ni su nacimiento sino su lealtad a nuestros principios fundamentales y tener fe en la idea de que cualquiera, de cualquier lugar, puede escribir el próximo magnífico capítulo de nuestra historia.

Y eso sigue siendo la realidad actualmente. Si no, pregúntenle a Alan Alemán. Alan está aquí con nosotros esta tarde; ¿dónde está Alan? Él está por aquí; allí mismo está. (Aplausos.) Alan nació en México. (Aplausos.) Fue traído a este país por sus padres siendo niño. A través de su niñez, Alan fue a una escuela americana, juró lealtad a la bandera americana, se sintió americano en todo sentido, y lo era, excepto en uno: en sus papeles.

En la escuela secundaria, Alan fue testigo de los adelantos de sus amigos que son propios de la edad: conducir un auto con sus nuevas licencias; ganar un dinerito extra de sus empleos durante el verano en el centro comercial. Él sabía que no podía hacer esas cosas. Pero tampoco le importaba tanto. Lo que le importaba a Alan era cursar estudios para poder aprovechar su máximo potencial concedido por Dios.

El año pasado, cuando Alan escuchó en las noticias que iban a ofrecerle a gente como él la oportunidad de salir de las sombras, incluso si fuese solo por períodos sucesivos de dos años, fue uno de los primeros en inscribirse. Y hace unos meses fue uno

de las primeras personas en Nevada en ser aprobadas. (Aplausos.) En aquel momento, Alan dijo, “Sentí desaparecer el temor. Me sentí aceptado”.

Así es que, actualmente, Alan está cursando su segundo año en el College of Southern Nevada. (Aplausos.) Alan está estudiando para ser médico. (Aplausos.) Tiene planes de unirse a la Fuerza Aérea. Está esforzándose mucho todos los días para crear una vida mejor para él y para su familia. Y todo lo que él desea es la oportunidad de hacer su parte para construir unos Estados Unidos mejores. (Aplausos.)

Así es que, en las próximas semanas, a medida que la idea de la reforma se hace más real y el debate se hace más acalorado, y hay gente que está intentando desbaratar este asunto, tengan presente a Alan, y a todos aquellos que comparten las mismas esperanzas y los mismos sueños. Recuerden que esto no se trata solo de un debate sobre política. Se trata de la gente. Se trata de los hombres y mujeres y los jóvenes que el único deseo que tienen es la oportunidad de conseguir su camino a la historia americana.

A través de nuestra historia, eso siempre ha hecho más fuerte a esta nación. Y así es como garantizaremos que este siglo sea igual al anterior: un siglo americano que acoja a todo aquel que aspira a hacer algo más, y que está dispuesto a trabajar duro para hacerlo, y está dispuesto a jurar lealtad a nuestra bandera.

Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. (Aplausos.)

83. DETECTAN RETORNO DE MIGRANTES EN 4 ESTADOS¹

Falta de empleo y refuerzo de políticas contra indocumentados, las causas.

La crisis en Estados Unidos y el endurecimiento de las políticas antimigrantes han provocado un retorno mayor de connacionales y una baja en la migración al menos en los estados de Hidalgo, Zacatecas, Chiapas y Veracruz, de acuerdo con autoridades e investigadores.

De 2008 a la fecha, varias son las historias que se registran en entidades que tradicionalmente han sido “expulsoras de mano de obra” al vecino país.

En Chiapas, la caída de remesas ha sido notoria desde hace tres años estos números han ido a la baja.

La encargada de la Oficina de Atención al Migrante en el Hidalgo, María del Carmen García Abid, explicó que en el primer trimestre del año esta entidad ha registrado una disminución de al menos 50% en el número de personas que intentan cruzar a Estados Unidos.

El endurecimiento de las políticas antimigratorias, así como la inseguridad del trayecto y la falta de empleo en la Unión Americana han contribuido a que por primera vez haya una paridad en la salida y llegada de migrantes, señaló que de enero a abril de este año han regresado más de 2 mil. “Aunque se desconoce cuántos volvieron solos, pero es un hecho que los migrantes hidalguenses están de vuelta”.

En Zacatecas, el investigador universitario Miguel Moctezuma Longoria, considera que existe un éxodo en los últimos 24 meses.

En sus análisis compara estadísticas poblacionales 2005-2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, por lo que atribuye que el incremento poblacional registrado en 2010 se explica por el retorno de un flujo de habitantes que años antes había migrado a EU y que regresa a sus entidades con todo y sus hijos.

1 LA JORNADA, 12 de mayo de 2012, pp. 11.

Los municipios que se vieron mayormente impactados por el retorno son Guadalupe, Jerez, Fresnillo, Tlaltenango, Villa de Cos, Loreto, Mazapil, Noria de Ángeles, Pinos, Juan Aldama, Río Grande y Sain Alto.

En Veracruz, el diputado priísta que ha trabajado en el tema Juan Nicolás Callejas coincidió que distintos factores han ocasionado que por primera vez los paisanos se estén retornando. Esto dijo, puede significar un riesgo, ya que Veracruz es la sexta entidad con mayor número de migración y “necesita de las remesas”.

Jorge López Arévalo, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, comentó que la “región sur y sureste de México han sido las más afectadas por la crisis que golpeó al mercado de trabajo de Estados Unidos”. Para ejemplificar el fenómeno en Chiapas, el investigador explicó que en 2006 se recibieron 943.6 millones de dólares en remesas, pero para 2010 fueron sólo 573 millones.

Sin estadísticas

Los estados tradicionalmente expulsores de migrantes son Michoacán, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Zacatecas.

En algunas entidades las autoridades reconocen que no se cuenta con un censo sobre el retorno de paisanos que habían migrado a EU.

84. LA RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS LES PEGÓ

MIGRANTES, DURO RETORNO¹

“Fui víctima de la crisis en EU”

Víctor Pérez, esperó con ansias su cumpleaños 18, para seguir los pasos de muchos paisanos: dejar su país en busca del anhelado sueño americano. En cuatro años que vivió allá no se enriqueció, ni siquiera logró ahorrar. “Regresé porque sólo andaba del tingo al tango y prefiero vivir pobre en México que en Estados Unidos.

Es oriundo de Tlaltetela, municipio de la zona montañosa de Veracruz, donde la principal fuente de ingresos es el turismo de aventura.

Fue en 2005 cuando él y cinco de sus vecinos, también jóvenes, se pusieron de acuerdo para cruzar la frontera. Vivió dos años en Florida y dos en California, en los cuales no pudo conseguir dos empleos, lo que le impidió ahorrar y regresar con recursos para poner un negocio propio en México.

“Solo trabajé ocho horas diarias, no encontré un trabajo extra como otros”, dijo.

Víctor ganaba nueve dólares la hora, a veces lograba trabajar tiempo extra y quedarse hasta 12 horas pero no era todos los días, el dinero no le alcanzaba para mucho porque tan sólo de renta pagaba 500 dólares.

Comenta que el grupo de veracruzanos no temía a las autoridades migratorias, “lo difícil es cruzar, ya en la ciudad nadie te molesta, a veces algunos denuncian por racismo y es cuando hay que correr pero la policía no te molesta”.

En 2009, los seis jóvenes decidieron regresar a su país, a su amado Veracruz. “Ya no teníamos mucho trabajo, ya no como al principio, durante mi estancia nunca me faltó hasta esos días cuando pasábamos un mes sin que nadie nos contratara para pintar”. Se establecieron en el puerto de Veracruz y consiguieron trabajo en la panadería del tío de uno de los migrantes. Su producto tiene mucha demanda debido a que lo hacen en horno de leña.

1 EL UNIVERSAL, 20 de mayo de 2012, pp. F1.

La jornada de los ex migrantes en la panadería La Bomba Jarocho es de hasta 16 horas. Por las mañanas hacen el pan y en las tardes salen en una camioneta a venderlo.

Víctor dice que su salario no es el que desearía, pero afirma que por lo menos está en su tierra y se siente protegido a diferencia de cuanto estaba en Estados Unidos.

Reitera que no tiene pensado regresar a Estados Unidos, donde “apenas aprendí a masticar el inglés, no ahorré ni un dólar y fui víctima de una de las más grandes crisis económicas de aquel país”.

85. “HASTA LOS LICENCIADOS VAN AL NORTE”¹

Cuando Alejandro Álvarez Gómez llegó a Pensilvania como migrante escuchó de sus paisanos: “Antes era muy fácil conseguir trabajo, ahora está muy difícil”, le dijeron. Dos días después de su arribo a Estados Unidos empezó a laborar en un rancho ganadero.

Con apenas 15 años de edad, Álvarez Gómez dejó su casa en la comunidad tojolabal Plan de Ayala para aventurarse en una travesía de 15 días; siete de éstos lo realizó en vehículo en un trayecto de más de 2 mil 500 kilómetros y ocho a pie en el desierto desde Altar, Sonora.

Los 25 mil pesos que le prestó a su padre un lugareño los repartió entre los de la migra de México y el traficante, pero dos años después logró ahorrar hasta 230 mil pesos, los cuales mandó a su familia para comprar un predio, un auto y construir una casa.

Fue en Lancaster, Pensilvania, donde Alejandro encontró trabajo en un rancho ganadero, donde percibía 800 dólares por quincena, pero debía pagar 450 dólares de renta. Si quería ganar 200 dólares más debía trabajar 24 horas seguidas sin descansar.

“Es un trabajo muy duro. Te ensucias mucho con el estiércol con las vacas. Ahí hay hasta licenciados, muchos de Michoacán y Puebla, estaban trabajando porque en sus tierras, no tienen oportunidades”, dice el joven tojolabal.

El poblado donde vive Alejandro se ubica en Las Cañadas, una de las zonas más pobres de Chiapas, de donde han partido decenas de jóvenes para emprender la búsqueda de empleo en la industria de la construcción, como jardineros y en agricultura.

El primer tojolabal que decidió irse a Estados Unidos fue hace más de 20 años, fue Juan Álvarez, un indígena “que ya es finado”.

Pero debido al reforzamiento de las medidas migratorias del gobierno estadounidense, las agresiones de los grupos armados en la frontera norte y las, cada vez, “reducidas” fuentes de empleo han provocado de que de los 15 o 20 tojolabales que habían migrado, ahora sólo permanecen en los Estados Unidos entre dos o tres.

1 EL UNIVERSAL, 20 de mayo de 2012, pp. F4.

86. TRAS 9 AÑOS VOLVIERON A SU TIERRA¹

Recién habían terminado la preparatoria —ella de 15 años y él de 18— cuando decidieron probar suerte en Estados Unidos. Durante nueve años la fortuna estuvo de su lado, pero en 2009 sufrieron un revés. El acoso de los policías y la incertidumbre a ser deportados animó a este joven matrimonio a regresar a Hidalgo.

La primera de tres veces que José García y Suliana Guerrero cruzaron la línea fronteriza, fue en 1999. Luego de tres días de camino y de fracasar en un primer intento al ser aprehendidos por la patrulla fronteriza, lograron llegar a Florida.

“Nosotros desde que llegamos nos fue bien y hasta el último día que estuvimos”, dice Suliana. En 15 días José aprendió a colocar pisos y mosaicos, y ella encontró trabajo en un restaurante. Luego formaron una compañía de contratistas.

“Pero luego el trabajo bajó y empeoró todo porque las redadas de migración eran más frecuentes”, menciona.

Ahora, José y Suliana viven en Ixmiquilpan, en la comunidad de Cañada Chica, una de las 115 de ese municipio.

Suliana cuenta que siempre pensaron en regresar, trabajar en Estados Unidos hasta lograr un patrimonio y luego volver a México.

Cambian sus metas

Ahora de casi 30 años los dos, la meta según cuentan es otra. José culminó su preparatoria y busca ingresar a la Universidad Autónoma del Estado, donde pretende estudiar enfermería; a Suliana, dice, le gustaría ser maestra o abogada.

“Yo no estoy de acuerdo que digan cosas negativas de México, si quieres trabajar y estudiar se puede, todo está en querer”, asegura la joven.

Para este matrimonio es tiempo de nuevas oportunidades, como ellos mismos lo definen; la diferencia es que ahora será en su país y con otro tipo de objetivos.

1 EL UNIVERSAL, 20 de mayo de 2012, pp. F4.

87. ME REGRESÉ PORQUE ALLÁ NO HAY TRABAJO¹

Sus compañeros lo llaman *Many*, porque se lama Manuel; lleva seis días recorriendo el país a bordo del tren, pero, a diferencia de la mayoría, no va a EU, él regresa “porque allá ya no hay trabajo”.

Many es uno de los cientos de paisanos que desde el año pasado han regresado a México, tras perder su empleo.

Manuel esa capataz en un rancho lechero en Idaho. Sin motivo aparente un día el patrón le dijo que ya no podía emplearlo más. Buscó otro trabajo y al no encontrarlo tomó la decisión más complicada: regresar a su tierra.

Municipios como San Joaquín, Pedro Escobedo, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Huimilpan y San Juan del Rio han resentido la disminución en la migración a Estados Unidos y, particularmente, el retorno de paisanos, debido a la falta de trabajo en el país del norte.

El edil de Pedro Escobedo, Alonso Landeros, refiere que para las fiestas decembrinas de 2011 sólo vino 50% del total de migrantes que se tenían previstos. “Su principal temor es no poder volver a entrar a Estados Unidos”.

Belem Ledesma, edil de San Joaquín, confirmó que en el transcurso de 2012 han regresado 250 migrantes que no consiguieron empleo o lo perdieron.

No obstante, las estadísticas del Bando de México refieren que el envío de divisas a Querétaro se incrementó en este primer trimestre.

El Banxico reportó que de enero a marzo de este año se registró el ingreso de 84.12 millones de dólares a la entidad provenientes de EU, lo que representa más de 5 millones de dólares con relación a la cantidad que ingresó a Querétaro, en similar periodo pero de 2011, cuando se registraron 79 millones de dólares.

Belem Junco Márquez, diputado local con licencia y encargado de la comisión de Asuntos Municipales y del Migrante, explicó que varios paisanos le comentaron

1 EL UNIVERSAL, 20 de mayo de 2012, pp. F4.

que el empleo en EU disminuyó considerablemente, al grado de que a muchos sólo les alcanza para sobrevivir allá.

Eso le pasó a *Many*, quien no aguantó más y regresó a su tierra. En el largo camino de las vías del tren platica que se han encontrado a centroamericanos que van para el norte, a quienes les dice que las cosas están muy difíciles.

“Me dicen que más difíciles están las cosas en su patria, pero también aquí (en México) se van a poner complicadas porque ahora estamos sin trabajo allá ni aquí”.

88. ARISTÓTELES SANDOVAL OFRECE CREAR EL INSTITUTO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE¹

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Ejecutivo de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, se reunió con representantes de asociaciones de migrantes jaliscienses asentadas en Estados Unidos, quienes se quejaron del gobierno de Emilio González Márquez por trabajar únicamente con los grupos de sus “amigos” y que son simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN).

Tras el encuentro, el político priísta indicó en rueda de prensa que asumió el compromiso de crear el Instituto de Atención de Migrante y de convertir en centros de negocio las Casas Jalisco que se abrieron en Chicago y Los Ángeles, actualmente utilizadas como “centros de cultura y de visitas de cortesía”.

Sandoval Díaz señaló que el gobierno de Jalisco está obligado a tener una política permanente en respaldo de los paisanos, debido a que este estado es tercer lugar nacional en tasa de retorno y también en remesas.

En los últimos años empezó el regreso de los migrantes en todo el país, no sólo en Jalisco, por la crisis económica mundial y no por las políticas de desarrollo económico de las regiones de los gobiernos panistas como lo presumen el gobernador Emilio González Márquez, consideró.

EL abanderado del tricolor explicó que les presentó su propuesta en apoyo a los jaliscienses en el exterior y de los migrantes en tránsito, que abarca desde hacer realidad la reforma para que los jaliscienses radicados en otro país puedan tener el derecho del voto, becas para sus hijos y estímulos que atraer la inversión de los que se convirtieron en empresarios exitosos hasta un programa de educación bicultural.

En cambio, aseguró que los representantes de estas agrupaciones se comprometieron únicamente a iniciar la convocatoria de los demás grupos (que son más de

1 EL UNIVERSAL, 20 de mayo de 2012, pp. F4.

mil 200 en Estados Unidos) para aglutinarse y diseñar políticas –sin intervención del gobierno– que los vinculen a través de las Casas Jalisco que existen en el país vecino.

“Hay muy buena voluntad, disposición, ellos quieren tener un modelo donde se unifiquen este, oeste, norte y sur de Estados Unidos, donde puedan estar bajo un esquema donde las Casas Jalisco los puedan vincular, que impulse y genere negocios, llevar mayor productividad, sobre todo ampliar el catálogo de las actividades industriales, empresariales”, abundó.

El candidato del PRI precisó que el Instituto de Atención al Migrante no sólo apoyará a los jaliscienses en el exterior, sino que también a los migrantes en tránsito.

Esta nueva dependencia estará abocada a “disminuir las acciones de extorsión, acoso, maltrato y secuestro contra migrantes, además se creará un programa en defensa de la dignidad y los derechos de los migrantes”, refirió.

Con la creación del Instituto aclaró, no se va a “crear más burocracia”, ya que con la misma planta laboral del gobierno del estado se armará su estructura.

La reunión de Aristóteles Sandoval Díaz con los representantes de las agrupaciones de paisanos de Chicago y California se llevó a cabo en un hotel de la ciudad, donde coincidió con el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, el único nombre seguro en el gabinete del próximo sexenio en caso de que el priísta gane las elecciones, incluso si el vencedor es Fernando Guzmán Pérez Peláez, de Acción Nacional.

A su salida del hotel, Nájera eludió pronunciarse sobre la continuidad que pretenden darle dos de los tres candidatos más fuertes al gobierno de Jalisco, pues a su juicio es “una broma”.

89. LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS Y SU OPINIÓN PÚBLICA INTERNA¹

Conforme se aproximan las elecciones en Estados Unidos, con gran cautela se vuelve la política exterior uno de los puntos a debatir. No es secreto que durante los últimos 50 años ha existido cierta consistencia de largo plazo en la política exterior estadounidense. Las diferencias internas más agudas ocurrieron cuando George W. Bush asumió la presidencia y lanzó un intento supermacho, deliberadamente unilateral, por restaurar la dominación de Estados Unidos en el mundo mediante las invasiones de Afganistán e Irak.

Bush y los neoconservadores confiaban en intimidar a todos en el mundo utilizando la fuerza militar para cambiar los regímenes que el gobierno estadounidense juzgara poco amistosos. Como resulta claro hoy, la política neoconservadora falló en su propio objetivo. En vez de intimidar a todos, tal política transformó la lenta decadencia estadounidense en una precipitada caída. En 2008, Obama compitió con una plataforma que proponía revertir estas políticas, y en 2012 alega que ya cumplió su promesa y que, por tanto, deshizo el daño que ocasionaron los neoconservadores.

Pero, ¿acaso sí deshizo el daño? ¿Pudo haber deshecho el daño? Lo dudo. Pero mi intención aquí no es discutir qué tan exitosa es o no la política exterior estadounidense en este momento. Más bien quiero discutir lo que el pueblo de Estados Unidos piensa acerca de ésta.

En la opinión pública el elemento más importante relacionado con la política exterior estadounidense es la incertidumbre y la falta de claridad. Las encuestas recientes muestran que por vez primera una mayoría de estadounidenses piensan que las intervenciones militares que emprendió Bush en Medio Oriente fueron un error. Lo que todas estas personas parecen ver es que hubo un enorme derroche de vidas

1 LA JORNADA, 16 de junio de 2012, pp. 3.

y dinero estadounidense, con que se obtuvieron resultados que a la gente le parecen muy negativos.

Perciben que el gobierno iraquí está más cerca en sentimiento y en política al gobierno iraní que a Estados Unidos. Perciben que el gobierno afgano tiene bases muy endebles —con un ejército infiltrado por los suficientes simpatizantes talibanes que pueden disparar a los soldados estadounidenses con quienes trabajan. Quieren que las tropas de Estados Unidos abandonen Afganistán en 2014 como lo prometieron, pero no creen que, una vez que las tropas se retiren, vaya a haber un gobierno estable en el poder, uno que sea relativamente amistoso hacia Estados Unidos.

Es significativo que, en el debate entre los dos candidatos a la vicepresidencia, el demócrata Joe Biden haya afirmado con vigor que no enviarían tropas estadounidenses a Irán. Y que el republicano Paul Ryan dijera que nadie en su bando estaba pensando en enviar tropas. Ambos pueden no estar diciendo la verdad acerca de sus posturas. Lo notable es que ambos piensen que cualquier amenaza de su parte relacionada con enviar tropas de tierra podrían lastimar las posibilidades de su partido con los votantes.

Entonces, ¿qué? Ésa es precisamente la cuestión. La misma gente que dice que las intervenciones estadounidenses fueron un error todavía no está dispuesta a aceptar la idea de que Estados Unidos no debería continuar manteniendo o expandiendo el alcance de sus fuerzas militares. El Congreso estadounidense continúa votando en favor de presupuestos para el Pentágono que son mucho más vastos de lo que el propio Pentágono solicita. Esto es, en parte, resultado de que los legisladores quieren mantener empleos en distritos donde tales empleos se vinculan con las fuerzas armadas. Pero también es porque el mito de la superpotencia estadounidense sigue siendo un compromiso emocional muy fuerte para virtualmente todos en el país.

¿Hay en la perspectiva un aislacionismo oculto? Hasta cierto punto, no hay duda. Hay, sin duda, votantes más a la izquierda o más a la derecha que comienzan a afirmar con más contundencia lo deseable y necesario que es reducir el involucramiento militar estadounidense en el resto del mundo. Pero creo que al momento esto no representa una gran fuerza. No todavía.

En cambio, lo que podemos esperar es una lenta y callada revisión, no por eso menos importante, de cómo sienten los estadounidenses acerca de series particulares de aliados. El alejamiento de Europa, sea cual fuere la forma en que definamos Europa, lleva ya largo tiempo ocurriendo. A Europa se le considera un tanto “ingrata”, tomando en cuenta todo lo que Estados Unidos hizo por ella en los últimos 70 años militar y económicamente. Para muchos ciudadanos estadounidenses Europa parece muy poco deseosa de respaldar las políticas de Washington. Actualmente se están retirando tropas de Estados Unidos de Alemania y de otras partes.

Por supuesto, Europa es una categoría grande. ¿A caso el estadounidense ordinario tiene diferentes puntos de vista acerca de Europa oriental (los satélites ex soviéticos)? ¿O acerca de Gran Bretaña, con quien se supone que Estados Unidos mantiene una “relación especial”? la “relación especial” es más un mantra de los británicos que

de los estadounidenses. Estados Unidos recompensa a Gran Bretaña cuando se mantiene en la línea, pero no cuando se sale de ésta. Y el estadounidense ordinario apenas si es consciente de este compromiso geopolítico.

Europa oriental es diferente. Ha habido presiones reales de ambas partes para mantener una relación cercana. Por el lado estadounidense, ha habido un interés del gobierno por utilizar el vínculo con Europa oriental como forma de contrarrestar las tendencias de actuación independiente que mantiene Europa occidental. Y hay presiones por los descendientes de los migrantes de estos países para expandir los vínculos. Pero Europa oriental comienza a sentir que el compromiso militar estadounidense se adelgaza y se torna poco fiable. Comienza a sentir que los lazos económicos con Europa occidental, Alemania en particular, son más importantes para ellos.

El antagonismo hacia México debido a los migrantes indocumentados ha llegado a jugar un papel importante en la política estadounidense y ha estado socavando los supuestos lazos económicos cercanos con México. Y en cuanto al resto de América Latina, el crecimiento de su postura geopolítica independiente es fuente de frustración para el gobierno estadounidense y de impaciencia para el público en ese país.

En Asia, golpear a China es un juego que crece en popularidad, pese a los esfuerzos de los gobiernos estadounidenses (tanto republicanos como demócratas) de mantenerlo a raya. A las firmas chinas se les impiden algunos tipos de inversión en Estados Unidos que incluso Gran Bretaña permite.

Y finalmente esta Medio Oriente, área central de preocupación estadounidense. Actualmente el foco está puesto sobre Irán. Y al igual que en América Latina, el gobierno parece frustrado con sus limitadas opciones. Está presionado constantemente por Israel para hacer más, aunque nadie está muy seguro de lo que significa ese “más”.

El respaldo para Israel de todos los modos posibles ha sido una pieza central de la política exterior estadounidense desde por lo menos 1967, si no es que desde antes. Poca gente se atreve a cuestionarla. Pero esos “pocos” comienzan a tener el respaldo de figuras militares que sugieren que la política de Israel es peligrosa en términos de los intereses militares estadounidenses.

¿Continuará imbatible en los próximos 10 o 20 años el penetrante respaldo hacia Israel? Lo dudo. Israel puede ser el último de los compromisos emocionales de Estados Unidos que se desvanezca. Pero es casi seguro que habrá de esfumarse.

Es probable que para 2020 y para 2030 la política exterior comience a digerir la realidad de que Estados Unidos no es la única súper potencia todopoderosa, si no simplemente uno de los cuantos *loci* de poder geopolítico. El cambio en la perspectiva será impulsado por la evolución en los puntos de vista de los estadounidenses ordinarios, quienes continúan estando más preocupados por su bienestar económico que por los problemas que yacen mas allá de las fronteras. Y conforme el “sueño americano” atrae a menos y menos no estadounidenses, se vuelve hacia adentro en Estados Unidos.

90. AVATARES DE LA MIGRACIÓN¹

La experiencia de la migración toca y trastoca la vida de una gran parte de la población. De manera voluntaria, pero mayoritariamente forzada, miles de personas dejan sus hogares para buscar mejores condiciones de vida, buscar el ingreso que no pueden conseguir en sus lugares de origen, huir de la violencia, reunirse con sus familiares que ya salieron tiempo atrás, buscar nuevos mundos, etc.

¿Cómo se enfrentan en el hogar las ausencias? ¿Cómo se organizan los migrantes para mantener sus vínculos con sus comunidades? ¿Qué se sufre, qué se aprende al encontrarse en esos nuevos mundos? ¿Cómo nos relacionamos entre los de aquí y los de afuera? ¿Quiénes generan de diversas maneras mecanismos de apoyo para aquellos que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad? ¿Cómo se reconstruye la vida en el día a día cuando lo que se tenía trazado se viene abajo con la deportación? ¿Soy de aquí o soy de allá, en dónde están mis raíces?

Con este número de *Clavius* quienes escriben nos muestran esas diferentes facetas de la migración y sus impactos en la vida de las personas, y cómo se puede no sólo “sufrir la migración” sino recrear la vida a partir de esa situación que está presente y atraviesa todo. Ante la tragedia y el sufrimiento, se encuentra la posibilidad de movilizar la solidaridad, de impulsar proyectos, de plantear nuevas leyes que garanticen el libre trayecto con seguridad y acceso al trabajo, de crear redes de apoyo. No está lejos, y hay maneras de poder involucrarse.

1 LA JORNADA, 27 de octubre de 2012, pp. 22.

91. ¿QUÉ JALISCIENSE NO TIENE UN FAMILIAR EN ESTADOS UNIDOS?¹

El primo que vive *del otro lado*, el sobrino que viene de vacaciones para que conozca el pueblo de sus padres, la hermana que no ha podido regresar de visita para que no ha podido regresar de visita porque no ha *arreglado papeles*. La extensión de estos lazos con Estados Unidos son muy fuertes, porque los jaliscienses llevan más de cien años migrando al Norte. Según estimaciones de Coepo del 2010, alrededor de 1.4 millones de personas nacidas en Jalisco viven en EUA, y otros 2.6 millones de personas nacidas allá son hijos o hijas de padres jaliscienses. Juntos representan alrededor de 4 millones de personas en EUA que tienen una conexión con la entidad. Es decir, una población casi del mismo tamaño que la que habita la ZMG (4 millones 242 mil).

Probablemente el impacto más visible que tiene la migración en nuestro país son las remesas. Tan solo el año 2011 el Banco de México registró en Jalisco un ingreso por remesas familiares de 24 mil 737 millones 27 mil pesos. Para darnos una idea, el presupuesto del Gobierno del Estado durante el mismo 2011 es de 66 mil 849 millones 300 mil pesos. Es decir que los ingresos estatales por remesas familiares representan caso una tercera parte del presupuesto estatal. Y sin embargo, hay otros impactos que difícilmente podrían medirse, pero que tal vez en un futuro serán más importantes que las remesas.

Algunos las llaman asociaciones de paisanos, asociaciones del lugar de origen, organizaciones de migrantes o clubes de oriundos (*hometown associations*). Mejor conocidos como clubes de migrantes, son organizaciones que se integran a partir de la procedencia de un lugar de origen común con diversos objetivos. Si bien algunos comienzan reuniéndose en torno a eventos sociales o deportivos, muchas veces transitan hacia la generación de proyectos de desarrollo para sus comunidades de origen.

Los clubes de jaliscienses surgen de manera más clara a partir de los setentas y ochentas, en el área de Los Ángeles. Sin embargo no es hasta principios del siglo XXI cuando se da un auge muy fuerte en la integración de los mismos. En el 2005 se es-

1 LA JORNADA, diciembre de 2012, pp. 2.

timaba 45% de los municipios jaliscienses contaba con una representación en EUA a través de algún club de migrantes.¹ Actualmente 2 mil 267 clubes están registrados ante el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de las cuales 94 son de Jalisco. Estas organizaciones se ubican en su mayoría en los estados de California, Washington, Illinois y Texas. Sin embargo, muchos de los clubes que existen no están registrados y es difícil saber en realidad cuantos operan actualmente.

Y es que estamos hablando de organizaciones tan pequeñas como las que están integradas por 4 o 5° familiares que quieren juntar dinero para pavimentar una calle en su comunidad de origen, hasta clubes que tienen membresía de 500 personas que llevan a cabo charreadas o festivales culturales que mantienen fundaciones, como Necahual, de apoyo para niños sin hogar.

Para darnos una idea de la magnitud y alcance que tienen las organizaciones, existen ya cinco federaciones de Clubes Jaliscienses en Estados Unidos (Fedejal) que aglutinan a los presidentes de los clubes asentados en las diferentes regiones. La Fedejal del Sur de California que incluye 114 clubes tiene su Casa Jalisco en Lynwood; la del Norte de California inaugurará su Casa Jalisco en diciembre en San José; la del Medio Oeste que tiene 64 clubes y su Casa Jalisco en Melrose Park, Illinois; la de Washington establecida en 2006 y la de Nevada surgida en 2008.

Incluso, para tener más fuerza y comenzar a coordinar acciones, las federaciones se han reunido en el Consejo Nacional de Federaciones de Jaliscienses en Estados Unidos (Confedejal) desde donde se quiere promover las demandas de las personas migrantes. Un ejemplo muy claro es la Agenda México, a partir de la cual se impulsan acciones en ambos países, que van desde los derechos políticos para los mexicanos en el exterior; la reforma migratoria en México y en Estados Unidos, el desarrollo social y económico, hasta el fortalecimiento a las organizaciones binacionales de la sociedad civil.

Y antes de caer en la tentación de subir a los migrantes al pedestal del “hijo ausente” veamos cómo se conciben los propios migrantes. Sergio Suárez, presidente de la Fedejal del Medio Oeste, comenta: “...los migrantes no somos héroes ni somos para tener lástima, ni somos pobrecitos... somos personas como cualquier otro residente de aquí, simplemente que radicamos fuera. ...queremos la oportunidad de participar, la oportunidad de ser y poder cumplir esa deuda que tenemos con nuestra sociedad.”

1 LA JORNADA, diciembre de 2012, pp. 12.

92. BARACK OBAMA VA POR MANO DE OBRA CALIFICADA¹

El mandatario contempla otorgar visas a inversionistas extranjeros y a estudiantes graduados para impulsar la economía.

LAS VEGAS, Nevada. Estrategia presidencial. El gobierno de Obama también busca atraer talentos otorgando visas a inversionistas extranjeros que buscan iniciar un negocio, en especial a graduados extranjeros de las áreas de matemáticas y ciencia, a los que se les permitirá quedarse en Estados Unidos luego de su graduación en vez de que lleven conocimientos a otros países.

El presidente Barack Obama hizo público todo su apoyo a una reforma integral del sistema de inmigración de Estados Unidos, al afirmar que “ahora es el momento” para reemplazar un sistema al que calificó como anticuado y roto.

AL hablar en una escuela secundaria de mayoría hispana en Las Vegas, Obama dijo que “existe un amplio consenso” sobre el tema. “En este momento, parece que hay un genuino deseo de que esto se haga pronto. Y eso es muy alentador”.

“Pero esta vez debe de haber acción, no podemos permitir que la reforma migratoria se enrede en un debate interminable”.

Afirmó que la propuesta presentada este lunes por ocho senadores, cuatro demócratas y cuatro republicanos, está “muy en línea con los principios que he propuesto y por los que he hecho campaña durante los últimos años”.

Tras su reelección en noviembre pasado ayudado por un fuerte apoyo de los votantes hispanos, Obama hizo de la reforma migratoria una de sus prioridades legislativas para su segundo mandato.

Su discurso fue en la Escuela Del Sol, que tiene 54% e estudiantes hispanos matriculados.

Aunque Obama elogió el esfuerzo lanzado por los senadores, afirmó que si el Congreso no actúa a tiempo, presentará su propia propuesta de ley y demandará que sea votada.

1

El plan B que Obama tiene bajo el brazo incluye el aumento de la seguridad fronteriza que busca incrementar la infraestructura y tecnología, según la Casa Blanca, que resaltó que el presidente ha duplicado el número de agentes de la Patrulla Fronteriza.

También propone sancionar a empresas que contratan a inmigrantes ilegales, los cuales “explotan el sistema para tener una ventaja sobre negocios que siguen las reglas”. La propuesta ofrece a las empresas una forma de verificar que las personas que contratan se encuentran en el país de forma legal.

Camino a la ciudadanía

Además, se establece un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, que incluye el que paguen impuestos como lo hace todo el mundo, que pasen verificaciones de seguridad nacional y de antecedentes penales, que paguen una multa y aprendan inglés.

También se permitirá a jóvenes que fueron llevados de forma ilegal a Estados Unidos cuando niños obtener la ciudadanía de una forma más rápida si se enlistan en el Ejército o pretenden seguir estudiando.

De igual forma, busca reunificar a familias de una forma “oportuna y humana”.

93. MCCAIN, EN EL INICIO DE LA “HOJA DE RUTA”¹

El plan de reforma migratoria que hoy asoma surgió de un grupo de senadores republicanos y demócratas, y es producto de un proceso de varios meses que comenzó después de las elecciones de noviembre.

De acuerdo con una investigación de CNN, el proceso comenzó tras un llamado del senador republicano Lindsey Graham al demócrata Chuck Schumer, quien le hizo saber que John McCain apoyaría una eventual reforma integral.

Tras aquella señal, un grupo formado por seis senadores se reunió en cinco ocasiones en las oficinas de McCain. De ese petit comité participaron además de Schumer, Graham y McCain, el republicano de Florida, Marco Rubio, y los demócratas Robert Menéndez, de Nueva Jersey, y Dick Durbin, de Illinois.

El plan concebido por el grupo prevé una serie de beneficios para los indocumentados que ya viven en Estados Unidos, y trabajadores temporales y sistemas de verificación de empleo.

De aquellas reuniones salió una hoja de “ruta” con los siguientes objetivos: crear un marco para una reforma inmigratoria a finales de enero, redactar un texto más detallado del proyecto de ley en marzo, y aprobar la legislación en el Senado en julio.

Así, siempre de acuerdo con la versión de CNN, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, tendría el tiempo suficiente para trabajar el proyecto de ley, y que de esa manera el presidente Barack Obama pudiera aprobarla antes de fin de año, evitando que coincida con las elecciones intermedias de 2014.

Tiene escollos que aún no se salvan sobre cómo se reforzaría la seguridad fronteriza y cómo funcionaría el camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que ya están en Estados Unidos.

1 EL INFORMADOR, 30 de enero de 2013, pp. 8A.

94. PRI COADYUVARÁ EN REFORMA MIGRATORIA¹

La bancada del PRI en el Senado celebró la determinación del presidente Barack Obama de impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos, porque representa una acción de dignidad y justicia para millones de mexicanos que radican en aquel país.

El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Emilio Gamboa Patrón, dijo en un comunicado difundido ayer que los senadores priístas tienen total disposición de coadyuvar y brindar las herramientas necesarias que faciliten cumplir con los requisitos que deberían reunir los connacionales ante una posible reforma.

Se dijeron dispuestos a buscar una mayor relación y comunicación con el Senado de Estados Unidos para, en caso de que sea necesario, adecuar el marco jurídico en México, por los avances que se han generado y que ven cada vez más cerca de dichos cambios a la ley estadounidense.

Gamboa Patrón, también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, destacó que este cuerpo legislativo se mantendrá atento a la toma de decisiones que se realicen en Estados Unidos.

Lo anterior, con el fin de que este proceso que abre la posibilidad de beneficiar a millones de familias mexicanas que residen en el vecino país del norte, no encuentre dificultades derivadas de la legislación de nuestro país.

Gamboa Patrón confió en que esta sensibilidad mostrada por el presidente Barack Obama y por un grupo de legisladores encuentre eco, tanto en el Senado de Estados Unidos como en la Cámara de Representantes y que, sin soslayar los derechos humanos y laborales de los migrantes, se logre avanzar hacia una auténtica relación binacional.

“Esta iniciativa apoyada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en materia migratoria, es una gran oportunidad para nuestro país, y nos reitera la importancia de continuar concretando las reformas que México requiere para poder

1 EL INFORMADOR, 30 de enero de 2013, pp. 8A.

alcanzar, de una vez por todas, el desarrollo nacional”, expresó el senador a través del comunicado.

95. COMENTARIOS FINALES

Los patrones de la migración México-Estados Unidos vienen dando cuenta de una creciente complejidad y extensión del fenómeno migratorio, con profundas implicaciones binacionales, perfilando tendencias de continuidad a futuro.

Sin embargo, estos patrones deben entenderse bajo la ya aludida noción de “cambios dentro de la continuidad”; es decir, se trata de una serie de modificaciones que preservan líneas de conexión con los patrones históricos, en lugar de una ruptura o giro diametral.

Asimismo, es importante que México adopte una postura más pro-activa y se prepare para enfrentar las consecuencias y aprovechar las ventanas de oportunidad que resulten de la reforma migratoria estadounidense. Existe, desde ahora, un espacio para impulsar acciones de política pública orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas actuales y futuras de los mexicanos en territorio estadounidense. Ello implicaría, por ejemplo, que el gobierno mexicano impulsara la capacitación de la población migrante; garantizara la protección de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos (mediante mecanismos de supervisión y regulación de los esquemas de contratación) y reorientara los flujos migratorios hacia ocupaciones y mercados regionales que ofrecieran mejores condiciones laborales (Giorguli y Leite, 2009). Lo anterior, sin soslayar que la acción de política del Estado mexicano en materia de migración internacional debe perseguir, tanto a mediano como a largo plazo, el objetivo de generar oportunidades de empleo en México, con el fin de combatir las causas de la migración.¹

1 EL UNIVERSAL, 04 de febrero de 2013, PP.A6.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, José Rogelio (Director): *Enciclopedia de México*, Tomo V, Secretaría de Educación Pública, Edición Especial, México, 1997
- AMPUDIA, Ricardo: *México en los informes presidenciales de los Estados Unidos de América*, Fondo de Cultura Económica y Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1996.
- COVARRUBIAS DUEÑAS, José de Jesús: *Enciclopedia Jurídico Electoral de México*, V tomos, TEPJE, TEPJF, FEPADE y Universidad de Guadalajara, México, 2003.
- _____: *Enciclopedia Jurídico Político Electoral de Jalisco*, VI Tomos, X volúmenes, Tres Poderes de Jalisco, México, 2005.
- _____: *Dos Siglos de Constitucionalismo en México*, Editorial Porrúa, México, 2009.
- _____: *Enciclopedia Política de México*. Obra conmemorativa de los 200 años de la Independencia de México, 100 años de la Revolución, VIII Tomos (12 volúmenes), Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, LXI Legislatura, México, 2010.
- _____: *Enciclopedia Política de Jalisco*, XIII Tomos (21 volúmenes), Editorial Universitaria, México, 2010.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA: *Estadística Histórica de México 2009, Tomo I*, Instituto Nacional de estadística y geografía, México, 2009.
- FOX, Jonathan, RIVERA-SALGADO, Gaspar (Coordinadores): *Indígenas Mexicanos Migrantes en los Estados Unidos*, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2004.

SITIOS EN INTERNET

LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio: *Emigración mexicana a Estados Unidos: Balance de las últimas décadas, 2009*, pp. 106-107, http://www.paisano.gob.mx/pdfs/articulo_1.pdf.
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2011/05/20110510164142x0.2289501.html#ixzz2IA7GdvRL>
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2012/09/20120918136165.html#ixzz2IAByEz1J>
<http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/texttrans/2013/01/20130130141641.html#ixzz2KFglAS9p>

HEMEROTECA

Periódico de circulación nacional “El Universal”, consultado en las siguientes fechas:
20 de mayo de 2012, 04 de febrero de 2013.
Periódico de circulación nacional “La Jornada”, consultado en las siguientes fechas:
12 de mayo de 2012, 16 de junio de 2012, 27 de octubre de 2012, diciembre de 2012.
Periódico de circulación local en el estado de Jalisco “El Informador”, consultado en las siguientes fechas: 30 de enero de 2013.
Cfr. LEITE, Paula; ANGOA, María Adela; RODRÍGUEZ, Mauricio, op. cit., pp. 121-122.

96. COLOFÓN

En esta obra, se analizaron las principales normas y discursos de dirigentes de México y los Estados Unidos de América (EUA). En el tomo primero, se analizaron las Normas Rectoras de ambos países, se traducen las de México al inglés, para mayor y mejor comprensión de nuestros valores, principios e intereses comunes, que son bastantes.

Dentro del segundo tomo, se analizaron los artículos de nuestras Normas Rectoras que se refieren a la nacionalidad y nacionalidad, así como a los extranjeros, temas vinculados a la migración; asimismo, las *Normas migratorias en México*, durante los Siglos XIX a XXI; de igual forma, las normas equivalentes en los EUA.

Resalta en la obra, los discursos pronunciados por los Presidentes de los EUA o parte de sus discursos en torno a la migración, los puntos o expresiones alusivas al tema, de los 44 mandatarios, ya sea en sus informes de gobierno o en piezas oratorias expresadas en diversos foros, se agregan las fuentes de donde se obtuvieron dichos extractos, de mucha valía y se reproducen citando la referencia.

Enseguida, se agregan estadísticas en torno a la migración y se citan las fuentes de referencia y se culmina la obra con las referencias últimas de Barak Hussein Obama, Presidente número 44 de los EUA, quien prometió una reforma migratoria que por el momento no se ha hecho realidad, por distintas razones, porque no es de la envergadura prometida, anunciada o acordada con los grupos o confederaciones de origen mexicano y demás inmigrantes; porque la propuesta fue muy reducida, corta, miserable si se analiza a la luz de la plusvalía que generan dichos grupos de trabajadores; también es claro que dentro del Congreso Federal, el Presidente no tenía mayoría, en especial, en la Cámara de Representantes y porque su decreto presidencial emitido a fines del año 2014, fue suspendido por un Juez Federal y ahora (febrero de 2016), se espera pronta resolución del Tribunal Supremo de los EUA, para que determine si el decreto presidencial de la reforma migratoria, fue expedido dentro del uso de sus facultades o invadió las esferas del Congreso Federal, dado que 26 entes federados, encabezados por Texas, se opusieron a la implementación de dicho decreto de Obama.

Así, la amnistía justa, no ha llegado, la inmigración, origen de los EUA, hoy es una indignación al interior y hacia el exterior; la agenda de los discursos presidenciales, como siempre, tiene el asunto de la migración, cada vez más relegado, se ha propuesto un proyecto de *Ley de seguridad fronteriza, oportunidades económicas y modernización migratoria*, el cual, como muchos otros, no se ha tomado en cuenta y los más de cincuenta millones de personas reconocidas al día de hoy como migrantes, siguen en indefensión, inseguridad y con sus derechos como humanos vejados en un país que se dice adalid en la protección de los derechos de los humanos y la democracia, porque también a estas personas se les niegan sus derechos políticos y electorales (Cfr. *Reforma migratoria en EUA. Posibilidades y retos*, LXII Legislatura del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, México, diciembre de 2013; asimismo, Covarrubias Dueñas, José de Jesús: *Derecho Constitucional Electoral*, Porrúa, sexta edición, México, 2010).

Por lo anterior, no se vislumbra un futuro prometer para los migrantes de México y demás países del planeta que buscan *The American Way of Life*, quimera lastimera, utopía que hastía y explotación en todos los sentidos, interna y externa para toda la población de la nación y del planeta (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: *La Sociología Jurídica en México*, Porrúa, cuarta edición, México, 2015).

Lo que se requiere es una política pluriversal, que recoja los valores, principios e intereses de los seres humanos, que pueden ser estudiados y analizados mediante la *Nomología* (Cfr. Miranda Torres, Roxana Paola: *La Nomología de las Comunidades Precauhtemáticas en México. Siglos XV– XXI*, Congreso de Oaxaca, México, 2008). Además, se requiere el reconocimiento de *Los Derechos Planetarios*, que de manera efectiva, material y concreta, queda calro que el *ius soli et ius sanguini* = *derecho que somos gente del planeta y que toda la especie humana, somos hermanos*; por tanto, todos somos iguales, valemos igual, debemos ser reconocidos como personas humanas con la dignidad de vivir en nuestro hogar común: el planeta (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: *Los Derechos Planetarios*, Porrúa, México, 2011).

Así, con el estudio de la *Nomología*, los valores, principios e interese de todos los seres humanos, del pluriverso cultural, al pluriverso normativo; así, *Los Derechos Planetarios*, el respeto a las personas, seres humanos; a los diversos seres vivos con los que interactuamos; al planeta, ente vital del cual dependemos y que debemos cuidarlo antes de buscar otras naves espaciales; ente enclavado en el cosmos. Así, se ha propuesto la *Planetología* = *Normplanet*, que es la armonización de los valores, principios e intereses de los diversos seres vivos que nos interrelacionamos en el cosmos, es lo que debe ser nuestra guía de las relaciones entre los seres humanos, países, instituciones y demás creaciones para el servicio de los seres humanos, de los seres vivos y del planeta (Cfr. Covarrubias Dueñas, José de Jesús: *Planetología = Normplanet*, Porrúa, México, 2015).

97. CONCLUSIONES

PRIMERA. En Norteamérica se interrelaciona gente de todo el planeta, es el espacio más influyente y el impacto de los flujos migratorios trasciende a todos los continentes.

SEGUNDA. EUA fue la primer república liberal en el planeta, consagrada como estado de derecho, con proyectos, idearios y políticas muy bien definidas y a largo alcance.

TERCERA. México se ha caracterizado por ser una región con altísima inestabilidad política y divisionismo interno que le ha impedido impulsar un proyecto político, con visión a largo plazo y en consecuencia, general planes y políticas públicas en torno a dicho fenómeno migratorio.

CUARTA. México debe generar mayores aportaciones que simples visiones a corto plazo, como petróleo o apertura del sector energético a los extranjeros a cambio de nacionalizar mexicanos y como de EUA flexibilizar las normas sólo en un tiempo perentorio.

QUINTA. El espacio de Norteamérica representa una gran oportunidad para que México se integre a dicho espacio en beneficio de la población, por lo que requerimos una legislación migratoria 2013 que abarque todos los espectros).

98. PROPUESTAS:

- 1 A partir de la *Nomología*, estudiar el espectro planetario de todos los grupos sociales, para conocer sus valores, principios e intereses y emitir normas, que se armonicen entre sí, con los seres vivos, con el planeta y el cosmos, en aras de crear primero *Los Derechos Planetarios* o el reconocimiento formal y material de que el planeta es el espacio vital de la raza humana y demás entes vivos que somos interdependientes e interrelacionados.
- 2 Crear parlamentos interregionales en el continente, zona norte, centro y sur, así como uno continental y planetario, en donde se discutan los problemas comunes, conforme a los valores, principios e intereses del planeta, de los seres vivos y del cosmos.
- 3 Impulsar la *Planetología* = *Normplanet*, las normas que deben regir el planeta en armonía a los seres vivos, al planeta y al cosmos, despojarnos de la homomensura y dar paso al nuevo paradigma de la ciencia y de la cultura: el estudio de todos los seres vivos, del planeta y del cosmos, para que mediante normas armónicas determinemos los valores, principios e intereses a proteger de manera armónica e integral para que las especies vivas y sobre todo, la humana, vivamos en armonía al orden cósmico.

Guadalajara, Jalisco a 5 de febrero de 2016.

Obra Conmemorativa del

*Centenario de la Constitución Política de México y de la
Constitución de Jalisco.*

José de Jesús Covarrubias Dueñas

(Autor)

Normas y políticas migratorias México-EUA

Siglos XVIII-XXI

compiladas por José de Jesús Covarrubias Dueñas

se terminó de editar en julio de 2016

en Editorial Página Seis, SA de CV

Teotihuacan 345, Col. Ciudad del Sol, 45050, Zapopan, Jal.

Tels. (33) 3657-3786 y 3657-5045

www.pagina6.com.mx • p6@pagina6.com.mx

En la diagramación, cuidado editorial y diseño participaron

Felipe Ponce y David Pérez.